

Javier Barreda Sureda

TESIS DOCTORAL

**EXPRESIÓN, REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICAS EN
EGIPTO BAJO EL MANDATO DE HOSNI MUBARAK.**

UN ESTUDIO COMPARADO CON EL DE LOS REGÍMENES DE NÁSER Y SADAT

Directora: Luz Gómez García



Programa de Doctorado: Tradición e Innovación
en la Cultura Árabe e Islámica
Facultad de Filosofía y Letras

2015

PRESENTACIÓN

Esta tesis surge de la necesidad de comprender los fundamentos del régimen de Mohammed Hosni Mubarak y la dilatada duración de su mandato (1981-2011). También de entender su fin, o la caída de Mubarak. La elección de este objeto de estudio y de esta pregunta de investigación son fruto de una larga relación vital y académica con Egipto y con sus gentes e instituciones. Llegué por primera vez a Egipto en 1989, y desde entonces hasta 1995 viví allí casi de manera continua, con pequeños periodos en Madrid y Lyon. Tras un periodo inicial de consolidación de mi conocimiento del árabe, y algunos trabajos variados, una beca predoctoral me permitió centrarme en un estudio sobre el terreno del tema que nos ocupa, que luego se vio interrumpido durante casi una década, durante la cual, no obstante, no abandonamos nuestro tema de estudio ni nuestra estrecha relación con este país. El conocimiento directo de Egipto durante un periodo prolongado ha determinado buena parte de las fuentes primarias que manejamos en nuestra investigación, y la más estricta selección posterior de aquellas cuando la distancia nos obligó a recurrir a los medios electrónicos para el seguimiento habitual de los acontecimientos en el país.

Como explicamos en la Introducción, según avanzaba nuestra investigación el objeto de estudio nos fue imponiendo replanteamientos con nuevos presupuestos teóricos y metodológicos, hasta que para abordarlo nos pareció necesario recurrir a la comparación con las formas de gestión política de todo el periodo republicano, es decir, a la comparación de las estructuras básicas del poder político, las estructuras que articulan sus relaciones con la sociedad y los principios de funcionamiento que rigieron unas y otras también durante los regímenes de Gamal Abdel Náser (1952-1970) y Anwar al-Sadat (1970-1981). Todo ello derivó en la cuestión más amplia de la legitimación de los regímenes y en la necesidad de diferenciar esta de la legitimación del Estado. Esta conclusión redefinió nuestra hipótesis de partida y ha acabado marcando el resultado y la forma final de esta tesis.

Agradecimientos

No podemos acabar esta presentación sin mencionar a las personas que de uno u otro modo han hecho posible este trabajo a lo largo de muchos años. En primer lugar, nuestro agradecimiento debe dirigirse a las dos personas que en diferentes periodos asumieron la dirección de nuestro trabajo. En un periodo inicial, el entonces catedrático Pedro Martínez Montávez, de la Universidad Autónoma de Madrid, nos animó, como lo había hecho siempre, a retomar y mantener nuestra trayectoria académica, orientándonos con la sabiduría y paciencia que le caracterizan, y con el afecto y comprensión que nos había manifestado siempre, a pesar de que no siempre supiéramos corresponderle. Posteriormente, la profesora Luz Gómez García, de la misma universidad, tomó el relevo, desbordando con mucho el cumplimiento de sus deberes profesionales, sabiendo conjugar el sentimiento de la profunda amistad que nos une desde hace mucho tiempo, fraguada en un primer momento en El Cairo, con la exigencia necesaria para conseguir que llevara finalmente a cabo mi ya muy antiguo proyecto. Si decimos que sin su ayuda nos habría sido imposible concluir esta tesis, nunca el tópico se habrá ajustado más a la realidad.

En El Cairo, el profesor Saad Eddín Ibrahim, del Departamento de Sociología Política de la American University in Cairo, referencia recurrente en estas páginas por sus contribuciones académicas y su compromiso cívico, supervisó atentamente nuestra investigación durante amplios periodos entre 1991 y 1995. Al personal de esta universidad, en particular de su biblioteca, hemos de agradecer su profesionalidad y su rigor.

Durante un breve periodo de tiempo en la primera mitad de 1994, Elisabeth Longuenesse, investigadora del grupo de investigación GREMO-URA 914 (Universidad de Lyon II-CNRS) nos facilitó la participación en los seminarios sobre Oriente Medio en la Universidad Lyon II, así como el acceso a sus recursos documentales y bibliográficos.

La concesión de una beca de Formación de Profesorado Universitario en el extranjero por parte del Ministerio de Educación y Ciencia nos permitió llevar adelante nuestros estudios en los dos centros mencionados, así como por un breve periodo en la Universidad Autónoma de Madrid. En esta tuvimos el apoyo constante de la catedrática Carmen Ruiz Bravo-Villasante, que nos animó y ayudó a publicar algunos de nuestros trabajos.

En El Cairo, el Centre d'Études du Droit, Juridiques et Économiques (CEDEJ) nos abrió siempre sus puertas con gran generosidad, tanto para acceder a sus grandes recursos documentales y bibliográficos como para participar en sus seminarios y talleres. Con gran parte de su personal e investigadores itinerantes establecimos buenas relaciones personales y académicas, pero debo destacar en ambos sentidos a Françoise Clément, primero amiga y luego proveedora de muy valiosas informaciones y contactos.

Sin duda mi comprensión de la realidad de Egipto habría sido aún menor si no hubiera mediado mi profunda amistad con Santiago Alba Rico y Gamal Abdel Naser

Ibrahim. Ambos comparten una cierta heterodoxia y una gran originalidad en su acercamiento a los temas políticos, sociales y culturales, derivada de su gran apertura intelectual y vital. Sin el constante estímulo intelectual del primero tal vez no hubiera conocido Egipto por primera vez ni como si siempre fuera una primera vez. Sin el segundo no habría entendido cómo los egipcios comprenden la política de su país y son capaces, pese a todo, de vivir plena y alegremente al margen de ella. Fueron tantos los amigos, conocidos y desconocidos que así me lo mostraron que difícilmente podría enumerarlos a todos. Por ellos, sobre todo, he dedicado y dedico mi tiempo a estudiar la política de su país.

Mis compañeros de la Universidad de Alicante Fernando Ramos López y Jesús Zanón Bayón me prestaron una ayuda preciosa para dar forma final a este trabajo, y nuestra compañera Cristina García Cecilia lo hizo con su ánimo y apoyo a lo largo de muchos años.

Finalmente, Anne ha tenido conmigo una paciencia tan larga como la duración de mi investigación, a pesar de lo cual su apoyo y su comprensión se han redoblado con mucho en los últimos años y meses. A ella quiero dedicarle de manera particular esta tesis.

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN

Índice de contenidos	3
1. Definición del proyecto	5
2. Antecedentes históricos del régimen naserista	31

PRIMERA PARTE

I. El régimen naserista y la construcción del Estado republicano

Índice de contenidos	91
Introducción. Singularidad e influencia del régimen naserista	95
1. La constitución de un nuevo poder. Nacimiento, consolidación y legitimación	97
2. El régimen naserista y el Estado. Políticas y estructura	121
3. Las relaciones entre el régimen, el Estado y la sociedad	151
4. La derrota de 1967: desastre político y económico y trauma social	197
5. Conclusiones	206

II. El régimen de Sadat. Introducción de la dualidad y erosión del régimen político

Índice de contenidos	223
1. La consolidación en el poder de Sadat (1970-1973)	227
2. Distanciándose del régimen naserista: <i>infitah</i> , pluralismo e islamización (1973-1976)	246
3. Contestación socioeconómica, confesional y política. Represión y cierre político (1977-1979)	281
4. <i>Infitah</i> y Estado rentista. Consecuencias económicas y sociales	320
5. Régimen, Estado y sociedad	340
6. El fin del mandato de Sadat: represión y asesinato	370
7. Conclusiones	383

SEGUNDA PARTE

III. El régimen de Mubarak 1: La promesa de la democratización (1981-1990)

Índice de contenidos	409
Introducción. El mito fundacional de la democratización	413
1. En busca de una nueva legitimidad	415
2. El acceso de la oposición al Parlamento	426
3. Crisis económica, resistencias de la burguesía y protestas sociales	447

4. Retorno de la tensión política y de la violencia	460
5. Las elecciones legislativas de 1987. Nuevas concesiones a la oposición	466
6. La persistencia de la crisis económica de raíz financiera	480
7. El régimen ante el desafío de la deslegitimación	487
8. Las elecciones legislativas de 1990	502
9. Los márgenes del sistema político formal. Apoyos, consentimiento, control y resistencias	507
10. Conclusiones	531

IV. El régimen de Mubarak 2: Impasse político y liberalización económica bajo el signo del enfrentamiento armado con el islamismo radical (1991-2000)

Índice de contenidos	547
Introducción. El porqué de una etapa diferenciada	551
1. La Crisis del Golfo y la reducción de la deuda egipcia	554
2. El Estado ante el ascenso del islamismo	559
3. La emergencia de la “sociedad civil” egipcia	583
4. Los partidos de la oposición: entre el control, el descrédito y la auténtica oposición	595
5. El plebiscito presidencial de octubre de 1993: un imperioso “sí”	610
6. El bienio 1994-1995: estrechando el control. Las elecciones legislativas	624
7. Las reformas económicas: fines y efectos inmediatos	654
8. La crisis del régimen político. Primeros indicios (1996-2000)	675
9. Las elecciones legislativas del año 2000	702
10. Conclusiones	710

V. El régimen de Mubarak 3: La crisis del régimen y la crisis del Estado (2001-2011)

Índice de contenidos	727
Introducción. Querer cambiar sin cambiar	729
1. Una etapa de transición hacia una nueva era política (2001-2004)	732
2. Crisis económica y liberalización: trastienda de la anunciada reforma política	743
3. La Presidencia de la República impulsa un cambio de régimen, ampliamente rechazado	753
4. Cambiar todo para que nada cambie. El agitado y tenso año electoral de 2005	771
5. Cierre político total. La contrarreforma desliberalizadora (2006-2008)	788
6. La liberalización predatoria y la explosión de las protestas laborales	794
7. Trabajadores y jóvenes rompen con las ataduras políticas tradicionales	799
8. Un Estado policial	804
9. Conclusiones	812

VI. Conclusiones finales	
1. Alcance de una comparación	821
2. Pervivencias del régimen naserista. Más allá de las categorías de análisis aparentemente pertinentes	823
2.1 Estado-Presidente, Estado-Policía y Estado-Partido (de único a dominante)	823
2.2 Corporativismo y pluralismo. El pluralismo en el corporativismo	825
2.3 El corporativismo en el pluralismo. El sistema de partidos	828
3. El aprendizaje de Mubarak de la experiencia de Sadat	830
4. La ruptura de los modelos previamente restaurados por Mubarak	832
VII. Epílogo. Dos derrocamientos y un conflicto: de Mubarak a Mursi, el Estado puesto en cuestión	
1. La alianza de circunstancias entre el Ejército y los Hermanos Musulmanes	837
2. El Ejército rompe el pacto y busca apoyo social	838
3. El apoyo decreciente de sectores secularistas a los Hermanos Musulmanes	841
4. El derrocamiento de Mursi. El Estado, eje del conflicto	842
VIII. Bibliografía	847
IX. Índice de siglas	865
X. Índice de tablas	867

INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO.....	5
1.1 Objeto de estudio y redefinición de la hipótesis.....	5
1.1.1 Primeras premisas, primera pregunta. El estudio de la contestación y el rechazo -o la rebeldía- políticos	6
1.1.2 Segunda fase. La pregunta por los fundamentos de la durabilidad del régimen de Mubarak.....	8
1.1.3 El modelo de la <i>churocracia</i> y el consentimiento de la mayoría. Dos hipótesis nucleares	10
1.1.4 Tercera fase. Legitimidad, Estado y régimen	12
1.1.5 Un final que nos devuelve al comienzo. El intento de cambio de régimen dentro del régimen	14
1.1.6 Un estudio comparado del régimen de Mubarak con los de Násir y Sadat	16
1.2 Presupuestos de investigación	18
1.2.1 “Estado” y “régimen”	18
1.2.2 “Régimen político” y “sistema político”: una indefinición y una confusión históricas ..	19
1.2.3 “Régimen político”. Una definición propia para dos acepciones	21
1.2.4 Los regímenes personalizados	22
1.2.5 El poder como dato original. El “poder constituido”	23
1.2.6 “Legitimidad”	24
1.2.7 “Consentimiento”	25
1.3 Otras consideraciones: metodología, estructura y transliteración	27
2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL RÉGIMEN NASERISTA	31
2.1 Los inicios del sistema estatal moderno y de su nacionalización hasta la colonización (1805-1919)	34
2.1.1 La conformación del sistema estatal y su primera nacionalización.....	34
2.1.2 La aparición de la propiedad privada de la tierra. El germen de una clase social durante largo tiempo hegemónica.....	36
2.1.3 El primer precedente nacionalista: la revuelta del coronel Orabi.....	38
2.1.4 El gobierno colonial directo y sus consecuencias económicas y sociales.....	41
2.1.5 El nacimiento de la prensa no estatal y de su papel político	44

2.1.6 El germen de la burguesía nacionalista	47
2.2 Nacionalismo y monarquía bajo tutela colonial. Las fracturas de la independencia formal (1919-1948)	50
2.2.1 El Wafd, la revolución de 1919 y la independencia formal	50
2.2.2 Diversificación económica y social en la primera mitad del siglo XX	52
2.2.3 Monarquía, parlamentarismo y pluripartidismo controlado.....	58
2.2.4 El unanimismo en torno al primer Wafd y sus líderes carismáticos.....	60
2.2.5 El comienzo del declive del Wafd. Nacionalismo, capitalismo y “cuestión social”	65
2.2.6 El nacimiento de la clase obrera. Trabajadores, patronazgo y sindicatos independientes	67
2.2.7 La emergencia de las nuevas corrientes políticas.....	69
2.3 La crisis del sistema (1948-1952)	74
2.3.1 Los efectos de la Segunda Guerra Mundial	74
2.3.2 El colapso: radicalización y nuevas formas de movilización política.....	76
2.3.3 La antesala del golpe de Estado de los Oficiales Libres: ¿un escenario prerrevolucionario?	82

1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO

1.1 OBJETO DE ESTUDIO Y REDEFINICIÓN DE LA HIPÓTESIS

Este trabajo es el resultado de un largo, aunque discontinuo, periodo de investigación, que no comenzó cuando inscribimos el proyecto de tesis, en septiembre de 1996, sino en los últimos meses de 1990 y los primeros de 1991, cuando redactamos un primer proyecto de investigación.

Al margen de numerosos avatares personales, académicos y profesionales, la larga duración de nuestra investigación antes de abordar la redacción de esta tesis, tras haber publicado algunos trabajos menores en sus objetivos y extensión (Barreda 1996, 2000, 2004, 2006, 2009, 2012), está relacionada con los cambios de enfoque de nuestro objeto de estudio, que fueron en parte condicionados por la naturaleza de este.

En 1990-1991 titulamos nuestro proyecto de investigación, abordada gracias a la concesión de una beca predoctoral a la que ya hemos hecho referencia en la presentación, “Expresión, representación y participación política bajo el mandato de Hosni Mubarak”. En 1996 mantuvimos dicho título para nuestro proyecto de tesis, y lo conservamos durante bastantes años. Como puede observarse, el objeto de estudio no tenía más marco temporal que el determinado por la duración de la presidencia de Mubarak, por lo que en teoría dicho marco estaba, en principio, abierto indefinidamente, y en la práctica, como es sabido, lo estuvo durante mucho tiempo.

No se trata de que desde una suerte de “fundamentalismo literalista” nos hubiéramos impuesto -al menos premeditadamente-, la sísifica tarea de cubrir temporalmente un objeto de estudio que se ampliaba por definición cada día, a cada minuto; ni mucho menos que nos sometiéramos *a priori* a un “determinismo temporal” que nos llevaría a concluir nuestro trabajo cuando concluyera el mandato de Mubarak. Por el contrario, la concepción abierta de nuestra investigación tenía que ver con nuestras premisas iniciales y con nuestras sucesivas preguntas de investigación, a lo que hay que añadir que la urgencia -quizá por imponerse la eficiencia implícita en ir cerrando etapas investigadoras y académicas menos ambiciosas antes de pasar a otras de mayor alcance- no fue una de nuestras principales preocupaciones durante mucho tiempo, de manera tal vez equivocada desde los puntos de vista extrínseco e intrínseco a la investigación.

De cualquier manera, lo cierto es que nuestro objeto de estudio (la expresión, representación y participación políticas bajo la presidencia de Mubarak) no solo se amplió de manera considerable en términos cuantitativos, sino que también evolucionó notablemente en términos cualitativos, de la misma manera que avanzó nuestro conocimiento detallado de dicho objeto y sus implicaciones. Todo ello puso en dificultades

tanto la aprehensión de la evolución del objeto como también algunas de las premisas de las que habíamos partido y algunas de las conclusiones parciales a las que íbamos llegando.

1.1.1 Primeras premisas, primera pregunta. El estudio de la contestación y el rechazo -o la rebeldía- políticos

Como hemos señalado, en nuestro primer proyecto de investigación nuestra intención era estudiar la “expresión, representación y participación políticas” bajo el mandato de Mubarak. Precisábamos, sin embargo, que no queríamos centrarnos en el “sistema político formal” (el sistema parlamentario pluripartidista), amén de por haber sido ya estudiado en detalle por otros especialistas de lengua castellana (Martín Muñoz 1992), por considerarlo demasiado controlado y restringido, poco representativo de las fuerzas políticas e ideológicas existentes en la sociedad egipcia, e ineficiente para evacuar las tensiones sociales y políticas que se generaban en aquella.

A nuestros ojos, el sistema parlamentario pluripartidista egipcio y, en sentido más amplio, “la apertura política de Mubarak”, eran una añagaza para el interior y una fachada para el exterior. En la época en la que perfilamos aquel proyecto, finales de 1990 y principios de 1991, la actitud de gran parte de las fuerzas políticas de oposición, legales o no, autorizadas o no, e incluso de sectores de la población no organizados o adscritos a ninguna fuerza organizada, parecía estar basada en una percepción similar.

Las políticas y gestos conciliatorios de Mubarak en sus primeros años de mandato habían contribuido a hacer desaparecer el clima de enfrentamiento con la oposición, no solo política sino también social (por ejemplo, con el papa Chenuda), que había presidido los últimos años de mandato de su antecesor, Anwar al-Sadat, el cual había acabado arrestando a la mayor parte de los dirigentes de la oposición para terminar siendo asesinado por un grupo islamista radical. En concreto, los partidos autorizados -y junto a ellos los Hermanos Musulmanes- habían concurrido a las elecciones legislativas de 1984 y 1987 obteniendo un considerable número de escaños, la libertad de expresión se expandía, y el Gobierno y sus diversas instituciones mostraban una actitud mesurada hacia el islamismo radical, incluso hacia aquellos sectores que habían adoptado actitudes violentas pocos años antes. A ello habían correspondido los partidos políticos y otros actores sociales y políticos de la oposición con una escasa beligerancia, e incluso gran parte de ellos con muestras de apoyo al poder constituido, mientras que las fuerzas del islamismo radical habían mostrado una gran quietud, que derivó en una práctica ausencia de conflictos.

No obstante, a finales de 1990 los principales partidos de la oposición, y con ellos los Hermanos Musulmanes, habían decidido boicotear las elecciones legislativas de

diciembre en protesta, esencialmente, por “la falta de garantías democráticas” y el “escaso avance en el proceso de apertura”. Por otro lado, sectores del islamismo radical y las fuerzas de seguridad se encontraban inmersos en un enfrentamiento abierto y armado, tras la etapa previa de absoluta quietud. Finalmente, otros sectores sociales diversos habían comenzado a manifestar su malestar o su descontento con las políticas del Gobierno y con la influencia de estas en sus situaciones particulares y/o en la del país en general, y era significativo que lo hicieran forzando el limitado marco legal de las libertades públicas: unos, politizando organizaciones autorizadas pero no “asignadas” como organizaciones políticas (por ejemplo, los sindicatos profesionales), otros realizando actos expresamente prohibidos y perseguidos (por ejemplo, manifestaciones y protestas laborales) y otros recurriendo a la violencia (por ejemplo, los reclutas de la Seguridad Central). Todas estas manifestaciones de descontento que se servían de canales ajenos al sistema político formal para expresarlo, además de la escasa participación electoral incluso según las dudosas cifras oficiales, mostraban la falta de credibilidad y desconfianza de muchos egipcios en el sistema político -incluyendo en este a los escasos partidos de oposición cuya formación había autorizado el poder ejecutivo-, y ponían de relieve la ineficiencia de dicho sistema. Por ello, la misma o superior atención que a este queríamos dedicar a las otras manifestaciones y canales de expresión “alternativos”, tanto los consentidos como los perseguidos, tanto los que ya conocíamos como los que pensábamos poder descubrir. Y de hecho les dedicamos tal atención (Barreda 1996b y 2004).

Resta decir que las razones esgrimidas para el descontento eran abundantes. La mayor parte de los actores coincidían en señalar la crisis económica, el deterioro de las condiciones de vida y de los servicios públicos, la extensión de la corrupción y los crecientes excesos de las fuerzas de seguridad; y muchos de ellos añadían el autoritarismo del régimen político, la insatisfacción con el sistema político y con los canales de expresión y de participación en general, la gran limitación de las libertades públicas y el descontento con la política exterior de Egipto. En particular este último se había incrementado de manera considerable precisamente entre finales de 1990 y principios de 1991, tras la decisión del gobierno egipcio de participar en la coalición internacional para desalojar al ejército iraquí de Kuwait.

En definitiva, en todos los sentidos la situación del momento se asemejaba a la conocida por el régimen de Sadat en los últimos años de su mandato, y, como aquel, a nuestros ojos el régimen de Mubarak parecía, sostenerse fundamentalmente sobre la coerción. Por estas razones no creíamos en absoluto descartable que si el régimen de Mubarak no modificaba esencialmente sus políticas se viera enfrentado a un mayor rechazo que amenazara su estabilidad.

1.1.2 Segunda fase. La pregunta por los fundamentos de la durabilidad del régimen de Mubarak.

A principios de 1991 tan solo habíamos vivido un año en Egipto, de julio de 1989 a julio de 1990, y en este plazo no habíamos estudiado ni decidido estudiar la política egipcia de manera prioritaria, sistemática y organizada. Sin embargo, entre la primera fecha y septiembre de 1996, cuando redactamos nuestro proyecto de tesis, residimos durante la mayor parte del tiempo en el país.

Al mantener para el nuevo proyecto el título del anterior, pretendíamos dejar aún abierto el objeto central de nuestra investigación, o más bien su vector articulador, y en esa decisión había tenido mucho que ver, por un lado, tanto nuestro aprendizaje libresco o documental como nuestra experiencia vital en Egipto, y por otro el paso del tiempo y la evolución de la situación política del país.

Empezando por esto último, se abría paso una pregunta de investigación general, tal vez demasiado abierta y en sí misma difícil de justificar: “¿Por qué duraba tanto el régimen de Mubarak?”. La dificultad de justificar esta pregunta podía residir en que tuviéramos que explicar por qué “no debería” durar, o mejor, por qué era “extraño” que lo hiciera. Aunque creíamos poder explicarlo, para evitar tal dificultad transformamos la pregunta en la siguiente: “¿Sobre qué se sostiene el régimen de Mubarak?”, “¿cuáles son sus fundamentos?”.

La razón de que nos hiciéramos la primera pregunta, la de la duración, es que nuestras premisas se habían modificado de manera sustancial. Por un lado, ya no creíamos que el régimen de Mubarak se sostuviera sobre todo en la coerción, al menos en la coerción realmente ejercida. A esta conclusión habíamos llegado por varias vías.

Una de estas vías era la observación del propio ejercicio de la coerción y de su reverso: las manifestaciones de “rebeldía” -concepto operativo que explicaremos con más detalle en la Introducción teórica y conceptual- que eran prohibidas o reprimidas. Esta conclusión podría parecer sorprendente cuando a mediados de los noventa en Egipto había decenas de miles de presos políticos -en su mayoría militantes del activismo radical, y parte de los cuales se habían enfrentado al Estado con las armas-, se restringía con mayor rigor que nunca el acceso al Parlamento, o incluso a la dirección de los sindicatos profesionales, o, por poner un ejemplo cotidiano, en un perímetro de varios kilómetros a la redonda del centro de El Cairo se encontraba un policía cada 50 metros. Sin embargo, no se trata de que fuera escasa la disposición del régimen a recurrir a la coerción *cuando era necesario*, sino de que era necesario en una medida relativamente reducida o, dicho de otra manera, que los implicados en actos o actitudes de rebeldía eran, relativamente, pocos.

Una segunda vía que nos llevó a rebajar la importancia atribuida a la coerción fue

el descubrimiento de la importancia del consentimiento político entre los egipcios, consentimiento que en nuestra concepción, alejada de la de Locke y más cercana a la de Arendt, equivale a la ausencia de rebeldía, y constituye el reverso del grado de coerción ejercida. Aunque explicamos esto con más detalle en la Introducción teórica y conceptual, es preciso aclarar que, en este sentido, el consentimiento político no incluye -como sí lo hace en la concepción de John Locke- el apoyo explícito o subjetivo a las leyes, a los dirigentes y a las instituciones vigentes, aunque se pueda considerar como un apoyo objetivo, y sin duda un fundamento básico de un régimen político. Por el contrario, sí incluye el resto de las actuaciones que implican la obediencia esencial o general a los dirigentes, a las instituciones y a las normas -incluso las no escritas- de un régimen político, y en un sentido más específico la participación en algunas de las instituciones de ese régimen político.

Somos conscientes de que esta concepción del consentimiento político es un tanto problemática porque abarca una gran gama de actitudes y actuaciones diferentes. Por otro lado, hay que considerar los desplazamientos que se producen entre el apoyo, el consentimiento y la rebeldía, y delimitar -lo que no es tarea fácil- las fronteras entre esas tres actitudes. No obstante, esta concepción del consentimiento político es operativa porque permite dar cuenta sin grandes dificultades, en un primer nivel, de situaciones complejas aparentemente contradictorias. Asunto muy diferente es cuando pasamos al segundo nivel, el de la búsqueda de las razones o causas del consentimiento, donde el terreno se vuelve realmente escurridizo.

Entre las actitudes observadas en los años 90 que nos llevaron a manejar el concepto de consentimiento se encuentra la de los partidos políticos autorizados y la de los Hermanos Musulmanes. En los primeros años 80 la mayor parte de estas actitudes habían sido de apoyo explícito -o de consentimiento explícito- a Mubarak en atención a sus políticas y gestos de apertura, a pesar de que consideraban que el sistema político seguía caracterizándose por una gran “falta de garantías democráticas”, una gran restricción de las libertades, y una manipulación abierta de las elecciones. No obstante, a finales de los 80 todas esas fuerzas boicotearon alguna de las elecciones celebradas, si bien no de forma coordinada, esencialmente por las mismas consideraciones negativas mencionadas. El boicot de las elecciones, sobre todo de las legislativas de 1990 podría considerarse un acto, o al menos una amenaza, de ruptura, de deslegitimación, de negativa a participar en el juego político según las reglas del poder constituido, que incluían la falta de garantías democráticas.

La legislatura 1990-1995 transcurrió sin presencia de la mayor parte de la oposición en el Parlamento y entre un incremento de la legislación restrictiva de las libertades públicas y políticas. A pesar de ello, del cierre de las elecciones legislativas de 1995 a los

Hermanos Musulmanes y a otras fuerzas políticas que habían solicitado convertirse en partidos, y de la falta de garantías democráticas para dichos comicios, todos los partidos participaron en las elecciones –obteniendo en su conjunto poco más de un 3% de los diputados. Tales partidos continuarían existiendo, y posteriormente presentándose a las elecciones.

En definitiva, a nuestros ojos la actitud de dichos partidos, que no cesaban casi ninguno de criticar amarga, abierta y a veces virulentamente al poder constituido y al régimen y sistema políticos, vista desde el largo plazo constituía objetivamente una manifestación de consentimiento, si no de apoyo legitimador no solo por razón de sus actitudes electorales, sino tal vez por el mero hecho de aceptar ser partidos autorizados en un contexto en el que la mayoría no lo eran.

1.1.3 El modelo de la *churocracia* y el consentimiento de la mayoría. Dos hipótesis nucleares

Algo similar, aunque no igual, podríamos decir de la actitud de numerosos intelectuales en sentido amplio -escritores, profesores, periodistas y otras personalidades- que, estando afiliados o no a partidos políticos, participaban en el régimen político diseñado por Mubarak, y a los que también prestamos una atención sistemática en nuestra investigación. El régimen de Mubarak permitía una gran libertad de expresión en comparación con las dictaduras –y esta era una de las razones de que no lo consideráramos ni lo consideremos como tal- e incluso con otros regímenes autoritarios; es más, esta libertad era creciente a pesar de los pesares. No obstante, esta libertad de expresión quedaba circunscrita a “espacios cerrados”: la prensa, las sedes de partidos políticos, sindicatos y organizaciones no gubernamentales, los espacios habilitados para ello durante las elecciones. Por el contrario, excepto en el reducido lapso de tiempo de las campañas electorales, no era posible expresarse libremente en la calle: se prohibía y se impedía la celebración de manifestaciones y mítines, la distribución de panfletos, el acceso de la oposición a la televisión. En una palabra, se permitía la expresión de las elites -y de ciertas elites- en un espacio controlado y cerrado, mientras se impedía –o se pretendía impedir- su conexión con las masas.

A este modelo de participación mediante la expresión de la opinión ofrecido a la mayor parte de las elites por el régimen de Mubarak lo llamamos *churocracia*, y de ahí poco después llegamos a concluir que la *churocracia* era también el principio básico que regía la participación política de los partidos políticos y otras fuerzas organizadas. Y lo más significativo es que estas elites -con las excepciones que veremos en el curso de nuestro trabajo- aceptaban dicho modelo, puesto que no se rebelaban. El modelo de la *churocracia*

y su aceptación constituyen uno de los núcleos de nuestra hipótesis final.

No obstante, la actitud que más nos llamaba la atención era la de “la mayor parte de la población”. La mayor parte de la población era la que a todas luces no participaba en las elecciones, pero tampoco en los partidos, las manifestaciones, las huelgas, los sindicatos profesionales, etc., ni siquiera en las actividades violentas del islamismo radical. En un principio consideramos brevemente utilizar el concepto de “pasividad política”, pero dicho concepto incluye una connotación claramente peyorativa, y por otro lado parte de la premisa de que se conocen y se han estudiado todas las formas de participación política. No obstante, para entender mejor por qué lo desechamos, hay que conocer nuestra “paleta” -al menos teórica e inicial- de razones o causas del consentimiento.

Entre las razones del consentimiento se encuentran básicamente el miedo a la coerción, el nivel de satisfacción o insatisfacción con las circunstancias personales y/o con las de un colectivo o de toda la sociedad, y las representaciones que los individuos se hacen acerca de la responsabilidad política en dichas circunstancias, acerca de sus propias responsabilidades y acerca de las consecuencias personales y colectivas si deciden rebelarse y según cómo decidan rebelarse.

Por decirlo rápidamente, los ciudadanos pueden consentir (no rebelarse) porque se encuentren “razonablemente” satisfechos, pero este considerarse razonablemente satisfechos ha de verse más bien como no encontrarse “tan insatisfechos” o “molestos” como para rebelarse, pues si no sería fácil que se inclinara hacia el apoyo al régimen político. Las causas estribarían bien en que la rebelión podría acarrear a sus personas la coerción, bien en que no localizan exactamente el objeto de la rebelión ni ven clara su eficacia, bien en que consideran que la rebelión -aunque justificada- podría acarrear consecuencias funestas para la sociedad o la comunidad política.

Por poner algunos ejemplos prácticos de estas ideas: la participación en la *churocracia* de Mubarak constituía para las elites políticas e intelectuales un motivo de satisfacción, independientemente de que ideológica o intelectualmente defendieran un “modelo *churócrata* ideal” (como era el caso de algunos pensadores y partidos islámistas) o no, de que el de Mubarak coincidiera con aquel, o de que su modelo político ideal fuera otro. Dicha satisfacción era variable, pero era, en todos los casos, suficiente para no rebelarse.

Un ejemplo muy diferente de las razones para desestimar el recurso a la rebelión, que debe sin embargo ser combinado con las otras, era evitar contribuir a la desestabilización del país y a un enfrentamiento generalizado entre el poder constituido y gran parte de la sociedad, e incluso a un enfrentamiento civil. Los primeros años del mandato de Mubarak habían permitido disolver el enfrentamiento del primer tipo vivido en los últimos años del de Sadat. Los siguientes, desde finales de los 80 hasta 1998 (fecha

presumida de la firma de la tregua, o conciliación entre el Gobierno y los grupos islamistas armados), se habían caracterizado por un intenso enfrentamiento armado entre sectores del islamismo radical y el Estado, que había alcanzado a numerosos civiles, algunos de los cuales fueron objetivos expuestos de atentados. Esta circunstancia no solo produjo un realineamiento al lado del régimen de numerosas fuerzas políticas y de la población en general, y un clima de enfrentamiento civil a nivel intelectual e incluso jurídico entre los partidarios de ideologías contrapuestas, sino también una disminución de la contestación y un incremento del consentimiento, o una subordinación de las razones para la rebelión que no coincidían con las del islamismo radical.

1.1.4 Tercera fase. Legitimidad, Estado y régimen

Esta fase de nuestra investigación constituyó en gran medida un retorno a los orígenes. La legitimidad, aunque no la hayamos mencionado todavía, fue uno de los primeros elementos que tuvimos en consideración al iniciar nuestro estudio del régimen de Mubarak. No obstante, el concepto de legitimidad, si se maneja de manera simplificada en tan solo una de sus dimensiones, consiste en el apoyo que tiene el poder constituido en términos cuantitativos, de modo que estudiarla en los regímenes autoritarios tiene el problema de que en estos, o bien no se realizan elecciones o comicios de otro tipo, o bien no son libres y totalmente competitivos, y por ende no son lo suficientemente representativos; por otro lado, tampoco se realizan encuestas de opinión o estas no son fiables desde un punto de vista científico. A estas dificultades ya apuntadas por Nazih Ayubi (1995) en su estudio sobre la hipertrofia del Estado árabe, se suma el hecho de que tales procedimientos consultivos, electorales o científicos, habrían podido permitir discernir con cierta claridad el objeto de la legitimidad, siendo necesario distinguir -cuando menos- entre la legitimidad de los gobernantes, la de las instituciones, la del sistema político y/o la del régimen político.

Con todo, la razón de que relegáramos relativamente la cuestión de la legitimidad fue que a pesar de las dificultades mencionadas, dábamos por zanjada la cuestión de la legitimidad de los gobernantes y los regímenes no solo durante el mandato de Mubarak, sino también durante los de Anwar al-Sadat y Gamal Abdel Násir, en el sentido que nos había parecido más relevante: el del apoyo que habían recibido. Násir había tenido un gran apoyo, Sadat había concluido su mandato con pocos apoyos y enfrentado a un amplio frente “deslegitimador”, y Mubarak, tras mejorar considerablemente las cotas de Sadat, había retornado a unos niveles de legitimidad muy bajos, para luego beneficiarse ligeramente del enfrentamiento con el islamismo armado, aunque este produjera sobre todo consentimiento.

Sin embargo, de la mera enumeración anterior siguiendo la secuencia histórica de los presidentes, se deducía que Sadat, en tanto que sucesor de Náser por elección endógena del régimen, partió en su mandato con un cierto “capital” de legitimidad, y por el contrario Mubarak -sucesor de Sadat por la misma vía- lo comenzó con un importante “debe” en su haber. Aunque nosotros, como todos los politólogos, hablábamos de tres regímenes distintos, nos teníamos que enfrentar a la cuestión de la continuidad y los cambios entre ellos, que no se reducía en absoluto a la cuestión de la legitimidad, heredada, adquirida o perdida.

La continuidad entre los tres regímenes del autoritarismo, del presidencialismo, de la presencia del ejército y de gran parte del aparato de control político (personas e instituciones), no era en absoluto argumento suficiente para hablar de “tres regímenes distintos dentro de un mismo régimen”. No obstante, tampoco los cambios en el sistema político constituían la diferencia esencial entre los tres regímenes -y en particular entre el de Mubarak y los dos anteriores-, aunque debieran ser tenidos en cuenta. Había que considerar los cambios en las políticas, los cambios en los apoyos sociales y los cambios en las elites. En este sentido, considerábamos como punto de partida que el régimen de Mubarak era bastante cercano al de Sadat, y bastante alejado del de Náser.

Sin embargo, según avanzaba nuestra investigación fuimos descubriendo que en el régimen de Mubarak -y en el de Sadat- había muchas más cosas del de Náser de las que pensábamos. No se trataba tan solo de la permanencia dominante de ciertas instituciones y aparatos, sino también de numerosas políticas y modos de gestión política en los que se encabalgaban otros “nuevos”, de aparente sentido contrario.

Todo empezó en el terreno de la economía política. La liberalización económica reemprendida finalmente por Mubarak en 1991 nos había llevado en un principio a confirmar su alejamiento del naserismo en esta segunda etapa de su mandato. De hecho, es indudable que objetivamente se alejaba de él. Su negativa en los 80 a retomar dicha liberalización, y la extraordinaria lentitud con la que abordó la liberalización a lo largo de los 90 y hasta principios del siglo XXI, conservando la mayor parte de la legislación laboral, importantes medidas redistributivas, e incluso la propiedad pública de numerosas empresas e instituciones económicas, nos llevó a considerar “la acción” del régimen de Náser como un “marco restrictivo” para Mubarak. Este evitaba modificar ciertas políticas esenciales del naserismo, aunque enmendara muchas otras, porque hacerlo podría suponer una amenaza para la estabilidad del país o de su propio poder. Había “aprendido” de la experiencia de Sadat, que había violado en diversos aspectos -no solo en el de la economía- ese marco restrictivo

La lectura un tanto tardía de la gran obra de Ayubi sobre el Estado árabe nos llevó a consolidar muchas de nuestras hipótesis parciales, pero sobre todo a prestar mucha más

atención al concepto de Estado y al Estado árabe, aunque ya nos habíamos interesado por ambos gracias a la lectura de Laroui, llamándonos de manera particular la atención las reelaboraciones del pensador magrebí a partir de las teorías de Gramsci sobre el aspecto moral y educador del Estado y su aplicación a la problemática del Estado árabe, así como sus reflexiones sobre el papel de la ideología y la utopía en la reproducción del pensamiento político islámico ortodoxo. Como señaló Ayubi, Laroui fue uno de los pensadores árabes pioneros en interesarse por la abandonada labor de reflexionar acerca del Estado en general, y el Estado árabe en particular, así como en quejarse por ese abandono. A partir de los años 80, sin embargo, dicha reflexión se intensificaría, y los intelectuales árabes, al margen de sus tendencias ideológicas, mostrarían una singular atracción por las ideas gramscianas, en la medida en que estas prestaban gran atención a los aspectos culturales específicos de cada sociedad. La obra de Ayubi, en nuestra opinión la más completa hasta el momento sobre el Estado árabe, pivotaba sobre estas cuestiones pero no descuidaba el resto de los paradigmas explicativos, abordaba la cuestión de la legitimidad e insistía en la necesidad de distinguir entre gobernantes, régimen y Estado.

1.1.5 Un final que nos devuelve al comienzo. El intento de cambio de régimen dentro del régimen

El incremento de la contestación, y sobre todo de la “rebeldía” en Egipto en los primeros años del siglo XXI -muy centrado en las reivindicaciones laborales antes escasas y por vías no consentidas-, nos llevó a apuntalar nuestra hipótesis sobre “el marco restrictivo” que se había impuesto o al que se había sujetado Mubarak. El incremento de la contestación y de la rebeldía se producía en el momento en el que se dejaban sentir los efectos de la liberalización y en el que se había consolidado la tregua pactada por el poder con el islamismo armado. Las razones para la rebeldía aumentaban y las razones para el consentimiento decrecían.

Al mismo tiempo, nuevos elementos observables se habían añadido a la situación. Los ya sustanciosos cambios en el régimen económico habían propiciado el fortalecimiento general, económico y político, de la alta burguesía, y en particular de un sector de ella. Este sector aparecía estrechamente vinculado a Gamal Mubarak, hijo del presidente, y sus representantes y el propio Gamal Mubarak se habían hecho en 2000 con las riendas del partido gobernante, y en 2004 con los principales puestos del Gobierno. Se estaba produciendo un cambio global de régimen, o al menos un intento de cambio, bajo el mandato y con la aprobación de Hosni Mubarak (quien en 2005 cumplió 77 años), que tras el cambio económico pasaba por la restructuración de las elites, y que la mayor parte de los egipcios creían que culminaría con el acceso de Gamal Mubarak a la presidencia. Pero

este “proyecto” encontraba numerosas resistencias, no solo entre las fuerzas políticas que se manifestaban explícitamente contra “sucesión hereditaria, sino también, de manera no declarada pero evidente, en el seno del propio régimen, en su “vieja guardia” a nivel estatal y local, constituida principalmente por las elites de origen burocrático y sus clientelas y asociados, entre los que se encontraban importantes sectores de la burguesía. Las elecciones de 2000 manifestaron esas resistencias, cuando los “disidentes electorales” del partido gobernante y otros independientes habían “derrotado” a los candidatos oficiales de aquel, a pesar de que habían sido seleccionados por Gamal Mubarak y sus colaboradores. Se rumoreaba insistentemente que el Ejército también estaba inquieto por el curso de los acontecimientos y prefería un candidato presidencial militar.

Ante esta situación, el núcleo central del régimen tomó una decisión que constituyó un viraje espectacular hacia la liberalización política o lo que parecía serlo. Permitió que a las elecciones presidenciales de 2005 se presentaran otros candidatos distintos a Hosni Mubarak, aunque mantuvo estrechos mecanismos de control sobre el resultado de los comicios. A esta medida simbólica siguió, sin embargo, otra sustancial: permitió que las elecciones legislativas del mismo año fueran supervisadas íntegramente, por primera vez, por los jueces, y volvió a permitir que los Hermanos Musulmanes se presentaran ellas, con menores trabas que nunca. El objetivo de estas medidas era conseguir una gran dosis de legitimidad para el “nuevo régimen”, una legitimidad que oponer a los sectores de la “vieja guardia” opuestos al cambio.

La estrategia se saldó con un absoluto fracaso: ante los éxitos parciales conseguidos por los Hermanos Musulmanes y los disidentes electorales del Partido Nacional Democrático, en la tercera vuelta de la elecciones se impuso, por orden de las más altas esferas, y con el objetivo de impedir una debacle mayor, el más férreo y violento control de los resultados, que resultó en decenas de muertos, cientos de heridos y miles de detenidos.

El periodo 2006-2011 se caracterizó por un cierre absoluto del sistema político formal a la oposición real. Instancias judiciales promovieron la detención de miles de miembros de los Hermanos Musulmanes, que fueron proscritos de la vida política. Numerosos jueces fueron represaliados por su actuación en los comicios de 2005 y se retiró la supervisión judicial a las elecciones legislativas de 2010, cuyos resultados oficiales atribuyeron poco más de un 2% de los escaños a los partidos de la oposición, en concreto a dos partidos “históricos” que con su participación demostraron que tenían poco de “oposición”.

El fundamento principal del nuevo viejo régimen era ahora la coerción, cuya amenaza era esgrimida no solo frente a la oposición sino frente a los disidentes dentro de él. Aun así, un extendido y acumulativo movimiento de protesta desafiaba con éxito las prohibiciones: se producían cientos, luego miles, de protestas laborales y económicas todos

los años. Aunque las fuerzas de seguridad eran más tolerantes con este tipo de protestas, eran más expeditivas que nunca con el rebasamiento de estos límites a la acción expresamente política; además, su ascenso en la jerarquía de los sostenes del régimen permitía que se incrementaran las violaciones de los derechos humanos en general. Los “jóvenes” (los que habían adquirido uso de razón bajo el mandato) eran quienes más transgredían los límites, y no solo los impuestos por el poder constituido: los límites políticos, los comunicativos, los intergeneracionales, los interideológicos.

La caída de Mubarak nos sorprendió, sin embargo, como a todos.

1.1.6 Un estudio comparado del régimen de Mubarak con los de Náser y Sadat

La “revolución” de enero y febrero 2011 nos sorprendió comenzando a escribir esta tesis. Escribíamos sobre el periodo de Mubarak con el fin de dar cuenta de su duración, de sus fundamentos y de la evolución de estos, y teníamos escritas o pergeñadas partes de una introducción histórica extensa en el tiempo (desde finales del siglo XIX). De hecho, en 2006 habíamos realizado nuestro trabajo para el Diploma de Estudios Avanzados, que se nos imponía realizar por los cambios en la normativa del Doctorado, sobre las *Transformaciones económicas, sociales y políticas en el Egipto del XVIII*¹. Sin embargo, el cambiante y a veces chocante curso de los acontecimientos tras la revolución y la caída de Mubarak se imponía a nuestra atención: a parte de su interés objetivo, amenazaba potencialmente con poner en dificultades algunas de nuestras hipótesis centrales. Por contra, gran parte de esos acontecimientos parecían confirmar la mayoría de estas.

Finalmente, la “vuelta hacia el pasado” que constituyó en muchos aspectos el derrocamiento del presidente electo Mohammed Mursi, miembro de los Hermanos Musulmanes, por el jefe de las Fuerzas Armadas, Abdel Fattah al-Sisi, y el hecho de que esa vuelta hacia el pasado fuera apoyada por un gran número de los egipcios -como habían apoyado muchos de ellos frente a Mursi a un candidato del “viejo régimen” en las elecciones de 2012-, nos desconcertaron de nuevo: ¿querían una gran parte de los egipcios, tal vez cercana al 50%, retornar a “algo” anterior?

Más que la respuesta, incierta entonces y aún ahora, lo que nos interesa a efectos de nuestra investigación es que plantearnos esta pregunta nos reenvió a la cuestión de la legitimidad histórica, de las permanencias y de los cambios entre regímenes, y decidimos reexaminar los regímenes de Náser y Sadat, y releer el de Mubarak a la luz de ellos -e

¹ Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la UAM (sin publicar).

incluso la inversa-, para responder a las cuestiones que veníamos investigando. Aunque este fuera un nuevo camino, más largo, estábamos convencidos de que sería fructífero.

Para aprehender estas permanencias, era necesario trascender ciertas “categorías aparentemente pertinentes”, en particular las categorías asociadas al estudio de las democracias liberales y a ciertas áreas culturales, como señaló Ayubi. Se trataba de leer detrás o a través de las instituciones y los procedimientos formales emparentados en su origen con el estudio de dichas democracias o dichas áreas culturales, cuando es evidente que no funcionan según los presupuestos de tales modelos ni sirven a sus supuestos objetivos, o al menos no de la misma manera. El resultado tienen que ver con que la “acción del régimen naserista” que había constituido un marco restrictivo para los de Sadat y Násir fue la construcción del Estado republicano desde 1952, un Estado ampliamente legitimado y netamente diferenciado del monárquico anterior sería. La construcción del régimen naserista en paralelo a la de dicho Estado, o más bien dos pasos antes, confundiéndose en muchos aspectos régimen y Estado, constituiría una problemática específica que es la que tratamos de dirimir en esta tesis. Los cambios en y de los sucesivos regímenes, sobre todo en el sistema político y en la política económica, camuflarían permanencias esenciales.

1.2 PRESUPUESTOS DE INVESTIGACIÓN

1.2.1 “Estado” y “régimen”

Nazih Ayubi, en la que es la mejor obra sobre el Estado árabe, en nuestra opinión, señaló:

“Aunque no resulta siempre fácil en los países menos desarrollados, donde (como, por ejemplo, en el «sultanismo») gobernantes y Estado se hallan a menudo entremezclados, debemos tener siempre presente la distinción entre Gobierno, régimen y Estado” (Ayubi 1998: 59).

Y el autor continuaba, citando las siguientes palabras de Fishman:

“Los regímenes constituyen formas más permanente de organización política que los Gobiernos específicos, pero normalmente son menos permanentes que el Estado. El Estado, en cambio, constituye una estructura normalmente más permanente de dominación y coordinación, que incluye un aparato coercitivo y los medios para administrar una sociedad y extraer recursos de ella”².

A pesar de su advertencia, Ayubi no llevó a cabo de manera concluyente y sintética la tarea de distinguir entre el Estado republicano egipcio y los regímenes de Náser, Sadat y Mubarak, a pesar de que en su trabajo abordó monográficamente el estudio, entre otros, de dicho Estado y de tales regímenes hasta la que en nuestro estudio nosotros consideramos primera época de Mubarak (finales de la década de los 80). No obstante, la problemática señalada por Ayubi es una de las que abordamos en nuestra tesis, pues el régimen naserista, en su devenir, llevó a cabo la configuración inicial del Estado republicano egipcio, un Estado netamente diferenciado del Estado monárquico y poscolonial anterior. La mayor parte de los rasgos de este Estado persistieron hasta principios del siglo XXI, a pesar de las iniciativas de los regímenes de Sadat y Mubarak para modificar algunos de ellos, y muchos de ellos siguen presentes hoy, a la espera de ver cómo se desarrolla la nueva etapa iniciada tras el golpe de Estado del 3 de julio de 2013 protagonizado por Abdel Fattah al-Sisi y que derrocó a Mohammed Mursi, golpe de Estado que fue, además, un golpe tendente a “restaurar” algunos elementos del Estado republicano.

Dicho de otra manera, el régimen naserista “legó” a Egipto un régimen y un Estado

² La cita es de Robert M. Fishman: “Rethinking State and Regime: Southern Europe's Transition to Democracy”, *World Politics*, vol. 42, nº3, 1990, pág. 42. Citado por Ayubi (1998: 60).

que en gran medida se confundían, y serían el paso del tiempo y la sucesión de regímenes los que ayudarían a distinguir un tanto lo que en la “forma de organización política” de la que habla Fishman cabría atribuir a los distintos regímenes y lo que cabría encuadrar en esa forma “más permanente” llamada “Estado” y en su evolución. No obstante, el principal objetivo de nuestro trabajo es el estudio de los tres regímenes mencionados, de Náser a Mubarak, y por ello nuestro concepto de “régimen político” es el que nos interesa aclarar, una vez avanzada esta advertencia de que entre la estructura del Estado y la del régimen político puede haber grandes coincidencias.

1.2.2 “Régimen político” y “sistema político”: una indefinición y una confusión históricas

Los conceptos de “régimen político” y “sistema político” son bastante más problemáticos de lo que parece indicar el despreocupado uso que a menudo se hace de ellos, en general y a veces también en medios académicos. Ambos han conocido en la tradición politológica nacida en Europa occidental vaivenes en los que a menudo se han confundido, arrastrados por la propia evolución de las realidades políticas. Los teóricos de la politología actuales y contemporáneos son, sin embargo, bien conscientes de las dificultades que encierra definir tales conceptos y sus líneas de demarcación, y el resultado es que muchos de ellos rehúyen definir y utilizar el más complejo, el de “régimen político”, por no hablar de los que lo hacen con resultados poco satisfactorios. Sin embargo, la palabra “régimen” resuena por todas partes precisamente cuando se trata de abordar “entramados heterodoxos” de poder político, por así decirlo.

El concepto de “régimen político” surgió tras la Revolución Francesa por contraposición al de Antiguo Régimen, y entendido como “nuevo régimen político”. A partir de ahí, como señalan García Cotarelo y Paniagua Soto (1987: 201-202):

“se mantiene con evidentes zonas de indeterminación, precisamente como consecuencia del complejo entramado de factores que lo integran y la mutabilidad de algunos de sus elementos, muy en particular los de su componente dinámico (...) [Esta indeterminación] ha sido un factor importante para la proliferación de otros elementos o conceptos que han convivido y hoy se utilizan indistintamente; sobre todo, el de sistema político (...) La imprecisión de los elementos que configuran un régimen político hace que sean escasos los autores que asumen la definición del mismo. Si se aborda el empeño con criterios muy amplios, la resultante es la ausencia de definición y, además, el mantenimiento de la confusión entre, por ejemplo, régimen político y sistema político”.

A pesar de estas últimas palabras, los propios autores intentan una aproximación al concepto, y apuntan seguidamente algunos rasgos de su evolución:

“Un régimen político es la resultante de un conjunto de realidades de carácter dinámico que operan en el Estado y en la estructura social con fines políticos, económicos, filosóficos, etc., es decir, en el contexto de una ideología que se orienta con fines y objetivos. El concepto de régimen tiene un alcance más amplio que la mera organización de las formas políticas. Por ello, desde el momento histórico en que dicho concepto recibe un fuerte impulso (el periodo de entreguerras y en particular por los movimientos totalitarios europeos), el concepto incorpora un importante grado de contenido ideológico. Y al contrario, durante todo el siglo XIX los regímenes políticos, con el común denominador de la filosofía liberal, se clasifican en función de la forma de Gobierno y de la particular técnica de relación entre los poderes: monarquía y república, de una parte, y parlamentarios, presidenciales, etc., de otra”.

Más recientemente, otros autores, como Molina y Salcedo (1998: 106), en sentido contrario a los antes citados, consideran que la ideología ha perdido importancia como elemento de diferenciación de los regímenes políticos, tras el fin de la gran confrontación entre regímenes socialistas y liberales, y “que la principal clasificación que hoy puede hacerse es la institucional, que distingue entre regímenes democráticos y dictatoriales”.

Las citas anteriores muestran la indefinición, variabilidad, y en algunos casos -como en el último citado- la inanidad de las definiciones de “régimen político”. No obstante, hay autores que han hecho aportaciones más complejas, detalladas y adecuadas para intentar aprehender una realidad huidiza, y que sirven mejor a nuestros objetivos. Así, según Sánchez Agesta (1983: 491-493), el de régimen político “es un término convencional para designar una estructura coherente cuyo significado se articula en cuatro elementos que son a su vez coherentes entre sí”. Dichos elementos son:

- Su ideología, en el sentido de “un núcleo central de ideas que constituyen el principio o principios que son criterios del orden”.
- Una “característica fórmula de derecho constitucional” que “deriva de esa ideología”.
- Una “característica legitimación del poder, que incide sobre su organización, la forma de adopción de las decisiones y la fijación de sus límites”.
- Un orden económico y social.

Algunas de las virtudes de la definición de Sánchez Agesta, en la que sin embargo se echa en falta alguna alusión explícita al elemento sociológico de los regímenes, son que incluye la consideración del “orden económico”; la aparición del concepto de “poder” y de las relaciones de este y su modo de organización con la legitimación; y la feliz expresión “fórmula de derecho constitucional”, que no relaciona necesariamente el marco legislativo del régimen político con los regímenes constitucionales parlamentarios y pluripartidistas, como hacen otras definiciones. No obstante, otra de las razones por las que hemos traído a

colación a Sánchez Agesta es la siguiente matización que el autor introduce, y que resulta muy pertinente para abordar nuestro objeto de estudio:

“las realizaciones históricas [de regímenes] normalmente responden flexiblemente a una combinación de varios tipos, porque los regímenes no se suceden de una manera catastrófica, sino que se establecen a través de lentas penetraciones que poco a poco transforman el sentido de un orden” (pág. 493).

Finalmente, para la necesaria consideración del elemento ideológico del régimen, fundamental en nuestro caso de estudio, resulta muy útil tener en cuenta la interpretación de Régis Debray (1981: 255):

“Una «ideología» es una sociurgía, un proceso presentado como resultado: lo que queda de un grupo cuando ha acabado de organizarse. Si las ideologías no son maneras de ver el mundo, sino maneras de organizarse en el mundo, la lógica de la ideología encuentra su clave en la lógica de la organización”.

Desde este punto de vista se explicaría, cuando menos, lo vano de los esfuerzos de numerosos estudiosos del régimen naserista, como veremos, por encontrar la clave explicativa de la ideología del régimen naserista en los antecedentes ideológicos y orígenes sociales de los motores iniciales de aquel, los Oficiales Libres, antecedentes y orígenes que eran extraordinariamente diversos.

1.2.3 “Régimen político”. Una definición propia para dos acepciones

En esta investigación utilizamos la expresión “régimen político” en dos sentidos, uno extenso y otro restringido, y pensamos que será fácil distinguirlos por el contexto. El primero de ellos refiere a una “estructura de poder”, que incluye todos los elementos del orden ideológico, institucional, organizativo, sociológico y económico que concurren a sustentar el gobierno de un país. El segundo alude tan solo al componente humano, tanto individual como de orden sociológico, formado tanto por quienes ejercen el mando en los niveles superiores de dicha estructura de poder (las élites dirigentes del régimen) como por quienes los apoyan desde posiciones inferiores de tal estructura (que según sus posiciones pueden ser considerados elites o simples “miembros” del régimen).

Con más detalle, y para entender la concepción que manejamos, un régimen político, en tanto que estructura de poder, incluye además del componente humano y sociológico de sus dirigentes y principales apoyos, estos otros elementos: el entramado legislativo del Estado; las instituciones, estructuras y sistema político-formales; las estructuras de representación y articulación de demandas e intereses de la sociedad

autorizadas; el tipo de aparato de Estado con que cuenta (que puede incluir un aparato económico y un aparato mediático); el tipo de relaciones existentes entre dicho aparato estatal y, por un lado, las instituciones y estructuras políticas, y, por otro, el resto de las estructuras de representación y articulación de intereses; la forma en que se producen las decisiones y quién y cómo participa e influye en ellas; la ideología defendida por el régimen; el orden económico y social que promueve; y, finalmente, aunque este punto está estrechamente relacionado y en su mayor parte subsumido en los elementos anteriores, el tipo de legitimación que busca.

Hemos de adelantar que en este trabajo rara vez utilizamos la expresión “sistema político”, sino más bien -y en particular al tratar las épocas de Sadat y Mubarak- las de “sistema político formal” y “régimen de gestión política”, concepto que no coincide con ninguno de los anteriores. Ello se debe a la constatación de que, por un lado, los dispositivos y procedimientos del sistema parlamentario pluripartidista, y otros aparejados a ellos de la estructura de poder, nunca satisficieron real y/o exactamente las funciones que normativamente se les atribuían; por otro, a que dichos dispositivos y procedimientos satisfacían en gran medida otras funciones; y, finalmente, a que otros dispositivos y procedimientos ajenos al sistema político formal desempeñaban algunas de las funciones normativamente atribuidos a aquel.

Nuestras últimas afirmaciones remiten a las concepciones más actuales de los politólogos acerca de los sistemas políticos, considerados en tanto que sistemas sociales de los que el sistema político formal es tan solo una parte, y en concreto al enfoque estructural-funcional (Almond & Powell 1966; Merton 1957). No obstante, consideramos que en el caso egipcio la evolución desde 1952 de lo que podemos llamar el “sistema político global” es resultado de una interacción entre el poder constituido y la sociedad en la que el primero llevó y conservó casi siempre la iniciativa, “presentando-imponiendo” sus propuestas de “régimen de gestión política” y asimilando a este algunas de las enmiendas que le “proponía-imponía” la sociedad.

1.2.4 Los regímenes personalizados

El uso de las expresiones “régimen de Náser”, “régimen de Sadat” y “régimen de Mubarak” es absolutamente general. Se apunta con ello a que en estos “regímenes personalizados” lo que se da es una enorme concentración de poderes en una persona. Pero en términos *sistémicos* lo más destacable es que en ellos “la persona” del presidente -a diferencia de lo que sucede en los llamados “regímenes presidencialistas democráticos”- constituye una invariable de la estructura de poder del régimen, mientras que el resto de sus componentes pueden variar, y de hecho varían relativamente. Incluso pueden

producirse cambios de paradigma en la estructura y el modo de funcionamiento del régimen, y en la composición y origen de sus elites dirigentes (un cambio de “tipo de régimen”) sin que aquel deje de ser “el régimen de *fulano*”, siempre que “fulano” promueva o consienta tales cambios. No obstante, cambios sustanciales de este tipo resulta casi imposible que se produzcan, de no ser de manera gradual y mediante “encabalgamientos” de las estructuras, modos de funcionamiento y elites que son sujeto y/o objeto de tal transición o transformación.

1.2.5 El poder como dato original. El “poder constituido”

Hemos mencionado el “poder”, pero no hemos hablado de su esencia, ni de su ámbito de relaciones y zonas de frecuente confusión, algunos de cuyos aspectos es necesario tratar para comprender qué queremos decir con expresiones con “poder”, “poder constituido” y “estructura de poder”

El primer aspecto a tratar sería, siguiendo a Hanna Arendt (1998: 146), el que la autora llama su “dato original”, esto es, el poder que procede de una “reunión de fuerzas”, de modo que quien decimos que “tiene” u “obtiene” el poder lo recibe por “delegación de poderes” (de un determinado número de personas) para ejercer el mando o el gobierno. A partir de ese momento tenemos un “poder constituido”, que puede tener más o menos “auténtico poder”, es decir, más o menos apoyo o *legitimidad* y más o menos *consentimiento* (conceptos que abordamos un poco más adelante). Así, la “estructura de poder” de un “poder constituido” con poco “auténtico poder” es más una “estructura de dominación” de lo que lo es otra con más “auténtico poder” (apoyo + consentimiento), aunque todas las estructuras de poder lo sean de dominación en diversa medida. Cuando en un Estado o régimen político los apoyos al “poder constituido” o a lo que Arendt llama el “poder de gobierno” son muy escasos, se reducen casi siempre a un aparato de seguridad y al apoyo de reducidos sectores del aparato del Estado y de la sociedad.

Pero frente a lo que pretenden diversas utopías, como señala la autora³, la existencia del poder en las comunidades humanas es también un dato original de aquellas:

“El poder (...) es un fin en sí mismo (...) la estructura del poder en sí mismo precede a todos los objetos, de forma que el poder, lejos de constituir los medios para un fin, es

³ Arendt trata este asunto más extensamente en *Sobre la revolución* (1988), señalando en particular cómo las ciudades-Estado griegas se concibieron como una forma de organización política en la que los ciudadanos convivían al margen de todo poder, idea que se expresaba con el término *isonomía*. Como señala la autora “la palabra «democracia», que incluso entonces expresaba el gobierno de la mayoría, el gobierno de los muchos, fue acuñada originalmente por quienes se oponían a la isonomía cuyo argumento era el siguiente: la pretendida ausencia de poder es, en realidad, otra clase del mismo; es la peor forma de gobierno, el gobierno por el *demos*” (págs. 30-31).

realmente la verdadera condición que permite a un grupo de personas pensar y actuar en términos de categorías medios-fin (...) El poder no necesita justificación, siendo como es inherente a la verdadera existencia de las comunidades políticas; lo que necesita es legitimidad. El empleo de estas dos palabras como sinónimos no es menos desorientador y perturbador que la corriente ecuación de obediencia y apoyo” (Arendt 1998: 153-154).

De esta manera, el poder constituido (un poder en concreto) surge de una reunión de fuerzas, y su “auténtico poder” depende de su capacidad mantener dichas fuerzas e incorporar otras, de los apoyos que recibe, es decir de su legitimidad, así como del *consentimiento* que obtiene o mantiene.

1.2.6 “Legitimidad”

El uso que hemos hecho hasta ahora de los términos “legitimidad” y “legitimación” es el que seguiremos siempre en nuestro análisis. En este sentido, la legitimación es el apoyo que reciben los gobernantes, el régimen político o el Estado, y su legitimidad es la cantidad de apoyo, cuantitativo y cualitativo, que reciben. Este uso no ignora la complejidad de la cuestión de la legitimidad, sino que por el contrario nace de ella, y en particular en los casos que nos ocupan.

El concepto de legitimidad, como señala Naziz Ayubi (1998), se suele relacionar principalmente con el mecanismo específico de representación y participación política. Sin embargo, esta es una concepción -como indica así mismo el autor- “muy vinculada con la democracia pluralista y parlamentaria occidental/capitalista”(pág.61). Esta concepción ignora, o pone en segundo plano, los elementos de éxito, rendimiento y eficacia de la acción política, por ejemplo los relacionados con el sistema socioeconómico, que han sido y son de gran importancia en los países llamados “en vías de desarrollo”. A ello hay que añadir, en nuestra opinión, los elementos relacionados con los procesos de lucha por la independencia y la soberanía. La concepción liberal-capitalista también deja de lado en gran medida la tipología de Weber relativa a la legitimidad (la legitimidad racional-legal, la tradicional y la carismática), que es especialmente importante seguir teniendo presente al estudiar los países en desarrollo (aunque también, por otro lado, en los países con democracias liberal-capitalistas). Para abordar estos aspectos, en este trabajo hablamos de las “fuentes de la legitimidad”.

Junto al problema de plantear la cuestión de la legitimidad en razón de su sistema político, cuando este puede no ser el criterio principal para la legitimación, se encuentra la dificultad de medirla. Esto se agudiza precisamente porque los mecanismos técnicos que suelen utilizarse a efectos de tal medición en los países con sistemas pluralistas capitalistas

(encuestas, sondeos, los propios referendos y procesos electorales, etc.) en general no son utilizados libre y limpiamente en casos como los de los tres regímenes que nos ocupan (el régimen de Mubarak tan solo permitió pequeñas excepciones parciales en algunos momentos concretos). No obstante, existen otros indicios de la legitimidad que, por imprecisos e incluso manipulables que sean, debemos tener en cuenta. Entre estos se cuentan todas las muestras de expresión de adhesión o rechazo a los gobernantes, al régimen político o al Estado, sean del tipo que sean.

Finalmente, la cuestión de la estimación de la legitimidad se complica cuando se relaciona con el objeto preciso del apoyo, o si se quiere, de la creencia, con la cuestión de qué es exactamente lo que los ciudadanos apoyan y lo que no, o qué consideran legítimo y qué no. A menudo la legitimación o deslegitimación se presenta como un resultado final, en el que sería necesario distinguir en qué medida influyen en la legitimación o deslegitimación global de una estructura de poder los apoyos o el rechazo que suscitan las distintas partes de ella: Estado, gobernantes, sistema político, medidas económica, etc. Esta tarea, por complicada que sea en ocasiones, debe abordarse. Y es en parte lo que nos hemos propuesto con nuestro estudio.

1.2.7 “Consentimiento”

Una definición reciente y escueta del concepto de poder señala que “el poder es la capacidad de obtener obediencia de otros” (Bouza-Brey 1996: 40). Esta formulación parece considerar el poder como un recurso, algo que sin duda es adecuado pero insuficiente, pues omite hacer explícito que el poder puede ser también considerado, como señala Vallès (2008) en línea con nuestra argumentación anterior, “el efecto de una relación”, y por consiguiente “no es tanto una sustancia como una situación (...). Desde esta perspectiva, todos los actores aportan algo a la relación que acaba en poder de unos sobre otros. No solo hay imposición o predominio, sino también aceptación y acatamiento” (págs. 31-32).

Al igual que a Vallès, nos parece lo más conveniente integrar ambas perspectivas en la concepción del poder, por lo que vamos a insistir en algunos aspectos que el autor destaca, desarrollándolos según nuestra concepción.

Vallès contrapone, como elementos constitutivos del poder, la “imposición” o el “predominio” a la “aceptación” o el “acatamiento”. Nosotros creemos más adecuado utilizar una triada compuesta por la coerción (en sentido amplio), el apoyo y el consentimiento. Pensamos que los términos “coerción” y “apoyo” no necesitan explicación en sí, aunque se pueda hablar de los medios mediante los cuales se ejercen o manifiestan, y de la posible volubilidad del apoyo.

En cuanto al concepto de consentimiento político que utilizamos, es bastante diferente del formulado inicialmente por John Locke -y extendido en las leyes y en la literatura jurídica de tradición liberal-, y se acerca mucho más al que está implícito en las obras de Hanna Arendt. Tanto para Locke como para Arendt, el consentimiento político consiste en “un acto de sujeción” -o autocontrol-, emanado de la libertad individual “natural” implícita en “sujetarse” -ponerse en un estado de sujeción- a un poder político. “Someterse” -las comillas son nuestras- no es sin embargo una palabra adecuada, en la concepción de Locke, pues el individuo “sujeta” su libertad individual con la condición de poder recuperarla (Arendt 1998: 138-158; Godoy Arcaya 2004: 164-165, 171-172).

La gran diferencia entre Locke y Arendt es que el primero insiste en la voluntariedad, positividad y proactividad de ese acto de sujeción y, aunque diferencia entre el consentimiento “expreso” (lo que nosotros y Arendt llamaríamos “apoyo” o “legitimación”, y excluiríamos del consentimiento) y el “tácito”, el autor inglés excluye del consentimiento la “aceptación” y la “obediencia”. Por el contrario, Arendt deja claro que para ella entra dentro del consentimiento todo lo que incluye la obediencia sistemática o esencial a las leyes, los dirigentes y las instituciones y, de manera más significativa, todo lo que no es rebelión o revolución (Arendt 1998: 138-158).

El “consentimiento político”, según nuestra concepción, es problemático, como lo es en todas las concepciones teóricas -y lo es en particular el “consentimiento tácito” en la obra de Locke (Godoy Arcaya 2004: 170-172). En nuestra concepción, el consentimiento no tiene nada que ver con el apoyo, sino con que los ciudadanos no se “rebelen” de alguna manera contras las leyes escritas -y no escritas-, los dirigentes y las instituciones del poder político.

“Rebelarse” o “no consentir” no es solo, por ejemplo, participar en revoluciones, en organizaciones armadas o en revueltas violentas, pero no es tampoco, simplemente, “contestar” u “oponerse” a las decisiones, la estructura o la legitimidad del poder por los canales legales o autorizados. “Rebelarse” supone desobedecer, violar las leyes y las normas del régimen político -incluso las no escritas- y, en principio, exponerse por ello mismo a la represión o a la coerción. Así, por poner unos pocos ejemplos quizás no tan obvios como otros -v.gr. la rebelión armada-, entran dentro de este concepto de rebelión la participación en manifestaciones o huelgas cuando se sabe que aquellas están prohibidas y que con toda probabilidad serán reprimidas. Pero también entraría, como en el caso egipcio que nos ocupa, desafiar abiertamente el tabú del respeto a la figura presidencial o de la reelección del presidente de la República, cuando se sabe que ello, llevado a cabo de determinada manera, puede conducir -y de hecho conduce- a una medida punitiva severa, como también entraría pretender monitorizar las elecciones legislativas cuando se sabe que el poder político se opone tajantemente a ello, y que ello puede llevar -y de hecho lleva-, a

una medida punitiva severa. Es decir, “rebelarse” o “no consentir” tiene que ver con intentar “amenazar” los fundamentos del poder constituido, intentar deslegitimarlo, o desafiar los límites que aquel ha impuesto a la conducta (política) de los ciudadanos.

El consentimiento (o la ausencia de rebeldía) es un concepto clave para explicar la duración de muchos regímenes. Es necesario utilizarlo porque el conjunto del apoyo y el consentimiento están en relación inversamente proporcional al grado de coerción que ejerce (que necesita ejercer) la estructura de poder, y su importancia se deduce cuando tanto el apoyo como el grado de coerción son reducidos en términos relativos, como lo fueron, por ejemplo, durante la mayor parte de la duración los regímenes de Sadat y Mubarak. Tal vez sorprenda esta última afirmación, y más cuando detallemos no solo los dispositivos coercitivos existentes en dichas épocas sino también la permanente amenaza latente de la coerción. Pero no hay mejor prueba de que la coerción no es la principal razón de la larga duración del régimen de Mubarak que las circunstancias en las que se produjo su fin, cuando la coerción era mayor y el Estado más policial de lo que lo había sido nunca. No se trata de que anteriormente no hubiera una disposición del régimen a ejercer una coerción generalizada “si era necesario”, se trata de que nunca le fue necesario, en parte por sus aciertos en el arbitrio de otras medidas para mantener el consentimiento.

Lo anterior no implica soslayar la importancia de la coerción, o mejor, del miedo a ella en el mantenimiento del consentimiento. De lo que se trata es de considerar que el miedo es un solo factor, entre muchos otros, en la balanza de elementos que llevan del consentimiento a la rebeldía. Lo demás tienen que ver, entre otras cosas, con el grado de satisfacción e insatisfacción que por las más diversas razones tienen los ciudadanos con los más diversos elementos del régimen político, a los que ponen en la balanza -de manera más o menos consciente- para evaluar si merece la pena o no afrontar el posible coste de la rebeldía.

1.3 OTRAS CONSIDERACIONES: METODOLOGÍA, ESTRUCTURA Y TRANSLITERACIÓN

El objeto de estudio de esta tesis es el régimen de Mubarak (1981-2011), pero, para poder abordarlo de manera integral, hemos recurrido, como ha quedado explicado, a su comparación con los regímenes de Náser (1952-1970) y Sadat (1970-1981), a los que este está unido por una evidente continuidad institucional en los principios de legitimación del Estado y en la procedencia de los máximos dirigentes. No obstante, dentro de la continuidad, a lo largo de los tres periodos presidenciales se producen cambios significativos, sobre todo en el sistema económico y el sistema político formal, que alcanzan su máxima expresión en la época de Mubarak.

Así, estando centrado nuestro análisis en el régimen de Mubarak, no dejamos de ocuparnos del Estado republicano en la medida en que engloba a los tres regímenes mencionados; en concreto, nos centramos en la evolución del sistema político en el marco de dicho Estado desde una perspectiva que se corresponde con la concepción de los sistemas políticos en tanto que sistemas sociales, y más concretamente desde un enfoque estructural-funcional. Por lo tanto, consideramos los “sistemas políticos formales” tan solo como una parte del sistema político, con un cierto escepticismo epistemológico inicial hacia las funciones y principios que normativamente se atribuyen a estos “sistemas formales”, es decir, pretendemos verificar su auténtico funcionamiento, las funciones que *realmente* desempeñan sus dispositivos y los principios que *realmente* siguen, así como si hay otros dispositivos externos al sistema formal que satisfacen en la práctica las funciones atribuidas a aquel.

La investigación sigue en gran medida una estructura de carácter cronológico, sobre todo para la época de Mubarak, y atribuye una importancia notable a ciertos elementos de la época anterior a la República, incluyendo una Introducción histórica. Las razones por las que se ha seguido este criterio son varias: por un lado, se trata de regímenes en principio autocráticos que “llevan la iniciativa” política desde una posición hegemónica e imponen-presentan sus propuestas políticas intentando obtener legitimidad; por otro, la evolución de los regímenes es resultado de la interacción de su núcleo dirigente con la sociedad. Pero además, el régimen matriz de Náser y el Estado republicano pretendieron -y lograron-cimentar gran parte de su legitimidad por oposición al antiguo régimen monárquico y poscolonial, actitud que los regímenes siguientes mantuvieron en la búsqueda de su propia legitimación por oposición a sus respectivos pasados (el monárquico y el republicano guiado por cada predecesor).

El análisis de los tres regímenes se realiza de distinta manera. Para los regímenes de Náser y Sadat nos apoyamos mucho, casi exclusivamente, en la literatura académica existente sobre la historia política, social, económica y cultural de Egipto. La nómina es extensa, como se puede observar en la Bibliografía final, pero particularmente útiles nos han resultado las obras de Abdel-Malek (1962), Ansari, (1987), Ayubi (1991), Waterbury (1983), Beinín & Lockman (1998), Al-Sayyid-Marsot (1985), Shoukri (1979, 1981) y Vatikiotis (1978, 1991). También hemos recurrido a las monografías de teoría política que se plantean la necesidad de abordar la compleja e intrincada dualidad régimen-Estado (Ayubi, 1998; Al-Arwi, 1988; Dawisha & Zartman, 1988; López García & Fernández Súzor, 1985;), y no hemos dejado de atender otros enfoques que nos resultan especialmente pertinentes, como los que se centran en el estudio de las elites, entre otros (Arigita, 2005; Azaola, 2006; Binder, 1978; Gómez García, 1996; González-Quijano, 1998; Posusney, 1997; Zeghal, 1997).

Para el régimen de Mubarak, además de utilizar estudios de carácter general (Springborg, 1989; Ayubi, 1991 y 1998; Soliman, 2011), recurrimos en mayor medida a estudios monográficos sobre economía (Assad, 2002; Clément, 2011; Handoussa & Potter, 1991), participación política (Qandil, 1991; Martín Muñoz, 1992; Al-Amir, 1993; Ben Néfissa & Arafat 2005), organización institucional (Fahmy, 2002; Mitchell, 2002;) y movimientos laborales y sociales (Dupret, 1994; Abdel Fattah & Néfissa, 2004;), pero sobre todo a fuentes primarias (materiales periodísticos de los principales rotativos egipcios; informes de CAMPAS, CEDEJ, IEA, MERIP; comunicados, cronologías de EMA, RPE) que nos permiten contrastar el grado de cumplimiento real de las funciones del sistema político formal y sus principios de funcionamiento, así como detectar todos los espacios, dispositivos, movimientos y principios de participación o “función” política alternativos existentes junto al sistema político formal.

En cuanto a la estructura, esta tesis tiene dos partes netamente diferenciadas, marcadas en el mismo título: una Primera Parte dedicada al estudio de los fundamentos de los regímenes de Gamal Abdel Náser (Capítulo I) y Anwar al-Sadat (capítulo II), y una Segunda Parte centrada en la presidencia de Mohammed Hosni Mubarak (capítulos III-V). Siendo este tercer mandato presidencial el que dio inicio a nuestra investigación, los otros dos se abordan en función de la hipótesis de estudio que hemos indicado, y que insiste en los factores de continuidad y/o ruptura que explican la pervivencia del modelo estatal republicano iniciado en 1952.

La Segunda Parte se divide a su vez en 3 grandes capítulos porque, como demostraremos, hubo tres periodos claramente diferenciados en la presidencia de Mubarak: el capítulo III está marcado por la promesa de la democratización (1981-1990); el capítulo IV por el impasse político del régimen mientras avanza la liberalización y se combate el islamismo armado (1991-2000); y el capítulo V por la crisis del régimen y la crisis del Estado (2001-2011),

Los temas se suceden y repiten en los cinco capítulos, en cada caso con sus propias características: formas del carisma, la legitimación por el nacionalismo, la economía política de la redistribución, la estructura del aparato estatal, las relaciones del régimen con la sociedad, las formas parainstitucionales, el corporativismo, la represión militar-policial, la formas de contestación y oposición política y social. Cada uno de ellos se cierra con unas conclusiones que sirven a su vez de preámbulo para abordar el siguiente.

Con todo, era preciso una Introducción que hemos dividido a su vez en dos partes: una de carácter conceptual y metodológico, en la que explicamos los presupuestos de partida de nuestra tesis; y otra de carácter histórico que se ocupa de los antecedentes políticos, sociales y económicos que determinaron la emergencia de la alternativa republicana personalizada en la figura de Náser. En ambas solo atendemos a las cuestiones

en relación directa con nuestro estudio, dejando de lado otras muchas tangenciales que sin embargo de vez en cuando emergen en las páginas que siguen. Así, hemos intentado ceñirnos a lo que concierne directamente a la formación de nuevas clases sociales, la extensión de la propiedad privada de la tierra, las reacciones nacionalistas al control colonial, el nacimiento y poder de la prensa, la diversificación económica y el arraigo del capitalismo, las formas de organización política, los líderes carismáticos y las corrientes contestatarias políticas y sociales.

Por último, ofrecemos unas conclusiones finales que tratan conjuntamente y a modo de síntesis las cuestiones parciales que se desglosan en las conclusiones de cada capítulo, y que a su vez también se explican por el breve epílogo sobre la era pos Mubarak que hemos añadido.

A efectos de facilitar la consulta, hemos creído preferible presentar un índice general al comienzo de la tesis y unos índices de contenidos más pormenorizados al inicio de cada capítulo. Por esta misma razón, hemos incluido al final un índice de tablas y un índice con las siglas de organismos, instituciones, partidos, asociaciones o movimientos que aparecen a lo largo de estas páginas.

En cuanto a la bibliografía, por razones de presentación formal que no implica otro tipo de jerarquización, hemos optado por agrupar de manera independiente las fuentes en lengua árabe. Las publicaciones periódicas como prensa generalista, anuarios, revistas no especializadas, cronologías y demás recursos bibliográficos utilizados de manera continua no se recogen en la bibliografía final sino en las notas a pie de página correspondientes.

El propio carácter de nuestro estudio así como gran parte de la bibliografía que menos manejado nos han vuelto a situar ante el tan traído y llevado asunto de la traducción y transliteración de la lengua árabe.

En muchos casos, los términos técnicos de instituciones, cargos, doctrina religiosa, teoría política o simple pragmática usados en árabe no tienen un correlato unívoco en castellano, razón por la cual la primera vez que aparecen mencionados los damos en transliteración, y a continuación con la forma árabe y la traducción más aproximada que, a nuestro entender, se puede encontrar. Luego, pasamos a mencionarlos ya solo en esta forma transliterada. Hemos intentado con ello que no se pierdan de vista los matices propios que tienen en árabe pero que sea posible también una lectura fluida incluso para quien no sabe árabe. Por lo mismo, hemos optado por una transliteración simplificada que reproduzca fonéticamente de la manera más cercana posible el árabe egipcio. A ello se debe la adopción de algunas opciones muy específicas que nunca es dogmática, como

Higra (en la que la hache se aspira y la “ge” reproduce la “yīm” como la pronunciaría un egipcio) mientras que mantenemos “yihad” (que un egipcio pronuncia /guihad/) porque es la forma que recoge el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. Hemos seguido el mismo criterio con los nombres propios, si bien los que tienen circulación habitual en inglés o francés los reproducimos en esa forma (como Mohammed Hasanein Heikal).

Por contra, la bibliografía hemos optado por darla agrupada en un apartado propio en lengua árabe, y no transliterada, salvo en las notas a pie de página, cuando son referencias tomadas de otras obras y estas así las dan.

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL RÉGIMEN NASERISTA

Puede resultar sorprendente en primera instancia que para centrarnos en el análisis del régimen de Hosni Mubarak, que se desarrolló entre las dos últimas décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI (1981-2011), comencemos con una exposición de hechos históricos que se remonta hasta principios del siglo XIX. Sin embargo, son varias las razones que nos han llevado a incluir dicha exposición en estas páginas.

En primer lugar, el carácter dialéctico del proceso histórico y político que se ha producido en Egipto en los últimos doscientos años nos parece evidente. El régimen de Mubarak procedía, por mediación del de Sadat (1970-1981), del régimen de Násir (1952-1970), y mantenía muchos de los rasgos característicos de este, pese a los sustanciales cambios introducidos en diversos terrenos por Sadat y Mubarak respecto al régimen matriz. Por decirlo brevemente en estas primeras páginas: más allá de las continuidades estructurales de fondo que con él mantuvo, el régimen de Mubarak buscó conservar en la medida que pudo la legitimidad del régimen naserista, o no se atrevió a contestarla totalmente. A su vez, la legitimidad del régimen naserista, principalmente de origen nacionalista y socioeconómico, se había construido sobre todo por contraposición a ciertos elementos políticos, económicos y sociales que habían dominado el pasado de Egipto desde mediados del siglo XIX. La gran caudal de legitimidad del régimen naserista, que revirtió en sus sucesores al mismo tiempo que se convertía en un marco restrictivo para ellos, es el principal factor que aconseja recordar dichos elementos de un pasado tan lejano.

Subyacente en la cuestión de los regímenes, se encuentra la cuestión del Estado. Pese a que Egipto conoció una de las entidades paraestatales más antiguas ya en tiempo de los faraones, hace aproximadamente seis mil años, y pese a que desde entonces conservó una continuidad excepcional en cuanto "comunidad nacional" sobre un territorio bien

delimitado, el Estado egipcio propiamente dicho es relativamente joven, pues sus los inicios de su construcción se remontan tan solo a principios del siglo XIX. No obstante, su configuración como Estado nacional, en el sentido más amplio de la palabra, es bastante más tardía y singular. Únicamente a partir de 1952, tras el acceso al poder de Náser y los Oficiales Libres, puede decirse con total propiedad que fueron egipcios quienes gobernaron el país. Hasta entonces, y desde principios del siglo XIX, los egipcios se habían ido incorporando progresivamente al aparato del Estado y a sus puestos de dirección, de los que anteriormente, durante cientos de años, se habían visto excluidos.

Es cierto que en la primera mitad del siglo XX fueron egipcios quienes ocuparon la mayor parte de los puestos del Gobierno y del aparato del Estado, y que Egipto accedió en 1922 a la independencia formal, liberándose del gobierno directo de sus asuntos por Gran Bretaña y constituyéndose en una monarquía que adoptaría una forma constitucional y parlamentaria. Sin embargo, las decisiones últimas en todos los terrenos seguiría tomándolas un rey considerado extranjero, apoyado y tutelado por Gran Bretaña, y aliado con unas clases sociales minoritarias pero hegemónicas, en las que los elementos de origen extranjero eran asimismo muy importantes. La hegemonía política de dichas clases era resultado de la estructura socioeconómica del Estado precolonial y colonial, dominado por los grandes terratenientes y las clases derivadas de ellas, la alta burguesía industrial y comercial.

El régimen naserista promovió el acceso exclusivo de los egipcios a los más altos puestos del Gobierno y su incorporación masiva al aparato del Estado, que conoció un gran desarrollo cuantitativo y cualitativo, incluyendo un sector industrial y un aparato informativo y cultural. El Estado también cambió en sus apoyos socioeconómicos, a la par que lo hacía en sus fines y objetivos: los grandes terratenientes perdieron gran parte de sus posesiones y su poder político como clase, ocupando su lugar la burguesía agrícola media y las clases medias de los sectores profesionales que habían comenzado a emerger un siglo antes y que habían promovido el nacionalismo (funcionarios, militares, profesores, profesionales liberales, estudiantes). Por otro lado, las clases populares (obreros, campesinos, asalariados en general) recibirían una novedosa atención y cuidado de parte del Estado, y su ascensión social sería favorecida por la política educativa. La historia de Egipto de mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX es en gran parte la historia de la formación de dichas clases, y de ahí el interés de recordarla.

En el terreno político formal, o desde una perspectiva técnica, el régimen legado por Náser a su muerte en 1970 era muy diferente al existente 20 años antes, y se había configurado, como hemos apuntado, por oposición a él. El cambio comenzó por la forma del Estado, que pasó de ser monárquico a republicano, y continuó por el sistema político, que abandonó el parlamentarismo pluripartidista. Bajo la monarquía, dicho sistema no

había resultado en una alternancia política real derivada de las elecciones, a pesar de que estas se celebraran con una cierta regularidad y limpieza, y manifestaran las aspiraciones nacionalistas y de cambio social de la mayoría. Al amparo del pluripartidismo se configuraron, sin embargo, las corrientes políticas e ideológicas que presidirían la vida política durante resto del siglo XX, aunque gran parte de ellas fueran reprimidas, sojuzgadas o cooptadas, según los casos y las circunstancias. Desde un punto de vista ideológico y propagandístico, el régimen naserista se construyó en gran parte sobre el recuerdo del pasado, de la larga lucha nacionalista y de las injusticias sociales, y sobre la descalificación de las fuerzas sociales y políticas y del sistema político que, a ojos de dicho régimen y de buena parte de la población, no habían sido válidos para alcanzar los objetivos nacionalistas y sociales. Apoyándose en ese argumento, el régimen naserista condenó a esas fuerzas y a ese sistema al ostracismo.

El régimen de Sadat en sus últimos años (1976-1981), y el de Mubarak a todo lo largo del mandato de este, permitirían que las corrientes políticas reprimidas por el naserismo retornaran a una cierta actividad política -diferente en cada caso en cuanto a su aceptación formal en el sistema-, en el marco de un parlamentarismo pluripartidista aún más limitado que el de la primera mitad del siglo XX. Y es muy significativo que desde finales de los 70 hasta finales del siglo XX, ya fuera por las restricciones del poder, ya por sus propias inclinaciones, todas las fuerzas políticas se definieran por su relación con el pasado. Es decir, tanto los partidos legales como las fuerzas políticas no legales -aunque consentidas- se caracterizaban en primer lugar por su posicionamiento respecto al pasado: las denominaciones, los programas y, en la mayor parte de los casos, incluso sus dirigentes entroncaban directamente con las corrientes y organizaciones nacidas a lo largo del siglo XX. Esta es otra razón por la que nos parece conveniente volver sobre el pasado, no solo por su dimensión objetiva, sino también por su dimensión subjetiva, en la medida en que la subjetividad interviene en la configuración de los hechos y los procesos históricos.

Finalmente, hay un gran número de características del pasado de Egipto de los últimos 150 años que se han repetido hasta fechas recientes, desde el papel decisivo del Ejército en ciertos momentos hasta los movimientos-levantamientos "irresistibles" de masas que se imponen a los gobernantes autocráticos tras largas etapas de aparente y sorprendente estabilidad, pasando por el singular papel político de la prensa y los medios de comunicación, la ocasional preponderancia de los líderes carismáticos o el flujo y reflujo de las corrientes llamadas "islamistas".

2.1 LOS INICIOS DEL SISTEMA ESTATAL MODERNO Y DE SU NACIONALIZACIÓN HASTA LA COLONIZACIÓN (1805-1919)

2.1.1 La conformación del sistema estatal y su primera nacionalización

Prácticamente desde la época de los faraones, el gobierno de Egipto estuvo en manos de élites no indígenas. Los invasores, los imperios y las dinastías gobernantes se sucedieron hasta el siglo XIX con una constante: las élites militares y administrativas estaban siempre en manos de extranjeros. Aunque algunas épocas del periodo islámico egipcio pudieran escapar relativamente a esta generalización, en cualquier caso es válida al menos desde el siglo XIII, desde la instauración del sultanato mameluco. Los funcionarios-militares del “sistema mameluco”⁴ gobernaron Egipto en exclusiva hasta comienzos del siglo XIX, sin que a los egipcios les fuera permitido siquiera formar parte realmente de los más bajos escalafones del Ejército⁵. En la época otomana (siglos XVI-XVIII) esta situación se vio acentuada por el particular alejamiento de Egipto de un sistema de gobierno que guardara cualquier parecido, siquiera remoto, con una organización estatal, ya que desde el siglo XVII fue gobernado con gran autonomía del poder central otomano por los regimientos otomanos y los beys mamelucos, permanentemente enfrentados entre ellos y solo preocupados, en cuanto a la administración del país, por la extracción de impuestos (Hathaway 1998: 34-58; Crecelius 1998: 59-86; Holt 1968: 79-90; Haarman & Philipp 1998).

Durante el gobierno de Mohammed Ali (1805-1848), gobernador de Egipto con un amplio margen de autonomía bajo soberanía otomana, la situación cambió estructuralmente en algunos aspectos y seminalmente en otros. Mohammed Ali construyó un gran Ejército, una administración amplia y eficaz, y un importante tejido industrial orientado a sus necesidades militares y financieras, recuperando el antiguo papel del Estado en la promoción de la agricultura (a través del desarrollo de las infraestructuras, sobre todo de riego), organizándola, controlándola y orientándola hacia la exportación, de la misma

⁴ No nos referimos solo a la época del sultanato mameluco, entre los siglos XIII y XV, sino también, y muy en particular a la pervivencia y reemergencia del sistema de poder mameluco en el periodo otomano. Para el concepto de “sistema mameluco” véase Ayalon (1996).

⁵ Formalmente, esto no era exactamente así, ya que desde finales del siglo XVI los comerciantes y artesanos acomodados entraron a formar parte, sobre el papel, de los regimientos otomanos (*ocak*). No obstante, esta adscripción *pro forma* solo tenía como objetivo lograr la protección de dichos regimientos bajo el sistema semimafioso de la *حماية* (“protección”), del cual tanto los regimientos como los mamelucos obtenían la mayor parte de sus fuentes de ingresos gracias a las cuotas que les pagaban comerciantes y artesanos. Estos nunca realizaron servicio militar alguno y, por otro lado, esa práctica estaba estrictamente prohibida por el sultán otomano (Raymond 1973: 658-671, 688-692 y 702-203).

manera que estimuló y controló el conjunto del comercio. La empresa de Mohammed Ali fue moderna en muchos sentidos: llevó a cabo un proceso de centralización de la gestión y el control últimos de los recursos del país en torno a una entidad que ya cabría calificar de estatal; emprendió un proceso de acumulación de capital a partir de los recursos de la agricultura y los invirtió en la industria y el comercio, tomando asimismo medidas de sustitución de las importaciones para controlar la balanza de pagos del país; y, finalmente, creó un sistema educativo estatal para satisfacer las necesidades de su empresa. Este sistema educativo nació, en primer lugar, de la importación del saber técnico de los países europeos y, posteriormente de su difusión entre los egipcios. Este proceso es bien conocido: empezó con el envío de misiones de estudio a dichos países y la importación de expertos y técnicos en todos los ámbitos necesarios, y avanzó definitivamente con la creación de escuelas estatales, de modo que a mediados de los años 30 del siglo XIX los directores de las escuelas eran egipcios y la inmensa mayoría de los alumnos también.

La gran labor de construcción estatal de Mohammed Ali habría sido imposible sin la participación de los egipcios, a los que atrajo al aparato del Estado. El primer escalón fue el Ejército, que pasó a conformarse, al nivel de los soldados rasos, por conscripción obligatoria. Este primer ingreso de los egipcios en el aparato del Estado para ser carne de cañón constituía un dudoso privilegio, del que los campesinos huían como de la peste⁶. Sin embargo, aunque los más altos cargos del Ejército siguieron en manos de las élites de origen otomano, sobre todo turco o circasiano, hacia el final del mandato de Mohammed Ali se permitió que los hijos de algunos pequeños propietarios rurales se convirtieran en oficiales de grado medio y medio-alto. Una egipcianización más auténtica se produjo en el sector de la administración, hasta el punto de que en los años 30 del siglo XIX, como señala Al-Sayyid Marsot (1985: 60):

“Los funcionarios, desde el puesto de subgobernador de provincia para abajo, eran todos egipcios nativos. Solo los gobernadores de provincia siguieron siendo otomanos, y esto cambiaría con la generación siguiente. Por primera vez, los egipcios se convirtieron en parte activa de la administración y no fueron relegados a la mera posición de secretarios y tenedores de libros”.

La expansión y el desarrollo del aparato del Estado no solo propiciaron el

⁶ Los campesinos egipcios intentaban huir de la conscripción por todos los medios posibles a causa de las penurias de la guerra, la dureza de los oficiales turcos y circasianos, y sobre todo de los perjuicios económicos, más que ventajas, que les acarreaba: apenas eran remunerados por su servicio militar y, sin embargo, dejaban desasistidas a sus familias. Es bien conocido que la auto-amputación de los dedos más útiles para empuñar las armas era una práctica habitual entre los campesinos egipcios para evitar la leva forzada, aunque cuando aquella táctica comenzó a ser detectada y comprendida, fue castigada con la pena de muerte.

nacimiento de nuevas clases sociales definidas por su estatuto funcional administrativo, técnico o militar, también abrieron las puertas al nacimiento de una nueva clase intelectual, que obtendría sus medios de subsistencia del empleo en escuelas, en los organismos de traducción y en los nacientes medios de prensa, todos ellos estatales por aquel entonces. Es bien sabido que la inmensa mayoría de quienes accedieron a ese tipo de empleos, y a la formación previa que iba aparejada, habían tenido una formación inicial religiosa tradicional. Pero es menos sabido, e igualmente importante, que, según demuestran los estudios que se están llevando a cabo desde hace solo un par de décadas, en el siglo XVIII había en Egipto -principalmente en El Cairo- una actividad cultural e intelectual mucho mayor de lo que se venía considerado hasta casi el final del siglo XX, e incluso que dicha actividad habría generado la emergencia de intelectuales auténticamente modernos, definidos por su individualidad, su originalidad y su distanciamiento de los modos de pensar dominantes entre los intelectuales religiosos de la época que, por otro lado, también desempeñaban funciones de reflexión sobre los asuntos sociales y políticos, de mediación y de liderazgo (Hanna 2003). Sin embargo, aquí hablamos de “nueva clase intelectual” en varios sentidos. En primer lugar, en el que se deriva de su adscripción profesional y de la nueva autonomía e intereses a la que aquella les abocaba: por un lado, la dependencia económica del Estado suponía independencia de las instituciones tradicionales (religiosas y económicas) que antes permitían el trabajo intelectual; por otro, el trabajo dentro del aparato del Estado y para el Estado reconfiguraba las preocupaciones de los individuos, orientándolos a pensar en la comunidad (que antes era social o religiosa) de otra manera. En segundo lugar, los nuevos saberes adquiridos del exterior, que se exigían para los empleos profesionales e intelectuales estatales, ampliaban el campo de visión y modificaban el pensamiento. En tercer lugar, la imprenta y la prensa daban una nueva resonancia social a los “productos” de estos nuevos intelectuales.

El mandato de Mohammed Ali pondría las semillas para el nacimiento de esta nueva clase intelectual, que encontraron personificación en casos individuales como el de Rifaat Rafii al-Tahtawi (1801-1873). Pero la labor de promoción de la prensa relativamente independiente y libre del jedive Ismael (g.1863-1879) y de los emigrados sirios y libaneses le daría un empuje definitivo.

2.1.2 La aparición de la propiedad privada de la tierra. El germen de una clase social durante largo tiempo hegemónica

Cuando se destaca la labor pionera de construcción estatal llevada a cabo por Mohammed Ali, no siempre se recuerda uno de los aspectos del tipo de Estado para el que puso la primera piedra, a pesar de las importantísimas consecuencias económicas, sociales

y políticas que tuvo durante los cien años siguientes. Nos referimos a la instauración de las primeras formas de propiedad privada de la tierra y a la concentración de grandes cantidades de esta en pocas manos.

Los grandes propietarios agrícolas conformarían la clase social y política hegemónica del Estado egipcio desde que, pocas décadas después de adquirir su condición de tales, tomaron consciencia de clase, imponiéndose una y otra vez en el gobierno del país, sometidos o no a la potencia colonial británica, hasta el acceso al poder de los Oficiales Libres en 1952. De los propietarios agrícolas, grandes, medianos o pequeños, surgirían asimismo las nuevas clases sociales, militares, profesionales e industriales, que apoyarían o contestarían con el paso del tiempo la hegemonía de los grandes propietarios. Por otro lado, a raíz de las grandes desigualdades derivadas de la propiedad o no de la tierra, y sobre todo de su gran concentración en pocas manos, con la desposesión y el éxodo de los campesinos que acarrearía, se plantearía políticamente por primera vez “la cuestión social” como objeto político en Egipto. En pocas palabras: la propiedad privada de la tierra y su distribución determinaron la evolución del Estado egipcio y sus políticas hasta mediados del siglo XX, e incluso después por reacción negativa a esa realidad.

Antes del gobierno de Mohammed Ali, toda la tierra de Egipto pertenecía al sultán o al Imperio Otomano, mientras que a su tenencia accedían por igual todos los campesinos con su trabajo. Hasta que en 1842 Mohammed Ali comenzó a autorizar formas limitadas de propiedad y a entregarla a particulares a cambio de servicios, el sultán otomano se limitaba a obtener beneficios fiscales de ella a través de diversos regímenes de concesión, el más extendido de los cuales era, a finales del siglo XVIII, el التزام (*iltizam*, “compromiso”)⁷. En el marco del *iltizam*, como en el del resto de las figuras de concesión, la tenencia en sí de la tierra la disfrutaban los agricultores que la trabajaban, y el *iltizam* propiamente dicho consistía en la asignación por el sultán de territorios de los que los concesionarios, los *multazim* (ملتزم), que en un principio fueron oficiales mamelucos o jeques tribales (شيوخ العرب), podían extraer vía impuestos todos los beneficios de los que fueran capaces a cambio del compromiso de entregar a su vez una cantidad fija por concesión a la administración otomana. En los primeros tiempos de los *iltizam*, las concesiones eran atribuidas solo temporalmente, no podían ser transmitidas por sus beneficiarios. Sin embargo, posteriormente un gran número de ellas fueron convertidas legalmente por las autoridades otomanas en *malikāne*, en concesiones hereditarias. Esto abrió la puerta a que algunos mamelucos vendieran sus *iltizam* a quienes podían pagarlos, es decir, a los comerciantes (egipcios o extranjeros), a los ulemas adinerados y a algunos notables rurales

⁷ Para una visión general y sintética de la evolución a lo largo del periodo otomano de las modalidades de tenencia de la tierra y del sistema impositivo aplicado a ellas se puede consultar Shaw (1968: 91-103).

(أعيان الريف). De esta manera, aunque formalmente siguiera sin existir la propiedad privada de la tierra, en el siglo XVIII aquella se convirtió progresivamente en un bien cuyos beneficios podían ser comprados, vendidos y transmitidos por herencia.

Sin embargo, la instauración por Mohammed Ali de las primeras formas de propiedad privada de la tierra no fue consecuencia de esta evolución económica y social. Es decir, esta evolución no se impuso al gobernante sino que, por el contrario, Mohammed Ali recuperó en un principio el control del Estado sobre los recursos agrícolas, aboliendo en 1809 el sistema de *iltizam* y entregando tierras para que las explotaran -bajo diversas figuras legales y conservando el Estado la propiedad- a miembros de su familia, jefes militares, altos funcionarios, antiguos *multazim*, notables de los pueblos, jefes tribales beduinos y, en pequeñas cantidades, campesinos corrientes. No fue hasta 1842 cuando Mohammed Ali permitió la plena propiedad de la tierra a los grandes propietarios, y en 1846 autorizó para el resto de las tierras operaciones como la cesión a terceros y la hipoteca, acercándose con ello a la privatización de la tierra. Este proceso continuaría a lo largo del mandato de sus sucesores para concluir en los primeros años de la ocupación británica (Abdel Malek 1962: 59-63).

En 1845, a finales del mandato de Ali, los grandes propietarios agrícolas podían dividirse, según Al-Sayyid Marsot (1985: 60), en tres grupos: el propio Mohammed Ali y su familia, que tenían el 18,8% de las tierras; un grupo de grandes propietarios que eran a su vez altos funcionarios de la administración u oficiales del Ejército, y entre los que hay que distinguir los que pertenecían a las élites turco-circasianas y los que eran de origen autóctono (que habían accedido por primera vez al aparato del Estado bajo el mandato de Ali, y entre los que se contaban algunos coptos); y, finalmente, algunos notables rurales y jefes tribales beduinos. Este paradigma de la distribución de la tierra entre los grandes terratenientes (con el muy importante peso dentro de él de las tierras reales y de las élites turco-circasianas, que eran consideradas por los egipcios y se consideraban a sí mismas “no egipcias”), se mantendría hasta 1952, si bien la concentración de la tierra en pocas manos no dejaría, como veremos, de incrementarse.

2.1.3 El primer precedente nacionalista: la revuelta del coronel Orabi

El mandato del jedive Ismael (1863-1879) fue otro de los periodos clave de la evolución del Estado egipcio en el siglo XIX. Nieto de Mohammed Ali⁸, Ismael es

⁸ Ismael accedió al gobierno de Egipto como والي (“gobernador”) de la provincia otomana que Egipto era, en tanto que varón de mayor edad de la descendencia de Mohammed Ali, y no en tanto que hijo mayor del anterior gobernador, aunque su padre, Said, lo hubiera sido de hecho. Es decir, los hermanos del gobernante

recordado principalmente por haber arrastrado a su país al endeudamiento, la bancarrota, y la intervención directa de las potencias extranjeras en el gobierno de Egipto. Sin embargo, Ismael aportó a Egipto otros elementos que serían semilla de procesos no menos duraderos que la sumisión del país a la potencia británica.

Ismael adoptó con entusiasmo el proyecto francés, ya aceptado por su padre Said, de construir el Canal de Suez, que sería inaugurado en 1869, de la misma manera que emprendió una enorme cantidad de obras públicas (y también privadas). Para ello había conseguido la autorización previa del sultán otomano para solicitar préstamos de Estados y particulares extranjeros, que le sería revocada tras la inauguración del Canal, cuando la situación del Estado egipcio se acercaba ya a la bancarrota. Pero más que a la bancarrota, el sultán temía las crecientes relaciones del jedive con Francia y sus veleidades independentistas. En 1866, Ismael, que había pasado largas temporadas en Europa antes de acceder al poder, había creado un órgano sin precedentes: la Asamblea Consultiva de Delegados o Diputados (مجلس شورى النواب), un órgano representativo consultivo sin poder legislativo, cuya instauración, acompañada de la de un consejo de ministros, se suele atribuir a la querencia de Ismael por las instituciones y procedimientos europeos y, sobre todo, al objetivo de contar con un cierto apoyo social frente al sultán otomano. La representatividad de la Asamblea era reducida en términos cuantitativos y técnicos, pero importante en la medida en que reunía a las clases económicas más poderosas, siendo sus diputados en su mayor parte grandes propietarios agrícolas, junto a algunos comerciantes y artesanos⁹. La trascendencia histórica de esta asamblea se deriva, más que de una instilación desde arriba de cualquier idea de parlamentarismo o democracia, como a veces se deduce de algunas lecturas idealistas de la historia egipcia, del hecho de que, por primera vez, las clases económicas superiores surgidas en el Estado promovido por Mohammed Ali se reunieron y se reconocieron como clase social y como un poder político, al mismo tiempo que eran reconocidas como tal por el jedive.

Entre 1871 y 1876, el jedive Ismael adoptó una serie de medidas económicas que serían fatales para su permanencia en el poder. En 1874 hizo obligatorias las disposiciones

tenían hasta entonces prelación sobre los hijos de aquel si los aventajaban en edad. Sin embargo, Ismael consiguió del sultán otomano en 1866 el cambio de las normas de sucesión en favor de sus hijos, al mismo tiempo que obtuvo el título real de “jedive”.

⁹ La Asamblea se elegía por sufragio indirecto, según el cual los electores elegían a una serie de electores delegados, que a su vez elegían a los 75 miembros de la Asamblea. Las normas de elegibilidad para la Asamblea exigían que se satisficiera una determinada cantidad de dinero en impuestos, además de excluir al personal de la Administración y del Ejército. La mayoría de los electos fueron siempre *omad* (عمد, alcaldes o jefes de los pueblos), una figura que hasta entonces había representado más al poder central ante los pueblos que a la inversa, y que inevitablemente era ocupada por un gran terrateniente. Martín Muñoz (1992: 26-29) señala el porcentaje que constituían los *omad* entre el conjunto de los delegados de la Asamblea elegida: en 1866 fue del 77'3%, mientras en 1870 y 1876 sería, respectivamente, del 85'3% y el 70'6%. La mayor parte del resto de los diputados eran comerciantes o artesanos (Vatikiotis 1991: 128).

de la Ley de la Muqabala (مقابلة), promulgada en 1871 y que establecía la posibilidad de que los terratenientes pagaran por adelantado el equivalente de sus impuestos de seis años a cambio de una reducción del 50% de dichos impuestos en los años siguientes. La medida le acarreó la desafección de los propietarios agrícolas, y no sirvió para aliviar la situación financiera de Ismael, que en 1875 se vio obligado a vender sus acciones en la Compañía del Canal de Suez a Gran Bretaña, convirtiendo a esta en el principal accionista de la empresa. Esto tampoco fue suficiente para solucionar el problema de la deuda, por lo que en 1876 Ismael se vio obligado a aceptar el control de las finanzas egipcias por un representante británico y otro francés, al mismo tiempo que se fundaba la Caisse de la Dette, una agencia en la que estaban representados todos los Estados acreedores, y que recibiría directamente gran parte de los ingresos del Estado. En 1877, el 60% de dichos ingresos era directamente destinado a pagar el servicio de la deuda. En 1878, Ismael tuvo que aceptar la presencia de un ministro británico y otro francés en su Gobierno.

Aunque el mayor peso del pago de la deuda acababa recayendo en los campesinos, el descontento por la situación creada fue agitado principalmente por los terratenientes y los políticos representados en la Asamblea, que buscaron encauzarlo a través de la formación de sociedades secretas, del naciente poder de la prensa -fomentado por Ismael-, y de la emergencia de otro grupo socioeconómico más auténticamente nacional y de reciente formación: los militares autóctonos.

La política de permitir el acceso de los egipcios a los rangos medios y medio-altos del Ejército se había fomentado desde la época de Mohammed Ali y a través de sus sucesores. Sin embargo, el jedive Ismael la frenó y mantuvo en los altos puestos de mando a las antiguas élites militares turco-circasianas, que llamaban a sus compañeros indígenas *fallahín* (الفلاحين, campesinos). Los militares egipcios disfrutaban de peores condiciones que sus compañeros de origen foráneo, y aunque entre ellos se contaban un par de coroneles constituían el grueso de la tropa. Cuando el 18 de febrero de 1879 Ismael redujo los sueldos de 2.500 oficiales egipcios a la mitad con el fin de reservar más recursos para sus obligaciones crediticias, el descontento de los militares estalló en una asonada, liderada por el coronel Ahmad Orabi, que sería el comienzo de un periodo de tres años de intervención del Ejército en la política.

Las demandas de Orabi y sus partidarios pasaron pronto de ser corporativas a exigir el control presupuestario del Gobierno del jedive Taufiq (1879-1892), sucesor de Ismael, y posteriormente llegaron a demandar una Constitución, cambios en el Gobierno y su participación en él hasta, incluso, el fin del control extranjero de las finanzas egipcias. Como hemos dicho, el movimiento fue apoyado, y probablemente financiado, por los terratenientes, de cuyas familias provenían en última instancia los oficiales egipcios. Sin embargo, también fue apoyado por parte de los políticos de la Asamblea (disuelta en 1879

por Taufiq) y del Gobierno (aunque algunos acabaran enfrentándose a él), y por un grupo de jóvenes intelectuales, gran parte de los cuales trabajaban como periodistas, que habían sido influenciados por las ideas reformistas y nacionalistas de Yamal al-Din al-Afgani, instalado en Egipto entre 1871 y 1879. Finalmente, en los momentos decisivos previos a la confrontación armada con Gran Bretaña el 13 de septiembre de 1882, grandes masas de campesinos apoyaron la “revuelta” o la “revolución” de Orabi, según interpretemos los hechos, y según optemos ante la conocida ambivalencia de la palabra ثورة en árabe (aunque hay que señalar que con posterioridad, cuando los egipcios la utilizan, se refieren inequívocamente a “la revolución”, asunto sobre el que volveremos más adelante).

Probablemente, cada uno de los sectores socioeconómicos implicados en la revuelta de Orabi (terratenientes, militares, políticos, intelectuales y campesinos) buscó, en gran parte, defender sus intereses económicos y/o políticos. Sin embargo, fueran cuales fueren las motivaciones de los diversos actores, lo cierto es que aquella fue la primera ocasión desde hacía cientos, si no miles de años, en que egipcios indígenas intentaron tomar en sus manos el gobierno del país, en que su líder pretendió hablar “en nombre del pueblo”¹⁰, y en que partidarios y detractores del bando rebelde utilizaron la expresión “el partido nacional” (الحزب الوطني) para referirse a aquel (aunque bien entendido que lo hicieron en la acepción original de “partido” como “conjunto de personas que siguen o defienden una misma opinión o causa”, presente también en castellano en aquella época). Asimismo, los años previos a la ocupación británica conocieron las primeras reivindicaciones constitucionalistas, parlamentarias y de limitación del poder del máximo gobernante, aunque fuera en la mayor parte de los casos con el objeto de que sirvieran a los intereses mencionados y no a causa de la difusión de ideas relacionadas con cualquier concepto de “democracia”.

2.1.4 El gobierno colonial directo y sus consecuencias económicas y sociales

El periodo de gobierno directo de Egipto por Gran Bretaña (1882-1922), tras la ocupación del país que siguió a la derrota de las fuerzas de Orabi en la batalla de Tel al-Kabir, vino a reafirmar algunos rasgos esenciales del Estado que Mohammed Ali había comenzado a configurar bajo su mandato (1805-1848), si bien con una impronta muy distinta.

El poder absoluto de la dinastía gobernante quedó entre paréntesis bajo la férula del primer cónsul general británico, que gobernaría efectivamente el país tras la fachada de los

¹⁰ Así lo pretendió al menos Orabi en su primera proclama tras ser liberado de prisión por su regimiento en 1880 (Al-Sayyid Marsot 1985: 72).

sucesivos jefes y consejos de ministros locales. Sir Evelyn Baring, posteriormente nombrado Lord Cromer, se aplicó con mano de hierro a equilibrar las cuentas del Estado y a recuperar su solvencia pagadora. Garantizar el pago de las deudas contraídas por el jefe Ismael con los acreedores europeos había sido la razón esgrimida primero para intervenir las cuentas del país y luego para ocuparlo. Sin embargo, una vez conseguido este objetivo, en torno al cambio de siglo, la ocupación se mantendría para servir a los intereses británicos, el principal de los cuales, aunque no el único, era el dominio sobre el Canal de Suez y sobre las comunicaciones con el Océano Índico.

El mandato de Lord Cromer (1883-1907) tuvo consecuencias mayores para la estructura económica y socioeconómica de Egipto. Su principal política económica fue garantizar que el grueso de los recursos productivos se dirigiera a la producción de algodón y a su exportación, para lo que llegó a prohibir algunos cultivos igualmente tradicionales y rentables, como el tabaco. El objetivo declarado de esa política era, como hemos señalado, conseguir liquidez para satisfacer las deudas egipcias, pero llevaba aparejado el aprovisionamiento de algodón a la industria textil británica de Lancashire en condiciones muy ventajosas, y la privación de él para la industria local. De cualquier manera, fueran cuales fueran las principales intenciones británicas, el resultado para Egipto fue la conversión del país en un gigantesco monocultivo, el abandono de otras producciones agrícolas y la destrucción de la industria local. Mohammed Ali también había promovido el desarrollo de la agricultura, había puesto su producción bajo el control del Estado y la había orientado hacia la exportación a la industria europea, pero lo había hecho atendiendo a las diversas demandas de aquella y, sobre todo, a su objetivo principal de acumular capital para destinarlo a la construcción de un Estado poderoso, proyecto que incluyó el desarrollo de un aparato industrial estatal. Algo similar puede decirse del jefe Ismael, que, si bien había prestado una especial atención al desarrollo de la producción de algodón y a su exportación, alentado por la subida de los precios mundiales originada por la Guerra Civil norteamericana, no había descuidado otros cultivos, como el ya mencionado del tabaco o la caña de azúcar, para cuya transformación desarrolló una industria que contó con al menos catorce nuevas factorías (Vatikiotis 1991: 79-80).

Aunque algunos autores, principalmente británicos, han hecho un balance muy positivo, e incluso entusiasta, de las políticas de Cromer¹¹, en el terreno de la destrucción de la industria no cabe ninguna duda de sus “logros”, como señalaba el propio Cromer en su Informe de 1905:

“La diferencia es evidente para cualquiera cuyos recuerdos se remonten a diez o quince años atrás. Los barrios [de El Cairo] que antes eran auténticas colmenas de

¹¹ P.J. Vatikiotis (1991: 169-178) es uno de estos “entusiastas” de la labor de Cromer, y quien señala la apreciación en general positiva de los historiadores británicos.

industrias diversas: hilaturas, tejido, trenzado, fabricación de cintas, tintes, fabricación de jaimas, bordados, repujado de cobre, zapatería indígena, orfebrería, trituración de especias, peleterías, fabricación de sillas, de cedazos, de cerrajerías, etc. han encogido considerablemente o han desaparecido. Cafés o pequeñas tiendas de baratillo europeas se encuentran hoy donde antes había talleres prósperos”¹².

La política económica de Cromer tuvo también consecuencias mayores sobre la estructura socio-económica de Egipto. Además de destruir las pequeñas industrias mencionadas, con la consiguiente generación de desempleo, favoreció la ya muy considerable concentración de la propiedad de la tierra y la consiguiente desposesión y desempleo de un gran número de campesinos. Los historiadores británicos que han estimado favorablemente la labor de Cromer señalan, según Vatikiotis (1991: 177), que aquel “consiguió logros impresionantes en la irrigación y las obras públicas (...), y ayudó a los campesinos egipcios a liberarse de los excesos del despotismo oriental y de las cargas de su tradicionalmente proverbial miseria”. Sin embargo, dejando a un lado las “impresionantes obras de irrigación”, que también realizaron Mohammed Ali, Ismael, y cualquier otro gobernante anterior que deseara sacar el mayor partido económico al país para destinarlo al objetivo que fuera, la situación de los campesinos bajo el mandato de Cromer fue muy diferente a la mencionada si seguimos el análisis de Al-Sayyid Marsot, quien ha señalado que los pequeños agricultores vieron alterado su tradicional modo de vida al ser materialmente incapaces de adaptarse a una agricultura que necesitaba de excedentes de capital, por lo que se vieron endeudados hasta perder, en muchos casos, sus tierras. Ello dio pie a un fenómeno nuevo: la aparición de continuos actos de bandolerismo y violencia que hicieron desaparecer la tradicional seguridad de los caminos de Egipto, “un fenómeno que Cromer y su Administración nunca consiguieron entender” (Al-Sayyid Marsot 1985: 78).

En el otro extremo de la pirámide socio-económica, los grandes terratenientes vieron fortalecida su hegemonía por medio del incremento de la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, alentada por los pingües beneficios que aquella reportaba. La unidimensionalidad de la orientación económica de Egipto y esta evolución de la distribución de la propiedad de la tierra tendrían consecuencias mayores para el futuro de la evolución política de Egipto: los grandes propietarios agrícolas, aliados económicos de Gran Bretaña y de Palacio, no presentarían la menor oposición a Cromer, y tras la independencia se convertirían también en la clase hegemónica en política hasta 1952, fecha del golpe de Estado de los Oficiales Libres liderados por Násir. Como puede observarse en

¹² Rapport de Lord Cromer sur L'Égypte et le Soudan pour l'année 1905, El Cairo, 1906, pág.117. Citado por Abdel Malek (1962: 20-21).

el gráfico siguiente tomado de Abdel Malek (1962: 64), que nos da información a partir de la segunda mitad del mandato de Cromer hasta 1952, el proceso de concentración de la propiedad agrícola se mantuvo constante:

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA 1894-1952. PORCENTAJE DE LA TIERRA
TOTAL ACUMULADA POR DISTINTOS PORCENTAJES DE PROPIETARIOS

Año	% propietarios	% de tierras	% propietarios	% de tierras	% propietarios	% de tierras
1894	83,3	21,7	15,4	34,3	1,3	44
1914	91,3	26,7	8,5	30,4	0,8	43,9
1930	93,1	33,6	6,3	29,7	0,6	38,7
1952	94,3	35,4	5,2	30,4	0,5	34,2

Para interpretar correctamente esta tabla sería necesario añadir una serie de factores, como el constante incremento de la superficie cultivable y de la superficie cosechada¹³; el enorme aumento de la población¹⁴ y el más modesto del número de propietarios totales; y, finalmente, las divisiones que se podrían realizar dentro de cada grupo de propietarios. No obstante, creemos que la tabla anterior es suficientemente reveladora como para dejar aquí, por ahora, la cuestión de lo que François Ireton (2011: 439) ha llamado “el antiguo régimen agrario” al que pondría fin la revolución de 1952.

2.1.5 El nacimiento de la prensa no estatal y de su papel político

Si la aparición de la imprenta permitió a un número creciente de individuos “independizarse” en el acceso a los escritos y a su interpretación, el desarrollo industrial de las técnicas de impresión y publicación, además de acelerar exponencialmente ese proceso, incrementó cuantitativa y cualitativamente las posibilidades de comunicación, intercambio y “comunitarización” de las ideas, en particular de las nuevas y de las personales, así como su uso político, lo cual influyó decisivamente en la propia formación de las comunidades

¹³ La superficie cosechada tiene en cuenta la medida en que determinadas tierras aportan más de una cosecha anual, gracias sobre todo a la irrigación perenne. Entre 1887 y 1917 la superficie cultivable paso de 4,7 a 5,3 millones de *feddanes* (un *feddán* egipcio equivale a 0,42 hectáreas), mientras que la superficie cosechable llegó hasta los 7,7 millones (Fargues 2011: 41-71).

¹⁴ La población de Egipto en 1846-1848 era, según el censo oficial, de 4,48 millones de personas. En 1882, el censo realizado por la Administración establecía una población de 6,83 millones, si bien esa cifra fue revisada en 1926 por Craig, que la situó en 7,55 millones. El censo de 1897 daba el dato de 9,7 millones de habitantes, cifra que ascendía a 11,1 millones en 1907, poco después del fin del mandato de Cromer, y a 12,7 millones en 1917 (Fargues 2011: 42-45).

políticas. En este sentido, como señala Benedict Anderson (1983: 40) cuando caracteriza la conformación de “comunidades imaginarias”, “la prensa permitió a un número rápidamente creciente de individuos pensar sobre sí mismos, y relacionarse con otros de maneras profundamente nuevas”. Y ese nuevo medio de comunicación, con sus características inherentes, lingüísticas, de accesibilidad económica e inmediatez, fue un elemento determinante, si no condición *sine qua non*, para el desarrollo del nacionalismo moderno y la aparición del Estado-nación, tanto en los países de Europa occidental como en otras latitudes, entre las que se encuentra Egipto.

No nos interesa discutir aquí, como hace Smith (1997: 607-622) con Gershoni y Jankowski, hasta qué punto la “cultura de la imprenta” contribuyó a recrear -o, en la terminología al uso, “imaginar” o incluso “inventar”- un nuevo tipo de nacionalidad egipcia, o, por el contrario, hasta qué punto sirvió para reforzar las concepciones tradicionales de la identidad en detrimento de las nuevas. Dejaremos de lado, a pesar de su evidente interés, las cuestiones relacionadas con los bien conocidos esfuerzos intelectuales para proveer al nacionalismo de (re-)construcciones identitarias diversas y opuestas desde finales del siglo XIX y durante la primera mitad del XX. Lo principal para el interés de este trabajo es destacar que el potencial político de la prensa impresa se manifestó de manera simultánea a su aparición en Egipto, que no pasó inadvertido a ningún actor político o social, y que contribuyó a crear, con la misma inmediatez, actores políticos y sociales de un nuevo tipo.

Si Mohammed Ali creó los primeros periódicos estatales con el mero objetivo de que sirvieran de correa de transmisión para la información relativa al Estado, el jefive Ismael, casi cuarenta años después, advirtió su potencial político-ideológico. En 1866 nació el primer periódico formalmente independiente, *Wadi al-Nil* (وادي النيل), que en realidad contó con el apoyo financiero de Ismael y conservó siempre una clara línea progubernamental. Tras el apoyo a este periódico, que nació casi al mismo tiempo que la Asamblea de Delegados, latía sin duda el mismo designio que tras la creación de aquella: crear una corriente de opinión entre “las fuerzas vivas” del país favorable a la independencia del jefive frente a Estambul y los británicos. Sin embargo, lo más trascendente de la política de prensa de Ismael es que se caracterizó por un liberalismo sin precedentes, pues permitió que a *Wadi al-Nil* le siguieran otros periódicos que no expresaban necesariamente sus puntos de vista, como *Al-Ahram* (الأهرام, prootomano y profrancés, en 1876), a los que se imponía una censura exclusivamente dedicada a defender la imagen del jefive y de su familia y a la monarquía en tanto que institución, si bien había que contar con la presencia de un censor otomano muy celoso de ahuyentar el fantasma del liberalismo político. *Al-Ahram*, como muchos otros medios de prensa, fue fundado por emigrantes sirio-libaneses cristianos que habían huido de la persecución

confesional en su país, aportando su saber hacer periodístico.

A través de la prensa, intelectuales y políticos ampliaron el círculo del debate y la difusión de los conocimientos y las ideas. Hasta el último cuarto del siglo XIX, esos intercambios se habían realizado únicamente en el seno de numerosas sociedades culturales, academias y organizaciones de estudios. La prensa permitió que escritores como Abdallah Nadim (1843-1896), Adib Ishaq (1856-1885) y Yaaqob Sanua (1839-1912), o eruditos musulmanes como el jeque Mohammed Abduh (1849-1905), por citar solo algunos de los más conocidos, agitaran las conciencias de los egipcios letrados con sus escritos acerca de la necesidad de reformas políticas, educativas y religiosas y contra la tiranía y la influencia extranjera en Egipto. Salvando las distancias entre ellos, todos contribuyeron a crear el caldo de cultivo para el levantamiento de Orabi, y para el resurgimiento, más de una década después, de las corrientes nacionalistas y constitucionalistas.

El jedive Taufiq (1879-1892) no compartió el liberalismo de Ismael, y creó la primera destinada a controlar la prensa en 1881¹⁵, ley que surtiría sus efectos causando estragos poco después: entre 1886 y 1891 hizo desaparecer 97 “periódicos políticos” (عمر 2002), lo que nos da una idea, además de sobre el peso de la censura, sobre el ritmo de la creación de medios en los años anteriores y sobre su politización.

Aunque en las dos últimas décadas del siglo XIX fueron varios los periódicos que cabría calificar de nacionalistas, nos interesa destacar aquí la fundación de *Al-Liwá* (اللقاء) a comienzos del siglo XX, ya que ilustra la aparición de un fenómeno al que ya hemos aludido: la precedencia de los periódicos respecto a los partidos políticos como aglutinantes de los movimientos sociopolíticos. *Al-Liwá* sería el medio en el que se expresaría Mustafa Kamil (1874-1908) desde 1900 hasta 1907, fecha en la que fundó el Partido Nacional (الحزب الوطني), recuperando la denominación del “partido” de Orabi. Kamil y su partido serían el referente de gran parte de los partidos nacionalistas de orientación panislámica pero con ribetes secularistas que se formarían décadas después. El Partido Nacional sería asimismo, por pocos meses de diferencia, el segundo partido fundado en Egipto. El primero sería حزب الأمة, denominado habitualmente Partido de la Umma en las lenguas distintas del árabe, aunque también la palabra أمة puede ser traducida por “nación”¹⁶. El Partido de la Umma también fue precedido por la creación de un órgano de prensa, *Al-Yarida* (الجريدة), y la actividad desarrollada por dicho órgano fue mucho más

¹⁵ Como señala L. Gómez García (1992: 70), habían existido previamente en Egipto otras reglamentaciones de las publicaciones impresas, pero éstas habían sido más técnicas y administrativas.

¹⁶ Sin embargo, se da la paradoja de que أمة, a diferencia de وطن, es un término muy frecuentemente asociado a la terminología islámica en el pasado y en el presente, vehiculando en este caso el sentido de “comunidad (islámica)”, mientras que el Partido de la Umma, cuya principal figura intelectual fue Ahmad Lutfi al-Sayyid, tenía una orientación mucho más secularista que el fundado por Mustafa Kamil.

importante que la del partido en sí. *Al-Yarida* y su principal figura intelectual, Lutfi al-Sayyid (1872-1963), aportaron al venero nacionalista racionalismo y una preocupación por las reformas profundas, que debían derivarse, en su opinión, de los intereses de la nación, del juicio equilibrado y objetivo, del aprovechamiento de las experiencias ajenas y, en última instancia, de la extensión de la educación.

En la mayor parte de las etapas de historia y la política egipcias en los siglos XIX, XX y principios del XXI, la prensa desempeñaría el papel de espacio político por excelencia, acompañando a veces -pero también substituyéndolos en la mayor parte de los casos, y esto es lo más significativo- a otros espacios, como la calle, los partidos u otras instituciones, según las circunstancias y las restricciones impuestas a aquellos por el poder. Para decirlo más explícitamente, la prensa -mucho más que el resto de los medios de comunicación modernos, a medida que estos se fueron desarrollando, hasta el siglo XXI- ha sido el medio de participación política (tanto en el sentido de “espacio” o “ámbito”, como en el de “instrumento” o “vehículo”) al que los distintos gobernantes y regímenes políticos de los siglos XIX y XX han consentido una mayor libertad de acción. Más adelante nos preguntaremos si este hecho no apunta, más allá de las circunstancias concretas de cada época, a una determinada concepción de los modos o sistemas de gobierno.

2.1.6 El germen de la burguesía nacionalista

A principios del siglo XX, el sistema educativo estatal iniciado por Mohammed Ali había recorrido un largo camino, a pesar de los hiatos que en él supusieron los mandatos de los jefes Abbas I (1848-1854) y Said (1854-1863), y el de Lord Cromer (1883-1907). El jefe Ismael había manifestado el mismo interés por la educación que su abuelo, creando el ancestro del ministerio de Educación, el denominado Consejo de las Escuelas (ديوان المدارس), expandiendo la red de escuelas primarias y secundarias y fundando la primera escuela para niñas en 1873. Asimismo había reanimado las abandonadas escuelas superiores de Medicina, Farmacia y Enfermería y creado numerosos centros de educación profesional superior y academias científicas. Por otro lado, reabrió la pionera Escuela de Lenguas (مدرسة اللسان), fundada por Mohammed Ali en 1835, que era en la práctica una escuela de acceso a la administración, y creó la primera Escuela de Profesores (دار العلوم), en 1872, y la primera gran Biblioteca Nacional (دار الكتب), aún existente, aunque en un Estado que deja bastante que desear. Dentro de los esfuerzos de reforma de la educación, hay que destacar la labor del jeque Mohammed Abduh ya mencionado, que buscó incansablemente la reforma del currículo y la administración del complejo educativo de la mezquita de Al-Azhar, luego también universidad, dentro del marco de sus esfuerzos por

reformular la doctrina, la práctica y la interpretación legal del islam, y si bien logró que sus ideas fueran secundadas por un gran número de intelectuales y políticos, también le ganaron la animadversión de los azharíes tradicionalistas y conservadores¹⁷.

En 1906, al final del mandato de Cromer, y a pesar de la muy escasa inversión de aquel en desarrollar el sistema educativo¹⁸, había en el país 4.500 escuelas rurales estatales que acogían a unos 170.000 alumnos, y 500 escuelas primarias y secundarias que contaban con aproximadamente 100.000 alumnos (20.000 de ellos niñas) y 4.000 profesores (Vatikiotis 1991: 219). Todo ello sobre una población total de más de 11 millones de personas. El grueso de los alumnos de las escuelas secundarias y de las escuelas superiores provenía de los propietarios agrícolas medios o de la burguesía agrícola media, compuesta casi exclusivamente por egipcios. Este sector social iba a proveer los elementos que, insertados en ocupaciones principalmente estatales, aunque también profesionales, y conservando los lazos con el medio rural y los propietarios agrícolas medios, conformarían la nueva clase, la burguesía administrativa o estatal, de la que saldría una nueva *intelligentsia* y una nueva élite nacionalista.

Con frecuencia, tras una primera educación en escuelas religiosas, las primeras generaciones de intelectuales y políticos reformistas y/o nacionalistas secularistas se habían formado en la Escuela de Lenguas (1835) y en escuelas técnicas; por su parte, las segundas lo hicieron en la Escuela de Profesores (1872) y las terceras lo harían en la Escuela de Leyes (مدرسة الحقوق), fundada en 1886 en sustitución de la Escuela de Lenguas. De la Escuela de Leyes salieron Mustafa Kamil y Ahmad Lutfi al-Sayyid, de quienes ya hemos hablado, y Saad Zaglul (1859-1927), de quien lo haremos en el siguiente capítulo, así como otros intelectuales como Qasem Amín (1863-1908), defensor de los derechos de la mujer, o políticos y empresarios como Ismail Sidqi (1875-1950), de quien también hablaremos un poco más adelante. Esta evolución en la educación de las élites políticas del país es representativa de la evolución de este y de la de su Estado, cada vez más complejo y amplio en su aparato legal y humano, más integrado (subordinadamente) en la economía internacional y en sus modos de funcionamiento, y necesitado de expertos en su aparato legal. También lo es de la conciencia de las élites acerca de las nuevas vías para acceder al progreso económico y social personal y comunitario, y de los requisitos para satisfacer sus

¹⁷ Mohammed Abduh fue discípulo y colaborador de Yamal al-Din al-Afgani, lo que le valió ser expulsado de su puesto de profesor en Dar al-Ulum, la escuela de profesores, en 1879. Tras apoyar la revuelta de Orabi, fue condenado al exilio en París, donde fundó con Al-Afgani la revista panislámica *El lazo más sólido* (العروة الوثقى). Tras su retorno en 1889 a Egipto ocupó diversos cargos, entre los que destacan el de miembro del Consejo de Administración de Al-Azhar desde 1895 y el de muftí de Egipto desde 1899 hasta su muerte.

¹⁸ Bajo el mandato de Cromer el porcentaje del presupuesto nacional dedicado a la educación se aproximaba al 1% (Al-Sayyid Marsot 1985: 94).

inquietudes nacionalistas. Mustafa Kamil, el líder nacionalista egipcio, explicó así a su hermano por qué optaba por estudiar en la Escuela de Leyes: "[La Escuela de Leyes] es la escuela de la escritura, la oratoria, y los derechos de las naciones y los individuos"¹⁹.

A pesar de que en la primera década de la ocupación británica el movimiento nacionalista no dio señales de vida -probablemente porque, como señala Al-Sayyid Marsot (1985: 75) creyó en las promesas británicas de una pronta retirada tras el rescate económico-, se había mantenido vivo, además de entre los intelectuales, entre los estudiantes y los profesionales que trabajaban en el aparato del Estado. Algunos de estos ocuparon altos puestos de la Administración, y a través de ella accedieron también a los diversos consejos y asambleas que entre 1882 y 1914 promovieron los británicos, sobre todo con fines consultivos y administrativos. Aunque solo fueran parcialmente representativas y disfrutaran de poco poder de decisión, estas asambleas sirvieron para que las élites políticas discutieran los asuntos del país y tomaran conciencia del poder que podían constituir uniéndose.

En 1892 Abbás Helmi, o Abbás II, sucedió al jedive Taufiq. La actitud de Abbas II sería muy diferente a la de Taufiq, que no había manifestado ninguna oposición al dominio británico. Abbás II buscaría la liberación del país, y se apoyaría en Francia y en el movimiento nacionalista iniciado en el mismo año de su acceso al trono por un grupo de jóvenes estudiantes liderados por Mustafa Kamil. Este defendería que, a diferencia de la idea que pretendía difundir Lord Cromer, los egipcios constituían una nación que debía liberarse de la tutela de Gran Bretaña y recuperar la relación de sujeción a la soberanía otomana pero contando con un Gobierno constitucional de egipcios que gobernarán en beneficio de los egipcios.

Probablemente si Kamil, su órgano de prensa *Al-Liwá* y el partido que fundó (el Partido Nacional), a los que ya hemos aludido, fueron en su momento y han pasado a la historia egipcia como los primeros referentes nacionalistas propiamente políticos, es porque aunaron la organización y el activismo político con un programa ideológico en el que se mezclaban los componentes islámicos y seculares, atrayéndose al grueso de las nuevas clases intelectuales y burocráticas, a diferencia de otras corrientes pura y radicalmente panislámicas, aunque también nacionalistas, como la animada por el jeque Ali Yusuf (1863-1913) y su diario *Al-Muayyad* (المؤيد), con el que Kamil colaboró en sus orígenes y que en los años 80 y 90 del siglo XIX consiguió, sin embargo, ganarse el apoyo de sectores islámicos más tradicionales y poner las primeras piedras de lo que en el siglo XX se convertiría en el movimiento ideológico y político islamista, uno de los principales en el panorama egipcio.

¹⁹ رمضان، عبد العظيم: مصطفى كامل في محكمة التاريخ، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص ١٩. Citado por Sonbol (2000: 79).

2.2 NACIONALISMO Y MONARQUÍA BAJO TUTELA COLONIAL. LAS FRACTURAS DE LA INDEPENDENCIA FORMAL (1919-1948)

2.2.1 El Wafd, la revolución de 1919 y la independencia formal

El nuevo ímpetu del movimiento nacionalista egipcio y la llegada al Gobierno británico del partido liberal en 1907 propiciaron la dimisión de Lord Cromer ese mismo año y el inicio de una nueva política británica en Egipto caracterizada por la mayor participación y libertad de decisión de los egipcios en el gobierno. Saad Zaglul, que se consideraba a sí mismo y era considerado “hijo de *fellah*” (campesino), fue uno de los primeros egipcios que accedieron a puestos ministeriales desde tal condición²⁰ y sin que estuviera probada su lealtad al jefive Abbas o a los intereses británicos. Zaglul (1857-1927) había apoyado en su juventud la revuelta de Orabi, haciendo de mensajero entre este y el jeque Mohammed Abduh y, posteriormente, tras su paso por la Escuela de Leyes y su ingreso en la administración del Estado, había mantenido estrechos contactos con diversos líderes reformistas y nacionalistas, como Mustafa Kamil y Lutfi al-Sayyid, e incluso había participado en la formación de algunas asociaciones secretas. Sin embargo, Zaglul había mantenido relaciones cordiales con Cromer, que al parecer estaba impresionado por su capacidad de organización y gestión, y en 1906, antes de que el mandato de aquel llegara a su fin, Zaglul fue nombrado ministro de Educación.

La labor de Zaglul y del nuevo Gobierno egipcio, liberado del control de Cromer en 1907, se dejó notar, y el presupuesto del ministerio de Educación en 1910, cuando Zaglul pasó a ser ministro de Justicia, había ascendido al 3,4% del total del presupuesto estatal, cuando en la época de Cromer se situaba en torno al 1%. Veinte años después, en 1930-1931 llegaría al 11% (Al-Sayyid Marsot 1985: 94).

En su actuación como miembro de la Asamblea Legislativa (مجلس شورى القوانين), a la que accedió en virtud de su cargo de ministro, comenzó a proponer un mayor control de aquella sobre el Gobierno, y cuando participó como miembro electo en la cámara constituida en 1914 se convirtió en el líder de los miembros educados y secularistas que

²⁰ Aunque los *fellahín* propiamente dichos eran los agricultores que cultivaban efectivamente la tierra, el apelativo era y es tradicionalmente aplicado también a los pequeños propietarios, como era el caso del padre de Zaglul, un *omda* (“alcalde”) relativamente acomodado pero no rico, que “fue capaz de enviar a sus hijos a El Cairo para que estudiaran”. No obstante, Zaglul solo pudo realizar estudios de leyes, e incluso viajar a Francia a una edad avanzada, cuando mejoró su situación económica. A diferencia de Zaglul, la mayor parte de quienes ocuparon los puestos más destacados en la administración egipcia en las dos primeras décadas del siglo XX eran *zawat* (ذوات, “gente distinguida”), miembros de familias que, casi siempre por una mayor riqueza de origen agrario, habían accedido a una educación selecta y a carreras profesionales en el aparato del Estado (Sonbol 2000: 115-118).

solicitaban una mayor egipcianización de la administración, una reforma más en profundidad del sistema educativo y judicial, y el ya mencionado control presupuestario del Gobierno, esto es, del jedive y del poder británico. La Asamblea Legislativa de 1914 tan solo se reunió durante seis meses, pues no comenzó su segunda sesión anual a causa de la declaración de la Primera Guerra Mundial.

La guerra trajo a Egipto la declaración de la ley marcial por parte de los británicos y, sobre todo, grandes dificultades económicas para los empleados públicos y los campesinos, que padecieron una elevada inflación. A los campesinos, además, se les privó de sus bestias de carga, y muchos de ellos fueron reclutados a la fuerza para construir fortificaciones y trincheras en Palestina. Durante la guerra, las promesas hechas por los aliados con relación a la independencia de los países árabes mantuvieron expectante el sentimiento nacionalista, y nada más concluir aquella un grupo de políticos, liderados por Saad Zaghlul, se constituyeron en una delegación (*wafd*) con el objeto, primero, de encontrarse con el Alto Comisionado Británico, Sir Reginald Wingate, y luego, con su autorización, dirigirse a la Conferencia de Paz de París a solicitar la independencia de Egipto, que ya había sido declarado unilateralmente por Gran Bretaña independiente del Imperio Otomano y protectorado británico en 1914, pasando Abbas II (1914-1922) a ostentar el título de sultán.

La demanda presentada a Wingate el 18 de noviembre de 1918 fue denegada. Los miembros de “el Wafd”, como se conoció a la “delegación” que se había comprometido a actuar pacíficamente y a negociar con Gran Bretaña, emprendieron una campaña de agitación política que fue en aumento cuando en enero de 1919 comenzó efectivamente la Conferencia de París. De hecho, a partir de entonces el Wafd se convirtió además un amplio movimiento liderado por Zaghlul²¹. La expansión de sus puntos de vista entre las fuerzas vivas egipcias fue tal que el Gobierno de Egipto quedó prácticamente paralizado durante meses, falto de apoyo para actuar al margen del Wafd. El 8 de marzo de 1919, los británicos decidieron poner fin a ese estado de cosas y arrestaron a Zaghlul y sus compañeros, que fueron deportados a Malta. Al día siguiente estallaron manifestaciones y huelgas masivas en El Cairo, Alejandría y otras ciudades principales, en las que participaron abogados, jueces, empleados de los transportes y estudiantes de primaria y secundaria y de la mezquita de Al-Azhar. Estos hechos fueron acompañados de actos de violencia contra las instalaciones de ferrocarril y las oficinas de telégrafos, y cobraron una dimensión inusitada cuando se unieron a ella masivamente los campesinos, la comunidad copta e incluso, por primera vez, grupos considerables de mujeres. Como en el caso de la revuelta de Orabi de 1881, la motivación de la participación de los campesinos en las

²¹ Volveremos sobre la historia del Wafd en el capítulo 2.2.4 de esta parte.

revueltas ha sido atribuida por muchos estudiosos más a su hartazgo por el trato recibido del poder que a un auténtico sentimiento nacionalista, pero lo cierto es que aquellos siguieron apoyando al Wafd al menos durante la década siguiente²².

Finalmente, la delegación fue liberada y se dirigió a París el 11 de abril de 1919. Pocos años después, en 1922, Gran Bretaña declaró la independencia formal de Egipto. Sin embargo, Gran Bretaña, que conservaba sus bases militares en el país, excluyó de la soberanía cuatro puntos en los que se arrogaba el derecho a intervenir: la seguridad de las comunicaciones, la defensa del país ante cualquier potencia extranjera, la defensa de los extranjeros y el mantenimiento del condominio anglo-egipcio sobre Sudán. Así, el país siguió siendo un protectorado de facto.

Contemporáneamente a la consecución de la independencia, Egipto se convirtió en una monarquía, siendo su primer rey Fuad (1922-1936). La presión nacionalista por limitar el poder del monarca, alentada por Gran Bretaña, hizo que el nuevo régimen adoptara una forma constitucional, parlamentaria y pluripartidista.

2.2.2 Diversificación económica y social en la primera mitad del siglo XX

Durante la primera mitad del siglo XX, y en particular durante el periodo entre las dos guerras mundiales, Egipto conoció un gran incremento de población, una progresiva diversificación económica y social, e importantes movimientos migratorios del campo a la ciudad. Contrastar estos factores con los periodos de bonanza y crisis económica ayudan a entender la evolución de la situación política del país.

Entre 1907 y 1950, la población de Egipto aumento en un 80% aproximadamente, pasando de 11.1 millones de personas a más de 20 millones. El crecimiento poblacional, que había decaído en los años siguientes a la Primera Guerra Mundial (1,09% entre 1917-1927), comenzó a repuntar entre 1927-1937 (1,16%) y se incrementó en particular a partir de 1937, alcanzado un porcentaje del 1,75% entre 1937-1947, y llegando a un 2,42% entre 1947-1960 (Fargues 2011: 44).

Beinin y Lockman (1998: 38) nos ofrecen un resumen de la evolución de la ocupación de la población por sectores a partir de las estadísticas oficiales, que deben ser tomadas con cierta reserva. La agricultura seguiría siendo durante todo el periodo la ocupación de la mayoría de la población activa, pero en términos relativos cedió terreno

²² Vatikiotis (1991: 267) puede servir de representante de quienes ponen en cuestión el nacionalismo de los campesinos egipcios, así como que los padecimientos de aquellos durante la Primera Guerra Mundial se debieran exclusivamente a las autoridades británicas, pues alega que las “dudosas” prácticas de sus compatriotas y de los residentes extranjeros (suponemos que se refiere a la especulación con el comercio y los precios) durante la guerra tuvieron gran parte que ver.

ante el empuje de otros sectores. Tras un periodo (1907-1917) para el que las estadísticas muestran un extraño e imposible incremento de los campesinos (de 2,4 a 4 millones de personas), entre 1917 y 1947 el número de personas mayores de 5 años dedicado a la agricultura se mantuvo estable en torno a los 4 millones, pero su número pasó de representar el 36% al 25% de la población total en esa franja de edad, y del 70% al 60% de la población con ocupación conocida. El resto de los sectores económicos, por el contrario, conocieron un crecimiento relativo muy considerable.

La industria (incluido cualquier proceso de manufactura) fue durante todo el periodo la segunda fuente de ocupación en términos numéricos. Ya entre 1907 y 1917 había conocido una gran expansión, debida sobre todo a la creación de pequeños talleres, en particular durante la Primera Guerra Mundial, aumentando en un 50% el número de empleados (de 281.000 a 423.000 personas), y sería a partir de 1937, y en particular durante la Segunda Guerra Mundial, cuando experimentaría un nuevo gran impulso, pasando de 478.000 personas en 1937 a 708.000 en 1947.

Otro sector que aumentaría muy significativamente, y por razones similares a las del industrial, sería el del comercio, que recibiría un gran empuje entre 1907 y 1917, creciendo casi en un 50% (de 161.000 a 280.000 personas), y de nuevo retomaría vigor entre 1937 y 1947, pasando de 460.000 a 620.000 personas.

El cuarto sector en términos absolutos de crecimiento sería el de la administración pública y los servicios sociales, que entre 1907 y 1947 pasó de ocupar a 192.000 personas a ocupar a 515.000, y en el que cabe destacar los incrementos de 1917-1927 y de 1937-1947 (más del 50% en ambos casos), que coinciden con las épocas en las que hubo más tiempo de gobierno del Wafd, además de incrementos de población y de actividad económica más importantes.

Otro sector socioeconómico que creció exponencialmente fue el de los servicios, que pasó de 94.000 a 204.000 empleados entre 1907 y 1917, y de nuevo conoció un gran incremento entre 1937 y 1947, cuando creció en más de un 50%, de 256.000 a 392.000 empleados. El sector de los servicios creció, indudablemente, asociado a las guerras mundiales y al desarrollo de la industria y el comercio.

Finalmente, hay que señalar que, si bien el sector de los transportes creció de manera más moderada entre 1907 y 1947, “tan solo” duplicando su número de empleados (de 101.000 a 203.000), este era un sector considerablemente desarrollado en términos relativos ya en 1907, y en el tenían gran importancia los empleados de la compañía estatal de ferrocarriles (12.000 en 1914) y los de la de la compañía (privada) de tranvías de El Cairo (4.000 en 1914). Conviene tener en cuenta que en 1914 había ya 1.700 millas de vías férreas de tren en Egipto y 63 kilómetros de catenaria en El Cairo, y que la compañía estatal de ferrocarriles era el primer empleador del país (si no consideramos al Estado

como un único empleador), y la compañía de tranvías no debía andarle muy a la zaga en la clasificación.

Por otro lado, hemos de hacer alusión a los estudiantes de secundaria y universitarios, a pesar de que no conformaran una clase trabajadora propiamente dicha, por su participación e influencia en los movimientos políticos y sociales y por su función de indicador de las situaciones económicas, sociales y políticas. También conviene hacer alusión al incremento de la población alfabetizada y letrada en general.

El exponencial aumento del presupuesto del Estado dedicado a educación entre 1907 y principios de los años 30 que ya hemos señalado (del 1 al 11%), permitió que el porcentaje del número de alumnos en las escuelas primarias y secundarias con respecto al total de la población pasara del 1,5% en 1925-1926 al 4,5% en 1935-1936. Posteriormente, entre los años 1930 y 1950 el porcentaje de la educación en el presupuesto estatal se estabilizaría entre el 10% y el 12%, y el número de alumnos en las escuelas entre el 5% y el 7%²³. Si tenemos en cuenta que el porcentaje de población en edad de recibir enseñanza primaria y secundaria se encontraba entre el 30% y el 40% para el conjunto de periodo, advertiremos que los progresos globales de la alfabetización eran lentos, a pesar de que en 1925 el partido Wafd promulgó una ley que hacía la educación básica obligatoria. A principios del periodo estudiado, la población alfabetizada no llegaba al 20%, mientras que 40 años después rondaba el 40%. Hay que destacar que el reparto de esa tasa muestra una evolución mayor en el caso de las mujeres, entre quienes el porcentaje de alfabetizadas se multiplicó por cuatro, mientras que entre los hombres apenas se duplicó; con todo, al final del periodo las mujeres alfabetizadas no llegaban al 25% mientras que los hombres superaban el 50% y, además, la diferencia en el número medio de años de educación creció a favor de los hombres²⁴.

Dentro de este marco general orientativo, lo que nos interesa señalar a los efectos de nuestro estudio es el aumento del número de personas con una educación media y superior. En este terreno, disponemos de datos más precisos. Así, teniendo en cuenta que la primera universidad civil, la Universidad Rey Fuad, hoy Universidad de El Cairo, fundada en 1908 como entidad privada pero estatalizada en 1925²⁵, diremos que en el curso 1930-31 los inscritos en el sistema de educación superior eran 6.760, que en 1935-36 habían pasado a ser 8.398, en 1945-46 se contaban en 17.035, y en 1951-52 el incremento se había disparado hasta alcanzar los 36.622 estudiantes (Reid 1991: 112). A ello hay que añadir los

²³ Waardenburg, Jean Jacques: *Les Universités dans le Monde Arabe Actuel*, Mouton & Co., La Haya, 1966, vol. 2, pág. 120, tablas 157 y 109. Citado por عبد الله (1991: 39-40).

²⁴ Cifras aproximadas a partir de las estimaciones de Fargues (2011: 66).

²⁵ Para la historia de la Universidad de El Cairo hemos seguido a Reid, Donald Malcom: *Cairo University and the Making of Modern Egypt*, El Cairo, The American University in Cairo Press, 1991.

estudiantes inscritos en las escuelas técnicas (de ingeniería, comerciales, de administración etc.) existentes desde tiempos de Mohammed Ali, que Vatikiotis (1991: 472) estimaba en 1928 en más de 20.000. E incluso, a los efectos que nos interesan, debemos considerar el número de estudiantes que completaban la escuela secundaria, que podemos estimar en números crecientes desde unos pocos miles al principio del periodo hasta casi 200.000 al final. A pesar del número relativamente bajo respecto al conjunto de la población de los estudiantes con educación media y superior, este sector de la población fue adquiriendo progresiva importancia por su aumento en términos absolutos, por su evidente importancia en peso específico debido a su formación, y por sus circunstancias económicas y sociales, que hicieron de ellos, como señala Vatikiotis (1991: 473), “una «clase política» cortejada y castigada por los partidos políticos y el Estado”.

En términos económicos, en los estratos superiores del arco social la evolución de Egipto en la primera mitad del siglo XX estuvo marcada por el mantenimiento del proceso de concentración de la propiedad de la tierra, al que ya hemos aludido, y por el desarrollo de la industria y el comercio, estrechamente relacionados con las guerras mundiales y por la relación de los egipcios con sus contrapartes extranjeras, instaladas en el país o no.

En cuanto a la agricultura, si volvemos a la Tabla 1 (véase el capítulo 2.1.4 precedente), comprobamos la progresiva concentración de la propiedad de la tierra desde 1894 a 1952. Como puede verse, teniendo en cuenta que la superficie cultivable se incrementó casi en un 50%²⁶, al tiempo que, como hemos dicho, lo hacía en mucha mayor medida la población (cerca del 80%), la propiedad de la tierra se concentró progresivamente a lo largo del periodo estudiado, principalmente en manos de los grandes propietarios, pero también de los medios, que disminuyeron en número. Pero algunas cifras más detalladas nos darán una idea de la estratificación social de los propietarios agrícolas.

En 1952, el grupo de los pequeños propietarios, aquellos que tenían menos de 2 *feddan*es y que no podían subsistir solo con sus tierras sino también trabajando como jornaleros o arrendatarios, era de 2.3 millones, que se repartían 1.2 millones de *feddan*es: el 84% de los propietarios tenían el 21% de las tierras. En el otro extremo del arco, 280 propietarios poseían 583.000 *feddan*es (un tercio de los cuales eran de la familia real); es decir, que el 0,01% de los propietarios tenían el 10% de las tierras. A estos últimos se unían unos 10.000 propietarios para configurar la alta burguesía, o aristocracia agrícola, que tenía un tercio de las tierras del país²⁷.

²⁶ La superficie cultivable pasó de 4 millones de *feddan*es en el cambio de siglo a 6 millones de *feddan*es en 1952 (Abdel Malek 1962: 64). Recordemos que un *feddán* egipcio equivale a 0,42 hectáreas. La población

²⁷ Abdel Malek (1962: 64-65). Abdel Malek obtiene muchos de sus datos y análisis de detalle de la obra de Ibrahim Amer: *Al-ʿArd wa al-fallah. Al-masʿala al-ziraʿiyya fi misr*, El Cairo, 1٩٥٨, aunque no siempre cita las páginas de donde los toma. Esta obra es considerada el mejor análisis de la cuestión agraria sobre la época que nos ocupa.

En el grupo intermedio, formado por los 100.000 poseedores de entre 5 y 50 *feddanes*, podemos distinguir, como propone Abdel Malek, dos subgrupos: quienes poseían entre 5 y 20 *feddanes*, y quienes poseían entre 20 y 50. Esta distinción es crucial en términos sociológicos y políticos, pues quienes se encontraban en el segundo grupo tenían la tendencia o la aspiración a integrarse en el grupo de los grandes terratenientes, e ideológicamente se encontraban más próximos a estos que al primer subgrupo. Este, por su parte, que conformaba una burguesía media a veces acomodada y a veces empobrecida, se encontraba mucho más expuesto a la movilidad social -puesto que podía educar a sus hijos y enviarlos a la ciudad-, al contacto con las clases medias urbanas y profesionales y con las clases media-bajas, y a las ideologías reformistas, nacionalistas e incluso revolucionarias. No en vano de él salió un gran número de intelectuales, políticos y personalidades señeras de dichos movimientos.

En cuanto a la industria, la Primera Guerra Mundial había propiciado que se sentaran las bases de una industria nacional. Los grandes comerciantes y propietarios agrícolas hicieron fortuna con el abastecimiento del Ejército británico, no solo por medio de las ventas agrícolas sino también a través de la creación de pequeñas fábricas, algunas de ellas de más de 50 obreros. En 1917 un Comité para el Comercio y la Industria fue creado por Ismael Sidqi, Talaat Harb (1867-1941) y otros para reclamar la creación de una auténtica industria egipcia. En 1920, Harb fundó el Banco Misr (Banco de Egipto), que obtendría un gran impulso cuando el Wafd, en 1922, llamara a boicotear los productos británicos y a depositar los haberes en el banco. En 1924 fue fundada la Federación Egipcia de Industrias, organización patronal de banqueros e industriales en la que los extranjeros eran mayoría. En esta organización se manifestaría formalmente la fusión y alianza de clases sociales (grandes terratenientes, industriales y capitalistas extranjeros) que gobernarían efectivamente Egipto durante la mayor parte del tiempo que va desde la independencia hasta 1952.

En la década de 1930 la industria comenzó a desarrollarse a un ritmo mucho mayor que en la anterior, como hemos observado en la evolución del número de empleados en ella, hasta adquirir su máxima expansión durante la Segunda Guerra Mundial. La alta burguesía agrícola y la gran burguesía industrial egipcias habían devenido para entonces prácticamente indistinguibles, pues de la misma manera que los grandes terratenientes habían invertido en la industria, los industriales prósperos de orígenes burocráticos y profesionales habían adquirido grandes extensiones agrícolas, aunque fuera solo como un mero signo de distinción social, y la habitual política matrimonial de las clases adineradas hizo el resto. Un elemento diferenciador importante dentro de la alta burguesía era la nacionalidad, pues durante todo el periodo los extranjeros siguieron poseyendo la mayor parte de la riqueza

nacional, sobre todo industrial, si bien su cuota en ella fue decreciendo²⁸.

La presencia extranjera en Egipto no era, ni mucho menos, solo británica. Desde la época de Mohammed Ali numerosos comerciantes y profesionales griegos, franceses, armenios, italianos y árabes levantinos, junto con otras nacionalidades de menor peso, habían sido atraídos por la apertura forzada del mercado egipcio. La especificidad egipcia de las capitulaciones otomanas desde la época del jedive Ismael, que, además de eximir a los extranjeros de pagar impuestos, los sometían a la jurisdicción de los Tribunales Mixtos, dominados por jueces extranjeros, contribuyó a que su número se incrementara. En 1907 había en Egipto más de 200.000 extranjeros, de los que 147.000 eran europeos, y solo 21.000 británicos. En 1936, cuando las capitulaciones fueron abolidas a consecuencia del Tratado Anglo-Egipcio, su número llegaba a los 360.000, y en esa época el Gobierno egipcio llegó a dar órdenes de que se impidiera el desembarco de extranjeros en los puertos egipcios (Sonbol 2000: 64).

Aunque muchos extranjeros no eran capitalistas ni pertenecían a la alta burguesía, la mayoría sí formaba parte de las clases acomodadas, y los más eran comerciantes, pequeños industriales o profesionales. Los europeos se beneficiaban, hasta 1936, de exenciones de impuestos (personales, sobre los productos manufacturados y en la industria y en el comercio interior y exterior -exceptuando los aranceles a la importación-) que los egipcios sí tenían que pagar, por lo que competían en condiciones ventajosas con ellos (Sonbol 2000: 65). Incluso el pequeño porcentaje de los trabajadores industriales ocupaban todos puestos muy superiores en la jerarquía y en los derechos económicos y sociales a los de sus compañeros egipcios, como trabajadores especializados, técnicos o jefes de personal (Beinin y Lockman 1998: 35-40).

Gran parte de las comunidades extranjeras vivían en las ciudades portuarias del Mediterráneo, como Alejandría y Port Said, y la mayoría de sus miembros educaban a su hijos en escuelas privadas extranjeras, e incluso habitaban en zonas residenciales segregadas del cuerpo social egipcio. Esta gran diferenciación económica y social hacía que, pese a que muchos extranjeros hubieran permanecido durante más de una generación en Egipto, y se hubieran egipcianizado en muchos aspectos, siguieran siendo vistos como extranjeros, *jawagas* (خواجات), la apelación que los egipcios siguen aplicando jocosamente hoy en día a los extranjeros. Únicamente las comunidades de origen y lengua árabe habían accedido a una mayor integración social, y únicamente a ellas los egipcios aplicaban el

²⁸ En 1914 las inversiones extranjeras en Egipto alcanzaban los 92 millones de LE (libras egipcias), incluidos 67 millones en tierras agrícolas, mientras que los capitales egipcios eran 8 millones. En 1948, del total de las sociedades anónimas existentes en Egipto, el 61% de los capitales invertidos en Egipto pertenecían a extranjeros, y el 39% a egipcios. A ello hay que añadir que los extranjeros, residentes y no residentes en Egipto, poseían también a mediados de siglo más del 50% del remanente de la antigua deuda pública egipcia (Abdel Malek 1962: 24-25).

apelativo de “egipcianizados” (متمصّرون), junto a los correspondientes en árabe a su región de origen.

2.2.3 Monarquía, parlamentarismo y pluripartidismo controlado

Como hemos señalado antes, tras la consecución de la independencia Egipto se convirtió en una monarquía, siendo su primer monarca el rey Fuad (1922-1936), y el Estado adoptó una forma constitucional, parlamentaria y pluripartidista de inspiración liberal.

La Constitución promulgada en 1923, suspendida en 1930 y restituida en 1935, es frecuentemente loada, como el conjunto de la llamada “primera experiencia liberal egipcia” (1922-1952), en cuanto que permitieron un gran pluralismo político y una cierta alternancia en el poder, pero lo cierto es que todos los textos fundamentales de esa “primera experiencia liberal” dejaron en manos del monarca poderes para interferir en las decisiones electorales y en la elección del Gobierno efectivo, y tanto el rey Fuad como el rey Faruq (1936-1952) hicieron uso de ellos constantemente²⁹. Ningún Parlamento electo acabó su legislatura, en detrimento sobre todo del Wafd, que se constituyó en partido y ganó todas las elecciones limpias a las que se presentó. Por el contrario, los monarcas recurrieron, para dirigir el país, a políticos leales y al apoyo de los grandes terratenientes e industriales, sustentados en partidos sin apenas apoyo popular: el Partido de los Liberales Constitucionalistas (حزب الأحرار الدستوريين, fundado en 1922), el Partido de la Unión (حزب الاتحاد, fundado en 1925), el Partido del Pueblo (حزب الشعب, fundado en 1930), el Partido de la Unión del Pueblo (fruto de la unión de los dos anteriores en 1938), y luego el Partido Saadista (حزب السعديين, en referencia Saad Zaglul, fundado en 1938).

Entre 1924 y 1936, bajo el mandato de Fuad, el Wafd gobernó durante menos de dos años (trece meses entre 1924 y 1925, y tres meses en 1928), a pesar de ganar por una holgada mayoría las elecciones de 1924, 1925, 1926 y 1929 (Martín Muñoz 1992: 117-158). En 1930, la Constitución fue suspendida, y sustituida por una ley fundamental que daría pie a la dictadura de Ismael Sidqi (1930-1935), representante de la alta burguesía industrial.

El 12 de diciembre de 1935, la Constitución de 1923 fue restaurada, y en mayo de 1936 se celebraron elecciones legislativas, en las que se impuso de nuevo el Wafd. No

²⁹ La Constitución de 1923 daba, entre otras prerrogativas, poderes legislativos al rey, además de a las dos Cámaras. El rey elegía al presidente del Gobierno y podía disolver el Consejo de Ministros, posponer las elecciones y prorrogar el mandato de las Cámaras constituidas. La Constitución fue suspendida, y sustituida por una ley fundamental, en 1930, para ser restaurada en 1935 (López García y Fernández Suzor 1985: 32-42).

obstante, su Gobierno, dirigido por Mustafa al-Nahhás, duró apenas un año y medio, hasta diciembre de 1937, cuando el nuevo rey, Faruq, lo cesó y nombró un Gobierno formado por personalidades del resto de los partidos. El Wafd volvería al Gobierno porque los tanques británicos se lo impusieron al monarca en 1942, como veremos más adelante, y gobernaría gracias a su triunfo electoral entre 1942 y 1944 y entre 1949-1952. Sin embargo, a pesar de que entre 1936-1952 gobernó durante más tiempo que entre 1924-1936, el Wafd de esta segunda etapa constitucional ya no era el mismo ni contaba con los mismos apoyos que en sus primeros años: en él se había impuesto su ala derecha, y en su interior y en torno a él se habían diversificado las corrientes y las opciones políticas. A todo esto hay que añadir que la participación de la población en las elecciones era relativamente baja, como puede observarse en la tabla que presentamos a continuación, elaborada a partir de datos de Martín Muñoz (1992: 204-205):

TABLA 2: REPRESENTATIVIDAD DEL WAFD SEGÚN LOS RESULTADOS ELECTORALES

Año	Representatividad del Wafd					Rep. no wafdistas % población total
	escaños	% escaños	% votantes	%electores	% población total	
1924	179	84,9	49,4		0,26	0,26
1925	113	53,6	46,8		0,24	0,28
1926	148	70,1				
1929	198	85,34				
1931*	-	-	-	-	-	0,3
1936	179	76,1	61,23	23,49	7,03	2,08
1938**	14	5,3	6,2	0	0,69	10,45
1942	232	87,8	58,4	33,17	4,64	3,32
1945*	-	-	-	-	-	11,08
1950	228	72,8	54,5	33,06	7,12	5,9

* El Wafd no participó en estas elecciones, en protesta por la ley electoral

** Las elecciones de 1938 fueron particularmente violentas y fraudulentas

Para valorar adecuadamente estos datos, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que las mujeres no pudieron votar hasta las elecciones de 1950. Por otro lado, a partir de 1936 se incrementó notablemente el número de votantes, pues hasta entonces las elecciones se celebraban por sufragio indirecto, con un sistema de electores y electores-

delegados³⁰. Asimismo, hay que señalar que en 1929 y 1942 gran parte de los escaños (un 48% y un 43% respectivamente) se adjudicaron por proclamación (تركية) al existir solo un candidato en la circunscripción (Martín Muñoz 1992: 203). Sin embargo, como puede verse, incluso a partir de 1936, y teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar, en ningún caso el porcentaje de población que participó en las elecciones superó el 13% (incluido 1950, cuando sí votaron las mujeres). No obstante, no hay que pasar por alto que estamos hablando de porcentajes de la población total, y no de la población en edad de votar (población de 21 años en adelante), que se puede estimar en torno a un 50% del total para 1950³¹, por lo que el porcentaje de población en edad de votar que participó en dichas elecciones pudo situarse en torno al 26%, un porcentaje bajo, aunque deben tenerse en cuenta las circunstancias históricas y sociales, y la composición socio-económica de Egipto.

2.2.4 El unanimismo en torno al primer Wafd y sus líderes carismáticos

El partido Wafd ha pasado a la historia como el campeón del nacionalismo y el liberalismo constitucionalista egipcio entre 1919 y 1952, primero como “movimiento”, y desde 1923 como partido político. También ha pasado a la historia por la gran unanimidad que suscitó en torno a él. Sin embargo, en ese periodo hay que distinguir al menos dos etapas claramente diferenciadas: la primera iría hasta finales de los años 30 y durante ella el Wafd sería liderado por Saad Zaglul (muerto en 1927) y Mustafa al-Nahhás (1879-1965). La segunda, llegaría hasta 1952 y durante su mayor parte sería también dirigido por Al-Nahhás, pero contando con la importante presencia de Fuad Serag Eddín (desde 1942, secretario general del partido) como hombre fuerte del partido y del Gobierno.

Estas dos etapas del Wafd, divididas por lo que se suele denominar “la dictadura de Ismael Sidqi” (1930-1935), durante la cual se suspendió la constitución de 1923 para luego ser restituida, han de ser diferenciadas por los cambios que se produjeron en la dirección, en la actitud política de esta y en los apoyos sociales del partido, cambios relacionados con la evolución de la situación política internacional y de la estructura económica y socioeconómica del país así como con el desarrollo y la diversificación de nuevas ideologías y corrientes políticas.

Durante la primera etapa, el Wafd sería el aglutinante de las aspiraciones

³⁰ Para más información acerca de los sistemas electorales del conjunto del periodo puede consultarse Martín Muñoz (1992: 109-116).

³¹ Existen censos de población oficiales de 1927, 1937, 1947 y 1960. En 1960, año para el que las estadísticas son más completas, el 49.9% de la población tenía menos de 20 años (CAPMAS 1990: 20).

nacionalistas, constitucionalistas e incluso sociales de la gran mayoría de la población. Dirigido por la pequeña burguesía urbana (funcionarios, profesionales -entre ellos, numerosos abogados-, intelectuales y estudiantes), y apoyado firmemente por la burguesía agrícola media-baja con la que la urbana estaba constitutivamente relacionada, se atrajo también el apoyo de pequeños comerciantes y artesanos, y de campesinos y trabajadores, y en términos de popularidad y electorales dominó sin rivales el panorama político egipcio hasta mediados de los años 30, aunque, como hemos señalado, gobernara tan solo durante poco más de dos años.

Fuera del ámbito de influencia del Wafd, en principio quedaban nada más que los grandes propietarios agrícolas, los grandes comerciantes, y una serie de grupos de políticos, funcionarios y profesionales, que harían de su lealtad al monarca su modo de vida político y social. A ellos habría que añadir las redes clientelistas que aquellos podían movilizar, especialmente importantes en las zonas rurales gracias a la influencia de los grandes terratenientes y del propio poder del Estado cuando éste estaba en manos de dichas fuerzas.

La burguesía financiera, industrial y comerciante mantendría una relación ambigua con el Wafd. En primera instancia buscaría su apoyo e intentaría dominarlo; luego, a lo largo de los años 20 y 30, a medida que se fundía y confundía con la gran burguesía agrícola, constituiría partidos alternativos, como los citados Partido de los Liberales Constitucionales (1922), Partido de la Unión (1925), Partido del Pueblo (1930) y partido Saadista (1938), que gobernarían en lugar del Wafd cuando el monarca le negara a este el gobierno obtenido en las urnas. Finalmente, la gran burguesía se impondría en la propia dirección del Wafd desde mediados de los años 30, aunque tendría que contar con el creciente peso en el partido de lo que se denominaría su "ala izquierda", opuesta a las políticas conservadoras³².

Las políticas contemporizadoras del Wafd con los británicos desde la firma del Tratado de 1936, sus escasos avances en la causa nacionalista y su abandono de las políticas educativas y sociales, junto con ciertas tendencias autoritarias, le ganaron la desafección de numerosos egipcios de diversos sectores sociales en los años siguientes, como veremos en el capítulo siguiente. Ahora queremos llamar la atención sobre un aspecto destacado, ideológico pero de fundamento social, antropológico y psicológico, del éxito del Wafd durante tantos años.

³² En realidad, los terratenientes eran ya dominantes en el aparato de dirección del partido Wafd desde la constitución de su primer Comité Central (لجنة مركزية) en 1932, en el que contaban con el 83% de sus miembros, pero fue a partir de 1936 cuando ese dominio se reflejó de manera más clara en sus políticas (Martín Muñoz 1992: 75). En 1936 entró en dicho órgano Fuad Serag Eddín, gran terrateniente que sería secretario general del partido desde 1942 y ministro de Agricultura (1942) y del Interior (1943 y 1950) y de Comunicaciones (1949).

El unanimismo nacional en torno al Wafd aparece indisolublemente ligado al que se produjo en torno, sobre todo, a su carismático primer líder, Saad Zaglul, e incluso alrededor de su sucesor, Mustafa al-Nahhás. Zaglul fue llamado “el padre de la nación egipcia”, “el rey de corazones” (por oposición, por supuesto, al rey que ostentaba la corona) y, sobre todo, زعيم الأمة, expresión que habitualmente se traduce por “el jefe” o “el líder de la nación” pero para la que no hay que olvidar el origen etimológico de زعيم como “el que habla en nombre de”, “el portavoz”.

La devoción por Saad Zaglul entre las masas era tal que nada ni nadie podía -o quería- oponerse a él y a sus decisiones, e incluso estas infundían su inviolabilidad a otros personajes. El novelista Naguib Mahfuz contó una reveladora y divertida anécdota que él mismo presenció al también novelista, mucho más joven, Gamal al-Guitani:

“Se conoce bien el papel que los *futuwwa*³³ desempeñaron en la Revolución de 1919 encabezando la resistencia contra los ingleses, pero también entraban en acción durante las elecciones. Fue Orabi [un *futuwwa* célebre] quien hizo fracasar a Selim Bey en las elecciones. Orabi era wafdist, como Selim Bey, pero hizo caer a este en favor de un tercer wafdist, Abdel Hamid al-Bannán. Este tenía un palacio en el corazón de Huseyniyya, de donde era originario. Selim Bey era el candidato oficial del Wafd, mientras que Al-Bannán se presentaba como independiente con un programa wafdist. Selim Bey recelaba de las circunscripciones de Huseyniyya y de Gamaliyya, que consideraba partidarias de Al-Bannán.

Supimos que Saad Zaglul había decidido ir en persona al palacio de Selim Bey para manifestarle su apoyo. El cortejo de Saad desfilaba por Huseyniyya, que debía atravesar para llegar al palacio de Selim Bey (...) Al final de Huseyniyya, Orabi y su banda esperaban al cortejo. Nada más aparecer este, comenzaron a gritar: «¡Viva Saad! ¡Viva Saad!», y levantando su automóvil, lo llevaron con su pasajero hasta el palacio de Al-Bannán. La noticia corrió por Abbasiyya como un reguero de pólvora: ¡Saad Zaglul estaba en el palacio de Al-Bannán, lo había elegido a él! Selim Bey perdió su credibilidad, y fue descartado definitivamente...” (Guitany 1991:130-131).

³³ El concepto de *futuwwa* (فتوة) acoge diversas realidades históricas, diferentes pero que guardan cierta relación entre ellas. La *futuwwa*, como señala Gómez García (2009: 118), alude un ideal islámico de rectitud e integridad del varón, en particular joven. Con el paso del tiempo, el término pasó a designar a grupos de jóvenes que satisfacían diversas funciones de seguridad, vigilancia o fuerzas de choque al servicio de una corporación o comunidad o de un ideal islámico. De ser una suerte de “órdenes de caballería” islámicas en diversas etapas históricas, muy relacionadas con el sufismo, pasaron, en Egipto, en época moderna, a designar a bandas, o tan solo individuos, que ejercían esas labores al servicio de un barrio, de un gremio o de particulares. En su significado actual, un *futuwwa* sería algo más parecido a un matón o “hombre de mano” de alquiler, si no fuera porque los egipcios siguen reconociendo en ese término a alguien, además de valiente y arrojado, noble e integro, con ciertas virtudes morales puestas al servicio de otros, que lo diferencian de lo que sería un auténtico matón a sueldo, un *baltagui* (بلطجي). La *futuwwa* del barrio caiota de Al-Husein, o de Al-Huseiniyya, relacionada en el pasado con el gremio de los carniceros y con la orden sufí Bayyumiyya, era una de las más famosas.

Anécdota reveladora sobre la astucia y la importancia de los *futuwwa* (personajes también carismáticos), sobre la naturaleza de las elecciones, sobre la naturaleza de las élites wafdistas y, para lo que ahora nos interesa, sobre la influencia de la persona de Zaglul.

Zaglul era un personaje carismático: un hombre muy capacitado, meticuloso y persistente, y que sabía, en palabras de Al-Sayyid Marsot:

“encantar a su audiencia para hacerles creer que ellos eran Zaglul, y que Zaglul era el máximo exponente del hombre de la calle (...) sabía hablar el idioma del *fallah* y hacer que el *fallah* se identificara con él, a diferencia del resto de los políticos, de los cuales pocos tenían ese don”.

Pero Zaglul no se imponía solo entre los campesinos:

“Cuando fue elegido presidente de la Cámara Alta solía llamar al orden a sus miembros con un «*uskut*» [¡Cállate!] próximo a un ladrido, y los parlamentarios lo aceptaban, cuando viniendo de cualquier otro jamás se habrían callado”³⁴.

Sin embargo, según señalan todos los historiadores más distantes y equilibrados, en línea con la última autora citada, Zaglul, el campeón del nacionalismo y el parlamentarismo, a quien no niegan sus virtudes personales y nacionalistas, era un hombre arrogante, autoritario, que -por citar historiadores (historiadoras) egipcios- “introdujo el patronazgo en la vida política, y un sistema de violencia y de manifestaciones públicas como arma contra la oposición” (Al-Sayyid Marsot 1985: 85)³⁵, y que “no creía en la política de partidos, y no consideraba al Wafd tanto un partido político como el representante de la nación” (Sonbol 2000: 116-117). Otros autores, entre ellos algunos de sus contemporáneos, consideraban que “era un autócrata que se preocupaba más por su propio poder que por el bien de Egipto y que, nacionalista o no, estaba dispuesto a llegar a compromisos en asuntos vitales a cambio de incrementar dicho poder”³⁶.

Lo cierto es que muchas de las actuaciones de Zaglul avalan en parte todos estos juicios negativos, así como -recordémoslo también- otras resaltan sus virtudes y una actitud auténticamente nacionalista y constitucionalista. Pero, de cualquier manera, no es en la auténtica naturaleza de Zaglul en lo que queremos centrarnos, sino, como hemos

³⁴ Al-Sayyid Marsot 1985: 83 y 85, según el orden de aparición de los fragmentos citados. Aparte de ser una excelente historiadora, Afaf Lutfi Al-Sayyid Marsot es sobrina de Ahmad Lutfi Al-Sayyid, a quien ya hemos mencionado, que compartió amistad e inquietudes políticas con Saad Zaglul al inicio de la carrera política de este, apartándose luego de él.

³⁵ Al-Sayyid Marsot (1985: 84) se refiere también a la creación de un “aparato secreto” por Zaglul y otros miembros del Wafd en 1919, que cometió actos terroristas.

³⁶ ١٩٨٨ علوبة، محمد علي: ذكريات اجتماعية وسياسية. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٨. Citado por Sonbol (2000: 117, n. 96).

señalado más arriba, en la imagen que la mayoría de los egipcios proyectaban sobre él: una imagen de alguien paternal, mesiánico, omnisciente; una imagen fruto de la devoción casi sagrada, una imagen que lleva a una actitud fiduciaria de las personas objeto del poder carismático, actitud a veces inasequible a la crítica y al juicio objetivo.

Como hemos mencionado en el capítulo 1.2 de esta Introducción, la clave del poder carismático de algunos dirigentes políticos y sociales no reside tanto en las características de esas personas, por destacadas y brillantes que hayan podido ser, como en la existencia de “situaciones carismáticas”, situaciones en las que se produce una veneración masiva por una persona que deviene en delegación política. Estas situaciones a menudo se dan cuando un “cuerpo social” en búsqueda de constituirse como comunidad política independiente y diferenciada busca una “cabeza”, y decide aceptar como tal una cabeza personal e individual. También se da cuando esa comunidad atraviesa momentos excepcionales de crisis.

Un argumento a favor de la idea de que la relación carismática depende más de que se dé el momento carismático o de la disposición a aceptar el poder carismático que de las virtudes o características de la persona que lo detenta, podemos encontrarlo en el gran apoyo popular con el que contó también la figura del sucesor de Saad Zaglul a la cabeza del Wafd, Mustafa al-Nahhás. Aunque al-Nahhás se situó un escalón por debajo de Zaglul en cuanto a popularidad e influencia, estas también fueron muy considerables, como señalan todos los historiadores y observadores contemporáneos a él. La diferencia entre Zaglul y Nahhás era que al parecer, según todos los observadores e historiadores, al-Nahhás era un hombre mucho menos dotado y brillante que Zaglul en todos los sentidos. Jean y Simonne Lacouture, que conocieron en persona el ardor de las masas por al-Nahhás como periodistas residentes en El Cairo desde 1950, expresaban la sorpresa de los extranjeros ante la influencia de este político, desde la distancia que les daba esa condición de extranjeros, aunque los Lacouture simpatizaran con los movimientos anticoloniales:

“«¿Qué puede seducir tanto a los egipcios de este tipo de cráneo puntiagudo?», se preguntaban todos los extranjeros. Lo que les encantaba era reconocerse en él, en sus humores, en sus impulsos, en sus rencores y en sus tics de lenguaje (...) Nahhás daba a cada egipcio la ilusión de que él mismo ejercía el poder, y más ajustadamente aún, de que, en el caso contrario [si Nahhás era apartado del poder], cada egipcio era apartado de él (...) Es una tentación ver en el apego del pueblo al Wafd un caso de narcisismo colectivo, del que la popularidad que no dejó de disfrutar Al-Nahhás es la manifestación más significativa” (Lacouture 1962: 94).

Narcisismo colectivo provocado por una identificación orgánica y por las heridas narcisistas que ese yo colectivo había recibido y recibía con el recurrente rechazo por parte del poder monárquico y colonial de sus aspiraciones y decisiones; narcisismo herido que

volvería a manifestarse pocos años después ante la figura de Gamal Abdel Náser, sin detrimento de que los elementos del juicio racional influyeran también en el apoyo a aquel de gran parte de los egipcios.

2.2.5 El comienzo del declive del Wafd. Nacionalismo, capitalismo y “cuestión social”

Desde mediados de los años 30, el panorama político egipcio cambió impulsado por el estancamiento de la lucha nacionalista, las transformaciones económicas y sociales y la emergencia vigorosa de nuevas corrientes ideológicas nacidas a lo largo de la década de 1920.

En 1930, las negociaciones del Gobierno wafdistas de al-Nahhás con los británicos para poner fin al control colonial de Egipto o reducirlo fracasaron por enésima vez, y al-Nahhás fue cesado por el rey, aprovechando la coyuntura y el apoyo implícito de los británicos. Entre 1930 y 1935 la constitución de 1923 fue suspendida y sustituida por otra mucho más restrictiva, que el Wafd y otros partidos boicotearon junto con las elecciones nacidas de ella. Así, el Gobierno quedó en manos de Ismael Sidqi, presidente de la Federación Egipcia de Industrias, que lo ejercería de manera cuando menos autocrática o, según algunos, dictatorial e incluso instaurando, según Abdel Malek (1962: 24), “un régimen de terror sangriento”.

El clima de agitación y rechazo del Wafd y otras fuerzas políticas al Gobierno, junto con la declarada disposición de aquel a concluir rápidamente un acuerdo con Gran Bretaña y los acontecimientos en la escena política internacional (con la ocupación de Etiopía por el Ejército italiano de Mussolini en 1935), hicieron que Gran Bretaña presionara para que a finales de 1935 se restaurara la Constitución de 1923, lo que en mayo de 1936 llevó de nuevo al Wafd al Gobierno. El 26 de agosto de 1936, el Gobierno de Nahhás firmó el nuevo Tratado Anglo-Egipcio. Aunque el tratado profundizaba en la independencia formal de Egipto, alcanzada en 1922, concediéndole sobre todo la soberanía en las relaciones internacionales, en la práctica reinstauraba el protectorado británico sobre Egipto, reformulando el dominio de aquel sobre el Canal de Suez con la permanencia de una base militar allí. Con respecto a “los cuatro puntos reservados” a Gran Bretaña en el anterior acuerdo de 1922, Egipto tan solo ganaba, a efectos prácticos, la eliminación del dedicado a la protección de los intereses de los extranjeros, y en concreto la supresión de sus beneficios fiscales y judiciales, un aspecto que beneficiaba de manera particular a la burguesía industrial y comercial autóctona aunque era un logro importante para todos los egipcios.

La firma del tratado de 1936 sería el primer hito que marcaría el declive del Wafd en la escena política egipcia. Además del relativo fracaso en la lucha nacionalista, señalaría

el dominio dentro del partido de la gran burguesía, que había sido camuflado por la dictadura de Sidqi. Tanto el Wafd antes de 1930 como Sidqi habían tomado medidas económicas, sobre todo aduaneras, para beneficiar a la “industria nacional” y protegerla de la competencia de los países extranjeros capitalistas, lo que en la práctica significaba proteger también los intereses británicos estrechamente relacionados con aquellos. No obstante, la participación financiera egipcia en la industria del país aumentaría de manera sustancial: entre 1934 y 1948, el 78% de los nuevos capitales invertidos en Egipto fueron egipcios, situando el balance global en 1948 en un 61% de capitales extranjeros y un 39% de capitales egipcios (Abdel Malek 1962: 25). La Segunda Guerra Mundial, con la presencia de grandes efectivos del Ejército británico en Egipto y las necesidades globales de sostener el “esfuerzo de la guerra”, facilitaría el despegue definitivo en Egipto de una industria moderna de gran escala, con el consecuente incremento del número de trabajadores y el nacimiento en los años 40 de una auténtica clase obrera.

Los periodos de expansión del capitalismo y de la economía egipcias, asociados a las guerras mundiales y a los años que las siguieron, no beneficiaron a las clases populares, sino todo lo contrario, sobre todo a causa del incremento del coste de la vida, que no fue acompañado por un incremento similar de los salarios. Entre 1913 y 1933, el coste de la vida aumentó de un 25%, mientras que los salarios aumentaron ligeramente. Sin embargo, las condiciones laborales y de vida eran a menudo muy duras, hasta el punto de que en 1937 la esperanza de vida de los trabajadores industriales era de 35,6 años, y el de las trabajadoras de 42,1 años³⁷. A ello hay que añadir que el desarrollo económico no era suficiente para hacer frente al incremento de la población y absorber las nuevas oleadas de jóvenes en busca de empleo. El permanente movimiento migratorio del campo a la ciudad contribuyó a la formación de un lumpen-proletariado desarraigado socialmente. El acceso a la educación media y superior dejó de ser la varita mágica que abría las puertas a un empleo y a una vida mejor: en 1937, 7.500 bachilleres y 3.500 diplomados universitarios se encontraban en paro (Al-Sayyid Marsot 1985: 95). Estos números, relativamente pequeños, han de ser inscritos en el marco de una sociedad mayoritariamente analfabeta, en la que los elementos letrados formaban parte de una élite social, aunque no económica, y estaban ligados por sus orígenes familiares a la burguesía pequeña y media tanto del campo como de la ciudad (véase el capítulo 2.2.2 previo).

El deterioro de las condiciones de vida, junto con la frustración nacionalista, provocó la radicalización de las posturas políticas en el seno de amplios sectores de la

³⁷ La carne y los huevos eran productos de lujo para los trabajadores industriales, de los que en torno a un 40% trabajaban 70 horas a la semana, y no tenían ningún día de descanso semanal. Peor aún era la situación de los miles de niños trabajadores, pues su remuneración se situaba en torno al 20% de la de los adultos (Beinin y Lockman 1998: 44-45).

sociedad. En 1935-1936 se produjeron numerosas revueltas estudiantiles, hasta el punto de que esos años fueron llamados en Egipto “los años de la juventud”. El año de 1936 conoció también una explosión de activismo laboral y sindical sin precedentes, y señaló el comienzo de la liberación de las organizaciones sindicales del patronazgo del monarca y de los partidos políticos, y del camino hacia la unión sindical. Los sectores jóvenes, urbanos y letrados de la sociedad egipcia, y la pequeña burguesía en general, se anticiparían en la busca de nuevas opciones políticas que dieran cauce a su insatisfacción con las políticas y la ineficacia, a sus ojos, del Wafd, mientras que el malestar de los obreros no se orientaría hacia la acción política propiamente dicha hasta mediados de los años 40.

2.2.6 El nacimiento de la clase obrera. Trabajadores, patronazgo y sindicatos independientes

Hasta finales de los años 30, el grueso de los trabajadores asalariados eran campesinos obligados a emigrar a las ciudades para ganarse la vida. Hasta que la industria comenzó a recuperarse de la política de Cromer, en la segunda década del siglo XX, la mayor parte de ellos trabajaron como jornaleros diarios en las obras públicas (en particular en el Canal de Suez), en los puertos y en otras pocas actividades. Estos trabajadores mantenían frecuentemente un pie y una fuente de ingresos en el campo. Cuando la industria repuntó, lo hizo en forma de pequeños talleres con un número muy reducido de empleados o ninguno, que se regían por relaciones de producción familiares o basadas en el antiguo sistema gremial. Todavía en 1937 la mitad de los establecimientos industriales egipcios no tenía empleados, y el 92% de los que sí los tenían empleaban a menos de 5 personas. Tan solo el 3% de dichos establecimientos empleaban a más de 10 empleados, si bien es cierto que reunían a 140.000 trabajadores (la empresa estatal de ferrocarriles, la empresa de tranvías de El Cairo, la Compañía del Canal de Suez, las fábricas de tabaco y poco más) (Beinin y Lockman 1998: 37). Únicamente desde finales de los años 30 comenzaron a ser numéricamente dominantes entre los trabajadores asalariados quienes dependían única y permanentemente de su salario, y lo hacían en el marco de empresas relativamente grandes, sustrayéndose a la visión del mundo de quienes vivían entre el campo y la ciudad o trabajaban en pequeños talleres asociados a una comunidad, a un cierto igualitarismo y a una manera de vivir.

La hegemonía política de las clases más pudientes determinó que hasta mediados de los años 30 prácticamente ninguna legislación atribuyera derechos a los trabajadores industriales, y mucho menos a los campesinos, a pesar de que se produjeran movimientos

organizados de protesta laboral desde finales del siglo XIX³⁸, y en particular a partir de la “revolución” nacionalista de 1919, que sembraría las semillas para la aparición de los primeros sindicatos de empresa a comienzos de la década de 1920. Estos sindicatos cayeron dentro de la órbita política del Wafd, que mantenía una actitud ambivalente ante los trabajadores, intentando ganarse su apoyo pero defendiendo explícitamente que las luchas sociales y políticas internas debían ser postergadas hasta el logro de la independencia nacional, sin ocultar gran parte de sus líderes que rechazaban toda radicalización y lucha de clases por parte de los trabajadores, a los que intentaban apaciguar con admoniciones típicamente burguesas y conservadoras, incluidas las de origen religioso³⁹.

La preocupación por controlar los incipientes sindicatos de trabajadores también invadió al propio rey Fuad, que en 1925 promovió la creación de un nuevo Sindicato de Trabajadores del Ferrocarril (نقابة عمال القطار المصري), al que subvencionó con una gran cantidad de dinero (3.000 libras egipcias) a cambio de que los trabajadores eligieran como su presidente (مستشار, lit. “consejero”) a Al-Sayyed Bacha Abu Ali exministro de Agricultura, dirigente en el Partido de la Unión, y gran terrateniente. Los trabajadores, por estas y otras presiones y consideraciones tácticas, aceptaron, y el patrón se repetiría en otros sindicatos a lo largo de los años 20. Incluso en aquellos sindicatos en los que no eran pro palacio se daba la singular característica de que sus máximos dirigentes no eran trabajadores, sino miembros del Wafd, abogados o políticos, que a menudo eran también beys, miembros o descendientes de las clases terratenientes. Esta paradójica situación llegaría a su paroxismo cuando en diciembre de 1930 la Federación General de Sindicatos Egipcios, creada dos años antes, eligiera al príncipe Abbás Ibrahim Halim, bisnieto de Mohammed Ali y primo del rey Fuad, como su presidente. Sin embargo, frente a lo que pudieran sugerir las apariencias, el llamado “príncipe de los trabajadores” desempeñó un papel complejo y contradictorio a la cabeza de la federación, pues, como señalan Beinín y Lockman, si bien él la utilizó para sus propios objetivos políticos, los trabajadores lo utilizaron a él y a su incesante e inteligente actividad para construir una federación independiente del Wafd y del resto de los partidos políticos⁴⁰.

³⁸ Dichos movimientos tuvieron algunos precedentes entre los estibadores de Port Said en la década de 1980, y posteriormente fueron protagonizados por los trabajadores de la industria del tabaco y, sobre todo, por los trabajadores de las empresas de ferrocarriles y de tranvías de El Cairo (Beinín y Lockman 1998: 48-82).

³⁹ El propio Saad Zaglul defendería la necesidad de postergar las luchas laborales, añadiendo que “[el día en que se lograra la independencia nacional] sin duda no todos los seguidores del Wafd se encontrarán en el mismo campo” (*Journal du Caire*, 21 de septiembre de 1923, citado por Beinín y Lockman 1998: 152-153). Beinín y Lockman (1998: 159-170) ofrecen un selecto muestrario de las admoniciones burguesas enumeradas.

⁴⁰ Algunos responsables británicos pensaban que el objetivo de Abbás Ibrahim Halim era remplazar a su

En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, los activistas sindicales egipcios habían alcanzado ya según Beinín y Lockman (1998: 238)

“una perspectiva coherente sobre la naturaleza de la clase obrera y sobre el papel que debería desempeñar el movimiento sindical. Esta perspectiva no era explícitamente socialista, aunque muchos de estos activistas estaban sin duda familiarizados con las ideas y los intelectuales socialistas. Más bien se trataba de un sindicalismo militante, un radicalismo de clase trabajadora orientado menos a la adquisición de poder político que a organizar la clase obrera, construyendo una conciencia de la identidad de clase y una autosuficiencia, y poniendo los fundamentos de un movimiento laboral fuerte y unido”.

Los intentos de construir ese movimiento sindical independiente, y el incremento de las huelgas y otras acciones de protesta, fueron contestados con medidas represivas por los Gobiernos no wafdistas y, así, en 1941 fue prohibida la Federación General de Sindicatos existente en ese momento. En 1942, como veremos, el Wafd retornaría al Gobierno, y lograría durante un breve espacio de tiempo recuperar el favor de los trabajadores que, según Beinín y Lockman (1998: 302), “habían aprendido a jugar el juego cliente-patrón”, ofreciendo apoyo político a cambio de beneficios laborales. Sin embargo, tras el enésimo desalojo del Wafd del poder en octubre de 1944, el movimiento sindical se separó definitivamente del Wafd y se politizó sin perder su independencia, estrechando sus relaciones con los militantes comunistas y con el ala izquierda del Wafd.

2.2.7 La emergencia de las nuevas corrientes políticas

En los años 20 del siglo XX habían nacido o se habían instalado en Egipto nuevas corrientes políticas que pronto se convertirían en partidos. Estas corrientes recorrerían caminos diferenciados hasta desempeñar un papel político importante en diversos momentos de los años 30 y 40.

La izquierda de orientación marxista dio a luz diversas organizaciones políticas desde la aparición del Partido Socialista (الحزب الاشتراكي) de Joseph Rosenthal y Salama Musa, en 1920, y del Partido Comunista (الحزب الشيوعي), en 1922, proveniente del anterior. Desde mediados de los años 40, cuando el movimiento comenzó a adquirir su máximo vigor, sus ideas y su organización se propagaron a través de centros de formación política y cultural como la Editorial de Estudios Científicos (دار الأبحاث العلمية) y el Comité para la

primo Fuad en el trono, y otros que era un antiimperialista convencido, pero lo cierto es que mostró una genuina preocupación por los derechos y el bienestar de los trabajadores, y que les brindó su protección -la sede de la federación de sindicatos se encontraba en su palacio residencial-, en la medida en que le fue posible, frente a la represión del Gobierno de Sidqi, hasta el punto de que el propio Halim fue detenido temporalmente en 1934 (Beinín y Lockman 1998: 195-217).

Difusión de la Cultura Moderna (لجنة نشر الثقافة الحديثة); órganos propios de prensa como *Al-Fagr al-Guedid* ("El nuevo amanecer"), *Omdurman*, *Al-Talía* (La Vanguardia) y *Al-Gamahir* ("Las masas", "El pueblo" o "La gente"). Algunos de esos centros y órganos de prensas se han mantenido vivos hasta hoy a través de numerosas vicisitudes.

La acción política de la izquierda marxista también fue vehiculada por medio de organizaciones sindicales inspiradas por ella o en las que adquirió un importante peso, sobre todo en las modernas industrias textiles de Chubra al-Jeima y Mahala al-Kubra. Su predicamento, que tuvo que luchar con las descalificaciones del comunismo basadas en argumentos religiosos y con el origen en muchos casos extranjero de sus líderes, se extendió, en definitiva, entre intelectuales, estudiantes, otros miembros de la pequeña burguesía y los obreros. Nunca tuvo un peso electoral importante, y a finales de los años 40 apoyaría incluso el voto al Wafd por razones estratégicas nacionalistas, pero desempeñaría un papel crucial en la formación de organizaciones alternativas transversales social e ideológicamente, como el Comité Nacional de Obreros y Estudiantes en 1945.

Otra corriente política que tuvo gran predicamento entre los jóvenes y la pequeña burguesía fue la del nacionalismo radical, de inspiración religiosa islámica y defensor de una suerte de socialismo no marxista, sin materialismo histórico ni lucha de clases. Esta corriente encontró su expresión organizada en el ya antiguo Partido Nacional (الوطني الحزب) fundado en 1908, y sobre todo en el Joven Egipto (مصر الفتاة), fundado en 1933, que en 1940 se convertiría en el Partido Nacional Islámico (الحزب الوطني الإسلامي), y en 1946 en el Partido Socialista de Egipto (حزب مصر الاشتراكي). El Joven Egipto, fundado en 1933, declaraba rechazar el parlamentarismo, a pesar de que en 1936 se convirtió en partido y de que en los años 40 sus sucesores se presentaron a las elecciones. Según él, la causa nacional había de ser defendida sin negociaciones ni concesiones, mediante la acción militante, de masas, incluso violenta, "hasta la evacuación de los británicos", y el aparato del Estado, legislativo y educativo, debía ser egipcianizado e islamizado. Sin embargo, en la práctica política efectiva el Joven Egipto fue siempre enemigo del Wafd, y posteriormente de la izquierda marxista, y un fiel aliado de Palacio hasta la segunda mitad de los años 30, cuando radicalizó sus posturas creando una formación paramilitar, los "camisas verdes" (القمصان الخضراء), dirigidos por Ahmad Husein, que entrarían en numerosas ocasiones en acción.

Un gran número de autores (Jankowski 1975) coinciden en calificar esta corriente simple y llanamente de "fascista", algo que parece bastante adecuado si tenemos en cuenta lo ya mencionado, a lo que cabe añadir que algunos de sus dirigentes, como Fathi Radwán, del Partido Nacional, y Ahmad Husein, de El Joven Egipto, asistieron en 1936 al congreso

del partido nazi alemán en Nuremberg⁴¹. Los británicos fueron de esta misma opinión, y en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, y en el marco del enfrentamiento con la Alemania nazi, forzaron la disolución del Partido Nacional Islámico. No obstante, el vigor de esta corriente ideológica se mantendría hasta la formación de un nuevo partido político, el Partido Socialista de Egipto, en 1946. En los años 80 del siglo XX, el ideario de estos partidos renacería con fuerza, despojado de los elementos fascistas, en el Partido Socialista del Trabajo (حزب العمل الاشتراكي), que luego perdería el adjetivo de “socialista” y se inclinaría hacia el islamismo de la mano de Ibrahim Chukri (vicepresidente del PSE a finales de los 40), Adel Husein, hermano de Ahmad, y Fathi Radwán, entre otros (véase II 3.2.4.2).

La otra gran fuerza política con un referente ideológico claro y apoyo popular, dejando al margen los partidos de los grandes terratenientes y de la alta burguesía industrial asociados a la monarquía, era la Asociación de los Hermanos Musulmanes (جماعة الإخوان المسلمين). Fundada en 1928 por Hasan al-Banna, y ancestro de las organizaciones islamistas modernas, a mediados de los años 30 comenzó a mostrar un perfil político, y a diferenciarse de otras asociaciones destinadas únicamente a la difusión del mensaje del islam y a la beneficencia para convertirse en los años 40 en una de las organizaciones más populares⁴², apoyándose en una eficaz organización, un principio jerárquico indiscutible⁴³ y una ambigüedad y secretismos de los que haría gala hasta nuestros días.

El ideario de los Hermanos Musulmanes era sencillo en su formulación y complejo para su interpretación y ejecución: defendían un “sistema” u “orden” islámico (نظام إسلامي) auténtico⁴⁴ que englobara todos los aspectos de la vida social, incluidos los políticos y los

⁴¹ Ahmad Husein publicó en 1936 en El Cairo un compendio de su visión política bajo el título de إيماني (*Mis creencias*), que Abdel Malek (1962: 30, nota 36) califica de “especie de *Mein Kampf*”.

⁴² Según las cifras que maneja Richard Mitchell (1969: 328) siguiendo fuentes internas de la Hermandad, en 1949, en el mayor pico de su efervescencia política, los Hermanos Musulmanes contarían con 500.000 “miembros activos” (عمالون) y 2.000 delegaciones. Teniendo en cuenta que en 1948-1949 la población total de Egipto apenas llegaba a los 20 millones de personas, esas cifras nos parecen algo exageradas, si bien Mitchell no lo considera así.

⁴³ Los diversos grados de pertenencia a la agrupación iban de “hermano asistente” a “hermano asociado”, “hermano activo” y “hermano combatiente” (Ternisien 2007:33). En la Ley Fundamental de la Hermandad adoptada en 1945, se establecía el juramento de obediencia al Guía General (المرشد العام) que los “hermanos activos” debían prestar en estos términos: “Me comprometo ante Dios (...) a tener completa confianza en el líder de los Hermanos Musulmanes, y a obedecer totalmente en toda circunstancia, feliz o desdichada” (Ley Fundamental, capítulo IV, art. 9, en R. Al-Sa`id (1977: 52) *Hassan al-Bannâ*, citado por Carré y Seurat (2001: 18).

⁴⁴ En el manifiesto del V Congreso de los Hermanos Musulmanes, celebrado en El Cairo en 1939, Hasan al-Banna explicaba: “No quiero decir en absoluto que los Hermanos Musulmanes presenten un islam nuevo, diferente del que ha aportado nuestro maestro Mahoma de parte de su señor. Digo más bien que numerosos musulmanes a lo largo de muchos siglos han aplicado al islam imágenes, adjetivos, definiciones y atributos sacados de ellos mismos y que los han utilizado de manera dañina (...) y que han diferido entre ellos considerablemente sobre la significación del islam. Por ello, los adeptos del islam han recibido numerosas representaciones más o menos cercanas o alejadas del islam primero e ideal que el Enviado de Dios y sus

económicos, otorgando un lugar preferente al poder político y a la acción política:

“El islam en el que creen los Hermanos Musulmanes ve en el poder político uno de sus «pilares». La aplicación efectiva es para él tan importante como la orientación de principio. El Profeta ha hecho del poder político una de las «raíces» del islam. Y en nuestros libros de derecho musulmán, el poder político se cuenta entre las «cuestiones de dogma» y las «raíces» del derecho, y no como objeto de elaboraciones jurídicas, como una de las «ramas» del derecho. El islam es a la vez conminación al deber y ejecución, así como es la legislación y la enseñanza, la ley y el tribunal, y no el uno sin el otro”⁴⁵.

Interrogado sobre los aspectos concretos del poder político, Hasan al-Banna insistiría una y otra vez en el principio: “Nuestra Constitución es el Corán” o “No queremos otra Constitución que el Corán”. De la misma manera, rechazaría los partidos políticos:

“Si nos mantenemos apartados de los partidos y los grupos es porque ha habido y hay entre esos grupos rivalidad y batallas, lo que no es conforme a la fraternidad musulmana. El mensaje islámico une, no divide”⁴⁶.

El motor del poder político, en el sentido de poder que hemos explicitado más arriba, sería, siguiendo al pensador islámico del siglo XIV, Ibn Taimiyya, la formación de una opinión pública musulmana (y una organización parapolítica, en el caso de los Hermanos) preocupada por la vigencia de la شريعة, la ley islámica, y “capaz, en su caso - según señalan Carré y Seurat-, no de derrocar el poder existente, sino de conducirlo a islamizar las instituciones”. El poder ejecutivo lo tendría “en cada Estado musulmán, un jefe fuerte, ilustrado islámicamente, que, bien entendido, obtendría su poder de la comunidad-nación islámica que gobierna” (Carré y Seurat 2001: 37). El principio de que los Hermanos Musulmanes no quieren remplazar a los gobernantes, sino tan solo empujarlos a actuar en el sentido mencionado, sería mantenido por aquellos hasta principios del siglo XXI, como la mayor parte de sus principios doctrinales, a pesar de su evolución en otros aspectos estratégicos. La única vía de participación directa en el gobierno del máximo dirigente sería el principio de la شورى, “la consulta de los expertos”, instituido por Mahoma en su práctica de gobierno y por Hasan al-Banna en su organización. Volveremos sobre la *chura* y sus diversas actualizaciones en el capítulo II 7.4.

compañeros han encarnado” (citado en francés por Carré y Seurat 2001:36-41)

⁴⁵ *Mudhakkirât al-da`wa wa-l-dâ`iyya*, El Cairo, s.d, pág. 283. Citado en francés por Carré y Seurat (2001: 36). A partir de las explicaciones de Carré y Seurat hemos comprobado que Al-Banna utilizó para la expresión traducida por “pilares”, el término أركان, el mismo utilizado para hablar de los cinco pilares del islam sunní (<http://goo.gl/rkPMH> consultado el 15 de enero de 2013).

⁴⁶ Hassan al-Bannâ *Majmû`at al-rasâ`il*, Beirut s.d., pág. 278, citado en francés por Carré y Seurat (2001: 27).

En lo social, los Hermanos Musulmanes defendían un rigorismo que rechazaba los hábitos alejados del islam según su visión de la moralidad islámica, y se oponían, en consecuencia, al consumo de alcohol, el baile, la música, el cine y los lugares en que todo ello se permitía. En lo económico, manifestaban rechazar el capitalismo, el socialismo y el comunismo por igual, defendiendo una justicia social islámica⁴⁷ y la consecución de esta a través de la reordenación de la economía mediante los principios del islam: la limosna obligatoria de los musulmanes (الزكاة), la prohibición de la usura (ربا).

Para los adversarios y críticos de los Hermanos Musulmanes (Abdel-Malek 1962; Shoukri 1981), la naturaleza de esta organización se manifestaría, sin embargo, más por sus prácticas y por sus alianzas, cambiantes y oportunistas, que por su ideario. Desde el inicio de su actividad política, a mediados de los años 30, se aliaron con el trono para combatir el laicismo del Wafd y de otras fuerzas políticas y sociales y también el propio parlamentarismo, siguiendo la estela de su líder que, según un informe de la policía, ya en 1927 se había unido a una manifestación a los gritos, entonces muy extraños, de “¡Viva el rey! ¡Abajo el Parlamento y el Gobierno de Saad Zaglul!”⁴⁸. Más adelante, y a pesar de que la lucha contra la ocupación extranjera constituía uno de sus principales lemas políticos, los Hermanos Musulmanes -siempre según esos críticos- mostrarían una gran pasividad ante la ocupación, mientras que, por el contrario -y esto sí que está documentado- Al-Banna mantendría una comunicación constante con las autoridades británicas, hasta el punto de que dichos contactos habrían continuado tras 1952 con la bendición del propio Gamal Abdel Násir (si bien ello sería posteriormente uno de los motivos de acusación legal de aquel a los Hermanos)⁴⁹.

Otro aspecto destacado de las actividades de los Hermanos Musulmanes serían sus acciones violentas. Entre finales de 1938 y principios de 1939 crearon un “aparato secreto” (جهاز سري) que incluía una rama paramilitar, la cual se mantendría inactiva públicamente durante algunos años, pero luego aparecería en escena para protagonizar una serie de atentados sonados, además de dirigirse en enfrentamientos callejeros contra otras corrientes políticas (Ternisien 2007: 38-40).

⁴⁷ “Justicia social en el islam” (*Al-Adala al-ichtima`iyya fi-l-islam*, El Cairo 1949) es el título de uno de los primeros libros políticos de Sayyed Qutb, que en los años 60 se convertiría en ideólogo fundamental de la Hermandad. Existe traducción española en Almuzara, Córdoba, 2007. Volveremos sobre ello en II 2.4.

⁴⁸ Documento de la policía de El Cairo fechado el 5 de febrero de 1927, recogido en J. Salim: *La police politique gouverne l'Égypte* (en árabe), El Cairo, 1971, pág. 315; citado por Carré y Seurat (2001: 14).

⁴⁹ Anwar Abdel-Malek (1962: 34) señala que la obra de 1945 de Husein Muhammad: *al-Ikhwân al-muslimun fi-l-mizân*, inencontrable ya a finales de los años 50, constituye “un dossier irrefutable” en el sentido de los contactos de los Hermanos con la embajada británica y de su pasividad frente a la ocupación. El testimonio de Hasan al-Achmawi (*al-Ikhwân wa-l-thawra*, El Cairo, 1977, pág. 37-39), partidario de los Hermanos Musulmanes, es la fuente informante de los contactos entre los británicos y los Hermanos Musulmanes con el conocimiento de Násir (citado por Carré y Seurat 2001: 55-56).

Finalmente, hay que destacar cómo las asociaciones de mujeres y, en general, el movimiento feminista se convierten también en fuerza de presión política aun a pesar de su reducida representación social, muy limitada a las élites intelectuales urbanas. En concreto, en 1923, coincidiendo con la independencia, se había constituido la Asociación Feminista Egipcia presidida por Huda Saarawi, que jugó un papel notable en las discusiones políticas del momento sobre los derechos civiles y políticos de las mujeres (Ruiz de Almodóvar 1989).

2.3 LA CRISIS DEL SISTEMA (1948-1952)

2.3.1 Los efectos de la Segunda Guerra Mundial

A finales de 1941, la situación de las Fuerzas Armadas británicas en África y Oriente Medio era apurada: las tropas del mariscal Rommel ocupaban el extremo noroccidental de Egipto, donde la presencia alemana despertaba numerosas simpatías: en algunos medios, como hemos visto, por razones ideológicas, y en muchos otros, incluido el Palacio Real, por razones estratégicas, pues confiaban en que pudiera librarles del dominio británico. El rechazo que el control británico generaba era aún mayor que antes de la guerra, pues esta, en cuyas dimensiones mundiales e ideológicas la mayoría de los egipcios no se sentían implicados, había traído una inflación galopante, cartillas de racionamiento y hambre. A ello hay que añadir que el elevado número de soldados británicos en Egipto, además de problemas de abastecimiento, causaba numerosos problemas sociales, pues los hábitos de vida y ocio de los soldados, que provocaron la expansión de los lugares de alterne y diversión, chocaban con los de gran parte de la población, especialmente sus sectores más conservadores, representados políticamente por los Hermanos Musulmanes y otras fuerzas de inspiración religiosa a las que hemos hecho referencia en los capítulos precedentes. Temiendo la hipotética colaboración del monarca y las fuerzas más conservadoras con las potencias del Eje, y aprovechando la situación general de descontento con las políticas gubernamentales, que provocaba continuas reivindicaciones laborales y disturbios sociales, las autoridades británicas decidieron imponer al rey Faruq un Gobierno del Wafd: el 4 de febrero, los tanques británicos rodeaban el palacio real de Abdín y lanzaban un ultimátum a Faruq: o nombraba un Gobierno dirigido por Nahrás o sería depuesto.

Obviamente, Nahrás, que tras ser nombrado presidente del Gobierno declaró su compromiso con el Tratado Anglo-Egipcio de 1936, había llegado previamente a algún tipo de acuerdo con los británicos, y su aceptación de llegar al Gobierno “sobre la punta de las

bayonetas británicas”, como se diría entonces, asestó otro golpe a la gran consideración que la mayoría de los egipcios tenían todavía hacia el Wafd y, por paradójico que pudiera parecer, se fortaleció la posición del rey (Beinin y Lockman 1998: 288). Las políticas inmediatas del Gobierno wafdistas, ya controlado por su ala derecha y por la influyente figura de Fuad Serag Eddín, no harían más que influir en esa dirección: se negó a levantar el Estado de sitio y la censura, contra los que tanto había clamado en los años anteriores y durante el proceso electoral subsiguiente llegó a un acuerdo con los Hermanos Musulmanes para que estos no se presentaran a las elecciones, a cambio de medidas contra los lugares de alterne y de tolerancia con las actividades públicas de los Hermanos (Martín Muñoz 1992: 176).

El Wafd ganó las elecciones de 1942 por mayoría absoluta, pero lo hizo en el marco de una participación electoral muy escasa (véase la tabla 2), y enfrentándose tan solo al Partido Nacional y a candidatos independientes, pues los otros partidos asociados al monarca las boicotearon⁵⁰. A ello hay que añadir que las prácticas electorales del Wafd estando en el poder eran por entonces tan dudosas como las de sus adversarios, de creer a uno de sus principales y más respetados dirigentes, Makram Ebeid, exministro de Finanzas, que en 1943, tras promover una escisión del Wafd y crear el Bloque Wafdistas Independiente (الكتلة الوفدية المستقلة) publicó un panfleto, el *Libro Negro del Wafd* (الكتاب الأسود), lit. *El libro negro sobre el negro presente*), en el que denunciaba numerosas actuaciones teñidas de corrupción y nepotismo de su antiguo partido, cuya imagen contribuiría a deteriorar.

El Wafd permaneció en el Gobierno nada más que dos años, hasta que resultó patente que el triunfo en la guerra sería para los aliados y el monarca y sus aliados pudieron de nuevo unirse para descabalarlo del poder en octubre 1944. Se convocaron nuevas elecciones para enero de 1945, que fueron boicoteadas por el Wafd.

El fin de la guerra no acabó con las penurias económicas de la mayoría de los egipcios, a pesar de que supuso un formidable empuje para el capitalismo local⁵¹: el crecimiento de la inflación se mantuvo y en 1950 el salario medio real (en relación con el aumento del coste de la vida) de los trabajadores egipcios aún no había alcanzado el nivel anterior a la confrontación mundial⁵².

A la crisis de los partidos políticos tradicionales, y del sistema político en su

⁵⁰ En las elecciones de 1942, el Wafd obtuvo el 87,8% de los escaños, pero tan solo el 58,3% de los votos, mientras que la participación fue de apenas el 33% de los electores (Martín Muñoz 1992: 177-178).

⁵¹ Los capitales invertidos en las empresas egipcias en 1939-1945 pasaron de 86 a 106 millones de libras egipcias, y la producción industrial pasó de 13 a 18 millones de libras al año, empujada por el crecimiento de los sectores textil, del cemento, azúcar, aceite, petróleo, alcohol etc. (Abdel Malek 1962: 25).

⁵² Las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo egipcio de 1951 señalaban que el salario medio real en 1950 era del 88% respecto al de 1938 (Beinin y Lockman: 1998: 268).

conjunto, manifestada en la abstención y en la proliferación de las candidaturas independientes⁵³, se unió la exacerbación de la crisis económica y la emergencia con fuerza arrolladora de “la cuestión social”. A principios de los años 40, el movimiento obrero se había convertido, como hemos visto, en un actor político de primer orden a través de un paradigma clientelista de intercambio de beneficios con los gobernantes. Desde mediados de la década se convertiría en un actor político independiente, dispuesto a unir su fuerza a la de otros para defender conjuntamente posturas políticas tanto laborales y sociales como nacionales.

2.3.2 El colapso: radicalización y nuevas formas de movilización política

Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, los británicos olvidaron sus promesas de negociar rápidamente un nuevo acuerdo sobre soberanía con los egipcios, y la crisis del sistema político en su conjunto se manifestó con toda su virulencia. El monarca, el sistema de partidos y los propios partidos tradicionales, incluida la dirección de Wafd, perdieron su autoridad, aunque este último volviera a imponerse ocasionalmente en las elecciones gracias en parte al apoyo estratégico de algunas de las nuevas fuerzas activas en el escenario político.

Como mencionábamos unas líneas más arriba, el movimiento obrero se constituyó en un actor político principal. La fuerza reivindicativa de las clases trabajadoras en su conjunto se vio limitada, sin embargo, por el mantenimiento de la distancia entre los trabajadores agrícolas y los trabajadores industriales y urbanos y la pequeña burguesía en general. El Wafd se había opuesto frontalmente al nacimiento de movimientos reivindicativos entre los campesinos⁵⁴, y los propios obreros industriales y los militantes de izquierdas que habían trabajado por la creación del movimiento sindical desde los años 30 prácticamente los habían ignorado en sus proyectos organizativos, conscientes de la mayor dificultad de acceder a ellos. Sin embargo, los movimientos obreros eran conscientes de que “la cuestión social” era tan acuciante en el campo como en la ciudad, si no más, y la tendrían en cuenta en sus reivindicaciones políticas, de modo que obligaron al resto de las fuerzas políticas a hacer lo propio.

⁵³ En 1942 los candidatos auténticamente independientes (no asociados a ningún partido, puesto que también se presentaron como independientes miembros del Partido Liberal Constitucional y del Partido Saadista, que boicoteaban las elecciones) obtuvieron el 21% de los votos y el 5,3% de los escaños. En las elecciones de 1945, las candidaturas independientes fueron un tercio del total presentadas, y obtuvieron el 10% de los escaños (Martín Muñoz 1992: 178-181).

⁵⁴ Cuando en septiembre de 1942 el Wafd legalizó la formación de sindicatos, mediante la Ley nº 85 de ese año, prohibió explícitamente la formación de estos entre el campesinado (Beinin y Lockman 1998: 291-293).

En 1945 nació el Comité de Trabajadores para la Liberación Nacional-Organización Política de la Clase Trabajadora (الهيئة السياسية للطبقة العاملة, CTLN), organización promovida por los sindicalistas ligados al grupo comunista nucleado en torno a la revista *El Nuevo Amanecer* y a militantes como Yusuf Darwish y Yusuf al-Mudarrik. Esta organización, como ya apunta su denominación, pretendía unir a las clases populares bajo un programa político, presentado el 8 de octubre de 1945, que declaraba buscar su liberación tanto “del yugo del imperialismo como de la explotación política interna”⁵⁵. Tras el abandono inmediato de Egipto por parte de las fuerzas británicas, el CTLN exigía la redistribución de la tierra y otras medidas para mejorar la condición de los campesinos; reformas sanitarias y educativas; la nacionalización de todos los monopolios y el desarrollo de la economía nacional; reformas políticas internas, como la instauración del voto de las mujeres; la supresión de la potestad del rey de disolver el Parlamento; la disolución de la policía política; y la ampliación de las libertades civiles (Beinin y Lockman 1998: 337).

Esta confluencia de reivindicaciones nacionalistas y constitucionalistas con otras sociales, algunas implícitamente anticapitalistas e incluso con ribetes socialistas, sumada a los primeros indicios de apoyo popular, provocaron la alarma del Gobierno y de los sectores conservadores de la sociedad. Tras intentar cooptar el movimiento, el Gobierno optó por la represión, cesando en sus puestos de trabajo a varios dirigentes sindicales en noviembre, deteniendo a otros en diciembre, y ocupando policialmente la ciudad Chubra al-Jeima, feudo del CTLN, en diciembre. Los trabajadores de esta ciudad hicieron una huelga de más de una semana a principios de 1946, y la espiral contestación-represión-contestación creció.

La nueva orientación política marcada por el CTLN atrajo inmediatamente a otros sectores socioprofesionales y fuerzas políticas. Pocos meses después de su formación, entre el 18 y el 19 de febrero de 1946, se constituyó el Comité Nacional de Obreros y Estudiantes (اللجنة الوطنية للعمال والطلبة, CNOE), a cuya formación contribuyeron, además de asociaciones sindicales y estudiantiles, representantes de los partidos marxistas y el ala izquierda del Wafd, nutrida de la pequeña burguesía, intelectuales, profesionales y estudiantes, que se había constituido en corriente dentro del partido en 1945 con la denominación de La Vanguardia Wafdist (الطليعة الوفدية).

El bautismo de fuego del CNOE fue sonado. Para el 21 de febrero de 1946, tan solo dos días después de su constitución, llamó a una huelga general, consiguiendo reunir en El Cairo una multitud de entre 40.000 y 100.000 personas bajo el lema de “Día de la Evacuación”. Un incidente provocado por las Fuerzas Armadas británicas concluyó con la

⁵⁵ Programa del CTLN hecho público en 1945, citado por Beinin y Lockman (1998: 336).

destrucción de varios vehículos blindados, 121 heridos y 23 manifestantes muertos. En una docena de las principales ciudades de Egipto la huelga y las manifestaciones también fueron exitosas.

El 4 de marzo fue convocada en Egipto una segunda huelga general en memoria de los sucesos de El Cairo, bajo el lema de “Día de los mártires”. En la capital, la manifestación fue poco numerosa, pero Alejandría tomó el relevo, y los enfrentamientos entre las tropas británicas y los manifestantes se reprodujeron, dejando un saldo de 28 manifestantes muertos y 342 heridos. En protesta por estos sucesos, las fábricas, los periódicos, las tiendas y las escuelas cerraron sus puertas.

Desde 1919, Egipto no había conocido protestas nacionalistas ni sociales de tanta amplitud numérica y social como las de principios de 1946. Tampoco desde entonces habían vuelto a atisbarse aires revolucionarios, en este caso teñidos de un inequívoco aire izquierdista. La respuesta de los medios conservadores fue inmediata: el monarca recuperó prontamente, el 17 de febrero de 1946, al detestado y temido Ismail Sidqi, todavía presidente de la Federación Egipcia de Industrias, para la presidencia del Gobierno. Tras unos meses de capear como pudo el temporal, entre junio y julio de 1946 Sidqi lanzó una campaña represiva aprovechando las divisiones surgidas en el movimiento sindical y en la dirección del CNOE: un gran número de dirigentes sindicales y militantes de izquierdas fueron arrestados y se cerraron todos su periódicos, revistas y asociaciones, e incluso el diario wafdistas *Saut al-Umma* (*La voz de la Nación*), dirigido por Mohammed Mandur. Asimismo, el 11 de julio se presentó en el Parlamento un proyecto de ley anticomunista.

Por su parte, los Hermanos Musulmanes, el Joven Egipto y el Partido Nacional formaron en marzo de 1946 un Frente Nacional que, bajo la intención declarada de alcanzar la independencia de Egipto sin condiciones, pretendía disputar el favor popular a los comunistas y el ala izquierdista del Wafd. Los Hermanos Musulmanes, en particular, desarrollaron una intensa actividad en la prensa, las universidades e incluso en el movimiento sindical. Su propaganda y su acción -incluida la acción violenta- se dirigieron, en nombre de la religión, contra el frente wafdistas-comunista. Para minar el terreno de este, su dirigente, Hasan al-Banna, comenzó a defender por entonces, como señalan Carré y Seurat (2001: 45), una serie de medidas redistributivas relativamente cercanas la línea general de las demandas extendidas entre socialistas, comunistas, el ala izquierda del Wafd y el Joven Egipto, como la reducción de las grandes propiedades agrarias, con compensaciones justas a los expropiados, y la distribución de las propiedades del Estado entre los pequeños propietarios. Sin embargo, según sus críticos, los Hermanos Musulmanes no hacían nada en la práctica contra el ocupante⁵⁶, con quien, por el contrario,

⁵⁶ Muhammad Husein, militante comunista portavoz de la Editorial de Estudios Científicos, publicó en

mantenían estrechos contactos, como ya hemos señalado (véase el capítulo 2.2.7).

Entre finales de 1947 y principios de 1948, el movimiento sindical, recuperado organizativamente de la represión de Sidqi, resurgió con una fuerza inusitada, y a las protestas laborales se unieron sectores profesionales como enfermeros, ingenieros y gran parte de los trabajadores del Estado. A diferencia del pasado, en numerosas ocasiones los trabajadores perdieron en seguida la paciencia ante la represión policial, y la respuesta violenta contra la policía comenzó a constituir un paradigma. El Gobierno, el aparato del Estado, los partidos parlamentarios, el conjunto del sistema estatal y político, perdían la escasa autoridad que a duras penas habían conservado hasta entonces.

Otro indicio importante de la pérdida general de autoridad del estamento político del sistema fue el recrudecimiento de la violencia política, y en particular del recurso a los atentados, rodeados muchas veces de la incertidumbre acerca de los autores de ellos y sus instigadores⁵⁷. Ya a principios de los años 20, el Wafd dirigido por Zaglul había contado con un aparato secreto -cuya existencia solo era conocida por el propio Zaglul y por sus miembros- que había organizado atentados contra políticos egipcios y contra algún dirigente militar británico, si bien no está claro que todos ellos, como el de Sir Lee Stack, comandante y gobernador general del Sudán Anglo-Egipcio entre 1917 y 1924, fueran aprobados por Zaglul. Posteriormente, desde mediados de los años 30, el propio Wafd, el Joven Egipto, los Hermanos Musulmanes y otros partidos formaron milicias o escuadrones de choque (conocidos popularmente como “los camisas de colores”), destinados a solventar disputas partidistas por la fuerza o a hostigar ocasionalmente a los británicos sin que se produjera, en general, derramamiento de sangre. Desde finales de los años 30, y en particular a partir de la Segunda Guerra Mundial, estos grupos se multiplicaron, radicalizaron en sus acciones, y en muchos casos se difuminó su relación orgánica con partidos y organizaciones políticas.

En apenas un año se produjeron tres atentados contra dirigentes políticos (Ahmad Maher, presidente del Gobierno del partido saadista, muerto el 24 de febrero de 1945; al-

1945 un detallado análisis de las publicaciones de Hasan Al-Banna y de los editoriales de la revista *Al-Da'wa* (الدعوة), órgano de prensa de los Hermanos Musulmanes, en la obra titulada *al-Ijwán al-muslimun fi-l-mizán* para demostrar que la lucha nacionalista apenas estaba presente en el discurso de la organización (citado por Abdel Malek: 1962: 34). Carré y Seurat (2001) no aluden tampoco a que exista esta inquietud entre la Hermandad en su detallado estudio sobre su historia.

⁵⁷ La cuestión de los asesinatos políticos en la primera mitad del siglo XX, de su auténtica autoría y de sus instigadores volvió a ser objeto de discusión a partir de los años 70, cuando se relajó la censura sobre las publicaciones políticas. Junto a los historiadores profesionales, los grupos políticos implicados y aún existentes han venido mostrando un particular interés en dar la versión de la historia que se ajusta a la suya propia. En este sentido, es de señalar la labor de los Hermanos Musulmanes, que en los últimos años están desarrollando la *Ikhwanwiki*, “la wikipedia de los Hermanos” (www.ikhwanwiki.com). En su página en internet pueden encontrarse publicaciones de historiadores independientes y reconocidos junto a elaboraciones propias, aparentemente siguiendo el procedimiento colaborativo de los documentos wiki.

Nahhás, ileso, el 6 de diciembre de 1945; y Amín Osmán, dirigente del Wafd, muerto el 5 de enero de 1946). En un principio, los Hermanos Musulmanes fueron acusados de cometerlos o instigarlos, sin embargo hoy parece indiscutible para los historiadores que el primero fue cometido por Mahmud al-Aisawi, miembro del Partido Nacional refundado y exmiembro del Joven Egipto⁵⁸; el segundo por la “guardia de hierro” del rey Faruq; y el tercero por Husein Taufiq, líder de un pequeño grupo (del que era miembro Anwar el-Sadat, futuro presidente de Egipto) al que no se conoce relación orgánica con ningún partido político.

El grupo de Husein Taufiq, estudiado por Abdel Azim Ramadán⁵⁹, presenta un perfil sociológico e ideológico que este historiador considera extensible a muchos otros grupos similares que se habían constituido en esos años: jóvenes nacionalistas, con estudios secundarios y la mayoría universitarios todavía, dispuestos a utilizar la violencia contra los británicos y contra todos los políticos egipcios tradicionales con responsabilidades de poder por considerarlos traidores, habida cuenta de sus connivencia con los británicos y con un sistema político estéril de cara a los objetivos nacionalistas. A ello cabe añadir, en muchos casos, su atracción por la Alemania nazi y la relación de algunos de sus miembros, como el propio Sadat, con organizaciones políticas islamistas radicales, así como profundos sentimientos de animadversión hacia los británicos derivados de la frustración de sentirse inferiores y subordinados en su propio país. En definitiva, un perfil sociológico e ideológico estrechamente relacionado con el de los miembros del Joven Egipto -disuelto en esa época- y sus sucesores, y cercano en algunos aspectos al de los seguidores de los Hermanos Musulmanes.

En estas circunstancias convulsas, un asunto de política exterior que también había quedado en suspensión durante la guerra mundial se reavivó para acabar teniendo gran importancia en la evolución política de Egipto: se trata de la cuestión de Palestina. Desde la revuelta árabe de 1936 diversos sectores de la sociedad egipcia habían mostrado cierta preocupación por la creciente presencia sionista en Palestina, e incluso algunos militantes de los Hermanos Musulmanes habían participado en la revuelta. Sin embargo, las autoridades británicas habían advertido firmemente a las autoridades y al Wafd contra cualquier apoyo oficial a los palestinos, a cuyos líderes se les prohibió hablar públicamente en Egipto.

⁵⁸ Ahmad Maher fue asesinado cuando se dirigía del Parlamento al Senado (مجلس الشيوخ) para convencer a los miembros de este de que Egipto debía declarar la guerra a las potencias del Eje. La defensa de Mahmud al-Aisawi fue asumida por Fathi Radwán, presidente del nuevo Partido Nacional, quien reconoció que al-Aisawi era miembro de su partido.

⁵⁹ رمضان، عبد العظيم: اغتيال أمين عثمان، مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر، القاهرة، ١٩٩٢ (consultado en *Ikhwanwiki* http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=عثمان_أمين_اغتيال el 13 de octubre de 2011). Este libro forma parte de una colección sobre los asesinatos políticos en Egipto dirigida por el propio Abdel Azim Ramadán.

Al finalizar la Guerra Mundial, la cuestión de Palestina volvió a ocupar un lugar central en Oriente Medio y algunos grupos políticos egipcios, principalmente los Hermanos Musulmanes, hicieron de ella, y de la crítica a la pasividad del Gobierno, uno de sus principales campos de batalla política, hasta el punto de que suscitó la ruptura definitiva de la Hermandad con el Palacio Real y los partidos afines a él. Tras la retirada de las fuerzas británicas y la declaración unilateral de independencia del Estado de Israel el 15 de mayo de 1948, finalmente Egipto participó en la primera guerra árabe-israelí por decisión personal de Faruq y contra la opinión de su Gabinete, que alegaba que el Ejército egipcio no tenía armas ni preparación para ello⁶⁰. Los Ejércitos árabes sufrieron una estrepitosa derrota, que se hizo especialmente dolorosa para el Ejército egipcio y el conjunto de la población cuando se supo que las armas compradas en Bélgica por encargo del rey, defectuosas e incluso peligrosas para sus portadores, habían hecho millonarios al rey y a sus intermediarios. Entre los oficiales egipcios humillados por la derrota se encontraba Gamal Abdel Náser, joven oficial que encabezaría el golpe de Estado de los Oficiales Libres pocos años después.

El Gobierno egipcio había aprovechado el comienzo de la guerra y la declaración del Estado de sitio para internar a miles de sindicalistas, militantes comunistas, progresistas y wafdistas en el campo de concentración de Al-Tor (الطور), junto al Mar Rojo, a pesar de que, como hemos apuntado, quien se levantó contra el poder constituido a raíz de la guerra de Palestina fueron los Hermanos Musulmanes⁶¹. Como ya habían hecho en 1936, estos habían enviado escuadrones al combate al lado de los palestinos desde los primeros meses de 1948, antes de la declaración oficial de guerra. El Gobierno egipcio les conminaría a integrarse en el Ejército regular y obedecer sus órdenes, a las que los Hermanos harían reiteradamente oídos sordos. Mientras tanto, desde marzo de 1948 en Egipto se producía una interrumpida oleada de atentados, atribuidos en su mayor parte a los Hermanos Musulmanes, y dirigidos contra intereses o población judíos, pero también contra los jueces y los altos mandos de policía implicados en la represión política. Finalmente, el 8 de diciembre, el presidente del Gobierno, Mahmud al-Nuqrachi, decretó la disolución de la Hermandad, sellando con ello su sentencia de muerte, ejecutada veinte días después por un miembro de la cofradía, según la dirección de esta sin el conocimiento y la autorización de

⁶⁰ Según Al-Sayyed Marsot (1985: 102), el presidente del Gobierno egipcio, Mahmud al-Nuqrachi, y su ministro de Defensa insistieron ante el rey en una reunión ex profeso en que Egipto no estaba militarmente preparado para ir a la guerra, para al día siguiente leer en los periódicos que Egipto había declarado la guerra a Israel.

⁶¹ Hay que señalar, sin embargo, que la izquierda marxista de la época, en nombre de su internacionalismo, era favorable al reconocimiento del Estado de Israel dentro de los límites establecidos por la ONU, así como a la creación de un estado palestino, el retorno de los refugiados y la firma de un tratado de paz con Israel.

sus dirigentes. La mayor parte de la cúpula de la Hermandad sería detenida en los días siguientes, pero su guía supremo, Hasan al-Banna, quedaría exento de la medida. El 12 de febrero de 1949 fue asesinado a instancias del Gobierno y/o el monarca.

2.3.3 La antesala del golpe de Estado de los Oficiales Libres: ¿un escenario prerrevolucionario?

Tras la firma del armisticio con Israel en febrero de 1949, la posición del rey y del Wafd era tan débil que convinieron en formar un Gobierno de unidad nacional, del que formaría parte el Wafd y que daría paso a nuevas elecciones. Estas se celebraron en enero de 1950, y fueron ganadas de nuevo por el Wafd, pero en esta ocasión se impuso con solo el 54% de los votos, con una participación cercana al 25% de la población en edad de votar y una participación todavía más ínfima en las grandes ciudades: 112.000 votos válidos en los llamados “gobernados urbanos” de El Cairo, Alejandría, Suez, Damietta y el Canal de Suez (que albergaban a 3,5 millones de personas, el 18% de la población de Egipto) frente a 2.370.000 de votos en las circunscripciones de mayoría rural⁶².

En cuanto a la adscripción socioeconómica de los nuevos diputados, un 62,7% eran propietarios agrícolas, y de ellos un 35,7% podían considerarse grandes terratenientes, mientras que el 26,9% restante eran terratenientes medios. Los grandes industriales constituían el 14,1% -si bien hay que tener en cuenta que una parte de los terratenientes también eran industriales-, mientras que el 25% restante estaba formado por profesionales (20%) y funcionarios (5%)⁶³.

Los resultados electorales -obtenidos, sin duda, con un amplio recurso a las prácticas clientelistas en las zonas rurales- y la composición socio-profesional del Parlamento muestran cómo el sistema político egipcio formal y las inquietudes y prácticas políticas de los sectores sociales politizados marchaban por caminos paralelos sin puntos de confluencia. En un intento de acercar la realidad social a él, más que a la inversa, el programa de Wafd y su dirigente Fuad Serag Eddín, gran terrateniente, habían calificado durante la campaña electoral a su partido de “socialista”, sin dejar de manifestar su rechazo al comunismo⁶⁴. Juegos malabares que, en opinión de Abdel Malek (1962: 36), no

⁶² Para el cálculo de la población en edad de votar, véase Tabla 2; para el resto de los datos electorales: Martín Muñoz 1992: 185-192; para los datos relativos a la población total y la de los gobernados, cálculos propios a partir de los datos de los censos oficiales recogidos por Denis (2011: 93).

⁶³ Wahba, ‘Aza: *Ta’yriba al-dimuqrâtiyya al-liberâliyya fî miṣr. Dirâsa taḥlîliyya li-ajbar Barlamân miṣrî qabla 1952*, Markaz al-Dirâsât al-Siyâsiyya wa-l-Istrâtiḡiyya bi-l-Ahrâm, El Cairo, 1985. Citado por Martín Muñoz (1992: 192).

⁶⁴ Martín Muñoz (1992: 187) (la autora cita el periódico *Al-Ahrâm*, 8 de enero de 1950 para las declaraciones de Serag Eddín).

ocultaban que “más que nunca, el Wafd aparecía como lo que nunca había dejado de ser, es decir un frente electoral de las diversas secciones de la burguesía nacional dominado por los grandes propietarios agrícolas, que controlaban su aparato gracias a Fuad Serag Eddín”.

Sin embargo, el Wafd era consciente de que, a pesar de controlar el Gobierno, no controlaba la situación política interna. Durante casi dos años, mientras intentaba contener mediante la represión el resurgimiento del movimiento obrero -50 huelgas en 1950- y de la militancia comunista y del ala izquierda del Wafd, buscó incesantemente arrancar un acuerdo negociado a los británicos, advirtiéndoles, en palabras de Mohamed Salah Eddín, ministro de Asuntos Exteriores, de que “la propia ocupación y sus efectos económicos y sociales era el arma más efectiva esgrimida por la propaganda comunista”, que encontraba “un terreno favorable en el corazón de los jóvenes patriotas”⁶⁵.

Los esfuerzos negociadores fueron vanos y el 8 de octubre de 1951, Al-Nahhás, presidente del Gobierno, decidió ceder a la presión popular y denunció el Tratado Anglo-Egipto de 1936. Las manifestaciones de apoyo desatadas en las principales ciudades al día siguiente de este anuncio concluyeron en enfrentamientos con el Ejército británico en Ismailiyya, junto al Canal de Suez, que ya no se interrumpirían. Poco después, 80.000 trabajadores egipcios de la base militar británica y de las infraestructuras del Canal de Suez abandonaron sus puestos respondiendo al llamamiento del Gobierno.

Los enfrentamientos de Ismailiyya dieron paso a una continua serie de sabotajes contra el Ejército británico a lo largo del Canal, organizados por estudiantes, trabajadores e intelectuales de El Cairo y Alejandría agrupados en escuadrones independientes entre sí: jóvenes wafdistas, comunistas, del antiguo Partido Nacional, del Joven Egipto, y también algunos Hermanos Musulmanes. Pronto se unieron a ellos campesinos de la zona del Canal, convirtiéndose el enfrentamiento en una auténtica guerra de guerrillas que llevó incluso a la destrucción de pueblos enteros por la artillería británica. Cerca de 600 combatientes egipcios murieron en la lucha.

Durante los tres primeros meses de enfrentamientos, el Gobierno del Wafd dio órdenes a la policía y el Ejército egipcio de no intervenir en los combates, contentándose con tomar medidas diplomáticas y administrativas contra los ingleses y autorizando llevar armas a todos los ciudadanos egipcios (10 de diciembre de 1951). Pero la situación se le escapaba de las manos: las diversas facciones de la guerrilla se organizaron para coordinar la lucha, el ala izquierda del Wafd se impuso en el aparato del partido (en particular en sus medios de prensa), el Club de Oficiales del Ejército eligió como representante al nacionalista Mohammed Naguib el 18 de diciembre, y el rey intentó explotar la debilidad del Wafd en su beneficio. El 25 de enero de 1952, Serag Eddín, ministro del Interior, da

⁶⁵ Citado por Abdel Malek (1962: 36), que a su vez recoge la cita de Chohdie A. El-Chaféi, *Tattawor al-haraka al-wataniyya al-misriyya 1982-1956*, El Cairo, 1957.

orden a la gendarmería rural de Ismailiyya de enfrentarse a las fuerzas británicas: los gendarmes son masacrados.

El 26 de enero se declaró en todo Egipto una huelga general, acompañada de manifestaciones en todas las grandes ciudades. Algunos oficiales del Ejército conminaron al Gobierno a implicarse en la lucha contra los ingleses entre rumores de que por fin iba a tomar medidas drásticas contra los británicos. Sin embargo, a mediodía, grupos de alborotadores comenzaron a saquear, dinamitar e incendiar El Cairo, convertido en una gran pira. Esa misma noche, Fuad Serag Eddín hizo arrestar a 250 *fedayines* de la lucha del Canal, wafdistas y comunistas, acusándolos de estos hechos. Al día siguiente, al-Nahhás declaró el Estado de sitio, lo cual no evitó que fuera cesado por el rey. En los días sucesivos se produjo la detención de miles de militantes y combatientes, la disolución de sus escuadrones, los juicios militares, la suspensión de la Constitución y la censura a toda la prensa impresa.

La autoría y la responsabilidad final del incendio de El Cairo nunca han sido definitivamente esclarecidas. Parece indiscutible que en él participaron activamente las fuerzas nacional-socialistas y nacional-religiosas, y que a ellas se unió parte de la población. Abdel Malek, testigo de la época, asegura que la acción fue promovida por militantes de las Camisas Verdes del antiguo Joven Egipto (ya convertido en Partido Socialista de Egipto, cuyo líder, Ahmad Husein, sería juzgado y absuelto en la época de Náser), “fanáticos” miembros de Jóvenes de Mahoma (شباب محمد), una organización islamista pionera en la línea ideológica y táctica de la “retirada al desierto”⁶⁶, y, sobre todo, militantes de la organización secreta de los Hermanos Musulmanes. A estos provocadores se habría unido el lumpenproletariado “miserable y deforme” de la ciudad. La visión de Abdel Malek (1962: 40-41) se basa en las actitudes de los incendiarios y en el objeto de sus iras, relatadas por testigos presenciales: se atacaban los comercios que vendían alcohol, los lugares de placer, se disparaba sobre los enamorados en las calles oscuras... Pero la cuestión clave es si los acontecimientos fueron espontáneos o provocados por alguna mano secreta: en este sentido, hubo rumores sobre la presencia de un coche negro desplazándose de una zona a otra y dirigiendo los ataques contra edificios concretos (Al-Sayyid Marsot 1985: 104-105). Muchos hablaron de la mano británica, aunque los documentos conocidos décadas después parecen excluir esta posibilidad⁶⁷, y algunos de la participación de la

⁶⁶ Esta línea preconiza, siguiendo el ejemplo de Mahoma en su emigración de la Meca a Medina, la “hégira” (هجرة) al desierto de los musulmanes auténticos para apartarse de la sociedad corrompida y volver, una vez reconstituida y fortalecida una comunidad islámica auténtica, a conquistar al grueso de la sociedad. Volveremos sobre el resurgimiento de este movimiento en el capítulo II 2.4.

⁶⁷ Beinín y Lockman (1998: 395-417) dudan, basándose en la lectura de los documentos de la embajada británica de la época, que los británicos no vieran sorprendidos por los acontecimientos, en los que, por otro lado, se atacaron numerosos intereses británicos bien seleccionados.

embajada polaca como proveedora de explosivos y material incendiario (Beinin y Lockman 1998: 395-417).

Para Abdel Malek (1962: 41), ante la ausencia de respuestas judiciales e historiográficas incontestables, la interpretación política del incendio de El Cairo se resume en las siguientes palabras:

“Los que incendiaron El Cairo fueron los mismos a los que el incendio proporcionó una excusa para romper, definitivamente esta vez, la lucha nacional que estaba a punto de desembocar en una verdadera revolución con el apoyo masivo de los campesinos. Estas fuerzas tienen un nombre: el imperialismo, los grandes propietarios terratenientes reunidos en torno al rey y la gran burguesía industrial. Estas fuerzas habían apoyado y armado a las organizaciones clérigo-fascistas que sembraban el terror y la provocación, con el fin de desacreditar al movimiento nacional y de desviar la corriente hacia enemigos ficticios”.

Fuera de ello lo que fuere, el incendio de El Cairo echó el cierre a una etapa política que formalmente sería sellada siete meses después por el golpe de Estado de los Oficiales Libres del 23 de julio de 1952.

PRIMERA PARTE

I. EL RÉGIMEN NASERISTA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO REPUBLICANO

INTRODUCCIÓN. Singularidad e influencia del régimen naserista	95
1. LA CONSTITUCIÓN DE UN NUEVO PODER. NACIMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y LEGITIMACIÓN	97
1.1 La constitución de un nuevo poder. Consolidación y legitimación iniciales	97
1.2 Los Oficiales Libres, producto de una época	99
1.3 La consolidación del poder.....	102
1.3.1 Disolución de los partidos políticos y depuración del Ejército	103
1.3.2 La Organización para la Liberación. Primer partido único, primer programa	104
1.3.3 La primera reforma agraria.....	105
1.3.4 La disolución de los Hermanos Musulmanes	107
1.3.5 La defenestración de Mohammed Naguib.....	108
1.4 La legitimación nacionalista. El nacimiento del carisma de Násir	109
1.4.1 La Conferencia de Bandung y la vía “no alineada”	110
1.4.2 La nacionalización del Canal de Suez	111
1.5 La inauguración del carisma de Násir.....	113
1.5.1 Un testimonio	113
1.5.2 Apuntes sobre “el carisma”, la autoridad carismática y la relación carismática	115
1.5.3 El discurso de Násir. El discurso inaugural (del carisma) sobre la nacionalización del Canal.....	117
2. EL RÉGIMEN NASERISTA Y EL ESTADO. POLÍTICAS Y ESTRUCTURA.....	121
2.1 Economía y políticas sociales.....	121
2.1.1 Planificación e industrialización para la modernización	121
2.1.2 Reformas agrarias, cooperativismo, estatismo y nacionalizaciones.....	123
2.1.3 Transformaciones socioeconómicas	125
2.1.3.1 Empleo y beneficios laborales.....	125
2.1.3.2 Educación	127
2.1.4 Redistribución, políticas sociales, igualdad y desigualdad.....	128
2.2. Sistema político y estructuras de representación y control político	130
2.2.1 Presidencialismo y partidos únicos.....	130
2.2.1.1 Las constituciones de 1956 y 1958. La Unión Nacional	130
2.2.1.2 El Pacto de Acción Nacional, la Proclamación Constitucional de 1962 y la Unión Socialista Árabe.....	132
2.2.2 El aparato de seguridad y control político	134
2.2.2.1 El Ejército	134
2.2.2.2 Los servicios secretos y la Vanguardia de la USA	135
2.2.2.3 Detenciones, torturas y otros abusos	137
2.3 El Estado “educador”.....	139

2.3.1 La prensa y los medios de comunicación.....	141
2.3.1.1 Nacionalismo, educación y política	141
2.3.1.2 Control y nacionalizaciones	142
2.3.1.3 Heikal y <i>Al-Ahram</i> : faros de la política informativa y cultural naserista.....	143
2.3.2 El aparato cultural	145
2.3.2.1 “Cultura para el pueblo”.....	145
2.3.2.2 Cultura, ideología e intelectuales	147
2.3.2.3 La censura	150
3. LAS RELACIONES ENTRE EL RÉGIMEN, EL ESTADO Y LA SOCIEDAD	151
3.1 Inclusivismo, corporativismo y control.....	151
3.2 La burocracia: pilar del Estado, maleable pilar del régimen.....	155
3.3 Los trabajadores industriales y su sindicato estatal.....	158
3.4 Los sindicatos profesionales.....	161
3.4.1 El Sindicato de Abogados. Entre el liberalismo y el exclusivismo.....	163
3.4.2 El poder judicial, los jueces y el acceso a la justicia.....	165
3.4.3 El Sindicato de Periodistas	167
3.4.4 El Sindicato de Ingenieros.....	169
3.4.5 El Sindicato de Médicos.....	171
3.5 El régimen naserista y los agricultores y campesinos	171
3.5.1 El alcance redistribuidor de las reformas agrarias	172
3.5.1.1 La disminución de la pobreza.....	173
3.5.1.2 La estabilidad de las clases medias agrarias y la nueva burguesía agrícola.....	175
3.5.2 La economía política de las reformas agrarias naseristas	177
3.5.2.1 La estabilidad de las clases medias y medias altas agrícolas y su actitud ante el régimen naserista.....	177
3.5.2.2 La presión revolucionaria de las clases bajas rurales: El “caso Kamchich”	181
3.5.2.3 El Alto Comité para la Liquidación del Feudalismo (ACLF)	182
3.5.2.4 La derrota de 1967 y la imposición de la burguesía agrícola.....	184
3.6 Las instituciones islámicas y sus miembros	184
3.6.1 La nacionalización de los bienes habices y la supresión de los tribunales religiosos... ..	185
3.6.2 La reforma de Al-Azhar	186
3.6.3 El apoyo de Al-Azhar al socialismo	188
3.6.4 Los intentos de desacralizar el aprendizaje	190
3.7 Los coptos y la comunidad copta. La incorporación de la iglesia.....	191
3.7.1 La situación económica, política y social de los coptos.....	192
3.7.2 El régimen naserista, la comunidad copta y la iglesia.....	193
3.8 El régimen naserista y los estudiantes	195

4. LA DERROTA DE 1967: DESASTRE POLÍTICO Y ECONÓMICO Y TRAUMA SOCIAL.....	197
4.1 El conflicto bélico y sus consecuencias inmediatas	197
4.2 Las protestas de febrero de 1968	198
4.3 La Declaración del 30 de marzo y el periodo de revisión crítica	199
4.4 Las protestas de noviembre de 1968 y el fin de la permisividad.....	203
4.5 El giro de la política exterior de Egipto.....	204
5. CONCLUSIONES.....	206
5.1 Desarrollo, modernización y crisis económica.....	206
5.2 Transformaciones socioeconómicas, sociopolíticas e ideológicas por medio del Estado	209
5.3 Sistema político formal y régimen político	211
5.4 Un régimen populista	212
5.4.1 Presidencialismo, Estado militar-policial y burocracia	213
5.4.2 Movilización negativa y carismático-ideológica.....	214
5.4.3 Corporativismo, intermediación e inclusión económica y simbólica frente a exclusión política.....	216
5.4.4 Legitimación económica y nacionalista. Entre la eficacia y objetivos.....	217
5.4.5 Gobierno, régimen, Estado y legitimidad.....	219

INTRODUCCIÓN. Singularidad e influencia del régimen naserista

El llamado “régimen de Náser” o “régimen naserista” (1952-1970) ha sido uno de los más estudiados y controvertidos, no solo entre los del conjunto de los países árabes sino de todos los de los países denominados “en vías de desarrollo” entre los años 50 y 70 del siglo XX. Las controversias que ha generado, y sobre todo generó en las décadas mencionadas, han sido tanto académicas como políticas, y los argumentos de uno y otro signo a menudo se han confundido, tanto en Egipto como en el extranjero.

Como señalaron Podeh y Winckler en 2004, desde finales de los 70 ha descendido considerablemente el número de estudios monográficos dedicados al “naserismo” o al régimen de Náser. Coincidimos con ellos también en su opinión, expresada al repasar las principales obras dedicadas al tema y sus distintos enfoques, de que “el último análisis serio fue el realizado por Waterbury en 1983 [*The Egypt of Nasser and Sadat. The Political Economy of Two Regimes*]”, como se observará en el amplio uso que hacemos de esta obra. Sin embargo, el interés por la naturaleza del naserismo se ha mantenido hasta ahora, lo que se manifiesta, en la aparición de algunos trabajos monográficos como el dirigido por los propios autores mencionados, en el casi inevitable estudio del naserismo no solo en las obras dedicadas a los regímenes que lo sucedieron en Egipto, sino también en las que se han ocupado de cuestiones políticas generales relativas a Oriente Medio o los países árabes (Podeh & Winckler 2004: 6).

Volviendo a las razones del interés por el naserismo y las controversias en torno a él, uno y otras residen por un lado en la fuerte influencia política que el régimen naserista ejerció en sus ámbitos “naturales”: en Egipto, por supuesto, en primer lugar, pero también en los países árabes, en la región de Oriente Medio, en África y en general en los Estados poscoloniales. El régimen naserista transformó Egipto, y fue un actor destacado en su ámbito político, regional y cultural, además de servir como modelo para otras experiencias nacionales y estatales. Su posicionamiento ideológico y su confrontación más o menos abierta, política, ideológica o militar, en todos los ámbitos mencionados, desde el más local hasta el más ampliamente internacional, con otras fuerzas que buscaban la hegemonía, hicieron que la mayor parte de los análisis, incluso muchos de los pretendidamente académicos, resultaran erizados por los posicionamientos ideológicos o políticos de sus autores.

Otra razón principal del interés y los debates surgidos en torno al régimen naserista reside en su originalidad, y en las dificultades encontradas por los estudiosos para analizarlo y clasificarlo de una manera satisfactoria. Los dos tratamientos epistemológicos, o al menos taxonómicos, de los que ha sido abundantemente objeto dicho régimen, la *personalización* y la *hipercharacterización*, son consecuencia directa de dichas originalidad

del objeto de estudio y dificultad de aprehenderlo.

El expediente de la *personalización* es obvio: se habla de “régimen naserista” y de “naserismo”, aunque los dos conceptos no se refieran exactamente a lo mismo¹. El fenómeno de la *hipercharacterización* se manifiesta en el uso, para referirse a él, de sustantivos o adjetivos como dictadura, autocracia, presidencialismo, régimen militar/pretoriano, burocrático, tecnocrático, populista, corporatista, multclasista, socialista árabe, poscolonial, modernizador, carismático, mesiánico, antiimperialista, panarabista, nacionalista, unanimista, etc.

Evidentemente, estas caracterizaciones se refieren, muchas de ellas, a diferentes aspectos del régimen en cuestión, y podríamos diferenciarlas y agruparlas atendiendo a si se refieren principalmente al tipo de sistema político, a las elites gobernantes, a los apoyos socioeconómicos con que contó, a su política económica, al objeto o los principales beneficiarios de las políticas públicas, a su política exterior, a sus “presuposiciones normativas” (culturales, ideológicas, éticas, etc.) y los valores políticos “asignados” o “autorizados”, al tipo de de relación en la que se basa el apoyo o el consentimiento a los gobernantes, etc. No obstante, ha sido frecuente que los estudiosos hayan pretendido dar cuenta resumida de la naturaleza del régimen naserista, incluso en los títulos de sus obras, mediante la selección de los dos o tres adjetivos que les parecieran más adecuados.

El objetivo de este capítulo no es específicamente participar en los debates aludidos, sino tan solo identificar el legado que el régimen naserista dejó en Egipto, para posteriormente estudiar la medida en la que influyó en su evolución política posterior, no solo bajo el mandato de Anwar al-Sadat (1970-1981), sino también bajo el de Hosni Mubarak (1981-2011) e incluso, brevemente, bajo los posteriores. A pesar de las reformas, algunos profundas, que se produjeron en los más diversos terrenos durante los mandatos de Sadat y Mubarak, parte de las cuales fueron frecuentemente caracterizadas como tendentes a la “desnaserización” de Egipto, la impronta del régimen naserista y del naserismo siguieron siendo visibles en casi todos esos terrenos durante ambos periodos, e incluso lo son en el momento de escribir estas líneas, hasta el punto de que la cuestión de la continuidad y el cambio en el régimen político egipcio desde la época naserista es una de las más complejas que se pueden suscitar, y una de las que más interesan a este trabajo, aunque, como es lógico, solo la abordaremos en toda su extensión al final de estas páginas.

¹ Ver la obra citada de Podeh y Winckler (2004) sobre el uso de ambos términos.

1. LA CONSTITUCIÓN DE UN NUEVO PODER. NACIMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y LEGITIMACIÓN

1.1 LA CONSTITUCIÓN DE UN NUEVO PODER. CONSOLIDACIÓN Y LEGITIMACIÓN INICIALES

El 23 de julio de 1952, un grupo de oficiales, autodenominados “los Oficiales Libres” (الضباط الأحرار), y liderados por el coronel Gamal Abdel Náser, dieron un golpe de Estado en Egipto. Tres días después, el rey Faruq, compelido por los golpistas, abdicó a favor de su hijo y abandonó el país. El 10 de diciembre del mismo año, la constitución hasta entonces vigente fue abolida, y el 10 de febrero de 1953, casi un mes después de que los partidos políticos fueran prohibidos, y los existentes disueltos, se proclamó una provisional. El 18 de junio de 1953 fue abolida la Monarquía y proclamada la República, siendo su primer presidente el general Mohammed Naguib.

En poco menos de un año, Egipto no solo había cambiado de gobernantes y de forma de Estado y de Gobierno. También había cambiado en algo trascendental: por primera vez desde la época de los faraones, el país era gobernado por egipcios de origen egipcio que, además, no pertenecían a las clases altas de la sociedad. La monarquía de origen turco-circasiano, y las elites políticas, militares y sociales de similares orígenes asociadas a ella, tan solo habían sido las últimas de una serie ininterrumpida a lo largo de miles de años de oligarquías de origen extranjero llegadas al poder en un principio por sus virtudes militares o a través de la ocupación militar. Estos datos no siempre son destacados por los historiadores y politólogos extranjeros, pero no sucede lo mismo con los egipcios (Al-Sayyid Marsot 1985: 107; إبراهيم 1981: 52), conscientes de la importancia que tienen objetivamente, porque una parte mayoritaria de sus compatriotas, subjetivamente, se la concedieron y se la conceden. Como señala Al-Sayyid Marsot (1985: 107), “con el nuevo régimen los egipcios nativos podían identificarse en términos de religión, lengua y étnicos, siendo la minoría copta una excepción en lo que se refiere a la religión”.

Es cierto que esta fuente de legitimación del nuevo poder solo se activó plenamente con posterioridad: la condición de egipcios nativos compartida por los nuevos gobernantes y los gobernados podría haber quedado reducida a una anécdota si no fuera porque el nuevo régimen buscó y consiguió alcanzar plenamente los objetivos nacionalistas de la mayor parte de la población (la independencia total de Gran Bretaña, que aún controlaba militar y económicamente -junto con Francia- el Canal de Suez), y porque hizo sentir así mismo a una gran parte de ella (independientemente de en qué medida pudiera estar acertada en esos sentimientos) que el nuevo Estado e incluso el nuevo Gobierno eran suyos

y se ocupaban de ellos. Sin embargo, la legitimación nacionalista también funcionó desde un primer momento a causa del mero rechazo al régimen monárquico y las elites políticas gobernantes al que hemos referencia en páginas anteriores (véase Introducción 2.3), y tanto “las masas” como las principales fuerzas políticas opuestas a aquel -con la notable excepción del Partido Comunista Egipcio y otras organizaciones marxistas de escaso peso²- recibieron con entusiasmo la acción del Ejército.

Jean y Simonne Lacouture, presentes en el país en aquellos momentos, contaron así lo sucedido cuando, el 25 de julio de 1952, Mohammed Naguib, “flanqueado” por Anwar el-Sadat, se desplazó a Alejandría para entregar al presidente del Gobierno, Ali Maher, el texto del Ejército exigiendo la abdicación del rey³:

"En un clima prodigioso, los oficiales habían ya saboreado en El Cairo el fervor popular, pero el recibimiento de Alejandría les conmocionó. Una marea humana gritando su alegría engulló al "salvador de la patria". Una auténtica locura" (Lacouture 1962: 147).

Con su estilo ameno y mordaz, los Lacouture dieron cuenta así mismo de la reacción de las fuerzas políticas:

"Como el día después de las elecciones en las viejas democracias, todo el mundo cantaba victoria. El 27 de julio, Mustafa al-Nahhás y Fuad Serag Eddín, que tomaban los baños en Francia, se precipitaron al avión para venir a felicitar a Naguib y testimoniar en voz bien alta que la deposición del rey no podía ser más que una victoria de su rival más destacado, el Wafd [del que ambos eran dirigentes]. Se pudo ver a Nahhás subir las escaleras del Estado Mayor para posar orgullosamente (...) al lado del oscuro general a quien la víspera ni siquiera él, el pachá, le habría dado la mano a besar (...) Los Hermanos Musulmanes recitaban versetos [sic] del Corán en tono de acción de gracias: la mañana del 23 de julio [habían recibido] una invitación de los oficiales al Guía Supremo de la Hermandad, Hasan al-Hudaibi, que había respondido que tomaría en consideración honrar a los jóvenes con su visita (...) A la izquierda, la alegría era apenas más matizada: el 2 de agosto, el comité director de HADETU [الحركة الديمقراطية للتحرير الوطني, Movimiento Democrático para la Liberación Nacional], uno de los siete u ocho grupos entre los que se repartían los militantes egipcios, había ya decidido apoyar «condicionalmente» al movimiento militar" (Lacouture 1962: 152-153) .

Tal vez esas indeterminadas “masas” y las fuerzas políticas mencionadas compartieron el breve análisis que encabezó la primera declaración de los Oficiales Libres, leída a las 7 de la mañana del propio 23 de julio por Anwar el-Sadat, que se dirigía “al pueblo egipcio”, y comenzaba así:

² El PCE tachó al nuevo régimen de “dictadura fascista proestadounidense, y siguió en la clandestinidad y manteniendo su postura hasta 1955, cuando Egipto realizó la famosa compra de armas a Checoslovaquia. No obstante, el PCE tenía predicamento tan solo entre algunos sectores intelectuales, y aquel era prácticamente nulo entre los obreros, a diferencia de HADETU (Beinin & Lockman 1998: 420).

³ Las imágenes de archivo de la televisión egipcia también recogen este momento de fervor popular, y pueden ser vistas en documentales, e incluso en la película *Nasser 56*, dirigida por el director egipcio Mohammed Fadel.

"Egipto acaba de atravesar el periodo más sombrío de su historia, envilecido por la corrupción, disgregado por la inestabilidad. Estos factores de disolución han afectado al propio Ejército, y han constituido una de las razones de nuestra derrota en Palestina. Dirigido por ignorantes, incompetentes y traidores, el Ejército no era capaz de defender Egipto. Por ello nos hemos depurado: ahora está en manos de hombres en cuya capacidad, integridad y patriotismo podéis tener total confianza. Egipto acogerá nuestro movimiento con satisfacción. El Ejército es garante del interés nacional"⁴.

Dicho análisis fue complementado, en términos más duros y acusadores, en el ultimátum presentado por Mohammed Naguib al rey en la mañana del 26 de julio, y recogido así mismo por el matrimonio Lacouture:

"Considerando... vuestra mala gestión, vuestras violaciones de la Constitución, vuestro desprecio de la voluntad del pueblo, hasta el punto de que ningún ciudadano siente su vida, sus bienes y su dignidad en seguridad... que los traidores y los prevaricadores acumulan bajo vuestra protección fortunas escandalosas dilapidando los recursos públicos mientras el pueblo muere de miseria y de hambre. Que estos hechos han sido destacados durante la guerra de Palestina, que ha dado lugar a un escandaloso tráfico de armas y de municiones... El Ejército, que representa la fuerza del pueblo, me ha dado la orden de requerir a Vuestra Majestad que abdique en favor del príncipe heredero, Su Alteza Ahmad Fuad, hoy mismo, 26 de julio de 1952, y que abandone el país hoy mismo antes de las seis. Firmado: Mohammed Naguib" (Lacouture 1962: 148-149).

1.2 LOS OFICIALES LIBRES, PRODUCTO DE UNA ÉPOCA

Desde los años 50, periodistas y estudiosos de la ideología indagaron acerca de los contactos y los escarceos políticos previos al golpe de los más destacados de los Oficiales Libres, hasta conformar una base de testimonios y documental fehaciente⁵. Gran parte de ellos, incluido Násér, habían tenido contactos, de una u otra manera, o bien con los Hermanos Musulmanes (la mayoría)⁶, o bien con el Joven Egipto⁷ o el HADETU⁸, y en

⁴ Traducción nuestra del francés del comunicado, recogido por Lacouture (1962: 142).

⁵ Vatikiotis es quien ofrece el más sintético, y al mismo tiempo amplio y detallado resumen sobre las experiencias políticas de los Oficiales Libres antes de 1952 (Vatikiotis 1978: 20-125).

⁶ A los Hermanos Musulmanes habían pertenecido, o habían tenido estrechos contactos con ellos, Abdel Moneim Abdel Rauf, Rachad Mehanna, Kamal Eddín Husein, Anwar al-Sadat, Kamal Rifaat, Abdel Latif al-Bagdadi y Gamal Salem (Vatikiotis 1978: 40-41, 85-87).

⁷ Násér militó brevemente, en 1935 y 1936, cuando tenía 17-18 años, en el Joven Egipto, según su propio testimonio y el de Ahmad Husein (Ahmad Hussein en *Kayfa `arafu Abdel Nasser wa `ishtu ayyâma hukmihi*, Beirut: 1973, págs. 100-101. Citado por Vatikiotis (1978: 33), y había entrado en contacto con otras fuerzas a través de sus compañeros de armas y conspiración.

⁸ De entre los Oficiales Libres eran miembros de HADETU Yusuf Siddiq y Ahmad Hamruch, y Jaled Mohai Eddín lo había sido durante un breve periodo de tiempo. Násér, que se relacionaba con el movimiento sindical de izquierdas a través de Ahmad Fuad, juez militar y miembro de aquel, era designado con el nombre en clave

menor medida con la Vanguardia del Wafd, e incluso con Palacio, en el caso este último de Anwar al-Sadat. No obstante, y a pesar de que todas las fuerzas mencionadas reclamaron en un primer momento la paternidad intelectual y política del movimiento que condujo al golpe, todos los autores coinciden en que el grupo de oficiales como tal, y Násér en particular, no se identifican plenamente con ninguna ideología o fuerza política concreta. El propio Násér señaló en diversas ocasiones esa ausencia de ideología y de creencias políticas comunes (عبد الناصر 1954) y señaló cómo, más bien, él, personalmente, “estaba interesado en todos los partidos que buscaban devolver al pueblo egipcio su libertad”⁹ (Vatikiotis 1978: 105, 117).

Tanto si se concede crédito a las motivaciones declaradas por Násér, como si, igual que hacen sus estudiosos más escépticos -como Vatikiotis-, se piensa que aquel estaba interesado en todas las fuerzas políticas que pudieran servirle -como orientación o apoyo- para llevar adelante sus planes, lo cierto es que hoy resulta un tanto vano pretender zanjar la cuestión de las inclinaciones ideológicas o políticas previas al golpe de los Oficiales Libres, o de sus motivaciones personales íntimas, cuando podemos evaluar lo que realmente hicieron una vez en el poder. Sin embargo, los estudios sobre los años previos al golpe de Násér y sus camaradas, y el eclecticismo de la composición del grupo y de sus influencias ideológicas, que nadie discute, nos permiten afirmar sin que parezca haber discusión que aquellos oficiales eran producto de una época muy concreta y de un determinado estadio de evolución de la sociedad, la política y el Estado egipcios (Vatikiotis 1978: 85-97).

La gran mayoría de los Oficiales Libres habían nacido entre 1917 y 1922, habían entrado en la adolescencia en los años 30, y llevaron a cabo el golpe de Estado cuando eran capitanes, mayores o tenientes coroneles, diferenciando con ello el “golpe egipcio”, como señala Vatikiotis (1978: 109), de los golpes militares previos en otros países de Oriente Próximo (Irak en 1936 y 1940, Siria en 1949), que habían sido dirigidos por oficiales de mayor rango.

Como hemos expuesto en el capítulo 2.2 de la Introducción, los años 30 en Egipto fueron los de la dictadura de Ismael Sidqi (1930-1935), la firma del frustrante tratado anglo-egipcio (1936), el declive del apoyo popular al partido Wafd -progresivamente dominado por su ala derecha- y la “pérdida de la fe” de muchos en el parlamentarismo y el pluripartidismo. Fueron también los años de la eclosión de las protestas estudiantiles y laborales (1935-1936), empujadas por las dificultades y las desigualdades económicas, y de los movimientos políticos radicales (Joven Egipto, Hermanos Musulmanes, Vanguardia del Wafd), que recurrirían ocasionalmente a la violencia. El principio de los años 40 traería el relativo vigor de las organizaciones marxistas y su considerable influencia en el seno de

de “camarada Mauricio” (Beinin & Lockman 1998: 419).

⁹ Discurso ante la Asamblea Nacional del 22 de julio de 1957, citado por Vatikiotis (1978: 44).

los movimientos estudiantiles y obreros en el marco de un notable desarrollo del capitalismo.

Pero los años 30 fueron también, desde 1936, los del acceso a la Academia Militar de -en palabras quizás un poco exageradas de los Lacouture (1962: 123) - “jóvenes de familias pobres”, “procedentes casi todos -matizan los propios autores- de la pequeña burguesía agrícola, y algunos hijos de *fellah* [campesinos] apenas enriquecidos”. Násir - nieto de un jeque de pueblo “que se construyó una casa de ladrillo de una habitación”, e hijo de un funcionario de correos que había estudiado en una escuela elemental-, y algunos otros de los Oficiales Libres, formaron parte de la primera promoción de estos oficiales de origen modesto en 1938, y el resto formaría parte de las inmediatamente siguientes (Vatikiotis 1978: 23).

En una docena de años, los nuevos oficiales, en palabras de Vatikiotis (1978: 109), contaban con “un entrenamiento académico y práctico mejor que el de sus oficiales superiores”, entre los que, según Lacouture,

“El grado se medía por la cintura. Un general delgado era un imbécil, un enfermo o un «rarito». Los superiores eran todavía antiguos oficiales turcos, tremendamente desdeñosos de los «nativos», y las mejores unidades, las de los Cuerpos de Fronteras, compuestas sobre todo de nubios y sudaneses, se veían a menudo envueltas en turbios asuntos de tráfico de armas. La situación recordaba a aquella contra la que se habían levantado Orabi y sus compañeros” (Lacouture 1962: 123).

Así, el sentimiento de humillación y frustración profesional, exacerbado por todo lo relativo a la guerra de Palestina, y explícitamente manifestado en los primeros comunicados de los Oficiales Libres que hemos mencionado, confluiría con parejos sentimientos de base nacionalista genérica para aglutinar un grupo, por lo demás, dispar.

Resumiendo lo anteriormente expuesto en palabras de Vatikiotis,

“Resulta increíble para los no iniciados que los miembros de la ejecutiva [de los Oficiales Libres] y sus muy diversos seguidores en los diversos sectores del Ejército tuvieran diferentes visiones políticas, es decir que les faltara una cohesión ideológica o una conciencia política uniforme. Pero los lazos generacionales, incluyendo sus orígenes sociales y económicos, las primeras influencias en su formación, y sus frustraciones adolescentes y posteriores generaron en ellos el común deseo de cambio, y el catalizador en su búsqueda del poder” (Vatikiotis 1978: 109).

Y, de la misma manera que los Oficiales Libres se identificaban entre ellos, el común de los egipcios también lo hizo en un principio, según Hamruch, de una manera elemental: “Los Oficiales Libres parecieron los campeones del cambio y de la reforma porque, por su condición social, su clase era diferente de la de la autoridad establecida, el

ancien régime”¹⁰.

En definitiva, el Ejército egipcio, con su oficialidad joven nativa, era probablemente el único segmento tanto de la sociedad como del Estado egipcios que contaba, además de con la fuerza, la organización y la preparación, con la cohesión necesaria -derivada del espíritu de cuerpo profesional y nacional- como para trascender las diferencias ideológicas en aras de un proyecto en primer lugar nacionalista y rupturista con el régimen anterior que, definido en estos meros términos, reflejaba las aspiraciones iniciales de una parte tal vez mayoritaria de la población y, además, era bastante representativo social e ideológicamente para que dicha población se adhiriera, al menos en un principio, a él.

1.3 LA CONSOLIDACIÓN DEL PODER

Los cuatro años transcurridos entre el golpe de Estado del 23 de julio de 1952 y la nacionalización del canal de Suez el 26 de julio de 1956 fueron, esencialmente, los de la consolidación del poder de Náser y la gestación del régimen naserista propiamente dicho. “Poder de Náser”, decimos, en el sentido, en primer lugar, del “dato original” que Hanna Arendt señaló como frecuentemente olvidado al abordar el concepto de poder, según el cual este

“corresponde a la capacidad humana, no simplemente para actuar, sino para actuar concertadamente. El poder nunca es propiedad de un individuo; pertenece a un grupo, y sigue existiendo mientras que el grupo se mantenga unido. Cuando decimos de alguien que «está en el poder» nos referimos a que tiene un poder de un cierto número de personas para actuar en su nombre. En el momento en el que el grupo del que el poder se ha originado desaparece, «su poder» también desaparece” (Arendt, 1998: 146).

El poder de Náser le había sido concedido por los Oficiales Libres desde los primeros días de la conspiración, y se convertiría, tanto mediante la persuasión como por medio de la nueva jerarquía creada por la fuerza, en el poder del Ejército. Para consolidarlo y afianzarse en el mando, Náser y sus más fieles partidarios se enfrentarían a las tentativas de otros *contrapoderes*, incluso desde el seno del Ejército y de los propios Oficiales Libres, de cuestionar dicho mando.

Es bien sabido que el general Naguib, que no había participado en la conspiración propiamente dicha y no había mantenido más que relaciones superficiales con los Oficiales Libres hasta poco antes del golpe, desde que triunfó fue puesto a la cabeza de aquel en función de su más elevada graduación y, sobre todo, de su popularidad dentro del Ejército,

¹⁰ Hamruch, Ahmad: قصة ثورة يوليو, pág. 212, apud Vatikiotis (1978: 109).

debida a su reputación de hombre íntegro, a sus posturas en defensa de la dignidad nacional y del propio Ejército, y a su condición de héroe de guerra¹¹. Naguib fue nombrado portavoz de los Oficiales Libres ante el rey y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas en julio de 1952, y posteriormente presidente del Gobierno (7 de septiembre), presidente del Consejo de Mando de la Revolución (CMR, 13 de diciembre), y presidente de la República (18 de junio de 1953). No obstante, sus relaciones con el núcleo duro de los Oficiales Libres se deteriorarían a medida que se incrementara su disconformidad con las medidas represivas impulsadas por aquellos y con el incumplimiento de las promesas realizadas de mantener un sistema parlamentario.

1.3.1 Disolución de los partidos políticos y depuración del Ejército

El nuevo régimen que se abría paso manifestó desde un principio sus intenciones de mantener la Constitución, el sistema parlamentario y las libertades públicas. No obstante, también advirtió tempranamente que no toleraría el retorno al Gobierno de las antiguas elites dirigentes. Entre julio y agosto de 1952, los partidos políticos fueron primero invitados y luego conminados, en ocasiones por el propio Naguib, a “depurarse” (تطهير) de sus elementos corruptos y feudales (Lacouture 1962: 159). El 9 de septiembre fue aprobada la Ley de Reorganización de los Partidos Políticos, que ponía la decisión de autorizarlos en manos del Ministerio del Interior y que, a pesar de las declaraciones de fidelidad al régimen de los partidos políticos, y de la efectiva depuración de algunos de sus miembros, en la práctica acarrearía su disolución pocos meses después, el 16 de enero de 1953, siendo así mismo sus bienes confiscados, y sus dirigentes puestos en arresto domiciliario. Significativamente, la Asociación de los Hermanos Musulmanes no se vería afectada por estas medidas.

La depuración del Ejército fue paralela a la de los partidos políticos. En el mismo mes de enero de 1953, 450 oficiales fueron cesados en sus funciones y otros detenidos por haber planteado la exigencia de que los miembros del CMR fueran elegidos por sus compañeros. El oficial libre comunista Yusuf Siddiq, defensor del retorno del sistema parlamentario y opuesto al control de la prensa, dimitiría del CMR y partiría al exilio. El 17 de enero, Rachad Mehanna, oficial libre, presidente del Consejo de Regencia hasta el 14 de octubre de 1952, y simpatizante y activista indisimulado de los Hermanos Musulmanes,

¹¹ Naguib se dio a conocer tras el cerco por parte de los blindados británicos del palacio real el 4 de febrero 1942 con el fin de imponerle un Gobierno del Wafd, cuando el entonces teniente coronel presentó su dimisión de un Ejército que, en palabras de Lacouture, “no había sabido defender a su rey”. Posteriormente, se convertiría en héroe de la Guerra de Palestina, en la que fue herido tres veces y, finalmente, ganaría las elecciones del Club de Oficiales de diciembre de 1951, a la cabeza de una lista confeccionada por los Oficiales Libres. Los resultados de las elecciones serían anulados por el rey el 18 de diciembre (Lacouture 1962: 126-141).

fue detenido y posteriormente condenado a cadena perpetua, acusado de promover una conspiración contra el CMR, por la que su presunto compañero en ella, el teniente coronel Al-Damanhuri, recibiría la pena de muerte. Algunos miembros del CMR, y en particular Naguib, se opusieron a estas medidas represivas, que incluyeron la tortura de algunos de los militares detenidos, pero se mantuvieron leales al órgano colegiado.

En opinión de Ahmad Hamruch, militar también detenido en 1953, pero luego “recuperado” para el régimen, que nos dejó el relato más detallado de los acontecimientos mencionados y de los entresijos de los primeros años del régimen naserista (حمروش 1992: 315-330), los acontecimientos de enero de 1953

“supusieron el fin de la antigua organización de los Oficiales Libres y el comienzo de una nueva organización, así como una transformación en la naturaleza de los oficiales que entraban en el terreno de la política (...) Se acabaron las reuniones de los Oficiales Libres llevadas a cabo desde su apego al debate y a la libertad, pues algunos arguyeron que tales reuniones abrían la puerta a las conspiraciones” (حمروش 1992: 330).

1.3.2 La Organización para la Liberación. Primer partido único, primer programa

El movimiento de depuración de los partidos políticos y el Ejército se vio acompañado por el intento por parte del poder de dotarse de nuevas estructuras políticas. La Constitución había sido abolida el 10 de diciembre de 1952, y el 10 de febrero de 1953 se proclamaría una provisional que estableció un periodo transitorio de tres años destinado a acabar con el “rey extranjero”, con la “casta feudal” y con la corrupción, en el curso del cual el poder sería ejercido conjuntamente por el CMR y el Consejo de Ministros (Lopez García & Fernández Suzor 1985: 43-44). En el ínterin, una suerte de partido único, la Organización para la Liberación (هيئة التحرير), fue creada, y Náser fue nombrado su secretario general. El programa de esta organización sería el primer programa político explícito del naciente régimen, y de él cabe destacar los siguientes objetivos, que cito abreviadamente:

La evacuación completa de las tropas extranjeras del Valle del Nilo (pto.1).

Un sistema social en el que todos los ciudadanos estén protegidos frente al paro, la enfermedad y la vejez (pto. 4).

Un sistema económico concebido para asegurar una distribución justa de la riqueza (pto. 5).

Un sistema político en el seno del cual todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, y en el que la libertad de expresión, de prensa, de reunión y religiosa estén garantizados dentro de los límites de la ley (pto. 6).

Un sistema educativo concebido para desarrollar el sentimiento de responsabilidad

social (...) (pto. 7)

Una fuerza regional concebida con el fin de reforzar la influencia de la Liga Árabe (pto. 9).

La adhesión firme a los principios de la ONU, subrayando su aplicación a los pueblos sojuzgados¹².

1.3.3 La primera reforma agraria

En el terreno de las políticas concretas en los terrenos social y económico, el 9 de septiembre de 1952, tan solo 45 días después del golpe de Estado, la ley nº 178 estableció la primera reforma agraria del régimen naserista, atendiendo a la demanda de gran parte de la sociedad y a la de los oficiales de izquierdas aún no caídos en desgracia (principalmente Jaled Mohai Eddín y Yusuf Siddiq), y venciendo las resistencias de los elementos más conservadores del CMR (Abdel-Malek 1962: 73)¹³.

En su aspecto más llamativo, el de las expropiaciones y redistribuciones, la reforma tendría un alcance limitado, pues solo afectaría a 450.000 *feddanes*¹⁴ (Waterbury 1983: 266) cerca de un 8% de la tierra cultivable, de los que 365.000 (Ansari 1987: 79) serían distribuidos en lotes de 3 a 5 *feddanes* a 146.500 familias (Ansari, 1987: 79), es decir a cerca de 1 millón de campesinos. Los grandes propietarios podrían conservar un máximo de 200 *feddanes*, ampliables en 100 más para las familias con dos o más hijos, una medida que fue ampliamente sorteada mediante la creación ficticia de bienes habices y de transferencias de propiedad previas a la reforma (Ansari 1987: 60). Las únicas medidas con efectos “revolucionarios” directos de la nueva ley fueron, según Ansari, las que introdujeron cambios en la regulación de los arrendamientos y aparcerías, que serían rigurosamente fijados y controlados, en condiciones más ventajosas para los arrendatarios, “acabando con uno de los peores abusos del sistema agrario que afectaba al 75% de la tierra cultivada”¹⁵.

Sin embargo, la reforma tuvo otros efectos políticos que en gran parte fueron los buscados por el régimen. Por un lado, la influencia económica, social y política de los grandes terratenientes se vio muy reducida, en beneficio de los propietarios medios (de 5 a

¹² Hemos omitido de los puntos citados, por vagos y menos significativos, los términos relativos a la “explotación de los recursos humanos y naturales”, la “inversión de nuevos capitales” y la “necesidad de aumentar la producción”. El resto de los puntos hacían referencia a la defensa de la autodeterminación de Sudán, a la proclamación de una nueva Constitución que expresara los deseos del pueblo y al mantenimiento de relaciones amistosas con los países árabes y con todos los países amigos (Abdel-Malek 1962: 97-98).

¹³ Un resumen completo de la reforma puede encontrarse en Abdel-Malek (1962: 74-75).

¹⁴ Recordemos que un *feddán* egipcio equivale a 0,42 hectáreas.

¹⁵ Los arrendamientos fueron fijados en 7 veces el importe del impuesto sobre la tierra, y los acuerdos basados en el reparto de las cosechas debían ajustarse a un reparto 50-50% (Ansari 1987: 79).

50 *feddan*es, según la clasificación mencionada en la Tabla 1), los más acomodados de los cuales pudieron, además, incrementar sus propiedades mediante la compra de tierras “excedentarias” a los grandes terratenientes. Por otro, el Estado recuperó la propiedad de un gran número de tierras que no fueron finalmente distribuidas, “reemplazando a los grandes propietarios -según Abdel Malek- en la explotación de los campesinos pobres y los obreros agrícolas” (1962: 76).

Finalmente, la reforma apaciguó en un primer momento, pese a su limitado alcance, las esperanzas revolucionarias latentes desde hacía años, y avivadas por el golpe de Estado, entre los pequeños agricultores y campesinos sin tierra, algunos de los cuales se habían negado a pagar las rentas, o pretendido hacerse con la propiedad de las tierras que trabajaban, en los primeros días de la revolución. En un segundo momento, tales expectativas revolucionarias desbordarían en ocasiones el marco reformista dentro del cual el nuevo régimen quería situarse, pero la severidad mostrada por el nuevo poder en la represión de las protestas laborales industriales de Kafr al-Dawwar del 13 de agosto, tras las cuales fueron ejecutados sus dos principales dirigentes, contribuirían a que los campesinos escucharan las llamadas al orden de los Oficiales Libres. No obstante, estos acompañarían la amenaza del palo con la zanahoria de la reforma y con una campaña de imagen en la cual se desplazarían personalmente a las zonas rurales, siguiendo una cuidadosa planificación, a manifestar “que eran hijos del pueblo, y que su causa revolucionaria se identificaba con las aspiraciones de las masas” (Ansari 1987: 80-81). El propio Násir, que se presentaba a sí mismo como un descendiente de la clase de los pequeños propietarios agrícolas, iría más adelante a distribuir títulos de propiedad de la familia real en el Alto Egipto, atendiendo a la propuesta de Sayyid Marei, el arquitecto de la reforma agraria, y sin embargo descendiente de notables rurales y con importantes propiedades en Al-Charqiyya, según el cual,

“Si los partidarios de la contrarrevolución han concentrado sus actividades en El Cairo, y echado todo su peso allí, ¿por qué el Consejo de Mando de la Revolución no habría de salir de El Cairo y dirigirse directamente a los campesinos que se han beneficiado de la reforma agraria?”¹⁶.

En definitiva, como señala Ansari, “la reforma agraria fue llevada a cabo no solo para debilitar a la clase políticamente dominante de los grandes terratenientes, sino también para movilizar un apoyo de masas urgentemente necesitado” (1987: 81).

¹⁶ سيد مرعي (١٩٧٩). أوراق سياسية. القاهرة: المكتب المصري (ص. ٢٩٩). Citado por Ansari (1987: 81).

1.3.4 La disolución de los Hermanos Musulmanes

Como hemos señalado, los Hermanos Musulmanes fueron dejados al margen de la disolución de los partidos políticos en enero de 1953, con el pretexto legal de que, en términos estrictos, no constituían uno. Según Hamruch, el propio Násir dio instrucciones en este sentido al ministro del Interior, Soleimán Háfez, con el argumento de que se contaban “entre quienes más habían cooperado con el movimiento [de los Oficiales Libres] desde antes de que se llevara a cabo, y continuaban cooperando con él” (Hamruch 1992: 306). Todo parece indicar, sin embargo, que el CMR, y en particular Násir, recelaban, justificadamente, tanto de la popularidad de la Hermandad como de sus intenciones secretas.

Aunque muchos de los partidarios de la Hermandad, entre los que se contaban un gran número de propietarios rurales medios y medio-altos, recibieron con rechazo la reforma agraria, oficialmente la organización guardó un escrupuloso silencio al respecto. Sin embargo, la destitución de Mehanna, a quienes muchos consideraban, en palabras de Hamruch, su “caballo ganador” en la lucha por el poder, generó un gran malestar en la organización, donde reinaba la división entre los partidarios de seguir cooperando con el nuevo régimen y los opuestos a esta política (1992: 306). Otro eje de división en el seno de aquella giraba en torno al mantenimiento del “aparato secreto” (جهاز سري, en parte armado) de la organización o su disolución. Finalmente, los partidarios de la conservación de este, y opuestos a la cooperación con el régimen, se impusieron y reactivaron la campaña de captación de oficiales del Ejército y la policía para su causa, movimiento permanentemente correspondido con los intentos del CMR de infiltrarse en la Hermandad.

En diciembre de 1953, los dirigentes del aparato secreto de los Hermanos Musulmanes, Munir al-Dalla y Hasan Achmawi, buscaron entrevistarse con Mohammed Naguib, que era desde el 18 de junio el primer presidente de la República. Si bien Naguib no se entrevistó personalmente con los personajes citados, recibió sus demandas por mediación del jefe de su guardia personal: los “hermanos” exigían el nombramiento de Mehanna como jefe de las Fuerzas Armadas, el retorno de los militares a sus barracones y el nombramiento de un Gobierno que placiera a la Hermandad. Por otro lado, rechazaban el retorno a un sistema parlamentario y la legalización de los partidos políticos (Hamruch 1992: 306-310).

Naguib hizo oídos sordos a las propuestas de la Hermandad, principalmente por su tenor antidemocrático, según Hamruch, pero aquello no desanimó el activismo de los “hermanos”, que pretendían recoger los frutos del descontento y la tensión en las calles, crecientes a pesar, o a causa de, que los principales dirigentes de los antiguos partidos políticos habían sido detenidos (los últimos, los comunistas, entre abril y junio de 1953) y sus publicaciones prohibidas, creándose el 15 de septiembre el Tribunal de la Revolución

(محكمة الثورة) para que se encargara específicamente de la represión de los adversarios políticos (1992: 309-310).

Finalmente, la tensión contenida entre el CMR y la organización islamista, cuyos respectivos dirigentes se reunían, sin embargo, periódicamente, estalló el 12 de enero de 1954, cuando en los actos de conmemoración de los “Mártires del Canal”, caídos en la lucha con las tropas británicas en 1952, se produjeron enfrentamientos entre estudiantes partidarios de los Hermanos Musulmanes y otros partidarios del régimen, en el curso de los cuales los primeros hicieron un uso abierto de armas de fuego. El 14 de enero, la organización islamista fue disuelta, con los argumentos de que se había opuesto a la reforma agraria, había intentado infiltrarse entre los oficiales del Ejército y la policía, contaba con una organización paramilitar secreta y mantenía contactos igualmente secretos con los británicos (Hamruch 1992: 309; Vatikiotis 1978: 135).

1.3.5 La defenestración de Mohammed Naguib

A la disolución de los Hermanos Musulmanes, seguida por el ingreso de cientos de ellos en las cárceles, le sucedió inmediatamente la explosión de las tensiones entre el CMR y Naguib y sus partidarios en el Ejército. Tras la proclamación de la República, y la asunción por Naguib de las funciones presidenciales el 18 de junio de 1953, Abdel Hakim Amer, buen amigo de Násier, había sido nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, mientras que el propio Násier se había convertido en vicepresidente de la República y ministro del Interior. Bajo la dirección de Amer, el proceso de depuración de la Fuerzas Armadas y de consolidación en ellas de los sectores más próximos a Násier y al CMR se había intensificado. Naguib venía oponiéndose a dicho proceso con creciente irritación, y la disolución de los Hermanos Musulmanes colmó su paciencia, por lo que el 23 de febrero de 1954 presentó su dimisión, al ser rechazada su demanda de obtener el derecho de veto sobre las decisiones del CMR (Lacouture 1962: 121).

En un principio, Násier reaccionó al desafío de Naguib arrestándolo, acusado de pretender asumir poderes dictatoriales. Sin embargo, el alineamiento con Naguib del cuerpo de blindados y caballería, cuyos oficiales eran leales a Jaled Mohai Eddín, y las posteriores manifestaciones de apoyo a aquel, en gran parte sostenidas por los Hermanos Musulmanes, llevaron a Násier a efectuar un movimiento de retirada, devolviendo a Naguib a la presidencia de la República. Naguib anunció entonces la futura celebración de elecciones parlamentarias y solicitó la liberación de los prisioneros políticos (Lacouture 1962: 172-174; Vatikiotis 1962: 141).

Násier y el CMR parecieron ceder ante Naguib y su apoyo popular. La censura y la ley marcial fueron suspendidas el 6 de marzo, y las fuerzas políticas opuestas al régimen, unidas en una colaboración táctica, recuperaron brío, removilizando su poder mediático y

popular, en particular entre los estudiantes. El 25 de marzo, el CMR anunció que se disolvería pocos meses después, y daría paso a la elección de un Parlamento. Sin embargo, durante ese mes el CMR había estado cerrando filas con sus partidarios en el Ejército y llevando a cabo una campaña de propaganda, en particular entre los sindicatos obreros: la reinstauración del sistema parlamentario -insistía dicha propaganda- traería el retorno del antiguo régimen.

El 27 de marzo, grandes manifestaciones de campesinos, militantes de la Organización para la Liberación, obreros industriales de los suburbios de El Cairo y de la “plebe” en general -siguiendo la expresión de Lacouture, algunos de ellos llevados en autobuses del Estado según ciertos observadores, convergieron en la sede del CMR clamando su rechazo a los partidos y el parlamentarismo, y reclamando la permanencia de Náser, sacado y llevado a hombros y vitoreado. A continuación, los sindicatos obreros, tras vencer importantes resistencias en su seno, convocaron una huelga general. La suerte de Naguib, de sus partidarios y de un futuro parlamentario estaba echada: el 18 de abril Náser era nombrado presidente del Gobierno e incluía en él a 8 miembros del CMR, y el día 31 de marzo era nombrado presidente de la Organización para la Liberación. Naguib seguiría siendo presidente de la República durante unos meses, en los que concluirían las negociaciones llevadas a cabo por Náser con Gran Bretaña sobre la evacuación del Canal de Suez, evacuación que comenzaría en la primera semana de agosto de 1954, y cuyo tratado definitivo sería firmado el 19 de octubre (Lacouture 1962: 176-177; Vatikiotis 1962: 143).

El 26 de octubre, cuando Náser se disponía a pronunciar el discurso de celebración oficial del tratado con Gran Bretaña, un miembro de los Hermanos Musulmanes, Mohammed Abdel Latif, intentó acabar con su vida, según la versión de las autoridades, a la que muchos negaron credibilidad. El intento de asesinato dio paso a una amplia campaña de detenciones de disidentes de todas las tendencias políticas, al cese de 140 oficiales leales a Naguib, y a la condena a muerte de ocho miembros de los Hermanos Musulmanes. El 13 de noviembre, Naguib, convenientemente desacreditado por la propaganda en los meses anteriores, sería puesto bajo arresto domiciliario y obligado a dimitir de la presidencia de la República, que quedaría vacante durante casi dos años, asumiendo Náser los poderes ejecutivos en el país en tanto que presidente del CMR.

1.4 LA LEGITIMACIÓN NACIONALISTA. EL NACIMIENTO DEL CARISMA DE NÁSER

“El poder, ¿para hacer qué?”, se preguntaban los Lacouture en el título de uno de los capítulos de su obra que estamos citando abundantemente (1962: 151). Los estudios sobre la época de formación del régimen naserista suelen señalar la falta de concreción en

los objetivos, y sobre todo en los procedimientos para alcanzarlos, del nuevo poder. Sin embargo, el programa fundacional de la Organización para la Liberación, que hemos citado más arriba, marcaba las orientaciones, incluyendo, junto a sus objetivos económicos y sociales, algunas de las luego conocidas obsesiones de Náser: la consecución de la auténtica independencia nacional, el apoyo a los principios de la ONU relativos a los pueblos sojuzgados y la consolidación de Egipto como una fuerza regional influyente que contribuyera, entre otras cosas, a coordinar las políticas de los países árabes de manera que estos incrementaran, así mismo, su influencia internacional. Estos objetivos serían la prioridad del ya indiscutible gobernante de Egipto y, al alcanzarlos, conseguiría lo único que le faltaba para consolidar su poder: una amplia fuente de legitimidad que le permitiera abordar tareas de mayor calado.

1.4.1 La Conferencia de Bandung y la vía “no alineada”

La conclusión del tratado de evacuación con Gran Bretaña, el 19 de octubre de 1954, satisfizo a pocos, en la medida en que la parte egipcia había aceptado que tras la evacuación, que debía durar veinte meses, daría a Gran Bretaña todas las facilidades necesarias para poner la base en pie de guerra y utilizarla “en caso de un ataque armado por parte de una potencia extranjera a la zona de Oriente Medio contra cualquier país que formara parte del pacto de defensa común firmado en El Cairo en 1950¹⁷, o contra Turquía” (Lacouture 1962: 194). Sin embargo, Náser, ya fuera por convicción, por hacer presión sobre los británicos para que cumplieran el compromiso de evacuación o, como señala Abdel-Malek, por no contravenir la tradición neutralista de Egipto, se negó a suscribir el Pacto de Bagdad del 24 de febrero de 1955, firmado por Irán, Irak, Pakistán, Turquía y Gran Bretaña, y destinado a contener a la Unión Soviética y mantener la influencia de Gran Bretaña en la zona. Además de negarse a alinearse con Gran Bretaña, para contrarrestar los posibles efectos de la nueva coalición, Egipto cerró un pacto militar de defensa mutua con Siria y Yemen en marzo del mismo año y, a continuación, entre el 17 y el 24 de abril, Náser participó, desempeñando un papel director junto a Nehru y Sukarno, en la Conferencia de Bandung, que sentaría los principios antiimperialistas, anticolonialistas y “neutralistas positivos” del posteriormente conocido como Movimiento de los Países no Alineados (Lacouture 1962: 194-207; Abdel-Malek 1962: 219-236).

La negativa de Egipto a integrarse en la coalición anticomunista de Bagdad, y su papel promotor en la Conferencia de Bandung, sospechosa ante las potencias occidentales y sus aliados de filo-comunismo, acarreó a Egipto la ralentización de la hasta entonces provechosa cooperación con Gran Bretaña, y sobre todo con los Estados Unidos, deseosos

¹⁷ El texto hace referencia al Tratado de Defensa Común y Cooperación firmado por la Liga Árabe en 1950.

por un lado de ocupar la posición de los británicos en la región, pero por otro temerosos de la influencia soviética y aliados de aquellos frente a esta. Acuciado por las provocaciones militares israelíes¹⁸, tras sucesivos fracasos en sus intentos de comprar armas modernas a los países occidentales, Egipto concluyó el 2 de septiembre de 1955 un acuerdo en este sentido con Checoslovaquia por importe de 80 millones de dólares, pagables en algodón (Abdel-Malek 1962: 221).

En realidad, fuera del contexto de la guerra fría y del conflicto árabe-israelí, la compra de armas a Checoslovaquia se habría inscrito en el marco de los crecientes lazos económicos con los países comunistas, que se habían multiplicado entre 1954 y 1956 en condiciones muy ventajosas para Egipto, hasta alcanzar el 35% de sus intercambios comerciales; sin embargo, en dicho contexto supondría para los Estados Unidos una señal de alarma que surtiría efecto en los meses siguientes (Lacouture 1962: 213).

1.4.2 La nacionalización del Canal de Suez

Tras la compra de las armas checas por Egipto, Estados Unidos siguió insinuando a Egipto los beneficios que tendría un alineamiento inequívoco con el bando anticomunista. El 19 de diciembre, donaba al país 54 millones de dólares y el 11 de febrero de 1955 firmaba un acuerdo de principios por el que se comprometía a facilitar la financiación necesaria para llevar a cabo el gran proyecto del CMR: la construcción de la Gran Presa de Asuán. Sin embargo, un préstamo de tal envergadura en condiciones dudosas suscitó numerosos recelos en el país, escarmentado por la experiencia de la construcción del Canal, e hizo vacilar a Náser, al tiempo que movilizaba la diplomacia de los adversarios del acuerdo (Gran Bretaña, Francia, Israel). Así, cuando Náser, conminado por los Estados Unidos a dar una respuesta inmediata, consintió finalmente el 17 de julio en aceptar el préstamo, se vio sorprendido al día siguiente por la negativa definitiva de Estados Unidos, negativa que, además, vendría acompañada de reconvenciones y exigencias relativas a la inestabilidad del sistema político y la economía de Egipto¹⁹. Tras tres días de encierro de Náser en sus oficinas, el 22 de julio los servicios de información del régimen anunciaban “el discurso más importante de los últimos diez años”, que debía ser pronunciado por Náser el 26 en Alejandría (Lacouture 1962: 450-451).

En el cuarto aniversario del golpe de Estado, el presidente, sonriente al principio,

¹⁸ El 28 de febrero de 1955, una incursión israelí en Gaza bajo el pretexto de eliminar a fedayines palestinos, causó la muerte a 43 soldados egipcios, inflamando el sentimiento de impotencia y humillación ante la superioridad militar israelí, incrementó el deseo del régimen y las Fuerzas Armadas de dotarse de un armamento moderno y dio pie a un auténtico apoyo del régimen a los fedayines egipcios, que haría que los enfrentamientos militares se repitieran en noviembre de 1955.

¹⁹ Además, EEUU hizo notar que el proyecto de la Presa de Asuán debería contar, en su opinión, con el acuerdo de Sudán, Etiopía y Egipto (Lacouture 1962: 450-452).

pronunció su discurso, un largo discurso de dos horas y cuarenta y nueve minutos, al final del cual, el presidente soltó la noticia “bomba”:

“Pagaremos la Presa de Asuán con el Canal de Suez (...) La Compañía del Canal de Suez, que tiene su sede en París, es una compañía usurpada [مغتصبة] (...) A esta misma hora en la que os hablo, el Diario Oficial publica la ley de nacionalización del Canal de Suez, y los agentes del Gobierno toman posesión de los locales de la Compañía”²⁰.

Los efectos políticos internos de la nacionalización del Canal de Suez son suficientemente conocidos. Ya la asistencia de Náser a la Conferencia de Bandung había invertido la tendencia de la impopularidad del régimen entre algunos de los sectores más politizados de la sociedad egipcia. La izquierda marxista, en particular, le había manifestado su apoyo, más aún tras el reconocimiento oficial de China en abril de 1956, aunque ello no implicara la relajación de la política represiva del régimen hacia dicha izquierda. Sin embargo, la nacionalización del Canal supuso el auténtico viraje: el frenesí de alegría popular en las calles de El Cairo y Alejandría perfundía las filas de los partidarios del Wafd, de los Hermanos Musulmanes y de los propietarios afectados por la reforma agraria (Lacouture 1962: 455). La posterior “agresión tripartita” de Gran Bretaña, Francia e Israel a Egipto entre el 29 de octubre y el 6 de noviembre de 1956, con el fin de recuperar el Canal de Suez, y el alto el fuego impuesto por la presión internacional, culminada con el ultimátum soviético del 5 de noviembre, no harían más que multiplicar el efecto de la muy arriesgada acción, convertida por mor de su éxito en golpe maestro de Náser, que sería casi santificado no solo entre las masas egipcias, sino también árabes y de los países excolonizados.

Como señaló Bevan, exministro laborista británico, citado por los Lacouture, el conflicto “no podía ser visto en Oriente como un conflicto entre el nacionalismo egipcio y las exigencias legítimas del comercio internacional, sino como un nuevo ejemplo de la vieja lucha entre el imperialismo y los países de soberanía reciente”, y -continuaban los Lacouture- “en el mismo instante en que los Estados occidentales se acordaban de que Náser era un dictador, el dictador devenía, por su acción, el elegido de la nación, el hombre que, en nombre del pueblo, restituía al pueblo los recursos del país” (Lacouture 1962: 459).

Junto al Egipto definitivamente independiente, y junto a la consolidación del liderazgo de Náser en él, había nacido el panarabismo, del que Náser se convertiría en indiscutible líder a pesar de sus diversos competidores, y que llevaría a la constitución de la República Árabe Unida (RAU), formada por Egipto y Siria el 1 de febrero de 1958.

²⁰ El discurso de Náser con ocasión de la nacionalización del Canal de Suez puede encontrarse fácilmente en internet, por ejemplo *Youtube* (<https://goo.gl/jkM8EH>, consulta 12 de abril de 2010).

1.5 LA INAUGURACIÓN DEL CARISMA DE NÁSER

La nacionalización del Canal del Suez y la posterior “victoria” egipcia frente a la coalición tripartita marcarían un antes y un después en la legitimación de Násér como máximo dirigente del país. A partir de aquel indiscutible éxito, el presidente contaría con un gran apoyo popular, según constataron y pueden constatar aun hoy -mediante documentos audiovisuales y testimonios- los observadores objetivos, a pesar de que dicho apoyo, en ausencia de encuestas de opinión pública y de procesos electorales libres y abiertos, pudiera medirse únicamente mediante el pulso de la vida cotidiana de la época, mediante testimonios, y a través de las grandes manifestaciones populares que se produjeron, lo que permite a algunos de los críticos y detractores de Násér poner en cuestión la medida y sinceridad de dicho apoyo en un contexto autoritario, de libertad de expresión restringida y de utilización de todos los medios del Estado para la movilización en favor del régimen.

El éxito de Suez supuso un punto de inflexión en la popularidad y la aceptación de Násér y su régimen, que sería apuntalado en los años posteriores por lo que muchos egipcios considerarían otros éxitos, logros o beneficios objetivos -materiales o no- para ellos. Sin embargo, en la aceptación de Násér y de su régimen a partir de julio-octubre de 1956, en su aceptación en muchos casos entusiasta, a pesar de su carácter indiscutiblemente autocrático y autoritario, desempeñó un papel muy importante, más allá del éxito o los éxitos en sí, y aunque se originara en gran parte en ellos, una nueva dimensión: la autoridad carismática del presidente, derivada de su relación igualmente carismática con gran parte de sus conciudadanos. Un testimonio especialmente significativo y representativo nos permitirá ilustrar el alcance de esta nueva dimensión que operaría, probablemente, no a partir del éxito de Suez, sino del discurso previo en el que Násér anunció la nacionalización del Canal. Aunque nos adelantemos en el tiempo de los acontecimientos, ello es conveniente para señalar, sin tener que volver sobre ella hasta mucho más adelante, la intervención constante del llamado “carisma de Násér” en la evolución política de Egipto desde mediados de los años 50 y hasta el final de su mandato.

1.5.1 Un testimonio

En sus memorias, publicadas en 2005 (الزيات 2005), Muntasir al-Zayyat, quien en los años 70 y principios de los 80 sería miembro de las *Gamaat Islamiyya* (Grupos Islámicos) -las cuales se enfrentarían con las armas a los regímenes de Sadat y Mubarak a finales de los 70 y desde finales de los 80 hasta mediados de los 90-, y que desde mediados de los 80 sería uno de los más conocidos abogados defensores de los activistas islamistas, ofrece un testimonio personal y familiar muy revelador del alcance de la influencia de

Náser.

Nacido en Asuán en 1956, Muntasir Al-Zayyat pertenecía a una familia de clase media. Su padre, funcionario con un cargo directivo en el ministerio de Educación, era un wafdistas y liberal apasionado y un devoto creyente, que enseñaba a sus hijos personalmente el liberalismo y la religión, pero que, sin embargo, como tantos otros egipcios -siempre según Zayyat-, “se había alineado con la revolución naserista” (انحاز²¹ للثورة), trascendiendo el momento de entusiasmo nacionalista que le hizo dar a su hijo el nombre de “Muntasir” (“victorioso”) tras la “victoria” frente a la “agresión tripartita” de 1956, e ingresando primero en la Unión Nacional y luego en la Unión Socialista Árabe, desde las que fue candidato a las elecciones locales y accedió a puestos de responsabilidad política.

De niño, Al-Zayyat, como su padre y como tantos otros (de nuevo según él), amaba con pasión (عشق) a Náser: oía todos sus discursos, los memorizaba y repetía parte de ellos en la radio de la escuela, de cuyas emisiones se encargaba, junto con su hermano mayor Ahmad, leyendo las noticias, de la misma manera que ambos se encargaban de leer el Corán y pronunciar sermones en ella (الزيات 2005: 23-27).

Luego vendría la derrota de 1967, con unos efectos devastadores sobre el ánimo de la sociedad egipcia, y sobre el de la familia de Al-Zayyat. Tras ella comenzaron a llegar abundantes noticias, en particular a los medios piadosos en los que se movía dicha familia, sobre las torturas en las cárceles y sobre “la trastornada situación real del país” (الزيات 2005: 27-29). A pesar de ello, cuando en septiembre de 1970 llegó la noticia de la muerte de Náser, esta fue la situación que se produjo en la familia Al-Zayyat:

“De repente, mis hermanos me despertaron: «¡Levántate, Abdel Náser ha muerto!». No puedo describir el desconcierto que nos invadió, a mí y a toda mi familia, en particular a mi padre. Personalmente, nada más oír la noticia, sentí que era mi propio padre el que había muerto. Tenía catorce años cuando me incorporé a las manifestaciones que salieron en Asuán en duelo por Náser. A pesar de nuestra edad, mis hermanos y yo intentamos viajar a El Cairo para participar en los funerales, pero al llegar a la estación de tren, un hombre nos mandó a casa, diciéndonos que éramos demasiado pequeños. Mi propio padre, a pesar de los excesos que habían tenido lugar, mantenía su afecto hacia Náser, y lo lloró largamente, en una escena que sigo recordando hasta este momento” (الزيات 2005: 29).

Si hemos escogido el testimonio de Al-Zayyat, y no otros de los muchos que podrían ser citados, es, por un lado, porque resume y condensa muy adecuadamente tanto el carácter de la relación de muchos egipcios con Náser (definida en términos de amor

²¹ Hay que recordar, y esta es una prueba más de ello, que el golpe de Estado de los Oficiales Libres y la posterior acción de Gobierno del régimen naserista no solo recibía y recibe el nombre de “revolución” de parte de sus partidarios, sino también de la mayor parte de los egipcios, incluso de los más acendrados críticos de dicho régimen.

pasional, profundamente emotiva, idílica sin duda, e inasequible en ese componente emotivo a las contradicciones derivadas del conocimiento efectivo, racional, de los errores e iniquidades cometidas por el líder o en su nombre), como la extensión de la influencia de aquel entre los más diversos sectores ideológicos (wafdismo, liberalismo, conservadurismo religioso -el hermano de Al-Zayyat, Ahmad, sería el emir de la *gamaa islamiyya* de Asuán).

Pero también hemos elegido el testimonio citado porque hace alusión a uno de los principales elementos sobre los que se sustentaba la relación carismática de Náser con gran parte de los egipcios: el efecto de sus palabras, esas palabras que en sus discursos grabados tantos egipcios -y tantos árabes- oían -e incluso algunos oyen todavía²²- constantemente, que memorizaban y repetían, y sobre el que volveremos un poco más adelante.

1.5.2 Apuntes sobre “el carisma”, la autoridad carismática y la relación carismática

En palabras de Vallès, la autoridad -siguiendo el concepto de *auctoritas* de los clásicos romanos- “se manifiesta cuando las indicaciones de un sujeto individual o colectivo son atendidas por los demás porque cuenta con un crédito inicial o una solvencia que se le reconocen de antemano” (Vallès 2008: 31-32). Como señala el mismo autor, esa autoridad puede provenir de los más diversos factores: para algunos ciudadanos, quien ocupa un cargo público cuenta de entrada, y por razón de aquel, con cierta autoridad; en otros casos, aquella proviene del reconocimiento de un prestigio moral, de una competencia en cualquier terreno del saber (profano o religioso), de una experiencia en determinado ámbito de la vida social o de una trayectoria histórica, de la confianza generada por acciones pasadas. En el caso de la *autoridad carismática*, esta proviene, tal vez, en gran parte, de uno o varios de los factores citados, pero lo que la caracteriza es su aparente invulnerabilidad o resistencia a ser revocada a raíz de, digamos, la mera influencia de los datos externos u objetivos -como los que dieron origen a esa autoridad-, pues, como señaló el creador del concepto, Max Weber, se fundamenta en la atribución a un personaje, la personalidad carismática, de cualidades o poderes excepcionales, cuando no sobrehumanos o sobrenaturales, o, dicho de otra manera, en la posesión por parte del personaje en cuestión, de “algo más” que la capacidad de raciocinio, previsión, cálculo o ejecución, de algo intangible y difícilmente explicable o descriptible a satisfacción (muchos hablan de un “magnetismo personal”), pero que induce la confianza fiduciaria e inquebrantable de quienes atribuyen ese carisma.

²² Pueden encontrarse por doquier copias y grabaciones audiovisuales, y sobre todo sonoras, de dichos discursos, que aún son utilizadas con los más diversos objetivos de movilización política. El sitio en internet *President Gamal Abdel Nasser* afirma disponer de 1360 discursos audiovisuales del expresidente de Egipto (<http://goo.gl/iRtfqM>, consulta 13 de septiembre de 2013).

Se suele decir que Násér fue un líder carismático, o un dirigente con un fuerte carisma. Estas expresiones nos parecen aceptables siempre que no olvidemos que, como ya señaló Weber y acabamos de recordar, el carisma en términos seculares y empíricos nunca puede quedar reducido a ciertas cualidades de un individuo, sino que *es siempre el fruto de una relación*. Dicho de otra manera, no existen personalidades carismáticas sin relación carismática, sin la participación de esa otra parte de la ecuación que atribuye el carisma.

En términos generales, a juzgar por la mezcolanza de causas y efectos que parecen operar en la relación carismática, el líder carismático es aquel que parece recoger, resumir o poner palabras y nombres a los sentimientos y aspiraciones de quienes lo reconocen como tal, aquel que infunde confianza porque parece que propone las decisiones y el camino correctos, aquel que ahuyenta los miedos porque parece que tiene la respuesta y la entereza para todo, aquel que infunde confianza, también, porque parece dirigirse a todos íntimamente y confiar en ellos.

En lo que respecta a los dirigentes políticos o sociales, en términos históricos se observa que no hay grandes dirigentes carismáticos, o dirigentes auténticamente carismáticos (en el sentido fuerte de la palabra), sin *situaciones carismáticas*: momentos de crisis de una sociedad, un cuerpo político o una comunidad, en particular aquellos en los que una gran parte de sus miembros se consideran amenazados colectivamente o tienen aspiraciones colectivas (la independencia, la libertad, la liberación del tipo que sea) y, para conseguir sus objetivos, buscan la unidad y la unanimidad, que se operan a través del líder carismático en el que se disuelven las diferencias (Camau 1991). En estos casos, el líder carismático frecuentemente se remonta en el pasado de la comunidad buscando sus rasgos unificadores; recuerda sus padecimientos, luchas, humillaciones y victorias comunes; promete y pide sacrificios y esfuerzos, augura batallas y victorias... Casi siempre, también, alguna victoria, algún éxito, da pie a la *inauguración* o *descubrimiento* del carisma, o al menos apuntala y ratifica un descubrimiento progresivo. Pero en cualquier caso, cuando el carisma se descubre, por así decirlo, “en todo su esplendor”, adquiere unas virtudes y efectos permanentes, o muy resistentes a la erosión. Y es importante insistir en esa noción de “descubrimiento”, porque, no solo en un determinado momento el público descubre a “un hombre excepcional”, sino porque también en un determinado momento ese hombre descubre en sí una nueva capacidad, una nueva autoridad y un nuevo “poder”.

Si bien en casi todas las sociedades y comunidades se han dado casos de grandes dirigentes carismáticos²³, cabe preguntarse si existen o han existido sociedades o

²³ Enumerar abundantes personajes y situaciones podría llevarnos a la necesidad de debatir y diferenciar, sobre todo, entre lo que podemos llamar grandes dirigentes reconocidos como tales, o muy populares o apreciados, a causa de sus logros, por un lado, y por otro grandes dirigentes carismáticos apreciados fundamentalmente por razón de los lazos afectivos y emocionales creados con sus seguidores (Emrich, Brower, Feldman, & Garland 2001), pero podemos mencionar, por citar tan solo algunos casos que creemos no muy discutibles de dirigentes carismáticos de diferentes áreas culturales, los nombres de Churchill, Hitler, Gandhi,

comunidades más proclives o expuestas a las relaciones carismáticas. En nuestra opinión, este es un hecho constatable históricamente, y el caso de los países árabes, y de Egipto en particular (ya hemos aludido al caso de Zaglul, e incluso, en menor medida, de Nahhás), así parecen demostrarlo; aunque el hecho de constatar la predisposición a establecer relaciones carismáticas en (y no de) ciertas sociedades o comunidades no tiene nada que ver, al menos en nuestro caso, con alinearse con concepciones esencialistas de los pueblos, las sociedades y las culturas, sino más bien con considerar que determinadas situaciones históricas, combinadas con ciertas configuraciones sociales, culturales, ideológicas y antropológicas, favorecen la aparición de dichas relaciones. Volveremos en algunas ocasiones sobre la cuestión del carisma en general, sobre la de la *personalización del poder* estrechamente relacionada con ella, y sobre el caso de Egipto, y en particular de Násér y sus relaciones con gran parte de los egipcios, pero ahora queremos centrarnos en cómo empezaron o pudieron empezar dichas relaciones.

1.5.3 El discurso de Násér. El discurso inaugural (del carisma) sobre la nacionalización del Canal

Ningún estudio completo puede abordar la cuestión del carisma de Násér sin estudiar sus discursos desde un punto de vista lingüístico (pragmático, psicolingüístico y sociolingüístico), prestando atención a un tiempo a sus aspectos semánticos, estructurales y retóricos, y al contexto histórico y las características sociales, culturales y antropológicas de la sociedad en la que se produjeron. Si bien no es nuestra intención realizar aquí un estudio específico de ese tipo, sí nos parece conveniente señalar, a modo de ejemplo, sin profundizar en sus características retóricas, aunque mencionando algunas de ellas, el que puede ser considerado como discurso inaugural de la relación carismática de Násér como gran parte de los egipcios, el discurso en el que anunció la nacionalización del Canal de Suez.

El discurso pronunciado el 16 de julio de 1956, de una duración de dos horas y cuarenta y nueve minutos, y una extensión de más de 14.000 palabras²⁴, incluyó una larguísima introducción a su objeto principal. En ella, Násér comenzó recordando en su primera frase el aniversario de la revolución de 1952 y las batallas y esfuerzos librados para acabar con el pasado, para luego prometer nuevas victorias frente a él y en la construcción de la independencia. A continuación, invocó los principios de libertad e independencia para toda la humanidad, y mencionó los ataques de “la colonización” e

Mandela, Sukarno, Tito, Mao, etc.

²⁴ Las versiones oral y escrita que hemos consultado se encuentran en <http://goo.gl/YtTu0T> (consulta 24 de septiembre de 2014) del sitio web *Presidente Gamal Abdel Naser*.

Israel a Egipto, la participación de este en Bandung, el esfuerzo por construir el nacionalismo árabe, la apertura de los brazos de Egipto a Siria... Posteriormente señaló cómo se había logrado la evacuación del Canal, cómo el régimen se había esforzado por poner los cimientos de la independencia económica, y cómo sus intentos de cooperar con diversos países occidentales se habían visto frustrados por la voluntad de aquellos de imponer a Egipto alianzas y condicionar su política, sometiéndolo a Israel y conminándolo a abandonar los derechos de los palestinos: habló del Pacto de Bagdad, de las armas checas,... En este punto, toda referencia a una negociación diplomática dejó de ser una mera alusión y el Presidente comenzó a deleitarse en el detalle: “el alto responsable fulano, me dijo esto, y yo le contesté esto, y él replicó lo otro”. Se expresaba en un lenguaje progresivamente dialectal y coloquial, en algunos puntos incluso vulgar, y en un tono confidente para con su público, al que transmitía unos contenidos de principios morales, de firmeza, de desafío a los oponentes, pero también de mucho sentido del humor, poniendo en evidencia o mofándose de los argumentos del rival...

Los Lacouture, que asistieron personalmente al discurso al pie del estrado, que residían en Egipto desde tres años antes, y que habían asistido a otros muchos discursos del presidente, recogieron así sus impresiones y las del público en estos momentos:

“Habíamos venido a escuchar un monólogo de tragedia, y nos ofrecían una comedia humorística (...) Era toda una comedia la que representaba el orador, desempeñando el papel del astuto Goha²⁵ frente a los colosos extranjeros, arrancando a los periodistas egipcios a nuestro alrededor expresiones de asentimiento: *kuawes awi* («muy bien»). Este hombre de aire tímido había descubierto riendo cómo se habla al pueblo (...)” (Lacouture 1962: 453).

Y, de repente, el tono cambiaba para entrar “con seriedad” en un nuevo tema: la Presa de Asuán, gran proyecto del régimen para cambiar el rostro de Egipto y disparar sus logros económicos. Datos, cifras, cálculos, negociaciones... todo relatado con el máximo detalle para mostrar como Gran Bretaña, EEUU y el Banco Mundial habían intentado someter a Egipto, engañar a Egipto, humillar a Egipto, con las negociaciones para financiar la presa y concederle ayudas económicas.

Pero el tono didáctico y profesoral cambiaba otra vez, girando esta vez hacia lo emotivo:

“El 14 de marzo recibí en casa al embajador británico y le dije: nosotros somos un pueblo sentimental. Preferimos una palabra agradable a 50 millones de dólares, y no aceptamos un insulto ni por 150 millones de dólares (...) Nosotros no os pedimos la ayuda, y la aceptamos por no haceros un feo. No somos un Estado rico, pero si necesitamos 50 millones, los ahorraremos: trabajaremos un poco más, picaremos algo más de piedra (...)”.

²⁵ El pícaro héroe de las anécdotas sapienciales de la literatura popular árabe y turca (*hoca*, en turco).

Poco más adelante, otro golpe de efecto, teatral, intimista: tras relatar su conversación con el director del Banco Mundial, “Mister Black”, y cómo este negaba que dicho banco fuera un banco político y respondiera a consideraciones políticas en sus decisiones, y tras contar que él mismo le había respondido que por supuesto que era un banco político y seguía las políticas de los países que lo dominaban, los países occidentales, Náser daba cuenta de sus reflexiones íntimas:

“Mientras miraba a Mr. Black, sentado delante de mí, comencé a pensar que estaba sentado delante de Ferdinand de Lesseps (...) y en cuando se entrevistó con él el jedive Muhammad Said en 1854 [para proponerle excavar el Canal de Suez, que, según él, traería grandes beneficios a Egipto] (...) Un rato después, le dije: «Mire, hay un problema en todo esto: no queremos un nuevo Cromer que venga a gobernarnos. Hace tiempo nos impusieron créditos, e intereses, y créditos para pagar los intereses, y como resultado de todo esto el país fue ocupado; así que le ruego que, cuando hable conmigo, tenga esto en consideración: rechazamos a Lesseps, rechazamos a Cromer, y rechazamos la ocupación política por medio de la ocupación económica»”.

La conexión entre el Canal de Suez y la Presa de Asuán estaba hecha, y estaba construida sobre un hecho central del pasado egipcio, y estaba construida sobre una imagen, sobre la transposición de una imagen del pasado y sobre la transposición del público al pasado. A continuación, Náser abundaría en las penalidades y padecimientos acarreados por el Canal de Suez y su explotación: 120.000 egipcios muertos para excavarlo, además del coste económico, además de la expropiación de las acciones, además la sumisión económica, además de la sumisión política. Y todo, ¿para qué? Para que de los 100 millones de dólares anuales de ingresos del Canal, Egipto recibiera en 1956, 3 millones. Y la conclusión: “Treinta y cinco millones de libras egipcias anuales se lleva la Compañía del Canal... ¡cojámoslos nosotros!”. Finalmente, con tono solemne, el presidente comunicaba que en ese mismo día se había publicado en el Diario Oficial del Estado el decreto de nacionalización del Canal de Suez, y procedía a leer uno a uno todos sus puntos.

Todo lo anterior se había producido en un *crescendo* de interrupciones de aclamación del público, cada vez más prolongadas y explosivas. Según los Lacouture, los periodistas locales más escépticos se subían sobre las sillas para aplaudir, y el frenesí se extendía desde Alejandría al resto de Egipto. Por todas partes, wafdistas, simpatizantes de los Hermanos Musulmanes, víctimas de la reforma agraria, y qué decir de los comunistas y socialistas, darían su aprobación y afirmarían que el presidente merecía su apoyo (Lacouture 1962: 455).

Más allá del episodio concreto de Suez, Náser descubrió durante aquel discurso un registro comunicativo en el que se encontraba muy cómodo y que, además, tenía una eficacia formidable. Más allá de la obvia preparación intelectual, retórica y comunicativa

del discurso, de su diseño previo argumental entroncado en el pasado, de la calculada invocación de grandes principios mezclando términos solemnes y emotivos, del uso de las repeticiones y paralelismos tan caros a la tradición retórica árabe, de la probable preparación de algunos golpes de efecto, bromas, imágenes evocadoras...; más allá de todo esto, Náser aprendió, probablemente, en aquel discurso, a “dejarse llevar” hacia algo más espontáneo y auténtico, tal vez a aquello que Carlier, en su estudio sobre los presidentes en la Argelia independiente, denominó “una capacidad particular para utilizar un código cultural autóctono inscrito en la herencia personal y en los valores del medio (...) un viejo fondo antropológico irreducible a la instrumentalización consciente” (Carlier 1991:114).

Quizás uno de los rasgos más destacados de esa capacidad eran su jovialidad y su uso del humor y la ironía, esos rasgos por los que los egipcios en general son sobradamente conocidos y que, en el caso de Náser durante el discurso de la nacionalización del Canal, llevaron a los Lacouture a aventurar “es posible que no se haya visto nunca a un hombre lanzarse a una aventura tan peligrosa con un aire tan alegre” (Lacouture 1962: 454). Si bien no gesticulaba apenas, por no decir que no gesticulaba, Náser, bien erguido, sonreía casi permanentemente, e incluso reía al intercalar anécdotas en los pasajes más solemnes y comprometidos. Con el paso del tiempo, en futuros discursos las constantes invocaciones a la dignidad y el honor (الكرامة والعزة) y la disposición a combatir para defenderlos, así como su tono desafiante, fueron cada vez más acompañados del humor y la ironía, salpicados de aspectos casi vulgares que restaban dramatismo a las situaciones y tranquilizaban a sus oyentes. Cuando dominó la técnica y la complicidad de su público ya era grande, hacía participar a este, como coro, en sus desafíos jocosos, como en este pasaje de un discurso sobre el rechazo de la ayuda estadounidense:

Náser: “Ayer, el embajador norteamericano se reunió con el ministro de Aprovisionamiento. Estaba alterado y enfadado... Se sentó con él un par de minutos, y le dijo que no podían tratar el tema de las mercancías que traemos de allí, porque nuestra conducta, nuestra conducta aquí, en Egipto, no les gusta... Y yo digo: a quien no le guste nuestra conducta que beba... ¿que beba de dónde?

El público, a coro: ¡Del mar!

Náser: Eso es, que beba del mar... Y si no les basta el mar Mediterráneo, ¡les damos el Mar Rojo también!”

(Risas y aplausos)²⁶.

²⁶ Este pasaje tiene su origen en un dicho egipcio (الزعلان يشرب من البحر), “quien esté enfadado, que beba del mar”. Es un pasaje muy conocido y difundido, que se puede encontrar, por ejemplo, en *Youtube* (<https://goo.gl/wijSCT>). Sin embargo, no hemos podido determinar a qué discurso concreto pertenece, aunque en todo caso es posterior a 1956.

2. EL RÉGIMEN NASERISTA Y EL ESTADO. POLÍTICAS Y ESTRUCTURA

2.1 ECONOMÍA Y POLÍTICAS SOCIALES

2.1.1 Planificación e industrialización para la modernización

Si el primer objetivo de Náser fue alcanzar la independencia de Egipto, el segundo fue lograr la modernización del país. Como sucedió con el resto de sus políticas, la tarea fue emprendida sin un programa detallado, pero con algunos principios orientadores claros, en los que tal vez la “victoria de Suez” desempeñó a medio plazo un papel no menos importante que el que jugó en la legitimación del poder de Náser. Al menos así lo interpretó Jean Lacouture, para quien dicha “victoria” llevó a “la transformación revolucionaria de un Gobierno tecnocrático y reformista”²⁷.

La nueva constitución promulgada antes de la “crisis de Suez”, el 16 de enero de 1956, ratificada en junio en un referéndum, pocos días antes de que otro confirmara la asunción por Náser de la presidencia de la República, tan solo apuntaba, en el terreno económico, que la economía nacional sería “organizada según planes establecidos” (art. 7), y definía como libre “la actividad económica privada” (art. 8), aun manteniendo el límite máximo de propiedad de tierras agrícolas (art. 12). Según el texto, el Estado garantizaría, por otro lado, “la justicia social” y la “solidaridad social”, regulando las relaciones entre patronos y trabajadores, y garantizando el derecho de aquellos al descanso y a las vacaciones para los trabajadores (Lopez Garcia & Fernández Suzor 1985: 46). El 10 de febrero de 1956, una ley garantizaba efectivamente el derecho a vacaciones pagadas de los trabajadores agrícolas.

Desde sus primeros días el CMR había apostado por el papel planificador y promotor del Estado, e intentado iniciar una serie de proyectos orientados a la sustitución de las importaciones en materias primas o básicas (fertilizantes, hierro y acero), y buscado para ello la movilización de la inversión privada tanto egipcia como extranjera. Incluso la reforma agraria tenía por uno de sus objetivos, según algunos autores, forzar el traslado de inversiones desde el sector agrícola al sector industrial. No obstante, a pesar de la inclusión de expertos de la Banca Misr y de la Federación Egipcia de Industrias en el Consejo Permanente para el Desarrollo de la Producción Nacional, creado para planificar la política económica, y de las diversas leyes promulgadas en 1953-1954 para garantizar mayores

²⁷ Jean Lacouture (1970): *The Demigods: Charismatic Leadership in the Third World*, pág. 110. Nueva York: Alfred A. Knopf, apud Bill & Springborg (1994: 211).

beneficios a empresas e inversores, los intentos del CMR fueron vanos, e incluso produjeron efectos contrarios a los deseados, pues en los primeros años de la década de 1950 la inversión media en la industria se estancó en 30 millones de libras egipcias anuales, mientras que la inversión en inmuebles urbanos pasó de 40 millones anuales en 1954 a 59 millones en 1958 (Waterbury 1983: 60-68).

La construcción de la presa de Asuán, para la que Egipto obtuvo un compromiso de financiación de la URSS en 1958, y que fue iniciada a principios de 1960, era, como hemos señalado, el gran proyecto económico del régimen. Los objetivos perseguidos con ella eran asegurar el suministro de agua en general -frente a los posibles problemas que le pudieran causar los países de la cuenca alta del Nilo-, evitar la crecida anual incontrolada del río, obtener agua de riego para el verano, habilitar nuevas tierras para la agricultura, e incrementar notablemente la producción de electricidad.

El acondicionamiento masivo de tierras para la agricultura era un objetivo primordial, pues no solo incrementaría la ya importante aportación de la agricultura al PIB nacional (35% en los años 50²⁸), sino que debía redibujar el mapa de Egipto, según los planes del régimen, en términos económicos y demográficos, dando pie además a la generación de nuevas comunidades más fáciles de moldear políticamente en las que, en palabras de Waterbury, “nada tenía que ser destruido para construir el nuevo orden [social] buscado” (1983: 64).

Ya antes de 1958 habían sido rehabilitados 77.000 *feddanes*, y la perspectiva cierta de la construcción de la Alta Presa -como la denominan los egipcios- hizo que el ritmo de acondicionamiento de tierras se incrementara exponencialmente antes de que aquella concluyera. Entre 1960 y 1965, año en que finalizó la construcción, 600.000 *feddanes*, un décimo de la tierra agrícola hasta entonces existente habían sido recuperados para la agricultura, o se encontraban en proceso de serlo. Paradójicamente, fue cuando la presa entró en funcionamiento, cuando el proceso se ralentizó a causa de la falta de recursos financieros. A pesar de ello, en 1972 habían sido ganados al desierto un total 920.000 *feddanes* (Waterbury 1983: 65).

En el terreno industrial, sucedió algo similar a lo acontecido en el agrícola. Un gran número de proyectos, como el del gran complejo de fabricación de hierro y acero de Helwán o el de la fábrica de fertilizantes de Kima, fueron acometidos tempranamente, antes de que finalizara la construcción de la gran presa, que debía proveer la energía hidroeléctrica necesaria para la industrialización del país y ser vendida al sector industrial a precios subvencionados. Sin embargo, aunque la potencia instalada de la nueva presa superaba en más de un 500% la de la antigua, y era suficiente para satisfacer las

²⁸ En precios constantes, el crecimiento anual del PIB agrícola fue del 3,3% entre los años 1955 y 1961, y subió al 3,7% entre 1961-1966, para descender al 1,6% en los años de entreguerras 1967-1973 (Ireton 2011:467).

necesidades existentes antes del inicio de su construcción, e incluso las que se habían previsto para los años 60, el acelerado ritmo de industrialización desbordaría la capacidad generadora de la presa poco después del fin del periodo naserista²⁹.

2.1.2 Reformas agrarias, cooperativismo, estatismo y nacionalizaciones

El proyecto modernizador del régimen naserista necesitaba de grandes recursos financieros que desde el primer momento el sector privado se mostró renuente a proveer. No obstante, el Estado contaba ahora con recursos rentistas propios. A la primera reforma agraria de 1952, ya mencionada, que había afectado a poco más de 450.000 *feddan*es y a los propietarios privados, le siguió otra en 1957 que situó las tierras habices de titularidad pública (o, en Egipto, *awqaf*), 110.000 *feddan*es más, bajo el control del Estado (que se haría con los de titularidad privada, 38.000 *feddan*es, en 1962)³⁰. Gran parte de las tierras requisadas durante las dos primeras reformas agrarias citadas permanecieron bajo la propiedad del Estado, que las puso a disposición de los futuros propietarios para que las pagaran con su trabajo durante años, asistidos por la organización impulsada por aquel en cooperativas que facilitaban *inputs* y crédito a precios subvencionados, y condicionados por una determinada rotación de cultivos impuesta según la estrategia planificada por el Estado. No obstante, el gran recurso financiero permanente de Egipto pasaría a ser el Canal de Suez, cuyas rentas para el Estado se dispararían, pasando de 2,3 millones de LE en 1955 a 42 millones en 1958 y 77 millones en 1964 (Waterbury 1983: 67-68, 266).

Sin embargo, la insuficiencia de estos recursos para las elevadas aspiraciones del nuevo régimen militar, fijadas en el Primer Plan Quinquenal para el Desarrollo, establecido en 1958-59, y que debía abarcar los años 1960-65, hicieron que aquel decidiera emprender, con timidez primero, y luego decididamente, la senda de las nacionalizaciones. El 14 de enero de 1957 habían sido egipcianizados en su gestión y en su capital todos los bancos comerciales, las compañías de seguros y las agencias de comercio exterior, comprados por

²⁹ En 1975, cuando entró en funcionamiento el complejo de producción de aluminio de Naga Hammadi, el último gran proyecto industrial naserista, dicha capacidad ya había sido desbordada. Tan solo dicho complejo y el de producción de fertilizantes de Kima absorbían dos tercios de la potencia instalada en ella (Harik 1998: 51).

³⁰ Los *awqaf* (أوقاف, sg. *waqf*), conocidos en castellano como “bienes habices” o “habús”, por la influencia de la palabra árabe sinónima utilizada en Marruecos, son bienes en régimen de mano muerta que no pueden ser, según la jurisprudencia islámica, regalados ni vendidos, pero que en contrapartida no pagan impuestos, cuyos beneficios han de revertir en “una obra pía o en una institución de interés público”, del tipo de mezquitas, madrazas, rábitas, hospitales o fuentes públicas (Gómez García 2009: 123). Bajo el dominio del Imperio Otomano, cuyo sultán era formalmente el propietario de todas las tierras de aquel, se autorizó la constitución de bienes habices privados, de cuyo usufructo disfrutaba en la práctica su propietario, sorteando así el régimen fiscal común y evitando que los gobernantes pudieran retirar la concesión estatal con fines de gestión tributaria por la que se regían los bienes, y las tierras en particular, en general. Tras muchas vicisitudes relativas a la propiedad y la tenencia de la tierra a lo largo del siglo XIX, en Egipto a mediados de los años 50 seguían existiendo, como vemos, habices privados.

bancos del sector público o por compañías o *holdings* públicos creados a tal efecto; mientras que otras entidades que conservaban la titularidad británica o francesa eran situadas bajo el control de organismos públicos. En febrero de 1960, el Banco Misr y el Banco Al-Ahli fueron nacionalizados. El Banco Al-Ahli había ejercido las funciones de Banco Central anteriormente, y el Banco Misr desbordaba con mucho las actividades de un mero banco, pues actuaba como un *holding*, el Grupo Misr, que poseía la mayor industria textil de Oriente Medio en la localidad del Delta de Mahala al-Kubra, representaba el 60% de la producción textil egipcia, y empleaba al 53% de los trabajadores del sector en todo el país (Waterbury 1983: 70-72). Así, con la nacionalización del Banco Al-Ahli, el Estado pasaba a ser el mayor empleador en el principal sector económico industrial de Egipto.

Pero la gran oleada de nacionalizaciones se produjo en 1961. En julio, las leyes 177, 118 y 119 situaron una gran parte de todos los sectores no agrícolas bajo la propiedad o el control del Estado mediante la venta forzosa de parte o todas sus acciones: todos los bancos y compañías de seguros restantes, cincuenta compañías navieras y cientos de industrias de todo tipo y tamaño grande o medio. En el mismo año, una nueva ley de reforma agraria reducía el techo máximo de la propiedad individual a 100 *feddanes*, si bien conservaba el de 300 para las familias. En los años siguientes, en particular en 1963-64, el proceso nacionalizador se completaría con la industria farmacéutica y su distribución, la construcción, las industrias harineras y arroceras, el comercio exterior, etc.

Según Waterbury (1983: 76), los únicos productores que salieron indemnes de la oleada de nacionalizaciones fueron los agricultores privados -y ello solo relativamente, pues debían tratar con *inputs*, créditos y ventas de cosechas a precios fijados por el Estado-, la mayoría de los mayoristas, y las pequeñas empresas de manufacturas que empleaban a menos de diez personas. El sector privado no fue, por tanto, aniquilado, pero no dispondría de ninguna autonomía, pues dependía del Estado para la obtención de divisas, y por otro lado sus beneficios, precios, créditos y provisiones debían moverse dentro de los marcos establecidos oficialmente.

Los decretos de 1961 fueron conocidos como los “decretos socialistas” y, a partir de ellos el propio Násir, que como el resto de sus compañeros del CMR había negado cualquier inclinación por el socialismo marxista, no le hizo ascos al adjetivo “socialista” para caracterizar sus políticas, afirmando que se trataba de implementar “el auténtico socialismo”, un socialismo alejado de la lucha de clases que luego sería denominado por muchos “socialismo árabe”.

El nuevo “socialismo” del régimen egipcio, convertido desde 1958 también en régimen de la República Árabe Unida (RAU), traería contrariedades a aquel, pues no sería del agrado de la burguesía siria, que buscaría aliados en el Ejército para que llevaran a cabo un golpe de Estado en el país del Creciente Fértil el 28 de septiembre de 1961, golpe que llevaría a la inmediata secesión de Siria de la RAU. El 22 de octubre de 1961, al ver las barbas de su vecino

pelar, el régimen egipcio ordenó la detención de 157 “capitalistas reaccionarios” y la confiscación de sus propiedades, medida que posteriormente afectó a 600 personas más, y que fue culminada con la privación de derechos políticos de 7.000 ciudadanos (Waterbury 1983: 74-75).

2.1.3 Transformaciones socioeconómicas

2.1.3.1 Empleo y beneficios laborales

Durante la primera mitad de los años 60, bajo el impulso del plan quinquenal de desarrollo, la distribución del número de empleados por sectores de actividad se modificó considerablemente. Excluyendo la administración del Estado, el Ejército, las fuerzas de seguridad, el sector de la educación y la judicatura, entre 1959-60 y 1964-65 el empleo total pasó de 6 a 7,3 millones de personas. La agricultura siguió siendo el principal sector de empleo, constituyendo por encima del 50% del total del empleo en todo momento (pasó de 3,2 a 3,7 millones), pero fue, junto al comercio y las finanzas, el sector que menos creció en términos relativos, un 15,6%, ampliamente superado por la industria (37,1%), el sector eléctrico (51,3%) y la construcción (86%), y también, en menor medida, por el resto de sectores. La industria siguió siendo el segundo sector de ocupación, y recortó la distancia relativa en número de empleados con la agricultura, aunque no lo hiciera en términos absolutos (pasó de 600.000 a 825.000 trabajadores) (Waterbury 1983: 92).

En el conjunto del periodo naserista (1952-1970), el número de trabajadores industriales se incrementó en aproximadamente un 65% (hasta llegar a 1.053.000 trabajadores). Este incremento supuso cerca del 20% de los nuevos empleos creados, y el número total de trabajadores pasó de constituir el 9% al 12,3% de las personas con empleo (Waterbury 1983: 92, 195). Pero estas cifras no adquieren toda su relevancia si no se tiene en cuenta que de los cerca de 2 millones de empleos creados por el régimen naserista, aproximadamente el 50% lo fueron en la administración del Estado, como veremos a continuación, y otra proporción importante fue creada en otros sectores de empleo estatal, como las fuerzas armadas y de seguridad y los cuerpos de profesores y empleados en la sanidad pública. En definitiva, el sector industrial sería el sector de la economía productiva que más crecería en número de empleados, y los obreros, y en particular los del sector público, que eran mayoría, recibirían una especial atención por parte del régimen naserista en razón de su número, pero también, sobre todo del potencial políticamente desestabilizador (o estabilizador) de una clase social crecientemente estructurada en grandes centros de trabajo concentrados en determinadas zonas del país.

La preocupación del régimen naserista por la situación de los trabajadores se

manifestó en el terreno de la legislación laboral y social, y en la política salarial. En diversas oleadas (1953, 1958, 1959) dicha legislación avanzó en la prohibición y limitación de los despidos arbitrarios y punitivos, en la reducción del periodo de prueba de los trabajadores de cuatro años a tres meses, y en la disminución de la jornada laboral máxima, fijada en ocho horas diarias -siete para trabajos especialmente penosos o peligrosos- en 1959 por el Código Unificado del Trabajo, y en 42 horas semanales, a razón de 7 horas diarias en 6 días de trabajo en 1961. Por otro lado, la inicial ley de seguros sociales de septiembre de 1955, que obligaba a cotizar para las pensiones de jubilación y discapacidad a los empleadores con más de 50 trabajadores, también fue mejorada en 1958, extendiéndose su alcance, y en 1962, cuando la contribución de los empleadores pasó del 7% al 17% del salario de los trabajadores. Finalmente, hay que decir que los ingresos semanales medios de los trabajadores industriales subieron cerca de un 40% entre 1951 y 1959, y un 25% adicional entre 1959 y 1964 (la ley 262 estableció la duplicación del salario mínimo diario, haciéndolo pasar de 12,5 a 25 piastras³¹). Las retribuciones de los trabajadores del sector público conocieron una mejora aun más sustancial a partir de 1961, cuando la ley 111 impuso la participación de aquellos en los beneficios de las empresas, de los que un 3% deberían ser distribuidos en metálico entre los trabajadores, y otro 4,5% invertidos en servicios sociales como vivienda o facilidades de ocio (Posusney 1997: 48-70).

Sin embargo, como ya hemos apuntado, fue la administración del Estado (excluidas las fuerzas armadas, la policía, los cuerpos de profesores y la judicatura), el sector de ocupación que conoció el mayor incremento en el número de empleados y, a la larga, también en las retribuciones. Diversas estimaciones difieren en torno al volumen total de la Administración en 1952, que sitúan entre 200.000 y 350.000 trabajadores. En 1962-63 su número se había al menos duplicado (707.000), y en 1971-1972 se había cuadruplicado o quintuplicado (1,3 millones), superando al número de trabajadores industriales (Ayubi 1991: 108; Waterbury 1983: 242).

El crecimiento en términos humanos de la Administración, que en tiempos de Náser solo supuso el principio de lo que algunos estudiosos denominan la “inflación burocrática” de Egipto, fue el resultado de las políticas expansionistas en el sector industrial, en la sanidad, en los servicios sociales y en la educación (a pesar de que no hemos incluido en las cifras anteriores a los profesores), así como de la voluntad de incrementar el empleo y de conformar una nueva clase social afín al poder. Esta última motivación se acentuó una vez que la llamada “burguesía burocrática” de origen civil hubo pasado a nutrir las elites dirigentes. Así, mientras que entre 1962-63 y 1969-70 el PIB se incrementó en un 68%, y la fuerza de trabajo solo se incrementó en un 20%, el crecimiento de la burocracia en el

³¹ 1 Libra egipcia= 100 piastras.

mismo periodo fue del 70%, y el de sus salarios del 123% (Ayubi 1991: 94). Hay que señalar, además, que en 1964 se promulgó una ley según la cual el Estado se comprometía a contratar a todos los graduados superiores, con lo que la “inflación burocrática” no haría más que incrementarse hasta mediados de los años 80, cuando fue abandonado tal compromiso, a la par que lo hacía el número de graduados, como señalaremos a continuación. El conjunto de los empleados por el Estado sería incluido en el programa de seguridad social creado inicialmente para los trabajadores industriales, y en 1970 dicho programa alcanzaría los 3 millones de inscritos en él, y un número de 270.000 pensionistas (Waterbury 1983: 222-262).

2.1.3.2 Educación

Gran parte del incremento del aparato burocrático no habría sido posible sin un incremento igualmente considerable del nivel de educación de los egipcios. Entre 1951-52 y 1964-65 la inversión del Estado en educación pasó de 0,12 LE per cápita para una población de 21.2 millones a 1,15 LE per cápita para una población de 29 millones, una asignación que disminuiría a partir de 1967 a consecuencia de la crisis económica (Waterbury 1983: 219), y que debe ser considerada teniendo en cuenta que el Gobierno dedicó inicialmente mayores esfuerzos a otros servicios sociales como sanidad, vivienda, etc., como veremos más adelante.

Bajo este impulso económico, el porcentaje de personas alfabetizadas pasó entre 1951 y 1971 del 56 al 73% entre los hombres y del 27 al 54% entre las mujeres, mientras que el número medio de años de escolarización pasó de 3,85 a 6,42 entre los hombres y de 1,36 a 4,36 entre las mujeres, reduciéndose por tanto en ambos casos la diferencia en la formación de hombres y mujeres (Fargues 2011: 66).

La evolución de la inscripción en todos los niveles educativos puede verse en la tabla siguiente, que incluye los primeros años de mandato de Sadat por la influencia que en él tuvieron las etapas previas.

TABLA 3: EVOLUCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS (1952-1970)

	1952-53	1965-66	1969-70	1976-77
Primaria	1.540.202	3.417.753	3.618.663	4.151.956
Nivel intermedio	348.574*	574.420	793.891	1.435.529
Secundaria	181.789	208.991	293.144	796.411
Institutos técnicos	5.285*	34.702	35.300	31.541
Universidad	51.681	140.143	161.517	453.696

Fuente: Waterbury (1983: 222) *Datos de 1953-1954

2.1.4 Redistribución, políticas sociales, igualdad y desigualdad

En 1950, el 44% de las familias rurales no poseían ninguna tierra, mientras que el 0,4 poseía el 35% de las tierras cultivadas, y el 1% (4.182 familias) poseían el 72%. El éxodo rural incrementaba desde hacía más de una década la población de las grandes ciudades, en particular El Cairo, hasta el punto de que cerca del 50% del 4,7% del incremento anual de la población cairota entre 1937 y 1947 se debía a los inmigrantes de origen rural (400.000 inmigrantes para el total del periodo), que pasaban a engrosar el lumpen-proletariado. Según diversos autores citados por Waterbury, todavía en 1958 el 73% de la población rural sin tierra ganaba 3,5 LE per cápita de media al año, mientras que los poseedores de 20 *feddanes* o más ganaban una media de 773 LE per cápita. Por su parte, los 1,9 millones de empleados urbanos a tiempo completo y sus familiares ganaban una media 40 LE per cápita al año, siendo el salario medio de 198 LE al año (Waterbury 1983: 207-208³²).

En términos de ingresos, a pesar de la dificultad de llevar a cabo cálculos ajustados, parece ser que el crecimiento del PIB entre 1952 y 1970 (212%) se distribuyó casi proporcionalmente entre los diferentes grupos de ingresos siguiendo el patrón anterior a dicha época, con tan solo leves mejoras para las clases bajas y medias. Es decir, la distribución en porcentaje de la riqueza del país por grupos de ingresos apenas varió, si bien el nivel de vida de todos los individuos creció a consecuencia del incremento del PIB³³. No hay que olvidar, por otro lado, que entre 1951 y 1970 la población se incrementó en más de un 50%, de 21 a 32 millones de personas).

No obstante, las políticas redistributivas del régimen naserista pasaron por muchos más terrenos que el de los ingresos, dando pie a la siguiente afirmación de Waterbury:

“No hay ninguna duda de que las políticas naseristas llevaron a un igualamiento socio-económico de gran alcance: en dos décadas Egipto pasó de ser una sociedad en la que la desigual distribución de la riqueza lo situaba en los polarizados parámetros latinoamericanos a una que dentro de los estándares de los países menos desarrollados no socialistas era una de las más igualitarias (...) La provisión de servicios gratuitos o fuertemente subvencionados permitió al 60% más pobre de la población, en teoría y en gran medida en la práctica, acceder a beneficios a los que de otra manera tal vez no hubieran podido acceder” (1983: 207, 213).

³² Los autores citados por Waterbury (1983: 207-209) a los que hemos hecho referencia son Abdel Fattah, F. (1975): *The Contemporary Village between Reform and Revolution*. Vol.2 (en árabe). El Cairo: Dar al-thaqafa al-jadida (en árabe). Págs.118-119; I.E.D.E.S (1961): “La société urbaine égyptienne”. *Tiers Monde* 2: 183-210.

³³ Nos referimos a los porcentajes de participación en la riqueza del país considerados por grupos de ingresos, calculados atendiendo a los gastos realizados por diversos estudios, de los que Waterbury hace una síntesis, y en los que se observan leves mejoras en los ingresos del 40 y del 60% de la población rural y urbana con menos ingresos, y leves descensos para el 30% con más ingresos tanto urbano como rural (Waterbury 1983: 211).

Como hemos señalado más arriba, la educación no fue el sector de los servicios sociales que recibió mayor atención económica en los primeros años del régimen naserista. La asignación per cápita en los presupuestos del Estado pasó, entre 1951-1952 y 1964-65, de 0,48 libras egipcias por habitante a 1,5 en sanidad, de 0,28 LE a 3,4 en vivienda³⁴, y de 0,27 LE a 0,69 en otros servicios; aunque, como sucedió con la educación y todos los sectores de inversión, estas asignaciones disminuyeron a partir de 1965, y en particular de 1967, bajo los efectos de la crisis económica acentuada por la derrota frente a Israel. Ciertamente que el incremento en porcentaje del PIB dedicado a los servicios en el periodo 1959/60-1964/65 fue tan solo del 0,5% del PIB, pero hay que tener en cuenta el considerable incremento de aquel (59%) y, sobre todo, las fuertes inversiones en la industria, la energía y las infraestructuras que acometió el país (30% solo en industria y energía) (Waterbury 1983: 89-91, 219).

Otro capítulo importante de la política redistributiva del régimen naserista lo constituyó la subvención a los productos de primera necesidad, fundamentalmente alimenticios (trigo, arroz, azúcar, aceite de cocina, te, etc.), pero también energéticos. El tímido programa puesto en marcha tras la Segunda Guerra Mundial para mejorar la condición de las clases más pobres, pasó a representar el 2,6% del gasto público en 1960-61, y el 7,3% en 1964-65, extendiéndose a todos los ciudadanos independientemente de su nivel de renta, y a productos alimenticios menos básicos, como la carne, el pollo y la mantequilla, que eran distribuidos por medio de tiendas del Estado creadas a tal efecto utilizando cartillas de racionamiento para algunos productos y el libro de familia para otros, y resultando accesibles a todos los ciudadanos (Waterbury 1983: 216). Aunque estos subsidios se convertirían en la pesadilla de los regímenes posteriores, ninguno se atrevería a prescindir totalmente de ellos.

³⁴ Sólo a mediados de los años 60 en las “nuevas ciudades” creadas en los alrededores de El Cairo se construyeron 50.000 viviendas sociales que serían alquiladas a un precio que representaba entre el 10 y el 15% de los ingresos de sus nuevos moradores: obreros, pequeños funcionarios y comerciantes, etc. (Florin 2011: 131-132)

2.2. SISTEMA POLÍTICO Y ESTRUCTURAS DE REPRESENTACIÓN Y CONTROL POLÍTICO

2.2.1 Presidencialismo y partidos únicos

2.2.1.1 Las constituciones de 1956 y 1958. La Unión Nacional

La Constitución de 1956, promulgada el 16 de enero y ratificada en referéndum en junio, inauguraría una larga era de institucionalización de la preeminencia absoluta de la Presidencia de la República sobre el resto de los poderes del Estado. En la época monárquica, la concentración de poderes en manos del jefe del Estado había sido una realidad *de facto*, pero para materializarla los monarcas hubieron de sortear continuamente las limitaciones que formalmente les imponía la Constitución de 1923, hasta el punto de abolirla y sustituirla por otra entre 1930 y 1935.

Las disposiciones de la Constitución de 1956 otorgaban al presidente de la República, y en la práctica a Násir desde junio de ese mismo año, muy amplios poderes, entre los que se encontraban la iniciativa en materia legislativa, el nombramiento y cese de los ministros (cuyo consejo presidiría sin que existiera la figura del presidente del Gobierno), la jefatura de las Fuerzas Armadas, la posibilidad de disolver la Asamblea Nacional y la de concluir cualquier tipo de tratado con solo comunicarlo a aquella y de convocar referendos tras obtener su consentimiento formal (Lopez García & Fernández Suzor 1985: 46-47).

El poder legislativo sería asumido en teoría, en virtud del artículo 65, por la Asamblea Nacional, cuyos miembros serían elegidos por sufragio universal por cinco años, y que ejercería el control sobre los actos del ejecutivo y designaría por mayoría absoluta al candidato a la Presidencia de la República, el cual debería ser ratificado por el pueblo en referéndum. Sin embargo, no solo la mayoría de las decisiones del presidente de la República, sino también todas las del Consejo de Mando de la Revolución (CMR) -mantenido con el objeto de “proteger la revolución y el sistema de Gobierno” y presidido por el propio Násir-, serían “inmunes a cualquier tipo de recurso, solicitud de anulación de cualquier clase o por cualquier autoridad” (Lopez Garcia & Fernández Suzor 1985: 47). Por otro lado, la composición de la asamblea quedaba fuertemente condicionada por la prerrogativa atribuida a la Unión Nacional (UN) de seleccionar a los candidatos a formar parte de aquella.

La Unión Nacional, creada a instancias del artículo 192 para sustituir a la Organización para la Liberación (OL), sería constituida a principios de 1956, con la vocación declarada de acoger a todos los ciudadanos egipcios. El régimen naserista seguía

rechazando el retorno al pluripartidismo, pues, en palabras de Náser, “restablecerlo antes de cultivar y formar a las masas sería volver al desorden y a la corrupción del periodo anterior a la revolución”³⁵. Así mismo, rechazaba la consideración de partido para la UN como antes lo había hecho para la OL, siendo aquella, en palabras de su secretario general, Anwar al-Sadat,

“no un partido ni un frente, sino un instrumento para proteger a la nación y cuyos objetivos (la independencia, el nacionalismo árabe, el neutralismo positivo, la libertad y la paz), cuentan con el acuerdo de todos los sectores sociales y clases de la sociedad, que coinciden en que la única persona que puede llevar a cabo esas metas es Gamal Abdel Náser”³⁶

La nueva organización política sería constituida, en palabras de Fahmy, “sobre el modelo de los partidos comunistas del bloque del Este, con su forma piramidal y su orden jerárquico, y con las órdenes y directrices fluyendo de arriba abajo” (Fahmy 2002: 57). Abajo, la aldea o subdivisión urbana mínima constituía la unidad básica de la UN, y elegía los miembros de un comité, que a su vez elegía a quienes habrían de representarla al nivel del distrito. Los representantes de este eran a su vez supervisados por un comité de oficiales formado por un presidente, un vicepresidente, un secretario y un tesorero. La misma estructura se reproducía a nivel provincial, y en El Cairo un comité central ejecutivo, compuesto principalmente por oficiales del CMR, y con Anwar al-Sadat como secretario general, controlaba y dirigía el conjunto de la organización³⁷.

En julio de 1956 se celebrarían las primeras elecciones a la Asamblea Nacional, tras ser descartadas más de la mitad de las 2500 candidaturas presentadas a la Unión Nacional. Sin embargo, la asamblea solo se reuniría durante apenas un año, al promulgarse en 1958 una nueva Constitución.

A nivel local, la Constitución de 1956 introdujo diversos artículos (157-166) supuestamente destinados a descentralizar tanto la administración como el Gobierno de las entidades locales, creando numerosas unidades administrativas -gobernadas por consejos formadas por miembros electos y designados-, estableciendo sus competencias en la gestión de los servicios e infraestructuras y la naturaleza de sus ingresos, y atribuyendo al Gobierno central la responsabilidad de dotarlas de los recursos administrativos, técnicos y financieros necesarios. Sin embargo, la subordinación de los Consejos Locales a la UN -entre cuyos miembros y bajo cuyas recomendaciones habían de ser elegidos los miembros de aquellos- y al Gobierno central hizo que más que en fuente de propuestas e instrumentos de contrapeso al poder central se convirtieran en correa de transmisión de las decisiones de

³⁵ Declaraciones de Náser a los medios de comunicación, citada por إبراهيم (1981: 130).

³⁶ A. Al-Sadat: *Ma`nà al-Itthihâd al-Qawmî*, pág.49. Citado por Martín Muñoz (1992: 246).

³⁷ Para obtener más información en castellano sobre la organización de la USA pueden consultarse Fahmy (2002: 57) y Martín Muñoz (1992: 245-47).

aquel (Fahmy 2002: 57, 184-85).

La constitución provisinal de la RAU, proclamada el 5 de marzo de 1958, no hizo más que reforzar los poderes del presidente de la República, a pesar de que esta ahora abarcaba también la antigua República Siria. Por primera vez, se establecía explícitamente que aquel ejercería el poder ejecutivo (art. 44), y designaría así mismo a los miembros de los respectivos consejos ejecutivos de las dos “regiones” o “provincias” que integraban el nuevo Estado, los cuales tendrían la función de estudiar y discutir los asuntos relativos a la ejecución de la política general en cada uno de ellos (Lopez Garcia & Fernández Suzor 1985: 50-51). En cuanto a la Asamblea Nacional, se veía prácticamente despojada de cualquier representatividad y poder, pues a partir de ese momento sus miembros serían designados por el presidente de la República, con la única condición de la mitad de los miembros provinieran respectivamente de las ámaras siria y egipcia. Por otro lado, también perdería la prerrogativa de elegir a dicho presidente, que, sin embargo, sería el responsable de convocarla y el habilitado para disolverla, así como la de censurar al Gabinete en su conjunto³⁸. Aunque la Constitución provisional de 1958 también establecía otras disposiciones importantes, como la extensión de la UN a ambos territorios, habida cuenta del breve periodo de vida de la RAU, disuelta inmediatamente tras el golpe de Estado del 28 de septiembre de 1961 en Siria, su principal trascendencia sería la de sentar las bases de la organización de los poderes del Estado egipcio, si bien aquella serían de nuevo modificada en algunos aspectos por la Carta Nacional y la Proclamación Constitucional de 1962.

2.2.1.2 El Pacto de Acción Nacional, la Proclamación Constitucional de 1962 y la Unión Socialista Árabe

El papel promotor de la burguesía siria en el golpe de Estado de 1961 y la subsiguiente disolución de la RAU habían sido sin duda estimulados por la orientación del régimen naserista manifestada en los decretos de nacionalización de los meses anteriores. Sin embargo, el revés en Siria y el posible riesgo de una involución similar en Egipto no hicieron más que incrementar la decisión de Náser de avanzar en el mismo sentido en el que había comenzado a hacerlo.

En octubre de 1961, el presidente promovió la formación de un comité preparatorio del Congreso Nacional de Fuerzas Populares (CNFP). El comité debía designar los 1.750 miembros del Congreso, según la siguiente distribución: 375 campesinos, 300 obreros, 150

³⁸ Cabe señalar, sin embargo, que la nueva constitución no suponía la unificación legislativa de ambas regiones, que seguirían rigiéndose por sus leyes respectivas, mientras que se repartirían las vicepresidencias de la República (cuatro) y los ministros (Lopez Garcia & Fernández Suzor 1985: 50-51).

representantes del capital nacional, 225 delegados de los sindicatos profesionales, 135 funcionarios, 105 profesores de universidad, 105 estudiantes y 105 representantes de asociaciones de mujeres. Poco después, el 21 de marzo de 1962, Násir presentaba al CNFP su proyecto de Pacto de Acción Nacional (ميثاق العمل الوطني, PAN)³⁹, en el que por primera vez proponía un nuevo orden social basado en principios denominados explícitamente “socialistas”, según los cuales la “democracia política” sería inseparable de la “democracia social”, que sería promovida y dirigida por una nueva organización política, la Unión Socialista Árabe (USA). En todos los niveles organizativos de esta, como en cualquier órgano de representación política a cualquier nivel (incluida la Asamblea Nacional), al menos la mitad de los miembros deberían ser campesinos u obreros. Las deliberaciones del CNFP fueron bastante intensas, y según Vatikiotis (1978: 181), no estuvieron exentas de críticas y manifestaciones de descontento y frustración. Sin embargo, dichos debates, que según el mismo autor nunca se repetirían en ese tono bajo el mandato de Násir, no impidieron la aprobación por aclamación del PAN el 30 de junio de 1962.

El 24 de septiembre quedaba constituida la USA, que pronto alcanzaría 4,8 millones de miembros (sobre un censo electoral de casi 6,4 millones) pertenecientes a cerca de 7.500 unidades organizativas a nivel nacional y local (وحدات أساسية, “unidades básicas”), distribuidas estas por fábricas, ministerios, cooperativas, sindicatos obreros y pueblos y barrios de las ciudades. Tres días después de la constitución de la USA, una nueva proclamación constitucional reestructuraba el sistema de Gobierno del Estado, siguiendo las disposiciones del PAN y basándose, por lo demás, en la Constitución provisional de 1958, con el añadido de que un Consejo de la Presidencia integrado por 12 miembros compartía la tarea del presidente de definir la política general del Estado. La mayoría de los miembros del primer consejo serían ex miembros del CMR.

Como señaló Al-Bichri (البشري 1991: 251-253), la diferencia esencial de concepto entre la UN y la USA residía en que en esta última no se pretendía acoger a todo el pueblo egipcio, sino tan solo a la “alianza de las fuerzas trabajadoras”, excluyéndose explícitamente de ella a los “reaccionarios” que “se habían infiltrado” en la UN y a todos los privados de derechos políticos durante los diez años anteriores: los afectados por las reformas agrarias y las nacionalizaciones de empresas (por un valor de más de 10.000 LE en acciones), aquellos respecto a quienes “se hubiera probado su participación en la corrupción de la vida política o de los sindicatos obreros, colegios profesionales o cooperativas”, y todos aquellos “elementos reaccionarios que se hubieran opuesto al socialismo, o que hubieran sido objeto de encarcelamiento o prisión”.

³⁹ Muy a menudo se denomina al Pacto de Acción Nacional *Carta Nacional* en castellano (y, en distintas lenguas, con términos equivalentes). Esta denominación nos parece desacertada, pues dicho documento en sí no es una norma constitucional, si bien sería el inspirador de la Proclamación Constitucional de 1962. Tal denominación puede llevar a la confusión entre ambos documentos.

En un principio, la jerarquía de la USA fue constituida por elección ascendiendo de las “unidades básicas”, pero este sistema fue pronto sustituido, en 1965, por el de designación, para volver de nuevo al sistema electivo en 1968. De la misma manera, el criterio de agrupación de las “unidades básicas” varió a lo largo del tiempo, pasando del criterio de ocupación profesional o de estatuto social al de localización territorial. Todas estas modificaciones fueron realizadas por decisiones individuales de Násér, presidente de la USA y de la República, pero a pesar de ello el propio Násér y su sucesor al frente de la USA, Ali Sabri, constatarían el fracaso de la organización en convertirse en un instrumento eficaz para la participación popular, y especialmente de obreros y campesinos, en el Gobierno del país (البشري 1991: 254-255)

Finalmente, en 1964 sería promulgada la Proclamación Constitucional de 1964, que sería el último texto constitucional adoptado en la época naserista. Su contenido sería muy similar al del texto de 1962, insistiendo en la defensa de los principios democráticos y socialistas, y dando muy extensos poderes al presidente de la República, si bien este volvía a deber ser elegido por dos tercios de la Asamblea Nacional antes de someterse a referéndum, lo que no sucedía desde la proclamación de 1956. Entre los aspectos llamativos o novedosos, cabe señalar que la proclamación mantenía la defensa de tres tipos de propiedad, estatal, cooperativa y privada; que la defensa de los principios socialistas se encomendaba a las Fuerzas Armadas, y que el islam volvía a ser declarado religión del Estado, a diferencia de lo estipulado en 1958 y 1962. La Asamblea Nacional elegida en 1964, de acuerdo con la nueva constitución provisional, quedaba encargada de redactar una definitiva, pero la derrota de 1967 frente a Israel se produjo cuando no había concluido la redacción del documento, y la reorientación del régimen tras la derrota propuesta y expuesta por Násér en el “Programa del 30 de marzo de 1968”, y de la que hablaremos más adelante, tampoco culminó en la elaboración de una nueva norma tras el fallecimiento de Násér en septiembre de 1970.

2.2.2 El aparato de seguridad y control político

2.2.2.1 El Ejército

A pesar de que Násér y su régimen contaron desde 1956, como veremos más adelante, con un amplio y convencido apoyo tanto desde las estructuras del Estado y del régimen como desde la sociedad en general, que en el caso del presidente se convirtió durante largos periodos en auténtico fervor, su autocrática e indiscutida dirección del rumbo del país no habría sido posible sin el concurso de un amplio y diversificado aparato

de seguridad y represivo que, pese a los esfuerzos del presidente por mantenerlo bajo su estrecha vigilancia, acabaría adquiriendo dinámicas propias.

El primer sector que Náser se preocupó de controlar estrechamente fue el propio estamento militar, una tarea que, tras la expulsión los oficiales libres proclives a los Hermanos Musulmanes y de aquellos de tendencias marxistas en los primeros años de la revolución, encargó desde 1953 hasta 1967 a su entonces estrecho y fiel amigo, Abdel Hakim Amer, conocido como “el mariscal” (المشير) desde su ascenso a tal graduación en 1958, cuando contaba con tan solo 39 años. Los oficiales del Ejército fueron ampliamente utilizados en puestos civiles durante la primera época del régimen naserista, tanto por su formación técnica, como para controlar políticamente las instituciones no militares de la sociedad. Amer, jefe del Estado Mayor del Ejército desde 1953, se encargó de seleccionar para los puestos de mando del Ejército y otros puestos de jurisdicción civil a oficiales leales a él y, por su intermediación, a Náser, y los oficiales bajo su mando directo actuarían de la misma manera. Este procedimiento clientelista resultaría efectivo para conservar el control político del Ejército, pero a largo plazo llevaría a la proliferación dentro de él de camarillas más preocupadas por su ascenso político y social que por las consideraciones profesionales propias, y al consecuente deterioro de las capacidades militares del Ejército, que se manifestarían en la participación egipcia en la guerra de Yemen (1962-1967) y en la humillante derrota de 1967 frente a Israel (Vatikiotis 1978: 158-164).

2.2.2.2 Los servicios secretos y la Vanguardia de la USA

En el terreno de la seguridad interior, bajo el régimen naserista se construyó una auténtica pirámide de servicios de inteligencia y seguridad que fueron puestos bajo el control directo de Náser o sus allegados. La policía política contaba ya con una larga tradición desde la época monárquica, y desde 1936 un sector de ella, el “departamento especial” (القلم المخصوص), había sido puesto bajo el mando directo de Palacio, encargándose de los trabajos más “sucios”, que no excluyeron los asesinatos. En 1954 fue creado el Servicio de Inteligencia General (هيئة المخابرات العامة), a la cabeza del cual se sucederían algunos de los más destacados oficiales libres u otros militares: Zakariyya Mohai Eddín (1954-1956), Ali Sabri (1956-1957), Salah Náser (1957-1967) y Amín Huweydi (1967-1970). No obstante, desde al menos 1955 Náser contó con su propio servicio de inteligencia, dirigido por Sami Charaf, que poco después y hasta 1970 se convertiría en jefe de la Secretaría General de Información de la Presidencia de la República, responsable solo ante Náser y conocida por la exahustividad de su labor, que incluía, según se suele recordar, la recopilación de los chistes que circulaban por el país sobre la persona de Náser y el resto de los gobernantes.

Los personajes antes citados, junto con algún otro como Chaarawi Guma, se

sucedían en los altos cargos del aparato de seguridad y control político, desplazándose entre los servicios secretos, el ministerio del Interior y otros ministerios, los Gobiernos civiles y, también, los altos cargos de la USA. Esta organización, supuestamente creada para acoger y organizar la movilización popular, se convirtió sin embargo en el tal vez más poderoso aparato de control político del país por medio de su “vanguardia socialista” (الطليع الاشتراكي), un organismo especial, creado en 1964, los nombres de cuyos miembros se mantuvieron en secreto, pero que estaba destinado a acoger “solo a los más auténticos socialistas y naseristas”⁴⁰.

El objetivo de la Vanguardia Socialista era delimitar y cerrar el núcleo duro del régimen, e incorporar a él a los sectores marxistas, que desde el inicio de la orientación socialista de aquel en los años 1961 y 1962 se habían mostrado proclives a apoyarlo, pero la mitad al menos de cuyos líderes se encontraban en prisión desde hacía una década. Algunos de los principales personajes relacionados con el aparato de seguridad citados (Sabri, Guma, Amer), fueron encargados de iniciar el reclutamiento, en círculos concéntricos, de miembros para la organización dentro del Ejército, los servicios de seguridad y la administración del Estado. Otros, principalmente Mohammed Hasanein Heikal, periodista que desde 1952 se había ganado la confianza de Náser, hasta el punto de convertirse en su consejero personal, y que en 1956 fue nombrado director de *Al-Ahram*, el principal diario del país, se encargaron de hacer lo propio entre escritores, intelectuales y periodistas. Finalmente, una sección (فرع) “izquierdista” o “progresista” fue creada dentro de la organización, a la que se incorporaron varias decenas de ideólogos marxistas del Partido Comunista Egipcio y del Movimiento Democrático de Liberación Nacional (HADETU), recién salidos de las cárceles a finales de 1964. Según Ahmad Hamruch, militar y uno de los encargados de organizar la sección progresista, a quien debemos el conocimiento del detalle de la formación de la Vanguardia, esta creció tan rápido, reuniendo en poco tiempo a 250 miembros entre periodistas, escritores y jóvenes estudiantes, que se cerraron inmediatamente las puertas a la incorporación masiva a ella, y en adelante tan solo se permitieron contados nuevos ingresos. Náser y su círculo más estrecho seguían teniendo miedo a su capacidad de movilización, sobre todo entre los obreros (حمروش 1992: 612-615).

La Vanguardia de la USA en general creció no menos deprisa, incluyendo a la mayor parte de los altos responsables de seguridad, ministros, gobernadores civiles y un número indeterminado de miles de personas más. Hamruch señaló cómo en su sección auténticamente progresista se extrañaron de que en la organización general se aceptara a tanta gente que no había mostrado ninguna inclinación socialista, sino más bien las opuestas a aquella. Sin embargo, un marxista, Mahmud Amín al-Alam, fue incluido en el

⁴⁰ Según la expresión de Nur Eddín Tarraf, destacado cargo civil del régimen naserista, aunque no miembro de la *Vanguardia*, citado por Waterbury en base a una entrevista personal (1983: 334).

comité principal de El Cairo, y la labor inicial en la Vanguardia, elaborar informes políticos sobre la situación de el país, los marxistas la realizaban con total libertad, eligiendo los temas que les parecían de interés sin ningún tipo de cortapisa. No obstante, en apenas un par de años resultó que la Secretaría General de la Vanguardia estaba formada por cuatro civiles y siete militares, cinco de ellos miembros o exmiembros de los servicios secretos. Entonces, la redacción de informes sobre las tendencias de la opinión pública se convirtieron en la principal labor de la organización, y los comunistas se encontraron con que no tenían ninguna labor que desempeñar, o que las que desempeñaban no eran atendidas. Aunque Hamruch niega que en su sección jamás desempeñaran tales actividades, otros sectores de la Vanguardia dependientes de Charaf, el responsable del servicio secreto de la Presidencia, se dedicaban sistemáticamente a realizar grabaciones de las comunicaciones de quien fuera que fuera, incluidos los miembros de la Vanguardia⁴¹ (حمروش 1992: 614-615, 628-630).

La detención en 1966 de tres de los principales líderes de la izquierda marxista integrados en la Vanguardia, Lutfi al-Juli, Ibrahim Saad Eddín y Amín Ez Eddín, acusados de contactar con jóvenes relacionados con la Organización de los Nacionalistas Árabes, y la posterior detención de otros en octubre, o su expulsión del Instituto de Estudios Socialistas y de la Organización de las Juventudes Socialistas enfriaron definitivamente las relaciones entre el régimen naserista y las corrientes marxistas.

2.2.2.3 Detenciones, torturas y otros abusos

La detención de los adversarios políticos fue una constante del régimen naserista. Lo que en los primeros tiempos (1952-54) parecieron medidas excepcionales destinadas a acabar con el poder del Antiguo Régimen y con sus partidarios, que llevaron a la cárcel a más de 2.000 personas, se convirtió más adelante en norma recurrente, con objetivos cambiantes según las circunstancias. Así, según datos oficiales del Ministerio del Interior de 1976, entre 1954 y 1956, tras el intento de asesinato contra Náser, al menos 3.000 hermanos musulmanes fueron arrestados. Entre 1957 y 1964, el grueso de los detenidos, casi 1.300 personas, fueron comunistas, “reaccionarios” y “feudalistas”. Finalmente, entre 1964 y 1971, los detenidos fueron 7.700 entre hermanos musulmanes y feudalistas⁴². Sin embargo, el propio Náser reconoció en diciembre de 1968 que tan solo en agosto de 1965, cuando el régimen creyó tener pruebas fehacientes de que algunos elementos de la

⁴¹ Según el testimonio de Ahmad Kamil, coronel que trabajó a las órdenes de Charaf en la Vanguardia Socialista, tras ser arrestado acusado por conspirar contra Sadat en 1971 (Matar, F. 1972. *What has become of Nasser in the Republic of Sadat?* Beirut: Dar al-Nahar lil Nashr (en árabe), págs. 97-55. Citado por Waterbury (1983: 336-338).

⁴² *Al-Ahram*, 5 de mayo de 1976, citado por Waterbury (1983: 341).

Hermanidad, inspirados por las ideas radicales de Sayyed Qutb, planeaban derrocar al régimen con el apoyo de Arabia Saudí, 18.000 miembros de los Hermanos Musulmanes fueron detenidos por orden suya, y encerrados en campos de detención militares⁴³.

A pesar de la generalización de la política represiva del naserismo a partir de los años 60, una espesa ley del silencio cubrió el recurso frecuente a la tortura, hasta el punto de que gran parte de la sociedad no tuvo constancia de ella o de su alcance hasta la muerte de Náser, cuando los afectados comenzaron a dar cuenta de ella personalmente, y luego públicamente con el beneplácito del régimen de Sadat a mediados de los 70⁴⁴. La peor parte en el trato de la policía la llevaron los Hermanos Musulmanes tanto cuantitativa como cualitativamente, pues el número de ejecutados o fallecidos en prisión fue mucho más allá de los ejecutados por orden judicial⁴⁵. Sin embargo, al menos media docena de conocidos comunistas e izquierdistas perdieron la vida a consecuencia del maltrato físico (Waterbury 1983: 342).

Probablemente, la discontinua intensificación de la mano dura del régimen con sus adversarios respondió a los momentos en los que creyó verse más débil, contestado o amenazado por los relativos fracasos de algunas de sus políticas, por los ingenios para sortear los efectos de estas, o directamente por los intentos de erosionar su poder; así como a las demandas de algunos sectores de la población de avanzar en la vía “socialista” o “revolucionaria”. En este sentido, la interpretación de algunas de las medidas de “mano dura” adoptadas por el régimen naserista depende del color del cristal con el que se miren, como sucede, por ejemplo, con la actuación del Comité para la Liquidación del Feudalismo (لجنة تصفية الإقطاع), creado en mayo de 1966, y encargado de investigar las violaciones de las leyes de reforma agraria y expropiar las tierras que habían sido objeto de ellas, sobre el que hablaremos más adelante.

⁴³ Stephens, R. 1971. *Nasser: A Political Biography*. Londres: Allen Lane. Pág. 136. Citado por Waterbury (1983: 341).

⁴⁴ La decena de textos que Waterbury citaba en 1983 como los más importantes sobre los abusos de policía aparecidos hasta entonces fueron publicados todos ellos entre 1974 y 1976, después de la “victoria” de octubre de 1973, cuando Sadat se creyó suficientemente legitimado para concluir su tarea de deslegitimación del naserismo y de sus principales adversarios provenientes de él (Waterbury 1983: 338-339). No hay que olvidar, sin embargo, que Sadat formó parte del primer tribunal militar, entonces denominado Tribunal del Pueblo (محكمة الشعب) que emitió las primeras condenas a muerte de la época naserista (7, una de ellas conmutada por trabajos forzados) el 4 de diciembre de 1954.

⁴⁵ Mientras que el número de ejecutados a raíz de fallos judiciales de Tribunales Militares fue de 13 personas (6 en 1954 y 7 en 1965), el número de ejecuciones extrajudiciales fue mucho mayor, y a ellas habría que añadir los muertos a causa del maltrato físico y las condiciones de encarcelamiento. Según el testimonio de Hasan Duh, tan solo el 1 de junio de 1957 fueron asesinados a sangre fría con disparos de bala 21 miembros de los Hermanos Musulmanes en la prisión de Tora (en la que Duh se encontraba también detenido), mientras que 22 más resultaron heridos y 14 perdieron sus facultades mentales a causa del trauma causado por la matanza. Los cadáveres fueron enviados a los lugares de origen de los fallecidos, y sus tumbas puestas bajo vigilancia policial. Dirigieron la matanza, siempre según Duh, Salah Desuqui, que luego sería gobernador de El Cairo, el responsable de los servicios secretos Saleh Daud, y el entonces capitán de la policía Ahmad Ruchdi, que posteriormente sería ministro del Interior en época de Mubarak (1984-1986). No apareció ninguna noticia relativa al hecho en los periódicos (محفوظ 1988: 23-24).

2.3 EL ESTADO “EDUCADOR”

Como señaló Ayubi, a quien debemos uno de los mejores trabajos sobre el Estado árabe, hasta la década de los 80 los intelectuales árabes mostraron muy poca atención al Estado y su papel en la sociedad y en la economía. Cuando comenzaron a hacerlo, en sus análisis, independientemente de su orientación ideológica y política, adquirieron un lugar preeminente las ideas de Gramsci⁴⁶, sin duda porque les parecieron especialmente adecuadas para abordar la realidad de los Estados árabes poscoloniales y por la importancia que Gramsci prestó a los intelectuales y a los asuntos culturales.

Abdallah Laroui, uno de los pioneros en la empresa de estudiar el Estado y analizar el Estado árabe -y en quejarse de la falta de interés de los intelectuales árabes por ella-, fue probablemente el primero en avanzar que el Estado árabe surgido entre los años 50 y 60 se componía esencialmente de “cuerpo y músculos” y que, por ello, a pesar del tamaño de su aparato y de sus servicios de seguridad, y de sus despliegues de fuerza (coerción), era, en el fondo, un Estado débil, al carecer del soporte moral (الوجه المعنوي للدولة), ideológico (أدلوجة) y educativo (الوجه الأدبي للدولة) necesario (العروي 1987: 145-158, 170).

El propio Ayubi insistiría más adelante en la validez de esta idea gramsciana: el Estado integral (*lo stato integrale*) es aquel en el que se alcanza la correspondencia entre la estructura y la superestructura, entre las esferas económica, política e ideológica de la formación social. Esta correspondencia, o la *hegemonía* en la formación social de un determinado bloque socio-político (el gramsciano *blocco storico*), se logra cuando una “visión del mundo” “se ha difundido por medio de los agentes de control ideológico y de la socialización, a cada una de las áreas de la vida cotidiana hasta el punto de que esa conciencia dominante resulta interiorizada por las masas, pasando a formar parte de su «sentido común»”⁴⁷ (Ayubi 1998: 24-26). La tarea de difusión y control ideológicos la ejerce el “Estado ético” o “Estado educador”, según la formulación inicial de Gramsci por medio de las escuelas y los tribunales, aunque también por muchas otras iniciativas y actividades, entre ellas las “pretendidamente privadas” (en particular en el caso de los Estados burgueses y/o parlamentarios)⁴⁸. Como es bien sabido, el pensador italiano no utilizaba los términos “educador” y “ético” desde una perspectiva necesariamente

⁴⁶ Ayubi (1998: 26) cita el siguiente texto de Peter Gran de 1987: “Aunque los árabes no han producido un Gramsci, las cuestiones que Gramsci planteaba en la década de 1920 se plantean ahora más libremente en el diario *Al-Ahali* [del partido Tagammu, agrupación de marxistas y naseristas] de El Cairo, en los círculos yumbatistas del Líbano, en la Izquierda Islámica del ayatola Mohammad Baqir al-Sadr y Hasan Hanafi, y en las obras académicas” (“Reflections on Contemporary Arab Society: the Political Economy School of the Sixties”, *Arab Studies Quarterly*, vol. 9, nº 1. Pág. 92). Luz Gómez García también señaló más recientemente la influencia de Gramsci en el islamista egipcio, “tránsfuga del marxismo”, Adel Husein (Gómez García 1996).

⁴⁷ Ayubi cita o parafrasea en su exposición a Boggs, C. 1976. *Gramsci's Marxism*. Londres: Pluto Press y Jessop, B. 1982. *The Capitalist State*. Oxford: Martin Robertson.

⁴⁸ Gramsci distingue entre “la función educativa positiva” de la escuela y la “función educativa represiva y negativa” de los tribunales (Gramsci 2009: 209).

favorable a ese papel del Estado, sino pretendidamente objetiva:

“Todo Estado es ético en la medida en que una de sus más importantes funciones es elevar la gran masa de la población a un determinado nivel cultural y moral, nivel (o tipo) que corresponde a la necesidad de desarrollo de las fuerzas productivas y, por consiguiente, a los intereses de las clases dominantes” (Gramsci 2009: 209).

Sin embargo, los Gobiernos revolucionarios tenían el desafío de invertir la tarea del Estado educador para sus propios fines:

“[Es] Tarea educativa y formativa del Estado, cuyo fin es siempre crear nuevos y más altos tipos de civilización, adecuar la «civilización» y la moralidad de las más vastas masas populares a las necesidades del desarrollo continuo del aparato económico de la producción, y por consiguiente, elaborar, físicamente incluso, nuevos tipos de humanidad. Pero, ¿cómo conseguirá cada individuo concreto incorporarse al hombre colectivo y cómo se ejercerá la presión educativa sobre los individuos singulares obteniendo su colaboración, convirtiendo la necesidad y la coerción en «libertad»?” (Gramsci 2009: 185).

Desde su óptica revolucionaria, Gramsci argumentaba, siguiendo a Maquiavelo, que el 'Príncipe moderno' -el partido revolucionario- sería la fuerza que permitiría que la clase obrera desarrollase intelectuales orgánicos y un bloque hegemónico alternativo al de la burguesía dentro de la sociedad civil, componente esta del Estado en la concepción gramsciana en la misma medida que lo son el “aparato de Gobierno” y la “sociedad política”, característica esta última del Estado burgués y a la que se enfrenta la sociedad civil revolucionaria (enfrentamiento que dio pie a la división de poderes), con la dificultad que entrañaba que “ciertas categorías de intelectuales” estuvieran “todavía demasiado ligadas a las viejas clases dominantes” (Gramsci 2009: 190).

Es altamente improbable que Gamal Abdel Náser, o cualquiera de sus allegados en las elites dirigentes, o de los intelectuales que se asociaron políticamente a ellos, leyera o hubiera leído a Gramsci en los años 50 o 60⁴⁹. Sin embargo, la concepción del Estado del antiguo régimen egipcio que Náser (¿un “príncipe moderno”?) pareció tener, y la del nuevo Estado que pareció querer desarrollar, se asemejaron más en muchos momentos a las de Gramsci que a las del marxismo dogmático, salvando la distancia fundamental de que el naserismo, en la teoría y en la práctica, siempre huyó de aplicar cualquier derivado del concepto de lucha de clases propiamente dicho. No queremos, sin embargo, entrar en general en esta amplia, intrincada y tal vez arriesgada cuestión, sino tan solo señalar que, tras los titubeos que caracterizaron igualmente su actuación en el resto de los terrenos, en

49 Aunque Ayubi señala, sin embargo, que Henri Curiel, uno de los líderes originales del HADETU, sí que pudo haber sido influido por Gramsci, a juzgar por “sus ideas acerca de las ventajas [frente a un marxismo ortodoxo] de una línea nacional-democrática o nacional-popular y la importancia de construir un frente interclasista para emprender la lucha por la plena liberación nacional” (Ayubi 1998: 311).

un determinado momento Násir descubrió la importancia de que “su” nuevo Estado fuera también un auténtico “Estado educador”, trascendiendo -sin abandonarlos- la propaganda y el control ideológicos, y orientado, desde luego a sus fines políticos.

2.3.1 La prensa y los medios de comunicación

2.3.1.1 Nacionalismo, educación y política

Aun en 1982, Munir K. Nasser constataba que

“La idea de que la prensa es un instrumento del nacionalismo es aceptada tanto por el público en general como por los Gobiernos de Oriente Medio (...) El concepto occidental de que el objetivo de un periódico es informar y entretener es sustituido por el de que dicho objetivo es transmitir un mensaje político y educar” (Nasser M. 1990: 187).

La sorpresa que nos produce que en un artículo especializado sobre la prensa se ignore, a juzgar por sus palabras, la simbiótica relación que prensa y nacionalismo han tenido casi desde el nacimiento de aquella hasta ahora en todos los lugares del mundo, hasta el punto de que, como hemos indicado, numerosos autores han señalado que el nacionalismo moderno en general, y el árabe y el egipcio en particular, tal vez no se habrían desarrollado, o no lo hubieran hecho de la misma manera, sin el nacimiento de la prensa (véase el capítulo 2 de la Introducción); dicha sorpresa, decimos, es tan solo menor que la que nos causa la falta de atisbos en el autor del menor enfoque crítico a la “representación autorizada” que en “Occidente” se hace del objetivo de la prensa. Sin embargo, la cita nos vale, puesto que en ambos casos, “Occidente” y “Oriente Medio”, nos movemos al nivel de las representaciones autorizadas, y por tanto, efectivamente denotan que nos encontramos ante conceptos y realidades políticas y sociales diferentes.

Como hemos apuntado en el capítulo 2.1 de la Introducción, la prensa egipcia nació de la mano de la autoridad política, primero de la del ocupante francés, y luego de la de Mohammed Ali. Incluso el primer periódico formalmente privado, *Wadi al-Nil* (1867) fue financiado por el jefive Ismael (1863-1879), y tenía entre sus fines, además de consolidar su poder, promover para ello una cierta forma de nacionalismo. Al amparo de la tolerante política de Ismael, el número de periódicos creció de tal manera que tan solo los prohibidos por su sucesor Taufiq (1879-1892) entre 1886 y 1891, tachados de “periódicos políticos”, fueron 97. Así mismo, a principios del siglo XX, varios partidos surgieron del núcleo de los fundadores -políticos e intelectuales- de algunos de los principales periódicos, y a partir de la década de 1920, la mayor parte de los nuevos periódicos privados serían fundados por partidos políticos. Pero antes y después de dicha década, el papel a un mismo tiempo educador y político de la prensa se había manifestado también ampliamente, encontrando

incluso, tal vez, su mayor expresión en la prensa creada por y para mujeres, orientada al mismo tiempo a entretenerlas, educarlas y movilizarlas (Gómez García 1992: 73-83; Tomiche 1993: 8-33).

2.3.1.2 Control y nacionalizaciones

Una de las primeras decisiones de los Oficiales Libres en los días siguientes a su llegada al poder fue hacerse con el control del periódico *Al-Ajbar*, que los hermanos Mustafa y Ali Amín, acusados de espionaje para la CIA y represaliados por ello⁵⁰, habían fundado meses antes. En noviembre de ese mismo año de 1952 fue creado por primera en Egipto un ministerio encargado de la información y las telecomunicaciones, significativamente llamado Ministerio de la Orientación Nacional (وزارة الإرشاد القومي). Por otro lado, el CMR fundó su propia casa de publicaciones, *Dar al-Tahrir*, con el periódico *Al-Gumhuriyya* como puntal, y el 4 de julio de 1953 nació la radio *La Voz de los Árabes* (إذاعة صوت العرب), la primera emisora de un país árabe que llegaría a los receptores de todos los demás. La Televisión Nacional no sería fundada hasta 1960, y la llegada de los televisores a la mayoría de los hogares egipcios requeriría aun de unos cuantos años más, por lo que la prensa y la radio seguirían siendo los principales medios de comunicación hasta mediados de los años 60.

En 1953, los periódicos con licencia a nombre de los partidos dejaron de publicarse, aunque no los que estaban a nombre de particulares, y en marzo de 1954 fue levantada la censura previa que había estado vigente desde 1939. Sin embargo, ante las duras críticas recibidas por el régimen en el marco de la primera crisis con Naguib, la censura fue restablecida un mes después, y los periodistas advertidos de que “no sembraran las dudas y las sospechas acerca de la revolución” (Nasser 1982: 191). La gestión de la “crisis mediática” de 1954 es reveladora acerca de la que sería la manera de proceder característica del naserismo con los intelectuales, los periodistas y las personalidades que creía “recuperables” para el régimen: castigarlos sin excesivo rigor y darles la oportunidad de retornar a su seno. Según esta política, dos de los principales portavoces mediáticos de los partidarios de Naguib, Ihsán Abdel Quddús y Jaled Mohai Eddín, serían levemente represaliados (el primero ingresando unos pocos días en prisión⁵¹, y el segundo con el exilio), pero ambos volverían posteriormente a lugares destacados de la prensa egipcia estatal, el primero en los diarios *Al-Ajbar* y *Al-Ahram*, y el segundo dirigiendo desde 1956 *Al-Masá*, del propio grupo *Tahrir*, si bien Mohai Eddín volvería a enfrentarse al régimen al dar cancha libre en su medio a jóvenes intelectuales socialistas y progresistas.

⁵⁰ Mustafa fue encarcelado y Ali partió al exilio.

⁵¹ Si bien el diario que dirigía Abdel Quddús sería prohibido.

A pesar de este evidente interés por el control de la prensa, hasta 1960 el régimen naserista le concedió una importancia relativa, confiado como estaba Násér en su control total de la radio, único medio que llegaba a la mayoría de la población, y mediante el que comunicaba directamente con las masas, seduciéndolas con su verbo pausado, lejano y cercano a un tiempo. No obstante, el 24 de mayo de 1960, en el marco de la primera gran oleada de nacionalizaciones, la ley 156 (قانون تنظيم الصحافة) ponía bajo el control del Estado las cuatro principales casas de edición de prensa privadas (*Dar al-Ahram*, *Dar Ajbar al-Yaum*, *Dar Ruz al-Yusuf* y *Dar al-Hilal*), que pasarían a ser controladas primero por la UN y luego por la USA, las cuales expedirían las licencias de publicación y de periodista, y designarían los consejos de dirección de dichos grupos. Posteriormente, todo periodista habría de ser miembro de la USA, y la suspensión de militancia significaría que no podrían seguir ejerciendo la profesión (Gómez García 1996: 83).

El decreto de 1960 iba acompañado por una nota explicativa de Mohammed Hasanein Heikal que decía que la organización de la prensa era necesaria para detener el control de la prensa por los capitalistas y devolver la propiedad de los medios y su control político y social al pueblo. Así mismo, la nota introducía la noción, vigente hasta hoy, de que la prensa era un “poder” o “autoridad” (سلطة), “cuya función era llevar al pueblo a la participación activa en la construcción de su sociedad, exactamente igual que lo hacía la Asamblea del Pueblo”⁵². Había nacido lo que Rugh llamó “prensa de movilización” (Rugh 1989: 51-70).

2.3.1.3 Heikal y *Al-Ahram*: faros de la política informativa y cultural naserista

El mencionado y conocido Heikal, amigo y consejero de Násér desde 1952, hasta el punto de que fue el encargado de redactar su *Filosofía de la Revolución* en 1953, desempeñaría un papel fundamental en el terreno de la información, la prensa y la cultura durante el régimen naserista. Aunque sus críticos atribuyen dicho papel destacado a razones políticas y personales, lo cierto es que Heikal, que en los 50 y los 60 rechazó en cuatro ocasiones el puesto de ministro de Información, para aceptarlo únicamente pocos meses antes de la muerte de Násér, había sido pionero en Egipto, a nivel personal, como recordó Temimi (2003), en numerosos terrenos del periodismo, lo que le valió, entre otras cosas ganar tres veces seguidas en la época monárquica el Premio Rey Faruq⁵³; y fue a partir de 1957 y antes de 1960, es decir antes de que el más antiguo diario egipcio, *Al-*

⁵² Ministerio de Información Egipto (n.d.). قانون المطبوعات والصحافة. El Cairo. Pág.8. Citado por Nasser (1982: 192).

⁵³ Entre dichos terrenos se encuentran la atención a las noticias de todo el mundo, más allá de lo que sucedía en Francia y Gran Bretaña; el “reporterismo”; las entrevistas internacionales; las crónicas parlamentarias; las reseñas teatrales; la creación de una amplísima cartera de contactos nacionales e internacionales; etc.

Ahram, fuera nacionalizado, cuando Heikal comenzó a propiciar, con su tarea de director en él, que se construyera un auténtico mito en torno a su persona, su desempeño profesional y dicho periódico. Heikal recibió en 1957 un diario inmerso en pérdidas millonarias (1,5 millones LE), con una tirada reducida (68.000 ejemplares) y con un consejo de redacción cuya media de edad era de 51 años. Al año siguiente, el periódico contrató a 54 recién licenciados, llegó a los 100.000 ejemplares y registró beneficios (Temimi 2003: 93).

En *Al-Ahram* se emprendió “la primera experiencia de formación colectiva abordada en un periódico egipcio”⁵⁴, y comenzaron a publicar gran parte de los grandes escritores consagrados (Mahfuz, Ahmad Bahá Eddín, Yusuf Idrís, Taufiq al-Hakim). Colaboradores de Heikal fueron enviados al extranjero para conocer los modos de funcionamiento de los grandes grupos de prensa, y en 1963, al tiempo que se modernizaban las instalaciones y los equipos existentes y se multiplicaban las publicaciones de la casa madre, se comenzó la construcción de una nueva sede para el periódico, que a partir de 1969 acogería innovaciones como el Centro de Estudios Políticos y Estratégicos de Al-Ahram (CEPEA), el cual bajo los regímenes siguientes y hasta hoy se convertiría en una de las principales fuentes de información y análisis para estudiosos y periodistas, y en un *think tank* fuertemente imantado por el poder político del que siempre dependió. En 1974, cuando, en la época de Sadat, Heikal abandonó la dirección del grupo *Al-Ahram*, la difusión del diario era de 423.000 ejemplares, y el grupo se había convertido en una empresa floreciente que en el futuro no dejaría de crecer⁵⁵.

Como hemos dicho, Heikal sería siempre el consejero personal y hombre de confianza de Náser, cuyos discursos más importantes redactaría, incluido el siguiente a la derrota de 1967. Pero sería mucho más que eso: marcaría el tono y el tenor de muchas de las políticas del naserismo en los terrenos informativo y cultural, políticas situadas entre la inclusión y el favorecimiento de la diversidad y el control. En *Al-Ahram*, los grandes literatos de las épocas anteriores tendrían no solo columnas, sino también despachos⁵⁶, pero por su grupo mediático también fueron diseminados periodistas e intelectuales conservadores y marxistas (a partir de 1964), como también lo serían por el resto de los medios del Estado, hasta el punto de que algunos de estos se “especializaron” políticamente (*Ruz al-Yusuf*, feudo de naseristas progresistas y críticos; *Al-Talía*, reducto de los marxistas) (Temimi 2003: 94).

Algunos autores, como Vatikiotis (1978), insisten en la voluntad de Náser de controlar a los intelectuales de todas las tendencias; otros, como Ayubi (1991) y Waterbury (1983), en su voluntad de *incluirlos* en el régimen. Lo cierto, de cualquier manera es que,

⁵⁴ Temimi (Ibid) cita a Baybars (s.f., 127), pero la referencia completa no aparece en su bibliografía.

⁵⁵ En 1968 tuvo un beneficio de 4 millones de LE (Temimi 2003: 94).

⁵⁶ Aún en 1989 Mahfuz nos recibió en el suyo ya para una entrevista para la televisión.

como el propio Vatikiotis reconocería, “el régimen hablaba con varias voces, desde la derecha a la izquierda”, y los debates sobre cuestiones generales y técnicas y sobre altos responsables (aunque no sobre el papel de Náser) eran consentidos en el marco de una cierta contención general (1978: 175).

2.3.2 El aparato cultural

2.3.2.1 “Cultura para el pueblo”

En su periodo de formación y consolidación el régimen naserista mostró escasa atención a la cultura. Sin embargo, esta actitud cambió a partir de 1956, según Al-TaHER Makki “cuando Egipto empezó a ocupar un lugar de primera fila en la escena árabe e internacional (...) y cuando las relaciones con la URSS le hicieron comprender la necesidad de una política cultural de masas”⁵⁷.

En 1958 fue creado el Ministerio de Cultura, respondiendo finalmente a la insistencia en este sentido de Fathi Radwán, uno de los fundadores del Joven Egipto en la década de los 20, que se había hecho el dueño indiscutible de las ondas a través de las emisiones de *La Voz de los Árabes*. Tras unos meses en los que Radwán asumió la dirección del ministerio, esta fue encargada a Tharwat Ukacha, oficial libre como Radwán y escritor, que ejerció en una primera etapa hasta 1962. Según Ukacha, Náser -con quien el escritor, fiel a Sadat, sería muy crítico tras su muerte- mostraba un gran interés por los proyectos culturales, pues pensaba que un “florecimiento cultural tendría las mismas consecuencias en el plano intelectual que la industria pesada para el sector de la industria”⁵⁸.

La primera gran actuación del nuevo ministro fue reunir, en marzo de 1959, lo que Gonzalez-Quijano denominó “unos auténticos Estados Generales de la cultura” (1998: 33). Todos los hombres de artes y letras significativos fueron invitados a un gran debate de ideas, de cuyas conclusiones salió un primer plan quinquenal que seguía la vía planificadora y desarrollista emprendida en otros sectores. La realización de la mayor parte de los proyectos fue encomendada a jóvenes universitarios, entre ellos Louis Awad, que representaba a una nueva generación de intelectuales progresistas y de tendencias innovadoras que el Ministerio. Así, fueron creadas progresivamente la Ópera de El Cairo, la Biblioteca Nacional, numerosos museos, escuelas de música, un circo nacional, una orquesta sinfónica, etc.

⁵⁷ Al-T. Makki en *Adab wa Fikr*, nº 40, 1988, pág.12. Citado por Gonzalez-Quijano (1998: 26)

⁵⁸ Th. Ūkâcha, “Thawrat yûliû wal-mas’ala al-thaqâfiyya”, en *Thawrat 23 yûlyû*, Dâr al-mustaqbal al`arabî, 1987, pág. 426. Citado por Gonzalez-Quijano (1998:32)

Pero la acción del Ministerio fue mucho más allá de los proyectos de relumbrón, y bajo la dirección de Abdel Razeq al-Sanhuri se extendieron mucho más allá de El Cairo y Alejandría, llegando a partir de 1966 a los más pequeños pueblos de Egipto mediante una red de “palacios de la cultura” (auténticos palacios requisados a la antigua burguesía) y centros culturales, en los que jóvenes intelectuales llegados de las ciudades llenos de entusiasmo emprendían la tarea de “educar a las masas”, despertando los recelos de los burócratas y dirigentes políticos locales, de los que el propio Ukacha tuvo que defender en numerosas ocasiones a los jóvenes .

La labor del Ministerio de Cultura varió considerablemente cuando en 1962 asumió su dirección, junto con el de Información, al que aquel fue incorporado, Abdel Qader Hátém, que en la ola de la nueva línea socialista le imprimió una orientación más técnica, productivista e ideologizada, y bajo cuyo mandato las corrientes intelectuales y culturales progresistas fueron dominadas por los sectores más tradicionales. Se trataba de ejercer, ahora sí, un control más estrecho sobre el mundo de la cultura, en el que se había dado cabida a todas las corrientes, ante el temor de unas elites del régimen cada vez más burocratizadas a que “la revolución” se viera desbordada desde abajo. Poco antes de la sustitución de Ukacha, Heikal había publicado un libro, *La crisis de los intelectuales*, basado en artículos escritos en 1961, en los que insistía en la idea de que debía acabarse el tiempo del compromiso tibio de los intelectuales con la revolución, algo que sin duda no se refería a pretender laminar las iniciativas individuales con los lemas, impregnados de un aroma soviético, a los que dio paso el ministerio de Hatem: “producir un libro cada seis horas”, “poner fin al feudalismo cultural”, “planificar la cultura popular y revolucionaria”,... (Gonzalez-Quijano 1998: 35-37).

En septiembre de 1966, Ukacha, añorado sin duda por muchos, volvió a asumir la dirección del Ministerio, convocando de nuevo a un gran debate nacional e incorporando a sus departamentos intelectuales marxistas como Mahmud Amín al-Alam y Abdel Azim Anís. No obstante, la derrota de 1967 y el recrudecimiento de la crisis económica pusieron un fin radical a todos sus proyectos, a la par que llevaban al replanteamiento de los sectores más radicales de la *intelligentsia* cooperante con el régimen de Násir de sus propias actitudes y las de las autoridades.

Como consecuencia de la labor del Ministerio de Cultura, el número de libros publicados en Egipto pasó de 1000 en los años 50 a 4000 en los 60, para descender abruptamente tras la guerra de 1967. A principios de los 60, el sector público publicaba el 20%; al final, cuando el Estado controlaba la mayor parte de las editoriales, el 75%. El 16% de los títulos eran traducidos y, contradiciendo la teoría de un dirigismo cultural estrecho -a pesar de la influencia de Hatem-, la mayoría de aquellos eran de origen “occidental”, en particular anglosajón, y estaban relacionados con temas supuestamente

tabú, como la economía y la política “capitalistas”⁵⁹. La distribución de los libros publicados por temáticas apenas varió entre el periodo previo y el posterior a 1952: un 30% sobre ciencias sociales, un 20% de literatura, un 13% sobre historia y geografía, más de un 10% sobre religión, y menos de un 10% sobre ciencias aplicadas. La abundancia de publicaciones se vio acompañada por una política de precios que las hacía fácilmente accesibles al gran público. Durante el primer mandato de Ukacha, obras de referencia como los diccionarios se vendían en el sector público al 10% de su precio anterior -lo que provocaba la irritación de los editores privados-, y su sucesor prohibió a principios de los años 60 vender cualquier libro público por más 40 piastras (Gonzalez-Quijano 1998: 64-67).

2.3.2.2 Cultura, ideología e intelectuales

Los críticos acérrimos del naserismo tienden a despachar la política cultural del naserismo como un expediente dedicado únicamente al control ideológico y cultural, y a la captación de la *intelligentsia* para el régimen. Sin embargo, como señaló Gonzalez-Quijano

“Para la época, sus políticas tenían un carácter extremadamente innovador (...) Con el tiempo, las peripecias de esta historia se han difuminado y la memoria recompone una imagen simplificada y unívoca. Los testimonios de esta época han adquirido hoy una especie de pátina, un aire un poco anticuado en el que se superponen los eslóganes que cantan los progresos de la humanidad, la supremacía del hombre sobre la naturaleza -ilustrada por la construcción de la Presa que iba a poner fin a las crecidas del Nilo-, por la amistad de los pueblos y el combate contra las fuerzas retrógradas, preludio de un futuro radiante. Pero, ¿no es esta una imagen engañosa? La acción del Estado naserista revela, por el contrario, no una, sino varias orientaciones, a menudo contradictorias y muy influidas por las rivalidades políticas” (1998: 26).

Estas contradicciones se derivaban, siempre según el autor, del conflicto “entre los partidarios de la formación y los de la información, entre los de la revolución cultural y los de la cultura de la revolución”, representados respectivamente al más alto nivel por Tharwat y Hatem (pág. 47). A pesar de la presión de los segundos, como señaló por su parte Rousillon, “nunca hubo un arte o una filosofía oficial en el Egipto naserista, sino que una de las características de ese periodo fue la floración ecléctica de familias de pensamiento que bebían de las más diversas corrientes de la cultura mundial”⁶⁰.

En cuanto a las relaciones entre el régimen naserista y los intelectuales, es cierto

⁵⁹ Los datos sobre las traducciones tomados de Gonzalez-Quijano (pág. 67) proceden en última instancia de Yusuf Corm (1968): “L’édition égyptienne en 1967”. *Travaux et jours*, n° 27, págs. 44-45.

⁶⁰ Rousillon, A. 1990: “Intellectuels en crise dans l’Egypte contemporaine”, en Kepel, DG. & Richard, Y. (Eds.) *Intellectuels et militants de l’Islam contemporain*. París: Le Seuil. Citado por Jacquemond (2011: 1068).

que aquel intentó satisfacer las necesidades materiales y de reconocimiento de estos distribuyéndolos por una serie de organismos culturales, periodísticos o administrativos, según los casos. Pero la función de esas estructuras estatales, y la de cada individuo dentro de cada una de ellas, dependió más de su propia inclinación que de las limitaciones que se les impusieron. Hubo auténticas instituciones-vitrina, como el Consejo Superior de las Artes, las Letras y las Ciencias Sociales (CSALCS), creado en 1956, a las que pertenecieron muchos de los grandes literatos de las épocas anteriores, cuya función principal era otorgar premios, y que se mantuvieron prudentemente al margen de los conflictos políticos y sociales⁶¹. También fue finalmente creado, a finales de los sesenta, una especie de sindicato oficial, la Unión de Escritores Egipcios, en la que rechazaron integrarse los intelectuales socialistas (Gonzalez-Quijano 1998: 31; Jacquemond 2011:1069). Sin duda, muchos intelectuales cedieron a la suerte de cooptación que las estructuras culturales del régimen naserista les ofrecían por necesidad, oportunismo o miedo. No obstante, muchos otros se integraron en ellas desde la adhesión a aquel o desde la perspectiva de que les permitían un margen de acción suficiente para cumplir una función acorde con sus propias convicciones. En este último sentido, la posición de muchos intelectuales marxistas varió, como hemos señalado, de la crítica y la oposición a la colaboración, para retornar a la crítica en los últimos años del régimen. En muchos otros casos, los intelectuales se dejaron llevar por la ola de entusiasmo que arrastró a muchos sectores de la sociedad ante el proyecto naserista, aunque esa ola les llevara a muchos, según la autocrítica de Taufiq al-Hakim, a una “pérdida de la conciencia” ante los aspectos negativos del naserismo, que “con su rayo de esperanza le embrujó”, con la promesa de “los progresos y las glorias”, “le embriagó”. Pero mejor mostrar la evolución de Al-Hakim con sus propias palabras, que escribió en 1974:

“Lo sorprendente es que alguien como yo, considerado por el país un intelectual, y quien la revolución lo sorprendió ya en edad madura, se dejara arrastrar por el entusiasmo sentimental, sin reflexionar acerca de la verdad de esa imagen que se nos fabricaba. Al parecer, la confianza había paralizado el pensamiento. Nos encantaron con el rayo de la esperanza que buscábamos desde hacía mucho tiempo. Nos emborracharon con el elixir de los logros y las glorias, hasta que perdimos la consciencia.

Lo sorprendente es que viéramos lo que veíamos y oyeramos lo que oíamos, y ello no influyera en nuestros buenos sentimientos hacia Gamal Abdel Naser. Habíamos perdido la consciencia. Estábamos narcotizados”⁶².

⁶¹ Al CSALCS pertenecieron, entre otros, Taufiq al-Hakim, Mahmud Abbás al-Aqqad, Taha Husein, Mohammed al-Zayyat, Yahya Haqqi y Mohammed Taimur entre otros. En época de Sadat el CSALCS pasaría a llamarse Consejo Superior de las Artes y las Letras.

⁶² La crítica al naserismo, y la autocrítica a sí mismo por haberse dejado seducir por él y haber “perdido la conciencia” -como la mayor parte de los intelectuales y de la sociedad, según el autor- fue expresada por Taufiq al-Hakim en su texto عودة الوعي (*El retorno de la conciencia*), publicado en 1974, en el que repasaba su biografía en relación al naserismo y los acontecimientos históricos previos. El título de dicha obra constituía una referencia explícita a la novela histórico-filosófica de Al-Hakim sobre la revolución de 1919 عودة الروح (*El*

Y estas las que, al parecer, habría escrito tras la muerte de Náser:

“Disculpame, Gamal. La pluma tiembla en mi mano. No es costumbre mía escribir cuando el dolor embriaga el cerebro y turba el intelecto. La tristeza ha entrado en todas las casas en duelo por ti. Porque en cada casa hay un trozo de ti. Porque cada individuo ha puesto un ladrillo en el imponente edificio que has construido”⁶³.

No obstante, al margen del carácter según muchos “magnético” de Náser, y de la influencia de la “situación carismática” generada en el país, es muy importante señalar que la adhesión o lealtad, más o menos entusiasta, de un gran número de intelectuales al naserismo, bebía de una concepción orgánica del papel del intelectual y de su relación con el Estado que fue correspondida y fortalecida por la visión inclusiva que el propio régimen naserista tenía de la cuestión, pero que era de más antigua raigambre y que se mantendría en general tras aquel⁶⁴. Como señaló Jacquemond, más allá de que la intelectualidad y la escritura, en todas partes y en todos los tiempos, hayan estado relacionadas con el poder (como lo atestigua en el caso árabe la etimología de la palabra *kátib*⁶⁵), el patronazgo y el control de aquella por el poder en el Estado moderno egipcio se remontaban a la época de

retorno del espíritu), publicada en 1933 y cuya lectura había, a su vez, seducido a Náser en su juventud, razón por la cual este guardaba una especial deferencia hacia el escritor. La cita es de las páginas 37-38 de la edición de Dar al-Churuq, El Cairo, 2006.

⁶³ Estas palabras son atribuidas a Taufiq al-Hakim en infinidad de textos que se pueden encontrar en Internet, comenzando por la entrada sobre el escritor en la página de la Wikipedia en árabe (<https://ar.wikipedia.org/>, consulta de diciembre de 2014). Las habría pronunciado en un elogio fúnebre del Presidente, que pudo llevar a cabo una vez que recuperó el conocimiento después de perder el conocimiento tras un primer intento. La naturaleza del texto, destinado a una alocución oral, es, probablemente, la que ha hecho que no hayamos encontrado la referencia detallada de él. El propio Al-Hakim, en *El despertar de la conciencia*, que acabamos de citar, aunque señala que “tras la muerte de Náser nos dominaron a todos los sentimientos” y que el mismo solicitó que se erigiera una estatua del presidente, no hace ninguna alusión a dichas palabras (pág. 67).

⁶⁴ A pesar de los cambios de orientación, en gran parte ideológica, que supondrían los regímenes de Sadat y de Mubarak, tan solo en los últimos años del régimen de Sadat se produjo una auténtica purga entre los intelectuales, fundamentalmente periodistas, en el marco del enfrentamiento entre aquel y los opositores a sus políticas. Por lo demás, los intelectuales seguirían contando con sus espacios profesionales e ideológicos en el seno de las instituciones dependientes del Estado, y muchos de ellos ocuparían altos cargos en los distintos regímenes. Por poner solo dos ejemplos, el escritor Yusuf al-Sibai, militar de profesión, fue presidente del CSALCS, de la Unión de Escritores Árabes y de la Unión de Escritores Afro-asiáticos durante la época de Náser, y posteriormente presidente de la fundación de *Al-Ahram*, presidente del Sindicato de Periodistas y ministro de Cultura en la época de Sadat (Jacquemond 2011: 1068-1073); y el propio Abdel Qader Hatem, también militar de formación, a pesar de ser el portaestandarte de la línea socialista ortodoxa en la cultura en la época de Náser siguió ocupando altos cargos en el Ministerio de Cultura hasta la época de Mubarak. Pero los casos son incontables.

⁶⁵ Como es bien sabido, en un principio la palabra كاتب designaba a toda persona cuya función consistía en escribir o redactar cartas oficiales o documentos administrativos, una función de la que dan cuenta en castellano los términos “escriba” o “secretario”. El alejamiento de estas funciones desde finales del siglo VIII de la era cristiana por parte de quienes las desempeñaban, para adentrarse en terrenos que hoy consideraríamos “literarios” en el sentido restringido, “artístico”, del término, daría pie a lo que en los manuales de literatura árabe se llama a menudo “prosa de los secretarios”. El árabe moderno retomaría la palabra para referirse al “escritor” en el sentido moderno del término, en el de, según Jacquemond, “artista que pretende ser libre de toda constricción excepto aquellas que le dicte su arte” (2011: 1065).

Mohammed Ali, si bien dicho patronazgo había sido disputado al poder constituido a finales del siglo XIX y en la primera mitad del XX por políticos y partidos opuestos a aquel (2011: 1067-1068).

También para Gonzalez-Quijano “la naturaleza muy comprometida (*engagée*) de la producción artística árabe de hoy, sobre todo en el terreno literario (*champ littéraire*) se explica desde este fondo histórico”. Sin embargo, es cierto, según el mismo autor, que

“antes de la experiencia naserista, la cultura nunca había sido considerada un asunto tan directamente político, no había suscitado una intervención del poder político a tal escala, y, sobre todo, no había sido objeto de una acción sistemática, en el marco de una auténtica planificación decidida por el aparato político y en función de un proyecto claramente establecido” (1998: 28).

Esa masiva intervención del Estado en la cultura y la educación aportó sin duda grandes beneficios, materiales e inmateriales, a la *intelligentsia* y, si bien impuso unos claros límites a la acción política de aquella, propició y favoreció -como insiste en señalar Jacquemond- una auténtica ósmosis entre ambos que se mantendría en gran medida, a pesar de los periodos de crisis e incluso de ruptura de parte de los intelectuales con los sucesivos regímenes, casi hasta nuestros días:

“Para numerosos intelectuales que comenzaron sus trabajos en la época de Násir, la creación o la crítica literaria eran un sustituto o una prolongación natural de la acción política (...) La tradición de ósmosis entre vanguardia literaria/artística y vanguardia política se perpetuó después de 1952, y hubo que esperar hasta los años 90 para constatar una ruptura con ese modelo antiguo” (Jacquemond 2011: 1071).

2.3.2.3 La censura

En el contexto que hemos dibujado, la censura se organizaba alrededor de varios ejes. Por un lado, lo audiovisual (entonces radio, televisión, teatro y cine) estaba sujeto a una férrea censura previa dependiente directamente del Estado, excepto en materias directamente relacionadas con la religión, sobre las que la Academia de Investigaciones Islámicas (مجمع البحوث الإسلامية), creada en 1961 en el seno de la universidad-mezquita de Al-Azhar, en el marco de la reforma de esta institución⁶⁶, tenía en principio las competencias. Por otro, la producción escrita en la prensa estaba sujeta, naturalmente, a la apreciación de los responsables de unos medios de comunicación mayoritariamente

⁶⁶ La reforma de Al-Azhar fue llevada a cabo con el doble objetivo de modernizar el sistema educativo de su universidad y de subordinar el conjunto de la institución al Estado, de cuyo ministerio de Asuntos Religiosos pasaría a depender, y cuyos principales dirigentes, incluido el Gran Jeque, serían a partir de entonces nombrados por el presidente de la República (Arigita 2005: 62-74)

controlados por el Estado, lo que suponía que periodistas y escritores se aplicarían previamente la contención o autocensura necesarias para no enfrentarse a demasiados problemas. Algo similar sucedía en el terreno del resto de las publicaciones escritas, de tal manera que los casos concretos de libros directamente prohibidos fueron relativamente limitados. Es conocida la prohibición de la publicación en libro a causa de las presiones de los ulemas de la novela de Naguib Mahfuz, *Los chicos de nuestro barrio* (أولاد حارتنا), previamente publicada por entregas en *Al-Ahram* en 1959. Así mismo, la censura prohibió en 1966 la publicación de la novela *Ese olor* (تلك الرائحة), de Sonallah Ibrahim, en la que este abordaba su experiencia en prisión desde una perspectiva más humana que explícitamente política⁶⁷. De la misma manera, la mayor parte de las obras prohibidas afectaron a obras relacionadas con la religión o con la moral, si bien el propio Násir intervino personalmente para que no se impidiera la publicación de algunas obras, como algunas que defendían la separación entre el Estado y la religión o la biografía del profeta Mahoma escrita por Al-Charqawi (Gonzalez Quijano 1998: 59-60).

En definitiva, durante la época naserista se instauraría, en el terreno de la censura, lo que Jacquemond llama la “ley de las libertades decrecientes”, según la cual “cuanto más susceptible es un medio de alcanzar un público amplio, más es controlado”, ley que continuaría vigente bajo los regímenes siguientes durante el siglo XX y que se inscribiría en el marco de la ley superior no escrita que aconsejaba la oportunidad de autocensurarse antes de presentar un producto cultural para su publicación o difusión (Jacquemond 2011: 1071).

3. LAS RELACIONES ENTRE EL RÉGIMEN, EL ESTADO Y LA SOCIEDAD

3.1 INCLUSIVISMO, CORPORATIVISMO Y CONTROL

En el capítulo I 1.3 hemos expuesto cuáles fueron las organizaciones políticas creadas sucesivamente por el régimen naserista con el fin declarado de que vehicularan la participación política de la sociedad: la Organización para la Liberación, la Unión Nacional y la Unión Socialista Árabe. Estas organizaciones, que solo parcialmente se configurarían por procedimientos electivos, mientras que en su nacimiento y funcionamiento serían eminentemente jerárquicas, serían las encargadas de seleccionar a los candidatos a formar

⁶⁷ Sonallah Ibrahim se inspiraría en su entrevista con el comité censor de *Ese olor* para escribir la novela *El Comité* (اللجنة, 1981). Volveremos sobre este autor en el capítulo V 3.4.

parte de la Asamblea Nacional, máximo órgano de representación política a nivel estatal. Sin embargo, como ya señalamos, dichas organizaciones no pretendían representar a toda la sociedad, sino tan solo, en la formulación de la USA, la más longeva de ellas, a la “alianza de fuerzas trabajadoras”, excluyendo explícitamente a ciertos sectores socioeconómicos y políticos, en particular los relacionados con el sistema de poder del régimen monárquico anterior. Recordemos que los incluidos en el Congreso Nacional de Fuerzas Populares que aprobaría el Pacto de Acción Nacional que daría paso a la USA, serían los representantes de campesinos, trabajadores, funcionarios, del “capitalismo nacional”, de los sindicatos profesionales, de los profesores y estudiantes universitarios y de las asociaciones de mujeres.

Ya del diseño de las organizaciones y estructuras políticas mencionadas se deduce que había dos conceptos clave del régimen político naserista que chocaban o no coincidían con los de representación y participación según su formulación liberal. Uno de ellos lo componía la pareja exclusión/inclusión; el otro es el concepto, siquiera el más vago y general, de *corporativismo*. El carácter autocrático, jerárquico y monopolista de la configuración y el funcionamiento de las organizaciones monopolísticas mencionadas pone efectivamente en entredicho, más allá incluso de su carácter inclusivo/exclusivo, los conceptos de representación y participación asociados a las democracias liberales. Sin embargo, estos no son los dos únicos aspectos en los que el sistema político naserista no era conforme al modelo político liberal, sino que aquel excluía también el individualismo - y la consecuente pluralidad ideológica- como principio básico de determinación de la representación y la participación políticas, al permitir las únicamente a través de la adscripción a un colectivo socioeconómico.

No obstante, si, como señaló Ayubi, al analizar el régimen naserista (al igual que otros regímenes, y en particular otros regímenes árabes de la época), “el concepto inclusión/exclusión resulta más útil que los conceptos, más restringidos, de representación y participación, puesto que tiene una implicación tanto socioeconómica como política” (Ayubi 1998: 62), y si el de *corporativismo* es un concepto que debe ser ineludiblemente asociado al de inclusión/exclusión, ello no se debe única, ni tal vez principalmente, al carácter de las organizaciones propiamente políticas del régimen naserista, sino al conjunto de medidas que adoptó para regular sus relaciones con amplios sectores de la sociedad, medidas que se materializaron en la promoción, el control o la cooptación de asociaciones, organizaciones o estructuras de representación de aquella en base a criterios socioeconómicos o de otro tipo (religioso), pero nunca, sobre el papel, políticos. La inclusión/exclusión operó, según las circunstancias, frente a los grupos socioeconómicos o de otro tipo en su conjunto o dentro de ellos, pero en todo momento quedó claro que únicamente se permitirían las agrupaciones distintas a las políticas o ideológicas.

Corporativismo frente a individualismo

Entre las numerosas definiciones del concepto de *corporativismo*, la de Schmitter reproducida por Bianchi, uno de los autores que se han servido de él para analizar el caso egipcio, nos parece perfectamente válida para el caso naserista:

“El corporativismo puede ser definido como un sistema de representación de intereses en el que las unidades constituyentes son organizadas en un número limitado de categorías singulares, impuestas, no competitivas, jerárquicamente ordenadas y funcionalmente diferenciadas; unidades que son reconocidas o autorizadas (cuando no creadas) por el Estado y a las que se garantiza deliberadamente el monopolio de la representación dentro de sus categorías respectivas a cambio de aceptar ciertos controles en la selección de sus dirigentes y en la articulación de las demandas y apoyos”⁶⁸.

A la definición anterior, cabe añadir las matizaciones de Ayubi, que señaló cómo el corporativismo no solo no presupone la supremacía del individuo, sino tampoco la de la clase, y cómo su “efectividad” (la expresión es nuestra) se da en sociedades en la que el individualismo teórico y su difusión, aceptación e interiorización ideológicas son débiles, y en las que las clases se encuentran en un estado de formación embrionario, sin una conciencia de clase suficientemente extendida, y por ende sin una organización suficientemente poderosa para expresarse y actuar en tanto que clase (Ayubi 1998: 62-64).

En la concepción capitalista liberal, el individuo se supone dueño de derechos, libre y liberado de obligaciones frente a su grupo “primario”, y por tanto interviniendo en todo tipo de relaciones sociales por su libre voluntad y de un modo contractual. En la sociedad egipcia de mediados del siglo XX, como en tantas otras de la época, el individualismo como concepto teórico-jurídico y como hecho social había recorrido un corto camino, de la misma manera que era corto el camino recorrido por el modo de producción (capitalista) que consagró el individualismo como una categoría principal en el terreno de lo económico, lo político y lo social⁶⁹. Cada vez más individuos eran “arrancados” -por utilizar la expresión de Ayubi-, o se diferenciaban de sus grupos “primarios” o “primordiales”, a causa de las transformaciones socioeconómicas, pero incluso los que lo hacían no contaban con la protección jurídico-intelectual del individualismo ni con la de una neta estructura de clase que sustituyera a las antiguas solidaridades. De la misma manera, eran débiles tanto la concepción de que el Estado debiera derivarse de una “relación contractual” entre aquel y los individuos, como la que de la clase fuera la categoría de agrupación mediante la cual aquellos debieran defender sus intereses. Y, por el

⁶⁸ Philippe C. Schmitter: “Still the Century of Corporatism?” *Review of politics*, 36, nº1 (enero de 1974): 85-131. Citado por Bianchi (1986: 429).

⁶⁹ Sobre el nacimiento del individualismo en tanto que componente ideológico en la tradición cristiana y en el contexto europeo y norteamericano, con breves menciones a la aparición del liberalismo mercantilista, puede consultarse a Louis Dumont (1987). *Ensayos sobre el individualismo*. Alianza Universidad, Madrid.

contrario, otra serie de “colectividades”, “comunidades” o agrupaciones, incluidas las socioprofesionales, eran concebidas como el ámbito natural u orgánico desde el que relacionarse con el Estado, a través de una serie de “intermediarios” (Ayubi 1998:62-64).

Control político y compensación socioeconómica

Bajo el régimen naserista, la USA aparece como la expresión formalmente política del corporativismo, pero en realidad este se manifiesta más explícitamente en la relación del régimen, a través de la USA, pero también del Estado, como veremos, con los diferentes colectivos, a través de una serie de organizaciones “intermediarias”. A algunos de dichos colectivos se les impuso la incorporación formal al Estado de sus órganos de representación u organización (sindicatos obreros, instituciones religiosas islámicas); a otros se les ofreció o permitió el mantenimiento de sus estructuras organizativas o de representación (asociaciones profesionales) o el privilegio de algunas (iglesia copta); pero en todo caso la relación entre el régimen y el Estado y dichas organizaciones se regiría por lo que Ayubi llama el “principio de compensación”, según el cual un nivel superior de inclusión socioeconómica recompensaba por la ausencia de participación política propiamente dicha. El régimen naserista, como hemos visto, al igual que otros regímenes contemporáneos a él de Oriente Medio, pudo, en sus primeras etapas, como dice Ayubi, “permitirse el lujo” de desarrollar políticas económicas básicamente inclusivas, gracias a la capacidad de un Estado “relativamente autónomo”, no dominado por la fuerzas de y con acceso a la obtención de rentas propias (nacionalizaciones, Canal de Suez, etc.), de incrementar la industria nacional, el empleo público y los servicios sociales. La dependencia de esas rentas, y su disminución, debilitaría al régimen naserista a partir de 1966-1967, y llevaría a la enmienda de las políticas del régimen (Ayubi 1998: 62, 65).

El régimen naserista ofrecía la inclusión y proponía la colaboración subordinada frente a la alternativa de la exclusión y el conflicto, y las diversas organizaciones eran empujadas a optar entre posturas y dirigentes que cuando menos contemporizaran con el régimen u otras que les llevaran al enfrentamiento, y en última instancia a la congelación de sus actividades o a la imposición de dirigentes cooptados. Algunos colectivos socioeconómicos, como la burocracia o el aparato administrativo, no precisaron, ni desde el punto de vista del régimen ni desde el de sus miembros, de esas organizaciones intermediarias, pero ello fue así porque por su propia naturaleza y desarrollo se encontraban incorporados al Estado de raíz y eran particularmente beneficiados por el régimen.

3.2 LA BUROCRACIA: PILAR DEL ESTADO, MALEABLE PILAR DEL RÉGIMEN

Probablemente fue la ausencia de una auténtica organización política del régimen naserista, con unos principios ideológicos claros e interiorizados desde un principio, así como de un sustrato de clase -entendida esta en términos clásicos- hegemónico y bien definido (y la voluntad de que dicha hegemonía no se produjera), lo que le llevaron a apoyarse de manera fundamental en la burocracia del Estado, y lo que a su vez condujo naturalmente al sobredimensionamiento del papel político y social de aquella. El régimen naserista contemplaba la Administración y el sector público como instrumentos de cambio y de inclusión “preventiva” en su régimen (الأيوبي 1981: 62-63; Waterbury 1983: 260).

El “núcleo duro” inicial del régimen naserista, ya fuera por necesidad o por esa voluntad inclusiva, no mostró ninguna desconfianza hacia los orígenes sociales y las inclinaciones ideológicas de los trabajadores de la Administración del Estado, y esta, a pesar de la política inicial de “depuración”, no conoció relevos sustantivos en los cargos más que en los altos escalones de los “ministerios de soberanía” (Interior, Ejército, Asuntos Exteriores). El enfoque de la política de selección de elites fue antes tecnocrático que ideológico, y cuando el régimen se orientó hacia la selección de “gente de confianza” en lugar de tecnócratas, lo hizo sobre la base de las relaciones personales y no desde presupuestos ideológicos (الأيوبي 1981: 62-63).

Con el enorme desarrollo del aparato burocrático en la primera mitad de los 60 comenzó a evidenciarse la formación de lo que el propio Násir llamó “la nueva clase”, compuesta por los directores y tecnócratas de los muy diversos departamentos de la administración y el sector público, aunque en términos socioeconómicos técnicos podría rechazarse la denominación de clase tanto para la burocracia de Estado en general -a causa de su estratificación económica y social, y en consecuencia por la ausencia en ella de una comunidad de objetivos e intereses-, como para sus estratos superiores, porque estos ocupaban y mantenían diversas posiciones objetivas frente a los medios de producción, así como respondían a inclinaciones ideológicas variadas, aunque estas no contradijeran la política general del régimen.

Para hacerse una idea del peso numérico, social y político de la burocracia de Estado en general, conviene ampliar los datos que hemos dado anteriormente. Entre 1952 y principios de los 70, el aparato del Estado pasó de tener varias decenas de “unidades básicas” a contar con más de 1600⁷⁰. Los empleados en la administración general (sin contar los trabajadores en el sector industrial, Ejército, policía, maestros y médicos) pasaron de 350.000 a 1.2 millones. Los sueldos de esos empleados se incrementaron en un

⁷⁰ Se trata de 29 ministerios, 116 corporaciones o instituciones generales (مؤسسات عامة و هيئات عامة), 381 compañías (empresas) generales (شركات عامة), 6 aparatos independientes, 120 consejos urbanos y 1000 consejos rurales (الأيوبي 1981: 88).

102% en el conjunto del periodo, y en un 168% entre 1962 y 1966, en proporción muy superior a los ingresos del Estado, que se incrementaron en un 68% (الأيوبي 1981: 89-91). Entre estos empleados, Waterbury distinguió cuatro “estratos”: uno, el más elevado, formado por unos pocos miles de personas; un segundo estrato que las estadísticas oficiales estimaban en 1976 formado por unas 170.000 personas; y los dos siguientes, que incluirían a más de 1 millón de personas. Para este autor, únicamente los dos primeros estratos son relevantes de cara a considerar cuáles y cómo eran las elites del régimen naserista, y ello en la medida en que los integrantes del segundo estrato, más allá de una cierta influencia, tenían posibilidades de promoción e integración en el primero, que acogía a la auténtica elite. Las posibilidades de promoción de los otros dos estratos eran escasas, y únicamente cabe considerarlos, con prudencia, como relativamente satisfechos con la seguridad en el empleo y la promoción social ya adquiridas (Waterbury 1983: 248-249).

En cuanto a la adscripción profesional y por nivel de educación de los empleados públicos, cabe destacar que, según los datos oficiales, la práctica totalidad de los ingenieros trabajaban en él, y también lo hacían el 99% de los científicos, el 95% de los ingenieros agrónomos y el 87% de los médicos. En lo que respecta a las elites de la administración, en 1967 estaban formadas en un 26% por licenciados en derecho, en un 24% por economistas y licenciados en comercio, y en un 22% por ingenieros, mientras que los militares constituían el 2%, y a ellos habría que añadir un número no determinado de oficiales de policía (الأيوبي 1981: 93-95).

En lo que toca a los orígenes sociales familiares de los grandes funcionarios, el estudio citado de Ayubi ofrece resultados muy dignos de atención, pues revelan que la mayor parte de ellos eran de los mismos orígenes sociales que las elites de la época monárquica. Así, en los 60 un tercio de los grandes funcionarios eran hijos de grandes funcionarios, lo que pese a ser la “reproducción endógena” de los grandes funcionarios un fenómeno observable en todos los países, constituye una proporción muy elevada. No obstante, la proporción de hijos de grandes terratenientes había disminuido, incrementándose la de hijos de hombres de negocios y profesionales. En cuanto a la situación económica de las familias de procedencia, un 80% de los grandes funcionarios de 20 a 30 años provenían de las clases alta y media de la sociedad, de los que un 20% procedían del 1% de las clases más acomodadas. Finalmente, tan solo un 10% de los altos funcionarios provenían de lo más bajo de la escala social. En definitiva, aunque las elites se renovaran en cuanto a su formación y competencias, incrementándose su formación y orientándose esta a los terrenos técnicos y científicos, en detrimento de las humanidades, la movilidad social en el acceso a ellas fue menor, a pesar de la retórica y las medidas socialistas, de lo que lo fue, por ejemplo, en Estados Unidos en la misma época, conclusión que hace pensar por un lado en la pervivencia de las prácticas clientelares y por otro en una voluntad inclusiva del régimen naserista (1981: 96-97).

Como ya hemos señalado, la política inclusiva del régimen naserista se manifestó no solo en el terreno social, sino también en el ideológico, y así, el régimen acogió en su seno a tecnócratas, nacionalistas, socialistas, liberales, panarabistas y personas de marcada orientación religiosa conservadora, siempre que no contradijeran abiertamente sus políticas, hasta el punto de que incluso las políticas “socialistas” impulsadas desde arriba fueron aplicadas, en la mayoría de los casos, por “no socialistas”.

Esta aparente paradoja se explica, por un lado, por la tecnicidad y cientifismo de los que se vio imbuida desde arriba la política durante este periodo, que, al margen de que algunos sectores del régimen se inclinaron más hacia el estatismo-socialismo y otros hacia la cooperación con el capital privado, derivaron en un elitismo tecnócrata predominante que despreciaba la movilización política y la democracia, aunque hubiera quienes apostaban por una economía no socialista o por una economía socialista con participación política popular. Por otro lado, tal vez la mayoría de los miembros de la alta burguesía de Estado fueran principalmente -como señaló Waterbury- “carreristas” que, sin embargo, “en la medida en que sus carreras dependían de llevar a cabo programas y proyectos que produjeran un cambio estructural en la economía y la sociedad, pueden ser también considerados como modernizadores comprometidos” (Waterbury 1983: 251).

Ya a principios de los 60 el propio Násir hizo algunas alusiones en sus discursos a la formación de esta “nueva clase” de burócratas y tecnócratas, y advirtió de las dinámicas autónomas que podía desarrollar. Sin embargo, cuando en el Congreso de Delegados de 1966 se planteó la cuestión de que dicha clase se estuviera transformando en una “facción explotadora” (فئة مستغلة) que buscara su propio beneficio y que obstaculizara el desarrollo económico y democrático, el propio Násir y otros dirigentes descartaron tal interpretación. Tras la derrota de 1967, cuando una parte de la sociedad comenzó a señalar como responsables de la derrota y de la crisis a las elites, y al anidamiento en ella de los intereses personales, el clientelismo y la corrupción, el régimen, en su propia autocrítica, atribuyó los errores a elementos técnicos, y no intrínsecamente humanos, y, aunque las reformas emprendidas después afectarían a las personas (por ejemplo en el Ejército), estas fueron relevadas por su incapacidad o ineficiencia, sin que se pusiera en cuestión los aspectos ideológicos, morales o sociales latentes tras aquellas. No obstante, nada evidenciaría mejor el solo parcial anclaje de las muchas de las ideas naseristas entre las elites del régimen que la facilidad con la que muchas de estas se adaptaron, si no empujaron, el cambio de políticas promovido por Sadat e incluso en los dos últimos años de mandato de Násir.

En definitiva, a diferencia de otros segmentos sociales, la burocracia de Estado en general resultó incorporada al régimen y al Estado por su mera adscripción laboral, y nunca manifestó la menor muestra de contestación, y cabe deducir que su adhesión al régimen fue tan amplia como lo fue en el resto de la sociedad. Entre sus elites, sin embargo, más los acontecimientos posteriores que los que se produjeron durante el

mandato de Násier evidenciaron que las orientaciones políticas eran muy diversas, dentro del común deseo de no renunciar a la posición del Estado, y a la posición de las propias elites dentro del Estado, para hacer avanzar los proyectos propios, independientemente de en qué medida estos respondieran a una visión política global o a intereses más o menos personales.

3.3 LOS TRABAJADORES INDUSTRIALES Y SU SINDICATO ESTATAL

Como la mayoría de los sectores de la sociedad, los trabajadores industriales manifestaron prontamente su apoyo al golpe de Estado de 1952. Ya hemos señalado en el capítulo I 1.2 que el sindicato de orientación marxista HADETU contaba con varios de sus miembros y simpatizantes (Siddiq, Hamruch, Mohai Eddín) entre los Oficiales Libres y había mantenido contactos también con Násier, por lo que no es de extrañar que pensara que el nuevo poder apoyaría sus ideas y objetivos. Sin embargo, también el Comité Fundador de la Federación General de Sindicatos de Trabajadores Egipcios (CFFGSE), que vehiculaba desde 1951 los esfuerzos por crear una federación de sindicatos egipcios, e incluía también movimientos sindicales de otras tendencias ideológicas, a pesar de haber sido impulsado por HADETU⁷¹, emitió el 31 de julio de 1952 un comunicado en el que manifestaba su apoyo al movimiento del Ejército en tanto que “expresión de las esperanzas del pueblo”, en particular las nacionalistas, e “instrumento para alcanzar la justicia social” (Beinin & Lockman 1998: 420).

Sin embargo, tanto el CFFGSE como HADETU, al tiempo que mantenían su apoyo general al nuevo régimen, no dejaron de reclamar la restauración de las libertades políticas y el pluripartidismo, hasta el punto de que el movimiento sindical se mostraría dividido en la crisis de marzo de 1954 entre Naguib y Násier. Previamente, los sucesos de Kafr al-Dawwar, a raíz de los cuales fueron condenados a muerte dos trabajadores, parecieron ser una advertencia a aquellos, y en particular a los sectores comunistas, de que no pretendieran ir por su cuenta y demasiado lejos en la vía de la revolución. Aunque la adscripción comunista de los promotores de las protestas nunca pudo ser probada, estos sucesos, tomados como una excusa, según Beinin y Lockman, por los abundantes elementos conservadores de los Oficiales Libres, dieron la señal de salida para la persecución del comunismo no solo en el terreno sindical sino en todos los terrenos de la

⁷¹ El Comité Fundador de la Federación General de Sindicatos de Trabajadores Egipcios (اللجنة التأسيسية للاتحاد) (العام لنقابات عمال مصر), según el nombre final adoptado en enero de 1952, había comenzado sus trabajos un año antes incluyendo en su denominación el adjetivo “preparatorio”. A finales de diciembre de 1951 agrupaba a 104 secciones sindicales y 65.000 trabajadores, lo que representaba el 50% de todos los trabajadores sindicados y al 20% de las secciones sindicales, y su representatividad seguiría aumentando en los meses siguientes. En enero de 1952 el CFFGSTE sería acusado infundadamente de participar en el incendio y pillaje de El Cairo, y muchos de sus líderes detenidos (Beinin & Lockman 1998: 409-417).

vida política, prohibiendo todas las organizaciones sindicales, las huelgas y las protestas laborales, y deteniendo a sus responsables, en los últimos meses de 1952. A pesar de estos acontecimientos, tanto HADETU como el CFFGSTE siguieron apoyando al régimen militar⁷².

Entre 1952 y 1957, el régimen naserista desoyó las demandas de los líderes sindicales, purgados de los elementos comunistas y con los que mantenía frecuente contacto, de que consintiera en la creación de una federación de sindicatos egipcios, al tiempo que procedía, como hemos mencionado, a la revisión de algunas leyes laborales, estableciendo por ley las vacaciones pagadas, los subsidios por enfermedad o baja y las primas por alimentación y transporte, y persiguiendo los despidos punitivos por activismo sindical.

Como en tantos otros terrenos, la Conferencia de Bandung y el acercamiento de Náser al bloque socialista trajeron un cambio de política en el terreno sindical. Según Posusney, fueron el contacto con la Yugoslavia de Tito, y la incomodidad de Náser ante el subdesarrollo contrastado de las políticas laborales en Egipto, los que llevaron finalmente a este a aceptar -venciendo las resistencias del aparato de seguridad- la creación de una federación general de sindicatos, que vería la luz el 30 de enero de 1957. Sin embargo, su consentimiento no llegaría sin importantes contrapartidas por parte de los líderes sindicales, la principal de las cuales fue el derecho del Gobierno a elegir a los dirigentes del sindicato, y la prohibición de difundir ideas, información y directrices “desde abajo”, sin la aprobación de la dirección. Entre 1957 y 1961 se hizo patente, advertencias y arrestos mediante, que el régimen no iba a consentir que los sindicalistas se salieran de ese acuerdo de principios (1997: 60-61).

En enero de 1961 la federación adoptó su nombre definitivo, Federación General de Sindicatos de Trabajadores de Egipto (FGSTE, الاتحاد العام لنقابات عمال مصر), en realidad una confederación que agrupaba a 59 de las 65 federaciones industriales creadas virtud del Código Unificado del Trabajo (ley 91) aprobado en 1959. Había nacido el corporativismo en el terreno sindical, corporativismo que, como insistió en señalar Posusney, fue el resultado de un pacto, y no de una imposición, y que se saldó con varios resultados paradójicos: uno, que los activistas de izquierdas, que habían planteado e impulsado el proyecto de la confederación desde los años anteriores a 1952, se vieron completamente

⁷² Los sucesos tuvieron lugar en la mencionada ciudad del Delta en la fábrica del grupo Misr de Hilado y Tejido, estrechamente relacionado con la Monarquía y de capital parcialmente británico, el 13 de agosto de 1952, cuando los trabajadores movilizados por sus derechos laborales y contra la dirección de la compañía, y cantando en todo momento su apoyo a Naguib y a la revolución, fueron abordados por un destacamento policial y militar. Por razones no esclarecidas, se produjo el enfrentamiento, que se saldó con la muerte de dos soldados, un policía y cuatro trabajadores. Junto a una docena de penas de cárcel para algunos de sus compañeros, Mustafa Jamís y Mohammed al-Baqai fueron condenados a muerte y ejecutados el 7 de septiembre, sin que se probara realmente -ni entonces ni hasta hoy- su responsabilidad en los hechos ni su pertenencia a organizaciones comunistas (Beinin & Lockman 1998: 421-431).

excluidos de la organización cuando se formó; otro, que dichos activistas habían actuado con el objetivo de fortalecer la posición de los trabajadores frente a los empleadores y el Estado, pero los gobernantes solo accedieron a permitir la formación de la confederación cuando se convencieron de que esta facilitaría la infiltración y subordinación de los sindicatos a aquel; finalmente, una tercera paradoja se evidenció poco después de la formación de la FGSTE: los trabajadores parecieron perder interés por los sindicatos, pues el número de afiliados a ella descendió en un 25% entre 1956 y 1959⁷³.

El desinterés de los trabajadores por la organización sindical no haría más que incrementarse a medida que el régimen naserista se anticipó a los líderes sindicales legislando a favor de los trabajadores, en particular tras la adopción de la orientación “socialista”. Junto a las mejoras en la jornada de trabajo, la cobertura social y los salarios que ya hemos mencionado en el capítulo I 2.1, hay que destacar que en 1961 la ley 114 impuso la presencia de trabajadores en los consejos de dirección de todas las empresas del sector público: un obrero y un administrativo debían formar parte de los consejos de 7 miembros, representación que sería ampliada en 1963 a 4 trabajadores en consejos de 9 personas.

En definitiva, a cambio de sustanciales ganancias materiales, los trabajadores hubieron de renunciar a todo sindicalismo o labor política independientes, e implicarse en la tarea de impulsar la productividad y el desarrollo. El Pacto Nacional de 1962 y Náser expresaron, respectivamente, así, este cambio de orientación en la función de los sindicatos:

“[Los sindicatos han de] convertirse en la vanguardia directora del desarrollo social y económico (...) y ejercer sus responsabilidades mediante contribuciones serias a la eficiencia intelectual y científica, y por ella al incremento de la productividad en el trabajo” (Pacto Nacional⁷⁴)

“Nuestra sociedad está en el proceso de pasar de una sociedad feudalista/capitalista a otra socialista, y los métodos y tácticas que los sindicatos utilizaron en el pasado, en la sociedad capitalista, tienen que cambiar. De otra manera, nos sumiremos en contradicciones y conflictos” (Náser)⁷⁵.

Las palabras citadas de Náser fueron pronunciadas durante el congreso organizado en la primavera de 1962 para debatir el texto del Pacto Nacional, congreso que fue retransmitido en directo por la televisión. En una de sus sesiones, el presidente de la FGSTE, Anwar Salama, y otros dirigentes sindicales, presentaron una serie de demandas de los trabajadores. Cuando Salama concluyó, Náser, con un enfado manifiesto, respondió:

⁷³ De 450.029 miembros de sindicatos se pasó a 341.169 afiliados a la FGSTE (Posusney 1997: 60-69).

⁷⁴ Citado por El Sabbagh, Z.N. (1977). *An Analysis of the Impact of the Political Changes in Labor Unions In Egypt*. Tesis doctoral. North Texas State University. Reproducido por Posusney (1997: 73).

⁷⁵ Citado por Amin 'Izz Eddín: *Tarikh al-Tabiqah al-'Amilah al-Misriyah Mundhu Nushu'ha hata sana 1970*. Cairo: House of the Arab Future, 1987, págs. 943-944. Reproducido por Posusney (1997:73-74).

“Los trabajadores no piden, nosotros les damos”, y a continuación enumeró todas las leyes favorables a los trabajadores que el régimen naserista había promulgado, y señaló que la participación en los beneficios y en los congresos de administración de las empresas públicas, y la subida del salario mínimo se habían establecido sin que se hubiera producido ninguna petición de los trabajadores⁷⁶. A pesar de esta reconvencción pública, muy poco después Násir situó a Salama a la cabeza del primer Ministerio de Trabajo (los asuntos laborales antes dependían del Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo), y si Salama no siguió siendo al mismo tiempo presidente de la FGSTE fue porque lo rechazó, pero en lo sucesivo la misma persona desempeñaría ambos cargos, con lo que se materializaría la más alta expresión del corporativismo del Estado egipcio. La actitud paternalista de Násir en el congreso mencionado y tras él (reconviniendo y no castigando al dirigente impertinente), y ese segar la hierba bajo los pies de los sindicatos que suponían las mejoras ofrecidas a las que hacía referencia, reflejan adecuadamente el tenor de las relaciones entre el régimen naserista y los trabajadores.

A partir de 1963-1964 el control del FGSTE por el régimen fue, si cabe, mayor, pues se requirió que todos los candidatos a los puestos directivos de la confederación fueran miembros de la USA, con lo que esta podía excluir a cualquier candidato privándole de su condición de miembro en ella. El control de la Confederación por la USA posibilitó que se extendiera por la jerarquía sindical la influencia de los llamados “centros de poder” formados en aquella, en el Ejército, los servicios de información, la burocracia e incluso la prensa.

3.4 LOS SINDICATOS PROFESIONALES

Aunque el primer colegio o sindicato profesional⁷⁷ egipcio oficial fue formado en 1912, cuando se constituyó el Sindicato de Abogados, y los siguientes no llegarían hasta la década de los 40 del siglo XX, las asociaciones profesionales eran una realidad mucho más antigua en Egipto, remontándose sus ancestros al sistema de gremios existente desde la época otomana. Como señaló Fahmy, esta precisión es pertinente porque dicho sistema mostraba sorprendentes semejanzas con el que sería el devenir de los sindicatos profesionales modernos, pues los gremios estaban presididos por jeques que controlaban y supervisaban a los miembros del grupo, y tenían la autoridad oficial para expedir permisos profesionales y garantizar que las leyes y disposiciones de los gobernantes eran seguidas estrictamente. Así mismo, eran responsables de las conductas inapropiadas de los

⁷⁶ *Ob.cit.* Págs 944-945.

⁷⁷ Dado que en Egipto las agrupaciones profesionales reciben el mismo nombre genérico (نقابة) que los sindicatos obreros, optamos por llamarlas también “sindicatos”, a pesar de que su organización y el trato recibido del poder se diferencian de los de aquellos.

miembros del gremio, y de proveer de empleados y servicios tanto al Gobierno como a los empleadores privados (Fahmy 2002: 99).

A finales del siglo XIX y principios del XX surgieron las primeras asociaciones de profesionales “modernas” (de abogados, médicos, profesores, periodistas e ingenieros), pero, con la notable excepción de los abogados, por su singular participación en la administración y el Gobierno, y en cierta medida de los periodistas, hasta los años 40 los únicos grupos de interés que tuvieron estructuras de representación e influencia significativas fueron los de los terratenientes, industriales y hombres de negocios⁷⁸. En los años 40 los sindicatos oficiales de médicos (1940), periodistas (1941) e ingenieros (1946) se unieron al de abogados, y bajo el régimen naserista la mayor parte de las profesiones contarían con sus propios sindicatos, si bien los cuatro citados serían los más significativos por peso social y político hasta hoy.

El régimen naserista consiguió incorporar a los colectivos profesionales, en particular a partir de los 60, a su “corporativismo de Estado”, en el cual, básicamente, los beneficios económicos y sociales eran intercambiados por la sumisión política. Hay que recordar que el acceso gratuito a la educación a todos los niveles, se vió acompañado a partir de 1962 del compromiso del Gobierno de dar un empleo público a todo titulado superior, y así, entre 1952 y 1969 el número de graduados universitarios se multiplicó por 386 (315 en artes y humanidades y 381 en ciencias aplicadas), mientras que del graduados en escuelas superiores lo hacía por 873 (Ayubi 1991: 173-175). El acceso a la educación superior abrió el paso a una gran movilidad social, con empleos garantizados en condiciones bastantes satisfactorias, y el régimen naserista permitió que los profesionales se organizaran, y en gran medida se autorregularan, permitiendo una considerable diversidad dentro de sus organizaciones, y atendiendo a sus demandas, siempre dentro de un control político final por parte del régimen. Sólo en una ocasión, en el marco de la crisis con Naguib, en marzo y abril de 1954, el régimen recurrió a la disolución de, respectivamente, el indicato de bogados y el de periodistas. Posteriormente, la disolución quedó como una amenaza, unida a otras advertencias en forma de interrogatorios y detenciones de sindicalistas, mientras que el control general se ejercía por la necesidad de que los candidatos a la dirección de los sindicatos fueran miembros de la UN y luego de la USA, y cuando era necesario mediante la suspensión de las elecciones, la imposición de candidatos o la prohibición de celebrar asambleas. No obstante, hay que destacar que, pese a estos pesares, el régimen permitió la existencia de los sindicatos, de sus elecciones y de su libertad de expresión hasta cierto punto.

⁷⁸ En 1920 fue creado el Banco Misr, entidad formalmente no profesional pero que vehicularía en gran medida los intereses de terratenientes e industriales, en 1921 los grandes propietarios agrícolas crearon el Sindicato General Egipcio de la Agricultura y en 1922 fue fundada la Federación Egipcia de Industrias (اتحاد الصناعات المصرية, FEI), a la que pertenecían industriales e inversores tanto egipcios como extranjeros. Sobre la formación y el papel de estas asociaciones ver Gobe (1999: 40-46)

Los sindicatos profesionales funcionaban a través de tres órganos de Gobierno centrales o estatales (en el que convergían las diversas secciones configuradas según criterios geográficos). El órgano de base era la Asamblea General (الجمعية العامة), que elegía al Consejo del Sindicato (مجلس النقابة), formado por una veintena de miembros electos, y, finalmente, este estaba presidido por el síndico (نقيب). Probablemente, el Consejo del Sindicato era el órgano más importante en esta estructura, pues reflejaba las distintas tendencias de opinión, e interaccionaba directamente con el síndico, que a partir de mediados de los años 60 fue elegido en general, sobre todo por su capacidad de “mediar”, más que por su disposición a oponerse al régimen; es decir, en muchos casos por su capacidad de ser “un hombre del régimen” y al mismo tiempo defender ante él los intereses de sus representados.

3.4.1 El Sindicato de Abogados. Entre el liberalismo y el exclusivismo

Desde 1918 el Sindicato de Abogados estuvo dominado por la corriente liberal nacionalista representada por el Wafd. La influencia de otras corrientes políticas en la profesión era muy limitada, con la excepción de los partidos relacionados con la Monarquía que ejercieron el Gobierno durante la mayor parte del periodo 1922-1952. Los abogados contaron en dicha época con un singular peso social y político, hasta el punto de que todos los Gobiernos estuvieron compuestos en más de un 50% de abogados de profesión o formación⁷⁹, de tal manera que, según Reid, “el Gobierno de Egipto se convirtió casi en el Gobierno de los abogados, por los abogados y para los abogados”, y según la cita del Alto Comisionado Británico para Egipto que el mismo autor aportó, los abogados constituían “el último elemento al que un Gobierno debería provocar”⁸⁰.

Náser era muy consciente de la amenaza que una organización profesional fuerte de los abogados podía suponer para su régimen y, si no lo era, la crisis con Naguib le dio la prueba de ello. En una reunión de la Asamblea General del sindicato celebrada en marzo de 1954, su entonces síndico (نقيب), Omar Omar, pidió la abolición de los tribunales militares, la disolución del CMR y elecciones parlamentarias. Náser respondió disolviendo el Consejo de Dirección del sindicato, nombrando uno nuevo y prohibiendo las reuniones de su Asamblea General durante cuatro años. Cuando estas se celebraron, en 1958, resultaron

⁷⁹ Es interesante señalar, como lo hizo Fahmy, que la presencia de abogados en las filas de los Hermanos Musulmanes era muy reducida, a diferencia de lo que sucedería a partir de los años 80 del siglo XX. De los 10 miembros de Consejo de Dirección (u Orientación, إرشاد) de la Hermandad a principios de los 50 solo 2 eran abogados: ninguno de los 47 encausados en los dos principales procesos contra ellos en 1949 lo era, y de los 132 procesados en 1954 solo lo eran tres (Fahmy 2002: 111-112).

⁸⁰ Ambas citas provienen de Reid, D. 1974. “The National Bar Association and the Egyptian Politics 1952-1954”. *The International Journal of African Historical Studies*, nº 7, págs. 608-643. Citadas por Fahmy (2002: 112).

en un primer mandato de Mustafa al-Baradei (1958-1962), un antiguo militante del Wafd, y posteriormente del partido de los Saadistas (surgido de una escisión del Wafd, representante de la burguesía y cercano a la Monarquía)⁸¹.

Al-Baradei defendió la autonomía judicial, la formación de un Tribunal Constitucional y el retorno del parlamentarismo. También se opuso a las medidas sociales y económicas del naserismo, que, según Fahmy, “percibía como una amenaza a la calidad de la educación y al bienestar económico de los abogados que trabajaban en el sector privado”. La figura de Al-Baradei parecía, pues, dar parcialmente la razón a Náser, que acusaba a los sindicatos de ser “feudos burgueses anacrónicos en una sociedad socialista” (Fahmy 2002: 113). En 1962, Al-Baradei, actuando como portavoz de varios sindicatos profesionales, atacó la medida recientemente instituida de que en cualquier consejo electo los obreros y campesinos debían constituir el 50% de los miembros. A resultas de esta postura, Al-Baradei fue cesado y sustituido durante dos años, pero consiguió retornar a la dirección del sindicato (1964-1966), desde la que reemprendió sus ataques a las políticas sociales del régimen, siendo destituido de nuevo y sustituido por Ahmad al-Jawaga, que ejerció un primer periodo de mandato (1966-1971). Al-Jawaga, a pesar de haber formado parte de la Vanguardia Wafdistas en su juventud, sería un hombre mucho más dócil que Al-Baradei, o tal vez se adaptaría mejor al papel de intermediario de intereses que en el régimen naserista estarían llamados a desempeñar quienes ocuparon puestos como el suyo: aplacar a sus representados y desactivar toda oposición radical, pero también hacer avanzar sus demandas profesionales al poder. Hay que señalar que hasta 1968 el régimen naserista no consiguió obligar al sindicato, supuestamente abierto a todos los abogados registrados como tales, a aceptar en sus filas a todos los abogados del Estado y del sector público, medida destinada, según algunos de ellos, a controlarlo mejor, y según otros a satisfacer un lógico derecho profesional (Fahmy 2002: 114).

A pesar de que se han señalado las discrepancias y enfrentamientos entre un amplio sector de los abogados y el poder en lo relativo a las libertades públicas y la independencia del poder judicial, a lo largo de todo el régimen naserista, como señaló Abdel Hafiz, la postura general oficial repetida de su sindicato en dicho periodo fue de apoyo al régimen naserista, y en diversas ocasiones, como la de las condenas a comunistas y hermanos musulmanes (1959 y 1965 principalmente) y la de la llamada “masacre de los jueces” de 1969, se echó en falta la adopción por el sindicato de una postura coherente, aunque arriesgada, con sus pretendidas ideas liberales (عبد الحفيظ 2003: 92-102).

⁸¹ Mustafa al-Baradei, además, el padre de Mohammed al-Baradei, que se haría mundialmente famoso en la primera y segunda décadas del siglo XXI, como director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, primero, y luego por su participación destacada en la política egipcia en la última época de mandato de Mubarak e inmediatamente tras ella.

3.4.2 El poder judicial, los jueces y el acceso a la justicia

Los críticos del régimen naserista suelen presentar este como un periodo negro para el Estado de derecho, el imperio de la ley y la independencia del poder judicial. Ciertamente, el régimen naserista se situó en las antípodas de las concepciones liberales del sistema político y de la legalidad, pero ello no significa que no se produjeran avances en la impartición de justicia, especialmente, y más allá de lo que se pueda pensar del contenido de las leyes, en el terreno del acceso a ella. “En lugar de prometer la rendición de cuentas [*accountability*] como un fin, el naserismo prometió un conjunto de mecanismos mucho más efectivos para hacer a la autoridad responsable ante la población” (Brown 2004: 128).

Como hemos señalado, los sucesivos textos constitucionales, en particular a partir de 1956, situaron en manos del Presidente los más amplios poderes, inasequibles al control de un parlamento o del poder judicial. Sin embargo, todos ellos sancionaron sobre el papel la independencia de la justicia, y solo en dos ocasiones el régimen tomó medidas para subyugar a los jueces. La primera se produjo en 1954-1955, tras la crisis de marzo con Naguib, cuando el Consejo de Estado (مجلس الدولة), que desempeñaba la doble función de órgano consultivo del poder ejecutivo en asuntos legales y de tribunal administrativo superior, con jurisdicción en los asuntos en los que el Estado era parte, se mostró renuente a apoyar las orientaciones del nuevo poder que se manifestarían en la Constitución de 1956, o se sintió obligado a respetar el orden legal vigente, a pesar de haber justificado legalmente el golpe de Estado de los Oficiales Libres. El presidente del Consejo, el reputado Abdel Razzaq al-Sanhuri, fue apartado de su puesto, con el pretexto de que había sido ministro antes de 1952, y con él lo fueron otra veintena de magistrados (Brown 2004).

El segundo movimiento contra el poder judicial existente se produjo en 1969, cuando Násir emitió los decretos ley 81, 82 y 83, que dispusieron respectivamente la creación del Tribunal Supremo, la creación del Consejo Supremo de los Cuerpos Judiciales (المجلس الأعلى للهيئات القضائية) y la reorganización de los Cuerpos Judiciales (الهيئات القضائية). El DL-83 llevó al apartamiento de las funciones judiciales de 189 jueces críticos, en lo que se conoce como “la masacre de los jueces”; el DL-82 sustituyó el órgano de gobierno de los jueces existente (el Consejo Supremo de los Jueces, المجلس الأعلى للقضاء) por otro presidido por el propio presidente de la República; y el Tribunal Supremo se convirtió en el órgano judicial supremo, cuyos fallos serían inapelables (عبد المنعم 1994: 22-34).

En la exposición de motivos para la creación del Tribunal Supremo se podía leer:

“Mientras que el Estado ha abordado muchas de las carencias de la legislación, la labor de interpretación y aplicación de los jueces es la que pone en movimiento los textos inertes. El legislador depende, o puede verse entorpecido en su tarea, por los fallos judiciales que se producen tras la interpretación de los textos, especialmente porque la legislación no siempre es capaz de seguir el ritmo de los cambios que se producen en la sociedad con la suficiente velocidad. Esto hace que la tarea de los jueces en la etapa de transición al socialismo sea de la mayor importancia, y les atribuye un papel de

vanguardia y una responsabilidad en la preservación de los valores de la sociedad y sus principios como elementos que complementan su independencia. La independencia del juez no es una característica que la sociedad le confiere, sino que se establece en beneficio de la justicia y del pueblo”⁸².

El texto que acabamos de citar resume la visión del régimen naserista frente a la función de la ley y de los jueces. Las medidas citadas fueron adoptadas en 1969, en las postrimerías del régimen naserista, y tuvieron como detonante una declaración emitida en 1968 por el Club de Jueces (نادي القضاة), la asociación profesional de aquellos, en la que se solicitaba la adopción de reformas liberales por el régimen. Sin embargo, el espíritu de ese texto había estado ya presente en los años anteriores, y los jueces se habían plegado a él como tantos otros sectores de la sociedad. Como señala Brown:

“Los jueces fueron instados a valorar los principios socialistas por encima de la letra de la ley prerrevolucionaria. Esta nueva orientación era empujada por quienes argumentaban que ello serviría a la gente y a sus intereses más eficazmente que un énfasis literal en la ley. La ley debía ser un instrumento del pueblo, y contribuir, más que dificultar, a la realización de sus deseos (...) El viejo énfasis en la independencia judicial era denunciado como un mero expediente para crear una clase judicial gobernante aislada del pueblo (...) A pesar de la dureza con que el naserismo es recordado por sus críticos, y a pesar de la intensidad con la que sus apologistas defienden su actuación en el terreno legal, la situación era bastante diferente en el apogeo del naserismo en los años 60. Los liberales se esforzaron para justificar su resistencia a la legalidad socialista sin repudiarla totalmente. Más que los liberales, los más duros críticos del naserismo fueron quienes defendían que no había ido bastante lejos en sus reformas” (Brown 2004: 134-135).

En el mismo sentido de estas palabras, hay que decir que entre 1955 y 1968, fecha en que el Club de Jueces emitió la declaración citada -tras la derrota de 1967, y las primeras críticas al régimen desde diversos sectores sociales-, los jueces no protestaron nunca, ni colectiva ni individualmente, por el gran número de tribunales o jurisdicciones de excepción que fueron creados bajo el régimen naserista con el fin de desembarazarse de los adversarios políticos o de servir a las políticas más sensibles del régimen. Algunos de dichos tribunales, de los que no formaban parte los magistrados de carrera sino militares con formación jurídica, evitaron casi siempre tener que llevar a cabo los trabajos “sucios” o comprometidos⁸³.

Al hacer balance acerca de la impartición de justicia en la época naserista, es frecuente que se ponga el énfasis en la sumisión de los jueces, en las protestas de estos en 1968, y en la posterior “masacre” de los críticos, así como en el mal funcionamiento.

⁸² El texto procede de `Abdallah Imam, *Madhbahat al-Qada* (El Cairo: Maktabat Madbuli, 1976), págs. 136-137. Citado por Brown (2004: 136-137).

⁸³ Estas jurisdicciones fueron nueve, entre las que cabe destacar el Tribunal de la Revolución, los tribunales militares, los Tribunales de Seguridad del Estado, el Tribunal de la Reforma Agraria, los Tribunales de Excepción, y las atribuciones especiales del Presidente de la República (عبد المنعم 1994: 46-56).

Brown (2004: 138-139), sin embargo, ofrece un punto de vista complementario, y en muchos aspectos contradictorio, a este, que se resume en que “el naserismo hizo los tribunales mucho más accesibles a la mayoría de los egipcios”, y que ello acarreó dificultades en su funcionamiento y la irritación de algunos perjudicados por medidas que beneficiaron a la mayoría. Los cambios legislativos introducidos por el naserismo dieron a los trabajadores y a los arrendatarios mayores derechos de los que disponían antes, cuando estaban sujetos a los despidos, la privación arbitraria de las tierras arrendadas, las subidas de precios arbitrarias en los arrendamientos, etc. Pero, junto a dichos cambios legislativos, se hizo mucho más fácil para los egipcios acudir a los tribunales: los trabajadores que demandaban a sus empleadores no tenían que pagar tasas judiciales, y las tasas de otros procedimientos, vigentes desde los años 30, nunca fueron ajustadas al incremento de la inflación, hasta el punto que resultaba mucho más sencillo acudir a la justicia a los miembros de la clase trabajadora que a otros sectores más acomodados. Por otro lado, las escuelas de Derecho fueron abiertas a un enorme número de estudiantes, y el considerable incremento de los licenciados favoreció aun más el acceso en condiciones razonables a la asistencia legal. Todo esto originó la masificación y sobrecarga de todo el aparato legal, tanto en el número de sus profesionales como en el de quienes accedían a él, algo que fue objeto habitual de crítica por parte, a su vez, de algunos profesionales y clientes. Brown comparó esta actitud con la de quienes se quejaban de que, antes de la revolución, las “zonas bien” de El Cairo (Garden City, la Cornisa del Nilo, la calle Qasr al-Nil) estaban tranquilas, despejadas y limpias, pobladas solo por pachás y profesionales, siendo bienvenidas en ellas, de las personas que llevaban *galabeyya* (el vestido popular masculino egipcio), tan solo quienes eran sirvientes, porteros y otros empleados; mientras que con la llegada del régimen naserista las clases populares accedieron a dichos barrios -aunque no fuera como residentes, sino como paseantes o proponentes de mercancías- masificándolos y modificando su aspecto.

3.4.3 El Sindicato de Periodistas

Tras diversos intentos llevados a cabo desde principios de siglo, en los que se constituyeron asociaciones de editores y un sindicato no oficial presidido por Yibril Taqla, propietario de *Al-Ahram*, la ley 10 de 1941 instituyó el primer sindicato de periodistas. Sin embargo, la ley decretaba que un 50% de los miembros del sindicato habían de ser propietarios de periódicos o sus representantes, y el otro 50% jefes de redacción o redactores. El dominio de los propietarios en el primer consejo provisional del sindicato, que además fue nombrado por el Gobierno, y la defensa principalmente de sus intereses, llevó pronto a su enfrentamiento con los redactores, que se mantuvo en la primera contienda electoral (المير غني 2005:16-19).

En marzo de 1954 se produjo el primer enfrentamiento entre el régimen y los periodistas, cuando un congreso de abogados y periodistas emitió una declaración solicitando la suspensión de las leyes de excepción y la liberación de los prisioneros políticos, y el consejo del sindicato fue disuelto por el régimen y sustituido por un comité encabezado por Salah Salem.

En 1955 se promulgó una ley reguladora del sindicato (ley 185), que antes se regía, más allá de lo establecido respecto a la composición de su consejo, por sus propios reglamentos. La nueva ley excluyó de la composición del sindicato a los propietarios de periódicos y agencias, aunque fueran simples accionistas. Por lo demás, quedó abierto a todos los periodistas profesionales y asalariados⁸⁴.

En contrapartida a esta apertura del sindicato, la nueva ley pretendía que aquel ejerciera un papel censor y disciplinario sobre sus miembros mediante la aplicación del “código de honor” relativo a la ética de la profesión. Sin embargo, los miembros del sindicato se resistieron a ello en diversas etapas. Antes de 1955 el presidente del sindicato fue siempre una figura de la oposición (próxima al Wafd o al Partido Nacional), mientras que el consejo del sindicato estaba dominado por afiliados a los partidos más conservadores. No obstante, tras 1955 la situación se invirtió: el Síndico era una persona próxima al régimen, y el Consejo representaba a diversas facciones que en ocasiones superaron a la que apoyaba al Gobierno (Fahmy 2002: 121).

A finales de los 50, la oposición logró situar a Hafez Mahmud, un ex miembro del palaciego Partido Constitucional a la cabeza del sindicato, y dominar así mismo su consejo. La confrontación llegó a su límite cuando el consejo del sindicato votó en contra de la pretensión gubernamental de situar tanto el sindicato como el conjunto de la actividad de la prensa bajo el control de la UN (ley 156 de 1960) y luego la USA, a la que deberían pertenecer todos los periodistas que desearan ejercer. Mahfuz fue cesado, y en 1962 y 1963 se prohibió que se celebraran las asambleas generales del sindicato y sus elecciones. En 1964 se estableció dentro de la USA el Consejo Superior de la Prensa. En 1965, el sindicato manifestó de nuevo su oposición a esta orientación en su asamblea general, y de nuevo se suspendieron las elecciones en 1965 y 1966. En 1967 fue elegido un síndico de compromiso entre el régimen y sus opositores, Ahmad Bahá Eddín, pero en 1968 el sindicato disgustó de nuevo al régimen, al apoyar las manifestaciones estudiantiles de protesta tras la derrota de 1967. En las elecciones siguientes, el régimen consiguió que su candidato, Kamal al-Zuhari, se impusiera. Al-Zuhari contribuiría a que viera la luz, con el consentimiento del sindicato, la ley nº 76, promulgada en septiembre de 1970, el mes de la muerte de Náser, que abolió la Ley del Sindicato de Periodistas de 1955, y que surtiría sus

⁸⁴ El número de afiliados al sindicato paso de 120 en 1941, a 603 en 1949 (cuando incluía aún a los editores y propietarios), a 537 en 1958, y a 1187 en 1968 (الميرغني 2005: 37).

efectos bajo el mandato de Sadat, contribuyendo a la expulsión de más de 100 periodistas de la USA (Nasser, 1982: 193).

3.4.4 El Sindicato de Ingenieros

El caso del Sindicato de Ingenieros fue, y sería durante largo tiempo, bastante diferente al de abogados y periodistas. De entrada, las asociaciones de ingenieros previas a la constitución del sindicato oficial, en 1946, habían sido muy elitistas, y favorables al poder constituido, a la Monarquía e incluso a los británicos. La crisis económica, el desempleo y la agitación política en general causadas por la Segunda Guerra Mundial llevaron a los licenciados jóvenes a presionar al Gobierno para que diera reconocimiento legal a su sindicato. Sin embargo este, una vez constituido, logró pocos avances tanto en la organización del ejercicio de la profesión como en la mejora de sus condiciones salariales (Fahmy 2002: 125-126). Esta situación cambió considerablemente a partir de 1952.

La primera toma de contacto del sindicato con el régimen fue similar a la de otros. En 1953, el síndico, Osmán Moharram, fue cesado, y el régimen puso las actividades del régimen bajo la supervisión de un comité controlado por el Ministerio de Comercio e Industria. Al mismo tiempo, amenazó con excluir del sindicato a los empleados públicos, lo que había reducido sus miembros en dos tercios. No obstante, la suerte del sindicato se distanció de la de los de abogados y periodistas cuando aquel finalmente apoyó públicamente a Násir en su querrela con Naguib en 1954. Con posterioridad, los ingenieros ganaron un estatuto y un prestigio con los que nunca habían contado, a causa de la naturaleza del régimen naserista y sus políticas, y jamás manifestarían ninguna oposición política, sino que por el contrario se convertirían en uno de los mayores éxitos de la política corporativista del régimen.

Un primer factor determinante de las relaciones del régimen naserista con este sector profesional y su sindicato lo constituyó el hecho de que un número importante de ingenieros eran ingenieros militares, y algunos de ellos habían tenido importantes relaciones con Násir en sus años de formación⁸⁵, aunque ninguno de los miembros del CMR perteneciera al Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Estos ingenieros formaron también parte del sindicato en la época naserista, obteniendo una representación sectorial del 20% en su consejo en 1954, y la presidencia del sindicato en gran parte de los mandatos. Násir -y también Sadat tras él, en un principio- no solo confió a ingenieros militares la dirección del sindicato, sino también importantes puestos administrativos. De los ocho síndicos que hubo bajo el periodo naserista, tres fueron ministros antes de representar a sus

⁸⁵ Casi la mitad de los compañeros de clase de Násir en la Escuela del Ejército eran ingenieros (Fahmy 2002: 127).

colegas profesionales, y dos lo serían tras , mientras que otros ingenieros militares ocuparon puestos destacados en otros “centros de poder”, como los servicios secretos, los ministerios de Defensa e Interior, y la USA (Aclimandos 1994: 13).

El segundo factor para esta singular relación de los ingenieros con el poder fue la orientación abierta del régimen hacia los grandes proyectos de infraestructuras y la industrialización, que generó un gran número de puestos de trabajo y situó a los ingenieros en lo alto de la escala social⁸⁶ y política. La tecnocracia adquirió bajo el régimen naserista su máxima expresión, pues el saber técnico, y en particular el técnico científico aplicado, fue promocionado por encima de otros⁸⁷, y los que lo detentaban dieron fácilmente el salto, o fundieron, la gestión técnica con la gestión política. No en vano, la Escuela Técnica Militar (الكلية الفنية العسكرية), creada en 1959, tenía el encargo de formar “ingenieros competentes desde el punto de vista científico, práctico y de la capacidad de decisión” (Aclimandos 1994: 17).

No solo los ingenieros militares participaron en esta deriva de la profesión hacia la política, sino que también lo hicieron los civiles, que en algunos casos se impusieron a aquellos en las disputas de competencias que inevitablemente surgieron, a pesar de que los militares fueron los encargados de poner en marcha todos los proyectos civiles, independientemente de que fueran de obras públicas o propiamente industriales⁸⁸. Sin embargo, la condición de ingeniero era necesaria, pero no suficiente, para triunfar en política, y eran más bien las relaciones de patronazgo y clientelares las que permitían ascender en ella (Aclimandos 1994).

En el terreno estrictamente profesional, los salarios de los ingenieros eran en general más elevados que los de los licenciados de similar rango, y este y los otros beneficios sociales mencionados hicieron que el alineamiento del sindicato de ingenieros con el régimen naserista fuera tal que, según señaló Fahmy (2002: 128), aquel nunca hacía públicas sus “demandas”, sino sus “deseos” y así, a diferencia de lo sucedido con el sindicato de abogados y los abogados del sector público, el régimen no encontró resistencia digna de mención cuando obligó a los ingenieros a acoger en su organización a los graduados en los institutos de formación profesional relacionados con su especialidad.

⁸⁶ A la época naserista se debe que el título de deferencia “*mohandis*” (“ingeniero”) se incorporara a la larga lista de apelativos distintivos, indiscriminadamente utilizados, existentes hoy en Egipto, desplazando entonces a los de *bacha* y *bey* predominantes en la época monárquica.

⁸⁷ De los 650.000 nuevos graduados universitarios y en institutos de educación superior entre 1952 y 1977, la décima parte fueron científicos y tecnólogos (Ayubi 1991: 151).

⁸⁸ Estas disputas, y la victoria de los civiles, se produjeron sobre todo en torno al control del sector propiamente industrial civil, como la Sociedad del Hierro y el Acero, o la Compañía al-Nasr, dedicada a la producción de automóviles (Aclimandos 1994: 14-15).

3.4.5 El Sindicato de Médicos

Tras la creación de diversas asociaciones profesionales sectoriales en los años 30, el Sindicato de Médicos fue creado en 1942, pero no tuvo una especial incidencia en la profesión ni en la política en su primera década. En 1955 se produjo la primera confrontación entre el régimen naserista y el sindicato, cuando aquel promulgó una ley que implicaba el fin del monopolio de algunos médicos sobre la práctica en las empresas privadas. Según la nueva ley, el sindicato recibiría las demandas de empleo de las empresas y las distribuiría entre sus miembros según criterios igualitarios. Poco después, un médico militar, Mahmud Nassar, sería nombrado presidente del sindicato, compaginando poco después dicho puesto con el de ministro de Sanidad.

A partir de 1959, un sector del sindicato intentaría limitar la influencia del régimen en él y fortalecer su independencia, pidiendo la incompatibilidad en el ejercicio de los cargos mencionados, y logrando imponer a su candidato, Rachwán Fahmy, a la cabeza del sindicato. Los opositores se enfrentaron con éxito a la tentativa del ministerio de Sanidad de prohibir que los médicos trabajaran para más de una entidad o poseyeran más de una clínica. Sin embargo, en general los candidatos del régimen se impusieron en los órganos de Gobierno del sindicato, con el apoyo de los profesionales del sector público y del Ejército, que tenían intereses contrapuestos a los de los profesionales que ejercían en clínicas privadas. Numerosos médicos jóvenes, sin recursos para abrir sus propias clínicas, se habían beneficiado de la creación de puestos de trabajo en los hospitales públicos y de la apertura de clínicas rurales, así como de generosos incrementos salariales.

En 1961, Rachwán Fahmy volvió a enfrentarse al régimen, pidiendo la limitación constitucional de los poderes del presidente. Un año después él y el propio ministro de Sanidad, Nur Eddín Tarraf, protector suyo, se opusieron a la nacionalización de los hospitales privados. Tarraf fue destituido, pero Fahmy no fue represaliado inicialmente, y en 1965 y 1966 consiguió retornar a la dirección del sindicato. Sin embargo, posteriormente fue destituido a instancias de diez de sus compañeros en el Consejo del Sindicato, expulsado de la USA e, incluso, de su puesto de profesor universitario. Según Ninette Fahmy, a pesar de que sin duda el régimen recurrió a la coerción para forzar la defenestración de Rachwán Fahmy, esta no habría sido posible sin que se produjera la menor resistencia si la mayoría de los miembros del sindicato no hubieran apoyado al régimen naserista (Fahmy 2002: 136).

3.5 EL RÉGIMEN NASERISTA Y LOS AGRICULTORES Y CAMPESINOS

Las políticas agrarias del régimen naserista han suscitado análisis y opiniones encontradas más en lo relativo a sus motivaciones y consecuencias políticas que en lo que

se refiere a sus aspectos económicos y socioeconómicos. No despierta discusión la voluntad del régimen naserista de obtener recursos financieros para el Estado de las expropiaciones de tierras y del control de la actividad agrícola; por otro lado, las estadísticas oficiales, aunque no suficientemente rigurosas y con algunas lagunas, dan una idea aproximada acerca de cómo las leyes de reforma agraria y el resto de las medidas adoptadas afectaron a la distribución de la propiedad de la tierra y su explotación; finalmente, si bien las interpretaciones acerca de las condiciones de vida derivadas de dicha redistribución varían, no es objeto de controversia que las clases medias bajas, medias y medias-altas agrícolas resultantes, en sus diversos estratos, salieron relativamente bien paradas, en el terreno económico, del periodo naserista, mientras que los campesinos que permanecieron sin tierra, o con una pequeña cantidad de tierra apenas mejoraron su situación, continuando bajo o cerca del nivel de la pobreza.

No obstante, en el terreno de las motivaciones y las consecuencias políticas, si bien tampoco cabe duda de que la voluntad del régimen naserista era minar el poder político y social de la clase de grandes terratenientes previa a 1952, y de que su situación económica en la mayor parte de los casos empeoró (sin que dejaran de ser ricos), los autores que la han abordado específicamente difieren al analizar la cuestión de si el régimen naserista buscó deliberadamente favorecer a las clases medias rurales, y por qué, y, en el lado opuesto de la ecuación del poder, al plantearse en qué medida las clases medias rurales fueron un soporte político (¿principal?, ¿entusiasta?, ¿meramente “consentidor”?) del régimen.

3.5.1 El alcance redistribuidor de las reformas agrarias

Las sucesivas reformas agrarias fueron reduciendo el techo máximo de propiedad de la tierra, que en 1952 fue fijado en 200 *feddan*es por persona más 100 para otros miembros de la familia nuclear, en 1961 en 100 *feddan*es por persona, y en 1969 en 50 *feddan*es por persona y 100 para el conjunto de la familia nuclear, si bien la reforma de 1969 tuvo escasa trascendencia, como veremos a continuación.

De un millón de *feddan*es expropiados, un 16% de la tierra cultivable en 1952⁸⁹, 754.487 fueron distribuidos en pequeños lotes de entre 2 y 3 *feddan*es entre 318.000 familias pobres, sin tierra, o con una propiedad muy reducida⁹⁰. A ello hay que añadir la

⁸⁹ La superficie cultivable, cercana a los 6 millones de *feddan*es, se incrementó entre 1952 y el final de la época naserista en cerca de 500.000 *feddan*es, aproximadamente un 8%. La habilitación de nuevas tierras para la agricultura fue parcialmente contrarrestada por la dedicación de antiguas tierras agrícolas a otros usos (vivienda, industrial, infraestructuras, etc.).

⁹⁰ Del poco más de 1 millón de *feddan*es expropiados, 72.000 fueron devueltos a sus propietarios a raíz de demandas legales, y los 166.000 restantes quedaron en manos del Estado (Waterbury 1993: 266-269).

distribución de la mayor parte del saldo de cerca de 600.000 nuevos *feddan*es agrícolas resultado de restar al total de nuevas tierras rehabilitadas (969.000 *feddan*es) las tierras que perdieron su uso agrícola en favor de otro (urbano, industrial, etc.). Esta distribución afectó a más de 90.000 nuevas familias e incrementó las propiedades de los propietarios más pequeños (Ireton 2011: 465). No obstante, el conjunto de las reformas agrarias y las dinámicas económicas y sociales introdujeron otras pequeñas modificaciones en la distribución de la propiedad de la tierra, cuyo resultado fue el que puede observarse en el cuadro siguiente:

TABLA 4: EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA 1952-1965⁹¹

Tamaño propiedad	1952 (antes de 1ª reforma)				1965			
	nº propiet. (miles)	% propiet.	% sup. cultivo	Sup.cul (miles)	Nº propiet (miles)	% propiet.	% sup. cultivo	Sup.cul (miles)
0-5 f	2.642	94,1%	35,4 %	2.122	3.033	94,5%	57,1 %	3.693
5-10 f	79	2,8 %	8,8 %	526	78	2,4 %	9,5%	614
10-30 f	47	1,7 %	10,7 %	638	61	1,9 %	8,2 %	527
40-50 f	22	0,78 %	10,9 %	654	29	0,9 %	12,6 %	815
50 -100 f	6	0,21 %	7,2 %	430	6	0,18 %	6,1 %	392
100-200 f	3	0,1 %	7,3 %	437	4	0,12 %	6,5 %	421
200- f	2	0,07 %	19,7 %	1.177	-----	-----	-----	-----
Total	2.801				3.211	100%	100 %	
Sup. cultivo	5.984				6.462			
Pob. rural	12.800 (año 1947)				18.000 (aprox. 1966) ⁹²			
Pob. total	18.967 (1947)				30.076 (1966)			

FUENTES: المنوفي 1980: 169; إبراهيم 1997: 77-81; Fargues 2011: 44; Waterbury 1983: 42-43.

3.5.1.1 La disminución de la pobreza

La mayor limitación del alcance de las reformas agrarias naseristas se manifiesta en el porcentaje de familias rurales que siguieron sin poseer tierra en absoluto. No obstante, dicho porcentaje decreció del 30% al 28% entre 1952 y 1965 (Waterbury 1983: 296), a pesar de que la población rural se incrementó en casi un 50% en dicho periodo. El número de jornaleros agrícolas que no poseían tierra en absoluto ni la arrendaban, pasó de cerca de 3 millones a principios de los años 60 a aproximadamente 1,5 millones a principios de los 70, aunque una parte importante de este descenso se debía a la emigración a las ciudades y

⁹¹ Utilizamos el año de 1965 como fecha límite porque de este año es el último de la época naserista del que hay estadísticas oficiales, y porque la reforma de 1969 sería en su mayor parte inmediatamente anulada en sus efectos, a pesar de que entre 1965-1967 todavía se produjo un importante movimiento de rehabilitación y distribución de tierras.

⁹² El dato aproximado de la población rural en 1966 lo hemos calculado combinando las cifras de evolución del total de la población con las de la evolución del porcentaje de población rural total, que disminuyó progresivamente a partir de 1947 (67%), 1960 (62,6 %), 1976 (56,1 %). Para 1966, fecha para la que no disponemos de cifras, hemos calculado un porcentaje del 60%.

la venta de las parcelas no explotadas. Sin embargo, la evolución el número total de jornaleros agrícolas nos da una idea más adecuada -siempre teniendo en cuenta la emigración a la ciudad- de las condiciones de vida de muchos pequeños propietarios, que tenían que vender su fuerza de trabajo para subsistir o mejorarlas. Dicho número descendió de 6,02 millones en 1950 a 4,12 millones en 1965, aunque volvió a subir a 6,39 millones en 1970 como consecuencia del aumento de la población, de la crisis económica, y de la interrupción de las redistribuciones de tierra (المنوفي 1980: 174). A pesar del incremento de los salarios de dichos jornaleros en un 65% entre 1952 y 1967, según los cálculos de Mitchell, quizás un tanto severos, en 1967 los ingresos medios de los jornaleros eran de un 25% de lo necesario para mantener a una familia con 3,25 hijos por encima del nivel de la pobreza⁹³, aunque no hay que olvidar que los que de ellos poseían un mínimo de tierra satisfacían gran parte de sus necesidades básicas gracias a ella.

Dentro del grupo de los pequeños propietarios, como se puede observar en el cuadro anterior, entre 1952 y 1965 el porcentaje de propietarios que poseían 5 feddanes o menos se mantuvo casi estable en porcentaje (pasó del 94,1 al 94,5%). Sin embargo, su número total se incrementó en cerca de 400.000 personas, hasta superar los 3 millones, y de poseer el 35,4 % del total de la tierra cultivable pasaron a poseer cerca del 57,1%, mientras que la cantidad de tierra cultivada que poseían en conjunto se incrementó en un 65% (debido al aumento de la superficie cultivable). No obstante, el tamaño medio de sus propiedades (1,2 *feddanes*), a pesar de haberse incrementado en un 50%, seguía siendo insuficiente para mantener por encima del nivel de la pobreza a la familia estándar de Mitchell (*ibid.*), para lo que según el autor era necesaria una propiedad de 2 *feddanes*. Tan solo cerca de un 35% de los pequeños propietarios debían superar dicho umbral⁹⁴, por lo que aproximadamente el 65% de los pequeños propietarios y cerca del 61% del total de los propietarios agrícolas seguirían siendo pobres si consideráramos su propiedad agraria como su única fuente de ingresos (situación que es improbable que se diera en la mayoría de los casos) y obviáramos, como ya hemos dichos, que los pequeños propietarios satisfacían gran parte de sus necesidades alimentarias con su propia producción (pues los cálculos citados fueron hechos a partir de la rentabilidad pecuniaria media de las tierras).

No obstante, hay que tener en cuenta que las cifras anteriores solo nos hablan de la propiedad de la tierra y del nivel de bienestar que podía aportar dicha propiedad, y que para tener una idea más adecuada del cuadro socioeconómico rural habría que considerar los arrendamientos, que las reformas naseristas habían hecho mucho más favorables para

⁹³ Mitchell señala que dichos ingresos medios eran de 36 LE al año, mientras que en 1967 la línea de la pobreza se situaba en torno a las 148 LE, que podían ser obtenidas por quienes dispusieran de 2 *feddanes* (Mitchell 2002: 171-172). Los datos sobre la evolución de los salarios proceden de Ireton (2011: 471).

⁹⁴ El porcentaje del número de propietarios que poseían entre 2 y 5 *feddanes* es una estimación aproximada a partir de las cifras de quienes tenían menos de 3 y entre 3 y 5 a principios de los 70, facilitadas por diversos autores y recogidas por Waterbury (1983: 270).

los arrendadores. Así, entre el 15% y el 25 de la tierra de los pequeños propietarios no era explotada por estos entre 1961 y 1970, sino por otros propietarios, fundamentalmente pequeños (0-5 *feddan*es), medios (10-20 *feddan*es) y sobre todo medio-bajos propietarios (entre 6 y 10 *feddan*es) (Waterbury 1983: 269-270). Es decir, cerca del 60% de los pequeños propietarios (1.5 millones) no explotaba las tierras de su propiedad, probablemente por ser insuficientes para subsistir en la mayoría de los casos.

De manera global, el porcentaje de familias pobres pasó de entre el 28 y el 35%, según las diferentes estimaciones, en 1958, a de entre el 24 y el 27% en 1965, lo que en cualquier caso supone una notable disminución habida cuenta del fuerte incremento de la población rural, cercano al 50%. No obstante, a partir de 1967 y hasta 1975 el índice de pobreza se elevaría exponencialmente hasta llegar entre el 44 y el 60%, a causa, principalmente, de la crisis económica, acentuada por los esfuerzos de guerra de 1967 y 1973, pero también de las políticas seguidas tras la muerte de Náser⁹⁵.

No existen datos fiables del periodo naserista acerca del número de pequeños propietarios o explotadores que se situaban inmediatamente encima del nivel de la pobreza, es decir, de quienes explotaban entre 2 y 3 *feddan*es, aunque probablemente su número los situaría en segunda posición cuantitativa detrás de quienes se podían considerar pobres. Sin embargo, sí disponemos de estimaciones sobre el estrato inmediatamente superior, el de los explotadores de entre 3 y 5 *feddan*es, que en la primera mitad de los 70 rondaban los 300.000 agricultores (Waterbury 1983: 270), cuya situación podía ser considerada entre holgada y ligeramente acomodada, es decir, como representantes de las clases baja y media-baja.

3.5.1.2 La estabilidad de las clases medias agrarias y la nueva burguesía agrícola

Los datos de los estratos superiores a los citados son mucho más sólidos e indiscutidos. El número de los poseedores de entre 6 y 10 *feddan*es, a los que cabe calificar de “acomodados”, se mantuvo sorprendentemente estable, cerca de 80.000 propietarios que pasaron de ser el 2,8% de los propietarios al 2,4%, pero que sin embargo incrementaron el volumen conjunto de sus propiedades (de 8,7% a 9,5 % de la tierra cultivable), y en paralelo la superficie media por propietario (de 6,65 a cerca de 7,8 *feddan*es). Por otro lado, mediante arrendamientos otras 90.000 personas explotaban en 1961 una superficie de entre 5 y 10 *feddan*es, con lo que el número de explotadores agrícolas entre la clase media-baja y media-media era de 170.000 personas (Waterbury

⁹⁵ Ireton (2011: 471) cita los estudios de Radwan, Samir. (*Agrarian Reform and Rural Poverty: Egypt 1952-1975*, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 1977), y Adams Jr, Richard (*The Effects of International Remittances on Poverty, Inequality and Development in Rural Egypt*, International Food Policy Research Institute, Washington, Research Report nº 86, 1991).

1983: 269)⁹⁶, si bien hay que tener en cuenta que, a diferencia de los propietarios, los arrendadores debían pagar el precio de los arrendamientos. En definitiva, el número de propietarios o explotadores ligeramente acomodados o acomodados se incrementó en más de un 100%.

Por encima del estrato anterior, en el cuadro de evolución de la propiedad de la tierra hemos visto cómo el número de poseedores de entre 10 y 40 *feddan*es se incrementó de 47.000 a 61.000, y el de poseedores de entre 40 y 50 de 22.000 a 29.000. Ambos grupos en su conjunto elevaron, incluso, su representación dentro del total de propietarios (del 2,5 al 2,8%), y casi mantuvieron su porcentaje global sobre el total de la tierra cultivada (del 21,6% al 20,8 %), a pesar del incremento de cerca de un 8% de dicha superficie. La razón de considerar a estos dos grupos en conjunto es que la división hecha por las estadísticas oficiales no resulta muy ilustrativa a los efectos que nos interesan: dando por hecho que todos los poseedores de más de 10 *feddan*es pertenecían a estratos cuando menos bastante acomodados, resulta obvio que no era lo mismo poseer 11 *feddan*es que 20 ó 25 o más, y aproximadamente en torno a esta frontera de 20-25 podemos situar la línea divisoria entre las clases agrícolas medias-altas o muy acomodadas, y la nueva alta burguesía agrícola. Al no poder realizar la distinción requerida con el apoyo de estadísticas fiables, más vale en ocasiones considerar conjuntamente el grupo 10 a 50 *feddan*es, que escindir de él al de 40-50 *feddan*es.

El estrato de los explotadores de 11 a 50 *feddan*es (la mayoría propietarios de la mayor parte de su explotación) es de gran importancia, porque, como hemos visto, fue un estrato no solo no perjudicado, sino bastante beneficiado, por las políticas agrarias naseristas, y ello a pesar de que la mayor parte de él podría haber sido privado de una gran parte de su propiedad sin dejar por ello de disfrutar de una situación muy acomodada. Su estabilidad y progreso han despertado por ello importantes interrogantes y controversias, como veremos a continuación.

Pero antes de abordar tales interrogantes y controversias hemos de mencionar al estrato superior de los propietarios agrícolas, el de quienes poseían entre 50 y 100 *feddan*es, cuyo número se mantuvo estable, en torno a los 11.000 propietarios, entre 1952 y 1965, y que pasaron de ser el 0,4% del total de propietarios a cerca del 0,25%, y de poseer el 33,1% de la superficie cultivable a poseer el 12,6%. Este grupo estaba compuesto en su mayor parte por los afectados por las expropiaciones, es decir, por los que cabe denominar, por razones operativas basadas en su estatuto político, “antigua alta burguesía agrícola” o “alta burguesía agrícola prerrevolucionaria”, que hemos de diferenciar de la “nueva

⁹⁶ Algunos autores utilizan clasificaciones de clase o de riqueza distintas a las que estamos utilizando aquí guiados por los autores citados. Samir Amín, por ejemplo, consideraba ya a quienes tenían entre 5 y 20 *feddan*es “agricultores ricos”, y a quienes tenían más de 20, “capitalistas rurales”, una descripción que nos parece, como a Mitchell, exagerada y poco matizada en lo que respecta a los límites inferiores (Hasan Riad -seudónimo de Samir Amín- (1964): *L'Égypte nasserienne*. París: Éditions de Minuit. Citado por Mitchell (2002: 172-173).

burguesía agrícola” (20-50 *feddan*es).

Para completar el cuadro de la burguesía rural habría que incorporar, como señaló Mitchell (272-273), a los comerciantes, y muy en particular a los intermediarios que mediaban en la contratación de los jornaleros, y que eran un elemento clave en el mantenimiento de los campesinos sin tierra en condiciones de explotación no muy diferentes a las anteriores a 1952. Únicamente a partir de 1966, la USA intervino para sustituir a dichos intermediarios por agentes designados por ella, pero sus esfuerzos fueron en gran parte baldíos.

3.5.2 La economía política de las reformas agrarias naseristas

3.5.2.1 La estabilidad de las clases medias y medias altas agrícolas y su actitud ante el régimen naserista

Casi todos los autores coinciden en que las reformas agrarias naseristas fueron mucho menos lejos de lo que podrían haber ido si su objetivo hubiera sido erradicar o reducir al mínimo la pobreza, o al menos comenzar a construir un panorama socioeconómico sin grandes desigualdades en las zonas rurales. Mitchell (2002: 171) puso algunos ejemplos locales de cómo una distribución matemáticamente igualitaria de la tierra podría haber extraído de la pobreza a la totalidad de la población rural en dichas localidades, si bien, como señaló Waterbury (1983: 267), a nivel nacional dicha distribución radical habría situado a todas las familias rurales, con una media de 1,8 *feddan*es por familia, al nivel de la sub-subsistencia, o por debajo del nivel de la pobreza.

Más allá de los planteamientos maximalistas en uno y otro sentido, y de los posibles enfoques económicos puramente técnicos del asunto, lo cierto es que el régimen naserista podría al menos haber realizado, y no lo hizo, una reforma agraria de mucha mayor profundidad, limitando las propiedades no solo de quienes seguirían siendo muy ricos tras la reforma (50 *feddan*es en adelante), sino también, al menos, las de quienes seguirían siendo, simple y llanamente, ricos (por encima de 20 *feddan*es), e incluso las de quienes llevarían una vida muy acomodada (por encima de 10 *feddan*es).

¿Por qué el régimen naserista no quiso “atacar” tales clases acomodadas y ricas? La primera respuesta que viene naturalmente a la cabeza es que no quiso enajenarse el apoyo de quienes formaban parte de ellas. Sin embargo, en términos puramente cuantitativos, no parece que la pérdida hubiera sido importante en contraposición a los apoyos que pudiera haber ganado: el conjunto de quienes poseían más de 10 *feddan*es en 1965 constituía poco más del 3 % de los propietarios en 1965, 178.000 personas que no llegaban al 1% de la población rural y que, sin embargo, seguían poseyendo el 33,4% de la

tierra. Y si nos limitamos al grupo de 40 *feddan*es en adelante, la situación resulta aun más chocante, pues 39.000 propietarios seguían contando con más del 25% de la tierra, o, lo que es lo mismo, el 43% del total de la tierra de la que disponían más de 3 millones de pequeños propietarios.

Entonces, ¿por qué el régimen no atacó a dichas clases? La respuesta más arriesgada a esta pregunta fue dada por Leonard Binder en su conocida obra *In a Moment of Enthusiasm* (1978), y a partir de ella podemos desarrollar los diversos aspectos de la cuestión y sus interpretaciones. Según Binder, la clase media rural fue el principal soporte del régimen naserista. Dicha clase media estaría constituida por quienes poseían entre 10 y 50 *feddan*es, y en ella habría que destacara a la burguesía rural o los notables rurales (30 a 50 *feddan*es). El régimen naserista no habría querido “atacar” a ese estrato porque constituiría el núcleo de “su segundo estrato”, concepto que declaró haber tomado de Mosca⁹⁷, y que aludiría a aquel estrato social que, aunque no gobierna, es imprescindible a los gobernantes para gobernar, pues es el estrato que llena el “vacío”, o el estrato que “media” entre la (pequeña) clase gobernante y la mayoría de los gobernados, lo que requiere que tenga ciertas características socioeconómicas. Dicho estrato sería el “segundo estrato de la clase gobernante”, o lo que es lo mismo, de la “clase política”. Por ser imprescindible para gobernar, por la capacidad que tienen para llenar ese vacío, sus orígenes sociales serían incluso más significativos que los del “primer estrato” gobernante (Binder 1978:12-13). De ahí que el autor se dedicara a estudiar los orígenes sociales y las relaciones de los dirigentes de la UN, la USA y las asambleas nacionales, concluyendo, tras un estudio exhaustivo, que la clase media rural había sido la base del segundo estrato del régimen naserista, apoyándose para ello en la importante presencia en sus órganos políticos (cerca al 50%) de varios miles de personas que pertenecían a familias con una gran peso económico, social y político en el medio rural, pero que constituían grupos familiares “mixtos”, con arraigo en dicho medio y al mismo tiempo en el medio urbano a través de su adscripción y sus contactos profesionales, sociales y políticos.

La localización de este segundo estrato en los contornos de la burguesía rural se derivaría del estudio no solo del periodo naserista, sino también del anterior y el posterior (el estudio de Binder abarca también los primeros años del régimen de Sadat), que llevaría a Binder a afirmar, incluso, que “hay fundamentos para aventurar la hipótesis de que el mismo elemento socio-político estructuró los procesos de cambio a nivel de régimen en las épocas anterior y posterior a la revolución”. Según el autor, ese elemento se habría

⁹⁷ Por sorprendente que resulte, Binder no cita en su obra mencionada, ni siquiera en la bibliografía, ninguna obra concreta de Mosca, de quien dice que “no elaboró una teoría comprehensiva sobre el segundo estrato, como no lo hizo sobre el de clase política” (p.12). Por el contrario, Binder dijo haber reunido e interpretado las diversas afirmaciones de Mosca al respecto que Meisel recogió dispersa en su obra *The Myth of Ruling Class: Gaetano Mosca and the Elite* (James H. Meisel 1962. Ann Arbor: University of Michigan Press). Citada por Binder (1978: 13).

conformado a lo largo de los años 30 y 40, y habría sido “decisivamente definido por la política de exclusión de los antiguos políticos wafdistas tras el enfrentamiento entre Násir y Naguib en 1954” (Binder 1978: 143).

Pero las tesis de Binder fueron aún más lejos. Según él, las clases rurales mencionadas fueron el motor del régimen naserista desde la convicción -y no solo el mero interés particular-, “en un momento de entusiasmo”, interpretación para la que se inspiró, según reconoció explícitamente, en un pasaje de la *Introducción para la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel* de Marx:

“[En una revolución parcial, solo política] una parte de la sociedad burguesa se emancipa y alcanza un dominio universal; una clase social determinada emprende, desde su situación particular, una emancipación universal de toda la sociedad (...) “Ninguna clase de la sociedad burguesa puede representar esta parte sin suscitar un momento de entusiasmo en sí misma y en las masas, un momento en el cual fraterniza y se funde con la sociedad en general, se confunde con ella, y es aceptada y reconocida como su común representante”.

“Para que coincidan la revolución de un pueblo y la emancipación de una clase particular de la sociedad burguesa; para que un estado de la sociedad se haga valer por todos, todas las fallas de la sociedad deben encontrarse, a su vez, concentradas en otra clase; un determinado Estado debe ser el Estado contra el cual es dirigido el ataque de todos, el que incorpora la traba impuesta a todos; una particular esfera social debe aparecer como el delito conocido de toda la sociedad, así que la emancipación de esta esfera aparezca como la emancipación universal cumplida por obra propia. Para que una clase determinada sea la clase libertadora por excelencia, otra clase debe, por lo tanto, ser la clase evidentemente opresora”⁹⁸.

Y este papel determinante de las clases medias rurales, conectadas con las clases medias urbanas, habría sido el que habría propiciado que la “revolución naserista”, fuera solo una “revolución parcial”, concepto tomado asimismo de Marx.

Las tesis de Binder han sido desigualmente recibidas por los autores sucesivos, si la mayor parte de ellos la encontró exagerada en diversa medida y por diversas razones, pero en particular en los puntos en que considera a las clases medias rurales como decisivas en la configuración del régimen y como adherentes entusiasta a sus políticas. “Exageradas” es precisamente el adjetivo que utiliza para calificar dichas tesis Ayubi (1998: 266), para quien las clases fueron simplemente “flexibles y eficaces” a la hora de adaptarse al régimen naserista. Waterbury (1983: 272-273) y Harik (1980: 563), por su parte, prefirieron calificarla de “ingenuas”. El primero insistió en que ni tales clases medias alcanzaron la hegemonía como clase, ni fueron reconocidas por la sociedad como su

⁹⁸ Binder cita el texto en la página 19 de su obra. La versión en castellano del texto de Marx que aparece aquí procede de la traducción de Angélica Mendoza de Montero del prólogo a Hegel, G.F. *Filosofía del Derecho*. Buenos Aires: Editorial Claridad, 5ª ed., 1968), y ha sido tomada de la nueva maquetación realizada por Biblioteca Omegalfa (www.omegalfa.es).

representantes ni, desde luego, “engendraron” el régimen naserista -tesis esta última que también habían defendido algunos autores marxistas como Abdel-Malek (1962). Para Waterbury, la burguesía rural constituía, sencillamente, una fracción de la clase burguesa, aliada a la burguesía urbana, y sometida a la burguesía de Estado, que era quien ejercía la hegemonía.

No obstante, a pesar de este enfoque mayoritariamente crítico de las tesis de Binder, hay que tener particularmente en cuenta la opinión más favorable a aquellas, aunque matizadas, de quienes con posterioridad a la mayor parte de los autores citados, realizaron estudios específicos sobre el tema. Este es el caso de Ansari (1986), quien, en el marco de un estudio general sobre la cuestión de la relación entre las clases agrícolas y el Estado, realizó un detallado estudio específico sobre los últimos años del régimen naserista, a partir del “caso Kamchich”.

Ansari defendió que el concepto de “segundo estrato” tenía una validez general para explicar la estabilidad y continuidad general del régimen naserista, pero mostró que si bien el régimen busco abiertamente el apoyo de dicho estrato, no se sometió incondicionalmente a aquel (por otro lado, configurado por subestratos diversos), sino que tuvo que atender también a las presiones del resto de los sectores de la sociedad, y de la rural en particular, que en particular en el periodo 1961-1966 exigieron al régimen una profundización en las políticas “socialistas” y redistributivas. No obstante, Ansari concede que, a partir de 1966, la burguesía agrícola se impuso finalmente en su enfrentamiento a esas tendencias, y que en ello tuvieron una especial influencia la debilidad del régimen derivada la crisis económica, y en particular de la derrota de 1967, y la penetración de la burguesía agrícola en los las elites dirigentes del régimen y de la burocracia del Estado. Algunos someros datos mostraran la pertinencia de las tesis de Ansari.

La presencia de descendientes de las clases medias y medias altas agrícolas entre la elite política naserista de primera hora es bien conocida. Un 25% de los más destacados oficiales libres eran descendientes de propietarios agrícolas acomodados, si bien al considerar la posible influencia de estos orígenes en las políticas agrarias naseristas, algunos autores prefieren fijarse en el otro 75%, del que aproximadamente otro 25%, entre ellos Násir y Sadat, eran descendientes de profesionales con pequeñas porciones de tierra⁹⁹. Más significativo podría ser el hecho de que gran parte de las políticas agrarias

⁹⁹ Como hemos señalado, y como recoge Waterbury en su obra, Hamruch estudió los orígenes de 49 oficiales libres destacados, entrevistándose con ellos, y estableció que, de ellos, 12 eran hijos de propietarios agrícolas acomodados, 13 eran hijos de profesionales que tenían alguna tierra, el origen de 10 no estaba claro, y únicamente 14 eran hijos de profesionales u hombres de negocios sin tierra. A Waterbury, aunque añade a la lista de descendientes de propietarios a Kamal Eddín Husein y a Abdel Hakim Amer, le pareció más significativo el número de oficiales que no tenían orígenes o intereses en el mundo rural, y recordó el estudio de Ayubi (1981) según el cual el porcentaje de los miembros de la élite burocrática naserista que tenía orígenes rurales había descendido del 39% al 10% entre 1953-54 y 1966-1967. Waterbury recoge en una tabla los datos dados dispersamente por Hamruch en su obra citada (حمروش 1992) (Waterbury (1983: 275-277).

iniciales se encargaran a descendientes de grandes propietarios, como Sayyed Marei, que diseñó la reforma agraria de 1952 de tal manera que sus considerables propiedades apenas se vieran afectadas y fue ministro de Agricultura en la segunda mitad de los años 50. La trayectoria posterior de Sayyid Marei es igualmente significativa, y volveremos sobre ella tras dar cuenta de la época de la radicalización en el medio rural y de las políticas naseristas en el medio rural. Ansari nos informa de dicha época a través del “caso Kamchich”, que alcanzaría una enorme repercusión nacional e internacional.

3.5.2.2 La presión revolucionaria de las clases bajas rurales: El “caso Kamchich”¹⁰⁰

Tras la reforma agraria de 1952, en el pequeño pueblo de Kamchich, en el Delta del Nilo, la familia terrateniente de los Al-Fiqqi intentó seguir haciendo y deshaciendo a su antojo en la vida económica, política y social del pueblo, que había dominado desde al menos 100 años antes, encontrándose con la resistencia de los campesinos y sus líderes, Salah Husein y su esposa Chahinda. Los esfuerzos de los Al-Fiqqi tuvieron éxito durante varios años, en los que consiguieron conservar el puesto de alcalde y resultar abundantemente representados en el Comité Local de la UN, gracias a sus contactos en el Gobierno central y a su control de la policía y la administración a nivel local. Sin embargo, a finales de los años 50 las denuncias de Salah y Chahinda en el sentido de que los Al-Fiqqi habían conservado más del doble de las tierras permitidas por la reforma de 1952 (350 *feddan*es de más) tuvieron éxito, y las tierras en cuestión fueron secuestradas judicialmente y puestas a disposición de 200 campesinos (casi el 40% de los agricultores del pueblo). Las grandes propiedades desaparecieron del pueblo (las mayores tendrían 15 *feddan*es) -así como lo harían sus antiguos propietarios, exiliados-, y los pequeños propietarios tomaron el control de la cooperativa local a partir de 1962. Kamchich devino el modelo y escaparate del cambio revolucionario en el nuevo Egipto. En marzo de 1965, Náser y el Che Guevara visitaron el pueblo, sancionando su ejemplaridad socialista.

Poco tiempo después, en abril de 1966, Salah Husein murió de un disparo realizado, según testigos, en el curso de una disputa con otros campesinos, en una acción inspirada, según Chahinda y sus correligionarios, por los Al-Fiqqi. Los medios de prensa de la izquierda marxista aventaron el asesinato de Husein, denunciando la pervivencia del feudalismo y los obstáculos que impedían la penetración revolucionaria en el medio rural, y se dio la circunstancia de que Náser tuvo pronto conocimiento de los hechos porque su hermano Husein había sido compañero de armas del hermano de Salah Husein. Sobre las

¹⁰⁰ Excepto cuando se indique lo contrario, la información y la mayor parte de las interpretaciones contenidas en este apartado, y las relativas al caso Kamchich en el apartado siguiente, provienen de Ansari (1986), y en particular de las págs.19-49.

circunstancias reales del asesinato nunca se esclarecerían totalmente los hechos, pero lo cierto es que Náser, por razones personales y de conveniencia política, tomó cartas en el asunto, encargando a algunos de sus fieles la investigación del caso, y a otros la formación del Alto Comité para la Liquidación del Feudalismo (ACLF).

Mientras los Servicios de Investigación Militares, encargados del caso, maltrataban públicamente a decenas de familiares y partidarios de los al-Fiqqi, y torturaban a algunos de ellos, la propaganda del régimen presentó a Husein como un mártir de la lucha contra el feudalismo y defensor “del auténtico socialismo”, a raíz de los informes presentados por la USA sobre el caso. Sin embargo, muchos años después el acceso a los documentos oficiales relativos a Kamchich y Husein, elaborados por los servicios secretos y sus conexiones en la USA, desvelaría que con anterioridad los informes de los servicios secretos le habían dibujado como alguien que había pertenecido a los Hermanos Musulmanes, se oponía a “la posición oficial sobre el socialismo”, y “llamaba a la abolición de la propiedad privada” y a “una colectivización de la agricultura similar a la de los países comunistas”. Así mismo, habían señalado que la difusión de estas ideas causaba “daño y confusión”, y había llevado a enfrentamientos, incluso violentos, entre los partidarios de Husein y los miembros de la USA que defendían la posición oficial del régimen (Ansari 1986: 35-38; 251-254). De esta contradicción pueden extraerse dos conclusiones: una, que el régimen tenía un doble discurso, pretendiendo atender de puertas para afuera a las demandas desde debajo de “profundizar en el socialismo”, pero intentando controlar y limitar de puertas para adentro estas demandas; y otra, que al menos una parte del aparato de los servicios secretos y de la USA se encontraban bajo la influencia de los elementos más conservadores.

3.5.2.3 El Alto Comité para la Liquidación del Feudalismo (ACLF)

Como hemos apuntado, el caso Kamchich fue el desencadenante de un movimiento de aparente radicalización de las políticas naseristas en el medio rural, en un momento en que la crisis económica incipiente se dejaba sentir de manera particular en aquel¹⁰¹. En junio de 1966, dos meses después de la muerte de Husein, en Damanhur, tras reconocer que tras catorce años de revolución el feudalismo seguía existiendo en el campo, y que algunas familias habían seguido conservando muchos cientos de feddanes y dominando la vida política y la administración locales, Náser anunció la creación del ACLF, que se dedicaría a investigar y eliminar tales tachas.

¹⁰¹ Los salarios de los jornaleros descendieron un 10% entre 1965 y 1967, según Mitchell (2002: 168) y, como hemos mencionado, el índice de pobreza en las zonas rurales tomó una fuerte tendencia ascendente en esos años.

La dirección del ACLF fue encargada al mariscal Abdel Hakim Amer, compañero íntimo de Náser, y que era él mismo descendiente de propietarios agrícolas acomodados. Junto a él se incorporaron varios de sus allegados, altos miembros del aparato de seguridad, como Chamch Badrán y Salah Náser, y otra facción, así mismo proveniente en gran parte del aparato de seguridad, liderada por Ali Sabri, descendiente también de una familia aristocrática prerrevolucionaria. Aunque Sabri era considerado izquierdista y pro soviético, ningún marxista fue incluido en la composición del ACLF, a pesar de que en ese momento contaban con mayor presencia y ascendencia en el régimen.

La labor del ACLF resultó en el secuestro de cerca de 60.000 *feddan*es y la detención de varios cientos de personas. Sin embargo, el detallado estudio de Ansari acerca de sus actuaciones demuestra que Amer resistió las presiones de los sectores más radicales del régimen para finalmente no considerar “feudalistas” a quienes poseían menos de 100 *feddan*es, amparándose en consideraciones acerca de la política general del régimen (“no perder el apoyo rural”), la seguridad y la estabilidad. Al final solo fueron investigados quienes habían sido objeto de las reformas de 1952 y 1961 (Ansari 1986: 97-140).

El acceso posterior a los documentos oficiales muestra todo aquello que se ocultó en su momento. Las acciones a perseguir eran de tres tipos: exceso de propiedad, conducta criminal y control de la administración local. Las investigaciones debían extenderse a cómo los investigados habían logrado escapar a las leyes y a los controles, lo que llevó a descubrir no solo la presencia de las familias investigadas en la Asamblea Nacional, el Ejército, el aparato de seguridad y la burocracia de Estado, sino la protección o colaboración de algunos de los grandes hombres del régimen. Al margen de ministros, gobernadores civiles y responsables de seguridad de menor renombre, en los informes aparecieron los nombres de Zakariyya Mohai Eddín, Anwar al-Sadat y, aunque en una breve alusión, del propio hermano de Amer. En los casos más comprometidos, como los que hemos citado, esta información se mantuvo en secreto (Ansari 1986: 135-140). Si este fue el caso en relación a las grandes familias terratenientes prerrevolucionarias, el supuesto gran adversario del régimen naserista, cabe imaginar lo que se habría descubierto en el caso de investigar al “segundo estrato” de la nueva burguesía rural.

Según Mitchell, el efecto de las reformas agrarias en términos políticos hasta mediados de los 60 fue que unas grandes familias, conectadas con el régimen en sus medios urbanos, sustituyeron a otras a la cabeza de los grandes propietarios y en términos políticos, y que el caso de Kamchich fue en gran medida una excepción en la consecución de una temporal igualdad. La constitución del ACLF y sus medidas tuvieron por objetivo dirigir las reclamaciones populares contra las grandes familias terratenientes previas a 1952 (poco más de 300 casos), distrayendo la atención sobre las demás (tal vez miles de casos) gracias a la dirección de Amer (él mismo, recordemos, hijo de pequeños terratenientes) (Mitchell 2002: 165-175).

3.5.2.4 La derrota de 1967 y la imposición de la burguesía agrícola

La derrota de junio de 1967, y la crisis económica que aceleró (con la pérdida de los ingresos del Canal, del petróleo del Sinaí, de los ingresos del turismo, entre otros), fueron utilizadas por la burguesía de Estado y sus aliados rurales para fortalecer su influencia en el régimen y comenzar a acomodarse a los intereses norteamericanos en la región. Esta influencia se dejó sentir inmediatamente en el medio rural.

En julio de 1967, Násir declaró que se habían producido grandes abusos en las acciones del ACLF, y tras nombrar de nuevo a Sayyed Marei, cuya familia poseía aún más de 100 *feddan*es de tierra¹⁰², ministro de Agricultura, ordenó la devolución de las propiedades expropiadas “injustificadamente”, que serían devueltas en un 95% antes de la muerte de Násir (Waterbury 1983: 280). Entre los resarcidos por la anulación de las medidas de expropiación se encontraría uno de los miembros “pobres” de la familia de los al-Fiqqi, Mohammed al-Fiqqi, que obtendría la devolución de la propiedad de ochenta *feddan*es, aunque en principio no los derechos de explotación, que conservarían como arrendadores los nuevos ex propietarios (Ansari 1986). Paralelamente a estas medidas, y en particular tras las manifestaciones estudiantiles y obreras de 1968, las organizaciones juveniles rurales inscritas en la USA fueron desmanteladas y prohibidas. La última reforma agraria de 1969, que limitaba la posesión de tierra a 100 *feddan*es para toda la familia nuclear, sería un brindis al sol al que, de cualquier manera, la muerte de Násir en 1970 vaciaría de todos sus efectos potenciales (Mitchell 2002).

3.6 LAS INSTITUCIONES ISLÁMICAS Y SUS MIEMBROS

El régimen naserista fue en general bien recibido por las instituciones y los hombres de religión musulmanes. Los ulemas y estudiantes azharíes habían participado activamente, e incluso con un papel promotor, en todos los movimientos nacionalistas o pseudo-nacionalistas de la historia moderna egipcia (1881, 1919, 1945-52). Tan solo la alta jerarquía de la mezquita-universidad de Al-Azhar había apoyado al rey Faruq y se había opuesto al partido Wafd durante el periodo monárquico. Una excepción a esta regla la constituyó el Gran Jeque de Al-Azhar Abdel Mayid al-Salem, nombrado en 1950, que defendió la lucha anticolonial y la independencia de Al-Azhar, siendo destituido por ello en septiembre de 1951 (Arigita Maza 2005: 50).

Teniendo en cuenta esta tradición del común de los azharíes, no es de extrañar el apoyo de muchos de ellos al régimen naserista por su componente nacionalista. Sin

¹⁰² A mediados de los años 70 Marei declaró poseer, junto a los miembros descendientes de su familia, 114 *feddan*es (Ajbar al-Yaum, 13 de noviembre de 1976. Citado por Waterbury (1983: 272).

embargo, numerosos ulemas y azharíes darían su apoyo a la revolución también por sus contenidos sociales, a pesar de las reticencias de muchos de ellos ante sus tintes más propiamente “socialistas”, y de que las medidas adoptadas por el régimen naserista que afectaban directamente al estamento religioso mermarían la posición social y política de los ulemas, sus competencias, y la independencia de sus órganos de gobierno, lo que, por otra parte, no dejó de suscitar rechazos (Zeghal 1997: 99-106).

En resumen, el régimen naserista, como veremos a continuación, consiguió atraer, más allá de la destitución y depuración de sus grandes opositores, a un grupo suficientemente numeroso de ulemas que sancionaran sus políticas, incluida su deriva socialista, de tal manera que nunca hubo de enfrentarse a una resistencia digna de consideración desde este sector social.

3.6.1 La nacionalización de los bienes habices y la supresión de los tribunales religiosos

La primera medida del régimen naserista que afectó al modo de vida de los ulemas, más que al papel de la religión o a de sus instituciones, fue la toma del control por parte del Estado de los bienes habices familiares (sg. وقف أهلي) -que gestionaban y de los que se beneficiaban familias no necesariamente religiosas-, y de los de beneficencia (sg. وقف خيري) -gestionados por hombres de religión-, en 1952 y 1953 respectivamente. Sin embargo, a pesar de la pérdida de la gestión de estos recursos económicos, la disposición no suscitó ninguna oposición oficial de Al-Azhar, e incluso encontró el apoyo de sus personalidades, como lo hizo el conjunto de la reforma agraria. Los bienes habices públicos quedaban bajo el control del Ministerio de Awqaf, o, literalmente, “de bienes habices”, que había sido creado en 1913, y que en realidad era el ministerio que se ocupa de los asuntos religiosos islámicos en general.

Bien distinta sería la reacción ante la eliminación de los tribunales religiosos islámicos (محاكم شرعية), en virtud de la ley 462/1955, que imponía la unificación de los tribunales egipcios y acababa con la “autonomía judicial” de los jueces religiosos. Los tribunales religiosos islámicos, formados por ulemas, y su contraparte, los tribunales religiosos coptos (محاكم مليية), también eliminados, se encargaban de resolver en asuntos de estatuto personal o estado civil, y también en los relativos a los bienes habices. La reforma no modificaba los textos legales y criterios doctrinales a los que los jueces deberían atender, todos ellos de inspiración inicialmente religiosa, ni excluía a los jueces religiosos, sino que los transfería e integraba, diseminados, en los Tribunales Nacionales (محاكم أهلية), pero suscitó la dimisión del entonces Jeque de al-Azhar, Jidr Husein, la del vice Jeque y la de algunos otros ulemas y, por otro lado, despertó también el rechazo de la de la iglesia copta, no solo por la supresión de sus propios tribunales sino también por el hecho de que

los coptos vieran sus causas expuestas a tribunales que tenían ulemas como miembros (Arigita Maza 2005: 57). Las dimisiones en la alta jerarquía de Al-Azhar servirían al régimen naserista para incorporar a ella a personas afectas a él, como el nuevo gran jeque, Abdel Rahmán Tach, que alabaría las políticas del régimen naserista, incluida la unificación de los tribunales.

3.6.2 La reforma de Al-Azhar

El 5 de julio de 1961, al comienzo del periodo nacionalizador y “socialista” del régimen naserista, se promulgó la ley de reforma de Al-Azhar apresuradamente, sin dar tiempo a que se organizara ninguna debate en torno a ella en la Asamblea Nacional y con un despliegue de los partidarios del régimen para frenar de entrada cualquier tipo de oposición. Ante los atisbos de esta en el seno de la institución, uno de los fieles del régimen en el seno de Al-Azhar, Mohammed al-Bahi, declaraba que era “la revolución la que reformaba Al-Azhar porque sus jeques no había querido hacerlo”¹⁰³, y el entonces radical y belicoso Anwar al-Sadat, presidente de la Asamblea Nacional, advertía a quienes insistieran: “El 23 de julio de 1952 tuvo lugar una revolución. Los que han intentado oponerse a ella han sido pisoteados. Hoy también está teniendo lugar una revolución, y quienes se opongan a ella serán pisoteados”¹⁰⁴. Al mismo tiempo una campaña de prensa atacaba a los jeques que defendían el inmovilismo, la irracionalidad y el oscurantismo (Zeghal 1997: 106).

Desde finales del siglo XIX, grandes figuras intelectuales egipcias, como el jeque Mohammed Abduh y el escritor Taha Husein, habían luchado por la reforma de Al-Azhar. En 1895 se había creado *Dar al-Iftá* (دار الإفتاء), que sería en adelante la institución encargada de emitir los dictámenes jurídico-religiosos (fetuas) solicitados tanto por los particulares como por el Estado. En un principio, *Dar al-Iftá* fue adscrita a Al-Azhar, y su responsable último fue el Gran Jeque de esta institución. Sin embargo, a partir de 1899 ambas instituciones se separaron, y Abduh fue nombrado primer Gran Muftí de Egipto¹⁰⁵. Esta medida sería la primera orientada a adaptar la jurisprudencia al aparato legislativo y judicial requerido por el Estado moderno y la evolución de la sociedad, y daría pie a la rivalidad o el enfrentamiento entre la autoridad del Gran Muftí y la de Al-Azhar y su máximo responsable, que resurgiría varias décadas después, principalmente en los años 80

¹⁰³ Citado por محمد خضر حسين (١٣٥٨ هـ). رسائل الإصلاح ج ٢. القاهرة: مطبعة الهداية الإسلامية (1992: 137).

¹⁰⁴ Citado por Rifat Sayyid Ahmad, *Zawrat al jiniral*, El Cairo, Dar al huda, 1993, pág. 696. Citado por Zeghal (1997: 106).

¹⁰⁵ En 1935, Al-Azhar creó su propia Comisión de Fetuas, pero esta medida no parece que fuera destinada a socavar la autoridad de Dar al-Iftá, sino a atender al gran número de consultas que Al-Azhar recibía no solo de Egipto, sino también de otros países musulmanes (Arigita Maza 2005: 18-28; 70-71).

y 90, cuando el Gran Muftí sería siempre más cercano y dependiente del poder político, mientras que Al-Azhar adquiriría una cierta independencia ante el empuje de su cuerpo social. Sin embargo, en el periodo naserista fue esta última la institución la que tuvo la preeminencia política y social de entre las dos instituciones, probablemente porque satisfizo plenamente la función de sancionar desde un punto de vista religioso las políticas del régimen naserista.

Entre 1895 y 1911 diversas leyes convirtieron a Al-Azhar en una institución del Estado, y al Gran Jeque en su máximo e indiscutido responsable, delimitando sus atribuciones. La institucionalización y burocratización de Al-Azhar, contribuyeron, sin embargo, a darle un mayor poder, en la medida en que se le reconocía como interlocutor oficial, y en que era responsable de la selección del personal que enseñaba en las escuelas estatales, sin estar sin embargo sometida al Ministerio de Educación ni a ningún otro. Esta situación llevó a Taha Husein a escribir, aún en 1938, lo siguiente:

“No se debe permitir a Al-Azhar que siga siendo un Estado dentro del Estado, un cuerpo privilegiado capaz de desafiar la autoridad pública con toda impunidad. Seguirá siéndolo en tanto que exista el Consejo Supremo de Ulemas, y las leyes de Al-Azhar den derecho a sus titulados a enseñar en las escuelas del Estado (...). Si el Consejo destituye a una persona del grupo de los ulemas, el Ministerio de Educación está obligado a relevarla de sus funciones (...) y así las escuelas del Estado y el Ministerio de Educación se someten al poder de Al-Azhar”¹⁰⁶.

A pesar de que Taha Husein, durante su breve mandato como ministro de Educación (وزير المعارف en aquella época) entre 1950 y 1952 transformó numerosas escuelas coránicas en escuelas primarias dependientes de su Ministerio, hasta 1961 Al-Azhar siguió teniendo el control sobre gran parte de la educación primaria y secundaria.

La reforma de Al-Azhar de 1961 dividió la institución en cinco organizaciones, y convirtió en funcionarios a todos sus miembros. Dichas instituciones sería el Consejo Superior de Al-Azhar, presidido por el Gran Jeque y que agrupaba fundamentalmente a los principales dirigentes de sus diversos organismos; la Academia de Investigaciones Islámicas (مجمع البحوث الإسلامية), que acogería a cincuenta ulemas destacados por su labor y producción intelectuales; la administración de cultura y de las misiones islámicas (بعوث); la Universidad de Al-Azhar, cuyo rector sería nombrado por el presidente de la República, a propuesta del Gran Jeque; y las escuelas primarias, preparatorias y secundarias¹⁰⁷.

La reforma sometía Al-Azhar directamente al poder político, al establecer que tanto el Gran Jeque de la institución como otras dos nuevas figuras encargadas de ella que la ley

¹⁰⁶ Taha Husein, *Mustaqbal al zaqafa fi Misr*, El Cairo, Matbaat al maarif, 1944, pág. 26. Citado por Zeghal (1997: 108-109).

¹⁰⁷ Un análisis detallado de la ley de reforma de Al-Azhar de 1961 puede encontrarse en Arigita Maza (2005: 62-74).

creaba (el ministro de Asuntos de Al-Azhar y el Delegado de Al-Azhar - وكيل الأزهر-) serían nombrados por el presidente de la República sin que mediara propuesta alguna de sus miembros. Según Zeghal (1997: 109-110), estas dos últimas figuras serían quienes tomarían las principales decisiones en la mayor parte de las materias.

De esta manera, la antaño unificada y poderosa institución quedaba dividida entre su aparato educativo, universitario y de formación previa, y su aparato propiamente religioso-legal, que a su vez era subdividido, y el Gran Jeque y los grandes ulemas perdían el control directo en la mayor parte de los sectores, y se veían “intervenidos” por los nombramientos del poder político. A cambio, el conjunto de los trabajadores de Al-Azhar recibían el estatuto de funcionarios, con sus salarios, ventajas sociales y posibilidades de promoción (el Gran Jeque tenía dignidad y sueldo de ministro).

3.6.3 El apoyo de Al-Azhar al socialismo

A partir de 1961, el apoyo de Al-Azhar al régimen naserista se hizo aun más firme, incluyendo la defensa del socialismo y otras medidas polémicas aunque para ello tuviera que hacer equilibrios teóricos. Junto al mencionado jeque Mohammed al-Bahi, Mahmud Chaltut, Gran Jeque de la institución entre 1958 y 1963, fue uno de los puntales de esta defensa.

Los debates del Congreso Nacional de Fuerzas Populares, celebrado entre mayo y junio de 1961, y destinado a establecer el Pacto Nacional de 1962, fueron la ocasión para que los hombres de religión expresaran sus ideas acerca de la necesidad de que la religión ocupara un papel destacado en la legislación, comenzando por su mención en la Constitución como religión del Estado¹⁰⁸. Al-Bahi y Chaltut lograron el apoyo de los delegados al Pacto Nacional, a pesar de que este no incluiría tal extremo (aunque si lo haría la Proclamación Constitucional de 1964). A partir de entonces, al-Bahi y Chaltut defenderían el socialismo del régimen naserista como acorde con los principios del islam, si bien rechazarían el comunismo, por su materialismo y su rechazo de la religión, aceptando las proposiciones de Náser en el sentido de que el islam había sido “la primera religión socialista”, y “el Estado construido por él y el profeta Mahoma, el primer Estado socialista”¹⁰⁹.

Zeghal (1997: 112-113) las posturas de Al-Azhar ante las políticas de control de

¹⁰⁸ El reputado jeque Mohammed al-Gazali fue el principal crítico de la escasa atención en el texto a la “protección de la fe”, esgrimiendo sobre todo el deterioro de la moral islámica en aquellos días (Abdel-Malek, 1962: 323). Al-Gazali, que mantendría su ascendencia religiosa-intelectual hasta su muerte en 1996, justificaría ante los tribunales el asesinato del escritor Farag Fuda en 1992 en tanto que apóstata.

¹⁰⁹ Gamal Abdel Náser: Discurso del 22 de febrero de 1961. Citado por Sayyid Ahmad, *Zawrat al jiniral*, El Cairo, Dar al huda, 1993, pág. 677. Reproducido por Zeghal (1997: 112).

natalidad iniciadas por el régimen naserista entre 1962 y 1964, medidas en principio opuestas a los principios islámicos defendidos tradicionalmente, como ejemplo por un lado de la adaptabilidad de la institución, y por otro de la división de tareas dentro de ella en asuntos que podría ser de difícil aceptación para muchos: el Gran Jeque rechazaba el principio general, pero enumeraba una serie de excepciones o circunstancias excepcionales para aceptarlo, dejando en el aire una cierta ambigüedad ante el asunto, mientras que la Academia de Investigaciones Islámicas defendía posiciones más alejadas de las buscadas por el poder, pero sin llamar abiertamente a enfrentarse a sus medidas. Esta división de tareas se mantendría en las décadas siguientes, ya fuera por razones estratégicas o, más probablemente, por el mayor distanciamiento del cuerpo social de los ulemas respecto al poder en comparación con la posición del Gran Jeque, obligado por otro lado a responder en cierta medida a la presión de sus compañeros de menor rango.

Sería erróneo pensar que la sustitución de las elites azharíes se realizó únicamente cooptando a las personas más moldeables. El caso de Al-Bahi es significativo en este sentido: tras seguir la formación azharí tradicional en escuelas religiosas, Al-Bahi fue a estudiar a Alemania, donde, tras aprender alemán e inglés, obtuvo un doctorado en filosofía y otro en psicología. A su vuelta a Egipto, fue nombrado profesor en la facultad de Teología (أصول الدين), y en los años 50 ascendió rápidamente en el escalafón docente y administrativo, al final de ellos como firme defensor del naserismo. En 1961, como vicerrector de la Universidad de Al-Azhar, creó la facultad de mujeres y diversas facultades modernas. En 1962 fue nombrado ministro de Asuntos Religiosos y de Asuntos de Al-Azhar, siendo más influyente que el propio Gran Jeque, Chaltut¹¹⁰.

Como Al-Bahi, muchos miembros de la nueva elite religiosa habían estudiado en el extranjero, y su principal objetivo era la modernización de las instituciones de Al-Azhar, tanto educativas como religiosas. Pero la influencia internacional, combinada con el ambiente general en Egipto de la época, se dejaba sentir en el común de los ulemas. Zeghal cita, en este sentido, un testimonio muy revelador de un ulema anónimo:

“El pensamiento de izquierdas no me influyó (...). Fue Náser mismo quien nos marcó. Náser marcó a todo chico o chica joven que vivió en su época, pero lo que realmente nos marcó fue la poesía (...) la poesía, el teatro y las novelas que leíamos entonces eran internacionales (Aragón, Lorca, Gorki, Dostoievski, Tolstoi) (...) La etapa política durante la cual se escribió esa poesía debía situarnos forzosamente frente al poder (...) No tomábamos el pensamiento de Náser como pensamiento de Marx, al contrario: estábamos contra el comunismo. Era una generación que había sido educada en un conjunto de principios o de conceptos que nos metieron en la cabeza, sobre todo en la de la juventud que leía y escribía. Porque en aquel momento éramos un Estado que tenía un Ejército, que tenía valor, unos recuerdos y un *zaim* (زعيم, “líder”, “portavoz”)” (Zeghal 1997: 117).

¹¹⁰ Sobre la figura de Al-Bahi, véase Zeghal (1997: 114-115).

Finalmente, la reforma de Al-Azhar no solo surtió efectos en los medios urbanos, sino también -y cabe preguntarse si no más importantes- en el medio rural. Con la seguridad material y las posibilidades de promoción que ofrecía la funcionarización de los empleados de Al-Azhar y de las instituciones religiosas, la formación religiosa especializada siguió siendo un instrumento de movilidad y ascenso social, que daba acceso a una auténtica profesión. Así mismo, esa profesionalización fortaleció e incremento la tradicional función de líderes e intermediarios políticos de los ulemas, con la diferencia de que esta función también se institucionalizó en ese momento, pasando muchos de ellos a ser miembros de la USA, y sirviendo de correa de transmisión de las “nuevas ideas”, como la ausencia de contradicción entre el socialismo y el islam.

3.6.4 Los intentos de desacralizar el aprendizaje

La reforma del aparato educativo de Al-Azhar, como la política global del régimen naserista, no intentó en absoluto disminuir la presencia de la religión en la educación y en la sociedad. Únicamente intentó modificar algunas de sus funciones o “potencialidades”. En el terreno educativo puramente religioso, lo que se persiguió fue sobre todo la desacralización y racionalización del aprendizaje. El bien conocido método tradicional de enseñanza de las escuelas coránicas (*kuttab*), basado en la memorización completa de los textos religiosos, comenzando por el Corán, sin la mediación inicial de la más mínima exégesis o comprensión por parte de los alumnos, fue sustituido por métodos de enseñanza más modernos, según los cuales las ciencias religiosas era presentadas a través de extractos de textos, análisis y manuales. En esta labor, las escuelas azharíes y su reforma desempeñaron a partir de 1961 un papel fundamental: anteriormente, gran parte los alumnos, sobre todo en las zonas rurales, iban a los *kuttab*, dependientes de las mezquitas y sus imames, hasta la edad de 12 años, cuando pasaban a una escuela azharí o de otro tipo. Tras la reforma se promovió que los alumnos, desde los 6 años, entraran directamente en dichas escuelas o en otras escuelas religiosas, llamadas “institutos” (معاهد), antiguas instituciones religiosas privadas puestas también bajo el control o la supervisión de Al-Azhar. En los programas de las escuelas de Al-Azhar y en los de los institutos se incluye la enseñanza de todas las materias profanas básicas.

3.7 LOS COPTOS Y LA COMUNIDAD COPTA. LA INCORPORACIÓN DE LA IGLESIA

Abordar la situación de los coptos¹¹¹ y de la comunidad copta bajo el régimen naserista por separado de la de otros colectivos supone aceptar que efectivamente se produjo un tratamiento diferenciado por parte de aquel a dicho colectivo y sus miembros en razón de criterios religiosos, identitarios o comunitarios. No obstante, esto fue así únicamente de manera parcial, y en cierta manera contradictoria con las políticas generales del régimen.

En una evaluación general, Milad Hanna estimaba que “el periodo naserista afectó a los coptos positiva y negativamente”. Entre los principales aspectos positivos, Hanna destacaba que en dicho periodo “no se registró ningún enfrentamiento entre los coptos y el Estado, ni entre los coptos y los musulmanes” (حنا 1993: 48-49). Al hacer esta apreciación, un destacado actor político e intelectual copto no “comunitarista” como Hanna¹¹², parecía aceptar no solo la lógica comunitarista e identitaria de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, y entre los ciudadanos entre sí, sino también el hecho de que potencialmente dichas relaciones hubieran de evaluarse en torno a la noción de “conflicto”. En realidad, la afirmación de Hanna solo cobra su pleno sentido desde el conocimiento de los acontecimientos que se producirían en las épocas de Sadat y Mubarak, pues con anterioridad al régimen naserista, al menos en la época moderna, tampoco se produjeron enfrentamientos dignos de mención entre el Estado y “los coptos”, ni en general entre “los coptos” y “los musulmanes”. No obstante, incluso aceptando la perspectiva histórica retrospectiva de Hanna, resulta sorprendente que un representante de la corriente “laicizante” de la comunidad copta como Hanna no diferencie entre las relaciones entre el Estado y “los coptos”, y las relaciones entre el Estado y la iglesia copta, y su incidencia en la vida, e incluso la organización comunitaria, de los coptos. Antes de abordar estas últimas, continuaremos con la evaluación de este autor.

¹¹¹ El número exacto de coptos que hay y ha habido en Egipto a lo largo de la historia ha sido siempre desconocido. La comunidad copta siempre ha discutido las cifras oficiales, que indican que constituyen el 6% de la población, elevando dicho porcentaje incluso hasta un 10% (Cannuyer, 2011: 901). Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la proporción de coptos ha ido disminuyendo desde principios del siglo XX, a causa de sus menores tasas de natalidad en comparación con los musulmanes. Menos dudas hay acerca de la distribución geográfica aproximada de los coptos, que históricamente se han concentrado en El Cairo (con una fuerte concentración en algunos barrios, como Chubra o Imbaba, a partir de los años 60 y 70) y el Medio y Alto Egipto, siendo poco numerosos en el Delta.

¹¹² Fallecido en 2012 (n. 1924), Milad Hanna era arquitecto de formación. Escribió numerosos libros y participó activamente en política desde posiciones de izquierdas, que le llevaron a militar en el partido Tagammu (en septiembre de 1981 fue uno de los numerosos detenidos por Sadat en su amplia campaña de arrestos de opositores) y a ser elegido diputado en 1984. Sus campos de intervención política e intelectual privilegiados fueron las políticas de vivienda y la “cuestión copta” en general, tanto en lo relativo a las relaciones entre coptos y musulmanes como a la posición y el papel de la iglesia dentro de la comunidad copta, terreno en el que defendió el alejamiento de la iglesia de la política y la “laicización” de las relaciones entre el Estado y los coptos.

3.7.1 La situación económica, política y social de los coptos

Según Hanna (حنا 1993: 28-54), los coptos se vieron perjudicados o beneficiados por las políticas naseristas en la misma medida que el resto del pueblo egipcio, es decir, que lo fueron según su adscripción socioeconómica, excepto en su acceso a los puestos de responsabilidad política e incluso a los altos escalafones no políticos del aparato del Estado y el sector público. En términos económicos, los coptos fueron particularmente afectados por la reforma agraria y las nacionalizaciones porque estaban particularmente bien “representados” entre la alta burguesía, en particular en los sectores de las finanzas, el comercio y los transportes, pero también entre los grandes terratenientes. No obstante, según el autor, el periodo naserista “extendió la justicia social, el igualitarismo y la igualdad de oportunidades, dando a la clase media y a los coptos pobres una sensación de tranquilidad y optimismo ante el futuro” (pág. 53).

En términos políticos y sociales, los coptos estuvieron escasamente representados en puestos de responsabilidad, más allá de la aislada presencia de algún ministro y de unos pocos diputados. Aunque Hanna (*Ob.cit*) atribuyó esta situación a la ausencia de coptos entre los círculos que promovieron la revolución y asumieron el poder inicialmente, otros datos de mayor alcance, como los aportados por Cannuyer (2011: 904-905) muestran que, por las razones que fuera, los coptos estuvieron infrarrepresentados durante todo el periodo naserista no solo en los puestos políticos de mayor importancia, sino también en los de la Administración; mientras que su participación en esta disminuyó, si bien es cierto que antes era muy elevada. Antes de 1952 los coptos tuvieron siempre una representación en los partidos, los parlamentos y los Gobiernos superior o igual a la de su peso demográfico, alcanzando el máximo del 10% de parlamentarios en 1942. Tras la revolución, sin embargo, el número de parlamentarios coptos electos en cada asamblea no sería más que de 2 ó 3 (1-2 %), si bien Náser adquirió a partir de 1964 la costumbre de elegir a 6 coptos de entre los 10 diputados que le permitía nombrar la Constitución, así como de designar a 2 ministros coptos en cada Gobierno. Los coptos fueron también progresivamente excluidos de otros puestos políticos o parapolíticos clave, como los de gobernador civil, embajador, general o rector de universidad, y su presencia en la Administración y los ministerios disminuyó, en particular en los de Finanzas y Transportes, en los que antes conformaban entre el 40 y el 50% del total.

Frente a estos datos, hay que decir cuando menos que no cabe duda de que el régimen naserista no manifestó ninguna preocupación por seguir una política, siquiera de cara a la galería, de atribución de cuotas de poder a los coptos, e incluso que fueron deliberadamente apartados de los puestos de responsabilidad. No obstante, es sobradamente conocido que, de que entre quienes ocupaban tales puestos anteriormente, muchos mantenían estrechas relaciones con las elites económicas y sociales de la burguesía

contra las que había actuado el régimen naserista, como lo demuestra su gran presencia precisamente en los ministerios relacionados con los principales sectores de actividad de la burguesía copta (finanzas, comercio y transportes). Por ello, de la misma manera que los coptos fueron particularmente afectados, como hemos señalado, por la reforma agraria y las nacionalizaciones, lo fueron también por la exclusión política. Además, estos sectores perjudicados por el naserismo engrosarían desde los años 50 las filas de la adinerada diáspora copta ya presente en Estados Unidos, Canadá y Australia, que desarrollaría un discurso, en palabras de Cannuyer, “excesivamente agresivo”, y, en palabras de Hanna, “provocador” frente el régimen naserista (y posteriormente frente a los de sus sucesores, como veremos en los capítulos II 3.4 y IV 8.2), actitud que no favorecería su inclusión. Por otro lado, como hemos apuntado, antes de 1952 los coptos estaban “sobrerrepresentados” en los estratos medios y medio-altos del aparato del Estado, más allá de los altos cargos- y ello por razones históricas de carácter socioeconómico, educativo e incluso político-, y el gran crecimiento tanto de dicho aparato como del acceso a la educación de la población en general tuvo que influir, sin duda, en la disminución de su presencia relativa en él. Finalmente, en cuanto los coptos en general, coincidimos con la opinión de Osmán (عثمان 2006: 55) quien señaló, en la línea de lo apuntado por Hanna, que “su postura ante la revolución, con la excepción de los grandes propietarios agrícolas y de los grandes capitalistas, y en especial la de la clase media-baja, fue similar a la postura de la mayor parte de la población, es decir de apoyo generalizado al régimen”.

3.7.2 El régimen naserista, la comunidad copta y la iglesia

Las relaciones entre el régimen naserista y la comunidad copta en términos estrictamente comunitarios, es decir, en cuanto al tratamiento dado a los coptos como comunidad, resultaron relativamente paradójicas. En primer lugar hay que decir que al comienzo del régimen naserista, la Iglesia copta no era la única institución representativa de los coptos: en el año 1874, el jedive Ismael había creado el Consejo Comunitario Copto (المجلس الملي العام), órgano laico de representación de la comunidad, atendiendo a las demandas de algunos miembros de esta, que no se reconocían en la representación del papa o patriarca de la Iglesia de Alejandría. Desde entonces, las relaciones entre el Consejo y la iglesia habían sido difíciles. La jerarquía eclesiástica era inmovilista y frecuentemente corrupta, y era desafiada también desde dentro por los monjes y sacerdotes jóvenes. En 1955, el papa Yusab II (يوساب), acusado de corrupción e incompetencia, fue depuesto por decisión conjunta -por primera vez en la historia- del Sínodo de la Iglesia (المجمع المقدس) y del Consejo Comunitario. El puesto de papa quedó vacante durante casi cuatro años, hasta

que en 1959 fue ocupado por el papa Cirilo VI, elegido mediante un complejo y curioso sistema acordado en 1957¹¹³.

En el ínterin entre la llegada al poder de los Oficiales Libres y el advenimiento de Cirilo VI, se produjeron el secuestro de los bienes habices de la iglesia (1953), que serían confiscados más adelante, y la supresión de los tribunales eclesiásticos (مجالس مالية) en 1955, medidas tendentes, a promover el “igualitarismo ciudadano”, según el régimen, y sin duda también a erosionar el poder de la iglesia. En el mismo sentido, habría sido razonable prever un deterioro de las relaciones del régimen con la iglesia, e incluso un fortalecimiento de aquellas con el Consejo Comunitario. Sin embargo, la llegada al papado de Cirilo VI, que gobernaría la iglesia copta hasta 1971, desembocaría en una situación muy diferente: Cirilo VI sería un papa muy activo, habilidoso en las relaciones sociales y políticas y carismático, que despertaría auténtico fervor entre sus fieles, promovería un retorno a las fuentes de la religión y a la espiritualidad que demandaban las generaciones de monjes jóvenes, conseguiría el renacer de la práctica del culto, y mantendría excelentes relaciones con Náser, a quien, según Cannuyer (2011: 906), le unió “una sorprendente complicidad”.

Los escasos y abandonados monasterios dispersos por Egipto fueron rehabilitados y se llenaron de monjes instruidos y entusiastas, las iglesias se abarrotaron de fieles, y la construcción de la gran catedral de San Marcos y del enorme complejo patriarcal de Al-Abbasiyya (El Cairo), necesitados ambos de la autorización gubernamental para construir nuevas instalaciones coptas (y que tantas veces denegarían en el futuro los regímenes de Sadat y Mubarak), simbolizaron el renacer de la iglesia copta. Para su incesante actividad, Cirilo VI no solo contaría con las autorizaciones administrativas necesarias, sino también con la ayuda financiera del Estado, hasta el punto de que, según Hanna “la iglesia no solo no tuvo carencia de recursos financieros, sino tal vez una abundancia que habría necesitado de instituciones democráticas que controlaran sus movimientos, como existen en las iglesias y organizaciones religiosas civilizadas [متحضرة]” (حنا 1993: 52)

Con su exitosa labor papal, Cirilo conseguiría reducir al mínimo la influencia de la intelectualidad copta laica que rechazaba el poder omnímodo de la iglesia en los asuntos de los coptos, obteniendo de Náser en 1962 la disolución del Consejo Comunitario General. El Consejo sería restablecido en 1973 (en época de Sadat), pero con muy escasos poderes, y las propuestas laicizantes dentro de la comunidad copta -de las que el mencionado Hanna sería un representante destacado- no recuperarían su vigor hasta finales de los años 90. La iglesia copta participaría, pues, de una manera singular, en el sistema corporativo naserista,

¹¹³ El complejo sistema, aún vigente, y que sería objeto de sospechas en el momento de la elección de Chenuda III en época de Sadat, combina las designaciones con la elección, y en él participan tanto el Sínodo como el Consejo Comunitario, y concluye con la introducción de los nombres de tres candidatos finales en una urna que se introduce en una habitación oscura, para que un niño de cinco años extraiga al azar la papeleta con el nombre del futuro papa.

incorporación que se quebraría abruptamente bajo el mandato de Sadat, pero que sería plenamente restablecida bajo el de Mubarak, en ambos casos durante el papado de Chenuda III. Así, mientras que los coptos fueron marginados en los altos escalones de la administración del Estado, su iglesia se consolidó y desarrolló con el beneplácito y la cooperación del régimen naserista, en detrimento de los sectores coptos laicos, proceso que discurrió en paralelo al control de las instituciones religiosas islámicas, y a la reducción de la autonomía de sus miembros y de su influencia en los asuntos mundanos.

3.8 EL RÉGIMEN NASERISTA Y LOS ESTUDIANTES

Desde que comenzaron a constituir un colectivo suficientemente numeroso y concentrado en grandes centros de estudio, los estudiantes, de las escuelas de secundaria y universitarios, habían desempeñado un papel importante, como hemos visto, en las movilizaciones políticas en Egipto a lo largo de la primera mitad del siglo XX, en ocasiones en conjunción con el resto de los estamentos universitarios y en ocasiones asociándose a los movimientos obreros.

El golpe de Estado de 1952 fue en general bien recibido por los estudiantes, que constituyeron inmediatamente tras aquel un Frente Estudiantil universitario compuesto por estudiantes de diversas corrientes políticas para expresarle su apoyo. Sin embargo, este apoyo pronto se convirtió en crítico, pues los estudiantes, al igual que el resto de los estamentos universitarios y de los sectores intelectuales y profesionales, exigieron a partir de 1954 el retorno a un sistema democrático o liberal en política sin cuestionar por ello el resto de las orientaciones del nuevo régimen. Así, de la misma manera que el claustro de profesores de la Universidad de Alejandría emitió en marzo de 1954 un llamamiento a la abolición de la ley marcial y la disolución del CMR, estudiantes de la Universidad de El Cairo constituyeron un frente para defender las mismas reivindicaciones. Por entonces el movimiento estudiantil en general estaba dirigido por estudiantes de orientación principalmente comunista o islamista (عبد الله 1991: 144-145).

La respuesta del régimen naserista a estas reivindicaciones fue apartar de la enseñanza, por primera vez en la historia de Egipto, a cerca de 40 profesores de tendencia liberal, islamista o de izquierdas, e imponer una guardia universitaria a los campus, que no dudaría, en colaboración con otras fuerzas de seguridad, en llevar a cabo labores de espionaje, detenciones y agresiones a los estudiantes, que causaron incluso víctimas mortales en alguna ocasión; todo ello al tiempo que creaba sus propias organizaciones estudiantiles, incluidas primero en la Organización para la Liberación (la Oficina de los Estudiantes, 1953), y posteriormente en la USA (como Organización de los Jóvenes Socialistas, 1965, en la que los estudiantes constituían el 65% de los miembros) (عبد الله 1991: 145-146, 150). Estas organizaciones buscaban desplazar a la organización estudiantil

genuina, la Unión de Estudiantes, cuyas elecciones fueron suspendidas entre 1953 y 1959, procediéndose a designar a sus representantes, y que posteriormente sería controlada por diversos procedimientos (prohibición de candidaturas, prohibición de la actividad política y religiosa, inclusión mayoritaria de profesores y licenciados afines al régimen en sus órganos de dirección, etc.) (عبد الله 1991: 154-156). De la misma manera fueron puestos bajo el control del régimen los órganos de dirección universitarios (rector, decano, etc.), cuyos principales miembros serían designados por el Gobierno, e incluso se asignó un secretario general de condición militar a cada universidad. Algunos cargos académicos y administrativos cooperarían directamente con los servicios de seguridad en las labores de control y represivas, mientras que muchos profesores fueron cooptados por el régimen, accediendo a puestos directivos o de asesoría de relevancia en órganos ministeriales o en el aparato estatal en general.

Tras los movimientos de protesta de 1954, los estudiantes entraron en un largo periodo de quietud política que duró hasta 1968. Sin embargo, según Ahmad Abdallah, que sería un dirigente destacado, si no el más destacado, del movimiento estudiantil a principios de los años 70 desde sus convicciones socialistas, en los años 50 y 60:

“El control del régimen sobre los estudiantes no se cimentó solo sobre la represión y las maniobras políticas, sino también sobre los grandes logros sociales y políticos alcanzados por el régimen. Los estudiantes, como muchos egipcios, dieron la bienvenida a los logros sociales de la revolución, y respondieron con entusiasmo al sentimiento de orgullo nacional (...), a las crecientes oportunidades de educación, y a las garantías de empleo a los licenciados” (عبد الله 1991: 158-159).

Hay que señalar que dentro de sus políticas sociales, el régimen naserista prestó una especial atención a los jóvenes en general y a los universitarios en particular, sin duda con el objetivo colateral de apartarlos de la política: tras crearse el Ministerio de Educación Superior y el Consejo Superior de la Juventud a mediados de los 50, en los 60 vieron la luz el Consejo Superior de Universidades y el Ministerio de la Juventud. Estos organismos promovieron la creación un gran número de instalaciones y actividades deportivas y de ocio: las instalaciones polideportivas y los centros de la juventud se extendieron más allá de las grandes ciudades, hasta contarse cerca de 800 “clubs para jóvenes” rurales (عبد الله 1991: 150).

Sin embargo, el desentendimiento de la política por parte de los estudiantes concluyó radicalmente tras la derrota de 1967, como veremos a continuación.

4. LA DERROTA DE 1967: DESASTRE POLÍTICO Y ECONÓMICO Y TRAUMA SOCIAL

4.1 EL CONFLICTO BÉLICO Y SUS CONSECUENCIAS INMEDIATAS

La derrota de Egipto junto a otros Estados árabes en junio de 1967 frente a Israel sumergió a Egipto en una profunda crisis económica, política y social, haciendo aflorar males del régimen naserista que probablemente habrían salido a la luz de todas maneras pero que, con la sacudida de la derrota y sus implicaciones, adquirieron tintes catastróficos.

El enfrentamiento militar no había sido buscado ni deseado por Náser, pero el presidente egipcio cometió errores de cálculo al amenazar con el recurso a las armas sin prepararse en realidad de manera adecuada para él, y permitiendo que Israel tomara la iniciativa militar efectiva de manera que para muchos observadores pareciera justificada. En un contexto de frecuentes enfrentamientos fronterizos entre Siria e Israel, y ante la incorrecta información militar soviética facilitada a Egipto -tal vez filtrada por el propio Israel-, en el sentido de que este se aprestaba a invadir Siria y luego Egipto, Náser pidió la retirada de las fuerzas de interposición de la ONU del Sinaí y cerró el estrecho de Tirana al paso de los barcos israelíes. Aunque Náser manifestó públicamente su disposición a negociar con la mediación de Estados Unidos, y aunque su negativa a repatriar los regimientos destacados en la Guerra de Yemen era una prueba implícita clara de su falta de voluntad de combatir, Israel, que probablemente deseaba y buscaba la contienda, no esperó a que se verificara la auténtica disposición de Náser, y el 5 de junio lanzó un ataque aéreo que destruyó la mayor parte de la aviación egipcia sin que esta pudiera despegar de sus instalaciones. Eliminada la fuerza aérea egipcia, en los seis días siguientes Israel ocupó sin dificultad los Altos del Golán sirios, Cisjordania, y la península del Sinaí y la ribera occidental del Canal del Suez, causando la muerte de 12.000 soldados egipcios y destruyendo gran parte del equipamiento pesado de guerra egipcio. Junto a un gran número de vidas, territorio y armamento, Egipto perdió en pocos días el sentimiento de orgullo y dignidad nacional que lo había dominado durante los quince años anteriores.

La catástrofe llevó a Náser a anunciar su dimisión el 9 de junio, cuando aún no había concluido el enfrentamiento en Siria. Sin embargo, pocos minutos después del anuncio, millones de egipcios salieron a las calles a exigir a Náser que retirara su dimisión, en una muestra, según algunos estudiosos y observadores, más de desesperación que de lealtad. En palabras de Al-Sayyid Marsot (1987: 125), el mensaje de las masas era: “Tú nos has metido en esto, tú debes sacarnos”. En respuesta a las manifestaciones populares, el presidente egipcio retiró su dimisión.

Tras asumir la responsabilidad personalmente, primero renunciando a, y luego retomando las riendas del poder, Náser dirigió aquella hacia el Ejército, y en particular

hacia los responsables de la Fuerza Aérea. Aunque algunos le acusaran de buscar un chivo expiatorio, lo cierto es que el Ejército había demostrado una sorprendente ineficiencia. Gran parte de sus principales mandos se habían dedicado a medrar en puestos políticos y civiles del Estado más lucrativos, abandonando sus tareas militares, hasta el punto de que algunos de los más cualificados de las Fuerzas Aéreas tuvieron que ser reintegrados apresuradamente a estas para que se ocuparan del posible conflicto bélico. Aunque el principal imputado por el clientelismo y la ineficacia en el Ejército fue Chamch Badrán, ministro de la Guerra, Abdel Hakim Amer, Jefe del Estado Mayor y amigo íntimo de Náser, y algunos compañeros suyos dimitieron en protesta por lo que consideraban un trato injusto hacia Badrán, del que formal o informalmente Amer siempre había sido el superior. “El Mariscal” se destapó, además, de manera sorpresiva, con un discurso a favor de las libertades públicas y el pluripartidismo y en contra de la URSS, lo que provocó que en agosto Náser, temeroso alentara una conspiración dentro del Ejército, lo hiciera arrestar. Dos semanas después, la prensa anunciaba el suicidio de Amer. Los rumores y las convicciones de que en realidad el Presidente había sido el instigador de su asesinato no ayudaron a mejorar la ya deteriorada imagen de este.

Tras la firma de un armisticio entre Egipto e Israel, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó, el 22 de noviembre de 1967 la resolución 242, que establecía “la inadmisibilidad de la adquisición de territorios por medio de la guerra” y llamaba a Israel a “retirarse de los territorios ocupados durante el reciente conflicto”, y a todos los Estados a reconocer “la soberanía, integridad territorial e independencia de todos los Estados de la zona y su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas y libres de amenazas o actos de fuerza”¹¹⁴. Israel, sin embargo, ignoraría la resolución de la ONU.

4.2 LAS PROTESTAS DE FEBRERO DE 1968

A pesar de sus críticas públicas hacia la institución militar, Náser no quiso ser demasiado severo con los presuntos responsables militares de la derrota ni atacar abiertamente la red clientelista y corrupta que habían formado muchos altos mandos del Ejército¹¹⁵. El 21 de marzo de 1968 el Tribunal Militar competente emitió su fallo en relación a la negligencia de los altos oficiales del Ejército del Aire. Tan solo dos generales, Badrán y otro de menor rango, fueron condenados, y en general las penas impuestas fueron muy leves. La clemencia del fallo del tribunal desató, sin embargo, inmediatas

¹¹⁴ Naciones Unidas. Consejo de Seguridad: Resolución 242 (<http://goo.gl/E80POs>, consultado el 26 de octubre de 2014).

¹¹⁵ Numerosos militares se beneficiaban comerciando con su influencia, obteniendo comisiones y prebendas de todo tipo de comercio, no solo militar, sino también civil, y adquiriendo propiedades e ingresos procedentes de las expropiaciones o de la gestión de los bienes expropiados. (Waterbury 1983: 336-337).

manifestaciones de cólera popular, encabezadas y nutridas principalmente por obreros y estudiantes. De manera significativa, fueron los obreros de la industria militar de Helwán quienes prendieron la mecha de la protesta, siendo secundados por los estudiantes de las Universidades de El Cairo y Alejandría, que además de participar en las manifestaciones, organizaron encierros e incluso llegaron a ser recibidos en dos ocasiones por Sadat, presidente del Parlamento, y varios miembros de este y del Gobierno (sin embargo, tras la primera reunión Sadat jugó una mala pasada a los estudiantes, encarcelando a los miembros de su delegación)¹¹⁶. No obstante, en las manifestaciones participaron muy diversos sectores de la sociedad, y entre ellos gran parte de los miembros y cuadros de la USA, lo que según Jaled Mohai Eddín, que por aquel entonces había recuperado ascendencia dentro del régimen, no implicaba en absoluto que las manifestaciones no fueran espontáneas, sino que, por el contrario, “el ambiente político hacía la movilización de la USA ineludible”¹¹⁷.

El fallo judicial relativo a los oficiales de la fuerza aérea sería tan solo la gota que derramaría el vaso de la frustración de la sociedad egipcia tras la derrota. Prueba de ello es que los obreros y los estudiantes incluyeron en sus protestas demandas relativas a la política interna en general, y otras relativas a sus propias libertades y a asuntos propios. Así, los estudiantes exigieron, entre otras reivindicaciones relacionadas con el asunto del juicio y los detenidos y heridos a raíz de las protestas, que se permitiera la libertad de opinión y de prensa, que se abolieran las leyes que restringían las libertades públicas, que se constituyera un parlamento libre auténticamente representativo, que se alejara a los servicios secretos y de seguridad de las universidades y que se eliminara su control de las actividades de la sociedad en general (عبد الله 1991: 185-187).

4.3 LA DECLARACIÓN DEL 30 DE MARZO Y EL PERIODO DE REVISIÓN CRÍTICA

Según testimonios de colaboradores de Náser, este había previsto la explosión popular desde los primeros momentos la derrota con una gran precisión (“de aquí a 6 ó 9 meses”), y estaba seriamente dispuesto a abordar cambios políticos profundos en el sistema de Gobierno para absorberla¹¹⁸. Fuera de esto lo que fuera, lo cierto es que tras los primeros enfrentamientos y detenciones en los primeros días de protestas, Náser ordenó

¹¹⁶ Tras obtener la autorización para entrevistarse con Sadat, el 24 de febrero de 1968, los estudiantes titubearon a la hora de entregar sus documentos de identidad, temerosos de sufrir represalias. Sadat no solo les dio “su palabra de honor” de que no habría tales represalias, sino que les dio su número de teléfono particular por si las había. Ante tales garantías, los estudiantes entraron en el Parlamento. Esa misma noche fueron arrestados todos (عبد الله 1991: 185).

¹¹⁷ *Al-Ahram*, 29 de febrero de 1968 (Citado por عبد الله 1991: 188, 208).

¹¹⁸ عبد الفريد مجيد، "أوراق عبد الناصر السرية"، ٢٣ يوليو، ٦ أغسطس ١٩٧٩. Citado por عبد الله (1991: 177).

que estas se permitieran, y un mes después emitió la conocida como Declaración del 30 de Marzo, que incluía un “programa” de acción para el futuro. En la Declaración, tras reconocer la amplitud e importancia de la derrota, el presidente señaló que tras ella había varias prioridades que le habían ocupado y ya habían sido abordadas: a) la reconstrucción de las fuerzas armadas, b) paliar los efectos económicos de la derrota, c) depurar los “centros de poder” que se habían formado dentro del régimen¹¹⁹, d) hacer un cambio de Gobierno y e) proceder a juzgar a los responsables militares (los juicios a los oficiales del Aire se repitieron tras las revueltas). A continuación, Náser detalló su programa, en el que la reconstrucción del Ejército y la liberación de la tierra ocupada tenían la “prioridad absoluta”, pero en el que ocupaba un lugar esencial recuperar el apoyo popular a través de la reconstrucción de la USA. Esta seguía siendo un instrumento útil, y sus defectos y carencias se habían debido a la “aplicación” de ese instrumento. La solución era reconstruirla para que fuera realmente un instrumento de representación “de abajo a arriba”, a través de procedimientos electivos y abandonando las designaciones y nombramientos. El Congreso Nacional de la USA elegido a partir de sus “unidades básicas” sería el órgano de representación popular “hasta que se eliminaran los efectos de la agresión israelí”. Entretanto, concluiría la labor que ya le había sido asignada de elaborar una constitución permanente, que sería sometida a referéndum, y que daría pie, en sus disposiciones, a elecciones libres al Parlamento y a la Presidencia de la República. En su opinión, la Constitución debería garantizar las adquisiciones de la revolución y los principios socialistas, pero, sin embargo, debería unir a la protección y garantía de la “libertad social” la de la libertad política, y en concreto garantizar la libertad de pensamiento, expresión, opinión y prensa. A estas libertades se unirían la creación de un Tribunal Constitucional y la garantía de inviolabilidad del poder judicial, así como la protección de la propiedad pública y privada. Finalmente, Náser anunciaba que este programa sería sometido a referéndum en mayo, y que si era aprobado formaría inmediatamente una omisión para preparar las elecciones al Congreso Nacional de la USA¹²⁰.

Las manifestaciones de febrero de 1968 y la *Declaración del 30 de marzo* dieron paso a un clima político nuevo en el país: la cólera de algunos sectores sociales y su *repolitización*, por un lado, y las promesas de mayores libertades emitidas desde la presidencia, acompañadas de una nueva permisividad, se retroalimentaron para alumbrar escenas nunca vistas en los quince años anteriores del régimen naserista. La reivindicación de mayores libertades y participación política que emanaban de la sociedad se extendieron

¹¹⁹ En un discurso pronunciado el 3 de marzo de 1968 en Helwán, Náser había anunciado que 654 oficiales habían sido destituidos y 300 alejados de los servicios de información (R. Santucci, “La Republique Arabe Unie après la Guerre des Six Jours”, *Orient*, nº 45-46, 1968, págs. 178-179. Citado por Martín Muñoz 1992: 280).

¹²⁰ بيان الرئيس جمال عبد الناصر إلى الأمة. بيان ٣٠ مارس ١٩٦٨ (Sitio web *President Gamal Abdel Nasser*, <http://goo.gl/i4qG2N>, consulta del 25 de octubre de 2014).

a través de la USA.

Los escritores jóvenes, que, según Ghali Shoukri, desde hacía algunos años reflejaban en sus escritos y en su conducta, a diferencia de sus antecesores, un fuerte malestar y “la predicción no de la sociedad de la derrota, sino de la de la revuelta”, expresaron esa cólera a través de la Organización de la Juventud en su congreso en Zaqaziq en 1969, sometiendo al ministro del Interior, según el mismo autor, “a una confrontación que nunca hubiera creído posible”. Para Shoukri, en términos generales las generaciones anteriores, y en particular la de los años 40 (la de Taufiq al-Hakim, Naguib Mahfuz, Mohammed al-Zayyat, Yahya Haqqi, entre otros), que ocupaba los puestos de dirección en “la vitrina de la cultura oficial”, recibiendo importantes remuneraciones, formaban parte de la “sociedad de la derrota”, puesto que sus críticas, a veces feroces, partían de una visión derrotista, mientras que las posteriores, de la que formaban parte M. Afif al-Matar, Amal Dúnqul, Gamal al-Guitani, Yahya Taher y Yusuf al-Qaid -y el propio Shoukri, aunque no escribiera literatura-, por citar tan solo algunos de los escritores más conocidos, tenían una visión revolucionaria. Los miembros de las primeras eran “burgueses exterior y visceralmente”, y “se habían adaptado a la nueva situación para formar parte del magma de burócratas, de tecnócratas, de militares y de civiles”. A pesar de que los jóvenes escritores procedían de los mismos orígenes sociales que las anteriores (la pequeña burguesía rural y urbana), y de que muchos de ellos se habían beneficiado también de las ventajas dadas por el régimen para cooptarlos, “su visión y su coraje no habían sido alterados” (1979: 155-158). Prueba de ellos es que muchos, sobre todo los de tendencias marcadas de izquierda, y entre ellos Shoukri, habían conocido las cárceles naseristas.

A pesar de que Shoukri sitúa el ámbito y origen de las diferencias entre los intelectuales jóvenes y sus antecesores en el “conflicto social”, antes que en el generacional propiamente dicho, resulta difícil deslindar ambos ámbitos y darle completamente la razón. Prueba de ello es la actitud general de los jóvenes y en particular de los estudiantes, que cambió radicalmente a partir de 1967 más allá de los reducidos grupos que habían mantenido una actitud política antes de ella. Según las encuestas realizadas por Imad Eddín Abdallah, en 1970 el número de estudiantes universitarios que declaraban “sentirse molestos por la despreocupación de los estudiantes ante las discusiones políticas” se acercaba al 60% en las universidades de El Cairo, Al-Azhar y Alejandría y al 45% entre los estudiantes de las escuelas e institutos de formación superior, una situación que ha de ponerse en contraste con la de la época anterior que hemos citado más arriba, si bien es cierto que dicho porcentaje descendía por debajo del 40% en la Universidad Americana (a la que acudían estudiantes con un alto nivel de ingresos) y entre algunas universidades semirurales, como la de Asiut¹²¹. Este empuje desde abajo se

¹²¹ Emad Eddin Sultan: “Problems of University Students, NRSS (*National Review of Social Sciences*), vol. 3, nº 1 (jan 1971), Págs. 45-96 y “The Needs of the Students of Higher Institutes, NRSS, vol.6 nº 1 (jan 1969),

manifestó en las reivindicaciones mantenidas por los líderes estudiantiles a lo largo de 1968 a través de la Unión de Estudiantes, que fue temporalmente liberada tras las manifestaciones de febrero de la tutela de los profesores y de la prohibición de implicarse en actividades políticas, y a través de su participación en la propia USA (عبد الله 1991: 154, 174-175).

Otro importante empuje a la reivindicación de mayores libertades vino del Club de Jueces, sometido al poder ejecutivo político durante largo tiempo, que en marzo de 1968 emitió, como hemos señalado, una declaración solicitando, además del respeto de las libertades fundamentales, la independencia de los jueces del poder ejecutivo, la no adscripción de los jueces a la USA y el apartamiento de los militares de los cuerpos judiciales.

Finalmente, como señala Abdallah, ya fuera en un intento de instilar la idea de que el Programa del 30 de marzo estaba en curso de ejecución o fruto de una iniciativa propia de Heikal -que en todo caso contaría con la autorización implícita o explícita de Náser-, el 13 de octubre de 1968 el propio diario *Al-Ahram* abriría el debate en torno a un tema estrechamente relacionado con las libertades: el papel de los servicios secretos y la censura. La ocasión fue brindada por la detención e interrogatorio de un profesor de ciencias sociales y políticas por orden del general Gamal Askar, presidente de la Agencia Central para la Movilización y las Estadísticas (CAPMAS, según sus siglas en inglés), que tras su nombre y su tarea declarada de elaboración de estadísticas escondía una de las principales ramas de los servicios secretos. El delito del profesor era haber realizado un estudio de campo y publicado sus conclusiones, cuyo contenido en nada afectaba a la seguridad del país, sin la autorización de la agencia (que sería preceptiva para realizar tales estudios hasta al menos la primera mitad de los 90). Más allá de algunas consideraciones acerca de la necesaria libertad académica, *Al-Ahram* afirmaba:

“Los «visitantes del amanecer» [como se designaba y se designa en Egipto a los miembros de los servicios secretos] son un fenómeno que no queremos en este país. Van en contra del nacionalismo y de la revolución. Los límites a la acción de CAPMAS deben estar claros, para que no se reproduzcan los excesos que hemos padecido en épocas pasadas (...) Debates como el que planteamos eran imposibles antes del 30 de marzo”¹²².

Tras el editorial del diario, y a lo largo de una semana, se sucedieron en sus páginas los artículos de profesores universitarios en apoyo a él y dando a conocer casos similares, lo que provocó que por primera vez un responsable de los servicios secretos se viera obligado a intentar defender públicamente sus argumentos en las páginas de los periódicos (عبد الله 1991: 175-176).

Págs. 18-19, tabla 6 (citado por عبد الله 1991: 146).

¹²² *Al-Ahram*, 15 de octubre de 1968. Citado por عبد الله (1991: 176).

4.4 LAS PROTESTAS DE NOVIEMBRE DE 1968 Y EL FIN DE LA PERMISIVIDAD

La permisividad con la oleada de críticas al funcionamiento del régimen naserista desencadenada por las protestas de febrero llegó a su fin tras una nueva serie de protestas que se desencadenó ocho meses después promovida, de nuevo, por la movilización de los estudiantes. En esta ocasión los motivos de la propuesta, que comenzó el 20 de noviembre, fueron más específicos de los estudiantes: la promulgación de una nueva Ley de Educación que establecía para los estudiantes de Secundaria mayores exigencias para pasar de un curso a otro y para acceder a ciertas escuelas llevó a los estudiantes de Al-Mansura a salir a la calle en protesta por ella. En el curso de las protestas se produjeron enfrentamientos con la policía, y tres estudiantes resultaron muertos. Pocos días después, los estudiantes de la Universidad de Alejandría se manifestaron en solidaridad con sus compañeros. De nuevo se produjeron enfrentamientos y detenciones y, a pesar de que las autoridades intentaron combinar la represión con el diálogo, la tensión fue en aumento en Alejandría, mientras que en otras ciudades el régimen lograba contenerla con el cierre de las universidades. El 25 de noviembre se produjeron en Alejandría manifestaciones masivas en el marco de una huelga general, que de nuevo desembocaron en enfrentamientos con la policía, mucho más graves que en las ocasiones anteriores: 16 manifestantes resultaron muertos (entre ellos solo 3 eran estudiantes) y 248 policías heridos. Además, fueron destruidos decenas de autobuses y cientos de instalaciones públicas como paradas de tranvía, semáforos, etc. (عبد الله 1991: 194-197).

La destrucción causada por esta nueva oleada de protestas sirvió al régimen naserista de argumento o de pretexto para acabar con su política de permisividad hacia las críticas y movilizaciones de la sociedad. A pesar de que Násir se implicó personalmente para que las decenas de dirigentes estudiantiles no fueran en última instancia siquiera juzgados, sino tan solo, algunos de ellos, obligados a hacer el servicio militar (aunque en un principio se les dirigió la grave acusación de “haber incitado a acabar con el sistema de Gobierno”), su respuesta política a los acontecimientos fue diferente a la de meses anteriores, pues, entre consideraciones acerca de la necesidad de mantener el orden y “la unidad del frente interior”, acusó a una parte de los estudiantes de formar para de los elementos reaccionarios y contrarrevolucionarios, y a otros de hacer el juego a los intereses de los enemigos exteriores. Y la nueva línea marcada por el Presidente fue seguida por la mayor parte de la prensa estatal y por los responsables de la USA, que en los meses anteriores se habían mostrado particularmente receptivos a las críticas que emanaban de la sociedad, y en particular de los estudiantes (عبد الله 1991: 199-207). El propio Heikal concluyó desde las páginas de *Al-Ahram*: “Tras las manifestaciones de febrero pasado, la manera de tratar con los jóvenes se desplazó de un extremo al otro (...) hasta acabar

pareciendo dedicado a satisfacer todas sus demandas”¹²³. Tras las manifestaciones de noviembre de 1968, se reimpuso la tutela de los profesores afines a la Unión de Estudiantes, y se prohibieron de nuevo las actividades políticas en su seno.

4.5 EL GIRO DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE EGIPTO

Es posible que la actitud de mayor permisividad política del régimen naserista a lo largo de 1968 respondiera tan solo a una maniobra para ganar tiempo ante la situación en la que se encontró Egipto tras la derrota. También es posible que el fin de dicha permisividad fuera una respuesta relativamente “lógica” en una situación de abierta crisis económica ante la necesidad de mantener el “esfuerzo” de guerra frente a Israel.

Desde un primer momento, Náser fue, obviamente, más consciente que nadie del alcance económico de la derrota, más allá de sus consecuencias políticas y sociales. La ocupación del Sinaí y el Canal de Suez privó a Egipto de los ingresos de este y del petróleo de la península, así como de una de sus más importantes refinerías, la de Suez, bombardeada por Israel, y de los nacientes ingresos del turismo. Con un 80% de su maquinaria de guerra destruida, acentuados sus ya inveterados problemas para obtener financiación y divisas extranjeras, y con parte de la producción industrial paralizada por falta de recursos, Náser tuvo que tragarse su orgullo y aceptar la ayuda financiera de Arabia Saudí y otros países del Golfo en la Cumbre de Jartum de 1967. Aunque de dicha cumbre salió el compromiso de todos los Estados árabes de no recurrir “ni a la paz ni a la negociación con Israel”, Náser tuvo que admitir la disposición de la mayoría a la “no guerra” y adoptar el compromiso implícito de abandonar su política “radical” respecto a los países árabes y la región, ratificada mediante la retirada del Ejército egipcio de Yemen.

Los esfuerzos de Náser para lograr una mayor implicación financiera de los países del Golfo en su intento de mantener el enfrentamiento militar con Israel y forzar a este a retirarse del Sinaí fueron, sin embargo, infructuosos. Tampoco los evidentes signos de su voluntad de acercarse a Estados Unidos y otros países europeos fueron bien recibidos, lo que hizo que Egipto incrementara su dependencia de la Unión Soviética para obtener financiación y ayuda militar, y que a partir de marzo de 1969 se embarcara en una guerra de desgaste con Israel. En términos militares, Egipto se llevó con mucho la peor parte en esta segunda parte del conflicto, pues la aviación israelí efectuaba a su antojo incursiones en el espacio aéreo egipcio, destruyendo numerosas instalaciones industriales en el Valle del Nilo. Sin embargo, en términos políticos la guerra de desgaste fue un relativo éxito, pues consiguió que los Estados Unidos, temerosos de la influencia soviética en Egipto, se implicaran de nuevo en una resolución del conflicto más acorde con los intereses egipcios.

¹²³ *Al-Ahram*, 6 de diciembre de 1968. Citado por عبد الله (1991: 206).

El 9 de diciembre de 1969, el Secretario de Estado norteamericano, William Rogers, hizo público su proyecto: abandono de los territorios egipcios ocupados por Israel; compromiso de ambas partes para negociar la paz; desmilitarización del Sinaí; acuerdos de seguridad sobre Gaza, y acuerdos de libre tránsito por el Golfo de Áqaba. La consecución por parte de Egipto poco después, en enero de 1970, del aprovisionamiento de misiles tierra-aire y militares soviéticos para utilizarlos, que le permitirían detener los ataques de la aviación israelí, fortaleció la posición de Egipto de cara a posibles negociaciones con Israel, lo que permitió a Náser declararse dispuesto a firmar un alto el fuego mediado por Estados Unidos y a entablar negociaciones sobre la base del Plan Rogers. El alto el fuego fue firmado en julio de 1970.

La nueva posición de Egipto, que implicaba su disposición a alcanzar un acuerdo unilateral, rompiendo el frente común árabe contra a Israel, radicalizó la postura de diversos actores regionales, y en particular de los palestinos, apoyados por Siria, que lanzaron una campaña de acciones militares, atentados y secuestros aéreos. La contundente respuesta de Israel en territorio jordano, donde se encontraba y desde donde actuaba principalmente la OLP, llevó al rey Husein de Jordania a dirigir sus tropas contra aquella, dando pie al “Septiembre Negro” de 1970, en el que la OLP y gran parte de los refugiados palestinos podrían haber sido exterminados de no mediar la intervención de Náser. Finalmente, el 26 de septiembre de 1970 los jefes de Estado árabes reunidos en El Cairo alcanzaron un acuerdo según el cual los combates cesarían, y la OLP y los refugiados palestinos en Jordania se trasladarían al Líbano. Dos días después, el 28 de septiembre, Náser, que padecía diabetes y arterioesclerosis desde hacía varios años, y a quien sus médicos habían recomendado “evitar la tensión”, moriría de un ataque al corazón, tras haber vivido una suerte de “canto del cisne” político.

A los funerales de Náser asistieron entre cuatro y cinco millones de personas¹²⁴, que conformaron la mayor manifestación de duelo nunca vista en la historia, no solo cuantitativamente sino también cualitativamente. Las imágenes de cientos de miles de hombres, mujeres y niños llorando, perdiendo el conocimiento, e intentando acercarse para tocar el cadáver de Náser dieron la vuelta al mundo, sintetizando lo que el presidente fallecido había supuesto para la mayor parte de su pueblo: una esperanza, un sueño y una decepción final de tintes catastróficos que, tras la muerte del presidente, sumió a muchos en la desesperanza.

124 Cuatro millones de personas fue el número de asistentes a los funerales estimado por el *Libro Guinness de los Records* (Al-Sayyid Marsot 1985: 128), mientras que otras fuentes, como la BBC, situaron la cifra en torno a 5 millones (<http://goo.gl/tH4SjO>, consulta 1 de mayo de 2014).

5. CONCLUSIONES

5.1 DESARROLLO, MODERNIZACIÓN Y CRISIS ECONÓMICA

Uno de los principales objetivos del régimen naserista fue impulsar el desarrollo económico, social y educativo del país. Para alcanzarlo, optó por la dirección, planificación y control de la mayor parte de la actividad económica por parte del Estado, nacionalizando gran parte de los recursos económicos pero sin eliminar el sector privado. La industrialización, la sustitución de las importaciones, los grandes proyectos estatales orientados a la producción de energía, al incremento de la superficie cultivada, a la producción de bienes de equipo y a la elaboración de las materias primas (siderurgia, cemento, fertilizantes, etc.) fueron los principales objetivos instrumentales de esa política.

Entre mediados de los años 50 y mediados de los 60 los resultados económicos parecieron ser razonablemente buenos, con un crecimiento medio del PIB cercano al 6% que permitía mantener la constante creación de empleo en la industria, la burocracia y el aparato del Estado, los servicios sociales y la educación, en un círculo virtuoso que reactivaba a su vez la economía. Sin embargo, aunque dicha media de crecimiento se mantuvo en los 60, los objetivos económicos y sociales finales del régimen naserista, que pretendía doblar el PIB del país tan solo en esa década por medio de dos planes quinquenales, no eran realistas, principalmente porque infravaloraron el que sería su permanente problema: la financiación.

En un primer momento, la reforma agraria, la nacionalización del Canal de Suez, el descubrimiento de moderados recursos petroleros (en el Sinaí y en el desierto occidental) y gasísticos (en el Delta y en el norte de Egipto) y la financiación soviética alimentaron la impresión de que el proyecto era posible. Sin embargo, hasta finales de los 60 o principios de los 70 no comenzó a fluir la energía barata de la Presa de Asuán, ni se completó la mayor parte del incremento de la superficie regada (un 25%), mientras que desde principios de los 60 el gasto social se incrementaba permanentemente (alimentado por el gran crecimiento de la población, de casi un 30% entre 1960 y 1970), se acumulaban otros gastos (Guerra del Yemen, indemnizaciones por las nacionalizaciones o expropiaciones), y gran parte de los proyectos industriales y de recuperación de tierras se revelaban costosos, mal gestionados y amenazados por la corrupción, incapaces de solucionar otro de los principales problemas de Egipto: el déficit de su balanza comercial exterior (Al-Sayyid Marsot 1985: 120-12; Waterbury 1983: 95). La financiación soviética se mantenía, pero siempre mediante reestructuraciones que incrementaban el servicio de la deuda y que imponían la condición de la compra de grandes cantidades de material militar.

La situación financiera del Estado podría haberse mejorado un tanto si el régimen naserista se hubiera atrevido a establecer un impuesto sobre la renta de las personas físicas,

en lugar de extraer la mayor parte de sus ingresos fiscales del control del comercio y las aduanas, pero no quiso alienarse a sectores sociales clave para su estabilidad política, como los trabajadores o los militares¹²⁵. Esta reluctancia a extraer impuestos de la mayoría de la población sería durante largo tiempo, y lo es aún en muchos casos, característica de los regímenes árabes, ya fueran populistas o “progresistas” o “conservadores”, y diversos autores (Luciani 1990, 1995; Biblawi 1990) han señalado su estrecha relación con la duración de la ausencia de auténtica representación política en la mayor parte de ellos. El carácter rentista o semirentista de la economía de muchos de estos países, que daría una considerable autonomía económica y política al Estado, e incrementaría su capacidad redistributiva e inclusiva, contribuiría en gran medida a esta tendencia. Aunque de manera global Egipto no pudiera ser considerado aún, en la época naserista, ni siquiera un Estado semirentista, sus rentas internas y externas, variables y sometidas a las circunstancias políticas constituían una parte importante de sus ingresos¹²⁶.

Tras varios años de importantes dificultades con su balanza de pagos, a partir de 1965 podía decirse que Egipto se encontraba inmerso en una crisis económica en toda regla: las importaciones de productos energéticos, maquinaria y materias primas descendieron, y algunas fábricas cerraron o comenzaron a funcionar bajo mínimos. La situación se agravó sobremanera tras la derrota de 1967: sin los ingresos del Canal de Suez, de los recursos petroleros del Sinaí, y de la refinería de Suez destruida por Israel, entre muchas otras instalaciones industriales, y ante la obligación de mantener el esfuerzo de guerra, los recursos financieros del país disminuyeron exponencialmente, al tiempo que lo hacía la producción industrial¹²⁷. Ante estas circunstancias, aunque la retórica socialista del régimen se mantuviera e incluso se incrementara desde mediados de los años 60, lo cierto es que desde al menos 1965 el régimen naserista comenzó a distanciarse lentamente de ella en la práctica, o al menos a alentar políticas más liberales. En abril de 1965 se anunció que el plan quinquenal para 1965-1970 se ejecutaría en 7 años. En septiembre de 1965

¹²⁵ En 1965-1966 más del 60% de los ingresos por impuestos provenían de los impuestos sobre mercancías, y la mayor parte de ello, casi el 50%, de aranceles; mientras que la imposición a los beneficios empresariales aportaba un 20%. El impuesto sobre la renta (en su mayor parte pagado por los trabajadores de la Administración) apenas representaba un 5% del total, siendo esta participación inferior a la del impuesto sobre el patrimonio. Los profesionales liberales aportaban una parte despreciable al conjunto de los ingresos (Waterbury 1983: 224).

¹²⁶ El concepto de renta incluye todos los recursos económicos e ingresos en los que no media la producción o elaboración propia de la riqueza, y así, junto a los recursos naturales de cualquier tipo (petróleo, minerales, agua, lugares de paso e imposición fiscal, etc.) abarca cualquier otra fuente exterior o interior (ayudas económicas internacionales, financiación exterior, envíos de trabajadores en el extranjero, elementos patrimoniales generadores de renta, etc.)

¹²⁷ Waterbury aporta diversos indicadores que ilustran la evolución de los aspectos citados tomando como referencia los años 1960, 1965 y 1970: el déficit comercial pasó, respectivamente, de ser prácticamente inexistente a representar el 3.8% del PIB y luego el 4.7%; el porcentaje de la deuda externa pasó de ser nulo al 11.8% del PIB, y luego el 42%; el gasto en importación de armas pasó de 170 millones de dólares a 810 y luego a 1070 (Waterbury 1983: 30).

Zakariyya Mohai Eddín, reputado por ser uno de los hombres más de derechas y liberales en economía del régimen, asumiría la presidencia del Gobierno, y en el verano de 1966 entablaría negociaciones con el FMI y los principales acreedores de Egipto para diseñar un “plan de estabilización económica” (Waterbury 1983: 96). Dicho plan nunca se llevaría a cabo, pero en los dos años siguientes el Estado incrementaría considerablemente su financiación al sector privado con el objetivo de que este incrementara el volumen de sus exportaciones, principalmente al Bloque del Este, con el fin de reducir el déficit comercial y satisfacer en parte el servicio de la deuda, comenzando esta medida a dar frutos inmediatamente. También en 1966 se anunciaría el proyecto de establecer una zona libre de impuestos en Port Said, proyecto que sería arruinado por la destrucción parcial de la ciudad en 1967 (Waterbury 1983: 167-168). En el medio rural, las clases medias y la burguesía agrícola ya disponían de un fácil acceso a los créditos del Estado, con la ventaja añadida de que aquel no era muy duro a la hora de exigir el pago de dichos créditos (Waterbury 1983: 287-288). La debilidad política del régimen en los años posteriores a la guerra no haría más que favorecer el avance económico, social y político de dichas clases, que se consumaría a principios de los años 70, y que adquiriría una orientación más liberal amparado por las políticas de Sadat.

En definitiva, en términos macroeconómicos el balance final del régimen naserista quedó ensombrecido por los resultados de sus últimos años. Entre 1952 y 1970 el PIB del país se duplicó en precios corrientes, y se sentaron las bases para que entre 1970 y 1975 se incrementara en más de un 25%; mientras que entre 1953 y 1973 el valor de la producción industrial se multiplicó en un 850%, si bien en el último año citado continuó siendo inferior al de la producción agrícola (679 millones de LE frente a 1.060 millones), que conoció un incremento cercano al 400% (Waterbury 1983: 38, 160). Estos relativos avances, lastrados por debilidades económicas estructurales previas (p.ej., el nivel educativo) o derivadas de una inadecuada planificación (por ejemplo, en la obtención de financiación y divisas¹²⁸), no fueron suficientes para afrontar las necesidades y compromisos financieros de Egipto, centrados principalmente en el gasto social y militar y en la inversión industrial.

A pesar del gran impulso dado al sector público, cuyos rendimientos económicos se multiplicaron por 11 entre 1953 y 1973, el régimen naserista no solo no había buscado aniquilar al sector privado, sino que lo había asociado en numerosas ocasiones a los

¹²⁸ Por poner solo un ejemplo, Egipto dependía singularmente de su producción de algodón para equilibrar su comercio exterior y obtener divisas (de ahí la gran repercusión sobre la economía de la desastrosa cosecha de algodón de 1961, que hizo que los ingresos del comercio exterior descendieran de 121 millones LE a 75 millones de 1960-61 a 1961-62), mientras que era abrumadoramente deficitario en su producción de trigo (de ahí que la suspensión de los envíos de Estados Unidos en forma de ayuda en 1965 hiciera que el valor de las importaciones de trigo y harina en 1965-1966 superara levemente el de de todas las exportaciones egipcias a los países occidentales (55 millones LE frente a 52) (Waterbury 1983: 95).

proyectos estatales. Así, en 1973 el 60% de los rendimientos de las actividades económicas provenían del sector privado y, si bien es cierto que más del 50% de ellos provenían de la actividad agrícola, en la producción industrial, por ejemplo, la parte aportada por el sector privado se acercaba al 30% (Waterbury 1983: 160). Parte de este balance final sector público/sector privado se debió a la leve liberalización de la economía con la que en sus últimos años el régimen egipcio pareció querer afrontar sus dificultades, pero esta enmienda de las políticas naseristas fue, como hemos dicho, leve, y no alteraría su carácter general.

5.2 TRANSFORMACIONES SOCIOECONÓMICAS, SOCIOPOLÍTICAS E IDEOLÓGICAS POR MEDIO DEL ESTADO

El régimen naserista redujo muy considerablemente las enormes riquezas y privilegios de cerca de 10.000 familias (Al-Sayyid Marsot 1985: 124) que habían dominado la vida económica, social y política de Egipto durante 100 años, erosionando también la situación socio-económica de algunos de los estratos inmediatamente inferiores de la sociedad, pero dejando a las clases medias-altas prácticamente incólumes, en particular en el medio rural. La pobreza no desapareció, ni lo hizo, en palabras de Al-Sayyid Marsot, “la explotación de los pobres por los ricos” (1985: 129). Sin embargo, aquella se redujo considerablemente, y los trabajadores y campesinos en general consiguieron beneficios y ventajas materiales no desdeñables.

El régimen naserista generó una nueva y nutrida clase media, procedente de las clases bajas y medias-bajas, en el seno del aparato del Estado, y en particular en la burocracia. La extensión de la educación universal facilitó, primero, y garantizó, después (para quienes tuvieran estudios superiores), el empleo en la administración o el sector público. Las nuevas elites dirigentes, tanto tecnócratas como políticos, procedieron esencialmente de esta clase media. El Ejército, principalmente en una primera etapa, y la carrera burocrática después, sustituyeron en gran parte al linaje y a la mera carrera profesional en la vía al ascenso social y económico y la participación política, o, más exactamente, los profesionales que quisieron o pudieron lograr ese ascenso hubieron de hacerlo a través del Ejército o la burocracia. Algo similar sucedió con los intelectuales: la mayor parte de ellos encontraron un lugar en el que desarrollar sus actividades en el aparato del Estado, ya fuera en la propia administración, en el Ministerio de Cultura, en las universidades, en la prensa o en el aparato de producción cultural en general, mayoritariamente controlados por el Estado. Pocos de ellos, fundamentalmente algunos marxistas, se enfrentaron abiertamente al poder, y pagaron el precio por ello con la cárcel, aunque siempre tuvieron una puerta abierta para ser reincorporados al aparato del Estado, a sus beneficios o a la colaboración con el régimen, de donde los demás no se movieron

por convicción, interés o miedo.

El estatismo, la propiedad estatal, el progresismo y el socialismo adquirieron carta de naturaleza ideológica gracias al impulso político (ejecutivo e ideológico-educador) del régimen, entrando en conflicto con el capitalismo y la empresa privada y arrinconándolos, sin acabar con ellos. El islamismo político, que había nacido y se había desarrollado considerablemente entre los años 20 y 40, fue sojuzgado sin piedad, y las interpretaciones y elaboraciones públicas de la doctrina islámica fueron controladas, o atraídas por la pura persuasión al universo ideológico del régimen.

Las políticas del régimen y sus efectos mencionados generaron una nueva relación de los egipcios con el Estado. Pese a todos los pesares que pusieran tener algunos o muchos, y más allá, en particular, de las concepciones sobre el sistema político o sobre la orientación económica a seguir, la mayor parte de los egipcios comenzaron a considerar el Estado como algo suyo, algo que les daba, y debía darles, “cosas” (educación, empleo, servicios sociales, bienestar, confianza en el progreso y el futuro, y también un cierto sentimiento de “honor” o “dignidad” “nacionales”), y a lo que deberían tener acceso. Este sentimiento se derivó en gran parte de las políticas efectivas del régimen en los terrenos económico, social y exterior, antes que de las relativas al sistema político o a su aparato ideológico-cultural, y de ahí que hagamos alusión a dicho sentimiento en este apartado, aunque lo abordemos con mayor extensión en los siguientes.

Los fracasos relativos del régimen naserista abrieron, sin embargo, una grieta en la confianza de los egipcios en el Estado republicano que había comenzado a configurar el régimen naserista, y en la “configuración ideológica” que dicho régimen y dicho Estado había contribuido a propagar. Como se ha señalado abundantemente, las manifestaciones de mayor religiosidad que comenzaron a producirse en Egipto poco después de la derrota de 1967 apuntaban a un “cambio de paradigma” en este sentido entre diversos sectores sociales: el retorno hacia las explicaciones metafísicas y teleológicas (el abandono de Dios como causa del fracaso), y hacia las respuestas y soluciones basadas en los mismos presupuestos. No es de extrañar que, en una especie de transición, las primeras manifestaciones de ese tipo se produjeran en torno a la supuesta aparición de la Virgen, acaecida por primera vez el 2 de abril de 1968 en Zeitún, en los alrededores de El Cairo, y que se reproduciría discontinuamente hasta 1970: las vigiliass en espera de una nueva aparición se sumarían cotidianamente miles de egipcios, cristianos y musulmanes (pues la Virgen había sido tradicionalmente venerada también por muchos de estos), incluso con el beneplácito y la organización de la USA (Al-Sayyid Marsot 1985: 126). No obstante, esta primera fase de “religiosización interreligiosa” daría paso a otra en la que la “corriente” se escindiría por los veneros de las dos comunidades religiosas -cristiana y musulmana-, se radicalizaría y politizaría, y en el “campo musulmán” daría pie al resurgimiento vigorizado del islamismo político que, como ha señalado en diversos lugares Ayubi, vehicula

esencialmente un discurso antiestado (Ayubi 1991: 55; 1996: 297-331), o al menos contra todas las experiencias y conceptos de Estado conocidos.

5.3 SISTEMA POLÍTICO FORMAL Y RÉGIMEN POLÍTICO

Hablar de la existencia de un sistema político en sentido estricto bajo el régimen naserista puede resultar impropio. Un sistema político, incluso aunque no adoptemos una perspectiva formalista, jurídica e institucional, se caracteriza, valga la redundancia, por su “sistematicidad”, por la estabilidad de sus elementos y por la regularidad de su modo de funcionamiento.

Todos los estudiosos y observadores han coincidido en que desde un punto de vista formal, pero atendiendo a la estabilidad y funcionamiento efectivo de las instituciones, la Presidencia de la República fue el único órgano político auténticamente institucionalizado que el régimen de Naser legó al sucesor de aquel: ni las normas superiores, ni el Parlamento, ni siquiera los trasuntos de partido único gozaron de estabilidad ni autonomía ni auténtico poder de decisión frente a la Presidencia de la República. Desde un punto de vista informal, las elites del Ejército, los servicios de seguridad, la burocracia y el partido único sí constituyeron los puntales sobre los que se asentó el régimen naserista, gozando de una cierta autonomía. Pero siempre estuvieron sometidos al presidente, a su poder decisivo y a los cambios de orientación que marcaba. Dichas elites, como el conjunto del pueblo egipcio, tenían un cierto grado de influencia sobre el presidente, pero aquel era, en todo caso, mucho menor que el que él tenía sobre ellos, no solo en virtud de sus poderes formalizados, sino también por su “poder informal”, por el grado de aquiescencia que era capaz de despertar, como veremos más adelante. La situación que estamos dibujando la ilustran perfectamente las palabras de Habib Burguiba, presidente de un régimen (1957-1987) con muchos rasgos muy similares al egipcio -aunque también con alguno, como el papel del partido o el Ejército, marcadamente diferentes. Al preguntársele por la naturaleza del sistema político tunecino, Burguiba respondió: “¿Qué sistema? El sistema soy yo”¹²⁹. Cuando un dirigente político puede o podría decir lo mismo que Bourguiba, resulta más conveniente, en la mayoría de las ocasiones, hablar (como estamos haciendo en este trabajo) de “régimen político” que de “sistema político”. En un régimen “personalizado”, no solo la presidencia (la personalidad jurídica), sino también la acción personal del presidente, son las únicas variables independientes, que condicionan o determinan todas las demás variables.

¹²⁹ Barrington J. Moore (1970): *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*, Gran Bretaña: Penguin/Peregrine, pág.95. Citado por Ayubi (1995: 301).

Pese a lo anterior, dentro de un régimen político personalizado pueden encontrarse, junto a sistemas políticos formalizados que son en realidad subsistemas totalmente subsidiarios e irregulares, características y procedimientos no formalizados pero regulares, que es posible deducir, ordenar y clasificar para intentar dar cuenta de la naturaleza de ese régimen político. No obstante, el concepto de régimen político que manejamos no se reduce, como ya señalamos en la Introducción teórica y conceptual, a los aspectos relacionados con la “pura gestión política”, sino que intenta abarcar “un complejo entramado de factores de diversas características, muchos de ellos de carácter dinámico, de los que no da cuenta el concepto de ‘sistema político’, pero que están estrecha e indisolublemente ligados a este”. Dichos factores (económicos, históricos, antropológicos, culturales, ideológicos, etc.) operan en la estructura social con consecuencias políticas, independientemente de que adopten o no, en sus manifestaciones, una “forma” política.

5.4 UN RÉGIMEN POPULISTA

En la introducción a este capítulo I, ya hicimos alusión a lo que denominamos la “hipercharacterización” de que ha sido objeto el régimen naserista como resultado de las dificultades de aprehender, y en ocasiones englobar en pocos términos, sus diferentes y en muchos casos originales características en los terrenos político, económico y socioeconómico. Hablamos entonces del uso de los términos “dictadura, autocracia, presidencialismo, régimen militar/pretoriano, burocrático, tecnocrático, populista, corporatista, multclasista, socialista árabe, poscolonial, modernizador, carismático, mesiánico, antiimperialista, panarabista, nacionalista, unanimista, etc.”, en un *totum revolutum* que, en realidad, daba cuenta indiscriminadamente tanto de adjetivos o conceptos referidos únicamente al sistema político, o a sus principales características, o a algunos de sus aspectos parciales, o al sistema económico, o a la política exterior, o a las modalidades de participación o no de la sociedad, o a aspectos ideológicos, etc.

En nuestra opinión, la mayor parte de esos adjetivos o conceptos, excluidos los que aportan matices o tendencias maximalistas poco ajustadas a la realidad (como “dictadura” o “régimen pretoriano”), deben ser incluidos en la descripción del régimen naserista. Queda, pues, elegir un término que englobe, junto a otros, la mayor parte de los “descriptores” mencionados. Pensamos que el término más adecuado es el de “populista”, adoptado por muchos estudiosos.

El populismo designó en un principio, en los años 60 y 70 del siglo XIX un movimiento político y cultural mediante el cual una parte de la elite (los *narodniks*), en su mayor parte intelectuales, se propuso asumir los valores y problemas de “el pueblo” (*narod*), lo que en aquella época prácticamente equivalía a decir del campesinado (los *mujiks*), y se resumía en su propia denominación (*narodnichestvo*, “puebloismo” o

“populismo”) y en uno de los principales lemas del movimiento: “ir hacia el pueblo”.

Como señaló Carlier (1995: 206-207),

“este movimiento ideológico se fundaba sobre una relación desigual entre dos actores, el *narodnik* y el *mujik*, de los cuales el primero era activo y el otro pasivo, y en la cual el primero daba nacimiento al otro. Y reposaba menos sobre un conflicto entre dos clases (...) que sobre la lucha entre dos mundos o dos regímenes, el del zarismo y el de la democracia, cuya contradicción sería eliminada por un cuerpo social que se habría separado de [o renunciado a participar en] la estructura de dominación: la *intelligentsia*”.

Aunque las similitudes entre el primer populismo ruso y el del naserismo a partir de esta escueta definición son obvias, las diferencias no lo son menos, y unas y otras se revelarían aun mayores si profundizáramos en el estudio de aquel. Nos interesaba tan solo señalar, a pesar de los pesares, las primeras similitudes, para ahora destacar que, con el paso del tiempo, los movimientos o regímenes de diverso signo ideológico y, sobre todo, cultural, denominados por los politólogos e historiadores “populismos” a raíz de la presencia en ellos de la característica básica del ancestro del término (una élite que renuncia a participar en la estructura de dominación para “ir hacia el pueblo”, asumiendo sus valores y problemas) han sido muy numerosos. A diferencia del movimiento ruso original, muchos otros se constituyeron, tras alcanzar el poder, en regímenes, lo que implicó un elemento de organización del poder del Estado que aquel no llegó a afrontar. Hoy los politólogos no caracterizan como populistas a regímenes que, aunque hayan compartido o compartan las características ideológicas y de movilización básicas del populismo inicial, no tengan en común ciertos elementos en la organización del Estado y del régimen político.

A partir de ahí, las definiciones o conceptualizaciones de los regímenes populistas han sido muy numerosas y, como decíamos, muchos han sido también los estudiosos que han optado por el de populismo como uno de los principales conceptos para dar cuenta del régimen naserista. Ayubi (1995) ha sido uno de ellos, y ha dado una explicación y justificación de uso excelentes para referirse no solo al régimen naserista, sino también a un gran número de regímenes árabes contemporáneos a él.

5.4.1 Presidencialismo, Estado militar-policial y burocracia

Ayubi sitúa los regímenes populistas, “a medio camino entre lo que definiría a los regímenes autoritarios y lo que definiría a los sistemas totalitarios”, señalando que:

“Aunque en diversos grados, que varían de un caso a otro, [los regímenes populistas] giran alrededor de tres polos: el presidente, el Ejército y el partido. Así, lo que se da es una combinación de un Estado-jefe (*état-raïs*), un Estado-seguridad (que incluye aspectos del Estado policial, *daula al-mujabarat*) y un Estado-partido (*partitocrazia*) que

predomina sobre la mayoría de las asociaciones en esa sociedad. La burocracia civil está dirigida y controlada por los tres. En este sistema, la movilización de la gente es en parte carismática (a través del líder), en parte ideológica/política (a través del partido) y en parte organizativa (a través de la burocracia y, a veces, el Ejército)” (Ayubi 1995: 300).

Los componentes organizativos citados pueden asociarse en diferentes combinaciones. En el caso egipcio, el Ejército desempeñó en una primera fase, en gran parte, el papel de la policía y la burocracia, y sería siempre un puntal del régimen aunque perdiera progresivamente protagonismo (a diferencia de lo que sucedería en otros países, como Túnez, por citar solo un caso árabe). Por su parte, el papel del partido, o incluso la auténtica forma-partido, sería menos importante en Egipto que, por ejemplo, en el propio Túnez, en Irak o en Argelia; en Egipto, los trasuntos de partido único formarían parte más del aparato de control político y social que del de movilización. Finalmente, la burocracia civil, aunque sometida en un principio al Ejército, y luego a los trasuntos de partido, sobre todo la USA, gozaría de un considerable grado de autonomía.

5.4.2 Movilización negativa y carismático-ideológica

La movilización y el apoyo social, en lo que respecta a sus fines, suelen integrar en el populismo una dimensión negativa. En este sentido, construye su discurso y sus coaliciones en contraposición a un bloque de poder establecido, que en el caso de los populismos árabes es un poder oligárquico integrado por las clases comerciales urbanas y terratenientes rurales, ya sean estas nacionales, “minoritarias” o extranjeras (Ayubi 1995: 302). En el caso egipcio, si bien el principal adversario designado por el naserismo fue la antigua oligarquía terrateniente, el comercio del sector privado fue también uno de los sectores económicos más restringidos, controlados y reducidos¹³⁰. Pero no hay que olvidar que la movilización de las masas se produjo también, permanentemente, contra un adversario exterior (el colonialismo, el imperialismo, Israel).

Las coaliciones que apoyan a los regímenes populistas se fundamentan socioeconómicamente, según Di Tella, en el apoyo de las masas de las clases trabajadoras y/o del campesinado, además de en algunos sectores de las clases no trabajadoras que sostienen una ideología contraria al *status quo*. Sin embargo, y esto es importante, el apoyo de esos sectores, en particular de los dos primeros, “no se deriva de un poder organizativo

¹³⁰ Entre 1953 y 1973 el volumen de ingresos netos generados por el comercio privado creció tan solo en un 21%, pasando a representar tan solo un 60% del total comercial, mientras que las actividades comerciales desempeñadas por el Estado proveían el 40% en 1973, cuando en 1953 eran inexistentes. Además, los ingresos netos del comercio (exclusivamente privado) en 1953 eran superiores a los de la industria, y de casi el 50% de la agricultura, mientras que en 1973 habían pasado a ser menos de un 25% de los de la industria y un 15% de los de la agricultura (Waterbury 1983: 160).

autónomo”¹³¹. Es más, en el caso naserista, y en los casos árabes en general, los regímenes, “alérgicos” a cualquier concepto de auténtica lucha de clases (alergia derivada tal vez de la tradición de pensamiento político islámico, como veremos más adelante), mostraron un particular empeño en impedir esa autonomía organizativa, ya fuera en la forma de sindicatos, partidos u otras, ofreciendo a trabajadores y campesinos su incorporación al régimen por medio de sindicatos únicos cooptados y controlados por el régimen y el Estado. En cuanto a otras clases y grupos sociales, menos homogéneos en su apoyo al régimen, o con amplios sectores predispuestos contra él, el patrón fue un tanto similar, ofreciéndoles el régimen un sistema de representación corporativista no política, y movilizándolo a sus partidarios dentro de las organizaciones corporativas, cooptando estas o reprimiéndolas cuando fuera necesario. En el estadio avanzado del régimen naserista, este había creado ya, además, como suele decirse “su propia clase social”, la burocracia (la única que no necesitaría una organización corporativa, pues estaba ya plenamente incorporada), que sería la que le daría mayor estabilidad.

De esta manera, en el populismo en general, y también en el caso naserista, se dio lo que Ayubi llama “una coalición amorfa” entre las clases populares (urbanas, dice él, pero extensibles al medio rural en el caso naserista) y un sector predominante de la clase media dispuesto a cambiar el *status quo* (Ayubi 1995: 304). Esos grupos “incongruentes” y las masas movilizadas y disponibles “lo que tienen en común es su odio apasionado al *status quo*” (Di Tella 1965: 50, cf. Ayubi 1995: 304).

En este contexto, en el caso naserista, a pesar de la existencia de organizaciones orientadas a la movilización (OL, UN, USA) y del papel destacado de la burocracia en ella, el componente principal de la movilización fue de tipo carismático-ideológico, siendo los mediadores entre el presidente y las masas absolutamente subsidiarios.

Como señaló Bin Ashur, haciendo especial referencia al Egipto de Náser y al Túnez de Bourguiba:

“La relación entre el *raïs* y el pueblo es directa: inmediata, emocional, maravillosa, casi «personal». Constituye la columna vertebral del sistema político, en una situación en la que las organizaciones políticas no son más que herramientas para la movilización en aras de una democracia plebiscitaria y populista. En esta democracia el discurso se dirige al «pueblo», al que se considera necesitado de dinero y cultura. Se trata de un discurso político plagado de deseos, promesas, invocaciones a la alegría de vivir, al progreso y a la igualdad”¹³²

¹³¹ Torcuato Di Tella (1965): “Populism and Reform in Latin America”, pág. 47 en C. Veliz (ed.), *Obstacles to Change in Latin America*, Londres: Oxford University Press (citado por Ayubi 1995: 303).

¹³² Iyad Bin Ashur (1990): “Ta’ammulat fi al-shara’iyya wa-l-thaqafa wa-l-dawla al-sha’biyya”. *Al-Fikr al-Arabi al-Mu’asir*, nº 72/73, enero-febrero, pág. 59 (Citado por Ayubi 1995: 300).

5.4.3 Corporativismo, intermediación e inclusión económica y simbólica frente a exclusión política

El “inclusivismo” fue una característica fundamental del régimen naserista, a pesar de que a menudo se ponga el acento en sus exclusiones. Ayubi defendió la conveniencia de utilizar los términos inclusión/exclusión como una opción más útil que la de los de representación y participación a la hora de estudiar los regímenes y Estados árabes, en la medida en que los conceptos inclusión/exclusión tienen una implicación socioeconómica, además de política (Ayubi 1995: 62).

En términos “puramente” políticos, el régimen naserista excluyó de la participación y representación políticas reales a la mayoría de la población, e incluso excluyó formalmente de sus estructuras organizativas, con la letra de las leyes y los reglamentos en la mano, a importantes sectores sociales (por ejemplo, todos los sectores sociales no designados como componentes de la UN o de la USA). Sin embargo, la situación fue bien diferente en los terrenos de la inclusión económica, e incluso en los de la inclusión social y simbólica.

En el terreno económico, los “excluidos” fueron pocos, aunque ciertos sectores sociales resultaran perjudicados mediante la disminución de su riqueza y la limitación de sus actividades. Por el contrario, las políticas “distributivas” beneficiaron a la gran mayoría, no solo mediante la extensión de las políticas sociales o el incremento de las ventajas laborales o los salarios, sino también de la aceptación en el gran aparato del Estado y sus servicios, incluso en sus órganos dirigentes, de cualquier persona de cualquier tendencia ideológica que estuviera dispuesta a renunciar la disidencia política, como señaló Ayubi (1991). Esta aceptación, que ya hemos señalado en relación a los intelectuales, pero que se produjo en todo el ámbito profesional, transcendía la inclusión económica, y entroncaba con la inclusión simbólica y social.

Por supuesto, un objetivo principal de las políticas inclusivas del régimen naserista era incrementar su poder, tanto mediante la obtención de apoyo o consentimiento, como de la extensión de sus instrumentos de control social. La fórmula corporativista fue un elemento entre otros de esta política inclusiva, y sin duda se derivó de la búsqueda de una cierta representatividad, de posibles estructuras de apoyo y, sobre todo, del control. Aunque al formar la Unión Nacional se declaró que esta representaría “a todo el pueblo egipcio”, el régimen naserista nunca pretendió -ni en la práctica ni en su retórica- disponer de un sistema que representara a las diversas ideologías, sino de uno que “representara diversos intereses”, aunque se le llamara “alianza de las fuerzas trabajadoras” o “de las fuerzas populares” (como sucedió en el Pacto de Acción Nacional o en los documentos constitutivos de la USA). Esta representación de intereses, articulada en torno a las estructuras corporativas, se basaba en una “política de la intermediación” más que en la de

la pura representación. Según esta política, se privilegiaba, mediante la persuasión, la presión o, en último, caso la imposición, que los representantes de las diferentes estructuras (sindicatos, iglesias u organismos religiosos, organizaciones de cualquier tipo) no fueran elegidos con total libertad, sino que lo fueran en virtud de su capacidad de aunar la representación de los intereses de sus representados con la de los intereses del propio régimen. Es muy importante tener presente esta “lógica representativa”, porque nos la encontraremos mucho más adelante interiorizada en gran medida por los representados como algo ineludible, ya en otras épocas en las que los procedimientos electivos fueron más libres sobre el papel y en la práctica.

5.4.4 Legitimación económica y nacionalista. Entre la eficacia y objetivos

El llamado “carisma” de Násir pudo ser, como señaló Al-Sayyid Marsot, la principal razón de la aquiescencia de las masas a sus políticas (1985:129). Pero si esto fue así, ello se debió a todo lo que condensaron su personalidad y sus políticas. Antes de infundir él legitimidad a estas, antes de contar con una *autoridad legitimadora personal*, tuvo que obtener esta de aquellas políticas, o de su capacidad para “proponer” nuevos conceptos de legitimidad o de renovar o reformular los antiguos.

A medio camino entre las fuentes nuevas y antiguas de la legitimidad “explotadas” por el régimen y por Násir, se encontraba la legitimación por razones económicas. Si bien ya hemos aludido abundantemente a ella, es necesario recordarla, por un lado para destacar su preeminencia respecto a la legitimidad por razón del sistema político, y por otro lado, para matizar su modo de funcionamiento. A pesar de la indudable existencia de voces discordantes, la privación de libertades políticas no logró movilizar contra el régimen a importantes sectores de la población, mientras que los beneficios materiales obtenidos sin duda contribuyeron en gran medida a ganar la adhesión al régimen naserista. Incluso en 1968, cuando se alzaron voces reivindicando un cambio en el sistema político, lo hicieron aguijoneadas tanto por el fracaso económico final como por el “fracaso simbólico” de la derrota. Y, de cualquier manera, la guerra de 1967 y los acontecimientos de 1968 introducirían un cambio de paradigma (o una diversificación de los paradigmas), en las actitudes de tan solo una parte de la población frente a la política y el régimen político, cambio que en gran medida hay que estudiar fuera del ámbito del régimen naserista aunque fuera propiciado por el balance final de aquel.

Pero, por otro lado, hay una importante matización que hacer a la cuestión de las razones económicas de la legitimidad. Se trata, como señaló Ayubi, de que, en el caso egipcio, hay que destacar la “legitimación del Gobierno en función de los objetivos, antes que de los procedimientos y los logros (...). Estrictamente hablando, el éxito o el rendimiento es menos importante que la autenticidad de la misión” (Ayubi 1995: 299).

Sólo este factor de la “legitimación por objetivos” puede explicar, como señaló así mismo el autor, la actitud de las masas ante la derrota de Egipto en 1967, la pérdida de territorios nacionales y la inmersión en una profunda crisis económica, “perdonando” a Náser cuando era de todo punto evidente que era el responsable último de la catástrofe. Y si bien hemos apuntado anteriormente cómo la devolución de Náser al poder en 1967 pudo responder en parte a la lógica “tu nos has metido aquí, tu nos sacas de esta”, quedaría por explicar por qué más de cuatro millones de personas salieron a las calles para honrar y llorar a su líder en 1970.

La actitud de los egipcios frente a Náser y sus políticas ha sido frecuentemente calificada de “sentimental” o “emotiva”. Sin duda lo era, y el propio Náser, como ya hemos señalado, invocó en numerosas ocasiones la “sentimentalidad” de los egipcios para justificar sus políticas, como hizo en este pasaje de su discurso con ocasión de la nacionalización del Canal de Suez :

“El 14 de marzo recibí en casa al embajador británico y le dije: nosotros somos un pueblo sentimental. Preferimos una palabra agradable a 50 millones de dólares, y no aceptamos un insulto ni por 150 millones de dólares (...) Nosotros no os pedimos la ayuda, y la aceptamos por no haceros un feo. No somos un Estado rico, pero si necesitamos 50 millones, los ahorraremos: trabajaremos un poco más, picaremos algo más de piedra (...)”¹³³.

En otras diversas ocasiones, cuando otros países u organismos denegaron ayudas económicas a Egipto, Náser insistiría en esta línea argumental de anteponer los sentimientos al bienestar material, pero esos sentimientos siempre estaban relacionados con la dignidad (nacional y personal) u otros valores semejantes:

“Si los norteamericanos creen que dándonos un poco de ayuda conseguirán gobernarnos o entrometerse en nuestros asuntos... no venderemos nuestra independencia: beberemos un poco menos té, beberemos un poco menos café, comeremos un poco menos carne”¹³⁴.

En nuestra opinión, no es adecuada la actitud de muchos estudiosos que han opuesto indiscriminadamente esta motivación “sentimental” a una actitud “racional”, y menos aún cuando lo han hecho, como por ejemplo casi siempre Vatikiotis (por citar únicamente a un historiador por lo demás de gran valía académica), incluyendo constantes alusiones peyorativas o incluso despectivas tanto hacia Náser como a los egipcios. No creemos que los sentimientos hayan de ser siempre separados de la “racionalidad”, como si

¹³³ Texto escrito del discurso pronunciado para anunciar la nacionalización del Canal de Suez el 26 de julio de 1956, tomado del sitio web denominado President Gamal Abdel Naser (<http://goo.gl/YtTu0T>, consulta del 24 de septiembre de 2014).

¹³⁴ Discurso tras la denegación de la ayuda norteamericana en 1965, *Youtube* (<https://goo.gl/wijSCT>, consulta del 22 de octubre de 2014).

solo existiera una y no subjetivamente sesgada, y pensamos que el “reconocimiento” o no a la labor de un dirigente difícilmente puede liberarse de elementos subjetivos¹³⁵.

5.4.5 Gobierno, régimen, Estado y legitimidad

Como ya hemos señalado al principio de este trabajo, concebimos la legitimidad política, o más exactamente su “legitimación”, como la medida en que un Gobierno o los gobernantes, un régimen o un Estado cuentan con “apoyo popular”, o “ciudadano” desde un punto de vista cuantitativo.

Esta concepción puede encontrarse, sin embargo, con importantes dificultades al estudiar regímenes como el que nos ocupa. La primera de ellas reside en que bajo el régimen naserista no existieron procedimientos e instrumentos (elecciones libres, encuestas de opinión, etc.) que pudieran dar cuenta objetiva y completa tanto del apoyo popular, como de su contrario (el rechazo), como de los posibles matices a ambos, expresados en todo caso con total libertad y seguridad. Únicamente contamos con una serie de grandes manifestaciones de apoyo popular a Násir o a sus políticas, producidas en diversas ocasiones, y con los testimonios generalizados, de la época y posteriores, acerca de la gran importancia de ese apoyo. Pese a ser estos datos objetivos, aunque difícilmente cuantificables, no contamos, sin embargo, o en muy pequeña medida, con datos que pudieran permitir calibrar adecuadamente el rechazo o el descontento y, sobre todo, contamos con muy pocos datos -excepto del periodo posterior a 1967- que permitan discernir matices fundamentales acerca de qué aspectos del régimen naserista gozaron de mayor aprobación y cuáles menos (¿el sistema político?, ¿el sistema económico?, ¿la política internacional?, ¿los gobernantes concretos, al margen, en la medida en la que es posible, de los sistemas y las políticas?, ¿el propio tipo de Estado? etc.).

Las dificultades para conocer las opiniones diferenciadas o matizadas de los egipcios respecto al régimen naserista, a los gobernantes y al Estado emanan principalmente de la propia naturaleza de aquel, pero no solo por los límites impuestos a la

¹³⁵ La actitud de Vatikiotis que hemos señalado preside sus escritos sobre la época naserista (1978, 1991), y ha de ser contrastada con su visión -abrumadoramente positiva- acerca del Gobierno británico directo sobre Egipto. De las páginas finales de su capítulo dedicada a aquel, señalaremos tan solo algunas líneas: “a pesar de la preocupación de Gran Bretaña por los campesinos egipcios durante cerca de cuarenta años, cuando terminó la Primera Guerra Mundial la explosión del levantamiento nativo se extendió por todo el país, sorprendiendo a algunos por su crudeza. La pobreza y las dificultades empujaron a los campesinos a la rebelión (...) Los egipcios, en pocas palabras (...), querían que su país les fuera devuelto. Se habían alejado de sus mentores y tutores, pensaron que su aprendizaje había concluido” (1991: 169-178, cit. 178). Resulta muy discutible que “la preocupación de Gran Bretaña por los campesinos” fuera un dato objetivo, y sin duda en la reflexión de Vatikiotis encontramos un dato objetivo acerca de su subjetiva actitud paternalista, que observa con distancia cómo los egipcios (en particular los campesinos) no supieron apreciar que la pobreza y las dificultades que les acarreó el Gobierno imperial británico eran, por lo que parece la opinión de Vatikiotis, objetivamente inevitables.

libertad de expresión por aquel ni por sus propuestas y su demanda de adhesión holistas y unanimistas, sino porque los gobernantes, y muy en particular Násér, construyeron su régimen al tiempo que construían o remodelaban totalmente el Estado. Todo (la acción de Gobierno, la organización política y la estructura estatal) se construía al mismo tiempo, y la singular confusión que se dio entre gobernantes, régimen y Estado procedía de esa simultaneidad, además de la evidente falta de voluntad o incapacidad de establecer los contornos entre unos elementos y otros.

Numerosos estudiosos (Podeh y Winckler 2004a) han debatido acerca de si cabe hablar del naserismo, de una “ideología naserista”, o tan solo de un régimen naserista. En este sentido, es muy sugerente, y pueden ser muy útil, la reflexión-conclusión de Debray:

“Una «ideología» es una sociurgia, un proceso presentado como resultado: lo que queda de un grupo cuando ha acabado de organizarse. Si las ideologías no son maneras de ver el mundo, sino maneras de organizarse en el mundo, la lógica de la ideología encuentra su clave en la lógica de la organización” (Debray 1981: 255).

Efectivamente, muchos de los estudiosos aludidos buscaron la ideología naserista en Násér, tanto *a priori* (buceando en su biografía previa a la llegada al poder), como en su única obra teórica, escrita tras llegar a él (*Filosofía de la revolución*), como en sus discursos. Quizás, si existe una ideología naserista, solo puede deducirse del régimen de Násér, y habrá que tener en cuenta que dicha ideología no fue solo el fruto de una visión fija del mundo del presidente egipcio, sino del desarrollo histórico, político y social en el que intervinieron muchas más personas que el presidente.

No obstante, fuera lo que fuere de la cuestión de la ideología naserista, lo cierto es que tras la muerte de Násér en Egipto quedó un “agregado” de elites políticas, régimen político (estructuras, políticas y principios) y Estado (instituciones, leyes, aparato) bastante indiferenciado, que había sido en gran medida “cementado” e inspirado por Násér, tras cuya desaparición, al margen de los posibles cambios de orientación, actitudes y relaciones políticas, era previsible un cierto “decantamiento” que permitiera discernir entre tales componentes.

II. EL RÉGIMEN DE SADAT. INTRODUCCIÓN DE LA DUALIDAD Y EROSIÓN DEL RÉGIMEN POLÍTICO

1. LA CONSOLIDACIÓN EN EL PODER DE SADAT (1970-1973).....	227
1.1 Los hombres fuertes del régimen naserista y la posición de Sadat en él.....	227
1.1.1 La carrera política de Sadat y su posición en el régimen	231
1.2 La “Revolución Correctiva” de mayo de 1971. Depuración y reestructuración de la elite dirigente	233
1.3 Toma del control del Parlamento y de la USA. La Constitución de 1971	235
1.4 La prioridad de recuperar el Sinaí	237
1.5 Protestas laborales y conflictos interconfesionales	238
1.6 El renacer del movimiento estudiantil y la represión de los intelectuales de izquierda ...	241
1.7 La “semivictoria” de Octubre. La ansiada legitimación personal de Sadat.....	245
2. DISTANCIÁNDOSE DEL RÉGIMEN NASERISTA: <i>INFITAH</i> , PLURALISMO E ISLAMIZACIÓN (1973-1976)	246
2.1 El comienzo del <i>infithah</i> (la apertura económica).....	246
2.2 Devolución de propiedades agrícolas y urbanas.....	248
2.3 Introducción del pluralismo encajonado.....	249
2.3.1 Sondeando a la USA. Dividir para vencer.....	249
2.3.2 Autorización de las “plataforma de expresión”	252
2.3.3 De la Administración Local al Gobierno Local.....	254
2.3.4 Las elecciones al Parlamento de 1976 y la disolución de la USA.....	256
2.3.4.1 Ley electoral, candidaturas y campaña electoral	256
2.3.4.2 Resultados, representatividad y lógicas electorales singulares	258
2.3.4.3 La disolución de la USA y la autorización de la formación de partidos	261
2.4 Retradicionalización del régimen e islamismo político.....	262
2.4.1 La “vuelta a la religión” del régimen de Sadat.....	262
2.4.2 Las relaciones del régimen de Sadat con los Hermanos Musulmanes en la primera mitad de los 70.....	263
2.4.3 El impulso gubernamental a las <i>gamaat diniyya</i>	265
2.4.4 El asalto a la Academia Técnica Militar (1974) y las corrientes islamistas yihadista y tafkirista.....	267
2.4.4.1 El venero de la corriente islamista yihadista. La influencia decisiva de Sayyed Qutb.....	268
2.4.4.2 La experiencia de las cárceles naseristas. Las escisiones de los Hermanos Musulmanes.....	272
2.4.4.3 La corriente <i>tafkirista</i>	274
2.4.5 La corriente salafista.....	277
2.4.5.1 Las corrientes salafistas en Egipto en los 70	279
3. CONTESTACIÓN SOCIOECONÓMICA, CONFESIONAL Y POLÍTICA. REPRESIÓN Y CIERRE POLÍTICO (1977-1979)	281

3.1 Dificultades económicas y protestas sociales.....	281
3.1.1 El peso financiero de los subsidios a los productos de primera necesidad	281
3.1.2 Primeros efectos económicos y sociales iniciales del <i>infitah</i>	283
3.1.3 Las revueltas de enero de 1977	284
3.2 Represión y pluripartidismo. La apertura de negociaciones de paz con Israel	287
3.2.1 Prohibición de huelgas y manifestaciones y control de la opinión	287
3.2.2 La Ley de Formación de Partidos Políticos	289
3.2.3 El viaje de Sadat a Israel y su oferta de paz	290
3.2.4 Los nuevos partidos políticos	291
3.2.4.1 La refundación frustrada del antiguo partido Wafd.....	291
3.2.4.2 El Partido Socialista del Trabajo (PST), la pretendida “oposición leal” o “constructiva”	294
3.2.4.3 El gubernamental Partido Nacional Democrático (PND)	295
3.2.4.4 El Partido Liberal Socialista (PLS), la muy leal oposición conservadora	295
3.2.4.5 El Tagammu	295
3.3 La expansión del islamismo político y el malestar de la comunidad copta	296
3.3.1 El radicalismo de Al-Azhar y de importantes sectores del régimen	296
3.3.2 La imposición de las corrientes islámicas entre los estudiantes.....	298
3.3.3 El secuestro y asesinato de Al-Dahabi por Al-Takfir wa-l-Higra.....	299
3.4 La comunidad copta entre el islamismo político y el activismo político copto	300
3.4.1 El papa Chenuda III: el principio de una larga y comprometida trayectoria	300
3.4.2 Diplomacia de la Iglesia y unidad de circunstancias de la comunidad	302
3.4.3 La diversidad copta: “laicizantes”, sadatistas y radicales	304
3.5 Los acuerdos de paz con Israel. Oposición y represión	306
3.5.1 Represión de la derecha y la izquierda insumisas	307
3.5.2 La Ley de Protección del Frente Interior y la Paz Social.....	309
3.5.3 Los Acuerdos de Camp David. Primeras manifestaciones de rechazo	310
3.5.4 Las elecciones legislativas de junio de 1979. Refuerzo del control del Parlamento por el régimen.....	312
3.5.4.1 Partidos y programas	312
3.5.4.2 Proceso electoral y resultados	313
3.5.5 El aislamiento de Egipto en su entorno árabe e islámico.....	315
3.5.6 La oposición del islamismo político a Sadat: entre el ambiguo papel de los Hermanos Musulmanes y la vía de la yihad	316
3.6 El fin de la permisividad gubernamental frente a las <i>gamaat islamiyya</i>	317
4. <i>INFITAH</i> Y ESTADO RENTISTA. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES.....	320
4.1 Recesión y crecimiento de base financiera y rentista.....	321

4.2 El estancamiento de la industria productiva y la agricultura.....	322
4.3 Los negocios lucrativos del <i>infitah</i>	324
4.4 El deterioro del sector público industrial.....	326
4.5 Evolución del empleo, las condiciones de vida y la pobreza	328
4.5.1 Empleo y fuga de talentos	328
4.5.2 Condiciones de vida, pobreza y desigualdades	331
4.6 Corrupción extendida y consentida	334
4.6.1 La “gran corrupción” y sus relaciones con el régimen.....	336
4.7 Los cambios en la estructura de poder del régimen de Sadat.....	338
5. RÉGIMEN, ESTADO Y SOCIEDAD.....	340
5.1 Las elites del régimen de Sadat	340
5.1.1 Los hombres de confianza de Sadat: amalgama entre la burocracia, la burguesía y la familia.....	340
5.1.2 Las elites superiores y medias: disminución de los militares y preeminencia de la carrera burocrática	342
5.1.3 La subelite: correa de transmisión del Estado corporativo y enlace con el “segundo estrato”.....	343
5.1.4 La imposición de la burguesía burocrática y privada entre las elites	344
5.2 Mantenimiento del Estado corporativo. Hacia el corporativismo cointegracionista.....	346
5.2.1 Las asociaciones de comerciantes, industriales y hombres de negocios	347
5.2.2 Los trabajadores ante el Estado y el régimen de Sadat.....	350
5.2.2.1 Refuerzo del control del sindicato único. Resistencias y represión de la izquierda...351	
5.2.2.2 Concesiones y represión	354
5.2.2.3 La “economía moral” de los trabajadores egipcios	355
5.3 Los sindicatos profesionales.....	360
5.3.1 Los periodistas y su sindicato: control y resistencias	360
5.3.2 Los abogados y hombres de leyes y el Sindicato de Abogados: independencia y control final	362
5.3.3 El Sindicato de Ingenieros: reflejo de la política de <i>infitah</i>	364
5.4 Los agricultores y campesinos.....	365
5.5 Los estudiantes	368
6. EL FIN DEL MANDATO DE SADAT: REPRESIÓN Y ASESINATO	370
6.1 Las enmiendas constitucionales de 1980, la “Ley de la Vergüenza” y el control reforzado de la Prensa.....	371
6.2 Unidad de la oposición. Incremento de la tensión entre Sadat y el papa	373
6.3 Las detenciones masivas de septiembre de 1981.....	375
6.4 El asesinato de Sadat. El grupo Yihad y las <i>gamaat islamiyya</i>	378

6.5 Las bases socioeconómicas de la expansión del islamismo radical	381
7. CONCLUSIONES	383
7.1 Entre el cambio y la continuidad. La inserción de la “dualidad”	383
7.2 Mantenimiento del presidencialismo autocrático.....	389
7.3 Movilización negativa y retradicionalización. La búsqueda frustrada de la legitimidad personal	391
7.4 Sistema político y régimen político. Un atisbo de “churocracia”	392
7.5 Una nefasta gestión del corporativismo	395
7.6 Crisis de legitimidad. ¿Qué crisis?	397

1. LA CONSOLIDACIÓN EN EL PODER DE SADAT (1970-1973)

La repentina muerte de Násir situó a las elites del régimen ante la necesidad de elegir a su sucesor de manera apresurada. Para la mayor parte de los estudiosos y observadores, la elección de Anwar el-Sadat, hasta ese momento vicepresidente de la República, fue resultado sobre todo de que los auténticos hombres fuertes del régimen no lo consideraban como uno de ellos, sino débil, carente de apoyos importantes, maleable -e incluso corrompible-, y por tanto una figura susceptible de encubrir temporalmente una dirección colegiada de facto, e incluso de ser sustituida cuando las circunstancias lo permitieran o lo requirieran (Waterbury 1983: 349; Aclimandos 2011: 301). Tan solo algunos autores, como Ghali Shoukri (1979: 47-75), desde una perspectiva marxista, se desmarcan de esta visión generalizada, señalando que la elección de Sadat, a pesar de algunas maniobras de distracción en otro sentido¹, no fue una solución de compromiso, y era perfectamente coherente con la evolución seguida por el régimen naserista y sus elites gobernantes en los últimos años del régimen naserista. Para evaluar esta cuestión, conviene repasar la situación del régimen en sus últimos años y la posición de sus principales dirigentes en él.

1.1 LOS HOMBRES FUERTES DEL RÉGIMEN NASERISTA Y LA POSICIÓN DE SADAT EN ÉL

La mayoría de los dirigentes del régimen de Násir fueron miembros fundadores de los Oficiales Libres, que formaron parte asimismo del Consejo de Mando de la Revolución (CMR). A ellos se unieron posteriormente, sobre todo, algunos funcionarios provenientes de los servicios secretos y, en una segunda línea, algunos tecnócratas o burócratas.

Como ya hemos señalado, a partir de mediados de los años 50 fueron alejados del núcleo duro del poder los escasos oficiales libres relacionados orgánicamente con los Hermanos Musulmanes (Rachad Mehanna, Mohammed Hosni al-DamANHuri, Hasan Rifaat al-DamANHuri), y los más numerosos relacionados con la izquierda marxista (Yusuf Siddiq,

¹ Según Shoukri, la difusión desde los círculos del poder del nombre de Zakariyya Mohai Eddín como posible sucesor de Násir habría respondido a estas maniobras de distracción. Mohai Eddín representaba la corriente política del régimen favorable a una política económica liberal que no dañara ni marginara al sector público. En general, gozaba de una reputación de integridad, y no se distinguía por practicar el clientelismo ni por mantener relaciones privilegiadas -como las que mantenía Sadat- con la burguesía agrícola y urbana (Shoukri 1979: 68).

Jaled Mohai Eddín, Abdel Moneim Abdel Rauf). Algunos de estos últimos volverían a ocupar, u ocuparían discontinuamente, ciertas posiciones de responsabilidad o influencia, pero siempre de tercera o cuarta fila, y siempre en función del escoramiento ocasional de las políticas del régimen hacia la izquierda.

Los miembros del CMR que mantuvieron una posición política preponderante a lo largo de los años 50 y 60 fueron poco más de media docena, y pueden ser clasificados según sus orientaciones políticas mediante algunas caracterizaciones gruesas compartidas por la mayor parte de los estudiosos y observadores. Por un lado se encontraban los denominados “pro-occidentales”, relativamente liberales en economía, y orientados en consecuencia hacia una mayor colaboración con el bloque capitalista (Abdel Latif al-Bagdadi, Zakariyya Mohai Eddín -hermano de Jaled-, Hasan Ibrahim); por otro estaban los conservadores “ideológicos” con fuertes tendencias islamistas (Kamal Eddín Husein, Husein al-Chafai). Abdel Hakim Amer, conservador en muchos conceptos, se distinguía por su “especialización” en el control del Ejército y por su estrecha relación -hasta su caída en desgracia- con Náser, pero de cualquier manera falleció antes del acceso al poder de Sadat. Ali Sabri era el principal exponente de las posiciones de radicales de izquierdas opuestas al marxismo, a pesar de que cultivara sus relaciones con la URSS, y era el principal dirigente del aparato de seguridad y control. Finalmente, Anwar el-Sadat resultaba inclasificable por lo escurridizo y voluble de sus posiciones políticas, como veremos. Aunque sus simpatías anteriores a 1952 por el islamismo e incluso el fascismo, y sus buenas relaciones posteriores con la burguesía -sobre todo rural- eran bien conocidas, se atribuían a su carácter oportunista y diplomático.

Las personas citadas, además de ser miembros del CMR y el Consejo Presidencial hasta que estos desaparecieron (en 1956 y 1964, respectivamente), se repartieron la vicepresidencia de la República (las más de las veces colectivamente), fueron casi todas ellas ministros y algunas primeros ministros (Sabri, Mohai Eddín)², y algunos de ellos secretarios generales de las organizaciones de masas o partidos únicos (Sadat, OL, 1953-1958 y UN, 1958-1961; Kamal Eddín Husein, UN, 1958-1961; Al-Chafai, USA, 1962-1965; Sabri, USA, 1965-1970). Anwar el-Sadat fue, además, presidente del Parlamento entre 1964 y 1968, tras haberlo sido del Parlamento de la RAU (1960-1961).

La proximidad a la presidencia, los puestos ministeriales principales y la dirección de las organizaciones de masas eran las posiciones clave en los altos escalafones del poder en Egipto, y a partir de ellos puede pergeñarse el mapa de la evolución de la influencia de personas y corrientes en aquel, teniendo en cuenta otro elemento: la importancia creciente

² Hay que tener en cuenta que Náser asumió personalmente la presidencia del Gobierno durante 11 años, entre 1954-1962 y 1967-1970.

del aparato de seguridad, y en particular de los servicios secretos, en el conjunto del Estado y la sociedad y, dentro de ellos, en la presidencia de la República y en las organizaciones de masas. De esta manera, a los personajes citados habría que añadir los principales dirigentes de dichos aparatos y servicios, y en particular a Sami Charaf, director de la Oficina de la Presidencia y de sus servicios secretos, y a Chaarawi Guma, ministro del Interior o director de los Servicios Secretos Generales durante la mayor parte del periodo naserista. Formal y simbólicamente, Charaf y Guma estarían supeditados a Sabri, con quien controlarían, además del aparato de seguridad, la dirección de la USA y de su Vanguardia, que, formalmente destinada, como hemos señalado, a constituir la “vanguardia socialista”, sería poco menos que una extensión de dicho aparato de seguridad.

Aunque Sabri, Charaf y Guma contarían cada uno con sus propias clientelas políticas y en el aparato de seguridad, y mantendrían una rivalidad permanente inconfesable, compartirían una visión o dirección política general y trabajarían cooperativamente por ella. Es a ellos y a su facción, y principalmente a Sabri (vicepresidente primero de la República entre 1965 y 1968 y presidente del Gobierno entre 1962 y 1965), a quienes, en virtud de su control del aparato de seguridad y de la USA, todos los observadores atribuían la condición de “auténticos hombres fuertes” del régimen a la muerte de Náser, y la aceptación activa de Sadat como nuevo presidente³. No obstante, es necesario completar este enfoque, sin duda parcialmente acertado, pero demasiado centrado en los poderes ejecutivos y coercitivos, con una visión más amplia.

Desde su posición dominante y arbitral, Náser se cuidó siempre de mantener un cierto equilibrio entre los puntales de su poder, y no lo hizo atendiendo solo a consideraciones simbólicas, como la pertenencia a las primeras filas de los Oficiales Libres, sino también a las inquietudes de los diversos sectores sociales. Si situó a Sadat, K. Eddín Husein y Al-Chafai a la cabeza de la OL, la UN y la la USA en su primera etapa (e incluso a Sadat a la del Parlamento) fue probablemente con plena consciencia de que, en su condición de conservadores, desempeñarían mejor la política de control mediante la intermediación y la inclusión que el presidente seguía frente a la burguesía y las clases medias. De la misma manera, si eligió a tecnócratas de filiación burguesa, como Aziz Sidqi y Sayyed Marei -respectivamente el constructor del aparato industrial público y el implementador de las reformas agrarias primera (1952) y última (1969)-, para dirigir sus principales políticas económicas, lo hizo sin duda para que, además de seguir sus orientaciones estatistas (de Náser), moderaran el alcance de las reformas, no eliminando el

³ Según los testimonios de miembros de la Vanguardia de la USA en la provincia de Al-Buhaira recogidos en *Ruz al-Yusuf* (30 de septiembre de 1974), todos los miembros de la organización recibieron de la dirección central, el 6 de octubre de 1970, la orden apoyar a Sadat para la presidencia. Citado por Waterbury (1983:349).

sector privado ni atacando los intereses de las clases medias. Incluso la relativamente sorprendente elección de Amer como presidente del Alto Comité para la Liquidación del Feudalismo (ACLF) en 1966, en lugar de uno de los hombres fuertes del ala izquierda del régimen, probablemente se debió a la voluntad de que Amer, conservador y el mismo terrateniente, ejerciera un papel de moderador, como efectivamente lo ejerció, rebajando las pretensiones de dicho ala izquierda (Waterbury 1983: 280).

Si la orientación del régimen naserista desde mediados de los 60 puede resultar confusa y contradictoria, ello se debe a la voluntad de Násir de mantener los equilibrios sociales y políticos. Tras la etapa de contornos nítidos de la “primera radicalización”, iniciada en 1961 con las nacionalizaciones y la segunda reforma agraria, la supuesta “segunda radicalización” a partir de 1964, avalada por la creación de ciertos órganos y por ciertas medidas legislativas (formación de la Vanguardia de la USA en 1965, formación del ACLF en 1966, reforma agraria de 1969) y por la condición de las personas puestos al frente de ellos (fundamentalmente Sabri y su facción), pareció responder a las demandas y protestas “desde abajo”, de las clases populares y de los elementos radicales del régimen, en el sentido de que la burguesía había conseguido mantener o fortalecer sus posiciones, penetrando y controlando las filas de lo que se llamó “la nueva clase” (los burócratas y los tecnócratas del Estado y de la USA). No obstante, aunque las protestas en 1964 de Al-Bagdadi y K. Eddín Husein por la nueva orientación hacia lo que consideraban “el comunismo”, y su subsecuente apartamiento de la vicepresidencia colegiada de la República ese mismo año, parecieron certificar la seriedad de las intenciones de Násir, los hechos sobre el terreno económico, social y político mostraron más bien que, por voluntad de aquel o a su pesar, la evolución del régimen iba por otros derroteros (Waterbury 1983: 321).

Desde 1965, aun resistiendo a las presiones de dentro y de fuera del país para que recurriera al FMI y aplicara políticas de ajuste estructural, el régimen naserista comenzó a dar mayor cancha y favorecer al sector privado industrial y comercial para afrontar su crisis financiera. No obstante, fue en el medio rural donde las políticas radicales de izquierda conocieron su mayor derrota, como hemos asimismo mencionado. Tras la derrota de 1967, no solo fueron revocadas la mayor parte de las decisiones del ACLF de 1966-67, que habían sido en gran parte una pantomima para salvar la cara del régimen y de la nueva burguesía agrícola a cuenta de la antigua, sino que se dismantelaron las asociaciones radicales de jóvenes y campesinos en el seno de la USA, quedando esta en manos de la nueva burguesía. De esta manera, mientras que Sabri, Charaf y Guma controlaban la dirección de la USA, en ella también contaban con importantes clientelas, sobre todo en el medio rural, elementos conservadores como Al-Chafai, Marei o el propio Sadat. Este

último disfrutaba además de importantes apoyos, surgidos de los mismos medios, en el Parlamento que había presidido entre 1964-1968.

Tras la derrota de 1967, Násér, pese al masivo mandato popular que obtuvo para afrontar la nueva situación, tuvo que lidiar con el deterioro de la imagen del Ejército y el malestar de este, con el similar descrédito y rechazo del aparato de seguridad, con las manifestaciones de obreros y estudiantes apoyadas por sectores de la USA, etc. Expuesto a la pérdida de apoyos entre los componentes principales de su base social, no es de extrañar que combinara su apuesta por apoyarse principalmente en el aparato de control y seguridad encabezado por Sabri, Charaf y Guma con la política de no enajenarse a los medios conservadores, sobre todo en el ámbito rural. La pérdida de confianza de Násér en Sabri, sospechoso de haber criticado las reticencias del presidente de avanzar hacia el socialismo, e incluso de conspirar contra él con la colaboración soviética, hizo que el segundo fuera apartado de la secretaría primera de la USA en julio de 1969⁴. La posterior elección de Sadat como vicepresidente único de la República, en diciembre de 1969, pareció confirmar la decisión de Násér de distanciarse de los dirigentes del régimen relacionados con el aparato de seguridad y con las políticas radicales de izquierdas, en beneficio de los más conservadores. No en vano, la elección de Sadat como vicepresidente coincidió en el tiempo con el anuncio de la aceptación del Plan Rogers.

1.1.1 La carrera política de Sadat y su posición en el régimen

Sadat había sido miembro de los Oficiales Libres desde un primer momento. Con anterioridad al golpe de Estado de 1952 había mostrado simpatías y mantenido contactos con los Hermanos Musulmanes y el Joven Egipto, aunque solo perteneció orgánicamente al segundo. Son bien conocidas sus simpatías por el Eje desde los primeros años 40, cuando, antes de la batalla de Al-Alamein (1942), aquel parecía en condiciones de dominar Egipto. En su juventud, Sadat manifestó una profunda animadversión hacia el rey Faruq y la monarquía egipcia, así como hacia los judíos y los británicos (Vatikiotis 1978: 37-41, 60-61; Shoukri 1979: 47-54)⁵. Fue sospechoso de participar en actividades terroristas junto a

⁴ El encargado de la Oficina de la Presidencia y director de sus servicios secretos, Sami Charaf, fue quien informó a Násér de las supuestas críticas de Sabri a Násér en el Kremlin, donde se encargaba de negociar los suministros de armas. Al parecer, Násér acusó a Sabri de haber recibido comisiones por la compra de armamento (Anthony Nutting 1972: *Nasser*. Londres: Constable, págs. 447-448. Citado por Waterbury 1983: 331).

⁵ En la obra de Sadat sobre “los secretos de la revolución” se encuentra al menos un pasaje despectivo hacia los judíos, en el que el autor manifestó no haberse sorprendido de que un judío ejerciera de intermediario para que se encontrara con dos espías nazis a principios de los años cuarenta, pues aquellos “no dudan en hacer cualquier cosa que se remunere adecuadamente” (السادات 1965: 78).

otros miembros del Ejército, del Joven Egipto y de los Hermanos Musulmanes en los años 40, siendo por ello encarcelado dos veces, una entre 1942 y 1944 por los británicos, y otra entre 1946 y 1948 por las autoridades egipcias, acusado de colaborar en el asesinato de Amín Osmán (1946), el anglófilo ministro de Finanzas, acusación de la que finalmente fue absuelto. El propio Sadat reconoció posteriormente su colaboración con espías alemanes y su participación en actividades terroristas, pero únicamente contra los británicos (السادات 1965: 63-89).

Sadat fue, desde sus inicios políticos, un “superviviente”. Aunque participara en un gran número de actividades ilegales arriesgadas, era precavido y tornadizo cuando lo requerían las circunstancias. Sus actividades políticas, algunas de ellas violentas, contra los británicos y la Monarquía no impidieron que fuera reintegrado al Ejército tras sus etapas en prisión. Sus estrechas relaciones con los Hermanos Musulmanes no dificultaron que presidiera el primer tribunal militar que juzgó a algunos de ellos, en 1954, condenando a muerte a varios. Es bien conocido que a la “hora H” del golpe de Estado del 23 de julio de 1952 se encontraba en el cine con su familia. Según un conocido rumor, incluso provocó un altercado a la salida del cine para que su nombre apareciera en un atestado policial con fecha y hora (Shoukri 1979: 47). Su cuando menos descuido por no encontrarse disponible en el momento del golpe no fue óbice para que fuera el encargado de leer por la radio el primer comunicado de los Oficiales Libres tras el triunfo de aquel.

En el seno del régimen de Náser, aunque siempre se contó entre sus principales dirigentes, Sadat tuvo, sin embargo, un estatuto muy singular, pues apenas tuvo responsabilidades ejecutivas. Sus mandatos casi siempre se relacionaron con la presidencia o dirección de órganos de representación y control políticos, como la Organización para la Liberación, la Unión Nacional, el Parlamento, el Consejo Islámico Internacional o el Consejo de Solidaridad Afro-Asiático. Tan solo fue ministro por un breve periodo en 1954, y vicepresidente de la República durante tres meses en 1964, antes de convertirse en vicepresidente de la República en diciembre de 1969 por un periodo de apenas 10 meses hasta la muerte de Náser. Se diría que este apreciaba su capacidad para las relaciones públicas y la intermediación y su lealtad pragmática, aunque desconfiara de él en última instancia. Según Shoukri, para quien el presidente utilizaba a Sadat tan solo como una “fachada”, la tendencia del último a mantenerse al margen de los grupos de poder y su reticencia a opinar cuando podía evitarlo en las reuniones con el presidente es lo que hacía que los grandes dirigentes naseristas lo consideraran débil. Sin embargo, siempre según el mismo autor, Sadat sabía interpretar las pretensiones secretas de Náser cuando ponía a prueba a sus subordinados, y elegir las opciones y palabras correctas para evitar caer en desgracia (Shoukri 1979: 47-54).

Como Shoukri, Aclimandos (2011: 301-302) defiende que el núcleo duro del régimen naserista que controlaba el partido único y algunos de los principales engranajes del régimen y el aparato del Estado subestimaron el potencial político personal de Sadat y el potencial institucional que le conferirían los poderes presidenciales, además de realizar una lectura general errónea de la situación política. Los componentes de dicho núcleo no valoraron suficientemente su propia impopularidad tras la derrota de 1967, de la misma manera que minusvaloraron la red clientelista tejida por Sadat desde la presidencia del Parlamento y mediante sus contactos entre las clases medias rurales, hostiles a las políticas de izquierdas y a lo que consideraban el “excesivo ateísmo” de Náser. Además, no previeron que Sadat podría contar con los tecnócratas del régimen, incluidos los ministros que desdeñaban a la USA, a la que consideraban -en palabras del autor- “una banda de excitados”. Por otro lado, a pesar de las circunstancias actuales y pasadas, Sadat mantenía contactos cordiales con representantes de algunos de los principales adversarios del naserismo, como los Hermanos Musulmanes o las viejas familias feudales. Finalmente, el que se autodenominaría poco después “muy piadoso presidente” tenía “una comprensión muy fina de los hombres, los actores políticos y la opinión pública”, y había percibido la importancia e intensidad del “retorno de lo religioso” inducido por la derrota de 1967. Todo ello sin desestimar los contactos que había establecido por sus diversas responsabilidades internacionales.

1.2 LA “REVOLUCIÓN CORRECTIVA” DE MAYO DE 1971. DEPURACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA ELITE DIRIGENTE

Tras ser propuesto por el Parlamento como candidato a la presidencia y ratificado en referéndum, Sadat, que eligió como vicepresidentes a Sabri y al conservador Chafai, y a este además como presidente del Gobierno, dándole con ello implícitamente la primacía sobre el primero, mostró pronto que no iba a ser la figura manipulable que muchos suponían. En febrero de 1971, apenas cuatro meses después de su elección, decidió, sin consultar a nadie (lo que motivó la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, Mahmud Riad), proponer al Parlamento la reapertura del Canal de Suez, esperando que Israel correspondiera con la retirada de sus tropas del Sinaí. Inmediatamente después, sin consultar a los órganos directivos de la USA, anunció su intención de promover la unión con Siria, Sudán y Libia. Tras un largo mes de abril de deliberaciones, Sadat consiguió que su propuesta fuera aceptada por la USA, involucrando para ello a su Comité Central, ya que no tenía la mayoría en el Comité Ejecutivo Supremo, dominado por Sabri y sus partidarios. Estos reaccionaron denunciando ante la Vanguardia de la USA las iniciativas “ilegales” del presidente, confiando en que, contando con el control del Ministerio del

Interior y de las Fuerzas Armadas, acabarían imponiéndose (Waterbury 1983: 350). No obstante, Sadat tomó de nuevo la iniciativa, y actuó con una rapidez inesperada: en el discurso tradicional del 1 de mayo lanzó un duro ataque contra “los centros de poder”, la expresión popularizada por Náser tras la derrota de 1967, y al día siguiente cesó a Sabri como vicepresidente de la República y como miembro del Comité Supremo de la USA. Entre tanto, se había ganado el apoyo de gran parte de los altos oficiales del Ejército en detrimento de Mohammed Fauzi, jefe supremo del Ejército y ministro de la Guerra.

En las dos primeras semanas de mayo, el propio Fauzi, Chaarawi Guma, ministro del Interior, Sami Charaf y otros cinco ministros presentaron su dimisión, junto a otros altos dirigentes de la USA, en protesta por el cese de Sabri y el resto de las decisiones unilaterales de Sadat. Probablemente, los dimisionarios pensaron que esta acción colectiva desataría protestas en las calles agitadas por sus partidarios en la USA, que podrían servirles de excusa para movilizar al aparato de seguridad para reprimirlas, y posteriormente dar un golpe de Estado más o menos explícito (Waterbury 1983: 351). Pero tales protestas no tuvieron lugar, y Sadat se apresuró a nombrar un nuevo jefe del Ejército, un nuevo ministro del Interior, Mamduh Salem, y a ordenar, el 15 de mayo, que todos los dimisionarios fueran detenidos por la Guardia Republicana (un cuerpo del Ejército dependiente directamente de la Presidencia de la República) y que 90 altos dirigentes del Gobierno y la USA fueran puestos bajo arresto domiciliario. Todos los detenidos fueron juzgados por un tribunal militar y la mayor parte de ellos condenados a penas de prisión, incluida la cadena perpetua para los más destacados. Mohammed Hasanein Heikal, que era considerado próximo a los disidentes, apoyó sin embargo a Sadat, pese a lo cual fue cesado como ministro de Información, si bien conservó su antiguo puesto de presidente de *Al-Ahram*.

Tras librarse de sus principales rivales, Sadat anunció que la época del Estado policial había terminado, y prometió una reconstrucción de la USA de arriba abajo, eliminando su Vanguardia. En una actuación teatral, prendió fuego personalmente a las grabaciones de 22.000 escuchas telefónicas, y en los meses siguientes hizo liberar a un gran número de detenidos políticos y ordenó la reincorporación a sus puestos de trabajo de algunos represaliados por el régimen naserista, y la devolución de propiedades expropiadas por razones políticas. Estas medidas le ganaron el apoyo de algunos adversarios de Náser y de muchos otros ciudadanos hastiados del control policial. La primera parte de lo que Sadat denominó “la Revolución Correctiva” (الثورة التصحيحية) había concluido.

1.3 TOMA DEL CONTROL DEL PARLAMENTO Y DE LA USA. LA CONSTITUCIÓN DE 1971

Las primeras medidas de Sadat una vez consolidado en el mando apuntaron a distanciarse levemente de algunas orientaciones del naserismo manteniendo la continuidad en otras, en lo que constituiría un periodo de transición hacia su consolidación en el poder. El 27 de mayo de 1971 firmó un tratado de amistad y cooperación con la URSS. En septiembre de 1971, se proclamó la primera Constitución permanente de Egipto desde la época monárquica, que consagró el cambio de denominación del Estado de “República Árabe Unida” a “República Árabe de Egipto”, en el que todos los observadores vieron un distanciamiento simbólico de la política panarabista. En enero de 1972 nombró un Gobierno que incluía a algunas figuras clave de la época naserista que lo habían apoyado, y que al mismo tiempo instilarían la idea de una cierta continuidad en la política económica y social, como Aziz Sidqi, que había sido el gran promotor del sector público y la industrialización naserista, nombrado presidente del Gobierno. Además, nombró a dos marxistas, Ismail Sabri Abdallah y Fuad Mursi, ministros de, respectivamente, Planificación y Aprovisionamiento, con el probable triple objetivo de tranquilizar a la Unión Soviética, ganarse a la izquierda marxista, y fortalecer la idea de que la orientación socialista, o al menos estatista del régimen, no iba a ser modificada⁶. Finalmente, un nombramiento clave fue el de Sayyed Marei como encargado de reconstruir la USA. Marei, el terrateniente encargado de dos reformas agrarias y ministro de Agricultura bajo el régimen naserista, y representante de la burguesía rural, se encargaría, sin embargo, de desactivar la organización, y de sentar las bases para su posterior desmantelamiento.

Según Mohammed Hasanein Heikal, una de las principales, si no la principal motivación de Sadat para promover, sin consultar a ningún otro poder, la creación de la Federación de Repúblicas Árabes entre Siria, Sudán, Libia y Egipto, constituida el 17 de abril de 1971, fue que este hecho exigiría la convocatoria de elecciones para formar un nuevo Parlamento y un nuevo Comité Central de la USA, lo que le permitiría introducir una mayoría sadatista en ambos órganos⁷. La federación no tenía apenas implicaciones para Egipto, más allá de la constitución formal de un Consejo Ministerial Federal y una Asamblea Federal de la Nación (مجلس الأمة الاتحادي) sin apenas prerrogativas. Sin embargo, permitía a Sadat alcanzar efectivamente sus objetivos: en octubre de 1971 se celebraban

⁶ A los nombramientos de Mursi y Sabri Abdallah como ministros se unieron los de otros socialistas marxistas en diferentes puestos de la USA: Abu Seif Yusuf fue nombrado diputado tras las elecciones de octubre de 1971 (el presidente tenía la prerrogativa de designar a 10 miembros), Lutfi al-Juli fue designado presidente del Comité de Asuntos Árabes de la USA, y otros muchos en diferentes puestos menores.

⁷ Heykal, M.H: *Al- Ṭarīq ilà Ramaḍān*, Beirut, 1975, págs. 118-119. Citado por Martín Muñoz (1992: 298).

elecciones al Parlamento. Por primera vez, los diputados fueron elegidos directamente, lo que fue presentado como un progreso en la representatividad de la Cámara. Sin embargo, en la práctica este nuevo procedimiento, combinado con el mantenimiento del requisito de que los candidatos fueran miembros de la USA, y con el hecho de que la Secretaría General de aquella, presidida por Marei, seguía teniendo la potestad de rechazar candidaturas, permitieron a Sadat conformar un parlamento dominado por sus leales, gran parte de ellos notables rurales (Martín Muñoz 1992: 299).

En cuanto a la USA, en julio de 1972 se procedió a la “renovación” de su Secretaría General, en el curso de la cual numerosos personajes destacados por su fuerte tendencia ideológica “islámica” o directamente islamistas (como los antiguos miembros de los Hermanos Musulmanes Kamal Abu Magd y Abdel Aziz Kamel, o el extremista⁸, Mohammed Osmán Ismail), fueron situados en ella (Shoukri 1979: 110).

Por lo que respecta al contenido de la Constitución promulgada en septiembre de 1971, no era muy diferente de las normas y el espíritu por los que se había regido el régimen naserista. El régimen político seguía definiéndose como “democrático, basado en la alianza de las fuerzas trabajadoras” (art. 1) y “socialista”, opuesto a “la explotación” y orientado a “reducir las diferencias de ingresos” (art. 4). La “propiedad” en sus tres variantes -pública, cooperativa y privada- sería “sometida al control y la protección del Estado” (art. 29)⁹.

Una significativa novedad del texto constitucional fue el papel que asignó a la *charía*, que en virtud del artículo 2 pasaba a ser “una fuente principal para la legislación” (el mismo artículo establecía que el islam era la religión del Estado, algo ya establecido en la proclamación constitucional de 1964, aunque no en la de 1962).

El presidente de la República, elegido por dos tercios del Parlamento, ahora denominado Asamblea del Pueblo (مجلس الشعب, antes Asamblea de la Nación), y ratificado en referéndum, seguiría contando con amplísimos poderes: ejercer el poder ejecutivo; nombrar y cesar a sus vicepresidentes, a los ministros, e incluso a los viceministros (art. 149); dirigir las Fuerzas Armadas y la policía; promulgar decretos ley por delegación del Parlamento o en su ausencia, si bien deberían ser ratificados posteriormente por aquel (arts. 108, 147); vetar leyes adoptadas por el Parlamento, que necesitarían, para ser aprobadas definitivamente, el apoyo de dos tercios de la Cámara (arts. 112, 113); firmar tratados internacionales sin necesidad de obtener la aprobación del Parlamento, excepto en una

⁸ Volveremos a hablar sobre este personaje en los capítulos II 2.5.3 (“El impulso gubernamental a las *gamaat diniyya*”) y II 3.3.1 (“El radicalismo de Al-Azhar y de importantes sectores del régimen”).

⁹ Hemos utilizado el texto íntegro de la Constitución de 1971, con las enmiendas introducidas en 1980, recogido en (حلمي 1989: 249-309).

serie de terrenos¹⁰; tomar medidas urgentes en caso de que “algún peligro amenace la unidad o la seguridad de la patria, o impida a las instituciones del Estado cumplir con su papel constitucional”, medidas que deberían ser ratificadas mediante referéndum en un plazo no superior a sesenta días desde su adopción (art. 74).

A la Asamblea del Pueblo la Constitución le atribuía el poder legislativo, la aprobación de la política general del Gobierno y los presupuestos generales del Estado y de los planes generales de desarrollo económico y social, y el control de los actos del Gobierno (art. 86). Se mantenía la exigencia de que al menos el 50% de los miembros de todos los órganos electivos y de representación fueran agricultores u obreros.

Finalmente, el texto constitucional creaba una nueva figura legal que tendría gran importancia en el futuro, la del Fiscal General Socialista (المدعي العام الاشتراكي), al que se encomendaba “garantizar los derechos del pueblo y proteger la seguridad de la sociedad y de su régimen político, así como los logros y comportamientos socialistas”. El texto establecía que la legislación futura podría asignarle competencias más precisas y que su labor quedaba sometida al control de la Asamblea del Pueblo (art. 179).

1.4 LA PRIORIDAD DE RECUPERAR EL SINAÍ

Tras consolidar su poder entre las elites, Sadat no podía anteponer otro objetivo a acabar con la ocupación israelí del Sinaí. Más allá de otras razones de Estado, sabía que era lo único que todos los egipcios estaban de acuerdo en esperar de él, y que podía aportarle un capital amplio e instantáneo de legitimidad. Para alcanzar ese objetivo, en 1971 se declaró dispuesto a entablar conversaciones de paz con Israel, respondiendo a las propuestas del representante del Secretario General de la ONU para Palestina, Jonar Yaring, e incluso tomó la iniciativa de ofrecer, como hemos señalado, la reapertura del Canal de Suez a cambio de una retirada parcial israelí del Sinaí. Sin embargo, los Estados Unidos, con quien Egipto no mantenía relaciones diplomáticas formales, no respondieron de manera proactiva a estas propuestas.

Ante esta situación, Egipto sólo podía seguir contando con la Unión Soviética y la vía militar. De ahí que, mientras seguía intentando mejorar las relaciones con Estados Unidos, y profundizaba en las establecidas con Arabia Saudí y otros países del Golfo, prestara especial atención, al menos de puertas para afuera, a mantener el tono de la

¹⁰ Los aspectos que requerían la aprobación del Parlamento eran: los tratados de paz, las alianzas internacionales, los relacionados con el comercio, la navegación y las tierras del Estado, aquellos relacionados con los “derechos de soberanía” (حقوق السيادة) y los que implicaran gastos no incluidos en los presupuestos del Estado (art. 151).

cooperación egipcio-soviética. No obstante, el giro en la política interna del país, con la defenestración del ala prosoviética encabezada por Sabri y con el creciente clima antisoviético alentado por parte de las elites del régimen, despertó muchos recelos en la URSS. Entre febrero y julio de 1972, las insistentes demandas egipcias de que aquella les proveyera con aviones MIG-23 y misiles tierra-aire fueron constantemente rechazadas, con toda probabilidad por los recelos que desesperaban en Moscú los intentos de acercamiento de Egipto a Estados Unidos por intermediación de Arabia Saudí (Waterbury 1983: 394). Ante la negativa soviética, Sadat decidió apostar fuerte, expulsando en el verano de 1972 a los cerca de 15.000 asesores militares soviéticos que había en el país. Sin embargo, ante el mantenimiento de la indiferencia americana y la creciente impaciencia en el país por el continuo aplazamiento del denominado “enfrentamiento decisivo”, el presidente multiplicó sus gestos de buena voluntad hacia la URSS (incrementando, por ejemplo, desde diciembre de 1972, las facilidades de acceso de los buques soviéticos a los puertos egipcios del Mediterráneo), lo que supuso la mejora de las relaciones y que finalmente Moscú accediera a suministrarle modernos misiles tierra-aire y antitanque en febrero de 1973.

1.5 PROTESTAS LABORALES Y CONFLICTOS INTERCONFESIONALES

Desde finales de 1971, las políticas seguidas en la práctica comenzaron a mostrar contradicciones con la presunta voluntad continuista del régimen en el terreno económico y social, y con la de alejarse del control policial y la coerción en lo político y social. Por otro lado, las alusiones al socialismo científico habían ido desapareciendo del discurso de gran parte de las elites dirigentes del régimen de manera discreta y progresiva -ya en los años siguientes se tornarían peyorativas-, mientras se abrían paso en aquel las invocaciones a los valores religiosos islámicos y a los valores tradicionales generales de la sociedad. Esta evolución del discurso y la práctica política despertaría el malestar de diversos sectores sociales e ideológicos, que sería azuzado por el *impasse* en la pugna por la recuperación del Sinaí, y desembocaría en protestas y conflictos de diverso signo.

En el terreno laboral, a finales de agosto de 1971 los obreros del complejo siderúrgico de Helwán, el mayor centro de concentración industrial y obrera de la capital, tomaron el control de las instalaciones de la empresa y comenzaron una huelga productiva que implicó a 30.000 trabajadores. Incluso retuvieron durante una noche, con el apoyo del Comité de Empresa, al presidente sectorial de la Federación General de Sindicatos de Trabajadores de Egipto (FGSTE), al que acusaban de ser un agente del Gobierno. Reivindicaban mejoras salariales, menor tiempo de trabajo, una participación efectiva en la gestión de la empresa, y la no intervención del Gobierno y del régimen en las elecciones sindicales (Shoukri 1979: 82-83). El Gobierno decidió reprimir la protesta por la fuerza, e

hizo arrestar a 3.000 obreros. Nada más llegar la noticia de la represión a Chubra al-Jeima, el otro gran centro industrial aledaño a El Cairo, los obreros de dicha localidad organizaron una manifestación de protesta, que fue masivamente secundada y violentamente reprimida por la policía, apoyada por fuerzas del Ejército. A continuación, el Gobierno decidió remplazar a los directivos de la empresa y del sector metalúrgico y expulsar o trasladar a algunos de los obreros que habían liderado las protestas. Sadat manifestó que la represión de estas no había sido decisión suya, sino de sus subordinados, pero que las ocupaciones y la huelgas no eran “métodos democráticos”, y los poderes del Estado no podían admitirlos¹¹.

Tres meses después de estos acontecimientos, el 11 de noviembre de 1971, se convocó en El Cairo una huelga de taxistas contra la detención de nueve compañeros por “rechazar a clientes”. Posteriormente se reveló que la protesta había sido orquestada por los servicios secretos y sectores de la USA para permitir arrestar a los taxistas de la protesta, que poco antes habían constituido un comité sindical independiente. Más de 100 taxistas fueron arrestados, de los cuales 22 permanecieron durante un tiempo en prisión (Shoukri 1979: 84).

Finalmente, el 30 de marzo de 1972, un grupo de obreros del sector privado de Chubra al-Jeima atacaron a pedradas el cortejo del presidente del Gobierno exigiendo la subida del salario mínimo, la disminución de la jornada laboral y el respeto del derecho reconocido por ley a las bajas remuneradas por enfermedad. Setenta y seis obreros fueron detenidos. Poco después, en mayo de 1972, fueron los estudiantes quienes protagonizaron diversas protestas en relación con sus estudios (en la propia Chubra al-Jeima) y fueron objeto de la represión por realizar actividades políticas contestatarias. En el primer aniversario de la Revolución Correctiva, el 15 de mayo de 1972, Sadat ordenaría la liberación de todos los detenidos (Shoukri 1979: 84-85).

A lo largo de 1971 y 1972, a los indicios mencionados de malestar económico-social se unió una creciente tensión interconfesional que provocó algunos altercados y enfrentamientos graves. Esta tensión fue sin duda alimentada por la retraditionalización e “islamización” del discurso oficial y por la nueva tolerancia del Gobierno ante los activistas islamistas, que se haría más evidente en los años siguientes. Sin embargo, encontraba terreno abonado en una sociedad muchos de cuyos miembros, no solo musulmanes sino también coptos, se habían replegado hacia concepciones religiosas identitarias.

La proclamación de la Ley de Protección de la Unidad Nacional (قانون حماية الوحدة الوطنية) en septiembre de 1972, que establecía duras penas para quienes “pusieran en peligro

¹¹ Diario libanés *Al-Muharrir*, 30 de agosto de 1971. Citado por Shoukri (1979: 83).

la unidad nacional” mediante la comisión de actos violentos o la organización para cometerlos y para quienes instigaran a la violencia contra otros sectores sociales (arts. 5 y 6)¹², pretendió cerrar el paso no solo a las protestas laborales y manifestaciones en general, sino también a los elementos radicales que provocaban conflictos en nombre de la religión. No obstante, la ley no evitó que en noviembre de 1972 se produjera el incidente más grave y conocido de estos años: el incendio de la sede de la cristiana Asociación de los Amigos del Libro Santo en Janqa, Matariyya, la zona del norte de El Cairo donde, según la tradición, la Virgen y el Niño Jesús se refugiaron al huir de Palestina, y donde, según testimonio de algunos, la Virgen se apareció tras la derrota de 1967. La razón para el incendio del local, llevado a cabo por musulmanes radicales, era que, según aquellos, los cristianos lo utilizaban ilegalmente como iglesia (sin la preceptiva autorización gubernamental), algo que probablemente era cierto pero que no constituía ninguna novedad. Los rumores sobre hechos similares eran moneda corriente, así como aquellos que acusaban a una u otra religión de hacer proselitismo, en un contexto en el que la apostasía del islam estaba estrictamente prohibida por la *charía* -y según sus interpretaciones rigoristas debía ser castigada con la pena de muerte-, mientras que la conversión del cristianismo al islam, aunque permitida por la ley islámica, era tajantemente rechazada por la Iglesia copta.

Consciente de la peligrosidad de estos rumores, el Gobierno egipcio no se los tomaba a la ligera a pesar de que la realidad que se ocultaba tras ellos solía ser muy diferente y banal. En 1972 se estableció una comisión de investigación para establecer la verdad acerca de un presunto caso de conversión de seis jóvenes musulmanes avalado por la Iglesia copta, que los habría mantenido ocultos y bajo su protección en Alejandría. La investigación reveló que en realidad los seis jóvenes musulmanes se habían peleado con sus padres, que rechazaban su voluntad de emigrar al extranjero, y en el calor de las discusiones habían afirmado estar dispuestos incluso a apostatar para conseguirlo, dando la casualidad de que después habían pasado unos días en casa de un amigo cristiano experto en temas de emigración (Shoukri 1979: 91-92).

En muchos otros casos, los rumores sobre las conversiones aparecían adornados y exagerados con detalles truculentos o novelescos, como los relacionados con la seducción de jóvenes muchachas de la otra religión, o incluso su secuestro, para convertirlas. En el caso de las conversiones de jóvenes cristianos de ambos sexos al islam (cerca de 500 anuales, según Shoukri), la realidad, según el mismo autor, es que estaban relacionadas con la voluntad de escapar de las constricciones de la propia comunidad (familia o iglesia) y/o

¹² قانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٢ بشأن حماية الوحدة الوطنية، شبكة قوانين الشرق (https://goo.gl/hpQkcA, consulta del 2 de febrero de 2015).

con los intereses personales, relacionados con casos de matrimonio, divorcio y demás. Desde el exterior es posible sonreír ante la deformación y magnificación fantasiosa de estos pequeños conflictos personales y familiares (que continuarían practicándose, siguiendo exactamente los mismos patrones, a principios del siglo XXI), pero lo cierto es que podían contribuir a generar, como hemos visto, sucesos graves, mientras que lo que subyacía a ellos no era nada banal: por un lado, un sentimiento de fragilidad, alentado por las dificultades y los cambios económicos y sociales, y una búsqueda del comunitarismo y la tradición como defensa frente al desamparo del individuo ante ellos; por otro lado, un naciente activismo radical de ciertos grupos de ambas comunidades, que trataremos un poco más adelante (véase capítulo II 3.3).

1.6 EL RENACER DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTEL Y LA REPRESIÓN DE LOS INTELLECTUALES DE IZQUIERDA

El 13 de enero de 1972, en uno de sus discursos, Sadat anunció el “aplazamiento del año decisivo” (el del enfrentamiento con Israel), probablemente a causa del estallido de la guerra indo-pakistaní, que iba a mantener a la URSS ocupada con aquella. Dos días después, los estudiantes de la Universidad de El Cairo se reunían en la Escuela Politécnica para tratar estas declaraciones, en las que Sadat había incluido una crítica a “los grupos simpatizantes de la revolución palestina” (no hay que olvidar que en aquellos tiempos el movimiento nacional palestino tenía una fuerte orientación de izquierdas, y que no mucho antes se habían producido los acontecimientos del Septiembre Negro). Los estudiantes, que dos semanas antes habían organizado una Semana Palestina de ámbito árabe, decidieron reaccionar al anuncio y a la crítica de Sadat. El día 17, en una nueva reunión en la que los estudiantes de izquierdas impusieron su mayoría, y mientras se celebraban reuniones similares en otras universidades de El Cairo y de las provincias, se acordó solicitar a Sadat que autorizara la formación de una milicia estudiantil que pudiera apoyar al Ejército en caso de guerra, y rechazar la reapertura del Canal de Suez y las iniciativas pacíficas de resolución del conflicto ante la falta de consistencia de las actuaciones norteamericanas y las propuestas de Yaring. Al final de la reunión, los estudiantes decidieron encerrarse en la universidad, a la espera de que Sadat diera su respuesta, preferiblemente en persona (Shoukri 1979: 132-134).

El día 21, con la Universidad de Alejandría cerrada por orden gubernamental, se celebró una nueva asamblea en la Universidad de El Cairo con la asistencia de 2.000 estudiantes. En el ínterin, los estudiantes habían contactado con los dirigentes obreros de Helwán, a los que habían apoyado en sus protestas laborales de los meses anteriores. El día 24, de madrugada, la policía asaltó la universidad, deteniendo a 1.500 estudiantes. Los

restantes, perseguidos por la policía, se dirigieron a la plaza Tahrir, en el centro de El Cairo, donde pusieron a la población al corriente de sus demandas y corearon gritos a favor de la liberación de todos los estudiantes y obreros detenidos. Una nueva intervención de la policía desembocó en una batalla campal. La policía consiguió desalojar la plaza, pero al caer la noche esta fue de nuevo ocupada por una gran masa de estudiantes. El día 25 llegó desde Helwán un mensaje de los obreros en apoyo de los estudiantes, y por la noche fueron arrestados un gran número de dirigentes estudiantiles y obreros, pese a lo cual el día 26 se unieron a las protestas 2.000 estudiantes más. El día 27 Sadat pronunció un discurso en el que anunciaba la excarcelación de todos los detenidos excepto 30, lo que motivó que el resto se negara a abandonar la cárcel. El día 30 fueron liberados todos (Shoukri 1979: 135-142).

Durante la crisis, Sadat había mostrado la que luego sería su actitud habitual: compaginar la contemporización con la represión, y perder los nervios cuando afrontaba una oposición firme. El 21 de septiembre, Sayyed Marei anunció que el presidente había aceptado la invitación de la Unión de Estudiantes (oficial) de reunirse con ellos. El día 25, mientras se desarrollaba la represión del movimiento, se celebró la reunión. En su discurso, Sadat reafirmó varios principios de su gobierno: la posesión por el pueblo de los medios de producción, la no explotación del hombre por el hombre, y la decisión inquebrantable de librar batalla contra el enemigo. Sin embargo, ante las objeciones y críticas expuestas por los intervinientes, estudiantes y profesores, el presidente denunció a la “minoría intrusa” que agitaba a los estudiantes y era “indispensable extirpar de la base estudiantil”, y anunció que iba a prohibir toda actividad política en las universidades. No obstante, el mismo día 25 la prensa anunciaba que los tres sindicatos o colegios profesionales más influyentes en la opinión pública (el de periodistas, el de abogados y el de los profesores) se solidarizaban con los estudiantes, cuyo movimiento consideraban “parte integrante de la revolución de 1952”. Anteriormente, el día 20, una reunión conjunta de los representantes estudiantiles y algunas autoridades de la Universidad de Al-Azhar habían concluido con la redacción de un comunicado en el que se afirmaba que la vía militar era la única solución al conflicto con Israel, y que los derechos del pueblo palestino no debían ser abandonados costara lo que costara. Y poco antes, 90 intelectuales y artistas, parte de ellos muy conocidos, de izquierdas y de derechas, se habían expresado en un manifiesto en los mismos términos en los que lo harían los sindicatos profesionales. El Primer Congreso de Escritores y Artistas Egipcios, celebrado el 27 de enero de 1972 con fuerte presencia de los elementos de izquierda, había ido más lejos, solicitando además en sus conclusiones el apoyo a la resistencia palestina, la liquidación de los intereses norteamericanos en Egipto, la instauración de una economía de guerra orientada al socialismo y el levantamiento de la censura en todos los medios de comunicación (Shoukri 1979: 139-141; 161-164). Este tipo

de apoyos pesaron con toda seguridad en la decisión de Sadat de liberar a todos los detenidos, pero dispararon sus alarmas ante el fortalecimiento de la izquierda.

A pesar del apoyo del Sindicato de Periodistas a los estudiantes, la prensa estatal, dirigida por hombres de confianza de Sadat con la única excepción de *Al-Talía*, reducto de los periodistas e intelectuales marxistas, mostró una actitud crecientemente hostil al movimiento estudiantil, al que acusó, incluso, desde febrero de 1972, de ser dirigido desde Israel. No obstante, el rebrotar de las protestas y las circunstancias que las rodearon, casi un año después, granjearía a aquel una nueva intervención solidaria de los intelectuales, que a la postre tendría consecuencias graves para la mayor parte de ellos.

En la primera semana de diciembre de 1972, la detención de unos pocos estudiantes acabó derivando en una nueva oleada de manifestaciones. Al margen de la represión gubernamental, en esta ocasión se produjo un hecho insólito: en varias manifestaciones y reuniones, los estudiantes fueron atacados con armas blancas, palos y cadenas, por individuos, aparentemente estudiantes, que parecían entrenados para ello. Un estudiante detenido el 29 de noviembre confesó haber sido reclutado por Mohammed Osmán Ismail, secretario adjunto de la USA de conocida tendencia islamista radical, y estrechamente relacionado con Sadat, para “combatir a los estudiantes comunistas”. Otros estudiantes pertenecientes a un movimiento secreto denominado La Juventud Musulmana¹³ confesaron a sus compañeros incitaciones similares (Shoukri 1979: 145). Por otro lado, las nuevas manifestaciones de solidaridad de numerosos intelectuales, periodistas y abogados con los estudiantes llevaron a la detención, a finales de mes, de 400 de ellos. Esta medida provocó la redacción de una nueva declaración de un gran número de intelectuales, con la particularidad de que en esta ocasión se unieron a ellos tres de los principales pesos pesados oficiales de las letras (Taufiq al-Hakim, Naguib Mahfuz y Louis Awad), no destacados por sus inclinaciones izquierdistas. El propio al-Hakim, en presencia de Shoukri -según relata este-, redactó el texto, que incluía algunos términos muy duros: la “batalla” era un término “mil veces repetido en las canciones, en los himnos, en los discursos, en los eslóganes, hasta el punto de perder toda su fuerza y eficacia”, “los jóvenes no pueden seguir digiriendo esta palabra mil veces masticada”. Por otro lado, tras “la batalla”, “se disimulan las dificultades de la vida cotidiana, los malos servicios públicos, las carencias y la negligencia”, y “todo se convierte en una gran comedia que provoca cólera y hastío”. Finalmente, los intelectuales pedían libertad de “expresión, opinión y

¹³ No sabemos con certeza si el grupo al que se refiere es la Asociación de los Jóvenes Musulmanes (الشبان المسلمون), que según Ibrahim fue fundada en 1927 para emular la Young Men's Christian Association (YMCA), y que el mismo autor califica de movimiento “orientado a la acción”, pero “no político” (Ibrahim 1985: 495, 507). Pensamos que podría tratarse del mismo movimiento, si bien ello difícilmente se compaginaría con el carácter secreto de la organización a la que se refiere Shoukri.

debate”, y afirmaban: “El estado debería ser el último en emitir su opinión, y ello después de haber escuchado la opinión de un Egipto libre. El Estado no debe formular opiniones y consignas para imponerlas a continuación al pueblo” (Shoukri 1979: 171-173).

La declaración, publicada el 9 de noviembre en el diario libanés *Al-Anwar*, desató la cólera de Sadat, que el 10 de diciembre reunió a los dirigentes de la prensa y les reconvino duramente. El día 11, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Cultura, Abdel Qader Hatem, citó a Al-Hakim, Mahfuz y Awad en su despacho, quienes posteriormente afirmaron que durante el encuentro se habían reafirmado en el contenido de la declaración. Entre el 4 y el 7 de febrero, la prensa informó de que 111 escritores, periodistas e intelectuales habían sido expulsados de la USA. Ello implicaba que eran excluidos de toda actividad política y sindical, y en la mayor parte de los casos también profesional, pues el ejercicio del periodismo y el desempeño de funciones en el aparato cultural estatal requerían la afiliación a la USA. Entre los expulsados se encontraban nombres tan destacados como los de Louis Awad, Ahmad Bahá Eddín, Alfred Farag, Yusuf Idrís, Lutfi al-Juli, Mohammed Awda y el propio Shoukri. La mayor parte de ellos tuvieron que dejar el país al no poder llevar a cabo sus actividades profesionales al margen del sector público. Sin embargo, Al-Hakim (que se fotografió poco después junto a Sadat) y Mahfuz fueron excluidos de la represión. Por su parte, Al-Hakim publicaría poco después, en 1974, su obra *عودة الوعي* (*El retorno de la conciencia*), en la que atacaría ferozmente la época naserista¹⁴ (Shoukri 1979: 174-176).

Según Shoukri, Al-Hakim y Mahfuz se convertirían a partir de entonces en dos de los escritores del régimen de Sadat, y la “masacre de los intelectuales” -como sería comúnmente conocido este pasaje- tendría el efecto de dividir a los de izquierdas restantes entre “quienes fueron capaces de compatibilizar sus ideas con las del poder y los que no”. Lo que es incontrovertible es que estos acontecimientos abrirían la veda, en primer lugar, a la persecución de las ideas socialistas marxistas, (“la izquierda no nacional, agente del extranjero y atea”), y después a la de la crítica al naserismo (Shoukri 1979: 150), persecución y crítica que se intensificarían tras la guerra de Octubre de 1973.

¹⁴ La obra de Al-Hakim pretendía emparentarse con su anterior *عودة الروح* (*El retorno del espíritu*, 1956) en la que había tratado de dibujar el despertar egipcio durante el nacimiento del movimiento nacionalista en el primer cuarto del siglo XX.

1.7 LA “SEMIVICTORIA” DE OCTUBRE. LA ANSIADA LEGITIMACIÓN PERSONAL DE SADAT

Cuando el 6 de octubre, en plena festividad del Ramadán y de la celebración judía del Yom Kippur, las fuerzas armadas sirias y egipcias lanzaron su ataque sobre sus respectivos territorios ocupados, todos los actores y observadores fueron cogidos por sorpresa, incluida la población egipcia, acostumbrada a esperar en vano “el día decisivo”. No menos sorprendente para muchos fue el éxito inicial de la ofensiva, en el curso de la cual los egipcios consiguieron cruzar el Canal de Suez y atrincherarse tras él. La implicación de la URSS y EEUU en el conflicto, estableciendo sendos puentes aéreos para aprovisionar a sus respectivos aliados en armas, hizo pensar en un conflicto prolongado. No obstante, Sadat ordenó detener la ofensiva egipcia, con lo cual perdió la ventaja militar y permitió que las tropas israelíes se concentraran en derrotar a las tropas sirias, para posteriormente consolidar sus posiciones en el Sinaí hasta el punto de recuperar la supremacía militar. Según los críticos de Sadat, entre los que se encontrarían algunos de sus principales generales, Sadat no habría querido derrotar a Israel, sino tan solo cambiar el *statu quo* para alcanzar una solución negociada desde una posición más fuerte. Fuera lo que fuere de esta plausible interpretación, lo cierto es que tras negociaciones entre las dos superpotencias, y posteriormente entre las partes israelí y egipcia, se alcanzó un alto el fuego y un acuerdo según el cual las fuerzas israelíes se retirarían unos kilómetros al este del Canal de Suez. A pesar de la derrota militar final, y de que ni Egipto ni el resto de los países árabes implicados recuperarían sus territorios, al margen del Canal de Suez y una pequeña parte del Golán sirio, los egipcios -aunque no los sirios ni los palestinos- consideraron que la guerra se había saldado con una victoria y, en términos estratégicos y simbólicos, no les faltaba toda la razón.

La “semivictoria de Octubre” tuvo importantes efectos internacionales y en Egipto. Los países árabes e islámicos productores de petróleo miembros de la OPEP aprovecharon el conflicto para hacerse con el control de la oferta y los precios del crudo, reduciendo la producción y estableciendo un embargo a Israel y sus principales aliados, entre ellos EEUU, que duraría hasta la primavera de 1974, lo cual provocó el incremento de los precios en un 400%, e inauguró el periodo de ingentes ingresos de los principales productores que todavía vivimos. En Egipto, Sadat adquirió un importante caudal de legitimación y apoyo popular que le permitiría emprender su propio rumbo en el terreno económico, político e internacional.

2. DISTANCIÁNDOSE DEL RÉGIMEN NASERISTA: *INFITAH*, PLURALISMO E ISLAMIZACIÓN (1973-1976)

2.1 EL COMIENZO DEL *INFITAH* (LA APERTURA ECONÓMICA)

En el denominado Documento de Octubre (ورقة أكتوبر), hecho público en abril de 1974, y sometido a referéndum y aprobado con el 99,95% de los votos el 15 de mayo del mismo año, Sadat presentó sus propuestas de “acción nacional” para los años siguientes. El documento insistía en la necesidad de obtener recursos financieros externos y en las oportunidades que para ello ofrecía “la situación mundial actual”, pensando, sin duda, en los excedentes financieros que comenzaban a acumular los países petrolíferos árabes e islámicos. A continuación señalaba que la revolución de 1952 nunca había buscado la nacionalización total de los diversos sectores económicos, ni restringido la producción al sector público, permitiendo el mantenimiento del sector privado al que, sin embargo, determinados decretos imponían obstáculos que limitaban su capacidad productiva y su capacidad para “satisfacer las demandas de la sociedad”. El propio texto daba nombre a la nueva política que, en consecuencia, proponía: *infithah*, “apertura económica”¹⁵.

En realidad, la política de *infithah*, en su dimensión puramente económica y en lo que toca a sus implicaciones en la política internacional del país, ya había sido sometida a discusión en los meses anteriores, en los que el término *infithah* había sido puesto en circulación entre las elites dirigentes e intelectuales. Además, en 1971 se había dado un paso en esa dirección con la Ley de Inversiones Extranjeras nº 65, que había establecido un periodo de exención de impuestos de 5 años, la creación de zonas libres de impuestos, y la autonomía administrativa para las empresas mixtas establecidas entre inversores privados y el sector público. No obstante, a pesar de la aprobación de varias decenas de proyectos, únicamente el oleoducto Suez-Mediterráneo (SUMED), financiado con capital público, árabe y norteamericano, se llevaría a cabo antes de 1974.

La Ley de Inversiones Árabes y Extranjeras nº 43 de junio de 1974 sería, por contra, el primer auténtico puntal de la política de *infithah*. Según Waterbury, la estipulación “potencialmente” más importante de dicha ley era que cualquier proyecto aprobado acogido a ella sería considerado legalmente de manera automática como parte del sector privado, aunque el sector público tuviera una participación mayoritaria en él. Ello implicaba que no estaría sometido a la legislación laboral relativa al sector público, ni por

¹⁵ Hemos utilizado los resúmenes y extractos del documento presentados por Martín Muñoz (1992: 304) y Waterbury (1983: 123-128), que utilizaron, respectivamente, las copias del documento publicadas en *Al-Talía*, junio de 1974, y *Al-Ahram al-Iqtisadi*, suplemento al número del 1 de mayo de 1974.

tanto a sus límites salariales mínimos y máximos ni a las disposiciones relativas a la participación de los trabajadores en la gestión y en los beneficios. Por otro lado, la ley priorizaba las inversiones en proyectos autosuficientes en inversión extranjera y orientados a la exportación, proyectos que incluyeran tecnología avanzada, y proyectos para la sustitución de las importaciones, entre otros. Los inversores extranjeros podrían poseer participaciones mayoritarias en los sectores de la siderurgia, la extracción de minerales, la química, el sector textil y la banca, terrenos todos ellos que habían estado reservados para el sector público. Sin embargo, según Waterbury (1983: 131), el Gobierno no verificó en absoluto en la práctica que los proyectos presentados se correspondieran con las prioridades marcadas por la ley.

La ley estipulaba también la creación de zonas francas en El Cairo, Alejandría y Port-Said. Las empresas establecidas en ellas estarían exentas de impuestos, y serían sometidas únicamente a un gravamen del 1% del valor de los bienes que transitaran por ellas. Las transferencias de capital entre estas zonas y los países extranjeros serían libres. No obstante, tanto las empresas instaladas en las zonas francas como en otros lugares del país en virtud de esta ley deberían comprar las materias primas a precios del mercado internacional, sin acceder a los precios subsidiados vigentes para el resto. Los nuevos proyectos fuera de las zonas francas podrían estar exentos de impuestos por un periodo de entre 5 y 8 años, así como de aranceles aduaneros sobre equipos y materias primas, según las autoridades lo decidieran discrecionalmente. Los bancos comerciales privados serían autorizados, si bien un 51% de la propiedad de aquellos que operaran en moneda egipcia debía quedar en manos de egipcios, sin que se especificara si con ello se aludía únicamente al sector público egipcio o también a los inversores privados. Finalmente, hay que señalar que el capital árabe recibía de la ley un tratamiento especial, pues era autorizado a adquirir terrenos urbanos e inmuebles, algo excluido para otros inversores extranjeros.

Las mayores objeciones a la Ley 43 de 1974 vinieron de las filas de algunos parlamentarios e intelectuales marxistas y de los que ya se comenzaba a llamar “los naseristas”¹⁶, que expresaron sus objeciones en el Parlamento y en los medios dominados por dichas corrientes, como *Al-Talía* y *Ruz al-Yusuf*. Sin embargo, los sindicatos no manifestaron ninguna oposición a ella, más allá de algunas advertencias genéricas de la Federación General de Trabajadores del Sector Público (الاتحاد العام لعمال القطاع العام), en el sentido de que no aceptaría que los beneficios del sector público se derivaran en beneficio de particulares privados. De esta manera, el peso político de los opositores a la ley fue relativamente reducido.

¹⁶ Los diputados marxistas eran Ahmad Taha, líder sindical de Chubra, y Jaled Mohai Eddín. Entre los naseristas, se encontraban principalmente Kamal Ahmad y Mumtaz Nassar. Otros, como Abdel Salam Zayyat, podían ser calificados como “centristas” (Waterbury 1983: 135).

A partir de 1974, en el marco de la campaña general de desacreditación del naserismo desencadenada por los políticos, periodistas e intelectuales enfrentados a Náser que habían sido rehabilitados política y socialmente por Sadat, y por los incondicionales de este último procedentes del propio régimen naserista -aunque el presidente aparentara mantenerse al margen de dicha campaña-, se multiplicaron las voces que solicitaban un distanciamiento de las políticas naseristas en los terrenos económico y laboral y la provisión de mayores facilidades al sector privado. Los más extremos de los “liberalizadores”, como Fuad Sultán, wafdistas y exeditor de periódicos exiliado en época de Náser, no tuvieron reparos en pedir la venta de las empresas deficitarias del sector público y el cambio de la legislación laboral de tal manera que el sector público pudiera librarse de los trabajadores que deseara. Otros, aun persiguiendo los mismos objetivos, prefirieron la vía de la destrucción de los adversarios, intentando desacreditar a las grandes figuras defensoras del sector público, como el ya mencionado Aziz Sidqi, “el padre de la industria egipcia”, que ocupó diversos ministerios relacionadas con aquella en época de Náser, y había sido presidente del Gobierno entre 1972 y 1973, el cual en noviembre de 1976 sería acusado, por Alawy Hafez, diputado por El Cairo, al parecer sin ningún fundamento, de mala gestión, falsificación de las cuentas públicas, corrupción y manipulación de las elecciones (Waterbury 1983: 138).

En 1975 llegó la primera respuesta del Gobierno a las peticiones de mayor liberalización económica: el decreto 262 autorizaba la venta del 49% de las empresas públicas a los inversores privados, y la Ley 211 de 28 de julio abolía las Organizaciones Generales, cerca de una cuarentena de organismos que agrupaban a casi 500 empresas públicas y estaban adscritos a distintos ministerios (según la naturaleza intrínseca de la producción y la de los productos). La disolución de estas organizaciones permitiría discernir qué empresas eran deficitarias, al separar la contabilidad de cada una, y abriría la vía a su privatización parcial. La ley, además, autorizaba el despido de los trabajadores innecesarios, mediando una pequeña indemnización, sin que el Estado quedara obligado a proveer a los despedidos un nuevo puesto de trabajo. Por otro lado, también en 1975 se concedió a las inversiones de capitales egipcios privados las mismas condiciones ventajosas que había otorgado a los extranjeros la Ley nº 43 (Waterbury 1983: 139).

2.2 DEVOLUCIÓN DE PROPIEDADES AGRÍCOLAS Y URBANAS

Poco después de su llegada al poder, Sadat comenzó a anunciar que las confiscaciones y secuestros de bienes llevados a cabo durante la época naserista serían revisados, pues “se habían cometido muchos excesos”. Probablemente, la principal intención inicial de Sadat era desacreditar a los miembros del Alto Comité para la Liquidación del

Feudalismo, muchos de los cuales formaban parte del “núcleo duro” del régimen naserista liquidado en mayo de 1971. Sin embargo, la mayor parte de los 55.000 *feddan*es afectados por las actividades de aquel desde 1966 habían sido ya devueltos o estaban en vías de serlo por decisión de Násir en 1969 a cerca de 334 familias. Las otras dos grandes “tandas” de confiscaciones o secuestros (al margen de las primeras reformas agrarias) se habían producido entre 1961 y 1964, por aplicación de los “decretos socialistas”, y después de 1964 por aplicación de la Ley 119 de dicho año, destinada a debilitar y disuadir a los elementos “subversivos” que amenazaban la seguridad del Estado. De entre los afectados por la Ley 119, tan solo 152 familias no habían recuperado sus bienes, mientras que el grueso de los secuestros (122.000 *feddan*es, 7.000 propiedades urbanas y 1.000 negocios entre 1961 y 1966) se habían producido entre 1961 y 1964 (Ansari 1983: 173-176).

Revertir la situación creada por unos secuestros llevados a cabo en virtud de leyes diversas y que habían generado derechos a terceros presentaba una cierta complejidad legal, en la que el régimen de Sadat, temeroso tal vez de ir demasiado lejos o demasiado rápido (tanto por motivos económicos como políticos) se amparó para prolongar el proceso de devoluciones e indemnizaciones desde 1971 a 1974, atendiendo en ocasiones a criterios poco claros. La Ley 69 de 1974 dio paso finalmente a la conclusión de la primera etapa de devolución de propiedades (la segunda debería esperar a 1981). De manera significativa, la mayoría de los diputados de la Asamblea del Pueblo, con una gran presencia de notables rurales, dio una calurosa bienvenida a la ley, y celebró entre alabanzas el coraje de Sadat, “el Héroe del Cruce del Canal”, que había tenido el valor de rectificar los errores del pasado y salvaguardar la propiedad privada sin herir las sensibilidades socialistas. Tan solo en 1974 decenas de miles de *feddan*es fueron devueltos a sus antiguos propietarios, muchos de ellos miembros de las antiguas familias terratenientes y políticas de la época previas a la revolución, como la familia Serag Eddín, que recuperó al menos 400 *feddan*es (Ansari 1983: 180-183).

2.3 INTRODUCCIÓN DEL PLURALISMO ENCAJONADO

2.3.1 Sondeando a la USA. Dividir para vencer¹⁷

En el ya mencionado Documento de Octubre, publicado en abril de 1974, Sadat afirmó:

¹⁷ La mayor parte de la información acerca de los debates en el seno de la USA en 1974 que constituyen el núcleo principal de este apartado la hemos obtenido de Waterbury (1983: 353-359).

“La democracia no es una simple cuestión de documentos legales... Yo rechazo la idea de una división artificial del pueblo estableciendo partidos políticos, pero también rechazo la teoría del partido único que impone su tutela al pueblo (...) por tanto, estoy a favor de mantener la existencia de la USA como marco de la unidad nacional en el que todos los grupos puedan expresar sus intereses legítimos y sus opiniones (...) la USA debe convertirse en un crisol de puntos de vista”¹⁸.

Pocos meses después de la publicación de dicho documento, en agosto de 1974, se hacía público uno nuevo texto del presidente, denominado *Documento sobre la evolución de la USA*, en el que Sadat insistía en las ideas apuntadas en el párrafo anterior, señalando que era “natural que haya personas con posturas diferentes”, y afirmando que “sería deseable que la USA reflejase diversas tendencias en su liderazgo”. La opinión de Sadat difería ahora radicalmente con la que había mantenido quince años antes cuando, siendo Secretario General de la Unión Nacional (y habiéndolo sido antes, recordemos, de la Organización para la Liberación), había escrito: “Nuestro régimen debe ser el gobierno del pueblo para el pueblo (...) y para llegar a esa meta la Unión Nacional es la única e inevitable vía”¹⁹. Lejos habían quedado también los días en los que, ante cualquier atisbo de oposición a las políticas del régimen naserista, Sadat advertía, en tanto que presidente de la Asamblea Nacional, como hemos señalado en el capítulo I 3.6.2, que quienes “se opusieran a la revolución serían pisoteados”.

Además de sugerir que en la USA se permitiera la manifestación de varias tendencias de opinión, en su documento de agosto de 1974 el presidente señalaba otros defectos, a sus ojos, de la organización: la militancia en la práctica casi obligatoria, el excesivo recurso a las designaciones en detrimento de la elección por pares, y la excesiva independencia del poder ejecutivo y del propio presidente de la República.

A consecuencia de la iniciativa de Sadat, en septiembre de 1974 se constituyó en el seno de la USA una Comisión de Recogida de Opiniones (لجنة الاستماع) sobre la situación y el futuro de la USA presidida por Mahmud Abu Wafiyya, miembro del Parlamento y cuñado de Sadat. Los primeros en ser escuchados fueron intelectuales, escritores y periodistas, tanto de tendencias de izquierdas (Salah Aisa, Yusuf Idrís) como de derechas (Mustafa Amín, Fikri Abaza). Todos ellos (incluidos numerosos marxistas) consideraron que la USA había fracasado, y argumentaron a favor del liberalismo político. En realidad, gran parte de los intelectuales participantes ya se habían manifestado en este sentido desde 1972, y habían sido marxistas como Jaled Mohai Eddín y Lutfi al-Juli quienes habían tomado la iniciativa de solicitar la autorización de la creación de diversas tendencias de

¹⁸ *Waraqat Oktober*, pág. 40. Citado por Martín Muñoz (1992: 308).

¹⁹ De la obra de Sadat *Al-Ittihad al-Qawmi*, citada por Martín Muñoz (1992: 308) a partir de la recensión publicada en *Orient*, nº 8 (1958), págs. 157-167.

opinión en la USA. No obstante, en esta ocasión, algunos fueron más lejos, como hizo el escritor Salah Aisa, quien pidió que se diera paso directamente a un sistema multipartidista, y opinó que más valdría mantener la USA en su estado actual que convertirla en un único órgano con diversas tendencias o transformarla en un bipartidismo.

Los representantes de los sindicatos y organizaciones profesionales (ingenieros, doctores y abogados) se manifestaron de manera no muy diferente a los hombres de letras, completando la imagen de unas clases medias urbanas favorables al cambio en el sistema político. No obstante, tras los sectores mencionados, otros comenzaron a manifestarse favorables a mantener la USA en un formato similar al actual, incluyendo su presidencia por el presidente de la República. Según avanzaban las sesiones, esta posición fue cogiendo peso, hasta hacerse dominante gracias a la participación de los representantes de las zonas rurales y de los trabajadores. Estos querían conservar “la alianza de fuerzas trabajadoras” y “los beneficios de la revolución”, que resumían principalmente en el mantenimiento de la presencia de un 50% de agricultores y campesinos en todos los órganos de representación, de la reforma agraria, de un sector público mayoritario, de la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas y en los beneficios, o de la educación gratuita. Algunos intervinientes subieron incluso el tono, lanzando advertencias contra el retorno de las fuerzas contrarrevolucionarias, denunciando a los representantes sindicales que eran marionetas del poder, o incluso preguntando qué pintaba el cuñado de Sadat presidiendo la Comisión de Recogida de Opiniones.

Tras intervenciones variadas de los representantes de los profesores de universidad, las organizaciones feministas y las de estudiantes, las opiniones expresadas en el sentido manifestado por los trabajadores acabaron de inclinar la balanza. Los estudiantes no dudaron en pedir un mayor apoyo a los palestinos y el mantenimiento del principio de no-reconocimiento de Israel, ni en localizar en personajes como los hermanos Mustafa y Ali Amín, de nuevo editores del diario *Ajbar al-Yaum*, a las fuerzas contrarrevolucionarias que volvían a la escena política.

Tras concluir las sesiones de la Comisión, a finales de septiembre de 1974, el informe que aquella debía presentar al presidente Sadat se hizo esperar hasta diciembre, mientras el presidente guardaba un inescrutable silencio. Sin embargo, los editoriales de Ahmad Bahá Eddín, que había remplazado al incómodo M. Hasanein Heikal en la dirección de *Al-Ahram*²⁰, órgano que seguía siendo el principal portavoz mediático oficioso del Gobierno, habían virado de sus iniciales loas al sistema multipartidista hacia la

²⁰ Mohammed Hasanein Heikal, que había sobrevivido a la purga de los allegados de Náser en mayo de 1971, fue remplazado por Bahá Eddín poco después de publicar, el 1 de febrero de 1974, un artículo en el que criticaba la confianza de los dirigentes egipcios en Nixon y Kissinger (Waterbury 1983: 382).

defensa del mantenimiento de “la alianza de las fuerzas trabajadoras” y el establecimiento de diversas “plataformas de expresión” (منابر).

Cuando finalmente se publicaron las conclusiones de Comisión, sus recomendaciones no añadieron gran cosa a las sugerencias hechas inicialmente por Sadat: elección de los representantes a todos los niveles, membresía opcional, y apertura de foros de debate en el seno de la USA. Respecto a la separación de la presidencia de la USA de la de la República, el informe afirmaba que solo una minoría la había solicitado, algo que no se correspondía con la realidad o que no daba cuenta de toda la realidad.

Como señala Waterbury, los debates acerca de la evolución del futuro de la USA sirvieron a Sadat no solo para tantear las opiniones de sus componentes y de una parte importante de la sociedad, sino también para mostrar a los diversos sectores ideológicos y sociales sus respectivas debilidades mediante su contraposición a los otros. Los intelectuales y las clases medias urbanas liberales o sedicentemente liberales, en particular, tuvieron que enfrentarse a su relativo aislamiento ideológico y social, más marcado aun en el caso de los intelectuales marxistas, distanciados de algunos de los sectores (trabajadores, mujeres, estudiantes) a los que decían y querían representar. Los naseristas “puristas”, por su parte, hubieron de escuchar abundantes críticas al pasado. En definitiva, si de los debates salió un ganador, ese fue sin duda Sadat, que conservó su papel de dirigente plenipotenciario reforzando su imagen de árbitro entre las distintas tendencias políticas.

2.3.2 Autorización de las “plataforma de expresión”

Una vez concluidos los debates acerca de la evolución de la USA y presentado el informe preceptivo al respecto, en abril de 1975 Sadat nombró a un nuevo primer secretario general para la organización, Rifaat al-Mahgub, que sustituiría a Hafez Gánim. La elección -en lugar de la designación- de los dirigentes de aquella “desde arriba hasta abajo”, anunciada por el presidente, tendría que esperar. Al-Mahgub presidiría también el Consejo Superior de la Prensa, creado en mayo de ese mismo año, en el que se reunirían los directores de los principales grupos de prensa junto con el ministro de Información (Kamal Abu Magd), el portavoz de la Asamblea del Pueblo (Gamal Utayfi), el presidente del Sindicato de Periodistas (Abdel Moneim al-Sawi) y algunos profesionales y profesores. Dicho Consejo, que pasaría a ser el propietario, en sustitución de la USA, del 49% de cada periódico (la USA lo era del 100%), quedaría encargado de otorgar las licencias de publicación y promover la redacción de una Ley de Prensa y de un Código Ético para aquella (Gómez García 1992: 87; Waterbury 1983: 382). Para Sadat, estas modificaciones

supusieron “la normalización de las instituciones democráticas”²¹. En los meses anteriores a los debates acerca de la USA, Sadat se había encargado, según su particular visión de la democracia, de designar a nuevos directores para los principales medios de prensa, profesionales reconocidos pero de no menos conocida lealtad hacia su persona: Mustafa Amín para *Ajbar al-Yaum*, Ahmad Bahá Eddín para *Al-Ahram* y Abdel Rahmán al-Charqawi para *Ruz al-Yusuf*.

Aproximadamente en las mismas fechas en las que situaba a Mahgub a la cabeza de la USA y modificaba el sistema de control de la prensa estatal, en abril de 1975, Sadat nombró a Hosni Mubarak vicepresidente de la República, en sustitución de Husein al-Chafai. Por primera vez, el presidente designaba para un cargo tan elevado a alguien que no había ocupado ningún cargo político bajo el régimen naserista. Piloto del Ejército, Mubarak había ocupado diversos cargos militares hasta llegar a ser comandante del Ejército del Aire durante la guerra de octubre de 1973, lo que le valió las más destacadas condecoraciones y la vitola de héroe de guerra.

En julio de 1975 se celebraron elecciones para renovar todos los cargos representativos de la USA. Poco antes, Sadat anunció la amnistía a todos los prisioneros políticos detenidos antes de mayo de 1971 (no a los detenidos bajo su mandato, la mayor parte en el curso de la Revolución Correctiva), y poco después, en 1976, decretaría la devolución del derecho de voto a 5.500 personas que habían sido privadas de él por razones políticas durante la época naserista. Tras las elecciones de la USA, los estatutos de la organización fueron modificados para aceptar la agrupación en “plataformas de expresión” de sus miembros. Es importante señalar que el término *منابر*, que casi siempre se traduce por “plataformas” -término que utilizaremos en adelante-, refiere a los púlpitos, estrados o lugares desde donde se dirige la palabra a un público. La propia elección de dicho término confirmaba lo que Sadat había sugerido desde un primer momento: que se trataba de autorizar únicamente la expresión de opiniones diversas dentro de una única organización política. Además, los nuevos estatutos de esta restringían explícitamente la pluralidad y la diversidad, al establecer que las plataformas únicamente podían representar puntos de vista, y no a sectores sociales, y que todas las plataformas debían comprometerse a respetar los principios básicos de la Revolución²².

La perspectiva de la formación de cerca de 40 plataformas que se dibujó cuando los miembros de la USA manifestaron sus intenciones en las primeras reuniones de aquella, no plació demasiado al poder constituido, de manera que primero su presidente, Rifaat al-

²¹ Israeli (Ed.) 1979: *The Public Diary of President Sadat*, Leiden, Brill, pág. 744. Citado por Gómez García (1992: 87)

²² *Resolución de la USA sobre la creación de plataformas políticas*, publicada en la sección documental de CPSS, vol. 2 de 1983, pg. 88. Citado por Martín Muñoz (1992: 309).

Mahgub, y luego una comisión presidida por Sayyed Marei, que incluía a 168 parlamentarios y diversos miembros de la USA y “líderes de opinión”, se encargaron de reconducir el asunto para acabar concluyendo que lo más “adecuado” era que “temporalmente” se autorizara la creación de únicamente tres tendencias: una “de derechas”, otra “de centro” y otra “de izquierdas”. En marzo de 1976, Sadat sancionó estas recomendaciones (Martín Muñoz 1992: 308-309; Waterbury 1983: 365-366).

La adscripción a la plataforma de centro, denominada Plataforma Socialista Árabe de Egipto (منبر مصر العربي الاشتراكي), del propio Sadat y del presidente del Gobierno y exministro del Interior, Mamduh Salem, determinó que la gran mayoría de los parlamentarios existentes (293) y de los militantes de la USA (cientos de miles) se adhirieran a ella, tras recibir órdenes explícitas en este sentido algunos de ellos, como los gobernadores civiles.

La plataforma de izquierdas se denominó Agrupamiento Nacional Progresista Unionista (التجمع الوطني التقدمي الوحدوي, en adelante Tagammu) porque estaba destinada a reunir a los simpatizantes de la izquierda marxista y a los “naseristas puristas”, con el poco disimulado fin de propiciar divisiones y confusión en su seno, y de alejar de ella a quienes rechazaban abiertamente el marxismo. Su presidencia fue asumida por Jaled Mohai Eddín, y contó con la adhesión de 3 diputados y menos de 10.000 miembros²³.

La plataforma de derechas recibió el nombre de Plataforma Liberal Socialista (منبر الأحرار الاشتراكي). Su presidente fue Mustafa Kamil Murad, exoficial libre, y contó con el apoyo de 14 parlamentarios y cerca de 35.000 simpatizantes, si bien hay que señalar que, como es bien conocido, el propio Sadat tuvo que animar a diversos parlamentarios a que se unieran a ella, ante el poco entusiasmo que despertó.

Las plataformas autorizadas en la USA lo fueron asimismo para concurrir a las elecciones legislativas que debían celebrarse en octubre de 1976.

2.3.3 De la Administración Local al Gobierno Local

Desde el principio de su mandato, Sadat dedicó especial atención a las provincias, y manifestó su intención de descentralizar el gobierno y la administración, haciendo los órganos locales “más representativos”. Según Fahmy, la razón principal de este interés era conseguir el apoyo de las elites provinciales, y en particular las rurales, primero para fortalecer su posición frente a sus rivales políticos, y luego proceder a la liberalización

²³ *Al-Ṭalī'a*, sección *Bayān al-Šahr*, mayo, junio y septiembre de 1976. Citado por Martín Muñoz (1992: 310-311)

económica, con la colaboración especial de la burguesía agraria que había sido especialmente perjudicada por las políticas naseristas (Fahmy 2002: 189-190).

La Constitución de 1971 estableció la división del país en “gobernados” o “provincias” (محافظة), “capitales de provincia/gobernadorado” (مركز) y “ciudades o distritos urbanos” (مدينة), unidades administrativas que contarían con consejos locales electos libre y universalmente para su “gobierno”²⁴. La expresión “gobierno local” sustituiría a partir de entonces a la de “administración local”, de la misma manera que esta última dejaría de contar con un ministerio específico con tal denominación. Sin embargo, a pesar de las disposiciones constitucionales que establecían la naturaleza electa de los consejos locales, los primeros fueron constituidos en virtud de la Ley 57 de 1971 mediante la designación de responsables de la USA (Fahmy 2002: 190-191).

La Ley 52 de 1975, añadió a las unidades administrativas mencionadas en la Constitución la de “pueblo” (قرية), y a los consejos locales electos para todas y cada una de ellas una comisión ejecutiva que, sin embargo, sería designada. A finales de 1975 se celebraron las primeras elecciones sin el requisito de que los candidatos pertenecieran a la USA, comicios que resultaron en la concentración del poder local en manos de funcionarios y de agricultores acomodados. El hecho de que los electores hubieran de escribir los nombres de los elegidos en las papeletas de votación, en un marco en el que el 70% de la población (rural) era analfabeta, propició que aquel fuera “controlado” por los funcionarios públicos y partidarios del Gobierno o en virtud de lógicas clientelistas y de parentesco (Martín Muñoz 1992: 313).

Aunque los consejos locales no podían ser disueltos más que en caso de extrema necesidad o “mal funcionamiento” por un decreto del presidente del Gobierno, el gobernador provincial o gobernador civil, representante del presidente de la República, por el que era nombrado, conservaba muy amplios poderes. Era el responsable final de la supervisión e implementación de las políticas públicas y, como tal, supervisaba las

²⁴ El primer nivel de la división administrativa de Egipto compartimentaba el país en 24 unidades administrativas (sin contar en la época de Sadat el Sinaí ocupado) bajo la autoridad de un محافظ, cargo con atribuciones muy similares a las de los gobernadores civiles en España en la época de Franco, del que dichas unidades tomaban su nombre. Dentro de cada *muhafaza*, la ciudad o pueblo principal constituía el *markaz* (“centro”), equivalente a las capitales de provincia. Algunas *muhafaza*, como las de El Cairo y Alejandría, se componían únicamente el núcleo central de las aglomeraciones urbanas formadas en torno a las respectivas ciudades originales, excluyendo, sobre todo en el caso de El Cairo, la mayor parte de los barrios y municipios que en la práctica forman una unidad urbanística. Sin embargo, otras *muhafaza*, como las mayoritariamente desérticas Matruh, Al-Wadi al-Yadid o el Mar Rojo, incluían extensísimas cantidades de territorio con una muy pequeña cantidad de población. Teniendo en cuenta esta realidad, y dada la fuerte impronta administrativa de la denominación y configuración de las unidades territoriales en cuestión, preferimos utilizar el término “gobernadorado” al de “provincia”, a pesar de que el segundo también podría ser aceptable, y de que el primero es un neologismo no reconocido por la RAE, dada la fuerte impronta administrativa de la denominación y configuración de las unidades territoriales en cuestión.

actuaciones de los diferentes ministerios, tenía derecho de veto sobre las decisiones de los consejos locales, y era el principal responsable de la seguridad y “la moral pública”, en estrecha colaboración con el ministerio del Interior. No obstante, los consejos locales podían “poner en cuestión” las decisiones del gobernador o de los responsables de la administración, y sus presidentes participar en las comisiones ejecutivas (Fahmy 2002: 191-192).

2.3.4 Las elecciones al Parlamento de 1976 y la disolución de la USA

2.3.4.1 Ley electoral, candidaturas y campaña electoral

En octubre de 1976 se celebraron las primeras elecciones legislativas con la novedad de la existencia de las tres “plataformas de expresión”. La ley electoral que las rigió fue la Ley 38 de 1972, enmendada mediante la Ley 109 de 1976. Según ambos textos, el territorio egipcio se dividía en 175 distritos electorales, en cada uno de los cuales debía elegirse a dos representantes por el principio mayoritario de elección a dos vueltas (quien obtuviera más del 50% en la primera vuelta entre todos los candidatos, o en una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados en la primera). La izquierda solicitó la modificación de las circunscripciones, que conducían a una infrarrepresentación de los gobernados urbanos e industriales²⁵, y la adopción del sistema proporcional, desde la convicción de que el sistema mayoritario beneficiaría a los personajes con una gran clientela política y/o social (grandes funcionarios o dirigentes políticos afines al poder), y más aun en las zonas rurales. Una novedad legislativa también susceptible de perjudicar a la izquierda fue que se modificó la definición de “obrero” para acoger a todos aquellos que hubiesen comenzado su vida profesional antes de obtener un diploma superior. Otra novedad importante fue que se autorizó la presentación de candidatos independientes junto a los que lo hacían en nombre de las tres plataformas, lo que implicaba por primera vez la posible candidatura de personas que se habían mantenido al margen o habían sido excluidas de la USA. Finalmente, un aspecto clave para el proceso electoral sería que la supervisión del voto y su recuento quedarían en manos del Ministerio del Interior, y no del Ministerio de Justicia, como solicitó la oposición y como establecía, según esta, la Constitución.

²⁵ Aunque contaban con más del 50% de la población egipcia, los gobernados de Alejandría y El Cairo y los de las zonas industriales del Delta (Qaliubiyya, Monofeyya, Garbiyya y Buhaira) tan solo elegían al 40% de los representantes (Martín Muñoz 1992: 315).

La presentación de candidaturas arrojó el en principio sorprendente dato de que un 53,84% de ellas (910) fueron presentadas por candidatos independientes. Según Martín Muñoz, de quien hemos tomado el dato, este “ponía de manifiesto un alto índice de desconfianza por el experimento político propuesto por el presidente” (1992: 313). En nuestra opinión, se trataba de todo lo contrario: habida cuenta del funcionamiento del sistema político hasta entonces, es más plausible considerar que no se habrían presentado tantos candidatos si no confiaran en la posibilidad de ser elegidos, aunque no creemos que lo hicieran por confianza o desconfianza en algo tan abstracto como “el experimento político”, sino más bien por contar con ciertas garantías acerca de que fuera permitida su hipotética elección. Por otro lado, la propia Martín Muñoz (1992: 317) señala, citando el diario *Al-Ahram* (15.10.1976), que un 12% de los candidatos independientes reconocieron que se presentaban como tales porque no se les había admitido como candidatos de la plataforma de centro²⁶.

En cuanto a las plataformas, aunque los datos de los que disponemos difieren ligeramente, reflejan en cualquier caso que las limitaciones de apoyo social, y en particular económico, de las plataformas de la derecha y, sobre todo, la izquierda, se dejaron sentir en el número de candidaturas presentadas. Mientras que la plataforma de centro presentó un número de candidatos muy superior a los escaños en disputa (512/527 para 348²⁷), la derecha solo presentó 162/171 y la izquierda 66/65²⁸. En las zonas rurales la plataforma de centro supuso el 92% de las candidaturas, mientras que en las grandes ciudades dicha proporción se redujo al 66%, pues fue en ellas donde se concentraron las candidaturas tanto de las otras plataformas como de numerosos independientes (Martín Muñoz 1992: 314-316).

Los recursos de los candidatos para la campaña electoral fueron muy desiguales. La gran mayoría de los medios de comunicación, que seguían siendo propiedad del Estado, excluyeron de sus páginas los puntos de vista y la propaganda electoral de todos los candidatos salvo los de centro. Junto a la televisión y la radio estatales, decisivas en un país con un alto porcentaje de analfabetismo, los medios escritos de los siete grupos de prensa se alinearon sin fisuras con la nueva organización política del régimen, con la única excepción de las revistas *Al-Talía* y *Ruz al-Yusuf*, feudos, respectivamente, de las corrientes

²⁶ *Al-Ahram*, 15 de octubre de 1976. Citado por Martín Muñoz (1992: 317).

²⁷ Si bien el Parlamento debía contar con 350 diputados, los dos correspondientes al Sinaí ocupado no fueron objeto de competición electoral, aunque posteriormente dos diputados serían nombrados por la USA para ocuparlos.

²⁸ Los datos presentados respecto al número de candidatos por plataforma proceden, respectivamente, por orden de aparición de Martín Muñoz (1992: 314) y `Alî al-Dîn Hilâl, “Les Élections législatives égyptiennes de Sa`ad Zaghlul a Hosni Moubarak” en `Alî al-Dîn Hilâl (dir.), *Le processus démocratique en Égypte*, en árabe, El Cairo, Universidad de El Cairo, 1986, p. 257. Citado por Ben Néfissa & Arafat (2005: 136).

marxista y naserista, que ya comenzaban a pagar, por vía de restricciones de medios y amenazas, el precio de su disidencia. Los candidatos de la oposición tuvieron, por tanto, que conformarse con la elaboración de carteles electorales y la celebración de mítines que no podían ser anunciados en los medios de comunicación.

En lo que respecta al contenido de la campaña electoral, como rasgos distintivos hay que señalar que la plataforma de izquierdas se centró en las reivindicaciones económicas y sociales, y la de derechas en apoyar la liberalización económica, mientras que la de centro insistió en las credenciales personales y profesionales y la experiencia de los candidatos, algo que se agudizó en las zonas rurales, en las que la contienda política era en muchas ocasiones el correlato de rivalidades entre notables de la política y la economía locales. Una reivindicación común de numerosos candidatos de derechas e independientes fue la de la aplicación de la *charía*²⁹. La agitación de los sentimientos religiosos islámicos, con el fin particular de debilitar a la izquierda, tildada de “atea” y “comunista”, fue una constante de la campaña, en la que no intervinieron únicamente los políticos, sino también numerosos religiosos. La autorización de publicación en 1975 de *Al-Daawa* (الدعوة) y *Al-Itisam* (الاعتصام), medios de los Hermanos Musulmanes y únicos medios de prensa no estatales autorizados, estuvo sin duda muy relacionada con la intención del régimen de debilitar a la izquierda.

La campaña y el proceso electorales se vieron acompañados por numerosos incidentes violentos. En las cuatro semanas que duró aquella se produjeron 11 muertes y 222 detenciones, y los incidentes violentos fueron aun más recurrentes, según Martín Muñoz, durante el desarrollo de la votación, en los días 28 de octubre y 5 de noviembre, si bien la autora no ofrece datos al respecto (Martín Muñoz 1992: 318).

2.3.4.2 Resultados, representatividad y lógicas electorales singulares

Según los datos oficiales anunciados por el diario *Al-Ahram*, para votar en las elecciones se inscribieron poco más de 9,5 millones de electores, el 47,1% de quienes tenía derecho al voto (hay que señalar que los miembros en activo del Ejército y las fuerzas de seguridad, cerca de un millón de personas, no lo tenían). De ellos, siempre según la misma fuente, votaron el 80%³⁰. No obstante, los observadores locales y extranjeros otorgaron poca credibilidad a las cifras oficiales, y en particular a la participación, que algunos

²⁹ Martín Muñoz (1992: 316-317) extrae estas conclusiones de las encuestas y análisis de Mark N. Cooper (1982): *The Transformation of Egypt*, Londres, pág. 212.

³⁰ *Al-Ahram*, 28 de octubre de 1976 (Citado por Martín Muñoz 1992: 321).

estimaron cercana al 40%³¹. De ser ciertas estas estimaciones, el número de participantes en las elecciones no habría llegado a los 4 millones, es decir, al 20% de los electores potenciales.

La plataforma de centro obtuvo una cómoda mayoría, siendo la de la derecha la segunda más votada, al obtener 22 diputados. Sin embargo, tras las elecciones 10 de estos se integraron en la plataforma de centro (هلال 2006: 209), lo que dejó una configuración final del Parlamento de 276 escaños (79,7%) para la plataforma de centro; 12 diputados (3,4%) para la derecha; y 2 diputados (0,5%) para la izquierda. Por su parte los independientes obtuvieron 52 escaños (15% de los escaños)³². El análisis realizado por Martín Muñoz muestra cómo la plataforma de centro obtuvo sus mejores resultados en las zonas rurales del Delta y el Alto Egipto y en la zona del Canal de Suez, mientras que en las grandes ciudades y en las zonas industriales no alcanzaba el 50%, o lo hacía a duras penas. De la misma manera, en las zonas industriales apenas obtenía el 50% de los votos destinados a la categoría “obreros”. En la categoría de “profesionales”, si bien los resultados de la plataforma de centro eran mejores en general que en la categoría de “obreros”, se observaba el mismo patrón de influencia del carácter predominantemente urbano, industrial o rural de la circunscripción³³.

La necesidad de recurrir a la segunda vuelta en el 82% de las circunscripciones para establecer el candidato vencedor dio a las elecciones la apariencia de una auténtica competición electoral. Sin embargo, hay que destacar que la plataforma de centro presentó casi un 50% más de candidatos que el número de escaños posibles, por lo que una gran parte de dicha competición (aunque los autores citados no prestan atención a este aspecto ni apuntan cifras) debió de producirse entre los propios candidatos de la plataforma de centro. Este aspecto revelaba por primera vez una concepción un tanto singular de los procesos electorales que, aunque entonces pasara un tanto desapercibida, se manifestaría inequívocamente en los años 90 y en la primera década del siglo XXI: las elecciones legislativas serían utilizadas por el poder como una suerte de “elecciones internas”, de elecciones para formar parte del régimen. Los candidatos vencedores no solo accedían al

³¹ Alexandre Buccianti, uno de los periodistas más informados y fiables sobre Oriente Medio, y en particular sobre Egipto, señaló tal estimación en su estudio sobre las elecciones de 1984 (Buccianti 1984: 67-68), estimación que coincide con la de *Al-Talia* (nº 12 y 13, diciembre de 1976 y enero de 1977), citada por Waterbury (1983: 367).

³² Junto a los dos escaños del Sinaí, durante el proceso electoral general no se eligió en dicho momento, sino posteriormente, al representante de una de las circunscripciones de Asiut, a causa del fallecimiento del único obrero que se presentaba (*Al-Ahram*, 7 de noviembre de 1976. Citado por Martín Muñoz 1992: 319).

³³ Por mencionar solo los datos extremos, en El Cairo y Alejandría la plataforma de centro obtuvo, respectivamente, el 49% y el 38% de los votos, y en el Delta industrial solo consiguió el 52,66% de los escaños de los obreros, mientras que en el Delta agrícola y en el Alto Egipto lograba más del 90% de los votos incluso en la categoría de obreros (Martín Muñoz 1992: 319-320).

Parlamento, sino que accedían a los estratos superiores del régimen, aportando su representatividad y su legitimidad. En este mismo sentido hay que interpretar el paso, que ya hemos mencionado, de 10 candidatos triunfantes de la plataforma de la de la derecha a la de centro. Como veremos más adelante con mayor claridad, también sería posible acceder al régimen (y a su partido), desde la condición de independiente vencedor.

Desgraciadamente, los pocos estudios sobre las elecciones de 1976 y la breve legislatura que siguió no buscaron conocer el número de los 50 independientes electos que posteriormente se alinearon en general con las posturas de Sadat, sino que se fijaron más en quienes tenían y/o siguieron después una trayectoria política distinta. Entre estos encontramos a naseristas, marxistas, wafdistas, disidentes del régimen, e incluso miembros de los Hermanos Musulmanes, que conformarían, junto con los dos diputados de la plataforma de izquierda (uno de ellos Jaled Mohai Eddín) una oposición variada y con intereses contrapuestos. Los diputados elegidos como independientes más destacados por su trayectoria política eran Kamal Eddín Husein, exmiembro del CMR de significativa orientación islámica conservadora; Helmi Murad, exministro con Náser y exmiembro del Partido Socialista (nacionalista y religioso) de los años 30; Ahmad Taha, siempre diputado comunista por Chubra, y Mahmud al-Qadi, así mismo inveterado diputado desde 1957. A ellos cabe añadir el joven líder naserista Kamal Ahmad y el antiguo ministro wafdistá Abdel Fattah Hassán.

Pero, como señaló Ansari, el aspecto más destacable de la composición del nuevo Parlamento fue que contuvo una de las mayores concentraciones de miembros de familias de *kibar al-ayán* (كبار الأعيان), los más destacados notables rurales que habían dominado la vida parlamentaria egipcia durante la primera mitad del siglo XX. Ansari cita cerca de 40 familias de todas las zonas rurales de Egipto, y señala que esos nombres “son solo unos pocos del total”. Los *kibar al-ayán* no eran, en su mayoría, los descendientes de las elites terratenientes de origen extranjero del siglo XIX, ni tampoco los terratenientes absentistas que vivían en la ciudades, sino las familias asentadas en el medio rural que habían acumulado grandes propiedades de tierra durante más de 100 años y copado los principales puestos de la administración local (sobre todo el de *umda* -عمدة-, o principal autoridad en los pueblos). De ahí que formaran parte de la alta burguesía agrícola, de los “señores feudales” que el naserismo quiso sojuzgar, y que hubieran sido en su mayor parte objeto de las investigaciones del Alto Comité para la Liquidación del Feudalismo. No es de extrañar, por tanto, que las primeras sesiones del Parlamento se dedicaran a denunciar los “abusos” cometidos por el naserismo contra esta elites rurales (Ansari 1987: 197-198).

En cuanto a la representatividad de otros sectores sociales, hay que destacar que únicamente 4 mujeres fueron elegidas diputadas, mientras que ninguno de los elegidos era copto. Continuando la tradición iniciada por Náser, Sadat destinó sus diez escaños de libre

designación a reequilibrar simbólicamente esta situación, nombrando a 8 miembros de la comunidad copta y dos mujeres. En cuanto a su adscripción partidista o electoral, 8 de ellos eran miembros de la plataforma de centro, 1 de la plataforma de derechas, y el décimo se había presentado como independiente, si bien este último ingresaría más adelante, en 1979, en el partido en el que se transformaría la plataforma de centro, el Partido Nacional Democrático (Martín Muñoz 1992: 321)

2.3.4.3 La disolución de la USA y la autorización de la formación de partidos

Ya poco después de la celebración de las elecciones, el 16 de noviembre, Sadat había anunciado que se autorizaría la formación de partidos políticos. El 2 de enero de 1977 se promulgó la autorización oficial. Apenas una semana después, el 10 de enero, el primer secretario general de la USA, Mustafa Jalil (nombrado diputado por Sadat), anunció la abolición de todas las organizaciones dependientes de la USA, excepto el Comité Central y la Organización de Mujeres, medida que fue decretada sin consultar a ningún órgano de la USA y sin que ninguno de ellos presentara resistencia.

Las elecciones de 1976, bajo el manto de la promesa de liberalización política, supusieron la transformación del andamiaje institucional del sistema político y la mayor operación de remplazo de elites del régimen político desde 1952, en la que subyacía la enmienda parcial de sus apoyos socioeconómicos, ya comenzada años atrás. No obstante, como veremos en el capítulo II 5.1, el masivo acceso de la alta burguesía agrícola y de otros sectores sociales al Parlamento egipcio no significó que el ahora formal, estructural y sustantivamente diferenciado régimen de Sadat hubiera excluido a la burocracia, el Ejército y el aparato de seguridad de su configuración. Por el contrario, un amplio elenco de funcionarios de tales procedencias, pero dispuestos a trabajar con una orientación muy diferente a la del régimen naserista en algunos aspectos siguiendo las orientaciones de Sadat, controlarían o seguirían controlando los principales engranajes del aparato del Estado.

Para llevar a cabo las transformaciones mencionadas, pese a que mantuvo un absoluto control de todos los resortes del poder y del proceso electoral, el régimen de Sadat permitió que Egipto conociera una etapa de relativa libertad política que se prolongó hasta poco más de dos meses después de concluidos los comicios. No obstante, dicha libertad comenzaría muy pronto a reducirse de nuevo en cuanto se manifestaran, en diversos órdenes, signos de oposición a sus políticas.

2.4 RETRADICIONALIZACIÓN DEL RÉGIMEN E ISLAMISMO POLÍTICO

2.4.1 La “vuelta a la religión” del régimen de Sadat

Como ya hemos señalado, la derrota de 1967 propició la orientación de una parte considerable de la sociedad egipcia hacia una mayor religiosidad. Las apariciones de la Virgen María que muchos declararon haber presenciado en los alrededores de El Cairo en 1968, y en las que muchos más, cristianos y musulmanes, creyeron, fueron tan solo el primer signo de esta nueva tendencia social.

Ya fuera por convicción o por cálculo político, desde muy temprano Sadat multiplicó en sus discursos las alusiones a la religión, hablando de su proyecto de construir un nuevo Estado “sobre las bases del conocimiento [o “la ciencia”, علم] y la fe religiosa”. Además, como también hemos mencionado, el que luego se autodenominaría “el presidente Creyente”, introduciría en la constitución de 1971 la cláusula que hacía de la *charía* “una de las fuentes principales de legislación”, y retrasaría una y otra vez la reforma de la Ley de Estatuto Personal (قانون الأحوال الشخصية), encargada al ministro de Asuntos Sociales en 1970 para que diera mayores derechos a las mujeres en diversos aspectos relacionados con el estado civil (matrimonio, divorcio, custodia de los hijos...).

Según Muntasir al-Zayyat, militante destacado en los 70 de las Gamaat Islamiyya, perseguido y encarcelado a raíz del asesinato de Sadat en 1981, y posteriormente abogado defensor en los años 80 y 90 de un gran número de militantes islamistas, los primeros años del mandato de Sadat fueron recibidos primero con precaución y luego con entusiasmo en medios como el de su familia, traumatizados por la derrota de 1967, decepcionados con el naserismo, y ya orientados a buscar en el islam su principal referente vital, social y político. El ataque de la Revolución Correctiva de mayo de 1971 al núcleo duro del naserismo y el discurso de Sadat en favor de las libertades públicas y los derechos humanos, seguido por la liberación de los presos políticos, abrieron la vía a ese entusiasmo, que se desató con la “victoria” de octubre de 1973:

“El hecho de relacionar la victoria de 1973 con la compañía de Dios fue una razón principal de la transformación de Muntasir al-Zayyat [*sic*], de Ahmad al-Zayyat [*su hermano, posteriormente “emir” de la Gamaa Islamiyya de Asuán*], y de gran parte de los estudiantes de las universidades en particular, hacia la religiosidad y la vuelta a Dios (...) Orientarse hacia el bloque soviético, hacia Rusia, hacia el comunismo, no había sido útil a Egipto, y la causa de la victoria de octubre era la orientación hacia Dios” (الزيات 2005: 34).

Pero la nueva mirada hacia la religión del régimen político tuvo un sesgo singular de dimensiones no solo sociales, sino también políticas y económicas. El gran jeque de Al-Azhar nombrado por Sadat en 1973, Abdel Halim Mahmud, se manifestó no solo como un feroz opositor al cambio de la legislación en materia de estatuto personal, sino también a cualquier tipo de redistribución económica igualitaria, llegando a tachar de cripto-comunista a cualquiera que la solicitara, y afirmando que no había nada islámico en que existieran desigualdades en una sociedad musulmana. Estas afirmaciones fueron realizadas en un polémico intercambio de artículos llevado a cabo en agosto y septiembre de 1975 con Abdel Rahmán al-Charqawi, editor de *Ruz al-Yusuf*, quien dimitió poco después de su calidad de miembro en el Consejo Superior de la Prensa al ser obligado por las altas instancias del régimen a suspender su polémica con el Gran Jeque³⁴. Abdel Halim Mahmud era conocido por ser el principal valedor en Al-Azhar de Arabia Saudí, que en 1971 había concedido a la institución religiosa, por mediación de Mahmud, una subvención de 40 millones de dólares para “combatir el ateísmo y el comunismo” (Heikal 2006: 227).

Otros personajes destacados del régimen de Sadat, como Osmán Ahmad Osmán, presidente de la mayor empresa de construcción del mundo árabe durante décadas (Arab Contractors, المقاولون العرب)³⁵, ministro de la Vivienda entre 1973 y 1976, yerno de Sadat, y quien llegó a situarse entre las 400 personas más ricas del mundo, mostraron un especial interés en acercar el régimen de Sadat a la visión conservadora del islam promovida por los Hermanos Musulmanes y en acabar con la izquierda estudiantil por el procedimiento que fuera, como veremos en el apartado siguiente.

2.4.2 Las relaciones del régimen de Sadat con los Hermanos Musulmanes en la primera mitad de los 70

El régimen de Sadat no se limitó a promover la presencia de las creencias religiosas, según una interpretación conservadora, en la vida social y política, sino que actuó de manera sistemática con el fin de reactivar el islamismo político. La liberación desde 1971 hasta 1974 de todos los miembros de los Hermanos Musulmanes encarcelados, el consentimiento de sus actividades desde el último año citado, y la autorización de sus medios de prensa *al-Daawa* y *al-Itisam* en 1975, fueron presentados por el régimen como una mera muestra de liberalización y distensión política. No obstante, al margen del

³⁴ *Ruz-al-Yusuf*, n° 2463, 25 de agosto de 1975. Citado por Waterbury (1983: 361, 385).

³⁵ Aunque hablaremos con más detalle de Osmán más adelante (véase capítulo II 4.6), adelantemos que este construyó su empresa en la época naserista, participando en muchos de los proyectos públicos de dicha época, como la construcción de la Presa de Asuán. Sin embargo, la empresa fue nacionalizada parcialmente en 1961 y completamente en 1964, fecha en la que adquirió la denominación de المقاولون العرب.

importante detalle de que dichos medios fueron los únicos medios de prensa no estatales autorizados en fecha tan temprana, hay que señalar que entre bambalinas el régimen de Sadat incitaba a las corrientes islamistas a participar en actividades políticas y sociales.

Omar al-Telmesani, que en 1973 sucedió a Hasan al-Hudaibi como Guía General (المرشد العام) de los Hermanos Musulmanes (en un principio sin que ello se hiciera público oficialmente), siempre negó haber alcanzado ningún tipo de pacto con el régimen de Sadat, aunque no haber dialogado, en persona o mediante intermediarios, con altos cargos del régimen desde 1973 y a lo largo de los años 70. En su obra *Recuerdos, no memorias*, reconoció que recibió una propuesta para reunirse con Sadat en 1973, que finalmente nunca se concretó, y haberse reunido posteriormente “en numerosas ocasiones” con Hosni Mubarak, entonces vicepresidente de la República (con lo que el encuentro debió producirse no antes de 1975), gracias a la mediación de Osmán Ahmad Osmán, tras entregar al vicepresidente un documento de nueve páginas con la visión de la Hermandad acerca de las “reformas” que debían acometerse en el país, documento acerca del cual el guía general dio a Mubarak amplias explicaciones. Según Al-Telmesani, dichos encuentros se interrumpieron posteriormente, y a ellos siguió un silencio absoluto por parte del régimen, y el único compromiso con el régimen que los Hermanos Musulmanes adquirirían sería el de intentar apaciguar, en la segunda mitad de los 70, a las corrientes islamistas más radicales que se habían alejado de las doctrinas y prácticas de los Hermanos Musulmanes³⁶.

No obstante, a pesar de los desmentidos de la Hermandad, entre el resto de las fuerzas y observadores políticos de las más diversas tendencias, incluida la islamista radical, existió y existe la convicción de que algún tipo de pacto se produjo. El siempre bien informado Hasanein Heikal aseguró, dando todo lujo de detalles, que la primera reunión entre Sadat y miembros de los Hermanos Musulmanes residentes en el extranjero se produjo, gracias al patrocinio del rey Feisal de Arabia Saudí, en el verano de 1971 en Egipto, y que en dicha reunión Sadat les expuso que “se enfrentaba a las fuerzas que les habían oprimido” (en referencia a “los centros de poder” naseristas), que “compartía su objetivo de luchar contra el ateísmo y el comunismo”, y que estaba dispuesto a “facilitar su vuelta a la actividad pública” e incluso a “formar una alianza con ellos”. No obstante, en aquella ocasión -siempre según Heikal- los representantes de la Hermandad desconfiaron

³⁶ La obra citada de Al-Telmesani (ذكريات لا مذكرات), publicada originalmente en la revista *Al-Musawwar*, nº 2989, 22 de enero de 1982, puede encontrarse en la wikipedia de los Hermanos Musulmanes (<http://www.ikhwanwiki.com>, consultado el 20 de febrero de 2015) y en la página oficial de la Hermandad en inglés (www.daawa-info.net). Sin embargo, estas versiones no son fotocopias del formato original y no están numeradas y, si bien recogen los pasajes a los que acabamos de hacer referencia (en los apartados جنور التكفير (“Las raíces del *takfir*”) ووساطة عثمان (“La mediación de Osmán”), no recogen todos los detalles que citan otros autores (الزيات 2005; هيكال 2006) haciendo referencia a la revista, que no hemos podido consultar.

de las intenciones de Sadat y declararon no estar autorizados para dar una respuesta (هيكل 2006: 227-229). Al-Zayyat, por su parte, desde el seno del islamismo radical, da por seguro que dicho “pacto, acuerdo o entendimiento” se produjo, y que a raíz de él los dirigentes de los Hermanos Musulmanes comenzaron a poder visitar las universidades y expresarse libremente en ellas con el objetivo de que contribuyeran a reducir la pujanza de las corrientes “comunistas” (الزيات 2005: 61-62).

2.4.3 El impulso gubernamental a las *gamaat diniyya*

Fuera lo que fuera del posible pacto o entendimiento entre los Hermanos Musulmanes y el régimen de Sadat, no hay duda de que el creciente activismo de las “corrientes islamistas”, aunque fuera de generación o motivación endógena, recibió un fuerte impulso del régimen, que incluyó el apoyo económico, desde los primeros años 70. El propio Hosni Mubarak reconocería explícitamente en 1993 en una entrevista concedida al diario saudí *Asharq al-Awsat*, después de largos años como presidente, tal apoyo y su objetivo: acabar con las ideas comunistas. Y si entonces Mubarak reconocería que tal política había sido un error, alegaría exclusivamente razones “técnicas”, no de principios: “Estas maneras eran equivocadas, ya que el comunismo no tenía futuro para extenderse en la sociedad egipcia”³⁷.

Al-Zayyat, que también escribió con conocimiento de causa, mencionó a uno de los promotores iniciales de estas políticas del régimen:

“Con toda seguridad, el papel vital para la expansión de las ideas islamistas rigoristas [متشددة]³⁸ en la Universidad de Asiut [la pionera en este sentido] lo

³⁷ *Asharq al-Awsat*, 9 de octubre de 1993.

³⁸ A muchos árabes musulmanes no les gusta utilizar ni que se utilicen en árabe los neologismos derivados de la imitación de los términos y conceptos manejados en las lenguas europeas para referirse a las corrientes islamistas rigoristas o “radicales” y sus miembros, y menos aún si tales corrientes recurren a la violencia para defender sus ideas. Así, los árabes musulmanes que no se adscriben a tales corrientes rechazan tanto el término إسلاميون (“islamistas”, neologismo derivado de “islámico” إسلامي como أصوليون (“fundamentalistas”) por derivarse cada uno de conceptos con los que se identificaría cualquier musulmán: el islam y los fundamentos de la religión (أصول الدين). El barbarismo راديكالي (transcripción de “radical”) tan solo ha tenido éxito entre estudiosos e intelectuales. El término متشدد, “rigorista”, que utiliza Al-Zayyat es el más utilizado de manera genérica, al menos en Egipto, por los no adscritos a tal corriente y también -como vemos en el caso de Al-Zayyat- por algunos de los que sí lo están. Entre los primeros se utiliza también el adjetivo متطرف (“extremista”), más peyorativo y poco significativo semánticamente. Aunque entendemos lo fundado etimológica y sentimentalmente del rechazo de los musulmanes al uso de ciertos términos, hoy en día resulta difícil prescindir del uso de algunos, como “islamista”. Utilizar expresiones como “grupos (radicales) de referente islámico” o similares resultaría poco económico y operativo. Por otro lado, la mayoría de los propios árabes musulmanes han acabado por aceptar, en la prensa y los medios académicos y en la vida corriente, el uso del adjetivo “islámico”, sin derivarlo, para referirse a “la corriente” o “las corrientes” (تيار - تيارات) islamistas e incluso a sus miembros.

desempeñaron las instrucciones de Sadat de que se abrieran los canales oficiales a la corriente islamista (...) Fue Mohammed Osmán Ismail, gobernador de Asiut y hombre cercano al presidente, quien le aconsejó que abriera la puerta a la corriente islamista para golpear a las corrientes naserista y de izquierdas” (الزيات 2005: 36).

Mohammed Osmán Ismail había sido citado el 29 de noviembre de 1972, como hemos señalado, por un estudiante detenido por atacar a los estudiantes de izquierdas como el hombre que lo había reclutado para “combatir a los comunistas”. Los ataques físicos a los estudiantes de izquierda se generalizarían, sobre todo, en la segunda mitad de los años 70, y Osmán Ahmad Osmán sería uno de los personajes del régimen de Sadat que mediarían para que las fuerzas de seguridad no intervinieran para impedirlos o castigarlos (الزيات 2005: 66).

Ya en el verano de 1971 el ministro de Asuntos Religiosos había inaugurado el primer “campamento” para jóvenes musulmanes, entre los que se encontraba un gran número de estudiantes. En estos campamentos en los que se llevaban a cabo ejercicios espirituales, enseñanza doctrinal y ejercicio físico se realizaban también ejercicios militares que poco a poco desbordarían el marco oficial de la “preparación militar” nacional incluida en otros campamentos organizados por el Estado. Posteriormente, dichos campamentos pasaron a ser organizados por los propios grupos islamistas, a pesar de lo cual seguían siendo pagados con los presupuestos de la universidad, siguiendo órdenes superiores (Carré & Seurat 2001: 110; الزيات 2005: 48). En 1975 se celebró en Asuán el Primer Campamento Islámico de Estudiantes de Universidades. Hasta esta fecha aproximadamente, que coincidió con el retorno a la actividad pública de los Hermanos Musulmanes, para todas las corrientes y grupos islamistas se utilizaba el término *gamaat diniyya* (“grupos religiosos”), que acogía a un magma entonces poco diferenciado de jóvenes de los Hermanos Musulmanes, jóvenes afines al pensamiento yihadista (جهادي) que aun no habían creado sus propias organizaciones, independientes salafistas y jóvenes de educación azharí. Al-Zayyat reconoce que en la creación de algunos de estas *gamaat diniyya* -que según él desempeñaban únicamente una “labor de choque con las fuerzas de izquierdas, pero no intelectual”- sí es posible que tuviera una intervención directa el régimen de Sadat, pero no así en la de las *gamaat islamiyya* (“grupos islámicos”), denominación que se impondría a partir de 1975 para designar a los grupos que habían cristalizado en cada provincia o universidad desde la independencia del poder y con una gran autonomía ideológica y de acción al menos aparente, pues de algunos de ellos se sospecharía su relación con los Hermanos Musulmanes, y muchos de sus miembros se anunciarían públicamente su incorporación a la Hermandad a principios de los 80, como veremos en el capítulo III 2.2 A partir de entonces, los grupos denominados *gamaat*

islamiyya, localizados principalmente en el Alto Egipto, se diferenciarían ideológicamente y se desligarían operativamente de los Hermanos Musulmanes (الزيات 2005: 65-69).

En los relatos de Al-Zayyat sobre la evolución de la corriente islámica en la década de los 70, aparecen constantemente como dirigentes juveniles entremezclados aunque no revueltos -pues ya presentaban diferencias doctrinales o de referencia a dirigentes religiosos- gran parte de las personas que posteriormente, de los años 80 al siglo XXI, ocuparían los papeles centrales en el activismo político, religioso y/o armado islamista. Tras diferenciarse, distanciarse, e incluso enfrentarse muchos de ellos, y algunos pasar largas estancias en prisión, volverían a encontrarse como aliados o adversarios en los primeros partidos islamistas permitidos a partir de 2011. Hablamos de personajes como Abdel Moneim Abul Futuh, Essam al-Erián, Abul Ila al-Madi (los tres miembros de los Hermanos Musulmanes, aunque Al-Madi y Abul Futuh los abandonaran posteriormente en distintos momentos y constituyeran sus propios partidos), o Nayeh Ibrahim, Karam Zuhdi, Rifai Ahmad Taha y Talaat Fuad Qasem (miembros de las *gamaat islamiyya*, implicados en el asesinato de Sadat, y algunos de ellos, tras 2011, fundadores del Partido de la Construcción y el Desarrollo).

2.4.4 El asalto a la Academia Técnica Militar (1974) y las corrientes islamistas yihadista y tafkirista

En abril de 1974, un grupo de militantes islamistas tomó por asalto la Academia Técnica Militar (كلية الفنية العسكرية) con el objetivo de dirigirse posteriormente a la sede de la USA, donde Sadat debía dar un discurso, y llevar a cabo un golpe de Estado. La operación fue desbaratada con facilidad, aunque se produjeron docenas de muertos y heridos entre los islamistas. Los dos principales dirigentes del asalto fueron rápidamente juzgados y ejecutados. En la primera sesión del juicio, los acusados se presentarían ante el tribunal con la siguiente declaración:

“Dios es grande. El Profeta Mahoma es nuestro dirigente y el Corán nuestra constitución. Morir por Dios es nuestra suprema ambición. Hemos sido acusados por nuestra fe musulmana, mientras es Anwar el-Sadat quien debería ser ejecutado”³⁹.

Pese a la ingenuidad con la que fue preparado este intento de golpe de Estado, y el escaso apoyo con el que contó, retrospectivamente resulta difícil comprender cómo, tras este primer aviso, el régimen de Sadat, con sus muy desarrollados y expeditivos servicios

³⁹ *Oriente Moderno*, 54, 11-12 (nov.-dic. 1974), pg. 671. Citado por Arigita Maza (2005: 138).

secretos, no fue consciente de que el control de los grupos islamistas radicales podía escapársele de las manos. Podría pensarse que el acercamiento a los Hermanos Musulmanes desde 1975 estuvo orientado -como de hecho lo estuvo- a cooptarlos de manera que constituyeran una fuerza moderada y moderadora para tales grupos. Sin embargo, la permisividad con los grupos radicales continuó mucho más allá de 1974, e incluso después de su segundo aldabonazo violento, en julio de 1977. El denominado “Grupo de la Academia Técnica Militar” y el conocido como Al-Takfir wa-l-Higra, que secuestraría y asesinaría al jeque Al-Dahabi, ministro de Asuntos Religiosos, en julio de 1977, eran grupos relativamente reducidos con los que el resto de las agrupaciones islámicas rechazaban colaborar por sus planteamientos radicales tafiristas. Sin embargo, la semilla del enfrentamiento con el Estado, si aquel no continuaba haciendo concesiones al islamismo, estaba inscrita en las concepciones doctrinales de la corriente general yihadista a la que pertenecían, al menos en las formulaciones que de ella hacían en la época sus líderes religiosos y en la pasión con la que sus miembros, en su gran mayoría muy jóvenes, las recibían.

2.4.4.1 El venero de la corriente islamista yihadista. La influencia decisiva de Sayyed Qutb

El término “yihadista” se ha impuesto en castellano en los últimos 10 ó 15 años para designar a los grupos islamistas que consideran legítimo el recurso a la violencia armada, y en numerosos casos al terrorismo, para alcanzar sus fines, es decir, en última instancia, para instaurar un régimen político y social “auténticamente islámico”. Su origen se encuentra en la palabra “yihad” (جهاد) que refiere al esfuerzo que debe hacer todo musulmán para preservar el islam y la comunidad musulmana, esfuerzo que puede y debe recurrir a la fuerza en ciertas circunstancias, pero que no se circunscribe ni prioriza necesariamente el recurso a la fuerza. En árabe los grupos islamistas radicales a los que estamos haciendo referencia utilizan el adjetivo جهادي, obtenido mediante la anexión de un sufijo que indica origen o relación, para definirse a sí mismos y distinguirse de otros sectores del islamismo. A partir de la noción de relación, el adjetivo se puede usar en la acepción de “proyihad”.

Numerosos musulmanes que pretenden desmarcarse del uso y de las justificaciones que hacen de la violencia los grupos radicales a los que nos referimos han considerado en principio este uso inapropiado por considerar que la yihad es deber y “patrimonio” de todos los musulmanes, y a nadie corresponde excluir a nadie de la definición y las condiciones de aplicación de ese deber, y a partir de ello de su observancia. No obstante, incluso estos musulmanes reticentes a hacerlo están acabando por aceptar el adjetivo en

árabe, al menos aquellos que se enfrentan a la necesidad de diferenciar las corrientes del islamismo y sus doctrinas. A fin de cuentas, sociolingüísticamente su uso no es incorrecto: no solo la noción del posible recurso a la fuerza está en cualquier uso que se haga del término “yihad” aislado, sino que en la mayor parte de los contextos políticos la noción del uso de la fuerza -y no de su “posible” uso-, es preponderante e inequívoca⁴⁰. En términos políticos y en lo que toca a la yihad, lo único que diferencia a los grupos islamistas entre sí y del resto de los musulmanes son las concepciones acerca de cuándo, cómo y contra quién se puede y se debe recurrir a la yihad armado, o a usar la violencia en nombre de la yihad. Desde la constatación de que la noción del recurso a la fuerza está preponderantemente implícita en la mayor parte de los usos del término en los contextos políticos, el uso del término “yihadista” en castellano nos parece adecuado: yihadista sería el que tiene una tendencia exacerbada a recurrir a la yihad -en las circunstancias o por las razones que ahora expondremos-, de la misma manera que el perfeccionista es el que tiene una tendencia exacerbada hacia la perfección o el inconformista a no conformarse.

La mayor parte de los islamistas yihadistas egipcios “ilustrados”, desde los años 70 en adelante, coinciden en señalar las elaboraciones doctrinales de Sayyed Qutb como la principal fuente de su orientación religiosa y política, aunque por mediación de Qutb llegaron posteriormente a leer las obras del paquistaní Abul Alá al-Maududi y de muchos otros pensadores clásicos (el más comúnmente destacado quizás sea Ibn Taimiyya) y algunos modernos. Decimos “ilustrados” porque la mayor parte de los activistas no accedieron ni sobre todo acceden directamente a tales elaboraciones, sino tan solo a las reelaboraciones de sus líderes espirituales o políticos. A pesar de que, como veremos, en los 70 la mayor parte de los miembros de las corrientes islamistas yihadistas tenían un elevado grado de educación general, muchos de ellos tenían un desconocimiento bastante superficial no ya de las obras de los pensadores radicales en los que decían inspirarse, sino incluso de los contenidos doctrinales esenciales del islam⁴¹.

⁴⁰ Por poner un solo ejemplo, cuando en junio de 2013 dirigentes de los Hermanos Musulmanes se unieron al llamamiento de algunos ulemas sunníes a la “yihad” en Siria contra el régimen de Bachar al-Asad, y el presidente Mohammed Mursi anunció que apoyaba un cambio de régimen en dicho país y que su Gobierno iba a romper las relaciones con el Gobierno sirio, apoyando además el establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Siria, el ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Nabil Fahmi, se vio posteriormente obligado a aclarar que el Gobierno egipcio “no tenía intenciones de participar en la yihad en Siria”, excluyendo con ello de la común comprensión del término “yihad” las medidas de presión -incluso coercitivas, como la zona de exclusión aérea- que su Gobierno había declarado que iba a adoptar (“Egipto no tiene intención de librar una yihad contra Siria”, *Reuters España*, 20 de julio de 2013 (<http://es.reuters.com/article/newsOne/idESMAE96J00O20130720>, consulta del 25 de julio de 2013).

⁴¹ Según Omar Abdel Rahmán, él mismo inspirador de otros grupos radicales a finales de la década sobre el que hablaremos más adelante, “la mayoría de los miembros de Al-Takfir wa-l-Higra no recuerdan el Corán, no saben las normas de la gramática, y a menudo se equivocan incluso en los nombres de los libros en los cuales basan sus argumentos” (Citado en *Al-Musawwar*, nº 3013, 9 de julio de 1982. Citado por Ayubi (1991: 121). Sobre el grupo Al-Takfir wa-l-Higra volvemos en el capítulo II 3.3.3.

Como hemos señalado en el capítulo I 2.2.2, Qutb fue un miembro de los Hermanos Musulmanes que fue ejecutado en 1966, condenado por haber instigado el asesinato de Násir. Previamente había escrito una docena de obras sobre diversos aspectos del islam en su relación con el mundo moderno, entre las que se encontraba una titulada *العدالة الاجتماعية في الإسلام* (*La justicia social en el islam*) y otra denominada *المعركة بين الإسلام والرأسمالية* (*La batalla entre el islam y el capitalismo*), que son raramente mencionadas, sobre todo la segunda. En ellas, si bien defendía la propiedad privada, entendía esta como un modo de gestión de los bienes que “en sentido amplio solo pertenecen a la sociedad”, que debían “beneficiar a la comunidad entera” y cuya propiedad no podía “estar limitada a ciertos individuos”, razón por la cual defendía “una auténtica reforma agraria, de tipo no capitalista”⁴² en Egipto, y que le llevó a apoyar en principio los planes de Násir, con quien mantuvo contactos antes del acceso de aquel al poder.

Pero las obras más conocidas de Qutb son aquellas que se refieren al gobierno, a los gobernantes de las sociedades musulmanas, y a la actitud de los musulmanes ante ellos, es decir fundamentalmente *معالم في الطريق* (*Jalones en el camino*) (1979, 1ª ed. 1964)⁴³ y *في ظل القرآن* (*A la sombra del Corán*). Resumiendo, las doctrinas de Qutb que nos interesan a efectos del desafío que suponen para el régimen en construcción de Sadat se estructuran en torno a cuatro puntos:

1) La *yahiliyya* (جاهلية, la “ignorancia del islam”), la situación habitualmente atribuida a la sociedad ante-islámica de la Península Arábiga, es la situación de “toda sociedad que no esté al servicio de Dios y solo de Dios”, lo que incluye a “todas las sociedades que existen en nuestros días sobre la tierra”, lo que a su vez comprende a “las sociedades que pretenden ser musulmanas” pero en realidad “no están al servicio del Dios Único en su organización de la vida”, en la medida, sobre todo, en que “dejan ejercer la soberanía (الحاكمية) a otro distinto que él”.

“Todo lo que nos rodea hoy es *yahiliyya*: las concepciones y creencias de la gente, sus costumbres y tradiciones, las fuentes de su cultura, su literatura y sus artes, sus leyes. Incluso gran parte de lo que hoy se atribuye a la cultura [ثقافة] islámica, a las autoridades o referencias [مراجع] islámicas, a la filosofía islámica o al pensamiento islámico es producto de la *yahiliyya*” (Qutb 1979: 8, 17-18).

⁴² Las citas proceden de Sayyid Qutb: *Social Justice in Islam*, Washington, 1955 (publicada en árabe en El Cairo en 1949: *العدالة الاجتماعية في الإسلام*), pg. 105, 109, 278 y *معركة الإسلام والرأسمالية*, 3ª ed., Beirut, 1966 (1951), pg. 38 y 43, reproducidas por Carré y Seurat (2001: 85,88). Existe traducción al español: Sayyid Qutb: *Justicia social en el Islam*, trad. José Cepedello Boiso, Córdoba, Almuzara, 2007.

⁴³ Existe al menos una versión en castellano de esta obra, un tanto defectuosa en la corrección y el estilo de la lengua de llegada pero que permite conocer lo esencial de su contenido: Said [sic] Qutb: *Las normas en el camino del Islam*, Granada, Centro Islámico, 1978.

2) La “soberanía de Dios” (حاكمية الله, en adelante *hakimiyya*)⁴⁴, que debe ser instaurada, implica que la sociedad debe ser regida únicamente por los mandamientos de Dios, que solo pueden deducirse del Corán y de la Tradición del Profeta (السنة النبوية). Cualquier poder que emane de los hombres, sea de “la mayoría”, “del pueblo”, “del partido”, o incluso de los hombres de religión -y, específica, “incluso de los hombres de religión islámica, الشيوخ- es rechazable. Es más, Qutb rechaza explícitamente “lo que se conoce como teocracia (...) el gobierno de los hombres que pretenden hablar en nombre de los dioses”. “Se trata -dice- de que sea la Ley Sagrada la que gobierne, y de que se recurra a Dios en conformidad con las claras leyes que ha dictado” (Qutb 1979: 60, 89-90). Lo que defiende Qutb, por tanto, y con él la mayoría de los islamistas, como señaló Ayubi, no es una “teocracia” -como afirmó también el propio Qutb-, sino una “nomocracia”, un estado regido por el imperio de la ley⁴⁵.

3) La yihad “no se reduce a una guerra defensiva, como pretenden algunos”, sino que consiste en hacer todo lo necesario para instaurar el “dominio de Dios sobre la tierra” (ربوبية الله), e implica la rebelión y/o la revolución (utiliza dos términos, تمرد و ثورة, pudiendo ثورة ser interpretado en ambos sentidos) contra todas las “formas, regímenes y circunstancias” que se deriven de “la soberanía del hombre”, la recuperación para Dios de su poder usurpado, la expulsión de los usurpadores y la destrucción del reino de los hombres para instaurar el reino de Dios (Qutb 1979: 59-60).

4) La “tiranía” (الطاغوت) siempre es enemiga de la soberanía de Dios. La vía islámica debe liberar a la gente de “la esclavitud de unos hombres por otros”, sean los que

⁴⁴ Este concepto, que no se encuentra ni en el Corán ni en el Hadiz, aunque sí tiene antecedentes en el movimiento jarichí del siglo VII, fue desarrollado por el pakistaní Abul Alá al-Maududi (1903-1979) (Gómez García, 2009: 128-129).

⁴⁵ Ayubi localiza en Ibn Taimiyya (sg. XIII-XIV) el desplazamiento teórico del énfasis en la autoridad del dirigente hacia la *charía* como principio de básico de la unidad de la comunidad musulmana (anteriormente, y en su mayor parte hasta hoy, los juristas musulmanes, siempre bien relacionados con o temerosos del poder, presentaban la autoridad del gobernante, incluso aunque fuera despótico e injusto, como inatacable en la medida en que aquella preservara el orden, la estabilidad y la paz interna de la comunidad). Sin embargo, el pensamiento jurídico y la jurisprudencia islámica (فقه) posteriores incorporaron el énfasis teórico y utópico de Ibn Taimiyya mediante una mistificación, pues la jurisprudencia islámica -“empeñada en rescatar a la sociedad del destino infeliz” de tender a una utopía que no solo nunca se materializaba sino que distaba mucho de hacerlo- habitualmente reflejaba una ficción histórica, al centrarse más en imaginarse cómo debían ser las cosas que cómo eran en realidad. Es decir, la *charía* nunca gobernó las sociedades musulmanas, o dicho de otra manera, nunca existió el “Estado islámico” derivado “puramente” de ella, y, sin embargo, el *fiqh* (la jurisprudencia) transmitía y retransmitía constantemente la ficción de que efectivamente existió en algún momento algo previo denominado “charía” y algo previo denominado “Estado islámico”, cuando lo que existió (y existe) es un *fiqh* presentado como “pura charía”, y un “Estado islámico” (ideal) que solo existe en el *fiqh* (Ayubi 1996: 36-42). Es un tema que ha retomado con una provocadora narración divulgativa Sadakat Kadri, *Heaven on Earth. A Journey through Shari'a Law from the Deserts of Ancient Arabia to the Streets of the Modern Muslim World*, Nueva York, Farrar, Straus and Giroux, 2012.

sean. De nada sirve “acabar con una tiranía romana o persa para que venga otra árabe” (Qutb 1979: 8, 24).

Aunque Qutb se guardó mucho en sus escritos de señalar explícitamente a los gobernantes egipcios y árabes como tiranos y apóstatas, de sus palabras se deduce claramente que todos ellos entraban en tales categorías, y por tanto debían ser combatidos. Por otro lado, la enmienda a la totalidad de las instituciones y autoridades, incluso las religiosas, de los regímenes árabes, tampoco pasaron desapercibidas al régimen de Náser, que por ello lo hizo ejecutar en 1966 antes que por ningún tipo de implicación concreta en el supuesto intento de asesinato contra él.

2.4.4.2 La experiencia de las cárceles naseristas. Las escisiones de los Hermanos Musulmanes

De la misma manera que la obra más “puramente política” de Qutb se gestó en gran medida en las cárceles egipcias, en estas se conformaron los primeros grupos de seguidores suyos, que lo declararían su imam (“guía”) y posteriormente se separarían de los Hermanos Musulmanes. El guía supremo de estos en la época, Hasan al-Hudaibi, intentó, en su obra escrita en 1969, *Predicadores, no jueces*, contener la atracción que sobre todo los más jóvenes, espoleados por las torturas y los sufrimientos, sentían por las elaboraciones de Qutb. En dicha obra, Hudaibi impugnaba los conceptos clave de aquel: pese a que la palabra *hakimiyya* no se encuentra en ningún versículo del Corán, Hudaibi coincidía en que ningún musulmán podía poner, por medio de su razón, ningún límite al poder de Dios. Sin embargo, este había dejado a los musulmanes un amplio margen para que organizaran los asuntos del mundo siguiendo su razón en el marco de los objetivos y fines de Dios. Por otro lado, según Hudaibi hay una diferencia fundamental entre la Ley Sagrada y la implementación de las disposiciones divinas, y “el gobierno islámico es aquel cuya ley principal (o lo que hoy llamamos «la Constitución») es la ley islámica”. Finalmente, por destacar tan solo lo más importante respecto a lo que nos ocupa, al-Hudaibi reafirmaba la visión sunní tradicional dominante de la obligación de someterse al soberano, incluso aunque este no fuera plenamente “un buen musulmán”, siempre que no fuera abiertamente impío, con el fin de evitar los enfrentamientos (فتنة) dentro de la comunidad musulmana; y en consecuencia rechazaba el anatema contra los dirigentes en particular, tras haber rechazado el anatema contra cualquier musulmán en general por parte de “quienes disientían de sus creencias”⁴⁶.

⁴⁶ Las citas y el resto de los contenidos proceden del capítulo 8 de دعاة لا قضاة, del apartado الحكومة الإسلامية (“El gobierno islámico”) consultado en la versión sin numeración de páginas que se encuentra en la

Pero los esfuerzos de Hudaibi fueron vanos: aunque hasta 1977 las relaciones entre los diversos grupos islamistas fueron muy porosas y dialogantes, desde principios de esa década numerosos jóvenes, principalmente concentrados en el Alto Egipto, optarían por las diversas corrientes y agrupaciones islámicas de inclinación yihadí, seducidos por la convicción y radicalidad de algunos de los antiguos hermanos que defendían dicha vía. Al-Zayyat menciona un nombre no demasiado conocido, pero según él fundamental en esta tarea, que al margen de la importancia efectiva que tuviera puede servirnos como ejemplo de la muy activa labor de proselitismo de tales personajes y su eficacia: Abdallah al-Samawi. Según nuestro autor, “Al-Samawi fue el verdadero maestro de nuestra generación en el pensamiento y la jurisprudencia [*fiqh*] de la yihad. Todos los que mataron a Sadat fueron alumnos suyos, aunque algunos lo nieguen” (الزيات 2005: 46).

El periplo de al-Samawi, apenas estudiado, es revelador acerca del activismo de los líderes espirituales del islamismo radical, de su rápida aceptación social y de la tolerancia del régimen de Sadat hacia ellos. Al-Samawi había formado parte de los Hermanos Musulmanes, los había abandonado tras salir de la cárcel en el año 1971 (en la que había entrado en 1965 a los 16 años), convencido por la ideas de Qutb, y no colaboraba con ellos porque consideraba que había que cambiar el régimen político por la fuerza, pues este había introducido o permitido numerosos aspectos de *yahiliyya* en la sociedad, que debían ser extirpados en sus manifestaciones (p.ej., en el terreno de las costumbres, consumo de alcohol y de películas, ocio...), pero sin dirigir la violencia contra quienes los promovían o practicaban más allá de los gobernantes. Desde 1972 o 1973, Al-Samawi dedicaba su vida a coger el tren, un día sí y otro también, e iba bajando, provincia tras provincia, preguntando dónde estaba la mezquita, y pronunciando en ella su sermón sin ningún problema por parte de ninguna autoridad civil o religiosa. Cuando comenzó a dirigirse a las universidades del Alto Egipto, también se le abrieron “las puertas y los oídos”, a pesar de que en ellas ya había liderazgos religiosos y organizativos afianzados. Por ejemplo, en la Universidad de Asiut se encontraban Ahmad al-Zayyat (hermano de Muntasir), Mohammed Chawqi al-Islambuli -el hermano de Jaled, uno de quienes mataron a Sadat- y Rifai Ahmad Taha, que luego sería emir de la Gamaa Islamiyya en la provincia. Según el al-Zayyat, en 1974-75, los seguidores de Al-Samawi eran pocos; en 1978 se contaban por miles (الزيات 2005: 45-46).

Al-Samawi es solo un ejemplo destacado del proceder de los apóstoles que difundieron el pensamiento yihadí entre los jóvenes en los 70, pero estos eran numerosos y diversos, y -no solo a juzgar por los relatos de Al-Zayyat- hay que destacar que la flexibilidad intelectual es, aunque las apariencias parezcan indicar lo contrario, una

característica muy común de los militantes islamistas radicales, siempre dispuestos a escuchar y debatir los puntos de vista de otros, y a modificar los propios y someterse a una nueva “autoridad” intelectual-religiosa, aunque esto se produzca casi siempre dentro de un marco referencial dado y limitado.

2.4.4.3 La corriente *tafkirista*

Se conoce como corriente “tafkirista” a aquella, inspirada así mismo en las ideas de Qutb, que iba mucho más lejos que la corriente “estándar” yihadí en la concepción del *kufr* (كفر), la “ocultación consciente o negación de la verdad del islam” (Gómez García 2009: 187), contra el que los musulmanes tienen el deber de luchar. Los tafkiristas llevan a sus últimas consecuencias el *takfir*, el anatema lanzado contra quienes se considera que han incurrido en el *kufr*: para esta corriente eran impíos los gobernantes, todos los que colaboraban con ellos, e incluso quienes consentían su gobierno⁴⁷. En consecuencia, el uso de la violencia en sí, o contra todos o parte, pasó a ser motivo de discusión.

El conocido como “Grupo de la Academia Militar”⁴⁸, creado y dirigido por el palestino Saleh Sirriya⁴⁹, suele ser relacionado con la corriente tafkirista pese a que sería otro grupo, Al-Takfir wa-l-Higra (التكفير والهجرة), Anatema y Emigración), el que comparte nombre con tal corriente. Ambos grupos nacieron contemporáneamente y desde principios de los 70 se produjeron intentos de unirlos, ya que los miembros de uno y otro coincidieron en prisión desde 1974. Serían conjuntamente objeto del primer estudio académico “de campo” sobre un grupo islamista “radical” (si se excluye de tal categoría a los Hermanos Musulmanes), elaborado por Saad Eddín Ibrahim en la segunda mitad de los 70 y publicado en su primera versión en 1980 (Ibrahim 1985)⁵⁰. Este estudio mostraría que,

⁴⁷ Para obtener una información detallada de la evolución de la interpretación de los conceptos *kufr* y *takfir* pueden consultarse las entradas correspondientes del *Diccionario de Islam e Islamismo* de Gómez García (2009: 187-188; 320-321).

⁴⁸ En general, los grupos islamistas egipcios son más conocidos por las denominaciones que les daban los jueces, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación que por los nombres que se daban a sí mismos. Esto es mucho más operativo dado las similitudes en la denominación de muchos de ellos, y la confusión en numerosas ocasiones de su adscripción doctrinal u operativa, dado que estaban muy relacionados entre sí.

⁴⁹ Saleh Sirriya se encontraría en la mitad de la treintena doctorado en Ciencias de la Educación cuando en 1971 llegó a El Cairo, donde trabajó para la Liga Árabe y comenzó a atraer la atención de estudiantes religiosos y a fundar pequeñas células en El Cairo y Alejandría. En Jordania había sido miembro de los Hermanos Musulmanes y posteriormente del Partido para la Liberación Islámica (حزب التحرير الإسلامي), y tras la derrota de 1967 había intentado cooperar con regímenes como el iraquí y el libio, afirmando ser un “revolucionario”, y había pasado temporadas en prisión (Ibrahim 1985: 501).

⁵⁰ Ibrahim publicó primero “Anatomy of Egypt’s Militant Groups: Methodological Note and Preliminary Findings”, *IJMES*, vol. 12, n° 4, diciembre de 1980, y posteriormente el artículo final al que hacemos referencia (Ibrahim 1985), publicado originalmente en *MERIP Reports*, n° 103, págs. 5-14 (1982).

efectivamente, existían muchas coincidencias y buenas relaciones entre los dos grupos, aunque también numerosas diferencias que habrían impedido la unificación. Lo que diferenciaba a ambos grupos era la radicalidad extrema que hacía y haría de Al-Takfir wa-l-Higra una organización excepcional y aislada. En realidad autodenominada Gamaa al-Muslimín (جماعة المسلمين, La Comunidad de los Musulmanes) o incluso, en ocasiones “la sociedad de los musulmanes” (مجتمع المسلمين), fue fundada por Chukri Mustafa, un egipcio en la treintena a principios de los 70 que había sido miembro de los Hermanos Musulmanes y se había distanciado definitivamente de ellos ya en prisión, de la que saldría en 1971 y donde creó su propia célula militante (Ibrahim 1985: 501-502).

En la concepción de Mustafa, la comunidad de los “auténticos musulmanes” debía separarse de la comunidad apóstata (formada por quienes decían serlo, pero no lo eran a ojos de dicha comunidad), incluso físicamente, mediante la emigración o hégira, y prepararse para combatir a los apóstatas desde esa separación física, a la manera en la que el profeta Mahoma emigró de La Meca a Medina en 622 d.C., o en el día primero del calendario musulmán de la Hégira. Y, efectivamente, los seguidores de Mustafa comenzaron a retirarse de la “comunidad apóstata”: por un lado -más conocido-, a zonas despobladas, como las montañas de Asiut, en las que vivían aislados, lo que atrajo la atención de las fuerzas de seguridad, que detuvieron a parte de los militantes a principios de 1973; por otro -aspecto menos frecuentemente señalado, aunque sea muy significativo-, a apartamentos en las zonas de las periferias urbanas en los que vivían de manera semicomunal y muy sencilla -sin utilizar, por ejemplo, aparatos electrónicos- personas de ambos sexos convenientemente casadas, que ponían en común sus ingresos para alquilar los apartamentos y afrontar los gastos, entregando lo que les sobraba para ayudar a otros “hermanos” a alquilar apartamentos y contraer matrimonio. Afrontar los gastos de este se había convertido en un grave problema para los jóvenes en general, y en particular para los veinteañeros de origen rural como lo eran, en su mayoría, los seguidores de Mustafa. La solidaridad de los miembros del grupo llegaba al extremo de quienes emigraban a países del Golfo también enviaban lo que les sobraba de sus considerables ingresos a Mustafa para contribuir a alquilar más apartamentos. Según Mohammed Mahmud (محمود 1988: 108-117), que formó parte del grupo en su juventud, “Chukri Mustafa resolvió el problema del matrimonio mediante la solidaridad a la manera de los tiempos de Mahoma”, problema que en el pasado en el medio rural egipcio no era tal, pues bastaba con la aportación de la fértil tierra de Egipto para resolverlo de manera “sana y sencilla”. Pero también fueron muchos quienes se unieron al grupo abandonando situaciones económicas y sociales estables, incluso divorciándose algunos de sus maridos o esposas que se negaban a hacer lo propio para unirse a las comunidades. En demasiadas ocasiones, los estudios sobre los grupos islamistas radicales, tanto más cuanto se consideran “de divulgación”, por no hablar de la

prensa, descuidan los aspectos económicos, sociales e incluso antropológicos y que denotan las carencias de todo tipo experimentadas por sus miembros, insistiendo en los elementos ideológicos y organizativos y prácticas activistas y sociales que “parecen” “premodernos” o incluso “primitivos” -por no hablar de la violencia-. Sin embargo, prácticas de la “vida corriente” como las de los miembros de Al-Takfir wa-l-Higra muestran la importancia en la constitución de tales grupos tanto de las dificultades económicas y su incidencia en el acceso al matrimonio, como del desarraigo cultural y la nostalgia de la vida comunal, así como un rechazo de las concepciones económicas y sociales y los modos de vida predominantes. Volveremos sobre algunos de estos aspectos en el capítulo II 6.5 “Las bases socioeconómicas de la expansión del islamismo radical”.

La radicalidad de Mustafa y sus seguidores llegaba al punto de considerar que “la comunidad musulmana” era su propia *gamaa*, y que cualquiera que oía su mensaje y no se unía a ella era un apóstata, lo que incluía a “los ulemas del poder”, con quienes Mustafa se negaba incluso a dialogar, y a los miembros de otras *gamaat*, con los que aceptaba dialogar, pero a los que jamás concedía tener un ápice de razón, llegando incluso a designar a algunas de dichas *gamaat* como apostatas (جماعات الردة), e intentando acabar con la vida de algunos de sus seguidores (محمود 1988: 124-125)). Su organización, por otro lado, era esencialmente autocrática. Mustafa era considerado por sus seguidores, según Ibrahim, “el Emir (príncipe o comandante) de los Creyentes”, y según Al-Zayyat se consideraba incluso su califa. Aunque la figura del “emir” sería adoptada después por todas las *gamaat islamiyya*, a diferencia de todas ellas, incluido el Grupo de la Academia Militar, Al-Takfir wa-l-Higra no llevaría a la práctica, siquiera formalmente, el principio islámico participativo de la *chura* (الشورى, la consulta de las personas cualificadas) (Ibrahim 1985: 502; Al-Zayyat 2005: 39-46).

Las razones de la “radicalidad” de Chukri Mustafa, según Al-Zayyat, se derivaban del “aislamiento o separación sentimental” (عزلة شعورية)⁵¹ respecto de la sociedad que se había generado en él tras la experiencia de la cárcel y de la tortura como joven miembro de los Hermanos Musulmanes. Las semillas de la idea del *takfir* eran, para el mismo autor, “con toda sencillez”, las siguientes: “no es posible que nos torturen y que sean musulmanes” y “no es posible que los demás consientan que nos torturen y que sean musulmanes”. El propio Mustafa avalaría estas interpretaciones en su declaración ante el tribunal militar que le juzgó⁵². Sus planteamientos, y muy en particular el que extendía el

⁵¹ La expresión عزلة شعورية la toma Al-Zayyat, sin duda, del propio Qutb, que la había utilizado en sus *Jalones en el Camino* en un sentido diferente y más general para referirse a la cesura y la distancia introducidas por el islam en la mentalidad y los sentimientos de los primeros musulmanes, que habían conocido, o vivido en, la *yahiliyya* original, la “ignorancia ante-islámica” previa al principio del siglo VII d. C. (Qutb 2006: 16-18).

⁵² Puede encontrarse un resumen de estas declaraciones en محمود (1988: 96-117). Según este resumen,

takfir al conjunto de la sociedad, eran, sin embargo, rechazados por el resto de las *gamaat* desde mucho antes del asesinato del jeque Al-Dahabi en 1977 (Al-Zayyat 2005: 38, 39-46).

2.4.5 La corriente salafista

Como sucede con tantos términos del vocabulario político-religioso islámico moderno, el uso de “salafista” puede resultar equívoco. Todas las corrientes islámicas mencionadas más arriba se consideran o se consideraron a sí mismas salafistas en la primera acepción del término que vamos a ver, incluida la primera en nacer, la de los Hermanos Musulmanes, caracterizada como tal por su fundador, Hasan al-Banna. La *salafiyya*, en esta primera acepción, refiere al modelo de los ancestros musulmanes (السلف), guiados exclusivamente por el Corán y la Sunna, únicas fuentes de las que, en su literalidad, deben deducirse para los salafistas las obligaciones de los musulmanes, mediante el rechazo sistemático de las “innovaciones” (بدعة). No obstante, la mayor parte de los movimientos islamistas evolucionan en casi todo a pesar del carácter inmovilista que a menudo se les atribuye. Por avanzar un ejemplo fundamental a los efectos que nos ocupan en esta tesis, el rechazo de las “innovaciones” se encuentra tras el hecho de que durante muchos años las organizaciones que se han considerado a sí mismas salafistas en esa acepción original hayan rechazado los sistemas representativos y pluripartidistas, y por ende su propia participación en ellos y la constitución de partidos, que serían fuente de divisiones en la comunidad. Sin embargo, en los últimos años una gran parte de las organizaciones islamistas han creado partidos y participado en las elecciones cuando se les ha permitido, incluidos tardíamente algunos de los movimientos que hoy son denominados “salafistas”, por sí mismos y por otras organizaciones islamistas que con ello ceden la atribución específica del término a tales movimientos.⁵³

A pesar de la evolución de los propios movimientos salafistas actuales, en palabras de Jordi Moreras y Sol Tarrés aquellos que se caracterizan por pretender mantener un cierto compromiso con el “marco de referencia” original del salafismo, con una “promesa epistemológica” que hace que el salafismo siga siendo, o pretenda seguir siendo, más “una doctrina” que un movimiento estructurado, una doctrina que genera una “red de significados” compartidos organizada por unos líderes y unos seguidores muy diversos (Moreras & Tarrés 2012: 220).

Mustafa utilizó en diversas ocasiones la palabra “aislamiento”, pero no la palabra “emigración” o “hégira”

⁵³ Es el caso de Egipto, Túnez, Yemen o Kuwait. Véase Gómez García (2013).

Los movimientos hoy llamados salafistas han tardado más que la Hermandad en asumir la participación política mediante partidos, y siguen estando en contra del acceso de las mujeres a la vida política y profesional. Si bien rechazan las tradiciones de las escuelas jurídicas sunníes (hanafí, chafai, hanbalí y malikí) -aceptadas por los Hermanos Musulmanes-, lo hacen, según Burgat, “no por estar en contra de la interpretación que da a la norma religiosa su concreción social y política, sino para reivindicar su derecho a definir tal concreción, cuando no el monopolio para hacerlo” (Burgat 2010). A efectos de nuestra tesis, este “librepensamiento” es un distintivo que ayuda a comprender por qué tanto el régimen de Sadat como el de Mubarak los ha dejado hacer, cuando no potenciado, en la medida en que sirven de antídoto a los dos pesos fuertes en la creación de contenidos islámicos en Egipto: los Hermanos Musulmanes y Al-Azhar.

La interpretación llevada al extremo por parte de estos movimientos de la doctrina común islámica de la unicidad de Dios les lleva a oponerse no solo a cualquier tipo de sacralización de los mediadores humanos, y en consecuencia al rechazo no solo del culto a los santos en el “islam popular” y sufí (también rechazado por la mayor parte de las corrientes sunní ortodoxas), sino también a la veneración de los jeques sufíes, e incluso de los líderes supremos o máximos dirigentes siempre presente en otros grupos islamistas.

Pero sobre todo, la mayor parte de los movimientos salafistas -aunque tal vez existan algunas excepciones notables⁵⁴- defienden la doctrina de la obediencia al gobernante, incluso aunque sea corrupto o autocrático, en la medida en que este se declare musulmán, con el fin de evitar la *fitna*, el enfrentamiento dentro de la comunidad. Esta postura también ha ayudado a que, como decíamos, en diversos momentos históricos el poder político egipcio haya buscado instrumentalizar a los salafistas en contra de otras corrientes islámicas, por ejemplo en el periodo posterior a la revolución de 2011. Finalmente, un tercer elemento a tener en consideración como instrumento de ataque de múltiples filos son las acusaciones cruzadas con el régimen, con otros grupos islamistas y dentro de la propia corriente salafista de estar condicionados por la financiación que presuntamente reciben de regímenes como el de Arabia Saudí.

⁵⁴ Al margen de que, como ya hemos señalado, todas las corrientes yihadistas pueden ser consideradas salafistas en la acepción básica del término (como puede serlo Qutb), numerosos autores consideran que formaciones como *Al-Qaeda* responden en gran medida a los parámetros de la definición específica del salafismo que hemos hecho (Burgat 2010; Maged 2011).

2.4.5.1 Las corrientes salafistas en Egipto en los 70

La primera asociación puramente salafista en los términos en que hemos definido el salafismo fue fundada en 1926, es decir dos años antes de la creación de los Hermanos Musulmanes, con el nombre de جمعية أنصار السنة المحمدية (*Asociación de los Seguidores de la Sunna de Mahoma*, en adelante *Ansar al-Sunna*). Esta asociación, formada en gran parte por ulemas de Al-Azhar, continuaba la larga tradición de muchos siglos atrás de las asociaciones caritativas y filantrópicas islámicas incorporando la dimensión del apostolado y la difusión de la doctrina (دعوة) salafista, y estaba legalmente autorizada, e incluso recibía subvenciones estatales.

Pero la expansión masiva del salafismo se produjo, como la del resto de los movimientos islamistas, en los años 70. Podemos intentar resumir la multiforme y atomizada realidad del salafismo siguiendo la taxonomía tomada por Amani Maged de Salah Adl, profesor de la Universidad de Al-Azhar, que atiende a dos dimensiones: la ideológica y la organizativa (Maged 2011).

Según el primer criterio, el de la ideología, las principales corrientes salafistas egipcias serían la escolástica, la activista y la yihadí. La principal agrupación “moderna” de la corriente escolástica -y seguramente, la principal corriente salafista en Egipto por número de seguidores- fue formada en la primera mitad de los 70 en Alejandría por estudiantes influidos por ulemas de la asociación *Ansar al-Sunna*, que debe ser adscrita también a esa corriente. Dichos estudiantes eran más activistas, menos “quietistas” o “pietistas”, que sus maestros, y de ahí su adopción de un método (منهج) diferenciado que no implicaba una ruptura doctrinal en lo esencial con *Ansar al-Sunna*.

En un principio, los estudiantes de esta agrupación se relacionaban con los Hermanos Musulmanes y formaban parte de otras *gamaat islamiyya*. Sin embargo, progresivamente se apartaron de estos grupos, y en 1973 se negaron explícitamente a prestar el juramento islámico de lealtad (*baia*, بيعة) al nuevo guía supremo de los Hermanos, el sucesor de Hasan al-Hudaibi, cuyo nombre (Omar al-Telmesani) en un principio era secreto por razones de seguridad. En 1977 decidieron dar por primera vez nombre a su agrupación o corriente, al-Madrassa al-Salafiyya (المدرسة السلفية - La Escuela Salafista), nombre que posteriormente cambiaron por al-Daawa al-Salafiyya (الدعوة السلفية - El Apostolado Salafista). Para entonces, su número era ya probablemente de cientos de miles, y se extendía por todo el país, a pesar de lo cual la ciudad de Alejandría siguió inexorablemente unida a su nombre, siendo más conocidos por el de “Daawa Salafiyya de Alejandría”, o simplemente “los salafistas de Alejandría”. Con el tiempo, sus diferencias con los Hermanos Musulmanes no dejaron de crecer, hasta el punto de que en 1980 se produjeron violentos enfrentamientos entre ambos grupos en la Universidad de Alejandría,

según los salafistas provocados por los Hermanos Musulmanes que querían imponer por la fuerza su dominio en ellas.

Las diferencias con los grupos yihadistas eran aun más profundas, doctrinales, pues rechazaban tajantemente la violencia contra el Estado de grupos como del de la Academia Militar o Al-Takfir wa-l-Higra. Las principales actividades de la Daawa Salafiyya de Alejandría eran educativas, catequistas, caritativas, asistenciales en general, y la construcción de mezquitas. En su organización rechazaban los modelos piramidales, y evitaban utilizar el propio término “organización” (تنظيم), prefiriendo siempre el de “acción colectiva” (العمل الجماعي). Como el resto de las corrientes islamistas, desde mediados de los 70 organizaban campamentos para los jóvenes con el beneplácito del régimen de Sadat.

Como hemos señalado, junto a la corriente escolástica, Salah Adl señalaba la yihadí y la “activista”. Respecto a la primera, basta añadir la doctrina de la yihad de otras organizaciones ya señaladas a los rasgos generales del salafismo para hacerse una idea acerca de ella. En cuanto a la segunda, a pesar de que la diferencia atendiendo a criterios ideológicos, Maged no señala diferencias de este tipo, sino más bien coincidencias, con la escolástica, residiendo más bien la razón de su diferenciación en criterios de liderazgo intelectual o religioso y de independencia “organizativa”, o si se quiere “de acción colectiva” y concentración territorial, pues tales “activistas” se encontraban activos principalmente en los suburbios de El Cairo, y en particular Chubra.

Un personaje singular e independiente dentro de la corriente salafista general, con un gran número de seguidores, era y es el jeque Hafez Salama. Separado de los Hermanos Musulmanes a finales de los años 40, cuando se unió a la mencionada Asociación de los Jóvenes de Mahoma (جمعية شباب محمد), disuelta por Náser en 1952, este jeque, que conoció las cárceles naseristas, goza aún de extraordinaria predicación, a pesar de su avanzada edad (nació en 1925 y aun vive en el momento de escribir estas líneas). Su figura destaca y seduce, además de por su extraordinaria actividad salafista “estándar” -predicación, beneficencia, construcción de mezquitas-, y por lo exaltado e insobornable de su verbo, por haber participado en la organización y el combate en todas las actividades de resistencia armada nacionalista en su ciudad natal de Suez (en los años 40 y 50, apoyando a la resistencia palestina y luchando contra los británicos en el Canal, entre 1967 y 1973 organizando la resistencia popular contra Israel).

En 1973, Salama fundó la Asociación de la Beneficencia Islámica (جمعية الهداية الإسلامية), entre cuyas principales obras se encuentran la construcción de la Mezquita de Al-Nur, en el barrio cairota de Al-Abbasiyya, y la de la Mezquita de Al-Rahmán, en el gobernadorado colindante a El Cairo de Chubra al-Jeima. Dichas mezquitas serían los principales enclaves religiosos de los salafistas de El Cairo, en los que se congregarían en ocasiones cientos de miles de fieles. Por otro lado, Hafez Salam se ha distinguido siempre,

además de por su inquebrantable apoyo a los derechos de los palestinos, por su agresividad hacia los coptos en cualquier intento de estos -ojos del jeque- de desbordar el reducido y sometido estatuto social, político y religioso que les asigna su interpretación salafista del islam. Si bien su postura sobre Israel le hubiera puesto en el punto de mira del régimen de Sadat, en su belicosidad anticopta Salama fue un buen aliado, que sirvió a la reslamización vertical emprendida por Sadat.

3. CONTESTACIÓN SOCIOECONÓMICA, CONFESIONAL Y POLÍTICA. REPRESIÓN Y CIERRE POLÍTICO (1977-1979)

3.1 DIFICULTADES ECONÓMICAS Y PROTESTAS SOCIALES

3.1.1 El peso financiero de los subsidios a los productos de primera necesidad

A mediados de los años 70, la crisis de la balanza de pagos egipcia comenzada una década antes había alcanzado proporciones alarmantes, en gran parte a causa de la necesidad de importar productos básicos con los que satisfacer, con precios subvencionados, las necesidades de la población. A partir de esa época, el coste de los subsidios a los precios casi nunca bajaría del 40% del total de los gastos corrientes del Estado, si bien variaría considerablemente debido a que el 70% de los alimentos subvencionados procedían del mercado exterior, y por tanto se encontraban expuestos a las fluctuaciones de precios de aquel. Desde 1970 hasta 1976 el gasto en subvenciones a los alimentos⁵⁵ se incrementó en más de un 1200%, y el de las subvenciones al trigo, que representaba casi un 50% del total, en más de un 800%. El aumento de este coste durante los regímenes de Násir y de Sadat no solo se debió al gran incremento de la población (de 29 millones en 1965 a 39 millones en 1976) y a la disminución de la capacidad de satisfacer sus necesidades con la producción local, sino también al incremento del consumo individual: entre 1960 y 1978 la importación per cápita de trigo y harina pasó de 45 a 103 kilogramos (Waterbury 1983: 213-215).

⁵⁵ Los principales alimentos subvencionados eran: trigo, harina, maíz, legumbres, aceite y otras grasas, azúcar y té. Sin embargo, también recibían subsidios directos el tabaco, el gas, la “ropa popular” y el material escolar, entre otros, además de los subsidios indirectos a la electricidad y los fertilizantes, y de los directos a numerosos productos utilizados no en los hogares o la economía familiar, sino por fábricas, medios de comunicación o similares. (Waterbury 1983: 215-216)

Los subsidios representaban una parte considerable de los ingresos “indirectos” o “en especie” de los egipcios, y servían para paliar el descenso de aquellos por otros conceptos (salarios u otros rendimientos económicos) para las clases más desfavorecidas. Así, tras conocer subidas medias cercanas al 3% anual a lo largo desde 1959-60 hasta 1964-1965, el incremento de los ingresos nacionales per cápita cayó al 0,8% en 1969-70, y en 1976 se situaba en el 1,3%. Aunque no disponemos de datos para esos años, el proporcionado para 1978 por el ministro de Planificación Abdel Razzaq Abdel Meguid, según el cual en el año anterior el Gobierno había aumentado mediante subsidios un 35% los ingresos per cápita familiares, puede ser orientativo, si bien hay que tener en cuenta que en ese año tanto el crecimiento del PIB como el del gasto en subsidios habían comenzado a remontar⁵⁶, como veremos en el capítulo II 4. No obstante, aun teniendo en cuenta esta remuneración en especie, a mediados de 1970 al menos 11 de los 38 millones de egipcios (atendiendo a las estimaciones más bajas y compartidas) vivían bajo el umbral de la pobreza, repartiéndose dicho número entre el 28% de la población rural (frente al 17% en 1964-65) y el 35% de la población urbana Waterbury 1983: 210-213). Por tanto, aunque los subsidios fueran “una pesadilla” para los gobernantes egipcios, cumplían una importantísima función social, y eran una pieza clave de la legitimidad obtenida por el régimen egipcio desde la época de Náser, y de la estabilidad política.

No obstante, este coste financiero habría podido ser aminorado con una gestión más estricta y más adecuada a sus objetivos: desde su creación, los subsidios eran universales, y de ellos podían beneficiarse en términos absolutos por igual los pobres, las clase medias y los ricos. Sin embargo, desde los 70 en particular, el beneficio de los subsidios fue parcialmente distraído de sus fines por grandes compradores que, o bien falsificaban cartillas de racionamiento para los productos que las requerían (té, azúcar y aceite), o bien se ponían de acuerdo con los encargados de las cooperativas y tiendas del Estado para que detrajera del acceso del público en general grandes cantidades de los productos, con el fin de comprarlos ellos y destinarlos al activo mercado negro surgido en dicha década, donde los productos eran adquiridos a precios más elevados por miembros de la clase media-alta y alta cuando se acababan o escaseaban las existencias en las tiendas estatales (Waterbury 1983: 216-217).

⁵⁶ *Ajbar al-Yaum*, 6 de enero de 1979. Citado por Waterbury (1983: 213)

3.1.2 Primeros efectos económicos y sociales iniciales del *infithah*

La Ley de Inversiones 43 de 1974 no tuvo entre los inversores extranjeros la respuesta que esperaban las autoridades. A finales de 1976 tan solo 66 proyectos habían sido puestos en marcha, con un capital de 36 millones de LE y 3.450 empleados (Waterbury 1983: 132). De ahí que en 1977 las disposiciones de la Ley 43/1974 fueran complementadas con las de la Ley 32/1977, que establecía mayores ventajas y facilidades para la capitalización de las empresas, la conversión de moneda y la obtención de divisas⁵⁷.

En cuanto a las inversiones en empresas públicas, a principios de 1976 el Ministerio de Industria publicó una lista de 16 empresas industriales estatales que expandirían su capital con inversiones extranjeras. Sin embargo, hasta 1978 no comenzaría ese proceso, con un número de empresas más reducido. A finales de ese año, tan solo 134 nuevos proyectos con capital mixto público-privado habían sido aprobados según la Ley 32 de 1977. Entre los sectores afectados por estos proyectos, destacaban, por número, inversiones y participación de capital extranjero, las compañías de inversión, el sector bancario, la vivienda, la agricultura y cría de animales, y las empresas de materiales de construcción. La industria recibía un muy reducido número de proyectos y escasa cantidad de capital (Waterbury 1983: 142-143).

Los inversores extranjeros desconfiaban de la estabilidad política del país y de su capacidad para proveer las infraestructuras necesarias para un programa de industrialización intensivo. Los cortes de las líneas de teléfono y en la electricidad y las dificultades en los transportes no animaban a invertir. Además, el procedimiento de autorización de nuevos proyectos era lento, en particular porque todos los funcionarios implicados bien situados querían conseguir comisiones para facilitarla. La ineficiente Autoridad para la Inversiones, creada para facilitar estas, cambiaba cada dos por tres de dirigentes. Muchos inversores se dedicaban únicamente a tantear el terreno. De los 482 proyectos aprobados desde 1974 hasta finales de 1977, 110 fueron retirados. De los 372 restantes, 325 estaban orientados a las compañías de inversión, al sector bancario y al turismo. Aunque a partir de 1979 el volumen de las inversiones se incrementó considerablemente, la tendencia a invertir en sectores no productivos no se modificó (Ansari 1986: 186; Waterbury 1982: 144-145, 147).

Los efectos de la privatización en la creación de empleo fueron también menores de lo que se había esperado, y tuvieron efectos dañinos para el sector público. A finales de 1978 había 13.553 trabajadores en los 191 nuevos proyectos exclusivamente privados

⁵⁷ Según la Ley 32/1977, se limitaba la disposición previa de que los proyectos de inversión fueran autosuficientes en divisas a las industrias “básicas”, y se permitía a los inversores extranjeros comprar aquellas con moneda local y hacerlo, además, en el “mercado paralelo de divisas” (Waterbury 1983: 133).

puestos en marcha. Sin embargo, una parte importante de estos trabajadores, sobre todo cualitativamente, provenían del sector público: los sueldos medios del sector privado, que doblaban a los de aquel, habían provocado un éxodo de personal altamente cualificado (Waterbury 1983: 143)⁵⁸.

Mientras que la pretendida reindustrialización de Egipto se hacía esperar, la situación económica de la mayor parte de la población se deterioraba: la inflación acumulada entre 1972 y principios de 1977 era de cerca del 120%, mientras que los salarios se habían estancado (عبد الرازق 1985: 15-16). Sin embargo, una pequeña minoría había conseguido hacerse con grandes beneficios derivados de la libertad de importación y del descontrol del cambio de moneda extranjera. Las tiendas y pequeños supermercados de productos de lujo (en términos relativos al nivel de vida de la población) se extendieron por las grandes ciudades, satisfaciendo los deseos de consumo de las clases más acomodadas, pero dejando a la mayoría de la población como mera espectadora de este nuevo hábito. Los escaparates y las estanterías de los comercios ofrecían distintas variedades de alimentos y productos tecnológicos avanzados (electrodomésticos, televisores, aparatos de música, etc.), que dicha mayoría debía limitarse a admirar. Los vehículos importados comenzaron a disputar las calles a las carretas tiradas por burros de los pequeños comerciantes y a la gran masa de viandantes, poniendo de relieve las crecientes desigualdades. La calle que conduce a las pirámides en Guiza, en particular, se convirtió en escaparate del nuevo signo de los tiempos: los casinos, los hoteles, los clubs de alterne, incluso un campo de golf, colonizaron la zona para servir a las demandas de los visitantes extranjeros (muchos de ellos de los ricos países del Golfo) y de las clases egipcias acomodadas (Ansari 1986: 185-186).

3.1.3 Las revueltas de enero de 1977

En 1973, la deuda externa de Egipto era ya de 1.250 millones de libras egipcias (excluyendo la deuda militar con la URSS que era de 2.000 millones LE). Sin embargo, el déficit de su balanza de pagos, disparado entre 1973 y 1975 (pasó de 249 millones LE a 1.386 millones), llevó al Gobierno a tomar prestados a corto plazo cerca de 1.500 millones de dólares a elevados tipos de interés, entre el 15 y el 17%. En 1975, tan solo el servicio de

⁵⁸ Según un estudio realizado en 1978, el sector público había perdido entre el 9 y el 10% de sus trabajadores técnicos altamente cualificados y de su personal directivo y administrativo más elevado por dirigirse estos al sector privado (Fuad Abu Ismail: بحث ميداني عن إدارة الأفراد والإدارة المالية بشركات القطاع العام في ظل سياسة الانفتاح, *Administrative Leaders Programmes*, El Cairo, 12-13 de mayo de 1979. Citado por Ayubi (1991: 62-63).

la deuda alcanzaba el 40% del valor de todas las exportaciones egipcias (Ansari 1986: 185; Waterbury 1983: 409).

A partir de 1975, el Gobierno egipcio se dirigió a sus acaudalados vecinos árabes y al FMI para que le ayudaran a poner remedio a esta situación. Desde las primeras negociaciones, dirigidas por el presidente del Gobierno Mamduh Salem a principios de 1976, el FMI comenzó a presionar a las autoridades egipcias para que recortaran de manera sustancial las subvenciones a los productos de primera necesidad, propuesta que era apoyada por el ministro de Economía Zaki Chafai. Sin embargo, otros convencieron a Sadat para que postergara la medida para después de las elecciones legislativas. El 17 de enero de 1977, el nuevo vicepresidente económico, Abdel Moneim al-Qaisuni, anunció en el Parlamento la reducción de algunos subsidios⁵⁹, y la aplicación inmediata de dicha reducción desde la misma tarde en la que fue anunciada.

La noticia de la decisión del Gobierno corrió como un reguero de pólvora por las principales ciudades de Egipto y llevó a una explosión popular inmediata, en particular en El Cairo. En el curso de los días 18 y 19 de enero masivas manifestaciones en protesta por la medida se produjeron desde Alejandría hasta Asuán. En El Cairo sobre todo, las manifestaciones adquirieron un carácter destructivo sin precedentes. En palabras de Ansari, fue destrozado “todo aquello que recordaba a las autoridades y a los beneficiados por el *infitalh*”; según el informe del ministro del Interior de la época, Hamdi Sayyed, comercios, casinos, hoteles, lugares de esparcimiento de lujo, comisarías de policía e instalaciones gubernamentales fueron los principales objetivos de la destrucción. La mencionada calle que conduce a las Pirámides fue el principal objeto de la ira popular (Ansari 1986:187; عبد الرازق 1985: 94-95). A pesar de que las fuerzas de la policía se emplearon con gran contundencia (hubo cerca de 80 muertos y más de 800 heridos), se vieron incapaces de contener la revuelta, lo que llevó a Sadat a solicitar la intervención del Ejército. Los altos mandos de este accedieron a ella únicamente tras obtener la promesa del presidente de que se retiraría la medida, lo que de hecho se anunció en la tarde del 19 de enero.

El Gobierno y la prensa oficial acusaron a las fuerzas de izquierda marxista de haber organizado o instigado la revuelta o, según decían tales medios, de “la conspiración para derrocar al régimen”. De los 1.500 detenidos entre enero y febrero, cerca de 150 eran militantes destacados del partido Tagammu o de los ilegales Partido Comunista de los Trabajadores y Partido Comunista Egipto. La mayor parte de ellos serían juzgados en un proceso que concluiría en abril de 1980, y a resultas del cual la mayor parte serían

⁵⁹ Entre los productos cuyos precios se incrementaron se encontraban: algunos tipos de pan (50%), pero los más delicados -como el llamado pan *fino* [sic]- no el más basto y barato; el azúcar (25%), el té (35%) y el gas butano para el hogar (50%) (عبد الرازق 1985: 16).

absueltos, y unos pocos condenados a penas de uno a tres años que ya habían cumplido⁶⁰. Las acusaciones contra la izquierda no tenían ningún fundamento. Sin duda, muchos de sus militantes participaron activamente en las manifestaciones, y sin duda las animaron de manera individual, no organizada. Pero no hicieron nada diferente a lo que hicieron espontáneamente cientos de miles de egipcios, o activistas de otras tendencias. En algunos lugares, como Asuán, incluso fueron los miembros de las *gamaat islamiyya* quienes organizaron las manifestaciones, a pesar de que este tipo de acciones y sus objetivos no se correspondían demasiado con sus hábitos⁶¹. Es más, el detallado relato de los acontecimientos hecho por Abdel Razeq, apoyándose en los informes de los responsables de seguridad de El Cairo, demuestra que en dicha ciudad las manifestaciones comenzaron el día 18 de forma pacífica, impulsadas por los obreros de Helwán, a los que después se unieron los estudiantes de algunas facultades, y finalmente el público en general; mientras que fue la violenta respuesta de la policía, “en un ambiente extremadamente tenso”, y en el contexto “de la extraordinaria situación económica y social por la que atraviesa el país”, según el propio ministro del Interior, Hamdi Sayyed, en su intervención ante el Parlamento ya citada, la que hizo que las manifestaciones degeneraran en enfrentamientos. Por último, en la tarde del día 18, según el entonces general de la policía Ahmad Ruchdi (que posteriormente sería ministro del Interior en época de Mubarak entre 1984 y 1986⁶²), “se introdujeron entre los manifestantes grupos de alborotadores, débiles de espíritu y destructores” (عبد الرازق 1985: 79-83, 95⁶³).

Como señala Soleiman (2011: 59), las revueltas de 1977 fueron una respuesta de gran parte de la población, pero en particular de los trabajadores del sector público, a una medida de un fuerte componente simbólico en un contexto en el que prevalecía el sentimiento de que el régimen estaba abandonando a dichos trabajadores y facilitando el acceso a rápidos beneficios en el sector privado. Destacamos ese componente simbólico, o más bien su vivencia como una agresión simbólica, porque pesar del notable incremento en el precio de algunos productos básicos, el conjunto de los recortes afectaba a pocos de

⁶⁰ En la obra de عبد الرازق (1986) pueden encontrarse el fallo del tribunal que juzgó a los acusados comunistas (páginas 299-390) y una abundante documentación sobre los acontecimientos en general: informes de la policía, comunicados del partido Tagammu, declaraciones de los responsables gubernamentales, etc.

⁶¹ Muntasir Al-Zayyat ofreció este testimonio de muy buena fuente, de su hermano Ahmad que era el líder de la *gamaa islamiyya* en la ciudad. Es más, cuando Muntasir le preguntó que cómo se les había ocurrido hacer tales cosas (manifestaciones, destrozos), “que eran propias de comunistas”, su hermano le respondió que lo habían hecho, precisamente, para ganarles terreno (Al-Zayyat 2005: 70).

⁶² Hay un consenso general en estimar que Ruchdi fue el ministro más apreciado de toda la historia del ministerio del Interior. Sin embargo, se dio la aparente paradoja de que fue cesado, tras tan solo dos años en el cargo, a resultas de la revuelta de los soldados de la Seguridad Central en 1986, que guardó algunas similitudes con las revueltas de 1977. Trataremos estos aspectos en el capítulo III 3.5.

⁶³ Las citas proceden de las páginas 83 y 95.

ellos, y el montante de los recortes era de tan solo 28 millones de LE, cuando el total destinado a los subsidios de los principales alimentos era en 1976 de casi 400 millones de LE (Waterbury 1983: 215). Es algo sobre lo que volveremos al ocuparnos de la “economía moral” en el régimen de Sadat (capítulo II 5.2.2).

3.2 REPRESIÓN Y PLURIPARTIDISMO. LA APERTURA DE NEGOCIACIONES DE PAZ CON ISRAEL

3.2.1 Prohibición de huelgas y manifestaciones y control de la opinión

Las revueltas del pan de enero de 1977 llevaron al régimen de Sadat a aprobar apresuradamente, el 3 de febrero de 1977, la Ley nº 2 de Protección del Bienestar de la Patria y de la Seguridad de los Ciudadanos (قانون بشأن الحفاظ على سلامة الوطن وحماية أمن المواطنين), que establecía penas de cadena perpetua para quienes crearan organizaciones clandestinas “hostiles al sistema social”, quienes participaran en reuniones orientadas a llamar a la oposición a las leyes o a dañar las propiedades públicas (o quienes instigaran tales reuniones aun sin participar en ellas), quienes participaran en huelgas “que amenazaran la economía del país” y quienes ocuparan locales o instalaciones⁶⁴. Todo ello supondría, en la práctica, la prohibición de cualquier manifestación o huelga, a pesar de que aquellas ya estaban vedadas en la práctica por la vigencia de la Ley de Excepción (قانون الطوارئ) desde 1967.

A este instrumento destinado a criminalizar las acciones de protesta se unió un mayor control de la información y la opinión. Ya en 1974 la revista *Al-Katib* había sido convertida en una publicación cultural tras el rechazo del Consejo de Redacción a aceptar la censura previa y el nombramiento de “comisarios políticos” en su Consejo de Administración, que habían sido promovidos por el entonces ministro de Asuntos Culturales, Yusuf al-Sibai, a raíz de la publicación de una serie de escritos críticos con el papel egipcio en la guerra de 1973. En 1977, el principal objetivo del control de la información fueron las críticas a la subida de los precios de los productos de primera necesidad y la actuación del Gobierno en la represión de las protestas. La dimisión forzada del marxista Lutfi al-Juli, director del medio que más había destacado en dichas críticas, la revista *Al-Talia*, fue un aviso para navegantes. Al-Juli se negó a que aparecieran con su firma sus artículos “revisados” por el mencionado Yusuf Al-Sibai, por entonces presidente y director general del grupo de edición de Al-Ahram, del que dependía *Al-Talia*. Pocos

⁶⁴ Puede encontrarse una versión francesa de la ley en Shoukri (1979: 523-524).

meses después del cese de Al-Juli, *Al-Talía* desaparecería. Es oportuno recordar que, como ya hemos señalado en el capítulo dedicado a cultura e ideología en el naserismo (véase I 2.3.2.2), Al-Sibai, conocido escritor que también fue brevemente ministro de Información en 1975, y presidente del Sindicato de Periodistas a mediados de los 70, era el prototipo de intelectual carrerista a la sombra del poder, pues tenía detrás una largo currículum como presidente de las principales instituciones culturales nacionales e internacionales promovidas por el régimen naserista. Sin duda fue su incondicional apoyo a las políticas de Sadat, y en particular a la política de acercamiento a Israel, lo que motivó que fuera asesinado en Chipre en febrero de 1978 por dos miembros de la facción del grupo palestino de Abu Nidal.

El caso del semanario *Ruz al-Yusuf* fue diferente al de los dos medios citados. Con mayor potencial de difusión, a su cabeza se encontraba desde 1975 Abdel Rahmán al-Charqawi, reconocido y respetado escritor que, si bien ya había tenido algún roce con el régimen, como hemos señalado en el capítulo II 2.4.1, y aunque tenía muy buenas relaciones con los medios de izquierdas, había apoyado a Sadat en su golpe de mayo de 1971, y posteriormente había continuado escanciándole las más encendidas alabanzas, como la de calificarle de “héroe de la democracia mundial”. No obstante, como señala Ghali Shoukri (1979: 144-145), Al-Charqawi comprendía y aplicaba muy bien las reglas del juego necesarias para desempeñar un papel efectivo en la prensa y los medios de comunicación egipcios desde la época de Náser: para poder expresar su opinión en todo lo demás, había cuando menos que evitar la crítica directa al presidente, y preferentemente elogiarlo. Así, amparado en las alabanzas de su director al presidente, *Ruz al-Yusuf*, que había acogido a algunos antiguos periodistas de *Al-Talía*, lanzaba violentas campañas, desde una óptica que podemos calificar genéricamente “de izquierdas”, contra la conservadora dirección de Al-Azhar, contra los excesos de los servicios secretos, contra la política del ministerio de Economía, contra la del de Educación Superior, y contra cualquier objetivo que se pusiera en su punto de mira. La agresiva política editorial de *Ruz al-Yusuf* le valió alcanzar en poco tiempo una excepcional tirada para un semanario, que Shoukri, de forma tal vez un tanto exagerada, cifra en 150.000 ejemplares, así como una visita sorpresa de Sadat a la redacción en 1977. Según Shoukri, durante la visita el presidente exclamó: “Cuando leo esta revista, me da la impresión de que Egipto vive en una oscuridad total: todo está corrompido, nos equivocamos en todo. ¿Qué significa esto?”. A lo que Al-Charqawi respondió presentando su dimisión. La relación entre los dos hombres fue reconducida en un encuentro amistoso, en el que Sadat aceptó la dimisión para nombrar a Al-Charqawi presidente del Consejo Superior de las Artes y las Letras. No obstante, una vez que el escritor hubo abandonado el semanario, el Consejo de Redacción

de este fue completamente reestructurado para colocar a su frente a hombres más fieles de Sadat.

Otra medida represiva inaugurada a raíz de las críticas a la actuación del Gobierno en enero de 1977 fue la expulsión del Parlamento de algunos de sus miembros: por dicha razón el exmiembro destacado de los Oficiales Libres Kamal Eddín Husein, elegido como independiente, el marxista Abul Ez al-Hariri, y el islamista Achur Mohammed Náser, serían apartados de la Cámara en 1977 y 1978, y a ellos se uniría en este último año el histórico dirigente wafdistas Abdel Fattah Hasan, bajo la acusación de haber tenido lazos con las “corruptas elites” políticas de la Monarquía. Posteriormente, el Parlamento decidiría que sus miembros expulsados no podrían volver a presentarse a las elecciones.

3.2.2 La Ley de Formación de Partidos Políticos

El 20 de junio de 1977 el Parlamento promulgó la Ley de Formación de Partidos Políticos con la que, sin duda, Sadat buscaba recabar apoyos antes de abordar nuevas medidas importantes previstas en su agenda política. No obstante, si bien la ley abría la puerta a la creación de partidos, imponía importantes condiciones y restricciones. No era la menor de ellas que el órgano que decidiría acerca de la formación o no de un partido sería la Comisión de Partidos Políticos que se constituiría, y que estaría presidida por el secretario del Comité Central de la USA -único órgano remanente de esta-, y formada además por el ministro de Justicia, el ministro de la Administración Local, el ministro del Interior y tres miembros “sin afiliación política” elegidos por el presidente del Comité, que en su primera configuración serían tres jueces. Se trataba, por tanto, de un órgano completamente dependiente del poder ejecutivo.

Según la ley, todos los egipcios tenía derecho a formar un partido o incorporarse a él, pero los partidos debería cumplir principalmente los siguientes requisitos (Martín Muñoz 1992: 325):

1. Sus programas no deberían contradecir los principios de la ley islámica, y debían orientarse a preservar la unidad nacional, la paz social, el sistema socialista democrático y los “logros socialistas”. Así mismo tenían que diferenciarse de los de los partidos ya existentes (art. 4.1).

2. No se podía formar un partido desde la base de criterios geográficos, regionales, de raza, religión o clase, ni tampoco de corte militar o paramilitar (art. 4.2).

3. Los partidos, para constituirse, deberían contar con el apoyo de 20 miembros del Parlamento.

4. Los partidos afectados por la Ley 37 de 1953 (es decir, todos los partidos de la época monárquica) o cuyos programas fueran contrarios a las revoluciones del 23 de julio

de 1952 o del 15 de mayo de 1971 (“Revolución Correctiva” de Sadat) no podrían ser restablecidos.

En la práctica, estas restricciones pretendían excluir de manera casi explícita a todos los posibles adversarios del régimen: partidos de la época monárquica, en particular el Wafd (punto 4), los Hermanos Musulmanes y cualquier organización de ideario religioso (punto 2) y las corrientes marxistas (punto 2) y naseristas (puntos 1 y 4, pues el partido de Sadat reclamaría para sí en exclusiva el ideario naserista). Pero, además, la vaguedad de la restricción señalada en el punto 1 (necesaria diferenciación de los programas) junto con el dominio por el Ejecutivo de la Comisión de Partidos, dejaban a la discrecional decisión de aquella autorizar un partido o no. Finalmente, el requisito de que 20 parlamentarios ya elegidos apoyaran la formación del nuevo partido parecía orientado a convertir el pluralismo propuesto por el régimen de Sadat en un pluralismo “de muñecas rusas”, endogámico y cerrado al exterior.

La Ley de Partidos incluía, sin embargo, una cláusula que se revelaría con el paso del tiempo como la más efectiva en la senda de la pluralización y liberalización de la escena política: los partidos autorizados podrían disponer de sus propios medios de prensa, con lo que se rompería el monopolio del Estado en la posesión y el disfrute de medios de comunicación.

Tras la promulgación de la ley que abría el camino a la legalización de partidos políticos, Sadat consideró que ya podía hablar del régimen naserista globalmente en un nuevo tono, sin escatimar las críticas hacia aquel como si no hubiera sido un destacado dirigente suyo. Así, en junio de 1977 señalaba a un grupo de periodistas:

“En 1970 era evidente para mí que lo que habíamos llamado el experimento socialista era un fracaso al 100%... Fue una operación llevada a cabo desde arriba en el nombre de los campesinos y los trabajadores, pero solo sirvió a los que estaban arriba y no llevó a una revolución social... No hay duda de que quien quiera que escriba la historia de este periodo dirá que los sesenta no fueron más que años de derrota y dolor”⁶⁵.

3.2.3 El viaje de Sadat a Israel y su oferta de paz

El 19 de noviembre de 1977, Sadat sorprendió a propios y extraños al dirigirse en persona en Jerusalén al Parlamento israelí para ofrecerle firmar la paz. Tan solo unos días antes había manifestado por primera vez su disposición a hacer tal cosa, e incluso “ir al final de la Tierra” con tal de alcanzar la paz, y ni siquiera la mayor parte de sus allegados

⁶⁵ *Al-Ahram*, 27 de junio de 1977. Citado por Waterbury (1983: 355).

estaban informados de lo avanzado de su determinación, hasta el punto de que el ministro de Asuntos Exteriores se negó a acompañarlo en su viaje por no haber sido consultado ni informado de él con suficiente antelación.

Sadat era el primer dirigente árabe que pisaba suelo israelí. Su propuesta no incluyó detalles concretos, pero, además de por una serie de acuerdos sobre la disminución de tropas en el Sinaí entre Israel y Egipto, había venido precedida por un acuerdo alcanzado por EEUU y la URSS el 1 de octubre de ese mismo año para celebrar una conferencia de paz sobre Oriente Medio en Ginebra. Sadat quiso anticiparse a tal conferencia, que nunca se celebraría.

Puesto que la propuesta de Sadat sí incluyó la condición de que se cumplieran las resoluciones de la ONU 242 y 338, que exigían la devolución de todos los territorios adquiridos por la guerra y “una solución justa al problema de los refugiados” (resolución 242), la iniciativa no despertó de manera inmediata el gran rechazo, egipcio y árabe, que suscitaría posteriormente a medida que se desarrollaran las negociaciones de paz y se produjera una reflexión más pausada acerca de las implicaciones de este posible acuerdo unilateral. Es más, en Egipto la mera perspectiva de la paz y la recuperación de los territorios despertaría entre amplios sectores de la población un cierto entusiasmo, tras décadas de enfrentamientos armados y de penurias derivadas de ellos. No obstante, esta actitud cambiaría rápidamente, como veremos, entre los sectores más politizados y/o ideologizados, y se extendería también entre las elites sociales, económicas y políticas no adscritas invariablemente al apoyo a las políticas de Sadat.

3.2.4 Los nuevos partidos políticos

3.2.4.1 La refundación frustrada del antiguo partido Wafd

A pesar de estar claramente en el punto de mira de la nueva ley, los antiguos dirigentes de la última época del Wafd bajo la monarquía, representantes de su ala derecha y todavía dirigidos por Fuad Serag Eddín, terrateniente y ministro del Interior a principios de los años 40,⁶⁶ no solo lograron constituir un partido, sino que fueron los primeros en hacerlo.

⁶⁶ Véase capítulo 2.3.3 de la Introducción.

Nada más aprobarse la Ley de Partidos, Serag Eddín pronunció un discurso en la sede del Sindicato de Periodistas en el que atacó duramente al naserismo. Aunque elogió las medidas correctoras y liberalizadoras de Sadat, denunció que los partidos existentes eran creación del régimen y no tenían raíz popular, y reivindicó el papel histórico del Wafd (Hinnebusch 1984: 103).

En febrero de 1978 la nueva fuerza política lograba el reconocimiento oficial, tras cambiar el antiguo nombre por el de Nuevo Wafd, y conseguir atraerse a 20 diputados. A pesar de las presiones gubernamentales, esto último no fue demasiado difícil habida cuenta de la composición socioeconómica del Parlamento, en la que abundaban los notables rurales. El apoyo vino de 4 diputados elegidos por la plataforma de derechas, 12 elegidos como independientes, y 8 de la plataforma progubernamental de centro. Cabe destacar que tanto el diputado marxista Ahmad Taha como el islamista salafista Salah Abu Ismael dieron su aval al Nuevo Wafd con el único fin de ayudarle a alcanzar la legalización. Según Ansari, el Comité de Partidos intentó en vano que los fundadores del partido renunciaran a contar con Serag Eddín como presidente (Ansari 1986: 201).

El estudio llevado a cabo por Hinnebusch (1984) sobre las características socioeconómicas de los 35 miembros del Comité Ejecutivo del Nuevo Wafd revela la gran coincidencia de tales características con las de los dirigentes del Wafd de la época monárquica: en cuanto a su “ocupación”, el 18,2% de ellos eran abogados, el 18,2% profesores o académicos, el 15,2% exministros o políticos, el 15,2% terratenientes o agricultores, y el 12,1% funcionarios públicos. El resto se repartía en pequeños porcentajes entre otros profesionales, comerciantes y militares. En cuanto a sus “intereses económicos” (fuentes de renta), hay que destacar que el número de quienes los declaraban localizados “solo en la tierra agrícola” era del 20,6%, pero sin embargo un 26,5% más declaraba intereses “agrícolas y profesionales” y un 5,8% más “agrícolas y comerciales y/o industriales”. En definitiva, más del 50% de los dirigentes del nuevo partido reconocían su vinculación con los intereses agrícolas aunque, como señaló Hinnebusch, esta declaración de intereses económicos debe ser tomada con cautela, dada la comprensible reticencia de las elites acomodadas o adineradas a facilitar toda la información en este sentido. Para Ansari (1986: 201), ni siquiera era necesario realizar encuestas a los miembros de este órgano, pues “leyendo la lista uno tiene la impresión de estar leyendo el *Who's who* de la época monárquica”. En cuanto a los militantes de base del Nuevo Wafd, el estudio de Hinnebusch (1984: 109) muestra ocupaciones, orígenes e intereses más diversificados, pero de cualquier manera, resumiendo, una pertenencia del 36,4% a las clases altas (“grandes profesionales con otros intereses económicos o una posición elevada”), una adscripción del 47,9% a la clase media-alta (“solo grandes profesionales o solo otros

intereses económicos destacados”), y tan solo un 15,9% de la clase media-baja (“pequeños profesionales o empleados sin intereses ni posición”).

Otros aspectos destacables, aunque no sorprendentes, de las características sociológicas y el pasado de los dirigentes del Nuevo Wafd, son que un 11,7% de ellos eran coptos, un 24,7% habían sido dirigentes del Wafd original, y el 29,4% declaraban haber sufrido la represión naserista, manteniéndose el 79,4% de ellos durante el periodo naserista al margen de la política. En cuanto a las principales orientaciones políticas de los dirigentes del partido, eran las siguientes: rechazo global mayoritario del naserismo, apoyo mayoritario al *infitah* económico, equilibrio casi al 50% entre quienes insistían en la necesidad de defender los derechos de los palestinos (31,6% señalaban que “a cualquier precio” y un 18,4% introducían matices) y quienes proponían alcanzar la paz con Israel desentendiéndose de los palestinos (50%) (Hinnebusch 1984: 106-107; 109-112).

En los primeros meses de su existencia, el Nuevo Wafd se mostró muy crítico con las políticas de Sadat, incluyendo en sus críticas, para sorpresa de muchos, la del viaje de Sadat a Jerusalén. La prensa estatal respondió a tal actitud incrementando la virulencia de sus críticas al partido, representante según ella de la “sociedad de los pachás” prerrevolucionarios que “querían atrasar el reloj de la historia”. Pero, según el propio Serag Eddín, sería la excepcional acogida obtenida por el Nuevo Wafd la principal razón que haría a Sadat cambiar de actitud hacia él. Un hito de esta acogida sería -según el dirigente wafdistas- la asistencia de entre 40.000 y 50.000 personas a un discurso pronunciado por Serag Eddín el 12 de mayo de 1978 en Alejandría. Si esta cifra nos parece un poco exagerada, la de los 950.000 afiliados con los que el líder wafdistas declaró haber llegado a contar en aquella época nos parece absolutamente falaz, habida cuenta de las cifras de afiliación del partido, más documentadas, pocos años después⁶⁷.

La Ley para la Protección del Frente Interior y la Paz Social, promulgada en mayo de 1978, de la que hablaremos en el capítulo II 3.5.2, sería en gran parte una respuesta a la actitud beligerante y al éxito del Wafd, que se vería obligado, en virtud de dicha ley, entre otras cosas, a prescindir de sus miembros que hubieran estado activos en política antes de 1952, es decir, de sus principales “nuevos” dirigentes, lo que llevó al partido a optar por su autodisolución.

⁶⁷ Entrevista personal, no publicada, llevada a cabo por Ansari con Fuad Serag Eddín el 30 de noviembre de 1982 (Ansari 1986: 204).

3.2.4.2 El Partido Socialista del Trabajo (PST), la pretendida “oposición leal” o “constructiva”

El PST (حزب العمل الاشتراكي) fue creado en el otoño de 1978 a instancias del propio Sadat sin el menor disimulo por parte de este, que declaró que deseaba contar con una oposición “pacífica” (سلمية) y colocó a su cuñado y hombre para todo, Mahmud Abu Wafiyya, como número dos del partido, ya fuera para darle su apoyo o para mejor controlarlo. El papel previsto por el presidente para el PST era que ocupara el espectro de la izquierda, o parte de él, restando apoyos a la antigua plataforma de izquierdas Tagammu, formada por elementos de inspiración marxista y naserista, que conservaba su nombre ahora como partido. Para tal papel, Sadat recurrió a antiguos miembros del partido Joven Egipto y/o de su sucesor, el Partido Socialista Egipcio, que siendo considerados de izquierdas por sus inclinaciones sociales y por su inclinación estatista, no eran marxistas y sí marcadamente nacionalistas -e incluso nacional-socialistas- y de orientación religiosa, como el Joven Egipto (véase Introducción 2.2.7). Entre los dirigentes más destacados del PST de estas características se encontraría, desde un primer momento, Ibrahim Chukri, presidente del partido, y poco después Fathi Radwán y Helmi Murad, que habían ocupado todos ellos puestos ministeriales o de responsabilidad en el periodo naserista⁶⁸.

A pesar de que en un principio el PST se mantuvo leal al régimen de Sadat, no tardaría en distanciarse de él, como veremos en el capítulo II 3.5.4.2, pues a pesar del carácter moderado de Chukri, los mimbres con los que estaba hecho el partido incluían fuertes convicciones ideológicas y una cierta tradición de independencia que no permitirían que se convirtiera en una mera marioneta del poder. Sus primeras críticas al Gobierno se dirigieron no al principio del *infatih* económico en sí, sino a su aplicación, que en su opinión favorecía la penetración extranjera y debilitaba la industria local, dañando al sector público. Asimismo solicitaba una mayor inversión en gastos sociales y un sistema de impuestos eficaz y progresivo (Martín Muñoz 1992: 329-330).

⁶⁸ Ibrahim Chukri fue miembro del Joven Egipto, que presidió a partir de 1952, y diputado en la época monárquica. Pese a pertenecer a una familia de terratenientes, desde muy joven defendió la necesidad de una reforma agraria profunda, así como de políticas sociales extensivas. En época de Náser desempeñó diversos puestos de responsabilidad en el ministerio de Agricultura. En época de Sadat fue gobernador civil de Al-Wadi Al-Guedid entre 1972 y 1976, cuando dimitió de su puesto. Fathi Radwán, abogado de formación y profesión, fundó junto a Ahmad Husein el partido del Joven Egipto en 1933, pero a causa de las diferencias que surgieron entre ambos, en 1937 abandonó dicho partido y se unió al Partido Nacional, fundado por Mohammed Kamel, que abandonó en 1944 para fundar el Nuevo Partido Nacional. Entre 1952 y 1958 fue ministro de Orientación Nacional (الإرشاد القومي), el equivalente en la época del Ministerio de Información. Posteriormente, sus diferencias con Náser lo alejaron del poder ejecutivo, pero sería miembro del Parlamento. Helmi Murad fue también miembro del Joven Egipto, y en 1968 fue nombrado ministro de Educación por Náser, puesto del que dimitiría poco después.

3.2.4.3 El gubernamental Partido Nacional Democrático (PND)

En el otoño de 1978, Sadat decidió transformar la plataforma de centro en partido, abandonando el adjetivo “socialista” en la denominación de esta, e incorporando el de “nacional”. Nació así el Partido Nacional Democrático (PND, الحزب الوطني الديمقراطي). En su composición y en su organización el nuevo partido conservaba gran parte de la herencia de la USA, depurada de elementos de izquierdas y “naseristas puristas”, e incluía sobre el papel procedimientos electivos para la selección de sus dirigentes. Sin embargo, la designación de estos a dedo sería el procedimiento efectivamente seguido. Su presidente sería Al-Sadat, y su primer secretario general Hosni Mubarak.

En su condición de “partido del poder”, que heredaba un gran número de cuadros y de infraestructuras, el PND atrajo desde sus inicios una militancia amplia y diversa, en la que destacaban la mayor parte de quienes ocupaban puestos directivos en las estructuras políticas y administrativas del Estado a los niveles nacional y local, y tecnócratas, profesionales, miembros de la burguesía y notables rurales.

3.2.4.4 El Partido Liberal Socialista (PLS), la muy leal oposición conservadora

Fruto de la transformación de la “plataforma de la derecha” en partido, el PLS (حزب الأحرار الاشتراكيين), presidido como su plataforma antecesora por Mustafa Kamel Murad, sí que tendría la vocación de desempeñar fielmente las funciones que Sadat había previsto para él: ser la fuerza que expresara las opiniones más liberales en economía y más conservadoras en los aspectos sociales. Su lema era “Dios, Patria y Libertad”, y defendía fervientemente el *infitah* (incluyendo la suspensión de las subvenciones a los productos de primera necesidad) y la aplicación de la *charía*, así como el alineamiento con el Occidente capitalista en política exterior, y una paz incondicional con Israel. No obstante, su pretensión de atraer simpatizantes de espacios ideológicos distintos (liberalismo económico e islamismo pronunciados) a los “cubiertos” por el partido gobernante, sin apenas diferenciarse de este en la práctica, resultaría vana.

3.2.4.5 El Tagammu

La antigua plataforma de expresión Agrupamiento Nacional Progresista Unionista, denominada en Egipto, de manera escueta, Tagammu, conservó su denominación tras su transformación en partido. Como hemos señalado ya, desde los momentos iniciales de su consolidación el régimen de Sadat y sus partidarios (fuerzas de seguridad, medios de

comunicación y autoridades religiosas incluidos) mostraron una especial hostilidad a la ideología y los elementos marxistas y naseristas a los que el Tagammu estaba llamado a representar. Esta hostilidad, incrementada tras las revueltas de enero de 1977, y traducida en frecuentes detenciones de algunos de sus militantes, llevó, según fuentes del propio partido, a que muchos de quienes se habían afiliado al partido en 1976 decidieran apartarse de la actividad pública (Hendriks 1982: 44-45).

El estudio realizado por Hendriks en 1980 sobre el funcionamiento y la militancia del Tagammu en un distrito de El Cairo mostró cómo la última incluía no solo a un puñado de obreros e intelectuales, según se solía afirmar, sino también -sobre todo- a funcionarios, pequeños empleados y estudiantes de origen modesto. Dicho estudio confirmó también las dificultades de conciliar las ideologías de los miembros marxistas con las de los naseristas -en ocasiones abiertamente opuestos al marxismo-, y en consecuencia la ausencia de una orientación política clara, que dificultaba su expansión a pesar de que, como veremos, su medio de prensa, el diario *Al-Ahali*, gozaría de gran difusión desde su aparición a principios de 1978, con ventas de cerca de 150.000 ejemplares.

3.3 LA EXPANSIÓN DEL ISLAMISMO POLÍTICO Y EL MALESTAR DE LA COMUNIDAD COPTA

3.3.1 El radicalismo de Al-Azhar y de importantes sectores del régimen

A mediados de los años 70 la expansión del islamismo político en Egipto no era un fenómeno derivado únicamente de la actividad de grupos “radicales” marginales. La principal institución religioso-educativa del país, la universidad y mezquita de Al-Azhar, había caído en manos de elementos conservadores muy sensibles a la influencia ideológica y material de Arabia Saudí. Únicamente tras la muerte en 1978 de Abdel Halim Mahmud, que desde 1973 había sido Gran Jeque de la institución, el régimen de Sadat retomó en cierta medida el control de una institución que había servido durante ese periodo a algunos de sus objetivos políticos, pero estaba yendo demasiado lejos en la defensa del rigorismo moral, e incluso en la del conservadurismo en los asuntos económicos y sociales.

La dirección de la institución azharí se había puesto del lado de Sadat desde su “Revolución Correctiva” de mayo de 1971, siendo Mohammed Fahham su Gran Jeque, y Abdel Halim Mahmud secretario general de la Academia de Estudios Islámicos (مجمع البحوث الإسلامية). Desde los trabajos iniciales para la redacción de la Constitución de 1971, Mahmud había embarcado a la Academia en un gran proyecto de codificación de la

jurisprudencia de las cuatro escuelas jurídicas sunníes con el objetivo de acabar elaborando una legislación que permitiera implementar la aplicación de la *charía* (Arigita Maza 2005: 113-114). Como ya hemos señalado en el capítulo II 1.3, a pesar de las presiones azharíes - entre otras- el artículo 2 de la Constitución estableció que la *charía* sería “una fuente principal de legislación” y no “la fuente principal”, a causa de la oposición de otros sectores sociales y políticos, y en particular de la iglesia copta. Sin embargo, Al-Azhar, y en particular Mahmud, siguieron presionando en ese sentido. El 30 de mayo de 1976, en el contexto de un proyecto para llevar al Parlamento la cuestión de la aplicación de la *charía*, el ya Gran Jeque de la institución se expresaba en términos muy cercanos a los del islamismo radical en una carta abierta a los presidentes del Gobierno y del Parlamento:

“Al-Azhar recuerda a todo aquel a quien Dios ha dado autoridad sobre la tierra que el islam no es de ese tipo de cuestiones que se plantean para que sean discutidas en nombre de la democracia, ni tampoco está a la espera del apoyo o la oposición que surja de tales discusiones (...) Nuestro pueblo creyente desea el islam como religión, y el presidente de la República ha enarbolado la bandera de la Ciencia y de la Fe. Cualquier obstáculo a la *charía* es responsabilidad del Órgano Legislativo y de todo aquel que posea la capacidad de ejecutar los mandatos de Dios.

Ningún ser humano puede aplicar su esfuerzo intelectual para interpretar el Texto, los hombres de fe no pueden presentarse ante Dios y su Enviado ni alzar la voz por encima de la voz del Profeta. Esta es la diferencia decisiva entre la *chura* (el principio de la consulta) de la democracia terrenal y la *chura* del islam, en la que no hay equívocos, mientras que la *chura* de la democracia puede entrar en conflicto con lo sagrado”⁶⁹.

Las palabras de Mahmud encerraban, como se ve, una advertencia explícita acerca de “sus responsabilidades” a los poderes ejecutivo y legislativo, y otra implícita a quien, en el fondo e incluso en la forma, se situaba por encima de ambos, el presidente Sadat.

Durante el mismo año de 1976, al Azhar siguió presionando al poder ejecutivo y legislativo con la elaboración de una propuesta de Ley de Estatuto Personal, o Código de la Familia, y otra de codificación e incorporación al Código Penal de las estrictas penas prescritas por el Corán (الحدود) para delitos como el consumo de alcohol, el adulterio, la apostasía y el robo. Las propuestas azharíes encontrarían numerosos partidarios en el régimen de Sadat⁷⁰ y entre otros parlamentarios conservadores, lo que llevaría a que fueran discutidas en el Parlamento, en el marco de una gran controversia política y social, en la

⁶⁹ ‘Abd al-Ḥalīm Maḥmūd. “Ilā ra’īs al-Maylis al-Ša‘b wa-l-Wuzarā’”- Maḥallat al-Azhar, 48, 6 (1976), pp. 733-735. Citado por Arigita Maza (2005: 114-116).

⁷⁰ El propio vicepresidente de la República, Husein al-Chafai, fue relegado de la vicepresidencia de la República en 1975 por lo excesivamente encendido de las arengas religiosas que lanzaba desde los púlpitos de las mezquitas.

que diputados, intelectuales y otros líderes sociales liberales, de izquierdas y coptos unirían sus fuerzas hasta conseguir que las propuestas de legislación fueran retiradas.

Actores principales en la oposición a la ley serían la Iglesia y la comunidad coptas y su papa, Chenuda III. La aplicación de las penas coránicas, que incluían la pena de muerte para el delito de apostasía, habría supuesto una amenaza particular para los cristianos, pues no era infrecuente que estos se convirtieran al islam para casarse con una musulmana y que, al disolverse el matrimonio por muerte o divorcio de aquella, retornaran al cristianismo. Tras diversos comunicados en contra de los proyectos de ley, Chenuda llamó a la comunidad copta, en septiembre de 1977, a cinco días de ayuno en protesta contra ellos, lo que finalmente impulsó al presidente del Gobierno, Mamduh Salem, a retirar el proyecto (Waterbury 1983: 361).

3.3.2 La imposición de las corrientes islámicas entre los estudiantes

Como ya hemos apuntado en el capítulo II 2.5.3, fue en el medio estudiantil universitario en el que, con el aliento gubernamental, se fraguó el renacimiento del islamismo político desde principios de los años 70. Al levantamiento de las restricciones a los activistas islámicos y la financiación estatal de sus actividades les siguió la facilitación de su acceso a los organismos representativos institucionales. En el 8º Congreso de Estudiantes Egipcios celebrado entre el 3 y el 9 de abril de 1974 en Alejandría, Sadat prometió a los estudiantes un nuevo reglamento más democrático para la Unión General de Estudiantes (اتحاد الطلاب العام) y para las uniones locales de cada universidad, que se materializó de hecho en el decreto nº 335 promulgado en 1976. En virtud del nuevo reglamento, “la profundización de los valores religiosos de los estudiantes” (art. 5) pasaba a ser el objetivo principal de la Unión General, cuando según el reglamento anterior dicho objetivo era “la lucha contra el colonialismo y el sionismo mundial” (art. 5). Las otras novedades más destacadas fueron que la dirección de la Unión General contaría a partir de ese momento con 12 miembros, además del presidente, elegidos “de manera totalmente independiente”, y con un Comité de Asuntos Religiosos y Sociedad (Azaola Piazza 2006: 322-323).

En realidad, las elecciones estudiantiles ya habían sido liberadas de la tutela de la USA por el reglamento de 1968, lo que en la práctica había dado pie a elecciones libres. Gracias a estas, Abdel Moneim Abul Futuh, miembro de la *gamaa islamiyya* de El Cairo, había sido pionero en imponerse como representante estudiantil islamista a las corrientes socialista y naserista, primero en la Facultad de Medicina de El Cairo en 1973, y luego en el conjunto de dicha universidad en 1975. No obstante, el nuevo reglamento permitía introducir la pluralidad (y en su caso la división) en la dirección de los representantes

estudiantiles, y las asociaciones islámicas aprovecharon su participación en aquellas que no dominaban para incrementar su influencia, en particular por medio de las comisiones de Asuntos Religiosos e Información y Edición, financiadas de manera generosa por el Estado, a través de las cuales pusieron a disposición de los estudiantes obras básicas del pensamiento político islamista. Los militantes islamistas, con la ayuda del Estado o sin ella, pusieron así mismo en marcha numerosos servicios sociales marcados por sus concepciones ideológicas, como la creación de un servicio de minibuses en El Cairo que permitía evitar los atestados transportes públicos a las estudiantes -que en contrapartida debían imperativamente portar la vestimenta considerada “islámica” por los activistas (velo, falda larga y guantes)-, o la organización de clases complementarias y sesiones de estudio igualmente segregadas por sexo. Progresivamente, los grupos islamistas fueron imponiendo su hegemonía en la mayor parte de los órganos representativos de las distintas universidades, hasta que lograron hacerlo también en las elecciones de la Unión General de Estudiantes en 1978-1979 (Azaola Piazza 2006: 322-324; عبد الله 1991: 274).

Sin embargo, la adopción de la vía institucional en las universidades no obstó para que las agrupaciones islámicas continuaran con sus formas de organización propias fuera de la universidad -aunque bajo el impulso estudiantil- y con su tendencia a la unificación y, así, en marzo de 1978, en la mezquita de Omar Makram de Asyut, Nayeh Ibrahim, estudiante de la Facultad de Medicina de la misma ciudad, fue elegido emir de la *gamaa islamiyya* del Alto Egipto, mientras que aproximadamente en las mismas fechas Abul Futuh fue elegido emir de la *gamaa islamiyya* de El Cairo, y poco después lo sería de todas las *gamaat* de Egipto (الزيات 2005: 74-76). Ambos personajes serían después, como iremos viendo en los capítulos siguientes, protagonistas destacados de la vida política egipcia hasta nuestros días.

3.3.3 El secuestro y asesinato de Al-Dahabi por Al-Takfir wa-l-Higra

En julio de 1977 el régimen de Sadat se vio sorprendido por la segunda acción violenta del islamismo radical dirigida directamente contra él, el secuestro del ministro de Asuntos Religiosos, el jeque Mohammed al-Dahabi, a la que ya hemos hecho referencia en el capítulo II 2.4.4. El grupo dirigido por Chukri Mustafa, Al-Takfir wa-l-Higra, tomó como rehén a al-Dahabi para exigir la liberación de sus compañeros encarcelados en los años anteriores, y eligió a Al-Dahabi, a pesar de que este era considerado “un auténtico y respetable ulema” por otros representantes de la corriente yihadí (Al-Zayyat 2005: 39-43), porque había criticado públicamente las ideas del grupo. El Gobierno desestimó las demandas de Al-Takfir wa-l-Higra, y Al-Dahabi fue asesinado. Los militantes fueron capturados, Chukri y otros tres dirigentes de la organización ahorcados, y 36 de los otros

240 detenidos condenados a penas de prisión. Respecto a este episodio, de nuevo hemos de destacar la sorprendente actitud del régimen de Sadat, que no solo tenía noticias previas de la existencia de las células de Al-Takfir wa-l-Higra y de sus actividades, y sin embargo solo había detenido a algunos de sus miembros, sino que tras el asesinato de Al-Dahabi liberó a decenas de ellos e ignoró la posible existencia de cientos más, muchos de los cuales serían posteriormente detenidos, antes y después del asesinato de Sadat.

3.4 LA COMUNIDAD COPTA ENTRE EL ISLAMISMO POLÍTICO Y EL ACTIVISMO POLÍTICO COPTO

La comunidad copta no podía permanecer indiferente a la expansión del islamismo político en el seno de la sociedad, de las altas instituciones islámicas, y del propio régimen de Sadat, siendo sin duda este último el que despertaba mayores motivos de inquietud. La agresividad frente a los coptos no era patrimonio de radicales como el jeque salafista Hafez Salama que, a fin de cuentas, “se limitaba” a demandar para los coptos un estatuto como el estrictamente definido por el Corán⁷¹. Por el contrario, el inefable Mohammed Osmán Ismail, gobernador de Asiut y alto responsable de la USA hasta su disolución total, había llegado a manifestar, en el marco de una reunión de esta, lo siguiente: “Los enemigos de Egipto son tres, por orden de importancia: los cristianos, los comunistas y los judíos” (Shoukri 1979: 96). Sin embargo, desde noviembre de 1971 la comunidad copta contaba con un nuevo representante oficial, el papa Chenuda III, hombre de fuerte carácter, gran actividad, e importantes dotes políticas, que no iba a permanecer impasible ante los ataques a los coptos o a su Iglesia. Por otro lado, ciertos elementos coptos desbordarían la actitud firme pero moderada de Chenuda, pasando a la ofensiva y agitando las ya turbulentas aguas de las relaciones confesionales.

3.4.1 El papa Chenuda III: el principio de una larga y comprometida trayectoria

Chenuda, cuyo nombre de pila era Nazir Sayyed, era uno de los miembros destacados de la nueva generación de monjes jóvenes que en los años 50 y 60 habían promovido el renacer de la Iglesia copta, apoyando al papa Cirilo VI en su elección y siendo recompensados por este con una mayor libertad de acción y, finalmente, con puestos elevados en la jerarquía de la Iglesia. Tras estudiar Filosofía y Letras, y ejercer

⁷¹ Véase capítulo II 2.4.5.

profesionalmente como periodista, Chenuda pasó una docena de años (1952-1963) recluido en el monasterio de Wadi Natrún, dedicado al estudio y la escritura, y dentro de esta incluso a la poesía. Posteriormente, sin abandonar tales ocupaciones, pasó a centrarse en la actividad catequista y evangelizadora en las Escuelas del Domingo, instauradas por Cirilo VI, como tantos jóvenes exmonjes que protagonizaron el renacer de la Iglesia en los 60. Cuando los más destacados de estos jóvenes comenzaron a pedir una mayor participación en la jerarquía de la Iglesia, Cirilo creó para algunos de ellos nuevos obispados no adscritos, como los hasta entonces existentes, a un territorio, sino a diversas funciones, que los convertían en miembros del Sínodo de la Iglesia. A Chenuda le correspondió el Obispado de Educación, lo que le permitió ejercer gran influencia sobre la comunidad por medio de las Escuelas del Domingo, de las escuelas de teología y de la Lección del Viernes, instituida e impartida por el propio Chenuda con un gran éxito de público en la nueva catedral construida en El Cairo. Las frecuentes incursiones de Chenuda en asuntos sociales y políticos harían que fuera apartado por Cirilo de sus funciones, y enviado de nuevo al monasterio de Wadi Natrún, si bien la presión de sus crecientes partidarios consiguió que fuera restituido en aquellas (عبد الفتاح 1979: 80; 2006: 288-290; هيكل).

De creer al siempre bien informado Heikal, Sadat, aconsejado por su ministro del Interior, Mamduh Salem, desempeñó un papel decisivo en la elección de Chenuda como nuevo papa a la muerte de Cirilo, en noviembre de 1971, más allá del protocolario nombramiento oficial del papa, que correspondía al presidente de la República⁷². Menos de un año después de la elección de Chenuda, Sadat se arrepentiría por primera vez de haberla propiciado, pues antes del incendio de la iglesia ilegal de Al-Janqa, al que ya hemos hecho alusión en el capítulo II 1.5, la policía había intentado destruir o inhabilitar sus instalaciones, pero un cortejo encabezado por varios obispos, enviados por el papa, se lo había impedido. Heikal afirma que Sadat montó en cólera, ya después del incendio, al tener noticia de estos hechos tras las investigaciones parlamentaria y policial, considerando la actuación del papa un desafío y una muestra de ingratitud (نكران الجميل)⁷³ tras lo que había

⁷² Ya hemos señalado (capítulo I 3.7.2) cómo fue el proceso de elección hasta la del papa Cirilo: el Sínodo elegía a tres candidatos, y los tres nombres escritos en papeletas se introducían en una caja en una habitación a oscuras, de la que un niño pequeño, transmisor de la “voluntad divina” extraía una papeleta. Para la elección del sucesor de Cirilo antecedió a la elección del Sínodo una consulta popular a toda la comunidad acerca de las personas que creían más adecuadas. Heikal afirma que asistió a una reunión con Sadat, el ministro del Interior y el vicepresidente del Gobierno, Abdel Salam al-Zayyat, en la que se debatió acerca de qué candidato sería más adecuado para ocupar el trono papal, y que la conclusión fue, contra la opinión de Heikal, que era Chenuda. Heikal, buen conocedor de los entresijos del poder en la época, no duda en afirmar que la intervención del poder ejecutivo fue decisiva, más allá de cual fuera “la voluntad divina” (Heikal 2006: 291-295).

⁷³ El concepto de نكران الجميل, según Heikal, o إنكار الجميل (“ingratitud” o “no devolución de la cortesía”) es en su uso frecuente en contexto político sumamente interesante, como lo es su contrario (رد الجميل, devolución de la cortesía), pues en la cultura política egipcia suele considerarse que ese precepto de origen y

hecho él por la elección de Chenuda. El presidente habría adoptado medidas expeditivas para “hacer reventar la cuestión confesional” de no mediar la intervención del propio Heikal, que aconsejó a Sadat que, tras reunirse con los dirigentes religiosos musulmanes, se reuniera con Chenuda y, en lugar de amenazarle con tomar medidas punitivas, le prometiera la autorización de la construcción de 25 iglesias anuales. Sadat siguió el consejo de Heikal, y fue acogido con gran calor y no pocas zalamerías por Chenuda, con el que se fotografió rezando en la sede del Papado. Durante el encuentro, Sadat, halagado por el trato del papa, le prometió la autorización de construcción de 50 iglesias anuales (هيكل 2006: 295-298).

3.4.2 Diplomacia de la Iglesia y unidad de circunstancias de la comunidad

Las relaciones entre Sadat y Chenuda tras los sucesos de Al-Janqa conocerían varios años de quietud, durante los cuales cada uno de los personajes desarrollaría su propia agenda, intentando atraer a ella al otro. Además de a organizar con mano firme, aunque excesivamente autocrática y política según sus críticos (como los sectores laicizantes seculares de la comunidad copta y el obispo Mata al-Miskín), Chenuda se dedicó a fomentar las relaciones de su iglesia con el exterior, favoreciendo la construcción de iglesias para las comunidades coptas del extranjero, sobre todo en América del Norte y África, y a promover el ecumenismo, al menos de labios para afuera (en 1973 realizó una declaración conjunta con Pablo VI en el Vaticano en este sentido). Llegó incluso a ser recibido con todos los honores por el presidente estadounidense Jimmy Carter en la Casa Blanca el 14 de abril de 1977, tan solo un mes después de que Sadat hubiera recibido el mismo tratamiento (Cannuyer 2011: 907-908). Para esta visita, en la que fue acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Chenuda no solo contó con el beneplácito de Sadat, sino que probablemente este tenía sus propios designios: durante ella, Carter preguntó explícitamente a Chenuda acerca de la posición de la Iglesia respecto al conflicto israelo-árabe, a lo que Chenuda, que había escrito diversos textos en etapas anteriores defendiendo la oposición de los cristianos a las políticas israelíes y al sionismo, respondió que “los asuntos políticos se los dejaban a los políticos” (هيكل 2006: 198-200; Shoukri 1979: 91). Es altamente improbable que Sadat no tuviera constancia de las intenciones de Carter de sondear a Chenuda acerca del conflicto israelo-árabe, en un momento en el que el presidente egipcio ya debía tener decidido emprender su iniciativa de paz, y por el

vigencia, en principio, puramente social, ha de respetarse incluso en los casos en los que un dirigente o responsable político ha hecho un uso de sus facultades que en otros contextos no se considerarían morales, éticos o democráticos. Mencionaremos algún otro caso en el que se manifiesta lo que esto significa.

contrario es muy probable que fuera el propio Sadat quien quisiera sondear a Chenuda por intermediación del presidente norteamericano. De lo que no cabe duda es de que el presidente Sadat debió de ser prontamente informado de la respuesta de Chenuda.

Por otro lado, en los meses anteriores a la visita de Chenuda a Estados Unidos el papa había emprendido una serie de movimientos destinados a movilizar a la Iglesia y la comunidad copta y sus apoyos internacionales en contra de los proyectos legislativos que pretendían introducir las penas coránicas en el ordenamiento jurídico egipcio. Así, el 17 de enero de 1977 se había celebrado en Alejandría un congreso confesional copto que reunió a todos los miembros ordenados de la Iglesia (مجمع الأباء الكهنة), al Congreso General Comunitario Copto (المجلس الملي العام) y a otros “representantes del pueblo copto”. Era la primera ocasión en 70 años en que se reunía un congreso de tales características, que pretendía incluir a todos los representantes coptos sin excepción, a pesar de sus diferencias. Las conclusiones del congreso no hicieron más que repetir lo que aquellos habían manifestado de manera dispersa en los años anteriores, pero en esta ocasión con una exhibición de unidad y fuerza: exigiendo la libertad de credo y de práctica del culto, la protección de la familia y el matrimonio coptos, la igualdad de derechos y oportunidades, la participación de los coptos en todos los órganos representativos y, en particular, el rechazo de la aplicación de la *charía* a los coptos. Además, dichas conclusiones exigían el derecho de los coptos convertidos al islam a regresar a su religión original, advertían contra la proliferación de las “orientaciones religiosas extremistas”, y solicitaban al papa que declarara un ayuno general de 3 días en defensa de las reivindicaciones del congreso, que hiciera llegar una copia de estas a todos los responsables políticos, y que declarara el congreso en estado de constitución permanente con el fin de seguir la evolución de los acontecimientos⁷⁴. Las conclusiones de este congreso son de destacar no solo por su contenido de fondo, sino también por su lenguaje, cercano al de los movimientos coptos más radicales, que no se privaba de utilizar expresiones como “el pueblo copto”, de declarar que este procedía “de uno de los más antiguos y puros linajes”, o de denunciar la participación de algunas instancias oficiales, como las Fuerzas de Seguridad, el Registro Civil o la Fiscalía, en “los intentos de empujar a los coptos sencillos al redil del islam” (عبد الفتاح 1984: 216-217). A la presión de los coptos desde el interior frente a la “islamización” del Estado, se uniría la de sus correligionarios en las influyentes comunidades del exterior: entre enero y mayo de 1977 el presidente de la República y del Parlamento recibían misivas de las comunidades en Estados Unidos, Canadá y Australia con los mismos argumentos y reivindicaciones manifestados por el congreso confesional (Shoukri 1979: 351-352).

⁷⁴ Pueden encontrarse las conclusiones íntegras del congreso en عبد الفتاح (1984: 215-227).

Finalmente, en julio de 1977, el mes siguiente al del secuestro y asesinato del jeque Al-Dahabi, la Iglesia copta llamaba a 5 días de ayuno para reclamar la retirada del proyecto de ley de implementación de algunas de las prescripciones de la *charía*, que, como ya hemos explicado, sería retirado poco después.

3.4.3 La diversidad copta: “laicizantes”, sadatistas y radicales

Pero a la imagen ofrecida por la comunidad copta en 1977 como una comunidad discriminada e indefensa, unida bajo el manto del papa en un entorno hostil, le faltaban diversos elementos para ser fiel a la realidad.

Como ya hemos señalado en el capítulo I 3.7, existía una raigambre centenaria de sectores laicizantes, o al menos reacios a reconocer a la Iglesia más autoridad que la puramente religiosa, y que estaban representados por el Consejo Comunitario Copto, que sería debilitado por el escaso reconocimiento que recibió del régimen de Sadat. En el interior de Egipto, dichos sectores se verían atrapados entre la creciente “islamización” de la sociedad y las leyes, y la infatigable labor para afianzar el papel social y político de la Iglesia realizada por Chenuda, cuyas maneras autocráticas denunciaban. Sin embargo, muchos de los que cabe adscribir a esa corriente, pertenecientes a la burguesía industrial, agrícola y profesional serían firmes partidarios de Sadat, pese a las concesiones al radicalismo político islámico, a causa de su política económica de *infitah*, a cuyo amparo obtendrían pingües beneficios y algunos puestos de gran responsabilidad en el régimen, como lo hizo Butrus Butrus Gali, miembro de una larga estirpe de políticos, que sería ministro de Asuntos Exteriores en la etapa clave de las negociaciones de paz con Israel.

Por otro lado, tanto en el interior como en el exterior de Egipto se desarrollaría entre la comunidad copta una corriente radical religioso-nacionalista que, pese de contar numérica y relativamente con pocos adeptos, tendría fuertes apoyos sociales y económicos. La primera noticia de esta corriente se tuvo con la estruendosa aparición pública de la Asociación de la Nación Copta, cuyo primer acto fue la deposición por la fuerza del papa Yusab II, antecesor de Cirilo, en 1954 (véase capítulo I 3.7.2). Tras la deposición de Yusab, que en nada fue entorpecida por el régimen de Náser, gran parte de las iglesias de Egipto y las agencias de prensa recibieron un comunicado en el que la asociación, además de dar sus razones para la deposición del papa, advertía al Gobierno de que no se inmiscuyera en los asuntos internos de los coptos, y concluía con la siguiente declaración: “El evangelio es nuestra Constitución, el copto es nuestra lengua, y morir por Cristo es nuestra mayor ambición”, un eslogan que parecía calcado, salvando las distancias, del inicial de los Hermanos Musulmanes. Cuando la sorpresa cedió paso a la información, se supo que la asociación había sido legalizada por el Ministerio de Asuntos Sociales, que sus miembros

habían sido felicitados en las fiestas religiosas por diversos miembros del Consejo de Mando de la Revolución, y que en las paredes de la sede del grupo destacaba un mensaje al grupo firmado por el entonces miembro de dicho Consejo y ministro de Estado, Anwar al-Sadat. Las actividades del grupo incluían la impartición de cursos gratuitos de la arcaica lengua copta -ya solo utilizada en el culto- y la difusión de sus ideas relativas a la “debilidad” de los clérigos coptos y la necesidad de reanimar a la “nación copta”. A pesar de que la Asociación de la Nación Copta fue inmediatamente disuelta por el régimen de Náser, y los implicados en el secuestro de Yusab condenados a tres años de prisión -sin que ello implicara la anulación de la renuncia de Yusab-, las ideas expresadas por ella siguieron vivas, como lo hizo el espíritu combativo del grupo entre cierto sector de la comunidad no satisfecho con la moderación de la Iglesia (Shoukri 1979: 327).

Según Ghali Shoukri, de origen copto, la investigación parlamentaria y policial que siguió al incendio de la iglesia de Al-Janqa en 1972 reveló que en los meses anteriores numerosos egipcios habían recibido en sus buzones panfletos que denunciaban la persecución de los coptos, a todos los niveles, por el Gobierno y el pueblo, persecución reflejada en la Administración del Estado, en los programas de enseñanza, en los órganos representativos y en la legislación. Según dichos panfletos, había llegado el momento de cambiar esa situación que afectaba al “30% del pueblo egipcio”, una estimación que triplicaba el porcentaje de coptos reconocido por las cifras oficiales. En consecuencia, demandaban, entre otras cosas, que fuera un cristiano quien ocupara el puesto de vicepresidente de la República, que al menos seis ministerios correspondieran a los coptos, y que estos no fueran excluidos de otros puestos de responsabilidad del poder ejecutivo y legislativo, de las Fuerzas Armadas y de la policía. Sorprendentemente, algunos de los panfletos aparecían firmados por el papa Chenuda, pese a que a nadie con un poco de sentido político común se le escapaba que el papa no podía poner su firma en un documento así. Según la investigación policial, por el papel y la tipografía utilizados resultaba evidente que tales panfletos no habían sido impresos en Egipto, sino, probablemente, unos en algún país de Oriente Medio, y otros en Canadá, Australia o Estados Unidos. La conclusión más fiable que se podía sacar era -siempre según Shoukri- que los panfletos habían sido elaborados por coptos emigrados, probablemente con la colaboración del Consejo Mundial de la Iglesias. En opinión del autor, actos como la difusión de panfletos de este tipo constituían provocaciones que en nada contribuían a defender los derechos de los coptos y sí a tensar las relaciones confesionales, tensión a la que “la derecha religiosa”, tanto musulmana como copta, contribuía por igual (Shoukri 1979: 90-92, 325-328).

El Consejo Mundial de las Iglesias (CMI) es, aun hoy, la principal organización ecuménica cristiana, a la que están adheridas más de 300 iglesias protestantes y ortodoxas,

entre ellas la copta. Fue fundado en 1948, y hasta finales de los años 60 fue financiado por la CIA, que también reclutó a muchos misioneros cristianos en el marco de su pugna con la URSS por la influencia en los países en vías de desarrollo. Tras descubrirse esta participación de la CIA en la financiación del CMI, el papel de aquella pasó a ser provisto por Alemania Federal (هیکل 2006: 287-288). Las relaciones de la Iglesia copta con el CMI durante el papado de Chenuda siempre resultaron un tanto ambiguas. De puertas para afuera, el CMI y la Iglesia Copta cooperaban, pero las acciones y reivindicaciones de Chenuda eran mucho más moderadas que las del CMI, de cuyas manifestaciones más descarnadas y exageradas en defensa de los cristianos perseguidos a lo largo del mundo el papa procuraba desmarcarse. En el caso de los cristianos coptos, la política de nacionalizaciones y secuestros judiciales seguida por el naserismo había generado un goteo constante de exiliados acomodados en Estados Unidos, Canadá y Australia, donde continuarían prosperando. Estos coptos llevarían consigo las ideas de la Asociación de la Nación Copta, y formarían grupos de presión (con acceso al CMI y a los propios gobiernos de los países en los que residían) que ejercerían una crítica feroz aunque variable hacia los sucesivos regímenes egipcios y más moderada pero a veces también contundente hacia la contemporizadora Iglesia Copta (عبد الفتاح 1984: 82-83).

A pesar de las ocasionales tensiones, las relaciones entre el CMI y la Iglesia Copta eran fluidas y provechosas, en particular gracias a la labor del obispo Samuel, “Obispo para los Servicios” y encargado de las relaciones exteriores de la Iglesia y de sus asuntos financieros, que moriría junto a Sadat en el atentado perpetrado por el grupo Yihad el 6 de octubre 1981, tras haber aceptado representar a la Iglesia copta junto a otros prelados en sustitución del papa, depuesto poco tiempo antes por el presidente. Tras el fallecimiento de Samuel, se descubrió que tenía en Suiza una cuenta bancaria con 11 millones de libras esterlinas y un testamento en el que señalaba que dichos fondos pertenecían exclusivamente a la Iglesia. Por otro lado, durante su mandato Samuel había aprovechado sus contactos para colocar a un gran número de coptos a la cabeza de numerosas instituciones bancarias extranjeras tanto en el exterior como en el interior de Egipto (tras la gran afluencia de aquellas al país gracias a la política de *infitah*) (هیکل 2006: 288).

3.5 LOS ACUERDOS DE PAZ CON ISRAEL. OPOSICIÓN Y REPRESIÓN

El Acuerdo de Paz entre Egipto e Israel, firmado en marzo de 1979 sobre la base de los acuerdos alcanzados en Camp David el 17 de septiembre de 1978, constituiría el catalizador del creciente rechazo entre numerosos sectores de la población a las políticas de Sadat en los más diversos terrenos. Es posible que el acuerdo en sí fuera bienvenido o

recibido con indiferencia por sectores no poco representativos de la población tanto en términos numéricos como por su peso económico y social, pero constituyó un auténtico *casus belli* para los sectores más ideologizados y activos políticamente de las diversas corrientes de oposición. La actitud represiva del régimen de Sadat ante las críticas no hizo más que echar leña al fuego de la oposición.

3.5.1 Represión de la derecha y la izquierda insumisas

Cuando en febrero de 1978 el régimen de Sadat decidió finalmente autorizar la formación del partido Nuevo Wafd, que había conseguido reunir los avales necesarios para ello en el Parlamento, probablemente el presidente esperaba que entre las loas a su política de apertura económica y las críticas al sistema político manifestadas por Fuad Serag Eddín en los meses anteriores acabaran primando las primeras, y poder encontrar un aliado en la derecha tradicional en su proyecto de política de paz con Israel. Sin embargo, la vehemencia de las críticas de los dirigentes del nuevo partido al régimen político no disminuyeron sino que se incrementaron y, para su sorpresa y la de muchos otros, comenzaron a abarcar el intempestivo viaje de Sadat a Jerusalén.

También en febrero de 1978 se había producido otro hecho relevante: el partido Tagammu había comenzado a publicar con frecuencia semanal -por falta de mayores medios económicos- un medio de prensa, *Al-Ahali*. La Ley de Partidos de 1977 autorizaba a aquellos, por primera vez desde 1952, a disponer de dichos medios, y el partido gubernamental y el progubernamental PLS ya habían comenzado a hacerlo con, respectivamente, *Yaridat Misr* -luego sustituido por *Mayu*- y *Al-Ahrar*. Sin embargo, *Al-Ahali* estaba llamado a ser una genuina voz opositora, y a expresar, además, la opinión de la “izquierda” marxista y naserista en condiciones de casi monopolio, tras la supresión o el control gubernamental en 1977 de los medios de la prensa estatal que abrían de par en par sus puertas a dicha opinión (*Al-Katib*, *Al-Talia* y *Ruz al-Yusuf*). Sin duda, Sadat no temía demasiado el eco que un periódico de escasa difusión y muy pobres medios pudiera tener entre la población en general; sin embargo, en pocas semanas *Al-Ahali* consiguió hacerse con gran parte del público que había seguido *Ruz al-Yusuf* antes de que el semanario fuera obligado a abandonar su línea crítica, al acoger en sus páginas vivos debates y críticas a la política exterior y económica egipcia. Los aproximadamente 50.000 ejemplares que llegó a editar el periódico en 1978 eran recibidos con ansiedad por los lectores (Vatikiotis 1991: 418).

No obstante, a pesar de que la máxima tirada del semanal *Al-Ahali* representaba menos de un 4% de la tirada del conjunto de los principales diarios de propiedad estatal⁷⁵, al régimen de Sadat debió parecerle que su influencia podía ser excesiva, pues tras dos meses de publicación continuada el periódico comenzó a ser hostigado por los servicios secretos y el Fiscal General Socialista, que ordenó en diversas ocasiones que fuera retirado de los kioscos, hasta lograr que dejara de publicarse a finales de 1978. Más adelante reaparecería en diversas ocasiones, pero el mismo tipo de restricciones, incrementadas por la aparición de nuevas medidas legislativas represivas, harían inviable su continuidad. Hay que tener en cuenta que *Al-Ahali*, como el resto de los periódicos de partidos, se veían obligados, por falta de medios propios, a utilizar las instalaciones de edición e impresión estatales, lo que facilitaba sobremanera su control, incluido su secuestro puntual e inmediato (Shoukri 1979: 445-446).

Sadat no se dio por satisfecho con la práctica desaparición de *Al-Ahali*. En los años anteriores había intentado que el presidente libanés Suleiman Franyie expulsara de su país a los periodistas egipcios -muchos de ellos forzados al exilio profesional en 1973-que trabajaban en Beirut ejerciendo la profesión con una gran libertad de crítica al régimen egipcio. Aunque Franyie se negó a aceptar la petición de Sadat, la transformación de la crisis libanesa en una auténtica guerra civil forzó en última instancia el éxodo de los periodistas egipcios -junto con muchos otros libaneses- a diversas capitales europeas, fundamentalmente París y Londres. La crítica, no obstante, no hizo más que cambiar de lugar de procedencia y -en una consecuencia imprevista por Sadat-, de manera parcial de emisores y público, pues los periodistas árabes de otras procedencias y de sensibilidades izquierdistas o nacionalistas árabes también se incorporaron con vigor a la crítica al presidente, e hicieron conocer a los europeos y a los árabes residentes en Europa sus opiniones sobre él. Ante esta situación, el 27 de mayo de 1978 el Fiscal General Socialista convocó a 34 periodistas que trabajaban en el extranjero a los que acusaba de “difamar a Egipto en el exterior”, llegando incluso a esgrimir la ridícula amenaza de hacerlos detener por la Interpol. Poco después se prohibió abandonar el territorio nacional a un destacado grupo de periodistas e intelectuales, la mayoría de ellos de izquierdas, que tenían asimismo gran predicamento en el extranjero y entre los que se encontraban Mohammed Sid Ahmad, Hasanein Heikal, el periodista, poeta y dibujante Salah Aisa, el poeta Ahmad Fuad Nigm y la periodista Farida al-Naqqach. Finalmente, algunos de los periodistas conflictivos

⁷⁵ Según Rugh, en 1976 los diarios de propiedad estatal tenían una tirada conjunta de más de 1.300.000 ejemplares, situándose a su cabeza en este sentido *Al-Ajbar*, con 650.000, y *Al-Ahram*, con 520.000. Los otros diarios principales en lengua árabe eran *Al-Gumhuriya* (60.000) y *Al-Masá* (55.000). El Estado seguía publicando -y seguiría haciéndolo hasta el siglo XXI- varios diarios en inglés y en francés fundados en el siglo XIX o a principios del XX (*The Egyptian Gazette*, *Le Progres Égyptien* y *Le Journal de l'Égypte*) (Rugh 1979: 32).

residentes en el país fueron detenidos ilegalmente y torturados por los servicios secretos, y Sadat llegó al extremo de utilizar su potestad presidencial de oponerse a que algunos de ellos fueran liberados por orden judicial (Shoukri 1979: 446-449).

3.5.2 La Ley de Protección del Frente Interior y la Paz Social

Mientras tomaba las expeditivas medidas recién mencionadas, que le valieron los reproches de numerosos medios de prensa y de parlamentarios e intelectuales británicos y franceses, el régimen de Sadat había trabajado a marchas forzadas en una nueva legislación que pudiera ser más efectiva para sus fines. Así, el 31 de mayo de 1978 era promulgada, tras ser sometida a referéndum, la Ley de Protección del Frente Interior y la Paz Social (قانون بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي), específicamente dirigida contra el Wafd, los medios de izquierdas y los periodistas críticos.

El artículo 4 de dicha ley apuntaba a expulsar de la escena política a los antiguos dirigentes del Wafd, al prohibir la adhesión a los partidos políticos y a “toda actividad política” “a cualquiera que hubiera participado en la corrupción de la vida política antes de la revolución de 1952”, ya fuera ocupando puestos ministeriales o participando en la dirección de los partidos que habían ocupado el poder. Dicho artículo excluía al Partido Nacional y al Partido del Joven Egipto, con el fin de permitir que los principales dirigentes del “leal” PST (Ibrahim Chukri y Fathi Radwán, que habían pertenecido al Joven Egipto) pudieran continuar en la escena política.

Los artículos 2 y 3 pretendían cerrar el paso a los elementos marxistas que no fueran cuidadosos en sus manifestaciones, al prohibir a quienes “pusieran en peligro las leyes celestiales” o “doctrinas que renegaran de ellas” el desempeño de puestos de alta responsabilidad en el Estado, en el sector público, en las instituciones de la prensa, y en los consejos de administración de los sindicatos obreros y profesionales.

El artículo 6 permitiría privar de pertenecer a los partidos políticos a quienes quedara probado, en virtud de las investigaciones del Fiscal General Socialista, que habían cometido actos que “atentaban contra los intereses nacionales”, “corrompían la vida política” o “exponían” al peligro la unidad nacional o la paz social. El artículo 9 definía las sanciones a aplicar a los periodistas que publicaran en el interior o en el exterior del país noticias que constituyeran actos del tipo mencionado, y otros artículos legalizaban la posibilidad de privar de derechos políticos o laborales a quienes, a los ojos del Fiscal

General Socialista, hubiera cometido “delitos” tan vagamente definidos por la ley como los que hemos citado⁷⁶.

3.5.3 Los Acuerdos de Camp David. Primeras manifestaciones de rechazo

El 17 de septiembre de 1978, tras dos semanas de intensas negociaciones, Israel y Egipto alcanzaron, gracias a la obstinada determinación del presidente estadounidense Jimmy Carter, los Acuerdos de Camp David. Los acuerdos se dividirían en dos partes: un acuerdo marco para la Paz en Oriente Medio, y otro para la firma posterior de un tratado de paz entre Egipto e Israel. El primero fue desde un principio un gesto para la galería destinado a lubricar la aceptación del segundo, pues de entrada ni siquiera mencionaba a Siria ni el Líbano ni sus territorios ocupados por Israel, ni tampoco el estatuto futuro de Jerusalén. Respecto a Cisjordania y Gaza, aunque en teoría se adoptaba el compromiso de implementar “completamente” la resolución 242 de la ONU, y se reconocían genéricamente “los legítimos derechos de los palestinos”, en la práctica se proponía un periodo de autogobierno de cinco años en Cisjordania y Gaza tras el cual se llevarían a cabo negociaciones entre Israel, Egipto, Jordania y “los representantes elegidos” de Cisjordania y Gaza para determinar “el estatuto final de ambos territorios y sus relaciones con sus vecinos”⁷⁷. En diciembre de 1978, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 33/28, según la cual los acuerdos eran declarados no válidos para dicha organización, al haber sido alcanzados sin su participación ni la de la OLP, y no satisfacer los derechos de los palestinos al retorno, a la autodeterminación, a la independencia y a la soberanía. Un año después, la Asamblea adoptaría otras resoluciones en el mismo sentido.

En cuanto al Acuerdo de Paz con Egipto, que sería firmado en marzo de 1979, preveía que, a lo largo de tres años, Israel retiraría sus fuerzas armadas y su personal civil de la Península del Sinaí y permitiría el tránsito y el tráfico de mercancías entre Jordania y Egipto. A cambio, Egipto establecería relaciones diplomáticas plenas con Israel, permitiría el paso de los barcos israelíes por el Canal de Suez y el Estrecho de Tirana, y mantendría una presencia militar muy limitada en el Sinaí, y nula más allá de 50 kilómetros al este del Canal de Suez. Además, aunque este extremo no estaba incluido en el tratado en sí, en virtud de él desde 1979 tanto Egipto como Israel recibirían varios miles de millones de dólares anuales de ayuda norteamericana, en cantidades variables con el tiempo y según el

⁷⁶ Puede encontrarse la versión francesa de la ley que hemos consultado en Shoukri (1979: 524-526).

⁷⁷ *The Camp David Accords. Documents Pertaining to the Conclusion of Peace*, Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, sin fecha. Consultado en el sitio en internet del Instituto de Leyes de la Universidad de Birzeit (<http://muqtafi.birzeit.edu/InterDocs/images/284.pdf>), el 18 de marzo de 2015.

país⁷⁸, pero de los cuales 1.300 millones para cada uno serían destinados hasta hoy a ayuda militar.

El pueblo egipcio no tuvo la menor noticia del contenido concreto de los Acuerdos de Camp David hasta después de su firma. Cuando aquel se reveló, el descontento de importantes sectores de la población comenzó a manifestarse, y en ello tomó la iniciativa la clase política. Casi todas las posturas, excepto las irrendentistas del islamismo radical, coincidían en lo esencial: no rechazaban el principio de la paz y de las negociaciones, pero sí las concesiones a Israel, tenidas por desmesuradas y a cambio de muy pocas contrapartidas. Fundamentalmente, denunciaban la no recuperación inmediata del Sinaí y la soberanía sobre él, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas, y el desdén de los derechos de los palestinos y de la cuestión de Jerusalén.

El partido Tagammu y su presidente, Jaled Mohai Eddín, diputado en el Parlamento, tomaron la iniciativa en la crítica a finales de septiembre, si bien su reacción, como la de la izquierda en general, el régimen la daba por descontada. Sin embargo, un artículo firmado por Omar al-Telmesani en la revista *Al-Daawa*, marcando la posición de los Hermanos Musulmanes, debió sorprenderle, si no por el fondo, sí por su firmeza y virulencia: negociar no significaba capitular ante el enemigo, y si era preciso había que seguir luchando contra el enemigo hasta recuperar todos los derechos legítimos. Más adelante, llegó una segunda sorpresa: el 1 de octubre de 1978, cuatro pesos pesados de la revolución de julio de 1952, Zakariyya Mohai Eddín, Abdel Latif al-Bagdadi, Husein al-Chafai y Kamal Eddín Husein, los dos primeros pro occidentales y liberales en economía, y los dos segundos conservadores y de orientación islamista, enviaron una nota al presidente, con copia a la prensa, en la que rechazaban los acuerdos en su totalidad, en su conjunto y en sus detalles. Finalmente, el 2 de octubre el Parlamento, reunido para tratar acerca de los acuerdos, contemplaba un vivo debate en el que los críticos se manifestaron mucho más numerosos de lo que el presidente egipcio había pensado. A su conclusión, una decena de diputados independientes de diversas orientaciones políticas, entre los que se encontraban Helmi Murad (miembro del PST) y Salah Abu Ismael (salafista), por citar solo los más conocidos y ya mencionados, firmaban una declaración de rechazo al tratado en la línea de lo ya expresado por las personalidades políticas mencionadas. Aunque en última instancia tan solo 17 diputados se opusieron con su voto a los Acuerdos de Camp David y el tratado de paz firmado en marzo de 1979, el más amplio descontento de fondo detectado entre los parlamentarios por Sayyed Marei, presidente del Parlamento, llevó a aquel a

⁷⁸ La ayuda anual a Israel siempre sería superior a la ayuda a Egipto, y durante décadas ambos países serían los principales receptores en el mundo de ayuda norteamericana, alcanzando respectivamente a principios de los años 90 los 5.000 y 3.000 millones de dólares.

aconsejar a Sadat que disolviera la Cámara, y procediera a convocar elecciones, lo que el presidente hizo en abril, semanas después de firmarse el Tratado (Shoukri 1979: 480-481).

3.5.4 Las elecciones legislativas de junio de 1979. Refuerzo del control del Parlamento por el régimen

3.5.4.1 Partidos y programas

Desaparecido el Nuevo Wafd de la contienda partidista por las presiones gubernamentales, los partidos en liza en las elecciones que se celebrarían en junio de 1979 eran el gubernamental PND, el progubernamental PLS, el Tagammu, y el nuevo partido recientemente creado a instancias de Sadat, el PST, que en mayo comenzó a publicar su periódico *Al-Chaab*.

El PLS apoyaba fervientemente los Acuerdos de Camp David y la política de *infitah*, y había apoyado los recortes a las subvenciones a los productos de primera necesidad en enero de 1977, e incluso la promulgación de la Ley de Protección del Frente Interior después, a lo que se unía un encendido discurso político-religioso islámico. Estas líneas maestras de su programa lo convertían en un partido contradictorio (pues la mayor parte del islamismo político rechazaría la paz con Israel) y poco diferenciado en lo esencial del PND (هلال 2006: 209).

En cuanto al PST, de cara a las elecciones de 1979 manifestó su apoyo a los acuerdos de paz con Israel, y mantuvo su ya señalado apoyo crítico al *infitah*, exigiendo la protección de la industria local y del sector público, así como una mayor inversión en gastos sociales y un sistema de impuestos eficaz y progresivo. De esta manera, el Tagammu quedaba como el único partido de auténtica oposición.

En política exterior, el Tagammu reclamaba retorno al panarabismo, e insistía en su rechazo a la alineación exterior con el bloque “imperialista” liderado por Estados Unidos y a cualquier tratado de paz con Israel que no supusiera la retirada de todos los territorios ocupados y la restitución de los derechos de los palestinos. En política económica, localizaba en el *infitah* la causa principal de los males económicos y sociales del país, y propugnaba el retorno a la planificación estatal y la promoción del sector público. En cuanto al sistema político, aun reconociendo los logros del naserismo en materia de participación, criticaba sus carencias, y defendía un sistema constitucional liberal con libertad de acción política plena, con elecciones libres y competitivas y el control del poder judicial sobre el ejecutivo (Martín Muñoz 1992: 332).

Finalmente, el programa del PND se dedicaba a la defensa de las políticas gubernamentales y a la repetición de los principios enumerados en el momento de su constitución como partido en septiembre de 1978, que a su vez eran un calco de los vagos *mantras* de Sadat: la construcción de un Estado moderno cimentado en la ciencia y la fe, la afirmación de los valores espirituales, la reconciliación de los intereses colectivos e individuales, la defensa de la unidad y la paz social, la lucha por la unidad árabe y, único aspecto más definido pero de incierta concreción, la promoción de la *charía* como principal fuente de legislación (Waterbury 1983: 370).

3.5.4.2 Proceso electoral y resultados

La legislación electoral incluyó la novedad de que el Parlamento debería contar con al menos treinta diputadas, para lo que se atribuyó el mismo número de escaños para ellas en 30 circunscripciones designadas por el ministerio del Interior, lo que obligaba a cada partido a incluir al menos ese número de candidatas en sus listas electorales en el caso de que se presentara en tales circunscripciones. Más allá de esta medida de sedicente discriminación positiva, los cambios de las ordenanzas legales respecto a 1976 se centraron en restringir el marco de acción y expresión de los candidatos: estos no podrían celebrar reuniones públicas ni expresar en sus programas y manifestaciones públicas posturas contrarias a las políticas gubernamentales en los temas que afectarían a “los intereses superiores de la patria” o a la “seguridad nacional”. Orientadas en particular a evitar las críticas al Tratado de Paz, estas disposiciones eran, sin embargo, tan vagas, que permitían restringir el espacio de debate político hasta prácticamente anularlo (Martín Muñoz 1992: 335-336; هلال 2006: 213-214).

La determinación de Sadat era, como señala Hilal, clara: se trataba de restablecer, pese a la existencia formal de diversos partidos, el principio del “consenso nacional” obligatorio vigente durante la época naserista y normalmente asociado a la presencia de un único partido, y a ello se aplicó el régimen con todas sus energías y recursos (هلال 2006: 214). En primer lugar, la dirección del PND (y en particular su secretario general y vicepresidente de la República, Hosni Mubarak) se dedicó a poner orden en casa, seleccionando cuidadosamente a sus candidatos con el fin de que no se introdujeran entre ellos potenciales elementos contestatarios, lo que llevó a la elección de 200 candidatos nuevos respecto a la legislatura anterior de los 376 que presentó a las 175 circunscripciones para un total 350 escaños disponibles (Martín Muñoz 1992: 335). En segundo lugar, los diseñadores de la estrategia gubernamental para las elecciones “allanaron el camino” al PST, siempre según Hilal, evitando oponerle candidatos fuertes en algunos distritos, en los que por otro lado los candidatos del PST estaban estrechamente relacionados con el

régimen (هلال 2006: 211). Por último, los candidatos de auténtica oposición y sus posibles votantes serían duramente hostigados.

El PST presentó a las elecciones 84 candidatos, el PLS 91 y el Tagammu 34, mientras que el número de candidatos independientes fue de 1.192 (هلال 2006: 201). La campaña electoral estuvo presidida por los constantes ataques de los representantes del Gobierno y sus partidarios a la izquierda, que contaron con la participación del jeque de Al-Azhar, quien emitió una fetua en la que calificaba de “renegado y ateo” a todo aquel que votase a un candidato comunista. En las zonas industriales de Mahalla al-Kubra y Chubra, la policía intervino activamente contra el posible éxito de la izquierda, amenazando a los obreros con perder el trabajo si esto sucedía, deteniendo en Chubra al candidato del Tagammu y, finalmente, rellenando de nuevo las urnas tras la votación. No obstante, el enemigo a batir para el régimen no eran solo los escasos candidatos del Tagammu, sino también los posibles adversarios que pudieran introducirse en la Cámara como candidatos independientes, por lo que manipulaciones del tipo de las mencionadas se produjeron en otros distritos cuando el Gobierno o las fuerzas de seguridad lo consideraron necesario según la popularidad de los candidatos adversarios. Otro maniobra del Gobierno, legal pero que mostraba un escaso *fair play*, fue anunciar una subida de sueldo a los funcionarios en la víspera de las elecciones (Martín Muñoz 1992: 311, 336).

El resultado oficial de las elecciones fue sin duda muy cercano al deseado por Sadat: el PND obtuvo 341 diputados (88,21% de los escaños), el PST, 29 (8,28%); el PLS, 3 (0,85%) y los independientes 9 (2,57%). De estos últimos únicamente uno, el wafdistas Mumtaz Nassar, podía ser calificado como de auténtica oposición, y logró escapar al control gubernamental de los comicios gracias al despliegue de partidarios suyos armados que impidieron la manipulación de las urnas. La exclusión casi total de la oposición del Parlamento, a pesar de la improbable oposición efectiva que hubiera podido ejercer un mayor número de diputados de dicho signo, constituía un aviso de que el presidente no quería que ningún “ruido” enturbiara el asentimiento a la mayoría a sus políticas. Incluso la designación de los diputados que correspondía al presidente apuntó en este sentido, pues si bien eligió a diez coptos, siguiendo la tradicional política presidencial de equilibrar un tanto la representatividad de la cámara, todos ellos eran miembros del PND (Martín Muñoz 1992: 336; هلال 2006: 213-215; Shoukri 1981: 427).

Poco antes de las elecciones, en mayo de 1979, el PST había comenzado a publicar su periódico *Al-Chaab*, cuya dirección fue encargada a Hamid Zaidán, de orientación socialista, y que contaría en sus páginas con las firmas destacadas de Helmi Murad y Fathi Radwán. Pocos meses después de las elecciones, *Al-Chaab* pondría de manifiesto la nueva línea política del partido, mucho más crítica con el poder, incluyendo en ella el rechazo a los Acuerdos de Paz con Israel. Ante esta deriva del partido, Abu Wafiyya y trece diputados

más lo abandonarían, pasando Helmi Murad a ocupar el cargo de aquel como segundo de Ibrahim Chukri.

3.5.5 El aislamiento de Egipto en su entorno árabe e islámico

La paz unilateral con Israel acarrió a Egipto su exclusión de la Liga Árabe -por decisión de los dirigentes árabes reunidos en Bagdad el 31 de marzo de 1979, cinco días después de la firma del tratado- y su marginación dentro del entorno islámico. El triunfo de la Revolución Islámica en Irán en los primeros meses de 1979, un acontecimiento que conmocionó al mundo y supuso una llamada de alerta para los dirigentes del resto de los países musulmanes, dejó aun menos espacio de maniobra incluso a los más sólidos aliados de Sadat, las monarquías conservadoras árabes que pretendían fundamentar su legitimidad sobre elementos religiosos, y que ya difícilmente podían aceptar ante sus gobernados la renuncia a la liberación del resto de los territorios árabes ocupados y en particular de Jerusalén. En este contexto, resultó significativo que fuera el rey de Marruecos, Hasan II, en tanto que dirigente anfitrión, quien dirigiera las primeras críticas a Egipto en la sesión inaugural del congreso de ministros Exteriores de los países islámicos celebrada en Fez a partir del 8 de mayo de 1979, reunión a la que Egipto, previendo la tormenta, declinó asistir. El congreso reafirmaría la innegociabilidad de la soberanía árabe sobre los territorios, y el compromiso de los países árabes en particular de rechazar cualquier acuerdo parcial con Israel y de diseñar un plan para aislar política y económicamente a Israel en la esfera internacional (Shoukri 1981: 423-424).

El rechazo a Sadat en el exterior se vio además incrementado, mucho más allá de los círculos dirigentes, por la actitud personal del presidente egipcio ante la revolución iraní. La decisión de aquel de acoger en exilio, el 16 de enero de 1979, al sah de Persia, le atrajo las iras de los activistas islamistas, naseristas e izquierdistas ante el apoyo a un personaje que había impuesto uno de los regímenes más represivos, corruptos y extravagantes de Oriente Medio. A pesar de que el Sah había sido durante largo tiempo un protegido y fiel aliado de Estados Unidos, con toda probabilidad Sadat adoptó tal decisión por motivos en gran medida personales, ajenos e incluso opuestos a cualquier consideración estratégica, por razón de la amistad con un personaje con el que, por otro lado, Sadat compartía el gusto por el oropel y la extravagancia.

3.5.6 La oposición del islamismo político a Sadat: entre el ambiguo papel de los Hermanos Musulmanes y la vía de la yihad

Como hemos señalado, en la primera mitad de los años 70 las “agrupaciones religiosas” (*gamaat diniyya*) locales y dispersas incluían a miembros de los Hermanos Musulmanes, yihadistas, salafistas, independientes y religiosos azharíes que se reunían a nivel local bajo el común denominador islámico. Únicamente en la segunda mitad de los 70, cuando ya se había generalizado la denominación de “agrupaciones islámicas” (*gamaat islamiyya*), estas comenzaron a organizarse a nivel provincial, y luego nacional. En marzo de 1978, se celebró un primer congreso interuniversitario e interprovincial de las *gamaat islamiyya* del Alto Egipto, en el que se eligió como emir del Alto Egipto a Nayeh Ibrahim. Al mismo tiempo, Abdel Moneim Abul Futuh fue elegido emir de la *gamaa islamiyya* de El Cairo, y poco después fue elegido emir de todas las *gamaat* de las universidades egipcias.

Al-Zayyat, miembro entonces de la *gamaa islamiyya* de Asuán, señala como su grupo pensaba que todos esos esfuerzos, voluntad y capacidad organizativos provenían, secretamente, de los Hermanos Musulmanes y de su dirección en El Cairo y en las zonas urbanas del Delta. Avala esta interpretación el hecho de que principales dirigentes de las *gamaat* de dichas zonas, como el propio Abdel Futuh, Essam Al-Erián, Ibrahim Zaafrani y Helmi al-Yazzar, reconocerían públicamente su ingreso en la Hermandad en 1980, después de que se hubiera rumoreado en los años anteriores y ellos lo negaran. No obstante, la situación era nebulosa, pues según el autor las *gamaat islamiyya* no tenían un auténtico marco organizativo, sino tan solo una “conexión doctrinal” (ترابط فكري) y una “conexión para la acción” (ترابط حركي). Esta conexión encontraba su máxima expresión en reuniones en la mezquita de Al-Nur de El Cairo, a las que asistían Omar al-Telmesani, guía general de los Hermanos Musulmanes, Hafez Salama, el jeque Mohammed al-Gazzali, los emires de las *gamaat islamiyya*, y muchos otros ulemas. En dichas reuniones, se llegaba a acuerdos sobre las cuestiones que se planteaban, sin que hubiera “presidentes ni presididos”. Sin embargo, las *gamaat islamiyya* del Alto Egipto, dominadas por la corriente yihadí, se opusieron desde mediados de los 70 a lo que consideraron intentos de penetración y dominio organizados por los Hermanos Musulmanes, y se opusieron a ellos firmemente, amenazando incluso con que si “los hermanos intentaban desembarcar en el sur [el Alto Egipto], ellos lo harían en el norte [El Cairo, el Delta del Nilo y la costa mediterránea]” (الزيات 2005: 75, 80-81, 90-91).

Las distancias guardadas con los Hermanos Musulmanes se tornaron abiertas diferencias tras la firma de los Acuerdos de Camp David. A pesar de que Omar al-Telmesani siguió rechazando públicamente los acuerdos, por ejemplo en junio de 1979 en

la revista *al-Daawa*, cuya publicación fue prohibida durante dos meses (Shoukri 1981: 425), las *gamaat* del Alto Egipto consideraban que la Hermandad contemporizaba con el régimen (en agosto Al-Telmesani se reuniría por primera vez con Sadat), “trabajaba a través de él” -en expresión de Al-Zayyat- y le aportaba cierta legitimidad (الزيات 2005: 84). Por el contrario, las *gamaat* del Alto Egipto consideraron los acuerdos con Israel un *casus belli*, y el triunfo de la Revolución Islámica en Irán no hizo más que estimular sus ansias revolucionarias. Sus líderes religiosos no se privaban de criticar al régimen en las mezquitas, y los sermones de los principales de ellos en una en concreto llegaban en 24 horas al resto de las mezquitas del país en forma de casetes grabadas tras ser portadas en persona por militantes, una innovación tecnológico-comunicativa tomada de la revolución iraní.

En el verano de 1979, se constituyó el Consejo Consultivo (مجلس الشوري) de las *gamaat islamiyya* del Alto Egipto (tras haberse constituido uno similar en cada una de sus provincias). Pasaron a formar parte de dicho consejo Nayeh Ibrahim, Abdel Salam Farag y Karam Zuhdi, y en su primera reunión se establecieron dos objetivos principales para las *gamaat*: oponerse a la penetración de los Hermanos Musulmanes, y acabar con el régimen *yahilí* y con sus gobernantes considerados apóstatas. La declaración de Sadat como apóstata por parte de las *gamaat* del Alto Egipto haría que los Hermanos Musulmanes comenzaran a alejarse y diferenciarse netamente de ellas, y probablemente motivó que los dirigente citados de las asociaciones islámicas de El Cairo (Abdel Futuh, Al-Erián, Zaafrani y Al-Yazzar) hicieran pública su adscripción a los Hermanos Musulmanes (الزيات: 78, 84, 92-93).

3.6 EL FIN DE LA PERMISIVIDAD GUBERNAMENTAL FRENTE A LAS GAMAAT ISLAMIYYA

Hasta 1978, el régimen egipcio había permanecido indiferente a los crecientes “excesos” violentos de las *gamaat* de orientación yihadí, que ya habían adoptado el principio de “acabar con lo reprobado” (المنكر)⁷⁹ por la fuerza. Tras consentir, cuando no

⁷⁹ En el Corán se repite una expresión que incluye el término منكر, y sobre la que se fundamenta la *hisba* (حسبة), la doctrina de la jurisprudencia islámica relativa a la salvaguarda del orden moral y social islámico. Dicha expresión es الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, que traducimos como “imponer la ley e impedir lo reprobado”, a pesar de las muchas consideraciones que podrían hacer acerca de los términos utilizados y de su traducción (véase a este respecto la entrada “hisba” del *Diccionario de islam e islamismo* de L. Gómez García, 2009: 136-139). “La ley”, hoy, sería “ley islámica”, por controvertidos e indefinidos que resulten sus contornos, mientras que lo reprobado sería lo señalado como tal por el mensaje coránico, según sus diversas interpretaciones para definir la “ley islámica”. La cuestión de la *hisba*, y en particular de sobre quién recae la obligación de aplicar el mencionado principio, se impondría en Egipto en los años 90, como veremos más

alentar, los ataques físicos a los estudiantes de izquierdas, había tenido una actitud muy “comprensiva” con otras actividades de sus militantes que pasaban por la aplicación por la fuerza en la sociedad de su concepción de la moral islámica. Al-Zayyat relata uno de estos episodios en los que, todavía a finales de 1977 o principios de 1978, participó en persona -según él, por primera y única vez- junto a su hermano y otros miembros de la *gamaa* de Asuán, así como cuál fue la respuesta de las autoridades: los militantes organizaron una partida armada con palos y se dirigieron una tras otra a tres tiendas de bebidas alcohólicas que resultaron ser, “por casualidad”, propiedad de cristianos, exhortando a aquellos a que dejaran de comerciar con alcohol y advirtiéndoles de que en aquella ocasión se limitarían a destruir sus locales, lo que de hecho hicieron, por “ser la primera advertencia”. En los días siguientes, el gobernador de Asuán, tras recibir las denuncias de los afectados, convocó a los militantes y les recriminó “amablemente”, señalando que “había muchas maneras de alcanzar sus objetivos (de hacer reinar la *charía*) y que la fuerza debía de ser el último de ellos”. A continuación les comunicó que no iba a tomar ninguna medida punitiva contra ellos, por ser estudiantes todavía, para no arruinar sus vidas, pero que debían prometerle que no se iban a repetir hechos de este tipo -lo que los militantes hicieron y, siempre según Al-Zayyat, cumplieron en Asuán. No obstante, el gobernador señaló que era imperativo que los propietarios de los locales fueran indemnizados, y al contestar a esto los activistas que sus recursos eran muy limitados, y necesarios para sus actividades, aquel respondió asignando 3000 libras egipcias a uno de los proyectos de la *gamaa* en la ciudad (الزيات 2005: 73-74).

La oposición del islamismo político a la política exterior de Sadat y el fantasma de la revolución iraní conseguirían, sin embargo, que el Gobierno y las fuerzas de seguridad dirigieran por primera vez sus acciones a contener a aquel. En 1978 la Administración y la policía intervinieron por primera vez en la universidad cairota de Ain Chams para impedir a los activistas islamistas acceder a los órganos representativos estudiantiles, mientras que en otras universidades en las que sí lo consiguieron, tales órganos fueron privados de las ayudas estatales. En 1979, decenas de estudiantes fueron arrestados y excluidos de la universidad, entre ellos Abul Ila al-Madi, presidente de la Unión de Estudiantes de la Universidad de Minia y vicepresidente de la Unión General de Estudiantes de Egipto, que poco después ingresaría en los Hermanos Musulmanes. Ese mismo año, el decreto de Ley 265 de 1979 modificó el reglamento de los órganos de representación estudiantiles, y suspendió las actividades de sus direcciones elegidas con anterioridad, excepto al nivel de las facultades (en las que imponía el control de un consejo compuesto mayoritariamente por profesores), cerró sus sedes y prohibió sus reuniones. En el verano, asimismo, de 1979,

las fuerzas de la Seguridad Central impidieron la asistencia a los campamentos de verano que los islamistas organizaban en las universidades (Azaola Piazza 2006: 325-326). De manera paralela a la intervención en las universidades, el Ministerio de Asuntos Religiosos intentó recobrar el control de las mezquitas, prohibiendo predicar en las que dependían de él a cualquiera que no hubiera sido autorizado expresamente.

Sin embargo, las medidas de control de las universidades y fuera de ellas fueron desbordadas por los islamistas. En los campus se imponía su ley, por su mera presión social cuando no por una violencia soterrada, en lo relativo a las normas de indumentaria, prohibición de la difusión de películas y música, separación de sexos, etc. Por otra parte, los estudiantes islamistas desplazaban las actividades que les eran prohibidas al exterior, organizando campamentos fuera de la universidad y llamando a sesiones de rezo colectivo, que eran ampliamente seguidas. En cuanto a la prohibición de predicar en las mezquitas estatales, fue respondida con el redoblamiento de la actividad de construcción de mezquitas “populares” (أهلية), para cuya financiación, a falta de la ayuda estatal, las *gamaat* radicales recurrían a la recolección de donativos obtenidos de los comerciantes de buen grado o por la fuerza, como reconoció, una vez más, Al-Zayyat, que también señaló que algunos “hombres de negocios” donaban grandes cantidades de dinero voluntariamente. Las mezquitas construidas por las *gamaat* del Alto Egipto llevaban todas ellas, como rasgo distintivo, el nombre de “mezquita Al-Rahmán de” más el topónimo de la localidad en la que se situaban (الزيات 2005: 84-85).

En definitiva, los militantes de las *gamaat* no se amilanaron ante la ofensiva represiva del régimen sino que, por el contrario, esta les soliviantó aun más y les llevó a incrementar sus actividades violentas. A finales de enero de 1979, en el marco de una manifestación contra la acogida del sah de Persia en Egipto, un manifestante resultó muerto por la policía, incrementando el resentimiento de los activistas islamistas contra el régimen. A pesar de que por entonces, según Al-Zayyat, las *gamaat* aún mantenían contactos regulares con algunas autoridades, ya fueran universitarias o ejecutivas, sabían que sus actividades eran estrechamente vigiladas por las fuerzas de seguridad, y habían convertido a estas en uno de sus principales adversarios. Así, un oficial de los servicios secretos que fue descubierto espionando una reunión en Asiut fue apaleado hasta quedar entre la vida y la muerte (الزيات 2005: 77, 86-87). En otro episodio violento alejado del Alto Egipto, en marzo de 1980 estudiantes islamistas secuestraron al decano de la Facultad de Ciencias de Alejandría para exigirle la prohibición de la proyección de películas y la celebración de fiestas, que se autorizara la organización de encuentros de carácter islámico, que cesaran los interrogatorios a los activistas islamistas y que no se impidiera la presentación de candidaturas islamistas a las elecciones (Azaola Piazza 2006: 227).

Para intentar contener a los militantes islamistas radicales, el Gobierno egipcio no recurrió únicamente, sin embargo, a la represión, sino también a la influencia que en ellos pudieran tener los líderes religiosos tenidos por moderados. El propio Omar al-Telmesani reconocería posteriormente que el ministro del Interior, Al-Nabawi Ismael, le llamaba frecuentemente:

“Solía llamarme cada vez que ocurría algo para pedirme consejo. El ministro me enviaba a algunas facultades. Cuando yo hablaba a los estudiantes (...) aceptaban mis argumentos contra la violencia, las manifestaciones y las extorsiones”⁸⁰

Sin embargo, a finales de los 70 la influencia que el dirigente de los Hermanos Musulmanes podía tener sobre los elementos más radicales de la corriente islamista era prácticamente nula.

4. INFITAH Y ESTADO RENTISTA. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

Tras las revueltas de enero de 1977 el régimen de Sadat congeló su política de *infitah*. Ninguna nueva medida de liberalización económica fue adoptada, aunque fueron mantenidas las tomadas previamente. Tampoco volvieron a mencionarse la posibilidad de eliminar las subvenciones a los productos de primera necesidad ni la de eliminar el compromiso del Estado de contratar a todos los graduados en estudios superiores, que lastraban los dos principales capítulos de gasto del presupuesto del Estado. El coste político que podría haber tenido profundizar en la liberalización, manifestado en las revueltas, no fue la única razón, ni tal vez siquiera la principal, para que el Gobierno egipcio entrara en una fase de pasividad en política económica. Por el contrario, la afluencia de abundantes recursos financieros exógenos y/o rentistas a las arcas del Estado y la economía en general, acompañada por la satisfacción de la reforzada burguesía y gran parte de la burocracia del Estado relacionada con ella con un *status quo* que les beneficiaba, desempeñó un papel determinante en este sentido.

⁸⁰ عمر التلمساني: *تذكرات لا مذكرات*. Como ya hemos señalado, esta obra fue publicada originalmente en la revista *Al-Musawwar*, nº 2989, 22 de enero de 1982. No obstante, nosotros la hemos consultado en la wikipedia de los Hermanos Musulmanes (<http://www.ikhwanwiki.com>, consultado el 20 de febrero de 2015), en una versión que no es copia del original y no está numerada, y en la que faltan contenidos que citan otros autores (الزيت 2005; هيكل 2006) haciendo referencia a la revista, que no hemos podido consultar.

Como señala Djoufelkit-Cottenet, el *infitah* no había sido una política forzada por la presión de la debilitada burguesía preexistente ni por cualesquiera grupos de presión, sino una “política de Estado” decidida por Sadat y algunos de sus allegados, que contaban igualmente con los instrumentos para ralentizarlo o detenerlo (2011: 518). Sin embargo, el *infitah* engendró su propia burguesía privada y público-privada, para gran parte de la cual la razón de ser y prosperar residía en esa situación que combinaba el mantenimiento del control mayoritario del Estado sobre la economía con algunas “ventanas de oportunidad” en el sector privado que, sin embargo, estaban asociadas a dicho control estatal. Así, mientras que los recursos exógenos y rentistas proporcionaban al Estado aún mayor autonomía en sus decisiones, y le permitían mantener ciertas políticas sociales y contener la oposición social, el régimen de Sadat podía contar, además, con el apoyo decidido de los sectores socioeconómicos más influyentes.

La afluencia de recursos externos o de origen rentista permitió que en la segunda mitad de los 70 se invirtiera la fuerte tendencia a la pauperización conocida en los cinco años anteriores. No obstante, el muy desigual reparto de los capitales y beneficios del *infitah* y de los recursos del Estado creó una importante diferenciación socioeconómica que se manifestó inmediatamente, así como desequilibrios y carencias en la estructura económica cuyos efectos se manifestarían con la mayor crudeza a mediados de los 80.

En términos económicos, del *infitah* parcial resultó una clara línea divisoria entre ganadores y perdedores. En términos políticos, apenas contribuyó a modificar el carácter autoritario del régimen político egipcio, excepto en algunas modalidades de su control de la sociedad, muchas de ellas no relacionadas con la expresión y la participación política, sino con la mera supervisión (o más bien no supervisión) del cumplimiento por parte de los ciudadanos (especialmente los funcionarios) con sus deberes, que desembocó en la extensión de la corrupción. El principal sustento político del régimen siguió siendo la burocracia de Estado, pero ahora dicho sustento se centraba en los estratos superiores de aquella que entraron en colusión o entendimientos con la burguesía del *infitah*, hasta formar en muchos casos parte de ella. De las clases medias, o de las antiguas clases medias urbanas, burocráticas y profesionales, pauperizadas -al menos relativamente- por el *infitah* surgirían, por el contrario, los focos de oposición al régimen.

4.1 RECESIÓN Y CRECIMIENTO DE BASE FINANCIERA Y RENTISTA

A lo largo de los años 70, la evolución del PIB denotó la estrecha dependencia de Egipto de los recursos exógenos y rentistas y de las circunstancias internacionales. Tras descender su crecimiento por debajo del 5% en 1974, se situó por encima del 10% en 1976-1977 gracias, principalmente, a la recuperación del Canal de Suez y una pequeña

parte del Sinaí -con algunos de sus yacimientos petroleros y sobre todo de gas-, pero también a los albores de nuevas fuentes de renta y financiación. Entre 1973 y 1978, Egipto percibió ayuda exterior, procedente sobre todo de los países árabes petrolíferos del Golfo, por un montante anual medio que se situó por encima del 10% del PIB, alcanzando un pico del 19,3% en 1975. La ayuda de dichos países sería sin embargo cancelada a raíz de los acuerdos de paz con Israel de 1979, que también afectaron considerablemente a las inversiones extranjeras directas, que en ese año habían alcanzado su máximo de la década, hasta situarse en el 6,7% del PIB (El-Sayyed 2011: 419-420, 428-429). No obstante, el fuerte alza de los precios de los hidrocarburos, que había propiciado la ayuda y la inversión árabes, siguió teniendo efectos beneficiosos para la economía egipcia gracias a la propia producción local y a las transferencias de los trabajadores egipcios, que desde mediados de la década comenzaron a emigrar a los países del Golfo en número creciente cada año hasta alcanzar los casi 2 millones de trabajadores emigrados a finales de la década, multiplicando por 15 el volumen de sus transferencias entre 1974 y 1981 (Ayubi 1991: 73; Gobe 1999: 78). De esta manera, los ingresos exógenos o rentistas conjuntos (ayuda exterior, ingresos del petróleo, ingresos del Canal de Suez, transferencias de los trabajadores emigrados y, al final de la década, el turismo) pasaron de representar un 4,5% del PIB entre 1970-1974 a cerca de un 40% entre 1978-1980, dando un fuerte impulso al crecimiento del PIB, que entre 1974 y 1981 se situó de media en torno al 8% (Djoulfelkit-Cottenet 2011: 515, 507-508).

La mala gestión y/o inversión de los recursos financieros propiciaron que la dependencia económica se incrementara. Los 11 indicadores parciales de la evolución del grado de dependencia económica estudiados por el economista egipcio Ramzi Zaki en 1983 señalaban un incremento de la dependencia⁸¹.

4.2 EL ESTANCAMIENTO DE LA INDUSTRIA PRODUCTIVA Y LA AGRICULTURA

El sector industrial participó de manera notable en el crecimiento del PIB entre 1974 y 1981, pasando de aportar el 25% de aquel al 38%, y de emplear al 17% de la población activa al 19%. Sin embargo, el grueso de este incremento procedió del sector de los hidrocarburos, del de la construcción y de otros asociados a ellos, como la producción eléctrica y el agua. Por su parte, el sector de las manufacturas se estancó, y retrocedió

⁸¹ Dichos indicadores tenían que ver con elementos que hemos señalado: la propensión a importar, las importaciones de alimentos, el déficit comercial, la cobertura de las importaciones por las exportaciones, el peso de la inversión externa sobre el total de las inversiones y la deuda externa (Ramzi Zaki, *Azmat misr al-iqtisadiyya*, El Cairo: Madbuli, 1983, pág. 269. Citado por Ayubi 1991: 308)

relativamente, pues creció a un ritmo del 6%, un crecimiento inferior al del PIB, y su participación en este bajó del 18 al 13%, ocupando tan solo al 12,5% de la población activa. Las inversiones privadas que se dirigieron al sector manufacturero eligieron sectores fuertemente protegidos por la intervención del Estado, como el de la industria textil, el de los materiales de construcción o el de las industrias mecánicas (Djoufelkit-Cottenet 2001: 507-508, 519).

Otro sector productivo que vio disminuido su crecimiento relativo fue el agrícola. Tras situarse su crecimiento medio en el 3,3% en la segunda mitad de los 50 y en el 3,7% en la primera mitad de los 60, en los años 70 apenas se recuperó del declive de la segunda mitad de los 60 (1,6%), situándose de media en torno al 2% y alcanzando tan solo un 2,7% a finales de la década. La ralentización del crecimiento de la producción agrícola durante los 70 puede atribuirse parcialmente al mantenimiento del sistema de cuotas de producción obligatorias de determinados cultivos, cuyas cosechas habían de ser entregadas en gran parte a las cooperativas a precios fijados por el Estado por debajo de los de los mercados internacionales⁸². Estas entregas obligatorias privaban a los agricultores de los excedentes que les hubieran permitido reinvertir en la agricultura. No obstante, los principales perjudicados por el mantenimiento del sistema de cultivos obligatorios y cuotas fueron los pequeños agricultores, pues los que poseían más de 5 *feddanes* preferían evitarlos, dedicarse a cultivos más rentables, y pagar las multas correspondientes. De la misma manera, los agricultores acomodados evitaban en lo posible pasar por la mediación y el control de las cooperativas estatales, a pesar de que ocupaban puestos importantes en sus órganos de dirección, obteniendo al margen de ellas créditos del sector privado, e insumos (como semillas o fertilizantes) del mercado negro, en el que los pequeños agricultores se veían obligados a vender parte de los que obtenían de dichas cooperativas para conseguir liquidez (Ireton 2011: 467, 469-470).

El mantenimiento de la intervención estatal manifestada en el sistema de entregas obligatorias de cosecha, que tenía por objetivo trasladar parte de los excedentes agrícolas al Estado y a los consumidores urbanos, se vio acompañado sin embargo por su retirada de la intervención en otros aspectos fundamentales, como la inversión y la habilitación de tierras para la agricultura. La parte del sector agrícola las inversiones totales del país, que en los años 60 había sido del 23% de media, descendió en los 70 hasta el 7%. En cuanto a la habilitación de tierras desérticas para la agricultura, que entre 1960 y 1967 había alcanzado

⁸² Durante toda la década, los principales productos agrícolas mantuvieron importantes cuotas de entrega obligatoria a las cooperativas a precios sensiblemente reducidos respecto a los precios internacionales. Así, por citar tan solo los ejemplos más destacados, el 100% de la producción de algodón debía ser entregada a un 51% del precio internacional hasta 1979 (luego al 39%); el 40% del trigo debía ser entregado a un 79% del precio internacional (57% a partir de 1979); el 65% del arroz debía ser vendido al 70%; y el 90% de la caña de azúcar al 57% (Ireton 2011: 460).

a 890.000 *feddan*es, se redujo a lo largo de los 70 a 36.000, si bien es cierto que del casi un millón de *feddan*es ganados al desierto entre los 60 y los 70 tan solo poco más de un tercio -una cantidad de cualquier manera muy considerable- quedarían definitivamente dedicados a la agricultura, ante el elevado coste que suponía el mantenimiento del resto (Ireton 2011: 465, 468-469).

El retroceso relativo del peso de las manufacturas y la agricultura en el PIB egipcio se debió a la política de *infitah* y al gran incremento de los recursos exógenos. En cuanto a las manufacturas, por un lado tuvieron que afrontar la competencia brutal y desigual de los productos importados, lo que llevó al cierre de numerosas empresas pequeñas y medias y al consiguiente despido de trabajadores. Las importaciones, que habían representado de media el 19% del PIB entre 1970 y 1974 aumentaron hasta el 39% entre 1974 y 1985. En ellas se llevaron la parte del león los bienes de consumo, que pasaron de constituir el 10% del total de las importaciones en los años 60 a suponer el 28% entre 1970 y 1973 y el 34% entre 1974 y 1987, en detrimento de los bienes intermediarios. La agricultura también tuvo que afrontar una de las principales características de las economías rentistas, en las que, como señala Djoufelkit-Cottenet, “el gran competidor del emprendedor es el importador”, así como la orientación de la economía a sectores de rápida generación de beneficios, como los servicios y la construcción, según veremos a continuación (Djoufelkit-Cottenet 2001: 508, 516-517, 520).

4.3 LOS NEGOCIOS LUCRATIVOS DEL INFITAH

El gran crecimiento del consumo de bienes de relativo lujo (para el país y sus circunstancias), del tipo de televisores, radiocasetes, electrodomésticos, automóviles y artículos domésticos en general, fue protagonizado de manera principal por la nueva burguesía, pero también por los trabajadores emigrados a los países del Golfo, que percibían salarios muy superiores a los locales y cuyas familias en muchos casos permanecían en Egipto.

En cuanto a la nueva burguesía, se situaba en las dos partes del proceso comercial. El segmento de los importadores constituyó la punta de lanza del *infitah*. La Ley 53 de 1974 había autorizado a los hombres de negocios egipcios a representar a empresas extranjeras en el país, y el Decreto Presidencial 1906 del mismo año impuso a las empresas extranjeras que desearan exportar a Egipto la obligatoriedad de hacerlo por medio de agentes comerciales locales. En 1977 el número de compañías privadas registradas como agentes comerciales era de 766, mientras que las que estaban registradas como empresas productivas era de 336. Las personas que ejercían estas actividades comerciales -que servían además de intermediarios entre el Estado y los inversores extranjeros- estaban

próximas al poder político, y consiguieron que a los bienes de consumo se les impusieran tarifas aduaneras inferiores a las aplicadas a los bienes intermediarios. El propio régimen naserista no solo no había forzado la desaparición de los agentes comerciales privados con su intervención masiva en el sector, sino que recurría abundantemente a ellos, subcontratándolos, para afrontar sus grandes necesidades de exportación e importación, principalmente con los países del bloque del Este. De la época naserista datan también las primeras incursiones de numerosos funcionarios en el cobro de sustanciosas comisiones por favorecer los contratos comerciales (Djoufelkit-Cottenet 2001: 520-522).

De los numerosos funcionarios altos y medios que emprendieron actividades privadas tras el comienzo del *infitah*, la mayor parte de ellos lo hicieron por medio de consultorías o en el sector de la importación-exportación, sectores que no requerían grandes capitales de partida ni afrontar excesivos riesgos, pero en los que los contactos personales eran determinantes. Esta transferencia o compatibilidad de funciones, a menudo oficializada tras la jubilación de la función pública, fue facilitada sobremedida por la creación de las sociedades mixtas público-privadas (Gobe 1999: 55, 65-71). Según Guwaida, en 1976 veintidós exministros y dos expresidentes del Gobierno ejercían actividades económicas como importadores o consultores de empresas extranjeras⁸³.

La construcción fue otro de los sectores más florecientes y remuneradores de la época, y creció como los demás al amparo del Estado. Las compañías privadas obtenían importantes contratos públicos, por ejemplo para las grandes labores de reconstrucción en la zona de Suez tras 1973, obteniendo materias primas del Estado a precios subvencionados. Tras sobrevalorar las necesidades de aquellas, revendían a otras empresas los excedentes -e incluso los que no lo eran- en el mercado negro, hasta que a partir de 1977 pudieron importarlas del mercado libre sin aranceles. La detracción de materiales de las obras públicas tendría sin duda mucho que ver con el frecuente derrumbe de edificios entre los años 70 y 90 (Djoufelkit-Cottenet 2001: 520-522). El mercado de la vivienda fue un subsector del de la construcción del que los nuevos emprendedores obtuvieron también pingües beneficios. Si bien los apartamentos vacíos destinados a los egipcios estaban al margen de la oferta y la demanda en cuanto a los precios de los alquileres, regulados por la Ley 46 de 1962, no sucedía lo mismo con los apartamentos construidos para alquilarlos a los extranjeros, que, tanto occidentales como árabes, afluían en creciente número sobre todo a El Cairo y Alejandría⁸⁴, atraídos no solo por las oportunidades de negocio, sino también, en el caso de los árabes, por las de ocio, mucho más liberales en el Egipto del

⁸³ F. Guwaida 1976: "What's the problem with the private sector?" en *Al-Ahram*, 5 de abril de 1976. Citado por Waterbury (1983: 179).

⁸⁴ En 1977 el número de turistas que visitaban Egipto anualmente alcanzaba el millón de personas, cuando en 1966 dicho número era de 500.000 (Sanmartín 2011: 582).

infītah que en sus países de origen, como testimoniaba la calle conducente a las Pirámides, en las que proliferaban los hoteles de lujo y locales nocturnos, incluidos los de alterne y prostitución. La Ley 46 excluía de la regulación de precios, por otro lado, los apartamentos amueblados, y numerosos constructores construían apartamentos para egipcios, con todas las facilidades que ello comportaba, y los alquilaban, tras amueblarlos, a extranjeros (Djoufelkit-Cottenet 2001: 520-522).

La configuración de los sectores privados del comercio, la construcción, los servicios bancarios y los servicios en general como los sectores económicos más lucrativos produjo una fuga de talentos hacia ellos. En 1976 el 35% de los ingenieros trabajaba en el sector público y el 25% en las manufacturas. En 1986 tan solo trabajaban en cada uno de estos sectores el 20% de los ingenieros (Djoufelkit-Cottenet 2001: 525-526).

4.4 EL DETERIORO DEL SECTOR PÚBLICO INDUSTRIAL

Como hemos apuntado, desde poco después de que Sadat consolidara su poder el sector público egipcio comenzó a ser objeto de frecuentes ataques que insistían en su ineficiencia. No obstante, como indica Ayubi, dichos ataques tenían en su mayor parte más una motivación política que una base científica, y apuntaban a desacreditar a Náser y sus políticas socioeconómicas (Ayubi 1991: 58-59). Para hacer esta última afirmación, Ayubi se apoya, entre otros, en los trabajos de una de los más sólidos estudiosos egipcios de la economía egipcia de la segunda mitad del siglo XX, Heba Handoussa, quien en uno de dichos trabajos, realizado en 1977, aseveraba:

“La afirmación de que el sector público ha sido ineficiente y ha fracasado en alcanzar los objetivos que el Estado le había fijado es una generalización engañosa que oculta en gran medida el muy divergente rendimiento de los diferentes sectores industriales y de cada empresa dentro de cada uno de ellos. Ignorar sus muchos logros refleja una actitud simplista, e impedirá cualquier intento de reforma”⁸⁵.

Diversas comparaciones internacionales de costes realizadas por la autora mostraban cómo varias industrias estatales egipcias, como las de cemento, fertilizantes y neumáticos, aventajaban a las industrias de algunos países europeos, y cómo incluso la productividad de la mano de obra egipcia era superior en el sector de los fosfatos y los

⁸⁵ Heba A. Handoussa, “The Public Sector in Egyptian Industry”, en Ismail Sabri Abdallah y otros: *Al Iqtisad al-Misri fi rub`qarn 1952-1977* (La economía egipcia en un cuarto de siglo), El Cairo: Hai`at al-kitab, 1977, págs. 497-518. Citado por Ayubi (1991: 59).

nitratos. Otras industrias funcionaban razonablemente bien habida cuenta de la infrautilización de su capacidad, de las dificultades causadas por el sistema egipcio de fijación de precios y por el sobredimensionamiento de su mano de obra, por otro lado justificable por razones sociales. El sector farmacéutico se mostraba particularmente exitoso, e incluso el del automóvil no podía ser considerado ineficiente, y podría ser competitivo si funcionara a su máxima capacidad (ibid.). De la misma manera, otros expertos consideraban bastante eficientes y exitosas algunas compañías del sector público activas en terrenos no industriales, como la Compañía del Canal de Suez o la Compañía de Petróleo (Ayubi 1991: 59). Finalmente, fuentes del propio Gobierno egipcio señalaron que en 1976-1977 las compañías del sector público que habían incurrido en pérdidas (por un valor de 19.3 millones LE) eran 22, mientras que 125 habían producido beneficios por un valor de 168,9 millones LE, y que el valor de la producción del sector público había pasado de 583 millones de LE en 1971 a 786 millones de LE en 1977, y su contribución al PIB del 22% al 26%⁸⁶.

Otros estudios señalados por Ayubi muestran que, aunque la eficiencia de las industrias públicas egipcias se había defendido relativamente bien en los años de carencia de inversiones de capital (1963-1971) gracias al incremento de la productividad de la fuerza de trabajo, tras el comienzo del *infitah*, las principales razones de sus ineficiencias y dificultades habían sido la carencia de inversiones, la de personal cualificado técnico y directivo, y la negligencia en la planificación⁸⁷.

El *infitah* no resolvió el considerado por los expertos principal problema del sector público, el de la financiación (que se orientó en su mayoría hacia el sector de los servicios), mientras que provocó un éxodo de personal cualificado desde dicho sector al sector privado. En 1978 el sector público había perdido el 10,5% de los obreros más cualificados y el 9% de los gestores de alto y medio nivel; y entre 1976 y 1986 el porcentaje de los ingenieros que trabajaba en el sector público pasaría del 35% al 20% (Ayubi 1991: 63; Djoufelkit-Cottenet 2001: 525-526). Pero el *infitah* dañó al sector público por otras vías, como denunció ya en 1977 la propia Federación Egipcia de Industrias (FEI), que agrupaba a los representantes de 500 empresas tanto del sector público como del sector privado. La FEI señaló la competencia desleal que las empresas del *infitah* realizaban al sector público, al gozar de exenciones de impuestos y privilegios de los que aquel no disfrutaba, así como de facilidades para obtener moneda extranjera que el sector público no tenía, y denunció la

⁸⁶ *Al-Ahram*, 16 de mayo de 1978. Citado por Ayubi (1991:60).

⁸⁷ Los estudios citados por Ayubi son: Mark Cooper, "Egyptian State Capitalism in Crisis: Economic Policies and Political Interests 1967-1971", *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 10, nº 4, Noviembre de 1979, pgs 481-516 y Heba A. Handoussa, "Times for Reform: Egypt's Public Sector Industry", en Herbert Thompson (ed.): *Studies in Egyptian Political Economy*, The Cairo Papers in Social Science, vol. 2, monográfico 3 (marzo 1979), págs. 107-122. Citados por Ayubi (1991: 60, 62).

entrada sin tasa de productos manufacturados en el extranjero no solo a través de las zonas francas sino también incluso de un contrabando ampliamente tolerado. A ello se unía que los aranceles pagados por los bienes intermediarios necesarios para producir numerosos productos en la industria local eran más elevados que los que pagaban los productos importados ya finalizados, e incluso que algunos productos producidos localmente pagaban otros impuestos que los importados no pagaban⁸⁸.

En algunos casos, la entrada de capitales extranjeros en las industrias públicas en forma de compañías conjuntas llevaría a la desaparición de aquellas y de la producción local de sus productos, pese a la oposición de sus trabajadores, como sucedió con la empresa estatal de fabricación de cuchillas y maquinas de afeitar tras la adquisición de una participación en ella por Wilkinson. Tras la liquidación de la nueva *joint venture*, el mercado egipcio fue únicamente abastecido mediante cuchillas importadas⁸⁹. En otros casos, el “desembarco” de las compañías extranjeras en el sector público llevaría a la expatriación de muy sustanciosos beneficios, como en el caso de la participación en la Compañía General de Baterías por parte de Chloride Battery Company of England, que llegó a hacerse con el 67% de los beneficios anuales de la empresa egipcia en 1979-80, según denunciaron los trabajadores de esta⁹⁰. Las posibilidades de los trabajadores de oponerse a estos procesos en un contexto en el que las protestas laborales estaban prohibidas y en el que el sindicato vertical era estrechamente controlado por el Gobierno habían sido limitadas además por la ratificación por parte del Consejo de Estado en 1976 de la propuesta del Gobierno de que los representantes de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas pudieran ser designados, y no necesariamente electos, como era prescriptivo anteriormente, lo que abrió la puerta a que dichos representantes fueran efectivamente designados.

4.5 EVOLUCIÓN DEL EMPLEO, LAS CONDICIONES DE VIDA Y LA POBREZA

4.5.1 Empleo y fuga de talentos

Del estudio de la evolución del empleo en Egipto en la década de los 70 podemos extraer varias conclusiones básicas. La primera de ellas es que el Estado siguió siendo el principal generador de empleo, y el principal proveedor si excluimos el sector agrícola.

⁸⁸ Federación de Industrias Egipcias: *Al-Kitab al-sanawi li-`am 1977 (Memoria de 1977)*, El Cairo, 1978, págs. 47-55. Citado por Ayubi (1991: 64).

⁸⁹ *Ruz al-Yusuf* n° 2739, 8 de diciembre de 1980. Citado por Waterbury (1983: 144).

⁹⁰ *Al-Ahram Al-Iqtisadi*, n° 17, 10 de noviembre de 1980. Citado por Waterbury (1983: 144).

Entre 1970 y 1980 los empleados en la Administración del Estado y sus servicios pasaron de 1,2 a 2,13 millones, a los que había que añadir, en 1980, 1,08 millones empleados en el sector público (que creció solo ligeramente), 350.000 miembros de las Fuerzas Armadas y 150.000 profesores. En suma, más de 3,6 millones de trabajadores percibían sus salarios del Estado de un total de 10,6 millones (Waterbury 1983: 195, 243). Además, el empleo en el sector público siguió siendo estable, lo que fue confirmado por la Ley nº 48 de 1978 que establecía como única causa de despido la comisión de una falta grave, y confirmaba el alto de Sadat en la liberalización económica tras las resistencias sociales encontradas.

La segunda conclusión es que la afluencia de capitales propiciadas por el *infitah* y la aparición de importantes nuevas fuentes de renta fueron poco aprovechadas para generar empleo estable y regular, y no lo fueron en particular en el sector privado industrial. De los cerca de 2,8 millones de empleos que existían en el sector privado en 1980, excluyendo el sector agrícola, 900.000 de los cuales habían sido creados en la década anterior, el grueso, casi 2 millones de empleos, se localizaban en el sector financiero, el del comercio y el de los servicios, mientras que menos de 400.000 lo hacían en el sector de la construcción, y cerca de 600.000 en la industria en sentido amplio, incluyendo las manufacturas más artesanales. Entre 1970 y 1980 el número de empleados en empresas industriales de más de 10 trabajadores pasó únicamente de cerca de 175.000 a 230.000 empleados (Fergany 1991: 39).

Una gran parte de los empleos del sector privado en general se ejercían en el llamado “sector informal”, una categoría sobre la que, si bien existe una gran controversia en cuanto a su definición precisa, pretende dar cuenta de las actividades económicas que no entran en los parámetros que, precisamente, permiten hacerse una idea precisa de la cantidad y naturaleza del empleo: frecuente ausencia de registro administrativo adecuado y de cumplimiento con la legislación (fiscal, contable, balances de ingresos, seguridad social...), pequeño tamaño de las unidades económicas, organización de tipo familiar, mano de obra intensiva, no disponibilidad de capital y tecnologías modernas, retribuciones establecidas al margen de los marcos legales retributivos, etc. Cuando se habla del sector informal, en muchas ocasiones se piensa principalmente en los pequeños talleres de manufacturas que pueblan muchos barrios de las ciudades de los países en desarrollo, como los de El Cairo, en los que el trabajo es fundamentalmente de tipo artesano y la maquinaria y utillaje son rudimentarios, los empleados están unidos al empleador por lazos familiares o vecinales, los horarios y salarios son establecidos por cada empleador, la formación se debe al sistema tradicional de aprendizaje, una miríada de trabajadores de otros negocios -igualmente informales- rinden servicios accesorios, y de los que en general no hay registros oficiales de gastos, ingresos o ventas. No obstante, en el sector informal, que no dejaría de adquirir importancia en Egipto desde los 70, se deben incluir todo tipo de

negocios de todos los sectores que respondan en general a las características citadas. Según los datos relativos a 1976 de la propia agencia gubernamental CAPMAS (The Central Agency for Population, Mobilization and Statistics, en su traducción y sus siglas en inglés), en ese año el empleo en el sector privado formal representaba únicamente el 7% por ciento del total (170.181 empleados frente a 2,41 millones), y dentro del sector de las manufacturas dicho empleo formal representaba únicamente el 15%⁹¹, si bien otros estudiosos que han abordado el estado de la cuestión utilizando criterios más restrictivos reducen la cifra de 3 millones de trabajadores informales dada por CAPMAS para 1976 a menos de un tercio, como lo hace Abdel Fadil (876.000 trabajadores), para quien el sector incluía tan solo a

“una gran variedad de trabajadores cuyas actividades van desde la venta al por menor, las actividades de servicios y manufacturas a pequeña escala, los trabajadores en numerosos servicios personales y domésticos (por ejemplo, cocineros, porteadores, limpiadores, etc.) y una multitud de trabajos ocasionales, como aparcar coches, vender periódicos y refrescos, recolectar botellas vacías, etc.”⁹².

La tercera conclusión básica de la observación de la evolución del empleo en los 70 es que la agricultura, si bien conservó el número absoluto de poco más de 4 millones de empleados, retrocedió considerablemente en su aportación al empleo total, pasando de situarse ligeramente por encima del 50% en 1970 a en torno al 42% en 1980 (Fergany 1991: 39; Richards 1991: 67).

Finalmente, el crecimiento del empleo en la década de los 70 fue insuficiente para afrontar el aumento de la demanda de él causado por el elevado incremento de la población, que pasó de ser de en torno a 32 millones en 1970 a cerca de 41 en 1980. El desempleo pasó del 5% al 10% de la población activa, y se cebó en particular en las zonas rurales, y ello a pesar de que la emigración al extranjero, en particular a los países petrolíferos, constituyó un aliviadero para el desempleo (y las cifras que lo reflejaban) y el deterioro del nivel de vida. No obstante, a pesar de que muchos campesinos también fueron a buscar trabajo al exterior, la emigración al extranjero no acabó con el éxodo del campo a las ciudades. Por otro lado, si dicha emigración constituía una “solución” personal y un beneficio para los ingresos del país, implicaba la pérdida de mano de obra cualificada, a pesar de que muchos emigrantes fueran empleados en los servicios, e incluso en la

⁹¹ CAPMAS 1978: *Population Census of 1976, detailed results* y CAPMAS 1980: *Employment, Wages and Hours of Work, 1976*. Citados por Rizk (1991: 171-172).

⁹² M. Abdel Fadil: *Informal sector in Egypt*, technical paper n° 1 of the ILO/UNDP Comprehensive Employment Strategy Mission to Egypt, 1980 (Ginebra, ILO, 1983), pág. 6. Citado por Rizk (1991: 171-172).

agricultura (en particular en Irak). Entre 1970 y 1975 un 17% de los profesores universitarios de ingenierías y un 15% de los de ciencias de las tres mayores universidades de Egipto se encontraban trabajando en el extranjero, y en 1976-1977 trabajaban en los países árabes 28.375 profesores de educación primaria⁹³. A diferencia de los que trabajaban en los países industrializados, que en su mayoría eran personal muy cualificado, los desplazados a los países árabes eran en su mayor parte emigrantes temporales y de formación media-baja, con lo que las pérdidas por el coste económico invertido en su formación eran reducidas y compensadas por las rentas que aportaban. Sin embargo, su retorno a Egipto no estaba exento de provocar insatisfacción personal y problemas sociales o políticos, al disminuir drásticamente su nivel de vida una vez agotados sus ahorros (Ayubi 1991: 178-179).

4.5.2 Condiciones de vida, pobreza y desigualdades

La evolución de las condiciones de vida de la población en general siguió a lo largo de los 70, al igual que la situación macroeconómica de Egipto, dos tendencias bien diferenciadas cuyo punto de inflexión se situó a mediados de la década. Hasta este momento, las condiciones de vida en general se deterioraron y la pobreza se incrementó, para posteriormente conocer ambas una relativa mejora.

Entre 1969-70 y 1976 el PIB egipcio se incrementó una media cercana al 3% anual, lo que a causa del crecimiento poblacional se tradujo en un incremento del PIB per cápita en torno al 1% (Waterbury 1983: 210). La congelación de los salarios y la elevada inflación hicieron que incluso la mayor parte de los otrora privilegiados empleados del Estado residentes en medio urbano se acercaran, excepto los muchos que recurrieron a un segundo empleo, al umbral de la pobreza. En el medio rural, la situación era aun peor: en 1975 la pobreza había crecido entre el 44 y el 60%, según las diversas estimaciones, mientras que en 1965 se había situado entre el 24 y el 27% (Ireton 2011: 472; Waterbury 1983: 249).

Sin embargo, el *boom* petrolero, la afluencia de capitales y las transferencias de los trabajadores extranjeros salvaron una situación que habría sido insostenible económica, social y políticamente. Desde 1976 hasta 1979 el PIB egipcio se incrementó a un ritmo del 7,1% anual, elevando el incremento del PIB per cápita al 3,6% en 1979. Tras haber decidido “dejar en manos del mercado” y del FMI la solución de los problemas

⁹³ El dato sobre los profesores de educación primaria procede de Suzanne Messiha, *Export of Egyptian School Teachers*, monográfico 4 (abril de 1980) de *The Cairo Papers in Social Science*, pág. 3. Citado por Ayubi (1991: 183).

económicos y sociales, y retirar gran parte de las subvenciones a los productos de primera necesidad, el régimen egipcio reaccionó a las protestas de enero de 1977 contra dicha medida en el sentido exactamente contrario, utilizando los nuevos recursos del Estado para desactivar una situación social que se había demostrado explosiva, incrementando levemente los salarios de los trabajadores del Estado y, sobre todo, multiplicando las sumas dedicadas a subvencionar los productos y servicios de primera necesidad (incluyendo créditos para la vivienda y para insumos agrícolas), sumas que entre 1976 y 1980 aumentaron más de un 300%, pasando a constituir el 58% del gasto corriente del Estado. Esto, unido a los beneficios directos de la mejora macroeconómica de la economía egipcia, hizo que las condiciones de vida de la población en general mejoraran, y que disminuyeran notablemente los índices de pobreza, de nuevo en particular en el medio rural, donde aquella se situó entre el 18 y el 23% en la segunda década de los 70, en gran parte gracias a las transferencias de los trabajadores emigrados fuera del país (Ireton 2011: 472; Waterbury 1983: 214-216).

No obstante, la considerable mejoría de la economía egipcia de la segunda mitad de los 70 fue artificial, relativa y breve, y sus beneficios fueron desigualmente repartidos y generaron graves desequilibrios. Según Waterbury (1983: 212):

“la lógica del *infītah* era animar a las clases medias y altas a invertir y especular permitiendo que la inflación (entre el 20 y el 30% anual desde 1975) hiciera descender los salarios reales de la clase media-baja y de los pobres. Se suponía que los más acomodados debían hacerse más ricos, ahorrar e invertir; de otra manera, el *infītah* no sería un vehículo para el crecimiento. Así, en la medida en que el incremento de los salarios era menor que el del PIB, la riqueza se redistribuía por arriba”.

Los datos de la proporción de los salarios respecto al PIB avalan la interpretación de Waterbury. Desde finales de los años 50 hasta principios de los 1970, dicha proporción había pasado de ser del 45% al 50%; mientras que en 1975 había descendido al 44%, en 1978 al 40%, y en 1979 al 36%, a pesar de que entre 1976 y 1979 el PIB había crecido a un ritmo del 7,1% anual⁹⁴.

La mayor parte de los trabajadores del Estado, sin tener en cuenta su posible recurso a un segundo empleo o a la corrupción, no recuperaron ni de lejos el nivel de vida del que habían disfrutado en la primera mitad de los 60 en virtud de sus meros salarios; por

⁹⁴ Waterbury (1983: 212) utiliza para los años 1975-1979 los datos de la Unidad de Análisis Económico del Ministerio de Economía (sin dar la cita completa) y los de C. Issawy 1982: “Interconnections between Income Distribution and Economic Growth in the Context of Egypt’s Economic Development”, en G. Abdel Khaleq y R. Tignor (eds.) 1982: *The Political Economy of Income Distribution in Egypt*, Nueva York: Holmes & Meier.

el contrario, sus condiciones de vida se deterioraron. En el sector privado, quienes desempeñaron actividades relacionadas con las finanzas, el comercio exterior, el turismo o la construcción desde posiciones de responsabilidad o propiedad de su negocio, acumularon sin duda sustanciales ganancias, que repercutirían también en algunos de los trabajadores de posiciones intermedias; mientras que en el sector industrial los principales beneficiados serían los directivos y los trabajadores cualificados y altamente cualificados. Por el contrario, los trabajadores asalariados corrientes del sector privado percibirían salarios levemente inferiores a los del sector público, sin contar con la estabilidad y otros beneficios suplementarios que proporcionaba aquel.

La manifestación más visible del incremento de la pauperización de la sociedad egipcia en general en los años 70 la constituyó el espectacular crecimiento de las barriadas urbanas irregulares, no planificadas e incluso ilegales, conocidas en Egipto como *achwaiyyat* (عشوائيات, “espontáneas”, “irregulares” no planificadas”), sobre todo en la ciudad de El Cairo. Dichas barriadas están formadas por viviendas construidas en su mayor parte en terrenos no registrados y en edificios no autorizados, en las que en principio faltaban, y en muchas de las cuales faltan aún hoy, la mayor parte de los servicios municipales y sociales. El 84% de las viviendas construidas en El Cairo entre 1970 y 1981 fueron viviendas “irregulares”. Las más conocidas de tales barriadas de El Cairo se encuentran en los entornos de Bulaq Dakrur, Imbaba, Matariyya, Chubra al-Jeima, Helwán y Maadi, y conocieron incrementos de población de entre el 10 y el 20% anual en los años 70 y 80. Todavía a mediados de los 80 entre el 35 y el 43% de los edificios no tenían agua corriente, entre el 29 y el 44% no estaban conectados a la red de alcantarillado y entre el 10 y el 12% no estaban conectados a la red eléctrica. La densidad de población de una barriada como Bulaq Dakrur en dicha época era, entre los residentes antiguos, cairotas de origen, de 4,4 personas por habitación, y entre los inmigrantes de 5,6 personas por habitación⁹⁵.

A pesar de las exiguas condiciones de vida de las barriadas “espontáneas” o no planificadas, es importante no confundirlas con las barriadas de chabolas, aunque a menudo estas se encontraran próximas a aquellas. Las chabolas acogían al lumpen proletariado o incluso sectores del subproletariado que desempeñaban las ocupaciones peor remuneradas en la sociedad, y que en numerosos casos participaban en actividades delictivas. Por el contrario, las barriadas espontáneas acogían al subproletariado, pero también a funcionarios menores, oficinistas, profesores y clérigos, policías y soldados, mecánicos, electricistas y técnicos, conductores, vendedores de pequeños comercios y

⁹⁵ Musailihi, Fathi: *Tatawwur al-asima al misriyya*, El Cairo: Dar al-Madina al-Munawwara, 1988, págs. 305-306, 385-387, 404-405, 407-409. Citado por Ayubi (1996: 236-237).

trabajadores cualificados; es decir, a una clase media-baja pauperizada, en la que destacaba sobremanera el elevado porcentaje de inmigrantes (67,2%), en particular procedentes del medio rural y dentro de él del Alto Egipto, que en dicho medio sería el mayor exponente del abandono de las políticas gubernamentales y la pobreza (Ayubi 1996: 237-239).

La variada mezcla de los habitantes de las barriadas espontáneas, que no dejarían de crecer a lo largo de los años 80 y 90, todos ellos desclasados, pauperizados o con escasas perspectivas de ascenso social, sería fuente, además de conflictos de todo tipo, del crecimiento de la tendencia islamista radical en el medio urbano, como veremos más adelante en el capítulo II 6.5.

4.6 CORRUPCIÓN EXTENDIDA Y CONSENTIDA

La corrupción de los funcionarios públicos, que había hecho su aparición en la época de Náser, creció de forma destacada durante la de Sadat. Ayubi distingue entre la “pequeña” y la “gran corrupción”, señalando sus diversas variedades: sobornos, nepotismos, favoritismos, falsificaciones, malversaciones, contrabando, intercambio ilegal de favores, concesión “desviada” de permisos y licencias... A ello se unían prácticas no ilegales pero de dudosa ética, como el incremento por parte de los altos funcionarios de sus salarios base multiplicando innecesariamente las comisiones y reuniones a las que debían asistir, lo que les procuraba un ingreso en dietas superiores a aquellos. Según el mismo autor, la “creencia popular” atribuía, incluso, la escasez de ciertos artículos en el mercado a la colusión entre ciertos importadores y funcionarios, que contribuía a crear mercados negros o situaciones semi-monopolísticas en beneficio de ciertos comerciantes. Ayubi señala así mismo un curioso fenómeno que un diputado del Parlamento puso en relación con la corrupción: en 1978 más del 8% de todos los incendios que se produjeron en El Cairo tuvo lugar en dependencias del Gobierno y del sector público, y la mayoría de ellos tuvieron lugar entre noviembre y marzo, es decir, en el periodo en el que se hacía inventario y se preparaban los presupuestos anuales. El objetivo de estos incendios sería, según el diputado, borrar las trazas de los robos y los desfalcos⁹⁶ (Ayubi 1991: 65-66; Gobe 1999: 65-66).

El estancamiento de los salarios de los funcionarios, en una situación de inflación disparada, favoreció el desarrollo de la corrupción. En 1975, 1.2 millones de funcionarios ganaban al mes 14 libras egipcias (25 dólares de la época) o menos, lo que hacía que la mayoría de ellos no pudieran vivir solo de su salario público o, dicho de otra manera, que

⁹⁶ La información relativa a la denuncia del diputado procede de *Al-Ahram*, 21 de marzo de 1978. Citado por Ayubi (1991: 66).

solo con él se situarían cerca del umbral de la pobreza. En ese mismo año, 750 altos funcionarios desempeñaban al menos dos trabajos, frecuentemente ambos en el sector público (Waterbury 1983: 249, 347-348). Sin embargo, los motivos puramente económicos no eran la única razón de la corrupción. A una encuesta realizada en 1976 entre trabajadores del Gobierno, del sector público y de las cooperativas por el Centro Nacional de Investigaciones Sociales y Criminales egipcio tan solo un 6,3% respondieron no tener constancia personal de la existencia de casos de corrupción, y el 59,3% de los que sí tenían constancia la atribuía en parte al “incremento del coste de la vida” y el 15,3% a “los bajos salarios”. Tan solo un 8,5% relacionaba la extensión de la corrupción con la escasez de controles administrativos. No obstante, un 58% sí lo hacía con la sensación de “relajación” (moral) en la sociedad, y un 13,8% con la falta de ética o valores morales⁹⁷. Esta importancia atribuida a los factores morales, y en particular a su dimensión social -que casi aparece como una justificación de la individual-, es muy significativa. A pesar de que muchos autores han señalado, probablemente con razón, el escaso arraigo de una “cultura cívica” -en tanto que relacionada con el Estado- en numerosos medios sociales, y la han atribuido a la permanencia de formaciones, relaciones y concepciones sociales fundadas en el parentesco, en las solidaridades locales, o en otras solidaridades primarias basadas en los grupos generacionales (دفعه) o socio-funcionales (شلة), la alusión a la “relajación” denota que dicha permanencia había perdido terreno en el pasado en favor de una ética que consideraba lo público-estatal como algo que debía ser respetado, pero que aquella lo estaba ganando nuevamente (Ayubi 1991: 70-71).

Por otro lado, pese a que en la encuesta que acabamos de citar la ausencia de controles administrativos no era destacada como una causa principal de la corrupción, Ayubi sí la señala como tal. Según el autor, pese a que desde mediados de los 70 diversas instancias del Estado, como los Servicios de Investigaciones del Estado (servicios secretos), el Fiscal General Socialista, la Agencia Central de Auditorías y la Autoridad de Control Administrativo, comenzaron a revelar “incontables casos” de fraude y conductas irregulares de los funcionarios públicos que podrían constituir delitos serios, la respuesta más frecuente a estos casos era trasladar a los implicados (en ocasiones a un puesto mejor) sin enjuiciarlos ni castigarlos, y mucho más en los casos de los altos cargos. Así, la Agencia de Ganancias Ilícitas, creada en 1975, que examinó cada año en la segunda mitad de los 70 los expedientes de 400.000 funcionarios, en 1978 tan solo llevó 66 casos a los tribunales, mientras que la Autoridad de Control Administrativo, que había “destapado” numerosos casos de corrupción, fue desmantelada en 1980 (Ayubi 1991: 66).

⁹⁷ Ibrahim Abu-l-Gar “Inhiraf al-wazifa al-`amma fi al-mujtama`al-misri”, en National Center for Social and Criminological Research (NCSCR), *Symposium on Deviance in the Public Service*, Cairo, 3-5 de marzo de 1977, pág. 15 y ss. Citado por Ayubi (1991: 67, 70)

4.6.1 La “gran corrupción” y sus relaciones con el régimen

En numerosas ocasiones, altas personalidades políticas se vieron implicadas en casos de corrupción relacionados con contratos con empresas extranjeras. Ayubi (1991: 66-67) cita, “entre otros muchos casos”, el de un vicepresidente del Gobierno, el del presidente del Consejo Supremo de Asuntos Islámicos, el de un ministro de Aviación Civil, el de un ministro de Electricidad, el del presidente de la compañía aérea estatal Egyptair y el de la compañía estatal de aguas. Por su parte, Heikal (هيكل 2006: 329-352) no dudó en poner el título de "الزهب المنظم" (“El saqueo organizado”) al capítulo dedicado a la corrupción de su obra *خريف الغضب (Otoño de Furia)*⁹⁸, señalando algunos de los casos ya citados y extendiéndose en otros de los más grandes y conocidos que de una u otra manera estaban relacionados con el presidente Sadat y con uno de sus principales hombres de confianza, Osmán Ahmed Osmán.

El primero de estos casos era el de Rachad Osmán, que comenzó a trabajar como estibador en el puerto de Alejandría en 1970 por 30 piastras diarias y que cuando comenzó a ser investigado por el Fiscal General Socialista en 1981 disponía, según las estimaciones de los investigadores, de 300 millones de LE. En su despegue “profesional”, Rachad Osmán consiguió hacerse con todos los contratos de carga del puerto, para convertirse después también en uno de los principales importadores de madera y, según revelarían las investigaciones, de hachís, que introducía entre la madera. Antes de caer en desgracia, R. Osmán se convirtió en uno de los principales dirigentes del partido gubernamental (PND) en Alejandría, contando con la complicidad de algunos cargos policiales e incluso de algunos ministros, y con la amistad de Osmán Ahmad Osmán -de quien hablaremos a continuación-, ministro, pariente de Sadat, y uno de los principales hombres de confianza de este. Osmán Ahmad Osmán presentó a Sadat a Rachad Osmán, quien recibió el encargo del presidente, según relataría aquel en diversas ocasiones, de “cuidar de Alejandría”⁹⁹. Una de las maneras mediante las cuales R. Osmán cumplió a su manera el encargo presidencial fue apoderándose de cerca de 900 *feddan*es de tierras del Estado en el entorno de la ciudad, una práctica muy común en aquellos tiempos que, según estimaciones de la revista *Al-Musawwar*, llevó a la privatización ilegal del 53,5% de las tierras estatales de

⁹⁸ Como hemos señalado, existe una traducción al castellano de esta obra (Mohamed Heikal: *Otoño de furia. El asesinato de Sadat*, Ed. Argos Vergara, Barcelona, 1983). Por ello, hemos utilizado las traducciones al castellano elegidas en esta obra para el libro y el capítulo mencionado, aunque como también hemos apuntado, la traducción de غضب por “furia” nos parece poco adecuada, siendo más ajustada en nuestra opinión la de “cólera”.

⁹⁹ "رشاد عثمان بعد ٣٠ عاما من الصمت: مبارك ظلمني ٣٠ عاما والسياسي بطل" (“Rachad Osmán tras 30 años de silencio: Mubarak me trató injustamente. Al-Sisi es un héroe”). Entrevista con Rachad Osmán, diario *المواجهة* (online), 26 de mayo de 2014 (<http://mowajha.com/news18507.html>). Consulta del 2 de febrero de 2015).

Alejandro¹⁰⁰. Según Heikal, R. Osmán no fue más que un chivo expiatorio destinado por Hosni Mubarak a calmar la tensa situación política y social generada tras la muerte de Sadat¹⁰¹, pero su caso desbordó tal objetivo al insistir R. Osmán durante su proceso en acusar de corrupción a Esmat al-Sadat, hermano del presidente, y a Osmán Ahmad Osmán, a quien relacionó con la empresa Arik (هيكل 2006: 339-342).

El delirante caso de la empresa Arik fue destapado cuando los servicios de Aduanas descubrieron, tras el asesinato de Sadat en 1981, una partida de pollos congelados cuya fecha de caducidad era de 1974. Según revelaron las investigaciones posteriores, dichos pollos estaban destinados a ser distribuidos en una red de más de 150 kioscos construidos en las calles de Egipto sin autorización legal. Dicha red había vendido ya 15 toneladas (7 millones de pollos) semejantes. La empresa importadora era la empresa Arik, un grupo de empresas cuyo presidente era Taufiq Abdel Hai. Este había conocido a Osmán Ahmad Osmán en sus días de estudiante a principios de los 70, cuando aquel lo contrató para crear un periódico estudiantil que defendiera al régimen de Sadat. Posteriormente Abdel Hay trabajó a las órdenes de O. A. Osmán en su etapa de ministro de la Vivienda entre 1973-1976, y después creó, animado por su mentor, la empresa Arik de Publicidad, que luego diversificó sus actividades. Cuando la Fiscalía ordenó la detención de Abdel Hay a finales de 1981, este huyó a Atenas tras ser prevenido por alguien antes de que se firmara la orden de detención. Las investigaciones subsiguientes revelaron que Abdel-Hay había conseguido sacar del país, justo antes de su detención, 35 millones de LE, y que había obtenido créditos millonarios de diversos bancos sin que estos obtuvieran de él las menores garantías (هيكل 2006: 342-346)

Finalmente, el caso más conocido internacionalmente fue el del propio hermano de Anwar al-Sadat, Esmat. Repartidor de periódicos en la época de Náser, durante el mandato de su hermano no se le conoció ningún oficio hasta que comenzó a manifestarse su elevado nivel de vida. En las altas esferas del régimen la naturaleza de sus negocios debía ser conocida, pero la Fiscalía no tomó ninguna medida al respecto hasta que, tras la muerte de su hermano, Taufiq Abdel Hai y Rachad Osmán lo mencionaron con tanta frecuencia en sus declaraciones que fue imposible ignorarlo. Cuando comenzaron las investigaciones, en octubre de 1982, se supo que Esmat al-Sadat poseía una gran variedad de empresas y numerosos edificios y apartamentos, y que había desarrollado todos sus negocios

¹⁰⁰ Heikal cita el reportaje de dicha revista titulado “El expolio de las tierras del Estado” sin dar su referencia (2006: 342).

¹⁰¹ Según R. Osmán, en declaraciones realizadas tras el abandono forzado de la presidencia de la República por parte de Hosni Mubarak, tras su salida de prisión fue obligado por aquel a permanecer en silencio y alejado de la vida pública, prohibiéndosele incluso presentarse a las elecciones legislativas de 2005. Véase la entrevista citada en la nota 99: “Rachad Osmán tras 30 años de silencio...”.

utilizando su condición de hermano del presidente para obtener contratos, licencias y autorizaciones (هيكل 2006: 346-350).

4.7 LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE PODER DEL RÉGIMEN DE SADAT

Como hemos apuntado, las limitadas aperturas económica y política que acometió Sadat no se debieron a la existencia de una gran presión interior, ni en términos cuantitativos ni cualitativos, para que las emprendiera. La apertura económica fue en gran parte una política de Estado decidida casi exclusivamente por el presidente, aconsejado sin duda por algunos de sus hombres de confianza, probablemente con el objetivo de mejorar la situación financiera del país y ganarse las simpatías del mundo capitalista, y el apoyo de ciertos sectores sociales egipcios que entonces no contaban con un peso político ni económico determinante en el país. La apertura política, además de constituir un acompañamiento teórica y formalmente coherente con los cambios económicos, buscaba aliviar las tensiones políticas mediante el consentimiento de mayores libertades y pluralismo sobre todo de expresión, y obtener legitimidad y apoyo de los sectores de la burguesía y las clases medias sensibles a las ideas liberales, en un contexto en el que el presidente Sadat deseaba distanciarse de algunas de las principales políticas del régimen de Náser.

No obstante, Sadat congeló ambas aperturas cuando advirtió no solo los costes políticos que podían tener, sino también que el incremento de los recursos rentistas le permitía mantener las políticas de empleo y sociales básicas del régimen naserista, conteniendo con ello el descontento de los más desfavorecidos y contentando a los sectores socioeconómicos cuyo apoyo le interesaba más conservar, que se encontraban satisfechos con el *statu quo* y no deseaban avanzar ni en la liberalización económica ni en la liberalización política. Uno de estos sectores lo conformaba una parte importante del aparato del Estado (de la elite y las subelites militar, policial, burocrática y del sector público), y el otro la burguesía reforzada cuantitativa y cualitativamente por el *infitah*. Como señala Hinnebusch en su destacable estudio sobre las elites del régimen de Sadat, si bien la burguesía podría haber deseado una mayor liberalización política y una mayor integración en el sistema capitalista mundial, desde un punto de vista económico había encontrado vías más que suficientes para prosperar, y en cuanto a la política temía que la apertura pudiera llevar a la imposición de posturas igualitarias y de mayor control estatal, esto es, a un retorno a épocas anteriores (Hinnebusch 1981: 443-446).

Como indica así mismo el autor citado, casi una década después de la muerte de Náser, el gran Estado autoritario forjado por este permanecía intacto, aunque fuera cada vez más utilizado para fines distintos de aquellos para los que fue construido y cada vez

fuera más sensible a la presión de fuerzas del exterior y el interior, fuerzas que sin embargo lograba contener sin demasiadas dificultades para evitar transformaciones estructurales mayores. Los poderes presidenciales seguían siendo tan grandes como en la época naserista: ni el poder legislativo ni el judicial hacían sombra o limitaban el del presidente, que seguía siendo “la única fuente de las innovaciones en las políticas seguidas o en la ideología”, y no aceptaba ningún derecho unilateral de otros a modificar dichas políticas o criticarlas abiertamente. Es más, mientras que el poder de decisión seguía estando igual de concentrado en la presidencia que en época de Náser, Sadat, a diferencia de aquel, no debía consultar a nadie para tomarla: no tenía que rendir cuentas, siquiera formalmente, a nada parecido a los Oficiales Libres ni al Consejo de Mando de la Revolución, ni contentar a ningún centro de poder. El presidente solo consultaba a un reducido grupo de personas de su confianza, en virtud de esta y no de los cargos que pudieran desempeñar, mientras que elegía y sustituía a los cargos institucionales superiores a voluntad con el fin de evitar que se consolidara cualquier núcleo de poder alternativo. Hasta tal punto fue así que durante su presidencia nombró tres veces más ministros de los que nombró Náser, aunque su mandato tuviera una duración mucho menor que el de este.

Así, el régimen de Sadat, en su componente humano, siguió estando constituido esencialmente, como veremos a continuación, por burócratas, tecnócratas, policías y militares, aunque se incorporaran a él profesionales y hombres de negocios que no habían hecho carrera en el aparato del Estado, y también numerosos notables rurales por la vía del Parlamento y el partido gobernante. Tan solo el Ejército perdió peso numérico en los puestos principales del Gobierno y la Administración, si bien no hay que olvidar que el primer vicepresidente estable, Hosni Mubarak (1975-1981), fue un militar.

A pesar de lo dicho sobre el autoritarismo y el frecuente remplazo de las elites, un rasgo diferencial del mandato de Sadat respecto al de Náser lo constituyó la relajación del control de la Presidencia sobre aquellas, que según Hinnebusch no se debió a convicciones liberales de Sadat, sino a un modo particular de gestionar su apoyo y consentimiento que cabe calificar de “patrimonial” o “clientelista”:

“Náser quería transformar Egipto, aunque ello requiriera llevarse por delante los intereses creados de las elites, mientras que Sadat aceptó el *status quo* y, con él, el derecho de las elites a promocionarse y prosperar, mientras ello no interfiriera en sus propias prerrogativas. Sadat era consciente del resentimiento en los círculos de las elites hacia el carácter intervencionista y dominante de Náser. Y parte del apoyo recibido de ellas se debió a que mantuvo «un perfil bajo» tanto en el Estado como en la sociedad (...) Sadat recompensó a las elites con políticas que respondían a sus intereses e ideales -desde el *infitah* y la relajación política hasta su relativa tolerancia de la corrupción. El *establishment* egipcio debía saber que no podía esperar mejor tratamiento de ningún otro dirigente” (Hinnebusch 1981: 445).

5. RÉGIMEN, ESTADO Y SOCIEDAD

5.1 LAS ELITES DEL RÉGIMEN DE SADAT

5.1.1 Los hombres de confianza de Sadat: amalgama entre la burocracia, la burguesía y la familia

Para Hinnebusch, el círculo de poder más estrecho e invariable que rodeó a Sadat estuvo compuesto por tan solo cuatro hombres: Osmán Ahmad Osmán, Sayyed Marei, Mahmud Abu Wafiyya y Hosni Mubarak, éste último incorporado a dicho círculo únicamente en 1975, al menos institucional y públicamente. Los tres primeros estaban ligados a la familia de Sadat por lazos de matrimonio y pertenecían originalmente a la burguesía industrial (Osmán) o agrícola (Marei, Abu Wafiyya).

Marei, como ya hemos visto abundantemente, había ocupado importantes puestos bajo el régimen naserista en cargos relacionados con la agricultura, a pesar de ser de una familia de terratenientes. Bajo el mandato de Sadat, con una de cuyas hijas casó a uno de sus hijos, fue de nuevo ministro de Agricultura, Secretario General de la USA y presidente del Parlamento (1974-1978), aportando siempre su extensa red clientelar entre la burguesía agraria, y siendo uno de los principales impulsores de la política de *infitah*, y uno de los más valiosos consejeros de Sadat.

Abu Wafiyya no se había distinguido públicamente antes del mandato de Sadat, pero su relación personal con él, del que era cuñado, le granjeó su confianza, y recibió el encargo de desempeñar ciertas tareas fundamentales para el presidente, como el control de los debates para la reforma de la USA, el control del Parlamento, o el del Partido Socialista del Trabajo.

En cuanto a Hosni Mubarak, puede que Sadat lo atrajera a su entorno simplemente por su aureola de héroe de la guerra de 1973, en la que dirigió a la Fuerza Aérea Egipcia en su exitosa intervención, o puede que se ganara la confianza del presidente por otras razones, pero lo cierto es que contó de manera absoluta con aquella a partir de 1975, cuando fue nombrado vicepresidente de la República, para posteriormente encargarse de la organización del partido gobernante y de la supervisión de los servicios secretos. Mubarak no solo fue el único vicepresidente de Sadat que contó con un poder efectivo y sostenido,

sino que fue también el único alto mando militar del que Sadat no se desembarazó tras un breve periodo de tiempo.

Y para el final hemos dejado a Osmán Ahmad Osmán, a quien Hinnebusch -entre muchos otros- considera el segundo hombre del régimen de Sadat, y cuya carrera política y evolución profesional y económica constituyen un epítome de la evolución del poder político durante el *infithah*.

Como ya hemos apuntado, O. A. Osmán fundó en 1955 la empresa de construcción que sería más conocida por el nombre de المقاولون العرب (Arab Contractors), nombre adoptado tras la nacionalización parcial de la empresa en 1961, que sería total en 1964. Antes de su nacionalización, la compañía había crecido al calor de su participación en las mayores obras públicas estatales, como la construcción de la presa de Asuán. Tras ella, se convertiría progresivamente en la principal empresa de construcción de Oriente Medio y sus alrededores, en particular durante la época de Sadat, y diversificaría sus actividades y las extendería por África y Asia (hoy cuenta con más de 70.000 trabajadores)¹⁰². Siguiendo su política habitual con las empresas nacionalizadas, el régimen de Náser permitió a Osmán continuar al frente de la compañía, y Sadat hizo lo mismo tras asumir la Presidencia de la República. Si bien Sadat conocía a Osmán desde muchos años antes, lo estrecho de sus relaciones se manifestó, en lo político, cuando Osmán fue nombrado ministro de Obras Públicas y de la Vivienda entre 1973 y 1976, y en lo personal cuando en 1977 uno de sus hijos se casó con una de las hijas de Sadat. Posteriormente, Osmán sería secretario general del partido gobernante en Ismailiyya (1978), presidente del Sindicato de Ingenieros (1979), y diputado en el Parlamento desde 1979 hasta 1990, cargos que compatibilizaría con su condición de hombre más rico de Egipto. Pese al aparente declive en la categoría de los cargos políticos ocupados por Osmán, su condición de hombre fuerte del régimen era bien conocida por los egipcios. Heikal lo caracterizó como “un Estado dentro del Estado, e incluso a veces un Estado por encima del Estado”, y acudió a la formulación de la calle egipcia en forma -como no podía ser de otra manera- de chiste para reconocer su potencia: “Un profesor pregunta a sus alumnos: «¿Quién fundó el Imperio Otomano?». Y el alumno responde con la celeridad del rayo: « Osmán Ahmad Osmán, por supuesto, señor» [Osmán es el epónimo de “otomano”] (هيكل 2006: 335).

Con el paso del tiempo se conocería la decisiva intervención de Osmán en muchas decisiones políticas de Sadat, como el estímulo a las corrientes islamistas para que volvieran a la actividad política. De la misma manera, su nombre sería relacionado, como hemos señalado antes, con numerosos casos de corrupción. Pero, por las razones que fuera

¹⁰² Según la página web de la compañía *Arab Contractors*: <http://goo.gl/SDzWzu>. Consulta del 15 de abril de 2015.

-entre las que hay que valorar sobremanera su influencia política-, nunca sería inquietado por la justicia egipcia, ni siquiera muchos años después de la muerte de Sadat. No obstante, sus actividades legales pueden darnos una idea acerca del funcionamiento del poder político y económico en la época de Sadat.

Si bien la empresa madre Arab Contractors pertenecía desde 1964 al sector público, desde los años 70 participó en un gran número de empresas privadas propiedad de la familia de Osmán. De esta manera, era frecuente la derivación de contratos, fondos y contactos públicos hacia las empresas familiares. Pero lo más significativo es que la familia también dominaba la empresa pública matriz sin el menor rebozo: en 1980 su consejo de administración incluía a diez parientes de Osmán (hermanos, yernos y sobrinos). En ese mismo año, el montante de los proyectos atribuidos a la empresa alcanzó los 3.700 millones de LE, habiendo sido obtenidos dichos proyectos sin concurso público, por concesiones discrecionales de las autoridades, y luego gran parte de ellos incurrieron en sobrecostos desmesurados (هيكل 2006: 336-337).

5.1.2 Las elites superiores y medias: disminución de los militares y preeminencia de la carrera burocrática

El reclutamiento de las elites dirigentes superiores y medias durante la época de Sadat varió ligeramente, y sobre todo se diversificó, pero no dejó de realizarse principalmente en el aparato del Estado. Al margen de las cuatro personas de confianza de Sadat que hemos citado, la elite superior del régimen la formaban, según la clasificación de Hinnebusch (1981: 447), los primeros ministros, los responsables de los principales ministerios (Economía, Finanzas, Interior y Asuntos Exteriores), los más altos mandos militares (ministro de Defensa y Jefe del Estado Mayor) y dirigentes del partido gubernamental, y los consejeros presidenciales. Por debajo de estas elites superiores se encontraban las elites intermedias, formadas por el resto de los ministros y los gobernadores provinciales (cargo similar al de los gobernadores civiles en España en la época de Franco, y que por ende eran los principales representantes del poder ejecutivo -presidencial- en las provincias).

En cuanto a la procedencia de las elites superiores, el estudio de los orígenes profesionales de los ministros de Sadat realizado por el autor citado muestra un notable descenso de los de origen militar (de un 38,1% en el último Gobierno “heredado” de Násir, al 17% entre 1971-1974, y al 7,6% entre 1974-1981). Por lo demás, se observa un incremento de los procedentes de los medios académicos (del 21,4 al 29%), de los formados en derecho (del 9,5 en 1970 al 14,2% en 1981), de los hombres del sector de los negocios (del 2,4 al 7,8%) y, sobre todo, de los ingenieros (del 12 al 27,3%). Por el

contrario, el número de “meros burócratas” (de formación) descendió entre ambos periodos del 9,5 al 5,2% (Hinnebusch 1981: 443). No obstante, al atender al “sector” (público/privado) desde el que los ministros habían sido reclutados, descubrimos que el 65,4% (y entre ellos la mayor parte de los ingenieros y la mitad de los académicos, pero también abogados e incluso hombres de negocios), procedían del aparato del Estado.

La disminución del peso político de los altos mandos militares en los asuntos políticos no solo se visibilizó en los puestos ministeriales. Durante su mandato, Sadat se desembarazó de al menos cuatro de los principales jefes militares que se habían enfrentado a él o habían criticado sus políticas: en 1971 destituyó al general Fawzi, jefe del Estado Mayor favorable a Sabri y su facción, que fue además encarcelado; en 1972 y 1973 cesó a los homólogos de Fawzi, generales Sadiq (arrestado) y Chazli (exiliado), al primero por criticar la permanencia de los asesores militares soviéticos y al segundo por denunciar la interrupción de la ofensiva en la Guerra de Octubre; y en 1978 apartó del Ministerio de Defensa, según todos los indicios por su desacuerdo con los Acuerdos de Paz con Israel, al general Gamasi, que posteriormente fue “jubilado” forzosamente cuando todavía era jefe de Estado Mayor. Finalmente, en la primavera de 1981, el ministro de Defensa, el general Badawi, falleció con una docena de altos oficiales al estrellarse el avión en el que viajaba, incidente que, como todos los de este tipo en este tipo de regímenes, despertó suspicacias (Waterbury 1983: 270, 275-276).

No obstante, a pesar de la disminución del número de militares en puestos ejecutivos, el nombramiento de Hosni Mubarak como vicepresidente de la República en 1975, y su asunción del control de los servicios de inteligencia y de la organización en la sombra del partido gubernamental, permitió que el estamento militar continuara estando representado en las más altas esferas del poder político.

5.1.3 La subelite: correa de transmisión del Estado corporativo y enlace con el “segundo estrato”

Si bien los miembros de la subelite no acumulaban un gran poder personal, ni constituían un colectivo único ni mucho menos cohesionado, formaban las articulaciones de la estructura de poder del régimen y, al mismo tiempo, del aparato de un Estado que seguía siendo en gran medida corporatista. Ellos eran quienes conectaban a las elites superiores con la población en general, y en particular con el segundo estrato del régimen (ese estrato “que no gobierna pero sin cuyo apoyo no es posible gobernar”, según la formulación de Mosca que hemos citado en el capítulo I 3.5.2). Por todo ello, dicha subelite constituía el fondo de reclutamiento de las elites superiores, y sus opiniones eran tenidas en cuenta.

Hinnebusch incluye entre la subelite del régimen de Sadat a los secretarios de Estado y los altos funcionarios del Estado en general (incluidos los policiales), los altos mandos de las unidades del Ejército, los gerentes de las empresas del sector público, los editores de los periódicos del Estado (es decir, de casi todos los periódicos), los líderes religiosos, los dirigentes de los sindicatos y de las cámaras de comercio, y los dirigentes de las secciones locales del partido gobernante, que en el medio rural eran casi siempre notables. Según el autor, el Parlamento era el lugar de encuentro de esta subelite, y el lugar donde se expresaban los intereses del “segundo estrato”. Si bien la Cámara no tomaba grandes decisiones, ni ejercía un control efectivo sobre las elites superiores, sí ejercía, sin embargo, cierta influencia sobre aquellas, y Sadat la utilizaba para mantener satisfechos a sus partidarios. Los miembros del Parlamento daban al segundo estrato acceso indirecto a “los decisores”, y conciliaban los intereses de la burguesía de Estado con la burguesía privada. El acceso a la Cámara reforzaba el poder local de los parlamentarios, al tiempo que les permitía establecer contactos directos con las altas esferas del poder, y estos objetivos primaban sobre los de ejercer el control sobre el poder ejecutivo o plantear políticas alternativas supuestamente atribuidos a aquella (Hinnebusch 1981: 448-449). A fin de cuentas, y como hemos visto, antes que elegir los parlamentarios a los gobernantes eran estos quienes en gran medida elegían a aquellos, seleccionando indefectiblemente a los candidatos del PND.

5.1.4 La imposición de la burguesía burocrática y privada entre las elites

Al hablar del periodo naserista hemos utilizado el concepto de “burguesía de Estado” para referirnos a quienes habían alcanzado un estatuto de considerable bienestar material e influencia política en virtud únicamente, en principio, de su salario estatal. Esta burguesía siguió existiendo durante el mandato de Sadat, pero la fuente de su bienestar material dejó de ser, como hemos apuntado, su mero salario, aunque siguiera siéndolo su empleo. El uso de las prerrogativas de este para obtener comisiones lícitas o ilícitas del sector privado nacional o extranjero y adquirir riqueza se convirtió en moneda corriente, con la que muchos de los funcionarios invirtieron después, valga el juego de palabras, en sus propios negocios privados. Junto a ellos, la burguesía meramente privada se desarrolló al calor de las políticas del *infithah* y de la relajación del control de la agricultura, y ambos grupos, burocrático y privado entraron en una simbiosis o fusión político-económica que comenzó a traducirse también en matrimonios y alianzas familiares, sin que ello fuera óbice para que se mantuvieran los conflictos de interés entre aquellos cuya posición económica, política y social se derivaba principalmente de su pertenencia al aparato del Estado y quienes se encontraban totalmente al margen de él.

Junto al Parlamento, el partido gobernante (PND) era el principal vehículo de los intereses de la mayor parte de la burguesía. En el coexistían, según Springborg (1989: 81, 157), los residuos de la USA, incluida la burguesía de Estado (“pura” o con intereses en el sector privado); una serie de elementos conservadores y burgueses de todo signo y de nuevo ingreso que querían hacer carrera política; y la “burguesía parasitaria”, el componente más poderoso según dicho autor, formado por aquellos que obtenían su riqueza de actividades privadas, pero única o principalmente desviando o distraiendo recursos en virtud de sus conexiones o contratos con el aparato o las empresas del Estado, o mediante actividades abiertamente ilegales. Según el mismo autor, el máximo exponente de la burguesía parasitaria era Osmán Ahmad Osmán. No obstante, Osmán sería -y la expresión es nuestra- un burgués parasitario “de guante blanco”, mientras que en el otro extremo de este colectivo se situarían, por ejemplo, los contrabandistas, los comerciantes de moneda del mercado negro o los numerosos grupos que traficaban con las cartillas de racionamiento de los subsidios de primera necesidad (utilizando las de los fallecidos, practicando la compraventa, sobornando a los funcionarios).

Según Hinnebusch (1981: 459), el currículo más frecuente de un dirigente del PND incluía los siguientes elementos: procedencia de una familia de propietarios agrícolas medios, educación profesional, carrera profesional al menos en parte en la burocracia, y acceso al Parlamento en algún momento. Sin embargo, muchos meros profesionales, hombres de negocios y notables rurales también accedían al aparato dirigente. A través de todos ellos, del patronazgo y clientelismo, de las solidaridades familiares y tribales, y de la promesa y concesión de servicios estatales, el partido conseguía movilizar a sectores sociales más amplios en las elecciones, al margen de que manipulara los resultados. Como hemos apuntado en el capítulo II 2.3.4, en las elecciones de 1976, que fueron más libres que las de 1979, una cierta auténtica representación desde abajo se impuso al régimen en el partido y en el Parlamento; pero para las de 1979 las elites superiores se encargaron de elegir bien, para evitar sorpresas, a quienes podían o debían ser elegidos por los ciudadanos, hombres de probada lealtad, lo que muchas veces implicaba que tuvieran un pasado en la burocracia y la USA.

La necesidad de mantener el control político, y el instrumento básico que los burócratas constituían para ello, hicieron que, a pesar de que la burguesía del *infatih* avanzara posiciones en el régimen de Sadat hasta casi alcanzar la hegemonía, aquella y las políticas que más le interesaban fueran contenidas por las reticencias de gran parte de la elite que, por razones de interés personal, ideológicas o puramente técnicas (como en el caso de los economistas y gerentes del sector público), no veía con buenos ojos el abandono por parte del Estado del papel fundamental que había desarrollado hasta

entonces en la planificación, el desarrollo y el control de la economía, ni el favorecimiento del sector privado en detrimento de la industria estatal.

5.2 MANTENIMIENTO DEL ESTADO CORPORATIVO. HACIA EL CORPORATIVISMO COINTEGRACIONISTA

Durante el mandato de Sadat, la fórmula corporativista utilizada por el régimen naserista para regular sus relaciones con los “grupos de intereses” de la sociedad conoció una notable evolución (incluimos dentro de dichos “grupos de intereses” a la comunidad copta, aunque de las relaciones del régimen de Sadat con ella, por ser su caso diferente en diversos aspectos, hemos hablado y hablaremos en general en apartados específicos). La fórmula naserista consistía en dar beneficios económicos y sociales al segmento más amplio de dichos grupos a cambio de una serie de compromisos por parte de aquellos y sus representantes (“encerrados” en una sola representación u organización autorizada, semioficial o semi-institucional), el principal de los cuales consistía en que no demandarían derechos políticos, o no canalizarían sus reivindicaciones al margen de dichas organizaciones, cuyas direcciones debían actuar de intermediarios entre los miembros de dichos colectivos y el Estado y el Gobierno, situándose al lado de ambos.

Bajo el mandato de Sadat, los beneficios generales o extendidos para los miembros de tales colectivos se redujeron, mientras el poder constituido intensificaba o intentaba intensificar su control sobre sus organizaciones seleccionando a sus altos dirigentes o cooptándolos a cambio de una serie de privilegios (relación directa con las elites del régimen, concesiones personales, beneficios económicos, e incluso aceptación de la corrupción o cuando menos de las prácticas irregulares llevadas a cabo por algunos de dichos dirigentes) y separándolos en sus intereses de los representados. A este nuevo modelo, que beneficiaba a los dirigentes a expensas de la mayoría, Ninnete Fahmy, aun considerándolo una forma de corporativismo, lo denomina “cointegracionismo” (Fahmy 2002: 105).

Las vías para el cointegracionismo bajo el mandato de Sadat fueron diversas. En la Federación General de Sindicatos de Trabajadores de Egipto (FGSTE, no profesionales) consiguió atraerse a una serie de personajes que conformaran una elite o jerarquía leal “autoreclutada” (Fahmy 2002: 157), a la que compensaba con diversos privilegios, entre ellos la participación consultiva en las decisiones políticas (por primera vez, el presidente de la FGSTE aceptó ser al mismo tiempo ministro de Trabajo). En las asociaciones de comerciantes e industriales y de representación de la burguesía de los negocios en general se siguieron diversas vías, incrementando el control estatal en unas (las más numerosas) y permitiendo que en otras ganara peso la burguesía del sector privado con buenas relaciones

con el régimen y que apoyaba sus políticas de *infitah*. El Sindicato de Ingenieros se convirtió en un espejo del *infitah*, una suerte de macroempresa, controlada por Osmán Ahmad Osmán, que llevaba a cabo proyectos más que dudosos. En cuanto a la Iglesia copta, se ha apuntado que Sadat pudo intervenir directamente en la elección del papa Chenuda y que posteriormente intentó que aquel redujera su actitud crítica mediante concesiones graciosas, para en última instancia -como vemos en el capítulo II 6.2- destituirlo.

Sin embargo, la fórmula cointegracionista encontró numerosas resistencias, en unos casos de los dirigentes a los que se quería integrar, y en otros de los colectivos a los que representaban. En los años finales de su mandato Sadat hubo de recurrir a la imposición para someter a los rebeldes. No obstante, el “proyecto cointegracionista” continuaría bajo el mandato de Mubarak.

5.2.1 Las asociaciones de comerciantes, industriales y hombres de negocios

Por ningún lugar puede empezarse mejor a observar el mantenimiento del Estado corporativo, o si se quiere “neocorporativo”, que por las asociaciones de intereses que supuestamente debían vehicular los intereses de la clase social ascendente: la burguesía.

El régimen naserista legó al de Sadat dos federaciones de asociaciones que pretendían representar y coordinar los intereses de los comerciantes, industriales y hombres de negocios en general: la Federación General de Cámaras de Comercio (الاتحاد العام للغرف التجارية, FGCC) y la Federación Egipcia de Industrias (الاتحاد العام للصناعات المصرية, FEI). Los ancestros de ambas habían sido creados en el primer cuarto del siglo XX como organizaciones privadas, y ambas habían sido sometidas durante la época naserista a un estrecho control gubernamental. Las cámaras de comercio habían sido legalizadas como agencias gubernamentales en virtud de la Ley 189 de 1951, y reunidas en la FGCC por un decreto presidencial en 1955. La FEI, creada en 1922 para defender los intereses de la industria “nacional” egipcia (en particular frente a su homóloga extranjera), continuó representando los intereses de la burguesía industrial hasta 1961, cuando, tras la política de nacionalizaciones, fue convertida en una agencia gubernamental adscrita al Ministerio de Industria.

Durante la época de Sadat, ambas organizaciones continuaron estando controladas por el poder ejecutivo por diversos procedimientos, el principal de los cuales era el sistema mixto de designación y elección seguido para conformar sus órganos directivos¹⁰³. En el

¹⁰³ El presidente de la FGCC era nombrado por un decreto presidencial, y su consejo de dirección estaba formado por 11 miembros nombrados por decreto ministerial y los presidentes de las 24 cámaras de comercio

caso de la FGCC -que reunía a entre 2 y 3 millones de comerciantes asociados¹⁰⁴, la mayor parte de los cuales tenían negocios pequeños, siendo la afiliación obligatoria-, dicho control, reforzado por la dependencia financiera de las cámaras respecto al Estado, por la cooptación de los principales líderes del sector y por la asignación de privilegios a sus representantes, llegaba casi a la sumisión y el alineamiento indefectible con las políticas gubernamentales. Aunque las cámaras de El Cairo y Alejandría, las más “poderosas”, presentaron cierta resistencia a las restricciones del Gobierno a sus actividades en el marco de la política de *infitah* con relativo éxito, empujadas por los intereses privados de sus representados¹⁰⁵, el balance final de su efectividad a tal efecto era reducido, como ponía de manifiesto el escaso interés de sus miembros en participar en sus procesos electivos (IEA 1986: 383-384; Fahmy 2002: 165-167).

Por su parte, la FEI conoció en época de Sadat una cierta evolución, al comenzar a defender con más vigor los intereses de los grandes industriales del sector privado, e intermediar el acceso a estas a los responsables del Estado relacionados con sus actividades, lo que se vio facilitado por el consentimiento del régimen a que la representación del sector privado en su consejo de dirección fuera mucho mayor que la del sector público. Sin embargo, la FEI no se convirtió en un órgano independiente ni mucho menos opuesto al Gobierno, sino que colaboró con él en la extensión del control regulador sobre los pequeños negocios y sobre los productos sujetos a restricciones de precios y calidad. Tampoco se convirtió en un mero instrumento de la burguesía privada, como mostró su transmisión de las protestas de las protestas sector público por los perjuicios que le causaba la política de *infitah*, como ya hemos mencionado (Fahmy 2002: 168-169).

Descontentos con el gradual y lento ritmo seguido por la FEI en su promoción de los intereses de los grandes industriales, algunos de estos, que tenían acceso al capital y la tecnología extranjera, promovieron desde 1975 la creación de la Asociación de Hombres de Negocios Egipcios (جمعية رجال الأعمال المصريين, AHNE), a la que seguiría la creación de otras asociaciones con menor recorrido como el Club de Banqueros o la Asociación de Inversores. Para evitar las posibles injerencias gubernamentales en su organización, todas

reunidas por criterios geográficos, que se dividían en secciones (شعب) por sectores de actividad. Además, el Gobierno nombraba a un número importante de los miembros del consejo de dirección de cada cámara, y podía decidir acerca de las elecciones celebradas en su seno. En cuanto a la FEI, su consejo de dirección estaba formado por 20 miembros, de los cuales 7 eran nombrados por el Gobierno aunque solo dos de ellos representaban al sector público.

¹⁰⁴ No disponemos de datos acerca del número de afiliados a la FGCC en los 70, pero a finales de los 80 dicho número era de más de 3 millones de personas (Fahmy 2002: 165-167).

¹⁰⁵ El objeto de estas resistencias eran asuntos como la prohibición de vender productos importados (1972) o la imposición de un techo a los beneficios obtenidos por los bienes importados (1977). En el primer caso, las cámaras obtuvieron directamente una victoria legal; en el segundo tuvieron que enfrentarse a la disolución de los consejos de dirección de ambas cámaras por parte del Ministerio de Aprovisionamiento, si bien la decisión fue finalmente pospuesta (Fahmy 2002: 166).

ellas se registraron como “asociaciones caritativas y sin ánimo de lucro” en el Ministerio de Asuntos Sociales, lo que la AEHN haría en 1979. Las cámaras de comercio de la FGCC, que incluían a los más diversos sectores de la pequeña y media burguesía, y entre ellos la formada a partir del sector público, se opusieron a la formación de la AHNE, como se opondrían después a otras asociaciones similares promovidas por la gran burguesía privada. Aunque las cámaras de comercio y su federación estatal tenían numerosas conexiones con los dirigentes medios y bajos del aparato del Estado, temían que sucediera lo que de hecho sucedería desde mediados de los 80, cuando la AHNE (que apenas contaba entonces con 300 miembros) estableció conexiones directas con las elites superiores del Estado y consiguió anteponer sus intereses a los de la gran mayoría de los comerciantes, industriales y hombres de negocios (Springborg 1991: 70-71; Waterbury 1983: 172).

La burguesía egipcia de finales de los años 70 era un agregado de grandes importadores, monopolistas de los más diversos sectores estrechamente relacionados con el Estado, grandes hombres de negocios del turismo, las finanzas y los servicios, grandes industriales conectados con el extranjero, personas implicadas en diversas actividades ilícitas (contrabando, mercado negro, comercio de divisas) y una plétora de miembros de las más diversas condiciones y actividades. La mayor parte de sus actividades seguían dependiendo directamente de las decisiones discrecionales del Gobierno, que al satisfacer a unos sectores perjudicaba directa o indirectamente a otros. Esta escasa autonomía respecto al poder político, y los diversos intereses particulares de cada sector, hicieron que la burguesía no constituyera una clase cohesionada, e impidieron que surgieran organizaciones que la representaran al margen de las institucionales, más aun cuando a finales de los 70 el régimen de Sadat había dejado claro que, de la misma manera que no pensaba liberalizar esencialmente la economía ni el sistema político, tampoco pensaba liberalizar los otros espacios de representación de intereses de manera que estos pudieran amenazar su poder. Así, las asociaciones de representación de la burguesía en la época de Sadat, a pesar de la emergencia de la poco numerosa AEHN, seguían inscribiéndose en el esquema del “Estado corporativo” puesto en pie por el régimen naserista, cuyas características esenciales podemos recordar mediante la definición de Schmitter:

“Un sistema de representación de intereses en el que las unidades constitutivas son organizadas en un número limitado de categorías únicas, obligatorias, no competitivas, reconocidas o autorizadas -cuando no creadas- por el Estado, y a las que se garantiza un monopolio de la representación en el seno de sus categorías respectivas, a cambio de cierto control sobre la elección de los dirigentes y la articulación de las demandas e intereses”¹⁰⁶.

¹⁰⁶ Schmitter Ph.: “Still the Century of Corporation” en Schmitter Ph. & Lehmbruch G. (dir), *Trends*

No obstante, es oportuno añadir a la caracterización de Schmitter la matización de Gobe -de quien tomamos las palabras de aquel- para señalar la diferencia entre los sistemas de representación corporativistas en los que sus diversas unidades constitutivas conforman espacios de “ciudadanía” -o de participación de los ciudadanos en la elaboración de las políticas públicas-, de aquellos en los que, como en el caso de Egipto, lo que se daba era una suerte de “estatización de la sociedad” paralela a la “privatización del Estado”. En estos últimos, “la relación formal entre el Estado y las asociaciones de hombres de negocios es solo de naturaleza vertical, emanando las propuestas en el terreno económico únicamente del primero” (Gobe 1999: 102). Volveremos sobre ello en las conclusiones de esta Segunda Parte (véase II 7.1).

5.2.2 Los trabajadores ante el Estado y el régimen de Sadat

A pesar de la extensión de las actividades del sector privado, del aumento del número de trabajadores asalariados en él o en empresas mixtas, y de la creciente presión de las corrientes liberalizadoras, los trabajadores egipcios -incluidos los empleados en dicho sector- continuarían en época de Sadat expresando sus conflictos de intereses con el resto de la sociedad en términos de antagonismo hacia el Estado, en lugar de antagonismo de clase. La razón de esta actitud no solo tenía que ver con una relativa falta de conciencia de clase entre los trabajadores, ni con la constatación objetiva de la hegemonía que los dirigentes del Estado seguían ejerciendo en la definición de todas las políticas públicas -incluida, en particular, la legislación laboral- sino también con la reivindicación del mantenimiento de esa hegemonía y de la responsabilidad del Estado para con los trabajadores, en el marco de una concepción moral de la economía promovida por el régimen de Náser, y aceptada por los trabajadores, en la que el Estado y los trabajadores debían tener derechos y obligaciones recíprocos (Fahmy 2002: 175).

Sadat se apoyó en los trabajadores, en un primer momento, para consolidar su poder, y después intentó reducir la influencia de aquellos mediante el refuerzo del control del poder ejecutivo sobre la jerarquía de su sindicato. Las resistencias de los trabajadores propulsadas por los trabajadores de izquierdas le llevaron a utilizar una violenta represión ocasional contra aquellos y sus protestas, pero también a ceder a gran parte de sus demandas en el terreno económico y laboral. En este sentido, su política no se distinguió mucho de la de Náser y de la posterior de Mubarak, aunque el balance final resultara en

una reducción relativa de los beneficios sociales y económicos de los trabajadores, y en una relación más autoritaria y represiva con ellos. No obstante, como en el resto de los terrenos de las relaciones entre el régimen de Sadat y la sociedad, la situación de imposición del autoritarismo exacerbado en los últimos dos o tres años de su mandato no era más que una “foto fija” que denotaba la derrota de aquel -o al menos de sus tendencias a realizar reformas estructurales en el Estado y sus políticas - frente a sus adversarios, más que su victoria. Dicha imposición no acabó con determinadas concepciones políticas, sino que confirmó su vigencia. Enumeramos a continuación las dos más significativas.

5.2.2.1 Refuerzo del control del sindicato único. Resistencias y represión de la izquierda

El movimiento sindical durante el mandato de Sadat experimentó una evolución en muchos aspectos aparentemente paradójica. Uno de estos aspectos fue el incremento inicial de la presencia de elementos izquierdistas en la jerarquía general del entramado sindical; otro, el estrecho control ejercido, sin embargo, por la alta jerarquía de la Federación General de Sindicatos de Trabajadores de Egipto (FGSTE), y en particular por sus presidentes, sobre los asuntos del sindicato y los relacionados con los trabajadores. Por otro lado, la represión ejercida sobre los sindicalistas de izquierdas, desde mediados de los 70, precisamente en el momento en que Sadat pretendía promover el pluralismo y el pluripartidismo político, fue más intensa que la que conocieron bajo el régimen naserista. Finalmente, el régimen de Sadat, que había favorecido a la burguesía y reducido el progreso económico y social de los trabajadores, recurrió a los altos dirigentes sindicales para reforzar el partido gubernamental y su control del Parlamento y otras instituciones.

La primera clave que explica algunas de estas paradojas fue la determinación de Sadat de acabar con los “centros de poder” constituidos por Ali Sabri, Chaarawi Guma y sus partidarios, muchos de los cuales se concentraban en el Secretariado de Trabajadores de la USA. Según Sayyed Faid, activista izquierdista de la empresa textil de Helwán en los 60 y los 70, “a los trabajadores no les gustaba Sadat, pero odiaban a Chaarawi Guma, Ali Sabri, y sus seguidores en el sindicato”, que habían pretendido monopolizar la comprensión del “auténtico socialismo” y habían impedido que se instauraran procedimientos democráticos en la FGSTE¹⁰⁷. Por esta razón, gran parte de los líderes sindicales, incluidos muchos de los de la izquierda nacionalista-estatista (a partir de entonces llamada “naserista”) y marxista, apoyaron a Sadat en su Revolución Correctiva de

¹⁰⁷ Entrevista de Posusney con Sayyed Faid realizada en 1988 (Posusney 1997: 95).

mayo de 1971, y dieron la bienvenida al dismantelamiento de todas las organizaciones de masas de la USA y a la convocatoria de elecciones sindicales en julio de 1971, a pesar de que ambas decisiones constituyeran una intervención gubernamental en los asuntos del sindicato.

Las elecciones de 1971 fueron, según diversos sindicalistas, las más limpias que la FGSTE nunca celebró y, como resultado de ello, numerosos comunistas y otros izquierdistas obtuvieron puestos de representación en las federaciones sectoriales. Para las de la Federación General o Confederación, Sadat había dejado claro que su candidato era Salah Garib, a quien había asignado la presidencia de la Secretaría de Trabajadores de la USA, y encargado que depurara las candidaturas de “elementos indeseables”, es decir, fundamentalmente de la facción de Sabri. Los electos de la izquierda y otros no afectos a Sadat podrían haber obtenido, según sus propios testimonios, la mayoría en el consejo de dirección de la FGSTE, derrotando posteriormente a Garib, pero algunos de ellos decidieron apoyarlo, y no oponerse por el momento a Sadat (Posusney 1997: 97-98).

La decisión de algunos dirigentes sindicales de apoyar a Garib en contra de sus convicciones ideológicas se reveló funesta. En enero de 1972 Garib aceptó combinar su puesto como presidente de la FGSTE con el de Ministro de Trabajo, algo que los anteriores presidentes de la Confederación habían rechazado. Con sus prerrogativas ministeriales, Garib promovió la legislación necesaria para fortalecer el control de la base de la FGSTE por parte de su jerarquía. Para ello, tuvo que acabar con las resistencias izquierdistas en el seno del consejo de dirección de la Confederación, lo que consiguió expulsando a sus principales representantes de él en marzo de 1973 mediante una decisión de su Comité Ejecutivo. Posteriormente, en junio de 1973, promulgó un decreto que excluía de la condición de trabajador a todos aquellos que tuvieran diplomas o títulos que les permitieran ejercer una “profesión”. Esta disposición suscitó una amplia oposición, manifestada en la prensa diaria y en iniciativas legales para anularla, lo que fue conseguido temporalmente gracias a una sentencia judicial en 1974 (Posusney 1997: 100-101).

El decidido apoyo de Garib a la liberalización económica emprendida por Sadat no hizo más que incrementar el descontento con la dirección del sindicato de los numerosos trabajadores que desde 1973 habían comenzado a realizar acciones de protesta. Probablemente con la intención de apaciguarlos, en junio de 1975 Sadat cesó a Garib como ministro de Trabajo, y lo reemplazó con Adel Latif Bultiya, que había sido presidente de la FGSTE entre 1969-1971. Bultiya había ejercido el papel de “policía bueno” en las relaciones del régimen con la oposición sindical, mediando entre esta y las incansables iniciativas de Garib para reducir su poder. La nueva posición de fuerza de la oposición sindical le llevó a cometer el error de consentir que la celebración de las elecciones sindicales de junio de 1975 fuera atrasada repetidas veces. Cuando se celebraron, en junio

de 1976, había sido aprobada en marzo de ese mismo año la Ley 35 relativa a los sindicatos de trabajadores. Dicha ley hacía algunas concesiones a la oposición sindical, como permitir que los titulados como profesionales pudieran ser miembros de los sindicatos de trabajadores (aunque únicamente podrían ocupar el 20% de los órganos electos a cualquier nivel). No obstante, el texto establecía una estructura jerárquica piramidal explícita para la FGSTE, en la que los organismos de representación de la base estarían subordinados a los organismos superiores tanto administrativa como financieramente, y en la que los empleados en la gestión del sindicato a todos los niveles serían elegidos indirectamente por los consejos de dirección correspondientes (Fahmy 2002: 158-159; Posusney 1997: 104-106).

Los esfuerzos del régimen y de la alta jerarquía del sindicato por controlar a sus bases fueron desafiados por algunos elementos de izquierdas, que establecieron pequeñas organizaciones sindicales informales (y alegales), como la formada en 1975 en la empresa siderúrgica del Delta por Saber Barakat y algunos otros en torno a la publicación *La familia del Nueva Amanecer* (revival de la publicación marxista de los años 40 *El Nuevo Amanecer*), o las constituidas en las empresas textiles de Alejandría mediante la formación de comités de delegados no oficiales. Sin embargo, ante las elecciones sindicales de junio de 1976, el local de *El Nuevo Amanecer* fue cerrado, su publicación secuestrada y Barakat y sus compañeros detenidos. Algo similar sucedió con los comités formados en Alejandría, cuyos líderes detenidos denunciaron que había sido la propia dirección de la Federación de Trabajadores del Textil la que había instigado a los servicios de seguridad del Estado contra ellos, para después denegarles toda asistencia durante su encarcelamiento. A pesar de este hostigamiento, cerca de 4.000 líderes de la oposición sindical obtuvieron representación en las secciones sindicales a nivel de empresa (un 15% del total), siendo aquella particularmente importante en las fábricas de Chubra al-Jeima (gran parte de ellas textiles) y mayoritaria en la empresa Misr de Hilado y Tejido de Helwán, una de las mayores empresas textiles del sector público (Posusney 1997: 106).

Aunque a la cabeza de la FGSTE fue elegido Saad Mohammed Ahmad, el candidato apoyado por Sadat, las elecciones de 1976 dieron paso a un nuevo patrón en las relaciones entre el régimen y la jerarquía sindical, por un lado, y la base del sindicato por otro. Ahmad fue elegido por Sadat, según Posusney (1997: 107-108), por su carácter moderado en comparación con Garib. A diferencia de este, no era un defensor incondicional de las políticas de Sadat: no había apoyado explícitamente su liberalización económica, y se había opuesto a la normalización de las relaciones con el Histadrut, el sindicato vertical israelí, que Garib había apoyado. Era un candidato de compromiso que podría desempeñar más adecuadamente que su antecesor el papel de mediador entre el régimen y las bases del sindicato que el modelo corporativista requería, manteniendo una

cierta lealtad a ambas partes. No en vano, parte de la oposición dentro de la FGSTE decidió no rechazar a su candidatura.

Tras la creación de las plataformas de expresión en 1975, los dirigentes y líderes sindicales fueron presionados para que se incorporaran a la plataforma gubernamental, la Organización Árabe Socialista, con la promesa de que se favorecería la elección de algunos de ellos como diputados. Muchos de ellos, y casi todos los grandes jerarcas, lo hicieron, mientras que varios miles de líderes locales se unían a la plataforma naserista-marxista Tagammu. Al parecer, algunos dirigentes sindicales especularon con la idea de crear un movimiento político propio, idea que fue abiertamente rechazada por Sadat, quien prometió a cambio, entre otras cosas, que se legislaría para establecer la obligación del Gobierno de consultar al sindicato en los asuntos que afectaran a los trabajadores.

5.2.2.2 Concesiones y represión

Las protestas de 1977 llevaron al régimen de Sadat a afrontar el descontento de los trabajadores mediante un enfoque dual: mientras mejoraba sustancialmente sus salarios, reprimía abiertamente a los sindicalistas de izquierdas. Tras las protestas de 1971 y 1972, los dos años siguientes habían conocido pocos movimientos de protesta, probablemente menos a causa de la violenta represión de aquellas que a una tregua tácita en consideración, primero, a los preparativos para la guerra prometida, y luego al esfuerzo de guerra y el relativo éxito en ella en octubre 1973. Con todo, el Estado retenía un día de salario al mes a los trabajadores como contribución al esfuerzo bélico a pesar de que la inflación había comenzado su ascenso meteórico, que haría que en 1976 los salarios reales fuera inferiores a los de los años anteriores al conflicto. No obstante, desde el otoño de 1974 hasta 1976 las protestas laborales crecieron progresivamente, aunque muchas de ellas -en particular las no “violentas”- a menudo no sean mencionadas por los estudios generales sobre la política egipcia, a causa no solo de la ocultación practicada por la prensa oficial, sino sobre todo de la singular naturaleza de muchas (pacíficas, simbólicas, productivas), como veremos a continuación. De cualquier manera, en las grandes manifestaciones públicas los cantos de los trabajadores debían escocer mucho a Sadat, porque habían sido cuidadosamente elegidos para mofarse de “sus grandes logros” y para compararlo con Náser. En ocasiones, los cantos eran rimados: *Ayna al-futur, ya batal al-ubur?* (“¿Dónde está nuestro desayuno, Héroe del Cruce del Canal?”), *Naser qal, jalli balak min al-ummal* (“Náser siempre dijo: preocúpate por los trabajadores”); en otras, de un detalle sangrante: “En los días de la derrota [de 1967], el pueblo todavía podía comer”; en las más, de una sencillez dirigida al corazón y la cabeza del presidente: “Abajo Sadat”, o simplemente: “¡Náser!”.

Además de retirar la medida de suspensión de las subvenciones a muchos productos de primera necesidad, como respuesta a las protestas el Gobierno decretó inmediatamente una subida del 10% de las pensiones, una paga suplementaria para los trabajadores del sector público e incrementos de entre el 5 y el 12,5% para los trabajadores del sector privado. Al año siguiente, los salarios del sector público serían incrementados en un 20%, y hasta el final del mandato de Sadat se sucederían los aumentos salariales en ambos sectores, facilitados por los nuevos recursos financieros del Estado y del sector privado. De la misma manera, en 1978 la Ley nº 48 de 1978 confirmaba que la única causa de despido en el sector público sería la comisión de una falta grave.

Sin embargo, mientras ofrecía la zanahoria de las mejoras salariales, el régimen aprovechaba para reprimir a los sindicalistas de izquierdas, acusándolos falsariamente de haber organizado las protestas: cientos de aquellos fueron arrestados en los meses siguientes -y, según Saber Barakat, todo izquierdista relacionado con el movimiento sindical fue arrestado en algún momento entre 1977 y 1981 (él mismo lo fue en 9 ocasiones). Paralelamente, la mayor parte de quienes se acercaron al partido Tagammu fueron hostigados por la policía, lo que llevó a una drástica reducción del número de sus afiliados y militantes. En cuanto a las elecciones sindicales, la reactivada figura del Fiscal General Socialista -creada en 1971 pero poco operativa hasta la segunda mitad de los 70- se encargó de aplicar las disposiciones de la Ley de Protección del Frente Interior de 1978, filtrando las candidaturas de los trabajadores para depurarlas de izquierdistas. Aunque algunos de estos consiguieron evitar la exclusión recurriendo a la justicia, las elecciones de 1979, que fueron objeto de 691 impugnaciones por manipulación del proceso, arrojaron un resultado de una abrumadora mayoría de electos progubernamentales -la mayor parte de los cuales habían sido candidatos únicos-, y tan solo 120 delegados de empresa de la oposición frente a los 4,000 de 1976. Estas intervenciones a nivel sindical, y la amenaza de penas de trabajos forzados para quienes participaran en protestas laborales, acabaron por someter al movimiento de oposición, pero, como señaló Posusney, sería erróneo concluir que las luchas sindicales fueron simple y llanamente derrotadas por el autoritarismo. Por el contrario, la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores en la segunda mitad de los 70 fue resultado en gran parte de dichas luchas, y aunque contribuyera a adormecerlas, las semillas de aquellas permanecerían y rebrotarían más adelante (Posusney 1997: 111-113).

5.2.2.3 La “economía moral” de los trabajadores egipcios

En su famoso estudio de 1971 sobre las “revueltas de subsistencia” en el siglo XVIII en Inglaterra, “The Moral Economy of English Crowd in the 18th Century”, E.P.

Thompson (1971) dio carta de naturaleza sociopolitológica al concepto de “economía moral” para dar cuenta del peso preponderante de las concepciones y valores culturales y morales -en detrimento de las consideraciones puramente económicas- de “la multitud”, “las masas” o las clases subalternas de la sociedad inglesa en sus comportamientos y actitudes ante los asuntos económicos y sociales que les afectaban gravemente. De adscripción comunista en sus primeras décadas de trabajo intelectual y político, Thompson había partido del estudio de la formación de la clase obrera inglesa, llamando prontamente su atención la vigencia e influencia de dichas concepciones entre dicha clase, y pasando después a estudiar específicamente los “motines de subsistencia” -más tarde llamados en otros lugares “revueltas del pan” o “del hambre”-, en los que participaban no solo los obreros propiamente dichos sino también todas las clases populares, o las clases subalternas del naciente modelo capitalista. Elemento destacado de sus conclusiones era que, si bien la asfixia económica era una causa fundamental de dichas explosiones populares, los motivos que las desencadenaban tenían mucho más que ver con un código ético propio de dichas clases, fundado en un “consenso popular” que era el que trazaba la frontera de lo “intolerable”, y que estaba relacionado con las “emociones profundas”, con la “indignación” y con la “obligación moral de protestar” ante los “agravios” y en general las prácticas de las autoridades consideradas “ilegítimas” por dichas clases populares¹⁰⁸.

El concepto acuñado por Thompson tendría unas implicaciones de carácter mucho más general, en tanto que concepto, y alcanzaría en sus aplicaciones una *universalidad*, en las que el autor no pensó de ninguna manera al utilizarlo por primera vez, llegando a ser utilizado para analizar y “explicar” las más diversas revueltas y revoluciones, en contextos espaciales y temporales muy alejados, pero siempre en las anfractuosidades de “la economía de mercado” a la que “la vieja economía moral” se opone¹⁰⁹. Por el camino quedaría en numerosas ocasiones el desglose de esta realizado por Thompson en dos variantes, la “economía moral paternalista” de las clases dominantes y la “economía moral” de “las multitudes”, o las clases populares.

La concepción de las relaciones entre los trabajadores y el Estado promovidas por el régimen naserista y mayoritariamente aceptadas por aquellos se inscribían en el marco de una *economía moral antigua* “modernizada”. La “economía moral antigua” había permitido que los primeros sindicatos de empresa egipcios, aparecidos en los primeros

¹⁰⁸ En 1991, cuando el concepto ya había conocido un gran éxito, aunque también provocado un no menor número de críticas, Thompson volvió sobre él en su obra *Customs in Common* (Pontypool, Londres: The Merlin Press, 1991), en particular en el capítulo “The Moral Economy Reviewed” (págs. 259-351). Thompson había utilizado ya el concepto de “economía moral” en su primera gran obra, *The Making of the English Working Class* (Nueva York: Random House, 1963).

¹⁰⁹ Una muestra de la amplitud de las utilizaciones del concepto de “economía moral” de Thompson puede encontrarse en C. A. Aguirre Rojas (2010): *Economía Moral de la multitud*, México, UNAM.

años 20, cayeran en la órbita del partido Wafd, campeón del nacionalismo, cuando no de la propia familia real (véase Introducción, capítulo 2.2.6). El Wafd se ganó en un principio el apoyo de la mayor parte de los trabajadores en nombre del nacionalismo y con una cierta defensa de los derechos de aquellos, pero también intentó hacerlo mediante una serie de admoniciones paternalistas, conservadoras y burguesas, muchas de ellas de origen religioso, rechazando la mayoría de sus líderes toda radicalización y cualquier atisbo de lucha de clases. Los máximos dirigentes de las organizaciones sindicales de los años 20 y 30 opuestas a la Monarquía adscritos al Wafd tampoco eran trabajadores, sino abogados o políticos que a menudo eran también *beys*, miembros o descendientes de las clases terratenientes. Las relaciones de los trabajadores con dichos dirigentes, como con aquellos pro Palacio, eran relaciones de patronazgo, unas relaciones en principio aceptadas en nombre de la costumbre pero que progresivamente fueron reconocidas como una imposición y utilizadas sabiamente por su funcionalidad en lugar de buscar la independencia de unas clases que tenían sus propios intereses, opuestos a los suyos (Beinin & Lockman 1998: 159-170, 302). En palabras de Beinin y Lockman, los activistas sindicales con voluntad de independencia “aprendieron a jugar el juego cliente-patrón”, ofreciendo apoyo político a cambio de beneficios laborales, pero en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, habían alcanzado ya

"una perspectiva coherente sobre la naturaleza de la clase obrera y sobre el papel que debería desempeñar el movimiento sindical. Esta perspectiva no era explícitamente socialista, aunque muchos de estos activistas estaban sin duda familiarizados con las ideas y los intelectuales socialistas. Más bien se trataba de un sindicalismo militante, un radicalismo de clase trabajadora orientado menos a la adquisición de poder político que a organizar la clase obrera, construyendo una conciencia de la identidad de clase y una autosuficiencia, y poniendo los fundamentos de un movimiento laboral fuerte y unido” (Beinin & Lockman 1998: 238).

Tras el enésimo desalojo del Wafd del poder, en octubre de 1944, dos años después de que el partido nacionalista legalizara, mediante la Ley nº 85 de 1942, la formación de sindicatos independientes -prohibiendo explícitamente, sin embargo, la constitución de aquellos por los campesinos-, el movimiento sindical se separó definitivamente del Wafd y se politizó sin perder su independencia, estrechando sus relaciones con los militantes comunistas y con el ala izquierda del Wafd, que había sido relegada desde principios de la década por sus elementos más conservadores (Beinin & Lockman 1998: 291-293). En esos años, la extensión de las ideas socialistas de raigambre marxista entre los trabajadores de la época monárquica alcanzó su zénit, pero ello no supuso la desaparición de la “vieja economía moral”.

La economía moral promovida por Násér desde muy poco después de llegar al poder supuso una retraditionalización en la medida en que puso freno, en ocasiones por la fuerza, a la difusión de dichas concepciones de origen marxista -alejando sobre todo el fantasma de la lucha de clases- y revigorizó los esquemas paternalistas y de patronazgo. Sin embargo, supuso una modernización, aunque sea solo en el sentido cronológico, en la medida en que situó al Estado como padre y patrón, y le asignó obligaciones y responsabilidades para con los trabajadores, exigiendo a estos otras en contrapartida.

La razón de que hayamos realizado introducido el concepto de economía moral en esta parte de nuestro trabajo -y no en la relativa a la época de Násér-, y realizado una recapitulación sobre la de los trabajadores egipcios y su contraparte, “la economía moral paternalista”, es que la propia naturaleza del concepto lleva implícito un marcado interés por la “pervivencia” o “permanencia” de las concepciones relativas al orden de las relaciones sociales -y en particular al de las relaciones producción-. En la aportación original de Thompson, y en los desarrollos posteriores de otros autores, las pervivencias que llamaron la atención son fundamentalmente pervivencias de “lo antiguo” -definido por contraposición a la irrupción avasalladora de nuevas concepciones desde la esfera puramente económica-, mientras que en este trabajo nos interesan sobre todo las pervivencias de lo “anterior”. Sin duda tiene un enorme interés estudiar las pervivencias de “lo más antiguo que lo anterior”, si se nos permite el juego de palabras, en el caso egipcio, pero existe una diferencia fundamental: la economía moral se estudió o se dedujo originalmente, y se sigue haciendo en la mayor parte de las ocasiones, a partir de los casos de revueltas, motines o protestas, resistencias, en suma, de carácter casi siempre puntual en defensa de un orden social o de relaciones sociales anteriores consideradas “mejor” o “más legítimas”; mientras que en nuestro caso dichas resistencias no se produjeron durante la época naserista -al margen de las protestas de 1968, promovidas sobre todo por los estudiantes y no por los trabajadores. Y dichas resistencias no se produjeron, al menos en medida reseñable, porque para las clases populares o subalternas en Egipto no había existido un orden mejor o más legítimo en el terreno de las relaciones de producción. Sin embargo, tras la muerte de Násér tales resistencias sí se produjeron, y fue en defensa de las relaciones de producción promovidas por aquel, y este es uno de los principales puntos de conexión con otros estudios sobre la economía moral. Hasta tal punto los trabajadores defendían un modelo anterior que parecían excluir la posibilidad de su mejora. El detallado estudio de Posusney (1997) sobre las relaciones entre los trabajadores y el Estado entre 1952 y la primera mitad de los 90 (y primera mitad del mandato de Mubarak) insiste en una conclusión también evidente: las razones de las protestas bajo el mandato de Sadat (y el de Mubarak en el plazo estudiado) eran de naturaleza “restaurativa”, es decir, orientadas a preservar y proteger los beneficios adquiridos, y no a conseguir otros.

Pero el concepto de economía moral no solo es adecuado para el caso egipcio por la reivindicación por parte de los trabajadores del cumplimiento por el Estado de ciertas obligaciones, sino también por su compromiso con la satisfacción de las suyas dentro del modelo que defendían. Como señala también Posusney, para sus protestas los trabajadores elegían actividades pacíficas, simbólicas y/o que no afectaran a la producción, excluyendo el enfrentamiento abierto a pesar de que el Gobierno no hiciera siempre lo mismo: en la mayor parte de las ocasiones se manifestaban *dentro* de las fábricas, u organizaban ocupaciones o encierros en ellas, expulsando a sus directores y a veces a los representantes sindicales oficiales mientras continuaban trabajando. Otra forma frecuente de protesta era rechazar los cheques de pago de sus salarios, en los casos en los que consideraban que no se les abonaban todos sus derechos, medida no solo simbólica sino que también creaba quebraderos de cabeza al Gobierno al alterar su contabilidad. Según Posusney, los trabajadores mostraban así su compromiso, no con el Gobierno o el régimen de turno, sino con la idea de “la modernización y el desarrollo poscoloniales del país” imbuida por Náser. Los trabajadores resistían a la tentación de la violencia, a pesar de la que ejercían de manera brutal en ocasiones las fuerzas de seguridad. La autora pudo contemplar, en la primera mitad de los 90, las secuelas de las torturas infligidas en 1971 a tres dirigentes sindicales tras las protestas de la planta de Harir en Helwán. Finalmente, hay que destacar que los trabajadores no consideraban que sus salarios y los derechos sociales asociados a sus empleos eran los únicos componentes del compromiso del Estado para con ellos. También lo eran las subvenciones a los productos de primera necesidad, el resto de los derechos y beneficios sociales, y el respeto de una cierta representatividad real en el entramado sindical estatal (Posusney 1997: 156-158). Ya hemos mencionado (véase capítulo II 3.1.1) que los recortes de las subvenciones a varios productos en 1977 supusieron sobre todo una agresión simbólica para la población, y en particular para los trabajadores públicos. Los malos tratos, la imposición de los dirigentes y los recortes laborales se incluirían también en este tipo de agresiones, además de por sí mismas por la manera en que se llevaron a cabo. De la misma forma, Sadat violaría un “modelo legitimado” de relaciones con la sociedad o de ejercicio del poder en muchos otros terrenos. Esas violaciones contrastarían no solo con la actitud de Náser, sino también, de diferente manera, con la de Mubarak. Volveremos sobre todos estos aspectos en las conclusiones de esta Segunda Parte.

5.3 LOS SINDICATOS PROFESIONALES

5.3.1 Los periodistas y su sindicato: control y resistencias

El de los periodistas fue el colectivo profesional con el que Sadat tuvo mayores y más tensos enfrentamientos. Ya hemos señalado las depuraciones de los profesionales y los medios de izquierdas que tuvieron lugar en 1973, tras su apoyo a las revueltas estudiantiles, y en 1977 y 1978 tras las críticas a la actuación del régimen en enero de y luego la firma de los Acuerdos de Paz con Israel. Hay que recordar que la radio y la televisión eran únicamente de propiedad estatal, y en ellas no existía la menor libertad de expresión, mientras que la inmensa mayoría de los medios de prensa escrita también lo era. Tras la práctica desaparición de *Al-Ahali* en 1979, los únicos medios que quedaban a la izquierda del “centro” que decía representar el régimen eran la revista semanal *Ruz al-Yusuf* (de propiedad estatal) y el periódico semanal *Al-Chaab* del Partido Socialista del Trabajo (PST). *Al-Ahrar*, medio de expresión de Partido de los Liberales Socialistas (PLS), se alineaba indisimuladamente con el régimen, saliéndose de esta línea únicamente para reclamar más *infitah*. Los medios de los Hermanos Musulmanes completaban el abanico ideológico, y se situaron abiertamente del lado del régimen hasta la firma del Tratado de Paz con Israel.

La propiedad estatal de la mayor parte de los medios era ya de por sí un poderoso instrumento de control político. El Sindicato de Periodistas estaba destinado a serlo también, desde el punto de vista del régimen. Como hemos señalado, Sadat, como Náser, deseaba que los sindicatos profesionales, y los periodistas en particular, se autocontrolaran en su expresión política mediante la aceptación de “códigos de honor” presuntamente consensuados con el régimen. En 1971, Sadat pidió explícitamente al sindicato que redactara tal Código de Honor. El sindicato aceptó la propuesta bajo el compromiso del régimen de que levantaría la censura y permitiría la libertad de expresión, excepto en temas militares, sin el entrometimiento de los diversos organismos gubernamentales en la labor periodística, a cambio de que el sindicato se comprometiera, por su parte, a garantizar el respeto a “la línea política establecida para la palabra en Egipto por la USA [propietaria entonces de los medios]”, según rezaba uno de los borradores del documento. No obstante, cuando el Código de Honor de la profesión fue finalmente promulgado en 1975, los periodistas se vieron sorprendidos porque en él no había ninguna garantía para el libre ejercicio de su profesión (الميرغني 2005: 67). También en 1975, y ante la prevista desaparición de la USA, se creó el Consejo Superior de la Prensa, que pasaría a poseer el 49% de cada medio.

Las condiciones laborales de los periodistas, empobrecidos como el resto de los trabajadores estatales por la congelación de los salarios hasta mediados de los 70, fue ocasional motivo de reivindicaciones y fricciones con el poder, pero fue el extendido rechazo entre ellos del Tratado de Paz con Israel el que llevó a las relaciones con aquel a su máxima tensión, hasta el punto de que en 1979 Sadat amenazó por primera vez con disolver y prohibir el sindicato (Fahmy 2002: 110). A pesar de ello, los periodistas no se amilanaron, y en las elecciones de diciembre de 1979 las corrientes de la oposición (naseristas, liberales y marxistas) obtuvieron la mayor parte de los asientos en el Consejo de Dirección, eligiendo como Síndico a Kamal Zuhari, un antiguo dirigente de la USA. Zuhari y el Consejo de Dirección no escatimaron críticas al Tratado de Paz, empujados por la Asamblea General del Sindicato (الميرغني 2005: 98), lo que llevó a Sadat a adoptar otras medidas de control.

En mayo de 1980 fue promulgada la Ley de Defensa de los Valores contra la Conducta Reprehensible (قانون حماية القيم من العيب), más conocida como “Ley de la Vergüenza” (قانون العيب), que pretendía proteger “los valores religiosos y los componentes políticos, sociales, económicos y morales” auténticos de “la familia egipcia”, así como “la paz social y la unidad de la patria”. Para ello, creaba los Tribunales de la Ética que, entre otras cosas, podrían privar a los condenados de “ocupar un cargo o asumir trabajos que tengan una influencia sobre la opinión pública” (art. 4.4). A principios de 1981, serían condenados en virtud de esta ley los primeros periodistas (Gómez García 1992: 91).

Posteriormente, en julio de 1980, la Ley del Poder de la Prensa (قانون سلطة الصحافة) ponía en manos de la recientemente creada segunda cámara, la Asamblea Consultiva, la propiedad del 51% de todas las empresas y medios de prensa estatales, que serían gobernados por una Asamblea General formada por 15 miembros de la plantilla de cada medio y 20 nombrados por la Asamblea Consultiva. Por otro lado, la ley encargaba al Consejo Superior de la Prensa, cuya formación sería controlada por la Asamblea Consultiva¹¹⁰, otorgar y controlar los permisos de publicación y castigar las infracciones cometidas por los medios. Finalmente, prohibía el ejercicio de la profesión a quienes hubieran sido condenados por el Tribunal de la Ética, estuvieran privados de derechos políticos o “negaran las prescripciones celestiales”¹¹¹ (Gómez García 1992: 90-91).

Como estas medidas restrictivas tampoco disuadieron a Zuhari de continuar criticando la política de “normalización” de Sadat hacia Israel (y en particular su proyecto de desviar agua del Nilo hacia aquel), en la primavera de 1981 Sadat decidió arrebatarle

¹¹⁰ El Consejo estaría formado por 11 miembros designados por la Asamblea y por los directores y editores de todos los medios, que serían así mismo nombrados por ella como tales.

¹¹¹ Pueden consultarse extractos de la ley en castellano, principalmente relativos a los aspectos que hemos mencionado, en Gómez García (1992: 103-107).

por decreto la presidencia del sindicato, y atribuírsela a un partidario suyo, Salah Galal (Fahmy 2002: 123).

La relación del régimen de Sadat con los periodistas críticos fue, sin embargo, ambivalente hasta sus últimos días, pues mientras que forzó al exilio a gran parte de los de la izquierda marxista, incapaces de subsistir al margen de los empleos estatales, permitió que desde las páginas de *Al-Chaab*, fundado en mayo de 1979, y que en 1980 alcanzaría una difusión de 60.000 ejemplares, se le lanzaran críticas similares a las de aquella, en particular desde el ingreso en el PST de Helmi Murad, que junto a Fathi Radwán y Mohammed Usfur denunciarían persistentemente los Acuerdos de Camp David, las violaciones de la legalidad constitucional, la labor del presidente del Gobierno Mustafa Jalil, y el acercamiento a Estados Unidos. Tal vez Sadat no quisiera enfrentarse directamente a dos viejas figuras del régimen naserista como Murad y Radwán, o tal vez confiara en que el presidente del PST en el que había confiado, Ibrahim Chukri, acabara por moderarlos. No obstante, finalmente Murad sería incluido, como tantos otros periodistas, en la lista de personajes de oposición arrestados el 1 y el 2 de septiembre de 1981, y el permiso de publicación de *Al-Chaab* sería suspendido (Gómez García 1996: 33-34).

5.3.2 Los abogados y hombres de leyes y el Sindicato de Abogados: independencia y control final

Sadat pretendió contar con dos bazas para ganarse, si no la aquiescencia, al menos la no beligerancia de los abogados. Por un lado, esperaba que el “retorno del imperio de la ley” y del pluralismo (y ciertas dosis de liberalismo) que según él caracterizaba su mandato satisficiera a los profesionales del Derecho tanto desde un punto de vista moral y político como desde un punto de vista económico. El *infitah* traería a los abogados nuevas oportunidades de negocio, mientras que el supuesto “imperio de la ley” les permitiría cumplir con su papel de defender las libertades y los derechos y combatir las injusticias (Fahmy 2002: 114-115). Sin embargo, aunque la primera premisa se cumplió, y numerosos abogados prosperaron económicamente, y aunque sus tendencias ideológicas eran muy variadas, el Sindicato de Abogados como colectivo mantuvo la línea de defender la independencia del poder judicial y las libertades públicas, y no se doblegó en defensa de ciertas políticas de Sadat, apoyando, por otro lado, a ciertas fuerzas de oposición, movimientos de protesta u otros colectivos profesionales.

En 1971, Sadat forzó la destitución de Ahmad al-Jawaga, hombre de la USA, y propició el retorno de Mohammed al-Baradei, al que Náser había apartado del sindicato por ser “demasiado liberal” (también en economía). No obstante, Al-Baradei mantuvo una

línea independiente, apoyando las manifestaciones estudiantiles y obreras de 1972 y 1973, y reclamando reiteradamente que se reinstauraran las libertades públicas y la independencia del poder judicial. En las elecciones de 1975, Sadat intentó desplazar a Al-Baradei de la presidencia promoviendo una lista alternativa, pero sus esfuerzos fueron infructuosos, y Al-Baradei continuó criticando al Gobierno cuando le pareció adecuado, incluyendo en ello las revueltas de 1977, ante las cuales el presidente del Sindicato atribuyó los disturbios y la violencia a la ausencia de partidos políticos y otros medios e instrumentos de expresión y representación. Tras la muerte de Al-Baradei en ese mismo año, Sadat no encontró mejor solución que apoyar una nueva candidatura de Al-Jawaga. Aunque este intentó desempeñar el correcto papel de intermediario entre el régimen y sus representados, sin violentar sus relaciones con aquel, los miembros del sindicato le obligaron a mantener la línea crítica hacia el régimen y la tradicional política de la organización de fomentar el pluralismo y el debate, acogiendo en su sede a fuerzas de oposición, como Fuad Serag Eddín, que desde ella lanzó el anuncio de constitución del partido Neo-Wafd. El sindicato y su presidente criticaron las amenazas de Sadat de disolver a su homólogo de periodistas, y la creación de los tribunales de Seguridad y de la Ética -precisamente destinados a sortear los reparos de los profesionales del derecho-, pero probablemente fuera su crítica de los Acuerdos de Paz con Israel -que pidieron que fueran suspendidos tras el bombardeo israelí del reactor nuclear iraquí en 1981- lo que colmaría el vaso de la paciencia de Sadat, quien, el 26 de junio de 1981, movilizó a sus leales para que -venidos de todas las provincias de Egipto- presentaran una moción de confianza en la Asamblea General del sindicato. Aprovechando la ocasión, Sadat pidió que se formara una comisión parlamentaria para investigar si Al-Jawaga había “difamado a Egipto” -es decir, criticados a sus gobernantes- en el extranjero. La comisión concluyó que Al-Jawaga había actuado deslealmente, y lo puso en manos del Fiscal General Socialista, llamando a la convocatoria de elecciones en el sindicato. Para el periodo transitorio, Sadat designó como presidente a Gamal Utayfi, uno de sus hombres de confianza, como hemos visto anteriormente en el capítulo II 2.3.2. Cinco miembros del Consejo de Dirección del Sindicato serían detenidos en la gran campaña de detenciones del 1 y el 2 de septiembre de 1981 (Fahmy 2002: 113-116; Waterbury 1983: 383).

Los jueces también mostraron cierta independencia del poder ejecutivo al fallar en diversas ocasiones en contra de los intereses de aquel. Una de las más destacadas fue cuando emitieron el veredicto de inocencia de los izquierdistas procesados por su supuesta organización de las protestas de 1977. Como hemos señalado, esta independencia fue la causa principal de que Sadat instituyera los Tribunales de la Ética y otros tribunales de excepción.

5.3.3 El Sindicato de Ingenieros: reflejo de la política de *infitah*

La evolución del Sindicato de Ingenieros a lo largo de los años 80 (y después) constituyó un fiel reflejo de la evolución política y económica del régimen. La importancia de los ingenieros como tecnócratas en la gestión de los asuntos políticos en época de Náser -y entre ellos de los ingenieros militares- había llevado a que la profesión contara con un gran prestigio social y a que las relaciones del sindicato con el poder constituyeran el más perfecto modelo de las relaciones de tipo patronal-clientelar que en general predominaban entre el Estado y los colectivos profesionales. Bajo el mandato de Sadat, el peso de los militares en el sindicato disminuyó, mientras que los ingenieros en general pasaron a ocupar una proporción aun mayor de las carteras ministeriales. El sindicato casi nunca planteó problemas políticos, y en la segunda mitad de la década se convirtió en un entramado profesional-empresarial que se beneficiaba de manera particular de los dudosos negocios característicos del *infitah*.

La única ocasión en la que el sindicato llevó la contraria al poder político fue en 1972, cuando se unió al de abogados y periodistas para apoyar las manifestaciones estudiantiles. Bajo la presidencia de Abdel Jaleq al-Chinawi (1970-1975) y de Mustafa Jalil (1975-1979), que posteriormente sería presidente del Gobierno, consiguió que el Gobierno respondiera a sus demandas de regulación de la profesión, impidiendo el intrusismo y obligando a los ingenieros extranjeros a afiliarse, así como obteniendo sustanciales mejoras en sus pensiones y en la financiación del sindicato, que pasó incluso a recibir ingresos de tasas cobradas a productos básicos como el cemento o el acero. Así mismo, recibió la autorización de invertir en actividades como la creación de cooperativas de vivienda, clínicas y hospitales, sistemas de seguros o clubes sociales y deportivos (Fahmy 2002: 128-129).

Pero la gran evolución económica del sindicato vino marcada por la autorización o tolerancia de sus actividades económicas, que sobrepasaban con mucho las habituales en las organizaciones sindicales y profesionales de otros lugares del mundo. Esta evolución fue iniciada por Mustafa, pero fue desarrollada sobre todo por Osmán Ahmad Osmán, elegido síndico en 1979 por solo 7.000 de los 103.000 miembros del sindicato. Osmán había sido ministro de Construcción y de Vivienda (bajo las diversas denominaciones del Ministerio) entre 1973 y 1976, y lo sería de Desarrollo Popular (التنمية الشعبية) en 1981, compatibilizando dicho puesto con el de síndico y con el de presidente de honor de la empresa Arab Contractors, ya mencionada. Por su parte, su hijo Ismail Osmán compatibilizaría su puesto en el consejo de dirección de dicha empresa con el de vicesecretario general del sindicato, con la presidencia del Comité de la Vivienda de la provincia de Guiza y con la pertenencia a los consejos de dirección de varias cámaras de

comercio (Fahmy 2002: 130). Como hemos mencionado, los Osmán eran la familia más influyente económica y políticamente de Egipto.

Con estos mimbres en la dirección del sindicato, este invirtió en 16 proyectos económicos en colaboración con Arab Contractors y con el Banco de Suez. El primero de ellos fue la creación de un banco propiedad del sindicato, y los demás abarcaron actividades tan diversas como la producción de acero, ladrillos y comida; de ellos 14 acabarían con el tiempo en la bancarrota. Pero además de la mala gestión, las actividades económicas del sindicato, fruto de decisiones unilaterales de Osmán, dejarían tras de sí un reguero de corrupción. El banco de los ingenieros concedió numerosos créditos a proyectos nada fiables y poco relacionados con las actividades de ingeniería, como los 2 millones de LE concedidos al mencionado Taufiq Abdel Hai (véase capítulo II 4.6.1) para que importara varias toneladas de pollos congelados de caducidad vencida. En las empresas creadas por el sindicato figuraban gerentes, nombrados por O.A. Osmán, como el también mencionado Rachad Osmán, que sería juzgado como Abdel Hay por uno de los mayores casos de corrupción tras la muerte de Sadat. A pesar de ello, Osmán continuaría siendo el presidente del sindicato hasta el principio de los 90 (Fahmy 2002: 130-131).

Al margen del papel personal de Osmán, como señala Waterbury (1983: 381), a finales de los 70 el Sindicato de Ingenieros “se había convertido, sencillamente, en parte integral de la simbiosis entre los sectores público y privado, y entre el capital extranjero y local”.

5.4 LOS AGRICULTORES Y CAMPESINOS

Las políticas del régimen de Sadat afectaron de diferente manera a los agricultores y campesinos según su estatuto en relación a la tenencia de la tierra. Los propietarios grandes y medios se vieron en general favorecidos, como veremos a continuación, por diversas medidas; quienes eran principalmente arrendatarios se vieron perjudicados por esas mismas medidas, dependiendo el grado de sus pérdidas del partido que supieran sacar de la mejora global de la economía, y de los ingresos agrícolas en particular, en la segunda mitad de los 70; los asalariados y jornaleros padecieron de manera singular el descenso general de los ingresos en la primera mitad de los 70, pero en la segunda se recuperaron parcialmente gracias a la considerable subida de los salarios, que en la agricultura fue ligeramente superior a la del medio urbano. Como hemos señalado, el porcentaje de pobres rurales, que se incrementó considerablemente en la primera mitad de los 70, disminuyó en la segunda hasta volver a índices similares a los del final de la década anterior, lo que en términos absolutos significa que en la década de 1970 no hubo ningún progreso en este sentido. No hay que olvidar, sin embargo, el papel desempeñado en esta situación por la

emigración desde el medio rural, que en 1979 y los años inmediatamente anteriores se estimaba en cerca de 200.000 emigrantes anuales, de los cuales 135.000 se dirigían al extranjero y el resto a las ciudades egipcias (Waterbury 1983: 296).

En términos políticos, con las medidas que favorecían a la burguesía agrícola, el régimen de Sadat buscó el apoyo de esta, búsqueda que se tradujo también en el acceso de numerosos notables rurales al Parlamento en 1976. Sin embargo, Sadat no deseaba que el fortalecimiento de dicha burguesía diera pie a la formación de un bloque socioeconómico independiente e incluso opuesto a él en términos políticos, sentido en el que apuntaba la presencia de un numeroso grupo de diputados independientes en dicho Parlamento y el posterior intento de reconstitución del partido Wafd. De ahí que provocara la autodisolución de este partido y forzara la disminución, en el Parlamento de 1979, de la presencia de notables rurales entre los diputados del partido gubernamental y entre los diputados independientes electos.

Por otra parte, la desactivación del potencial papel político de las cooperativas apuntó a reforzar el control del régimen sobre el medio rural, independientemente de que aquellas pudieran, según los casos, representar los intereses de la burguesía o de otros estratos inferiores en términos socioeconómicos.

La Ley 69 de 1974 dio un decisivo impulso a la devolución de tierras secuestradas por la Oficina de la Reforma Agraria, que había comenzado en 1971. En ese año, al menos 24.000 *feddan*es fueron devueltos a sus antiguos propietarios, de los que se estima que 400 *feddan*es de huertos frutales volvieron a la familia de los Serag Eddín. La última ley en este sentido, la Ley 141 de 1981, sería promulgada en los últimos días de Sadat, y al ser implementada en época de Mubarak elevaría el montante total de tierras devueltas a 147.000 *feddan*es (Ansari 1986: 102-103).

A partir de 1975, las leyes reguladoras de la tenencia de la tierra fueron modificadas, incrementándose las rentas pagadas por los arrendatarios (hasta un 100% en 1979), permitiéndose el régimen de aparcería, facilitándose la desposesión de los arrendamientos de aquellos arrendatarios que no pagaran sus rentas, y eliminándose los comités de arbitraje, lo que en la práctica suponía beneficiar a la parte más poderosa en el recurso a la justicia ordinaria, los arrendadores. Se estima que un millón y medio de campesinos se vieron afectados por el cambio de la legislación relativa a la tenencia de la tierra (Ansari 1986: 191-192).

El incremento de la rentabilidad de las tierras agrícolas, y en particular de las dedicadas al cultivo de frutas y verduras, exentos de la obligación de entregar una parte de la cosecha al Estado y que ofrecían la posibilidad de obtener grandes ingresos mediante la exportación, fue la razón alegada para aumentar las rentas pagadas por los arrendamientos (siendo la aparcería un régimen aún más beneficioso para los arrendadores). Entre 1952 y

1976, la superficie dedicada a huertos frutales pasó de 64.000 a 313.000 *feddan*es; y la dedicada a verduras de 652.000 a 913.000 entre 1966 y 1976. A principios de los 60, los poseedores de más de 50 *feddan*es, los que sin lugar a dudas se podía calificar de campesinos ricos, tenían el 51% de la superficie de huertos frutícolas; en 1979 la superficie poseída por dicho estrato era del 56% de los huertos (Ansari 1986: 190-191).

El beneficio obtenido de las políticas de Sadat por la burguesía agrícola no habría sido logrado sin una intensa actividad política por parte de esta. Cuando Sadat asumió el poder nombró a uno de sus protegidos, Ahmad Yunis, como presidente de la Confederación Egipcia de Cooperativas Agrícolas. Sin embargo, Yunis se esforzó por situar a la confederación fuera del control del Estado y convertirla en un grupo de presión en la política nacional. Creó una red clientelar entre los miembros de la Asamblea del Pueblo, contratando a diputados como consultores de la Confederación. En 1976, a pesar del trato bastante favorable recibido del régimen, Yunis se negó a satisfacer la demanda del presidente del Gobierno de que la Confederación apoyara oficialmente al PND. Según él, la Confederación debía ser independiente, aunque según Fahmy (2002: 209-210) era obvio que apoyaba a los candidatos wafdistas que se presentaban como independientes. Posteriormente, Yunis pidió que se suspendieran las entregas obligatorias al Estado de parte de la cosecha a precios fijos, y la libertad de establecer “lazos democráticos” con otras organizaciones profesionales. Sadat, que como hemos dicho había favorecido a las clases terratenientes para que lo apoyaran, y no para que intentaran volver al poder, hizo emprender una campaña contra Yunis, que fue acusado de mala gestión y corrupción en 1976, y desposeído de su cargo. Ese mismo año, la Confederación fue abolida y las cooperativas perdieron parte de sus prerrogativas, como la de obtener créditos del Estado y distribuirlos discrecionalmente, tarea que sería encomendada a los bancos locales, controlados por el poder central.

A pesar de que el régimen de Sadat favoreció los intereses de la burguesía agrícola, sobre todo, como hemos explicado, introduciendo enmiendas en la regulación de los arrendamientos, los aspectos estructurales básicos de la legislación naserista al respecto siguieron vigentes: uno de ellos era la fijación por ley de la renta de los arrendamientos en relación al impuesto patrimonial sobre la tierra, que aunque fuera incrementado en función de las dos variables -impuesto y número de veces por las que se multiplicaba-, no dejaba al libre albedrío de los arrendadores su fijación. El otro, quizás más determinante, era el carácter hereditario de los arrendamientos y la imposibilidad para los arrendadores de cancelarlos, excepto en el caso de que no fueran pagadas las rentas. En cuanto a los jornaleros y asalariados agrícolas, como hemos señalado, en la segunda mitad de los 70 conocieron importantes incrementos en los salarios, auspiciados tanto por la política gubernamental como por la mejora de la rentabilidad de la agricultura: entre 1975 y 1981

los salarios y jornales subieron un 385% en términos nominales, mientras que en términos reales lo hicieron un 83% (Zaytoun 1991: 250). Por tanto, aunque favoreció los intereses de la burguesía agrícola, el régimen de Sadat intentó evitar enajenarse completamente al sector mayoritario de la población rural, que si bien continuó conociendo altos índices de pobreza y emigración forzada, dejó de verse expuesta a las explosivas condiciones económicas y sociales que se configuraron en la primera mitad de los 70.

5.5 LOS ESTUDIANTES

Ya hemos señalado en diversos capítulos de esta Segunda Parte de nuestro trabajo la mayoría de los rasgos principales de la evolución de los movimientos estudiantiles y de la actitud del poder político frente a ellos. No obstante, recapitularemos dichos rasgos, mencionando algunos más.

La extensión de la educación universitaria a lo largo de la década de 1970 hizo que el estamento estudiantil adquiriera una relevancia social y política sin parangón en la historia egipcia, a pesar de la importancia con la que ya había contado en épocas anteriores. Entre 1973 y 1983 el número de estudiantes universitarios se incrementó en más de un 100%, alcanzando el medio millón de estudiantes, y lo que tal vez fuera aun más trascendente, dicho número se distribuyó en una extensión geográfica mucho mayor (عبد الله 1991: 267-268). Si bien la Universidad de Asiut, la más lejana de El Cairo, centro geográfico, administrativo y político de Egipto, había sido fundada en 1957, en los 70 se abrían o se consolidaban la mayor parte de las universidades situadas fuera de los centros urbanos El Cairo y Alejandría, como las de Zaqaziq y Tanta, en el Delta, la del Canal de Suez, y la de Helwán, en las inmediaciones de El Cairo.

Según Ahmad Abdallah (عبد الله 1991: 272), en las universidades egipcias de los 70 había cinco corrientes políticas más o menos organizadas: “la izquierda radical”, caracterizada por su orientación marxista, y de larga tradición; “la izquierda naserista”; “el fundamentalismo islámico”; “la derecha ideológica”, formada por quienes apoyaban las nuevas orientaciones del nuevo régimen político, pero deseaban que fuera más lejos en ellas; y “los partidarios del régimen”. Sin embargo, ni “la derecha ideológica” ni los partidarios del régimen contaron con un movimiento estudiantil organizado. Como ya hemos señalado, hasta 1974 fue la corriente de izquierdas, y en particular “la izquierda radical”, la que encabezó los movimientos de protesta contra las políticas del Gobierno, en particular en las protestas estudiantiles de 1972 y 1973.

La izquierda defendió la autorización de la formación de organizaciones estudiantiles “independientes”, y de hecho consiguió que la oficial Unión de Estudiantes aceptara la constitución del Foro de Pensamiento Socialista Progresista (نادي الفكر الاشتراكي)

(جماعة أنصار الثورة الفلسطينية) y la Asociación de Apoyo a la Revolución Palestina (التقدمي). A través de estas organizaciones, además de defender las reivindicaciones específicas de los estudiantes, exigió el fin de los límites impuestos a las libertades políticas, la autorización sin cortapisas de partidos y la disminución de los poderes atribuidos al presidente de la República, oponiéndose asimismo a la política de *infatih* y a las políticas “de rendición a Israel”. Estas reivindicaciones fueron expuestas de manera particularmente explícita y general en las conclusiones de la Semana de la Universidad y la Sociedad, organizadas en noviembre de 1976 por el Foro de Pensamiento Socialista Progresista y el Foro de Pensamiento Naserista (نادي الفكر الناصري), y fueron llevadas inmediatamente hacia el Parlamento en una marcha que se decidió llevar a cabo a su conclusión (عبد الله 1991: 273-274).

A pesar del fracaso relativo de la marcha, abandonada progresivamente por la mayor parte de los 2000 estudiantes que la emprendieron, probablemente por temor, la “semana” tuvo una gran relevancia, por diversas razones. Por un lado, señaló el principio de la cooperación entre las corrientes marxista y naserista, difícil hasta ese momento a causa del enfrentamiento ideológico entre ambas en la época naserista. Por otro, puso de relieve la opción de la no cooperación de la corriente islamista, pues invitada a participar en el encuentro y en su organización, en principio aceptó hacerlo, pero luego declinó la invitación. Además, fue novedosa la invitación a expresar sus opiniones en el encuentro a todas las plataformas políticas recientemente creadas... con la excepción de la plataforma gubernamental. El evento desató las iras del régimen, lo que se manifestó en las violentas críticas que recibió de toda la prensa estatal (con la relativa excepción de *Ruz al-Yusuf*), y en las alusiones a él que posteriormente haría el propio Sadat.

La implicación directa de Sadat en la crítica del movimiento estudiantil se produjo pocos días después de las protestas de 1977. En un encuentro con el Consejo Superior de Universidades, el presidente calificó las huelgas, los encierros y la interrupción de las clases de “actividades de golfos” (بلطجية)¹¹² y señaló que debían ser excluidas de los campus, conminando a quien quisiera hacer política “a buscar el partido que quisiera en el exterior”¹¹³. Dos días después, en una reunión con la oficial Unión de Estudiantes, a cuyos asistentes se dirigió tratándolos de “hijos míos”, criticó la marcha de noviembre del año anterior, afirmó que ningún ministro atendería a reivindicaciones realizadas de esa manera y, aunque afirmó su compromiso con la democracia, advirtió que esta “tenía colmillos más

¹¹² بلطجية tiene otra traducción más exacta en la mayoría de los contextos. Los *baltaguiyya* son “matones”, que aparte de ejercer sus propias actividades, a menudo delictivas, alquilan sus servicios al mejor postor. Los hemos mencionado en la introducción histórica (2.2.4) y volveremos a mencionarlos en diversos momentos al tratar la época de Mubarak.

¹¹³ Diario *Al-Ajbar*, 31 de enero de 1977. Citado por عبد الله (1991: 276).

incisivos que ninguna legislación excepcional”. Los principales representantes oficiales estudiantiles no se arredraron, sin embargo, ante la presencia y las críticas del presidente, expresando sus diferentes reivindicaciones y logrando sacar a aquel de sus casillas, hasta el punto de interrumpirles reiteradamente. Dos de ellos luego tendrían una larga carrera política, llegando a enfrentarse en 2013 como candidatos a la Presidencia de la República. El primero de ellos es el naserista Hamdín al-Sibahi, que era presidente de la Unión de Estudiantes de la Facultad de Periodismo de El Cairo, y el segundo Abdel Moneim Abul Futuh, presidente de la Unión de Estudiantes de la Universidad de El Cairo, que pocos años después ingresaría en los Hermanos Musulmanes. La intervención de Abul Futuh sería y es particularmente recordada, pues aunque coincidió con el presidente en descalificar la marcha de noviembre, en tanto que dirigida por una “camarilla de comunistas” (شرذمة شيوعية), atacó sin ambages a los medios de información y a los “hipócritas” que rodeaban al presidente, afirmación que acabó de hacer que Sadat perdiera los nervios pues el término empleado (منافقون), si bien denota el significado general de “hipócritas” que hemos mencionado, en el Corán y en la tradición religiosa islámica apunta específicamente a quienes manifiestan su condición de creyentes sin serlo sinceramente¹¹⁴.

A partir de 1978-1979, la corriente islamista impuso su dominio tanto en las elecciones estudiantiles como en los campus, lo que llevó a las autoridades, como hemos mencionado, a reinstaurar los servicios de vigilancia en los campus y a promulgar un nuevo reglamento para la Unión de Estudiantes (Decreto Republicano, o presidencial, 256 de 1979). El Decreto eliminó la Unión de Estudiantes como organización a nivel estatal y a nivel de universidades y solo conservó las organizaciones estudiantiles al nivel de las facultades y escuelas; atribuyó en sus consejos de dirección una representación mayoritaria a profesores y administrativos; y obligó a los candidatos a formar parte de él a obtener la aprobación de los servicios de seguridad (عبد الله 1991: 277).

6. EL FIN DEL MANDATO DE SADAT: REPRESIÓN Y ASESINATO

Aunque tal vez los Acuerdos de Paz con Israel fueran recibidos con cierta indiferencia, o incluso con satisfacción, por gran parte de la población, entre los sectores politizados, organizados y más influyentes de la sociedad su rechazo constituyó, prácticamente sin excepción, el *leitmotiv* mediante el que canalizar sus otras razones de

¹¹⁴ Diario *Al-Ajbar*, 2 de febrero de 1977. Citado por عبد الله (1991: 276).

descontento frente a las políticas de Sadat. Como hemos mencionado, desde los partidos políticos de oposición legales (Tagammu y PLS) hasta las corrientes islamistas radicales, pasando por los movimientos políticos informales o alegales (Wafd, Hermanos Musulmanes, corrientes marxistas, naseristas y liberales), por los principales sindicatos profesionales (periodistas, abogados), por destacadas figuras de los regímenes anteriores y por el papa copto -que prohibió las visitas de los fieles a Israel-, los representantes de las más diversas corrientes políticas y organizaciones sociales compartieron este rechazo, en ocasiones -como en el caso de los wafdistas- en aparente contradicción con algunos de sus principios generales.

Las desigualdades socioeconómicas a pesar de la relativa mejora de la economía; las tensiones confesionales ocasionadas por la gestión de las cuestiones religiosas; y el autoritarismo y las restricciones de las libertades políticas subyacían como factores coadyuvantes en la disidencia común frente a la política exterior egipcia. Pero Sadat no supo asimilar las críticas y gestionar el resto de los asuntos con el fin de aminorarlas, sino que, por el contrario, insistió en su deriva represiva salpicada de gestos contradictorios.

6.1 LAS ENMIENDAS CONSTITUCIONALES DE 1980, LA “LEY DE LA VERGÜENZA” Y EL CONTROL REFORZADO DE LA PRENSA

En mayo de 1980, el régimen de Sadat adoptó una batería de medidas legales que confirmaban su disposición a combinar la fachada de un cierto pluralismo y apertura con un dispositivo de control político reforzado. Las enmiendas a la Constitución de 1971, ratificadas en referéndum el 22 de mayo, daban por primera vez un marchamo constitucional al pluripartidismo, afirmando, en el artículo 5, que el sistema político de Egipto se basaba “en la pluralidad de partidos en el marco de los elementos de base y los principios fundamentales de la sociedad egipcia establecidos en la Constitución”. Otro aspecto destacado de las enmiendas era la creación, mediante el Capítulo VII de la norma, de una segunda Cámara, la Asamblea Consultiva (مجلس الشورى), encargada de estudiar y proponer lo que considerara oportuno para defender los principios generales establecidos por la Constitución (art. 194), y cuya opinión sería escuchada en lo relativo a las propuestas de enmiendas constitucionales, planes de desarrollo, tratados de paz y cooperación y otra legislación que pudiera serle sometida por el presidente de la República (art. 195). Sin embargo, la norma excluía explícitamente que la nueva cámara pudiera ejercer el control del Gobierno (art. 201). Dos tercios de la nueva asamblea serían elegidos por sufragio universal, siendo el tercio restante nombrado por el presidente de la República. Su mandato duraría seis años, renovándose cada tres la mitad de sus miembros, tanto electos como designados (arts. 196 y 198). Como seguiría sucediendo con el resto de

órganos de representación tras las enmiendas, la mitad de sus miembros deberían ser obreros y campesinos. Finalmente, el nuevo texto constitucional señalaba que el presidente de la República no podía disolver la Asamblea excepto en caso de “necesidad” (ضرورة), sin especificar que se consideraba “necesidad” ni establecer ninguna limitación a tal prerrogativa presidencial excepto la obligación de convocar elecciones para elegir una nueva Asamblea en el plazo de sesenta días (art. 207) (حلمي 1989: 205-208).

En el mismo Capítulo VII del nuevo texto constitucional, el Título II sobre “El poder de la prensa”, esta era definida como “poder popular autónomo, que debía ejercer su misión en libertad y con independencia en servicio de la sociedad (...) participando en la formación y orientación de la opinión pública en el marco de los principios fundamentales de la sociedad” (art. 207), para lo que se garantizaba la libertad de prensa y la prohibición de la censura (art. 208) y el derecho a la edición y posesión de periódicos a personas morales públicas y privadas, incluidos los partidos políticos, “de acuerdo con la ley”, estando sometidas la propiedad de los periódicos y su financiación “al control del pueblo” (art. 209) (حلمي 1989: 208-209).

Fuera del ámbito la organización de los poderes del Estado que hemos mencionado, la principal novedad de las enmiendas de 1980 se encontraba en su artículo 2, según el cual “los principios de la *charía*” pasaban a ser “la principal fuente de legislación”, en lugar de “una fuente principal”, como establecía el texto anterior. Esta concesión al islamismo político, junto a la ratificación del principio del pluripartidismo, se incorporaban a un texto en el que las disposiciones relativas al sistema económico y social, establecidas en 1971 y sin modificar, conservaban toda la retórica naserista relativa al socialismo (con el añadido de “democrático”), la alianza de fuerzas trabajadoras, la eliminación de la explotación, la reducción de las diferencias en los ingresos (art. 4), la propiedad por parte del pueblo de los medios de producción (art. 24), la participación acordada a todos los ciudadanos en la producción nacional (art. 25), la participación de los trabajadores en los beneficios (art. 26), la fijación de un límite máximo para las propiedades agrícolas y la protección de los campesinos de la explotación (art. 37) (حلمي 1989: 262-264).

Contemporáneamente a la introducción de las enmiendas constitucionales que acabamos de señalar, la Ley de Excepción que había estado vigente desde 1967 fue suspendida. No obstante, la Ley 105 de 1980 encargaba a los Tribunales de Seguridad del Estado juzgar a los “detenidos políticos” (atribución que anteriormente solo poseían durante la vigencia del Estado de Excepción), privándoles con ello del derecho a recurrir la sentencias, ausente en esta jurisdicción.

Por otro lado, en el mismo mes de mayo de 1980 sería promulgada la conocida como “Ley de la Vergüenza”, a la que ya hemos hecho referencia, destinada según su letra a “proteger los principios fundamentales de la sociedad”, que en la práctica serviría para

reprimir a los periodistas díscolos sometiéndoles a los Tribunales de la Ética (محاكم القيم), jurisdicción excepcional que a principios de 1981 emitiría sus primeras condenas.

Finalmente, en julio sería adoptada la Ley sobre el Poder de la Prensa, también mencionada en el capítulo II 2.3.2, que situaría a la prensa tanto pública como privada bajo el control de la Asamblea Consultiva por intermediación del Consejo Superior de la Prensa.

Hay que recordar que en el momento de la aprobación de esta legislación los únicos medios de prensa no estatales existentes, además de los del partido gubernamental y del PLS satélite del régimen, eran *Al-Chaab* del PST y diversas publicaciones de la órbita de los Hermanos Musulmanes, algunas de las cuales ya habían sido ocasionalmente secuestradas y suspendidas. Si a esta enclenque presencia de una prensa relativamente independiente añadimos las depuraciones llevadas a cabo en la prensa estatal, así como el reducido número de partidos autorizados aparte del gubernamental (eran tres: a los dos citados se sumaba el Tagammu) y las leyes “de protección” de 1977 y 1978 (que habían prohibido en la práctica las manifestaciones, huelgas y protestas de todo tipo y proscrito de la participación política a diversos personajes y corrientes políticas), concluiremos que la panoplia de disposiciones constitucionales relativas al pluralismo y las libertades políticas y públicas en la práctica habían quedado muy maltrechas.

6.2 UNIDAD DE LA OPOSICIÓN. INCREMENTO DE LA TENSION ENTRE SADAT Y EL PAPA

Tras la promulgación de la Ley de la Vergüenza, el periódico *Al-Chaab*, el partido Tagammu y los sindicatos de abogados y de periodistas mantuvieron un pulso con el régimen, negándose a someterse a él y a cesar en sus críticas. Su papel se vio amplificado por la cesión de sus páginas o sus sedes para que se expresaran las figuras de las diversas corrientes políticas, que celebraban encuentros o firmaban comunicados conjuntos. En estas actividades coincidían el wafdistas Fuad Serag Eddín, el presidente del Tagammu y exoficial libre socialista Jaled Mohai Eddín, los dirigentes del PST Helmi Murad y Fathi Radwán, los exministros naseristas Mohammed Hasanein Heikal y Aziz Sidqi, los exoficiales libres y exministros conservadores e islamistas Kamal Eddín Husein y Abdel Latif al-Bagdadi, miembros de los Hermanos Musulmanes, dirigentes de los sindicatos profesionales... La formación de un Frente Patriótico o una Coalición Nacional de oposición a Sadat estaba en boca de todos, y algunos eventos concluían con cánticos pidiendo la caída de Sadat (Shoukri 1981: 461-462).

Pero serían el papa Chenuda y otros elementos de la comunidad copta quienes primero desataran las iras de Sadat, con sus críticas a las concesiones del régimen al

islamismo político manifestadas en la enmienda del artículo 2 de la Constitución, y su tolerancia, o escasa efectividad, ante las acciones violentas, cada vez más frecuentes, de los grupos radicales. En el mismo mes de mayo de 1980, Sadat reaccionó por primera vez de manera desaforada ante dichas críticas.

En 1978 se habían producido el asesinato en oscuras circunstancias del obispo Gabriel Abdel Mutawali y el lanzamiento de cócteles *molotov* contra la iglesia de Masarra, lo que había provocado enfrentamientos adicionales que causaron muertos. En 1979 y 1980 se habían incrementado los enfrentamientos en el medio rural entre musulmanes y coptos, tras la emisión de fetuas por parte de algunos jeques religiosos radicales que autorizaban el homicidio de los cristianos y la apropiación de sus bienes. También se habían producido graves ataques de miembros de las *gamaat islamiyya* a estudiantes coptos, sobre todo en la Universidad de Alejandría (عثمان 2006: 73). En este contexto, el 26 de marzo de 1980 el papa Chenuda pronunció un discurso en el que rechazó que la *charía* fuera la principal fuente de la legislación general, con lo que esto implicaba que se aplicaría también a los coptos, y anunció que, como símbolo de ese rechazo, en ese año la Iglesia no organizaría la tradicional oración pública y masiva con ocasión de la Pascua, sino que él mismo y los obispos se retirarían al desierto a rezar para que acabaran los padecimientos de los coptos (هيكل 2006: 376-377). Poco después, a principios de mayo, mientras Sadat realizaba una visita oficial a Estados Unidos, la comunidad copta de EEUU siguió su práctica habitual de aprovechar estas ocasiones para lanzar una campaña de denuncia del incremento del fanatismo islámico en Egipto y de la tolerancia de las autoridades. El 15 de mayo, en el discurso de conmemoración de la Revolución Correctiva de 1971 ante el Parlamento, Sadat sorprendió a propios y extraños anunciando que tenía información fidedigna acerca de las ambiciones políticas del papa Chenuda, quien, según él, quería ser el dirigente político y no solo religioso de los coptos, e incluso aspiraba a la formación de un Estado copto en el Alto Egipto con capital en Asiut. Sin embargo, “el papa debe saber -afirmó el presidente- que yo soy el presidente musulmán de un Estado musulmán”, y reiteró su frecuente afirmación de que “la política no debe intervenir en la religión ni la religión en la política”, desdeñando la contradicción entre ambas afirmaciones y entre la última y sus recientes enmiendas constitucionales. E incluso con la velada amenaza que expresó a continuación: “he estado a punto de tomar una medida violenta”, pues según Heikal dicha medida, no explicitada en público pero sí revelada a sus asesores, habría sido desposeer a Chenuda de sus funciones papales (هيكل 2006: 376-377).

El mes de mayo de 1980 puso de manifiesto la pérdida por parte de Sadat de su autocontrol, principalmente originada por dos incapacidades: hacer que política y socialmente se aceptara la paz con Israel, y someter a los grupos islamistas radicales.

A lo largo de los primeros meses de 1981 se sucederían las detenciones de periodistas y se estrecharía el cerco gubernamental sobre los sindicatos de abogados y periodistas, mientras se reproducían los desafíos de las organizaciones islamistas radicales a las prohibiciones de las autoridades en forma de organización de actos no autorizados y discursos incendiarios. Los ocasionales descubrimientos de arsenales de armas, incluyendo armamento semipesado -como misiles antiaéreos-, entre 1980 y 1981 no hicieron más que aumentar la inquietud de las autoridades (هيكل 2006: 392).

En medio de la toma del control por decreto de los sindicatos de periodistas y abogados a mediados de junio de 1981, un nuevo “enfrentamiento interconfesional” de singular gravedad sería, con toda probabilidad, el detonante para que Sadat decidiera tomar medidas excepcionales. El 17 de junio, en el barrio de Zawiyya al-Hamra del norte de El Cairo estalló una nueva disputa entre grupos de musulmanes y de coptos por la pretensión de estos de construir una iglesia ilegal (no autorizada). La disputa degeneró rápidamente en un enfrentamiento armado con armas blancas que, según declaró el ministro del Interior el 21 del mismo mes ante el Parlamento, causó 10 muertos y varias decenas de heridos, si bien en los días posteriores, ante la persistencia de los enfrentamientos, el número de fallecidos se incrementó hasta 35 (Cannuyer 2011: 907).

6.3 LAS DETENCIONES MASIVAS DE SEPTIEMBRE DE 1981

Contemporáneamente a los sucesos de Zawiyya al-Hamra se filtró la noticia de que el Ministerio del Interior disponía de información acerca de una conspiración islamista para derrocar al régimen. Según Waterbury (1983: 363), en aquel momento nadie dio credibilidad a la noticia, que se interpretó, sin embargo, como un signo inequívoco de que tarde o temprano Sadat tomaría alguna medida de gran alcance contra el islamismo radical. El propio Sadat confirmó a finales de julio que estaba meditando tomar medidas excepcionales, y a lo largo de agosto, según Heikal, en los círculos del poder se intuía que dichas medidas estaban a punto de producirse, pero casi nadie tenía información concreta al respecto (هيكل 2006: 394).

El 3 de septiembre comenzaron a producirse detenciones, según Heikal de miles de estudiantes y activistas islamistas, aunque las más conocidas serían las de las 1.536 personas detenidas en los dos días siguientes, cuya lista fue publicada en *Al-Ahram* el 7 de septiembre. Y la gran sorpresa fue que entre ellas se encontraban todo tipo de personalidades de todas las corrientes políticas, o no estrictamente políticas, que de un modo u otro cupiera encuadrar dentro de la oposición. Por citar tan solo a las más relevantes entre los políticos, sindicalistas e intelectuales mencionaremos a los wafdistas Fuad Serag Eddín y Abdel Fattah Hasan; a los miembros del PST Helmi Murad y Fathi

Radwán; a los miembros del Tagammu Fuad Mursi e Ismail Sabri Abdallah; a los exministros naseristas Mohammed Hasanein Heikal, Abdel Salam Zayyat y Mohammed Faeq; a los diputados independientes Ahmad Taha, Mahmud al-Qadi, Adel Eid y Kamal Ahmad; a la mayoría de los miembros electos del Consejo de Dirección del Sindicato de Abogados, incluido su presidente; a los profesores, escritores e intelectuales Milad Hanna, Esmat Seyf al-Dawla, Husein Abdel Razeq y Salah Aisa; al dirigente estudiantil naserista Hamdín Sibahi, al sindicalista obrero Kamal Aita; a las líderes feministas Nawal al-Saadawi y Latifa al-Zayyat...

Junto a los mencionados fueron arrestados también algunos de los principales líderes religiosos islamistas que, aunque no formaban parte del islamismo que denominamos en estas páginas “radical”, eran tenidos por contestatarios o conflictivos, como Omar al-Telmesani, guía de los Hermanos Musulmanes, o los jeques Abdel Hamid Kichk y Ahmad al-Mahlawi; así como obispos coptos y, según Heikal, cientos de sacerdotes, aunque la lista oficial de detenidos incluía tan solo a 150 coptos (هيكل 2006: 395-396). Por su parte, el papa Chenuda fue destituido de sus funciones y exiliado al monasterio de Wadi Natrún, designando Sadat a la cabeza de la Iglesia copta a un grupo de cinco obispos, entre los que se encontraba el obispo Samuel (véase capítulo II 3.4.3). Por supuesto, el periódico *Al-Chaab* y todos los medios de prensa de los Hermanos Musulmanes perdieron sus licencias de publicación.

Paradójicamente, la mayor parte de los dirigentes de los grupos islamistas radicales, que se suponía que debían ser uno de los objetivos principales de las detenciones, se libraron de ellas. Según Al-Zayyat esto se debió a que se encontraban huidos y escondidos tras el descubrimiento por parte de la policía en los meses anteriores de varios arsenales de armas, alguno incluso en casa de militantes, como Abud al-Zumur (الزيات 2005: 130-131).

En las semanas siguientes a las detenciones, casi todos los días Sadat pronunció algún discurso, hizo declaraciones a la prensa local o concedió entrevistas a la prensa extranjera¹¹⁵. Su tono era cada vez más prepotente, agresivo y falto de toda contención y coherencia. Ya en su discurso del 5 de septiembre en el que justificó las detenciones deslizó frases como: “No necesito pedir permiso a nadie para tomar mis decisiones” o “La democracia tiene colmillos más afilados que ninguna dictadura”. Diversos medios extranjeros y locales citaron después una de sus respuestas a las críticas procedentes del extranjero, incluidas las del presidente francés François Mitterrand: “Esos imbéciles occidentales no han entendido que estoy luchando por ellos. ¿Qué importa que detenga a Heikal o destituya a Chenuda si ello es necesario para neutralizar a nuestro enemigo

¹¹⁵ En el mes de septiembre de 1981, Sadat pronunció 9 discursos según los recoge الارشيف الرقمي للرئيس أنور السادات, <http://sadat.bibalex.org/speeches/speechesall.aspx?CS=0>. Consulta del 14 de marzo de 2015.

común, los Hermanos Musulmanes?”¹¹⁶. Sin embargo, en otros discursos señalaba que el peligro principal venía de los comunistas, de los feudales, de las *gamaat islamiyya* y de los ateos.

En un discurso particularmente revelador del 30 de septiembre de 1981, con ocasión del Segundo Congreso Anual del PND, además de hacer un compendio de sus argumentos anteriores, el presidente se identificaba a sí mismo, a su régimen y a su Gobierno con “el Estado” (“atacan e insultan al Estado... y no tienen ni idea de lo que es el Estado” -esta última frase repetida dos veces en dos lugares distintos) o con los intereses del pueblo (“la democracia es más violenta [أشرس] que la dictadura porque nosotros defendemos a toda la base del pueblo [قاعدة الشعب], no defendemos a un dictador y su trono y los que están a su alrededor, defendemos a la amplia base [القاعد العريضة]”¹¹⁷). Para entonces, Sadat ya había incurrido en un gran número de ofensas personales dirigidas a diestro y siniestro. El 15 de septiembre, en un discurso televisado, dedicó una hora a atacar a Fuad Serag Eddín (“pachá feudal que nació con una cuchara de oro en la boca”) y otra a denostar a Mohammed Hasanein Heikal, con la incoherente pretensión de que le había confesado ser ateo y de que alentaba a los grupos islamistas. En otras ocasiones arremetió contra los islamistas, burlándose de las barbas que exhibían sus activistas (que imitaban las de los primeros musulmanes), llegando a llamar a las mujeres veladas “tiendas de campaña ambulantes” o complaciéndose porque el jeque Al-Mahlawi, que había criticado abiertamente sus políticas e incluso su fastuoso modo de vida, se encontrara ahora “tirado en la cárcel como un perro”¹¹⁸. También es ampliamente recordada, aunque difieran las versiones, su respuesta a un periodista extranjero ante una pregunta incómoda: “En los viejos tiempos podría haber recibido un tiro por esa pregunta”¹¹⁹ (هيكال 2006: 407-408; Waterbury 1983: 384).

Es un argumento muy compartido que numerosos egipcios que no estaban contra Sadat -sin estar necesariamente a favor- cambiaron sus puntos de vista no solo por la violencia explícita que implicaban las detenciones de la oposición sino también -y quizás muchos en mayor medida- por la violencia de sus agresiones verbales indiscriminadas.

¹¹⁶ Peroncel-Hugoz, *Le Monde*, 6 de octubre de 1981; *Al-Watan al-Arabi*, 2-6 de octubre de 1981. Citados por Waterbury (1983: 385).

¹¹⁷ خطاب الرئيس محمد أنور السادات في الجلسة الختامية للمؤتمر العام الثاني للحزب الوطني الديمقراطي، pronunciado el 30 de septiembre de 1981. En internet, en el sitio أنور السادات الرقمي، <http://sadat.bibalex.org/speeches/browser.aspx?SID=1081>. Consulta del 14 de marzo de 2015.

¹¹⁸ Discursos del 5 y 15 de septiembre de 1981 en أنور السادات الرقمي، <http://sadat.bibalex.org/speeches/browser.aspx?SID=1073>. Consulta del 14 de marzo de 2015.

¹¹⁹ La versión de las palabras de Sadat citada por Heikal resulta aun más violenta: “Si no estuviéramos en un país libre, sacaría mi revólver y le pegaría un tiro”. Según Heikal, el periodista, de la televisión norteamericana ABC en una conferencia de prensa celebrada el 7 de septiembre de 1981, se habría interesado por si Sadat había consultado su opinión al presidente Reagan antes de emprender la campaña de detenciones (هيكال 2006: 407).

Según Waterbury (1983: 386), ante las intervenciones de Sadat cada vez más destempladas y frecuentes, los egipcios se sintieron gradualmente “aburridos, molestos e irritados”. Heikal (2006: 407-408), por su parte, afirma que Sadat perdió con esas declaraciones toda su credibilidad ante los egipcios, que empezaron a “trasladar las agujas de sus transistores hacia las emisoras extranjeras para saber lo que sucedía en su país”. Según el autor, aquellos “no perdonarían que el Jefe del Estado hablara de esa manera de adversarios políticos a los que acababa de encerrar en las cárceles”. En nuestra opinión, con las detenciones de septiembre y con su actitud tras ellas -que no hacía más que confirmar la de sus últimos dos años de mandato-, Sadat acabó de violar un modelo de ejercicio del poder presidencial que históricamente había sido legitimado o al menos aceptado, un modelo que daba al presidente muy amplios poderes, y entre ellos el recurso a la coerción y a una exclusión selectiva, pero que le exigía el respeto a ciertos límites: templanza, respeto, dureza pero no ensañamiento, inclusión de la mayoría.

6.4 EL ASESINATO DE SADAT. EL GRUPO YIHAD Y LAS GAMAAT ISLAMIYYA

La discrecional y arbitraria campaña de detenciones de Sadat dejó a los dirigentes y observadores extranjeros, y al pueblo egipcio en general, perplejos. Su intempestiva campaña de declaraciones posterior tuvo en Egipto, además, efectos si cabe más dañinos para la maltrecha popularidad del presidente. Diversos autores han señalado el papel desempeñado por la falta de autocontrol de Sadat, su tono y sus maneras desabridas y despectivas en el alejamiento definitivo de muchos egipcios de un presidente al que en algunos momentos reconocieron logros importantes, como la “victoria” de octubre de 1973, el relajamiento del autoritarismo en diversos terrenos, o incluso la paz con Israel (Waterbury 1983: 206; هیکل 2006: 408-409).

No obstante, un mes después, cuando el mundo y el país todavía no se habían recuperado de la sorpresa por las detenciones, el impacto de un nuevo acontecimiento superaba con mucho el de aquellas. El 6 de octubre, en el desfile de conmemoración de la “victoria de octubre”, un grupo de soldados participantes en el desfile, dirigidos por el oficial Jaled al-Islambuli y pertenecientes a la corriente islamista radical, acababa con la vida del presidente ante las cámaras de televisión.

La operación que acabó con la vida de Sadat había sido en gran medida improvisada, al darse la circunstancia de que pocas semanas antes del desfile se notificó a al-Islambuli que asumiría el mando de uno de los camiones del Ejército, y de que su hermano, líder de una *gamaa islamiyya* universitaria de El Cairo, había sido arrestado en la campaña de detenciones de septiembre de 1981. Esta circunstancia personal incrementó la animosidad de Al-Islambuli hacia Sadat, y le hizo concebir la idea de asesinarlo él mismo.

Hasta entonces Jaled al-Islambuli solo simpatizaba con las ideas de Abdel Salam Farag, pero no formaba parte de ninguna organización (الزيات 2005: 163-170). Sin embargo, el objetivo de derrocar al régimen por la fuerza anidaba en las filas de los militantes islámicos yihadistas desde 1979, y desde al menos principios de 1980 algunos habían emprendido labores organizativas para ello (الزيات 2005: 105; جنينة 1988: 101-103).

Tres líderes religioso-intelectuales, Abdel Salam Farag, Omar Abdel Rahmán y Ayman al-Zawahiri, habían destacado en la difusión de la idea de la necesidad de “organizar la yihad”, atrayendo a un gran número de miembros de las *gamaat islamiyya*, de tal manera que a principios de 1981 todas las corrientes yihadistas estaban unidas -según Al-Zayyat- en “un proyecto común”, con una estructura básica común, el Consejo Consultivo. En este proyecto y esta estructura coincidían las *gamaat islamiyya* del norte y el Delta, dirigidas por Abdel Salam Farag y Abud al-Zumur respectivamente, y las del Alto Egipto, representadas principalmente por Karam Zuhdi (الزيات 2005: 129-131). La diferenciación de estos dos grupos es importante, pues su coordinación operativa se produjo de manera episódica, durante apenas los dos años anteriores al asesinato de Sadat. Después, en las cárceles, surgirían disputas entre ellos y ambos grupos se separarían de nuevo doctrinal, organizativa y operativamente, manteniéndose estas diferencias durante los años 80 y 90, para reunirse de nuevo en un partido político (البناء والتنمية) Construcción y Desarrollo) tras la caída del presidente Mubarak en 2011. El grupo de Farag y Zumur, que fue el materialmente involucrado en el asesinato, sería conocido como Organización de la Yihad o Yihad, mientras que los grupos del Alto Egipto conservarían el nombre de *gamaat islamiyya*.

Las *gamaat islamiyya* del Alto Egipto se sometieron al liderazgo intelectual y organizativo de Farag, que había escrito el opúsculo *El precepto ausente* (الفريضة الغائبة), considerada judicialmente la obra que justificó el asesinato de Sadat¹²⁰. Farag, a su vez, no tenía inconveniente en admitir la preeminencia religioso-intelectual de Omar Abdel Rahmán, considerado por las *gamaat* del Alto Egipto, entonces y después, como su auténtico líder (الزيات 2005: 101, 129-131). Farag llevaba la delantera en la organización concreta de la yihad, para lo que contaba con la inestimable ayuda de Abud al-Zumur, oficial de los servicios secretos del Ejército, mediante el cual habían conseguido captar numerosos miembros dentro de aquel y evitar ser descubiertos por la inteligencia militar. Farag y Zumur fueron quienes proveyeron a Al-Islambuli de armas y una lista de soldados, a los que no conocía pero con los que podía contar para el asesinato (الزيات 2005: 169-170).

El proyecto común tenía una organización en “racimos”, pequeñas células de aproximadamente siete miembros que no se conocían entre ellas y que se entrenaban

¹²⁰ La obra de Farag puede consultarse en جنينة (1988: 223-275).

militarmente. Según Al-Zayyat, las montañas de Naga Hamadi, donde se entrenaba su célula, estaban llenas de grupos armados que no interactuaban entre ellos (الزيات 2005: 143). El objetivo final de este entrenamiento era llevar a cabo la segunda parte del plan de la “organización de la Yihad”: que varios cientos de hombres armados ocuparan algunos puntos neurálgicos y que el resto de los militantes se dirigieran a las mezquitas para llamar a la “revolución popular”. La inopinada ejecución de la primera parte de un plan en principio previsto con tres años por delante llevó, como es sabido, al fracaso de la segunda: tan solo en Asiut, el 8 de octubre, los militantes se apoderaron de las comisarías de policía y algunos edificios gubernamentales, cometiendo graves excesos al disparar discrecionalmente e incluso degollar a algunos policías desarmados. En el resto del país, se reveló la ingenuidad del plan: algunos intentos de tomar puestos de policía o estaciones de radio y televisión fueron fácilmente rechazados, y la mayoría ni siquiera se produjeron ante el considerable incremento de las fuerzas de seguridad que los protegían. Pero lo más sorprendente para los activistas fue que en las mezquitas prácticamente nadie respondiera a sus llamadas para que se unieran a ellos (الزيات 2005: 171-173; 183-184).

En cuanto a Al-Zawahiri, que luego sería mundialmente famoso en tanto que lugarteniente y sucesor de Osama Ben Laden al frente de la organización Al-Qaeda, iba, según Al-Zayyat, “por libre”, y rechazaba el liderazgo intelectual de Omar Abdel Rahmán, aceptado por la mayor parte de los militantes. Esto acabaría sembrando la discordia entre Al-Yihad, sobre el que tenía cierta influencia, y las *gamaat* del Alto Egipto tras la ejecución de Farag en 1982 y la asunción de la dirección plena de Al-Yihad por parte de Abud al-Zumur, condenado a 30 años de cárcel (الزيات 2005: 229-233). Al-Zawahiri consideraba que toda estrategia que se alejara de la lucha armada era ineficiente para el poder, y que los planteamientos y actividades de las *gamaat islamiyya* eran ingenuos, desorganizados e inocuos (الزيات 2005: 140-142).

El asesinato de Sadat llevó a la apertura de tres casusas judiciales distintas: una, la 426, dirigida contra los ejecutores, organizadores e instigadores del asesinato, en la que estaban imputados Abdel Salam Farag y Omar Abdel Rahmán; otra, por la organización del levantamiento de Asiut, con 302 imputados, entre los que estaban los principales dirigentes de las *gamaat islamiyya* del Alto Egipto así como Omar Abdel Rahmán y Abud al-Zumur; y una tercera en la que estaban imputados los miembros intelectuales de la organización, 167 personas, entre las que se encontraba Muntasir al-Zayyat. Farag, Al-Islambuli y otros dos acusados en la primera causa serían condenados a muerte y ejecutados en 1982.

La dispar suerte de algunos de los imputados en estas causas judiciales sería un tanto sorprendente. Omar Abdel Rahmán sería exculpado de las dos causas en las que estaba imputado por falta de pruebas y liberado en octubre de 1984. Seguiría residiendo en Egipto hasta 1987, cuando fue deportado. Posteriormente obtendría visados de Estados Unidos

para residir en el país en diversas ocasiones a principios de los 90, a pesar de estar en la lista de sospechosos de terrorismo del Departamento de Estado y de ser acusado por el Gobierno egipcio -acertadamente- de seguir siendo el dirigente espiritual de las *gamaat islamiyya*, que habían retomado las armas contra el Estado. Finalmente fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos en 1993, acusado de haber instigado el atentado contra el World Trade Center de Nueva York.

Ayman al-Zawahiri, que fue procesado y condenado a tres años de cárcel en 1981 en una causa previa al asesinato de Sadat y se encontraba en prisión cuando se produjo este, fue liberado también en 1984 tras la revisión de su proceso por haberse obtenido sus declaraciones inculpatorias bajo tortura y, según Al-Zayyat, “porque las autoridades no lo consideraban demasiado peligroso” (الزيات 2005: 150-151). Su historial posterior demostraría el error de dichas autoridades.

Finalmente, Abud al-Zumur fue condenado a cadena perpetua, pero lo sorprendente de su caso es que no fue liberado -pese a que debería haberlo sido según la legislación egipcia- hasta después del abandono forzado del poder del presidente Mubarak el 11 de febrero de 2011. Es un rigor que contrasta con la benevolencia de las penas impuestas a muchos de sus compañeros.

6.5 LAS BASES SOCIOECONÓMICAS DE LA EXPANSIÓN DEL ISLAMISMO RADICAL

Pero, ¿de dónde procedían socioeconómicamente los militantes radicales islámicos de cuyas filas salieron quienes mataron a Sadat?

Los estudios sociológicos pioneros de Ibrahim y Ayubi sobre los militantes del Grupo de la Academia Militar y de Al-Takfir wa-l-Higra, publicados en 1980¹²¹, ya habían mostrado ciertas novedades en dicha procedencia respecto a la de los militantes originales de los Hermanos Musulmanes. Los estudios realizados tras el asesinato de Sadat no harían más que confirmar, en general, dichas novedades (Ansari 1984; Ayubi 1996; Ibrahim 1985; جنيبة 1988). Los análisis de la composición de la militancia de la Hermandad desde los años cuarenta hasta los cincuenta habían revelado que entre ellos había, de todas las edades confundidas, funcionarios, profesores, administrativos, obreros, artesanos, estudiantes, desempleados e incluso algunos oficiales del Ejército y la policía. La mayor parte vivía en

¹²¹ Nos referimos al estudio ya citado de Ibrahim (1985) publicado en su primera versión en 1980, y completo en 1982, y al de Ayubi, N.: “The Political Revival of Islam: the case of Egypt”, *IJMES*, vol. 12, nº 4, diciembre de 1980.

las zonas urbanas, y por su vestimenta y otros hábitos en poco se diferenciaban de la clase de los *effendiya* (clase media y media-alta, urbana y vestida a la europea) (Ayubi 1996: 121-122). Sin embargo, los militantes de la primera mitad de los años 70 estudiados por Ibrahim y Ayubi se encontraban en su gran mayoría entre los veinte y treinta años, habiendo también bastantes por debajo de los veinte años, y eran en su mayor parte licenciados, estudiantes o profesionales, principalmente de carreras científicas. Socioeconómicamente, procedían de la clase media o media-baja, y los que trabajaban eran profesores, funcionarios, oficiales de policía y del Ejército, comerciantes y técnicos. En términos geográficos eran urbanos, pero tenían su origen reciente en el medio rural o en pequeñas ciudades, y era mayor el número de procedentes del Alto Egipto que los del Bajo Egipto o Delta del Nilo (Ayubi 1996: 122; Ibrahim 1985: 502-504).

Los datos sobre los detenidos en septiembre de 1981 reflejaron de manera más marcada algunas de las características citadas: la edad media de los 14 *emires* (jefes de grupo regional) detenidos era de 28 años, y solo uno de ellos tenía 50 años. La mayoría había nacido en el campo pero vivía en ciudades: 9 habían nacido en el Alto Egipto, 3 en el Delta y solo uno en El Cairo, pero se había trasladado posteriormente al Alto Egipto¹²².

Finalmente, el análisis de la procedencia geográfica y socioeconómica de los procesados y los condenados por el asesinato de Sadat confirma varios de los aspectos clave que estamos mencionando: a) la juventud de los militantes, de los que el 87% estaba por debajo de los 30 años; b) la predominancia de los estudiantes, casi el 44%, seguidos por los trabajadores (14,6%), los profesionales (12,5%) y los desempleados (10,7%), si bien los profesionales seguían a los estudiantes (24,75%) en el número de condenados; c) la mayor abundancia (49,82%) de militantes de las zonas periféricas pobres de El Cairo y el Gran Cairo, muchas de ellas urbanizaciones “espontáneas” (sector oeste de Guiza, Matariyya, Rod al-Farag, Bulaq Dakrur, Imbaba), y muchos de ellos de orígenes rurales; d) la gran presencia de residentes en el Alto Egipto (43,17%), teniendo en cuenta la escasa población de esta región, la mitad de la del Delta¹²³.

En definitiva, el movimiento radical islámico se nutría de manera muy particular de la pequeña burguesía, y dentro de ella de sus elementos más jóvenes que vivían una quiebra generacional marcada por la frustración y la desilusión ante una crisis de desarrollo que afectaba en particular a quienes residían en las zonas rurales más abandonadas por el Estado (el Alto Egipto) o se había visto obligados a dejarlas para habitar en la periferia

¹²² *Al-Ahram*, 7 de septiembre de 1981. Citado por Ayubi (1996: 123),

¹²³ Hemos utilizado los datos y análisis estadísticos tanto sobre los 271 militantes que fueron juzgados (el resto murieron o huyeron) como de los 101 que fueron condenados, aunque estos últimos, obviamente, se incluyen entre los primeros. Los primeros fueron realizados por Ansari (1984: 133), y los segundos por جنينة (1988: 135-143).

urbana de El Cairo, igualmente en las zonas más desfavorecidas. Dichos jóvenes veían disminuidas sus posibilidades de promoción económica y social, y retrasado el acceso al matrimonio, elemento fundamental en la vida personal y cultural de estos jóvenes. Una vez en las ciudades, el contraste entre, por un lado, las dificultades económicas de los recién llegados y los modos de vida tradicionales del medio rural -con su moral rigorista en el caso del Alto Egipto-, y por otro lado la riqueza y la moral “relajada” de ciertas clases sociales -reflejada en particular en algunos barrios-, no hacía más que incrementar el malestar, la irritación y el resentimiento de estos jóvenes (Ayubi 1996: 59- 77; 121-124).

Es importante recordar que, como hemos mencionado en el capítulo II 2.5.4, el grupo Al-Takfir wa-l-Higra fue pionero no solo en emprender actividades armadas, sino también en intentar presentar en la práctica más cotidiana un modelo alternativo de sociedad. El grupo no solo formaba comunidades en el desierto que se nos antojan premodernas, sino que también, en las zonas urbanas, ponía en común sus ingresos para alquilar apartamentos colectivamente en zonas periféricas de la ciudad y vivir de una manera simple (sin utilizar, por ejemplo, aparatos electrónicos) y semicomunal. Incluso se dieron casos de maridos, esposas y jóvenes que abandonaban a sus parejas o el hogar paterno para unirse a estas comunidades. Las autoridades y los medios de comunicación - en una actuación que nos resulta familiar en el siglo XXI, salvando las distancias, tras la irrupción del Estado Islámico en Siria e Irak-, presentaban el movimiento como formado por unos tipos sexualmente lujuriosos y depravados que corrompían a las menores de edad. En opinión de Mohammed Mahfuz, exmiembro de Al-Takfir wa-l-Higra, las autoridades deberían haber considerado más a fondo el problema e intentado resolverlo, sin desdeñar incluso soluciones del tipo de la hégira por el grupo, en lugar de recurrir únicamente a la represión -que según él fue la que desató una respuesta violenta- de unos jóvenes “privados de sus tendencias instintivas hacia el hogar y el matrimonio”, y situados frente a un Egipto plagado de “apartamentos amueblados y *night-clubs* que proporcionaban prostitución a gran escala” (محمود 1988: 108-117).

7. CONCLUSIONES

7.1 ENTRE EL CAMBIO Y LA CONTINUIDAD. LA INSERCIÓN DE LA “DUALIDAD”

En el marco general de este trabajo, el estudio de la evolución política de Egipto bajo el mandato de Sadat no es solo un objetivo en sí, sino que debe servirnos para acercarnos al objetivo general de esta tesis: comprender mejor la etapa posterior “de

Mubarak” y deducir las causas y/o los motores de los cambios y continuidades a lo largo de todo el periodo republicano de 1952 a 2011. No obstante, al margen de este enfoque más instrumental nuestro, esta forma de estudiar el régimen de Sadat tiene una parte de novedad y otra de inserción en una dinámica académica mayoritaria. Prácticamente ningún estudio monográfico sobre la política egipcia de la época de Sadat la abordó (hace casi 25 años que dejaron de realizarse tales estudios) de manera aislada de la de Náser: o bien se estudiaron conjuntamente ambas etapas -y casi siempre en contraposición-, o bien se abordaba la de Sadat con constantes alusiones a la de Náser. Tales procedimientos comparativos resultan naturales y adecuados, pues no solo se daba una sucesión histórica entre ambos periodos, y Sadat había sido el sucesor del régimen naserista por vía endógena, institucional, “pacífica” y en principio consensuada y sin oposición mayor, sino que el nuevo presidente también introdujo novedades en dicho régimen que no hacían más que reclamar la comparación, con el objeto de calibrar los cambios que se habían producido y los que se podrían producir. Sin embargo, lo que resulta sorprendente -y no solo desde la ventajosa posición que da el paso del tiempo- es que la mayoría de los estudios prestaran más atención y atribuyeran más potencial de futuro a los cambios que a las continuidades. Es ahí donde queremos insistir y reside un aporte principal de nuestra investigación.

Algunas de las grandes iniciativas de Sadat (el abandono del panarabismo; la firma de la paz con Israel; el *infitah* o “apertura económica”; el remplazo y renovación de las elites gobernantes, con el menor peso de los militares y su relativa apertura a la burguesía; la desaparición del partido único y la tolerancia de un reducido pluripartidismo y de una cierta libertad de expresión; el consentimiento del activismo político islámico) llevaron a no pocos autores (Ansari 1986; Martín Muñoz 1992; McDermott 1988, 2013) a caracterizar su acción de gobierno con el sustantivo de “desnaserización”. Otros, pocos y con escasos argumentos, hablaron incluso de “ruptura”, como Pierre Mirel (1982). En cuanto a la “desnaserización” como un proceso concluido, o al menos muy avanzado, únicamente puede aceptarse, como veremos en la Tercera Parte, en la medida en que la consideremos un proceso puesto en marcha en época de Sadat que aún habría de recorrer un muy largo camino en la de Mubarak, y sobre cuyo desarrollo posterior a aquella cabe preguntarse.

Según hemos mostrado en los sucesivos capítulos de esta Segunda Parte, el abrupto fin del mandato de Sadat no fue la razón principal de que la “desnaserización” emprendida al comienzo de su presidencia se interrumpiera. Lo había hecho ya varios años antes de su asesinato, en la medida en que nos fijemos en las iniciativas y políticas de gobierno y sus resultados objetivos en el régimen político y el Estado. Este frenazo, cuando no marcha atrás, se produjo en casi todos los terrenos excepto la firma de la paz con Israel y el cambio

en la política exterior, como hemos visto y resumiremos a continuación. Distinto será si nos fijamos en las nuevas dinámicas sociales generadas o reforzadas en el seno del régimen o en la sociedad, que fueron propiciadas o favorecidas por algunas de esas iniciativas y políticas y que contestaban el *status quo* político y económico que Sadat decidió finalmente mantener. En la paternidad de estas dinámicas (el progreso económico y político de la burguesía, el desarrollo del islamismo político, la pluralización del espacio político y la demanda de mayores libertades públicas), que seguirían latentes en las décadas siguientes, el régimen de Sadat desempeñó un papel más o menos importante, pero no hay que olvidar que Sadat dedicó sus últimos años a reprimirlas o neutralizarlas, dejando la tarea de lidiar con ellas a su sucesor.

Otros autores, como Hinnebusch (1981), intentaron resolver la tarea de dar cuenta de la distanciación del régimen y el Estado naseristas en época de Sadat dejando constancia al mismo tiempo de su huella y calificando al Estado remodelado por Sadat de “populista”. Nos interesa la aproximación de este autor en concreto porque, como ha quedado de manifiesto en las conclusiones de la Primera Parte, hemos aceptado el término “populista” para caracterizar al régimen naserista. Sin embargo, esta opción tiene el inconveniente principal de que no solo da por hecho el abandono del populismo, sino también, prospectivamente, el del pospopulismo, con esa confianza característica de los autores anglosajones en que la politología es una ciencia que permite deducir modelos que a su vez permiten prever con una fiabilidad las limitadas situaciones que se pueden dar. Según Hinnebusch la “fase pospopulista” del Estado egipcio, caracterizada por el cambio en la política exterior y las reducidas liberalizaciones económica y política, propiciado todo ello por la presión exterior e interior, podría dar pie a una de dos situaciones, cada una a su vez deducida de sendos modelos. La primera de ellas, de origen en el modelo liberal, la denomina “pluralización y absorción”, y acabaría conduciendo a la liberalización política. La segunda, de origen marxista y denominada “conservadurización y exclusión”, llevaría a la persistencia de la “estructura política autoritaria”, pues las nuevas elites económicas y políticas generadas por los cambios relativos, para defender el *statu quo* (que incluye su particular inserción en el sistema capitalista mundial), se dedicarían a resistirse al cambio social y político en lugar de impulsarlo (Hinnebusch 1981: 442-443). La ventaja de este planteamiento es que cubre, *grosso modo*, todas las opciones: tanto puede suceder una cosa como la contraria. Su laguna es que no nos dice qué diferencia hay entre la fase pospopulista egipcia y la del segundo escenario. En nuestra opinión, ambas serían -si aceptamos la denominación- igualmente pospopulistas, y nada nos informa acerca de cuánto podría durar ese pospopulismo para el que, de perdurar, tal vez habría que buscar un nombre propio o realmente sustantivo. En descargo de Hinnebusch hay que decir que

publicó este análisis en abril de 1981, o sea, antes de las últimas medidas de control y represión de Sadat y su asesinato.

Lo que acabamos de exponer no implica que tengamos una caracterización formularia alternativa del régimen de Sadat. Nuestra conclusión es que este no puede ser definido con unas características propias y estables: ni aportó auténticas “rupturas” -más que en la política exterior- ni emprendió ninguna “transición”. Fue un híbrido del régimen naserista heredado -que fue su componente principal-, alguna innovación real y estructural (sobre todo en la economía y en la composición de las elites y apoyos del régimen), y algunas aparentes tentativas, en gran medida incoherentes e inconstantes, y en última instancia fracasadas o abortadas por él mismo, de modificar o reformular parcialmente algunos de los fundamentos de la legitimación del poder.

En términos históricos que trasciendan la foto fija del régimen de Sadat el día de su asesinato, y teniendo en cuenta la evolución posterior de Egipto, sí que hay que atribuir a las innovaciones de Sadat, sin embargo, la generación, el favorecimiento o el reforzamiento de ciertas dinámicas económicas, sociales y políticas que quedarían activas o latentes, aunque él las neutralizara o reprimiera, y a las que se tendría que enfrentar o que tendría que gestionar su sucesor.

Resumiendo lo que hemos ido analizando en los capítulos precedentes, cuatro son las principales innovaciones. Una de tales innovaciones fue la introducción de la “dualidad” público/privado en el sistema económico, y desde él en la constitución social del régimen y en el discurso oficial y autorizado. Una segunda fue la aceptación e inclusión en diversos momentos y según diversas modalidades tanto de un cierto islamismo político en el discurso oficial como de corrientes islamistas organizadas. La tercera sería la aceptación de las ideas de “pluralismo” y “pluripartidismo” en el ámbito del discurso oficial (y de la Constitución), aunque su aplicación práctica fuera muy limitada. Finalmente, si bien el socialismo de orientación marxista y similares ya habían sido proscritos en el discurso y en la práctica por el régimen naserista en diversas ocasiones, Sadat lo señaló permanentemente como su principal adversario.

Antes de entrar en nuestras conclusiones detalladas, queda la cuestión de por qué Sadat propició o benefició algunas de esas dinámicas y después deshizo el camino andado, conteniéndolas o reprimiéndolas. La respuesta a esta pregunta tiene que ver, obviamente, con la gestión del poder, del apoyo y de la legitimidad. En este sentido, una primera conclusión es que tanto el avance ilimitado del sector privado y la burguesía, del islamismo político y de la liberalización política amenazaban potencialmente el poder de Sadat, pero detrás de ello está la otra cara de la moneda: no se trataba solo de contener a los adversarios, sino también de conservar partidarios y elementos neutrales manteniendo el *statu quo* de dualidad público-privada con sus beneficiados parasitarios y conservando la

burocracia estatal como pilar del régimen mediante el mantenimiento del papel de Estado en la creación de empleo y en la redistribución (beneficios laborales, subsidios, etc.). Sadat buscó apoyos en el islamismo político, en la burguesía en general, y en los partidarios del liberalismo político, o cuando menos en todos aquellos que deseaban mayores libertades públicas. Pero si observamos sus últimos meses de mandato veremos a quién recurrió en última instancia: a la policía, a la fidelidad de la burocracia estatal (incluido su aparato de comunicación), a la burguesía del *infitah* (un sector reducido de la burguesía), a un partido “dominante” que acabó siendo único e, indirectamente, a “la amplia base del pueblo”, según la expresión que, como hemos visto en el capítulo II 6.3, él mismo utilizó el 30 de septiembre de 1981 para justificar las detenciones masivas de la oposición.

No insinuamos que Sadat tuviera el apoyo del “pueblo”, como pretendió en el siguiente discurso con unas palabras que, por otro lado, reivindicaban la esencia del partido único en que se había convertido el PND en la práctica:

“Este es el Estado de las instituciones. Este es el Partido Nacional Democrático. Vuestro partido, que sin vuestro apoyo no hubiera podido mantenerse en el poder ni un minuto, porque cuenta con vuestro apoyo y se fundamenta en vuestra voluntad”¹²⁴.

Lo que afirmamos es que Sadat obtuvo, al menos hasta su último año o su último año y medio de mandato, el consentimiento de una gran parte -tal vez mayoritaria- del pueblo egipcio, un consentimiento -según la concepción del mismo que hemos explicado en el apartado correspondiente de la Introducción- derivado en parte del miedo a la represión, pero también de un cierto grado de satisfacción o de un insuficiente grado de insatisfacción.

Desde 1977, Sadat no adoptó una sola medida que fuera directamente en contra de las clases populares ni tampoco de la burocracia estatal: se mantuvieron las subvenciones a los productos de primera necesidad, se mantuvo la masiva creación de empleo estatal, se subieron los sueldos... En enero de 1977, Sadat aprendió que debía conservar, si no la legitimación, al menos el consentimiento de origen socioeconómico de “la amplia base”. La crisis fiscal del Estado en la primera mitad de los 70 estuvo a punto de abocarlo a perder su control de este, pero la vigorosa recuperación de los recursos del Estado le permitió evitarlo. La detención de la mayor parte de las figuras de la oposición y el asesinato de Sadat indujeron a parte de los observadores a dar por hecho que la mayor parte de la población estaba en *contra* de Sadat, cuando en realidad no es posible confirmar

¹²⁴ خطاب الرئيس محمد أنور السادات في الجلسة الختامية للمؤتمر العام الثاني للحزب الوطني الديمقراطي، pronunciado el 30 de septiembre de 1981. En internet, en el sitio الرئيس أنور السادات الارشيف الرقمي، <http://sadat.bibalex.org/speeches/browser.aspx?SID=1081>. Consulta del 14 de marzo de 2015.

tal hipótesis, ni siquiera encontrar indicios suficientemente fundamentados. Contra Sadat estaba, probablemente, una parte importante de las clases medias y medias bajas, en particular las más educadas, las más ideologizadas, las más depauperadas. Pero es forzoso concluir, como harían muchos de quienes se oponían a él, que una gran parte de “la amplia base del pueblo” no estaba en la contienda, ni de un lado ni de otro. El marxista Ghali Shoukri, precisamente uno de los autores que más ha afirmado el vigor y la extensión de la oposición a Sadat, y su representatividad social, llegó, de manera un tanto contradictoria, a dicha constatación meses antes de las detenciones de septiembre de 1981 y del asesinato de Sadat en octubre:

“A pesar de que el presidente Sadat y su grupo de dirigentes representan objetivamente tan solo una pequeña minoría, y de que la oposición representa a la abrumadora mayoría, la clase gobernante ha sido capaz de dominar a las masas mediante la demagogia y la manipulación, y la opresiva maquinaria del Estado ha conseguido asegurarse su «consentimiento» al tratado de paz y a su promotor. El hecho de que la oposición y las masas del pueblo estuvieran tan evidentemente desintonizadas puede ser explicado por dos factores: la historia de de represión manifiesta o latente del Gobierno, por un lado; y la seductora promesa de un próspero mañana por otro” (Shoukri 1981: 426-427).

No obstante, en el prefacio de la misma obra que citamos, escrito inmediatamente después del asesinato de Sadat¹²⁵, Shoukri afirmaría:

“Muerte fue la sentencia del pueblo egipcio a un régimen entero, y no solo a la persona de Sadat. La violencia vino como ejecución de esa decisión, en respuesta a la extrema violencia del régimen reprimiendo a la oposición. Era el resultado de años de lentas acumulaciones (...) No fue un asesinato, sino una ejecución, no de Sadat, sino del sistema” (Shoukri 1981: iv).

Más allá de lo desaforado de algunas conclusiones y términos de Shoukri, y de algunas contradicciones parciales incluidas en ellas, ambos textos no tienen por qué ser contradictorios en su planteamiento esencial (la mayoría del pueblo estaba en contra de Shoukri a finales de septiembre de 1981 cuando no lo estaba a finales de 1979), aunque no

¹²⁵ La obra de Shoukri fue inicialmente escrita en árabe, y traducida al francés en 1978 y publicada en esta lengua en 1979 (Shoukri 1979). Para la edición en inglés de 1981 que citamos, Shoukri añadió un epílogo - del que procede nuestra primera cita, págs. 426-427-, que menciona hechos sucedidos hasta junio de 1979, y un prefacio escrito el 20 de octubre de 1981, del que procede la segunda cita. Por lo demás, el contenido de la edición francesa y la inglesa es el mismo. A lo largo de este trabajo hemos utilizado las dos versiones, la francesa por hallarse más próxima del original y la inglesa por las novedades que incorpora.

es ni será posible zanjar esta cuestión en términos científicos. Sin embargo, sí que es posible abundar en la tesis de Shoukri de que en el último año de mandato de Sadat se produjo un desplazamiento dentro del consentimiento y hacia el rechazo. Como ya hemos dicho, con las detenciones de septiembre y, sobre todo, con su actitud posterior, Sadat traspasó los límites no escritos de un modelo de ejercicio del poder presidencial legitimado o cuando menos aceptado: el presidente gozaba de amplísimos poderes, entre los que se contaba el recurso a la coerción y a una exclusión selectiva, pero se le exigía al mismo tiempo el respeto a ciertos límites de diverso signo, como un carácter templado, respetuoso y severo a la vez, alejado del ensañamiento e inclusivo.

7.2 MANTENIMIENTO DEL PRESIDENCIALISMO AUTOCRÁTICO

Conservando la mayor parte de las extensísimas atribuciones que le fueron atribuidas en época de Náser, y a pesar de la promulgación de una Constitución permanente que en teoría debía limitar sus poderes, el presidente de la República continuó siendo entre 1970 y 1981, en todo momento, quien tomaba las decisiones de las grandes orientaciones políticas, casi siempre sin consultar más que a un reducido grupo informal de consejeros. La política de *infitah*, la creación de plataformas y partidos, la firma de la paz con Israel, la disolución del Parlamento elegido en 1976, la masiva campaña de detenciones de septiembre de 1981, por citar tan solo algunas de sus decisiones más destacadas, fueron adoptadas sin que mediara debate o proposición de ningún órgano colectivo, electo o no, a diferencia de lo que sucedía, al menos *pro forma*, en la época de Náser, cuando este debía consultar y rendir cuentas al CMR. Eso sí, la mayor parte de esas medidas y algunas otras, como la adopción de legislaciones represivas en 1977, 1978 y 1980, o la eliminación de la Constitución del límite de dos mandatos presidenciales en 1980, fueron seguidas de sendos referéndums en los que invariablemente venció el sí por más del 90% de los votos, lo que convirtió a Sadat en el presidente del Egipto republicano que más recurrió a este instrumento legal, por delante de su predecesor Náser y de su sucesor Mubarak, cuyos mandatos fueron mucho más largos¹²⁶.

Por otro lado, y como ya hemos señalado, Sadat también nombró el triple de ministros que Náser, remplazándolos cada pocos años y asumiendo directamente la presidencia del Gobierno en dos ocasiones, en 1973 y 1980. Esta era su manera de evitar

¹²⁶ Sadat recurrió al referéndum en 10 ocasiones (en solo 2 destinados a su elección o reelección), mientras que Náser, que fue presidente durante 14 años, lo hizo en 4 y Mubarak, que gobernó durante 30 años, en 7 (en 4 de ellos destinados a su elección o reelección).

que se constituyeran grupos de poder al más alto nivel. El nombramiento de los altos cargos de las Fuerzas Armadas y de los gobernadores civiles también entraba dentro de sus atribuciones unipersonales.

En abril de 1981, Hinnebusch escribió las siguientes palabras:

“Los poderes de la presidencia siguen siendo enormes: sus poderes constitucionales formales superan con mucho los del poder legislativo y judicial (...) El presidente está por encima de las constricciones que emanan de la ley o de las regulaciones administrativas que limitan a sus subordinados. Sigue siendo la única fuente de toda política superior o innovación ideológica (aunque tales innovaciones puedan responder a presiones desde abajo), y todavía define y puede cambiar «las reglas del juego político» - las condiciones de la participación política. El presidente tiene hoy una enorme concentración de poderes no menor que la que disfrutaba Násir (...) Aunque una limitada liberalización ha tenido importantes consecuencias para el sistema político, se detiene muy lejos de las expectativas de quienes esperaban que Sadat estuviera preparado para retirarse desde arriba de la escena política y permitir que las elites compitieran por el apoyo de las masas y la determinación de las políticas públicas. Que Sadat nunca tuvo tal intención lo demuestra su nula disposición, en el marco del experimento pluripartidista, a ceder la menor parte de su derecho unilateral a determinar dichas políticas o criticarlas” (Hinnebusch 1981: 444).

Si el autor hubiera revisado estas palabras a mediados de septiembre de 1981, las habría confirmado una a una, con la salvedad de que, probablemente, tras las masivas detenciones de principios de ese mes habría modificado su alusión a la liberalización y sus “importantes consecuencias en el sistema político”.

Cierto es que hasta sus tres últimos años de mandato Sadat ejerció sus amplios poderes de manera más “suave” que Násir. No solo las medidas represivas y punitivas (prisión, torturas, ejecuciones) fueron menores en número e intensidad, sino que los controles en general (policiales y administrativos) se relajaron. Sin embargo, como hemos explicado, esta relajación produjo también consecuencias indeseables, como la extensión de la corrupción y de las actividades coactivas o violentas de algunos sectores del islamismo radical, consecuencias que sufrían y rechazaban amplios sectores de la sociedad. Por otro lado, la estructura, los principios y los hábitos represivos siguieron intactos aunque su actividad fuera menor, como lo demuestran, por ejemplo, la oleada represiva entre 1978 y 1981 y la tortura generalizada a los procesados por el asesinato de Sadat, que sería reconocida por fallos judiciales al respecto en los años siguientes.

7.3 MOVILIZACIÓN NEGATIVA Y RETRADICIONALIZACIÓN. LA BÚSQUEDA FRUSTRADA DE LA LEGITIMIDAD PERSONAL

En cuanto al tipo de liderazgo que pretendió ejercer Sadat, probablemente no se distinguió tanto en el fondo del de Náser, independientemente del éxito que tuviera en tales pretensiones, como explicaremos a continuación. Enfrentado a la necesidad de consolidar su poder, y orientado a ejercer este de manera autocrática, una de las vías más fructíferas para alcanzar ambos objetivos era suscitar la adhesión personal a él de los egipcios. Para hacerlo, Sadat buscó progresiva pero incansablemente una “movilización negativa” de aquellos a su favor. Náser los había movilizado contra el “viejo orden feudal”, para instaurar un orden -al menos según pretendía- “totalmente nuevo”. Lo singular, y en gran medida contradictorio con sus orígenes políticos, es que Sadat intentó capitalizar una movilización contra la figura de Náser y una parte muy significativa del legado naserista -sin renunciar formalmente a este, como señalamos a continuación-, favoreciendo a los damnificados por Náser, ya fueran activistas islamistas, terratenientes desposeídos, burgueses en general o burócratas marginados. Esta arriesgada opción, que implicaba la posibilidad de atraerse las iras de los incondicionales del naserismo, se vio beneficiada de manera muy particular por la victoria de octubre de 1973. Sadat contaría entonces con una “acción inaugural” para un cierto carisma que conservaría durante algún tiempo. El éxito nacionalista entroncaba con uno de los afluentes del carisma de Náser, y se añadía al carisma aportado por ocupar el mero “lugar” de la presidencia. Sin embargo, Sadat decidió construir su propia figura carismática remplazando los mimbres “revolucionarios” y “progresistas” de la de Náser con otros “tradicionalistas”, definiéndose como “el presidente Creyente” y refiriéndose a sí mismo como “el padre de la familia egipcia”. A ello añadió su ostentoso gusto por el lujo y la pompa, manifestado desde muy temprano, cuando decidió trasladar su residencia al antiguo palacio monárquico de Abdín, que Náser había hecho transformar en museo, y posteriormente en su vestimenta, en la que a menudo exhibía capas y abalorios que lo aproximaban más a su amigo el sah de Persia que a la adusta figura -casi siempre con chaqueta y corbata gris o negra- de Náser.

Posteriormente, Sadat pretendió ser también “el padre” -aunque no nos consta que utilizara literalmente esta palabra- de la democracia, de las libertades egipcias, de la soberanía de la ley, y del “Estado de las instituciones”, esta última sí expresión suya. Pero al margen de que tal pretensión no pudo sostenerse en pie demasiado tiempo ante los hechos, no resultó tan movilizadora como las genuinas innovaciones nacionalistas y socioeconómicas de Náser, y cuando instauró el sistema de partidos en 1977, se apropió para el suyo del legado del régimen naserista y prohibió a los demás reivindicarlo. Finalmente, su pretensión de ser para su pueblo “el héroe de la guerra y de la paz”, como lo

caracterizaban sus sicofantes tras la firma del tratado de paz con Israel, se saldó, como hemos visto, con un rotundo fracaso ante el rechazo de toda la oposición -pese a que fuera visto con aprobación o indiferencia por parte de la población-, rechazo al que se sumó la impugnación de su carácter de “presidente creyente” por los grupos islamistas radicales, y en última instancia la desaprobación generalizada de su actitud relacionada con las detenciones de septiembre de 1981.

En definitiva, Sadat no logró, o mantuvo durante muy poco tiempo, la “conexión directa con las masas” que caracterizó el mandato de Náser, aunque lo pretendiera hasta sus últimos días de manera un tanto desaforada, como muestra su discurso del 30 de septiembre de 1981 en el Segundo Congreso Anual del PND ya citado en II 6.3, pero del que añadimos a continuación el siguiente revelador extracto:

“No defendemos a un dictador y a los que están a su alrededor, sino a la base del pueblo, a la amplia base [القاعدة العريضة], y vamos a ser muy severos en nuestras acciones. Dicen que estamos acabando con la oposición, después de haberla permitido y de que les permitimos volver (...) Lo que ha sucedido es que yo, en vuestro nombre, tomé las decisiones que consideré adecuadas, y luego me dirigí al pueblo [en referéndum, para que las ratificara] y 11 millones dijeron «sí», y 60.000 dijeron “«no». Ante esta confianza, os aseguro que no utilizaré tal delegación de poderes sino como vosotros me conocéis, como padre de la familia egipcia. Pondremos cada cosa en su lugar sin rencor, a pesar de que todos ellos son unos rencorosos”¹²⁷.

7.4 SISTEMA POLÍTICO Y RÉGIMEN POLÍTICO. UN ATISBO DE “CHUROCRACIA”

Ya hemos señalado nuestras prevenciones para utilizar el concepto de “sistema político” cuando aquello a lo que nos referimos carece -y valga la redundancia- de “sistematicidad” o de “regularidad” en su modo de funcionamiento. El régimen de Sadat constituye un caso singular de esta ausencia de sistematicidad y regularidad. El único elemento sistémico estable en sus funciones reales -y de ahí, como explicábamos en la Introducción teórica, que lo llamemos “régimen”- fue precisamente la presidencia del Gobierno. Bajo su impulso y por su decisión unilateral -al margen de las escenificaciones políticas- se dismanteló el partido único naserista, la USA, y se constituyeron las “plataformas de opinión” dentro de ella, que no fueron libremente formadas, sino determinadas por la voluntad del presidente. Cuando se autorizó la conversión de tales

¹²⁷ خطاب الرئيس محمد أنور السادات في الجلسة الختامية للمؤتمر العام الثاني للحزب الوطني الديمقراطي في ٣٠ سبتمبر ١٩٨١، <http://goo.gl/zGCZ7s>, consulta del 14 de marzo de 2015). الأرشيف الرقمي للرئيس محمد أنور السادات،

plataformas en partidos y, sobre el papel, la formación de otros, en la práctica se permitió únicamente la constitución de aquellos que el presidente decidió, llegando este a nombrar al presidente del único nuevo partido (el PST), y prestándole diputados para que reuniera los requisitos legales necesarios. En 1976 -aún con el sistema de “plataformas”- se permitió la celebración de elecciones legislativas relativamente libres; en 1979, ya con partidos políticos, se controló férreamente el acceso de diputados de la oposición al Parlamento; en 1981, la mayor parte de los que habían sido diputados electos de oposición en 1976 fueron detenidos.

Cierto es que el partido único desapareció, pero hay que considerar en qué medida el partido gubernamental ocupó su lugar y desempeñó su función y otras: la mayor parte de los diputados, de los dirigentes de la USA no represaliados, de los grandes burócratas y dirigentes del sector público o de los dirigentes sindicales fueron “invitados” o conminados a unirse al PND, o supieron advertir que casi todas las vías de promoción política e incluso socioeconómica pasaban por él. El PND se adjudicó legal y estatutariamente la vitola de heredero del ideario naserista, pero buscó la incorporación a él de sectores de la burguesía privada que diversificaron su base social y accedieron a puestos de responsabilidad. Las elecciones legislativas de 1976 conocieron por primera vez -por la intermediación de las candidaturas independientes- un fenómeno que se reproduciría décadas después: las elecciones, además de poder dar acceso al Parlamento, podían “dar acceso” al partido gobernante y al propio régimen. Si bien esta dinámica había sido un tanto buscada por Sadat, pronto se revelaron los riesgos de introducir en el Parlamento elementos no totalmente controlados, y en 1979 las altas instancias del régimen intentaron evitar que fueran elegidas personas que no fueran de total confianza.

Aunque entre 1976 y 1979 algunos diputados de oposición fueron desposeídos de sus escaños por la Cámara, el periodo sirvió para introducir, aunque fuera por breve tiempo, un atisbo de oposición y de exigencia de rendición de cuentas al Ejecutivo, y en el mismo sentido también contribuyó, probablemente incluso con más influencia, la pequeña apertura en la libertad de prensa.

En definitiva, hasta los últimos años de su mandato Sadat abrió en la práctica las puertas a la participación en el aparato del poder (en lo que sería “su régimen” en términos de componente humano) a un sector de la burguesía privada, el cual se uniría al componente esencial de origen burocrático o estatal, mientras que la oferta de inclusión o participación política al resto de la sociedad y a las corrientes ideológicas adversas quedó restringida a la expresión de la opinión (a través de un reducido número de diputados y de la prensa) y a un limitado derecho de reunión y organización. Esta oferta fue mucho más generosa o tolerante con el activismo político islámico que con otras corrientes ideológicas: si bien no fue autorizada la formación de partidos políticos de base religiosa,

las corrientes islamistas pudieron llevar a cabo sus actividades públicas con gran libertad al menos hasta 1979. Los Hermanos Musulmanes lo hicieron desde un estatuto paralegal y contando con sus propios órganos de prensa, y el resto de los grupos, a pesar de sus tendencias violentas, mediante sus actividades en las universidades y en las mezquitas. Por el contrario, la izquierda fue represaliada y hostigada tan pronto como se mostró contestataria, incluso desdeñando el hecho de que perdía predicamento con el paso de los años.

Pero en última instancia, la tolerancia con la participación mediante la expresión fue restringiéndose en los últimos años de mandato de Sadat, hasta llegar a su total aniquilación en septiembre de 1981. Sin embargo, hay que destacar que incluso cuando la tolerancia con la participación fue máxima en términos relativos, esta funcionaba según un modelo organizado en distintos niveles y plagado de cortocircuitos. Un tipo de interruptores, por así decir, que saltaba cuando ciertas corrientes intentaban acceder al sistema político formal (partidos) y a los medios autorizados de expresión pública de la opinión; otro cuando las corrientes que habían accedido a estos superaban ciertos umbrales de crítica a las políticas gubernamentales y, sobre todo, presidenciales. Pero el sistema más importante de interruptores se encargaba de mantener separado el ámbito en el que la expresión de la opinión era relativamente libre del de “la amplia base de la sociedad”: al estar reducida dicha libertad al ámbito de los pequeños medios de prensa de los partidos, y a sus sedes y a las de los sindicatos profesionales, y excluida de la televisión -y por ende de “la calle”- en una sociedad con cerca de un 50% de analfabetos, la libertad de expresión y de participación tolerada estaba dirigida, en tanto que receptores, a las clases alta, media y media-baja educadas, y en tanto que “emisores”, y esto es lo más importante, a ciertas elites sociales e intelectuales de dichos sectores, que como hemos señalado, podían ser incluidas o excluidas del sistema.

Este modelo que autoriza la expresión de la opinión, incluido un nivel a veces elevado de opinión crítica, a un elenco de elites mientras que a la vez se excluye por diversos procedimientos su acceso y el del conjunto de la sociedad a la decisión, puede ser denominado “churocracia”, en referencia al principio islámico de la *chura*, que exige al gobernante “consultar a quienes tienen buen criterio (رأي)”, pero cuya opinión no es vinculante (Gómez García 2009: 66-67). El término “churocracia” ya fue utilizado literalmente en 1985 por el presidente de Pakistán Zia Ul-Haq para justificar mediante el presunto recurso al consenso su régimen dictatorial¹²⁸. No obstante, el modelo original al que refiere el término es el propuesto por diversos intelectuales de orientación islamista

¹²⁸ “«Shurocracy» in Pakistan”, *The New York Times*, 9 de marzo de 1985 (<http://www.nytimes.com/1985/03/09/opinion/shurocracy-in-pakistan.html>, consulta del 9 de abril de 2015).

que, aunque no todos hayan utilizado explícitamente el neologismo y difieran en los detalles, han intentado conciliar el principio de la *chura* con el del pluripartidismo para intentar alumbrar un concepto de “democracia islámica”, como lo hizo el egipcio Adel Husein a principios de los 90 (Gómez García 1996: 217-222).

No se trata de que afirmemos que Sadat seguía consciente y explícitamente un modelo islámico en este sentido. Se trata de encontrar una denominación para un modelo de participación que este presidente apenas pergeñó, pero que Mubarak desarrollaría mucho más. Su distintivo es que se concede a parte o incluso gran parte de las elites sociales e intelectuales un amplio margen de participación a través de una notable libertad de expresión, al tiempo que la posibilidad para dichas elites y para el conjunto de la sociedad de decidir o de llegar a decidir queda totalmente excluida.

El régimen de Sadat, sobre todo en sus años finales, quedó muy lejos del ideal-tipo de esta *churocracia*, pero intentó introducir su principio, que requiere la autocontención de las elites y la sumisión de estas y los gobernados a su exclusión de la toma de decisiones finales. Queda señalar que el presidente egipcio pretendió incluir a las corrientes islamistas en este modelo pero de una forma *sui generis* respecto a otros participantes: mientras las excluía de los canales políticos formales para expresar su opinión, les dejó campo abierto, hasta que ya era demasiado tarde en lo que respecta a sus designios, para contactar con la “amplia base de la sociedad” a través de las universidades, las mezquitas y “la calle” en general. Y pagaría un elevado precio por esta excepción.

7.5 UNA NEFASTA GESTIÓN DEL CORPORATIVISMO

El sistema corporativista de gestión de las relaciones entre el Estado y la sociedad heredado de la época naserista no fue abandonado por Sadat, y, si perdió parcialmente vigencia o eficiencia, se debió a su nefasta gestión.

El compromiso mantenido de emplear a los graduados y licenciados en el aparato estatal siguió constituyendo una caudalosa vía de incorporación socio-política directa, además de funcional, al Estado. A pesar del deterioro de los salarios en la primera mitad de los 70, la adhesión o el consentimiento políticos de gran parte de los miembros del aparato burocrático fueron mantenidos mediante una combinación de *laissez-faire* gubernamental frente al enriquecimiento, las prácticas corruptas y la ineficiencia de los empleados, y de recuperación relativa del nivel de los salarios en la segunda mitad de dicha década. Sin embargo, el deterioro de la situación económica y el estatuto social de quienes ocupaban posiciones subordinadas en dicho aparato constituyó una importante fuente de descontento con el régimen político.

En cuanto a otro de los pilares de la alianza corporativista formada por Násir, los obreros, si bien su número había dejado de crecer y era inferior al de otros contingentes socioeconómicos, seguían constituyendo el mayor potencial de desestabilización política, junto con los estudiantes. Como el resto de los trabajadores, los obreros sufrieron el pronunciado vaivén de los salarios nominales, estancados durante la primera mitad de los 70 y considerablemente compensados en la segunda, si bien tuvieron que enfrentarse a la elevada y mantenida inflación. Las recurrentes aunque no muy frecuentes protestas laborales que tuvieron lugar hasta mediados de los 70, y el activo papel de la izquierda en ellas, llevaron al régimen de Sadat a acompañar las subidas salariales de la segunda mitad de la década con una política de mayor control del sindicato único, llevada a cabo mediante el refuerzo de su carácter jerárquico y la cooptación de sus dirigentes y los privilegios que se les otorgaban. Si bien esta política secundada por la legislación prohibiendo y castigando las protestas laborales funcionó en términos de contención directa de los trabajadores, también introdujo un elemento más de desafección de estos frente al régimen político, pues el modelo corporativo ideal requería que los mediadores entre el poder constituido y los trabajadores se situaran, en la medida de lo posible y por definición, en una posición intermedia entre ambas partes y no abiertamente inclinados a las posturas de una. De ahí que retomaran vigor las ideas e iniciativas destinadas a constituir organizaciones sindicales independientes promovidas por los sectores naseristas y socialistas, aunque quedaran latentes por reprimidas.

En lo que respecta a los sectores profesionales, ya hemos señalado que los ingenieros fueron particularmente beneficiados por la política de *infitah*. La penetración del espíritu y de destacadas figuras de aquel en su sindicato garantizó que este se mantuviera al margen de toda confrontación política con el poder. Por su parte, los abogados y los periodistas mostraron en los últimos años de mandato de Sadat una belicosidad inesperada para el presidente. Al margen de las motivaciones ideológicas y deontológicas de dichos profesionales, hay que destacar que los periodistas, intelectuales y hombres de letras quedaron al margen de los cambios económicos introducidos en el país, y que su estatuto social perdió también consideración: la empresa privada no ofrecía vías de prosperidad y ascenso económico, y las condiciones de los empleos en la prensa estatal se deterioraban. Por otro lado, respecto a abogados y periodistas cabe decir algo similar a lo dicho respecto a los obreros: el régimen de Sadat no supo o no quiso seguir con ellos la vía de la intermediación, las transacciones y el apaciguamiento, que en la época naserista pasaba por la figura del síndico. Por el contrario, pasó en transiciones rápidas de la tolerancia a la voluntad de control total.

Las relaciones del régimen con los estudiantes estuvieron marcadas por el mismo patrón que acabamos de mencionar. Deseoso de contrarrestar la pujanza de las corrientes

de izquierdas en la universidad, en lugar de mejorar las condiciones de vida de los estudiantes y de generar un marco y unas vías de diálogo que incluyeran establemente a todos, o de crear estructuras de movilización de sus partidarios, el Gobierno alentó a las corrientes islamistas con el objetivo principal de que arrinconaran a la izquierda, desdeñando la posibilidad de que pudieran tener su propia agenda que le fuera adversa. El resultado final, en un escenario de crisis sistémica e incertidumbres motivado por las grietas aparecidas o provocadas en el modelo naserista, y por una crisis económica latente que no se manifestaría en toda su extensión y que el poder político no reconocería hasta la llegada al poder de Mubarak (véase capítulo III 3), fue que el estudiantado se convirtió probablemente en el sector social que más unánime y estridentemente manifestó su repudio a las políticas de Sadat, lo que llevó, una vez más, a su represión y control.

Finalmente, las relaciones de Sadat con la Iglesia copta constituyeron, sin duda, el mejor reflejo de la incapacidad del presidente para mantener la posición central, equidistante y arbitral que el modelo corporatista requería. A fin de cuentas, el papa Chenuda tan solo le pedía que protegiera a su comunidad de los excesos de las orientaciones islamistas en el Estado y en la sociedad, y que preservara sus derechos comunitarios, elementos sin los cuales el papa tampoco podía mantener su condición de dirigente de dicha comunidad. Chenuda demostraría después, durante los veintisiete años que transcurrieron desde su liberación hasta el último día de la caída de Mubarak, que estaba perfectamente dispuesto a mantener su lealtad al jefe del Estado si se cumplían tales requisitos.

7.6 CRISIS DE LEGITIMIDAD. ¿QUÉ CRISIS?

No cabe duda de que el régimen de Sadat en sus últimos años se encontraba inmerso en una fuerte crisis de legitimidad. Sin embargo, ¿de qué naturaleza era esta?, ¿cuál era su alcance?, ¿cuáles sus causas?, ¿había unanimidad entre los egipcios que la propiciaban?, ¿cabe atribuirla a ciertas políticas relativamente coyunturales de los gobernantes, o tenían que ver con el tipo de Estado que ellos habían mantenido o remodelado? La respuesta a estos interrogantes se irá encontrando en el desarrollo del mandato de Mubarak, que a su vez precisa del análisis del periodo sadatista para comprenderse, como sostenemos a lo largo de nuestra tesis.

La opinión de que una parte mayoritaria del pueblo egipcio, cuando menos, no lamentó el asesinato de Sadat está muy extendida entre los egipcios, y no cabe duda de que en ella hay al menos una gran parte de verdad. Su entierro no provocó manifestaciones populares de duelo ni grandes ni medianas, a diferencia del fervor masivo y arrebatador que despertó el de Náser. Quien consulte los abundantes vídeos existentes del evento no

encontrará ninguna toma aérea de “las masas”, porque no había ninguna presencia que, ni con una adecuada realización televisiva, hubiera permitido inducir la percepción de que la había.

No obstante, la falta de apoyo o adhesión masiva a un dirigente por una parte mayoritaria de la población no autoriza a inferir que dicho sector de la población estaba activamente o en su fuero interno contra él en el largo o medio plazo. Entre la adhesión y la oposición políticas hay un amplio espectro de actitudes que se sitúan entre el consentimiento y la indiferencia y, por difícilmente asibles que sean para el análisis tales actitudes, son de gran importancia.

Los datos “positivos” constatables solo permiten concluir que la crisis de legitimidad del régimen de Sadat había echado fuertes raíces en dos segmentos de la población: las clases medias urbanas, educadas y profesionales, estudiantes o cualificadas, y las clases medias-bajas igualmente educadas y mayoritariamente urbanas pero subempleadas, emigradas, desclasadas y a menudo de origen rural. Dentro de ellas, los vehículos de la contestación al poder habían sido en muy escasa medida los partidos autorizados. Por el contrario, para el primer segmento el vehículo fueron sobre todo los sindicatos profesionales, las organizaciones estudiantiles, algunos dirigentes sindicales, la Iglesia copta, los políticos independientes o no organizados y algunos dirigentes religiosos musulmanes, incluidos los Hermanos Musulmanes. Para el segundo segmento, el principal aglutinante del descontento habían sido los movimientos islamistas radicales, aunque algunos de los miembros de dicho segmento se identificaran con los representantes que hemos identificado para el primero.

La variedad ideológica y sectorial de los opositores a Sadat, las masivas detenciones de septiembre de 1981 que aportaron la “foto fija” de esa variedad, y el posterior asesinato del presidente provocaron tal vez, como hemos señalado, un espejismo parcial en la mayoría de los observadores: el de que la oposición a Sadat estaba mucho más extendida, en términos absolutos, de lo que muestran los hechos. Sin embargo, por muy activa y vociferante que fueran las críticas del “cuerpo social activo políticamente”, lo cierto es que apenas se vieron acompañadas por acciones de protesta de masas -incluso aunque utilicemos un concepto restringido de masas-. En este sentido, la disuasión por medio de una coerción que fue moderada, excepto en el último mes del mandato de Sadat -a cuyas medidas represivas no podemos saber qué reacción “popular” habría seguido-, no puede ser el único factor explicativo de esta situación. En las zonas rurales, entre los trabajadores en general, entre los obreros incluso, no habían surgido manifestaciones de protesta dignas de mención. Fueran cuales fueran las opiniones de la mayor parte de la población en su fuero interno, se mantenía esencialmente al margen de la batalla política.

Es difícil conocer a ciencia cierta las razones de la pasividad política, pero si hay alguna manera de hacerlo, dejando al margen las encuestas de opinión dado que en Egipto en la época no se realizaban, es mediante la comparación con aquellos momentos en que la pasividad dejó paso a la actividad. De manera general, en el caso del Egipto de los años 1950-1980 dos fueron los motivos que atrajeron a las masas no activas políticamente a las calles para protestar: uno, la cuestión de la soberanía nacional (1968, 1972-73); otro, las dificultades económicas mayores (1977).

En nuestra opinión, Sadat desactivó la amenaza de una oposición realmente masiva por razones económicas a partir de 1977 al volver sobre sus pasos en su proyecto de desmantelamiento de las ayudas sociales, mantener el gran incremento del empleo público y decretar sucesivos incrementos de los salarios. En cuanto a la cuestión de la soberanía nacional, la “victoria” de octubre de 1973 le salvó de lo que habría podido ser un golpe insuperable, mientras que la oposición a la paz con Israel, el abandono del panarabismo y el aislamiento del mundo árabe eran elementos en torno a los cuales había menos unanimidad o más indiferencia que frente a la cuestión de la soberanía en sí. En este terreno, de la misma manera que el apoyo al panarabismo o a los derechos de los palestinos era en parte resultado de la movilización promovida por el régimen naserista, su relativo declive también estaba relacionado con la desmovilización en este sentido buscada por el régimen de Sadat. En cuanto a la reivindicación de más democracia y participación política, la oposición al *infitah* o incluso la reivindicación de cualquier modalidad de aplicación de la ley islámica, tampoco suscitaron en ningún momento una movilización masiva, realmente popular.

Se puede considerar, en sentido contrario al de nuestra argumentación, que la campaña final de Sadat contra la oposición obedecía al temor de que gran parte de los egipcios fueran más sensibles a las opiniones de aquella de lo que nosotros pensamos. Pero su expeditiva acción también puede ser interpretada a la inversa: conocedores como nadie del clima político en el país, los altos dirigentes sabrían que a las demandas de aquella les faltaba apoyo popular, y solo querían disciplinarla. En cuanto a los movimientos radicales islámicos, los datos que nos constan son que los servicios secretos eran conscientes de que sí se aprestaban a pasar a una etapa de enfrentamiento violento con el régimen, pero que su influencia estaba reducida a ciertos sectores.

No obstante, lo que acabamos de exponer no implica que el régimen de Sadat no se encontrara enfrentado a una grave crisis de legitimidad, tal vez no lo estuviera en términos cuantitativos absolutos pero sí en términos cualitativos. En el capítulo II 5.1.3 hemos recurrido al concepto socio-politológico de “segundo estrato”, ese estrato “que no gobierna, pero sin el cual los gobernantes no pueden gobernar”, puesto que llena el vacío existente o media entre el (pequeño) grupo de los gobernantes y la mayoría de los

gobernados. Así mismo hemos mencionado las tesis de Binder en el sentido de que el “segundo estrato” egipcio en época de Náser estaba formado por las clases medias altas rurales y sus conexiones familiares en las zonas urbanas, y en particular en la burocracia y las instituciones políticas. Al asegurarse la lealtad o el apoyo de dicho estrato, según Binder, Náser habría obtenido un apoyo esencial para su régimen.

Pues bien, sin contestar las tesis de Binder en términos socioeconómicos, e incluso afirmando que tal vez estas fueran más pertinentes en época de Sadat, hemos de preguntarnos si podía un régimen como el egipcio, en una sociedad cada vez más urbana y modernizada (en términos de mayor número de personas educadas y de profesionales, con mayor complejidad del aparato burocrático y legal, con mayor extensión y diversificación de los medios de comunicación), gobernar establemente dándose a la vez un alto grado de oposición o disentimiento entre los intelectuales, los periodistas, los abogados, los líderes religiosos musulmanes y coptos, los sindicalistas, la burocracia y la “clase política” en sentido amplio. La respuesta es, obviamente, “no”, y la solución de esta situación para el régimen pasaba o bien por una mayor liberalización y participación políticas o bien por una mayor represión, y ambas opciones se aplicaron de manera parcial. Precisamente, uno de los grandes éxitos de Náser había sido atraer a la mayoría de la *intelligentsia*, a pesar de las diferencias entre ellas y de la existencia de disidentes oportunamente reprimidos, a sus concepciones acerca del consenso y el unanimismo.

Finalmente, más allá del alcance de la contestación al régimen, ¿contra qué componentes o dimensiones de aquel se dirigía dicha contestación? No buscamos con esta pregunta volver a enumerar los motivos de tal contestación, sino caracterizarla en términos estructurales respecto a tres polos: los dirigentes, el tipo de régimen político y el tipo de Estado. Para entenderla, hemos de recordar nuestros planteamientos teóricos esbozados en el capítulo introductorio de esta tesis: un régimen es al mismo tiempo una estructura de poder (con su componente humano) y una forma de gobierno (que incluye la adopción de una serie de políticas y los principios que subyacen a ellas e implica un saldo de beneficiados y perjudicados por ellas, siquiera sea en términos relativos). Pero un régimen se enmarca en un Estado (una estructura de poder y una forma de gobierno más permanentes), que el régimen reconfigura en mayor o menor medida con su acción y evolución, o, dicho de otra manera, un régimen puede desarrollar tendencias centrípetas o centrífugas respecto a la centralidad del régimen y el Estado heredados, de la misma manera que el apoyo, la oposición y el consentimiento respecto a dicho régimen pueden estar relacionados con esas tendencias centrífugas o centrípetas. Lo que nos interesa esclarecer es en qué medida la crisis del régimen de Sadat derivaba de un rechazo del tipo de Estado egipcio, de un rechazo del tipo de régimen político -en tanto que, sobre todo,

sistema político- o de un rechazo de las políticas seguidas, incluida entre estas la manera personal del presidente de gestionar tales régimen y Estado.

Empezando por el Estado republicano, la oposición de las corrientes islamistas radicales a Sadat, e incluso la soterrada de los Hermanos Musulmanes, procedía de un rechazo frontal a aquel. A pesar de la indefinición o vaguedad de las propuestas islamistas sobre los asuntos mundanos más allá de los aspectos morales y/o ideológicos, el mero rechazo del derecho positivo y su defensa de una nomocracia islámica (gobierno de la ley islámica) implicaba una enmienda a la totalidad del Estado. El hipotético desarrollo ulterior detallado de esa nomocracia constituía una incógnita, pero los islamistas -e, insistimos, también los Hermanos Musulmanes- rechazaban, por ejemplo, todo concepto de pluripartidismo, toda limitación a la propiedad privada y cualquier noción de socialismo (que no de justicia social), y todas las concepciones acerca de las libertades individuales y la igualdad que se alejaran del modelo ortodoxo islámico que defendían (en materia de código civil, de derechos de los no musulmanes, etc.). Por otro lado, la defensa del panislamismo, si bien no equivalía a la defensa del panarabismo, tenía más puntos de coincidencia con él que con la política aislacionista de su entorno cultural de Sadat.

Otro venero de deslegitimación del Estado existente, y sobre todo del Estado legado por Náser, lo constituían las fuerzas que reclamaban una mayor apertura del Estado a la economía de mercado y el abandono de las políticas redistributivas. No obstante, al estar estas fuerzas compuestas esencialmente por la burguesía “no parasitaria” (es decir, por aquella que no se beneficiaba de la dualidad público-privada o estatista-liberal) y ser dicha burguesía relativamente débil, su influencia era reducida. Por otro lado, como hemos señalado, tales fuerzas (representadas por el PLS y los wafdistas) no cuestionaban en su mayoría, o al menos no lo hacían con convicción y convincentemente, el autoritarismo global del régimen político, sino que, a juzgar por su pasado y sus acciones presentes, tan solo buscaban ejercer influencia dentro de él.

Las posturas de las corrientes de oposición de izquierdas en relación con el Estado y su función económica iban, por su parte, en el sentido contrario de las anteriores. Las críticas a Sadat de los naseristas y socialistas se dirigían contra el abandono o descuido de las funciones que el régimen naserista le había asignado. La defensa del sector público, el fin del *infītah*, la redistribución y las políticas sociales eran la punta de lanza de sus reivindicaciones. En cuanto a las demandas de democracia y pluripartidismo, no eran unánimes entre estas fuerzas ni, en numerosas ocasiones, convincentes. Como sucedía con los representantes de la derecha liberal-económica (relacionados con las épocas más negras, en términos de libertades, del periodo monárquico), los de la izquierda naserista tenían un pasado de colaboración con el régimen naserista que les restaba credibilidad, si

bien el caso de los marxistas era algo diferente, al haberse opuesto o sido críticos con el régimen naserista y después haber encabezado las demandas de pluripartidismo.

En definitiva, es evidente que el Estado republicano en su conjunto no era objeto del rechazo de la mayoría de los egipcios bajo el régimen de Sadat. Por el contrario, en su dimensión económica (como regulador, propietario, promotor, empleador y redistribuidor), las fuerzas centrípetas, las que defendían un modelo más cercano al de Náser que al que apuntaban las iniciales medidas liberalizadoras de Sadat, eran superiores a las centrífugas. Sin embargo, la visión acerca del sistema político había comenzado a cambiar ya desde finales de los 60: enfrentados a los fracasos relativos o a las políticas insatisfactorias de los dirigentes, numerosos sectores de la sociedad reclamaban pluralismo y participación. No obstante, de ahí a decir que la reivindicación de democracia era fuerte hay un largo camino: cada sector social y/o ideológico pretendía hacer oír y que se atendieran sus demandas, pero no está nada claro que estuvieran dispuestos a aceptar que las de otros se impusieran democráticamente a las suyas. Por el contrario, la experiencia histórica mostraba, hasta el final del mandato de Sadat, que la satisfacción de las demandas propias en otros terrenos llevaba a una gran tolerancia de un sistema no democrático y de los eventuales abusos del autoritarismo y sus damnificados. El modelo de Náser había funcionado sobre estas bases y sobre una buena gestión, en términos de resultados globales, de la “inclusión” económica, social, e incluso política. Sadat pretendió desmontar ese modelo y acabar con el unanimismo para obtener el aval a su distanciamiento del naserismo en política económica y exterior. Su limitada liberalización política, sin embargo, equivalió únicamente a abrir la caja de Pandora de los descontentos sin un proyecto meditado y coherente para gestionarlos. A pesar del tanto que se apuntó inicialmente con la pluralización y liberalización de la escena política, en un estadio posterior aquellas no hicieron más que subrayar su carácter esencialmente autocrático y arbitrario.

Sadat falló tanto al modelo liberal-democrático como al islamista como al naserista: por autocrático y autoritario que pudiera ser Náser, consiguió instilar en la mayor parte de los egipcios la idea de que daba curso al consenso mayoritario de la población, de que las políticas que él decidía y definía respondían a los deseos de la mayoría, de que era una suerte de padre justo, arbitral y eficaz, aunque pudiera ser duro con quienes amenazaran “la unidad de la nación”. Probablemente, la mayor parte de los egipcios deseaba una “actualización” del régimen naserista que eliminara sus aspectos negativos: las violaciones de los derechos humanos, la crisis económica, el control estatal de la sociedad en términos económicos, políticos e ideológicos... Sin embargo, ni Sadat articuló instrumentos que dieran auténticas soluciones a estos problemas ni la

gran diversidad ideológica de las corrientes de oposición permitió que esta le empujara por un camino determinado. Es significativo en este segundo sentido que, a fin de cuentas, el elemento que les uniera frente a Sadat fuera el rechazo a la paz con Israel, es decir, el factor “más externo” a la vida cotidiana de los egipcios.

SEGUNDA PARTE

III. EL RÉGIMEN DE MUBARAK

1. LA PROMESA DE LA DEMOCRATIZACIÓN (1981-1990)

INTRODUCCIÓN. El mito fundacional de la democratización.....	413
1. En busca de una nueva legitimidad	415
1.1 El relevo en el poder. Primeros gestos de distensión, de inclusión... y de exclusión .	415
1.2 La autocrítica económica.....	417
1.2.1 Retorno a la planificación e “ <i>infitah</i> productivo”	417
1.2.2 La “campana contra la corrupción”	418
1.3 Apertura política por vía del poder judicial	419
1.4 Mantenimiento de la Ley de Excepción	421
1.5 La recuperación de la prensa como escenario selectivo de la diversidad política.....	422
2. El acceso de la oposición al Parlamento.....	426
2.1 Las elecciones a la Asamblea Consultiva de 1983: continuidad monolítica sin trascendencia	426
2.2 Los prolegómenos de las elecciones legislativas de 1984.....	427
2.2.1 La nueva ley electoral.....	427
2.2.2 Debilidad estructural de los partidos políticos y alianzas <i>contra natura</i>	429
2.2.3 Las posturas de los partidos en sus programas y en la campana	430
2.2.4 Campana electoral bajo control	435
2.3 Las elecciones legislativas de mayo de 1984	437
2.3.1 Participación electoral incierta, pero baja y desigual	437
2.3.2 Resultados electorales.....	439
2.3.3 El fraude electoral.....	440
2.3.3.1 Las acusaciones de la oposición	440
2.3.3.2 Las formas del trucaje electoral.....	441
2.4 Una lectura política de las elecciones legislativas.....	443
3. Crisis económica, resistencias de la burguesía y protestas sociales	447
3.1 Los decretos de enero de 1985 y el triunfo de la burguesía comercial y financiera....	448
3.2 Discreta reducción de las políticas sociales.....	450
3.3 El impuesto inflacionario.....	451
3.4 La resistencia exitosa de los trabajadores a la liberalización y los recortes en sus derechos	452
3.5 La revuelta de los reclutas de la Seguridad Central.....	456
4. Retorno de la tensión política y la violencia	460
4.1 La continuidad de la apertura en el ámbito parapolítico	460
4.2 El renacer de la violencia	461
4.2.1 Activismo islamista radical y atentados antiisraelíes	461
4.2.2 Violencia, control y represión del islamismo radical.....	463
4.3 El fin de la “luna de miel” entre la prensa de oposición y el poder	464

5. Las elecciones legislativas de 1987. Nuevas concesiones a la oposición	466
5.1 La inconstitucionalidad de la ley electoral y sus consecuencias	466
5.1.1 Un Tribunal Constitucional comprensivo con el poder.....	466
5.1.2 Un nuevo sistema electoral mixto con candidaturas individuales.....	467
5.1.3 Intentos desbaratados de unión de toda la oposición	467
5.2 Novedades y continuismo en el panorama electoral de 1987	468
5.2.1 La alianza entre los Hermanos Musulmanes, el PST y el PL.....	468
5.2.2 Partidos, programas y candidatos independientes.....	470
5.2.3 La campaña electoral y los candidatos de la oposición.....	473
5.2.4 Los candidatos del PND. Entre la renovación y el clientelismo	474
5.3 Los resultados electorales.....	475
5.3.1 Participación.....	475
5.3.2 El avance electoral del Wafd y de los Hermanos Musulmanes.....	476
5.4 El apoyo de la Coalición Islámica a la reelección de Mubarak y la abstención del Wafd	478
6. La persistencia de la crisis económica de raíz financiera.....	480
6.1 El ajuste estructural aplazado.....	480
6.2 El aumento del paro y de la pobreza	481
6.3 El fin de las sociedades de inversión “islámicas”	483
7. El régimen ante el desafío de la deslegitimación	487
7.1 El resurgir del islamismo armado.....	487
7.1.1 Declaración de intenciones del islamismo radical	487
7.1.2 La espiral de la violencia y sus causas	488
7.2 El fortalecimiento del Ministerio del Interior	491
7.3 Esfuerzos de unidad de la oposición	492
7.3.1 El boicot a las elecciones locales de 1988: recentralización administrativa y política	492
7.3.2 Los boicots a las elecciones de la Asamblea Consultiva (1989) y al Parlamento (1990): los límites de la unidad y la coherencia de la oposición.....	493
7.4 El poder judicial, entre la independencia y la subordinación.....	495
7.5 Las injerencias gubernamentales en la crisis del PST.....	497
7.6 Balance del incremento de la violencia política.....	498
8. Las elecciones legislativas de 1990.....	502
8.1 Nuevo sistema electoral, nuevas circunscripciones y viejos y nuevos candidatos	502
8.2 La participación. Violencia sin precedentes	504
8.3 Lectura de los resultados electorales: clientelismo y éxito de los “disidentes” electorales.....	505
9. Los márgenes del sistema político formal. Apoyos, consentimiento, control y	

resistencias.....	507
9.1 La hegemonía de la burguesía de Estado: incorporación fragmentada	507
9.2 El Ejército y su papel político y económico	509
9.2.1 El papel económico del Ejército	510
9.2.1.1 La consolidación de la producción militar	510
9.2.1.2 La reorientación hacia el sector civil.....	511
9.2.2 Clientelismo, negocios y privilegios	512
9.3 El apoyo de las jerarquías religiosas.....	513
9.3.1 El Gran Jeque de Al-Azhar y el Muftí.....	513
9.3.2 El apoyo del papa Chenuda. La simbiosis entre el poder político y las iglesias	517
9.4 Los sindicatos profesionales. Pluralización ideológica, falta de cohesión interna y corporativismo cointegracionista.....	518
9.4.1 El Sindicato de Abogados: entre el corporativismo y el triunfo del cointegracionismo	519
9.4.2 El Sindicato de Periodistas y la dependencia económica del Estado	521
9.4.3 El Sindicato de Ingenieros, epítome del corporativismo cointegracionista.....	522
9.4.4 El Sindicato de Médicos, la “islamización sindical pionera”	523
9.4.5 Otros sindicatos profesionales. Judicialización e islamismo.....	525
9.5 El régimen político y el movimiento sindical. Resistencias de las bases y connivencia de parte de la izquierda.....	525
9. 6 La contención del movimiento estudiantil.....	529
10. Conclusiones.....	531
10.1 El sistema de partidos: participación y representación otorgadas y encajonadas.....	531
10.2 La ambigua inclusión política informal de los Hermanos Musulmanes	532
10.3 Los escaños de la oposición como concesión del régimen. Una sospecha cada vez más verosímil	533
10.4 Las elecciones: vía de acceso al régimen y regulador de los conflictos entre elites .	536
10.5 La síntesis pluralista- <i>churocrática</i> / corporativista	538
10.6 De la figura buscada del “Présidente Padre” al “Presidente Árbitro”	542
10.7 El “éxito” de Mubarak amenazado.....	544

INTRODUCCIÓN. El mito fundacional de la democratización

Dentro de la larga duración del régimen de Hosni Mubarak se puede distinguir una primera parte, que se extiende a lo largo de los años 80 hasta el final de 1990, diferenciada de las siguientes por el relativo éxito del que el presidente pretendió que fuera el “mito fundacional” de su legitimidad: “la democratización”. Situamos el fin de este primer periodo en el momento en el que dicho mito perdió vigencia y entró en franco declive, en el momento en que los diversos partidos y fuerzas políticas autorizadas o incluidas informalmente en el sistema (como los Hermanos Musulmanes) comenzaron a utilizar la amenaza de deslegitimar al régimen mediante su no participación en las elecciones, una de las piezas clave del sistema político formal, y tratar de forzar con ello una mayor apertura del sistema político. Concretamente, el periodo acabaría en las elecciones legislativas de 1990, cuando las principales de dichas fuerzas cumplen su amenaza y se da paso a una nueva situación en la que, a diferencia de las legislaturas iniciadas en 1984 y 1987, la oposición tendría una representación insignificante en el Parlamento.

Se abre entonces en 1990 un periodo de incertidumbre, dada la absoluta hegemonía del partido gubernamental en el Parlamento, la perspectiva en el horizonte de la celebración de elecciones presidenciales en 1993 a las que Mubarak había prometido no presentarse, y la consolidación de otro movimiento de deslegitimación del régimen político: las actividades armadas contra el Estado de algunos sectores del islamismo político radical, iniciadas en 1987. En ese momento, tras las legislativas de 1990, es una incógnita cuál será la actitud tanto del régimen político como de las fuerzas de oposición.

Situar la evolución aparente, factual, del sistema político formal en el centro de los análisis del régimen de Mubarak en este primer periodo es una perspectiva impuesta por el propio régimen político. A pesar de la crisis de legitimidad del régimen “heredado” por Mubarak, cuyas características y problemáticas hemos analizado en las conclusiones de nuestro estudio de la época de Sadat (capítulo II 7), tanto el régimen como el nuevo presidente seguían teniendo la iniciativa, pues no se encontraban en una situación de extrema debilidad ni la oposición estaba en condiciones de determinar, ni siquiera condicionar, el curso de los acontecimientos. La reactivación del sistema limitado y controlado de partidos, y la ampliación de la libertad de acción de los autorizados, sobre todo en sus posibilidades de expresión por medio de la prensa y de acceso real al Parlamento -que incluiría informalmente a los Hermanos Musulmanes-, era la principal oferta del nuevo presidente a la sociedad en términos de participación formalmente política. A su vez, la sociedad habría de responder a ella iniciando una interacción dialéctica en la que cada parte implicada evaluaría el verdadero alcance de las intenciones y actitudes de sus adversarios y del resto de los actores políticos.

No obstante, la observación de la evolución del sistema político formal y de los participantes en él conduce por un lado a la fácil detección de los excluidos de la oferta del régimen político y de los autoexcluidos de la participación en dicho sistema. Por otro lado, tal observación muestra un funcionamiento “real” o “subyacente” del sistema que contradice en gran medida los principios liberales y democráticos sobre los que supuestamente se asientan no solo el sistema y la actitud de las autoridades y el partido gubernamental, sino también la de los propios partidos de la oposición. Finalmente, la observación del sistema político formal no impide advertir, sino que lo facilita en muchos casos, la permanencia de otros elementos que constituían el entramado del régimen político en tanto que sistema de poder compuesto por elites, políticas, estructuras y modos de gestión de las relaciones con la sociedad, estructuras y modos de gestión que también forman parte -junto con el funcionamiento efectivo del sistema político formal- de lo que llamamos el “sistema político real”.

1. EN BUSCA DE UNA NUEVA LEGITIMIDAD

1.1 EL RELEVO EN EL PODER. PRIMEROS GESTOS DE DISTENSIÓN, DE INCLUSIÓN... Y DE EXCLUSIÓN

Hosni Mubarak fue nombrado candidato a la presidencia de la República el 7 de octubre de 1981, un día después del asesinato de Anwar al-Sadat, y su candidatura fue aceptada en el plebiscito celebrado el 14 de octubre por la previsible mayoría de más del 99% de votos afirmativos. Antes de los comicios, los presidentes del Partido Socialista del Trabajo (PST) y del Partido Liberal Socialista (PLS) habían manifestado su apoyo al presidente, mientras que Jaled Mohai Eddín, del Tagammu, tercer partido de la oposición legal, había declinado hacerlo. No obstante, tan solo una semana después de su elección Mubarak se reunió con los tres presidentes y Mohai Eddín manifestó que el presidente “había dado varios pasos en el sentido de un diálogo nacional”¹.

Las primeras declaraciones y medidas de Mubarak se orientaron a tranquilizar a sus aliados y partidarios, a prometer la máxima firmeza ante el desafío del islamismo radical y a enviar señales conciliadoras a la oposición, incluida la representada por aquel. Inmediatamente manifestó su compromiso de mantener los Acuerdos de Paz con Israel y el resto de las políticas de Sadat, y afirmó que las amenazas al orden público serían firmemente reprimidas. Tras el control del conato de levantamiento islamista radical en el Alto Egipto, en los meses siguientes varios cientos de militantes fueron detenidos y entre 30 y 40 oficiales del Ejército expulsados de él por sus relaciones con los grupos radicales. En noviembre de 1981, la instrucción del juicio contra los implicados en el magnicidio había concluido, y en abril de 1982 Abdel Salam Farag, Al-Islambuli y los otros dos participantes directos en él que seguían vivos serían ejecutados. Sin embargo, el tribunal militar había rechazado atender la petición del fiscal de condenar a muerte a los 24 acusados y, hecho más sorprendente aún, había permitido que aquellos expusieran con detalle las torturas a las que habían sido sometidos. Esta actitud de transparencia y relativa clemencia se repetiría en el proceso de los acusados por el levantamiento de Asiut, causa denominada Organización de la Yihad, que concluiría el 30 de septiembre de 1984 con la condena de tan solo 110 de los 302 acusados, todos ellos a penas de prisión, a pesar de que el fiscal había pedido la pena de muerte para 299. A ello hay que añadir que cientos de detenidos no habían sido llevados a juicio y fueron liberados por falta de pruebas (جنينة 1988: 22-23)².

¹ Cronología de la RPE, nº 8 (1983).

² El libro citado de Naamat Guenena recoge los testimonios durante su proceso de los principales acusados en la causa del asesinato de Sadat y de la Organización de la Yihad (جنينة 1988: 147-222).

Las señales de voluntad de distensión enviadas por Mubarak a los militantes islamistas radicales por medio de los procesos judiciales fueron precedidas y acompañadas por las que dirigió al resto de la oposición. El 7 de noviembre de 1981 anunció que los detenidos por Sadat en el mes de septiembre anterior serían liberados, y a finales de año ya habían salido de prisión los principales dirigentes políticos y otras personalidades como Hasanein Heikal, la activista feminista Nawal al-Saadawi y el guía general de los Hermanos Musulmanes, Omar al-Telmesani que, tras ello, manifestaría también su apoyo a Mubarak³. Unos días después, algunas de las publicaciones a través de las cuales se había expresado la Hermandad recuperaban sus licencias de edición⁴, aunque uno de sus principales órgano de expresión, *Al-Itisam*, no lo haría hasta julio de 1984, y al otro, *Al-Daawa*, no se le devolvería la licencia.

Las liberaciones de detenidos se sucedieron dilatándose en el tiempo, pero siguieron una pauta y un ritmo diferenciados según el color y el estatuto políticos de los detenidos. Pero además, fueron acompañadas por nuevas detenciones, algo que no siempre se señala suficientemente cuando se evalúa este periodo y que es especialmente significativo para comprender la posterior deriva del régimen de Mubarak a los efectos que nos importan en nuestro estudio. Los dirigentes de sindicatos profesionales, las personalidades religiosas -musulmanas y coptas- y muchos otros detenidos de diversa condición -más de 4.000 personas- recobraron la libertad a lo largo de 1982 y principios de 1983⁵. Sin embargo, otro destino conocerían numerosos militantes de la izquierda marxista, tanto los encarcelados en septiembre de 1981 como los muchos que fueron detenidos después de dicha fecha. Entre los más antiguos se encontraban miembros del Tagammu y colaboradores de su órgano de prensa *Al-Ahali*, que se enfrentarían a un proceso judicial que no concluiría hasta finales de mayo de 1986. En cuanto a las nuevas detenciones de militantes de grupos de izquierda marxista ajenos al Tagammu, se producirían periódicamente a lo largo de los años 80 desde el día siguiente al anuncio de Mubarak de que liberaría a los detenidos en septiembre⁶. Por otro lado, el papa copto, Chenuda III, seguiría apartado de sus funciones y confinado en Wadi Natrun.

³ Cronología de la RPE, nº 9 (1983).

⁴ Nos referimos a *Al-Liwá al-Islami*, que pertenecía al propio partido gobernante y a *Al-Nur*, cuya licencia era propiedad del PLS. El “préstamo” o más bien “alquile” de órganos de prensa a otros grupos o corrientes por parte de sus titulares era y siguió siendo una práctica corriente en Egipto para algunos partidos como el PLS.

⁵ Tan solo en 1982 fueron liberados 4.000 detenidos (Amnistía Internacional, *Informe 1982*. Barcelona, 1983. Citado por Martín Muñoz: 1992: 347).

⁶ El día 8 de noviembre de 1981 fueron detenidos 65 miembros de organizaciones comunistas; el 8 de febrero de 1982, otros 31, acusados de haber constituido un partido comunista clandestino; el 10 de agosto de 1983, otros 26; y así en varias tandas más (Cronología de la RPE, nº 9 (1982) y 14 (1984)).

1.2 LA AUTOCRÍTICA ECONÓMICA

El 6 de noviembre de 1981, el director de *Al-Ahram* afirmó en un editorial que Egipto se encontraba en una crisis económica severa. Como ha señalado Samer Soliman (2011), que el responsable del principal diario público del país hiciera tal aseveración apuntaba a que se iban a producir cambios significativos en la retórica oficial: tan solo un año antes, el propio Sadat y los responsables del Gobierno no se habían cansado de repetir que en ese año comenzaba “la época de la prosperidad”. Dos fueron sus líneas de actuación principales: la reorientación del *infitah* y la campaña, digamos que promocional, de lucha contra la corrupción.

1.2.1 Retorno a la planificación e “*infitah* productivo”

En una conferencia económica convocada por Mubarak al más alto nivel y celebrada en febrero de 1982 llegó la confirmación del cambio de rumbo económico: en el discurso inaugural, el presidente señaló que el objeto de la conferencia era establecer un balance del estado de la economía, y apuntar consideraciones para establecer un plan de acción. Las conclusiones principales de la conferencia fueron que el Gobierno debía retornar a la planificación económica y social central y reorientar el *infitah* hacia la producción sin abandonar el proceso de liberalización, pero reduciendo el consumo (Soliman 2011: 35-36)⁷.

Tras la mencionada conferencia auspiciada por el presidente, la crítica al *infitah* no solo fue autorizada, sino también estimulada desde las altas esferas. La revista estatal *Al-Ahram al-Iqtisadi* abrió sus puertas a los economistas de izquierdas y se convirtió en el principal foro de debate. Economistas como Fuad Mursi y Ramzi Zaki desgranaron las principales críticas de la izquierda: el *infitah* tan solo había conseguido fomentar las importaciones y el consumo, dañando a la industria local. El crecimiento de los años 70 había sido una mera consecuencia del influjo de recursos rentistas y ayuda exterior, mientras que los capitalistas egipcios, que componían un sector mayoritariamente “parasitario”, se habían concentrado en especular e invertir en sectores no productivos de rápida rentabilidad, como la importación de bienes de consumo, el sector inmobiliario y la construcción. Los economistas de izquierda proponían favorecer el capitalismo nacional reduciendo las importaciones mediante la imposición de aranceles y reactivar el papel del Estado en el estímulo de la producción. En cuanto a los economistas de derechas, si bien defendieron el *infitah* como principio general, tuvieron que reconocer que el desarrollo económico se había limitado a los sectores comercial y financiero, en detrimento del

⁷ Los documentos de la conferencia pueden encontrarse en *Al-Ahram al-Iqtisadi*, 22 de febrero de 1982.

industrial, e incluso admitieron que la política económica había estimulado el florecimiento de una clase empresarial oportunista, que había formado “centros de poder”, como señaló el propio Abdel Aziz Higazi, expresidente del Gobierno que había sido encargado por Sadat de acometer la liberalización (Soliman 2011: 36-37)⁸.

1.2.2 La “campana contra la corrupción”

En el marco de esta revisión de la política económica y sus consecuencias, el naciente régimen de Mubarak anunció con un gran despliegue publicitario una campaña contra la corrupción, a raíz de la cual, como ya hemos señalado en el capítulo II 4.6, serían procesados por el Tribunal de la Ética Rachad Osmán y Esmat al-Sadat, condenados respectivamente en enero de 1982 y febrero de 1983 a un año de detención preventiva y al secuestro judicial de los bienes y propiedades familiares. En relación con estos casos fueron asimismo condenados dos exministros y varios gobernadores civiles y directores del sector público⁹.

La prensa oficial insistió en destacar el papel personal de Mubarak en la promoción de esta campaña. Por poner un ejemplo, Ibrahim Saada, director del diario *Ajbar al-Yaum*, afirmó en octubre de 1982 que el presidente había bloqueado anteriormente el intento de Esmat al-Sadat de obtener sin concurso público, en colaboración con un socio norteamericano desconocido, un contrato de transporte de armas estadounidenses a Egipto por valor de 51 millones de dólares. Lo que Saada no señaló es que la licitación fue finalmente obtenida por Hussein Salem, exmiembro de los servicios secretos egipcios, en asociación con Thomas S. Clines, exmiembro de la CIA, y que dicho contrato estaba siendo investigado por las autoridades norteamericanas¹⁰. Salem era amigo y colaborador de Mubarak desde hacía años, y seguiría siéndolo al tiempo que acumulaba una considerable fortuna, gran parte de la cual sería obtenida gracias a sus relaciones con el presidente y con su hijo. En mayo de 2011, tras la caída de Mubarak, Interpol dictaría una orden de detención de Salem, que se había refugiado en España, iniciándose un complicado proceso en el que sería también acusado por la autoridades españolas, si bien estas se negaron a extraditarlo tras su condena por los tribunales egipcios, el 12 de junio de 2012, a quince años de prisión.

Según Soliman, la “campana contra la corrupción” de Mubarak pretendía tan solo cortar las alas a los poderosos hombres de negocios asociados a la era de Sadat, y despejar

⁸ Soliman cita *Al-Ahram al-Iqtisadi*, 26 de febrero de 1982, para dar cuenta de las palabras de Higazi.

⁹ *Al-Ahram*, 14 de febrero de 1983. Citado por Martín Muñoz (1992: 348)

¹⁰ David B. Ottaway: “Sadat’s Brother to Stand Trial on Corruption”, *The Washington Post*, 20 de octubre de 1982, edición en internet (<http://goo.gl/cCnNta>, consulta del 20 de mayo de 2015). Ottaway cita a Saada sin dar la referencia completa de la fuente.

el camino para otros magnates completamente leales a él (Soliman 2011: 38). Para el gran público, en cualquier caso, la campaña constituyó tan solo un leve lavado de imagen, una impresión confirmada por el hecho de que en mayo de 1983 se promulgara una nueva Ley de Secretos de Estado que prohibía publicar, durante un plazo de veinte años y bajo penas de 3 a 5 años de prisión, cualquier tipo de información confidencial relativa a personalidades políticas y acontecimientos históricos recientes¹¹. Otro dato significativo en este sentido es que Osmán Ahmed Osmán nunca sería investigado en proceso alguno, pese a los numerosos indicios que se acumulaban contra él.

1.3 Apertura política por vía del poder judicial

Al comienzo de su mandato, Mubarak declaró que no intervendría en los asuntos judiciales, una promesa que en adelante repetiría sin cesar, insistiendo una y otra vez en que Egipto era un Estado de Derecho (دولة القانون), gobernado por las instituciones (دولة المؤسسات), por la soberanía de la ley (سيادة القانون) y por la Constitución. Y lo cierto es que gran parte de las medidas que favorecieron la relativa liberalización política en sus primeros años de Gobierno se produjeron a instancias del poder judicial, aunque ningún observador pensó que los fallos de este, al menos en los asuntos relativos al sistema político, se produjeran sin haber consultado la opinión del presidente, sino más bien que este buscaba con ellos instilar la idea de la independencia del poder judicial.

La anulación de la mayor parte de las medidas represivas adoptadas por Sadat en septiembre fue dictaminada por el Consejo de Estado¹² entre febrero de 1982 y marzo de 1983. De esta manera, recuperaron la libertad la mayor parte de los detenidos, fueron devueltas la mayor parte de las licencias de publicación de medios de prensa, y fue revertida la ilegalización de una serie de asociaciones coptas. Sin embargo, el propio Consejo de Estado, en contra de la opinión de su Comisión Consultiva, no puso en cuestión la destitución de Chenuda III del papado, alegando en su resolución del 12 abril de 1983 que, más allá de las razones por las que Sadat la había decidido -en las que no entraba-, era potestad del presidente de la República optar por ella de la misma manera que lo era ratificar o no su nombramiento. No obstante, el Consejo dictaminó la ilegalidad de la

¹¹ *Al-Ahram*, 6 y 7 de mayo de 1983. Citado por Martín Muñoz (1992: 349).

¹² El Consejo de Estado, creado en 1945 a partir del modelo de Consejo de Estado francés, es un órgano con una doble función de asesoramiento a la administración previa a la promulgación de las leyes y reglamentos (asumida por la Comisión de Delegados del Consejo de Estado, a la que denominaremos por razones de brevedad Comisión Consultiva), y de juez administrativo competente para anular actos administrativos ilegales, lo que le convierte en garante de la legalidad y de las libertades públicas. En este último sentido, por encima de él solo se sitúa el Tribunal Constitucional, creado en 1979. A diferencia de este, el Consejo de Estado, si bien puede pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las leyes, no puede decidir su anulación. Entre 1969 y 1979 la competencia de juzgar acerca de la constitucionalidad de las leyes recayó en el Tribunal Supremo (Jacquemond 1994a: 79-81).

comisión de cinco obispos nombrada para sustituir al Papa en sus funciones, instando a la comunidad copta a elegir un nuevo pontífice. Sin embargo, apenas una semana después de la resolución judicial, el 20 de abril el Sínodo de los obispos coptos rechazó implementarla afirmando que Chenuda era el jefe de la Iglesia copta y que no podía ser sustituido mientras viviera¹³.

Otro de los asuntos pendientes de la época de Sadat era el enfrentamiento del poder político con la dirección del Sindicato de Abogados. Recordemos que el Consejo de Dirección del sindicato había sido disuelto en virtud de la ley nº 125 de 22 de julio de 1981, y que a su cabeza fue situado un consejo de dirección provisional leal al régimen encargado de redactar un nuevo estatuto sindical. La antigua dirección recurrió ante el Consejo de Estado los decretos de aplicación de la Ley nº 125, y al mismo tiempo presentó un recurso de inconstitucionalidad relativo a ella. A pesar de que el régimen de Mubarak negoció con el antiguo consejo de dirección su rehabilitación y la de su presidente, Ahmad al-Jawaga, consagrada por la Ley nº109 de 1982, los recursos fueron mantenidos y el 11 de junio de 1983 obtuvieron del Tribunal Constitucional el fallo de inconstitucionalidad relativo a la Ley nº 125 promovida por Sadat. El Tribunal, en su fallo, recordaba, con carácter general, “el derecho de los miembros de un sindicato [en virtud del artículo 56 de la Constitución] a elegir por sí mismos con toda libertad a los dirigentes sindicales que expresen su voluntad y les representen” (Jacquemond 1994a: 90-91).

En el terreno del sistema político formal también se produjeron algunos casos de intervención de las instancias judiciales, en el aparente sentido de favorecer la apertura política. Sin embargo, el detalle de estas intervenciones, y las contradicciones implícitas en ellas, no permiten extraer conclusiones en el sentido de una mayor independencia del poder judicial respecto al poder ejecutivo.

El decreto presidencial 156 de 1981 de Sadat había modificado la composición de la Comisión de Partidos sin alterar su espíritu, y la Comisión había pasado a estar compuesta por el presidente de la Asamblea Consultiva, los ministros de Interior, Trabajo y Asuntos Parlamentarios, y tres exmiembros de los cuerpos judiciales. En la práctica, los cuatro primeros serían casi siempre miembros del partido gobernante, lo que les confería el carácter de juez y parte en su labor. En cuanto a los exmiembros de la magistratura, si bien es cierto que el decreto exigía que no pertenecieran a ningún partido, debían ser elegidos con el “conocimiento previo” del presidente de la República.

El primer caso de legalización de un partido por vía judicial se dio cuando el Consejo de Estado falló, el 29 de junio de 1983, que el Partido de la Umma (حزب الأمة), presidido por Ahmad al-Sibahi, que en 1977 había visto denegada su solicitud de legalización por la Comisión de Partidos, debía obtenerla¹⁴. Sorprendentemente, el

¹³ Cronología de la RPE, nº 14 (1984).

¹⁴ El nuevo partido recuperaba la denominación del fundado en 1907 con el apoyo de Lord Cromer con el

Consejo de Estado no tomó en consideración que uno de los principales objetivos del partido era la aplicación de la *charía* en Egipto, lo que contradecía las limitaciones impuestas por la Ley de Partidos, que establecía que no podían constituirse partidos sobre un fundamento religioso. Según Martín Muñoz, la legalización del partido mencionado se debía a “la táctica gubernamental de incluir en el marco legal e institucional una opción islámica moderada a fin de aislar a sus sectores más radicales” (Martín Muñoz 1992: 350).

Un caso mucho más trascendente que el del Partido de la Umma, que estaba llamado a ser un partido irrelevante, fue el del partido Neo-Wafd (حزب الوفد الجديد). Como hemos explicado en II 3.2, este había sido autorizado en 1978, pero la promulgación en ese mismo año de la Ley 33 de Protección del Frente Interior y la Paz Social, que prohibía la participación en actividades políticas de los políticos wafdistas de la época monárquica, le había llevado a autodisolverse. El 24 de agosto de 1983, Fuad Serag Eddín llevó a cabo su primera alocución pública durante la época de Mubarak. En ella, anunció que el Wafd retomaría sus actividades como partido, y exigió que Mubarak dimitiera, y que se celebraran elecciones libres. Al día siguiente, la Comisión de Partidos declaró que, para volver a la actividad, el Wafd debía obtener una nueva autorización. Sin embargo, mediante dos fallos de fecha de 30 de octubre de 1983 y 2 de enero de 1984 el Consejo de Estado establecía que el Wafd tenía derecho a proseguir sus actividades legalmente. No obstante, puesto que la Ley 33 de 1978 seguía vigente, el Gobierno se escudó en ella para, aun permitiendo a Fuad Serag Eddín y otros políticos wafdistas ejercer las labores de dirección del partido, impedirles presentarse como candidatos a las elecciones legislativas de 1984, lo que motivó la presentación por el Wafd de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 5 de dicha ley (Jacquemond 1994a: 91).

Distinta suerte a la del Partido de la Umma y el Wafd (la denominación de Neo-Wafd o Nuevo Wafd sería abandonada) corrió el Partido Naserista, cuya solicitud de legalización fue rechazada por la Comisión el 25 de diciembre de 1983 con el argumento de que la Ley de Partidos establecía que dos partidos no podían defender un mismo ideario político, habiendo sido la defensa del ideario naserista ya asumida por el gobernante PND. En este caso, el Consejo de Estado no enmendaría la decisión de la Comisión.

1.4 MANTENIMIENTO DE LA LEY DE EXCEPCIÓN

El 1 de octubre de 1983 fueron derogadas la Ley de Protección de la Unidad de la Patria de 1972, que establecía duras penas para quienes “crearan problemas confesionales” o “atentaran contra la unidad nacional”, y la Ley de Protección de la Seguridad de la Patria

objetivo de promover un nacionalismo moderado y partidario de la colaboración con los ingleses (véase Introducción 2.1).

y de los Ciudadanos de 1977, que hacía lo propio para quienes participasen en manifestaciones, huelgas o protestas laborales en general. No obstante, en el mismo mes de octubre era renovada por segunda vez y por un año la vigencia del estado de excepción, que en la práctica suspendía los mismos derechos constitucionales que las leyes anteriores y permitía las detenciones sin juicio durante seis meses. La renovación de la ley fue justificada por el ministro del Interior, Hasan Abu Bacha, con el argumento de que era necesaria para mantener la seguridad y la estabilidad, como demostraba, según él la reciente detención de varios militantes islamistas y comunistas¹⁵. La oposición, por su parte, afirmaba que la policía ya realizaba redadas semanas antes de la llegada de la fecha de vencimiento de la prórroga anterior, y recordaba que habían sido promulgadas dos nuevas leyes destinadas a controlar las actividades de los militantes islamistas radicales¹⁶. Por otro lado, el resto del arsenal legislativo e institucional destinado a limitar las libertades públicas, procedente de la época de Sadat, de la de Náser e incluso de la época monárquica, seguía incólume y activo. El mismo 1 de octubre de 1983, el Tribunal de la Ética instaurado por Sadat prohibió a doce candidatos de orientación comunista presentarse a las elecciones a los órganos de dirección de distintas secciones sindicales del Sindicato de Trabajadores¹⁷.

1.5 LA RECUPERACIÓN DE LA PRENSA COMO ESCENARIO SELECTIVO DE LA DIVERSIDAD POLÍTICA

La devolución entre 1981 y 1983 de las licencias de edición a los órganos de prensa de los partidos de oposición, de otras corrientes políticas (como los Hermanos Musulmanes) y de instituciones religiosas (como la Iglesia copta) fue presentada por el naciente régimen de Mubarak como el primer indicio de una nueva era para la libertad de expresión. Sin embargo, no hay que olvidar que la autorización de editar órganos de prensa se restringía a los grupos mencionados y a una serie de publicaciones concretas. En absoluto existía libertad de edición de órganos de prensa. Las autorizaciones seguían dependiendo del Consejo Superior de la Prensa, a su vez dependiente de la Asamblea Consultiva, que, además, podía ejercer los numerosos poderes de control y sanción que le otorgaba la Ley del Poder de la Prensa de 1980.

En la práctica, antes de las elecciones legislativas de mayo de 1984 solo se

¹⁵ Diario *Al-Ahram*, 3 de octubre de 1983. Citado por Martín Muñoz (1992: 350)

¹⁶ Hablamos de la Ley 201 de 1982, que prohibía a los imanes de las mezquitas criticar desde sus púlpitos al Gobierno, y de la Ley 98 del mismo año, que establecía penas de entre seis meses y cinco años para quien explotara la religión para fomentar pensamientos extremistas susceptibles de perjudicar la paz social y la unidad nacional (Martín Muñoz, 1992: 348-349).

¹⁷ Cronología de la RPE, nº 14 (1984).

publicaban 6 periódicos de los partidos legales de oposición: 3 del Partido Liberal Socialista, 1 del Partido Socialista del Trabajo, 1 del Tagammu y 1 del Wafd, este último, con el mismo nombre que el partido, publicado desde solo dos meses antes de las elecciones. Al exiguo número y escasa tirada de los periódicos de los partidos de oposición, y a las dudas acerca del carácter de auténtica oposición de algunos de ellos (como el PLS o el PST), había que contraponer los 5 periódicos del PND y, sobre todo, los 109 medios escritos dependientes de organismos oficiales, en particular los 39 de los grandes medios estatales de información, con tiradas y medios periodísticos y económicos muy superiores a los de la oposición, y cuya línea informativa era controlada por el régimen. Solo las tiradas de los diarios estatales *Al-Ajbar* y *Al-Ahram* y del semanal *Ajbar Al-Yaum* rondaban por sí solas el millón de ejemplares cada una a mediados de los años 80, mientras que la mayoría de los periódicos de la oposición, que entonces eran todos semanales, se acercaban en el mejor de los casos a los 100.000 ejemplares. Únicamente *Al-Wafd*, con mucho mayores medios económicos que otros dada su condición de portavoz de un sector de la burguesía, superaría esas cifras más adelante, llegando a alcanzar los 750.000 ejemplares en algunos momentos de 1986 según Springborg, si bien esta cifra nos parece muy exagerada¹⁸.

Ha de tenerse en cuenta que el Gobierno tenía recursos para dificultar, no solo por acción sino también por omisión, el desarrollo de los medios de prensa de la oposición: no les concedía publicidad estatal, no les facilitaba el acceso a las fuentes de información oficiales, e incluso, en algunos casos, como el del periódico *Al-Ahali* del Tagammu, les "condenaba" desde tiempos de Sadat a una edición materialmente infame, difícil incluso de leer, al ser editado en las viejas imprentas del diario estatal *Al-Gumhuriyya* en lugar de en las modernas de *Al-Ahram* o *Al-Ajbar*, como era el caso de otros periódicos de la oposición.

En cuanto a la libertad de expresión en los medios autorizados, Mubarak prometió que no habría censura ni prohibiciones de ningún tipo, al tiempo que rogaba a la prensa que "respetara la razón y la lógica en todo lo que publicara"¹⁹. No obstante, el 18 de abril de 1983 *Al-Ahali* dejaba de publicar por entregas *Otoño de furia*²⁰, la demoledora crítica al régimen de Sadat de M. Hasanein Heikal, alegando que había sido amenazado de suspensión si continuaba con ella. Poco después, en mayo de 1983, el presidente denunciaba el "fenómeno" según el cual la prensa de partidos se salía "de los objetivos de

¹⁸ Las cifras relativas a la tirada y difusión de los periódicos egipcios siempre son imprecisas. Los datos mencionados, relativos al periodo 1984-1986, proceden de Gómez García (1992: 97) y Springborg (1989: 193-197).

¹⁹ Diario *Al-Ajbar*, 23 de enero de 1982. Citado por Gómez García (1992: 93).

²⁰ El título original de la obra, que hemos citado anteriormente (هيكال 2006), es خريف الغضب, más correctamente traducible por "Otoño de cólera". No obstante, hemos mantenido en el texto el título de la versión en castellano publicada por Argos Vergara (Barcelona) en 1983.

la libertad de expresión, al sumergirse en determinadas prácticas, distanciándose de la objetividad y el interés público, eligiendo un estilo insidioso y provocativo, y perjudicando así al pueblo y al sistema democrático”²¹. Más adelante, el 12 de abril de 1984, sería secuestrada la edición del periódico *Al-Wafd* que incluía su cuarta entrega informativa relativa al robo de documentos inculpatórios incluidos en el sumario del caso “Organización de la Yihad”.

Estos dos casos ponían de manifiesto que la censura seguía existiendo, y que la prensa y los periodistas eran invitados a intuir dónde se encontraban los límites de la libertad de expresión y a autocensurarse. No en vano, la propia Constitución, a pesar de que establecía la libertad de expresión y prohibía la censura, incluía una cláusula que especificaba que, en caso de que se decretara el estado de excepción, podía ser impuesta “una censura limitada en las cuestiones relacionadas con el bienestar general [السلامة العامة] y con los objetivos de la seguridad nacional, de acuerdo con la ley” (art.48). Además, el dispositivo legal egipcio contaba con una docena de leyes con artículos relativos a la censura, algunas de ellas de la época monárquica, que mostraban un concepto muy general de estas cuestiones de interés general (la Constitución, el orden establecido, los cultos religiosos), y que permitían al Ejecutivo intervenir prácticamente en cualquier terreno²². En el caso de las producciones escritas, la censura podría ser ejercida mediante secuestro judicial de las obras ya impresas (algo facilitado en el caso de los periódicos por el hecho de que se imprimieran en las imprentas del Estado), y la Ley 103 de 1961 atribuía a Al-Azhar el derecho a instar el secuestro. En cuanto a la producción teatral, cinematográfica y videográfica, era sometida a un control previo a su difusión, que era ejercido por el Ministerio de Cultura (Hamza 2000: 11-12).

Sin embargo, a pesar de lo dicho, los primeros años de mandato de Mubarak conocieron una considerable distensión en las relaciones entre el poder y los medios periodísticos que acabaría redundando en una mayor libertad de expresión. Aunque hubo algunas excepciones²³, se abandonó el acoso sistemático a los periodistas (retiradas de carnets profesionales, ceses, detenciones y declaraciones agresivas) que había caracterizado la segunda mitad del mandato de Sadat, y decenas de periodistas expulsados de derecho o de hecho del ejercicio de la profesión retornaron progresivamente a él tanto en los medios estatales como en los privados, volviendo en la mayor parte de los casos del extranjero. El retorno a las páginas de los grandes medios de prensa estatales de las firmas de prominentes figuras del naserismo (como Mohammed Hasanein Heikal, Kamal Zuheir y Mohammed Auda) y de la izquierda socialista de diferentes tintes (como Galal Amín, Adel

²¹ Discurso con ocasión de la celebración del 1 de mayo de 1983 (القاضي 1985: 27).

²² El inventario de estas leyes, a algunas de las cuales haremos referencia más adelante, puede encontrarse en Hamza (2000) y Hamad (2000).

²³ Por ejemplo, Lutfi Abdel Azim, director del estatal *Al-Ahram al-Iqtisadi*, fue cesado por haber pedido la ruptura de los acuerdos de paz con Israel tras la invasión del Líbano en 1982.

Husein, Mahmud Abdel Fadil y otros), así como el consentimiento implícito para que la izquierda socialista se hiciera fuerte en medios como las revistas *Al-Ahram al-Iqtisadi* o *Al-Talía* (reeditada en mayo de 1984) y los naseristas en otros como el semanal *Ruz al-Yusuf*, señalaron el comienzo de esta nueva era de las relaciones entre el poder y la prensa. Con todo, hay que destacar que hasta mediados de los años 80 incluso los periodistas más contestatarios mantuvieron un tono muy prudente y moderado.

Por el contrario, estos aires de pluralidad no alcanzaron en absoluto a la radio y la televisión públicas, de los que se encontraban excluidos las personalidades y puntos de vista que no se correspondían plenamente con los del naciente nuevo régimen. Radio y televisión públicas eran las únicas existentes entonces y los únicos medios a los que realmente accedía la mayor parte de la población dado el índice de analfabetismo (del 50%) o de analfabetismo funcional (cercano al 20%)²⁴.

²⁴ Según los datos oficiales, en 1986 cerca del 50% de los 34,6 millones de egipcios mayores de edad eran analfabetos, y más del 20% solo sabían “leer y escribir” (no habían obtenido el certificado de educación primaria). El porcentaje de analfabetismo era mucho mayor entre las mujeres (61,8%) que entre los hombres (37,8%), y mayor en la población rural que entre la urbana (75,8% entre las mujeres y 47,1% entre los hombres (CAPMAS 1990: 22).

2. EL ACCESO DE LA OPOSICIÓN AL PARLAMENTO

2.1 LAS ELECCIONES A LA ASAMBLEA CONSULTIVA DE 1983: CONTINUIDAD MONOLÍTICA SIN TRASCENDENCIA

Las elecciones para la renovación parcial de la Asamblea Consultiva de julio de 1983 fueron tan solo un trámite sin trascendencia. La Asamblea Consultiva no contaba con atribuciones legislativas ni de control del poder ejecutivo. Sadat, en su habitual tono paternalista, había declarado al crearla que deseaba que fuera “la Cámara de la familia egipcia, en la que se intercambien opiniones acerca de los asuntos que preocupan a la calle egipcia” (أبو زيد 1996: 99), y la Constitución, en sus artículos 194 y 195, la presentaba como un mero foro de debate de leyes y temas de interés general que podía emitir recomendaciones. En la práctica, las funciones más destacadas de esta cámara eran ejecutivas, pues su presidente controlaría la Comisión de Partidos, el Consejo Superior de la Prensa y la prensa estatal. Con toda probabilidad esta era la razón de que el procedimiento de formación de esta cámara hiciera que fuera mucho más difícil que escapara del control del poder ejecutivo, pues tan solo dos tercios de sus 210 diputados eran elegidos por sufragio universal, un tercio cada dos años, mientras que el tercio restante era designado por el presidente de la República. En atención a todas estas circunstancias, en sus programas electorales para las legislativas de 1984 el PST y el Tagammu propondrían su supresión, y el Wafd su reforma (Martín Muñoz 1992: 368).

Cuando el Gobierno decidió mantener el sistema electoral seguido bajo el mandato de Sadat, basado en las candidaturas de listas cerradas elegidas por mayoría absoluta, excluyendo las candidaturas individuales y/o la introducción de la proporcionalidad en el reparto de escaños, lo cual había sido solicitado por los tres principales partidos, estos decidieron boicotear las elecciones. En consecuencia, el PND obtuvo el 100% de los escaños, y la única sorpresa fue que el propio Gobierno anunció un porcentaje de participación de tan solo el 51,7%, muy alejado de las grandes cifras oficiales de la época anterior, si bien las estimaciones de la oposición y de otros observadores lo situaban muy por debajo de esa cifra, en particular en las grandes ciudades donde no habría alcanzado el 10% (Martín Muñoz 1992: 353).

2.2 LOS PROLEGÓMENOS DE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DE 1984

2.2.1 La nueva ley electoral

El 1 de agosto de 1983 fue promulgada una nueva ley electoral (Ley 114/1983), que enmendaba la legislación anterior y regiría las elecciones legislativas de mayo de 1984²⁵. El sistema de listas individuales y elección por mayoría en circunscripciones uninominales sería ahora sustituido por uno de listas cerradas de partidos y representación proporcional. La disposición parecía satisfacer las demandas de los partidos legales, pero excluía a la oposición o los ciudadanos no encuadrados en los partidos legales -que en un sistema de candidaturas individuales o en un sistema mixto habrían podido presentarse-, y ponía grandes trabas al éxito electoral de estos últimos.

A las elecciones solo podrían presentarse los partidos legales por separado, quedando las coaliciones electorales expresamente prohibidas. Las listas debían presentar un candidato titular y un suplente para cada escaño, e incluir, en formato “cremallera”, al menos un 50% de “obreros o campesinos”, pues seguía vigente el requisito introducido por Nâser -que crearía complicaciones a algunos partidos-, de que aquellos estuvieran presentes en esa proporción en todos los órganos representativos²⁶. Asimismo, se introducía un nuevo diseño de las circunscripciones y de las atribuciones de escaños a cada una de ellas, que beneficiaban al partido gobernante²⁷. Finalmente, para obtener realmente los escaños cada partido debía alcanzar al menos el 8% de los votos a nivel nacional, y los votos sobrantes de los partidos que no llegaran a ese mínimo serían atribuidos a la lista más votada, lo que era previsible que favoreciera al partido gobernante. Respecto a esta disposición, es interesante señalar que en el proyecto de ley inicial el requisito mínimo de votos a nivel nacional se establecía en el 10%, pero pocos días antes de su aprobación definitiva Hosni Mubarak solicitó al Parlamento que se bajara al 8%, a lo que este accedió. Es importante destacar este proceso -en el que, en apariencia, una intervención personal del presidente daría pie a la enmienda de una decisión tomada por otro poder del Estado-,

²⁵ Martín Muñoz (1992) incluye un detallado análisis de esta ley (págs. 355-361), recogiendo asimismo en un anexo su traducción al castellano (págs. 471-484).

²⁶ Según la ley, que recogía las definiciones de campesino y obrero establecidas en 1972, “campesino” era quien tenía “la agricultura como único trabajo y principal fuente de sustento, reside en el campo y no posee ni él ni sus hijos más de 10 *feddan*es” y “obrero” quien realizara “un trabajo manual o intelectual en la agricultura, la industria o los servicios, basando principalmente sus ingresos en el resultado de ese trabajo, sin poseer titulaciones superiores ni pertenecer a ninguna corporación profesional” (art.2). Los elegidos como obreros y campesinos podrían perder sus escaños si dejaban de reunir las condiciones mencionadas y así lo votaba un tercio de los miembros de la Asamblea (art.3) (Martín Muñoz 1992: 472).

²⁷ Así, por ejemplo, a las circunscripciones de las zonas desérticas, con un escaso número de habitantes, y donde era difícil que cogiera fuerza cualquier alternativa a los candidatos del aparato estatal, se les concedía un número de escaños generoso en términos relativos, y en las zonas urbanas más pobladas sucedía exactamente lo contrario (Martín Muñoz 1992: 358; أبو زيد 1996: 95-96).

porque responderá a un patrón seguido en numerosas ocasiones bajo el mandato de Mubarak. Más adelante lo recordaremos e interpretaremos.

Otra disposición de la ley electoral susceptible de beneficiar al PND era la que establecía que 31 escaños estaban reservados a mujeres en otras tantas 31 circunscripciones, que determinaba el Ministerio del Interior. Todas las listas debían presentar candidaturas a estos escaños, que no se incluirían en la lista ordinal del partido sino separadamente, y se haría con todos ellos el partido que obtuviera mayor número de escaños a nivel nacional.

Además de lo dicho, la legislación electoral²⁸ seguía dejando en manos del Ministerio del Interior, y no de los jueces, la mayor parte de la supervisión del proceso electoral, desde la elaboración del censo electoral hasta el escrutinio, algo que en absoluto resultaba tranquilizador para los partidos de la oposición, y que según estos y numerosos juristas contradecía la Constitución. El artículo 38 de esta establecía que el proceso electoral debía realizarse “bajo la supervisión de miembros de los cuerpos judiciales”. La legislación electoral pretendía cumplir esta prescripción situando a uno de aquellos a la cabeza de los colegios electorales generales o centrales (لجان عامة), en los que se realizaba el recuento de los votos de cada circunscripción; sin embargo establecía que los colegios sectoriales (لجان فرعية), en los que se celebraba la votación, podían ser presididos por un magistrado o por un funcionario del Ministerio del Interior, opción esta última elegida por el Gobierno.

Finalmente, la Ley de Partidos de 1977, enmendada en 1979, y la Ley de Protección del Frente Interior y la Paz Social, de 1978, continuaban imponiendo limitaciones a los programas de los partidos, que no podían oponerse a los Acuerdos de Camp David, ni a al “sistema socialista democrático”, ni a los “logros socialistas”, ni a la revolución de 1952 ni a la “revolución correctora” de 1971. Por otro lado, una serie de disposiciones amparadas en el estado de excepción vigente dificultarían que los partidos pudieran hacer llegar sus propuestas a los ciudadanos: los mítines electorales solo podrían desarrollarse en recintos cubiertos (en las sedes o en pabellones de tela instalados en las calles), y no en plena calle; un mismo partido no podía celebrar dos actos electorales al mismo tiempo en la misma circunscripción electoral; el sonido de los altavoces no podía sobrepasar los límites del recinto cerrado, etc.

²⁸ Los artículos que hacen referencia a estos aspectos en la ley 114 de 1983 son los artículos del 6 al 13. Sin embargo, continuaba estando vigente la Ley 73 del año 1956 relativa al ejercicio de los derechos políticos, que en sus artículos 22 a 38 regulaba con más detalle el proceso electoral. Dicha ley puede consultarse en castellano en Martín Muñoz (1992: 459-470).

2.2.2 Debilidad estructural de los partidos políticos y alianzas *contra natura*

A las elecciones del 27 de mayo concurren cinco partidos: el PND, el PST, el PL, el Tagammu y el Wafd. El Partido de la Umma se retiró de la competición electoral un mes antes de los comicios, a causa de su debilidad estructural y de la pérdida de la principal baza con la que pensaba contar, la atracción de los votos islamistas, función para la cual habría sido autorizado según todos los observadores. Dicha atracción habría sido vehiculada mediante la acogida en sus listas de miembros de los Hermanos Musulmanes. Sin embargo, estos declinaron tal opción en favor de otra de mucho más atractiva que supuso la gran sorpresa de la precampaña: la alianza con el partido Wafd (Martín Muñoz 1992: 363; Springborg 1989:198).

El Wafd y los Hermanos Musulmanes eran los únicos contendientes nuevos respecto al escenario pluripartidista diseñado por Sadat, grandes adversarios estigmatizados por el régimen naserista y a los que Sadat tampoco había concedido carta de naturaleza política aunque hubiera permitido su retorno a la actividad pública. Si separados ya eran los dos principales adversarios potenciales del régimen, unidos parecían constituir una auténtica amenaza, al menos en el marco de una contienda electoral libre y limpia. Su alianza, sin embargo, parecía un tanto *contra natura*, ya que el Wafd era un partido laico y el gran representante político de los coptos, mientras que los Hermanos Musulmanes defendían la adecuación del conjunto de la vida política, social y económica a la ley islámica, si bien siempre habían manifestado que los coptos tenían un lugar reservado, con sus deberes y sus derechos, en el sistema político y social islámico. Por otro lado, el Wafd no se había opuesto frontalmente a la paz con Israel, algo que sí había hecho la Hermandad. No obstante, a juzgar por el cuadro de sus principales dirigentes, el nuevo Wafd estaba llamado a ser el continuador de las tendencias conservadoras que se habían impuesto en su ancestro en los años 40 y sus posturas no encontraban importantes puntos de fricción en el terreno económico y social con las de los HHMM, como veremos en el siguiente capítulo. El hecho de que Mubarak permitiera el acceso de ambas fuerzas a la contienda electoral y su alianza, aunque fuera por intrincados caminos y con restricciones, fue uno de los factores que hicieron que los comicios despertaran gran expectación.

Los presidentes de los partidos de la oposición eran todos ellos personajes de edad relativamente avanzada,²⁹ con un largo pasado político (al que ya hemos hecho referencia en el capítulo II 3.2) y suficientemente conocidos en sus posturas, así como lo eran la mayoría de sus principales dirigentes secundarios. No obstante, ante el comienzo de una nueva era, y ante las nuevas circunstancias políticas, cabía esperar a ver cómo

²⁹ Fuad Serag Eddín, presidente del Wafd, tenía 72 años en 1984; Ibrahim Chukri, presidente del PST, tenía 68; Jaled Mohai Eddín, Secretario General y principal dirigente del Tagammu contaba 62; y Mustafa Kamel Murad, presidente del PLS, 57. Por su parte, Hosni Mubarak tenía 56 años.

evolucionaban los partidos en sus posiciones políticas.

En lo que toca a su estructura, organización y afiliación, 1984 era una fecha demasiado temprana como para sacar grandes conclusiones respecto a su evolución. Los partidos más veteranos tenían una vida de seis o siete años, durante los cuales el Tagammu y el PST habían atravesado años de muy baja actividad a causa de la represión; en cuanto al Wafd, tenía solo un año de vida. En consecuencia, la estructura de todos ellos era débil y su presencia organizada no alcanzaba todo el territorio nacional. Además, la comunicación entre los altos dirigentes de las estructuras centrales y las locales era muy deficiente. Ni siquiera el PND, que había incorporado gran parte de los cuadros de la antigua USA y contaba con la aureola de ser el partido del poder, tenía unas bases locales organizadas; incluso en El Cairo su organización dejaba mucho que desear, como señaló su secretario general en la provincia, quien indicó que “los equilibrios políticos entre los grandes personajes del partido se anteponían a la auténtica reforma” que se quería promover desde la presidencia³⁰. En el caso de los partidos de la oposición, sobre todo el Wafd y el Tagammu, tuvieron además que seguir afrontando el hostigamiento de las fuerzas de seguridad, que asaltaban sus sedes o atemorizaban a sus militantes y simpatizantes. No obstante, los propios partidos sabían que la responsabilidad principal de sus carencias era propia. Entre octubre de 1981 y mayo de 1984, ni el Wafd ni el Tagammu ni el PLS celebraron ningún congreso general, mientras que el PND lo llevó a cabo tan solo en 1982, y el PST en 1982 y 1983³¹.

2.2.3 Las posturas de los partidos en sus programas y en la campaña

En general, en sus programas y durante la campaña electoral, los partidos respondieron en las grandes cuestiones a lo que se conocía y se esperaba de ellos, con algunos matices importantes, derivados de las restricciones legales, de los imperativos de incluir en sus listas persona ajenas al partido (en el caso del Wafd y los HHMM) y, probablemente, de razones electoralistas inmediatas³².

³⁰ عبد المجيد: محمد رشوان: "المرحلة الثانية في عمر الحزب الوطني الديمقراطي"، صحيفة ماير، ٢٥ يونيو ١٩٨٤. Citado por (1993: 103).

³¹ Según el estudio de Abdel Meguid sobre la evolución de los partidos políticos entre 1908 y 1992, tan solo el Tagammu esgrimía el acoso de la policía como una de las razones principales de sus dificultades para captar afiliados y militantes, aunque reconocía que no era la única. De hecho la Secretaría General del partido hizo una severa autocrítica en este sentido tras las elecciones legislativas de 1984, y de nuevo en 1985, en sus informes anuales (عبد المجيد، 1993: 99-101).

³² Martín Muñoz (1992: 364-372) analizó con detalle los programas electorales de los diversos partidos, utilizando sus textos publicados en el primer número de la nueva época de la revista *Al-Talía* de mayo de 1984. A dicha autora nos remitimos, salvo indicación expresa de otro autor o referencia, al mencionar el contenido de los programas, citando únicamente las referencias a *Al-Talía* cuando las citas literales de los programas sean extensas.

El Wafd apoyaba el *infitah*, si bien solicitaba un mayor control para evitar la corrupción, y defendía el incremento del papel del sector privado en un sistema económico mixto, en el que el sector público siguiera existiendo pero en el que se estimulara la competitividad y se eliminaran los monopolios. En política internacional, aunque, como hemos dicho, había apoyado en principio los Acuerdos de Camp David y su puesta en cuestión radical estaba vedada por ley, ante la reciente invasión del Líbano (1982) y otras violaciones de los acuerdos por parte israelí (como el bombardeo de un proyecto de central nuclear en Irak en 1981, o la ampliación de las colonias en Cisjordania y Gaza), consideraba que los Acuerdos habían dejado de ser válidos y Egipto no estaba obligado por ellos. En materia social, es de destacar que reivindicaba el papel de la religión en el desarrollo moral de la sociedad, defendiendo la educación religiosa en las escuelas. Por otro lado, defendía los derechos laborales de las mujeres y reclamaba la promoción de la planificación familiar (algo a lo que se oponían los Hermanos Musulmanes). En el terreno político, el partido reivindicó la ampliación de las libertades públicas y la instauración de un sistema auténticamente pluralista y democrático, absteniéndose en general, de manera significativa, de criticar al régimen naserista. En definitiva, el Wafd matizaba sus posiciones políticas liberales de siempre, atendiendo a las restricciones legales (respecto al naserismo), a su conocimiento de cuál era el sentimiento mayoritario de la población en algunos asuntos (en la política frente a Israel y el *infitah*), y tal vez, en materia religiosa, a los condicionantes de su coalición electoral con los Hermanos Musulmanes.

El Tagammu dedicó una gran parte de su programa a atacar el *infitah* desde la base de las críticas de la izquierda ya mencionadas (véase II 4). No obstante, a pesar de su firme defensa del sector público, no proponía la supresión de toda forma de iniciativa privada sino el control de la inversión extranjera, el aumento de la imposición fiscal y aduanera, un mayor control del sector bancario, y el alejamiento de la “liberalización consumista” y la orientación general de la economía hacia las actividades productivas. En política internacional, rechazaba los Acuerdos de Camp David y propugnaba la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel y el establecimiento de una paz conjunta con el resto de los países árabes, defendiendo el fin de las relaciones privilegiadas con EEUU y el retorno de Egipto al no-alineamiento, a su papel de vanguardia del Tercer Mundo y al mantenimiento de relaciones diplomáticas con el bloque socialista. Este partido se distinguía de los demás en el terreno socioeconómico por ser el único que se reclamaba defensor de la clase trabajadora y que solicitaba que en la ampliación de las libertades públicas se incluyeran los derechos de huelga, manifestación y reunión; asimismo, pedía que las mujeres tuvieran acceso al trabajo en igualdad de condiciones que los hombres. Otro aspecto destacado de su programa era la defensa de la autonomía universitaria absoluta, libre del control del Gobierno y la policía, y con órganos de dirección elegidos por la comunidad universitaria. Finalmente, el Tagammu aceptaba, según destaca Martín

Muñoz, la condición de que la *charía* era la principal fuente de la legislación, tal y como estipulaba el artículo 2 de la Constitución, pero insistía en la necesidad de la tolerancia y de cuidar las necesidades de los coptos, defendiendo las ayudas también para sus instituciones, y exigiendo la liberación y restitución del papa Chenuda III. En resumen, el Tagammu también respondió en su programa a lo que se esperaba de él, excepto tal vez en su especial preocupación, que se confirmó durante la campaña electoral, por desmentir la imagen de “ateo” que sus oponentes querían adjudicarle, la cual llegó a provocar la sorna o el hartazgo de algunos de sus militantes y simpatizantes, como señaló Hendriks³³.

El PLS defendió el *infitah* “ardientemente”, según Martín Muñoz, hasta el punto de que, junto a los incentivos al sector privado y la eliminación de las barreras a la actividad de este, propuso la reducción del sector público a su mínima expresión. No menos ardiente fue su defensa de los Acuerdos de Paz con Israel, en cuya promoción el partido se vanagloriaba de haber jugado un papel pionero; mientras que en materia religiosa, el PLS proponía eliminar o modificar las leyes que se opusieran a la ley islámica, pero “no gobernar con el Corán” (Martín Muñoz, 1992: 366-371). El PLS, por tanto, también confirmaba sus escuetos principios fundacionales.

En cuanto al PST, se situaba en materia económica a medio camino entre el Wafd y el Tagammu. Defendía la apertura económica, pero orientada a la productividad y no al consumo, y abierta también al bloque socialista; apoyaba la supresión de las empresas deficitarias del sector público, pero dando nuevos puestos de trabajo públicos a los trabajadores empleados en ellas, y pedía el fomento del desarrollo del sector privado, pero no del “explotador” (Martín Muñoz, 1992: 366). En política exterior, el partido defendía el bloqueo de los Acuerdos de Camp David y la aplicación de un boicot económico y cultural a Israel, así como el rebajamiento del nivel de las relaciones con EEUU, en la medida en que este era un sólido aliado de Israel. En materia religiosa, según Martín Muñoz, el PST continuaba siendo el partido más explícitamente inclinado a incrementar mediante las decisiones políticas la presencia de la ley islámica en la sociedad, proponiendo el cierre de los lugares de juego, diversión y placer, y de los establecimientos de producción y consumo de bebidas alcohólicas, y defendiendo, incluso, implícitamente, la censura, al llamar a “prestar mucha atención a las instituciones culturales, cine, radio, televisión, libros y revistas extranjeros para no destruir los valores espirituales de nuestra cultura y personalidad”³⁴. No obstante, según Gómez García, en dicho programa, en la versión

³³ B. Hendriks, que siguió *in situ* la campaña electoral y el desarrollo del proceso de votación, dedicando especial atención al Tagammu, relató cómo un campesino de la provincia de Al-Garbiyya, tras escuchar en un mitin del Tagammu a un jeque religioso rural miembro del partido que explicaba la visión del partido respecto a la justicia social, vino a decir educadamente al jeque: “por supuesto, todos amamos profundamente el islam, pero ¿qué propone el partido respecto a los problemas cotidianos?” (Hendriks, 1985: 15). El Tagammu también creó en su periódico *Al-Ahali* una sección dedicada a cuestiones religiosas en la que mostró especial interés en defender la compatibilidad del islam y las ideas progresistas.

³⁴ Programa electoral del PST (*Al-Talía*, mayo de 1984: 129). Citado por Martín Muñoz (1992: 369).

aprobada por el Congreso General del partido de diciembre de 1983, y publicada en su órgano de prensa, *Al-Chaab*, no se hacía alusión al islam de manera específica, mientras que sí se defendía la justicia social y la fijación de los salarios y las pensiones de acuerdo con el coste de la vida³⁵.

Como comentario final a la evolución del PST, nada más apropiado que señalar la referencia explícita que el partido hacía en su programa electoral a las condiciones en las que fue creado, y a la pretensión de Sadat de que constituyera “una leal oposición” a su régimen:

“El anterior presidente pensó que podría influir en la política del partido, pero nuestros principios prevalecieron y nos situamos a favor de liberar al pueblo de la injusticia, de la estabilización democrática y de los principios socialistas”³⁶.

Recordemos que, efectivamente, a diferencia del PLS, también sacado de una costilla del régimen de Sadat con la intención de que fuera un partido-decorado, el PST había comenzado a mostrarse como un auténtico partido de oposición con señas de identidad propias en el tránsito de los años 70 a los 80 (recordemos que sus principales dirigentes fueron detenidos, con la excepción de su presidente, Ibrahim Chukri), y continuaba haciéndolo a principios de los 80.

En lo que respecta al PND, en política económica manifestaba, a pesar de ser el partido gobernante y el del expresidente Sadat, una línea similar a la de otros partidos, pues si bien defendía el *infītah*, señalaba su disposición a depurarlo de la corrupción, orientar la inversión hacia el sistema productivo, y no hacia el consumo, y establecer un mayor control de los créditos bancarios. En palabras de Hendriks (1985: 18):

“Alguien que solo hubiera sabido de la campaña electoral del PND, se quedaría sin saber que Egipto tuvo una vez un presidente llamado Sadat. El partido hizo grandes esfuerzos por presentarse como una fuerza «progresista», opuesta al «reaccionario» Wafd, difundiendo por televisión preciadas imágenes de archivo para recordar a los egipcios sus sufrimientos a manos de los terratenientes feudalistas cuando el Wafd estaba en el poder. Su defensa de «los logros socialistas para los trabajadores y los campesinos» bajo Náser, sus llamadas al «*infītah* productivo», reconocían implícitamente las críticas del Tagammu”.

En política exterior, el PND no aludía a la posibilidad de cancelar los Acuerdos de Paz con Israel, pero se manifestaba dispuesto a mantener una línea dura frente a dicho país, no autorizando el retorno del embajador egipcio a Tel Aviv, que había sido retirado tras la invasión del Líbano, hasta que las tropas israelíes salieran de este y hasta que concluyeran

³⁵ *Al-Chaab*, 24 de abril de 1984. Citado por Gómez García (1996: 36).

³⁶ Cita del preámbulo del programa electoral del PST (*Al-Talía*, mayo de 1984: 144) *apud* Martín Muñoz (1992: 365).

las negociaciones de Taba sobre el futuro del Sinaí emprendidas en 1982. De la misma manera, prometía defender los derechos palestinos sobre Jerusalén Oriental y el desmantelamiento de las colonias en los Territorios Ocupados, y aseguraba que desplegaría el máximo esfuerzo para reintegrar a Egipto a su entorno árabe, islámico y regional. En cuanto a la religión, el PND hacía algunas afirmaciones generales sobre la importancia tanto de la religión como de la tolerancia, y se mostraba dispuesto a reforzar el papel de las instituciones religiosas. En resumen, ideológicamente el PND se mostró de manera manifiesta a la defensiva, asumiendo como discurso propio gran parte de las críticas que se le habían hecho al régimen de Sadat y recuperando en gran medida, sobre todo en política económica y social, el discurso político naserista.

Finalmente, es significativo que todos los partidos defendieran el mantenimiento de las subvenciones estatales a los productos de primera necesidad introducidas en la época naserista, a pesar de la orientación liberal en asuntos económicos de algunos de ellos. El partido gobernante, sin embargo, no compartió la unanimidad del resto al solicitar la modificación de la Constitución y de la ley electoral en el sentido de favorecer las libertades públicas y la competitividad y limpieza de los comicios, así como la abolición del resto de las leyes que reprimían dichas libertades (aunque, como hemos señalado, solo el Tagammu reclamaba los derechos de organización y reivindicación sindicales). Entre sus demandas de enmiendas legislativas, merece especial atención la de que el presidente de la República fuera elegido en elecciones directas y competitivas (es decir, no mediante plebiscito relativo a un único candidato propuesto por el Parlamento), y que se eliminaran los artículos 74 y 152 de la Constitución, dos de los artículos que daban poderes excepcionales a aquel³⁷. De la misma manera, los partidos de oposición exigían la protección de la auténtica libertad de expresión, la liberación de los medios de comunicación estatales del control gubernamental y la participación de todas las tendencias ideológicas en ellos (Martín Muñoz 1992: 367).

En cuanto a los Hermanos Musulmanes, como legalmente no podían redactar un programa electoral, ni disponían de un medio de prensa propio (*Al-Itisam*, su periódico, no sería autorizado a reaparecer hasta julio), su participación en la campaña se produjo a través de artículos en *Al-Wafd*, el periódico de su socio electoral. Estas intervenciones no conformaban un programa, ni contenían propuestas concretas. De entre ellas, es importante destacar la reivindicación de su participación en la contienda electoral que hizo su máximo

³⁷ Según el artículo 74 de la Constitución, el presidente podía, en caso de que “se produjera un peligro que amenazara a la unidad nacional o a la integridad [سلامة] del país, o que impidiera a las instituciones del Estado desempeñar sus funciones constitucionales”, “tomar medidas rápidas [اتخاذ إجراءات سريعة] para afrontar ese peligro”, con la sola cortapisa de que debería someter dichas medidas a referéndum en un plazo de sesenta días después de su adopción. Según el artículo 152, el presidente podía convocar unilateralmente referéndums sobre “las cuestiones importantes relacionadas con los más altos intereses del país” (حلمي, 1989: 237 y 292).

dirigente, Omar al-Telmesani:

“Los Hermanos Musulmanes desean que Egipto recupere su lugar en el mundo. Este lugar no se materializará más que en el ámbito de la democracia, con la libertad de expresión y conducta dentro de los límites establecidos (...) Vemos en las elecciones una ocasión de oro para sacar al pueblo de las tinieblas de la opresión y del terrorismo (...) Con su participación en las urnas el ciudadano egipcio se hace dueño de su patria (...)”³⁸.

Esta declaración era novedosa, pues por primera vez el máximo dirigente de la Hermandad aceptaba el sistema liberal-democrático, aunque fuera por razones estratégicas, alejándose del rechazo de las elecciones y del sistema pluripartidista que la organización había manifestado desde su fundación, a pesar de que en su famosa descripción poliédrica de la naturaleza de la Hermandad, su fundador, Hasan al-Banna, hubiera incluido la categoría de “partido político”. Por otro lado, resultaba reveladora la confianza que se desprende de las palabras de Telmesani en que las reglas del modelo liberal-democrático se aplicaran realmente en el Egipto de Mubarak. Finalmente, la alusión a la posibilidad de acabar con “la opresión y el terrorismo” distanciaba a la Hermandad de los movimientos islamistas radicales e incluía una crítica implícita a los regímenes políticos anteriores de los que el actual procedía, pero también la insinuación de que en este podía producirse un cambio sustancial.

2.2.4 Campaña electoral bajo control

A pesar de su escasa presencia en algunas zonas, casi todos los partidos de oposición presentaron candidaturas en la mayoría de las 48 circunscripciones electorales: el PST lo hizo en 46, la coalición Wafd-Hermanos Musulmanes en 44 y el Tagammu en 43. Tan solo el PLS lo hizo en un número muy inferior, 28. Por su parte, el PND estuvo presente en todas.

Las circunscripciones “abandonadas” por los partidos de la oposición eran aquellas en las que sabían que sus apoyos eran manifiestamente insuficientes frente a la fuerza de otros partidos, sobre todo del PND (al que prácticamente se dejaban el monopolio de las zonas desérticas, del Sinaí y de la costa del Mar Rojo) y la alianza Wafd-Hermanos Musulmanes (estos últimos con gran implantación social en las proximidades del Canal de Suez y en la costa mediterránea, mientras que al Wafd se le auguraban buenos resultados en el Alto Egipto, además de en las grandes ciudades). Los grandes dirigentes estatales se presentaban en El Cairo o en otras grandes ciudades, donde se preveía que fuera mayor la

³⁸ “Por deseo de Dios y por el bien de la Patria”, *Al-Wafd*, 27 de mayo de 1984. Citado por Martín Muñoz (1992: 379).

fuerza electoral de la oposición, frente a las zonas rurales donde el peso del aparato del Estado y de sus alianzas con los notables debía ser decisivo. Hay que destacar que entre los 2.016 candidatos tan solo había 140 mujeres.

En cuanto a la campaña electoral, la opinión del lúcido intelectual y periodista marxista egipcio Mohammed Sid-Ahmed, que afirmó que había sido “incontestablemente la más libre que ha conocido Egipto en su historia contemporánea” (Sid-Ahmed, 1984a), resumió la opinión general de los observadores. No obstante, es necesario resaltar el carácter relativo de esta libertad.

Martín Muñoz (1992: 377) destaca que, “a pesar de las restricciones de la ley”, hubo una “gran liberalidad gubernamental” gracias a la cual los órganos de prensa opositores “actuaron con total libertad de expresión, limitada tan solo por una prudente autocensura”. De la misma manera, la autora señala que, a pesar de la polémica relativa al uso de los medios estatales en condiciones de casi monopolio por el partido gobernante, por primera vez se permitió a los partidos de la oposición hacer uso de la radio y la televisión durante 80 minutos cada uno, tras el fallo de un Tribunal Administrativo en el sentido de que fuera ampliada la asignación de 40 minutos inicialmente fijada por las autoridades. Esto suponía poco más de 2 minutos diarios para cada partido a lo largo de los 32 días de campaña, y, sobre todo, no alteraba el hecho de que los diferentes espacios informativos emitidos a lo largo del día o bien ignoraban las actividades de la oposición, o bien le daban un tratamiento muy sesgado. Así, la televisión estatal, según Hendriks (1985: 16-17), utilizó sus archivos documentales para desacreditar al Wafd, mientras que el PST fue objeto de una cobertura muy favorable. Por ello, hay que concluir que la novedad de la aparición cronometrada y en términos absolutos insignificante de la oposición en la radio y en la televisión, fallo judicial por medio incluido, respondía más a una puesta en escena propagandística que a una auténtica voluntad de permitir que las posturas de todos los partidos se difundieran con los menores visos de igualdad entre el partido en el Gobierno y los demás.

Los medios de prensa de los partidos de la oposición eran medios restringidos a quien los conociera previamente, a las zonas urbanas en las que tenían difusión y, sobre todo, a quienes supieran leer, como ya hemos mencionado (si bien es cierto que la “lectura colectiva”, con un ejecutante en alta voz para un cierto público, en las reuniones domésticas o en los cafés, era una práctica todavía existente en las zonas rurales). Por el contrario, para el sector letrado de la población, la oferta de medios escritos estatales controlados por el partido en el poder era abrumadoramente mayoritaria, y aunque en las páginas de opinión aparecían voces discordantes con la línea general de apoyo al PND (que se centraban en atacar al Wafd y a los Hermanos Musulmanes³⁹), la información era

³⁹ Los principales estiletes de los ataques al Wafd y a los Hermanos Musulmanes eran las plumas defensoras del sadatismo, entre las que destacaban Tharwat Abaza o Ibrahim Saada (Martín Muñoz 1992:

controlada de manera férrea. La auténtica vía de información y comunicación abierta a todos en Egipto era la oral, y a ella solo se podía acceder a través de la radio y la televisión y del contacto interpersonal directo.

Cabe imaginarse qué posibilidades de acceso al público en general tenían los partidos de la oposición viendo su propaganda electoral circunscrita a los medios de prensa de los partidos y a actos públicos celebrados en sus sedes y en carpas de tela instaladas a tal efecto en los lugares determinados por las autoridades, cuando solo podían acoger un mitin al mismo tiempo en cada circunscripción electoral. Las fuerzas de seguridad vigilaban para que los propietarios de cafés y otros locales comerciales no consintieran las actividades de los militantes de la oposición en ellos (Hendriks 1985: 14). En la calle, en los espacios públicos abiertos, la prohibición de mítines y concentraciones electorales iba acompañada por la de distribuir publicaciones o panfletos, justificada mediante el estado de excepción. Incluso el libre acceso de los ciudadanos a los mítines autorizados ha de ser muy matizado, sobre todo en las localidades más pequeñas y donde el anonimato era difícil, en un país en el que en general cualquier tipo de actividad política en la calle estaba prohibida, y donde la mayor parte de las fuerzas de la oposición habían sido criminalizadas por el poder muy pocos años antes. El propio presidente del Wafd, Fuad Serag Eddín, denunció que la policía le había impedido tomar la palabra en un mitin propio⁴⁰.

2.3 LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DE MAYO DE 1984

2.3.1 Participación electoral incierta, pero baja y desigual

En las elecciones votaron, según los resultados oficiales publicados por *Al-Ahram*, 5.323.086 personas, el 43,14% de los 12.339.086 electores registrados⁴¹, que a su vez eran el 45% de los egipcios con derecho a voto (estimados en 27 millones de personas, de un total de población de cerca de 47 millones)⁴². En definitiva, el porcentaje de egipcios con

378-379).

⁴⁰ Según denunció el 19 de mayo de 1984 (Cronología de la RPE, nº 14, 1984).

⁴¹ *Al-Ahram*, 30 de mayo de 1984. Citado por Martín Muñoz (1992: 382).

⁴² El censo oficial de población se actualizaba (y se actualiza) cada seis años (en 1980 y 1986), y la población se dividía por franjas de edad agrupadas de cinco en cinco años.. La agencia oficial encargada de realizar el censo estimaba en 1990 que en 1984 la población total de Egipto era de 46,99 millones, sin embargo no realizaba estimaciones acerca de los pertenecientes a las franjas de edad para ese año. Todas las estimaciones para los egipcios con derecho a voto -los mayores de 21 años en esa época-, se realizan por tanto a partir de las franjas de edad de 1980 y 1986, que por otro lado establecían una frontera en los 20 años. En 1986 el número de egipcios de 20 años o más era de 29 millones (CAPMAS, 1990: 20, 24). Todas las estimaciones del número de egipcios con derecho a voto en 1987 hablan de aproximadamente 27 millones. El investigador del Centro de Estudios Políticos y Estratégicos de Al-Ahram, Akram al-Alfi, por ejemplo, señala la cifra de 27,4 millones (الألفي 2015).

derecho a voto que participaron en las elecciones fue inferior al 20%, siempre a partir de los datos oficiales de inscripción en el censo electoral y participación.

La diferencia entre los electores potenciales y los realmente inscritos en los censos electorales se explica, al margen del desinterés de gran parte de la población por las elecciones⁴³, en primer lugar, porque las listas electorales no eran renovadas de oficio con frecuencia, estando ausentes de ellas en particular quienes habían alcanzado en los últimos años la edad de votar. En segundo lugar, para registrarse los egipcios debían solicitar en las comisarías de policía que se les expidiera una tarjeta electoral, ya que el Gobierno rechazó que se pudiera votar únicamente con el documento de identidad. Habida cuenta de los antecedentes de los servicios de seguridad egipcios, las comisarías no eran el lugar más estimulante, ni el que garantizaba mayor transparencia, a la hora de realizar tal trámite. La oposición denunciaría en estas elecciones y en las siguientes que en el censo electoral no solo figuraban un gran número de fallecidos, sino que muchos de ellos “votaban”.

Hendriks (1985: 14) señaló que era difícil dar crédito al elevado porcentaje de participación anunciado por el Gobierno, que beneficiaba al PND gobernante, dada la necesidad de obtener el 8% de votos a nivel nacional para obtener escaños. Según este autor, en ninguno de los colegios electorales que visitó (15 en total entre El Cairo, los barrios de otros municipios al norte de él y otros de la provincia de Qaliubiyya) la participación llegaba al 20% pocas horas antes del cierre de los colegios, y en general estaba más cerca del 10%.

Los partidos de la oposición denunciaron numerosas irregularidades en el conjunto del proceso electoral, y diversos observadores extranjeros las confirmaron (Buccianti 1986; Rouleau 1984; Hendriks 1985). En lo que atañe al porcentaje de participación, junto al rellenado de las urnas tras el cierre de los colegios, imposible de verificar desde el exterior, el procedimiento de fraude más denunciado fue el del uso de tarjetas electorales falsas. Hendriks afirmó haber observado personalmente uno de estos casos, y haber obtenido otros testimonios en el mismo sentido. Según este autor, en el centro de las zonas urbanas el procedimiento legal fue en general bastante respetado, mientras que en los barrios urbanos de las afueras y en las zonas rurales fue violado a gran escala (Hendriks 1985: 13). Hay que señalar, por otro lado, una práctica irregular muy extendida, sobre todo en las zonas rurales: se trata del voto colectivo, según la cual los cabezas de las diversas agrupaciones familiares (no solo la de la familia nuclear, sino también de agrupaciones mayores como el clan o la tribu), votaban en nombre de todos aportando el conjunto de las tarjetas de los miembros de dicha agrupación, a pesar de que en teoría se requería la firma dactilar del titular de cada tarjeta en el momento de realizar la votación.

La impronta de los procedimientos irregulares mencionados se percibe cuando se

⁴³ Trataremos estas posibles razones más adelante, en las conclusiones (capítulo VI), con la perspectiva de la evolución global de la política egipcia.

observa la distribución geográfica de la participación electoral según los resultados oficiales: los menores porcentajes de participación se registraron en las provincias o gobernados con componente urbano casi exclusivo, como El Cairo (23,6%) , Alejandría (28,1%) y Suez (20,9%), mientras que los porcentajes más elevados, entre el 50 y el 60%, se dieron en general en zonas sin núcleos urbanos medios, como Sinaí Sur (59,8%) y Al-Wadi al-Guedid (54,8%), o con un gran componente rural como Menufiyya (55,4%) o El Fayyum (61,6%) (Martín Muñoz 1992: 382-383).

2.3.2 Resultados electorales

Los resultados oficiales atribuyeron al PND 391 escaños (87,27%) y a la alianza Wafd-Hermanos Musulmanes los 57 restantes (12,72%), 51 del Wafd y 6 de los Hermanos Musulmanes, que tan solo presentaban 16 candidatos. En cuanto a los votos, el PND obtuvo el 72,98%, el conjunto de la oposición el 27,15%, y, dentro de ellos, el Wafd-Hermanos Musulmanes el 15,2%. En cuanto al resto de la oposición, el PST obtuvo el 7% de los votos, el Tagammu el 4,2% y el PLS tan solo el 0,6%.

El grueso de la diferencia entre el porcentaje de votos y el de escaños obtenidos por el PND (72,98% frente a 87,27%) vino de la “cosecha” del 12% de los escaños, que en pura proporcionalidad habrían correspondido al resto de los partidos de la oposición que no superaron el 8% exigido a nivel nacional. Asimismo, el PND, como partido mayoritario en el conjunto del país, obtuvo los 31 escaños reservados para mujeres.

En cuanto a la distribución geográfica del voto, en general el PND obtuvo sus peores resultados en las zonas más urbanas, como El Cairo (59,7%), Guiza (63,6%), Suez (63,9%) y Alejandría (67,3%), y los mejores, por encima del 80%, en zonas desérticas o con un gran componente rural, como El Fayyum (92,1%), Menufiyya (86,7%) y Al-Wadi al-Guedid (83,1%) (Martín Muñoz 1992: 384-386). Como puede observarse, los lugares en los que el PND obtuvo peores resultados coinciden con aquellos en los que la participación fue menor y, por otro lado, en los que se denunciaron menos irregularidades.

Tras el fin del proceso electoral, Mubarak designó los 10 diputados que le correspondía elegir según la ley. Entre ellos se encontraban 4 miembros del PST y uno del Tagammu, el copto Milad Hanna, que rechazaría el escaño por estar su partido en contra del principio de la designación presidencial. Con esta selección de “sus diputados”, se puede interpretar que Mubarak recompensaba a los partidos que se habían quedado fuera de la cámara por el requisito del 8%, pero también que privilegiaba al partido en el que Sadat había buscado un aliado, el PST, pues el reparto de escaños del presidente no era proporcional a los resultados obtenidos: 4 para el PST con el 7% de los votos y 1 para el Tagammu con el 4%.

Así, el Parlamento quedaba configurado por una mayoría de más del 85% de

diputados del PND, cerca de un 12% de diputados electos del Wafd y los Hermanos Musulmanes, y un puñado de diputados designados por el presidente, entre los que cabía destacar los 4 miembros del PST. Con esta distribución, el partido mayoritario podía tomar cualquier decisión que se le antojara, pues la mayoría cualificada necesaria para tomar las decisiones más importantes y que requerían más apoyo, como por ejemplo la modificación de la Constitución o la designación del candidato a la presidencia de la República, necesitaba dos tercios de los votos.

2.3.3 El fraude electoral

2.3.3.1 Las acusaciones de la oposición

La oposición denunció un gran número de prácticas fraudulentas, como la denegación del voto a electores inscritos, la ausencia en las listas de personas que disponían de tarjeta electoral, el rellenado y la quema de urnas, la expulsión de los colegios de los apoderados de los partidos, y la intimidación a los votantes de la oposición. Muchas de estas prácticas fueron constatadas sobre el terreno por observadores extranjeros (Buccianti 1986: 56; Hendriks 1985: 12-17). A la expulsión de los apoderados y de los previsibles votantes de la oposición de los colegios, llevada a cabo por partidarios del PND o matones contratados ante la pasividad sedicentemente neutral de la policía, se unió la medida de presión “más discreta” y extendida que consistía en que el voto secreto era una ficción en la práctica, y los electores debían tomar su papeleta de una gran mesa en el centro de la sala antes de depositarla, todo ello ante la presencia de un gran contingente de partidarios del PND. Según señaló Hendriks (1985: 16):

“Era necesaria una amplia y organizada presencia sobre el terreno para contrarrestar una presión de este tipo, para reforzar la confianza de los partidarios y simpatizantes propios, que siempre eran conscientes de los constantes ataques del Gobierno en el sentido de que votar a la oposición podría acarrear un riesgo político. Esto puede no ser tan importante en el anonimato de las ciudades, pero en las zonas rurales sí que lo era”.

La pretensión de controlar el desarrollo de los comicios mediante la intimidación y la violencia, y la ocasional resistencia a ellas, produjeron como resultado decenas de enfrentamientos violentos. Si bien el Gobierno calificó dichos incidentes como “aislados”, y debidos a “la naturaleza de la sociedad egipcia” (donde persistían en gran medida, sobre todo en las zonas rurales, las lealtades y rivalidades tribales y familiares), lo cierto es que la mayor parte de las víctimas de dichas agresiones fueron miembros o simpatizantes de la oposición. Entre los casos documentados en este sentido se cuenta el asesinato de una

candidata del PST en Lúxor, Naamat Mohammed, por el primo del candidato del PND, y la agresión a la esposa de un candidato del Tagammu por el hijo del responsable local del PND⁴⁴.

2.3.3.2 Las formas del trucaje electoral

Los partidos y candidatos de la oposición y el público egipcio en general se quejarían, tras las elecciones de 1984 pero también tras todas las siguientes celebradas bajo el mandato de Mubarak, del relleno masivo de las urnas por parte de los encargados de supervisar las votaciones con votos de quienes no habían acudido a los colegios electorales. Según ellos, este era uno de los principales instrumentos de fraude en beneficio del partido gobernante. No obstante, según Mustafa Kamel al-Sayyed (السيد 1996: 474-475), si bien es cierto que el relleno de las urnas fue una práctica extendida en las elecciones de 1984 y en las siguientes, dicha práctica -conocida como *taswid al-bitاقات* (تسويد البطاقات), “ennegrecimiento o marcado de las tarjetas”- beneficiaba también, en ocasiones, a los partidos o candidatos de la oposición.

Según este profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de El Cairo, que ha desarrollado así mismo su carrera profesional en diversas universidades estadounidenses, en numerosas ocasiones los encargados de la supervisión del proceso de votación disponían de las tarjetas electorales de muchos potenciales votantes con el conocimiento de estos, si bien los supervisores decidían acerca del sentido del voto, marcando el o los candidatos elegidos. En la mayor parte de los casos lo hacían en beneficio del PND, pero también se daban casos en los que lo hacían a favor de los partidos o candidatos de la oposición hacia los que se inclinaban sus simpatías, y otros en los que se producía “un reparto acordado entre los interventores de los partidos o los propios candidatos según proporciones con las que todos estuvieran satisfechos”. Finalmente,

“las probabilidades de que se produjera el relleno de urnas aumentaban en los distritos en los que se presentaban como candidatos dirigentes destacados de la oposición, pues en esos distritos había una gran movilización tanto en favor del partido gobernante como de los partidos de la oposición, y el sentido del relleno dependía de la voluntad del partido gobernante, pues si este quería permitir la victoria de un candidato destacado de la oposición, el proceso se desarrollaba de manera ejemplar, o se autorizaba el relleno a favor de dicho candidato; y si deseaba hacer fracasar a este, el relleno se producía a favor del partido gobernante” (Al-Sayyed 1996: 475).

El relleno de las urnas se producía más a menudo en las zonas rurales o en las

⁴⁴ Cronología de la RPE, n° 14 (1984).

ciudades pequeñas, al haber en ellas menos partidos o candidatos participantes, menos interventores que vigilaran el sellado de las urnas y el recuento -siendo posible el acuerdo entre dos o tres partes-, y menos periodistas tanto locales como extranjeros.

Hay que tener en cuenta que el rellenado no tenía por único objetivo garantizar la victoria -que en última instancia dependería también de los votantes individuales-, sino también defender (falsariamente) el prestigio de los candidatos. En los lugares en los que se presentaban los mayores dirigentes del Estado o del régimen el rellenado era muy frecuente no tanto porque se dudara de la victoria de dichos dirigentes como para que los porcentajes de participación oficiales no fueran reducidos, y ello en virtud de “uno de los rasgos de la cultura política egipcia, consistente en mostrar respeto hacia los dirigentes del Estado y el Gobierno y preservar su prestigio (هيبة) (السيد 1996: 475), prestigio -sobre el que volveremos más adelante- que una alta abstención habría puesto en entredicho. Pero esa muestra de respeto podría ser extensible a los candidatos de la oposición si el régimen deseaba halagarlos aunque no vencieran.

Aunque Al-Sayyed no dice nada explícitamente al respecto, detrás del rellenado de urnas estaría la también conocida práctica de la compra de votos.

Hemos de decir que para realizar estas afirmaciones Al-Sayyed se ampara en una experiencia personal de las elecciones de 1984 (un acuerdo entre PND y otro partido, contemplado por él), y “en otros muchos testimonios de indudable veracidad” (Al-Sayyed 1996: 474), pero también hay que considerar que resulta muy difícil, dada la naturaleza de los hechos relatados, realizar estudios estadísticos de una práctica que, no obstante, es tan a menudo señalada por los egipcios. Ben Néfissa y Arafat (2005: 225-233), recogieron varios testimonios acerca de las diversas modalidades de “trucaje” de los resultados electorales practicadas “antes de las elecciones de 2000”, y aunque sin duda dichos testimonios se referían en gran parte a las elecciones posteriores a 1984 -en las que se podrían presentar candidaturas independientes, y en las que se había ido produciendo un progresivo “aprendizaje electoral”-, estas primeras elecciones no parece que tuvieran por qué haber quedado excluidas.

El *taswid* descrito por Al-Sayyed era uno de los procedimientos de fraude electoral, y en gran medida respondía a lo que los autores denominan el trucaje “desde abajo”, pues lo ejecutaban las cerca de 36.000 personas implicadas en la supervisión de las elecciones en los colegios electorales sectoriales (donde se vota y se cierran las urnas), que podían o no responder a indicaciones “de más arriba”. Otro procedimiento era el *tazwir* (تزوير, “falsificación de tarjetas electorales o firmas”), practicado -según dichos testimonios- por el Gobierno, y los otros dos, *tasdid* (تسديد) y *taqfil* (تقفيل), responden a un mismo proceder. Ambos términos significan “cerrar” la elección a los candidatos adversos, vedar toda posibilidad de que se alcen con la victoria. El “cierre” se producía, también, en los colegios electorales sectoriales, cuando un partido o un candidato era tan “potente”, a causa de sus

alianzas y sus clientelas, que no solo se practicaba el *taswid* en su favor a gran escala, sino que se evitaba, por diversos procedimientos, que sus adversarios lo impidieran y lo practicaran a su vez, e incluso que votaran. Este procedimiento puede considerarse trucaje “desde arriba” y “desde abajo”, según la posición de quienes lo practicaban dentro del régimen. Finalmente, el trucaje “desde arriba” neto y claro era el que se practicaba a instancias y con instrucciones explícitas de las más altas instancias del régimen, cuando este quería dar un determinado sentido a los resultados. Se practicaba en los colegios electorales centrales de cada distrito (donde se abrían las urnas y se realizaba el recuento), o incluso en los colegios sectoriales si lo requerían las circunstancias, recurriendo a todos los procedimientos necesarios.

En definitiva, lo que queremos destacar con esta cala en las formas del fraude electoral es cómo, si bien en esencia constituía una práctica autocrática centralizada, también podía ser al mismo tiempo una manera inclusiva, descentralizada y social de participar en un sistema fraudulento generalizado.

2.4 UNA LECTURA POLÍTICA DE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS

Al margen del fraude electoral, las razones ideológicas o la satisfacción con las políticas generales del régimen de Mubarak no fueron, con toda probabilidad, las principales razones del voto realmente ejercido a favor del partido gubernamental, sino que lo fueron los beneficios sectoriales obtenidos por los ciudadanos. Es lo que podríamos denominar “el peso de la lógica clientelista”.

Las subidas de sueldos y pensiones o las primas excepcionales, la relajación en el control de la entrega de la parte de las cosechas que debían ser aportadas al Estado, los nombramientos o la atribución discrecional de licencias y permisos, fueron moneda corriente en las semanas anteriores a las elecciones, en unos casos con la adecuada publicidad de los medios de información y en otros extraoficialmente.

En las zonas rurales, tales medidas iban acompañadas de una calibrada distribución del poder político entre las principales familias. Springborg cita varios ejemplos de esta política: en la provincia de Sohag, en el Alto Egipto, el partido distribuyó los escaños correspondientes al Parlamento, la Asamblea Consultiva y los consejos locales entre las seis principales familias; en la de Matruh, tras anunciarse que el jeque de la tribu de los Awlad Ali iba a apoyar al Tagammu, el Gobierno se precipitó a ofrecer diversas prebendas al jeque y a su tribu, incluidos varios puestos en el Consejo Local, propiciando el cambio de voto de la tribu en 24 horas; en la ciudad de Gahina, en Sohag, el PST denunció que el Ministerio del Interior se había vengado del apoyo de la tribu Beni Ramad, con sus 8.000 miembros, desarmando a aquellos y dejándolos indefensos frente a sus adversarios históricos, la tribu de Abu Aqil (Springborg 1989: 189-190).

Pero si de algo no cabe duda es de que las elecciones legislativas de 1984 se inscribieron en el marco de la estrategia de Mubarak para consolidar su poder. Desde el punto de vista institucional, Mubarak necesitaba un Parlamento totalmente leal incluso para garantizar su reelección en 1987, pero, más allá del improbable desafío que pudiera encontrar en este terreno, el presidente necesitaba contar con su propias elites dirigentes y con sus propios apoyos políticos y socioeconómicos, tanto dentro como fuera del aparato del Estado, si no quería ver coartada su acción de Gobierno. Como señaló Ayubi (1991:100):

“La base social del Estado que heredó no puede ser separada del realineamiento de clases que tuvo lugar durante el *infatih*, que situó en la primera línea una alianza entre elementos de la semiaristocracia prerrevolucionaria [anterior a 1952], de la burguesía de Estado de los sesenta y de las camarillas comerciales y financieras de la época del *infatih*”.

Desde el comienzo de su mandato, los debates entre la clase política egipcia giraban en torno a si Mubarak era “un naserista”, “un sadatista”, o más una cosa que otra, un debate alimentado principalmente por su anuncio de cambios en la orientación económica y por los tempranos nombramientos en puestos de la más alta responsabilidad de personajes de la burguesía de Estado tenidos por muchos por naseristas, como Usama al-Baz (consejero presidencial, 1981), Safwat al-Cherif (ministro de Información, 1982) y Rifaat al-Mahgub (presidente del Parlamento, 1984). Dado que las tres personas citadas habían servido tanto al régimen de Náser como al de Sadat⁴⁵, parece más adecuado considerar que, con estos nombramientos y otros similares, Mubarak, que insistía en declarar que él no era ni Náser ni Sadat, pretendía tan solo situar en los puestos clave a sus propios hombres de confianza, y comenzar a instaurar un nuevo equilibrio entre las distintas facciones del régimen heredado.

La elecciones de 1984 habrían constituido el segundo gran paso de Mubarak en busca de un equilibrio sobre el que asentar su poder tanto por medio del cambio de elites como por la vía de la legitimidad. En un perspicaz artículo escrito poco después de la legalización del Wafd y en la antesala de las elecciones, Mohammed Sid-Ahmed se preguntaba si estas constituirían el “acto espectacular” que Mubarak necesitaba para asentar su legitimidad en una tradición de poder fuertemente personalista y de tintes

⁴⁵ Al-Baz, si bien fue el jefe de gabinete de Sami Sharaf cuando este era jefe de gabinete del presidente Náser, participó destacadamente en la preparación de los Acuerdos de Camp David. Al-Cherif fue un destacado miembro de los Servicios Secretos en los regímenes de Náser y de Sadat, compaginando su actividad política con actividades de importación y exportación, para finalmente ser nombrado responsable de la radio y la televisión egipcias por Sadat en 1980. En cuanto a Mahgub, que había ocupado puestos de responsabilidad en la Unión Socialista Árabe hasta 1967, abandonó el país por desacuerdos con la política naserista, según declararía posteriormente, para regresar y ser nombrado ministro de Asuntos Presidenciales por Sadat en 1972 y encargarse en 1975 de dismantelar la USA; luego sería nombrado vicepresidente del Gobierno, más adelante dejó el Gobierno y, posteriormente, volvió a ocupar puestos de responsabilidad.

carismáticos, contraponiéndolo a la nacionalización del Canal de Suez por Náser y a la “victoria” de octubre de 1973 de Sadat. La espectacularidad del acto pasaba por que la oposición accediera al Parlamento con una representación importante, lo que Mubarak estaba dispuesto a permitir e incluso favorecer (Sid-Ahmed, 1984a). No obstante, tras señalar la novedosa y relativa libertad de expresión concedida a la prensa existente, y las concesiones finalmente hechas en materia de legislación electoral y durante la campaña, el autor concluía su artículo sin alimentar las ilusiones, señalando que:

“Nada garantiza que los procedimientos legales serán respetados por una administración acostumbrada a dar al presidente el apoyo del 99% del electorado (...) La esencia del nuevo reparto de cartas es hacer comprender a las diversas formaciones que su participación en la vida política dependerá menos del resultado del escrutinio que de un acuerdo alcanzado con el presidente”.

En el marco de esta intervención presidencial se situarían, en particular, la legalización del partido Wafd y la tolerancia ante su alianza con los Hermanos Musulmanes. Prosigue Sid-Ahmed:

“Por supuesto, el PND (estrechamente relacionado con la Comisión de Partidos [que se había opuesto a la legalización]) se opone ferozmente al retorno del Wafd, pero eso no quiere decir que esa sea la opinión del presidente Mubarak. El PND ve en él un rival capaz de desalojarlo de sus posiciones privilegiadas, sin embargo a Mubarak (...) puede parecerle útil para contener el descontento, para ganarse a la oposición y para contrarrestar a los sadatistas dentro del aparato del Estado”.

Los resultados de las elecciones trajeron una importante renovación de las elites del régimen: de los 391 diputados electos del PND, 197 eran nuevos, no habían formado parte del anterior Parlamento, y sin duda alguna Mubarak, que había sido secretario general del PND hasta los últimos días de Sadat, encontraría la manera de intervenir en la selección de los candidatos. No obstante, según el mismo Sid-Ahmed en un artículo posterior a las elecciones (1984b), los resultados de aquellas supusieron un relativo fracaso para el presidente, a pesar de esa renovación parcial de sus partidarios en la Cámara y de la presencia en ella del Wafd y los Hermanos Musulmanes. En contraposición a la permisividad de la campaña electoral, las numerosas irregularidades durante el proceso de votaciones y escrutinio, y los magros resultados obtenidos por el resto de los partidos de la oposición, atestiguaban, “más que un consenso nacional, un auténtico «desdoblamiento de la personalidad» del régimen”. Esta situación se explicaría porque, en última instancia, asustado por un éxito demasiado importante del partido Wafd -augurado con aviesas intenciones por sectores del régimen⁴⁶-, Mubarak habría autorizado la “corrección” de los

⁴⁶ Sid-Ahmed afirma que los rumores fueron difundidos por “elementos con acceso a los más altos puestos del Estado”, y pronosticaban una victoria del Wafd con el 70% de los votos y una posible

resultados, y los sadatistas que controlaban el aparato del Estado se habrían excedido en ella a su favor, arruinando el “acto espectacular” y la imagen, si no de democracia al menos de equilibrio, que el presidente buscaba para encauzar su mandato. Para Sid-Ahmed, la “era de Mubarak” habría tenido un despegue fallido, pues el presidente no se había apropiado realmente del aparato del Estado y los sadatistas habrían demostrado, una vez más, ser los más fuertes dentro de él. No obstante, nada más concluir las elecciones, el presidente continuaría con la construcción de su propio régimen, expurgando la Secretaría General del PND de los que Sid-Ahmed llamaba “sadatistas inveterados”, y, en 1985, sustituyendo los principales dirigentes de la prensa del Estado por periodistas que demostrarían una incondicional fidelidad a Mubarak (Mahfuz al-Ansari en el diario *Al-Gumhuriyya*, Makram Mohammed Ahmad en la revista *Al-Musawwar*, e Ibrahim Nafia en *Al-Ahram*). En este sentido, las elecciones fueron un pequeño fracaso necesario para emprender el camino más corto hacia la constitución del nuevo régimen egipcio, el tercero de la época republicana.

intervención del Ejército en ese caso. Más que temer que estos dos extremos se confirmaran como tales, Mubarak habría querido garantizar un mayor equilibrio entre las fuerzas políticas.

3. CRISIS ECONÓMICA, RESISTENCIAS DE LA BURGUESÍA Y PROTESTAS SOCIALES

A finales de 1981, cuando el Gobierno reconoció oficiosamente a través del director de *Al-Ahram* que Egipto sufría una severa crisis económica (véase III 1.2), esta no había hecho más que comenzar a apuntar. El gasto público se había incrementado del 48% del PIB en 1974 al 62% en 1982, mientras que los ingresos del Estado se situaban en esta última fecha en torno al 40% del PIB. No obstante, estos ingresos continuaron su declive en los años siguientes, lastrados por la disminución de las aportaciones exógenas y rentistas, que descendieron del 17% del total de los ingresos en 1981 hasta situarse por debajo del 15% en 1985 y en torno al 13% en 1987. La ayuda exterior había pasado de situarse en torno al 6% del PIB en 1980 al 4% en 1987, pero fue la bajada de los precios del petróleo, que Egipto sufría a través del Canal de Suez más que de su propia producción, la principal responsable de que a lo largo de los años 80 el país conociera un déficit fiscal medio del 10%. En palabras de Soliman, a finales de 1986 Egipto “estaba al borde de la bancarrota” (Soliman 2011: 38-44).

Como había anunciado Mubarak, uno de los primeros empeños económicos de su mandato fue promover la industria local. Para ello, se incrementaron las barreras y los aranceles a la importación, se redujeron los intereses cobrados por los créditos al sector industrial, y se redujeron al 32% los impuestos a los beneficios procedentes de este sector, mientras se mantenía el porcentaje del 40% para los beneficios del sector financiero y otros sectores comerciales. Aunque esta política daría ciertos frutos, lo haría a muy largo plazo y en medida muy insuficiente para colmar el déficit fiscal (el porcentaje de la industria en el PIB, excluido el sector petrolífero, pasaría del 13,5% en 1980-81 al 18,1% en 1990-91) (Soliman 2011: 37).

Ante la merma de los recursos externos, para evitar la posible bancarrota el Gobierno tenía tan solo dos opciones: incrementar la recaudación interna y/o reducir el gasto, obviamente. A pesar de que el Estado obtenía tan solo cerca del 50% de sus ingresos por vía impositiva (incluidos los impuestos recibidos del Canal de Suez y del resto del sector público), una cifra relativamente baja incluso para los países en vías de desarrollo, el Gobierno no adoptaría ninguna medida en este sentido a lo largo de la década. Según Soliman (2011: 97-98), todas las políticas del régimen de Mubarak para incrementar los ingresos del Estado durante las dos primeras décadas de su mandato estuvieron guiadas por un principio: que tuvieran los menores costes políticos y administrativos. Y una reforma del sistema impositivo, independientemente de su orientación, habría resultado muy costosa en ambos sentidos. En consecuencia, el régimen optó por reducir los gastos del Estado de la manera menos costosa políticamente, tras fracasar en su intento de incrementar los ingresos a costa de la burguesía comercial y financiera. Además, recurrió a

procedimientos para disminuir el gasto público que no llamaran inmediatamente la atención ni atrajeran la mirada sobre la responsabilidad directa del Gobierno en tal disminución y sus consecuencias, como el “impuesto inflacionario”, del que hablaremos a continuación. Todo ello provocó a corto y medio plazo resistencias y reacciones que adelantan los problemas de las dos décadas siguientes de la presidencia de Mubarak.

3.1 LOS DECRETOS DE ENERO DE 1985 Y EL TRIUNFO DE LA BURGUESÍA COMERCIAL Y FINANCIERA

Según Ayubi (1991: 100), en ningún momento de los años 80 Mubarak pretendió enfrentarse a ningún sector de la burguesía, sino tan solo “racionalizar” la política de apertura económica y ejercer un papel de árbitro de la sociedad entre los intereses de clases en conflicto, incluyendo en ellos los de las distintas facciones de la burguesía. Sin embargo, la búsqueda de este papel, y la necesidad de incrementar los recursos del Estado le llevaron tempranamente a la confrontación con la burguesía financiera y comercial. Es interesante señalar que Ayubi citaba ya a finales de la década de 1980 el adagio que sería recurrente entre los sectores politizados de la sociedad durante la siguiente década. Jugando con la especificidad del dialecto egipcio, que diferencia con la pronunciación las dos acepciones de la misma palabra en árabe (حاكم), dicho adagio se preguntaba cuando dejaría el presidente de ser un *hakam* (“árbitro”) para pasar a ser un *hakem* (“gobernante”).

En enero de 1985 el Gobierno promulgó una serie de decretos destinados a controlar el cambio de divisas y las importaciones. El primero, hasta entonces desviado en su mayor parte de la economía oficial, se haría pasar por el sistema bancario; las segundas se verían limitadas por un sistema de concesión de licencias más estricto, intentando dirigir las hacia sectores productivos. Los beneficiarios serían los recursos del Estado y la balanza de pagos del comercio exterior, que se encontraba claramente inclinada a favor de las importaciones (9.500 millones de LE frente a 4.500 millones de LE). Los perjudicados directamente serían la subclase empresarial privada interesada en las inversiones especulativas y una “mafia económica parásita” compuesta por cambistas y especuladores con divisas, importadores monopolistas, contrabandistas, agentes del mercado negro y otros similares. Este último grupo incluía aproximadamente, según el Ayubi (1991: 230-233), a varios cientos de cambistas en moneda extranjera y unos dos mil importadores, y movía al menos 6.000 millones de dólares al año. Contaba con sólidos apoyos dentro del sistema bancario comercial, con predominio de los bancos y sociedades de inversión “islámicos” de los que hablaremos en el capítulo III 6.3, y con importantes contactos en el aparato burocrático y en la prensa.

Los “decretos de enero” desataron una formidable campaña de presión, mediática y parlamentaria en su contra, impulsada por los grupos afectados y apoyada por el partido

Wafd y su periódico (lo cual es muy significativo), por la Federación Egipcia de Cámaras de Comercio (FECC), por la Federación Egipcia de Industrias (FEI) y, sobre todo, por la Asociación Egipcia de Hombres de Negocios (AEHN). Dicha campaña se desarrollaría según un patrón que sería característico de la época de Mubarak: se dirigía contra el ejecutor de las medidas, en este caso el ministro de Economía, Mustafa al-Said, que sería acusado de diversos escándalos personales, y no contra el conjunto del Gobierno, ni mucho menos contra Mubarak. Por otro lado, estuvo acompañada por un cese temporal de las actividades de los importadores, lo cual creó un clima de escasez e incertidumbre.

En poco tiempo, el lobby financiero y de los negocios se alzó con la victoria, y Mustafa al-Said dimitió. Aunque en abril de 1985 nuevos decretos sustituirían a los promulgados tres meses antes, no llegarían a ser aplicados, y los importadores pudieron seguir recurriendo a sus propias divisas, adquiridas habitualmente en el mercado negro. Este episodio, que habría podido desembocar en unas medidas beneficiosas para el desarrollo global de la economía, fue tan solo uno de los más destacados en el conflicto dentro del régimen entre quienes Ayubi denomina los “desarrollistas” y la “lumpen-burguesía”.

La unidad de acción de las asociaciones de la burguesía contra los decretos de enero de 1985 se había producido a pesar de las crecientes diferencias entre ellas. La FECC y la FEI, que agrupaban a más de tres millones de personas y eran estrechamente controladas por el poder en tanto que instancias oficiales de inscripción obligatoria⁴⁷, se quejaban de que las asociaciones privadas, establecidas según ellas ilegalmente, se habían convertido en los principales interlocutores del Gobierno, en particular la más antigua, la AEHN, a pesar de contar con tan solo 300 miembros⁴⁸. En 1986, la formación por decreto gubernamental de un Comité Consultivo compuesto por miembros del Gobierno y hombres de negocios formalizaría la situación denunciada por la FECC y la FEI: de los 14 representantes del sector de los negocios, 11 pertenecían a la AEHN (IEA 1986: 343-351, 380-384). Durante dos años, la FECC en particular pugnaría por incrementar su representación social en el Consejo, y su fracaso fue, con toda probabilidad, junto al control que el régimen ejercía sobre su aparato, la causa principal de su pérdida de representatividad, manifestada en las elecciones llevadas a cabo en 1987.

En este año 1987 se celebraron elecciones en las cámaras de comercio de 17

⁴⁷ Recordemos que el presidente de la República nombraba al presidente de la FEI, y los ministerios de Aprovisionamiento e Industria, de los que dependían las cámaras, nombraban a 10 miembros del Consejo de Dirección de cada una de las cámaras de comercio; además, podían rechazar candidaturas de quienes se presentaran a otros puestos (CEPEA 1987: 383-384; CEPEA 1988: 348-350).

⁴⁸ A la AEHN, creada en 1975 al amparo de la Ley de Asociaciones Civiles de 1964, se habían unido en 1982 la Cámara de Comercio Americana en Egipto (CCAE, 1982) y en 1983 la Asociación de Hombres de Negocios de Alejandría (AHNA). La CCAE había sido personalmente autorizada por Mubarak a pesar de que la ley egipcia prohibía el establecimiento de cámaras de comercio extranjeras en el país (Gobe 1999: 129; IEA 1987: 383).

provincias, siendo elegidas en todas ellas las listas únicas a los consejos de dirección. En las provincias más importantes, El Cairo, Alejandría y Guiza, la participación no superó el 10% de los electores registrados y con derecho a voto. En El Cairo, de los 38.800 miembros que habían pagado sus cuotas de afiliación tan solo votaron 1.100, lo que constituyó el porcentaje de participación más bajo de la historia de la cámara (IEA 1988: 348).

Aunque hayamos calificado a las asociaciones como la AEHN de “privada” y a la FECC y la FEI de “oficiales”, las líneas de demarcación y de diferenciación entre una y otras no pasaban por el carácter privado o público de sus actividades económicas, sino más bien por el grado de su proximidad e influencia en los poderes públicos, pues los tres millones de miembros con los que contaba la FECC sobre el papel pertenecían en su mayor parte al sector privado, siendo sin embargo dirigidos por miembros del sector público o del aparato del Estado estrechamente relacionados con el régimen; mientras que el grueso de los miembros de la AEHN eran exdirigentes políticos, algunos de ellos expresidentes del Gobierno y exministros, e incluso algunos seguían trabajando en el sector público tras ingresar en la asociación, dedicándose la mayor parte de ellos a la importación y siendo por tanto susceptibles de verse afectados por los decretos de enero de 1985 (Gobe 1999: 130-131; IEA 1986: 381).

En cualquier caso, el fracaso de la puesta en marcha de los conocidos como “decretos de enero” apuntaló el poder de la burguesía comercial y financiera y su capacidad de presión en las futuras políticas económicas del mandato de Mubarak.

3.2 DISCRETA REDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS SOCIALES

En el presupuesto del año 1986/1987, de los poco más 20.000 millones de LE de gasto público, el 19% era destinado a salarios y gastos corrientes de la administración y el 43% a servicios y gasto social (Ayubi 1991: 267-268). No obstante, el Gobierno ya había comenzado a reducir el gasto público, evitando tocar el magro 37% dedicado a inversiones, lo que implicaba reducir el gasto social. Para evitar los posibles costes políticos de tal medida, había adoptado un enfoque gradual y discreto.

Entre 1980 y 1984 se había mantenido formalmente el compromiso del Estado de emplear a todos los graduados superiores, si bien el cumplimiento de dicho compromiso había comenzado a ser retrasado en el tiempo y a incluir excepciones, produciéndose la contratación 3 o 4 años después de la graduación. A pesar de ello, en dicho periodo la contratación en el sector público creció un 19%, lo que superó el crecimiento del empleo global en el país -que creció tan solo un 12,6% en el mismo periodo. En 1986 el Estado empleaba a cerca de 5,5 millones de personas, casi el 50% de los 11 millones de trabajadores empleados en Egipto: 3,4 millones en la Administración y los servicios, y 1,6

millones en el sector público -la mitad de ellos en la industria- y 500.000 en las Fuerzas Armadas (IEA 1986: 437). Un año antes, en 1985, el Gobierno había anunciado que a partir de ese año solo se cubrirían las vacantes de empleo público, y ello mediante el anuncio público y la competición. La noticia, cuyo terreno había sido preparado por los retrasos e incumplimientos en las contrataciones, no despertó un gran rechazo social.

No obstante, en otros terrenos, el Gobierno no anunció las medidas que estaba llevando cabo y que afectaban a los sectores más vulnerables económicamente de la población. Este fue el caso de la reducción del gasto en subsidios directos, realizada siguiendo una calculada y sutil estrategia de progresivos recortes, que redujo el gasto en subsidios del 12% en 1982-1983 a poco más del 6% del PIB en 1986-1987 (Soliman 2011: 57-61). Gracias a dicha estrategia Mubarak no tuvo que afrontar revueltas como las que afrontó Sadat en 1977, al evitar realizar ningún anuncio público que supusiera un choque simbólico sino que se introdujeron los recortes escalonada y discretamente. El clima político en la primera mitad de los 80 era mucho más distendido que en 1977, y los obreros y los estudiantes se encontraban en un estado de relativa quietud política, siendo difícil que sin ellos se movilizara un sector tan amplio, amorfo y cohesionado como el de “los pobres”, que habían aportado un contingente muy significativo a las protestas de 1977. La desmovilización política de las clases medias y medias-bajas, por su parte, había sido facilitada por el hecho de que el Gobierno había procurado conservarse su consentimiento mediante un cierto incremento de los salarios de los empleados públicos. A pesar de la crisis fiscal, desde 1982-1983 hasta el principio del final de aquella, en 1990-1991, el porcentaje de los salarios sobre el gasto público había subido del 17 al 19%. Soliman apunta sutilmente cómo el empeño de Mubarak en presentarse como el campeón de “los de ingresos limitados” (محدودي الدخل), que algunos residentes en Egipto a finales de los 80 considerábamos un eufemismo para evitar la palabra “pobres”, respondía en cierta medida a la realidad, pues era aquel, y no este, el sector social cuyo consentimiento más le interesaba mantener, y en el que estaba dispuesto a invertir más. Además de las subidas salariales regulares, todos los primeros de mayo, con ocasión de la Fiesta de los Trabajadores, Mubarak anunciaba en su discurso su graciosa concesión de 10 días suplementarios de salario para todos los trabajadores públicos. A continuación, la prensa oficial dibujaba al presidente como el protector de los trabajadores frente a las presiones del ala derecha del régimen.

3.3 EL IMPUESTO INFLACIONARIO

A lo largo de los años 80 la inflación media en Egipto se situó en torno a un 20%. No obstante, gran parte de dicha inflación no se debía al incremento de los precios por la evolución de la oferta y la demanda de productos, sino a una política deliberada del

Gobierno para reducir en la práctica el poder adquisitivo de los ciudadanos e incrementar los ingresos del Estado vía ahorro. La base de esta política, la emisión desmesurada de moneda nacional, que limitaba el poder de compra de productos importados, acabó constituyendo lo que se conoce como “el impuesto inflacionario”. Estimaciones realizadas para el Banco Mundial señalaron que en 1987 los ingresos derivados del impuesto inflacionario en Egipto constituían el 11,7% del PIB (un 55% de la inflación total), un porcentaje muy superior al del resto de los países en desarrollo estudiados⁴⁹.

Aunque en teoría la inflación afectaba a todos por igual, en la práctica diversos sectores socioeconómicos, como el de los comerciantes, podían sortearla subiendo a su vez los precios, lo que acababa redundando en más inflación. Para el Gobierno, el impuesto inflacionario tenía la ventaja de que se podía implementar mediante decisión del Banco Central, sin requerir la autorización de nadie, ni siquiera del Parlamento, y sin informar de él, y además se podía culpar de las subidas de precios a los comerciantes, en lo que la prensa estatal se aplicaba diligentemente. El Gobierno desdeñaba los efectos perversos de la inflación desbocada, que hacía que los intereses reales de los depósitos bancarios se volvieran negativos, que se dolarizara la economía y que aumentara la especulación inmobiliaria (Soliman 2011: 98-100).

3.4 LA RESISTENCIA EXITOSA DE LOS TRABAJADORES A LA LIBERALIZACIÓN Y LOS RECORTES EN SUS DERECHOS

En su línea inicial de contener la liberalización económica, Mubarak prometió que el sector público no sería reducido ni vendido, una promesa que cumpliría en los años 80. No obstante, bajo la presión de la crisis fiscal y de los defensores de la liberalización, desde 1983 sus Gobiernos intentaron adoptar medidas legislativas para reducir los derechos de los trabajadores, así como continuar con el establecimiento de empresas conjuntas (*joint ventures*) entre grandes multinacionales y empresas del sector público, intentos que en su mayor parte fueron abortados por la oposición de los trabajadores y/o sus sindicatos. A pesar de ello, tras una etapa de incremento generalizado de los salarios reales hasta 1984, aquellos comenzaron a descender en el sector público, y a reducirse y descender en el privado, como muestran la siguiente tabla:

⁴⁹ Hinh Dinh and Gingale Marcelo: *Inflation Tax and Deficit Financing in Egypt*, Working Paper n° 668, Washington D.C: World Bank, 1991, p. 13. Citado por Soliman (2011: 99).

TABLA 5: TENDENCIA DE LOS SALARIOS REALES 1981-1987 (CON ÍNDICE 100 EN 1973)

Índice de salario real	1973	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Sector público	100	121	127	123	128	121	108	99
Sector privado	100	127	129	134	147	141	126	115

FUENTE: Ragui Asaad and Simon Commander, "The Egypt Labor Market Through Boom and Recession" en Posusney (1997: 137).

Como veremos a continuación, las demandas y las protestas de los trabajadores se encuadraban dentro de la economía moral ya señalada al tratar la época de Sadat (véase II 5.2), según la cual el Estado tenía unos compromisos con los trabajadores y en contrapartida las demandas y protestas de estos eran pacíficas, simbólicas y/o productivas. Las demandas eran "restaurativas" u orientadas a defender derechos y beneficios adquiridos, más que orientadas a conseguir otros nuevos.

En el caso de los trabajadores públicos el número, la estructura y la variabilidad de esos derechos y beneficios, heredados de la época naserista, y vigentes a lo largo de los 80, era complejo. Aparte de tener en cuenta los contratos fijos (incancelables salvo expulsión por falta grave), el derecho a pensión y cobertura médica, y en ciertos casos el derecho a una vivienda transmisible a los herederos, el acceso a clubes deportivos y vacaciones, para entender las reivindicaciones de los trabajadores hay que conocer cuáles eran los componentes de su salario:

TABLA 6: COMPONENTES DE LOS SALARIOS EN EL SECTOR PÚBLICO

Ítem	Determinado por:
SALARIO BASE 1) Salario mínimo, más 2) aumento anual (علاوة دورية) 3) "subida excepcional" (علاوة استثنائية)	Establecido por la ley para cada categoría laboral. Garantizado por ley a condición de productividad. Decidido por el Gobierno, generalmente en respuesta al descontento laboral; un porcentaje de 1) y 2).
ADICIONES AL SALARIO BASE* 1) Compensaciones (بدلات) (por comidas, uniformes, riesgo laboral...) 2) Incentivos mensuales (حوافز) 3) Recompensa por producción (مكافأة) 4) Bonos periódicos (منح), normalmente al comienzo del año escolar, el 1 de mayo, en las fiestas religiosas	Dirección de la empresa, sujeto a negociación. Basados en la productividad; porcentaje decidido por la dirección de la empresa, dentro de los márgenes de la ley; pueden ser negociados. Garantizado por la ley si se alcanzan los objetivos. Otorgados a discreción por el Gobierno o por la dirección; un porcentaje del salario base.

*Estas adiciones pueden ser en conjunto varias veces superiores al salario base

FUENTE: Posusney (1997: 141)

En cuanto al tipo de protestas, como hemos mencionado, evitaban en principio interrumpir la producción o causar daños. Las ocupaciones y encierros productivos y el rechazo de los cheques de paga eran las formas de protesta más utilizadas.

En 1982 y 1983 los trabajadores públicos del textil de la ciudad de Kafr al-Dawwar y los de las industrias militares del barrio cairota de Helwán protagonizaron sendas ocupaciones de sus fábricas para protestar por las reducciones en sus incentivos y solicitar un incremento del suplemento por el coste de la vida. En 1984, fueron la empresa de tuberías Naser, la de Chubra de productos de ingeniería y la textil de Daqahleyya las que protagonizaron las protestas, secundadas en el caso de Chubra por 4.000 trabajadores. En estos casos los trabajadores atribuían las reducciones de sus incentivos a la mala gestión de la empresa. Sin embargo, a principios del verano de 1984 el Gobierno promulgó una ley en virtud de la cual se incrementaban las cotizaciones a la seguridad social (sanidad y pensiones) de los trabajadores. Ante las primeras protestas, el Primer Ministro detuvo la aplicación de la ley para repensar su estrategia: la nueva consistió en implementar la misma ley a partir de finales de septiembre, pero haciendo que entrara en vigor en diversos plazos según los sectores industriales y las zonas geográficas, para impedir que las previsibles protestas coincidieran en el tiempo. En Alejandría la protesta de los 10.000 trabajadores textiles adquirió la forma simbólica de rechazar los cheques de paga de los salarios, una forma que se repitió en otras protestas menores que no mencionamos. Sin embargo en Kafr al-Dawwar dos semanas después, el 30 de septiembre, decenas de miles de trabajadores textiles y sus familiares y vecinos tomaron las calles cortando las líneas telefónicas, interrumpiendo los transportes y destruyendo instalaciones gubernamentales. La represión policial causó tres muertos, 26 heridos y 200 detenidos, pero la ley fue retirada. La represión de estas protestas fue la más dura de la primera mitad de los 80 en número de víctimas. Como norma general, el Gobierno detenía a varios cientos de trabajadores por protesta si estos no deponían su actitud, pero también accedía plena o parcialmente a sus demandas (Posusney 1997: 143-145; 160-161; 184-199).

A lo largo de 1985 y 1986 se produjeron diversas protestas por las mismas razones (impago, disminución o retraso de los pagos de incentivos, suplementos y horas extras), 50 tan solo en 1986. Entre las más importantes fueron la huelga de 3.000 trabajadores del textil en Mahala al-Kubra en mayo de 1985 en protesta por el no pago del bono del 1 de mayo, y sobre todo la de los conductores de tren y otros trabajadores auxiliares del ferrocarril de julio de 1986, que detuvo el tráfico ferroviario. El Gobierno ordenó al Ejército que organizara un servicio de autobuses y a la policía que tratara duramente a los huelguistas, que fueron apaleados. Algunos del centenar de detenidos pasaron dos días sin comer ni beber, y parte de ellos fueron acusados de violar la Ley de Emergencia y juzgados por el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, una jurisdicción excepcional supuestamente establecida para juzgar los casos de terrorismo. Lo que había molestado de manera singular al Gobierno era la efectividad y visibilidad de la huelga de los conductores de tren. Las otras protestas, que a menudo no eran huelgas en el sentido estricto de la palabra, quedaban circunscritas a las proximidades de las fábricas en las ciudades del Delta

(Mahala al-Kubra, Kafra al-Dawwar) o las barriadas periféricas de El Cairo (Maadi, Helwán, Chubra al-Jeima). No obstante, una vez rota la huelga la mayor parte de las demandas de los trabajadores fueron atendidas por el Gobierno (Posusney 1997: 161).

Los trabajadores del ferrocarril se distinguían de los otros por un hecho singular, derivado de su larga tradición de luchas laborales iniciada a principios del siglo XX. Contaban con una “liga” (رابطة) de trabajadores registrada como “asociación civil” o “popular” (جمعية أهلية) con la que habían sorteado primero la prohibición hasta 1964 de que los funcionarios formaran sindicatos, y luego el control impuesto a partir de esa fecha por su sindicato oficial. Las protestas de 1986 fueron organizadas en el seno de esta asociación -que fue disuelta una semana después de la huelga- y fueron condenadas por la federación general del sector (النقابة العامة لعمال السكك الحديدية) y por Federación General de Sindicatos de Trabajadores de Egipto (FGSTE). No obstante, los trabajadores presionaron a sus representantes oficiales con un envío masivo de telegramas en apoyo a sus compañeros detenidos, lo que llevó a aquellos a tomar posturas más moderadas. Por otro lado, el Sindicato de Abogados constituyó una comisión para defender a los trabajadores detenidos (IEA 1986: 386).

Por lo general, los trabajadores “rebeldes” intentaban organizar comités de empresa alternativos, y recriminaban a sus representantes oficiales a nivel de empresa y sectorial su escasa voluntad o su ineficiencia a la hora de defender sus derechos, lo que empujó a dichos representantes a incrementar su belicosidad en las altas esferas de la FGSTE. A partir de 1986 la FGSTE pareció despertar del letargo o la complacencia en la que había estado sumida los años anteriores. En ese año su Comité Ejecutivo manifestó su rechazo a la venta de las empresas públicas o semipúblicas ineficientes que era reclamada desde diversos sectores, y en particular por los hombres de negocios del sector privado, que cada vez tenían más estrechas relaciones con el régimen (véase el capítulo IV 8.3). De la misma manera, anunció que el sistema de participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas debía ser respetado, y mantuvo su rechazo a establecer relaciones con el Histadrut israelí. Finalmente, cuando el ministro de Trabajo y presidente de la FGSTE, Saad Mohammed Ahmad, empujado por el Gobierno, preparó en 1986 un borrador de ley que habría reducido la participación de los trabajadores en los beneficios y otros derechos laborales, así como autorizado su traslado entre empresas, la campaña del Tagammu y otros sindicalistas de izquierdas en contra de la ley encontró el apoyo de numerosos dirigentes de la FGSTE. La ley fue retirada, y Ahmad sería poco después cesado en sus funciones de ministro, y algo más adelante, como veremos en el capítulo III 8.5, desplazado de la presidencia de la FGSTE (IEA 1986: 385-387; Posusney 1997: 139,185).

De la misma manera, como hemos apuntado, los trabajadores se opusieron con éxito en muchos casos al establecimiento de empresas conjuntas entre empresas transnacionales y empresas del sector público, temerosos de que ello implicara el posterior

cierre de las instalaciones egipcias o su despido, como ya había sucedido en época de Sadat. El caso más sonado fue el del proyecto de General Motors, que pretendía instalarse en Egipto por medio de la compañía estatal de automóviles Nasr. A pesar de que el proyecto había sido promovido por el Gobierno, tras una larga controversia que duró más de un año, avivada por el Tagammu y en la que numerosos dirigentes políticos y técnicos del Estado se opusieron al proyecto, en octubre de 1987 este fue abandonado definitivamente (Posusney 1997: 191-192).

3.5 LA REVUELTA DE LOS RECLUTAS DE LA SEGURIDAD CENTRAL

El 25 y el 26 de febrero de 1986, un escalofrío recorrió Egipto. Decenas de miles de reclutas de la Seguridad Central protagonizaron un levantamiento armado que adquirió sus dimensiones más graves en El Cairo y en Asiut, pero que se extendió también a otros campamentos de Qaliubeyya, de Ismailiyya y de Sohag. Los sublevados, con una furia desatada, dejaron a su paso un reguero de destrucción inmobiliaria, y tuvieron que ser sometidos por el Ejército, al que algunos de ellos se enfrentaron a tiros.

El Dispositivo de la Seguridad Central (جهاز الأمن المركزي) había sido creado por Sadat tras las revueltas de enero de 1977 con el objetivo principal de que ejerciera de antidisturbios y diera apoyo a la policía, a cuyos mandos estaba encomendada, en todo tipo de labores. Su tropa, compuesta por cerca de medio millón de personas, estaba formada por jóvenes que cumplían así su servicio militar de tres años. Hay que señalar que correspondía realizar un servicio de tres años a los jóvenes que no tuvieran formación escolar o solo tuvieran formación primaria, mientras que quienes tenían el diploma de enseñanza secundaria servían durante dos años, y quienes tenían formación superior tan solo uno. Así, la mayoría de los reclutas de la Seguridad Central eran de extracción social humilde, gran parte de ellos procedentes de las zonas rurales, y en general eran destinados a unidades muy alejadas de sus lugares de origen. Durante su servicio, recibían una remuneración de entre 4 y 6 libras mensuales, lo que apenas les daba para tomar un té diario y comprar unos cigarrillos. Hacinados en barracones, sus jornadas laborales eran muy largas y con apenas descanso, y recibían un trato infame de los oficiales.

Desde un primer momento se supo que la chispa que provocó el levantamiento fue la difusión de rumores en el sentido de que su periodo de servicio se iba a incrementar de tres años a cuatro y de que a los reclutas se les iba a reducir su paga mensual “para pagar las deudas de Egipto”. Posteriormente se dijo que se distribuyeron panfletos que estuvieron en el origen de estos rumores, algo plausible habida cuenta de los múltiples focos de la rebelión. También han surgido diversas teorías “conspirativas”, la más destacada y verosímil es que alguien quería acabar con la carrera de Ahmad Ruchdi, ministro del Interior (Springborg 1989: 148-150). Tras 18 meses en el cargo, Ruchdi había destapado

varios casos de corrupción, había perseguido seriamente a los traficantes de drogas, y había adoptado un enfoque dialogante con la oposición, lo que, unido a que había sido el único ministro del Interior no acusado de haber estado implicado en casos de tortura, le había ganado para muchos el calificativo de “el mejor ministro del Interior que Egipto había tenido nunca”. Los instigadores de las revueltas serían, si los hubiera habido, o bien los Servicios de Investigaciones del Estado (جهاز المباحث العامة, SIE) o bien el gobernador de Asiut, Zaki Badr, enemigo declarado de Ruchdi -que desempeñó un papel singular en la represión de las revueltas, como veremos-, o bien alguien que habría querido debilitar al SIE, controlada por hombres del régimen de Sadat, precisamente acusándola de haber permitido que se produjera la revuelta. Estas teorías ganaron credibilidad porque tras el levantamiento Ruchdi fue cesado, y Badr fue nombrado ministro del Interior. Desde este puesto emprendió la depuración de los dirigentes del SIE, jaleado por algunos hombres de confianza de Mubarak en la dirección de la prensa estatal, y en particular por Ibrahim Saada, director de *Ajbar al-Yaum*⁵⁰. Independientemente de que hubiera una mano negra detrás del levantamiento o no, el conjunto de los acontecimientos revela las luchas intestinas en el seno del aparato del Estado y del nuevo régimen.

No obstante, lo que más nos interesa destacar del levantamiento del 25 y el 26 febrero de 1986 y lo que lo rodeó son algunas de sus implicaciones sociales y políticas, deducibles no solo de las circunstancias y actitud de los reclutas, sino también de la respuesta del Gobierno, de los medios políticos y de la prensa.

Como hemos señalado, los hechos más graves se produjeron en primer lugar en El Cairo, y posteriormente en Asiut. De los campamentos vecinos a las Pirámides, en Guiza, salieron entre 8.000 y 20.000 reclutas armados clamando su rechazo a la extensión de su servicio militar. Cortaron las carreteras de Alejandría y El Fayyum y se dirigieron a la Avenida de las Pirámides, destruyendo a su paso casinos, hoteles, comercios y vehículos. En otros lugares de El Cairo (Darrasa, Chubra, Tora, Puente de Suez) se produjeron hechos similares y, aunque en su momento se ocultó este dato, jóvenes de las clases populares se unieron a los reclutas. El toque de queda fue decretado, y unidades del Ejército salieron a las calles, conminando a los reclutas a rendirse. Ante la negativa de algunos, los soldados se enfrentaron a ellos, con el apoyo de vehículos blindados y helicópteros artillados que no dudaron en abrir fuego contra los rebeldes. En Asiut, el campamento de la Seguridad Central se encontraba en la ribera oriental del Nilo, mientras que el grueso de la ciudad se encuentra en la occidental. El gobernador civil, Zaki Badr, ordenó el izado de los puentes que unían ambas riberas cuando los reclutas los estaban atravesando, lo que causó la

⁵⁰ Springborg cita en particular el editorial de Saada en *Ajbar al-Yaum* del 15 de marzo de 1986, en el que acusaba al SIE de constituir un estado dentro del Estado, de haber buscado la caída de Ruchdi ocultándole la información previa que tenía sobre la revuelta, y de hacer chantaje al nuevo ministro, Zaki Badr, con un supuesto dossier sobre sus actividades ilegales en Asiut.

muerte por ahogamiento de varios de ellos. Según las cifras oficiales facilitadas, en total 107 reclutas murieron y 1.286 fueron procesados, si bien se sospecha que el número de muertos pudo ser considerablemente mayor.

Según el Informe Estratégico Árabe sobre el año 1986, ante la revuelta “la respuesta popular se caracterizó por la madurez y la conciencia” y la gubernamental por “la objetividad y la contención” (IEA 1986: 354). En similares términos se refirió a la actitud de la prensa, la estatal y la de partidos, un estudio monográfico realizado específicamente sobre ella por el Centro Nacional de Investigaciones Sociales y Criminales (CNISC) (خليفة 1987: 116-122)⁵¹. Esta actitud encomiástica de diversos sectores de la *intelligentsia* se debía esencialmente, según manifestaban, a que “el pueblo” no se había unido a las protestas, a que el Gobierno no había intentado ocultarlas ni buscar chivos expiatorios, sino conocer sus causas y ponerles remedio, y a que la oposición no había intentado explotarlas en su beneficio, sino que había colaborado, rechazando tajantemente la violencia, para intentar conocer sus causas y motivos desde la natural divergencia de opiniones y la actitud crítica. El trabajo citado del CNISC mostraba cómo los periódicos de la oposición, los estatales e incluso el del partido del Gobierno coincidieron en señalar las duras condiciones de vida de los reclutas, su procedencia de los sectores sociales más desfavorecidos y el trato recibido durante su servicio como los principales motivos de la revuelta. En cuanto a las razones generales de carácter económico y social, el incremento de las dificultades económicas y la falta de justicia social fueron los ítems más destacados, insistiendo mucho más en ellos los diarios *Al-Chaab* y *Al-Ahali*, y menos los diarios estatales, *Al-Wafd* y el diario del PND, *Mayu*. Finalmente, en cuanto a las razones políticas, los partidos de la oposición se quedaron prácticamente solos al localizarlas en la ausencia de democracia y de canales adecuados de participación y en las erradas políticas del Gobierno (خليفة 1987: 57, 63-64). Resulta muy sorprendente, sin embargo, que, siempre según los detallados datos del mismo estudio, nadie pusiera en cuestión en los medios de comunicación el hecho de que “los más desfavorecidos” cumplieran más años de servicio militar que los más acomodados o menos desfavorecidos, más aun si se tiene en cuenta que la necesidad de su presencia en el seno de sus familias para subvenir a sus necesidades económicas era sin duda más acuciante. Nosotros tampoco hemos encontrado una reivindicación explícita en este sentido de los partidos de la oposición y sus periódicos a lo largo de los veinticinco años siguientes, a pesar de que las condiciones de los reclutas de la Seguridad Central no mejoraron demasiado, y de que estos continuaron reprimiendo las protestas políticas y sociales, por otro lado con un coste económico ínfimo para el Estado. Por el contrario, cuando comentamos a un intelectual de izquierdas que la revuelta de los reclutas se

⁵¹ El estudio incluyó las ediciones completas de los tres principales diarios estatales, *Al-Ahram*, *Al-Ajbar* y *Al-Gumhuriyya*, y las de todos los periódicos de partidos desde el 26 de febrero hasta el 10 de abril de 1986.

asemejaba a las “revueltas de esclavos”, aun entendiendo él sin duda que no pretendía descalificar a los reclutas, sino señalar su desenfrenada respuesta -tal vez justificable- a la dureza de sus condiciones de vida, me indicó que esa afirmación no resultaría muy amable a oído de los interlocutores egipcios en general. Se diría que a gran parte de la sociedad –o al menos de sus elites- le pareciera justificada la discriminación que objetivamente sufrían los reclutas en lo relativo a la duración de su servicio militar, por su condición social.

4. RETORNO DE LA TENSION POLÍTICA Y LA VIOLENCIA⁵²

4.1 LA CONTINUIDAD DE LA APERTURA EN EL ÁMBITO PARAPOLÍTICO

Tras las elecciones legislativas de 1984, Mubarak había intentado mantener el tono de la apertura política. En enero de 1985, Chenuda III fue reinstituído en sus funciones papales, y a lo largo del año se publicitaron investigaciones oficiales sobre la situación de los derechos humanos, anunciándose la retirada de la inmunidad a todos aquellos que se hubieran visto implicados en torturas. El régimen toleró, además, la fundación de la Organización Egipcia de Derechos Humanos, creada el 1 de julio de 1985 por Mohammed Ibrahim Kamel, su primer presidente, por la wafdista copta Mona Makram Ebeid y el miembro del Tagammu, Milad Hanna, igualmente copto, entre otros. El 16 de octubre de 1985, Mubarak se reunió con los presidentes de los partidos de la oposición para tratar con ellos la situación del país, cumpliendo con lo que ya había devenido una costumbre anual.

De manera particular se multiplicaron los gestos del poder hacia las corrientes islamistas. En diciembre de 1984, el Parlamento prometió debatir un proyecto de ley sobre la implementación de la *charía*. En abril de 1985 diversos jeques, entre ellos Hafez Salama y Omar Abdel Rahmán, fueron autorizados a volver a predicar en las mezquitas, y decenas de militantes yihadistas fueron excluidos de la lista negra del Ministerio del Interior. Más adelante, el 22 de mayo de 1986, Mubarak adoptaría la medida sin precedentes de enviar un representante personal al entierro de Omar al-Telmesani, el guía supremo de los Hermanos Musulmanes, que sería sucedido por Mohammed Hamed Abu Násir a la cabeza de la Hermandad.

Ante las elecciones sindicales celebradas entre 1983 y 1985, el poder político mostró voluntad de respetar la autonomía de los sindicatos profesionales dentro de ciertos límites, que aquellos conocían y respetaron. En el de periodistas, en 1983 y 1985 los candidatos de oposición obtuvieron la mayoría en el Consejo de Dirección, siendo el más votado en las primeras la izquierdista Amina Chafiq, y en las segundas Mohammed Abdel Quddús, miembro de los Hermanos Musulmanes e hijo del famoso escritor Ihsan Abdel Quddús, lo cual supuso que por primera vez un islamista accediera al Consejo de Dirección. En el de sindicato de abogados, en 1985, también accedió al Consejo de Dirección por primera vez un islamista, Mohammed Nuh. Sin embargo, para la dirección de ambos sindicatos fueron elegidos personajes afines al poder (Salah Galal y Ahmad al-Jawaga⁵³, respectivamente), probablemente con el fin de que pudieran cumplir de manera

⁵² Excepto cuando se indique lo contrario, los datos mencionados en este capítulo provienen de la cronología de la RPE, números 19-27 (1985- 1987).

⁵³ Ahmad al-Jawaga se había enfrentado a Sadat como síndico en los últimos años de mandato de aquel, hasta el punto de que el presidente y el Consejo del Sindicatos fueron cesados en sus funciones en 1981

adecuada con la labor de mediación que asignaba a los dirigentes sindicales el modelo corporativista implantado por Násir. No obstante, el resultado más adverso, en principio, para los intereses del Gobierno fue la obtención de la mayoría de los puestos en el Consejo de Dirección del Sindicato de Médicos por parte de los Hermanos Musulmanes.

En las elecciones estudiantiles de 1985 en la Universidad de El Cairo, el Secretario General del PND, Yusuf Wali, coordinó los esfuerzos del partido y de los cuerpos de seguridad para derrotar a los candidatos islamistas, fracasando en su tarea. Los miembros de las *gamaat* se impusieron en 12 de las 19 facultades en las que se habían presentado (de un total de 26), y obtuvieron 35 puestos en la Secretaría de la Unión de Estudiantes de la universidad frente a los 17 de los partidarios del Gobierno, mientras que la oposición “secularista” no obtuvo ningún puesto. Algo parecido sucedió en el resto de las universidades de El Cairo y de Egipto, con la excepción de la de Helwán (con fuerte presencia de hijos de obreros, lo que propició una representación destacada de la izquierda) y la de Tanta, donde los islamistas denunciaron la intimidación de la policía. Un año después, en noviembre de 1986, las corrientes islámicas volvieron a imponerse en las elecciones estudiantiles, a pesar de argucias del Gobierno como forzar a los candidatos que apoyaba a presentarse bajo la denominación de “Asociación Islámica Moderada” (Springborg 1989: 226-228).

4.2 EL RENACER DE LA VIOLENCIA

4.2.1 Activismo islamista radical y atentados antiisraelíes

Ya fuera a causa del carácter conciliatorio de muchos gestos del Gobierno, ya porque el paso del tiempo evidenciaba que aquellos eran, en lo fundamental, meros gestos y no auténticas concesiones, lo cierto es que a partir de 1985 las corrientes islamistas radicales volvieron a dejar sentir su presencia en la vida pública.

Para mediados de junio de ese año, el jeque Hafez Salama convocó una “marcha verde” (en alusión al color simbólico del islam) hacia las instalaciones presidenciales en El Cairo destinada a presionar a Mubarak para que implementara la *charía*. La convocatoria, prohibida por el Gobierno y no apoyada por los Hermanos Musulmanes, fue desarticulada mediante la detención previa de 500 activistas y la toma por las Fuerzas de Seguridad de la mezquita de Al-Nur en el barrio de Abbasiyya, desde la que la marcha debía comenzar. El 5 de julio, el Gobierno promulgó un decreto mediante el que anulaba la autorización a

(véase II 5.3). De ahí en parte que él y sus candidatos al Consejo de Dirección -algunos de las corrientes de la oposición- obtuvieran un gran apoyo en 1985, a pesar de que las relaciones entre Al-Jawaga y el Gobierno hubieran cambiado considerablemente a mejor, como veremos en el capítulo III 9.4.

Salama, Abdel Rahmán y otros jeques para predicar en sus grandes mezquitas-feudo de El Cairo, Alejandría, El Fayyum y el Alto Egipto, nombrando en su lugar a imames elegidos por el Ministerio de Asuntos Religiosos. Ante la resistencia presentada, Salama y varias decenas de jeques fueron detenidos.

Una serie de atentados o actos violentos relacionados con el conflicto de Oriente Medio vinieron a tensar la situación política en el último tercio de 1985, y se conjugaron con el incremento del activismo islamista radical. El 20 de agosto de 1985, un diplomático israelí fue asesinado en El Cairo, en una acción reivindicada por un grupo denominado “Zaurat Misr” (ثورة مصر - Revolución de Egipto), que dos años después se descubriría estaba formado por militantes naseristas, algunos de ellos relacionados con los servicios secretos⁵⁴. El mismo grupo había protagonizado un atentado similar fallido contra un presunto miembro del Mosad en junio de 1984. Poco después, el 5 de octubre, un policía de la Seguridad Central de servicio en el Sinaí, Suleimán Jater, disparó contra un grupo de turistas israelíes, matando a siete de ellos. El Gobierno israelí exigió un duro castigo, situando al Gobierno egipcio en un dilema, pues desde diversos sectores de la oposición se justificaron las acciones de Jater, y en algunos de ellos, en particular entre los islamistas radicales, se le consideró un héroe nacional (Jater era un joven de Zagazig, piadoso pero sin adscripción política conocida). El 7 de octubre, un comando del Frente Popular para la Liberación de Palestina secuestró el crucero *Achille Lauro* en su trayectoria de Alejandría a Port Said, exigiendo la liberación de decenas de presos palestinos. Tras dos días de negociaciones, el comando aceptó liberar el barco a cambio de su libertad, y fue enviado por el Gobierno egipcio en un avión comercial de Egipto a Túnez el 10 de octubre. Sin embargo, durante el vuelo, el aparato fue interceptado por aviones militares estadounidenses y desviado a una base de la OTAN en Italia, donde los secuestradores fueron detenidos. Aunque el Gobierno egipcio exigió disculpas oficiales a Estados Unidos, durante varios días se produjeron manifestaciones en Egipto tanto contra Estados Unidos como contra el papel, según unos, débil y, según otros, colaborativo desempeñado por el Gobierno. Finalmente, el 23 de noviembre un avión de Egyptair fue desviado de su ruta de Atenas a El Cairo por un grupo de secuestradores que pertenecían a la conocida como Organización de Abu Nidal (autodenominada Fatah-Consejo Revolucionario), aterrizando en Malta. Asaltado por comandos especiales egipcios el 24 de noviembre, 53 pasajeros, más de la mitad del pasaje, murieron, lo que desató numerosas críticas al Gobierno, acusado de haber querido acabar con el comando por encima de cualquier otra consideración.

Si los últimos meses de 1985 habían agitado las hasta entonces relativamente

⁵⁴ El grupo Zaurat Misr sería desarticulado en 1987, y su miembros juzgados a partir de 1988. Entre los imputados se encontraba Jaled Abdel Náser, hijo del expresidente egipcio, quien sería, sin embargo, finalmente exculpado.

tranquilas aguas del activismo islamista radical, 1986 iba a marcar un punto de inflexión. El 28 de diciembre de 1985 un tribunal militar había condenado a Suleimán Jater a cadena perpetua, una condena relativamente clemente para los hábitos judiciales del país en ese tipo de delitos. Sin embargo, el 7 de enero de 1986, Jater fue, según las autoridades, encontrado ahorcado en prisión. Su familia y gran parte de la opinión pública acusaron al Gobierno de su muerte, llevada a cabo presuntamente para satisfacer al Gobierno israelí. Una oleada de protestas, promovidas sobre todo por los islamistas, se levantó a lo largo de Egipto, la más grave de ellas en Zagazig, y en particular en su universidad, donde había estudiado Jater.

4.2.2 Violencia, control y represión del islamismo radical

A partir de enero de 1986 se intensificaron las actividades del islamismo radical, que comenzaron a tomar una deriva violenta: de las manifestaciones y el reparto de propaganda los militantes pasaron a incendiar videoclubs y otros locales comerciales que dispensaban alcohol u otros productos prohibidos, según ellos, por el islam. El acceso de Zaki Badr al ministerio del Interior tras la revuelta de los reclutas de la Seguridad Central, a finales de febrero, no ayudaría a calmar la situación, sino todo lo contrario. La actuación de Badr al frente del Ministerio sería calificada por la oposición como la de un pirómano en una situación explosiva. Aunque las denuncias de la oposición siempre se focalizarían en el ministro, es muy improbable que en la nueva política expeditiva de las fuerzas de seguridad Badr, cuyos métodos en Asiut eran conocidos, y que permanecería en el cargo varios años, no siguiera indicaciones de más altas esferas, que habían decidido poner coto al activismo islamista y también contener al resto de la oposición. El 31 de marzo, un militante islamista moría de un disparo en la cabeza por distribuir propaganda política. A partir de entonces, los enfrentamientos entre la policía y los activistas se harían recurrentes en el Alto Egipto en las universidades y a la salida de la oración del viernes. El 31 de octubre se produjo una nueva muerte de un activista islamista en Asiut en enfrentamientos con la policía tras la oración, y los heridos -incluidos policías- y los detenidos se contaron por cientos.

Además de a la violencia, las fuerzas de seguridad recurrían a expedientes vengativos particularmente odiosos para los islamistas, que no contribuyeron a calmar los ánimos. Por ejemplo, la destrucción de la mezquita de Al-Rahmán en Kruben (Quena), el 7 de julio de 1986; la prohibición con el nuevo curso de llevar la tradicional *galabeyya* a los varones y el velo completo (*niqab*) a las mujeres en diversas universidades, como la de El Cairo; o el cierre de las “mezquitas informales” acondicionadas por los islamistas, todo ello alegando razones de seguridad. En noviembre, las elecciones estudiantiles se celebraron en unos campus tomados por la policía y, a pesar de que el Gobierno redobló

sus esfuerzos para derrotar a los islamistas, obligando incluso a sus candidatos a concurrir a ellas bajo el nombre de “Asociación islámica moderada”, tales esfuerzos fueron, como ya hemos comentado, infructuosos (Springborg 1989: 216-217; 227-228).

El año de 1987 no comenzó de mejor manera. A principios de febrero, en la provincia de Beni Suef, una disputa sobre la propiedad de unas tierras entre un monasterio copto y sus vecinos musulmanes concluyó con un enfrentamiento violento. En los días siguientes comenzaron a correr por el Alto Egipto los habituales rumores, algunos de ellos delirantes⁵⁵, acerca de las insidias de los coptos. El 25 de febrero diversos comercios de coptos fueron atacados en Beni Suef por estudiantes musulmanes. Inmediatamente, la violencia entre ambas comunidades se extendió por el Alto Egipto, y varias semanas después alcanzó a algunos lugares del Delta, resultando en el incendio de mezquitas e iglesias, un muerto y centenas de heridos.

4.3 EL FIN DE LA “LUNA DE MIEL” ENTRE LA PRENSA DE OPOSICIÓN Y EL PODER

El marco de la liberalización política promovida por Mubarak confinaba prácticamente las posibilidades de expresión y expansión de la oposición al éxito de sus periódicos. Entre 1984 y principios de 1986, estos habían tanteado los límites de la libertad de expresión. El Gobierno no los sometía al acoso de los últimos años del régimen de Sadat, pero contenía su expansión mediante la limitación de los medios materiales para su impresión y la privación de las fuentes de información oficiales y de la publicidad estatal. *Al-Ahali*, considerado en un principio el rival más peligroso del régimen, no tanto por su fuerza política como por su ideología, era frecuentemente atacado por las plumas oficiales, y tenía la desventaja de tampoco contar con la financiación de la publicidad privada. Con muchos más medios económicos, en tanto que representante de ciertos sectores de la burguesía, la tirada del *Wafd* superaba con mucho a las de otros periódicos, y según algunas encuestas realizadas era así mismo, con diferencia, el más leído⁵⁶. La crítica moderada al Gobierno era moneda corriente en toda la prensa de oposición, pero también lo era un cierto amarillismo -mucho menos presente en *Al-Ahali* y desmesurado en *Al-*

⁵⁵ Algunos de estos rumores pretendían que en las ropas de las mujeres musulmanas aparecían cruces después de lavarlas, debido a que los cristianos habían arrojado sobre ellas una sustancia misteriosa (Springborg 1989: 217).

⁵⁶ Según los informes de circulación de los periódicos publicados en *Al-Ajbar* el 20 de septiembre de 1986 y en *Ajbar al-Yaum* el 21 de septiembre de 1986, la tirada de *Al-Wafd* en 1986 era de 900.000 ejemplares, mientras que la de *Al-Ahrar* era de 120.000, la de *Al-Ahali* de 100.000 y la de *Al-Chaab* de 60.000. Según una encuesta realizada a 2.200 personas a instancias de *Al-Ahram*, *Al-Wafd* era el periódico preferido por un 35% de los encuestados, el islamista *Al-Liwá al-Islami*, el del 25%, *Al-Ahali* el del 8%, *Al-Chaab* el del 6%, y *Al-Ahrar* el del 4% (Bahira Mujtar: “The Egyptian Press and their Preferred Newspapers”, *Al-Ahram*, 28 de mayo de 1986. Citado por Springborg 1989: 193).

Ahrar- centrado en los escándalos políticos, económicos y sociales, y orientado a captar lectores a toda costa.

Los agitados últimos meses de 1985 fueron la antesala del fin de la “edad de oro” o la luna de miel de las relaciones entre el poder y la prensa de oposición. Las críticas a la actuación del Gobierno en las crisis de los secuestros de aviones o ante el caso de Suleimán Jater llevaron al Gobierno, por vía del ministro de Información, a reiterar su denuncia de los “excesos de la prensa”, y a agitar la amenaza encubierta de prohibir a los periodistas trabajar al mismo tiempo en la prensa estatal -de la que obtenían sus salarios- y en la prensa de oposición -en la que trabajaban muchos sin recibir remuneración. A partir de enero de 1986 fue el propio Mubarak quien insinuó la posibilidad de reintroducir la censura previa, y comenzó a acusar a ciertos medios de estar financiados por intereses extranjeros.

La intervención del presidente dio luz verde al retorno de las prácticas intimidatorias contra la prensa, algunas de ellasseudomafiosas, gestionadas por los servicios secretos, que se centraron principalmente en *Al-Wafd*, identificado entonces como el mayor adversario. Su redactor jefe, Mustafa Churdi, y otro redactor sufrieron sendos ataques físicos en el verano, y el 10 de octubre el redactor de la muy seguida columna “El gorrión”, Said Abdel Jaleq, fue acusado por las fuerzas de seguridad de recibir sobornos, con el apoyo de un video que según Abdel Jaleq era un montaje. Las sedes de los periódicos comenzaron a ser vigiladas por los servicios secretos, y los periodistas ocasionalmente hostigados por estos. En este clima, sorprendió que en agosto fuera concedida una licencia de edición al diario *Saut al-Arab* (صوت العرب, *La Voz de los Árabes*), de la corriente naserista cuya constitución en partido había sido denegada. No obstante, el periódico sería pronto blanco de los ataques del poder, y acusado por Mubarak de ser financiado por el régimen libio, una acusación tal vez no exenta de verdad⁵⁷ (Gómez García 1991: 97-101; Springborg 1989: 41, 195).

Con toda probabilidad, la revuelta de los reclutas de febrero, los asesinatos políticos y el resurgir del activismo islamista habían despertado la susceptibilidad del régimen frente a unas críticas que habían ido aumentando de tono.

⁵⁷ Según Springborg la acusación a *Saut al-Arab* era plausible habida cuenta de las altas remuneraciones que recibían sus colaboradores (1989: 41).

5. LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DE 1987. NUEVAS CONCESIONES A LA OPOSICIÓN

5.1 LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY ELECTORAL Y SUS CONSECUENCIAS

La ley electoral de 1983, que había regido las elecciones legislativas de 1984, había sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad presentado por un abogado independiente sobre el argumento de que el sistema exclusivo de candidaturas en listas cerradas de partidos y la prohibición de las candidaturas independientes privaban en la práctica a los ciudadanos del derecho a presentarse a las elecciones garantizado por la Constitución. En diciembre de 1986, el Tribunal Constitucional hizo saber a las autoridades que sus conclusiones apuntaban a declarar la inconstitucionalidad de la ley.

5.1.1 Un Tribunal Constitucional comprensivo con el poder

El principal riesgo que implicaba el fallo de inconstitucionalidad era que el candidato al plebiscito que debía elegir al presidente de la República en octubre de 1987 tuviera que ser designado por un Parlamento elegido inconstitucionalmente, pues la legislatura de aquel estaba previsto que se prolongara hasta mayo de 1989. Para evitar esto, el Parlamento aprobó apresuradamente, el 31 de diciembre, una nueva ley electoral, y poco más de un mes después, el 4 de febrero de 1987, Mubarak disolvió por decreto la Asamblea. Esta decisión fue ratificada en referéndum el 12 de febrero por el 88,9% de los votos, y las elecciones legislativas fueron convocadas para abril de 1987. El 7 de marzo, el Tribunal Constitucional hizo público su anunciado fallo (Jacquemond 1994a: 92-93; Martín Muñoz 1992: 395-398).

El fallo del Tribunal Constitucional es señalado en numerosas ocasiones como una muestra de su independencia. En nuestra opinión, tal independencia debe ser matizada destacando la “comprensión” que el Alto Tribunal mostró hacia el poder ejecutivo, primero anunciando a este el sentido de dicho fallo -y aceptando retrasarlo hasta que aquel tomara las medidas que le parecieran oportunas-, y posteriormente estableciendo en él, de manera un tanto contradictoria, que si bien la inconstitucionalidad de la Cámara tenía efectos retroactivos en lo relativo a su composición -es decir, que debería ser disuelta si no lo hubiera sido ya-, no los tenía en cuanto a las medidas adoptadas por ella.

5.1.2 Un nuevo sistema electoral mixto con candidaturas individuales

Las leyes n° 188 de diciembre de 1986 y n° 2 de febrero de 1987 introdujeron pocas enmiendas en el sistema electoral, destinadas fundamentalmente a salvar el escollo de la inconstitucionalidad de la legislación anterior. De los 448 escaños de la Cámara, las listas cerradas de partidos optarían a 400, siempre que superaran el 8% de votos a nivel nacional. Los 48 restantes, uno por cada circunscripción, quedaban reservados a candidaturas individuales, siendo atribuidos al candidato que obtuviera mayor número de votos, siempre que superara el 20% de los votos válidos. En caso de que ningún candidato lo hiciera, se celebraría una segunda vuelta. El requisito de que todas las candidaturas incluyeran un 50% de obreros y campesinos se mantenía, excepto, obviamente, para las candidaturas independientes. La otra novedad principal de la ley era que, en nombre de la igualdad de sexos establecida por la Constitución, se eliminaba la reserva de 31 escaños para mujeres (Martín Muñoz 1992: 398-399).

5.1.3 Intentos desbaratados de unión de toda la oposición

Creando que la decisión del Tribunal Constitucional les beneficiaba, pocos miembros de la oposición alzaron su voz contra la rápida disolución por decreto presidencial del Parlamento, una medida que la Constitución establecía que solo podía ser adoptada en casos extremos. Sin embargo, la celeridad de Mubarak en emitir el decreto puede ser puesta en relación, según Martín Muñoz, con el “congreso popular” que las fuerzas de la oposición iban a celebrar al día siguiente de que lo hiciera, el 5 de febrero, para buscar una postura conjunta ante “la crisis constitucional, política y socioeconómica de Egipto”. Dicha postura había tenido un precedente en el boicot conjunto realizado a las elecciones a la Asamblea Consultiva de octubre de 1986, acordado con el fin de presionar a Mubarak a que emprendiera reformas políticas, entre ellas la reforma de la ley electoral, el levantamiento del estado de excepción -y en consecuencia, el respeto a la libertad de reunión y manifestación-, el establecimiento de una auténtica independencia del poder judicial y la supervisión por este de las elecciones, etc. En el congreso del 5 de febrero, todos los partidos legales, excepto el gubernamental PND, junto a representantes de los Hermanos Musulmanes, comunistas y naseristas, acordaron un programa nacional común, e incluso consideraron la posibilidad de formar un frente electoral común en una única lista encabezada por el Wafd (Martín Muñoz 1992: 396-397; 400).

La posibilidad del acuerdo, promovido por los presidentes de los partidos frente al desacuerdo de gran parte de sus militantes -reacios a tal mezcolanza ideológica entre antiguos enemigos acérrimos-, pareció ser brindada por consideraciones puramente tácticas, siendo el principal objetivo de los partidos minoritarios, según esta interpretación,

superar la barrera del 8% de votos a nivel estatal necesarios para obtener representación. Desde la misma perspectiva, no resulta extraño que fuera el Wafd, el partido presuntamente menos necesitado para superar el 8% por sí solo, el primero en romper la baraja, alegando que la ley electoral excluía que un partido presentara en sus listas más que a sus miembros o partidarios, un escrúpulo que no habían mostrado en su alianza en 1984 con los Hermanos Musulmanes. En cuanto a esta alianza, sus contradicciones habían aflorado poco después de las elecciones, pero se habían hecho patentes de manera singular tras el resurgir del activismo islamista y el rechazo a la coalición del importante componente copto del electorado del partido, rechazo que alcanzaría su cénit tras los enfrentamientos confesionales de febrero y marzo de 1987 (Gómez García 1995: 95-99; Martín Muñoz 1992: 400.)

5.2 NOVEDADES Y CONTINUISMO EN EL PANORAMA ELECTORAL DE 1987

5.2.1 La alianza entre los Hermanos Musulmanes, el PST y el PL

La retirada del Wafd de la macrocoalición electoral, y las fuertes reticencias de sectores importantes de los Hermanos Musulmanes y del Tagammu a unir fuerzas entre sí, dejaron el camino expedito a una coalición entre la Hermandad y los otros dos principales partidos, el PST y el ahora denominado Partido Liberal, que poco antes había decidido que ya no era necesario conservar la ficción de denominarse “socialista”. Según el acuerdo alcanzado, los Hermanos Musulmanes ocuparían el 40% de las candidaturas, el PST otro 40%, y el PL un 20%. El hecho de que la Hermandad aceptara un reparto igualitario de candidaturas con el PST, y una generosa participación en ellas del PL, a pesar de que su fuerza electoral era mucho mayor que la de los otros dos partidos juntos, fue y es considerado por muchos una simple muestra del peaje que aquella tenía que pagar por utilizar las listas ajenas, así como un reconocimiento a la existencia de una sincera corriente islamista dentro del PST. En nuestra opinión, fundada en la observación de todos los procesos electorales celebrados en la época de Mubarak en los que participaron con gran libertad los Hermanos Musulmanes, no cabe duda de que la limitación del número de candidatos había sido pactada con el régimen de Mubarak, algo que los Hermanos siempre negarían.

Aunque el presidente del PST, Ibrahim Chukri, urdió el acuerdo a espaldas de los órganos de dirección del partido (عبد المجيد 1993: 131-133), por las razones pragmáticas que hemos citado, lo cierto es que la defensa de un papel destacado del islam en la vida social y política formaba parte del ADN del partido, en tanto que pretendido continuador del Joven Egipto y el Partido Socialista Egipcio y de la ideología de Ahmad Husein. Sin embargo,

habida cuenta de sus inclinaciones estatistas y socialistas, anidaban también en él una corriente socialdemócrata y otra naserista. Sin una ideología y un programa político claros en un principio, su línea ideológica se había ido conformando, a medida que se convertía en un partido de auténtica oposición, sobre el eje de su periódico, *Al-Chaab* y de sus principales colaboradores: los antiguos naseristas Fathi Radwán y Helmi Murad (vicepresidente del partido entre 1980-82), y el posterior redactor jefe del periódico, de orientación socialista, Hamid Zaidán⁵⁸. Dicha línea ideológica incluía la crítica de los acuerdos con Israel, la defensa de la unidad árabe, un estatismo no exento de *infītah*, y otros aspectos que hemos citado anteriormente.

Al-Chaab acogía ocasionalmente en sus páginas a escritores liberales (como Mohammed Usfur y Hasan Durra) y de izquierdas (como Nawal al-Saadawi), a los conversos del marxismo y a un cierto islamismo culturalista (como Tareq al-Bichri y Mohammed Imara). Desde 1985, sin embargo, comenzaron a menudear las colaboraciones en el periódico de destacados dirigentes de los Hermanos Musulmanes, como Omar al-Telmesani o Ahmad al-Suyufi, y la temática islámica se hizo mucho más presente, abriéndose sus puertas a los grandes debates políticos relacionados con ella y sucediéndose, incluso, las entrevistas a los más destacados jeques del islamismo radical (Kichk, Hafez Salama, Omar Abdel Rahmán, Yusuf al-Badri, Ahmad al-Mahallawi) y a los jóvenes de las Gamaat Islamiyya.

En noviembre de 1985, Hamid Zaidán presentó inopinadamente su dimisión como redactor jefe de *Al-Chaab* y subsecretario del partido. Según manifestaría mucho más adelante, lo hizo a causa de su incapacidad para frenar la creciente importancia de las tendencias islamistas⁵⁹. Para sustituirlo fue elegido Adel Husein, un intelectual exmilitante comunista y exateo o agnóstico, quien se impuso desde un principio la tarea, sin embargo, de convertir al PST en un partido esencialmente islámico, si bien no revelaría que tal había sido su objetivo hasta haberlo alcanzado plenamente. Por el contrario, adoptaría un enfoque gradual, abriendo el camino a la expansión del discurso islámico en el periódico hasta hacer pública luego su apuesta por la identidad islámica del partido, incluso defendiendo finalmente una coalición con los Hermanos Musulmanes más allá de la pura estrategia electoral que defendían muchos de los militantes del PST (Gómez García 1996: 53, 57, 96). En la década durante la que aproximadamente dirigió *Al-Chaab*, Husein no solo convertiría al PST en un partido islamista, sino que convertiría progresivamente a *Al-Chaab* en el azote del régimen de Mubarak. No obstante, el discurso “islamista” defendido finalmente por el PST, emanado principalmente de la pluma de Husein, le distinguiría netamente de otras corrientes islamistas, como veremos más adelante.

⁵⁸ Sobre la influencia del Joven Egipto, del PSE y de Ahmad Husein en el PST, y sobre la evolución de este y de su periódico desde su fundación hasta mediados de los años 90, véase Gómez García (1996).

⁵⁹ Revista *Al-Musawwar*, nº 3367, 21 de abril de 1984. Citado por Gómez García (1995: 56).

5.2.2 Partidos, programas y candidatos independientes

Junto a la denominada popularmente Coalición Islámica (Hermanos Musulmanes, PST y PL) y la participación del débil Partido de la Umma, la novedad en cuanto a los contendientes en las elecciones de 1987 fue la partición de numerosos candidatos independientes. Entre ellos se contaba cierto número de candidatos naseristas y comunistas que no encontraban acomodo en el Tagammu, como el histórico líder sindical comunista Nabil al-Hilali, o el escritor igualmente comunista Mahmud Amín al-Alam (la legalización del Partido Comunista Egipcio era firmemente rechazada por las autoridades).

Los programas y campañas de los partidos confirmaron sus orientaciones generales, si bien los programas del PND y el Wafd fueron particularmente escuetos y poco concretos y comprometidos, mientras que el del mismo Wafd y el de la llamada Coalición Islámica mostraron la maleabilidad y el tacticismo de algunas fuerzas políticas, dispuestas a enmendar sus principios ideológicos para obtener réditos electorales.

El gubernamental PND presentó su programa y campaña bajo el lema “Democracia, desarrollo y estabilidad”⁶⁰, e insistió en destacar sus logros en los tres terrenos en los años anteriores, defendiendo el mantenimiento de la planificación económica, la armonía entre el sector público y el privado y el equilibrio y el neutralismo en política exterior, y prometiendo la defensa de los ciudadanos “de ingresos limitados” mediante el control de la inflación, en particular en los productos de primera necesidad. En la campaña, no dudó en añadir a su lema principal el de “heredero de la Revolución de Julio de 1952”, y esto y el contenido general de su programa llevaron a los redactores del Informe Estratégico Árabe del CEPEA a afirmar “es inevitable destacar que [en la campaña de 1987 el PND] incrementó la «dosis de naserismo», si se nos permite la expresión” (IEA 1987: 222).

El Wafd ni siquiera hizo público un programa electoral completo, según Hasan y Fawzi por indicación expresa de su presidente, Fuad Serag Eddín. Por el contrario, se limitó a anunciar dispersamente, en su diario o en la campaña, unos pocos aspectos de él, insistiendo en su defensa de la democracia y las libertades políticas, y adaptando el mensaje al público de cada circunscripción. Así, reiteró, sin apenas insistir en ello, su rechazo de los Acuerdos de Camp David en la medida en que Israel siguiera incumpliendo sus compromisos, y continuó manifestando su apoyo al *infatih* y a los estímulos al sector privado, así como la necesidad de reducir los gastos del sector público, pero evitando el ataque frontal a este. Finalmente, en cuanto al tema de la aplicación de la *charía*, el partido declaró que no se oponía a ella, y que creía que debía ser “una fuente principal de legislación”, abandonando su línea de las elecciones de 1984, cuando manifestó que debía ser “la fuente principal”. Por otro lado, el partido recuperó su lema de la época

⁶⁰ Sobre el programa y la campaña del PND, véase Martín Muñoz (1992: 403-404; 409-410).

monárquica, que había arrumbado en 1984: “La religión es para Dios, y la Patria para todos” (حسن & فوزي 1990: 101-104).

En cuanto al Tagammu, es de destacar en primer lugar que, tras el fracaso en las elecciones de 1984, en su Comité Central se había discutido y votado sobre la posibilidad de no presentarse a las de 1987. Aunque en ese caso su no participación se habría presentado como un boicot ante las numerosas trabas que la legislación imponía a las actividades de los partidos en general, y durante las elecciones en particular, y en definitiva como una estrategia para “privar al Gobierno del decorado de democracia con el que pretendía encubrir la dictadura”⁶¹, quienes defendían el boicot también alegaban la debilidad organizativa del partido y su falta de apoyo popular. Sin embargo, quienes defendieron la participación, finalmente vencedores, esgrimieron el argumento de que el tiempo de la campaña electoral, por breve que fuera, era precisamente el único en el que podían acercarse personalmente a las masas, o estas al partido, sin exponerse al hostigamiento de las fuerzas de seguridad, que en “tiempos normales” impedían incluso el reparto de propaganda política.

El Tagammu presentó un programa⁶² mucho más detallado en sus objetivos y en los medios para alcanzarlos que los del resto de las fuerzas políticas mencionadas, insistiendo en la defensa del nivel de vida de las clases populares mediante el combate de la inflación, una política pública de vivienda destinada a dichas clases, el mantenimiento de la sanidad y la enseñanza universales gratuitas, y el incremento de los salarios y las pensiones de los funcionarios y de los trabajadores. Así mismo, hacía suyas las demandas de los trabajadores (recuperación de la participación en los consejos de administración y libertad sindical) y de los campesinos (fijación en términos precisos de los contratos de arrendamiento, recuperación del papel de las cooperativas agrícolas y reducción de impuestos para los explotadores de menos de 3 *feddanes*) y no olvidaba la necesidad de cuidar de manera particular a los jóvenes, los niños y las mujeres. Por lo demás, seguía propugnando el desarrollo del sector público, pero también del “sector privado productivo”, reconociendo el papel desempeñado en la economía del país por los pequeños empresarios, manufactures, comerciantes e incluso inversores, que debían ser protegidos de la competencia extranjera y de la “explotación parasitaria” local. En política, reafirmaba su rechazo de los Acuerdos de Camp David y la cooperación con Estados Unidos, y propugnaba la defensa de los derechos de los palestinos y de los otros Estados árabes ocupados, y la unidad y solidaridad árabes, extendiéndose en propuestas para solucionar la guerra civil libanesa y la guerra de Irán-Irak y mejorar las relaciones de Egipto con sus vecinos, Sudán y Libia. Finalmente, detallaba un amplio programa para “empujar el

⁶¹ Informe de la Secretaría General del partido Tagammu sobre las elecciones de 1987, pág. 4. Citado por حسن & فوزي (1990: 113).

⁶² El programa íntegro del Tagammu puede encontrarse en مرسي (1990: 321-336); cita de la página 332.

proceso democrático hacia delante”, acabando con el régimen del “partido único gobernante” y defendiendo todo tipo de libertades para los ciudadanos, incluida la libertad sindical. En este apartado, es de destacar que tras defender el respeto de la libertad de creencia religiosa, llamaba a inspirarse en los principios de la *charía*, “que prohíben la usura, la explotación y el despotismo, y ordenan la justicia, la libertad y la igualdad entre la gente”.

Finalmente, en lo que respecta al programa de la Coalición Islámica, presentada formalmente en la lista del PST, su primer apartado, sobre “la reforma del sistema de Gobierno mediante una auténtica democracia”, era el único que incluía propuestas concretas, entre las que cabe destacar, además de la reforma del sistema electoral y el reforzamiento del papel del Parlamento, la libertad de formar partidos sin autorización previa para “todas las tendencias políticas” -es decir, sin excluir las tendencias islamistas- y la de los ulemas a criticar a las autoridades y la Administración por sus actuaciones en todo lo que tuviera que ver con el culto, solo restringida por el Código Penal. También llama la atención la ausencia de referencias a otras libertades individuales y públicas.

Los apartados segundo y tercero del programa se dedicaban, respectivamente, a proponer la aplicación de la ley islámica y la promoción de la virtud en la sociedad, aclarando que la primera debía llevarse a cabo desde la tradición islámica del esfuerzo interpretativo que la adaptara a las circunstancias modernas, y reservando a “los hermanos coptos y del resto de las religiones del Libro” los mismos derechos y obligaciones que a los musulmanes en el Estado islámico que deseaban alcanzar. En defensa de “la virtud” se cerrarían los establecimientos de producción y venta de alcohol, así como los lugares de juego y los de diversiones pecaminosas, incluidos aquellos abiertos en nombre de la difusión del turismo. Curiosamente, se incluía en este apartado la defensa de que el Gran Jeque de Al-Azhar fuera elegido por los jeques de la institución, sin intervención de las autoridades más que en su ratificación.

Las detalladas propuestas sociales y económicas de la Coalición⁶³ llevaban la impronta estatista y socialista del PST, en abierta contradicción con los anteriores principios liberales y conservadores defendidos por el PL, y en menor medida con los de los Hermanos Musulmanes, pues estos se caracterizaban por su indefinición en materia macroeconómica y en los modos de aplicación de la justicia social islámica que defendían. Por decirlo en pocas palabras, el programa no se diferenciaba demasiado del Tagammu excepto por el tono y el vocabulario (alejado del vocabulario marxista y naserista), defendiendo la planificación estatal y el sector público (junto al sector privado), y proponiendo subidas de salarios, bajadas de precios, educación y sanidad gratuitas, programas públicos de vivienda, e incluso impuestos más elevados quienes obtuvieran

⁶³ El programa íntegro de la Coalición Islámica puede encontrarse en مرسي (1990: 315-317).

“grandes ingresos”. Finalmente, en política internacional, el programa de la Coalición tampoco se diferenciaba demasiado del programa del partido de izquierdas, excepto por la exigencia a la URSS de que se retirara de Afganistán, por el vocabulario “islámicos” en lugar de “progresista” o “panarabista” para justificar las solidaridades internacionales, y porque el rechazo de los Acuerdos de Camp David era más moderado -se pedía su congelación en lugar de su anulación- a pesar que “la lucha con el enemigo sionista” era destacada como el principal frente abierto entre los distintos conflictos internacionales.

En conclusión, cabe destacar las diferencias en profundidad y calado de los programas del Tagammu y la Coalición Islámica frente a los del Wafd y el PND así como las confluencias entre los dos primeros. Ello supuso, por un lado, que en líneas generales la campaña tuviera un tono más marcadamente político que en las elecciones de 1984 y, por otro, que por primera vez la oposición se presentara con un programa alternativo de gobierno, por muy inverosímil que su acceso al poder resultara.

5.2.3 La campaña electoral y los candidatos de la oposición

Los partidos de la oposición presentaron a muchos más candidatos que en las elecciones de 1984. El PND compitió por los 448 escaños en disputa, el Wafd por 441, la Coalición Islámica por 443, el Tagammu por 404, y el Partido de la Umma tan solo por 115. Dentro de la Coalición, 87 candidatos pertenecían a los Hermanos Musulmanes, un notable aumento respecto a los 16 presentados en 1984 en las listas del Wafd. El Tagammu, temeroso de no sobrepasar el suelo del 8% de los votos a nivel nacional, presentó a algunos de sus pesos pesados, como Jaled Mohai Eddín, Abul Ezz al-Hariri y Lutfi Waked, como candidatos individuales en lugar de en las listas del partido. Junto a los 151 candidatos presentados por los partidos en las candidaturas individuales, se presentaron 1.787 candidatos al margen de los partidos (Martín Muñoz 1992: 407-408).

Las normas que rigieron, o más bien limitaron la campaña electoral, fueron las mismas que las de la campaña de 1984, incluyendo la concesión a cada partido de 40 minutos de propaganda en la televisión y otros 40 en la radio. La campaña se desarrolló sin incidentes graves, a pesar de la agresividad manifiesta entre el PND y el Wafd, de todos los partidos hacia el Tagammu, y entre los islamistas y sus adversarios en el Alto Egipto. “Sin incidentes graves” en el contexto electoral egipcio no quiere decir sin represión, irregularidades y presiones. El Ministerio del Interior impidió en general a los periodistas de la oposición cubrir tanto la campaña como el desarrollo de las votaciones, e incluso agredió físicamente a muchos de ellos, lo que desataría las airadas críticas de la prensa de oposición (Gómez García 1991: 99; Springborg 1989: 196). Por otro lado, y por citar tan solo algunos de los acontecimientos documentados, diremos que el conocido abogado y exministro en época de Sadat, Yahia al-Gamal, denunció que le había resultado imposible

celebrar un solo mitin en Guiza, donde se presentaba como independiente, por la animosidad hacia él de las grandes familias de la zona⁶⁴; mientras que en el distrito obrero de Helwán la policía hostigó sistemáticamente a los partidos de la oposición, en particular al Tagammu, vigilando sus mítines, deteniendo a sus partidarios y arrancando a sus carteles, al tiempo que colaboraba en la preparación de los organizados por el PND (فوزي 1990: 212). Finalmente, pocos días antes de las elecciones 500 Hermanos Musulmanes fueron detenidos, acusados de organizar disturbios para el día de la votación⁶⁵. Con todo, los candidatos de la Coalición Islámica, y dentro de ella los de los Hermanos Musulmanes, fueron relativamente poco molestados, y estos últimos pudieron distribuir su propaganda electoral a pesar de las amenazas ocasionales del Ministerio del Interior, que argumentaba que al no ser una organización legal no tenían derecho a hacerlo (Martín Muñoz 1992: 411).

5.2.4 Los candidatos del PND. Entre la renovación y el clientelismo

Al igual que había hecho en 1984, y también bajo la supervisión directa de Mubarak⁶⁶, el PND renovó el 50% de sus candidaturas por listas con nuevos rostros, gran parte de los cuales pertenecían a profesores de universidad, ingenieros, abogados, médicos y comerciantes (Martín Muñoz 1992: 408). Este perfil profesional se conjugaba, sin embargo, con la pertenencia de los candidatos elegidos a las grandes familias en las zonas rurales, o en general con la popularidad personal de los candidatos⁶⁷. En ocasiones, el partido gobernante tenía difícil la elección, y no exenta de riesgo de resquemores. Así, para evitar que los candidatos rechazados se inscribieran en la lista de otros partidos, el PND anunció sus listas definitivas en el último momento, una práctica que se repetiría en ulteriores elecciones. Por otro lado, como hemos señalado respecto a las elecciones de 1984, en ocasiones la no inclusión de un candidato en las listas de las elecciones legislativas iba a acompañada de una promesa de inclusión en las de la Asamblea Consultiva o en las de los Consejos Locales. Además, en esta ocasión al PND le quedaba el recurso de proponer a los excluidos de las listas del partido (y miembros del PND) que se presentaran en candidaturas individuales, con la promesa de que aquel les apoyaría o al

⁶⁴ *Al-Ahram*, 22 de marzo de 1987. Citado por Springborg (1989: 190).

⁶⁵ *Al-Musawwar*, 24 de abril de 1982. Citado por Martín Muñoz (1992: 422).

⁶⁶ En el periódico del partido gubernamental *Mayu* del 16 de marzo de 1987, el secretario general del partido, Yusuf Wali, señaló las virtudes de todos los antiguos miembros del Parlamento, pero apuntó que la selección de los candidatos obedecía al punto de vista del presidente, “al que todos nos sometemos”. Citado por فوزي (1990: 199).

⁶⁷ Es interesante señalar el término (مفاضلة) que se utiliza en Egipto para señalar la opción final por uno de los candidatos a candidato, pues el campo semántico que transmite no solo incluye las nociones de “comparación”, “preferencia”, “favoritismo”, sino también el más específico de “comparar el valor de dos cosas, en concreto en el momento de realizar una compra”.

menos sería neutral entre los distintos candidatos del partido. Por otro lado, las grandes familias mostraban una gran flexibilidad, y aunque tuvieran preferencia en general por el PND incluyeron también a algunos de sus miembros en las candidaturas del Wafd y de la Coalición (زكريا 1990: 160-162, 171; عزمي 1990: 199).

5.3 LOS RESULTADOS ELECTORALES

5.3.1 Participación

El 7 de abril se celebraron las elecciones para las listas de partidos y la primera vuelta para las candidaturas individuales. En 33 colegios electorales (de un total de 22.000) se produjeron enfrentamientos violentos, que implicaron en particular a candidatos de los Hermanos Musulmanes y otras fuerzas islamistas en el Alto Egipto, a candidatos del PND y a las fuerzas de seguridad (Martín Muñoz 1992: 413).

Según los resultados oficiales, de los poco más de 14,34 millones de electores inscritos en el censo electoral, 7,22 millones (el 50,3%) votaron. La participación de los inscritos se había incrementado en poco menos de un 7% respecto a 1984, y dado que el número de inscritos en el censo electoral respecto al total de la población con derecho a voto (29,1 millones) lo había hecho en un 4,2%, pasando del 45% al 49,20%, el porcentaje de los egipcios con derecho a voto que lo habían ejercido había sido de menos del 25% del total, pese a lo cual se había producido un incremento del 5%⁶⁸.

Los resultados de la evolución global de la participación según los resultados oficiales eran magros para la credibilidad del régimen, tras siete años de sedicente “proceso democratizador”, pues además el crecimiento observado pudo deberse en gran medida, si se produjo, a que los Hermanos Musulmanes habían hecho una gran campaña por la inscripción en el censo electoral. No obstante, el periódico del Tagammu, *Al-Ahali*, denunció la falsedad de las cifras hechas públicas, pues según él, apoyándose en los informes de los interventores del partido, la participación no había superado el 25% de los inscritos en el censo electoral, en el que por otro lado -siempre según el periódico- figuraban millares de muertos⁶⁹.

En las grandes ciudades se mantuvo el patrón de la escasa participación, incluso según los resultados oficiales, situándose por debajo del 15% en tres de las cuatro

⁶⁸ Los cálculos de los porcentajes del número de inscritos y del número de votantes, en ambos casos con respecto al total de población con derecho voto los hemos realizado a partir de los datos totales de votantes, de inscritos, de participación de los inscritos y de volumen de la población facilitados por (الآلبي 2015; Martín Muñoz 1992: 425; CAPMAS 1986: 20, 24).

⁶⁹ Citado por Martín Muñoz (1992: 422-423), que no da la referencia del día de publicación del número al que alude.

circunscripciones de El Cairo, y en torno al 20% en Port Said y en Suez. La única y sorprendente excepción la constituyó Alejandría, donde el porcentaje de votantes fue el doble que en 1984, situándose por encima del 50% (Martín Muñoz 1992: 513). Esta novedad también puede estar relacionada con la activa campaña de los Hermanos Musulmanes, especialmente fuertes en algunos de sus barrios, al margen de que luego los resultados electorales se maquillaran en un sentido de voto distinto al favorable a la Coalición.

5.3.2 El avance electoral del Wafd y de los Hermanos Musulmanes

En las listas de partidos, el PND obtuvo el 69,6% de los votos, la Coalición Islámica el 17%, el Wafd el 10,9%, el Tagammu el 2,2%, y el Partido de la Umma un irrelevante 0,18%. En cuanto a los escaños, el PND se hizo con el 77% (308), la Coalición con el 14% (56) y el Wafd con el 9% (36). En las candidaturas independientes, el PND obtuvo 40 escaños, la Coalición 4 y los independientes 4. Hay que destacar también el gran número de votos nulos (402.559, el 5,6% del total), que reforzaría la sospecha de fraude de la oposición (Martín Muñoz 1992: 414-415).

En definitiva, respecto a las elecciones de 1984, el porcentaje de votos del PND descendió ligeramente (un 3%) mientras que su porcentaje de escaños descendió un 10% (de 87,27 a 77%). El conjunto de la oposición pasó de tener un 12,7% de los escaños a tener el 23% (100 escaños), y dentro de ella, a pesar de mantener casi el mismo número de votos, el Wafd (sin los Hermanos Musulmanes) “perdió” 21 escaños por el incremento de la participación, quedándose en 36, mientras que la Coalición obtuvo 60, cuando el PST y el PLS no habían obtenido ninguno en 1984. El Tagammu siguió fuera del Parlamento, descendiendo no solo su porcentaje de voto, sino también, significativamente (un 30%), el número absoluto de sus votantes.

Los resultados del Wafd y de los Hermanos Musulmanes pueden, sin embargo, ser vistos bajo otra óptica más positiva para ambos si se analizan los datos, aunque para ello haya que recurrir a grandes dosis de especulación, comenzando por la que supone considerar los datos oficiales reales.

Si consideramos que el Wafd había concurrido solo a las elecciones, sin el apoyo de la Hermandad, el hecho de que obtuviera 746.000 votos, tan solo 30.000 menos que con la coalición de 1984, implicaba que su apoyo electoral se había incrementado en términos absolutos, pues los Hermanos Musulmanes habrían añadido en 1987 cerca de 766.000 votos a los logrados por el PST y el PL en 1984⁷⁰. Esa cifra coincide aproximadamente -si

⁷⁰ Cálculos realizados a partir de los ofrecidos por Martín Muñoz (1992) respecto a los votos obtenidos por cada contendiente electoral. La Coalición obtuvo 1.163.758 votos, mientras que el PST y el PL habían

la comparamos con la del Wafd de 1987- con la necesaria para obtener los 34 de los 60 escaños de la Coalición que obtuvieron los candidatos de los Hermanos Musulmanes. No obstante, hay que considerar que la Hermandad solo había presentado 87 candidatos propios, siendo el resto (356) del PST y el PL, que obtuvieron, respectivamente 22 y 4 diputados (IEA 1999: 341). Como hemos señalado, cabe preguntarse en qué medida la limitación del número de candidatos de los Hermanos Musulmanes no tendría que ver con algún tipo de acuerdo con el régimen de Mubarak a cambio de que se tolerara su participación, más allá del peaje que aquellos tuvieron que pagar a PST y PL por incluirlos en su lista electoral. Si bien este tipo de acuerdos resultan inconfesables para ambas partes, pensar en una autolimitación del número de candidatos, que se repetiría en las elecciones posteriores en las que participaron los Hermanos Musulmanes sin restricciones expresas y estrictas, carece de sentido cuando la Hermandad constituía una fuerza política perfectamente capaz, en términos organizativos, económicos y de popularidad, de plantar cara electoralmente al partido gobernante en todas o casi todas las candidaturas. Puede pensarse, incluso, que la tolerancia del régimen de Mubarak a la participación electoral de los Hermanos Musulmanes no se debiera únicamente a su indudable objetivo de debilitar a las corrientes islamistas radicales mediante la integración en el sistema político e institucional de una fuerza islamista “moderada”, sino también al de debilitar electoralmente al Wafd.

Finalmente, hay que indicar que los resultados de la oposición fueron en general mucho mejores en las provincias con un componente urbano predominante. En términos de escaños, pues solo sobre ellos tenemos datos, frente a la media nacional de un 23% de votos a los partidos de oposición, en El Cairo obtuvieron el 42,8%, en Port Said el 40%, en Guiza el 34,7% y en Suez el 33,3% (Martín Muñoz 1992: 416).

El partido Wafd y la Coalición Islámica presentaron 24 recursos de impugnación de los resultados en 37 distritos electorales por diversas razones, relacionadas con el cómputo de los votos y la atribución de los escaños. Pocas semanas después de las elecciones, el Tribunal Administrativo del Consejo de Estado falló a favor de algunos de estos recursos, estimando que deberían haber sido atribuidos al Wafd y a la Coalición Islámica 17 escaños más (IEA 1988: 328). El resto de las impugnaciones seguirían un trámite judicial mucho más largo y no se resolverían hasta 1990, resultando en un fallo judicial que exigiría la anulación de la elección de 78 diputados del PND. Ambos fallos judiciales serían, sin embargo, ignorados por el Parlamento, como explicaremos más adelante (véase capítulo III 7.4).

5.4 EL APOYO DE LA COALICIÓN ISLÁMICA A LA REELECCIÓN DE MUBARAK Y LA ABSTENCIÓN DEL WAFD

La primera decisión de envergadura a tomar por el nuevo Parlamento elegido en abril de 1987 era la nominación del candidato único a la presidencia de la República, candidatura que debería ser sometida a referéndum en octubre de 1987. Si bien la reelección como candidato de Mubarak se daba por descontada, y el resultado global del referéndum también, la postura de los partidos de la oposición resultó significativa, y cabe inscribirla en el marco los resultados de las elecciones legislativas celebradas poco antes.

Por supuesto, el PND en bloque votó a favor de una nueva nominación de Mubarak. En cuanto a la Coalición Islámica, dio también su apoyo a la reelección del presidente, en consideración -según declaró- a los avances que había hecho la democracia bajo su mandato, con la esperanza de que aquellos se incrementaran y con la intención de favorecer la estabilidad y con ello superar la crisis económica (IEA 1988: 341). La Coalición adoptaba esta postura a pesar de las numerosas críticas que había hecho al sistema político y a algunos de sus aspectos fundamentales, destacando entre ellos, en lo que ahora nos interesa, la elección del presidente mediante referéndum con un solo candidato nominado por el Parlamento, pues la Coalición propugnaba la elección directa “entre más de un candidato”⁷¹. La alianza islamista recordaba, sin embargo, que la aplicación de la *charía* había de ser la primera piedra sobre la que se fundamentara la reforma política y económica.

En lo que toca al partido Wafd, su postura oficial fue abstenerse en la votación, a pesar de que, según declaró, si bien coincidía con la política exterior y “árabe” llevada a cabo por el presidente, disentía “totalmente” de su política interior. A continuación, enumeraba los muchos y esenciales puntos en los que difería, afirmando la necesidad de reformar la Constitución, de eliminar toda la legislación y los poderes de excepción, de modificar el sistema de elección del presidente por una elección directa y abierta a diversos candidatos, etc. No obstante, la declaración oficial del partido insistió en señalar que adoptaba su postura en atención a las “políticas públicas de Mubarak”, aunque su persona contaba con todo su “respeto y estima”. Frente a la postura oficial, seis diputados del Wafd votaron a favor del presidente, por lo que fueron expulsados del partido, que vio con ello su representación reducida a 30 diputados (IEA 1988: 339-340).

Finalmente, el Tagammu, aunque no disponía de presencia en el Parlamento, o precisamente por ello, y cuando menos porque la “falsificación de las elecciones” fue una de las principales razones esgrimidas, manifestó su rechazo a la reelección de Mubarak (IEA 1988: 342).

⁷¹ Programa electoral de la Coalición (مرسي 1990: 306-307).

Para un observador un poco exigente, el voto de confianza de la Coalición Islámica a Mubarak parecía derivado de los satisfactorios resultados obtenidos por aquella en las elecciones antes que por los avances de la democracia en tanto que “sistema”. Los acontecimientos que se habían producido durante las elecciones, e inmediatamente tras ellas y hasta la celebración del plebiscito, no parecían augurar el comienzo de una nueva era en las reglas del juego político: desde los comicios, diversos periodistas habían sido detenidos -y algunos golpeados- por las fuerzas de seguridad, y en los días previos al referéndum un número de *Al-Ahali* en el que se expresaba el rechazo del Tagammu a la reelección de Mubarak había sido secuestrado tras salir de la imprenta (IEA 1987: 356).

En lo que toca al Wafd, su abstención revelaría también -según esta lógica escéptica amparada en el conocimiento de las posturas posteriores de los partidos- su relativa satisfacción por los resultados de las elecciones, habida cuenta de los argumentos negativos que imputaba en el “debe” del balance político de la actuación de Mubarak y de la disidencia de los 6 diputados que decidieron apoyarle.

Los propios resultados del plebiscito tampoco avalaron la impresión de que se estaba produciendo un cambio estructural. Recordaban demasiado a los de los comicios de los viejos tiempos de Náser y Sadat: la candidatura de Mubarak obtuvo, según los resultados oficiales, un 95,08% de votos favorables de los 12,44 millones de votos válidos, y un 91,12% del total de los votos emitidos, mientras que el porcentaje de votos desfavorables (357.000) fue tan solo del 2,88% de los votos válidos.

6. LA PERSISTENCIA DE LA CRISIS ECONÓMICA DE RAÍZ FINANCIERA

6.1 EL AJUSTE ESTRUCTURAL APLAZADO

Como hemos apuntado en el capítulo III 3.3, a finales de 1986 Egipto se encontraba al borde de la bancarrota, a causa sobre todo del descenso de un 50% de los precios del petróleo, que llevó aparejada una reducción similar de los ingresos derivados de él (incluyendo el Canal de Suez). El país no podía financiar sus importaciones, y, para empeorar las cosas, la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), que desde hacía dos años dirigía su ayuda principalmente al sector privado, había decidido congelar una subvención de 265 millones de dólares hasta que Egipto no emprendiera una reforma estructural de su economía pactada con las instituciones financieras internacionales (Soliman 2011: 38-44). El Gobierno cedió aparentemente a las presiones, y en mayo de 1987 anunció la firma de un acuerdo de confirmación (*standby agreement*) de 18 meses según el cual obtendría un préstamo del FMI y otras líneas de crédito que prepararían el camino para la reducción de 12.000 millones de los 40.000 que constituían la deuda exterior egipcia. En contrapartida, el Gobierno debería seguir las rectas clásicas del FMI (Springborg 1991: 255-260).

En 1987 la libra egipcia fue devaluada, y el presupuesto oficialmente destinado a los subsidios a bienes de consumo para el año siguiente congelado en 1.700 millones de LE, si bien los expertos estimaban el montante de los “subsidios encubiertos” en cuatro o cinco veces más (7.000 u 8.000 millones en 1985-1986) (Springborg 1991: 260). Sin embargo, una vez que se hubo embolsado el dinero de los préstamos y créditos internacionales iniciales, el Gobierno egipcio adoptó pocas medidas de ajuste, e incluso incrementó su gasto público en beneficio de los salarios antes que de las subvenciones básicas⁷². Lo cierto es que el régimen temía las consecuencias sociales y políticas que pudieran tener las medidas de ajuste en una época en la que no hacía mucho que se había producido la revuelta de los reclutas de la Seguridad Central y numerosas protestas laborales, y en la que el islamismo radical volvía a estar en ebullición. Además, la devaluación de la libra (a la que se sumaba el impuesto inflacionario de la constante emisión de moneda) había hecho pasar la inflación de los precios de los alimentos básicos

⁷² El gasto público en porcentaje sobre el PIB descendió desde 1987 a 1989 del 60% a menos del 40%, pero desde 1989 volvió a subir, situándose en el 50% en 1991. Por su parte, el porcentaje del gasto en subsidios sobre el total de gastos del Estado, que había descendido del 12% al 6% entre 1985-1986 y 1986-1987, subió al 8% en 1987-1988, para luego volver a declinar. Por el contrario, el porcentaje del gasto en salarios sobre el total del gasto público continuó aumentando lentamente, hasta alcanzar el 19% en 1990-1991 frente al 17% en 1982-1983 (Soliman 2011: 47, 58, 60).

de un 20% en 1986-1987 al 40% en 1987-1988.

Ante el insuficiente cumplimiento de los acuerdos por parte de Egipto, a los 18 meses las instituciones crediticias internacionales suspendieron también sus ayudas y promesas. Ello supuso que, pese a un ligero repunte de los precios del petróleo, a finales de la década Egipto se hubiera convertido, en palabras de Soliman (2011: 44), en “un mendigo internacional”, y a que en 1990, cuando el Estado dejó de pagar sus deudas internacionales, su situación económica fuera definida por el Banco Mundial, más comedidamente, como “precaria”. Ante esta situación, en marzo de 1990 el Gobierno comenzó a tomar nuevas medidas unilaterales de ajuste, y en mayo de 1991 firmó un nuevo acuerdo con las instituciones financieras internacionales más exigente por parte de estas. A diferencia de la ocasión anterior, Egipto adoptaría desde 1991 medidas de reforma estructural continuadas, aunque lo hiciera a un ritmo pausado gracias a la inesperada ayuda de la sustantiva reducción de su deuda internacional (más de un 70%) que le fue concedida como recompensa por su participación en la Guerra del Golfo contra Irak en las filas de la coalición internacional.

6.2 EL AUMENTO DEL PARO Y DE LA POBREZA

Según la agencia oficial egipcia de estadísticas (CAPMAS), el porcentaje de paro alcanzó en el año 1989-1990 el 8,9% del total de la población. Según la OIT, dicho porcentaje era del 15% (IEA 1990: 518-519). Los índices de paro siempre son controvertidos según los criterios de medición, y mucho más en los países en vías de desarrollo en los que, como en Egipto, ni dichos criterios ni la validez de las cifras parciales son siempre claros, entre otras varias razones por la existencia de un gran sector informal y por la amplia ocupación familiar en la agricultura de subsistencia. Además, dichos criterios son a veces modificados de manera sustancial por una misma instancia oficial, como hizo CAPMAS a partir de 1987. No obstante, intentaremos dar una idea de las cifras globales del paro, interesándonos más en señalar sus tendencias y algunos datos parciales, que son menos controvertidos.

Según las cifras oficiales, el porcentaje de paro en Egipto en 1980 era del 10%, y en 1985 del 15% (Fergany 1991: 42-43). No obstante, como hemos mencionado, para 1989-1990 CAPMAS estimaba un porcentaje de desempleo de tan solo el 8,9%, un descenso solo atribuible al cambio en los criterios de medición, como sostiene el *Informe Estratégico de Al-Ahram*, que contrastaba con el 15% estimado por la OIT. Si consideramos esta última estimación, el paro se habría mantenido estable entre 1985 y 1989-1990 tras haber aumentado considerablemente entre 1980 y 1985. No obstante, incluso esa hipótesis resulta dudosa en un contexto de grave crisis económica, y más si tenemos en cuenta que tan solo de 1988-1989 a 1989-1990 la propia CAPMAS había

señalado un incremento del paro del 8,1% al 8,9%, (IEA 1990: 518-519).

Más sólidos y muy reveladores son los datos que indican la incidencia del paro según la franja de edad y el nivel de estudios, que revelan que afectaba sobre todo a los jóvenes, y entre ellos a los jóvenes con más estudios. Según Asaad -que utiliza un criterio restringido de medición del desempleo en general- en 1988 los porcentajes de paro entre los jóvenes de 15 a 19 y de 20 a 29 años -considerados todos ellos en edad de trabajar- eran el doble o casi el doble, respectivamente, de la media nacional⁷³. El paro era mucho mayor, sin embargo, entre los jóvenes con estudios. Según los datos oficiales, en dicho año el 19% de los jóvenes universitarios menores de 30 años estaban en el paro, y el porcentaje se elevaba al 22% entre quienes tenían una formación post-Secundaria y al 28% entre quienes habían cursado estudios técnicos de Secundaria. Estos porcentajes duplicaban el porcentaje de paro entre los jóvenes con menos estudios (Amer 2011: 756).

Los datos anteriores no estarían completos sin mencionar que la población de 15 a 29 años representaba el 28,8% (13,75 millones de personas) de la población total (60,5 millones), y de ella solo la de 20 a 29 años (8,33 millones) constituía el 16,9% de la población (Asaad 2002: 61-63, 55-56).

En definitiva, más allá de la precisión exacta de las cifras, podemos afirmar que el índice de paro creció de manera considerable en el conjunto de los años 80, y que se cebó en particular en los jóvenes con mayor nivel de estudios, siendo el de los jóvenes en general también mayor que la media nacional. Esta evolución diferenciada del incremento del paro según los grupos de edad y el nivel de educación respondía al mantenimiento de la estabilidad en el empleo, confirmado por la Ley 48 de 1978 para los trabajadores del Estado e imitado por el sector privado, al menos en las empresas medianas y grandes (Clement 2011: 595).

Aunque tal vez no muy diferente de la de muchos otros países -incluidos los de economías avanzadas-, y atribuible en parte al aumento del porcentaje de población con estudios medios y superiores en las décadas anteriores⁷⁴, esta evolución, ya iniciada en la década de los 70, adquiriría caracteres a veces dramáticos en un país como Egipto, en el que tanto el ingreso en el mercado de trabajo (por razones económicas) como el acceso al matrimonio (por razones socioculturales) debían producirse tempranamente. Sin duda, estas circunstancias influyeron en que los jóvenes estudiantes se mostraran como uno de los sectores más proclives a la rebeldía política en la segunda mitad de los años 80, sobre todo mediante su adhesión a las corrientes islámicas.

En cuanto a las condiciones de vida, entre 1982 y 1990 los ingresos reales per

⁷³ Asaad (2002: 61) utiliza la Extended Labor Force Definition, que excluye, por ejemplo, la mano de obra familiar no remunerada en labores como la agricultura de subsistencia. Según este criterio, el índice de paro global era del 5,4%, el del sector de 15 a 19 años del 11,1% y el del sector de 20 a 29 años del 10,4%.

⁷⁴ En 1988 el 41,3% de los jóvenes entre 15 y 34 años tenían estudios medios o superiores (Amer 2002: 229-232).

cápita bajaron a un ritmo del 3% anual, mientras que el índice de la pobreza, que en 1982 alcanzaba a entre el 23% y el 30% de la población tanto en las ciudades como en el medio rural, pasó en 1990 a situarse entre el 35% y el 40% (Clement 2011: 617). Por otro lado, para 1990 el Banco Mundial estimaba en el 0,32 el índice GINI el grado de desigualdades económicas en el país, siendo este el primer año para el que aporta datos al respecto. No obstante, otros estudios apuntan a un incremento impreciso de las desigualdades entre 1982 y 1990⁷⁵.

En conclusión, la situación económica de la mayoría de la población se deterioró en los años 80, pero lo hizo de manera desigual. Los datos sobre la evolución del empleo, la pobreza y las desigualdades muestran un importante incremento del paro -más destacado entre los jóvenes y más destacado entre los jóvenes más educados-; un notable incremento de la pobreza y al menos un ligero incremento de las desigualdades. Aunque estos datos son atribuibles en última instancia a la crisis económica, también deben ser puestos en relación con las opciones de economía política del régimen de Mubarak. Dentro del deterioro general de las condiciones de vida, los más perjudicados fueron los sectores más pobres y los jóvenes, los menos influyentes políticamente, al menos en primera instancia.

Por otra parte, como hemos señalado en diversos apartados anteriores, los Gobiernos de Mubarak fueron disminuyendo la oferta de empleo público al tiempo que se preocuparon de mantener ligeros incrementos en los salarios de los trabajadores públicos en general, y notables incrementos en los salarios en los altos escalafones del empleo estatal. No obstante, quienes conocieron aumentos salariales regulares pero reducidos sufrieron un descenso de su nivel de vida originado por el incremento de la inflación -en gran parte engrosada por la emisión masiva aunque callada de moneda, esa conocida como “impuesto inflacionario” ya explicada- y por la discreta pero constante reducción de las subvenciones a los productos de primera necesidad.

6.3 EL FIN DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN “ISLÁMICAS”

Una de las escasas medidas de reforma económica adoptadas como consecuencia de la firma del acuerdo con el FMI y el BM firmado en 1987 fueron las que acabaron con las “sociedades de inversión islámicas”, un objetivo buscado por algunos sectores del régimen por razones económicas y políticas desde algunos años antes. Estas compañías,

⁷⁵ Índice GINI de 1990 en The World Bank: *Gini Index (World Bank Estimate*, en internet <http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?page=4>, consulta del 20 de septiembre de 2015). El Banco Mundial no ofrece estimaciones del índice GINI de Egipto para años anteriores a 1990. Clement (2011: 617) apunta un índice GINI calculado a partir de los gastos de consumo de los hogares de 0,32 en 1982 y, si bien para 1990 no da ningún dato, para 1995 da un índice, según los mismos criterios, del 0,35.

que habían proliferado en Egipto desde 1974 gracias a las nuevas leyes del *infatih* que facilitaban la formación y desarrollo de sociedades de inversión de capitales (شركات توظيف الأموال), se denominaban “islámicas” porque pretendían cumplir con los principios del islam en materia económica, y en particular con la prohibición de la usura, aunque pagaban dividendos cuatro veces superiores al interés de los depósitos en los bancos “seculares”. Para muchos expertos, el cumplimiento de dichos principios por parte de tales empresas, como el de los llamados “bancos islámicos”, tan solo podía ser reconocido de manera muy vaga y siguiendo criterios poco estrictos (Ayubi 1991: 249-278). Pero, de cualquier manera, la etiqueta “islámica” sirvió para atraer a cerca de un millón de egipcios a estas sociedades de inversión desde 1974 hasta mediados de los 80.

La mayoría de los inversores eran egipcios de las clases medias que habían acumulado pequeños ahorros, a menudo trabajando en el extranjero. En cuanto a las empresas, en 1986 había 18 que eran de propiedad individual y 150 que operaban como compañías por acciones de responsabilidad limitada. En lo que respecta a los propietarios y gestores de las empresas, entre ellos se contaban personajes “hechos a sí mismos”, como Mohammed Achraf Saad, presidente del Grupo Saad, o Fathi Taufiq Abdel Fattah, conocido como Ahmad al-Rayyán, presidente del Grupo Al-Rayyán; miembros o exmiembros de la burguesía de Estado; y algunos miembros de los Hermanos Musulmanes o de otros grupos islamistas, como la compañía conocida como Al-Charif, fundada por un “hermano musulmán” encarcelado por Náser en 1965, o la compañía Talía al-Iman, fundada por el hijo de otro “hermano” ejecutado en 1954 (Springborg 1991: 47-49).

La mayoría de las inversiones de estas empresas eran realizadas en el exterior, y gran parte de ellas estaban relacionadas con la compra-venta de divisas -en gran parte en el mercado negro- y con la especulación con ellas. Así, cuando tras la firma del acuerdo de ajuste estructural en 1987 el Gobierno detuvo a 150 grandes comerciantes de moneda extranjera en el mercado negro, la mayor parte de ellos trabajan para las compañías de inversión islámica (Springborg 1991: 258).

Pero el objetivo económico del Gobierno no era solo acabar con el mercado negro, sino también “recuperar” las divisas aportadas por los inversores, que escapaban a su control (al del sistema bancario, mayoritariamente estatal) y se orientaban a la economía especulativa, amén de ser invertidas o depositadas casi siempre en el exterior. Así, desde principios de los años 80, buena parte de los pequeños ahorradores o, como los denomina Abdel Fadil, el “sector familiar” del ahorro, empezaron a sacar sus ahorros de los depósitos de los bancos, atraídos por los dividendos del 22% que pagaban dichas empresas y que eran pagados cada mes de manera regular (عبد الفضيل 1989: 15). Los activos tan solo de Al-Rayyán, considerada la mayor compañía, con 300.000 inversores, se estimaban en 1986 en 6.500 millones de LE.

A estos objetivos político-económicos podría haberse añadido otro político

colateral, pues algunas de esas compañías eran sospechosas de financiar el renacer social y político del islamismo con el apoyo de sus afines de la burguesía local y de los trabajadores en el extranjero, apoyados en sus amplias conexiones en el exterior que explicarían el rápido éxito de muchas de ellas. Estas acusaciones venían de la izquierda, y en concreto de *Al-Ahali*, órgano de prensa del Tagammu, desde donde se acusó a algunas de estas compañías de financiar las campañas de los candidatos islamistas independientes en 1987, e incluso de la compra de armas desviadas al islamismo radical. Sin embargo, oficialmente la mayor parte de las compañías declaraban su apoyo a Mubarak (Springborg 1991: 49).

Por su parte, el gobernador del Banco Central, Ali Nigm, nombrado en marzo de 1985 y que estaba determinado a controlar las compañías islámicas, esgrimía argumentos económicos, el principal de los cuales era que tales compañías eran escasamente fiables y funcionaban según esquemas “piramidales”, es decir, que los dividendos pagados proceden en realidad de los propios depósitos inmovilizados de los inversores, y no de cualquier tipo de beneficio real de la compañía. El celo de Nigm, sin embargo, encontraba poco eco en el Gobierno y en el Parlamento, que se resistía a promulgar una legislación que restringiera las actividades de las compañías, por lo que el propio Nigm se encargó de que todos los sectores económicos y mediáticos tuvieran noticia de que en el verano de 1986 el Grupo Al-Rayyán había perdido 100 millones de dólares especulando con oro por medio del Morgan Guaranty Bank. Poco después, el 9 de noviembre, apareció en la prensa estatal la noticia de que se había prohibido a ocho propietarios de cuatro compañías de inversión abandonar Egipto, “a causa de la inestabilidad de dichas compañías en los últimos tiempos”, y de “las grandes pérdidas sufridas por una de ellas especulando con moneda extranjera”. Ese mismo día, 2.000 depositantes se reunían ante las oficinas de Al-Rayyán exigiendo la devolución de sus depósitos (Springborg 1991: 55-56).

Al-Rayyán respondió lanzando en la prensa privada y estatal una gran campaña publicitaria que afirmaba la solidez de sus negocios y su injusta persecución, consiguiendo, además, que parte de la prensa estatal, además de los órganos de prensa del Wafd, el PST y el PL se pusieran de su lado y de las compañías de inversión islámicas en general. Poco después dimitían el presidente del Gobierno, Ali Lutfi, y el gobernador del Banco Central, Ali Nigm. El presidente del grupo, el mencionado Fathi Abdel Fatah/Ahmad al-Rayyán, se había dirigido además a Yusuf Wali, vicepresidente del Gobierno y secretario general del PND, para que transmitiera a Mubarak sus quejas. Wali había sido el elegido porque era el encargado por el presidente de conocer las respuestas de la sociedad a sus políticas, y en particular las del propio partido y sus apoyos sociales. Ante el informe de Wali, y habida cuenta de la crisis económica y de la proximidad de las elecciones, Mubarak y el Gobierno parecieron ceder. Sin embargo, tras aquellas y la firma del acuerdo de 1987 con el FMI, el nuevo Gobierno dirigido por Atef Sidqi, además de detener a algunos de los grandes comerciantes de divisas en el mercado negro, lanzó grandes campañas de prensa -incluso a

los países del Golfo- exhortando a los ahorradores a depositar sus ahorros en los bancos egipcios, que daban intereses “realistas”, y anunció que las compañías de inversión serían sometidas a controles mucho más estrictos (Springborg 1991: 56-60).

Finalmente, en agosto de 1988 sería promulgada la Ley 46 sobre las Sociedades de Inversión de Capitales, que imponía un control estricto sobre las cuentas de las compañías de inversión, control que resultaría en el descubrimiento de que los depositantes habían perdido un tercio de sus depósitos pues estos se habían empleado en pagarles a ellos mismos unos dividendos que, formalmente, eran “adelantos sobre los beneficios”, pero tales beneficios no se habían producido en medida suficiente para pagar los dividendos. Poco después se prohibió a las sociedades de inversión operar hasta que fueran convertidas en empresas de accionariado colectivo corrientes, y poco a poco fueron abandonadas por gran parte de los inversores. Ahmad al-Rayyán sería condenado a 23 años de prisión en 1989.

Para el economista de orientación marxista Mahmud Abdel Fadil, que tituló su obra dedicada al estudio de las sociedades de inversión y a la actuación del Gobierno frente a ellas *El gran engaño financiero* (عبد الفضيل 1989), la aparición y el desarrollo de las sociedades de inversión islámicas fue parte inseparable del “fenómeno infitahista” y de la “época petrolera”, guiados por la economía rentista y especulativa, y la respuesta del régimen ante el desarrollo de las sociedades de inversión estuvo motivada más por controlar él mismo la tenencia o inversión de capitales -como indicaba el nombre de la ley de 1988- que porque tuviera una visión muy diferente de aquellas acerca del uso que se debía dar a tales capitales (págs. 147-152). Para Ayubi (1991: 268-269), la aparición de estas empresas tuvo poco que ver con un impulso organizado de los movimientos islamistas -algo a lo que Abdel Fadil ni siquiera concedió atención- sino más bien con el desarrollo de la burguesía mercantil nativa, que tendió su mano al movimiento islámico para conseguir mayor legitimidad. De ahí sus apoyos entre numerosas figuras o exfiguras influyentes del Gobierno y del régimen e incluso de la oposición, aunque estuvieran lejos de ser islamistas.

En síntesis, lo que se deduce es que la pugna con las sociedades de inversión fue en gran medida una pugna por garantizar la autonomía del Estado (vía control de los recursos financieros) promovida por su sector burocrático frente a los avances de la burguesía.

7. EL RÉGIMEN ANTE EL DESAFÍO DE LA DESLEGITIMACIÓN

A juzgar por la evolución de la situación política en los tres años siguientes, las elecciones de 1987 no cumplieron, más allá de la satisfacción relativa de los principales actores por los resultados obtenidos, con los objetivos a medio plazo que cada uno de ellos se había fijado. El régimen de Mubarak consiguió la mayoría cualificada (dos tercios) que necesitaba para hacer y deshacer cualquier cosa según la Constitución, así como que la principal fuerza de oposición, la Coalición Islámica, diera su apoyo a la reelección de Mubarak y que la segunda, el Wafd, no se opusiera. Pero no consiguió reducir la pujanza del islamismo radical ni apaciguarlo, ni que las fuerzas de oposición legales o toleradas cesaran en sus demandas de “más apertura” y “más democracia”, y siguieran elevando el tono de sus críticas.

En cuanto a los partidos de la oposición, les resultó patente que la apertura política y las libertades públicas seguían teniendo límites muy estrechos, más incluso de los que habían conocido en los años anteriores, pues el Gobierno se mostraba más agresivo con ellos a través de su ministro del Interior y las fuerzas de seguridad. Esta actitud del régimen provocó que comenzaran a menudear los posicionamientos en común de los partidos frente al poder, cuyo colofón sería el boicot de todos ellos, con la significativa excepción del Tagammu, a las elecciones legislativas de 1990.

7.1 EL RESURGIR DEL ISLAMISMO ARMADO

7.1.1 Declaración de intenciones del islamismo radical

La evidente pretensión de Mubarak de reducir el ascendente del islamismo radical entre la población, y en particular entre los jóvenes, mediante la consolidación de la presencia de los Hermanos Musulmanes en el Parlamento, no quedó sin respuesta por parte de los dirigentes yihadistas, que había irrumpido en la campaña electoral mediante un comunicado firmado por la Gamaa Islamiyya⁷⁶.

Lo primero que debemos indicar es que no está clara la autoría del comunicado por parte de la que debería considerarse con propiedad “la” Gamaa Islamiyya. En el comunicado, firmado por “la Gamaa Islamiyya”, no figuraban firmas personales. Sin embargo, a pesar de que en los medios de comunicación seguía utilizándose el término

⁷⁶ بيان الجماعة الإسلامية (“Comunicado de la Agrupación Islámica”) (عبد الله 1990: 318-320).

genérico de *gamaat islamiyya*, en plural, para referirse sin discriminar a los diversos grupos islamistas radicales, la Gamaa Islamiyya propiamente dicha era entonces aquella que procedía de las fundadas y unificadas en el Alto Egipto, y dirigidas a finales de los años 70 por Karam Zuhdi, Nayeh Ibrahim, Esam Dirbala y Fuad al-Dawalibi, detenidos tras el asesinato de Sadat o anteriormente y que en 1987 se encontraban en prisión. En esta fecha, la Gamaa contaba con nuevos dirigentes fuera de prisión, el más destacado de los cuales era Safwat Abdel Gani, y muchos de ellos se habían trasladado o viajaban frecuente a El Cairo y en general al norte de Egipto, hasta conseguir hacerse con el liderazgo de todas las antiguas *gamaat islamiyya*. Sin embargo, como veremos, los primeros atentados políticos no fueron cometidos por la Gamaa Islamiyya.

La segunda cuestión a destacar es que manifestaba el rechazo del sistema político vigente y de la participación de los islamistas en él común a todos los grupos islamistas radicales, pero sobre todo vertía amenazas que pronto se materializarían.

A diferencia de otros textos del islamismo radical, en este las referencias al rechazo de la democracia liberal como concepto eran relativamente reducidas (“pretenden votar en el Parlamento si se aplica la ley de Dios o no, y eso implica enfrentarse a Dios”), mientras que abundaban las que denunciaban la manipulación instrumental por parte del régimen del concepto de democracia. Con el juego electoral y el juego democrático el régimen vigente no pretendía, según el comunicado, más que instilar la idea de que “el cambio” llegaría mediante la Constitución y el Derecho, cuando había quedado demostrado una y otra vez que dicho régimen era “el primero en pisotear ambos si se oponían a sus intereses y a su continuidad”. Por su parte, los islamistas que participaban en el juego electoral reconocían, en opinión de los firmantes anónimos, “la legitimidad del régimen *yahilī*” y “colaboraban a limpiar su sucia imagen”. Finalmente, el texto afirmaba: “La libertad no se otorga, se toma. Se arranca de quienes la han usurpado”, y presentaba una declaración de intenciones:

“La instauración de la ley de Dios no llegará sino mediante la supresión del régimen *yahilī*, y la extirpación de su cabeza no se producirá sino de la manera que conocían bien Jaled al-Islambuli y sus compañeros. Deseábamos que algunos islamistas [إسلاميين] comprendieran esta realidad, pero desgraciadamente han decidido seguir transitando un camino sin salida” (مرسي 1990: 319).

7.1.2 La espiral de la violencia y sus causas

La seriedad de las amenazas vertidas en el comunicado no tardó en hacerse evidente. Menos de un mes después de las elecciones, el 5 de mayo de 1987, dos hombres armados atentaban contra Hasan Abu Bacha, ministro del Interior entre 1982 y 1984, hiriéndolo; un mes después, el 6 de junio, otro atentado buscaba acabar con la vida de Makram Mohammed Ahmad, director de la revista *Al-Musawwar* y uno de los principales confidentes de Mubarak; finalmente, el 13 de agosto, el destino de las balas de los

islamistas era Mohammed al-Nabawi Ismail, ministro del Interior entre 1977 y 1982. Los objetivos de los atentados no habían sido elegidos al azar: Ismail y Abu Bacha -ambos generales de la Policía- habían dirigido la represión contra los militantes islamistas en la década anterior, con el recurso generalizado a la tortura, y Ahmad se había distinguido por exigir mano dura con los militantes. Aunque en principio se acusó a la Gamaa Islamiyya de su autoría, finalmente los atentados contra los ministros fueron atribuidos a un grupo autodenominado Al-Nayún min al-Nar (الناجون من النار, “Los supervivientes del infierno”, en clara alusión a la prisión y las torturas sufridas en ella) y el tercero a otro denominado Al-Chauqiyyún, en alusión su líder Chauqi al-Cheij. Ambos grupos eran *tafkiríes*, y por tanto alejados de la Gamaa Islamiyya.

A pesar de la condena de los atentados y las llamadas a la calma realizadas por los Hermanos Musulmanes, por el Gran Jeque de Al-Azhar y por numerosas personalidades religiosas, a partir de este momento la violencia entre los militantes islámicos radicales y las fuerzas de seguridad no dejó de incrementarse gradualmente a lo largo de una década. No obstante, la espiral de esta violencia había comenzado antes, y en ella había desempeñado un papel destacado la actitud del Ministerio del Interior desde que aquel fue asumido por Zaki Badr, a principios de marzo de 1986, como ya hemos apuntado en el capítulo III 4.2. Ciertamente es que, animados por el clima de apertura política y por la relajación de la política de seguridad, algunos militantes islamistas habían comenzado a practicar la violencia que consideraban legítima “en defensa del islam”, en forma de destrucción de locales “pecaminosos”, enfrentamientos con los coptos ante sus “excesos”, imposición de sus normas en las universidades y resistencia a la policía cuando restringía su margen de acción. Pero los métodos de Zaki Badr para contener al islamismo radical, incluso en sus manifestaciones pacíficas, no hicieron, según la oposición, todos los observadores y los propios militantes radicales, más que echar leña a las brasas del rencor de aquellos hacia las fuerzas de seguridad, que si no estaban apagadas sí estaban adormecidas.

Tan solo unas semanas después de asumir Badr su cargo, a principios de marzo de 1986, el jeque Omar Abdel Rahmán debía pronunciar un sermón en la mezquita de Al-Rahmán de Asuán. Cuando llegó allí el jeque, un fuerte destacamento policial rodeaba la mezquita para impedir su acceso y el de sus seguidores. Tras algunos forcejeos y amenazas de la policía, Muntasir al-Zayyat, uno de dichos seguidores a quien hemos citado abundantemente en el capítulo II, negoció con el director de Seguridad de Asuán para que el jeque pudiera pronunciar un sermón de diez minutos, a lo que aquel accedió. Una vez dentro de la mezquita, los fieles se vieron sorprendidos por la irrupción de la policía arrojando gases lacrimógenos. Decenas de ellos fueron detenidos y llevados a la Fiscalía bajo la acusación de resistencia a la autoridad. Escenarios similares se repitieron en

diversas mezquitas de los islamistas del Alto Egipto⁷⁷, algunas de las cuales, como hemos apuntado ya, fueron destruidas por la policía.

Zaki Badr había anunciado que “no habría sermones de extremistas”, y su política de impedir que aquellos se produjeran soliviantó a los militantes. Pero, en opinión de Al-Zayyat, el punto de no retorno se produjo tras la muerte de un activista a consecuencia de los violentos enfrentamientos que se produjeron el 31 de octubre de 1986 tras la salida de la oración del viernes en Asiut. Ante la gravedad de las heridas del joven, y consciente de la explosividad de la situación, Mubarak había enviado un avión privado para que lo trasladara al hospital de Maadi en El Cairo. Tras los infructuosos intentos por salvar su vida, Mubarak intentó un nuevo gesto de apaciguamiento, al ordenar que se pagara a la familia del fallecido, a cargo de los presupuestos del Estado, la peregrinación a La Meca (الزيات 2005: 243-244).

Mubarak debía ser, o debería haber sido consciente también, de que en el Alto Egipto, junto a la ideología islamista, seguía muy viva la tradición de la venganza de sangre⁷⁸ y que para frenar la previsible espiral de violencia se requerían medidas de choque inmediatas. Pero, por las razones que fuera, no pondría coto hasta 1990 a las acciones de Zaki Badr. El ministro, que afirmó nada menos que en la mezquita de Adam de Ain Chams, cuyo control había arrebatado a los islamistas previamente, que iba a seguir la política del “golpe en la yugular” (الزيات 2005: 250), sería acusado recurrentemente de ordenar ejecuciones extrajudiciales y de arrestar a los familiares de los perseguidos por la justicia. Entre julio de 1988 y febrero de 1989 fueron abatidos por la policía en El Cairo en tres acciones distintas cinco militantes supuestamente implicados en delitos graves, uno de ellos evadido de prisión, y los otros cuatro sospechosos de haber asesinado, el 8 de diciembre de 1988, a un miembro de la Policía Judicial en El Cairo. Al menos tres activistas más habían muerto en 1988 en enfrentamientos con la policía tras manifestaciones y actos de protesta, o a causa de los cercos a las mezquitas y las universidades, que por otro lado originaron miles de detenidos, cientos de heridos y torturas sistemáticas, al menos según denunciaban los detenidos. Tan solo los

⁷⁷ Todas las mezquitas erigidas por los islamistas llevaban el nombre de “mezquita de Al-Rahmán”

⁷⁸ El *ثار*, *zaar*, o “venganza de sangre”, es una costumbre de origen preislámico, cuando el *zaar* era una institución por todos reconocida, exponente de la concepción tribal árabe de la justicia en la época. Es una costumbre que se ha mantenido hasta hoy en las formaciones sociales tribales de origen árabe o derivado. La jurisprudencia islámica y también luego los Estados han intentado, sin éxito, proscribir totalmente el *zaar* en los lugares en los que se práctica, que en Egipto se reducen prácticamente al Alto Egipto. Además de a la aplicación de la justicia ordinaria, el Gobierno egipcio recurre a la constitución de “consejos de reconciliación”, en los que se reúnen los ancianos de las tribus implicadas y otros que actúan como intermediarios y árbitros. Los islamistas inclinados a la venganza personal por tradición social -como sin duda los eran muchos de los jóvenes del Alto Egipto- siempre pueden argüir que ellos recurren a *al-qusás* (القصاص, “castigo”), sí reconocido por el Corán, y que en su formulación coránica parece muy similar a la Ley del Talión, aunque los jurisperitos hayan insistido siempre en la necesidad de que se aplique recurriendo a tribunales legítimos, guardando la proporcionalidad, etc.

enfrentamientos de El Fayyum de principios de abril de 1989, que duraron varios días y en los que se vio implicado de nuevo Omar Abdel Rahmán, llevaron a la detención de más de un millar de personas, según anunció el propio Zaki Badr, quien el 16 de diciembre del mismo año escapó de una tentativa de asesinato⁷⁹. Los islamistas, según la policía y la prensa, eran los responsables de la violencia extrema, pues acudían a las actividades que organizaban armados de cuchillos, cadenas y cócteles molotov.

7.2 EL FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

El mandato del general Zaki Badr en el Ministerio del Interior tuvo un impacto singular no solo en las relaciones entre el régimen de Mubarak y el islamismo radical, sino también en las que mantenía el Gobierno con el resto de las fuerzas de la oposición y con la sociedad en general, e incluso en las del propio Ministerio con otras instituciones del Estado. El fortalecimiento del papel del Ministerio en el entramado del régimen de Mubarak y en el conjunto de la vida pública, consentido sino buscado por el presidente, será el legado de fondo del mandato de Badr, más allá de su cese en enero de 1990.

Durante dicho mandato, las fuerzas marxistas ajenas al Tagammu, como los miembros del ilegal Partido Comunista Egipcio, conocieron una redoblada atención de las fuerzas de seguridad, que detuvieron sistemáticamente a los militantes que se aventuraban a distribuir panfletos políticos o a intentar hacer proselitismo.

Por otra parte, numerosos abogados, en particular los defensores de los militantes islamistas, fueron detenidos y hostigados por la policía, lo que provocó la convocatoria de una huelga a nivel estatal por parte del Consejo de Dirección del Sindicato de Abogados en junio de 1987 (IEA 1988: 354).

No obstante, fueron los periodistas el colectivo profesional con el que el enfrentamiento de Badr fue mayor. El impedimento de ejercer su profesión, y las recurrentes agresiones físicas a algunos de ellos por parte de la policía, e incluso los frecuentes insultos personales del ministro⁸⁰, desembocaron en un encierro en la sede del sindicato a mediados de diciembre de 1987, en un comunicado de su Consejo de Dirección que denunciaba “las repetidas ofensas del ministro del Interior”, y en una recogida de firmas para un texto similar de quejas que fue enviado al presidente de la República (IEA 1988: 356).

No menos agresiva fue la actitud de Badr con los partidos de la oposición y otras

⁷⁹ Los datos proceden de la Cronología de la RPE, números 30-38 (1988-1989).

⁸⁰ El 18 de noviembre de 1987, por ejemplo, Badr tachó al miembro del Consejo de Dirección del Sindicato, el islamista Mohammed Abdel Qaddús, en presencia de este, de “mentiroso e hijo de mentiroso”, antes de pasar a proferir insultos más gruesos, que no reproducimos, ante la reacción airada de aquel (Springborg 1989: 127).

fuerzas políticas. Los insultos a sus dirigentes fueron constantes desde el principio de su mandato, tanto en la prensa como en el Parlamento, donde en 1989, tras dirigirlos contra Fuad Serag Eddín, presidente del Wafd, se enfrentó físicamente a Talaat Raslán, diputado de este partido que había salido en defensa de su líder, abofeteándolo y golpeándolo con su zapato. Hasta tal punto llegaba la impunidad de Badr que a raíz de este suceso la mayoría del PND en el Parlamento retiró a Raslán su condición de parlamentario (IEA1989: 387).

Pero lo más sorprendente de la actitud de Badr -o más bien de Mubarak, que lo mantuvo en el Gobierno durante casi cuatro años- es que los ataques del ministro se dirigían también contra los más altos dirigentes del régimen, e incluso del Gobierno, incluidos su presidente del Gobierno, Atef Sidqi, el secretario general del PND, o el poderoso ministro de Información Safwat el-Cherif. Estos enfrentamientos mostraban en la superficie las intrincadas luchas de poder dentro del régimen, y la hegemonía dentro de él del aparato de Seguridad. Cuando Badr fue cesado en enero de 1990, la razón oficialmente esgrimida fue que era una respuesta a las peticiones de los partidos de la oposición, a cuya unidad temporal el ministro contribuyó sobremanera. Sin embargo, también se rumoreó que el presidente temió que se demostrara la implicación de Badr en un caso de corrupción, de la que el ministro fue acusado durante y después de su mandato, entre otros por su sucesor, el general Abdel Halim Musa.

7.3 ESFUERZOS DE UNIDAD DE LA OPOSICIÓN

7.3.1 El boicot a las elecciones locales de 1988: recentralización administrativa y política

Como hemos apuntado, tras las elecciones legislativas y presidenciales de 1987 los partidos políticos de la oposición inauguraron una nueva era de cooperación que se tradujo en la adopción de posturas conjuntas, sobre todo declaraciones y comunicados. Así, el 24 de diciembre de 1987 los 5 partidos de la oposición al unísono solicitaron la ruptura de las relaciones con Israel, y el 25 de marzo de 1988 presentaron una protesta contra una nueva prolongación de la vigencia de la Ley de Excepción, decidieron que cada partido no publicaría su órgano de prensa un día a la semana durante cierto tiempo y que todos abandonarían “el diálogo nacional” recientemente entablado con el PND a instancias de este. La denuncia conjunta de la actuación del Ministerio del Interior y de la tortura sería recurrente, así como la exigencia a Mubarak de que respetara las decisiones judiciales - que, como veremos en el siguiente capítulo, en ocasiones parecían implicar reveses para el régimen- y de que autorizara la formación de una asamblea constituyente que modificara la Constitución. Ocasionalmente, como sucedió el 14 de noviembre de 1989, también

incluían en sus declaraciones conjuntas reivindicaciones sociales generales, como la garantía del derecho a un trabajo y un salario digno para todos los egipcios.

En noviembre de 1988 los partidos de la oposición empuñaron una herramienta de presión simbólicamente más eficaz que las citadas, al boicotear unidos las elecciones a los Consejos Locales, que siempre habían sido férreamente controladas por el régimen. La razón alegada, además de las habituales relativas a la falta de garantías del proceso electoral, fue que la Ley 145 aprobada ese mismo año había remplazado el concepto de “gobierno local” (الحكم المحلي), introducido por Sadat en 1979, por el de “administración local” (الإدارة المحلية) que daba título a la ley, y que dicha modificación reflejaba plenamente el espíritu de la nueva ley, pues la Administración local pasaría a formar parte del aparato ejecutivo -y, por tanto, sus dirigentes no serían elegidos, sino nombrados-, al tiempo que los Consejos Locales electos perderían la facultad de poder exigir la rendición de cuentas a los gobernadores civiles y sus subordinados. El resultado de las elecciones fue que el PND se hizo con el 90% de los 2497 escaños en disputa, yendo a parar el resto a candidatos presentados como independientes.

El cambio de régimen del gobierno/administración local reflejaba, aunque los partidos de la oposición nunca hubieran desempeñado ningún papel destacable en los Consejos Locales, una tendencia hacia la recentralización política que contrastaba aparentemente con la descentralización económica, pues entre 1980-1981 y 1989-1990 las transferencias del Estado al gobierno/administración local pasaron del 13,8% al 20,5% de los gastos corrientes de aquel. No obstante, el centralismo político y la descentralización económica eran dos caras de la misma moneda, pues la última era unidireccional, y reflejaba la dependencia de las administraciones locales del Gobierno central en sus recursos económicos, una de las más elevadas del mundo según Soliman, y que fortalecía el poder político del régimen (2011: 79-80).

7.3.2 Los boicots a las elecciones de la Asamblea Consultiva (1989) y al Parlamento (1990): los límites de la unidad y la coherencia de la oposición

En 1989 y 1990 el boicot a las elecciones a la Asamblea Consultiva y al Parlamento, respectivamente, volvió a ser un arma utilizada por los principales partidos de la oposición y sus aliados para denunciar su descontento con las políticas públicas y el sistema político, y en particular el sistema electoral. Sin embargo, la unidad de acción mostrada en las elecciones locales de 1988 no se mantuvo, pues cada partido boicoteó una elección, otra, o ambas, y en este último caso el partido Wafd tuvo que afrontar de nuevo la disidencia de algunos de sus miembros. Por otro lado, las decisiones de la Coalición Islámica y del Tagammu revelaron una cierta dosis de incoherencia, por la supeditación de sus principios declarados a los posibles réditos electorales que pudieran obtener.

A pesar de que los partidos habían tratado la posibilidad de un boicot conjunto en diversas reuniones, las elecciones a la Asamblea Consultiva celebradas en junio de 1989 fueron boicoteadas tan solo por el Wafd y el Tagammu, alegando la falta de garantías sobre la limpieza del proceso electoral y, en última instancia, que dicha cámara carecía prácticamente de competencias, por lo que habían solicitado su reforma en numerosas ocasiones. La Coalición Islámica, sin embargo, rechazó el boicot, según declaró porque “el fraude no era una razón convincente, ya que inducía a los ciudadanos al pesimismo”. Sin embargo, una vez que se anunciaron los resultados de las elecciones, y con ellos la victoria del PND en el 99% de los escaños, la Coalición declaró que esto se había debido al “clamoroso fraude”⁸¹ (IEA 1989: 407, 417, 427).

Poco más de un año después, la Coalición Islámica anunció su boicot a las elecciones al Parlamento de noviembre y diciembre de 1990, y el Tagammu, sin embargo, declaró que participaría. En cuanto a la posición de la Coalición, es cierto que no solo había cambiado el sistema electoral, sino también la configuración de las circunscripciones electorales para adaptarlas a los intereses del partido gobernante, como veremos en el capítulo III 7.1. Por otro lado, la postura del régimen hacia los Hermanos Musulmanes había cambiado notoriamente. Al recelo frente a la Hermandad motivado por el incremento de las actividades armadas del islamismo radical -que culminarían con el asesinato de Rifaat al-Mahgub, presidente del Parlamento, el 12 de octubre de 1990-, se unieron las tensiones creadas por la invasión de Kuwait por parte Irak en agosto de 1990, y por la postura prokuwaití del régimen egipcio, postura que fue rechazada por la mayor parte de los partidos de oposición -entre ellos los Hermanos Musulmanes- y de gran parte de la población. El cambio de actitud hacia la Hermandad se manifestó en la prohibición a algunos de sus dirigentes, como Maamún al-Hudeibi, de tomar la palabra en actos públicos organizados por otros partidos (IEA 1990: 429). No obstante, junto a ese cambio de actitud, no podemos dejar de constatar que la Coalición había olvidado los principios enunciados en 1988 de que “el fraude no era razón suficiente para el boicot” y de que este “incitaba a los ciudadanos al pesimismo”.

Por su parte, el Tagammu había olvidado, al tomar la decisión de participar, que las garantías de limpieza del proceso electoral seguían estando ausentes. Algunas de las razones esgrimidas para este cambio eran, cuando menos, sorprendentes si se tienen en cuenta los porcentajes de participación en las anteriores elecciones, como por ejemplo la de que era poco probable que “la opinión pública boicoteara los comicios”, la de que la contienda electoral favorecería “la construcción del partido”, o la de que los otros partidos habían ignorado sus llamadas al boicot conjunto en 1984, y algunos de ellos en 1987,

⁸¹ Según los resultados oficiales, en las elecciones participaron el 59,71% de los 14'5 millones de electores inscritos.

argumento que resulta un tanto infantil. Por su parte, los miembros del partido que se opusieron a la participación -gran parte de ellos naseristas, y entre ellos 9 de los 45 miembros de la Secretaría General- alegaron que aquella rompería el frente de los partidos de la oposición, y denunciaron la existencia de un acuerdo con el poder según el cual este permitiría el acceso de varios candidatos del partido al Parlamento (IEA 1990: 440-441; Ramsès 1997: 171-172).

Finalmente, el Wafd fue el único partido que aparentemente mantuvo la coherencia con las decisiones adoptadas en 1988 y 1989. Algunos analistas atribuyeron su decisión a la fuerte presencia de hombres de leyes en el partido, y a su preocupación por la soberanía de la ley y el constitucionalismo desde sus convicciones liberales. Sin embargo, otros apuntaron a las fuertes rivalidades y divergencias existentes en el seno del partido -a las que haremos referencia más adelante, en el capítulo IV 4.2-, que podían salir a la luz en una batalla electoral con candidaturas individuales, y a la no obtención de garantías por parte del poder, en el sentido de asegurar que el partido obtendría cierto número de escaños (IEA 1990: 422-423). Cuando 42 miembros del Wafd presentaron sus candidaturas a la Asamblea del Pueblo, el partido tomó la decisión de expulsarlos de él.

7.4 EL PODER JUDICIAL, ENTRE LA INDEPENDENCIA Y LA SUBORDINACIÓN

Desde 1987, el Tribunal Constitucional dio aparentes muestras de independencia del poder político. El 4 de abril de 1987 declaró inconstitucional la denegación de derechos políticos a las personas “que hubieran constituidos centros de poder antes de 1952”, establecida por el artículo 4 de la Ley de Protección del Frente Interior y la Paz Social de 1978. El 7 de mayo de 1988 hizo lo propio con la cláusula de la Ley de Partidos que prohibía la formación de aquellos que estuvieran en contra del Tratado de Paz con Israel. Sin embargo, la práctica política ya había superado con mucho el fondo de las restricciones anuladas, como lo demostraban la rehabilitación política efectiva de Fuad Serag Eddín y otros wafdistas, por un lado, o el frecuente rechazo a la paz con Israel declarado por la mayoría de las fuerzas de la oposición por otro. Por ello, el Alto Tribunal no hacía más que dar marchamo legal a prácticas consentidas por el régimen.

El 15 de abril de 1989, el Tribunal Constitucional intervino de nuevo en el terreno de la legislación electoral, al declarar inconstitucional la prohibición de presentar candidaturas independientes que implicaba la legislación que había regido las elecciones a la Asamblea Consultiva de noviembre de 1988 y, en consecuencia, la nulidad de la composición de la asamblea elegida, por lo que esta fue disuelta y se celebraron nuevas elecciones el 8 de junio de 1989. No obstante, cabe preguntarse en qué medida estos acontecimientos no respondían a un calculado juego político, pues tras el precedente de la disolución del Parlamento en 1987 por exactamente las mismas razones era predecible que

por pura coherencia el tribunal fallara en el mismo sentido. Que el régimen de Mubarak hubiera mantenido la prohibición de las candidaturas independientes para la Asamblea Consultiva no parecía que tuviera mucha lógica, a no ser que deseara, como de hecho hizo, acatar un nuevo fallo del Tribunal Constitucional que aparentemente contradecía sus designios.

De implicaciones muy distintas para la relación entre el poder judicial y el régimen de Mubarak fue la actuación de las más altas instancias de la jurisdicción administrativa entre 1987 y 1990 en relación a las impugnaciones de los resultados de las elecciones legislativas de 1987, actuación que acabó enfrentándolas al poder ejecutivo y al legislativo aunque no tuviera consecuencias prácticas, y que reveló la verdadera concepción del régimen acerca de la separación de poderes.

Como ya hemos señalado, tras las elecciones de 1987, el Tribunal Administrativo del Consejo de Estado dio la razón a algunas impugnaciones de la oposición en relación a la atribución de escaños realizada por el Ministerio del Interior. Por un lado, un fallo del tribunal atribuía 10 escaños más al Wafd y 7 a la Coalición Islámica; por otro, establecía la nulidad de la atribución de 78 escaños, en su mayor parte al PND. El Gobierno presentó alegaciones ante el mismo tribunal, pero sus objeciones fueron rechazadas, tras lo cual el Ejecutivo apeló ante el Tribunal Supremo Administrativo, que el 12 de mayo de 1989 confirmó la invalidez de la elección de los 78 diputados. Pese a que el ministro del Interior aceptó la decisión del tribunal, y emitió un decreto anulando la condición de miembros de los diputados afectados por el fallo, el Parlamento, dominado por el PND, rechazó el fallo del Tribunal Supremo tras un tenso debate celebrado a mediados de junio, y se declaró único órgano competente para decidir acerca de la pérdida de su condición de parlamentarios por parte de sus miembros, estableciendo que dicha pérdida debería ser votada favorablemente por dos tercios de la Cámara (IEA 1989: 402-403).

Finalmente, el 19 de mayo de 1990 el Tribunal Constitucional declaró también inconstitucional la Ley Electoral 188 de 1986 relativa a las elecciones al Parlamento, y nula la composición del elegido en 1987, que debía finalizar su mandato en 1992. El fundamento legal de la reserva de tan solo 48 escaños para las candidaturas independientes a nivel estatal, uno por cada circunscripción, reservándose el resto para las listas de partidos, violaba el principio de la igualdad de oportunidades ante la ley y ante la elegibilidad electoral. A consecuencia del fallo, Mubarak hizo votar en referéndum, el 11 de octubre de 1990, la disolución de la Asamblea, y se convocaron nuevas elecciones para noviembre y diciembre de 1990, que se celebrarían con candidaturas individuales y escrutinio uninominal por el sistema mayoritario a dos vueltas (Jacquemond 1994a: 93-94).

Mientras que muchos vieron en esta nueva actuación del Alto Tribunal una muestra más de la independencia del poder judicial, otros, como Gamal A. Ibrahim (1999: 131-132), la pondrían en entredicho, señalando que, además de que el fallo especificaba que las

leyes y decisiones adoptadas por la Asamblea seguían siendo válidas, acababa antes de plazo con un Parlamento con una importante presencia de la oposición, y en particular de los Hermanos Musulmanes, en un momento en que las corrientes islamistas desafiaban al poder en todos los frentes.

Por otro lado, el nuevo sistema electoral obligaría a las fuerzas de la oposición a reorganizarse y replantearse precipitadamente sus estrategias y sus alianzas para las elecciones, hasta el punto de que los principales partidos y sus aliados decidieron, como acabamos de explicar, boicotear las elecciones.

También podemos especular con la hipótesis de que el Gobierno prefiriera contar con más sólidos apoyos en el Parlamento tras reactivar en el mismo año 1990 el programa de ajuste estructural de la economía pactado con el FMI y el Banco Mundial en 1987, en su mayor parte incumplido por la parte egipcia, como veremos en el capítulo siguiente. Dicha reactivación sería acelerada por la firma de un nuevo acuerdo con estas instituciones en mayo de 1991. En 1987 el Gobierno había firmado este acuerdo, justo un mes después de la celebración de las elecciones legislativas, ante la urgencia de su crisis financiera, por lo que la disolución anticipada de la Cámara a instancias del Tribunal Constitucional también habría servido a los propósitos del Gobierno. Este, además, en el marco general de sus planes de reforma económica y control político deseaba acabar con las “sociedades de inversión islámicas”, que contaban con importantes apoyos en el Parlamento.

7.5 LAS INJERENCIAS GUBERNAMENTALES EN LA CRISIS DEL PST

A principios de 1989 el proyecto de reorientación ideológica del PST dirigido por su presidente, Ibrahim Chukri, por su secretario general, Helmi Murad, y por el redactor jefe de *Al-Chaab* y principal ideólogo de dicha orientación, Adel Husein, estaba casi concluido. No obstante, debían afrontar el V Congreso del partido, que se celebraría el 9 y 10 de marzo, y consolidar su hegemonía en los nuevos órganos de dirección frente a las resistencias de sus críticos, descontentos desde 1987 con esta nueva orientación, que juzgaban demasiado próxima a los Hermanos Musulmanes. La triada directiva y sus partidarios calificaban a sus adversarios de “secularistas”, un calificativo rechazado por aquellos, que aceptaban la tradicional orientación “islámica” del partido.

Las elecciones al Comité Ejecutivo, tal vez no exentas de irregularidades⁸², arrojaron el resultado de una victoria por amplia mayoría de los partidarios de la nueva orientación, dando pie al motín de sus detractores, encabezados por Ahmad Mugahid, que

⁸² Para obtener más información acerca del desarrollo del V Congreso del PST, sus antecedentes y sus consecuencias, véase Gómez García (1996: 157-169).

acusaban a Chukri de “haber vendido el partido a los Hermanos Musulmanes”⁸³. El presidente respondió clausurando precipitadamente el congreso, antes de que se hubiera completado el orden del día.

El 16 de marzo, el grupo encabezado por aquel celebró una rueda de prensa en la sede de Hadaiq al-Qubba del distrito de El Cairo, en la que anunció que “ocupaba” dicha sede para preparar la celebración de un “Congreso Complementario”. El encierro provocó algunos conatos de violencia entre ambas partes, suscitando la intervención de la policía, según los oficialistas a favor de los disidentes. Finalmente, el Congreso Complementario se celebró el día 31 de marzo bajo la protección de un fuerte dispositivo policial. En él, los reunidos denunciaron la ilegalidad del V Congreso, pues no había cumplido sus tareas, y la irregularidad de las elecciones; se constituyeron en una corriente independiente, y designaron a Mugahid presidente temporal del PST, apoyado en un Comité Ejecutivo y un Comité Supremo también temporales y designados por el Congreso Complementario. Expulsados del partido por su dirección oficial, un año después los disidentes celebrarían lo que denominaría el “VI Congreso General del PST” con la complicidad del Gobierno, que les permitió seguir manteniendo la sede de Hadaiq al-Qubba secuestrada y desarrollar sus actividades. En dicho congreso, Mugahid se autodesignó presidente del partido. Posteriormente, el PST de los disidentes apoyaría la postura del Gobierno durante la Crisis del Golfo y participaría en las elecciones legislativas de 1990, logrando tres escaños.

El resto de los partidos de la oposición, “viendo las barbas de su vecino pelar”, apoyarían sin fisuras al grupo liderado por Chukri, Murad y Husein, y denunciaron los intentos de intromisión del Gobierno en los asuntos internos de los partidos, intentos sin duda motivados por el incremento de las críticas del PST al Gobierno y por su boicot de las elecciones legislativas.

7.6 BALANCE DEL INCREMENTO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA

Como hemos apuntado, desde 1986 se produjo un incremento exponencial de la violencia política. Philippe Fargues (1994) utilizando los datos del *Informe Estratégico Árabe* (IEA) del Centro de Estudios Políticos y Estratégicos de Al-Ahram (CEPEA), realizó un resumen general que mostramos a continuación, complementado con los datos del propio IEA y con otras fuentes:

⁸³ Citado por Hanna Fikri Singer: *The Socialist Labour Party: a Case Study of a Contemporary Egyptian Opposition Party*, El Cairo: AUC Press, 1993, pág. 19. *Apud* Gómez García (1996: 164).

TABLA 7: ACTOS DE VIOLENCIA POLÍTICA (1982-1990)

1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
4**	3**	8	7	22	22**	37	104	124

FUENTES: Fargues (1994:226); ** IEA (1987: 381-382); RPE n° 3-12 (1982, 1983, 1984) y n° 27-30 (1987-1988) ⁸⁴

El IEA engloba bajo la rúbrica de “violencia política”, por un lado manifestaciones, levantamientos, revueltas, agresiones y atentados llevados a cabo por los ciudadanos, y por otro la violencia ejercida por el Estado, incluyendo interrogatorios policiales, detenciones, procesos judiciales de carácter político, además de la violencia física directa. A lo discutible de la clasificación anterior por su vaguedad, se unen, como señaló Fargues (1994: 225), otros puntos que debilitan la validez de las cifras, como el condicionante de la proximidad de Al-Ahram y de gran parte de los investigadores del CEPEA al régimen, y la incierta exhaustividad en la recogida de los datos, debida a propias fuentes utilizadas (prensa estatal, prensa de partidos, otras fuentes). Sin embargo, nuestro seguimiento de la cronología de la *Revue de la Presse Egyptienne*, muy detallada, nos permite afirmar que las cifras recogidas más arriba son bastante aproximadas y suficientemente ilustrativas del incremento de la violencia política “en general”.

TABLA 8: ACTOS DE VIOLENCIA POLÍTICA “GENERAL” (1982-1990)

1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
4	3	8	7	22	22	37	104	124

FUENTES: Fargues (1994:226); ** IEA (1987: 381-382); RPE n° 3-12 (1982-1984) y n° 27-30 (1987-1988)

Podemos hacernos una idea aproximada de ese carácter general de la violencia si comparamos la tabla 8 con otra de elaboración propia relativa a los enfrentamientos armados o muy violentos, los atentados y el número de muertos derivados de ellos y de la acción policial que, como se señala en la tabla 9, se produjeron en la mayor parte de los casos entre los activistas islamistas y la policía:

⁸⁴ Sin duda por un error de edición, Fargues no introducía ninguna columna para 1987, año sin embargo de singular importancia. Para subsanar esta laguna, utilizamos el IEA (1987: 381-382), pero, dado que el IEA solo comenzó a incluir un recuento sistemático de todos los actos de violencia en 1988, consultamos también los datos de la Cronología de la RPE, números 1-37 (1981-1989), y en particular, para complementar la tabla en sus carencias, los números 3-12 (1982-1984) y los números 27-30 (1987-1988). Por otro lado, el resumen de Fargues llegaba hasta 1993. Mostraremos los datos posteriores a 1990 en los capítulos siguientes, complementados con otros.

TABLA 9: ATENTADOS, ENFRENTAMIENTOS ARMADOS Y MUERTOS (1984-1990)⁸⁵

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Atentados contra israelíes	1*	2*	2*				2 (12 muertos)
Atentados contra personalidades egipcias				3	1	1	1
Atentados contra policías y otros				3		2	5
Muertos “terroristas” por policía **					3	1	14
Enfrentamientos violentos entre policía e islamistas	1		4	1	5	5	4
Islamistas muertos por la policía			2		4		13
Policías muertos en atentados o en enfrentamientos por islamistas				1			8

* Excluyendo estos atentados, cometidos cuatro de ellos por Zaurat Misr y uno por Suleimán Jater (1986), los demás fueron cometidos por grupos islamistas.

** Utilizamos la poca satisfactoria denominación de “terroristas”, por razones de brevedad, para distinguir a los activistas islamistas que pertenecían a grupos armados y eran considerados y perseguidos como tales por la policía de los que no lo eran.

FUENTES: RPE, n° 3-37 (1982-1989); IEA (1990:434)

De la comparación de las tablas anteriores se puede deducir el incremento de las manifestaciones y actos de protesta y de las detenciones y persecuciones policiales entre 1987 y 1990. La mayoría de ellas estaban relacionadas con los militantes islamistas, aunque también se produjeran detenciones y juicios a comunistas -y en menor medida naseristas- y otras, aunque pocas, manifestaciones convocadas por la oposición. Además de destacar este incremento entre 1987-1990, hay que señalar, aunque no lo hayamos diferenciado en las tablas, el escaso número de manifestaciones y actos de protesta en los años anteriores a 1986: 3 en 1982, 0 en 1983, 4 en 1984 y 5 en 1985, siguiendo igualmente la RPE (1982-1986).

También puede observarse que el incremento de los actos de “violencia política en general” -según la hemos definido- a partir de 1986 es correlativo al incremento, digamos, de la “violencia explícita” o de las “agresiones físicas” a partir del mismo año. Ambos se disparan en términos cuantitativos a partir de 1988, aunque en términos cualitativos ya lo hubieran hecho en 1987, con los primeros atentados islamistas explicados en el capítulo III 4.2. Por otro lado, en lo referente a los enfrentamientos entre islamistas y fuerzas de seguridad, si se observan las muertes en ambos bandos y sus antecedentes parece haber un patrón acción-reacción vengativo a partir de 1986.

Finalmente, el año de 1990 sería el más violento y el más mortífero hasta entonces. El IEA (1990: 434) elaboró para este año, por primera vez, un balance separado de las víctimas de los enfrentamientos entre la policía y los militantes radicales islámicos y del tipo y motivo de dichos enfrentamientos. Lo reproducimos a continuación:

⁸⁵ No incluimos los años anteriores para facilitar la visualización de los datos y porque no se produjeron este tipo de actos, si excluimos los inmediatamente posteriores al asesinato de Sadat hasta diciembre de 1981 -tampoco incluidos en la tabla 8-, así como el lanzamiento de un coctel molotov contra el Consulado de Estados Unidos en El Cairo en 1983.

TABLA 10: VÍCTIMAS Y MOTIVOS DE ENFRENTAMIENTOS POLICÍA / ISLAMISTAS RADICALES (1990)

Víctimas policía		Víctimas islamistas		Motivo de los enfrentamientos						
Muertos	Heridos	Muertos	Heridos	Manif.	Persecución Islamistas	Evitar lo Reprobable	Ataques a policía	Asalto mezquitas	Distribución panfletos	Agres. a cristianos
8	21	27	61	6	6	5	5	4	4	5

FUENTE: IEA (1990:434)

TABLA 11: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA “VIOLENCIA” (1990)

El Cairo	Norte /Delta	Alto Egipto
14	7	30

FUENTE: IEA (1990:434)

Como se puede observar, el número de “hechos” (أحداث), así los denomina el IEA en esta ocasión) contabilizados en la tabla 11 (51) no coincide con el número de los “enfrentamientos” de la tabla 10 (51/29), y el IEA no explica esta discordancia. Sin embargo, dado que imaginamos que los datos de la tabla 11 reflejan enfrentamientos entre las partes (tal vez algunos sin víctimas), la hemos reproducido porque confirma la superior concentración de dichos conflictos en el Alto Egipto. Por otro lado, la descripción de algunos de los principales hechos violentos y sus motivos u objetivos puede dar una imagen más aproximada de la situación: el 4 de febrero un ataque armado a un autobús de turistas israelíes acabaría con la vida de 8 de ellos; el 26 de abril 5 supuestos islamistas morirían en enfrentamientos con la policía en Manfalut al impedir esta la reunión de varios cientos de personas para celebrar la Fiesta del Ayuno; el 1 de mayo la policía daría muerte a 14 miembros de Al-Takfir wa-l-Higra cerca de El Fayyum; el 19 de julio dos policías morían en sendos enfrentamientos en Dairut y Minia; el 12 de octubre sería asesinado Rifaat al-Mahgub, presidente del Parlamento -parece ser que por error, pues el objetivo era el ministro del Interior-; el 25 de noviembre un recluta de la Seguridad Central disparó en Taba contra turistas israelíes, matando a cuatro de ellos; a principios de diciembre, un policía sería asesinado en Alejandría. Todo ello por no citar los mucho más numerosos heridos en los enfrentamientos a los que los islamistas acudían armados con armas blancas o *cócteles molotov* y la policía dispuesta a usar la máxima violencia, ni de las torturas y su exculpación, o de las condenas a muerte. En este año, el patrón acción-reacción vengativo se observa con claridad en los más pequeños detalles: a una muerte, le sigue otra muerte en sentido inverso.

El 30 de junio de 1988, los policías acusados de torturas en el caso Yihad de 1981, cuyo proceso había despertado grandes esperanzas años antes, habían sido definitivamente exculpados. En esas mismas fechas, Amnistía Internacional exigió la protección de los presos políticos dentro de las cárceles y comisarías. Los torturados que acudían a denunciar torturas eran detenidos de nuevo, y en ocasiones sus abogados corrían la misma suerte⁸⁶.

⁸⁶ RPE, nº 32-33 (1988).

En 1988 fueron condenados a muerte varios miembros de Al-Nayún min al-Nar acusados de los atentados de 1987 contra personalidades del régimen. La espiral de la violencia armada y mortífera no había hecho, sin embargo, más que comenzar.

8. LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DE 1990

8.1 NUEVO SISTEMA ELECTORAL, NUEVAS CIRCUNSCRIPCIONES Y VIEJOS Y NUEVOS CANDIDATOS

Las elecciones del 29 de noviembre y el 6 de diciembre de 1990 (segunda ronda) se rigieron por el nuevo sistema electoral de candidaturas individuales, escrutinio uninominal y mayoría absoluta. Dos escaños eran atribuidos a cada circunscripción, y obtendrían el escaño los candidatos que en la primera vuelta hubieran obtenido mayoría absoluta. De no conseguirlo ninguno, los dos más votados pasaban a la segunda vuelta.

La medida más importante del régimen de Mubarak para favorecer a sus candidatos fue el nuevo diseño de las circunscripciones electorales, establecido por el decreto de ley 202 de 1990 emitido por el Ministerio del Interior. Con el argumento incontestable de la necesidad de adecuarlas al nuevo sistema electoral, las 48 circunscripciones existentes en 1987 pasaron a ser 222, con lo que el número de diputados electos pasó de ser de 448 a 444. Sin embargo, la clave de la reforma residió en la configuración de las circunscripciones: el decreto intentó agrupar el mayor número posible de pueblos y aldeas a las ciudades, donde la presencia de la oposición era más fuerte y la facilidad para falsificar los resultados menor, con el fin de incrementar la influencia de las zonas rurales en los resultados (Ben Néfissa & Arafat 2005: 142-144).

A las elecciones se presentaron 2.676 candidatos, de los cuales 2.163 no eran candidatos oficiales de los partidos, aunque muchos pertenecieran o hubieran pertenecido a estos. La mayoría de los candidatos de partidos pertenecían al PND, y una minoría al Tagammu (33). A ellos pueden añadirse los 24 candidatos pertenecientes al no autorizado Partido Socialista Naserista, dirigido por Diyá Eddín Daud, que, gracias al nuevo sistema electoral, pudieron presentarse a las elecciones (IEA 1990: 446). Hay que señalar que el 14 de abril de 1990 habían sido legalizados por la Comisión de Partidos tres nuevos partidos (El Partido de los Verdes, el Partido Unionista Democrático y el Joven Egipto). Con toda probabilidad, el objetivo del régimen al legalizarlos era poder mostrar una “vitrina pluripartidista” más amplia en el caso de que los principales partidos de oposición

decidieran boicotear las elecciones, como finalmente hicieron⁸⁷. No obstante, carentes de ninguna base social y con dirigentes poco conocidos y significados políticamente, estos partidos estaban destinados a ser irrelevantes, y la primera prueba de ello fue su ausencia o su muy discreta presencia en las elecciones de 1990⁸⁸.

En cuanto a los “disidentes electorales”, candidatos que habían pertenecido a los partidos de la oposición que boicoteaban las elecciones y fueron expulsados de ellos a causa de su ruptura del boicot, se contaban entre ellos los 42 del Wafd mencionados, pero también algunos del PST y del PL. Mención aparte merecen 789 candidatos miembros del PND que no habían sido elegidos como candidatos oficiales, pero no fueron expulsados ni represaliados por el partido por presentarse de manera independiente. Siguiendo su costumbre de intentar deshacerse de los diputados que no resultaban “satisfactorios”, y de buscar nuevos rostros que contaran con popularidad o le parecieran más proclives a las políticas que deseaba seguir, la Secretaría General del PND había elegido a un 55% de sus candidatos entre personas que nunca habían formado parte del Parlamento. No obstante, el partido no deseaba enajenarse totalmente a los personajes no elegidos, y les permitía incluso que en la campaña declararan que eran miembros del PND. Gran parte de estos candidatos no oficiales del partido gubernamental contaron en la campaña electoral con el apoyo de numerosos sectores del aparato del Estado, de la Administración local e incluso de algunos gobernadores civiles, en detrimento de los candidatos oficiales (IEA 1990: 417).

Respecto al programa y la campaña electoral, resultaría imposible resumir los programas y propuestas de un número tan elevado de candidatos independientes en el caso -que no se da- de que dispusiéramos de datos. Sin embargo, si cabe señalar que el Tagammu modificó considerablemente su discurso respecto al de elecciones anteriores, intentando presentar más propuestas y modificando el lenguaje de sus críticas, evitando las alusiones constantes al “imperialismo”, la “burguesía parasitaria” y otras expresiones estereotipadas de la izquierda. Su propaganda se centró en cuatro lemas: “Pan y libertad para todo el pueblo”, “La religión para Dios y la patria para todos”, “Por la fijación de los salarios en relación con las subidas de precios” y “Por una reforma completa”. La voluntad del partido, según los dirigentes de este, era ser más “realista” y electoralmente eficaz, si bien los críticos de su ala izquierda acusaron a la dirección, como ya hemos señalado, de haber establecido “relaciones particulares” con el poder, separando al partido del resto de

⁸⁷ Hay que destacar, en el sentido mencionado, la autorización del partido Joven Egipto, denominado igual que el histórico partido de los años 20 y 30 del que, como hemos mencionado, el PST se declaraba heredero y al que habían pertenecido el presidente de este, Ibrahim Chukri, y su “hombre fuerte” desde 1985, Adel Husein, hermano del fundador del Joven Egipto, Ahmad Husein.

⁸⁸ El IEA, que dedica una exhaustiva atención al proceso político egipcio, en su edición sobre 1990 no menciona que tales partidos realizaran ninguna actividad electoral, lo que no quiere decir que alguno de sus miembros no pudiera presentarse como candidato, aunque sí que su participación fue irrelevante.

las formaciones políticas (IEA 1990: 438-445; Ramsès 1997: 171-172).

8.2 LA PARTICIPACIÓN. VIOLENCIA SIN PRECEDENTES

Según los resultados oficiales, en las elecciones de 1990 participaron 7,27 millones de egipcios, el 44,9% de los inscritos en el censo electoral, lo que suponía un 5,4% menos que en 1987⁸⁹. Por otro lado, el porcentaje de los inscritos en el censo electoral (16,27 millones) sobre el total de la población con derecho a voto había ascendido del 49,2% al 52,8%, con lo que el porcentaje de votantes respecto al total de la población con derecho a voto (30,8 millones) había sido del 23,6%, mientras que en 1987 había sido del 25%⁹⁰.

En cuanto a los porcentajes de participación según la dicotomía zonas urbanas/zonas rurales, se repitió, agudizándose, el patrón de las elecciones anteriores, pues en las grandes ciudades y capitales de provincia el porcentaje se situó por debajo del 20% de media (السيد 1996). Por el contrario, en las zonas rurales dicho porcentaje fue muy superior, con un notable incremento en el Alto Egipto, donde en algunas localidades se alcanzó el 75% , tal vez a causa de la influencia de las solidaridades tribales, acentuadas por el carácter individual de las candidaturas (رمان 1996: 171).

El desarrollo de las votaciones conoció una violencia explícita -al margen de las coacciones- sin precedentes. Al anunciar los resultados de la primera vuelta, el 28 de noviembre, el ministro del Interior comunicó que se habían producido incidentes en 37 colegios electorales. Sin embargo, los incidentes más graves se produjeron en los días posteriores. El 2 de diciembre, en la ciudad de Janqa, en la provincia de Qaliubeyya, la policía intervino para dispersar a 2.000 partidarios de un candidato independiente que habían cortado la vía del tren e incendiado comercios en protesta porque se había anunciado que dicho candidato pasaba a la segunda vuelta, en lugar de obtener directamente la victoria que le correspondía según tales partidarios. Ese mismo día, 110 personas fueron detenidas en Farascur y Kafr Saad, en el Delta, por haber “provocado incidentes”. El 6 de diciembre, fecha de la segunda vuelta de las elecciones, 5 personas murieron por disparos de bala en Qena, en el Alto Egipto; y en el Delta 35 resultaron heridas de bala en enfrentamientos entre la policía y partidarios del PND que habían intentado falsificar tarjetas electorales, y 9 heridas en peleas entre partidarios de distintos candidatos. Finalmente, el 9 de diciembre se produjeron 500 heridos y 430 detenidos más

⁸⁹ *Al-Ahram*, 2 y 8 de diciembre de 1990. Citado por Martín Muñoz (1990: 425).

⁹⁰ Los cálculos de los porcentajes del número de inscritos y del número de votantes, en ambos casos con respecto al total de población con derecho voto, los hemos realizado a partir de los datos totales de votantes, inscritos, participación de los inscritos y volumen de la población, facilitados por الألفي 2015; Martín Muñoz 1992: 425; y CAPMAS: 20, 24.

en diversas zonas del Delta y el norte mediterráneo (EMA 4/90: 214, 216-218).

8.3 LECTURA DE LOS RESULTADOS ELECTORALES: CLIENTELISMO Y ÉXITO DE LOS “DISIDENTES” ELECTORALES

Tan solo 253 de los 444 candidatos oficiales del PND, el 57%, obtuvieron la victoria. Sin embargo, otros 95 candidatos del partido que se presentaron como independientes también ganaron, derrotando, lógicamente, a sus compañeros. De esta forma, el PND sumaba 348 diputados, el 79% del total. Por su parte, el Tagammu obtuvo 6 diputados, entre ellos Jaled Mohai Eddín, y los restantes 90 escaños fueron ganados por candidatos ajenos a los partidos autorizados, aunque 4 pertenecían al Partido Socialista Naserista u otras corrientes naseristas, 14 eran exmiembros del Wafd, 8 exmiembros del PST y 1 exmiembro del PL, que no habían respetado el boicot y habían sido expulsados de sus partidos⁹¹. No obstante, el PND convenció a 12 de estos diputados para que se unieran a su grupo parlamentario, con lo que este alcanzó los 360 diputados, el 81% del total (IEA 1990: 417-418; Martín Muñoz 1992: 425).

Por otro lado, Mubarak designó a los 10 diputados que le correspondía nombrar, 5 de los cuales fueron mujeres y 3 fueron coptos. Uno de ellos fue Mona Makram Ebeid, mujer y copta, miembro del partido Wafd e hija del Makram Ebeid, uno de los fundadores y máximos dirigentes del partido durante la época monárquica (véase Introducción 2.3). La aceptación por parte de Mona M. Ebeid del escaño ofrecido por el presidente hizo que fuera expulsada del partido.

Como señalaron en su trabajo centrado en las elecciones legislativas de 2000 Ben Néfissa y Arafat (2005: 142), las de 1990 no interesaron demasiado en su momento a los politólogos⁹², según ambos analistas “justificadamente, habida cuenta del boicot de la mayor parte de la oposición”. Si bien estamos de acuerdo con la segunda parte de esta opinión, no lo estamos con la primera, pues creemos que los autores no hubieran debido decir “justificadamente”, sino, en todo caso, “comprensiblemente”.

Hasta 1990 era corriente considerar que observar las elecciones servía, por un lado y principalmente, para medir la popularidad de los partidos de la oposición autorizada y de las otras formaciones políticas toleradas y ocasionalmente aliadas a aquellos en los

⁹¹ En el caso de los exmiembros del PST, 3 de ellos pertenecía a la facción disidente que pretendía constituir el auténtico PST, como hemos visto en el capítulo III 7.5.

⁹² Quizás la única excepción notable, junto al IEA de 1990, sea la obra de Ali Eddín Hilal y Usama al-Gazzali Harb (على الدين هلال وأسامة الغزالي حرب: إنتخابات مجلس الشعب ١٩٩٠، القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية (للأهرام), si bien ambos autores se encontraban entre los directores de dicha edición del IEA, como de otras. Los mismos Ben Néfissa y Arafat dedican tan solo tres páginas a estas elecciones (Ben Néfissa & Arafat 2005: 142-144). Por su parte, Martín Muñoz, en su obra dedicada específicamente a las elecciones entre 1922 y 1990, tan solo les dedica dos párrafos y una amplia nota a pie de página (Martín Muñoz 1992: 424-425).

comicios (como los Hermanos Musulmanes o las corrientes naseristas), y ello tras intentar calibrar en qué medida el régimen había permitido que tal popularidad se manifestara o, lo que es lo mismo, en qué medida había permitido que la oposición se expresara libremente en la campaña y en qué medida no había condicionado o manipulado los resultados. Se pensaba que las elecciones eran en parte una fachada para el régimen autocrático egipcio, pero también un escenario en el que se podía evaluar la fuerza real de sus hipotéticos adversarios, reenviando después la imagen de él que deseaba. Por otro lado, se pensaba que los comicios servían, además, para mostrar la orientación de los designios de Mubarak respecto de sus partidarios, observable a través de la selección de los candidatos del partido gobernante -que en un principio se encuadraba dentro de la dicotomía naseristas/sadatistas.

Sin embargo, las elecciones de 1990 y todo lo que las rodeó mostraron por primera vez con claridad que las elecciones, sobre todo con el sistema exclusivo de candidaturas independientes, si eran “semicompetitivas” aunque no fueran libres, y aunque faltaran en ellas fuerzas políticas determinantes -bien por voluntad propia bien por voluntad ajena-, podían servirles “para otras cosas” al régimen, a los candidatos y a los electores. Además, revelan lógicas electorales que habían permanecido ocultas o poco explícitas. Estas funcionalidades del proceso electoral se fueron haciendo cada vez más evidente en las elecciones posteriores, e incluso en el desarrollo de la actividad parlamentaria. No obstante, como en 1990 los estudiosos no estaban “preparados” para ellas, los estudios monográficos realizados sobre el terreno y en el momento relativos a estos comicios son escasos. Pese a todo ello, se pueden extraer algunas conclusiones o apuntar hipótesis a partir de los datos de que disponemos.

La conclusión más clara que se puede sacar de los datos mencionados es que las lógicas de cohesión y coherencia partidista e ideológica contaban con una escasa vigencia entre los participantes como candidatos en las elecciones. La mera multiplicación de las candidaturas independientes, que pasó de 1.937 en 1987 a 2.676 en 1990, constituye un primer indicio en este sentido. El siguiente lo representa el gran número de candidatos miembros de partidos de la oposición que se presentaron a las elecciones a pesar de que sus partidos boicoteaban los comicios, y de que era previsible que fueran expulsados. La aceptación por parte de Mona Makram Ebeid, miembro del Wafd, de su escaño por designación presidencial también cabe incluirla en este apartado. El tercer indicio, es el que supone que nada menos que 579 miembros del PND se presentaron a las elecciones en competición con los candidatos oficiales de su partido.

El último hecho mencionado merece, sin embargo, una consideración aparte, que desarrollaremos en las conclusiones de este capítulo III. Se trata de la lógica que convierte las elecciones en una forma propia de clientelismo, que posibilita el acceso al régimen y regula los conflictos entre elites.

9. LOS MÁRGENES DEL SISTEMA POLÍTICO FORMAL. APOYOS, CONSENTIMIENTO, CONTROL Y RESISTENCIAS

9.1 LA HEGEMONÍA DE LA BURGUESÍA DE ESTADO: INCORPORACIÓN FRAGMENTADA

En el tránsito de los años 80 a los años 90 Ayubi (1991:100) realizó un balance de los principales apoyos socioeconómicos del régimen de Mubarak y las relaciones y equilibrios entre ellos:

“La base social del Estado que heredó [Mubarak] no puede ser considerada al margen del realineamiento de clases que tuvo lugar bajo el *infitah*, y que llevó a la primera línea una alianza entre la semiaristocracia prerrevolucionaria, la burguesía de Estado de los sesenta y las camarillas comerciales/financieras de la era del *infitah*. Debe quedar claro, sin embargo, que el papel de la burguesía de Estado no ha sido seriamente reducido, pues el Estado sigue atribuyéndose una parte significativa de los recursos nacionales. Es más, desde los años setenta se ha producido una gran expansión de los órganos represivos y de control del Estado. Hay que decir, incluso, que gran parte del crecimiento burocrático de los últimos años ha sido destinado a los más altos escalones políticos y administrativos del país (...) Aunque el aparato del Estado es más proclive a atender los intereses del nuevo conglomerado de clase surgido del *infitah*, se esfuerza por desempeñar el papel de árbitro entre las diversas «fracciones» de la burguesía, e incluso por mantener un cierto grado de «relativa autonomía» frente a los intereses de clase en conflicto con la sociedad. De ahí que en ocasiones parezca llegar a un punto de confrontación con la burguesía comercial/financiera en particular” (Ayubi 1991: 100).

El aumento de la diferencia entre los ingresos de los altos funcionarios del Estado y los de los estratos más bajos de los trabajadores públicos, señalado también por Soliman (2011: 70-73), provocó, sin embargo, desafecto o incluso rebelión en algunos sectores: huelgas de trabajadores, revuelta de la Seguridad Central, adscripción a movimientos islamistas.

En cuanto a la burguesía “de origen económico”, fuera estatal fuera privada dependiendo de su sector de actividad, sus diversos componentes conformaban un panorama fragmentado y confuso que buscaba defender sus intereses rehuyendo, en la mayor parte de los casos, la confrontación con el régimen. Sus organizaciones representativas oficiales, la Federación Egipcia de Cámaras de Comercio (FECC) y la Federación Egipcia de Industrias (FEI), que agrupaban a la mayor parte de la burguesía, reunían a los sectores público y privado, por lo que tenían estrechas relaciones con los bajos escalafones del Estado. El Gobierno controlaba la dirección federal de ambas, pero permitía una representación mayoritaria de la burguesía privada en la FEI. No obstante, junto a ellas había nacido en 1986, por un vericuetto legal, la Asociación Egipcia de

Hombres de Negocios (AEHN), a cuya legalización ambas se opusieron. La AEHN incluía a varios cientos de los principales hombres de negocios, gran parte de los cuales eran exdirigentes políticos. De ahí que tuviera contactos directos en el Gobierno, influyera en él y lo apoyara indefectiblemente.

Tan solo algunas cámaras de comercio locales, a causa de su singular composición y sus problemas particulares, decidieron dar su apoyo a la oposición, como sucedió con las Cámaras de Alejandría y Port Said, dominadas por los *munfatihún* (importadores o financieros surgidos del *infitah*). En las elecciones de 1987, ante las trabas que encontraban para sus importaciones, estos *munfatihún* dieron su apoyo al Wafd, que obtuvo dos de los cinco escaños a los que aspiraba (Springborg 1989: 71). Por otro lado, en su recurrente escenificación de conflicto entre asociaciones, la FEI apoyaba a estas dos cámaras, mientras que la AEHN apoyaba al Gobierno.

Con criterios un tanto diferentes, hay que señalar la existencia de una “burguesía islámica”. Springborg (1989: 65-69) utilizó la fórmula “burguesía islámica tradicional” para dar cuenta del amplio sector de la burguesía que mostraba puntos de vista y actitudes presididos por la moral islámica tradicional u ortodoxa en sus prácticas económicas y laborales (como rechazar el cobro de intereses). Esta burguesía estaría compuesta principalmente, al margen de numerosos propietarios agrícolas, por comerciantes y manufactureros pequeños y medios, aunque también por algunos más prósperos, procedentes de un medio familiar islámico conservador. Según el autor, este sector de la burguesía no se aplicaría a sí mismo la denominación citada, ni estaría forzosamente inclinado en su mayoría a apoyar las opciones políticas explícitamente islamistas. Por el contrario, el régimen egipcio buscaba activamente reclutarla para las filas de su partido, o al menos obtener su apoyo político. No obstante, habida cuenta de los riesgos (políticos y económicos) de anunciarlo públicamente, resulta muy difícil evaluar en qué medida este sector podía apoyar a opciones políticas como la de los Hermanos Musulmanes, algo que sin duda una parte de él hacía.

En relación con lo anterior, pero con muchas precauciones, hay que señalar que en las elecciones para la renovación parcial del Consejo de Dirección del Sindicato de Profesiones Comerciales celebradas en marzo y abril de 1989, las corrientes islamistas obtuvieron la mayoría de los puestos⁹³. Las precauciones tienen que ver con que dicho sindicato acogía en principio a todos los profesionales relacionados con el comercio, tanto propietarios como empleados como en ocasiones simples titulados; también responden las precauciones a que en la práctica los porcentajes de participación en las elecciones eran muy bajos.

En definitiva, como señala Springborg (1989: 70-71), el creciente dinamismo

⁹³ *Al-Chaab*, 4 de abril de 1989.

organizacional de la burguesía reflejaba la incorporación separada al Estado de sus diversos elementos más que la coalescencia entre ellos. Las demandas de estos solían ser particularistas, mientras que el Gobierno parecía promover antes que nada su fragmentación y los enfrentamientos internos. En conclusión, el autor indicaba en su estudio de 1989: “De la misma manera que el sistema político egipcio parece un museo que muestra las diferentes etapas del siglo XX, lo mismo sucede con la clase burguesa”.

9.2 EL EJÉRCITO Y SU PAPEL POLÍTICO Y ECONÓMICO

En los años 80 el proceso de desmilitarización del poder ejecutivo iniciado por Sadat se aceleró. En los Gobiernos de la época los ministerios encabezados por militares o exmilitares quedaron prácticamente reducidos a aquellos relacionados directamente con el Ejército. Los gobernadores civiles fueron en su mayoría reclutados entre los generales de la policía, o en su defecto entre los civiles. En la burocracia del Estado, a medida que los militares que ocupaban cargos se jubilaban sus puestos eran ocupados también por civiles (Springborg 1987: 5). Cabe, pues, hablar, en términos cuantitativos y cualitativos, de desmilitarización del régimen, hasta el punto de que la presidencia de la República era, aparte de los ministerios que expondremos a continuación, la única institución dominada por un militar.

No obstante, el alto mando del Ejército siguió siendo un puntal del régimen, y continuó interviniendo o intentando intervenir en el diseño de las políticas del Estado, así como recibió numerosos privilegios materiales. La figura militar que presidió la década que nos ocupa es Abdel Halim Abu Gazzala, ministro de Defensa, entre otros cargos, entre 1980 y 1989 y miembro de la Secretaría General del PND. Abu Gazzala potenció sobre manera las actividades económicas del Ejército -incluso en el sector civil, defendiendo de manera abierta aunque contradictoria la liberalización económica-, las relaciones de la cúpula militar con Estados Unidos y sus propias relaciones clientelistas dentro de la institución militar, de modo que llegó a convertirse en un potencial adversario de Mubarak. En 1989 el presidente decidió destituirlo de sus responsabilidades militares.

En síntesis, si bien podemos hablar de una desmilitarización del régimen en esta década de los 80, hablar de despolitización del Ejército parece poco adecuado. Por el contrario, el rasgo más distintivo de la evolución de la institución fue su “economización”.

9.2.1 El papel económico del Ejército

9.2.1.1 La consolidación de la producción militar

En 1975 Anwar al-Sadat introdujo un cambio radical de orientación en la producción militar egipcia, acorde con sus cambios en política exterior y económica, al crear la Organización Árabe para la Industrialización (الهيئة العربية للتصنيع, OAI), fundada como empresa mixta con empresas occidentales y con capital aportado por Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. La OAI, que trabajaría en estrecha colaboración con el Ministerio de la Producción Militar (literalmente llamado “de producción de guerra”), sufriría un fuerte revés tras la retirada de los capitales árabes a consecuencia de la firma de los Acuerdos de Camp David en 1978, si bien aquellos serían sustituidos por el apoyo de la agencia estadounidense USAID (Droz-Vincent 2001: 78-80).

La OAI, controlada al 51% por el Estado egipcio, se beneficiaba, por un lado, de las condiciones favorables que el *infitah* había establecido para las empresas mixtas en general (como exenciones de aranceles e impuestos y disposiciones salariales diferentes), y por otro, de otros beneficios derivados de su adscripción al Ministerio de Producción Militar (fuertes subvenciones estatales a la energía, el agua y las materias primas; exención de normas de aplicación general al sector público, como aportación de beneficios a la Hacienda Pública o restricciones a la importación, etc.). Con estas condiciones y con la financiación norteamericana, la OAI pudo lanzarse a la producción de material militar ultramoderno -destacando la producción de tanques-, no solo para satisfacer las necesidades de Egipto, sino también para exportar en grandes cantidades, hasta convertirse durante los años 80 en uno de los principales países no occidentales exportadores de armas⁹⁴. Uno de sus mayores clientes fue Irak, embarcado en la guerra contra Irán, aunque se diera la paradoja de que buena parte de las armas vendidas fueran soviéticas, si bien fabricadas bajo licencia en Egipto o reexportadas. Entre 1980 y 1990 Egipto exportó armamento por valor de 1.100 millones de dólares (Droz-Vincent 2001: 81-84).

Sin embargo, las cuentas y el detalle del presupuesto del Ejército, y en particular sus importaciones y exportaciones de armas, se realizaban sin ningún control del Parlamento ni de la Agencia Central de Auditorías, mediando anualmente la delegación de funciones a tal efecto del propio Parlamento. En definitiva, como señaló Springborg (1987: 10), a través de los privilegios y las exenciones acordados a la industria militar, Egipto subvencionaba las exportaciones de armas, como muchos países del mundo, pero con la particularidad de que los ingresos no iban a las cuentas estatales generales, sino a las de la institución militar.

⁹⁴ Según Dronz-Vincent (2001: 84, n.16), Egipto fue en esta época el principal exportador “no occidental” del mundo después de China, Israel y Brasil.

9.2.1.2 La reorientación hacia el sector civil

Desde su refundación en la época naserista el Ejército siempre había desempeñado un cierto papel en la producción civil. No obstante, como en el terreno de la militar, en los años 80 aquel aumentó considerablemente bajo el impulso del ya mariscal Abu Gazzala.

Con el objetivo declarado de alcanzar la autosuficiencia alimentaria de la propia institución primero, y luego de contribuir a la “seguridad alimentaria” en tanto que parte de la “seguridad nacional”, el Ejército se convirtió, en palabras de Springborg (1987: 11-12) en “la mayor empresa agro-industrial de Egipto”. En 1985-1986 el Ejército generó el 18% del valor de la producción de comida en el país, utilizando para ello alta tecnología a la que la mayor parte de los pequeños y medianos agricultores no tenía acceso y empleando, según Droz-Vincent (2001: 92-94), reclutas del Ejército no remunerados -aunque la institución siempre lo negara-. Para sus actividades agroalimentarias, que abarcaban la producción de pan, legumbres, carne, pescado, aves, productos lácteos, cuero, etc., el Ejército rehabilitaba para la agricultura tierras desérticas estatales, y disponía de sus propias redes de distribución y comercialización.

El agroalimentario no era el único sector económico civil en el que intervenían las industrias militares. Así, la OAI producía o ensamblaba vehículos todo terreno, locomotoras, aparatos calefactores, aparatos de televisión, aparatos de óptica y electrónica o medicinas, en algunos casos mediante empresas mixtas con grandes empresas extranjeras, como Daimler-Benz, ENASA y General Motors. Con esta última empresa fabricaba locomotoras, si bien el proyecto para crear una gran planta para ensamblar automóviles planeado en 1986, e impulsado por Abu Gazzala, fue rechazado ante las grandes resistencias que encontró entre los trabajadores y diversos sectores de la opinión pública y el régimen político, como vimos en el capítulo III 3.4.

En definitiva, la producción civil dependiente del Ministerio de Producción Militar pasó de constituir entre el 45% y el 50% del total de dicho ministerio en 1982 a suponer el 71% diez años después⁹⁵. En 1995, medios periodísticos egipcios estimaban, de forma tal vez un tanto exagerada, que el ministerio facturaba una producción anual de 1.000 millones de LE en el sector militar y 650 millones en el civil, empleando el 10% de la mano de obra total del país y el 20% de la del sector denominado “moderno”, es decir, el que utilizaba grandes transferencias de tecnología y de capitales extranjeros y una mano de obra muy cualificada⁹⁶.

⁹⁵ *Al-Ahram*, 12 de enero de 1993. Citado por Droz-Vincent (2001: 85).

⁹⁶ Droz-Vincenz (2001: 74) afirma haber obtenido tales estimaciones de los periodistas de diversos “grandes semanarios” egipcios en mayo de 1995.

9.2.2 Clientelismo, negocios y privilegios

El general Abdel Halim Abu Gazzala fue nombrado ministro de Defensa por Sadat en marzo de 1980, tras la muerte en un accidente de aviación de su predecesor, el popular general Ahmad Badawi, cuya muerte le atribuían algunos rumores. Hasta ese momento, y desde 3 años antes, Abu Gazzala había sido agregado militar en Washington. En 1982 fue ascendido por Mubarak al rango de mariscal, y unió a sus atribuciones ministeriales la responsabilidad sobre el Ministerio de Producción Militar. Fue, por tanto, Abu Gazzala quien promovió la gran expansión de las actividades económicas militares y civiles del Ejército. Pero “el Mariscal”, como era conocido popularmente, destacó en los años 80 por muchas otras razones. En su excelente artículo “The President and the Field Marshall” (1997), Robert Springborg fue el primero en dar a conocer al público no egipcio dichas razones⁹⁷.

Abu Gazzala era un ferviente anticomunista y proestadounidense. Aunque no nos consta que cursara estudios militares en EEUU, y sí en la URSS -como el propio Hosni Mubarak, con quien coincidió brevemente allí en 1961-, fue el primer extranjero en recibir el Diploma de Honor del National War College estadounidense⁹⁸. Licenciado en Comercio por la Universidad de El Cairo, se declaraba abiertamente partidario de la participación de las empresas transnacionales estadounidenses en la economía egipcia, a lo que hay que añadir que “el Mariscal” era un declarado conservador, que, a diferencia de Mubarak, cultivaba una imagen de piadoso musulmán y era popular en muchos círculos religiosos. Su esposa era casi la única de los sucesivos gabinetes ministeriales que vestía a menudo el *hiyab*, o velo islámico parcial de la cabeza. Finalmente, Abu Gazzala -también en contraste con Mubarak- era alto, atlético, decidido y un buen orador.

La rápida caracterización anterior está justificada, por un lado, porque el Mariscal gozaba de una gran popularidad entre el público en general, y esta fue una de las razones de las reticencias de Mubarak hacia él, aunque fuera sin duda la menor. Otra de más peso fue su estrecha relación con Estados Unidos, a quien, según fuentes periodísticas norteamericanas, habría informado del traslado aéreo de los secuestradores del *Achille Lauro* a Túnez, mencionado en capítulo III 4.2, lo cual facilitó la interceptación del avión egipcio⁹⁹. Finalmente, Abu Gazzala contaba con una extraordinaria popularidad dentro de las Fuerzas Armadas: desde su posición había construido una amplia red clientelar entre los

⁹⁷ Excepto cuando se indique lo contrario, la información sobre Abu Gazzala que mencionamos a continuación procede de la obra mencionada de Springborg.

⁹⁸ Esta información procede del obituario de publicado en el sitio en internet de la cadena de televisión *Al-Jazeera* "وفاة المشير عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع المصري السابق", 7 de septiembre de 2008, <http://goo.gl/gkqjO9>. Consulta del 4 de diciembre de 2013.

⁹⁹ Dicha información fue facilitada por la cadena televisiva ABC el 10 de junio de 1986 y desmentida por el Departamento de Estado estadounidense. Citado por Springborg (1987: 16, n.12).

altos mandos, y con los beneficios obtenidos del aparato de producción militar había desarrollado un potente entramado de servicios para sus oficiales, superior en cantidad y calidad al que ya les proveía el Gobierno desde los tiempos de Násir (residencias suntuosas a precios subvencionados, créditos a bajo interés, cooperativas de compra de bienes de consumo exclusivas, clubes deportivos, etc.) (Droz-Vincent 2001: 95-97).

Todas las circunstancias citadas hicieron que en los círculos políticos egipcios, e incluso en los círculos sindicales, como veremos en el capítulo III 9.4, se especulara con la posibilidad de que Abu Gazzala, con su fuerte tendencia liberalizadora y proestadounidense pudiera llegar al poder con el apoyo de Estados Unidos. El propio mariscal sugirió la idea de que Mubarak nombrara un vicepresidente, que según él debía ser un militar (Droz-Vincent 2001: 104-105), algo que Mubarak declinó hacer, de manera significativa, hasta los últimos días de su mandato.

Los fuertes apoyos de Abu Gazzala fueron sin duda la razón de que se mantuviera en el puesto hasta abril de 1989, a pesar de las extendidas sospechas de corrupción que pesaban sobre él y sobre gran parte de los mandos del Ejército relacionados con la producción militar y en particular con las importaciones de armas, sospechas que nadie se atrevía a expresar en público. No obstante, sus insinuaciones acerca de la conveniencia de nombrar a un vicepresidente de la República fueron tal vez la razón de que el presidente, aprovechando la investigación abierta a Abu Gazzala por el Departamento de Justicia estadounidense sobre su supuesta implicación en una exportación ilegal de material militar a Egipto, decidiera cesarlo¹⁰⁰. Sin embargo, exactamente un año después del cese, en abril de 1990, Mubarak encargaría al exministro la gestión de la privatización de algunas empresas del Estado (Posusney 1997: 211-212).

Pese a lo expuesto, los mandos del Ejército se mostraron a lo largo de la década leales a un régimen que les permitiría vivir en condiciones mucho mejores que las de la mayoría de los ciudadanos. Al retiro del Ejército seguía a menudo la colocación en alguna empresa, a menudo de importación y exportación, en la que los contactos adquiridos en la institución militar eran de gran utilidad.

9.3 EL APOYO DE LAS JERARQUÍAS RELIGIOSAS

9.3.1 El Gran Jeque de Al-Azhar y el Muftí

Como sus antecesores en la Presidencia de la República, Hosni Mubarak buscó asegurarse la aprobación de sus políticas por las principales figuras institucionales del islam egipcio. En su caso, la prioridad en este sentido la tendría el combate contra las

¹⁰⁰ “Egyptian Minister Named in Missile-Parts Scheme”, *The New York Times*, 25 de octubre de 1988 (<http://goo.gl/IQvrQp>, consulta del 17 de julio de 2015).

doctrinas del islamismo radical, y posteriormente la legitimación de su política económica.

Dos son las principales figuras institucionales del islam egipcio: una es el Gran Jeque de Al-Azhar, que para los ulemas ortodoxos goza de la máxima autoridad, y la otra es el muftí de la República, que formalmente es la máxima autoridad legal islámica, responsable de emitir las fetuas oficiales, esto es, los veredictos acerca de lo que la ley islámica, y en particular la jurisprudencia islámica, establece acerca de los distintos asuntos políticos, sociales y económicos a debate, si bien formalmente tales veredictos no tienen formalmente fuerza de ley. Al-Azhar depende del Ministerio de Asuntos Religiosos o *Awqaf*, mientras que Dar al-Iftá, la institución presidida por el Muftí, depende del Ministerio de Justicia. Aunque anteriormente ambas figuras institucionales eran elegidas por los principales ulemas de Al-Azhar, desde 1961 su elección recaía en el Gobierno, y en última instancia en el presidente de la República.

En marzo de 1981 Sadat eligió como Jeque de Al-Azhar a Gad al-Haq Ali Gad al-Haq, hasta entonces ministro de *Awqaf*, a quien Mubarak mantendría en el cargo hasta su muerte en 1996. Para el puesto de Muftí, después de unos sucesión de figuras poco relevantes, e incluso de vacancia en términos estrictos del cargo, en 1986 el presidente designó a Mohammed Sayyed al-Tantawi, tras resistir a la presiones de numerosos medios religiosos para que la elección la realizaran de nuevo los grandes ulemas de Al-Azhar (Arigita Maza 2005: 173-180). Con todo, por primera vez en la época republicana el Muftí era una persona de formación azharí, y no un funcionario formado en Dar al-Iftá y el Ministerio de Justicia. Al-Tantawi fue Muftí hasta 1996, año en el que fue nombrado Jeque de Al-Azhar tras la muerte de Gad al-Haq.

Gad al-Haq y Al-Tantawi apoyarían indefectiblemente al Gobierno en su lucha contra los grupos islamistas radicales y sus ideólogos, pero sus posturas en general, tal vez condicionadas por sus diferentes posiciones en el entramado institucional, se distanciarían netamente con el paso del tiempo, e incluso ambos personajes llegaron al enfrentamiento en numerosas ocasiones. La mayoría de los observadores egipcios y de los estudiosos extranjeros atribuyen tales diferencias y enfrentamientos a su rivalidad personal, y a una cierta voluntad de independencia de Gad al-Haq¹⁰¹. En nuestra opinión, si bien dicha rivalidad era indudable, el fondo del asunto tiene más que ver con la necesidad objetiva, a efectos de lograr una cierta funcionalidad del cargo, de que Gad al-Haq ejerciera más bien la figura de mediador entre, por un lado, los ulemas de Al-Ahzar y el conjunto del estamento religioso, incluidos sus sectores más radicales, y por otro el poder constituido, aunque en última instancia sirviera a los intereses de este. Por el contrario, Al-Tantawi, aunque hablara en nombre del islam, representaba siempre la voz del Gobierno.

En la designación de Gad al-Haq como ministro de *Awqaf* y posteriormente Jeque

¹⁰¹ Sobre esta cuestión véase Arigita Maza (2005: 173-185).

de Al-Azhar probablemente influyó de manera decisiva su argumentación contra la obra de Abdel Salam Farag, *El precepto ausente*, que había inspirado a los asesinos de Sadat (véase II 6.4). Al-Tantawi también se había significado por su crítica al islamismo radical antes de su acceso a la condición de Muftí, pero las actitudes de ambos serían relativamente diferentes también en este aspecto una vez en sus cargos, siendo la del Muftí explícitamente combativa, y profundizándose las diferencias con el paso del tiempo.

No obstante, los primeros síntomas de diferencias se revelaron ya en 1988. En febrero Al-Tantawi emitió un dictamen autorizando la prohibición de utilizar el velo completo en las universidades¹⁰², algo que nunca haría Gad al-Haq. Poco después, en el juicio contra el grupo Al-Nayún min al-Nar, acusado de los atentados de 1987 contra personalidades del Gobierno, los abogados de la defensa llamaron a declarar al Jeque de Al-Azhar y al Muftí, con la esperanza de que legitimaran las acciones de sus defendidos. La idea era confrontar a las autoridades religiosas a una trabajada argumentación jurídico-religiosa elaborada por preparados ulemas que defendían las opciones radicales, y fundamentada en que en Egipto había leyes que contradecían la *charía*. Gad al-Haq se negó a declarar en dos ocasiones, evitando el compromiso. Al-Tantawi, sin embargo, declaró, afirmando que era cierto que en Egipto había leyes que contradecían la *charía* y que se deberían aplicar las sanciones coránicas, pero declarando que a ese proceso había que llegar de forma gradual, y que era al Parlamento a quien correspondía conducirlo. No obstante, ambas personalidades emitieron un comunicado conjunto en el que señalaban que no se les había permitido conocer las declaraciones de los acusados, lo que constituía una autoexculpación y una crítica al Gobierno¹⁰³.

Es cierto que Gad al-Haq condenó en numerosas ocasiones los actos de violencia del islamismo radical, pero de la misma manera rechazó que la política y la religión fueran dos esferas completamente separadas, y realizó declaraciones contradictorias acerca de si las mezquitas debían ser solo lugares de culto y sobre si se debería permitir a los hombres de religión intervenir explícitamente en política (صالح ربيع 1992: 416-418).

En nuestra opinión, la alta jerarquía de Al-Azhar desempeñaba, como hemos dicho, un papel calculadamente ambiguo, de equilibrista entre las presiones de los sectores islamistas y su alineamiento último con el poder¹⁰⁴. Este alineamiento no pasaba desapercibido, según Maguida Saleh Rabia (صالح ربيع 1992: 420), al público general, acarreado a la institución descrédito y falta de legitimidad, lo que llevó a la institución a “recurrir” (لجأ إلى) a “algunos ulemas con influencia en la sociedad” para que publicaran un

¹⁰² *Al-Ahram*, 6 de febrero de 1988.

¹⁰³ Jakob Skovgaard-Petersen, *Defining Islam for the Egyptian State. Muftis and fatwas of the Dār al-Iftā*, Leiden: Brill, 1997, pág. 259. Citado por Arigita Maza (2005: 170).

¹⁰⁴ Las “plumas del poder” no dudaban sin embargo en exigir a Gad al-Haq que se pronunciara más explícitamente a favor de aquel, como hizo Tharwat Abaza a raíz de las contradicciones mencionadas del Jeque (ثروة أباطة: "تكلم يا منارة الأزهر", *الأهرام* ٦ سبتمبر ١٩٨٧). Citado por صالح ربيع 1992: 432).

comunicado en el que se señalaba que el islam rechaza la violencia y que prohíbe impedir “lo reprochable” (المنكر) mediante ella, indicando, al tiempo que se indicaba que la actuación de los responsables religiosos estaba encaminada a que el mensaje islámico alcanzara sus objetivos. Los firmantes de ese comunicado fueron: Mohammed al-Gazzali, Yusuf al-Qardawi, Mohammed al-Tayyeb Nayyar, Abdel Moneim Nimr, Abdallah al-Muchid, Atiyya Sifr y Mohammed Zaki Ibrahim. Según apunta Saleh Rabia, “antes de la difusión del texto” sus autores insistieron en dejar claro -se sobreentiende que a los responsables de Al-Azhar, aunque la autora no lo explicita- que ellos “no eran ulemas del Poder ni predicadores de la Policía”¹⁰⁵.

Arigita Maza (2005: 181-182) interpreta este episodio de las relaciones entre la jerarquía de Al-Azhar y algunos de los pensadores que denomina “ulemas independientes” -denominación que comparte con la mayoría de los observadores y estudiosos egipcios- de manera muy diferente a la nuestra, a pesar de que lo toma de las mismas fuentes. Según la autora, Al-Azhar exigió a dichos ulemas que firmaran el comunicado, y ellos quisieron dejar clara a la opinión pública su no dependencia del poder. En nuestra opinión, tal interpretación no está del todo justificada, pues la secuencia y expresión de los acontecimientos muestran la necesidad de Al-Azhar de atraerse, por los medios que fuera, entre los que no cabe excluir las presiones, a los “ulemas independientes”¹⁰⁶, que tenían una gran influencia en la sociedad en general y en particular en los sectores del islamismo político. No obstante, es cierto que Gad al-Haq tenía fama de ser autoritario, así como fue acusado por la prensa de la oposición de recibir beneficios materiales del poder¹⁰⁷.

¹⁰⁵ El comunicado fue publicado en *Al-Ahram* el 2 de enero de 1989. Citado por صالح ربيع (1992: 420, 432). La autora no reproduce el texto literalmente ni total o parcialmente, o al menos no lo indica así. Las comillas corresponden a palabras literales de ella.

¹⁰⁶ Nuestras comillas no implican una objeción decidida a que los ulemas mencionados fueran independientes, sino a que a menudo se utilice dicha expresión para referirse a ulemas próximos al islamismo ideológico, como eran -por difícil que sea definir las fronteras de este- Al-Qardawi y Al-Gazzali, los más conocidos y significados, aunque bastante diferentes en sus planteamientos: los de Al-Qardawi más próximos a los Hermanos Musulmanes -o a la inversa- y los de Al-Gazzali con numerosas conexiones con el islamismo más radical, como veremos en el capítulo IV 2.4. No obstante, sobre Yusuf al-Qardawi se han vertido numerosas impugnaciones a su presunta independencia, como sus relaciones y su aprecio mutuo por los Hermanos Musulmanes -que él nunca ha negado, pero sí su pertenencia a la organización- o su “dependencia” del Estado de Qatar, donde residió desde 1961 hasta 2011 (cuando regresó a Egipto), dirigiendo durante muchos años el programa de la televisión *Al-Jazeera* الشريعة والحياة, uno de los más seguidos de las televisiones árabes. Al-Qardawi fue condenado a muerte, junto con el expresidente Mohammed Mursi y más de una centena de acusados, el 16 de mayo de 2015.

¹⁰⁷ “Shaikh al-Azhar imposes Silence Around the Assigning of a Maadi Villa to Him”, *Al-Wafd*, 3 de julio de 1986. Citado por Springborg (1989: 253).

9.3.2 El apoyo del papa Chenuda. La simbiosis entre el poder político y las iglesias

Tras la restitución formal del papa Chenuda III en sus funciones en enero de 1985 se abrió una nueva etapa de entendimiento y apoyo mutuo entre la alta jerarquía de la Iglesia copta y el poder político. El 27 de junio de 1987, Chenuda anunció tempranamente su apoyo a la reelección de Hosni Mubarak en el plebiscito previsto para octubre del mismo año. Su propia liberación, que era un espaldarazo a la autonomía de la Iglesia (cuya Sínodo, no lo olvidemos, se había negado a las presiones de Sadat para elegir un nuevo papa), junto con la postura de Mubarak frente al islamismo político radical, más severa que la de su antecesor, fueron sin duda dos razones principales para anunciar públicamente ese apoyo. En adelante, pese a la creciente agresividad de algunos sectores del islamismo radical hacia los coptos y a los dispersos enfrentamientos intercomunitarios, el papa se esforzaría en negar o minimizar el origen o carácter confesional de los enfrentamientos, tal vez con razón (véase el capítulo IV 2.1).

Según Cannuyer (2011: 908-909), la Iglesia estaría a partir de entonces “omnipresente, pero al margen del terreno político”, y anunciaría que su “combate” era más “espiritual” que “político”. En junio de 1987 y enero de 1988, el diario *Al-Ajbar* informó de que el papa y el Sínodo de la Iglesia copta querían impedir que los sacerdotes coptos pudieran presentarse a las elecciones¹⁰⁸. En enero de 1989, el papa se opondría a la creación de un nuevo partido copto¹⁰⁹. Posturas de este tipo, que se repetirían a lo largo de los años, son probablemente las que llevaron a Cannuyer a afirmar que la Iglesia se mantenía “al margen del terreno político”, pero aun así tal afirmación nos parece sorprendente, y no solo por actos como el indefectible llamamiento del papa a votar a favor de la reelección del presidente de la República en todos los plebiscitos hasta 2010, e incluso tras la revolución de enero de 2011, cuando el papa apoyó de nuevo a Mubarak frente a las demandas masivas de la población para que abandonara el poder. Por el contrario, si bien la oposición del papa a la formación de un partido copto podría considerarse como fruto de una interpretación doctrinal e incluso moral, su manifiesta voluntad de impedir que los sacerdotes se presentaran como candidatos a las elecciones denotaba una concepción autoritaria y unanimitaria de su Iglesia y una concepción comunitaria y confesional de la política, pues consideraba que los derechos de ciudadanía debían someterse a la obligación de obediencia a la Iglesia. Es algo que se manifestaría de nuevo en repetidas ocasiones. La Iglesia copta no se mantendría apartada de la política, sino que intentaría ser el único portavoz político de los coptos, y poner el apoyo político de

¹⁰⁸ *Al-Ajbar*, 19 de junio de 1987 y 22 de enero de 1988. Citado por Cronología de la RPE, n°28 (1987) y n° 31 (1988), respectivamente.

¹⁰⁹ *Al-Musawwar*, 23 febrero de 1989; *Al-Ahali*, 30 de febrero de 1989. Citado por Cronología de la RPE, n° 35 (1989).

estos, en tanto que Iglesia y en tanto que comunidad, del lado de Mubarak. A cambio, obtendría la aquiescencia del poder político a su voluntad de controlar los derechos civiles de los coptos, por ejemplo con el mantenimiento de la prohibición del divorcio civil sin autorización de la Iglesia, a pesar de las demandas de diversos sectores de la comunidad copta en sentido contrario.

Esta relación de apoyo mutuo o simbiosis entre el poder político y el máximo representante de la Iglesia copta se reproducía en la relación entre aquel y el papa de la Iglesia Greco-Ortodoxa de Alejandría. Así, el 21 de marzo de 1983 diversos periódicos egipcios daban la noticia de que cinco obispos de esta última Iglesia, que por entonces contaba en Egipto con entre 10.000 y 20.000 fieles, habían sido obligados por el Gobierno a abandonar precipitadamente Egipto. Según Butrus Butrus Gali, ministro de Asuntos Exteriores (copto, por cierto), la decisión fue tomada a petición de la propia Iglesia, pues dichos obispos mantenían diferencias con el patriarca griego Nicolás VI¹¹⁰.

9.4 LOS SINDICATOS PROFESIONALES. PLURALIZACIÓN IDEOLÓGICA, FALTA DE COHESIÓN INTERNA Y CORPORATIVISMO COINTEGRACIONISTA

Durante la década de los 80 los principales sindicatos profesionales egipcios reflejaron la apertura del régimen político a la expresión de la pluralidad ideológica de la sociedad en ámbitos reducidos, en particular, a los que tenían acceso las clases profesionales, educadas y urbanas. En diversa medida y a diversos ritmos, dichos sindicatos se fueron politizando, o se politizaron más de lo que ya lo estaban, y el régimen de Mubarak consintió que en los consejos de dirección de gran parte de ellos se instalaran corrientes políticas que le eran contrarias. Las corrientes islamistas, en concreto, iniciarían su “penetración” (توغل), según expresión de sus adversarios, y en algunos casos incluso su dominio de dichos consejos, beneficiándose de la escasa participación electoral.

No obstante, el Gobierno utilizó su influencia y las divisiones internas dentro de los sindicatos para limitar los daños de este auge de las fuerzas de la oposición y mantener en la presidencia -cuyas elecciones se celebraban por sufragio universal¹¹¹- a personajes afines, a pesar del descrédito que acompañaba a algunos de ellos. Este descrédito tampoco resultaba un impedimento para muchos miembros de los sindicatos, que preferían elegir como síndico a alguien próximo al poder político, desde su convicción de que ello facilitaría las relaciones con aquel y la obtención de beneficios laborales o de otro tipo. Por

¹¹⁰ Cronología de la RPE nº 9 (1983).

¹¹¹ Las elecciones a los órganos de dirección de los sindicatos profesionales se celebraban por sufragio universal a nivel estatal. Los mandatos eran por cuatro años, si bien los consejos de dirección se renovaban cada dos años mediante la elección de la mitad de sus miembros, lo que explica el elevado número de procesos electivos a los que hacemos referencia.

tanto, el modelo de funcionamiento de los sindicatos seguía siendo el del corporativismo, pero más orientado hacia su variedad cointegracionista, a la que ya hemos hecho alusión en el capítulo II y asunto sobre el que volveremos en las conclusiones finales, e incorporando cierta pluralidad ideológica en sus órganos de dirección.

9.4.1 El Sindicato de Abogados: entre el corporativismo y el triunfo del cointegracionismo

Como ya hemos señalado en el capítulo III 4.1, en las elecciones de 1985 fue reelegido síndico del Sindicato de Abogados Ahmad Al-Jawaga. Al Jawaga era un “superviviente” del sindicalismo. Miembro del Wafd en su juventud, en su primer mandato (1966-1971) había obtenido el *placet* de Náser y apaciguado la rebeldía en el Sindicato del sector de ejercicio privado de la abogacía y de los sectores liberales. Destituido en 1971 por Sadat, que lo consideraba un hombre de la USA y del naserismo, había retornado a la presidencia de aquel en 1977, apoyado por el propio Sadat, donde permanecería hasta 1981, cuando fue de nuevo destituido por el presidente, quien disolvió el Consejo de Dirección del Sindicato. En 1982, cuando el Tribunal Constitucional falló la inconstitucionalidad de la disolución de dicho Consejo por parte de Sadat, Al-Jawaga, con la vitola de haberse enfrentado al poder, fue elegido de nuevo sin interferencias de este.

En 1985, sin embargo, Al-Jawaga gozaba de nuevo del favor del poder político, conservaba un cierto prestigio, y contaba con el apoyo de los abogados del sector público, por lo que ni su victoria ni la de sus partidarios en el Consejo de Dirección fue demasiado complicada. No obstante, entre los 23 miembros de este se encontraban abogados wafdistas (como Mohammed Usfur), marxistas (como Ahmad Nabil al-Hilali), naseristas (como Sameh Achur), independientes (como Ahmad Náser) y, por primera vez, un miembro de los Hermanos Musulmanes, Mujtar Nuh. A partir de ese año, el Sindicato se vio inmerso en una serie de confusos enfrentamientos motivados no solo por la alineación de Al-Jawaga con el Gobierno y por las diferencias ideológicas entre las corrientes mencionadas, sino también por los conflictos de intereses económicos (que en general giraban en torno al empleo en el sector público y en el sector privado) e incluso por la división interna entre los abogados de un mismo partido (como el Wafd).

A pesar de las complejas razones de las disputas, Fahmy (2002: 117-118) distinguió tres facciones principales: una era la liderada por Al-Jawaga, cuyos apoyos ya hemos mencionado, y que pensaba que el sindicato debía ser principalmente profesional y no politizarse. Otra era la liderada por el wafdistas Mohammed Asfur, que consideraba que el sindicato debía asumir el papel político que había desempeñado siempre y reivindicar el cambio político. La tercera, la mayoritaria según la autora, era neutral y no se inclinaba decisivamente por ninguna de las otras dos posiciones.

En 1988, los adversarios de Al-Jawaga intentaron promover una moción de censura. Las trabas impuestas para celebrar una asamblea llevaron a algunos de estos, dirigidos por Ahmad Násir, a romper las cadenas que cerraban la sede del Sindicato la noche del 19 de enero de 1989. En esta ocasión, y en algunas otras a lo largo de cuatro meses, se producirían enfrentamientos con armas blancas e incluso intercambio de disparos, con intervenciones de la policía -que intervendría siempre a favor de al-Jawaga-, en particular el 26 de mayo de 1989. Ambas partes se acusarían de cometer irregularidades en sus intentos de celebrar una asamblea favorable a sus intereses y ambas las cometieron, según Abdallah Jalil (خليل 1999: 66-76). Finalmente, en junio de 1989 se celebraron nuevas elecciones, de las que resultó una nueva reelección de Ahmad al-Jawaga por una amplia mayoría (10.670 de 14.000 votos). No obstante, sus adversarios impugnaron judicialmente el proceso y obtuvieron una resolución favorable, que designó un Comité de Dirección temporal dirigido por el wafdistá Mohammed Usfur mientras se examinaba el fondo del asunto. El consejo elegido y el comité designado coexistirían reclamando para sí la legitimidad entre frecuentes disputas, que llevarían al encarcelamiento de algunos de los críticos de Al-Jawaga, hasta que se celebraron nuevas elecciones por orden judicial en julio de 1992, en las que se impuso, como veremos en el capítulo IV 6.3, Al-Jawaga en la Presidencia y los Hermanos Musulmanes en el Consejo de Dirección.

Aunque el Gobierno pretendía que era neutral en este conflicto, lo cierto es que, según Fahmy (2002: 118-119), puso la policía al servicio de Al-Jawaga, y ello a pesar de que una de las principales razones de la “sublevación” contra Al-Jawaga era que sus críticos le acusaban de corrupción, de mala gestión y de haber dilapidado 20 millones de LE de los fondos del sindicato, una acusación sobre la que el Gobierno no promovió ninguna investigación. Tampoco lo hizo sobre la de que Al-Jawaga había participado, junto con policías y otros abogados, en actividades delictivas relacionadas con el cobro de seguros por falsos accidentes de tráfico.

Según la autora, las acusaciones mencionadas estaban bastante fundadas, y el caso de Al-Jawaga era un ejemplo del servicio que la corrupción institucionalizada (uno de los componentes del modelo corporativista cointegracionista cuya aparición ya señalamos al ocuparnos de la época de Sadat en el capítulo III) prestaba al Gobierno como forma de unir los intereses de los representantes a los del régimen político.

Finalmente hay que destacar que, a pesar de la crudeza de los enfrentamientos internos, el sindicato se unió cuando fueron atacados los fundamentos de la profesión y los derechos elementales de sus miembros. En diversas ocasiones los abogados defensores de los activistas islamistas detenidos fueron agredidos por la policía, y miembros del sindicato respondieron con encierros en su sede y pequeñas manifestaciones de protesta. En junio de 1988 este tipo de agresiones alcanzaron una gravedad sin precedentes, pues oficiales de la policía agredieron a los abogados que habían denunciado casos de tortura en la sala del

tribunal que veía la causa, y en presencia de los miembros del tribunal. Ante estos acontecimientos, el sindicato respondió unánimemente convocando una huelga general para el día 27 de junio de 1988. La prensa gubernamental dirigió entonces una campaña de ataques contra el sindicato, acusándolo de dedicarse a actividades políticas en lugar de actividades sindicales (عبد الحفيظ 2003: 143).

9.4.2 El Sindicato de Periodistas y la dependencia económica del Estado

En las elecciones de 1983 Salah Galal, al que Sadat había nombrado síndico por decreto en la primavera de 1981 en sustitución de Kamal Zuhari, muy crítico con el presidente, se enfrentó a Zuhari y lo derrotó por 476 votos frente a 473. Según Fahmy (2002: 123), Galal intentó convencer a los miembros de que actuaría como un “puente” entre el Gobierno de Mubarak y el sindicato, mientras que sus críticos advertían de que su elección llevaría a la organización a la pérdida de la independencia. Los adversarios de Galal denunciaban también que este quería convertir el de periodistas en un “sindicato empresarial”, siguiendo el modelo del Sindicato de Ingenieros (véase II 5.3), y defendían que el suyo debía interesarse por la política antes que por la economía de sus representados. Pero Galal contaba con el apoyo del Gobierno, y este mostraba a los periodistas -que en su mayoría obtenían sus salarios del sector público, aunque trabajaran en otros medios de prensa u otras labores intelectuales-, los beneficios de apoyar a su candidato. En el año anterior a las elecciones subieron las pensiones de jubilación de los periodistas, y tras la elección de Galal volvieron a hacerlo en un 50% (يورك 2005: 159).

No obstante en el Consejo de Dirección del Sindicato dominaba la oposición con sus distintas tendencias. En las elecciones para su renovación parcial (6 miembros de 12) en 1983, el candidato más votado fue la izquierdista Amina Chafiq, y fueron también elegidos otros periodistas de la izquierda socialista (Lutfi al-Juli) y naserista (Gala Aref); en las elecciones de 1985 por primera vez obtuvo un puesto para los islamistas Mohammed Abdel Quddús, miembro de los Hermanos Musulmanes, y se mantuvo la representación mayoritaria de izquierdas.

Como hemos explicado anteriormente (véase capítulo III 7.2), a partir de 1986 se produjo un deterioro en las relaciones entre el poder político y los periodistas a raíz del incremento de sus críticas a las políticas del Gobierno y del acoso a los profesionales por parte del Ministerio del Interior, bajo la dirección de Zaki Badr. Este deterioro, culminado con la prohibición a los periodistas empleados por el Estado de trabajar también en la prensa de oposición, llevó a un endurecimiento de las posturas del Sindicato, que a lo largo de 1988 celebró diversos actos en defensa de la libertad de prensa. A pesar de ello, en las elecciones de febrero de 1989 el candidato apoyado por el Gobierno, Makram Mohammed Ahmad, confidente de Mubarak y que había sufrido en 1987 un atentado del islamismo

radical, obtuvo la victoria con 1.143 votos de 1.875, si bien la mayoría de los seis nuevos miembros del Consejo de Dirección fueron de izquierdas y Abdel Quddús fue elegido de nuevo. En realidad, los nombres de los representantes en el Consejo de Dirección se renovaban poco, y menos aún entre las filas de los considerados de oposición: Amina Chafiq, Galal Aref, Salah Aisa Ibrahim Higaz, Mohammed Abdel Quddús y algunos otros serían reiteradamente reelegidos -algunos de ellos, como Amina Chafiq, sin interrupción- a lo largo de la década de 1980 y luego de 1990¹¹².

En definitiva, los periodistas, en su inmensa mayoría asalariados del Estado, preferían, como ya hemos señalado, elegir a un síndico bien relacionado con el poder, aunque para el Consejo de Dirección eligieran a otros representantes más afines a sus ideologías y que pudieran hacer de contrapeso al presidente. De hecho, nada más ser elegido Makram Mohammed Ahmad se anunció un incremento del salario base de los trabajadores de la prensa, que seguiría siendo bajo comparado con los de otros profesionales¹¹³, y el nuevo síndico en los años siguientes obtendría otras ventajas para el sindicato y sus miembros gracias, según Fahmy (2002: 123), a sus relaciones personales.

9.4.3 El Sindicato de Ingenieros, epítome del corporativismo cointegracionista

Como hemos señalado en el capítulo II 5.3, bajo el mandato de Sadat el Sindicato de Ingenieros se había convertido en un sindicato en gran medida empresarial. Osmán Ahmad Osmán, magnate de la construcción y uno de los principales hombres fuertes del régimen de Sadat, elegido síndico en 1979, fue quien le dio el empuje final en esta dirección, impulsando un gran número de proyectos económicos que se revelarían en su mayor parte insolventes y sospechosos de corrupción y que pusieron al Sindicato en una difícil situación económica.

A pesar de estos y otros indicios de corrupción de Osmán, este siguió siendo el síndico hasta 1991 y, si bien es cierto que Mubarak rechazó apoyarlo oficialmente en las elecciones de 1983, en 1988 el presidente intervino para salvar las empresas del sindicato de la bancarrota, sancionando con ello la corrupción institucionalizada. En las elecciones de 1987 Osmán consiguió imponerse de nuevo en la presidencia gracias a la apatía de la mayoría, al apoyo de los ingenieros militares (que eran aproximadamente dos tercios del total, hasta el punto de que parte de las elecciones se celebraron en barracones de las

¹¹² En el sitio de internet del Sindicato de Periodistas Egipcios (بوابة نقابة الصحفيين المصريين) pueden encontrarse los nombres de todos los miembros del Consejo de Dirección del sindicato desde los años 40 (<http://goo.gl/iJw7Nu>. Consulta del 6 de mayo de 2015).

¹¹³ El salario base de los diplomados superiores pasó de 65 a 75 LE mensuales en 1989 (RPE nº 36-37, 1989). Salvando las distancias, en 1989 una libra egipcia equivalía aproximadamente a lo que hoy serían 29 céntimos de euro. Aunque no disponemos de datos para 1989, pueden compararse los salarios base de los periodistas con los globales en 1992 de los ingenieros apuntados en el siguiente capítulo.

Fuerzas Armadas) y al ya repetido principio no escrito de que para obtener beneficios del poder había que elegir a un representante cercano a él. Sin embargo, en dichas elecciones los Hermanos Musulmanes obtuvieron 54 de los 61 puestos a renovación del Consejo de Dirección, aunque estos dieron su apoyo a Osmán (Al-Sayyid 1994: 29-30).

Finalmente, en las elecciones de 1991 fue elegido un nuevo síndico, Abdallah al-Kafrawi, que era ministro de la Vivienda y de Obras Públicas desde 1977, mientras que los 6 puestos del Consejo de Dirección en disputa los ganaron los Hermanos Musulmanes.

El caso del Sindicato de Ingenieros en la primera década de Mubarak refleja una evolución compartida con otros sindicatos en algunos aspectos, a pesar de su especificidad. De la misma manera que había sido uno de los más controlados por Náser gracias a la predominante presencia en él de los ingenieros militares estrechamente asociados al régimen por su propia naturaleza, en la época de Sadat reflejó los cambios de orientación del régimen con la mercantilización de sus actividades y su gestión por parte de uno de los más estrechos colaboradores de Sadat, Osmán Ahmad Osmán, que tenía un pie en el Estado y otro en el sector privado. Cuando fue sustituido en 1991, los ingenieros -como otros profesionales en época de Sadat y de Mubarak- aceptaron que el síndico fuera al mismo tiempo el ministro de su sector o de uno de sus principales sectores de actividad (algo que no había sucedido en época de Náser excepto en una ocasión, con el ministro de Sanidad¹¹⁴). Por el contrario, sí que se produjo en todos los periodos mencionados que los ingenieros obtuvieron de su adhesión o sumisión al poder político importantes compensaciones materiales, aunque lo hicieran por distintas vías, ya fuera del Estado o la economía privada. De cualquier manera, los ingenieros se encontraban entre los profesionales mejor pagados de sus sectores de actividad (pública/privada), aunque los salarios de los que trabajaban en el sector llamado *infītahī* fueran muy superiores (El-Sayyid 1994: 28; Aclimandos 1994: 20-21)¹¹⁵.

9.4.4 El Sindicato de Médicos, la “islamización sindical pionera”

En los años 50 y 60 importantes sectores de la profesión médica habían intentado en diversas ocasiones oponerse al régimen naserista, principalmente a causa de las medidas de aquel orientadas a romper el monopolio de algunos grupos de doctores del sector privado sobre determinadas actividades de la profesión (véase capítulo I 3.4). Durante unos

¹¹⁴ Véase capítulo I 3.4.

¹¹⁵ Según Aclimandos (1994: 28-29) “en 1992 un capitán ingeniero casado ganaba 350 LE al mes, mucho más que un funcionario [se entiende que con el mismo nivel de estudios], bastante más que un profesor universitario de la misma edad (entre 300 y 280 LE), aunque mucho menos que un ingeniero empleado en el sector llamado *infītahī*; mientras que un general podía ganar entre 700 y 1200 LE, una cifra también irrisoria comparada con los salarios del sector *infītahī*”. En 1992 una libra egipcia equivalía aproximadamente a lo que hoy serían 25 céntimos de euro.

pocos años estos sectores se hicieron con la presidencia de su sindicato. No obstante, con el apoyo de los médicos militares y de los jóvenes doctores beneficiados por las políticas naseristas, el poder político logró imponerse a ellos sin mayores problemas, represaliando después al líder de los rebeldes, Rachwán Fahmi.

Bajo la presidencia de Sadat, los médicos y su sindicato no mostraron ninguna actividad política reseñable, al menos de resistencia al poder, tal vez unos por el escarmiento de Fahmi, tal vez otros por su satisfacción con la política de liberalización económica de Sadat, y otros por su permisividad hacia el islamismo político. Por el contrario, el sindicato manifestó en reiteradas ocasiones su apoyo al presidente por intermediación de su síndico, Hamdi al-Sayyed (شبكة 2004: 48-51).

No obstante, bajo la presidencia de Mubarak el Sindicato de Médicos fue el primero en conocer el triunfo de las corrientes islamistas en su seno. En 1984 los Hermanos Musulmanes consiguieron los 7 puestos en su Consejo Dirección de un total de 12 en disputa, y de los 24 con que contaba el Consejo. A pesar de no contar con mayoría, lograron dirigir u orientar las principales actividades del sindicato, que poco después creó una comisión para pedir responsabilidades a los médicos de las cárceles egipcias que encubrían los casos de tortura a los detenidos. Este tipo de iniciativas le acarrearía la acusación de connivencia con los grupos islamistas violentos por parte de los medios gubernamentales, que llevaría al sindicato a manifestar su rechazo absoluto a la violencia de los islamistas radicales (شبكة 2004: 51-53).

En 1986 y 1988 las corrientes islamistas volvieron a obtener la mayoría de los puestos en el Consejo de Dirección (aunque la hegemonía entre dichas corrientes era de los Hermanos Musulmanes, no todos los médicos islamistas pertenecían a esta organización), asegurándose la vicepresidencia y sus principales puestos. No obstante, como síndico fue elegido en ambos casos Mamduh Gaber, destacado miembro del partido gobernante. En 1992 se repitió la misma historia, con las variantes de que los islamistas obtuvieron una victoria más amplia en el Consejo (11 de 12 escaños en disputa) y de que fue elegido síndico Hamdi al-Sayyed, también miembro del partido gobernante, que ya había ocupado el puesto en la década de los 70, apoyando a Sadat, como hemos visto (capítulo II 3.1). Se repetía, por tanto, e incluso con más claridad, el patrón electoral ya visto en otros sindicatos: por dominante que fuera la fuerza de la oposición, se elegía como síndico a alguien afín al poder político.

Como veremos más adelante¹¹⁶, la victoria de los Hermanos Musulmanes en el Sindicato de Médicos, y posteriormente en los principales sindicatos profesionales, fue fruto de una nueva y calculada estrategia de acción diseñada por los jóvenes exdirigentes estudiantiles de la Hermandad, que se apoyó en la tradicional baja participación en las

¹¹⁶ Véase capítulo IV 2.2.

elecciones pero que acabaría provocando un incremento progresivo de dicha participación. Esta estrategia comenzó a aplicarse en el Sindicato de Médicos, de la misma manera que había comenzado el “asalto” a los sindicatos estudiantiles en la Facultad de Medicina de El Cairo. La extensa red de servicios médicos y sanitarios que había construido la Hermandad tendría mucho que ver en este orden de prioridades.

9.4.5 Otros sindicatos profesionales. Judicialización e islamismo

Los casos de otros sindicatos profesionales de menor trascendencia política por el tipo de sus actividades o por la consideración social y política que recibían sus miembros muestra muchos de los rasgos generales observables en los sindicatos que acabamos de mencionar: divisiones, mal perder, judicialización, y/o auge de las corrientes islamistas.

Un ejemplo, como ya hemos señalado al comienzo de este apartado III 9, es el Sindicato de Profesiones Comerciales. Entre 1983 y 1988 el sindicato atravesó un largo conflicto interno. Cuando en 1988 se celebraron elecciones para solucionarlo, la facción perdedora rechazó los resultados y recurrió a la justicia, que convocó nuevas elecciones. En 1989 las corrientes islamistas obtuvieron la mayoría en el Consejo de Dirección del Sindicato.

Otro ejemplo de judicialización del funcionamiento de los sindicatos es el del Sindicato de Farmacéuticos. El candidato derrotado en las elecciones de 1988 rechazó los resultados y recurrió a la justicia, lo que llevaría a los profesionales a quedarse sin sindicato durante un largo periodo de tiempo (Fahmy 2002: 142).

9.5 EL RÉGIMEN POLÍTICO Y EL MOVIMIENTO SINDICAL. RESISTENCIAS DE LAS BASES Y CONNIVENCIA DE PARTE DE LA IZQUIERDA

Como hemos señalado en el capítulo III 3.4, entre 1982 y 1987 se produjo un considerable número de protestas laborales, en particular a partir de 1985, cuando los salarios reales de los trabajadores públicos comenzaron a descender. Las protestas continuaron a un ritmo cuantitativamente más bajo a partir de 1988, una evolución debida con toda probabilidad a la concatenación de varios factores: los cambios en las elites de la confederación de sindicatos (FGSTE) impulsado por las altas esferas del régimen; el incremento de los subsidios a los productos de primera necesidad en 1987-1988 y del gasto público en 1989¹¹⁷ (véase capítulo III 6.1); y la actitud acomodaticia con el régimen político y la FGSTE del Tagammu y del aún no legal pero activo Partido Naserista Árabe

¹¹⁷ Véase capítulo III 6.1.

Democrático (en adelante Partido Naserista). No obstante, esta actitud no fue compartida por todos los sectores de izquierdas, que continuaron sus esfuerzos por construir un movimiento sindical independiente y democrático.

A diferencia de Sadat, en un principio Mubarak no intentó cambiar las elites de la FGSTE ni las estructuras de relación entre los trabajadores del Estado. Saad Mohammed Ahmad, presidente de la confederación desde 1976 y ministro de Trabajo desde 1977, continuó en su cargo, y con él la mayor parte de los dirigentes altos y medios de aquella, que continuaban teniendo fácil acceso al Gobierno y obteniendo beneficios materiales (viajes al extranjero para reuniones de trabajo, beneficios sociales y escaso control sobre el uso de los fondos del sindicato, que generaban corrupción, sobornos y nepotismo). La cooptación de la FGSTE era una pieza clave en el dispositivo de control de los trabajadores, pues representaba oficialmente al 35% de los trabajadores no agrícolas (en 1986 sumaban 2,52 millones de un total de 7 millones), y sobre todo a aquellos que constituían grandes colectivos sectoriales o a nivel de empresa (el 45% de sus miembros trabajaban en la industria y el 25% en la construcción y los transportes terrestres) (Posusney 1997: 114).

La elecciones sindicales de 1983 se caracterizaron por una escasa participación y competición. Los sindicalistas de izquierdas, la mayor parte de ellos miembros del Tagammu o asociados a él, centraban su labor sindical en cuatro causas: el fin de la interferencia del Estado en las elecciones sindicales, la legalización de las huelgas, el fin del control jerárquico sobre las secciones inferiores del sindicato y el fin de la compatibilización de los puestos de presidente de la FGSTE y de ministro de Trabajo. La principal vía de interferencia en las elecciones era la exclusión de candidatos por el Fiscal General Socialista. En 1983 tan solo fueron rechazadas las candidaturas de 12 personas al Consejo de Dirección Estatal de la FGSTE -un número menor de los excluidos al final del mandato de Sadat. No obstante, a nivel local las exclusiones fueron más numerosas. Según la izquierda era la propia jerarquía de la FGSTE la que señalaba al fiscal socialista quiénes debían ser excluidos, y a continuación este ejecutaba la exclusiones (algo que los sindicatos profesionales, en los que el fiscal también podía intervenir, se negaban a hacer). Las direcciones de las empresas también interfirieron en las elecciones, no emitiendo para algunos miembros del Tagammu los certificados de ser “buenos trabajadores” que eran necesarios para concurrir. A pesar de ello, las elecciones fueron más libres que las de 1979 y, sin embargo la izquierda no obtuvo mejores resultados, aunque mantuviera su victoria en sus feudos tradicionales (Helwán y Kafr al-Dawwar). Por el contrario, Saad Mohammed Ahmad y los principales dirigentes de la federación mantuvieron sus puestos (Posusney 1997: 115-118).

A pesar de lo indicado, el reguero de protestas laborales entre 1982-1986 y las resistencias en el seno de la dirección del FGSTE a la privatización de empresas y a la

reducción de los derechos laborales de los trabajadores llevaron al poder político a promover un cambio radical en las elites del sindicato. En noviembre de 1986 Mubarak cesó a Ahmad como ministro de Trabajo, y a principios de 1987 Yusuf Wali, secretario de Organización y principal responsable del PND, comunicó a la FGSTE que pensaba supervisar personalmente las elecciones sindicales de finales de año, y que quería ver nuevas caras en la dirección de la confederación¹¹⁸. Antes de las elecciones sindicales, Wali excluyó de las candidaturas del partido para las legislativas de abril de 1987 a los tres miembros de la FGSTE que lo habían representado en el Parlamento en la anterior legislatura, y rechazó los nuevos nombres propuestos por la dirección de la FGSTE (Posusney 1997: 118).

Las elecciones sindicales de 1987 fueron mucho más competitivas debido, por un lado, al enfrentamiento entre la antigua dirección de la federación y los nuevos candidatos apoyados por el PND (del que aquella seguía formando parte), y por otro al renacer del apoyo a los sindicalistas de izquierdas. De 20 miembros del Comité Ejecutivo elegido, 8 nunca habían estado en él; de las 23 federaciones sectoriales que formaban el sindicato, 9 cambiaron de presidente.

En cuanto a los sindicalistas de izquierdas, 13 de sus candidatos a las direcciones de las federaciones sectoriales fueron excluidos por el Fiscal General Socialista. Cinco de ellos, entre ellos Saber Barakat (marxista independiente¹¹⁹) y Abdel Hamid al-Cheij (responsable de asuntos sindicales del Tagammu) recurrieron a los tribunales, consiguiendo la repetición de las elecciones, en las que la mayor parte de ellos fueron elegidos. A nivel local, a pesar de la intervención de las direcciones de las empresas, de la FGSTE y de algunas detenciones de la policía, la izquierda obtuvo mejores resultados que en las elecciones anteriores: se presentaron 400 candidatos y cerca de la mitad resultaron elegidos, casi el doble que en 1983 (Posusney 1997: 120-123).

Al mismo tiempo que esto sucedía en el seno del sindicalismo oficial, en la segunda mitad de los 80 el sindicalismo de izquierdas se fue dividiendo de manera progresiva. La razón de estas divisiones fue que los dirigentes del Tagammu, apoyándose en su corriente naserista y en los antiguos miembros del HADETU, buscaron apoyo en los sindicalistas del PND -del estilo de Mohammed Saad Ahmad y la antigua dirección de la FGSTE- que creía que podían presionar al régimen contra la privatización y la liberalización. No obstante, algunos miembros del propio Tagammu y otros marxistas e izquierdistas independientes criticaron esta postura, acusando al partido de no querer realmente construir un movimiento sindical independiente ni enfrentarse abiertamente al régimen, razón por la cual en algunos casos no apoyaron las iniciativas sindicales alternativas surgidas de la base de los trabajadores. Al menos algunas de estas críticas parecían sólidamente fundadas: en

¹¹⁸ *Al-Ummal* (revista semanal de la FGSTE), 14 de enero de 1987. Citado por Posusney (1997: 118).

¹¹⁹ Véase capítulo II 5.2.

1989 un grupo de abogados comisionado por el Tagammu presentó al Parlamento un proyecto de Ley del Trabajo que proponía acabar con las interferencias del Gobierno en las elecciones sindicales, pero no decía nada acerca de permitir la libre organización sindical al margen de la FGSTE.

Según Posusney (1997: 124, 277), la defensa del partido contra las críticas, en general no explicitada públicamente pero en alguna ocasión sí, era que Mubarak era la opción menos mala. A mediados de los 80 algunos de sus dirigentes temían la proximidad del mariscal Abdel Halim Abu Gazzala a los Estados Unidos, y que estos pudieran patrocinar un golpe de Estado si Mubarak no avanzaba en las reformas económicas. Una vez depuesto Abu Gazzala, la amenaza del islamismo radical sirvió de argumento para que el Tagammu continuara acomodándose al régimen político, acomodamiento que se incrementaría en los años 90. A juicio de esta especialista:

“La postura acomodaticia del Tagammu frente al Gobierno en esta coyuntura demuestra que para algunos izquierdistas la lucha por la democracia sindical no era una cuestión de principios, sino una táctica flexible que dependía de su juicio acerca del régimen concreto que ocupaba el poder” (Posusney 1997: 124).

No obstante, el Tagammu no era la única fuerza política de izquierdas que mantenía tales posturas. Este era el caso del Partido Naserista, que aunque no sería autorizado hasta 1992 realizaba ciertas actividades políticas, entre ellas la publicación de un periódico, *Al-Arabi al-Naseri*, más conocido como *Al-Arabi*. Los sindicalistas de izquierdas críticos con la línea oficial del Tagammu, ya estuvieran relacionados con él o no, continuaron promoviendo formas de organización y lucha alternativas al sindicato oficial entre los trabajadores, que en unas ocasiones fueron rechazadas por el partido y en otras llevaron al enfrentamiento electoral dentro de la izquierda. Algunas de estas luchas tuvieron éxito, pero el Gobierno no perdonaría la rebeldía de los sindicalistas.

Hay que anotar que la conflictividad laboral tuvo también puntos álgidos en estos años de transición en el modelo de selección de la jerarquía de la FGSTE heredado de Sadat –aún con rasgos de cierta representatividad de los trabajadores- a la que será más propia de la era Mubarak. A finales de septiembre de 1988 se produjo en Mahala al-Kubra, uno de los feudos de la industria textil, una de las mayores protestas laborales de toda la década. Sucedió a raíz del anuncio de Mubarak de que los trabajadores de las empresas del Estado (y los que trabajaban parcialmente para él en empresas mixtas público-privadas) no recibirían los habituales bonos para comprar ropa y materiales escolares para sus hijos. La protesta, conocida como “la *intifada* de los bonos”, comenzó con la interrupción de la producción y un encierro en la fábrica Misr de Hilado y Tejido, y con manifestaciones de las mujeres y otros familiares de los trabajadores. Ante el incremento de las manifestaciones y de la participación en ellas, el ministro del Interior ordenó cerrar las fábricas, lo que no hizo sino que el número de participantes en las marchas se incrementara

hasta llegar a reunir a 30.000 personas. Los manifestantes llevaban el nombre de Hosni Mubarak escrito en un ataúd y en una gran estatua que representaba a un perro (Posusney 1997: 144, 155). Estas ofensas a Mubarak eran absolutamente excepcionales en el contexto político egipcio de los años ochenta, en los que el resto de las fuerzas políticas o sociales de oposición ni siquiera atacaban o denunciaban directamente al presidente de la República, sino que se centraban en su Gobierno o “sus políticas”, preocupándose siempre de manifestar su respeto por “la persona del presidente” (شخصية الرئيس). La policía detuvo a los principales líderes de las protestas, y a partir de entonces trasladó a otros centros de trabajo lejanos de la ciudad a quienes intentaron seguir su ejemplo, e intentó mantener un control más estrecho de los trabajadores de la ciudad que el de los de otras localidades.

Otro ejemplo de represalias menores lo encontramos en 1989. En ese año, los dos representantes de los trabajadores ante la dirección de la empresa de Hierro y Acero de Helwán consiguieron, tras meses de insistencia, que la empresa accediera a incrementarles los incentivos. No obstante, inmediatamente después el Ministerio de Industria decretó la destitución de los representantes de los trabajadores, lo que provocó la ocupación de la factoría por los trabajadores en protesta (Posusney 1997: 145, 151).

9.6 LA CONTENCIÓN DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

Los estudiantes universitarios -y los estratos sociales más directamente relacionados con ellos, los estudiantes de “post-secundaria” y los jóvenes licenciados- fueron el colectivo en el seno del cual se produjo una movilización política “rebelde” más constante a lo largo de los años 80, sobre todo en su segunda mitad, impulsada de manera principal y casi exclusiva por las corrientes islamistas. Sin duda, las poco halagüeñas perspectivas laborales y de promoción social -incluyendo en esta al matrimonio- con las que contaban desempeñaron un papel importante en esa movilización.

Los movimientos estudiantiles de izquierdas habían sido anegados desde finales de los años 70 por la presión combinada de las fuerzas de seguridad y de la mayoría de tendencia islamista, que como hemos señalado recurriría en numerosas ocasiones a la violencia¹²⁰. En los años 80 persistían en las universidades grupos wafdistas y naseristas, pero eran los estudiantes marxistas -como por otra parte el resto de activistas marxistas- objeto preferente de la represión: en los campus, escondían sus tendencias políticas por miedo (Azaola Piazza 2006: 241) y la policía detenía a los pocos que repartían panfletos políticos o intentaban organizarse de forma más amplia, sobre todo en el prohibido Partido Comunista Egipcio.

Ante su incapacidad para impedir la victoria de los estudiantes islamistas en las

¹²⁰ Véase capítulo II 3.3.

elecciones a las uniones de estudiantes en la mayoría de las facultades en 1985, 1986 y 1987 mediante el apoyo intensivo a candidaturas alternativas, y ante el incremento de la agresividad de los sectores del islamismo radical retroalimentada por la agresividad de las fuerzas de seguridad, el Gobierno decidió incrementar su control coercitivo sobre los estudiantes.

Entre 1988 y 1990 se aplicó más estrictamente la Ley 265 de 1979 promulgada por Sadat¹²¹, que prohibía todas las actividades políticas e ideológicas en los campus, e integraba a los representantes estudiantiles electos en cada facultad -las uniones de nivel superior fueron disueltas- en un Consejo de la Unión de Estudiantes que tenía un componente mayoritario de profesores que, invariablemente, pertenecían al partido gobernante. Aun así, los rectores -nombrados por el Gobierno- o los decanos -elegidos por los profesores- podían anular cualquier decisión de dichos consejos si no se correspondía “con las tradiciones universitarias” (art. 332). Se impusieron controles de seguridad privados y policiales en las entradas a los campus, se prohibió el uso del velo completo y, en numerosas ocasiones, un comité nombrado por los consejos mencionados filtraba las candidaturas a representantes estudiantiles excluyendo a aquellos que consideraba peligrosos, algo permitido por la Ley 265, que en su artículo 339 establecía que, además de no haber sido juzgados con anterioridad, los candidatos debían “tener buena reputación y ser bien educados”.

Ante la prohibición de las actividades políticas en las universidades, los estudiantes se manifestaron con más frecuencia fuera de ellas. El IEA (1989: 499-502; 1990: 474-479) contabilizó tanto en 1989 como en 1990 catorce manifestaciones estudiantiles. Las protestas tenían por motivos principales las restricciones de las libertades y las medidas disciplinarias en la universidad y en las elecciones, el trato recibido por la guardia de seguridad y la policía, y la política exterior egipcia referente a los países árabes o islámicos (como Palestina o Azerbaiyán). Como en el pasado, los conflictos que afectaban a los países árabes y sus picos de crisis (Intifada palestina a partir de 1987; guerra de Irak a partir de 1990) eran los que tenían una mayor capacidad de movilización, pues a los protestas acudían por igual y conjuntamente estudiantes de todas las tendencias políticas, incluso aunque tuvieran posturas encontrada frente a la Segunda Guerra del Golfo (1991), como veremos en el capítulo IV 1. La policía intervenía invariablemente para disolver las manifestaciones, y los participantes detenidos quedaban cuando menos fichados para excluirlos de las elecciones a las uniones de estudiantes, circunstancias que provocaron a su vez algunas de las manifestaciones más masivas y violentas, como las de noviembre de 1989 y 1990.

¹²¹ La traducción de algunos de los artículos de la Ley 265 directamente relacionados con el control de los estudiantes y las elecciones estudiantiles puede encontrarse en Azaola Piazza (2006: 446-447). De dicha traducción proceden las siguientes citas literales de la ley.

10. CONCLUSIONES

10.1 EL SISTEMA DE PARTIDOS: PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN OTORGADAS Y ENCAJONADAS

El modelo pluripartidista ofrecido por Hosni Mubarak era sobre el papel exactamente el mismo que el instaurado en la época de Sadat, con la única diferencia de que Mubarak permitió que los partidos autorizados actuaran y se desarrollaran dentro de los límites legales previamente establecidos, sin nuevas intervenciones legislativas ni administrativas, pero manteniendo el control de aquellos límites, que funcionaban como “interruptores” de la expansión de los partidos.

La oferta ideológica del sistema político formal se amplió mediante la incorporación efectiva o activa del partido Wafd al abanico de partidos autorizados, y mediante la inclusión de los Hermanos Musulmanes en el sistema de manera informal y alegal, por la vía de su participación en las elecciones en la lista de otros partidos. Al denegar a lo largo de los años 80 la autorización de cualquier partido que pudiera responder a una demanda social, el presidente obligaba a los aspirantes a participar en el sistema político formal a optar entre su propio partido, el PND, y otros partidos en última instancia otorgados por el poder, encajonados y rotulados como “de izquierda marxista y naserista” (Tagammu), “liberal” (Wafd), “nacionalista religioso de izquierdas” (PST) y otro que solo cabe calificar de “progubernamental” (PLS).

El encajonamiento de los partidos se articulaba en varios órdenes. Por un lado, su libertad de acción política era fuertemente restringida por su marginación de los medios de prensa estatales, abrumadoramente dominantes en lo escrito y monopolistas en lo audiovisual, así como por la vigencia de la Ley de Excepción, que prohibía las manifestaciones, las concentraciones, el reparto de panfletos, y todo tipo de actividad política “de calle”, excepto en los periodos de campaña electoral. Los partidos podían organizar todo tipo de actividades políticas en sus sedes o en otros locales cerrados, y publicar medios de prensa. Estos últimos solo les darían potencialmente acceso a los sectores educados de la población, que eran menos de la mitad de aquella. En la práctica, dada su carencia de recursos económicos, con la excepción del Wafd, tan solo podían permitirse una publicación semanal o bisemanal con una tirada de varias decenas de miles de ejemplares, que apenas se distribuía en el centro de las principales ciudades.

La otra dimensión del encajonamiento de los partidos se encontraba en su interior. Estos se hallaban sometidos al dominio de presidentes y allegados que, como decía Robert Springborg y hemos mencionado en el capítulo 9.1, conformaban una suerte de “museo de

la historia egipcia del siglo XX”, al igual que sus partidos, cabría añadir. Eran personas que nunca serían cuestionadas, destituidas y sustituidas en la dirección de los partidos, a pesar de su cada vez más avanzada edad, tanto por el carácter presidencialista y jerárquico de los propios partidos como porque sin duda aquellos habían sido “entregados” por el poder a estos dirigentes habida cuenta de sus trayectorias personales y en la confianza de obtener en contrapartida un mínimo de lealtad y moderación.

10.2 LA AMBIGUA INCLUSIÓN POLÍTICA INFORMAL DE LOS HERMANOS MUSULMANES

Bajo el régimen de Sadat los Hermanos Musulmanes habían sido aceptados como actores políticos, frente a su exclusión total bajo el régimen de Náser. Esto se produjo a raíz de un acuerdo -explícito o tácito- de que sus actividades serían únicamente sociales y de difusión ideológica, pero no propia o formalmente políticas. En la primera época de mandato de Mubarak, en los años 80, serían aceptados de manera informal como actores políticos formales. La obtención de escaños en el Parlamento por la Hermandad por la vía de su inclusión en las listas de otros partidos fue solo el corolario de esta aparente paradoja.

Desde los años 70 los Hermanos Musulmanes eran una organización ilegal que actuaba con gran libertad en la sociedad y participaba en la vida pública. En los años 80 pasó a participar también en la vida política con tan solo algunas restricciones añadidas a las que ya padecían los partidos políticos autorizados, aunque fuera siempre estrechamente vigilada. No es posible creer, a la luz de las relaciones que mantuvieron a lo largo de los mandatos de Sadat y Mubarak el poder político, por un lado, y los partidos políticos y la Hermandad por otro, que la participación de los HHMM en las elecciones legislativas de 1984 y 1987 y su subsecuente acceso al Parlamento se produjera sin que mediara el consentimiento previo del régimen de Mubarak. No obstante, ya fuera tal participación fruto de un experimento pre o post facto, con toda probabilidad obedecía a los siguientes objetivos: uno, reforzar en general la idea de que en Egipto se producía una liberalización política y tal vez una transición hacia una auténtica democracia pluripartidista; dos, explorar la posibilidad de contar con una fuerza islamista “moderada” incluida políticamente de manera estable y tal vez legal, que aceptara operar desde una posición de subordinación al régimen político en el poder; tres, alejar de las corrientes islamistas radicales a los seducidos por de ellas mediante la perspectiva de la posibilidad de hacer avanzar sus ideales políticos, aunque fueran “rebajados”, por medios pacíficos y propiamente políticos a través de una organización integrada en el sistema; y por último, pero no menos importante, un objetivo que afectaba a todas las fuerzas políticas de oposición: poder calibrar mejor, pero sin riesgos, mediante el experimento de laboratorio

limitado y controlado que constituían las elecciones, el apoyo social real con el que contaban los Hermanos Musulmanes que, pese a la tolerancia de los regímenes de Sadat y Mubarak, mantenían en general el secretismo y la clandestinidad que les habían caracterizado siempre en lo relativo a su modo de organización y financiación, y que había sido reforzado por sus experiencias históricas con el poder. Por lo dicho queda en evidencia que hablar de “experimento de laboratorio” es una figura retórica un tanto paradójica, pues precisamente lo que permitían o conseguían las elecciones es que la organización de los Hermanos Musulmanes -sus candidatos u hombres fuertes, sus modos de organización y las zonas de concentración de sus apoyos- saliera a la luz pública.

En cuanto a la actitud de la Hermandad, sin duda esta tenía su propia agenda, que en lo esencial se resumía en la extensión muy gradual y precavida de sus ideas y su organización a través de la sociedad hasta lograr el *tamkín* (التمكين). Aunque este término no sería utilizado públicamente por sus dirigentes hasta la primera década del siglo XXI, el concepto latía desde sus inicios en los objetivos de la Hermandad. El *tamkín* en este sentido es el “empoderamiento”, y, por metonimia, el grado de empoderamiento espiritual, social, económico y político que permitiría a la organización llevar a cabo su visión y proyecto de sociedad. Su participación en las elecciones, rechazada en décadas anteriores, formaba parte de tal empoderamiento, y respondía a una actualización de la concepción de las vías para llegar a él. Desde mediados de los 80, otra de estas nuevas vías, el control de los sindicatos profesionales, estaba en construcción. Como veremos en la parte IV de este trabajo, la siguiente a esta, el control del Sindicato de Médicos a mediados de los 80, que inauguraría el acceso de los Hermanos Musulmanes a los órganos de dirección de todos los sindicatos en mayor o menor medida, no fue un suceso aislado y fortuito, sino fruto de una calculada estrategia de la Hermandad.

10.3 LOS ESCAÑOS DE LA OPOSICIÓN COMO CONCESIÓN DEL RÉGIMEN. UNA SOSPECHA CADA VEZ MÁS VEROSÍMIL

Los resultados del conjunto de los procesos electorales celebrados entre 1984 y 1990 permiten, si se tienen en cuenta su naturaleza y su desarrollo en combinación con los contextos políticos en los que se produjeron, plantear la fundada hipótesis de que los escaños obtenidos por la oposición se debieron más a decisiones del poder político que a resultados reales. Dichas decisiones podían implicar tanto impedir por muy diferentes vías la victoria de los candidatos de la oposición como facilitarla, ya fuera, según señaló Al-Sayyed y hemos mencionado (السيد 1996: 474-475), “permitiendo que las elecciones se desarrollaran de una manera ejemplar” en ciertos distritos en los que los candidatos de la oposición tenían una gran capacidad de movilización, ya, incluso, ordenando el rellenado de urnas (*taswid*) en favor de dichos candidatos. Esta última práctica puede resultar

sorprendente tanto desde ciertas “culturas democráticas” como desde otras “autocráticas”, pero encaja perfectamente con lo ya señalado de las elecciones de 1984 en una entrevista con el avezado intelectual egipcio Mohammed Sid Ahmed, buen conocedor de la “cultura autocrática” egipcia:

“La esencia del nuevo reparto de cartas es hacer comprender a las diversas formaciones que su participación en la vida política dependerá menos del resultado del escrutinio que de un acuerdo alcanzado con el presidente ” (Sid-Ahmed 1984a).

Las elecciones legislativas de 1984 dieron unos buenos resultados al Wafd y a los Hermanos Musulmanes (unidos en una alianza), y aceptables al PST. Todos ellos eran partidos que se habían comportado razonablemente bien frente al poder y sus políticas, y a los que aquel deseaba integrar en la escena política de la manera señalada por Sid Ahmed, similar a la que había intentado Sadat. Por el contrario, el Tagammu, señalado como adversario principal por los regímenes de Sadat y Mubarak hasta 1984, obtuvo tan solo un diputado.

En las elecciones legislativas de 1987, los resultados de los Hermanos Musulmanes, el PST y el PL (que formaban la llamada “Alianza Islámica”) fueron considerablemente mejores que en 1984, y los del Wafd prácticamente iguales. El Tagammu no obtuvo ningún diputado. De nuevo, las tres primeras fuerzas políticas se habían comportado bastante bien frente al poder. Como en 1984, una de las maneras de comportarse bien de los Hermanos Musulmanes -pero también de sus aliados- fue que presentaron un número reducido de candidatos. En el plebiscito para la reelección de Mubarak de 1987 (celebrado después de las legislativas), los Hermanos Musulmanes, el PST y el PL dieron su apoyo a Mubarak, y el Wafd -que no había progresado, pero se había mantenido- se abstuvo. Estos partidos adoptaron estas posturas aunque no habían dejado de denunciar la falta de garantías democráticas, las violaciones de los derechos humanos y numerosas políticas de régimen, si bien lo hicieron por diversas consideraciones más o menos espurias, como ya hemos mencionado en el apartado correspondiente. En cuanto al Tagammu, se opuso a la reelección de Mubarak esgrimiendo la falta de garantías democráticas y su desacuerdo con las políticas del Presidente. Fue su canto del cisne en cuanto a oposición frontal -cuando menos simbólica- al régimen, como veremos por sus posicionamientos en los 90.

La Coalición Islámica y el Wafd boicotearon las elecciones legislativas de 1990. Sus relaciones con el régimen se habían deteriorado mucho. Alegaban la falta de progresos o el retroceso en la apertura política. Las actividades del islamismo radical habían tensado mucho la situación política en general, y el régimen había respondido poniendo a Zaki Badr al frente del ministerio del Interior, que había adoptado una dura línea represiva contra los militantes islamistas radicales y una actitud muy agresiva frente al conjunto de la oposición. La anunciada participación de Egipto en la guerra contra Irak para liberar

Kuwait había añadido un nuevo punto de desacuerdo entre el régimen y la Coalición Islámica (que no el Wafd, que sin embargo se había tornado mucho más crítico).

El Tagammu, sin embargo, decidió participar en las legislativas de 1990. Los argumentos que le habían llevado a votar no a la reelección de Mubarak en 1987 y a boicotear las elecciones locales de 1988 y las elecciones a la Asamblea Consultiva habían dejado, al parecer, de ser válidos, como no lo fueron para el partido de izquierdas los esgrimidos por el resto de los partidos de la oposición para llevar a cabo el boicot en 1990. Por otro lado, el Tagammu se oponía abiertamente a la participación de Egipto en la guerra contra Irak.

En las elecciones, el Tagammu obtuvo seis diputados. Uno de ellos fue para su presidente, Jaled Mohai Eddín, que lo consiguió en la primera vuelta, y los otros cinco fueron alcanzados en la segunda. El resto de los diputados electos fueron Lutfi Waked, exoficial libre y colaborador de Náser, tres destacados activistas sindicales (Mujtar Guma, Mohammed Abdel Aziz Chaabán y Al-Badr Fergali), y un quinto, naserista, cuyo nombre no hemos podido averiguar. Los nombrados eran personajes con una trayectoria larga y conocida, y se presentaban en distritos en los que tenían un gran apoyo (Mohai Eddín y Lutfi al-Waked en sus lugares natales, y los sindicalistas en distritos obreros). Por otro lado, el partido presentó tan solo 33 candidatos (frente a 404 en 1987), haciéndolo únicamente en los distritos en los que consideraba que tenía más posibilidades de ganar, y obtuvo 136.000 votos en la primera vuelta (frente a 150.000 en 1987 en un número mucho menor de circunscripciones) y 60.000 en la segunda (IEA 1990: 445-446). Esos 60.000 votos de la segunda vuelta habrían de distribuirse -no disponemos de datos detallados de su distribución- entre los 6 candidatos del partido que pasaron a ella, de los cuales 5 vencieron. Tres de ellos lo hicieron en distritos urbanos (2 en El Cairo y 1 en Port Said). Las cifras oficiales de inscritos en el censo electoral y de votantes por circunscripciones en estos comicios, como en los anteriores y posteriores, no estuvieron disponibles más que a través de los resultados parciales -y a veces contradictorios- publicados por la prensa para algunos distritos (Abdel Nasser 1997: 202; Martín Muñoz 1992: 413). A partir de dichos datos, Abdel Náser realizó para las elecciones de 1995 estimaciones según las cuales el número de inscritos en el censo electoral por distrito oscilaba entre 60.000 y 100.000, y el número de votantes efectivos en dichas elecciones por distrito varió de 4.000 a 10.000 (Abdel Nasser 1997: 202). Aunque el dato no sea, obviamente, trasladable a las de 1990, puede ser orientativo.

Con los datos mencionados y la contextualización previa no pretendemos poner en duda en términos absolutos el apoyo electoral a los candidatos del Tagammu manifestado por los escasos resultados oficiales de los que disponemos. Por el contrario, algunos de los datos biográficos aportados avalan la popularidad de los candidatos, por otro lado bien conocida en los medios egipcios. Sin embargo, las cifras oficiales parecen apuntar a un

incremento exponencial de la media de votos por candidato del Tagammu en general, y a una victoria arrolladora en la segunda vuelta de los candidatos exitosos en la primera (de 500 votos en 1987 a 4.000 en la primera vuelta de 1990 y a 10.000 en la segunda vuelta de ese mismo año). Reteniendo solo el dato realmente extrapolable de los candidatos triunfantes en 1990, y si las razones principales del voto a dichos candidatos en 1990 (trayectoria vital y política) existían ya en 1987, ¿a qué se debe la gran diferencia en los resultados –recordemos que Mohai Eddín y Waked en 1987 se habían presentado candidatos a los escaños que se dirimían entre candidaturas individuales-? Aunque teóricamente podría haber múltiples explicaciones para esto, la más plausible es que en 1990 el Gobierno permitió, cuando menos, el triunfo de los candidatos del Tagammu, mientras que es bien conocido que en 1987 hizo todo lo posible para impedirlo, al margen de que no se puedan probar las acusaciones de fraude.

10.4 LAS ELECCIONES: VÍA DE ACCESO AL RÉGIMEN Y REGULADOR DE LOS CONFLICTOS ENTRE ELITES

Sometidas al nuevo sistema electoral de candidaturas individuales, y “abandonadas” por los principales partidos de la oposición que habían decidido boicotearlas, las elecciones de 1990 supusieron un punto de inflexión en la funcionalidad de las elecciones. Si anteriormente habían servido, además de para generar desde el “corazón” del régimen una mayoría parlamentaria favorable, también para integrar en el sistema a las fuerzas de la oposición, en 1990 servirían, en virtud del nuevo sistema electoral y de la proverbial adaptabilidad del régimen a las circunstancias cambiantes, para regenerar la base social de aquel y gestionar los conflictos entre sus elites con un bajo coste político.

La tolerancia y la actitud posterior del PND frente a los “candidatos disidentes” de su partido, adversarios de los oficiales, y frente a los candidatos independientes en general, revela su profundo conocimiento de las lógicas y procedimientos electorales vigentes de hecho. El partido sabía que al peso del marchamo oficial del régimen a sus “candidatos preferidos” los relegados ponían oponer su popularidad, el peso de sus familias y sus conexiones en el aparato del Estado -sobre todo a nivel local- y otras formas de clientelismo para conseguir la victoria limpiamente o mediando el “trucaje” de las elecciones (véase el capítulo III 2.3.3 sobre el fraude electoral), como de hecho la obtuvieron 95 de ellos (más del 20% de los escaños). De ahí que no se tomara ningún tipo de represalias contra ellos, ni antes ni después de las elecciones, y que los 95 elegidos ingresaran con toda naturalidad en su grupo parlamentario. A este elemento cabe añadir el

“reclutamiento” para dicho grupo de 83 diputados independientes más ajenos al PND, ya fueran personajes sin afiliación política en el pasado o exmiembros de otros partidos¹²². Estos datos mostraron por primera vez -y las elecciones siguientes lo confirmaron- que las elecciones legislativas servían a los candidatos para acceder al Parlamento, pero también para acceder al partido gobernante, y por ende al régimen político, o para mantener las posiciones dentro de ambos. Por su parte, al régimen le servían no solo para renovar sus elites y su apoyo social -aspecto que habíamos apuntado en trabajos anteriores (Barreda 2006, 2009)-, sino también para regular los conflictos entre aquellas con el menor coste político, razón que explica su competitividad controlada o su libertad relativa -que no “limpieza”- dentro del marco de control general de los resultados.

Una década y dos procesos electorales (1995, 2000) después de las elecciones de 1990, Ben Néfissa y Arafat (2005) se propondrían, entre otras cosas, “comprender por qué unas elecciones trucadas y *a priori* sometidas a la voluntad del poder egipcio podrían interesar tanto al 70% de los candidatos que no son movidos por el PND” (pág. 227). Por su parte, Lisa Blaydes, en su estudio *Elections and Distributive Politics in Mubarak’s Egypt*, publicado en 2011, se plantearía como punto de partida, con la ventaja del tiempo transcurrido, tres cuestiones de las que destacamos dos ahora: “¿De qué manera se beneficia el régimen autoritario egipcio de celebrar elecciones?”; “¿Por qué los candidatos invierten enormes recursos en competir por un escaño en un Parlamento que no decide las políticas [puesto que las deciden el presidente y sus allegados]?”. Sin adelantar ahora las “novedades” de las elecciones posteriores y sus análisis, podemos señalar los rasgos de aquellas que ya se encontraban presentes en las de 1990 y las anteriores.

Como ya hemos señalado (véase el capítulo III.2.3.3 sobre el fraude electoral), Ben Néfissa y Arafat recogieron abundantes testimonios de personajes implicados en el trucaje de los resultados electorales. Dichos testimonios mostraban que el trucaje no solo se realizaba “desde arriba”, desde las altas esferas del régimen, sino también “desde abajo”, por parte de los encargados de supervisar las elecciones en los colegios de voto. Esto supervisores tenían sus propias simpatías, o eran sensibles a la presión social, o estaban sujetos las prebendas de ciertos candidatos que gozaban de una gran popularidad y/o tenían una gran -y la expresión es nuestra- “potencia electoral” (recursos económicos y humanos, alianzas, fraude, intimidación). “Desde arriba” se imponían ciertos límites -en la mayor parte de los casos, que el candidato no fuera rechazado abiertamente por las autoridades o el PND, o al menos que no se opusiera ambos-, límites que en unos casos estaban implícitos y en otros se explicitaban a los subordinados locales, o se materializaban

¹²² Ben Néfissa y Arafat (2005: 277) contabilizaron tras el final de la legislatura 431 diputados del PND (de 444 diputados en el Parlamento), y cómo la mayoría de los exmiembros del Wafd, el PST y el PL rechazados por sus partidos y elegidos como diputados también ingresaron en el partido gobernante; los del Tagammu y las corrientes naseristas no lo hicieron.

mediante el “retrucaje” en los colegios electorales centrales de cada distrito de los resultados ya trucados previamente. Así, numerosos candidatos no promovidos por el PND se presentaban a las elecciones conocedores de sus propios recursos, del funcionamiento real del juego electoral, y de la previsible permisividad del poder político.

Por su parte, Blaydes (2011), a la pregunta de por qué tantos candidatos invertían tantos recursos para acceder a un Parlamento que no decidía las políticas generales del Estado, respondería lo que ya todos los estudiosos y meros observadores sobre el terreno creían saber, y algunos -entre ellos Ben Néfissa y Arafat- habían intentado documentar mediante testimonios: el acceso al Parlamento suponía para los diputados el acceso a los dirigentes del poder ejecutivo y del partido gobernante a nivel estatal y, a partir de ahí, beneficios personales para ellos y beneficios colectivos para sus representados en la forma de infraestructuras, servicios, inversiones, etc. El mérito de Blaydes en este sentido fue poner datos y cifras -aunque escasean los relativos a las elecciones de 1990, no así a las siguientes- a esa creencia generalizada, mostrando que tales beneficios llegaban en general con más prontitud a las zonas representadas por diputados del PND, mientras que se retrasaban mucho o no llegaban, como castigo o por dejadez, a las zonas representadas por diputados de la oposición (Blaydes 2011: 64-100). En cuanto a su pregunta sobre qué beneficios obtenía el régimen autoritario de celebrar elecciones, la contestaba -así mismo con el apoyo de datos, estadísticas y análisis novedosos- en el sentido que ya hemos señalado más arriba: más allá de su voluntad de apaciguar a la oposición ideológica y partidista, de incluirla en cierta medida en “su” sistema político, y de dar una cuando menos pálida imagen de pluralidad en el extranjero, el régimen necesitaba apoyo social y de las elites locales, y debía distribuir recursos escasos (puestos distinguidos y recursos materiales) entre un gran número de dichas elites. Las elecciones eran un instrumento para situar gran parte de las “decisiones” en una instancia externa con un criterio “objetivo” (la popularidad o la fuerza electoral), evitando o minimizando así los resquemores de las elites y sus representados, y consiguiendo una cierta representatividad real.

Si bien bastantes de las prácticas y lógicas electorales señaladas aquí estaban ya presentes de una u otra manera en las elecciones de 1984 y 1987, a partir de 1990 se hicieron más extendidas y más visibles al tiempo que se perfeccionaron a raíz de la introducción del sistema exclusivo de candidaturas individuales y del aprendizaje, por parte de los diversos actores, del uso que podían hacer tanto del sistema como de esas prácticas y lógicas.

10.5 LA SÍNTESIS PLURALISTA-CHUROCRÁTICA / CORPORATIVISTA

El sistema político formal ofrecido o propuesto por Hosni Mubarak a la sociedad durante el primer periodo de su mandato tan solo constituyó un subsistema del régimen

político vigente, es decir, del conjunto de instituciones y estructuras, procedimientos y mecanismos que regulaban las relaciones e interacciones entre el poder constituido y el resto de la sociedad.

El sistema pluripartidista-electoral ofrecido a la oposición estaba diseñado, como hemos apuntado, como un sistema de compartimentos estancos, abierto en principio solo a ciertos grupos y tendencias políticas, definidas estas más por las prácticas efectivas de los grupos que inicialmente ocuparon tales compartimentos que por los modelos políticos o ideológicos puros o estándar a los que referían las “etiquetas” ideológicas que portaban. Por otro lado, dicho sistema estaba, en lo que toca a los partidos de oposición, aislado de la mayor parte de la población por las restricciones impuestas a las actividades de difusión política, que se resumían esencialmente en la prohibición de las actividades políticas en las calles y lugares públicos y en el cierre del acceso a los medios de comunicación audiovisuales estatales, los únicos existentes. En la práctica, el principal derecho político ejercido y expandido durante el primer periodo de mandato de Mubarak -excepto en los periodos de campaña electoral- fue el derecho de reunión limitado a espacios cerrados, y el derecho de expresión a través de aquellos y de los medios de prensa de los partidos, derecho este último limitado por ciertos tabúes políticos o, como lo denominan los egipcios, “líneas rojas”.

Con el paso del tiempo, la reacción de diversos sectores de la sociedad a la “propuesta” del régimen político, y la tolerancia de este frente a tal reacción, fueron produciendo un ensanchamiento de los límites del sistema pluripartidista-electoral. Así, por citar tan solo los aspectos más destacados, los Hermanos Musulmanes se introdujeron en el sistema por la vía de las alianzas electorales, el Partido Socialista del Trabajo evolucionó hacia el islamismo político y una mayor contestación al poder, y la libertad de expresión se expandió de manera considerable tanto cualitativa como cuantitativamente, pues los partidos políticos utilizaban su prensa no solo para expresar sus propias opiniones sino que abrían sus páginas a otros sectores políticos o de la sociedad, mientras que la propia prensa estatal permitía la expresión de opiniones moderadamente opuestas al poder.

En cuanto a las elecciones legislativas, hasta 1987 se rigieron por una confusa mezcla de control por el poder de los resultados globales -mediante las restricciones políticas, la intervención policial y el fraude-, y la tolerancia del acceso al Parlamento de un contingente de diputados de la oposición simbólicamente importante pero a efectos prácticos inoperante, lo que llevó a las principales fuerzas de aquella a boicotear los comicios de 1990.

En términos globales, en el escenario político formal o autorizado se produjo un incremento de la “inclusión”, o una “pluralización” de los participantes en él. No obstante, la liberalización del sistema afectaba en lo esencial únicamente a la expresión de la opinión en ámbitos restringidos, excluyendo la libre comunicación y expansión de las ideas

políticas y la posibilidad de la alternancia en el poder. Esta liberalización iba dirigida en concreto a ciertos grupos y tendencias políticas, y en general a ciertas elites sociales definidas no necesariamente por su estatuto socioeconómico sino por su estatuto socioeducativo, y muy en particular a quienes ocupaban o podían ocupar en el espacio público y político egipcio una posición de mediadores entre el poder político y las clases educadas, profesionales y medias en general, de las que había surgido la oposición a Sadat. A este sector, formado por lo que en términos amplios podemos calificar de “intelectuales”, junto al de los políticos autorizados, se les ofrecía la posibilidad o la ilusión de participar o influir en la política mediante la opinión. A este modelo de participación política mediante la opinión es al que hemos llamado, en las conclusiones de nuestro estudio sobre la época de Sadat, siguiendo a otros investigadores, modelo “churocrático”, a partir del concepto islámico de la *chura* o “consulta de los doctos o cualificados”

Para articular sus relaciones con el resto de los sectores sociales, el régimen de Mubarak mantuvo con ligeras modificaciones el sistema corporativista instaurado por Náser, intentando que tales sectores siguieran organizados de manera exclusiva según criterios socioprofesionales o comunitarios, e incorporados al Estado o sometidos al control estatal directamente o mediante la cooptación de sus dirigentes y la concesión de beneficios a sus miembros.

El elemento más puro del corporativismo naserista fue la existencia del sindicato único de trabajadores, La Federación General de Sindicatos de Trabajadores de Egipto (FGSTE), considerado poco menos que una institución estatal, mediante el que se gestionaban las relaciones entre los trabajadores y sus empleadores, entre los que el Estado era con mucho el principal. Estas relaciones funcionaban sobre la base del compromiso del Estado de defender y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores a cambio de su abstención de promover movimientos sindicales y reivindicaciones laborales al margen del sindicato oficial, así como de su implicación en movimientos políticos.

Aunque el régimen de Mubarak conservó en última instancia la mayor parte los derechos laborales formales de los trabajadores mantenidos desde la época de Náser, los intentos desde mediados de los 80 de suprimir algunos de ellos, las especulaciones acerca de la privatización de las empresas estatales y las frecuentes reducciones o retrasos de los componentes salariales variables llevaron a la dirección del FGSTE, presionada por sus bases, a presentar resistencias a las políticas gubernamentales. El régimen de Mubarak respondió a tales resistencias mediante un estrechamiento del control del sindicato a través de la sustitución de sus dirigentes y la cooptación de los nuevos mediante privilegios y prebendas. Ello llevó a un resurgir de las protestas laborales y de los intentos de constituir movimientos sindicales alternativos, que fueron frenados mediante una combinación de la represión y de la satisfacción de las demandas de los trabajadores. Como balance global de las relaciones entre el régimen de Mubarak y los trabajadores en la primera década de

aquel hay que concluir que el marco básico del modelo corporativista fue respetado por ambas partes: las protestas de los trabajadores para conservar sus derechos se mantuvieron casi siempre dentro de un marco pacífico y/o simbólico, y las autoridades tan solo recurrieron ocasionalmente a una represión severa, prevaleciendo la satisfacción de las demandas de aquellos. No obstante, el final de la década de los 80 mostró un incremento de las tensiones entre el los trabajadores y el régimen, en el que es importante destacar la gran protesta laboral de Mahala al-Kubra de septiembre de 1988 y su violenta represión. Durante la protesta, los trabajadores denunciaron a Hosni Mubarak como responsable último de la reducción de sus derechos económicos y de la ruptura del “contrato” implícito entre los trabajadores y el Estado, llegando a hacerlo en términos ofensivos para el presidente. En los últimos años de este periodo también se confirmó el alejamiento de gran parte de los trabajadores no solo de la dirección del FGSTE, sino también de los sindicalistas de izquierdas relacionados con el Tagammu, considerados demasiado proclives a aceptar los puntos de vista del poder.

Frente a lo que podría haberse esperado por la relativa influencia adquirida por la burguesía industrial y comercial privada en la vida económica, social y política, para contener su influencia política el régimen de Mubarak mantuvo el modelo corporativo, insistiendo en conservar como únicas estructuras representativas oficialmente reconocidas de los industriales, manufactureros y comerciantes, tanto del sector público como del privado, a la Federación Egipcia de Industrias y a la Federación Egipcia de Cámaras de Comercio, instituciones estatales controladas por el régimen. Estas organizaciones tenían la virtud de reunir por la fuerza a millones de personas de sectores con intereses en gran medida contrapuestos, derivados bien de la adscripción de sus actividades al sector público bien al privado, así como de la propia diversidad de las actividades económicas y del tamaño las empresas o negocios. No obstante, el régimen político permitió la aparición de asociaciones de la alta burguesía de los negocios, en particular la Asociación de Hombres de Negocios Egipcios, formada por unos pocos cientos de personas muchas de ellas exdirigentes políticos, y estableció con ella una reducción informal fluida. Como veremos en las décadas siguientes, esta era la semilla de una nueva forma de relación con los más elevados sectores del mundo empresarial que caracterizaría el final de la era Mubarak.

Las relaciones del poder político con los sindicatos profesionales también se mantuvieron en el marco del modelo corporativista general, pese a que algunos de ellos conocían una evolución interna reflejo de la evolución política del país. Los profesionales, en particular abogados, periodistas, médicos e ingenieros formaban parte del sector de la población al que se dirigía la apertura política, pues de ellos se nutrían en gran parte las propias elites gobernantes y la elites intermediarias a las que hemos hecho alusión más arriba, ya fuera como elites favorables al poder político o como “contraelites” o “elites de oposición”. La existencia de estas elites de oposición siempre se había manifestado en el

seno de los consejos de dirección de los sindicatos, y en los últimos años de mandato de Sadat alcanzaron la posición hegemónica en el Sindicato de Abogados y el de Periodistas, lo que les llevo a ser sometidos expeditivamente al control gubernamental.

Durante el primer periodo de Mubarak el Gobierno contuvo la emergencia de las fuerzas políticas de oposición en casi todos los consejos de dirección sindicales otorgando beneficios a algunos sindicatos (como el de ingenieros) o a sus miembros (como en el caso del de periodistas), movilizandolos a sus partidarios para mantener el control sobre aquellos, y en particular sobre la figura del síndico, y propiciando los enfrentamientos internos que le permitían intervenir administrativa o judicialmente. No obstante, en general se registró un ascenso de la representación de la oposición en los órganos directivos, y en particular de la corriente islamista: en 1984 se hizo con el control del Consejo de Dirección del Sindicato de Médicos para no abandonarlo en el resto de la década, y expandió su influencia en otros colectivos obteniendo representación en sindicatos en los que nunca la había tenido. No obstante, de manera significativa, los islamistas cedieron la presidencia del Sindicato de Médicos a un personaje progubernamental, respetando las reglas del juego del modelo corporativista como lo hacían el resto de los sindicatos. En contrapartida, el poder político toleró esta pluralización de la dirección de los sindicatos, lo cual es reflejo, una vez más, de su actitud ante el sistema político.

En el resto de los ámbitos del corporativismo, el régimen de Mubarak mantuvo su control de las instituciones islámicas y recuperó las buenas relaciones con la Iglesia copta de la época naserista, convirtiendo al papa Chenuda III en un sólido aliado que manifestó en repetidas ocasiones su apoyo incondicional a Mubarak mientras intentaba proponerse como único representante no solo de la Iglesia copta, sino también de la comunidad copta o los coptos, hasta el punto de intentar disuadir a estos de articular sus demandas político-comunitarias por vías políticas propias ajenas a las de la Iglesia.

10.6 DE LA FIGURA BUSCADA DEL “PRÉSIDENTE PADRE” AL “PRESIDENTE ÁRBITRO”

Mubarak pretendió hacer de la necesidad virtud, y de esta de nuevo necesidad, y presentarse como un árbitro indispensable entre sectores de la sociedad con intereses y visiones ideológicas muy diferentes que parecían irreconciliables por sí solas.

Recordemos que al menos hasta entrada la segunda mitad de los ochenta, las discusiones en los medios políticos egipcios acerca del nuevo régimen egipcio que se dibujaba giraban, en términos taxonómicos rudimentarios, en torno a si Mubarak era un “naserista” o un “sadatista”. A finales de los 80, más útil que aceptar la afirmación del presidente de que no era “ni de Náser de Sadat”, era concluir que era una mezcla de ambas cosas.

Mubarak no podía seguir adelante con el *infitah* ni mantenerlo en la configuración en la que lo encontró no solo por el rechazo y las desigualdades sociales que había generado, sino también porque había introducido importantes desequilibrios económicos (gran déficit de la balanza comercial, daño al tejido productivo egipcio, inflación) sin aportar más beneficios que una importante afluencia de capitales que había sido mal aprovechada. Recuperar un mayor control de la economía por parte del Estado, por la vía de la planificación, era necesario, incluso aunque fuera para dar un nuevo enfoque a la apertura económica, al “*infitah* productivo” que Mubarak señaló como su objetivo, en detrimento del “*infitah* especulativo”.

El “recentramiento” de la política económica, por así decirlo, entre Náser y Sadat, o entre “estatistas” y “liberalizadores”, tenía un correlato en la configuración de las elites dirigentes, y en la atención prestada a los diversos colectivos socioeconómicos. Sin atacar públicamente a la burguesía en general, ni siquiera a la del *infitah* -y manteniendo entre bambalinas buenas relaciones con ambas, presentes en el Parlamento y en los círculos cercanos al poder-, Mubarak sí pretendía ser el defensor de “los de ingresos limitados” -en expresión que hemos explicado- frente a las amenazas que supuestamente se cernían sobre ellos, cuyo origen no explicitaba pero que sin duda provenían de parte de dicha burguesía. Como hemos asimismo mostrado, aunque los Gobiernos egipcios mantuvieron un considerable nivel de gasto público en los ochenta, tal gasto benefició más a los empleados en general, y a los empleados estatales en particular, que a las “clases más desfavorecidas” o los pobres, con toda probabilidad porque aquellos primeros componían un sector más “peligroso” que estos segundos desde un punto de vista político. No obstante, el gasto público seguía una política de apariencias, pues mientras se mantenía una constante aunque moderada elevación de los salarios, y un cierto nivel de nuevo empleo estatal, las subvenciones a los productos de primera necesidad se reducían de manera discreta pero igualmente constante, y el Gobierno utilizaba la emisión de moneda, el “impuesto inflacionario”, para reducir el poder adquisitivo real de la mayoría de los ciudadanos, y con ello el gasto del Estado.

Finalmente, el presidente se presentaba como el árbitro entre facciones ideológicas abiertamente enfrentadas en el pasado: naseristas/sadatistas, izquierdistas/wafdistas, izquierdistas/islamistas. El imaginario de tales enfrentamientos, aunque fresco en la memoria de los antiguos adversarios, era hábilmente mantenido mediante los partidos y los dirigentes de estos, “seleccionados” para “representar” a la sociedad egipcia y que, merece la pena insistir, constituían un “museo de la historia egipcia”. Tal vez fueran los propios sectores de la sociedad politizados los que sufrieran una suerte de “encierro psicológico” en su historia pasada, pero el nuevo poder político egipcio no parecía querer sacarlos de él, sino presentarse como una especie de síntesis entre el liberalismo de la época monárquica, el estatismo de la época de Náser y el *infitah* de la época de Sadat, aderezado todo ello con

las esencias de islamismo que la corriente dominante en la sociedad le imponía. El presidente se presentaba como árbitro por encima del bien y del mal sobre unas estructuras de poder y un sistema político en gran medida incongruentes.

10.7 EL “ÉXITO” DE MUBARAK AMENAZADO

El éxito de Mubarak hasta 1987 en contener a las diversas corrientes y sectores sociales que se habían opuesto a Sadat, ganándose en ocasiones su apoyo y en otras su consentimiento, comenzó a parecer amenazado a partir de este año. Las corrientes islamistas radicales habían comenzado a movilizarse en los meses previos, exigiendo enérgicamente y con ribetes violentos mayores concesiones a sus propuestas políticas, pues el régimen político mubarakista había mantenido durante el primer lustro de los 90 la ilusión de que pretendía implementar la *charía*. La dura respuesta represiva del Gobierno inauguró una espiral de violencia cuyo primer gran hito fueron los atentados de 1987 contra grandes figuras del poder.

Por su parte, los partidos de la oposición y las fuerzas políticas asociadas a ellos (como los Hermanos Musulmanes) se mostraron insatisfechos con el avance de la democratización, y en particular con el mantenimiento de las limitaciones de las libertades políticas y del control gubernamental de las elecciones. El recurso utilizado para mostrar tal insatisfacción fue el boicot de diversas elecciones, y en particular el de los principales partidos a las legislativas de 1990, de manera un tanto incongruente con sus posturas anteriores y, como veremos, posteriores. Se trataba de un recurso “deslegitimizador”, de una advertencia al régimen.

Subyaciendo a esta situación se encontraba la proximidad del Estado egipcio a la bancarrota financiera. Sorteada en 1987 mediante la finta hecha a las instituciones financieras internacionales de su disposición a llevar a cabo un programa de ajuste estructural pactado, y el embolsamiento de las ayudas financieras que aquellas le facilitaron, una vez agotado el efecto de tales ayudas en 1990 Egipto se encontraba de nuevo en una situación económica muy precaria. Ello llevó al régimen a adoptar desde ese año, de manera más convencida que en otras ocasiones, la senda de la liberalización económica.

IV. EL RÉGIMEN DE MUBARAK

2. IMPASSE POLÍTICO Y LIBERALIZACIÓN ECONÓMICA BAJO EL SIGNO DEL ENFRENTAMIENTO ARMADO CON EL ISLAMISMO RADICAL (1991-2000)

INTRODUCCIÓN. El porqué de una etapa diferenciada	551
1. La Crisis del Golfo y la reducción de la deuda egipcia	554
1.1 Reacciones políticas y sociales a la Guerra del Golfo de 1991	554
1.2 El precio de un ajuste estructural pactado	557
2. El Estado ante el ascenso del islamismo	559
2.1 El enfrentamiento armado entre los grupos islamistas radicales y el Estado	560
2.1.1 Diversificación de los objetivos y procedimientos de los grupos islamistas.....	561
2.1.2 La actuación represiva del Estado	563
2.1.3 La violencia islamista y sus causas. Oclusión del diálogo y de la soluciones.....	564
2.1.4 Violencia islamista, violencia interconfesional y violencia social	567
2.2 La hegemonía islamista en los sindicatos profesionales	569
2.2.1 Orígenes y estrategia	570
2.2.2 Los intentos del poder de frenar el avance islamista en los sindicatos.....	573
2.3 El control de las mezquitas y las escuelas	575
2.4 La batalla de los intelectuales	576
2.4.1 El caso Fuda/Gazzali	576
2.4.2 Un debate jurídico-religioso. La difusa y confusa autoridad religiosa en el islam sunní	579
2.4.3 El caso Nawal al-Saadawi o el maltrecho movimiento feminista	581
3. La emergencia de la “sociedad civil” egipcia.....	583
3.1 Un concepto difuso y controvertido	583
3.2 Sociedad civil, liberalismo político y economía de mercado	584
3.3 Relaciones con las asociaciones civiles, el islamismo y el Estado.....	587
3.4 Sociedad civil, intelectuales y Estado.....	591
3.4.1 <i>Churocracia</i> , mediación y cooptación.....	591
3.4.2 La controvertida censura de lo escrito.....	594
4. Los partidos de la oposición: entre el control, el descrédito y la auténtica oposición. 595	
4.1 Los nuevos partidos	595
4.1.1 El sometimiento del Joven Egipto	596
4.1.2 La contención del naserismo: el Partido Naserista Árabe Democrático	597
4.2 Desconocimiento y descrédito populares de los partidos.....	598
4.2.1 Oposición de boquilla, oposición vociferante y auténtica oposición	598
4.2.1.1 La libertad de expresión y la prensa vociferante	599
4.2.1.2 El <i>laissez-faire</i> del poder con el Wafd y el Tagammu	601
4.2.1.3 El Partido del Trabajo, látigo del poder político.....	602
4.2.1.4 La contención de los Hermanos Musulmanes	603

4.2.2 Elites y vulgo: una doble encuesta de opinión	604
4.2.3 Más razones de la escasa eficacia y atractivo de los partidos	608
5. El plebiscito presidencial de octubre de 1993: un imperioso “sí”	609
5.1 Las posturas de los partidos de la oposición	610
5.1.1 El discurso del “sí”	610
5.1.2 El discurso del “no” rotundo	610
5.1.3 El discurso del “no” tibio	612
5.1.4 Las evasivas de los Hermanos Musulmanes	614
5.1.5 El común respeto por “la persona” del presidente	614
5.2 La desaforada campaña por el “sí”	615
5.3 Participación y resultados oficiales	619
5.4 La dimensión cualitativa	621
6. El bienio 1994-1995: estrechando el control. Las elecciones legislativas	624
6.1 Un “liberalismo Hyde Park”. El diálogo nacional de 1994.....	625
6.2 La lucha contra el islamismo armado. Eficacia sin barreras	628
6.3 Más sociedad civil y menos política	630
6.4 Ahogando las vías de participación política formal	632
6.4.1 Neutralización de los sindicatos profesionales y primeros juicios a los Hermanos Musulmanes	633
6.4.2 La Ley de Delitos de Prensa, espada de Damocles sobre los periodistas	635
6.5 El caso Abu Zeid. El islamismo radical en el Estado	637
6.6 Las elecciones legislativas de 1995.....	640
6.6.1 Una comisión de seguimiento inusitada.....	642
6.6.2 Aspectos novedosos del proceso electoral	643
6.6.2.1 Sistema y normas electorales	643
6.6.2.2 Incremento del número de candidatos.....	644
6.6.2.3 Irregularidades habituales y aumento sin precedentes de la violencia.....	644
6.6.3 Participación, resultados e impugnaciones: el poder judicial ignorado	646
6.6.4 Análisis del proceso electoral y de los resultados	648
6.6.4.1 La actitud del régimen político. Lógica de imagen, lógica política y lógica “sociológica”. Las elecciones como “política de distribución”	649
6.6.4.2 Lógica de la victoria, lógica de voto sectorial, lógica de la potencia. Desideologización y patrimonialización de las elecciones	651
6.6.4.3 Las actitudes de los partidos de la oposición y las recompensas del poder político	652
7. Las reformas económicas: fines y efectos inmediatos	654
7.1 La liberalización contenida (1991-1995)	657

7.1.1 La mejora del déficit fiscal. Las rentas como principio y fin	657
7.1.2 Incremento del gasto público: prioridad a los “gastos de control político”	658
7.1.3 Privatizaciones y liberalizaciones postergadas por miedo a la contestación social	662
7.1.4 Incremento del paro y la pobreza. Avisos mutuos entre los obreros y el Gobierno	663
7.2 El lento pero firme avance de la liberalización (1995-1999)	666
7.2.1 Política financiera a costa de la sociedad	666
7.2.2 Privatizaciones, claros y sombras	668
7.2.3 La liberalización de los arrendamientos agrícolas: contrarreforma y desposesión	670
7.2.4 El empleo: nuevos desequilibrios por sectores y avance del paro juvenil.....	671
7.2.5 Descenso desigual de la pobreza e incremento de la desigualdad.....	673
7.2.6 El cese de Kamal al-Ganzuri	674
8. La crisis del régimen político. Primeros indicios (1996-2000)	675
8.1 Al-Wasat, o el intento de fundar un partido islamista “moderado”	676
8.2 Los medios de comunicación: represión y diversificación.....	678
8.2.1 La reforma de la Ley de Delitos de Prensa. Un triunfo amargo	678
8.2.2 La pluralidad de la prensa: divisiones del régimen político y ascenso de la burguesía privada	680
8.2.3 El nacimiento de la prensa privada.....	681
8.2.4 La reorganización del control de la prensa y el lanzamiento del Nilesat	684
8.3 Freno a las ambiciones políticas de la gran burguesía de los negocios	686
8.4 El abandono de la actividad armada por el islamismo radical	688
8.5 La consolidación de las ONG	690
8.5.1 Legislación para controlar las ONG	690
8.5.2 La transición de la primera a la segunda generación de las ONG	691
8.6 Aumento de la coerción política y social.....	694
8.6.1 El caso Al-Kocheh. Un ejemplo paradigmático de ONG, prensa y régimen ante la violación de los derechos humanos	694
8.6.2 Persecución de los personajes molestos de la sociedad civil.....	696
8.6.3 Descontento de la <i>intelligentsia</i> y aumento de la violencia social.	697
8.6.4 Los partidos desaparecidos. Los “jóvenes” buscan reorganizarse.....	700
9. Las elecciones legislativas del año 2000	702
9.1 La sorpresa del Tribunal Constitucional: supervisión judicial de las elecciones	702
9.2 Los candidatos	703
9.2.1 Los intentos fallidos de impedir la participación de los HHMM	704
9.2.2 Repetición del fenómeno de los “disidentes electorales” del PND	705
9.3 El proceso electoral	706
9.3.1 Disminución de la violencia	707

9.3.2 Participación, fraude y peso de los recursos económicos privados.....	707
9.4 Los resultados.....	708
9.4.1 Victoria de los “independientes” del PND y triunfo relativo de los HHMM.....	708
9.4.2 Análisis de los resultados: aviso a la dirección del PND y “privatización” de las candidaturas.....	710
10. CONCLUSIONES	713
10.1 La violencia del islamismo radical. Desafío y ventana de oportunidad para el régimen	713
10.2 Incremento de la autonomía y el control político del Estado y liberalización pausada gracias al “milagro” financiero	714
10.3 Secularistas frente a islamistas. Gana el poder constituido.....	716
10.4 “Sociedad civil” ante el cierre de la “sociedad política” y frente a la “sociedad islamista”	717
10.5 La libertad de expresión demediada y la <i>churocracia</i> como únicos “principios activos” de la liberalización política	719
10.6 Hacia la crisis del régimen	721

INTRODUCCIÓN. El porqué de una etapa diferenciada

El periodo 1991-2000 constituye una etapa diferenciada del mandato de Hosni Mubarak por diversas razones. En el terreno político, el año de 1990 había concluido con el boicot de los principales partidos de la oposición a las elecciones legislativas. En las elecciones de 1995, el Gobierno impediría la participación de los Hermanos Musulmanes, y el resto de los partidos de oposición obtendrían una representación mucho menor que en las elecciones celebradas en los años 80. Entre las elecciones de 1990 y 1995 se produjeron otros indicios claros de la voluntad del régimen político de cerrar el sistema político más de lo que lo estaba anteriormente. En octubre de 1993 Mubarak incumplió su promesa de no presentarse como candidato a un tercer mandato presidencial. Antes y después del plebiscito, el régimen adoptó medidas legislativas destinadas a estrechar el control de los sindicatos profesionales, en los que se había confirmado la hegemonía de las corrientes islamistas, y también del periodismo. En términos de la evolución del sistema político formal, el periodo se cerró con una nueva elección de Hosni Mubarak como presidente (1999) y con elecciones legislativas.

Dos hechos de otro orden marcaron, si no determinaron, la evolución del sistema político. Uno fue el ajuste estructural de la economía, emprendido por fin decididamente en 1991. Otro, la extensión e intensificación de la actividad armada, terrorista en numerosas ocasiones, de algunos sectores del islamismo radical.

El ajuste estructural de la economía y su liberalización fue abordado de manera cauta y progresiva, con la ayuda financiera exterior y la reducción de un 50% de la deuda exterior egipcia tras la Guerra del Golfo de 1991. Así, hasta finales de la década no se produjo una liberalización sustancial de la economía, traducida en la privatización de cerca del 50% de las empresas del sector público; no obstante, el restante 50% seguía en manos estatales, y ni el sector bancario público ni las principales empresas del Estado por número de trabajadores se habían visto afectados; tampoco se había modificado en lo esencial la legislación laboral naserista. Por todas estas razones, los efectos sociales de la liberalización no se dejarían sentir en toda su extensión hasta los últimos años del siglo XX, cuando además Egipto cayó en una nueva crisis fiscal. Coincidió además con el fin del enfrentamiento del Estado con el islamismo radical, cuyo auge había contribuido a contener la oposición política y social al régimen político y cuyo fin no sería acordado entre las partes hasta 1998.

Aunque había comenzado en 1987, en la primera mitad de la década de los 90 la actividad armada del islamismo radical se incrementó exponencialmente y se diversificó, poniendo en jaque a las fuerzas de seguridad y dañando a una de las principales fuentes de

ingresos del país, el turismo. La respuesta del Estado al desafío armado fue extremadamente dura, violando en numerosas ocasiones la ley y los derechos humanos y retroalimentando la espiral de la violencia. Pero el enfrentamiento entre el islamismo radical y el Estado se extendió al resto de las fuerzas políticas y parte de la sociedad, provocando una polarización mayor entre islamistas y “secularistas”.

Finalmente, en este periodo hay que destacar una evolución mayor observable en el ámbito político, ligada y en cierta forma dependiente de la evolución de la actividad armada del islamismo radical y de las reformas económicas. A lo largo de la década se produjo una proliferación de organizaciones no gubernamentales con vocación de influencia en la política, o de lo que se denomina “la sociedad civil”, una expresión controvertida al menos en el contexto egipcio. Alojadas en los intersticios del sistema legal, los fundadores y miembros de estas asociaciones buscaban un espacio desde el que poder expresarse al margen de los desacreditados partidos políticos y sus medios de prensa, yendo en numerosas ocasiones más lejos que aquellos en sus análisis, denuncias e iniciativas. No puede dejarse de prestar atención a la tolerancia del régimen con ello en la mayor parte de los casos. Es evidente que esta tolerancia ha de inscribirse en el contexto del enfrentamiento del Estado con el islamismo radical, siendo como eran la mayor parte de estas organizaciones “secularistas”. No obstante, y de manera tal vez más significativa, semejante tolerancia se debe inscribir en el modelo de participación política de esta segunda etapa del mandato de Mubarak que desde principios de los 90 ya se identificaba con toda claridad: creciente libertad de expresión, aun con sus limitaciones, en los medios escritos para las elites sociales educadas y profesionales, pero exclusión de toda posibilidad de promover un cambio político a través de las instituciones o de la “conexión con las masas”. La autorización ocasional de nuevos medios de comunicación privados en la segunda mitad de los 90, aunque controlada por el poder político, se inscribiría en este modelo al tiempo que era acorde con la progresiva liberalización de la economía y la gestión por el régimen de los equilibrios entre sus diversos apoyos.

Sin embargo, entre 1998 y 2000 el régimen político dio marcha atrás en su tolerancia con la “sociedad civil” y con las demandas de la burguesía privada de mayor participación en el poder político, y se embarcó en un intento de reordenar y someter a su control a los nuevos actores políticos y sus modalidades de participación. Pero a esas alturas los síntomas de malestar social y económico eran evidentes y auguraban el fin o un notable deterioro del amplio consentimiento con que había contado el poder mubarakista en las excepcionales circunstancias de enfrentamiento con el islamismo radical. Las elecciones legislativas del año 2000 supusieron un punto de inflexión y tránsito hacia una nueva época. La supervisión judicial del proceso de votación y recuento, implementada por primera vez bajo el mandato de Mubarak, convirtieron los resultados, a pesar de la

persistencia de ciertos tipos de fraude, en los más representativos de los veinte años de presidencia de Mubarak. Los resultados oficiales mostraron por primera vez de manera institucional que en las elecciones no participaba la mayor parte de la población. El voto expresado, por su parte, reveló por un lado la constancia del apoyo social a los Hermanos Musulmanes, a pesar de que el régimen había intentado someterlos por todos los medios (detenciones, juicios militares, exclusión de las elecciones). Por otro lado, mostró la fragilidad y falta de cohesión de la alianza social gobernante, así como la imparable ascendencia dentro de aquella de la alta burguesía privada.

1. LA CRISIS DEL GOLFO Y LA REDUCCIÓN DE LA DEUDA EGIPCIA

1.1 REACCIONES POLÍTICAS Y SOCIALES A LA GUERRA DEL GOLFO DE 1991

La crisis internacional desatada por la invasión de Kuwait por parte de Irak el 2 de agosto de 1990 situó al conjunto las fuerzas políticas egipcias, como a las del conjunto de los países árabes, en una difícil situación. El “carácter árabe e islámico” de ambos países competía a la vez con la muy diversa naturaleza de sus regímenes, mientras que la coalición militar que se organizó para desalojar a Irak del país vecino -en gran parte desde Arabia Saudí, lugar de emplazamiento de los principales lugares santos del islam- se distinguía por su naturaleza esencialmente “no islámica” para unos, e “imperialista” para muchos otros. Todo ello situó a casi todas las fuerzas de oposición egipcias ante contradicciones que disminuyeron considerablemente su capacidad de reacción ante la intervención armada en Kuwait e Irak en enero y febrero de 1991.

El Gobierno egipcio no dudó en alinearse de manera incondicional con la posición de los países occidentales y de los países árabes del Golfo, y comprometer su apoyo militar a la coalición internacional. Sus dos principales preocupaciones eran la respuesta interna a esta decisión y el retorno voluntario o forzado de los cientos de miles de trabajadores que aún quedaban en Irak. Ya desde la conclusión de la guerra entre Irán e Irak en 1988 habían retornado al país más de un millón de trabajadores, directamente expulsados o empujados por el maltrato recibido¹. Los países del Golfo, y en particular Kuwait, prometieron al Gobierno egipcio acoger de manera preferente a trabajadores egipcios tras la liberación del territorio ocupado.

Pero la razón económica principal para que Egipto aceptara integrarse en la coalición fue la promesa por parte de las instituciones financieras internacionales y de algunos de sus principales países acreedores de reducir en un 50% la abultada deuda exterior de Egipto, cercana a los 50.000 millones de dólares, que se materializaría cuando el Gobierno demostrara que estaba seriamente comprometido a implementar el ajuste

¹ El 7 de noviembre de 1989 la edición internacional de *Al-Ahram* afirmaba que más de 10.000 trabajadores egipcios retornaban cada semana de Irak ante las restricciones impuestas por el Gobierno de aquel país a las transferencias de dinero al extranjero. Según el mismo diario, un millón de trabajadores habían retornado ya desde junio de 1988. Por su parte, el diario *Al-Ajbar* informaba el 8 de noviembre de la llegada a Egipto de 102 cadáveres de egipcios procedentes de Irak con heridas de bala. La noticia no sería desmentida por el Gobierno egipcio, aunque se negara a dar explicaciones al respecto.

estructural económico demorado durante largo tiempo.

El partido Wafd no experimentó contradicción alguna, apoyando desde un primer momento la política del Gobierno. El partido Tagammu se limitó en un principio a pedir la retirada de Irak de Kuwait, sin condenar la invasión, para luego expresar explícitamente su condena ante las críticas recibidas. El Tagammu insistió en la necesidad de encontrar “una solución árabe” y rechazó *pro forma* la intervención militar extranjera y la participación de Egipto en ella, pero sin insistir demasiado en sus críticas ni buscar la movilización, en un contexto en el que se aprestaba a concurrir como único partido de la oposición a las elecciones legislativas de 1990, y en el que numerosas fuerzas de izquierdas árabes se manifestaban abiertamente contra la intervención (IEA 438-445). Las fuerzas islamistas consentidas fueron, sin embargo, las que más dejaron traslucir sus contradicciones, de las que Jean Pierre Luizard (1990) dio exhaustiva cuenta.

La diversidad de opiniones expresadas por los dirigentes de los Hermanos Musulmanes desde los primeros días de la invasión, aun dejando claro su rechazo a la invasión de Kuwait, llevó al guía general de la Hermandad a prohibir a sus miembros, con excepción de a su portavoz oficial, Maamún al-Hudeibi, que realizaran declaraciones al respecto². La posición oficial de la organización quedaría fijada en la defensa de una solución árabe, la aceptación de la participación de tropas egipcias únicamente en el marco de un contingente árabe e islámico³, y el rechazo de toda intervención de fuerzas estadounidenses y occidentales. No obstante, en el contexto de la búsqueda de esa solución árabe, y de los intentos de mediación en los que participó -empujada por el Partido del Trabajo y en particular por Adel Husein-, la dirección de la Hermandad pareció mostrar un acercamiento a las posturas iraquíes que propició el que se multiplicaran las disensiones en el seno de la organización y entre aquella, las otras corrientes islamistas egipcias y la mayor parte de los ulemas, manifiestamente adversos a la posición iraquí. En cuanto al Partido del Trabajo (Gómez García 1996: 182-190), su secretario general y director de *Al-Chaab* articuló, como siempre, una elaborada argumentación para sus posturas, en su resultado similares a las de los Hermanos Musulmanes pero preñadas de matices sustanciales que terminaron convirtiendo al partido en el más serio opositor a la intervención armada y atrayendo a sus posiciones, como hemos señalado, a la dirección de la Hermandad. Husein mostró una radical oposición a la intervención armada desde consideraciones estratégicas e introdujo la cuestión del desequilibrio del reparto de la riqueza para llegar a proponer una solución global islámica que incluyera la creación de una auténtica cooperación árabe en todos los terrenos. Sin embargo, sus intentos de

² *Ruz al-Yusuf*, nº 3427, 3 de septiembre de 1990. Cíto por Luizard (1990: 200, n. 114)

³ Declaraciones de Maamún al-Hudeibi, *Al-Chaab*, 18 de septiembre de 1990.

mediación y de una “solución islámica”, junto a los de otros líderes islamistas como el sudanés Hasan al-Turabi, el tunecino Rachid al-Ganuchi o el argelino Abbás al-Madani, fueron desoídos por Arabia Saudí y, por supuesto, por Estados Unidos.

En lo que respecta a los grupos islamistas radicales, como el conocido como Al-Yihad o las Gamaat Islamiyya, adoptaron una postura estrictamente neutral frente a Irak y Kuwait: estaban por igual contra los regímenes de ambos países por considerarlos, según explicitó Abud al-Zumur (dirigente de Al-Yihad) en un comunicado enviado desde la cárcel, por igual enemigos del islam, fracasados y peones de Estados Unidos. Al-Zumur rechazaba, incluso, la idea de proponer cualquier solución para la crisis. El resto de los grupos radicales yihadistas ni siquiera se tomaron la molestia de emitir una postura oficial, limitándose sus líderes espirituales a atacar a ambos regímenes desde sus mezquitas. No obstante, cuando se confirmó la decisión de enviar tropas extranjeras a la zona comandadas por Estados Unidos, el discurso de dichos grupos cambió, orientándose a rechazar abiertamente la presencia de tropas extranjeras, calificadas por algunos de “cruzados” en tierras del islam (IEA 1990: 437-438).

Finalmente, es de destacar por su sencillez -aunque en esencia no fuera muy diferente de la de Al-Azhar- la posición de Gamaa Ansar al-Sunna al-Mohammediyya, uno de los principales grupos salafíes. Según su líder en esta época, el jeque Mohammed Ali Abdel Rahim, el recurso a las tropas norteamericanas por parte de Arabia Saudí era normal entre aliados. El jeque afirmaba que “el islam prohíbe la violación de los tratados y los acuerdos” y recordaba que el profeta Mahoma también había firmado acuerdos con infieles⁴. Como se puede ver, el jeque Abdel Rahim no impugnaba, a diferencia de los movimientos yihadíes, la condición de buenos musulmanes de los dirigentes saudíes. El grupo Ansar al-Sunna sería acusado de manera recurrente en medios egipcios de recibir financiación de Arabia Saudí y de otros países árabes del Golfo.

Las dificultades para tomar una posición clara ante una crisis de esta naturaleza, motivadas por las disensiones internas y tal vez por el miedo a las reacciones que pudiera provocar por parte del poder político, se manifestaron también en las posturas de los sindicatos profesionales. Meses después de la invasión de Kuwait, el 22 de diciembre, el Comité para la Coordinación de la Acción Intersindical publicó un comunicado en el que denunciaba la invasión, insistía en la necesidad de encontrar una solución pacífica y rechazaba toda intervención norteamericana y occidental en el Golfo. Dicho comunicado fue firmado por 10 de los 22 sindicatos. Sin embargo, pocas semanas después un comunicado similar tan solo fue ratificado por 7 sindicatos (Fahmy 2002: 142).

⁴ “Un acte de pillage”, *Al-Tawhid*, Rabi` Awwal del año 1411 de la hégira. Traducción francesa en Luizard (1990: 230-233).

En cuanto al temor a una reacción popular masiva contra la intervención armada no se vio justificado hasta bien avanzada aquella, que comenzó el 17 de enero de 1991. En febrero de se produjeron poco más de media docena de manifestaciones, protagonizadas casi todas por estudiantes, en El Cairo, Alejandría, Zagazig, Al-Mansura, Minia y Asiut. Las más numerosas fueron las manifestaciones en El Cairo del 13 y el 25 de febrero, que reunieron cada una a 10.000 personas. Las autoridades respondieron con dureza, como ya habían advertido que harían, y dos estudiantes fallecieron, uno en el Cairo el 25 de febrero y otro en Zagazig pocos días más tarde, además de producirse decenas de heridos y cientos de detenidos (IEA 1991: 446-447). La guerra concluyó el 28 de febrero, salvando al Gobierno de un seguro incremento de la tensión de haberse prolongado.

1.2 EL PRECIO DE UN AJUSTE ESTRUCTURAL PACTADO

Cuando, como ya hemos señalado en el capítulo III 6.1, al comienzo de los años 90 Egipto se había convertido, en palabras de Soliman, en “un mendigo internacional”, y el Banco Mundial definió su situación como “precaria”, un experto económico citado también por el autor sin mencionar su nombre señaló: “Llevamos veinte años diciendo que Egipto está al borde de la bancarrota, pero siempre se produce un milagro que salva la economía. Esta vez no le veo salida a la crisis” (Soliman 2011: 44-45).

El milagro, sin embargo, se produjo en la forma de la crisis de Irak/Kuwait, y el Gobierno egipcio, al comprometer su intervención en la guerra contra el primero, obtuvo un salvavidas financiero como nunca había tenido. De un total de 50.000 millones de deuda externa, los países del Golfo y Estados Unidos condonaron a Egipto sin más contrapartidas 14.000 millones de dólares, mientras que el Gobierno obtuvo la promesa de la condonación de la mitad del saldo restante (18.000 millones) y de la reestructuración de la otra mitad, así como generosas ayudas financieras a cambio de la firma de un acuerdo de estabilización y ajuste estructural con el FMI, concluido entre mayo y julio de 1991. En total, el país obtenía una ayuda de 17.250 millones de dólares, 300.000 por egipcio, para sanear su economía (Blin 1992: 13-14).

En realidad, Egipto había tomado algunas medidas de ajuste destinadas a reducir su déficit fiscal en 1990 y 1991, antes de la firma del acuerdo, pero la ayuda financiera le iba a permitir profundizar en él afrontando con cierta comodidad sus costes sociales. Junto a los créditos y préstamos para los dos primeros años de los programas de ajuste y estabilización, el país obtenía un Fondo Social de Ayuda al Ajuste de 609 millones de dólares, que sería destinado a paliar los efectos de futuros despidos.

En abril de 1991, antes de la firma del acuerdo, además de devaluar la libra el Gobierno había introducido un impuesto sobre el valor añadido, y ambas medidas serían

las principales responsables de que los ingresos del Estado aumentaran considerablemente en los años siguientes. Entre 1990-1991 y 1993-1994 el déficit público pasó del 6% al 0,6%, la mayor reducción del déficit en Oriente Medio y el Norte de África, tras la de Argelia, en estos años, a lo que se unía que el Gobierno había logrado controlar la inflación (Soliman 2011: 45). No obstante, ayudado por esta rápida mejora, y temeroso de la reacción social, más aun en el marco de la conflictiva situación política generada por la actividad armada del islamismo radical, el Gobierno era muy cauteloso con sus medidas de estabilización. El impuesto del IVA solo fue aplicado a los mayoristas, exportadores y manufactureros, mientras que su aplicación a los minoristas se fue retrasando *sine die*. De hecho, según Soliman (2011: 110-113), la aplicación parcial del IVA fue la única medida económica significativa que entró en aplicación en la primera mitad de los 90.

En cuanto a las medidas de ajuste, su piedra angular habría de ser la reducción del sector público tanto en número de empresas como en el número de trabajadores que quedaran dentro de él. La Ley 203 de 1991 relativa a las Empresas del Sector Público (قانون شركات قطاع الأعمال العام) abrió la puerta a la posibilidad de privatizar las empresas públicas, pero en principio esa era solo una posibilidad teórica, pues el texto se centraba en reorganizar el sector público en *holdings* que serían de titularidad pública a un mínimo del 51%, si bien su gestión se transferiría a manos privadas. Las empresas públicas podrían ser reestructuradas o liquidadas. Como señaló Blin, la Ley 203 era una ley transitoria destinada a “preparar” poco a poco a los partidarios de un sector público dominante (1992: 23). Las leyes definitivas para reorganizar la actividad económica pública y privada se anunciaron para finales de 1993.

En cuanto al empleo público, según el acuerdo se estimaba que entre 1991-1992 y 1992-1993 un 10% de los empleados de las empresas públicas se verían afectados por la “compresión de efectivos”, 40.000 al mes desde principios de 1992. Con la ayuda del Fondo Social al Ajuste, un 50% recibirían un subsidio de paro por el valor del 80% de su salario, y un 20% pasarían a la jubilación anticipada cobrando un 60% de su salario (Blin 1992: 25). La aplicación de esta medida sería así mismo muy ralentizada, al igual que la elaboración de un nuevo Código del Trabajo que en 1994 aún no había visto la luz. No obstante, en virtud de la Ley 203 de 1991 se abrogó la Ley 48 que establecía la igualdad de remuneración en todas las empresas públicas, pasando las direcciones de las empresas a ser libres de fijar los salarios de sus empleados.

El Gobierno consiguió, según Posusney “mediante un aumento del nivel de la coerción combinado con sus habituales tácticas de cooptación”, sin olvidar las concesiones a las demandas generales de los trabajadores, que la dirección de la FGSTE, representante oficial de los trabajadores egipcios, aceptara la Ley 203 de 1991, y se implicara en intentar convencer a los trabajadores de que las posibles privatizaciones no dañarían sus intereses.

De esta manera, los años 1992 y 1993 transcurrieron con una relativa quietud, a pesar de las protestas de la izquierda sindical y de los trabajadores de algunas empresas, pocas, que habían visto reducidos sus incentivos (Posusney 1997: 223-234).

De esta manera, los dos primeros años de efectos de la reforma pasaron casi inadvertidos para los trabajadores y el público en general.

2. EL ESTADO ANTE EL ASCENSO DEL ISLAMISMO

En la antesala de las elecciones legislativas de noviembre-diciembre de 1990 las principales fuerzas políticas consideraron que Mubarak estaba incumpliendo sus promesas de conducir la “transición hacia la democracia”, o al menos que la apertura política se había detenido. Las fuerzas integradas en el sistema político decidieron entonces, en su mayoría, boicotear dichas elecciones, como habían hecho poco antes con las elecciones locales (1988) y las de la Asamblea Consultiva (1989), de menor trascendencia (véase el capítulo III 7.3). Por su parte, algunos sectores del islamismo radical ya habían descalificado antes el sistema político pluripartidista como “una fachada” y, sobre todo, porque el régimen político había incumplido sus promesas de llevar a cabo la aplicación de la *charía* y el pacto tácito de no agresión establecido con ellos.

Las elecciones presidenciales de octubre de 1993 pondrían a prueba de nuevo las promesas de Mubarak. Durante los años 80 había afirmado en repetidas ocasiones que no se presentaría candidato a un tercer mandato, es decir, a dichas elecciones. Pero cuando el 10 de julio de 1993 llegó su nueva nominación como candidato único por parte del Parlamento, a nadie cogió por sorpresa. El régimen político no había mostrado intención de evolucionar de manera sustancial desde finales de los 80, y desde 1992 además se enfrentaba a un hostigamiento armado casi cotidiano por parte de sectores del islamismo radical -según este, en respuesta a la violencia de las fuerzas de seguridad-, que en forma de atentados alcanzaba a dirigentes del Gobierno, turistas e intelectuales. Algunas de estas acciones encontraban justificación entre líderes religiosos “autorizados” en la escena pública. A ello se unía el avance de las corrientes islamistas moderadas en los órganos representativos de diversas organizaciones profesionales, al que el régimen político intentaba poner freno.

2.1 EL ENFRENTAMIENTO ARMADO ENTRE LOS GRUPOS ISLAMISTAS RADICALES Y EL ESTADO⁵

Los años transcurridos entre las elecciones legislativas de 1990 y las presidenciales de 1993 estuvieron marcados por un nuevo incremento exponencial de la violencia entre las fuerzas de seguridad y los grupos islamistas radicales, y en particular sus células armadas. Como se puede observar en el cuadro siguiente, el año 1991 estuvo presidido por una relativa calma, pero esta era la calma que, como se suele decir, precede a la tempestad.

Tabla 12: Número de muertos y heridos a causa de la violencia política 1990-1993

Año	fuerzas de seguridad		Islamistas		Civiles		Total	
	Muertos	Heridos	Muertos	Heridos	Muertos	Heridos	Muertos	Heridos
1990	8	s.d	27	s.d	-	s.d	35	
1991	-	2	7	s.d	1	s.d	8	s.d.
1992	23	38	39	83	32	107	94	228
1993	100	162	89	254	77	310	266	716

FUENTE: para los años 1990 y 1991, IEA (1990, 1991); para 1992-1993, Ibrahim (2003)

Como muestra el cuadro, en 1993 el número de víctimas mortales de las fuerzas de seguridad superó por primera vez al de los activistas islamistas radicales. Otro dato destacable es la aparición desde 1993 de un elevado número de víctimas civiles. Ambos hechos están relacionados con el fortalecimiento de los militantes armados y la diversificación de sus estrategias y objetivos, así como con la lógica de *vendetta* que regía el enfrentamiento entre la policía y los islamistas radicales, fácilmente observable y también reconocida por los propios implicados.

Al margen de que en 1991 descendiera la agresividad de las fuerzas de seguridad hacia los islamistas en general tras el cese el año anterior de Zaki Badr, ministro del Interior, y su sustitución por Abdel Halim Musa, sin duda este fue un año de “rearme” de los islamistas en diversos sentidos. Por un lado, rearme moral, pues a la vista de la anulación de la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Argelia en enero de 1991 quedó probado para numerosos militantes islamistas que los Gobiernos autoritarios árabes

⁵ Excepto cuando se indique lo contrario, los datos incluidos en este apartado proceden de la Cronología Política incluida en la revista *Égypte-Monde Arabe* (EMA), nº 9-16 (1992 y 1993). Se trata de datos sobradamente conocidos en su mayoría y que pueden ser corroborados mediante las fechas concretas que se mencionan.

jamás permitirían su acceso al poder por las urnas. Rearme motivacional, por otro lado, tras la respuesta armada contra el Estado por parte de numerosos militantes “hermanos” argelinos, y tal vez por el “éxito” del asesinato del presidente Budiaf, aunque la autoría de dicho asesinato haya sido objeto de fuerte controversia, pues el Frente Islámico de Salvación negó su autoría del atentado y numerosas sospechas se dirigieron hacia el Ejército argelino u otros sectores del Estado⁶.

Pero 1991 fue también un año de rearme en el sentido “militar” para los dos principales grupos activos, Al-Yihad y la Gamaa Islamiyya, y para otras células armadas autónomas de desconocida filiación que surgieron. Tras el fin en 1989 de la guerra que enfrentaba al poder constituido afgano y los muyahidines, miles de activistas egipcios que habían acudido a Afganistán a ayudar a sus compañeros a luchar “contra el comunismo” volvieron a su país natal. Su influencia se advertiría pronto tanto en los nuevos objetivos elegidos para sus atentados como en su rigurosa planificación y en los recursos utilizados o en el desdén mostrado hacia las vidas de los civiles.

2.1.1 Diversificación de los objetivos y procedimientos de los grupos islamistas

A partir de marzo de 1992 aumentó el número de atentados contra las fuerzas de seguridad, tras 14 meses de calma en este sentido. El 8 de junio fue asesinado Farag Fuda, un conocido escritor que defendía desde hacía años la laicidad del Estado y la exclusión de los islamistas de la vida política. Entre julio de 1992 y enero de 1993 se producirían seis atentados contra turistas, casi siempre cuando estos viajaban en autobuses y mediante pequeñas armas de fuego, o incluso armas blancas. En febrero y marzo de 1993, dos bombas que apuntaban hacia los turistas hacían explosión en el centro de El Cairo, una en el conocido café Wadi al-Nil de la plaza de Tahrir, y otra en el aparcamiento del Museo Egipcio, en la misma plaza. En abril fracasó un intento de acabar con la vida de Safwat al-Charif, ministro de Información, en agosto otro dirigido contra Hasan al-Alfi, ministro del Interior, y en noviembre otro contra Atef Sidqi, presidente del Gobierno. A lo largo de 1993 se produjeron diversos atentados con bomba dirigidos contra instalaciones de las fuerzas de seguridad o del Estado situados en lugares ampliamente frecuentados por civiles, como la plaza de Ataba en El Cairo o el centro de Asuán.

Los atentados contra turistas no eran nuevos, pero en el pasado habían sido escasos y sobre todo dirigidos contra turistas israelíes, más a causa de la nacionalidad de estos que de su condición de turistas. Sin embargo, desde 1992 los turistas serían un objetivo

⁶ Christopher Dickey: “Murder On the Mediterranean”, *Newsweek*, 7 de diciembre de 1992 (<http://www.newsweek.com/murder-mediterranean-200146>, consulta del 6 de junio de 2015)

permanente. El motivo ideológico alegado por los perpetradores de este tipo de actos, difundido en panfletos, era que los turistas “corrompían las costumbres y los valores islámicos de los egipcios”. Según las fuerzas de seguridad, una fetua del jeque Omar Abdel Rahmán, líder espiritual de la Gamaa Islamiyya, habría autorizado los ataques a turistas también con dicho argumento. Según la prensa egipcia, en diversas ocasiones otros militantes de la organización habían reivindicado los asesinatos. No obstante, según el diario *Al-Hayat*, el 21 de diciembre de 1992 dirigentes de la Gamaa Islamiyya “histórica” habían manifestado al periódico “su consternación por la muerte de turistas extranjeros en operaciones que no formaban parte de su política”⁷. Por otro lado, hay que señalar que desde finales de 1992 Egipto intentó en vano obtener de Estados Unidos la extradición de Omar Abdel Rahmán, donde el jeque entraba y salía desde 1990 entre una confusa sucesión de autorizaciones y desautorizaciones de sus permisos de residencia, a pesar de su continua incitación a la violencia contra el régimen egipcio -grabada en casetes y enviada a Egipto-, e incluso de sus ataques a Estados Unidos. El jefe de Gabinete de Mubarak, Usama al-Baz, apuntaría diplomáticamente al diario *El País* en julio de 1993 lo que era, si no una certeza, al menos una convicción del Gobierno egipcio: “Se dice que trabajaba para la CIA [reclutando combatientes para Afganistán]”⁸.

Por su parte, el dirigente histórico del grupo Al-Yidad, Abud al-Zumur, encarcelado desde 1981 por el asesinato de Sadat, declararía en septiembre de 1993 que “ninguna agrupación islámica podía dirigir sus golpes contra el pueblo musulmán”⁹. Aunque la expresión no excluía por definición a todos los turistas, si parecía excluir los ataques a estos en lugares frecuentados por civiles.

Sin duda, la dificultad de atribuir con certeza algunas responsabilidades reside en la gran variedad y autonomía de los grupos islámicos, que genéricamente se denominaban *gamaat islamiyya*, e incluso a las acciones individuales de algunos militantes. No obstante, en la realización de las acciones más indiscriminadas y que implicaban la muerte de civiles sin duda tuvieron gran influencia los puntos de vista de Aiman al-Zawahiri, al que el grupo Al-Yihad había reconocido en un principio como líder espiritual. Al-Zawahiri participaría junto a Usama Ben Laden en la formación de Al-Qaeda, anunciada en 1998.

Fueran cuales fuesen los autores e inspiradores de los atentados contra los turistas, es muy probable que, junto a sus objetivos “ideológicos”, pretendieran obtener también mayor repercusión internacional para sus acciones y, sobre todo, distraer de otros objetivos a las fuerzas de seguridad, que así se dedicaban a proteger sobremanera una actividad que

⁷ *Al-Hayat*, 22 de diciembre de 1992.

⁸ *El País*, 31 de julio de 1993.

⁹ *Al-Chaab*, 24 de septiembre de 1993.

constituía una de las principales fuentes de ingresos del Estado.

No menos alarmante para el Gobierno egipcio fue el recurso a los explosivos por parte de los terroristas, inaugurado en 1993 con los mencionados atentados de El Cairo. El perpetrado contra el ministro del Interior, Hasan al-Alfi, fue además realizado con la combinación del ataque de unos motoristas suicidas cargados con una bomba y otro llevado a cabo con armas automáticas. Por otra parte, los activistas simultaneaban los ataques en la capital con los ataques en las zonas turísticas y rurales, obligando a las fuerzas de seguridad a dispersarse en varios frentes. Desde un punto de vista cuantitativo, el punto focal de la violencia islamista era el Alto Egipto. En junio de 1992 el propio Hasan al-Alfi, a la sazón gobernador civil de Asiut, había querido quitar importancia a la presencia de islamistas armados en su provincia, al señalar que estos “no pasan de 10.000 en una población de 3 millones de personas” (EMA 2/1992: 176).

Finalmente, en las *achwaiyyat* (“las espontáneas”, zonas de urbanización ilegal) y las barriadas periféricas de las grandes ciudades, el islamismo radical había adquirido un enorme predicamento, sobre todo entre los jóvenes, y los enfrentamientos con la policía, y también con otros habitantes de los barrios, eran constantes.

2.1.2 La actuación represiva del Estado

El Gobierno egipcio fue elevando progresivamente su respuesta al desafío armado del islamismo radical en el terreno legislativo, policial, judicial y extrajudicial. En el verano de 1992 se promulgó la Ley Antiterrorista, que amplió el alcance del concepto legal de “terrorismo” pasando a abarcar la incitación a él -vagamente definida- oralmente o por escrito. La ley extendió también el periodo de detención preventiva y arresto de los sospechosos por parte de la policía sin orden judicial. Por otro lado, el presidente de la República volvió a hacer uso de su prerrogativa de transferir por decreto a los sospechosos de atentar contra la seguridad del Estado a tribunales militares, un recurso apenas utilizado desde 1981. En diciembre de 1992 el Tribunal Administrativo Supremo anuló un decreto de este tipo de Mubarak, atendiendo a las demandas de parte de la oposición y de las organizaciones de Derechos Humanos, que alegaban la falta de garantías en esta jurisdicción excepcional. Sin embargo, el Tribunal Constitucional fallaría posteriormente la conformidad de tal práctica con la Constitución. Los tribunales militares comenzaron a dictar sentencias de muerte, una práctica también abandonada desde 1981. A finales de 1993, el número de penas de muerte ejecutadas bajo los 12 años de mandato de Mubarak era de 27, y de ellas 24 en 1992-1993. Durante el mandato de Náser, que duró 18 años, se habían ejecutado también 27 penas de muerte, y durante el de Sadat, que duró 11 años, 20 (Ibrahim 2003).

Por otro lado, los abogados de los defensores islamistas, la prensa de la oposición y las organizaciones de derechos humanos denunciaban las prácticas represivas ilegales de la policía. Existían fundadas sospechas de que muchas de las muertes de activistas islamistas “en enfrentamientos policiales” habían constituido ejecuciones extrajudiciales, y en ocasiones la policía destruía las casas de las familias de los militantes perseguidos o detenidos, cuando no arrestaba a dichos familiares y los maltrataba. La Organización Egipcia de Derechos Humanos afirmó el 10 de diciembre de 1992 que tenía documentados 315 casos de torturas tan solo en los nueve primeros meses de 1992, frente a tan solo 19 en 1991 (EMA 12-13/1993: 345). Hay que tener en cuenta que denunciar las torturas era arriesgado: algunos militantes o ciudadanos que lo hacían eran de nuevo arrestados, y la misma suerte corrieron algunos de sus abogados. Por ello, si tenemos en cuenta que entre 1981 y 1993 se habían producido 25.000 detenciones “políticas” (Ibrahim 2003)¹⁰, la mayor parte de ellas en los últimos cinco años, podemos deducir que la extensión de la tortura era mucho mayor.

2.1.3 La violencia islamista y sus causas. Oclusión del diálogo y de la soluciones

Según los líderes y dirigentes del islamismo radical la razón principal de la escalada en la violencia entre aquel y el Estado era la actitud del Gobierno, y en particular de las fuerzas de seguridad, hacia sus militantes. Así lo manifestarían en comunicados a la prensa, en panfletos y en entrevistas. Para Abud al-Zumur, dirigente de Al-Yihad, en palabras de septiembre de 1993, la relación causa-efecto iba solo en una dirección: “La violencia de los grupos islámicos es una respuesta a la violencia del poder”. Por otro lado, Al-Zumur declaraba que su grupo adoptaba “una actitud positiva hacia los intentos de diálogo y mediación”, si bien la “solución” requeriría “la reforma de la Constitución y la celebración de elecciones libres a la presidencia de la República”¹¹.

Por su parte la Gamaa Islamiyya histórica había denunciado también en numerosas ocasiones la responsabilidad del poder constituido en el inicio de la violencia, y dirigentes suyos habían solicitado, por ejemplo en septiembre de 1992, la liberación de “los líderes espirituales que podrían influir en los jóvenes y hacerles abandonar este tipo de actos”¹².

Numerosos actores políticos, periodistas y estudiosos, sin excluir a los grupos

¹⁰ El recuento de Ibrahim se refiere a todo tipo de “casos de detención” relacionados con el “descontento sociopolítico”, independientemente de la duración de las detenciones y del ingreso o no en prisión de los detenidos por orden judicial.

¹¹ *Al-Chaab*, 24 de septiembre de 1993.

¹² *Al-Hayat*, 22 de diciembre de 1992.

islamistas radicales de la responsabilidad primera en el origen de la violencia, opinaban que, cuando menos, la responsabilidad de la escalada en aquella había que atribuírsela en parte a las fuerzas de seguridad y al poder ejecutivo:

“Ciertas prácticas del aparato de seguridad frente a las *gamaat* radicales no han incitado al pueblo a colaborar con las fuerzas de seguridad. La experiencia ha demostrado que los jóvenes no culpables que han sido detenidos de manera arbitraria salen en la mayoría de los casos de los centros de detención con el corazón lleno de rabia hacia la policía y hacia el Estado. Algunos de ellos se unen efectivamente a las *gamaat* violentas. Y lo mismo sucede cuando se arresta a las esposas y los padres de los detenidos o de sospechosos en fuga, o cuando se los toma como rehenes” (Ibrahim 1994: 271).

En cuanto a las causas de fondo de la violencia, el mismo Hasanein Taufiq Ibrahim (1994: 263-264), profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de El Cairo, realizaba un rápido balance de aquellas en las que “todo el mundo” estaba de acuerdo para explicar un fenómeno de “gran complejidad”: aspectos económicos (paro -sobre todo entre los jóvenes-, inflación, descenso del nivel de vida, insuficiencia de las instituciones económicas del Estado), aspectos sociales (crecimiento de las desigualdades entre las clases, consumo ostentoso de una minoría, marginación social creciente, provocación mediática, deterioro de la educación), aspectos políticos (insuficiencia de las estructuras oficiales de participación, deficiencia del papel de los partidos y de las organizaciones sociales, ausencia de consenso sobre los objetivos generales de la sociedad) y religiosos (funcionarización oficial de la religión, debilidad de la cultura religiosa ilustrada).

El atractivo de los grupos islamistas, moderados o violentos, se debía, según este análisis, al contraste: por un lado, aquellos tenían un discurso muy sencillo, opuesto al de otras organizaciones que pedían el cambio, que además se caracterizaban por la mediocridad y la falta de credibilidad; por otro, la ausencia física y moral del Estado en ciertas regiones y en las zonas de urbanización espontánea había dejado el campo libre a grupos que habían sustituido al Estado en la gestión de la vida cotidiana. El autor mencionaba que diversos estudios de opinión realizados en las *achwaiyyat* de Ain Chams y de Imbaba, en El Cairo, y en la ciudad de Dairut en el Alto Egipto¹³, mostraban que los habitantes de estos lugares consideraban que eran mejor atendidos por dichos grupos que por el Estado.

Que el conjunto de las razones apuntadas por Ibrahim respondían a la percepción general de las causas de la violencia por todos los observadores informados y objetivos, lo demuestra la reacción de algunos de los más altos dirigentes del Estado desde mediados de

¹³ Ibrahim no daba la referencia de dichos estudios, a los que alude en la página 263 de la obra citada.

1993. Respecto a la causas sociales y económicas, el propio Hosni Mubarak, en su discurso con ocasión del primero de mayo, anunció el comienzo de “una nueva etapa de la acción nacional”, y enumeró un sinnúmero de medidas orientadas a solucionar la mayor parte de los problemas mencionados por Ibrahim, entre las que cabe destacar la mejora del nivel de vida de los habitantes de las zonas de urbanización espontánea y la búsqueda de un mayor equilibrio entre los diferentes gobernados o provincias en materia de desarrollo¹⁴.

En el terreno político, la posibilidad de establecer un diálogo que llevara a la pacificación fue apuntado discretamente en diversas ocasiones a lo largo de 1992 por miembros del Gobierno y de las fuerzas de seguridad, en respuesta a las palabras conciliatorias de los grupos islamistas. El 17 de abril de 1993, el propio ministro del Interior anunció que dicho diálogo había comenzado efectivamente. Al día siguiente fue cesado por Mubarak. Posteriormente, diversos dirigentes del régimen, como el vicepresidente del PND, Kamal Chazli, en octubre de 1993, descartarían la posibilidad de entablar tal diálogo¹⁵, y el propio Mubarak insistiría en diversas ocasiones en que el terrorismo era un fenómeno exportado y promovido por países extranjeros como Irán, siendo esta la principal causa de su desarrollo.

Finalmente, en cuanto a la actitud de las fuerzas de seguridad, Hasan al-Alfi, ministro del Interior que sustituyó a Musa, pareció haber tomado nota de los efectos de los excesos de aquellas contra los militantes. En una entrevista concedida el 7 de mayo de 1993 declaraba:

“Debemos ser extremadamente firmes contras los elementos terroristas, pero sin extender nuestra acción a sus padres, a sus familias, a sus barrios y a sus ciudades. Esto solo puede ser perjudicial (...) Rechazo categóricamente toda medida inhumana o ilegal. Tenemos enfrente a un individuo desviado, no a su familia o a su esposa”.

Pero el ministro añadía unas palabras muy reveladoras:

“Hay que establecer una política, clara, firme, categórica y franca para afrontar todos los incidentes. Hay un solo Ministerio, un solo Gobierno y un solo Estado. Por tanto, tiene que haber una única política frente a los incidentes y frente al terrorismo. No podemos dejar que cada sector actúe por separado en política de seguridad. No hay que limitarse a reaccionar sin una política clara. Hay que tener un comportamiento racional, planificado y fundado en principios científicos (...) y sanos”¹⁶.

¹⁴ “Discurso del presidente Mubarak con ocasión de la Fiesta del Trabajo”, *Al-Ahram*, 2 de mayo de 1993. Citado por Ibrahim (1994: 274).

¹⁵ *Al-Ahram Weekly*, 18-24 de octubre de 1993.

¹⁶ “Entrevista con el ministro del Interior, Hasan al-Alfi”, *Al-Musawwar*, 6 de mayo de 1993. Citado por

El ministro del Interior dejaba entrever el desgobierno anterior en política de seguridad y la autonomía de diversas instituciones dentro de ella. Un “desgobierno” y una autonomía observables también en los grupos armados, uno de los cuales atentaría contra el ministro, como hemos señalado, en agosto de 1993, sin atender a las llamadas a la conciliación de algunos dirigentes islamistas ni a los buenos propósitos de Al-Alfi.

2.1.4 Violencia islamista, violencia interconfesional y violencia social

Entre 1990 y 1993 también se registró un notable incremento de la violencia, llamada “interconfesional” por gran parte de la prensa internacional y “confesional” por la prensa estatal y alguna de la de partidos. Sin embargo, en la mayor parte de los casos no se trataba de una violencia de ese tipo. Pondremos como ejemplo tan solo el año 1992, que puede servir de patrón para los años posteriores, en los que residíamos en Egipto leyendo cotidianamente varios periódicos y consultando luego diversas cronologías de revistas de prensa, lo que, a nuestro juicio, nos permite realizar esta afirmación.

En 1992, según el recuento del Informe Estratégico Árabe (IEA 1992: 375-398), se produjeron -la clasificación es nuestra- 22 ataques de islamistas a “ciudadanos civiles” o sus propiedades, o enfrentamientos con ellos. De ellos, 14 se produjeron por razones “ideológicas”, por ejemplo contra cafés, comercios, clubs, locales de alquiler de videos, grupos de música, bodas, mujeres -por no ir “decorosamente vestidas”- y *mulid*¹⁷. Otros dos casos se produjeron en venganza contra supuestos colaboradores de la policía. En otro, los islamistas se enfrentaron a las gentes de la aldea “por una disputa de tierras”. El IEA no especifica en ninguno de estos casos si los atacados eran coptos o musulmanes, pero la prensa local, si los atacados eran coptos, lo señalaba profusamente. Tan solo en tres casos los islamistas se enfrentaron o atacaron solo a coptos o a una iglesia, y en uno de ellos fue por una disputa de tierras. En los dos últimos casos grupos islamistas se enfrentaron entre sí, algo que sucedía frecuentemente.

Como se observa, el recuento anterior en ningún caso nos habla de violencia interconfesional, sino de una violencia practicada por un grupo de musulmanes específico, motivada ideológicamente -o por intereses- y que no discriminaba entre musulmanes y

Ibrahim (1994: 269).

¹⁷ Los *mulid* son celebraciones populares de culto a personajes considerados santos o con una relación de especial cercanía a Dios, y son por ello rechazados doctrinalmente -debido a que el islam niega todo tipo de atributo o consideración sagrada a ninguna persona- no solo por los grupos islamistas radicales sino también por las principales corrientes ortodoxas sunníes del islam, incluido Al-Azhar, que sin embargo contemporiza con su existencia habida cuenta de su enorme arraigo popular, que lleva a la concentración a veces de millones de personas en sus festividades.

coptos.

En cuanto a los enfrentamientos en los que estuvieron involucrados tanto coptos como musulmanes al margen de los ya citados, en 1992 se registraron dos casos. En uno de ellos (11 muertos, 8 coptos y 2 musulmanes), estuvieron implicados musulmanes de un lado y coptos de otro. La razón de uno de estos enfrentamientos fue la disputa por unas tierras, y la del otro, en Tama, en la provincia de Sohag, en el Alto Egipto, una banal disputa surgida al comprar tabaco en la que resultó muerto un musulmán. Tras esta última disputa, en los días siguientes, según parte de la prensa local “los musulmanes mataron a 5 coptos”. Sin embargo, según el párroco cristiano del pueblo, todo el enfrentamiento había sido una cuestión de *za’r*, *vendenta* o venganza de sangre entre familias, y los islamistas no tenían nada que ver en ellas. Estos matices se los debemos al reputado periódico internacional *Al-Hayat*, editado en Londres¹⁸.

En definitiva, detrás de buena parte de los casos llamados de violencia “interconfesional” o “confesional” se encontraban o bien los ataques de islamistas a ciudadanos que a su entender cometían actos ilícitos -algunos de los cuales resultaban ser coptos-, o bien disputas materiales que en ocasiones tornaban en violencia extrema. La muerte de algunos de los contendientes, en el Alto Egipto, donde se producían la mayor parte de los casos por la extendida “costumbre” de no recurrir a la justicia estatal para solventar las diferencias, desencadenaba el mecanismo de la venganza de sangre. La actitud a menudo interesada de la policía y de la prensa les llevaba a centrarse en los casos que oponían a musulmanes y coptos, a etiquetar a los implicados por su confesión, y a no interesarse demasiado por el fondo de los acontecimientos, cuando no a ocultar algunos de sus detalles.

Este “etiquetado”, como poco calificable de “ligero”, no se limitaba, por otro lado, a la clasificación por confesiones, sino que respondía más bien a un criterio de clasificación de los casos individuales por la pertenencia de los individuos a colectivos, que insinuaba de manera implícita causas para esa violencia particular que no eran en absoluto verificadas, cuando no se estigmatizaba con ello a algunos de esos colectivos. Así, en la prensa estatal era muy frecuente encontrar expresiones del tipo “un parado mata a”, “un estudiante fracasado mata a”, o incluso “una repudiada violada”.

La prensa estatal inducía así, cuando menos, a un cierto caos y confusión en cuanto a los orígenes de la violencia social. Pero incluso una publicación académica como el Informe Estratégico Árabe (IEA 1992: 275-398) incluía en la columna de su recuento de los actos de violencia denominada أحداث شغب وتخريب (“casos de desorden, agitación y destrucción”) los casos de violencia colectiva de la población que respondían a medidas

¹⁸ *Al-Hayat*, 21 de septiembre de 1992.

expeditivas o arbitrarias del poder, como fue el derivado de la “destrucción de casas de los ciudadanos sin previo aviso en la aldea de Tareq en Luxor” (enero de 1992) o el de “la difusión del rumor de la muerte de un acusado en una comisaría a causa de los golpes de la policía en Edku” (agosto de 1992). Sin embargo, el caso de la ciudad de Abu Hammad en el que se produjeron “manifestaciones tras el rumor de la muerte de un ciudadano torturado por la policía” (septiembre de 1992) dicha publicación lo encuadró en la columna de “manifestaciones”. Hay que señalar que en los dos últimos casos la muerte de los ciudadanos era cierta, y de “rumor” se calificaba a las causas de aquella.

Hasanein Taufiq Ibrahim (1994: 263), sin embargo, consideró los sucesos de Edku y Abu Hammad como “indicios de la ruptura de los lazos entre el Estado y el régimen político, por un lado, y los ciudadanos por otro” y, en sentido más amplio, “de la crisis de sociedad que constituye un clima favorable para la violencia tanto de las organizaciones que la ejercen bajo el emblema del islam como de los simples ciudadanos”.

Un caso no recogido por el IAE puede darnos una idea del tipo de actuaciones que inevitablemente habían de romper esos lazos entre el régimen político y los ciudadanos: según al *Al-Ahali*, el 5 de enero de 1992 fuerzas de la Seguridad Central con el apoyo de blindados rodearon una área de 2.500 *feddan*es que 300 familias habían ocupado en Mit Damis, en la provincia de Kafr el-Sheij, para que nadie contemplara cómo las expulsaban a fin de entregar las tierras a la cooperativa de oficiales de la policía y de antiguos combatientes. La operación se llevó a cabo mediando el lanzamiento de bombas de humo y el incendio de las viviendas de las familias¹⁹.

2.2 LA HEGEMONÍA ISLAMISTA EN LOS SINDICATOS PROFESIONALES

En el año de 1992 la tendencia observada en la década anterior (véase III 9.4) se había confirmado: las corrientes islamistas se hacían con el control de los consejos de los sindicatos profesionales más influyentes políticamente, como se muestra en el cuadro siguiente:

¹⁹ *Al-Ahali*, 29 de enero de 1992.

Tabla 13: Representación islamista en los consejos de los sindicatos profesionales (1992)

Sindicato	nº total de miembros del consejo	nº de miembros de las lista islamista
Médicos	25	20
Ingenieros	61	45
Abogados	25	18
Farmacéuticos	25	17

FUENTE: elaboración propia a partir de قنديل (1996: 344)

A los datos mostrados en la tabla 13 hay que añadir que en las elecciones de las Asociaciones de Miembros de los Cuerpos Docentes (de las Universidades) (نوابي هيئات) (التدريس), que no eran considerados formalmente sindicatos, se imponían también las corrientes islamistas desde principios de los 80. De esta manera, tan solo el Sindicato de Periodistas quedaba al margen de esta tendencia entre los que denominamos sindicatos “más influyentes políticamente” por su tradición histórica de implicación en los asuntos sociales y políticos. Los sindicatos mencionados, por otro lado, junto con las asociaciones de profesores universitarios, eran los únicos que acogían casi exclusivamente a trabajadores con una formación universitaria superior (de cinco años).

2.2.1 Orígenes y estrategia

La toma del poder en los sindicatos por los islamistas no fue algo improvisado, sino fruto de una calculada estrategia de los Hermanos Musulmanes concebida a principios de la década de los 80 (véase II 3.3). Así relató la gestación de dicha estrategia Abdel Moneim Abul Futuh, médico, que había sido presidente de la Unión de Estudiantes de la Universidad de El Cairo y emir de las *gamaat islamiyya* de todo Egipto antes de la separación definitiva de estas y de su ingreso en los Hermanos Musulmanes a finales de los 80:

“Omar al-Telmesani y los dirigentes del movimiento estudiantil de los 70 fuimos quienes alumbramos la idea de entrar en los sindicatos, y después en el Parlamento (...) Nuestra joven generación no dejaba de pensar en cómo nos trataría el Estado tras los sucesos de 1981 y la muerte de Sadat, y en qué medida nos permitiría actuar en política (...) Tras salir de las cárceles en 1982 empezamos a celebrar reuniones denominadas «reuniones de licenciados» en la Facultad de Medicina de Qasr al-Aini, en busca de un respiradero para nuestra acción (...) Luego empezaron a asistir algunos miembros de la *Gamaa Islamiyya* (...) y la sorpresa fue que el Estado no se interpuso en nuestro camino (...) El objetivo era encontrar marcos de acción fuera de las universidades, que se nos

habían quedado pequeñas, en particular porque habíamos dejado la Universidad (...) A mediados de 1983 decidimos empezar a trabajar en el ámbito sindical, y las primeras elecciones a las que nos presentamos los Hermanos Musulmanes fueron a las del Sindicato de Médicos -y hay que destacar que la primera facultad a cuyas elecciones estudiantiles nos habíamos presentado era la Facultad de Medicina”²⁰.

Para desarrollar la estrategia de acceso a los órganos de dirección de los sindicatos profesionales, todos los exdirigentes estudiantiles fueron trasladados dentro del organigrama de los Hermanos Musulmanes de la sección “Estudiantes” a la sección “Profesiones y Sindicatos” según su especialidad (como Abul Futuh, médico; Abul Ilá al-Madi, ingeniero; Mujtar Nuh, abogado; Mohammed Abdel Quddús, periodista) y, como hemos señalado en el capítulo III 9.4, los Hermanos Musulmanes obtuvieron su primera mayoría en el Sindicato de Médicos en 1984, y progresivos avances en el resto de los sindicatos durante la segunda mitad de los 80.

La victoria los islamistas en las elecciones sindicales profesionales fue facilitada, al margen de por su capacidad de organización, por dos factores estrechamente relacionados: uno de ellos era la apatía y escasa participación de sus miembros en los procesos electorales y las actividades de los sindicatos en general, y otro el descrédito de la mayor parte de las direcciones anteriores (síndicos y/o consejos), inmersas de manera constante en disputas y acusaciones de corrupción y mala gestión, e incapaces de ofrecer suficientes servicios a los miembros de sus colectivos (Fahmy 2002: 137-148; قنديل 1996: 345-352).

La vigorosa implicación de la Hermandad en las elecciones sindicales llevó a un considerable incremento de la participación, primero por la movilización de aquella y luego, a partir de 1990, a causa de la movilización de sus adversarios, y en particular del Gobierno. Aun así, la participación total continuó siendo baja en términos absolutos, como puede observarse incluso en la tabla relativa al Sindicato de Médicos -el sindicato en el que la participación era mayor- que ofrecemos a continuación:

²⁰ Citado, sin especificar la fuente, en el artículo الإخوان والنقابات في عهد مبارك en la wikipedia oficial de los Hermanos Musulmanes *Ikhwanwiki* (<http://goo.gl/h8RPA2>, consulta del 16 de junio de 2015).

Tabla 14: Participación en las elecciones del Consejo del Sindicato de Médicos (1982-1992)

Año	Nº de miembros	Nº de miembros con derecho a voto*	Número de participantes en las elecciones	% participantes respecto a derecho a voto	% de participantes respecto a total de miembros
1982	50.000	20.000	2.000	10	4
1984	60.000	30.000	6.000	20	10
1986	75.000	40.000	11.000	27,5	14,6
1988	90.000	50.000	12.000	24	13
1990	100.000	65.000	21.000	32	21
1992	110.000	70.000	30.000	43	27

FUENTE: elaboración propia a partir de قندیل (1996: 346)²¹.

* En todos los sindicatos tienen derecho a voto los miembros que estén al corriente del pago de la afiliación.

Para el resto de los sindicatos profesionales no disponemos más que de cifras dispersas y en algunos casos vagas (véase la tabla 15), sin embargo las estimaciones generales sitúan la participación respecto al total de los miembros de los diferentes colectivos en torno al 10%, porcentaje que ascendió ligeramente a principios de los 90, en particular en los sindicatos más influyentes. Hay que tener en cuenta que los que denominamos “sindicatos más influyentes” dominados por los islamistas eran de tamaño medio, es decir, de entre unas pocas decenas de miles y 200.000 miembros, mientras que el de periodistas tan solo acogía a unos pocos miles de miembros. Luego estaban los mayores sindicatos por tamaño, que eran mejor controlados por el régimen por diversos procedimientos -como la elección indirecta de los representantes- y en los que la participación era aún menor.

Tabla 15: Participación en las elecciones a los consejos sindicales (1989-1991)

Sindicato profesional	nº de miembros	Participantes	Participantes
Ingenieros	192.500 (1989)	14.000 (1987)	25.000 (1991)*
Abogados	146.000 (1992)	12.000 (1988)	12.000 (1992)
Agrícolas	250.000 (1991)		< 10%
Profesores no universitarios	750.000 (1991)		< 10%
Comerciales	310.000 (1991)		< 10%

FUENTE: Fahmy (2002: 137); Qandil (1996: 347-348)

²¹ La autora declara haber obtenido estas cifras de Essam al-Erián, uno de los principales dirigentes de la Hermandad en el sindicato, tras señalar que los resultados publicados en diversos medios difieren entre sí y de los facilitados por Al-Erián.

2.2.2 Los intentos del poder de frenar el avance islamista en los sindicatos

Como hemos apuntado, desde 1990 el poder político intentó desalojar a los islamistas de los consejos sindicales movilizándolo a sus partidarios, con procedimientos como el del Ministerio de Sanidad, que en 1990 y 1992 ofreció pagar las cuotas de afiliación -requisito para votar- a quienes estuvieran dispuestos a apoyar a sus candidatos - un procedimiento también seguido por los Hermanos Musulmanes en las elecciones de 1992 al consejo de los abogados (Fahmy 2002: 145). No obstante, ante el fracaso de estos esfuerzos, el régimen optó por añadir a ellos la vía legislativa y judicial.

El incremento de las actividades del islamismo radical fue probablemente una razón principal en la disminución de la tolerancia del régimen hacia los profesionales islamistas, como hacia las corrientes islamistas en general. Desde la prensa leal al poder político, y parte de la prensa de la oposición también, se comenzó a advertir del peligro de una “convergencia islamista” futura a pesar de las constantes declaraciones de los Hermanos Musulmanes y otros islamistas moderados en el sentido de que rechazaban totalmente la violencia.

En este contexto se añadió que el terremoto del 12 de octubre de El Cairo, en el que a pesar de ser de una intensidad media causó más de 500 muertos y casi 10.000 heridos, dejó a cerca de 50.000 personas sin hogar y 115.000 construcciones fuera de uso, realzó la imagen de los islamistas, que con su amplia red de servicios médicos y sociales, coordinada con la del sindicato promovida por ellos, prestaron socorro a la población afectada de manera mucho más eficaz que los servicios gubernamentales²². Hasta tal punto el contraste molestó al régimen que el Gobierno prohibió la intervención en el socorro de todos los medios ajenos al Estado (El Kadi 1993).

Intuyendo lo que se les venía encima, en su comunicado final el Tercer Congreso de Sindicatos Profesionales egipcios, en el que en noviembre de 1992 participaron 1.000 profesionales representando a 12 sindicatos, condenó la violencia, el terrorismo y los atentados contra los turistas, pidiendo a continuación que se respetaran las libertades públicas y “la opinión ajena”, la libertad de formación de partidos y de publicación de medios de prensa, y en definitiva que se favorecieran la democracia y “la *chura*” - aportación probablemente debida las corrientes islamistas-, así como que se permitiera a los sindicatos profesionales recoger donaciones para realizar operaciones de salvamento²³.

²² Uno de los principales elementos de esa red era الجمعية الطبية الإسلامية, la Asociación Médica Islámica, fundada en 1977, que llegaría a tener 22 hospitales y clínicas a finales de los 90, y de la que Abdel Moneim Abul Futuh fue secretario general desde su fundación. Abul Futuh también fue, desde 1986, responsable del Comité de Socorro Humanitario del Sindicato de Abogados.

²³ *Al-Hayat*, 26 de noviembre de 1992.

No obstante, la suerte estaba echada. En febrero de 1993 era promulgada la Ley 100 de 1993 relativa a los Sindicatos Profesionales, que exigía una participación de al menos del 50% de los miembros con derecho a voto para que las elecciones sindicales -a partir de entonces supervisadas por un comité judicial- fueran consideradas válidas. En caso de no cumplirse este requisito, se celebraría un nuevo proceso electoral para cuya validez tan solo se requeriría la participación de un tercio de los miembros con derecho a voto. De no cumplirse este requisito, el Consejo del Sindicato y su presidente continuarían en sus funciones durante tres meses, tras los cuales se volvería a repetir el proceso electoral completo. Finalmente, si con arreglo a todos estos procedimientos y requisitos el sindicato no conseguía elegir a sus representantes, un comité judicial se encargaría temporalmente de dirigirlo. El Gobierno y sus partidarios argüían que el objetivo de la ley era lograr que los órganos de dirección de los sindicatos fueran realmente representativos. Sin embargo, la ley prohibía expresamente que las elecciones se celebraran en los días de descanso semanal o en las fiestas oficiales, e imponía que se celebraran en los lugares de trabajo, es decir, bajo la vigilancia de los superiores administrativos (السيد 1996: 470-471; Fahmy 2002: 107). Se diría que el Gobierno quería más bien apoyarse en la baja participación para que los sindicatos no tuvieran representantes electos -como de hecho sucedería más adelante-, o al menos ralentizar y dificultar sus procesos electorales para tener tiempo de responder a los resultados parciales que se pergeñaban.

La ley, denominada por Mubarak “ley de garantías democráticas de los sindicatos profesionales”, había sido elaborada sin consultar a aquellos y tramitada en 24 horas, y aunque contaba con sus partidarios despertó el rechazo generalizado de los sindicatos (el de Abogados y el de Ingenieros convocaron dos breves huelgas en protesta), organizaciones no gubernamentales y fuerzas de la oposición²⁴.

Con todo, en un principio, a pesar de contar con la mayoría en los consejos de los sindicatos, las corrientes islamistas, siguiendo la norma no escrita de funcionamiento de aquellos, no intentaron entorpecer el acceso de hombres leales al régimen a la cabeza de los sindicatos, ni enfrentarse abiertamente a aquel. Al margen de su preocupación por las condiciones laborales de sus miembros, sus declaraciones políticas se limitaban a pedir mayores libertades políticas y sindicales, a llamar al fin de la violencia y al diálogo entre los islamistas radicales y el Gobierno, y a manifestar posturas de solidaridad con los pueblos árabes y musulmanes en dificultades (Palestina, Irak, Bosnia), en coordinación entre los diferentes sindicatos. No obstante, en poco tiempo surgieron las fricciones con los

²⁴ Un resumen de dichas posturas puede encontrarse en la revista del Ibn Khaldoun Center for Developmental Studies, *Civil Society*, nº 15, marzo de 1993, págs. 2-6. Además de las fuerzas políticas, el propio director del centro, el profesor de sociología política Saad Eddín Ibrahim y la Organización Egipcia de Derechos Humanos se posicionaban contra la ley.

síndicos y partidarios del régimen (con Al-Jawaga desde 1992 en el Sindicato de Abogados), y las actividades de solidaridad con los pueblos hermanos, como las relacionadas con la guerra en Bosnia, susceptibles de ser apoyadas por otros sectores de la población y por numerosos ulemas no islamistas, se volvieron sospechosas y peligrosas²⁵.

2.3 EL CONTROL DE LAS MEZQUITAS Y LAS ESCUELAS

Los esfuerzos del poder político por tomar el control de todas las mezquitas del país impidiendo a los islamistas radicales predicar en ellas, iniciados a finales de los años 70 y retomados a mediados de los 80, se habían revelado como una tarea sisífrica, o habían sido abandonados por falta de convicción (véase II 3.6). El 29 de diciembre de 1992, el Ministerio de *Awqaf* anunció, sin embargo, que se había propuesto retomar la tarea, y hacerse gradualmente con el control de las 140.000 mezquitas privadas que existían en Egipto con el fin de impedir a los islamistas predicar en ellas.

Se estipuló que para acceder a los púlpitos sería imprescindible una autorización previa del Ministerio, aunque para alcanzar el control total en un plazo breve se consideraba que sería necesario que aquel contratara a 5.000 diplomados en teología de la Universidad de Al- Azhar cada año (EMA 12/13 1993: 349).

Los centros educativos de primaria y secundaria fueron el siguiente objetivo del Gobierno. En marzo de 1995 el ministro de Educación, Kamal Bahá Eddín declaró que 1.000 profesores (de un total de 800.000) habían sido transferidos a puestos administrativos desde el verano de 1993, y que estaba “dispuesto a trasladar a 10.000 más si era necesario”, con el fin de que “en las escuelas se enseñara solo el currículo nacional”²⁶.

²⁵ Desde marzo de 1993, los sindicatos de médicos, ingenieros y abogados desarrollaron una intensa actividad en solidaridad con Bosnia-Herzegovina, atrayéndose a diversos partidos políticos, asociaciones y personalidades, y llegando a publicar un comunicado llamando a los hombres de negocios egipcios a boicotear las relaciones económicas con Serbia, Montenegro y Croacia. En julio de 1993 convocaron una manifestación en las inmediaciones de la mezquita de Al-Azhar a la que asistieron 30.000 personas (El-Sayyid 1994: 33).

²⁶ *Middle East Times*, 12-18 de marzo de 1995.

2.4 LA BATALLA DE LOS INTELECTUALES

2.4.1 El caso Fuda/Gazzali

En agosto de 1993, en la contraportada de la revista *Civil Society* (nº 20)²⁷, publicada por el Ibn Khaldoun Center for Developmental Studies (en adelante nos referiremos a él como el Centro Ibn Jaldún), dirigido por el profesor Saad Eddín Ibrahim, el conocido e influyente periodista Fahmi Huweidi publicaba un artículo denominado “La guerra de los intelectuales”. En él afirmaba que no era exagerado calificar como tal la “guerra civil no declarada”, una “aguda y amarga controversia que ha transformado la sociedad en dos campos opuestos”, “llegando a su clímax en los 90”, hasta el punto de que cada parte estaba “diversificando sus armas para aniquilar a la otra, física y moralmente”. Huweidi localizaba los orígenes de esa controversia en la época de Mohammed Ali, en la primera mitad del siglo XIX, y en sus esfuerzos por modernizar la educación “en línea con el modelo occidental”, que había llevado a que la nueva élite educada a “reemplazar a los ulemas de Al-Azhar que habían sido los líderes de la vida política y cultural durante largo tiempo”. No obstante, esa controversia, que llevaba aparejada una “fragmentación” y una lucha se había mantenido dentro de los límites del “consenso nacional” en la época previa a 1952 ante la prioridad de luchar contra la ocupación británica, y gracias a que Náser se preservó la “unanidad nacional” aunque el presidente “asestara un duro golpe a la democracia, el pluralismo y la coexistencia”. La lucha, en definitiva, se producía entre “dos modelos culturales opuestos”, como explicaba con más detalle el escritor:

“En la superficie, parece una lucha entre lo secular y lo religioso. En realidad es un conflicto entre dos programas de civilización: uno occidental en su perspectiva; el otro islámico, que es expresión de la esencia moral y espiritual de la sociedad. Es el primero, el de los secularistas, el que controla el poder y las decisiones”.

Finalmente, Huweidi atribuía una “fragmentación de tal gravedad” a la falta de diálogo y a la ausencia de los valores de “coexistencia” que sí habían prevalecido antes de 1952, achacando estas lacras a tres décadas de “gobierno de un solo partido y de una sola persona”, que hacían que la “transición hacia la diversidad política se produjera con distorsiones”, y que “aunque Egipto tuviera el marco para la democracia, le faltaran los valores democráticos”.

²⁷ La revista se publicaba también en árabe bajo el mismo nombre (المجتمع المدني) y con la misma regularidad, aunque los contenidos de ambas ediciones no siempre coincidían.

La “guerra entre los intelectuales” a la que Huweidi hacía referencia había comenzado tras el asesinato de Farag Fuda el 8 de junio de 1992 por la Gamaa Islamiyya. Fuda era un escritor, ingeniero agrícola de profesión, que a diferencia de muchos otros llamados “secularistas” no rechazaba ser denominado de tal manera, se oponía a la aplicación de la *charía* y defendía abiertamente la separación entre el Estado y la religión, criticando a muchos ulemas, islamistas declarados o no, y entre ellos a algunas personalidades de Al-Azhar, e incluso mofándose de ellos²⁸. No obstante, Fuda recurría para defender sus argumentos, entre otros, a los textos fundamentales del islam y a fuentes históricas.

El desencadenante del asesinato fue un debate celebrado en enero de 1992 entre intelectuales secularistas y laicos, entre los que destacaron por la acidez de sus intervenciones y de su enfrentamientos Fuda y el jeque Mohammed al-Gazzali²⁹, jeque que se alejó de los Hermanos Musulmanes a principios de los 50 y uno de los ulemas denominados “independientes”, al que hemos hecho referencia anteriormente en el capítulo III 9.3. Tras el tenso debate, un grupo de ulemas de Al-Azhar calificó a Fuda de “herético” (مرتد) “apóstata” (كافر). Tras el asesinato de Fuda, seis meses después, el debate comenzó a encontrarse entre quienes condenaban tajantemente el asesinato, quienes se negaban a hacerlo, y quienes lo hacían de manera tibia o con matices. Los Hermanos Musulmanes se inscribían en esta última línea pues lo calificaron de “asesinato político”, pero responsabilizaron en parte de él al Gobierno y a la prensa por dejar el campo abierto a quienes atacaban al islam. En cuanto a los segundos, el fuego fue abierto por el propio Mohammed Al-Gazzali, casi un año después del asesinato el 22 de junio de 1993, cuando declaró como testigo de la defensa ante el Alto Tribunal de Seguridad del Estado en el juicio contra los asesinos de Fuda³⁰.

En su declaración, el jeque afirmó que no tenía ninguna relación con el asesinato, pero a las preguntas sobre su opinión como ulema sobre una tipología general respondió

²⁸ Especial alboroto causó entre los islamistas el artículo, publicado en la revista *Oktober* poco antes de su asesinato, en el que Fuda atribuía a la insatisfacción sexual de los islamistas gran parte de sus actitudes (فرج (فودة: "اللهم لا حسد"، أكتوبر، ٧ يونيو ١٩٩٢).

²⁹ En el debate participaron también, por la parte islamista, Maamún al-Hudeibi, portavoz de los Hermanos Musulmanes, y el conocido intelectual Mohammed Imara, y por el lado secularista, Mohammed Jalf Allah, miembro del Tagammu. El debate puede encontrarse entero y por partes en numerosos vídeos en *Youtube*, con una búsqueda del tipo "مناظرة بين فودة والغزالي" (<https://goo.gl/Xw0KZh>, consultado 15 de enero de 2015).

³⁰ La declaración íntegra de Al-Gazzali, así como las reacciones al asesinato y a la declaración del jeque que citamos a continuación, pueden encontrarse -excepto cuando se indique lo contrario-, en el reportaje نجاح حسن: "حروب التفكير إلى أين؟"، *المجتمع المدني*, رقم ٢٠، أغسطس ١٩٩٣. La autora declaraba haber tomado el texto del diario *Al-Yumhuriyya*, pero, como en el resto de sus referencias periodísticas, no daba más detalles, ni siquiera la fecha.

que quien se oponía a la aplicación de la *charía* no podía ser considerado creyente, y que si se trataba de un musulmán, ello lo convertía en un apóstata. En cuanto al castigo a aplicar al apóstata, señalaba que la opinión general de los alfaquíes era que debía ser ejecutado, aunque “su opinión personal” era que debería ser condenado a cadena perpetua, si bien existía el riesgo de que escapara y por ello el Gobierno debería ejecutarlo, mediando una decisión judicial. A la pregunta de qué sucedía si el Estado no llevaba a cabo tal tarea y un particular aplicaba el castigo, respondió que cometía una “transgresión contra el poder” o una “actuación por cuenta propia al margen del poder” (افتئات على السلطة). Finalmente, interrogado sobre el castigo en el islam para quien cometía tal transgresión contestó que “no recordaba ninguna”. Los abogados de la defensa no habían preguntado directamente a Al-Gazzali si consideraba a Fuda “herético”, pero un mes después de su declaración, en una larga carta enviada al periodista de *Al-Ahram* Salah Muntaser, y publicada en el periódico los días 20 y 25 de julio, afirmó no solo que consideraba a Fuda “herético” sino parte de “una conspiración con nuestros enemigos para difamar al islam, lo que merece ser calificado de alta traición”³¹.

La declaración de Al-Gazzali, a quien en numerosos medios musulmanes se atribuía más autoridad religiosa que a la propia institución de Al-Azhar, cayó como una bomba en los medios políticos, religiosos y periodísticos egipcios. La prensa gubernamental destacó que el jeque había señalado que correspondía únicamente a los jueces juzgar las transgresiones de los *hudud* (حدود, “límites” impuestos por el islam cuya transgresión era considerada de la mayor gravedad), mientras que los periódicos *Al-Nur* y *Al-Chaab*, propiedad del Partido Liberal y del Partido del Trabajo, respectivamente, destacaron en sus principales titulares los puntos básicos de la declaración de Al-Gazzali: quien se oponía a la aplicación de la *charía* era un apóstata, quienes aplicaban los *hudud* ante la negligencia del Estado en hacerlo cometían una transgresión contra el poder, y para dicha transgresión no había castigo. Por su parte, la Organización Egipcia de Derechos Humanos (OEDH) emitió un comunicado considerando la declaración de Al-Gazzali una fetua con la que se “anatemizaba” a “un amplio sector de los musulmanes” y se legitimaban los actos de terrorismo y la violencia armadas, y pedía que las autoridades garantizaran “las libertades amenazadas”. La opinión de la OEDH resumía lo esencial de la de los sectores secularistas. Finalmente, la Comisión de Fetuas de Al-Azhar emitió un comunicado el 8 de julio de 1993 en el que afirmaba que la protección de los *hudud* correspondía al Estado tras verificar, en el caso que fuere, que no existía la menor duda de la apostasía ni posibilidad de arrepentimiento. En cuanto al transgresor que aplicaba las penas relativas a los *hudud* cometía un crimen y debía ser castigado.

³¹ Citado por Saad Eddín Ibrahim: “The new Inquisition”, *Civil Society*, n° 20, 1993, pág. 2.

2.4.2 Un debate jurídico-religioso. La difusa y confusa autoridad religiosa en el islam sunní

El caso Fuda-Gazzali desencadenó un torrente de opiniones y manifestaciones de las que sería imposible dar cuenta detallada. Sin embargo, es importante destacar varios de los aspectos de la controversia:

1. El debate era en su mayor parte jurídico, y esencial e inevitablemente jurídico-religioso incluso para los intelectuales secularistas, atrapados por convicción o por la realidad y las circunstancias en un marco referencial de tipo religioso.

Fahmi Huweidi, mencionado más arriba en tanto que historiador de la división de los intelectuales y apóstol del diálogo y la coexistencia, no era un escritor “secularista”, sino islamista, aunque calificado por muchos de “islamista moderado” o “independiente” (a no confundir con los “ulemas independientes”)³². En un artículo publicado en *Al-Ahram* defendía al jeque Al-Gazzali, afirmando que en su declaración ante el tribunal había sido malinterpretado, pues no estaba emitiendo una fetua (dictamen jurídico-religioso), sino una *chahada* (شهادة, “testimonio”)³³. El jeque había hablado en general, y no en particular, y había intentado diferenciar entre el “diálogo sobre el islam” y “el insulto, la calumnia y la mofa”. Algunas de sus adversarios “nobles” (شرفاء) habían intentado discutir lo que habían entendido, y otros “no nobles” habían intentado “asesinarlo” (حاولوا اغتياله). Hay que señalar, para mejor comprender el perfil de Huweidi, que según el polémico historiador de la primera época del islam Sayyed al-Qimni, que en sus obras intentó separar lo que de cierto y de mitología había en la “historia oficial del islam”, en marzo de 1989 Huweidi había escrito un artículo en *Al-Ahram* titulado “Pluralismo sin sobrepasar los límites” en el que afirmaba: “Sus libros [de Al-Qimni] difieren de los de Salman Rushdi en el grado del insulto, pero no en su esencia (...) dañan lo sagrado (...) Hay que acabar con ese tipo de escritos”. Poco después de la publicación del artículo, cuando Al-Qimni circulaba en coche con sus hijos en Guiza, alguien disparó sobre su coche con un Kalashnikov a modo de

³² Sobre algunos de los más destacados de estos islamistas independientes (Kamal Abul Magd, Tareq al-Bichri, Mohammed Salim al-Awa y el propio Fahmi Huweidi), que se caracterizan o se caracterizaron por no pertenecer a ningún partido político ni organización islamista, así como por no tener una formación religiosa reglada (Al-Bichri, Al-Awa y Abul Magd eran magistrados u hombres de leyes y Huweidi periodista) puede consultarse la obra de دياب (2005), específicamente dedicada a la trayectoria e ideas de los cuatro personajes citados.

³³ La palabra “*chahada*” tiene unas connotaciones particularmente firmes, pues sirve para denominar la formulación de la profesión de fe de los musulmanes, pero también, en el sistema jurídico, para expresar el concepto de “dar fe” de algo.

advertencia³⁴.

Por su parte, Mohammed Nur Farahat, uno de los más conocidos juristas e historiadores del derecho egipcio, atacó en la revista *Al-Musawwar* la declaración de Al-Gazzali, y para ello se aplicó en defender que aquella no había sido un “testimonio” (شهادة) en términos legales e incluso religiosos, sino tan solo la expresión de una opinión jurídico-religiosa (رأي فقهي). Por otro lado, se preguntó cómo era posible dialogar con la amenaza de la acusación de apostasía y sus consecuencias sangrientas sobre las cabezas.

Finalmente, una de las respuestas más reveladoras fue la de Saad Eddín Ibrahim, director del Centro Ibn Jaldún de Estudios para el Desarrollo, que como hemos señalado publicaba con el mismo nombre *Civil Society*/المجتمع المدني sendas revistas mensuales. En el número de agosto de 1993, en la edición en inglés, Ibrahim publicaba un breve editorial titulado “La nueva Inquisición” (pág. 2), en el que realizaba un repaso de los hechos del caso Fuda/Gazzali que hemos mencionado, y concluía afirmando:

“Si Al-Gazzali va a «excomulgar» a cada musulmán que objete la aplicación instantánea y literal de la *charía*, va a encontrarse con una larga lista, encabezada por la mayoría de los jefes de Estado árabes y continuada por millones de musulmanes que consideran que el espíritu de la *charía* se encuentra adecuadamente contemplado en las leyes vigentes (...) El jeque Gazzali ha sido considerado durante mucho tiempo un activista islamista moderado. Si su testimonio es un ejemplo de la moderación islamista nos esperan tiempos peores que los de las más oscuras épocas del pasado. Afortunadamente, las auténticas fuerzas de la sociedad civil combatirán a la nueva Inquisición y la derrotarán”.

No obstante, en el número correspondiente de la edición en árabe Ibrahim adoptaba un enfoque muy diferente: en un editorial de 4 páginas³⁵, tras destacar como algunos periódicos, como *Al-Chaab* el 23 de junio de 1993, habían convertido el testimonio de Al-Gazzali en una fetua, el autor se embarcaba en una larga exposición acerca del pensamiento del conocido y respetado imam del siglo XII Abu Hamed al-Gazali, contraponiéndolo al del jeque Al-Gazzali. Ibrahim se centraba en particular en los escritos del imam acerca de la *hisba*, la doctrina del islam sobre la aplicación del precepto islámico de “imponer la ley e impedir lo reprobado” (explicado en el capítulo I 3.6), y en concreto sobre a quién correspondía vigilar el cumplimiento de dicho precepto. Ibrahim citaba textos con sus referencias de página, y concluía que el imam, si bien establecía la

³⁴ “In search of what went wrong” (Entrevista con Sayyed al-Qimni), *Middle East Times* (<http://metimes.com/cens/c.3.html>, sin fecha, consulta del 28 de marzo de 2000).

³⁵ سعد الدين إبراهيم: "بين الإمام الغزالي والشيخ الغزالي: تسعة قرون وإدراك الإمام النسبية في الاجتهاد"، *المجتمع المدني*, رقم ٢٠، أغسطس ١٩٩٩، ص. ٦-٣.

obligación de los musulmanes particulares de aplicar la *hisba*, dicha obligación se detenía y suspendía cuando su aplicación podía llevar a la división de la comunidad, al combate interno y a la destrucción del país. En la segunda parte del artículo, el autor repasaba la actuación del jeque Al-Gazzali y lo acusaba de manera bastante explícita, aunque muy cortés, de contribuir a los males que el imam Al-Gazali había señalado que debían ser evitados en todo caso. Finalmente, Ibrahim no hacía ninguna alusión a la Inquisición ni a la sociedad civil egipcia, ni mucho menos a que esta fuera a combatir a aquella.

En definitiva, la respuesta de Ibrahim al asunto Fuda/Gazzali mostraba el doble discurso -dicho sea sin ánimo peyorativo- que numerosos intelectuales se veían o se creían forzados a formular: un discurso para “el exterior” o asimilables -manifestado en la edición en inglés de la revista- y un discurso para el interior -el elaborado en la edición en árabe.

2. Como se deduce de lo relatado hasta ahora, el enfoque jurídico del caso Fuda/Gazzali no podía sustraerse a su enfoque jurídico-religioso, a pesar de que este último no estaba codificado. Ni siquiera el Alto Tribunal del Estado, una tribunal excepcional que podía estar formado por jueces militares, como de hecho lo estaba en ocasiones, podía negarse a que declararan ante él expertos religiosos sin conexión directa aparente con la causa que juzgaba y sin cualificación judicial alguna. De hecho, el aparato judicial egipcio, y más concretamente el Tribunal de Casación (محكمة النقض), seguía aceptando causas de *hisba* promovidas por particulares, a pesar de que la legislación desde 1955 no hacía ninguna referencia al procedimiento a seguir con dichas causas (en todo caso solo relativas al Estado Civil, pues en 1991 se había excluido la consideración de la *hisba* en otros terrenos). La pervivencia de la *hisba* en el sistema judicial egipcio se dejaría sentir con fuerza y alboroto, como veremos más adelante en IV 6.5 en el “caso Abu Zeid”.

3. El caso Fuda/Al-Gazzali puso de nuevo de manifiesto el carácter difuso y controvertido de la autoridad religiosa, y por ende jurídico-religiosa en el islam sunní. Los esfuerzos del poder político por institucionalizar y *funcionarizar* dicha autoridad habían resultado vanos. Aunque únicamente el islamismo más radical denunciara a las autoridades de Al-Ahzar o al Muftí como “ulemas del poder”, el respeto por la autoridad de estas instituciones era más proforma que resultado de una auténtica sumisión a sus dictámenes. Por el contrario, otros ulemas, fueran azharíes o no, e incluso algunos no ulemas, gozaban de mayor crédito que los representantes oficiales del islam.

2.4.3 El caso Nawal al-Saadawi o el maltrecho movimiento feminista

Durante los años 50 y 60, el movimiento feminista egipcio, en particular aquel inspirado por los movimientos feministas occidentales, había quedado subsumido en las

organizaciones estatales promovidas por el régimen naserista. En los años 70, tuvo que afrontar la oleada sociopolítica de reislamización y la expansión del islamismo. En los años 80, se benefició de la política general de liberalización emprendida por el régimen de Mubarak. No obstante, desde a finales de esta década y a principios de los 90 se vio confrontado de nuevo al auge del islamismo, hasta ser prácticamente silenciado. La trayectoria de la doctora Nawal al-Saadawi, probablemente la más conocida representante de dicha corriente desde una posición expresamente marxista, anticapitalista y antiimperialista³⁶, refleja perfectamente la de dicho movimiento.

Médica y psiquiatra de formación y ejercicio, incansable activista y prolífica escritora de obras feministas y de ficción, Nawal al-Saadawi llegó a ocupar la Dirección de Salud Pública a principios de los 60, tras unos pocos años de ejercicio profesional. La publicación de su obra *La mujer y el sexo* a principios de los 70 le acarreó ser despedida de su puesto en el Ministerio de Sanidad y excluida de otras actividades y organizaciones, como la Asociación Médica de Egipto, de la que era vicesecretaria general, centrándose sus actividades profesionales a partir de entonces en la Universidad de Ain Chams y en la colaboración con diversas agencias de la ONU relacionadas con los asuntos de las mujeres. Sus actividades políticas le llevaron a ser detenida por Sadat durante los arrestos masivos de septiembre de 1981.

En 1982, Saadawi fundó la Asociación de Solidaridad con la Mujer Árabe (جمعية تضامن المرأة العربية), que durante casi una década pudo operar con mucha libertad. En marzo de 1991, poco después de concluir la Guerra del Golfo, contra la que se había manifestado activamente, entrevistamos a la doctora Saadawi en la sede de la asociación situada cerca del barrio de Sayyeda Zeinab. Nos expuso las actividades que aquella realizaba: reuniones, conferencias, estudios, algún proyecto laboral para las mujeres jóvenes en el medio rural, etc. La asociación no contaba con ningún apoyo gubernamental, pero sí con subvenciones de la UNESCO y otras agencias de la ONU. No obstante, preguntada acerca del apoyo con que contaba, nos decía que contaban con miembros (“unos 2.000 o 2.500”) y apoyos “en todos los países árabes”, si bien no podía “hacer cálculos exactos porque su aparato administrativo era débil”. Efectivamente, en la sede de la asociación tan solo se encontraban la doctora y su marido, el también médico Cherif Hetata.

Poco tiempo después de realizada la citada entrevista, en el mismo año de 1991, la Asociación de Solidaridad con la Mujer Árabe fue prohibida por las autoridades. En 1993, tras el asesinato de Fuda y la aparición de una lista de personalidades supuestamente condenadas a muerte por los grupos islamistas radicales, Saadawi decidió exiliarse a los

³⁶ Véase la entrevista que realizamos con Nawal al-Saadawi en marzo de 1991 en *Nación Árabe*, nº 15 (1992), págs. 33-36.

Estados Unidos, donde residiría hasta 1996 enseñando en diversas universidades norteamericanas.

3. LA EMERGENCIA DE LA “SOCIEDAD CIVIL” EGIPCIA

3.1 UN CONCEPTO DIFUSO Y CONTROVERTIDO

El principio de los años 90 conoció el nacimiento y la expansión de la expresión “sociedad civil” (المجتمع المدني) en Egipto para aludir a un cierto espectro de asociaciones y organizaciones. El uso y la aplicación del concepto no tardarían en ser controvertidos por diversas razones, debido principalmente a la cuestión de qué tipo de organizaciones quedaban incluidas dentro de él y cuáles no, y dentro de ello por el papel que desempeñaba su relación con el Estado, su “referente” islámico -con la variedad de posturas ideológicas que ello podía incluir- o su orientación ideológica liberal, no solo en política y economía.

En el verano de 1995 realizamos una larga entrevista al ya ampliamente citado Saad Eddín Ibrahim, profesor entonces de Sociología Política en la Universidad Americana de El Cairo y director del Centro Ibn Jaldún de Estudios para el Desarrollo³⁷. Le pedimos que nos explicara “el concepto de *sociedad civil* que utilizaban [él y sus correligionarios] en Egipto”. Ibrahim había sido, según sus propias palabras, el primero que utilizó la expresión “sociedad civil” en el Mundo Árabe en su libro *El nuevo orden social árabe*³⁸, publicado en 1981, y fue sin duda su impulsor en Egipto, en particular desde la fundación del Centro Ibn Jaldún en El Cairo y la publicación, en árabe y en inglés, de la revista *Civil Society*/المجتمع المدني a partir de enero de 1992.

Al principio de la entrevista (Barreda 1996b), Ibrahim aceptó que lo caracterizáramos como

“uno de los pioneros y portaestandartes de un movimiento socio-político que se caracteriza por la reivindicación de la democracia desde una perspectiva liberal y que hace especial hincapié en el «desarrollo de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales» como medio para lograr la «transformación (o transición) democrática». Este movimiento se articula en torno a dichas ONG, a menudo centros de investigación u organismos de defensa de los Derechos Humanos, entre cuyos miembros abundan los intelectuales, académicos, periodistas, etc.”

³⁷ “La sociedad civil árabe. Entrevista con Sa`ad al-Dîn Ibrâhîm”, realizada por Javier Barreda Sureda, *Idearabia*, nº 1, 1996, págs. 29-35.

³⁸ سعد الدين إبراهيم: *النظام الاجتماعي العربي الجديد*, مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ١٩٨١

No obstante, el profesor quiso añadir que dicho movimiento había sido promovido inicialmente por intelectuales y sociólogos que tras la derrota de 1967 se preguntaron por las razones de aquella y por el estancamiento de los movimientos árabes progresistas de aquel tiempo, llegando a la conclusión de que la ausencia de instituciones de la sociedad civil y del respeto a los Derechos Humanos era una de las razones fundamentales de la derrota. Posteriormente, gran parte de esos intelectuales participarían en el congreso fundacional de la Organización Árabe de Derechos Humanos entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre en Limasol.

Al ser preguntado concretamente por su concepto de “sociedad civil”, Ibrahim dio una amplia definición que presentamos estructurada con puntos, pero utilizando literalmente sus palabras (Barreda 1996b: 30). La sociedad civil, según Ibrahim:

1. Está formada por organizaciones que nacen por la libre voluntad de sus miembros y hacen de intermediarios entre la familia y el Estado.
2. Tiene una dimensión institucional: son organizaciones con una forma, sea esta legal o no, oficial o no. Así, hay asociaciones, clubes, sindicatos, partido... La sociedad civil se distingue de las organizaciones o formaciones sociales hereditarias, como la familia, la tribu, el clan y la comunidad confesional.
3. Tiene también una dimensión cualitativa, unos valores determinados, unas reglas de conducta. Estas residen básicamente en la creencia en el derecho del otro a la diferencia, a disentir, y en su libertad para asociarse u organizarse para defender sus intereses mientras lo haga de manera civilizada.
4. Es una escuela de entrenamiento para la democracia a través de la democracia interna.
5. Hay otra dimensión que no forma parte de la definición como tal, sino de los criterios para distinguir la sociedad civil de lo que no lo es: la sociedad civil no es gubernamental, pero no es antigubernamental. La sociedad civil es independiente del Estado, pero no ataca al Estado, sino que entra con él en una relación dialéctica con él en la que a veces hay cooperación, a veces rivalidad y a veces lucha. No obstante, en todas las relaciones con el Estado gestiona dichas relaciones de forma pacífica.

3.2 SOCIEDAD CIVIL, LIBERALISMO POLÍTICO Y ECONOMÍA DE MERCADO

La completa y académica definición inicial de Ibrahim planteaba, sin embargo, problemas en su aplicación en el contexto egipcio. En realidad, la expresión había comenzado a difundirse y ser utilizada con la aparición de su centro y su revista. Sin

embargo, según señalaba el propio profesor, era indudable que la sociedad civil egipcia existía antes de la utilización del concepto, e incluso localizaba sus “orígenes embrionarios” en 1821, con la fundación de la primera organización gubernamental egipcia. En 1993 existían en Egipto 13.239 asociaciones “civiles” o “populares” (جمعيات أهلية) registradas en el Ministerio de Asuntos Sociales según la Ley 32 de 1964 relativa a dichas asociaciones, cuando en 1976 el número registrado era de 7.593 (Qandil 1996: 124). No obstante, ni el Centro Ibn Jaldún ni otra docena larga de organizaciones, que eran realmente consideradas como portaestandartes de la sociedad civil/ المجتمع المدني, se encontraban registradas legalmente como asociaciones civiles según la Ley 32/1964, sino como “empresas civiles” u otras figuras jurídicas, a cuyo amparo declaraban ser empresas sin ánimo de lucro, centros de estudios, etc., o simplemente actuaban alegalmente (como la OEDH, de la que nos ocuparemos a continuación). Las nuevas organizaciones de la sociedad civil habían rehuido la Ley 32/1964 para evitar el control del Estado sobre las asociaciones que, con el fin de que no se orientaran hacia actividades políticas, había impuesto el régimen naserista mediante esta ley.

Sin embargo, las principales diferencias entre ambos grupos de asociaciones no eran de orden administrativo, sino que residían en el carácter de sus relaciones con el Estado y, sobre todo, en su orientación respecto a las políticas de este.

Comenzando por estos últimos aspectos, las primeras organizaciones denominadas de la “sociedad civil” se orientaron a la defensa de los derechos humanos. Poco después de la fundación de la Organización Egipcia de Derechos Humanos (OEDH, fundada en 1985/1986³⁹), llevada a cabo por políticos e intelectuales tanto en activo como de los regímenes anteriores (algunos exministros) y también de la oposición⁴⁰, hizo su aparición a finales de los 80 el Centro de Estudios e Información Legales para los Derechos Humanos (مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان), dirigido por Amir Salem. Junto a estas organizaciones y en la misma época se crearon otras oficialmente dedicadas a otros tipos de estudios como: el ya mencionado Centro Ibn Jaldún de Estudios para el Desarrollo, que se implicaría de lleno en cuestiones relacionadas con la promoción de la democracia y la participación ciudadana; o la Asociación de la Nueva Llamada (جمعية النداء الجديد), autodenominada en inglés New Civic Forum), fundada por un destacado economista

³⁹ La OEDH fue creada inicialmente en 1985 como una sección de la Organización Árabe de Derechos Humanos. En 1987 decidió constituirse en una organización local independiente, pero su petición de inscripción en el Ministerio de Asuntos Sociales en virtud de la Ley 32 de 1964 fue rechazada. Permanecería sin embargo activa con un estatuto alegal hasta 2003, cuando fue aceptado su registro en dicho Ministerio.

⁴⁰ Entre dichos miembros fundadores cabe destacar a Mohammed Ibrahim Kamel, su primer presidente, ministro en época de Sadat; a Yahya al-Gamal, exministro en época de Sadat; a Mona Makram Ebeid, entonces miembro del Wafd; a Milad Hanna, miembro del Tagammu; y al propio Saad Eddín Ibrahim.

liberal, Said al-Naggar en 1991, y que constituía un tipo de organización un tanto diferente de las anteriores. En su primera publicación, aparecida en junio de 1992, declaraba que su objetivo era “alcanzar una liberalización total del sistema económico, político y social en Egipto” instaurando una “verdadera democracia” que incluyera la justicia social⁴¹. Las organizaciones citadas son tan solo una muestra de la “avanzadilla” de la sociedad civil. A partir de 1993, este tipo de organizaciones o asociaciones proliferarían⁴².

En definitiva, las primeras organizaciones de la “sociedad civil egipcia” eran asociaciones que se declaraban explícitamente con voluntad no solo de incidencia política sino de incidencia en el sistema político, y de orientación a la defensa de la democracia liberal. Aunque la mayor parte de ellas no lo explicitaran, muchas parecían orientadas también a defender un cierto liberalismo económico. Preguntado por el lugar que ocupaba la economía en el concepto de sociedad civil, Ibrahim respondía:

“Ah, el concepto de sociedad civil tiene un elemento económico. Pienso que la sociedad civil cree, aunque no lo diga explícitamente, en la economía de mercado. No está contra el sector público, pero cree en la libertad del sector privado y en el sector cooperativo... Porque eso es parte del pluralismo. Igual que cree en el pluralismo social y político, cree en el pluralismo económico. Algunas organizaciones defienden el sector público, algunas defienden el sector privado. Lo importante es que no coartes a los defensores de cualquier sistema económico” (Barreda 1996b: 35).

La relación de cierto uso del concepto de sociedad civil con el liberalismo económico era uno de los reparos que algunos intelectuales de izquierdas le ponían. Como señaló Ibrahim, dicho concepto se había recuperado -quizás cabría decir, en nuestra opinión, reformulado-, en el contexto del fin de la Guerra Fría, concretamente por parte del sindicato Solidaridad en Polonia. Al señalarle que el concepto podía ser instrumentalizado a favor de las concepciones liberal-capitalistas u otras, y que tanto algunos intelectuales de izquierda árabes como los sectores islamistas lo rechazaban, Ibrahim, tras admitir que, “como cualquier término”, podía ser instrumentalizado, iba directo a la cuestión egipcia:

“La sociedad civil no se encierra a sí misma en una sola orientación política. Las organizaciones de la sociedad civil pueden ser de orientación izquierdista, de orientación

⁴¹ “Gam`iyya al-nida’ al-gadîd: al mabade’ wa-l-rakâ’iz al-fikriyya”, junio de 1992. Citado por Qandil (1996: 137-138).

⁴² En 1993 se fundaron al menos el Centro El Cairo de Derechos Humanos (مركز القاهرة لحقوق الإنسان), dirigido por Bahai Eddîn Hasan, y el Centro Al-Nadim para la Rehabilitación de las Víctimas de la Violencia y la Tortura (مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب). A lo largo de los 90 y principios del siglo XXI aparecieron decenas de organizaciones legales y de defensa de los derechos humanos, como veremos en el capítulo V 1.1.

liberal, de orientación islamista, de orientación nacionalista, de orientación universalista... Lo importantes que no nieguen el derecho de los otros a organizarse y que en su trato tanto con el Estado como con otras organizaciones de la sociedad civil utilicen medios pacíficos (...) El problema es que algunos de quienes dicen eso son socialistas o marxistas e imaginan que la expresión va contra el Estado centralista, y que otros son islamistas y piensan que la palabra “civil” [مدني] es una máscara de la palabra “laico” [علماني]” (Barreda 1996b: 32).

No obstante, a pesar del carácter predominantemente liberal y proderechos políticos y civiles de las organizaciones fundadas a principios de los 90, en dicha época comenzaron también a ver la luz, aunque en menor medida, otras organizaciones destinadas a defender los derechos laborales y sociales desde ópticas ideológicas distintas, entre las que sería pionera el Centro de Servicios Laborales y Sindicales (دار الخدمات النقابية والعمالية), fundado en 1990 por Kamal Abbás y por el histórico dirigente comunista Yusuf Darwich⁴³.

3.3 RELACIONES CON LAS ASOCIACIONES CIVILES, EL ISLAMISMO Y EL ESTADO

Los conceptos de Ibrahim eran claros y coherentes, sin embargo, la teoría encontraba numerosos puntos de fricción con la práctica. Como le señalamos durante la entrevista:

“Hay quien dice que el concepto tal como se maneja en los medios «liberal-democráticos» árabes parece específicamente diseñado para alejar de él al islamismo. Incluso leyendo *La Sociedad Civil*, la revista del centro que usted dirige, encontramos una diferenciación entre las ONG [منظمات غير حكومية] y las “asociaciones civiles” [جمعيات أهلية]” (Ibrahim 1991: 32).

A esto, el profesor respondía que tal apreciación no era correcta, y que las “asociaciones civiles” formaban parte de la sociedad civil y eran ONG, pero que había ONG de otro tipo, como los sindicatos, las empresas civiles, los centros de investigación. Podía haber empresas, medios de información, grupos de intereses. Finalmente, señalaba

⁴³ Yusuf Darwich era abogado laboralista desde los años 30, y a lo largo de su vida defendió a numerosos líderes sindicales. Fundó la organización La Vanguardia de los Trabajadores (طلیعة العمال), que en 1958 se unió a otras corrientes para fundar el Partido Comunista Egipcio.

que las “asociaciones civiles” perseguían tan solo el trabajo benéfico.

Lo cierto, sin embargo, es que de las 13.293 asociaciones civiles existentes en Egipto en 1994 tan solo un 30,4% eran, según su definición en el registro, asociaciones caritativas o de ayuda social (جمعيات خيرية) (Qandil 1996: 131). La mayoría de estas, un 27% del total, eran “asociaciones islámicas”. Otro 27% lo constituían las “asociaciones para el desarrollo” (Ben Néfissa 1996: 105). Por otro lado, nada impedía en la práctica a unas y a otras “hacer proselitismo”, como Ibrahim reconocía que hacía el Centro Ibn Jaldún junto a sus actividades para el desarrollo, si sorteaban el control previo y posterior a su autorización por el Ministerio de Asuntos Sociales (Barreda 1996b: 35).

En el fondo de la controversia desempeñaban un papel importante los dos términos utilizados en árabe para definir los distintos conceptos. *Madani*, traducido siempre por civil, es un término de indudable imantación occidental, introducido en las sociedades a través del derecho positivo, y en el caso de Egipto a través del Código Civil Napoleónico. Se relaciona con los “derechos civiles” y puede oponerse a “militar” pero también a “religioso” (por ejemplo, en el caso del matrimonio). Sin embargo, el término *ahli* puede traducirse, según los casos, como “familiar”, “popular”, “civil”, “no estatal” o incluso “nacional”, pero no guarda ninguna relación con los derechos civiles ni se contrapone directamente a lo religioso⁴⁴. En definitiva, los difusores del concepto de sociedad civil eran plenamente conscientes de las implicaciones culturales e ideológicas del adjetivo elegido para su formulación en árabe.

No obstante, la práctica social y asociativa hasta finales de los 80 portaba otro elemento que tal vez aconsejaba a los “apóstoles” de la sociedad civil distanciarse de las “asociaciones civiles”. Aunque estas no eran gubernamentales, aparte del control que el Estado como institución ejercía sobre la naturaleza de sus actividades, se daba la circunstancia de que un gran número de estas asociaciones eran dirigidas por funcionarios del Ministerio de Asuntos Sociales, muchos de los cuales trabajaban en ellas asignados en comisión de servicios por el Ministerio (hasta 60.000 en 1992 según Ben Néfissa 1996: 100). Sin embargo, como señala Ben Néfissa, la participación de tales funcionarios era considerada más como una “ayuda” que como un instrumento de control. Los funcionarios aportaban formación y contactos en la administración a las asociaciones para el desarrollo,

⁴⁴ Desde finales del siglo XIX y hasta la época naserista coexistieron los Tribunales Religiosos (محاكم شرعية), que se ocupaban de gran parte de las cuestiones de estatuto personal, o estado civil, y los Tribunales Nacionales (محاكم أهلية), que se encargaban de lo demás. Pero se trataba de una división de funciones, aunque en los primeros no interviniera el derecho positivo y en los segundos sí. Cuando Náser eliminó los Tribunales Religiosos y los integró en los Nacionales, la palabra *ahli* no quedó “contaminada”, debido a la voluntad manifiesta de someter el papel de los jurisperitos musulmanes al derecho civil y a sus estructuras judiciales. Véase I 3.6.

que llegaban a alcanzar las 4.000 en 1994, gran parte de ellas en el medio rural. Hasta tal punto esto era así que cuando en marzo de 1993 fue ligeramente reformada la Ley 32 de 1964, respondiendo a la presión general en favor de una menor intervención de la Administración y del Estado, el resultado no satisfizo a muchas asociaciones: el nuevo artículo 50 prohibía formar parte al mismo tiempo del consejo de administración de una asociación y de los consejos locales de la Administración del mismo sector en el que trabajaba la asociación. Esta reforma, en palabras de Ben Néfissa, “podía paralizar totalmente el funcionamiento de una parte de las asociaciones para el desarrollo” (ibid).

Finalmente, la reforma no acarrearía una disminución importante del control del Gobierno sobre las asociaciones civiles. La otra enmienda principal de 1993 la introducía el nuevo artículo 85, que establecía que la Unión General de Asociaciones ya no estaría imperativamente presidida por el ministro de Asuntos Sociales, sino que podía estar presidida por cualquier ciudadano. No obstante, ese ciudadano sería elegido directamente... por el presidente de la República (Ben Néfissa 1996: 101). Pero lo más importante es que el Ministerio de Asuntos sociales seguiría expidiendo, denegando o retirando las autorizaciones a dichas asociaciones.

Sin embargo, las “asociaciones de la sociedad civil” recibieron un trato diferente: el recurso legal de muchas ellas a inscribirse como “empresas civiles” o bajo otras figuras no habría servido para evitar su prohibición si el poder político se lo hubiera propuesto. En muchos casos, como el de la OEDH ya citado, las asociaciones no tenían ningún tipo de reconocimiento legal, pero actuaban como si lo tuvieran. Como señaló Ben Néfissa (1996: 109):

“Frente a la realidad inevitable de las asociaciones [civiles] islámicas que difícilmente puede poner en cuestión, puesto que hay barrios enteros que se estructuran en torno a ellas, el Estado egipcio desarrolla desde hace algunos años una nueva estrategia que consiste en dejar expresarse, y en consecuencia autorizar la existencia de tipos de asociaciones que antes no permitía. Esta estrategia, iniciada en el terreno cultural, se reproduce en el terreno social”.

La nueva generación de asociaciones está claramente relacionada con las corrientes de pensamiento de izquierdas y liberal, decepcionadas con los límites de la práctica política formalmente autorizada y con la esclerosis de los partidos de oposición. La floración de estas organizaciones y su voluntad de ocupar una plaza destacada en el tejido asociativo dará al debate sobre la reforma de la vida asociativa una tonalidad ideológica.

La cuestión de las relaciones con el Estado de las diversas asociaciones, y de su independencia en general, no está en el fondo tan clara como parecen mostrar los aspectos formales y administrativos. Ben Néfissa opina, aun reconociendo que su afirmación puede

ser “un tanto polémica”, que “las únicas auténticas «organizaciones no gubernamentales» son las asociaciones islámicas, debido a la independencia de la mayoría de ellas frente al Estado” (pág.108), una independencia derivada de su actitud ideológica pero también de su considerable independencia económica, que no se debe en exclusiva ni tal vez principalmente a las donaciones manifiestas u ocultas provenientes de los países del golfo, ni siquiera de los donativos de las clases medias y medias altas egipcias, sino también de organismos internacionales árabes y no árabes (como los bancos islámicos, UNICEF, USAID, etc.).

En efecto, desde finales de los años 80, y en mucha mayor medida desde la primera mitad de los 90 en el marco de los acuerdos de ajuste estructural con el FMI, abundantes ayudas financieras del extranjero afluyeron directamente hacia las ONG. Entre 1988 y 1991 tan solo la USAID destinó 15 millones de dólares a ayudar a 2.019 asociaciones egipcias, y en 1991 el Gobierno norteamericano firmó un acuerdo con el egipcio para asignar 20 millones de dólares más directamente a dichas asociaciones (Qandil 1996: 130-131). Este acuerdo iba en contradicción con la Ley de Asociaciones Civiles nº 32 de 1964, que establecía el requisito de una autorización previa del Ministerio de Asuntos Sociales para obtener cualquier subvención extranjera, y contra la legislación egipcia en general, radicalmente opuesta a la entrega de tales subvenciones a cualquier tipo de organización sin un férreo control administrativo.

Si bien la recepción de fondos extranjeros de ciertas instituciones, sobre todo las gubernamentales o relacionados con los Gobiernos, puede resultar en ocasiones sospechosa de dependencia o influencia política, eran precisamente las organizaciones que Qandil (1996: 131) llama “no gubernamentales”, es decir, no las asociaciones civiles, y sí las de la “nueva sociedad civil”, la mayor parte de ellas registradas como “empresas civiles sin ánimo de lucro”, las que dependían casi exclusivamente, según muchos de sus miembros reconocieron a la autora, de fondos procedentes del extranjero. Además, las asociaciones acogidas a la nueva ley, a diferencia de las acogidas a la Ley 32/1964, estaban exentas de pagar impuestos. En nuestra entrevista con Saad Eddín Ibrahim, cuyo Centro Ibn Jaldún se ubicaba en un moderno y amplio chalet de tres pisos en el nuevo y distinguido barrio de Al-Moqattam, el profesor reconocía que su organización recibía subvenciones extranjeras, pero que ello no afectaba a su independencia, en la medida en que eran libres de aceptarlas o rechazarlas (Barreda 1996: 33)⁴⁵.

Finalmente, la división entre asociaciones dependientes e independientes del Estado

⁴⁵ Cuando presentábamos a algunos amigos egipcios un tanto escépticos con la “nueva sociedad civil” una de las nuevas publicaciones del Centro, en color y acharolada, se la llevaban a la nariz y exclamaban: “*Fih raihat al-fulus*” (“Huele a dinero”).

es muy difícil de llevar a cabo si se trascienden los criterios formales estrechos. Por poner solo algunos ejemplos, para Saad Eddín Ibrahim formaban parte de la sociedad civil los sindicatos, los partidos, las asociaciones de intereses y *lobbies*, etc. Pero, ¿hay que incluir en ella a los sindicatos de trabajadores, dominados en su jerarquía por el régimen político, pero con una actividad de contestación en su seno? ¿Y a los sindicatos profesionales, que reciben subvenciones del Estado -como el de trabajadores? ¿Y a las asociaciones de comerciantes y hombres de negocios, unas controladas formalmente por el Estado y otras, privadas, compuestas en su mayoría por exaltos cargos del Estado? ¿Y a los partidos políticos autorizados discrecionalmente por el Estado, mientras la autorización se niega a otros? El problema de realizar tal división no reside solo en las zonas oscuras del concepto de “sociedad civil” explicitado, sino principalmente en la compleja configuración de la relaciones en el Egipto de la época entre lo estatal y lo social, lo estatal y el régimen político -en tanto que personas que lo forman-, entre lo público y lo privado, etc.

3.4 SOCIEDAD CIVIL, INTELLECTUALES Y ESTADO

3.4.1 *Churocracia*, mediación y cooptación

De nuevo en la entrevista citada (Barreda 1996b), pedimos al profesor Ibrahim que comentara algunas proposiciones suyas reflejadas en distintos escritos que le enumeramos⁴⁶:

“[Barreda:] Usted ha defendido en otro lugar la oportunidad «de desarrollar las relaciones civilizadas y de cooperación entre el Estado y los intelectuales» con el fin de «construir la sociedad civil y la transición democrática». En esta cooperación, los intelectuales desempeñarían el papel de «consejeros» o «consultores» del Gobierno y de «mediadores» entre la sociedad civil y el Estado. De la misma manera, ha señalado que la «democratización desde arriba» o la «democratización controlada» por los Gobiernos,

⁴⁶ No disponemos de las referencias de las proposiciones de Ibrahim, que en su día pudimos haber leído en la prensa o haberle escuchado oralmente. Sin embargo, como señalamos a continuación, el profesor ratificó durante la entrevista dichas proposiciones. Por otro lado, hay que tener en cuenta que Saad Eddín Ibrahim fue el supervisor en Egipto de nuestro primer proyecto de investigación, desarrollado durante dos años y medio entre septiembre de 1991 y agosto de 1995, en la Universidad Americana de El Cairo (AUC), siendo el profesor Pedro Martínez Montávez, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, el director del trabajo en España. Durante dicho periodo asistimos a clases suyas en la AUC, y a algunas reuniones de investigadores en el Centro Ibn Jaldún, además de entrevistarnos personalmente con él en numerosas ocasiones.

como supuestamente tiene lugar en los países árabes «es mejor que nada», «incluso si se produce en beneficio de la elite política y social y a cuenta del resto de los sectores sociales»” (pág. 34).

Ibrahim, tras confirmar las palabras que le atribuíamos, desvió la respuesta hacia el papel de las elites gobernantes, señalado su carácter autocrático y su hipocresía al pretender ser demócratas y respetar los Derechos Humanos. Pero, a fin de cuentas, declaraba, había que dar la bienvenida a esa hipocresía, pues indicaba que las elites comenzaban a darse cuenta de la importancia de los valores de la democracia y los Derechos Humanos. Finalmente, ante una nueva afirmación-pregunta nuestra constataba que entre las elites de la sociedad civil, los intelectuales y la mayor parte de la sociedad existía en ese momento una brecha difícil de superar, pero que para hacerlo no cabía más que “promover un diálogo ininterrumpido y de largo aliento (con mucha paciencia)”, entre los intelectuales y la sociedad civil, por un lado, y los intelectuales y el Estado por otro.

En el alero había quedado la respuesta detallada a ese papel de “consejeros”, “consultores” y “mediadores” entre la sociedad civil y el Estado que los intelectuales debían desarrollar -nótese, por otro lado, que Ibrahim insistía en hablar de mediación en tales términos, y no entre el Estado y “la sociedad en general”-, así como cualquier comentario del profesor acerca de los “beneficios de la elite política y social”, “a cuenta del resto de los sectores sociales”, que la “democratización desde arriba” provocaba.

Nos interesaba en particular -algo que no pudimos hacer dada la ya considerable extensión de la entrevista- elucidar la visión de Saad Eddín acerca del sistema político que parecía aceptar en cierta manera en su carácter transicional, y acerca del papel de los intelectuales en él. En diferentes trabajos Saad Eddín Ibrahim había mostrado su admiración por el papel de los intelectuales en la Restauración Meiji en Japón a finales del siglo XIX y en las posteriores “renovación cultural” y “modernización” a principios del siglo XX. Como otros intelectuales egipcios, por ejemplo el islamista Adel Husein, Ibrahim consideraba que la experiencia japonesa, con su integración de elementos culturales tradicionales y modernos, podía servir de modelo para el desarrollo económico árabe. Sin embargo, la mera formulación del papel de los intelectuales como “consultores” en un sistema en el que en términos de participación política “se beneficia” solo o principalmente la elite política y social podría ser puesta en relación con el modelo *churocrático* propuesto por diversas corrientes islamistas -como los Hermanos Musulmanes- y pensadores islámicos, y entre ellos el propio Adel Husein. Un modelo que para Husein, según Gómez García (1996: 218), “se asienta sobre el asambleísmo y la concertación popular, pero en ningún momento se equipara con la democracia en lo que respecta al carácter vinculante de las decisiones de la mayoría”.

En nuestra concepción, el “modelo *churocrático*” en una formulación general, al margen de las elaboraciones de cada autor o corriente, descansa esencialmente sobre el principio original islámico sunní de la *chura*, según el cual las elites cualificadas religiosamente han de expresar su opinión, que ha de ser tomada en cuenta por el dirigente de la comunidad (religiosa) pero que no son vinculantes para este. No obstante, aunque el término sea de origen religioso islámico, el modelo churocrático puede ser también adoptado desde una perspectiva no islámica o no predominantemente islámica. Somos nosotros -y otros autores, aunque la mayoría lo hagan para referirse a las propuestas islamistas- y no los implicados en su defensa quienes lo denominamos así, como ya mostramos en el capítulo II 7.4. Volveremos sobre esta cuestión en las conclusiones de este capítulo.

Más allá de las relaciones entre el Estado y las organizaciones de la “sociedad civil”, las relaciones entre aquel y los intelectuales en particular evolucionaron desde principios de los 90. Como señaló Ben Néfissa y citamos un poco más arriba, al cambio de estrategia del Estado en el terreno social, permitiendo que se expresaran opiniones que antes no se permitían, lo había precedido un cambio de estrategia en el terreno cultural. Richard Jacquemond (1994b: 26) definía así este cambio de estrategia:

“Tal como se desarrollan los acontecimientos, parece que el Estado, habiendo admitido finalmente que no puede confiar solo al islam institucional la lucha ideológica contra la oposición islamista, hubiera sellado una alianza con la *intelligentsia* «progresista» y «laicizante» apartada desde hace 20 años del aparato cultural del Estado”.

Tal cambio de estrategia se podía visualizar en el aparato cultural del Estado. En 1992 y 1993 accedieron a importantes puestos varios intelectuales catalogados como “de izquierdas” al menos por su pasado: Gali Chukri, Ahmad Abdel Muti Higazi y Gamal al-Guitani fueron nombrados redactores en jefe de, respectivamente, las revistas *Ibdaa*, *Al-Qahira* y *Ajbar al-Adab*, las dos primeras editadas por la Agencia General Egipcia del Libro (AGEL) y la tercera de nueva creación y dependiente de la casa de edición estatal Ajbar al-Yaum. Por su parte, Gaber Usfur fue nombrado primero redactor jefe de la revista *Fusul*, y luego secretario general del Consejo Superior de la Cultura, puesto desde el que, según Jacquemond, buen conocedor de los círculos literarios e intelectuales egipcios, impulsó la apertura de las numerosas comisiones especializadas del Consejo a intelectuales y creadores hasta entonces mantenidos aparte de las instituciones culturales estatales (1994b: 39).

3.4.2 La controvertida censura de lo escrito

El retorno de la izquierda y de los intelectuales críticos a la primera plana de vida cultural no podía dejar indiferentes a las corrientes islamistas y a muchos no considerados islamistas. En diciembre de 1993, un diputado independiente, Galal Garib, se hacía eco de numerosas voces manifestadas en la prensa al reprochar violentamente al ministro de Cultura, Faruq Hosni, entre otras cosas, lo licencioso de lo publicado por las revistas culturales del Ministerio. Poco después, Garib atacaría al “lobby comunista, laicista y ateo que acapara la escena cultural”⁴⁷. No obstante, las corrientes islamistas contaban con un poderoso aliado: el islam institucional, y en particular uno de sus órganos más conservadores, la Academia de Investigaciones Islámicas de Al-Azhar (مجمع البحوث الإسلامية) (بالأزهر).

A diferencia de en la producción audiovisual, sometida a una censura previa, en la producción escrita no existía tal, una diferenciación en estrecha relación con el acceso a los medios de comunicación bien de todos los sectores sociales, en el primer caso, o solo de los letrados, en el caso de la prensa escrita. Sin embargo, diversas leyes permitían el secuestro judicial u otras formas de intervención administrativa para retirar publicaciones de la circulación⁴⁸. La Ley 103 de 1961 de reforma de Al-Azhar había dado a esta institución un papel consultivo en materia de autorización de las publicaciones, que no era en absoluto vinculante, pero que en la práctica, en la época de Mubarak, llevaba a que sus “recomendaciones” fueran inmediatamente seguidas por los tribunales correspondientes. Aunque en los 80 se habían producido algunos casos de retirada de obras de la circulación, el último se remontaba a 1988. No obstante, con ocasión de la Feria del Libro de 1992, Al-Azhar recomendó retirar ocho libros, cinco de ellos del conocido magistrado Said al-Achmawi, destacado por sus escritos sobre el derecho, el islam y la política desde una posición secularista. Lo sorprendente fue que en esta ocasión Hosni Mubarak intervino personalmente e hizo anular el secuestro judicial, invitando a Al-Azhar a dirigirse a la justicia según el procedimiento abierto a todos los ciudadanos si quería demandar el secuestro judicial. Posteriormente, Mubarak prometería recurrentemente a “los intelectuales”, con los que se reunía cada año en enero con ocasión de la Feria del Libro, que “no permitiría que ningún libro fuera retirado por ninguna autoridad, incluida Al-Azhar, sin que mediara una decisión judicial”⁴⁹. No obstante, lo que sucedía en la práctica, según Jacquemond (1994b: 30-31), era que Al-Azhar y la Agencia General Egipcia del

⁴⁷ Entrevista en *Ajbar al-Adab*, n° 27, 16 de enero de 1994. Citado por Jacquemond (1994b: 39).

⁴⁸ Sobre este aspecto, véase Sayf al-Islâm (2000).

⁴⁹ *Ajbar al-Adab*, n° 29, 30 de enero de 1994. Citado por Jacquemond (1994b: 39).

Libro, que publicaba gran parte de las obras, llegaban a un “acuerdo amistoso”, según el cual la última retiraba de los comercios las obras criticadas por la primera sin advertir de ello a los autores, y dichas obras “reaparecían” en algunas ocasiones, por ejemplo durante la Feria del Libro, para luego volver a los almacenes de la agencia. En pequeños detalles como estos se aprecia mejor a veces la gestión que el régimen de Mubarak hacía de los difíciles equilibrios que deseaba mantener entre las corrientes con las visiones ideológicas más opuestas.

Finalmente, otro episodio aparentemente banal da cuenta de la lucha entre dichas corrientes y, también, de la actitud de algunos miembros de la llamada “corriente secularista”.

En 1992 fue promulgada la Ley nº 38, que enmendaba la Ley nº 340 de 1955 sobre la reglamentación de la censura de las obras a partir de 1992 llamadas “auditivas y audiovisuales”, ya fueran ejecutadas directamente o grabadas según cualquier procedimiento técnico. Puesto que la ley, que debía ser seguida por un reglamento, no lo había establecido todavía, surgió un contencioso acerca de si la censura debía ser ejercida por la Dirección de la Censura de Obras Artísticas o por la academia citada de Al-Azhar, pues sucedía que muchos productores de casetes “islámicas” se limitaban a presentar sus obras a la última, aspecto con el que la primera no estaba de acuerdo. El resultado fue que el ministro de Cultura anunció entonces la creación de un Consejo Superior de la Censura, tras lo cual el Consejo Superior de la Cultura, presidido por su secretario general Gaber Usfur, ya citado como autor de pasado izquierdista, creó una “comisión superior de la censura” en la que un manojo de intelectuales conocidos por sus opiniones liberales debatirían acerca de las líneas generales que debían guiar la censura de las obras artísticas⁵⁰.

4. LOS PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN: ENTRE EL CONTROL, EL DESCRÉDITO Y LA AUTÉNTICA OPOSICIÓN

4.1 LOS NUEVOS PARTIDOS

Como ya hemos señalado (véase III 8.1), una decisión judicial de 1990 legalizó el Partido Joven Egipto, el Partido Unionista Democrático, el Partido de los Verdes y el Partido Unionista Democrático. Esta oleada de legalizaciones (la anterior legalización, la

⁵⁰ Según el *compte-rendu* de la reunión publicado en *Ajbar al-Adab*, nº 29, 30 de enero de 1994. Citado por Jacquemond (1994b: 36; 41)

del Partido de la Umma, se había producido en 1983, por decisión de la Comisión de Partidos), si bien envuelta en el manto formal de la intervención judicial, tenía sin duda el objetivo de difuminar el efecto del boicot de los principales partidos de la oposición a las elecciones legislativas de 1990. En 1992 fueron autorizados, por el mismo procedimiento, el Partido Árabe Socialista de Egipto y el Partido Naserista Árabe Democrático (en adelante, Partido Naserista). Los nuevos partidos estaban en su mayoría destinados a ser irrelevantes, algo de lo que era consciente el poder político, que conocía o investigaba a conciencia a sus promotores antes de proceder a su legalización. Y en caso de que pudieran desempeñar algún papel significativo, el poder político siempre podía intentar intervenir en ellos de una u otra manera, como demuestran el caso fracasado del Partido Socialista del Trabajo (véase III 7.5) y, como veremos a continuación, el exitoso del Joven Egipto.

4.1.1 El sometimiento del Joven Egipto

Autorizado, como hemos señalado anteriormente, en 1990 para que restara apoyos al Partido del Trabajo (PT), que había devenido demasiado crítico y se reclamaba heredero del popular Joven Egipto de los años 30 y 40, el nuevo Joven Egipto, comenzó pronto a mostrarse muy crítico con la corrupción el Gobierno y la Administración a través de su periódico, denominado como el partido. No obstante, esta era una actitud habitual del resto de los órganos de prensa de los partidos de la oposición. Sin embargo, a principios de 1992 el presidente del partido, Ali Eddín Saleh, dirigió un duro ataque contra Arabia Saudí poco antes de la visita del ministro de Información de este país a Egipto. Según el periodista del diario *Al-Chaab*, Emad Mahgub, el ministro saudí solicitó entonces expresamente el cierre del periódico. Dado que Mubarak se había comprometido en numerosas ocasiones a no ordenar el cierre de ningún periódico, el poder político buscó otro camino para rebajar las críticas del Joven Egipto y satisfacer al ministro, invitando a un grupo de leales partidarios del régimen a que ingresaran en él⁵¹. Los advenedizos, capitaneados por Abdallah Ruchdi, general de la policía jubilado, proclamaron a este presidente del partido en una asamblea, provocando un contencioso que llevaron a la Comisión de Partidos, que el 22 de mayo de 1992 declaró oficialmente presidente a Ruchdi. Posteriormente el contencioso seguiría hasta 2005, con intervención de las instancias judiciales, de la Comisión de Partidos e intentos de conciliación, pero en ese intervalo Ali Eddín Saleh falleció repentinamente, y las actividades del partido y del periódico se difuminaron.

⁵¹ "القصة الكاملة للمؤامرة على مصر الفتاة"، الشعب، ٢٦ مايو ١٩٩٢ ٥١.

4.1.2 La contención del naserismo: el Partido Naserista Árabe Democrático

Si bien el Partido Naserista Árabe Democrático fue autorizado legalmente el 19 de abril de 1992 por decisión judicial tras ver rechazada su demanda en varias ocasiones, desde varios años antes participaba en la vida política mediante la expresión de sus puntos de vista bajo el nombre de Partido Socialista Naserista. Sería este un expediente común en la política egipcia de los años 80 y sobre todo 90: los partidos que aspiraban a constituirse legalmente actuaban y eran citados con la etiqueta de “partido en fundación” (تحت التأسيس). Aunque no tenían cobertura legal, en la práctica lo único que no podían hacer dichos partidos era presentarse a las elecciones. Se diría que pasaban un “periodo de prueba”, en el que el régimen observaba sus movimientos y quienes se asociaban a él.

El Partido Socialista Naserista “en formación”, dirigido por Diyá Eddín Daud, que había sido ministro en época de Náser y fue detenido por Sadat en su “revolución correctiva” de 1971, atrajo ya desde antes de su fundación a numerosos miembros naseristas del Tagammu. En 1990 Daud consiguió un escaño en las elecciones al Parlamento, a las que se había presentado como independiente. No obstante, en los primeros años 90 surgieron profundas divisiones en las filas del partido, que explotaron tras su legalización bajo un nuevo nombre. En enero de 1993, con tan solo un día de diferencia, se celebraron el congreso del Partido Naserista oficial, dirigido por Daud, y el de la corriente ya escindida de él, liderada por Farida Abdel Karim, que pretendía así mismo constituirse en partido.

Un miembro no especificado del equipo de redacción de la revista *Civil Society* en su versión árabe asistió a ambos congresos para conocer las diferencias entre ambos partidos⁵². En el terreno de las políticas exterior, económica e interior en general, las concordancias eran abrumadoras. En cuanto a los motivos de discrepancia, Daud los atribuía al descontento de sus adversarios por no haber accedido a las posiciones dirigentes del partido oficial. No obstante, la corriente opositora de Farida Abdel Karim emitió al final de su congreso un comunicado en el que denunciaba la toma de la dirección del partido por “el grupo del 15 de mayo” (en alusión a los altos dirigentes naseristas del grupo de Guma y Charaf detenidos por Sadat⁵³), así como “el intento de arrastrar al partido a una batalla inmoral contra la corriente islámica, una batalla en la que el único perdedor será el pueblo egipcio” (pág. 31).

En definitiva, el Partido Naserista (autorizado), según una parte de sus propios miembros iniciales, se situaba al lado del poder político en la batalla contra el islamismo;

⁵² "الحزبان الناصريان"، المجتمع المدني، رقم ١٤، فبراير ١٩٩٣، ص. ٢٩-٣١.

⁵³ Véase capítulo II 1.1.

de la misma manera que, como hemos señalado en el capítulo III 9.5, apoyaba el mantenimiento del sindicato único de trabajadores. La obtención de un escaño en el Parlamento por Daud en 1990 ha de ser situada en este contexto.

4.2 DESCONOCIMIENTO Y DESCRÉDITO POPULARES DE LOS PARTIDOS

Como hemos señalado en las conclusiones del capítulo III, a finales de los años 80 y antes de las elecciones legislativas de 1990 la impresión general que daban los partidos de la oposición y sus aliados (los Hermanos Musulmanes) a los estudiosos extranjeros (Hinnebusch 1988; Zartman 1988), entre los que nos incluimos, era la de ser “partidos de presión” que aceptaban dicho rol en un sistema de “partido dominante”. En gran medida todos defendían sus intereses particulares y aspiraban a la cooptación -ya fueran sus miembros individualmente ya los partidos u organizaciones mediante la cooptación electoral- más que a una victoria electoral, por más que el control ejercido por el poder político sobre los resultados de las elecciones la hiciera imposible.

No obstante, dentro de las conclusiones mencionadas matizábamos que el boicot de los principales partidos de la oposición a las elecciones legislativas de finales de 1990 podía indicar el inicio de una nueva etapa en sus relaciones con el poder político por parte de los partidos y fuerzas que lo respaldaron (Partido del Trabajo, Wafd, Partido Liberal, Hermanos Musulmanes), aunque la participación del Tagammu en las elecciones, junto a sus posturas sindicales ya mencionada en el capítulo III 9.5, confirmaran que este se adaptaba a una oposición más acomodaticia que vociferante.

4.2.1 Oposición de boquilla, oposición vociferante y auténtica oposición

Como ya hemos mencionado, en las conclusiones de la parte III señalábamos que era necesario distinguir entre los tipos de oposición practicada por los partidos políticos. Según nuestra clasificación, uno de esos tipos era la oposición sumisa, practicada por el Partido Liberal y la mayor parte de los nuevos partidos creados entre 1987 y 1990 sin apoyo social. Esta sumisión se manifestaba en el apoyo a todas las principales políticas del régimen de Mubarak.

Para los otros tipos de oposición, desde la constatación de que todos los partidos respetaban los límites impuestos por el régimen político, que se resumían esencialmente en consentir una gran libertad de expresión y prohibir las actividades de masas, apuntábamos que la oposición de todos los partidos era una oposición verbal en la medida en que no se salieran de dichos límites. No obstante, dentro de la oposición verbal distinguíamos como

tipos puros una “oposición de boquilla” (en la que el contenido de algunas manifestaciones de oposición entraba en contradicción con otras acciones y posturas del partido o con el escaso empeño puesto en difundir las opiniones adversas al régimen) y una “auténtica oposición”. Una “auténtica oposición” se distinguía por violar los límites impuestos por el poder político a las formas de expresar la oposición, ya fuera pasando de la expresión verbal a otras formas de acción -manifestaciones, huelgas, “contactos con las masas”-, ya fuera violando mediante la expresión los límites impuestos de manera tácita por el poder político.

Finalmente, precisábamos que la “auténtica oposición verbal” no se medía por lo “vociferante” que fuera la expresión de la oposición, sino por la medida en que dicha oposición fuera “vociferante” y constante en relación a aspectos fundamentales de la política egipcia, y en particular por la medida en que violaba los límites mencionados, en el fondo o en la forma. Unos límites denominados por los medios políticos y periodísticos egipcios “las líneas rojas”, que eran bien conocidas y/o que el poder político se encargaba de señalar mediante sus reacciones ante quienes las violaban o se acercaban a ellas.

4.2.1.1 La libertad de expresión y la prensa vociferante

Una de las razones principales por las que el sistema político egipcio de los años 80 y principios de los 90 no puede ser considerado de ninguna manera una dictadura es la muy considerable libertad de expresión existente en el país. Ciertamente es que el alcance máximo de esa libertad de expresión quedaba restringido al círculo más interno de una serie de círculos concéntricos con los que podríamos representar la situación de la libertad de comunicación. Es decir, el máximo de libertad de expresión se daba en la prensa y sedes de los partidos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil, mientras que dicha libertad decrecía en los periódicos estatales; y encontraba su mínima expresión en los medios de comunicación audiovisuales y en las calles. No obstante, ahora nos referimos a los dos mayores ámbitos de la libertad de expresión.

En los años 80 y principios de los 90, los periódicos de la oposición se hacían eco de las violaciones de los derechos humanos y de los elaborados y completos informes de la Organización Egipcia de Derechos Humanos; criticaban abierta y virulentamente las políticas del Estado y a la mayor parte de los ministros, por no hablar de sus subordinados; y denunciaban sin cesar casos de corrupción y negligencias del Gobierno (edificios que se derrumbaban, choques y descarrilamientos de trenes, importación de alimentos caducados o en mal estado, etc.). Por su parte, en los periódicos estatales también se practicaba la crítica con una clara división de funciones y con una rebaja en su intensidad: en los semanarios, de menor difusión, “asignados” a la participación de fuerzas relativamente

contestatarias (principalmente *Ruz al-Yusuf*, *Al-Musawwar*, *Al-Ahram al-Iqtisadi*, *Sabah al-Jeir* y las revistas culturales citadas en IV 3.4), era constante la crítica a diversos sectores y diversas políticas del régimen; en los grandes diarios estatales, había una nueva división de funciones: los colaboradores externos, “las firmas” (conservadoras, de izquierdas, islamistas, liberales⁵⁴), practicaban la crítica de manera general, sin apuntar directamente a responsables o hechos; los redactores eran férreamente controlados; y las “firmas del poder” y los directivos del periódico se permitían emprender campañas muy agresivas contra importantes sectores del poder, excluyendo toda crítica, por ejemplo, a la situación de los derechos humanos o cualquier actitud comprensiva hacia el islamismo radical.

La nómina de las críticas, supuestos casos de corrupción y negligencias, y campañas contra dirigentes políticos publicados en la prensa egipcia es tan amplia que dar cuenta de ella requeriría varios libros y un sinfín de detalles enojosos⁵⁵. Ya hemos citado algunos casos especialmente reveladores de los 80 y principios de los 90 (campaña por parte de la prensa estatal contra Ahmad Ruchdi, contra Zaki Badr (ambos ministros del Interior) y contra parte de los servicios secretos en 1986-1990; campaña contra Zaki Badr por la prensa de la oposición; efectos del terremoto de 1992) y podríamos citar muchos más (campañas contra todos los ministros de Economía, contra Abdel Halim Musa, ministro del Interior -sucesor de y enfrentado a Zaki Badr a principios de los 90-, campaña contra los ministros de Cultura, Faruq Hosni, y el presidente del Gobierno, Atef Sidqi, a finales de los 80 y principios de los 90; caso de la importación de carnes descompuestas en 1989-1990), y citaremos algunos otros más adelante.

Lo que nos importa destacar es que incluso los diarios estatales invariablemente alineados con el régimen participaban en un juego en el que se dirimían, al margen de los indudables casos de profesionalismo y rectitud moral, disputas políticas y de intereses entre los diversos sectores del régimen y de la sociedad, a las que no eran ajenos los diversos servicios secretos, proveedores de “información” y de protección.

En cuanto a los medios de los partidos políticos, en ocasiones también participaban

⁵⁴ La nómina de colaboradores de *Al-Ajbar* y, sobre todo *Al-Ahram*, es amplísima, pero podemos citar, por la izquierda, a modo de ejemplo, a Mohammed Sid-Ahmed, Lutfi al-Juli y Anwar Abdel Malek; por la corriente islamista “moderada”, a Fahmi Huweidi y Tareq al-Bichri; entre los liberales, a Salah Eddín Hafez o Said al-Naggar; entre muchos otros.

⁵⁵ Sonallah Ibrahim publicó en 1993 una original, divertida y excelente novela, titulada literalmente *Zet* (ذات), que podríamos traducir mejor como *Los años de Zet*, como hizo su traductor al francés (*Les années de Zeth*, Actes Sud, Arles: 2002; traducción de Richard Jacquemond), en la que intercalaba capítulos de su narración de ficción con capítulos enteros de titulares y noticias reales de los periódicos egipcios de los años 80 y principios de los 90, gran parte de ellos referidos a casos de corrupción, negligencias del Gobierno y escándalos sociales (véase capítulo V 3.3).

en ese juego de intereses, como han señalado numerosos autores (Hinnebusch 1988; Zartman 1988). No obstante, lo que queremos destacar ahora -y veremos con más detalle en las páginas siguientes- es que, fueran cuales fueran sus motivaciones, su margen de expresión era muy amplio, aunque las “líneas rojas” infranqueables eran claras y explícitas: atacar al presidente de la República (secuestro de *Al-Ahali* en 1987 porque pedía el voto negativo en el plebiscito presidencial); atacar a aliados muy poderosos y exigentes (cierre del semanario *Saut al-Arab*, en agosto de 1988 por atacar a Arabia Saudi; toma del control de *El Joven Egipto* en 1992 por la misma razón); desvelar secretos oficiales (secuestro de *Al-Ahali* en 1987 por publicar información judicial reservada sobre el grupo Revolución de Egipto).

4.2.1.2 El *laissez-faire* del poder con el Wafd y el Tagammu

Desde 1990 y hasta 1993, el Wafd y el Tagammu mostraron una nueva concordancia con las posturas políticas del Gobierno, aunque se manifestaran de diversa manera.

El Wafd apoyó la política gubernamental en la Crisis del Golfo, la apoyaba sin ambages en su enfrentamiento con el terrorismo islamista -era el periódico que menos denunciaba los excesos de las fuerzas de seguridad- y apoyaba en general la liberalización económica. Aunque desde los presupuestos ideológicos del Wafd de los quince años anteriores dichas posturas eran “normales”, lo significativo es que no se atrajo ni en una sola ocasión las iras del poder político.

En cuanto al Tagammu, su situación era más comprometida. Por su definición ideológica debía oponerse formalmente al Gobierno en la Crisis del Golfo y enfrentarse a la liberalización, al mismo tiempo que defendía la libertad sindical. Sin embargo, en ambos terrenos rebajó su tono al máximo, como ya hemos señalado, provocando que los detractores de la política egipcia frente la cuestión Irak/Kuwait se orientaran hacia la lectura de *Al-Chaab*, mientras que los sectores marxistas, y en particular los sindicalistas, abandonaban sus filas. Pero fue en el enfrentamiento con el islamismo en el que el Tagammu y su órgano de prensa mostrarían una mayor coincidencia con el Gobierno, en particular desde el acceso de Rifaat al-Said al puesto de secretario general del partido en 1993. El 22 de septiembre de 1993, Al-Said expresaba su posición con toda claridad tras proponer la creación de un “frente nacional contra el terrorismo”, en el que según él “podría haber gente del PND, pero no del PST ni de los Hermanos Musulmanes”, porque “al mismo tiempo que censuran el terrorismo, lo glorifican”. “Si peligra la unidad nacional

-concluía Said- estaré con el Gobierno al cien por cien”⁵⁶. Entre 1990 y 1993, el Tagammu tampoco fue hostigado de ninguna manera por el Gobierno.

4.2.1.3 El Partido del Trabajo, látigo del poder político

Caso bien diferente del del Wafd y el del Tagammu fue el del Partido Socialista del Trabajo. Como ya hemos señalado, bajo el impulso de Adel Husein, uno de los numerosos “tránsfugas” egipcios y árabes del marxismo al islamismo, según la expresión de Gómez García (1996: 35-41)⁵⁷, el PST evolucionó entre 1985 y 1989 hasta convertirse en un partido explícitamente islamista y abandonar en su denominación el adjetivo “socialista”. Ello no supuso, sin embargo, que abandonara su intensa preocupación por la justicia social, el nacionalismo, la solidaridad panárabe, el desarrollo económico y el mantenimiento de un papel “fuerte del Estado” para alcanzar estos objetivos.

En el plano político operativo, antes de 1990 el Partido del Trabajo, por medio de su órgano de prensa, *Al-Chaab*, dirigido por Adel Husein, ya había atraído la atención del Gobierno, que, como hemos señalado, había intentado apoyar a los disidentes del partido para destruirlo o debilitarlo. La acogida en sus páginas no solo a las plumas de los Hermanos Musulmanes y de todo tipo de intelectuales, sino también, mediante entrevistas, a los dirigentes encarcelados del islamismo radical había sido solo uno de los motivos de preocupación. Su energía y liderazgo en las campañas contra los ministros Zaki Badr (Interior), Faruq Hosni (Cultura) y Atef Sidqi (presidente del Gobierno) y en defensa del boicot a las elecciones legislativas de 1990 habían contribuido también a ella (Gómez García 1996: 178-179).

El PT comenzó la nueva década con renovados ánimos, y apuntando adonde más le dolía al ejecutivo. Su postura ante la Crisis del Golfo fue la más convincente de las de las fuerzas de la oposición, y la más adversa a los intereses del Gobierno. Pese a sus similitudes con las de otros partidos, como el Tagammu, el PST fue mucho más crítico con el Gobierno e intentó llevar a cabo actividades de mediación para alcanzar una solución negociada, a las que atrajo a los Hermanos Musulmanes. Fue sin duda la fuerza política más activa contra la guerra, lo que hizo que la tirada de *Al-Chaab*, aún semanario, se

⁵⁶ *Al-Ahali*, 22 de septiembre de 1993.

⁵⁷ Entre los egipcios podemos citar, además de a Husein, a Mohammed Imara, Tareq al-Bichri y Galal Amín. Aunque cada caso sea diferente, pues se trata de personajes con un perfil propio, cada uno de ellos -siendo Husein el único auténtico activista-, se caracteriza por querer compatibilizar los valores culturales islámicos con, en diversa medida cada uno de ellos, el liberalismo, la justicia social, el nacionalismo de corte panárabe y, en general, la modernización económica y social.

triplicara hasta alcanzar los 160.000 ejemplares en febrero de 1991 (Gómez García 1992: 101).

En los años de 1992 y 1993, tensados por las actividades armadas del islamismo radical, *Al-Chaab* -que en agosto de 1992 comenzó a publicarse dos veces a la semana- desempeñó un papel un tanto equivoco, no porque apoyara las actividades de los grupos armados -que no lo hizo- ni porque no denunciara sin cese la desmedida acción represiva de las fuerzas de seguridad o no intentara explicar las razones de la violencia islamista -cosas ambas que sí hizo-, sino por su actitud en casos como el del asesinato de Farag Fuda, en el que, como ya hemos señalado, dio pábulo a la anatematización de aquel por el jeque Al-Gazzali.

De cualquier manera, el poder político ya tenía en su punto de mira a *Al-Chaab* y a Adel Husein, ahora por más amplias razones, y en 1992 aquel hubo de comparecer en dos ocasiones, en noviembre y diciembre, ante el Alto Tribunal de Seguridad del Estado, en virtud de la Ley Antiterrorista de julio de 1992. En una ocasión para responder acerca de dos artículos en los que según la Fiscalía había, respectivamente, instigado al odio a los turistas e incitado a la población a amotinarse tras el terremoto del 12 de octubre de ese año; y en otra por atentar contra la estabilidad del Estado al repartir panfletos pidiendo la deposición de Mubarak⁵⁸. Poco después, en febrero de 1993, la Comisión de Partidos admitiría a trámite la demanda de destitución del presidente del PT, Ibrahim Chukri, y de Adel Husein como redactor jefe de *Al-Chaab* presentada por los disidentes del PT dirigidos por Ahmad Mugahid (a los que hemos hecho referencia en el capítulo III. 7.5). No obstante, junto al palo el régimen político también agitó la zanahoria, o al menos así lo interpreta Gómez García (1996: 255) al señalar que en los primeros números de la segunda edición semanal de *Al-Chaab*, publicada los viernes desde agosto de 1992, empezó a aparecer abundante publicidad de las grandes empresas del Estado. No obstante, los intentos del poder político de ablandar al PT y a *Al-Chaab* serían vanos, como veremos a continuación (capítulo IV 5.1).

4.2.1.4 La contención de los Hermanos Musulmanes

Entre 1990 y 1993 los Hermanos Musulmanes centraron sus actividades en los sindicatos profesionales. Las actividades armadas del islamismo radical los situaban en una situación comprometida. Sin dejar de criticarlas, tampoco podían evitar denunciar la

⁵⁸ Los artículos citados fueron publicados en los números 680 y 683 de *Al-Chaab*. Sobre la segunda comparecencia de Husein el propio periódico informó en sus números 697 y 698. Citado por Gómez García (1996: 254).

violencia de la represión de las fuerzas de seguridad, así como no podían dejar de plantar cara discretamente a los intelectuales “secularistas”. Sin embargo, la situación tampoco era sencilla para el Gobierno: necesitaba un islamismo “moderado” para afrontar al “radical”, aunque la moderación de la Hermandad no le pareciera suficiente.

No obstante, a principios de 1992 el Gobierno decidió enviar una clara señal a la organización al ordenar la detención de los tres propietarios de la empresa informática Salsabil, fundada en 1983. Dos de ellos eran dos conocidos miembros de los Hermanos Musulmanes y prósperos hombres de negocios en diversos sectores, Hasan al-Malek y Jeirat al-Chater. Al-Chater en particular sería antes y después de 1992 señalado por los servicios de seguridad como uno de los principales financiadores de la Hermandad. Los propietarios de Salsabil fueron acusados de recopilar información sobre proyectos militares secretos, de realizar estudios socio-políticos sobre la población y sus opiniones acerca del régimen político, de difundir información falsa sobre la situación de los Derechos Humanos y de manipular los resultados de las elecciones a los sindicatos profesionales, todo ello beneficiándose de los medios electrónicos de los que disponían.

No obstante, todo parece indicar que el “caso Salsabil” fue un montaje del régimen egipcio para atacar a la Hermandad. Los acusados pasaron un año en prisión sin que se les acusara finalmente de ningún delito, y se da la circunstancia, sin embargo, de que el Ejército egipcio era uno de los principales clientes de Salsabil⁵⁹, resultando inverosímil que aquel hubiera puesto en manos de miembros de la organización islamista, bien conocidos por los servicios secretos, ningún tipo de información sensible, mientras que, por el contrario, no es descartable que su contratación pudiera tener segundas intenciones.

4.2.2 Elites y vulgo: una doble encuesta de opinión

La visión de los egipcios no era muy diferente a principios de los 90 de las de los estudiosos extranjeros. En 1991 y 1993 se publicó la primera encuesta de opinión realizada con criterios científicos no solo de la época de Mubarak, sino de toda la historia egipcia, acerca de “la opinión de los ciudadanos sobre los partidos y la práctica partidista” (قنديل 1991; العامر 1993). Como no podía ser de otra manera, la encuesta la realizó el Centro Nacional de Investigaciones Sociológicas y Criminales, y fue dividida en dos partes, realizadas y publicadas en dos momentos distintos, una sobre “la opinión de una muestra de la elite (النخبة)” (1991) y otra sobre la opinión de “una muestra de la gente” o “el público”

⁵⁹ Eric Trager, Katie Kiraly, Cooper Klose y Eliot Calhoun: “Who is who in the Muslim Brotherhood”, septiembre de 2012, The Washington Institut for Near East Policy (<http://goo.gl/dxMM9H>, consulta del 6 de julio de 2015).

o “la masa” (الجمهور) (1993).

La encuesta a la elite fue realizada a finales de 1990, coincidiendo con la celebración de las elecciones legislativas. Fue una muestra a partir de periodistas de la prensa estatal y de partidos, profesores de universidad e investigadores, miembros de los sindicatos profesionales, directivos de la radio y la televisión (públicas), hombres de religión y dirigentes de partidos políticos (قندیل 1991: 39-41). La cuarta parte de ellos pertenecían a un partido político, y dentro de estos el porcentaje más elevado al partido gobernante.

Las preguntas de la encuesta eran muy numerosas, pero destacaremos algunos de sus resultados, que conformaban un libro de más de 200 páginas. A la pregunta de si creían que los ciudadanos seguían la vida política, más del 80% de los encuestados respondían que no. Entre las razones del desinterés por aquella, más de un 60% destacaban la “escasa efectividad de los partidos y su escasa capacidad para «penetrar profundamente» en las masas”, y más de un 49% la “pérdida de la confianza en los dirigentes de la acción política” (قندیل 1991: 66-67)

En cuanto a las propias opciones de la elite, de los más de tres cuartos de la muestra que no pertenecían a un partido político, el 27,5% declaraba que ello se debía a que no estaban convencidos de su eficacia, el 11,6% a que pertenecían a una corriente política no permitida, el 10,5% a que podían participar en la vida política de otra manera, el 7,8% a que los partidos eran “partidos de personas”, y un 11,1% a que los partidos no se preocupaban por los auténticos problemas de la sociedad o a que sus programas no estaban claros (ibid. pág. 72). Finalmente, el 54,5% declaraba que no votaba en las elecciones, y el 56,8% de ellos declaraba que no lo hacía porque no confiaba en la limpieza de las elecciones, el 21,6% porque no se había molestado en sacar la tarjeta electoral, y el 14,9% porque estaba convencido de que no servían para nada (ibid. págs. 74, 76).

Por lo que respecta a la encuesta al público en general, fue realizada entre abril y junio de 1992 a una muestra de 1.378 personas. Como no podía ser de otra manera, CAPMAS, la agencia encargada de elaborar las estadísticas estatales, pero también de autorizar cualquier tipo de encuesta de opinión -algo que raramente hacía a principios de los 90- y dependiente de los servicios secretos, supervisó el cuestionario de la encuesta (العامر 1993: 1-21). La muestra fue elegida atendiendo a diversos criterios (religión, nivel de educación, ocupación laboral, lugar de residencia) para que fuera representativa de la población. Cabe destacar que fueron incluidos un 6% de coptos, un porcentaje cercano al que oficialmente se estimaba para el conjunto de la población -aunque menor que el que reclamaban los propios coptos-, y un 41,5% de analfabetos, y que los campesinos (7,8%) y los comerciantes (1,7%) estaban tal vez infrarrepresentados, a diferencia de las “profesiones superiores” (23,1%) y de las amas de casa (22,2%). Otro aspecto muy digno

de reseñar es que

“Un gran número de los entrevistados mostraron sentimientos de desconfianza y miedo ante los encuestadores, pensando que eran enviados en realidad por la policía o la agencia tributaria, o que representaban de una u otra manera al Gobierno (...) afirmando muchos lo mucho que apreciaban lo que el régimen y el Gobierno hacían por ellos” (العامر 1993: 19).

Otra parte importante de quienes debían ser encuestados se negó directamente a abrir las puertas de sus casas, y otros se negaron a contestar una vez conocieron el objeto de la encuesta. Muchas mujeres se negaron a hacerlo alegando que no estaba en la casa el cabeza de familia.

A pesar de las singulares circunstancias en las que se realizó la encuesta, mencionaremos algunos de sus resultados, no sin señalar que ya conocíamos las peculiares circunstancias en las que debía realizarse cualquier encuesta de opinión “al público en general” en Egipto a principios de los años 90, en el caso de que fuera autorizada, lo que era absolutamente improbable.⁶⁰

En cuanto al conocimiento de la existencia de los partidos, en El Cairo un 17,2% de los encuestados afirmaba desconocerla, frente a tan solo un 3,1% en Alejandría. No obstante, el porcentaje se elevaba por encima del 40% en las provincias de Guiza (junto a El Cairo), Al-Garbiyya (en el Delta) y Beni Suef (en el Alto Egipto). Entre las mujeres en general, el porcentaje de desconocimiento se elevaba al 55,5%. El PND era conocido por el 95% de los encuestados que sabían de la existencia de partidos, el Wafd por un 78,5%, el PT por un 53%, el Tagammu por un 37% y el PL por un 33,4% (العامر 1993: 26-28). De entre quienes conocían la existencia de periódicos de partidos (cerca del 55%), el 52,3% declararon leer *Al-Wafd*, el 13,7% *Al-Chaab*, el 8,8% *Mayu* y el 8,1% *Al-Ahali*, mientras que el 39,9% afirmaron no leer ninguno (ibid. pág. 32). En cuanto a la credibilidad de los periódicos (incluidos los estatales), un 31,4% y un 34,5% de los encuestados que conocían la existencia de los periódicos atribuían credibilidad a los estatales *Al-Ahram* y *Al-Ajbar*, y tan solo un 8,6% al Wafd, siendo este sin embargo el periódico de la oposición más creíble, pues *Al-Chaab* lo era tan solo para un 1,1% y *Al-Ahali* para un 0,7%. Finalmente, el 64,8% de quienes declaraban conocer la existencia de los partidos afirmaban no seguir sus actividades (ibid. págs. 34, 45).

Por último, todos los encuestados fueron preguntados acerca de si creían que la

⁶⁰ Fue esta circunstancia la razón que nos llevó a renunciar a realizar nuestras propias encuestas de este tipo durante nuestra primera etapa de investigación en el país a mediados de los 90.

gente se interesaba o no por la política (sin mencionar a los partidos políticos). Un 44,8% respondió que sí, un 39,4% que no, y un 15,8% declaró que no lo sabía. A quienes respondieron que no, se les preguntó acerca de las razones de ello: un 53,8% respondió que la gente estaba ocupada con ganarse la vida, un 19,2% que no tenían tiempo libre, y un 37,4% que “poca gente entendía de política” (ibid. págs. 3-44). No obstante, preguntados acerca de si ellos mismos habían sacado su tarjeta electoral, tan solo el 27,1% del total declaraba que sí, y entre las mujeres el porcentaje era del 6,1%. En cuanto a las razones de quienes no la habían solicitado, el 20% declaraba no saber nada del tema, y el 16,5% que no sabían cuál era el procedimiento; mientras que el 26,9% creía que no tenía interés hacerlo, el 14,7 pensaba que no eran limpias las elecciones, y el 7,8% que no tenían a quién elegir (ibid. págs. 56-57).

Aunque los resultados de las encuestas citadas han de ser tomados con numerosas precauciones, no por ello dejan de ser de una gran utilidad. El propio diseño de las encuestas, asignando una a la élite y otra al público en general, revela la concepción de la propia elite -de la que el equipo de investigadores forma parte- acerca de la división no solo sociocultural, sino también política de la sociedad, concepción que no deja, por otro lado, de reflejar la realidad. Podemos jugar con las palabras y decir que en el diseño del sistema político propuesto por Mubarak “el público”, las “masas”, era en gran media “un público” espectador, mantenido al margen del sistema político. Las “élites” podían participar en el sistema político formal y, si no podían o querían hacerlo, podían participar en la política “de otra manera”, como declaraba más de un 10% de los encuestados. Es más, las elites podían permitirse manifestar, en un 11,6%, que no participaban en ningún partido “porque la corriente política a la que pertenecían no estaba autorizada”. El público no podía hacerlo, ni expresar otras opiniones en ese sentido, ya fuera porque las preguntas de la encuesta no se lo permitían, ya por la desconfianza y temor ante las posibles consecuencias de manifestarse de tal manera.

No obstante, nos interesa señalar el desconocimiento, desinterés y desconfianza generales hacia el sistema político, y dentro de él hacia los partidos de oposición. Los resultados de la encuesta a las elites son tal vez más representativos, aun teniendo en cuenta que se trata de elites “autorizadas” institucionalmente. La muestra de las elites fue elegida a partir de su posición en la sociedad, en el Estado y en el sistema político. No se trata de elites elegidas, por ejemplo, por su nivel educativo, pero tampoco por su posición socioeconómica (no hay en la muestra hombres de negocios, ni profesionales al margen de los sindicatos, ni intelectuales al margen de los medios de prensa, ni estudiantes destacados, ni muchas otras categorías). Y, a pesar de ello, en dichas elites se manifestó también una gran desconfianza y desinterés ante el sistema político y los partidos, y en particular los de la oposición. Todo ello explica que desde principios de los años 90 gran

parte de las elites orientaran su activismo social y político hacia los sindicatos profesionales y las ONG, considerados más eficaces y más accesibles que los partidos.

4.2.3 Más razones de la escasa eficacia y atractivo de los partidos

En 1993, Wahid Abd al-Magid, investigador del Centro de Estudios Políticos y Estratégicos de Al-Ahram, publicó su tesis doctoral, defendida poco antes, bajo el título *Los partidos egipcios desde el interior: 1907-1992* (عبد المجيد 1993). La aportación más novedosa de Abd al-Magid era que, en cuanto a los partidos anteriores a 1952, el Wafd, el campeón del nacionalismo y el constitucionalismo, era el partido en el que había menos democracia interna. En cuanto a los partidos de principios de los 90, su obra tenía la virtud de dar un baño de academicismo a lo que todos los observadores atentos conocían. Las conclusiones de Abd al-Magid señalaban que no debía hacerse mucho caso a los reglamentos internos de los partidos, pues no reflejaban su funcionamiento real, que era esencialmente presidencialista y piramidal. A pesar de que dichos reglamentos establecían las elecciones como el sistema seguido para elegir a los dirigentes, en la práctica eran sus presidentes, solos o con la colaboración de un pequeño círculo de allegados, quienes tomaban todas las decisiones. Las bases eran apartadas en particular de la gestión de los asuntos del partido, y ello con el consentimiento de aquellas, y los mayores grados de democracia se daban en la toma de las decisiones que no estaban relacionadas con los puestos de poder e influencia.

El dominio de los presidentes sobre sus partidos era un hecho incontestable. En 1993 todos ellos continuaban dirigiéndolos desde su fundación, la mayor parte en 1978, a pesar de su avanzada edad: Fuad Serag Eddín (Wafd) tenía 82 años; Ibrahim Chukri (PT), 77; Jaled Mohai Eddín (Tagammu), 71; Mohammed Kamel Murad (PL), 66; Diyá Eddín Daud (Partido Naserista), 66 (si bien, el Partido Naserista inició sus actividades en 1990).

Por debajo de la incontestable hegemonía de los presidentes, en el seno de todos ellos se habían producido fuertes enfrentamientos entre los aspirantes a dirigirlos o a marcar su línea política, sobre todo en el Wafd (1985-1989), el PT (1987-1989) y el Partido Naserista (1990-1992), pero también en el Tagammu. Los casos del Partido Naserista y del PT ya los hemos analizado en los capítulos precedentes (véase III 7.5 y IV 4.1 respectivamente). El del Wafd se debió a estrictas luchas de poder. En cuanto al Tagammu, se trató más bien de un continuo goteo de apartamientos del partido, sobre todo en la medida en que se iba aproximando cada vez más a la línea gubernamental. No obstante, en 1989 perdió definitivamente el apoyo de los sectores comunistas sindicales, cuando Kamal Abbás y los históricos dirigentes de estos sectores, Yusuf Darwich y Nabil al-Hilali, fundaron el Partido Socialista del Pueblo (حزب الشعب الاشتراكي).

En este contexto generalizado de descrédito de los partidos políticos, temor y desinterés del grueso de la población hacia ellos y maniobras del poder para controlar y, si no, desarmar toda auténtica oposición, tuvo lugar el plebiscito presidencial de 1993.

5. EL PLEBISCITO PRESIDENCIAL DE OCTUBRE DE 1993: UN IMPERIOSO “SÍ”

En el marco de la investigación que acabaría conduciendo a la elaboración de esta tesis doctoral, en las dos últimas semanas de septiembre y la primera de octubre de 1993 nos dedicamos exhaustivamente a recoger toda la información que encontramos sobre el plebiscito presidencial a celebrar el 4 de octubre de 1993 en la prensa de los principales partidos de la oposición (periódicos *Al-Chaab*, *Al-Wafd* y *Al-Ahali*), así como en algunos medios de prensa extranjeros y, sobre todo, en los dos principales diarios estatales (*Al-Ahram* y *Al-Ajbar*).

Los resultados del plebiscito según los datos oficiales, tanto en términos de apoyo y rechazo como de participación, eran previsibles en nuestra opinión y en la de otros muchos, según justificaremos a continuación. Los resultados de participación “reales” eran una relativa incógnita que solo podría ser despejada aproximadamente observando el proceso de votación. Por otro lado, los partidos y fuerzas políticas de la oposición habían anunciado sus posturas.

¿Cuáles eran entonces las razones que nos llevaban a realizar un estudio tan detallado, sobre todo del periodo preelectoral pero también del posterior? Por un lado, queríamos saber cuáles eran las posturas “reales”, o si se quiere “detalladas”, de las fuerzas de la oposición. Por otro lado, queríamos observar con el mismo detalle la campaña a favor de Mubarak de sus partidarios. Por nuestras lecturas y por nuestra residencia en el país⁶¹ conocíamos muchas características de lo que llamamos “el discurso del Estado”, y dentro y fuera de este muchas de las que llamamos “el discurso presidencialista”. Sobre estos discursos, y sobre sus apoyos, trata principalmente este apartado.

⁶¹ Hay que decir que en octubre de 1993 habíamos residido la mayor parte de los cuatro años anteriores en Egipto, y que de manera primero más informal y luego más sistemática, durante la mayor parte de ese periodo nos habíamos dedicado a estudiar la política egipcia, leyendo cotidianamente numerosos periódicos de todo signo. También teníamos una amplia y diversa vida social, y sabíamos lo que pensaban bastantes egipcios de toda condición de las elecciones presidenciales, siendo la mayor parte de ellos bastante escépticos.

5.1 LAS POSTURAS DE LOS PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN

5.1.1 El discurso del “sí”

El Partido Liberal (PL), el Partido de la Umma (PU), el Partido Unionista Democrático (PUD), el Partido de los Verdes (PV) y el Partido Egipto Árabe (PEA) manifestaron su apoyo a Mubarak.

El Informe Estratégico Árabe (1993: 295) dio cuenta de las razones de estos partidos menores, a los que no habíamos prestado demasiada atención.

El PL, el único que había tenido una (escasa) participación en el Parlamento, declaró hacerlo “en atención a los logros externos e internos de las dos etapas anteriores”, pero remarcó la “necesidad de completar el marco democrático (...) modificando la Constitución de manera acorde a la etapa liberal, de liberalización económica y pluripartidismo que atravesaba el país”.

El PU afirmó que no había “ni en los partidos de la oposición ni en el propio PND nadie que sirviera para ser presidente, solo Mubarak, en particular en un momento tan delicado”.

El PUD apoyó a Mubarak por “lo mucho que había hecho para liberar a la economía egipcia de las cadenas que la atenazaron durante los tres años anteriores”.

El PV consideró que “nadie disiente de la reelección de Mubarak”, y que era “el candidato más adecuado”.

El PEA anunció que el Comité Supremo del partido había “decidido por unanimidad dar su apoyo a Mubarak desde la convicción por sus capacidades ampliamente demostradas y su profunda comprensión de los problemas de la nación (أمة) árabe e islámica”.

5.1.2 El discurso del “no” rotundo

El periódico del PT emprendió tempranamente una furibunda campaña contra la reelección de Mubarak. El 14 de septiembre, la portada de su periódico *Al-Chaab* presentaba dos grandes titulares: uno de ellos rezaba “No a Mubarak”, y el segundo “Estos son tus súbditos, señor presidente”. A continuación de este último aparecían cinco grandes fotos: dos de muertos a manos de la policía, dos de los rostros de dos torturados por la misma, y una de una niña cuya casa había sido demolida por las fuerzas de seguridad. En todos los casos, según el periódico, las víctimas eran inocentes.

En el interior del mismo número del periódico, en la página 9, se enviaba al

régimen una carga de profundidad de similares dimensiones, al recoger las siguientes palabras de Farid Hasanein pronunciadas en un encuentro al que asistieron Ibrahim Chukri, Adel Husein y el resto de los dirigentes del partido:

“¿Por qué la situación económica es mala? Porque nos gobierna una banda, y el dinero y la tierra se reparten entre los hijos de la elite. El clientelismo se extiende por todas partes, y el sistema solo protege a sus mercenarios (...) Entonces, ¿qué hacer? (...) No penséis que el Gobierno durara mucho tiempo, porque el corrupto [o “los corruptos”]⁶², al primer grito del pueblo, se marchara al extranjero, y el resto de los extraviados del Ejército y de la Policía se unirán al pueblo”.

Los grandes titulares de portada contra la reelección de Mubarak se sucederían en los números siguientes. El del 28 de septiembre explicitaba la estrategia del partido: “Boicotear el plebiscito”. Ante la previsible manipulación de los resultados, el partido llamaba al boicot como única forma de hacer visible el rechazo de la población. El 30 de septiembre el periódico informaba de un encuentro de Ibrahim Chukri, y subrayaba sus posturas: “Rechazamos el terrorismo de Estado antes que el de los individuos”, “No escuchéis los consejos de los ulemas ni los de los políticos”. El 1 de octubre, Magdi Ahmad Husein, sobrino de Adel e hijo del histórico Ahmad, escribía así mismo en portada:

“No al plebiscito (...) No hay duda de que el pueblo está aburrido (...) y quiere acabar con esta comedia que añade fastidio al fastidio de la vida cotidiana que existe gracias a esos hipócritas (...) Nuestra cita con el despotismo no es el 4 de octubre (...) pues es el pueblo quien decide el día y hora adecuados para la batalla”.

Finalmente, pocos días antes del plebiscito, un panfleto en forma de boletín encuadrado a todo color titulado “¿Por qué decimos en el plebiscito «no»?” y firmado en portada por Adel Husein y Hilmi Murad -vicepresidente del partido-, sin más datos de edición, comenzaba a ser distribuido en las calles de El Cairo. Citaremos tan solo una de las frases de dicho panfleto: “Estamos como en los últimos días de Sadat”. Nada más comenzar su distribución, el panfleto fue secuestrado por orden de la Fiscalía, que esgrimía el art. 86 del Código Penal y consideraba el texto “portador de pensamientos destructivos para el país”. El 7 de octubre, Murad, Husein y otros dos periodistas de *Al-Chaab* eran detenidos. Las acusaciones consistían principalmente en haber

⁶² Hasanein utilizaba una forma lingüística tal vez de calculada ambigüedad, الفاسد, un singular que en árabe puede ser entendido como tal o como alusión a un colectivo. No obstante, la alusión a “el resto del Ejército” inducía a pensar que se refería a Hosni Mubarak

“difundido ideas destructivas durante los tres meses anteriores o más, adoptando una postura contraria a la política del Estado, incitando a la disidencia del pueblo contra el régimen y sus políticas y apoyando la ideología de grupos terroristas, justificando sus actos y pretendiendo la inocencia de dichos grupos, además de cuestionar la credibilidad legal de transferir a dichos criminales a los tribunales militares antes que a los civiles”⁶³.

5.1.3 El discurso del “no” tibio

Los “noes” del Wafd, el Tagammu y el Partido Naserista contrastaron sobremanera con el del PT.

El Partido Naserista justificó su voto negativo a partir de su defensa de la elección presidencial directa entre varios candidatos, de su rechazo de la sumisión del Gobierno egipcio a los dictados del FMI, y de la responsabilidad del Gobierno en el incremento de la violencia como resultado del fracaso de sus políticas económicas y sociales (IEA 1993: 296, 250-253). No obstante, no desplegó ninguna actividad destacada para dar a conocer su postura, ni siquiera en su periódico semanal, *Al-Arabi*.

En cuanto al Wafd, prontamente, en un texto denominado “Comunicado a la Nación”, publicado el 15 de julio en su periódico, anunció su rechazo a la reelección, justificado por el incumplimiento de Mubarak de su promesa de presentarse una sola vez a la reelección, por la detención del proceso democrático, por el fracaso de sus política económica, por su carencia de un programa de acción, etc... Más adelante, el 3 de octubre, en la columna denominada “La opinión del Wafd”, el redactor jefe del periódico, Gamal Badawi, pedía además la modificación del artículo de la Constitución que establecía la gratuidad de la educación -aunque no especificaba en qué sentido-, así como rechazaba los excesivos impuestos y pedía una liberalización más rápida de la economía.

No obstante, con el paso del tiempo y el acercamiento del plebiscito la postura del Wafd contra la reelección se fue caracterizando por una cierta tibieza, no tanto por su discurso oficial como por el contenido de las páginas de su diario. En este se publicaba propaganda electoral de apoyo a Mubarak pagada por empresas e instituciones privadas y públicas, y se incluían artículos de personajes ajenos al partido, como el del periodista Abdel Sattar Tawila, que el 24 de septiembre escribía:

“La oposición, a pesar de sus críticas al régimen en el terreno de la democracia y de la reforma económica, sabe muy bien que el régimen de Hosni Mubarak se opone al extremismo y al terrorismo; es decir, protege la democracia para el país (...) De la misma

⁶³ “The Egyptian Press”, *Civil Society*, nº 23, noviembre de 1993, págs. 20-21.

manera que saben que se opone al Nuevo Orden Mundial [preconizado por Estados Unidos] e intenta crear un cierto tipo de solidaridad árabe (...) Queremos decir que [con sus posturas en el plebiscito] los partidos de la oposición, y especialmente el Wafd y el Tagammu, cumplen con su deber nacional y son conscientes de su responsabilidad” (pág.7).

El día anterior, el 23 de septiembre, el periódico había informado en su portada de un encuentro entre Mubarak y el presidente del Wafd, Fuad Serag Eddín, publicando una entrevista del jefe de redacción del diario con el último bajo el titular “Mi último encuentro con Mubarak fue continuación de su política de contactos con los líderes de la oposición”. El contenido de la entrevista dejaba entrever la posibilidad de un cambio de postura del Wafd, o así se lo pareció a muchos, como señaló el IEA (1993: 331), y entre ellos al Partido del Trabajo, cuyo presidente, Ibrahim Chukri, acusaría al Wafd de decir en las páginas de su periódico lo contrario de lo que decía oficialmente. Ante estas presiones, el diario publicó el 30 de septiembre en su portada un gran titular: “La posición del Wafd no ha cambiado”. No obstante, en la misma portada aparecía de nuevo publicidad electoral de apoyo a Mubarak.

Finalmente, la posición del Tagammu fue la más dudosa de todos los partidos de la oposición. En un principio, según informaba el 7 de julio su diario *Al-Ahali*, el partido condicionó su apoyo a Mubarak a la promesa de este de llevar a cabo reformas políticas que ampliaran los derechos políticos de los individuos y de los partidos, así como a que reconsiderara sus políticas económicas cuyos efectos soportaban “los de ingresos limitados”, y a que afrontara el terrorismo de una manera “total” o “integral” (مواجهة شاملة). Dicha posición fue reiterada por el presidente del partido, Jaled Mohai Eddín, en un encuentro popular en Chubra al-Jeima, según informó *Al-Ahali* el 14 de julio en portada.

No obstante, un poco más adelante la postura del Tagammu se inclinó por el no, pero con matices. Rifaat al-Said, secretario general del partido, explicó:

“Si Mubarak hubiera anunciado una reforma del sistema electoral, habríamos votado «sí». Nuestro principal deber es luchar contra el terrorismo. No queremos debilitar al gobierno (...) Nuestro «no» no es el «no» del Wafd, que quiere llevar al país a la situación de antes de 1952. Preferimos a Mubarak. Tampoco es el de los islamistas que reclaman la aplicación de la *charía*. De nuevo preferimos a Mubarak. Mientras que rechazamos decir «sí», rechazamos que nuestro «no» se confunda con otros «noes»”⁶⁴.

⁶⁴ “Mubarak president for a third term”, *Civil Society*, nº 22, octubre de 1993, págs. 12-15. Reportaje elaborado por Aymen Kahlifa y Steve Negus a partir de informaciones de *Al-Ahram*, *Al-Hayat* y *Al-Ahrabi* (no se citan las referencias completas).

Tal vez a causa de esta política, en ninguna de las portadas de *Al-Ahali*, publicado tan solo los miércoles, apareció ninguna mención ni alusión al plebiscito, excepto en la del 29 de septiembre. En ella podía leerse en la entradilla del titular principal: “Mubarak recibe a Jaled Mohai Eddín”, y en dicho titular: “El presidente afirma: «Respeto a los que apoyan y a los que se oponen, y aprecio el estilo de oposición objetiva del Tagammu»”. A continuación venía otro titular: “En el plebiscito del lunes nuestra postura es firme”. En la noticia correspondiente a estos titulares, en la línea 14 de un total de 15, se señalaba que el Tagammu apoyaba el “no”.

5.1.4 Las evasivas de los Hermanos Musulmanes

Los Hermanos Musulmanes no expresaron ninguna opinión oficial respecto a la reelección de Mubarak. Como hemos señalado, las detenciones de Jeirat al-Chater y otros miembros de la organización les habían puesto a la defensiva. Un dirigente de la Hermandad citado por *Al-Ahali* respondía el 7 de julio de manera huidiza a la pregunta acerca de su postura ante la reelección de Mubarak:

“Nuestra opinión queda reflejada en nuestra insistencia en la modificación de la Constitución para garantizar las libertades y la limpieza de las elecciones. De cualquier manera, no tenemos diputados en el Parlamento, y este es el que elige al candidato, y este ya está decidido. Cuando llegue el plebiscito ya veremos lo que hacemos” (pág.7).

5.1.5 El común respeto por “la persona” del presidente

Por sorprendente que pueda parecer en otros lugares, en el Egipto de los años 80 y 90 era absolutamente excepcional que algún opositor “autorizado” manifestara su oposición al régimen político sin manifestar su “respeto a la persona del presidente”, incluso aunque hubiera tachado a dicho régimen de “dictatorial, “autocrático”, violador de los derechos humanos, corrupto, etc. Este era un rasgo general del que el plebiscito de 1993 tan solo dio confirmación. Así, en el discurso de inauguración de la nueva sede del Wafd en El Cairo en 1993, Fuad Serag Eddín, tras enumerar las razones de su rechazo a la reelección, decía: “Nuestras diferencias no tienen que ver con la persona del presidente, al que apreciamos y respetamos, sino con sus políticas” (IEA 1993: 331).

Por su parte, el Tagammu, en el comunicado ya citado del 7 de julio en el que anunció su postura inicial de apoyo/rechazo condicionado a ciertas promesas de Mubarak, manifestaba: “Nuestra postura es relativa a la política de Mubarak, y no a su persona (...)”

no es una postura respecto del presidente, ni aminora nuestro aprecio a su persona”. Incluso el exgeneral Talaat Muslim, dirigente del PT, partido que tan directamente había atacado al presidente, manifestaría en un encuentro de la dirección para analizar la situación: “Pido a la gente que vote que no a Mubarak, y esto no es una postura personal contra él, sino de principios: es suficiente para cualquier presidente gobernar durante 12 años”⁶⁵.

5.2 LA DESAFORADA CAMPAÑA POR EL “SÍ”

Como hemos afirmado anteriormente, los resultados del plebiscito de 1993 eran previsibles *grosso modo* para la mayor parte de los estudiosos y observadores, para los pro-Mubarak y los anti-Mubarak, para los entusiastas y los escépticos, egipcios y extranjeros.

Así, el presidente del Consejo de Dirección y jefe de redacción del principal diario estatal, *Al-Ahram*, Ibrahim Nafia, en la tercera entrega de su serie de artículos previa al plebiscito, denominada “Egipto y Mubarak en la época de las grandes transformaciones” y publicada en portada, afirmaba: “La nominación como candidato de Mubarak ha encontrado en Egipto una mayoría que la apoya, y una minoría que difiere de la mayoría y anuncia su diferencia y sus excusas (مبررات)”⁶⁶. Por su parte, Mursi Attá Allah, su antecesor en el cargo, señalaba en el mismo diario el 23 de septiembre (pág. 9):

“Quiero decir que la unanimidad de la mayoría del pueblo egipcio sobre el juramento de fidelidad a Hosni Mubarak para una tercera etapa es un asunto que no ofrece duda (...) Es cierto que el pueblo dirá «sí» a Mubarak el 4 de octubre, pero más importante que los que dirán sí es el porcentaje de los que se dirigirán a las urnas”.

Según redactores del mismo diario, incluso quienes habían declarado su oposición a la reelección del presidente querían decir «sí». Así lo afirmaba el título de un reportaje publicado en su páginas centrales el 29 de septiembre: “La democracia de Mubarak: un «no» que quiere decir «sí»”, y lo ratificaba, por si cabía alguna duda, el texto del interior del reportaje: “Los partidarios del «no» dicen «sí» a Mubarak” (págs. 16-17).

Por otro lado, otro de los grandes diarios estatales, *Ajbar al-Yaum*, presentaba en portada el 3 de octubre, un día antes del plebiscito, los siguientes titulares, en un tamaño que intentamos reflejar proporcionalmente:

⁶⁵ *Al-Chaab*, 14 de septiembre de 1993.

⁶⁶ *Al-Ahram*, 17 de septiembre de 1993.

Interés mundial por la encuesta de Ajbar al-Yaum REUTERS: EL 80% DE LOS CIUDADANOS PARTICIPARÁN EN EL PLEBISCITO AFP: EL 93% VOTARÁN POR MUBARAK
--

En el texto de la noticia correspondiente a dicho titular, también en portada, el diario señalaba que Mubarak había declarado a AFP que no quería ganar con el 99,9% de los votos favorables, porque “la perfección es cosa solo de Dios”.

Finalmente, incluso el diario *Al-Chaab* se rendía a la evidencia, y anunciaba en su página 2 del día 1 de octubre en grandes titulares: “92 millones de egipcios apoyan la reelección de Mubarak como presidente de la República”.

Al-Chaab recurría a la ironía para intentar contrarrestar lo desaforado de la campaña a favor del “sí”, frente al que el Partido del Trabajo había quedado como único opositor. La cifra de los 92 millones de egipcios que según el diario apoyarían a Mubarak (cuando la población de Egipto era de 59 millones de personas) era el resultado de sumar a todos aquellos que según la propaganda institucional o privada publicada en la prensa habían anunciado su apoyo al presidente. Dicho apoyo masivo se manifestaba de la manera que muestran los siguientes ejemplos, tomados de la prensa estatal publicada después de que *Al-Chaab* presentara el titular mencionado: “14 millones de campesinos de 6.000 cooperativas agrícolas apoyan la reelección de Mubarak. En su nombre, Mohammed Idrís, presidente de la Unión de Cooperativas” (*Al-Ajbar*, 3 de julio de 1993); “El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, en nombre de los mandos, los oficiales, los soldados y sus empleados civiles presta juramento de lealtad a Hosni Mubarak” (*Al-Ajbar*, 3 de octubre de 1993); “Tres millones de ciudadanos de Minia apoyan a Hosni Mubarak” (*Al-Ajbar*, 3 de julio de 1993).

Al-Chaab utilizaba la economía y los efectos “inversores” de la ironía porque le resultaba físicamente imposible describir con enunciados verdaderos el alcance cuantitativo de la propaganda pro Mubarak. Lo mismo les sucedía a los corresponsales extranjeros. “Psicofántica propaganda”, rotulaba *The Times* su información del 4 de octubre sobre Egipto. “Frenesí mediático por el «sí» en el tercer mandato”, titulaba la Agencia France Presse un despacho del 29 de septiembre de 1993, en el que relataba:

“«Con Mubarak tus penas desaparecerán», se puede leer en un cartel en las calles de El Cairo. Otros muchos de ese tipo persiguen a los imperturbables ciudadanos a lo largo de los 30 km. que separan Heliópolis, al norte de la capital, de Helwán, en el sur (...) Son carteles pagados por hombres de negocios, que con ello matan dos pájaros de un tiro: apoyan al poder político y se hacen publicidad, la declaran como tal, y obtienen reducciones de impuestos”.

Efectivamente, las calles de El Cairo desbordaban de carteles de apoyo a Mubarak, mientras brillaban por su ausencia los carteles en su contra, haciendo que los periodistas extranjeros se preguntaran por las razones de tan estruendosa propaganda en unas elecciones con un solo candidato. En cuanto a la televisión, según pudimos comprobar personalmente, el “ambiente” era similar. El 24 de septiembre, en los telediarios y los programas informativos específicos, la información apenas hacía sombra a la propaganda: se sucedían los “congresos populares” de juramento de lealtad al presidente, y este no dejaba de visitar fábricas dotadas de deslumbrante maquinaria, orden y efectividad, así como escuelas, desfiles y exhibiciones militares. En un programa sobre economía, el responsable de Peugeot en Egipto, y otro de una empresa italiana menor, elogiaban sin rebozo al presidente. La televisión abría también sus puertas a Kamel Murad, presidente del PL, y a Ahmad al-Sibahi, presidente del Partido de la Umma, que destacaban las virtudes de Mubarak.

No obstante, es a través de la prensa como podemos intentar dar una imagen cuantitativa vívida de la extensión de la campaña por el sí. En la tabla siguiente pueden verse los contenidos de apoyo a Mubarak aparecidos tan solo el 4 de octubre de 1993 en las 28 páginas de *Al-Ahram* de ese día:

Tabla 16: Contenidos de apoyo a Mubarak en *Al-Ahram* del 4 de octubre de 1993

pág.	ítem
11	<p>Titular 1º: “El pueblo dice hoy su palabra en la más prodigiosa marcha democrática”</p> <p>Información sobre un discurso de Mubarak</p> <p>Titular “Mubarak asistirá a la celebración del 6 de octubre”</p> <p>Artículo de Ibrahim Nafia, presidente del Consejo de Dirección</p> <p>Dos anuncios publicitarios de apoyo a Mubarak, a derecha y a izquierda</p>
12	<p>Artículo de Ahmad Bahgat</p> <p>Información sobre un programa radiofónico con participación de “los jóvenes” sobre el tema “¿Por qué Mubarak?” (el resto de la página se dedica a la programación de radio y televisión y anuncios comerciales)</p>
13	<p>Dos anuncios de empresas de apoyo a Mubarak</p> <p>Una encuesta que revela el gran apoyo a Mubarak</p> <p>Un reportaje sobre el terrorismo</p>
55	Anuncio de empresa a toda página de apoyo a Mubarak
66	<p>Apoyo del vicesecretario general de la Liga Árabe</p> <p>Apoyo del embajador de Bahréin</p> <p>Apoyo del embajador de Catar</p>
77	Declaraciones de apoyo de dirigentes del PND e instituciones

8-9	Artículos de apoyo a Mubarak de diversos intelectuales, entre los que destacan Al-Sayyid Yasín (director del Centro de Estudios Políticos y Estratégicos de Al-Ahram) y los periodistas Salama Ahmad Salama y Salah Muntaser.
14-15	Páginas centrales de apoyo a Mubarak. Destaca una noticia sobre su apoyo a la educación en la que sale el presidente en una foto acariciando a un niño
28	“Concurso «Los éxitos de Mubarak»”, patrocinado por Cerámicas Cleopatra
	Las únicas páginas del periódico en la que no salían contenidos de apoyo a Mubarak y en las que no sale su foto son las dedicadas a Asuntos Internacionales y la 27, dedicada a obituarios
	Las secciones “Provincias” y “Asuntos Locales” estaban dedicadas mayoritariamente a contenidos de apoyo a Mubarak
	Todas los dibujos o viñetas del periódico son de apoyo a Mubarak

En la tabla siguiente pueden verse tan solo algunas de las instituciones y colectivos que apoyaron la reelección de Mubarak y lo manifestaron con anuncios en la prensa. Están seleccionados por su carácter representativo, ya fuera de altas instituciones del Estado o de colectivos influyentes, o de colectivos poco influyentes pero llamativos:

Tabla 17: Instituciones y colectivos que apoyaron a Mubarak en el plebiscito de 1993

FUENTE	FECHA	INSTITUCIÓN O COLECTIVO
Aj	3 oct	Consejo Superior de las Fuerzas Armadas
Ah	2 y 4 oct	El papa y el Sínodo de la Iglesia Copta
Aj	3 oct	Las iglesias evangélicas de Egipto
Ah	23 sept	El Congreso General de Ulemas de Imanes de Mezquitas del Ministerio de <i>Awqaf</i>
Ah	4 oct	El Club de Jueces
Ah	23 sep, 4 oct	Federación Egipcia de Cámaras de Comercio
Ah	4 oct	Federación General de Sindicatos Egipcios de Trabajadores
RY	27 sep	Sindicato de Veterinarios
Ah	4 oct	Comisión General del Sector Marítimo delos Transportes
Aj	3 oct	Unión de Cooperativas Agrícolas Egipcias
		Los trabajadores de centros educativos
		El Congreso General de Trabajadores de la Infancia y la Maternidad
Aj	30 sep	La Unión de Estudiantes de Alejandría
		Las comunidades egipcias en el extranjero
		179 clubs y centros deportivos
		La Comunidad Egipcia en Rumanía
		Las tribus de los oasis de Bahariya
RY	27 sep	El Fondo de Seguros para el Ganado
Ah: <i>Al-Ahram</i> ; Aj: <i>Al-Ajbar</i> ; RY: <i>Ruz al-Yusuf</i>		

Es de notar en la tabla 17 la ausencia de los principales sindicatos profesionales, sin duda consciente y significativa.

En cuanto al apoyo de empresas, el número de las que apoyaron la reelección fue sin duda aun mayor que el de instituciones y colectivos de otro tipo. Citar algunas no sería representativo, de no ser por el contenido “sonrojante” de sus mensajes de apoyo. Tampoco los particulares se quedaron atrás en esta carrera por manifestar el “sí” a Mubarak.

El clima general queda magistralmente recogido en este chiste que recogía AFP y que circulaba, entre otros muchos “chistes políticos”, como siempre, por Egipto:

“Un hombre va a votar, y vota que no. Muerto de miedo, se arrepiente y vuelve a cambiar la papeleta. Como esta se ha perdido entre las otras y es imposible encontrarla, el presidente de la mesa electoral le dice: «Por esta vez pase, pero no hagas lo mismo en el cuarto mandato»”.

5.3 PARTICIPACIÓN Y RESULTADOS OFICIALES

En el plebiscito de 1981 Mubarak había sido elegido, según los datos oficiales, con un 99,99% de los votos favorables y con un porcentaje de participación del 81,3% de los electores inscritos, y en el de 1987 con un 99,5% de los votos favorables y con un porcentaje de participación del 88,47% de los electores inscritos (قنديل 1996: 219). A diferencia de las elecciones legislativas, en las presidenciales no había ningún tipo de control externo en ninguna fase del proceso electoral: en la votación, sellado y apertura de las urnas y recuento estaban presentes mayoritariamente funcionarios de la policía y del Ministerio de Justicia; no había interventores ni apoderados de los partidos, ni mucho menos otro tipo de observadores (tampoco los había habido hasta entonces en las elecciones legislativas). Esto fue así en las votaciones de 1981 y 1987 y se repitió en 1993. Lo único que era medible de una manera muy poco ajustada, al margen de los resultados oficiales, era la participación. Los resultados oficiales de las elecciones presidenciales se daban tan por descontados que los estudiosos ni siquiera hacen mención a su desarrollo⁶⁷.

En la campaña electoral de 1993, a pesar de que los partidos de la oposición que lo desearon pudieron manifestar su oposición a Mubarak en los términos que hemos mencionado -en sus medios de prensa y en algunos mítines, aunque la autorización de estos fue denegada en su mayoría-, no pudieron hacerlo en las calles, donde, como hemos mencionado, no había carteles por el “no”, según dirigentes del Wafd y del PT porque la

⁶⁷ Citaremos tan solo, sin ánimo de crítica sino de apoyo de lo que decimos, un caso de estudio en castellano, el de Martín Muñoz (1992), que ni siquiera menciona el desarrollo y los resultados de las elecciones presidenciales de 1981 en su obra *Política y elecciones en el Egipto contemporáneo*.

policía los quitaba e incluso arrestaba a quienes los colocaban⁶⁸.

Respecto al proceso de participación, según la AFP en un despacho del 5 de octubre, el día 4 de octubre llegaron a la plaza cairota de Talaat Harb para votar camiones llenos de funcionarios conducidos por sus superiores, y lo mismo sucedió en la ciudad de Alejandría; la mayoría de los colegios electorales no tenían cabinas, y las votaciones se realizaban a la vista de todos; y los responsables de las mesas de votación eran presionados para que dejaran votar a adolescentes menores de edad. Por otro lado -siempre según la misma agencia- en un colegio electoral del barrio de clase media-alta de Zamalek, de 3.000 mujeres registradas tan solo 35 habían votado a mediodía, y sus periodistas estimaban la participación en total en Asiut en un 5%. Por su parte, *The Times* señaló el 5 de octubre que sus periodistas estimaban que a mediodía habían votado el 1,9% de los electores en la ciudad de Suez y el 18,7% el barrio cairota de Heliópolis (donde se encontraban los cuarteles generales del Ejército y de la Fuerza Aérea -aunque según la ley los militares no podían votar-, así como la residencia de Mubarak). Finalmente, *Le Monde* del 7 de octubre informaba de numerosas irregularidades, como la ausencia de secreto en el voto y la presencia de profesores que “arrastraban” a votar a sus alumnos menores de edad. Según *Civil Society* (22/19913) a partir de fuentes citadas y otras que deseaban permanecer en el anonimato, se habían dado muchos casos de votos de personas fuera de sus distritos, de votos múltiples por parte de una misma persona y de rellenado de papeletas por parte de los encargados de supervisar la votación.

Según los resultados oficiales, votaron a favor de Mubarak 15.904.512 egipcios, el 96,28% de los votantes, y 583.467 (3%) lo hicieron en contra, con una participación del 84,16% de los electores registrados (IEA 1993: 296); unos resultados tan solo ligeramente inferiores a los de 1987. Se daba la circunstancia, sin embargo, de que en estas elecciones los principales partidos de la oposición (Wafd, PT, Tagammu y Partido Naserista) habían manifestado su rechazo a la elección de Mubarak, cuando en 1987 los dos primeros citados, que habían sido así mismo los dos más votados en las elecciones legislativas de ese año, se habían o bien abstenido (el Wafd) o bien manifestado a favor (el PT, entonces PST), mientras que el Tagammu se había opuesto y el Partido Naserista no existía. En cuanto a los Hermanos Musulmanes, en 1987 habían apoyado a Mubarak y en 1993 rehuyeron adoptar una postura pública, pero se puede deducir fácilmente que, dado el deterioro de sus relaciones con el régimen político (que en 1993 hizo detener a varias decenas de miembros de la Hermandad), no animarían a sus miembros a votar a favor de Mubarak.

⁶⁸ “Mubarak president for a third term”, *Civil Society*, n° 22, octubre de 1993, págs. 12-15. Reportaje elaborado por Aymen Kahlifa y Steve Negus a partir de informaciones de *Al-Ahram*, *Al-Hayat* y *Al-Arabi*.

5.4 LA DIMENSIÓN CUALITATIVA

Los rasgos principales de los discursos de la campaña de apoyo a Mubarak materializan la mezcolanza y el difuminado del “discurso del Estado” y el “discurso del régimen” en el “discurso presidencialista” que caracteriza el mandato de Mubarak en esta segunda etapa. No obstante, en los textos no hay, por razones obvias, alusiones al “régimen”. El discurso de este se deriva más bien del discurso de apoyo a Mubarak y de la confusión entre el presidente y el Estado a la que induce tal discurso, así como de la amalgama de instituciones, colectivos y personas que sostienen este discurso. Finalmente, hablamos de “discurso presidencialista” más que de discurso pro-Mubarak porque este último constituye una variedad de un discurso más general orientado a ensalzar la figura de “el Presidente”.

Unanimismo

Aunque ya hemos aportados varios textos que muestran las pretensiones de unanimidad del discurso por el sí a Mubarak, a continuación mostramos un buen ejemplo que, con su exhaustividad y redundancia, pone de manifiesto hasta qué punto esta pretensión era una obsesión (*Al-Ahram*, 2 de octubre de 1993, pág 19):

“[Titular del anuncio]: «Sí a Mubarak y por unanimidad»

[Firmantes:]

El Síndico General y los miembros del Consejo del Sindicato General de Veterinarios

El presidente y todos los trabajadores de la Dirección General de Servicios Veterinarios

Los veterinarios y asistentes de las provincias

El presidente, el Consejo de Dirección y los trabajadores del Fondo de Seguros para el Ganado

El presidente y los miembros del Consejo de Dirección de la Asociación Médica Veterinaria Egipcia

Las Facultades e Institutos de Investigaciones Veterinarias

Las gentes que trabajan en el campo de la Veterinaria”

Juramento de lealtad. Un eco religioso y ancestral

En buena parte de los discursos de apoyo a Mubarak se utilizaron los sustantivos y verbos relacionados con la *baia* o la *mubaia* (مبايعة - بيععة) que remiten al juramento de

fidelidad o lealtad que los musulmanes prestaban al Profeta, y anteriormente los árabes preislámicos a los líderes tribales. Por ejemplo, en *Al-Ahram* del 23 de septiembre la compañía Misr de Aluminios anunciaba en media página su *mubaia* al presidente, corporizado en una gran fotografía.

Pero además en la campaña del plebiscito la *mubaia* recuperaba en ocasiones sus ecos ancestrales. Según el diario *Al-Ajbar* del 3 de octubre, el presidente de la Unión de Estudiantes de Alejandría selló “ante 75.000 estudiantes” su documento de *mubaia* con su sangre.

Un ser humano excepcional, casi sobrenatural

Por un lado, Mubarak aparece como un padre omnipotente (“padre de todos los padres” lo califica una noticia de la portada de *Al-Ajbar* del 3 de octubre de 1993) y muy humano, amado por su pueblo pero necesitado de su voto, que este le da sin concesiones, como se escenifica en la portada de *Al-Ajbar* del 1 de octubre de 1993:

“(…) Decimos sí:

Al líder que... (3 líneas de texto)

Al caudillo que... (3 líneas de texto)

Al presidente que... (5 líneas de texto)

Al hombre que... (5 líneas de texto)”

Me dirijo a usted, y conmigo todos los honorables trabajadores del conjunto de empresas GMS, en la confianza de que las masas del pueblo de Egipto participen con nosotros en el apoyo y la adhesión personal a usted (...) Con usted hemos hecho realidad para la industria nacional el lema «Hecho en Egipto». Y lograremos con usted el renacimiento de Egipto”.

Por otro lado, en la hipérbole no falta “el designio divino” (como el que ve el papa Chenuda en los atributos del presidente y se publicó en la página 8 de *Al-Ahram*, 2 de octubre de 1993):

“ [Titular:] ¿Por qué decimos «sí» a Mubarak?

(...) No solo hay libertad de edición, sino que se entrevista con los presidentes de los partidos (...) No se ha encarcelado a nadie por su pensamiento (...) ¿Qué más quiere la gente? Es un hombre honesto que habla con claridad de lo que hay en su corazón (...) Sus obras muestran la sabiduría y la capacidad con que Dios lo ha dotado (...)” (pág.8)

o el milagro “internacional” (que le adjudica Ibrahim Nafia, director de *Al-Ahram* en la portada del 24 de septiembre de 1993):

“Los logros de Egipto en la época de Mubarak, constatados por todos los criterios de evaluación y el testimonio de las organizaciones internacionales y expertos de economía del mundo, son un milagro o algo que se le parece”.

Todo contra el boicot y la abstención

El discurso presidencialista, como indicábamos, trasciende a la categoría de discurso de Estado. En este sentido, la lucha contra el boicot, que defendía la oposición, y la abstención, habitual en todos los comicios, se alza como batalla nacional por excelencia. Hemos elegido dos fragmentos representativos de lo que se publicó en estas fechas de por qué votar: por amor a Egipto (Ezzat al-Saadani, “El reportaje del sábado”, *Al-Ahram*, 2 de octubre de 1993) o por coraje guerrero (Galal Dueidar: “Sí a las verdades palpables, no a las consignas tramposas”, *Al-Ajbar*, 3 de octubre de 1993, portada):

“Hablé con un grupo de muchachos de la universidad que vinieron a verme. Me dijeron: ¿Por qué todos esos carteles colgados en todas partes cuyos gastos habrían servido para vestir a todos los hijos de Egipto? ¿Por qué todos estos anuncios en los periódicos? (...) El presidente no necesita todo eso, porque está en nuestros corazones

Dije: La gente quiere expresar sus sentimientos naturales, ¿por qué impedirselo?

Me dijeron: Por los gastos.

Y una chica preguntó: ¿Es que se puede hacer un referéndum sobre el amor?

Pregunté: ¿El amor a quién?

Respondió: El amor a Egipto (...)

Dije: Quien ama a Egipto debe ir mañana a las urnas y expresar su opinión con sinceridad (...) Yo, personalmente, iré a las urnas a decir «sí» al presidente”.

“Las miradas de todo el mundo se dirigen hacia Egipto (...) El noble ciudadano que mañana se aplicará celosamente al apoyo de la democracia es el egipcio poseedor de una civilización que se hunde en las profundidades de la Historia (...) La negatividad en el cumplimiento de los deberes nacionales es huir de la batalla... y no cabe discusión acerca de que el egipcio, por su naturaleza, no ha conocido en toda su larga historia esa

característica (...) Egipto es siempre sinónimo de «desafío» (...) El entusiasmo por su país es el que conducirá mañana a los egipcios a las urnas (...)”

Y la síntesis del presidente

En su discurso de jura de la Constitución y renovada toma de posesión, pronunciado el 12 de octubre de 1993, podemos observar cómo resuelve el propio Mubarak la transición del discurso presidencialista/del Estado que hemos descrito al discurso del régimen, menos visible en las expresiones de apoyo a su candidatura/persona. Mubarak recurre a 4 elementos: la memoria del pasado reciente de Egipto (la “victoria” de Octubre, la de 1973 cuya sombra se prolonga a esta de 1993); la democracia que se consolida; la liberalización económica que se avecina; y el populismo:

“La Victoria de Octubre sigue produciendo efectos positivos en la zona. Espero de la nueva etapa de gobierno que dé los mismos resultados que la Guerra de Octubre (...) Egipto ha pasado pacíficamente de la etapa de transición de la sociedad absolutista a la sociedad democrática, y se ha trasladado al sistema de mercado para cambiar el aspecto de la vida (...) Seré como me habéis pedido: defensor de la verdad frente a la mentira, ayudante del débil contra el fuerte, una voz en favor del pueblo” (*Al-Ahram*, 13 de octubre de 1993).

6. EL BIENIO 1994-1995: ESTRECHANDO EL CONTROL. LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS

El plebiscito de 1993, por mucho que no hubiera dudas acerca de su resultado, supuso un hito en el mandato de Mubarak a nivel simbólico: el presidente había incumplido su promesa de no permanecer en el poder durante más de dos mandatos y, además de encontrarse enfrentado por las armas al islamismo radical, por primera vez todos los principales partidos de la oposición habían rechazado la reelección de Mubarak, aunque algunos lo hicieran con la boca pequeña. Su supuesta voluntad de llevar a cabo una liberalización política que pudiera desembocar en una alternancia en el poder había perdido toda credibilidad.

No obstante, aun habiendo tomado pequeñas medidas para contener a la oposición política (como Ley Antiterrorista de 1992, que criminalizaba el “terrorismo de opinión”; la Ley de Sindicatos Profesionales de 1993; y las detenciones de algunos periodistas y algunos “hermanos musulmanes”), la aplicación de dichas medidas había sido, por el momento, moderada. La libertad de expresión en la prensa había continuado expandiéndose (como demuestra sobre todo la acidez de las críticas de *Al-Chaab* que

hemos ido desgranando), los islamistas continuaban gobernando los principales sindicatos, y el régimen político mostraba una gran tolerancia hacia “la nueva sociedad civil”. Probablemente deseaba que esta ejerciera como contrapeso al islamismo, a pesar de lo dañinas que resultaban para su imagen las actividades de algunas de sus organizaciones, como las dedicadas a la defensa de los derechos humanos, que ponían continuamente de relieve la delicada situación de estos.

Pero en los dos años transcurridos entre el plebiscito presidencial y las elecciones legislativas de 1995 algunos de estos rasgos cambiaron, principalmente aquellos que tenían que ver con el mantenimiento del poder político efectivo; es decir, con el control absoluto del Parlamento a través de las elecciones. El resultado fue que todo aquello o todo aquel que podía suponer una amenaza para dicho control fue sometido, disuadido o, al final, represaliado tras las elecciones.

6.1 UN “LIBERALISMO HYDE PARK”. EL DIÁLOGO NACIONAL DE 1994

En marzo de 1993, el conocido intelectual marxista y exmiembro del Tagammu Mahmud Amin al-Alam dio esta original denominación para caracterizar el liberalismo del sistema político egipcio:

“Hay un intento de crear, bajo el epígrafe del liberalismo, lo que llamé en broma en una ocasión un «liberalismo Hyde Park»; es decir, dar libertad dentro de las sedes de los partidos y en sus periódicos, de manera que nosotros digamos lo que deseemos mientras el régimen hace lo que le da la gana”⁶⁹.

Ni siquiera los altos dirigentes del régimen pretendían, cuando se les desataba un poco la lengua, que la liberalización política pudiera ir mucho más allá de una cierta libertad de expresión. Así, el 25 de noviembre por la noche vimos cómo el presidente del Gobierno Atef Sidqi, tras salir ileso por la mañana de un atentado con bomba -en el que sin embargo murió una niña de 11 años y más de una docena de personas resultaron heridas-, preguntado sobre el atentado en una entrevista de la televisión egipcia exclamaba levantando la voz: “¡Pero si hay libertad de expresión ¿Qué más quieren?”.

Con todo, el propio Mubarak buscaba una estrategia para reforzar la imagen de su sistema político. Poco después del plebiscito, en el mismo mes de octubre de 1993, había propuesto la organización de “un diálogo nacional” (حوار قومي), propuesta que desembocaría

⁶⁹ “الليبيرالية المصرية. هم ثقافي أم هم نضالي؟”، *الحياة*, ٦ مارس ١٩٩٣. Entrega nº 3 de la transcripción del debate organizado por el diario entre varios intelectuales egipcios.

en un “Congreso del Diálogo Nacional” desde finales de mayo a principios de julio de 1994.

Desde un principio ni los objetivos que el régimen proponía para el diálogo ni sus participantes, ni la modalidad de su desarrollo estaban claros. Ninguna fuerza política dudaba de que el poder político buscaba apoyo de algunas de ellas y de la sociedad en general en su enfrentamiento con el terrorismo. No obstante, la mayor parte no quería ser un instrumento en tal enfrentamiento, o no querían serlo sin contrapartidas.

Los obstáculos para el diálogo comenzaron al abordar la elección de los participantes. El Partido Nacional Democrático propuso que participaran los representantes de diversas instituciones estatales y los partidos políticos legales, excluyendo todas las fuerzas políticas no legales. El resto de los partidos querían que solo participaran representantes de partidos, y que el resto de las fuerzas políticas y sociales pudieran participar de alguna otra manera. En diciembre de 1993 los representantes de nueve partidos políticos, más los Hermanos Musulmanes y representantes de los grupos comunistas, se reunieron para adoptar una postura común, publicando después un comunicado en el que defendían la celebración de un congreso con participación de todos los partidos y fuerzas políticas, y que en paralelo las diversas organizaciones sociales y particulares pudieran organizar reuniones para tratar temas sectoriales como la justicia social, el paro, la sobrepoblación o la enseñanza. El congreso de las fuerzas políticas debería, según sus integrantes, situar a la cabeza del orden del día la reforma política, y el Gobierno debería crear un clima favorable para el diálogo levantando las restricciones sobre las actividades de los partidos y permitiendo a estos expresarse en la televisión y en la radio.

El secretario general del PND, Yusuf Wali, impuso, sin embargo, las condiciones del diálogo: participarían las instituciones del Estado, los partidos políticos y algunas organizaciones de la sociedad civil (una treintena de personas, entre las que se contaban representantes de los sindicatos, profesores de universidad y otras personalidades, en su mayoría próximas al PND o al Gobierno). Los Hermanos Musulmanes y los comunistas serían excluidos.

La ausencia de ningún compromiso explícito del Gobierno en cuanto a la inclusión de la reforma política en la agenda del diálogo, así como la exclusión de los Hermanos Musulmanes, llevaron a resultados opuestos a los deseados por el poder: el Wafd, el Partido Naserista y algunos particulares se retiraron tras la primera reunión de la comisión preparatoria. El Wafd justificó su retirada diciendo que habían acudido al diálogo para hablar de una auténtica reforma política, y no para distraer al pueblo o crear una falsa imagen de solidaridad frente al terrorismo, y en el mismo sentido se expresó Said al-Naggar, presidente de la asociación liberal La Nueva Llamada (Abd al-Magid 1994: 17-

19).

En cuanto al Partido del Trabajo, su participación hasta bien avanzado el proceso resultó, a pesar de sus muchos reparos, un tanto paradójica, habida cuenta de sus exacerbadas críticas al poder político de los años anteriores. Sin embargo, sus propios dirigentes manifestaron que querían quitarse la etiqueta de “extremistas” que el Gobierno les había colocado, y mostrar que estaban abiertos a dialogar. Sin duda, su participación también era una respuesta a la atención que había tenido el régimen político al reconocerlos como el auténtico Partido del Trabajo, después de años de dar pábulo a sus disidentes que continuaban pretendiendo representar al partido. No obstante, el PT se retiró finalmente del diálogo, a medida que su discurso devenía cada vez más virulento. Según el partido, la cuestión de la reforma política había sido completamente relegada y, por el contrario, sus representantes habían tenido que enfrentarse a los laicistas y a los constantes ataques a la corriente islamista, y en particular a los Hermanos Musulmanes (Abd al-Magid 1994: 19-21).

Finalmente, el Tagammu no creyó necesario justificar su participación en el proceso de diálogo. Debilitado por la fuga de naseristas y comunistas, y buscando mantenerse en la escena política, participó en él hasta el final, aunque después deplorara sus resultados, habida cuenta de la exclusión de gran parte de la oposición y de la hegemonía de las fuerzas favorables al partido del poder. A partir de 1994 su secretario general, Rifaat al-Said, aparecería asiduamente en la televisión (un favor raramente concedido a las figuras de la oposición), y *Al-Ahali* comenzaría a recibir considerables ingresos de la inserción en sus páginas de numerosos anuncios publicitarios de las empresas del sector público.

En un discurso pronunciado durante la celebración del Congreso, el 25 de junio de 1994, Mubarak afirmó que “algunos” habían “malinterpretado la llamada al diálogo”. Según él dicha llamada no tenía nada que ver con el terrorismo, sino con “un debate nacional más amplio” (Abd al- Magid 1994: 14). El presidente se sentía confortado, pues entre los ires y venires del “diálogo” las fuerzas de seguridad habían desarrollado una exitosa campaña contra los islamistas radicales que había hecho disminuir considerablemente sus atentados.

Según el bien informado y sagaz periodista Steve Negus, tras la parafernalia de un diálogo que no concluiría en nada concreto, “la promesa implícita de Mubarak a la *intelligentsia* en 1994 fue: no podréis cambiar a quien tiene el poder, pero os dejaremos participar en la transformación de la sociedad”⁷⁰.

⁷⁰ Steve Negus: “ONGs in danger”, *Middle East International*, 5 de julio de 1998.

6.2 LA LUCHA CONTRA EL ISLAMISMO ARMADO. EFICACIA SIN BARRERAS

Según el Informe Estratégico Árabe de 1994 (IEA 1994: 422-423), en este año las fuerzas de seguridad consiguieron reducir el balance global de las actividades armadas y las víctimas causadas por los grupos armados del islamismo radical. No obstante, en ese año el IEA dejó de publicar los balances detallados de víctimas, por lo que tan solo contamos con la información de la prensa. Por su parte, la edición en árabe de Civil Society publicaba la siguiente tabla, que abundaba en el sentido apuntado por el IEA. Como puede verse en ella, los principales beneficiarios de la reducción de la violencia fueron los civiles, aunque hay que señalar que entre las víctimas se cuentan también las causadas por la policía. Hemos conservado las denominaciones de la fuente (vb. “extremistas”), que por otro lado no especifica a quien corresponde la lista de “civiles” detenidos:

Tabla 18: Comparación víctimas de la violencia islamismo/policía 1993-1994

Año		1993	1994
Muertos	Policías	120	90
	Extremistas	110	153
	Civiles	100	52
	Total	330	295
Heridos	Policías	275	111
	Extremistas	250	30
	Civiles	345	113
	Total	770	354
Detenidos	Extremistas		6521
	Civiles		291

FUENTE: "حصاد العنف-مصر ١٩٩٤"، المجتمع المدني، عدد ٣٢، يناير ١٩٩٥، ص. ١١.

El descenso de las víctimas civiles que puede observarse en la tabla 18 se explicaría, según el IEA (1994: 422-423), además de por la reducción de las actividades armadas de los islamistas, por la adopción de una política de seguridad más respetuosa con la población en general y con los familiares y próximos de los “extremistas”. No obstante, como puede comprobarse, el número de heridos entre estos es, sospechosamente, mucho menor que el de los muertos, mientras que el número de detenidos es muy elevado.

Pero un informe de Amnistía Internacional citado por *Al-Ahali* el 16 de noviembre daba unas cifras bastante diferentes. Según la organización internacional, 400 ciudadanos habían muerto y 760 habían resultado heridos a causa de la violencia política, y 16 de las

muerter se habrían producido en el interior de las comisarias. Por otro lado, miles de sospechosos habían sido detenidos arbitrariamente y retenidos bajo arresto por largos periodos. Por su parte, la Organización Egipcia de Derechos Humanos informaba el 7 de noviembre de la desaparición de 16 detenidos en un año, y señalaba que este tipo de hechos no se producían cuatro años antes (EMA 1/1995: 238).

El Gobierno intentaba controlar las noticias sobre el enfrentamiento con los islamistas incluso en la prensa extranjera. Según el diario *Liberation* del 2 de marzo de 1994, en la semana anterior los directores de las tres grandes agencias de noticias (AFP, Reuters y Associated Press) habían sido llamados al Ministerio del Interior, donde se les reprochó falta de objetividad en su trabajo y se les pidió que se limitaran a divulgar noticias de fuentes “autorizadas” y que no hicieran públicos los comunicados de las *gamaat islamiyya*.

De lo que no cabe duda, en cualquier caso, es de que la “eficacia”, al precio que fuera, de las fuerzas de seguridad en combatir el islamismo armado se había incrementado de alguna manera, pues durante ese año no se produjeron atentados contra personalidades del régimen, ni grandes atentados con bombas, aunque sí media docena de atentados contra autobuses y trenes en los que viajaban turistas que produjeron una veintena de muertos. De creer al IEA (1994:427), los atentados y enfrentamientos se concentraban en el Alto Egipto (110), en menor medida en El Cairo (23), y eran prácticamente irrelevantes en el resto de Egipto (15).

En octubre de 1994 un ataque con arma blanca contra el escritor Naguib Mahfuz, llevado a cabo por un individuo que actuó individualmente, causó una gran conmoción en el país. El premio Nobel de Literatura de 1988, reverenciado por muchos en Egipto, se había atraído las iras de las instituciones religiosas en 1959 al publicar por fascículos en *Al-Ahram* la novela *Los hijos de nuestro barrio*, una parábola en la que se apreciaba con toda claridad que uno de los personajes es representación de Dios y otro de Mahoma. Ni Násir ni Sadat permitieron que la novela se publicara de nuevo en Egipto, pero, por alguna ignota razón, poco antes del atentado el régimen de Mubarak había permitido que *Al-Ahali* entregara copias de la obra como suplemento a su periódico. Al margen de ello, Mahfuz era un firme crítico del radicalismo islámico y un discreto partidario de Mubarak y su régimen, pues no de otra manera puede interpretarse que llamara a participar en el plebiscito de 1993 junto a varias decenas de intelectuales y personalidades próximas al Gobierno⁷¹.

⁷¹ El 3 de octubre *Al-Ahram* publicó un Informe de la Comisión Nacional en Apoyo de la Participación Política llamando a participar en el referéndum firmado por Naguib Mahfuz, Ahmad Al-Jawaga, Mona Makram Ebeid, Milad Hanna, Lutfi al-Juli, Mohammed Imara y Ali Eddín Hilal (بيان اللجنة الوطنية لدعم المشاركة السياسية", *الأهرام*, ٣ أكتوبر ١٩٩٣).

6.3 MÁS SOCIEDAD CIVIL Y MENOS POLÍTICA

En septiembre de 1994 se celebró en Egipto la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Preocupado por su imagen internacional, y deseoso de atraerse al sector no islámico o islamista de las ONG, el Gobierno avaló que se constituyera una Comisión Egipcia de Coordinación de las Organizaciones no Gubernamentales para preparar la participación de aquellas en el foro internacional de ONG paralelo a la conferencia oficial. La comisión se constituyó a iniciativa del ministro de la Población y la Familia, pero en ella figuraban, en palabras de Ben Néfissah (1996: 101-102), “personalidades de la elite egipcia, de las que una parte eran realmente dirigentes de las grandes asociaciones egipcias y pioneros del trabajo social en Egipto”. El carácter no estrictamente gubernamental de dicha comisión se plasmó en sus conclusiones, en la que reclamaban una reforma completa de la ley de asociaciones (Ley 32 de 1964) y un mayor papel de aquellas en el desarrollo.

El estímulo dado por el poder político a las ONG secularistas animó a estas a intervenir en asuntos sociales y sociopolíticos procelosos, con puntos de vista que chocaban con las visiones tradicionales y conservadoras de islamistas y no islamistas. Los derechos de las minorías, en concreto de los coptos, y de las mujeres son las dos piedras de toque recurrentes en este sentido.

En los primeros meses de 1994, Saad Eddín Ibrahim y su Centro Ibn Jaldún anunciaron su intención de celebrar en Egipto un congreso sobre “los derechos de las minorías en el Mundo Árabe y Oriente Medio”. Ibrahim inscribía su congreso en la línea de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Minorías del 18 de diciembre de 1992. Sin embargo, el mero concepto de “minoría” no era bienvenido en numerosos círculos nacionalistas, islamistas y de izquierdas por diversas y hasta contrapuestas razones culturales e históricas, entre las que destacan tanto el unanimismo defendido por estas corrientes como la instrumentalización de las minorías por parte las potencias colonizadoras en los siglos XIX y XX. Por otro lado, los medios gubernamentales estaban convencidos de que desde la conferencia se denunciaría la situación de discriminación política y social de los coptos.

El anuncio de la realización del congreso desató una oleada de críticas que, desde distintos puntos de vista, veían en él una cabeza de puente de una conspiración destinada a crear conflictos, favorecer a ciertas tendencias ideológicas y debilitar a otras, y criticar al Gobierno. Según el propio Ibrahim, fueron el islamista Adel Husein y el naserista Mohammed Hasanein Heikal quienes encendieron el fuego de una polémica que

alimentaría más de doscientos artículos⁷². La agresividad de dichos artículos llevaría a los organizadores, según el profesor, a trasladar la celebración del congreso durante los días 12 y 14 de mayo a Limasol, donde las críticas a la discriminación social y política de los coptos perderían la mayor parte de su resonancia. Las conclusiones del congreso insistirían en los temas habituales: dificultad para construir iglesias, educación potenciadora de las diferencias entre las comunidades, papel dañino de los medios de comunicación -que alimentaban el odio y la separación de las comunidades-, discriminación en los altos puestos dirigentes del Gobierno y del Estado⁷³.

Junto a la cuestión de las “minorías”, la proximidad de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo reavivó el debate sobre la situación de las mujeres.

El Centro Ibn Jaldún, en colaboración con una fundación alemana, celebró el 14 y 15 de junio de 1994 un encuentro denominado “Las Mujeres y la Transformación Democrática” en el que participaron 80 mujeres de relevancia social y política. El congreso realizó una serie de recomendaciones, como que se asignara una cuota de entre 25 y 30 puestos a las mujeres en los órganos legislativos, que se modificara el currículo educativo nacional para eliminar los contenidos discriminatorios para las mujeres, que se modificara la ley para que los hijos de madre egipcia y padre extranjero (casados) pudieran obtener la nacionalidad egipcia⁷⁴.

Este encuentro se celebró tan solo una semana después de una conferencia oficial denominada “Las Mujeres Egipcias y los Desafíos del Siglo XXI”, organizada por la esposa de Hosni Mubarak, Suzanne, que había concluido con una serie de buenas intenciones.

No obstante, fue durante la celebración de la Conferencia sobre Población y Desarrollo, en el mes de septiembre, cuando se produjo un suceso que iba a enturbiar la imagen de estar preocupado por los asuntos de la mujer que el régimen egipcio quería dar al mundo. Es más, iba a mostrar la división social en la concepción de los derechos humanos, en este caso derechos individuales, si bien, lo cual es más significativo todavía, en este caso la división no fue tan nítida entre campos ideológicos. Se trató de la emisión

سعد الدين إبراهيم: "رؤية من ليماسول" مدرستان في الفكر العربي المعاصر، "المجتمع المدني"، عدد ٣٠، يونيو ١٩٩٤، ص. ٥-٤.⁷² Ibrahim da los lugares y fechas de publicación de los artículos de Husein (*Al-Chaab*, 5 y 15 de abril de 1994) y de Hasanein Heikal (*Al-Ahram*, 22 de abril de 1994), pero no sus títulos.

⁷³ "مؤتمر الإعلان" Las conclusiones del congreso y los nombres de los participantes pueden encontrarse en العالمى لحقوق الأقليات، "المجتمع المدني"، عدد ٣٠، يونيو ١٩٩٤، ص. ٤٦-٣٣. Las recomendaciones relativas a la situación de los coptos se encuentran en la página 36. El congreso se presentaba más específicamente como un "Congreso Evaluatorio de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de las Minorías y los Pueblos en el Mundo Árabe y Oriente Medio", como si quisiera quitar hierro a una reunión cuyos participantes fueron, por otro lado, reducidos.

⁷⁴ "Egyptian Women and Democratic Transformation", *Civil Society*, nº 31, julio de 1994, pág.16.

por parte de la cadena internacional de televisión CNN de un video que mostraba la práctica de la clitoritomía o escisión parcial del clítoris -ambas se practican según los lugares- a una niña egipcia. La difusión del video molestó sobre manera a las autoridades egipcias que, empujadas por la presión de numerosas ONG e intelectuales, prontamente anunciaron que promulgarían una ley al respecto, mientras el muftí de la República, Mohammed Sayyed al-Tantawi declaraba que la clitoritomía no era una tradición islámica. Sin embargo, el jeque de Al-Azhar, Gad al-Haq, contradijo la opinión del muftí, declarando que la amputación total o parcial del órgano genital femenino sí que formaba parte de la sunna. Lo cierto es que dicha práctica no está avalada por ningún texto fundamental del islam ni estaba totalmente extendida en Egipto, como no lo está en la mayoría de los países árabes o islámicos, ni se practica solo en estos, sino también en algunos africanos haya en ellos o no presencia del islam. De cualquier manera, el Gobierno, atrapado entre dos fuegos, promulgaría más adelante una ley que establecería que la operación solo podría ser realizada por médicos y en clínicas u hospitales.

Un año después de la celebración de su anterior encuentro, el Centro Ibn Jaldún organizaba, el 2 y 3 de junio, junto a la fundación norteamericana National Endowment for Democracy, una nueva conferencia denominada Conferencia Panárabe sobre las Mujeres y la Transformación Democrática, en la que participaron 150 figuras públicas, y entre ellas activistas feministas y parlamentarias árabes. Tras la conclusión del encuentro, Suzanne Mubarak, “abogada pionera de los derechos de las mujeres”, según la revista *Civil Society*, recibió en su residencia de Heliópolis a una representación de los participantes, que le pusieron al corriente de sus conclusiones. La revista, sin embargo, no daba apenas detalles de las conclusiones de la conferencia, ni de las que habían sido transmitidas a Suzanne Mubarak, si bien quedaba claro que el encuentro se había centrado en la participación política de las mujeres⁷⁵. Y como en las anteriores ocasiones, el régimen se mostró muy interesado de evidenciar su preocupación por estos temas y su predisposición a “resolverlos”.

6.4 AHOGANDO LAS VÍAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA FORMAL

Entre el tráfago del diálogo nacional y los debates sobre las “grandes reformas”, el Gobierno introdujo en 1994 dos medidas legislativas que, si bien despertaron el rechazo de la oposición, siguieron adelante sin mayores problemas y consolidaron el control del poder ejecutivo sobre distintos cuerpos sociales. Dichas medidas establecieron que, por un lado,

⁷⁵ “Pan-Arab Conference on Women”, *Civil Society*, n°42, junio de 1995, pág. 24.

los decanos de las facultades universitarias, y, por otro, los alcaldes de los pueblos serían designados por el Gobierno, y no elegidos, como sucedía anteriormente. El argumento utilizado para ello era que dichos cargos desempeñaban funciones ejecutivas en el aparato del Estado.

En otros terrenos, sin embargo, el régimen encontró mayor oposición a sus medidas para estrechar el margen de maniobra política de la parte más militante de la sociedad, en concreto en su estrategia política y legislativa para neutralizar a los sindicatos profesionales, perseguir judicialmente a los Hermanos Musulmanes y poner a los periodistas “en su sitio”.

6.4.1 Neutralización de los sindicatos profesionales y primeros juicios a los Hermanos Musulmanes

Las mayorías islamistas en diversos sindicatos profesionales comenzaron a ser neutralizadas desde 1994 por diversos procedimientos. El primero de ellos fue la Ley 100 de 1993, que comenzó a surtir efectos en aquel año.

En el Sindicato de Médicos surgieron diferencias en torno a la celebración de las elecciones entre el Consejo del Sindicato, dominado por los Hermanos Musulmanes, y la comisión judicial que según la nueva ley debía supervisar la celebración de aquellas. El resultado fue que la comisión judicial decidió, el 25 de junio de 1994, retrasar las elecciones por un plazo indefinido, decisión que fue ratificada por las instancias judiciales ordinarias a las que recurrió el Consejo del Sindicato. Por su parte, los sindicatos de profesiones comerciales y de dentistas decidieron unilateralmente aplazar las elecciones a la vista de los complejos requisitos que imponía la nueva ley y se consideraban incapaces de satisfacer (IEA 1994: 385-386).

Las relaciones entre el Consejo del Sindicato de Médicos y el Gobierno se deteriorarían notablemente desde que en enero de 1995 ocho destacados miembros del sindicato, entre los que se encontraban Essam al-Erián e Ibrahim Zaafrán, fueran detenidos acusados de pertenecer a la Hermandad. El sindicato calificó el hecho de una “agresión ilegal”, y pidió la liberación de los detenidos. En febrero, la policía rodeó el sindicato e impidió que se celebrara una Asamblea General Extraordinaria para debatir acerca de los intentos del Gobierno de controlar los sindicatos profesionales. El 1 de septiembre un total de 49 miembros de la Hermandad, entre los que se encontraban los ya mencionados, fueron llevados a juicio ante un tribunal militar, en la constituyó la primera persecución judicial de la Hermandad en la época de Mubarak. Al-Erián y Zaafrán serían condenados a cinco años de prisión.

En octubre varias decenas más de militantes fueron así mismo encausados, y entre

ellos se encontraban tres destacados médicos sindicalistas: Abdel Moneim Abul Futuh y Anwar Hasan Chihata, tesoreros del Comité de Asistencia Humanitaria del sindicato, y Mohammed Saad, tesorero de la sección del sindicato de Guiza. Se les acusaría de utilizar el Comité de Asistencia Humanitaria para enviar a miembros de la Hermandad a combatir en el extranjero para luego volver a Egipto con entrenamiento militar. Como señala Fahmy (2002: 136-137), entre los egipcios el mero hecho de que se juzgara a alguien ante tribunales excepcionales hacía dudar de que los cargos fueran serios, mientras que en ciertos sectores, en lugar de desacreditar a los acusados los convertía en héroes. Por el contrario, la razón indudable de las detenciones para el gran público es que se sospechaba que algunos de los principales detenidos serían elegidos como candidatos a las elecciones legislativas de finales de 1995 a las que la Hermandad había anunciado que quería presentarse.

En el Sindicato de Ingenieros la situación era mucho más compleja. Por un lado, ya en 1993 la comisión judicial encargada de supervisar las elecciones había obligado a retrasarlas en tres ocasiones por pequeños defectos de forma. En 1994, el Consejo del Sindicato volvió a intentar celebrar las elecciones en diversas ocasiones, pero se encontró con el rechazo de la comisión judicial. Por otro lado, en el seno del sindicato se había constituido un frente de oposición a la mayoría islamista en el Consejo, denominado Frente Nacional de los Ingenieros. Dicho frente achacaba al consejo corrupción y mal uso de los fondos del sindicato, así como su monopolio de los puestos de dirección y la exclusión de los coptos. Los sucesivos enfrentamientos terminaron en los tribunales cuando Abdel Muhsin Hamuda, líder de los opositores, pidió que se pusiera al sindicato bajo tutela judicial, consiguiendo un fallo de los tribunales en dicho sentido en febrero de 1995. En abril se celebró una asamblea general en la que se dio un voto de confianza a los miembros del Consejo y se retiró esta al síndico, Abdallah al-Kafrawi, que en 1993 había dejado de ser ministro. En mayo la policía entró por la fuerza en el sindicato para aplicar la decisión judicial, y en julio los tribunales declararon la asamblea de abril ilegítima, con lo que el sindicato fue puesto de manera definitiva bajo tutela judicial, perdiendo su autonomía.

El Consejo de Dirección del Sindicato de Abogados también se enfrentó al Gobierno en 1994 con cierta virulencia a raíz de la muerte estando bajo custodia de la policía de Abdel Hariz Madani, abogado de la Hermandad que había sido arrestado el 26 de abril de 1994 por ser sospechoso de hacer de correo entre los dirigentes islamistas radicales en prisión y los militantes armados. Tras denunciar supuestas torturas como causa de la muerte, el Consejo trató de rebajar la tensión existente entre los miembros islamistas del sindicato. No obstante, los simpatizantes de la Gamaa Islamiyya y Al-Yihad presionaron para que adoptara una postura más decidida, y el Consejo convocó una manifestación hacia el Palacio de Abdín el 17 de mayo. La manifestación fue disuelta por

la policía con gases lacrimógenos, y posteriormente la prensa estatal lanzó una campaña contra el Consejo del Sindicato acusándolo de connivencia con el islamismo armado (IEA 1993: 387-388).

Por otro lado, en el seno del Consejo de Dirección de este sindicato también se dirimía una lucha entre la mayoría islamista y otros diez miembros, liderados por el síndico Ahmad al-Jawaga. El trasfondo y las razones eran muy similares a los del Sindicato de Ingenieros, y terminaría de la misma manera: con la imposición de la tutela judicial al sindicato en enero de 1996. Curiosamente, uno de los tres responsables de la tutela designados por orden judicial sería Ahmad al-Jawaga, si bien otro sería el magistrado “islamista independiente” Mohammed Salim al-Awa. Anteriormente, a lo largo de 1995, varias decenas de abogados serían también detenidos por su pertenencia los Hermanos Musulmanes, aunque en última instancia no se les dirigiera acusación formal alguna.

6.4.2 La Ley de Delitos de Prensa, espada de Damocles sobre los periodistas

En el caso de los periodistas, su posible amenaza a los intereses del poder político no venía tanto de su sindicato como del trabajo individual de aquellos. Como hemos señalado en el capítulo III 9.4, a pesar de la presencia de abundantes miembros de la oposición en su Consejo de Dirección, este era contrarrestado por la presencia de periodistas leales al poder, por la indefectible elección como síndico de uno de ellos y, sobre todo, por la dependencia económica directa del Estado de la mayor parte de los periodistas. En las elecciones de 1993, Ibrahim Nafia, director de *Al-Ahram* y máximo incensario de Mubarak, había sustituido a Makram Mohammed Ahmad a la cabeza del sindicato, y en las de 1995 sería reelegido, mientras que los Hermanos Musulmanes duplicaban su presencia en el Consejo (de 1 a 2 miembros) y se mantenían en él diversos periodistas de izquierdas como Amina Chafi y Galal Aisa.

Sin embargo, el Gobierno no quería dejar campo abierto a las críticas de los periodistas de la oposición ante la proximidad de las elecciones legislativas de finales de 1995. El 24 de diciembre de 1994 el redactor jefe de *Al-Chaab* y secretario general del PT, Adel Husein, fue detenido. Según las fuerzas de seguridad, un mes antes Husein había dejado olvidados en el asiento de un vuelo a Francia documentos que lo relacionaban con grupos islamistas extremistas. También sería interrogado sobre un artículo en el que había afirmado que había bases militares estadounidenses en la península del Sinaí, una afirmación sin duda lejana de la realidad.

Husein permaneció en prisión hasta el 18 de enero, según su esposa y sus próximos en unas condiciones lamentables: aislado, en una estrecha celda, vistiendo ropas sucias, privado de sus gafas y, sobre todo, de su medicación para el corazón. La Organización

Egiptia de Derechos Humanos y los partidos políticos emitieron un comunicado y decenas de periodistas realizaron concentraciones en protesta por las condiciones de detención de Husein y lo dudoso de las acusaciones dirigidas contra él. Sin embargo, el Ministerio del Interior desmintió el maltrato al periodista y afirmó, en un comunicado, que:

“de la misma manera que son capaces de afrontar los intentos criminales de subvertir la paz y la estabilidad de la patria, las autoridades pueden afrontar, y golpear, al terrorismo intelectual (...) El Ministerio advierte a todos aquellos que creen que pueden sembrar la sedición y debilitar la estabilidad y la seguridad, que es capaz de enfrentar tales acciones con medidas legales decisivas”⁷⁶.

No obstante, sería el 27 de mayo de 1995 cuando el Gobierno adoptara medidas legales para coartar a la oposición, al promulgar la Ley 93 de Sanciones de los Delitos de Prensa, que enmendaba el Código Penal y la Ley de Procedimiento Criminal. La nueva ley pretendía perseguir y castigar a quienes difamaran o calumniaran y a quienes difundieran informes o rumores falsos o propaganda que pudieran dañar la paz social, los intereses generales, la economía nacional o las instituciones del Estado. Para los condenados establecía penas de entre uno y cinco años de prisión y multas de entre 5.000 y 20.000 libras egipcias (lo que equivale a entre 1 y 5 años de sueldo de la mayoría de los periodistas). Y, sobre todo, la ley eliminaba la prohibición de aplicar la prisión preventiva a los periodistas⁷⁷.

La Ley 93/1995 provocó una gran agitación y movilización del Sindicato de Periodistas, que se dirigió directamente a Mubarak para solicitarle que no ratificara la ley. A las demandas de los periodistas, el presidente respondió: “Si los periodistas cumplen el Pacto de Honor [de la profesión], la nueva ley «dormirá» por sí misma”⁷⁸. Los “pactos de honor” (موافيق الشرف) eran compromisos relativos a la deontología profesional que el régimen naserista había animado a los profesionales a introducir en los reglamentos internos de los sindicatos, con el fin de que estos, junto a la deontología pertinente, incluyeran también cláusulas e instrumentos de control político, como medidas y comisiones disciplinarias.

Lo cierto es que la prensa egipcia en general se caracterizaba por una alta dosis de amarillismo y de escaso control de la veracidad de las informaciones que publicaba, pero no cabe duda de que la Ley se inscribía en un renovado interés del Gobierno por controlar políticamente la información. Había además otros intereses, que algunos periodistas egipcios manifestaban en privado: su convicción de que la aparición de la Ley se había

⁷⁶ Amira Howeidy: “Journalist Detained for ‘Subversion’”, *Civil Society*, n° 37, enero de 1995, pág. 5.

⁷⁷ Pueden encontrarse los nuevos artículos de la Ley en ص. ١١-١٩، يوليو ١٩٩٥، المجتمع المدني، عدد ٤٣،

⁷⁸ *Al-Ahram*, 8 de junio de 1995, portada.

precipitado por la publicación en las semanas anteriores en la prensa norteamericana de diversas informaciones que acusaban a los hijos de Hosni Mubarak, Alaa y Gamal, de hacer lucrativos negocios gracias a la influencia de su padre, lo que a su vez había generado alusiones veladas en la prensa egipcia de “hijos de altos responsables” de los que se hacía eco la prensa de Estados Unidos⁷⁹. Pero, pesar de los esfuerzos del Gobierno, a mediados de 1995 los negocios reales o supuestos de los hijos de Hosni Mubarak, sobre todo de Alaa, eran la comidilla popular⁸⁰.

A resultas de la Ley 93 de 1995, en el año 1995 se abrieron diligencias judiciales por 65 denuncias contra periodistas o medios de prensa, presentadas ya fuera por la Fiscalía General o por particulares. Según Rayai al-Mirgani, miembro del Consejo del Sindicato en aquella época, aquel ofrecía asistencia en todos los casos, no solo facilitando asistencia letrada sino también el acompañamiento de uno de los miembros del Consejo (الميرغني 2005: 104).

6.5 EL CASO ABU ZEID. EL ISLAMISMO RADICAL EN EL ESTADO

Como hemos señalado en el capítulo IV 3.4, el caso Abu Zeid comenzó en 1993⁸¹. En marzo de dicho año Naser Hamed Abu Zeid, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de El Cairo, se presentó candidato a la promoción al grado de catedrático avalado por trece investigaciones, la mayor parte de ellas sobre temas de lingüística histórica y/o relacionadas con la exégesis de los textos religiosos islámicos y con el discurso religioso, y con el apoyo de casi cincuenta profesores del Departamento de Lengua Árabe de dicha facultad. Pese al informe favorable a Abu Zeid de dos de los miembros del tribunal, uno de los cuales era el hispanista Mahmud Ali Mekki, el rector de la universidad, apoyado por la mayor parte de su comisión científica (اللجنة العلمية الدائمة للأساتذة), se inclinó por la opinión de Abdel Sabur Chahín, profesor de Estudios Islámicos ampliamente conocido por sus apariciones en televisión, que emitió un informe negativo basado en que las

⁷⁹ Steve Negus: *Egypt Focus*, enero de 1996, pág. 13; *Middle East International*, 21 de junio de 1996, págs. 12-13. Negus señala que el primero de dichos artículos, “A close associate of Bill Clinton” fue publicado por Jim Hoagland en *The Washington Post* “en la primavera de 1995”. No obstante, *Al-Chaab* del 29 de noviembre de 1994 ya había hecho alusión a un artículo en *U.S. News and World Report* en el que se acusaba a Alaa Mubarak de violar el embargo a Libia y ser el principal mediador de las relaciones comerciales teóricamente inexistentes entre los dos países.

⁸⁰ Un camarero que trabajaba en pleno centro de El Cairo, junto a la plaza de Tahrir, me aseguró en esa época que Alaa Mubarak “se había hecho con todo el centro de El Cairo”, queriendo decir que había adquirido un gran número de propiedades inmobiliarias.

⁸¹ Para más información sobre el caso véase nuestro trabajo “La anatemización de Abu Zeid. ¿Estado del islamismo egipcio o islamismo del Estado egipcio”, *El Viejo Topo*, nº 92, enero de 1996, págs. 45-52.

investigaciones de Abu Zeid se construían sobre “el embuste, la ignorancia y la calumnia del islam”. Los trabajos de Zeid insistían, en realidad, sobre la necesidad de separar lo que en el islam era realmente histórico de lo que eran elaboraciones posteriores, así como sobre la de someter los discursos religiosos islámicos, fueran oficiales, de oposición o alternativos, a la confrontación con las fuentes originales del islam y su exégesis lingüística e histórica, insistiendo en particular en la necesidad de separar la religión de la política⁸².

Al ver denegada su promoción, Abu Zeid manifestó su intención de recurrir a los tribunales, mientras comenzaba una amplia polémica sobre su caso, agitado por sus partidarios y sus adversarios no solo en los periódicos, sino también en las mezquitas y, finalmente, en los tribunales.

En junio de 1993, un grupo de abogados islamistas, entre los que destacaba Yusuf al-Badri, el apóstol de la recuperación de la *hisba* en el sistema judicial egipcio, presentó una demanda destinada a forzar el divorcio de Abu Zeid de su mujer, la hispanista Ibtihal Yunis. El argumento era sencillo: los escritos de aquel mostraban que era un apóstata y, por ello, según la ley islámica, no podía estar casado con una musulmana⁸³. Según los abogados, el objetivo real de la demanda no era forzar el divorcio, sino que “un profesor ateo dejara de enseñar a la juventud”. Si habían recurrido a ese camino era por ser “el único que les quedaba legalmente”⁸⁴.

En enero de 1994, el Tribunal de Primera Instancia de Guiza desestimó la demanda de divorcio, acogiéndose a que los demandantes no tenían estatuto legal para intervenir en nombre de la *hisba*, puesto que no tenían relación con el objeto de la demanda. No obstante, los demandantes se dirigieron entonces al Tribunal de Apelación de El Cairo, presidido por Faruq Abdel Adel, conocido por su conservadurismo religioso, que en junio de 1995 falló a su favor: Abu Zeid era declarado ateo y forzado a divorciarse de su mujer por “haber publicado estudios que atacan al islam e incitan a no respetar sus preceptos

⁸² En la segunda edición de uno de los libros más conocidos de Abu Zeid, que formaba parte de los trabajos presentados al tribunal, *Crítica del discurso religioso* (القاهرة ١٩٩٥، مكتبة مدبولي، الخطاب الديني)، puede encontrarse un amplio resumen del profesor acerca de las críticas de Abdel Sabur Chahín y de la campaña en su contra desatada por ellas, además del informe específico sobre el libro en cuestión (págs. 10-59).

⁸³ Al-Badri había sido diputado del Parlamento entre 1987 y 1990, y pugnó en vano porque aquel legislara para especificar el procedimiento y las partes competentes para aplicar la *hisba*, procedimiento que, como hemos señalado (véase el caso Fuda/Gazzali en el capítulo IV 3.4), había desaparecido del corpus legal egipcio en 1955. Por el contrario, el Parlamento restringiría la aplicación de la *hisba* a los casos de Estado Civil o Estatuto Personal en 1991, y desde entonces Al-Badri presentaría incansablemente “demandas de *hisba*” contra intelectuales, periodistas y otras personalidades.

⁸⁴ En palabras de Mohammed Samida Abu Samad, uno de los abogados. Citado por *Civil Society*, nº 20, agosto de 1993, pág.20.

derivados de la tradición”⁸⁵. Se trataba de la primera vez en que un musulmán era declarado apóstata por los tribunales civiles desde que estos fueron establecidos en 1883.

Pese a que Abu Zeid y su esposa estaban legalmente divorciados hasta que fuera visto el recurso que presentaron al Tribunal de Casación, el Gobierno egipcio se negó a forzar la aplicación de la sentencia. No obstante, Abu Zeid tenía ya una preocupación mayor que el divorcio en sí. Desde el inicio del caso, numerosos islamistas radicales habían considerado las opiniones de Abdel Sabur Chahín una fetua contra el profesor, y este había recibido amenazas de muerte, a las que se unió un comunicado, firmado por la Gamaa Islamiya el 21 de junio y publicado en *Al-Hayat*, en la que esta pedía “la sangre” de Abu Zeid⁸⁶. Ante tales amenazas, el profesor y su esposa optaron por abandonar el país a finales de julio de 1995 con un gran secretismo⁸⁷.

El “caso Abu Zeid” pondría de relieve, en palabras del magistrado Said al-Achmawi, expresidente del Alto Tribunal de Seguridad del Estado, que se autodenominaba “islamista secularista”, “la islamización de los integrantes del poder judicial”⁸⁸. En realidad, dicha islamización, que Al-Achmawi atribuía a los largos periodos que numerosos jueces habían pasado en los países del Golfo desde los años 70, ya se había manifestado claramente en las demandas anuales del Club de Jueces, la asociación profesional de estos, en el sentido de que se implementara el artículo 2 de la Constitución, que establecía que la *charía* era la principal fuente de legislación⁸⁹. Tras el fallo, Mohammed al-Fiqqi, presidente del Tribunal de Estatuto Personal de El Cairo, declararía: “Es lo mínimo que merece Abu Zeid”, y Yahya al-Rifai, vicepresidente del Tribunal de Casación hasta 1991 y expresidente del Club de Jueces mostraría su aversión hacia los secularistas al señalar que estos no eran “más que un atajo de perros y maricas”⁹⁰.

Para Nagad al-Borai, miembro de la Organización Egipcia de Derechos Humanos, la islamización se debía a que “los jueces son humanos. Sienten el humor del país en la radio, en la televisión, en las mezquitas y en Al-Azhar”⁹¹. Efectivamente, en el calor de la polémica sobre las obras de Abu Zeid, Al-Azhar había emitido también una opinión negativa acerca de aquellas, que Al-Badri y el resto de los demandantes habían esgrimido ante el Tribunal de Apelación, aunque luego el Gran Jeque negara que se tratara de una

⁸⁵ Un amplio extracto de la sentencia puede encontrarse en *Al-Hayat*, 22 de junio de 1995, pág.7.

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ En un primer momento los esposos se dirigieron a Madrid, donde pudimos entrevistarnos con Abu Zeid gracias a la mediación del profesor Pedro Martínez Montávez. Más adelante se instalaron en Holanda, donde Abu Zeid impartiría clases en la Universidad de Leiden; Abu Zeid falleció en El Cairo en 2010.

⁸⁸ *Middle East Times*, 18-24 de junio de 1995.

⁸⁹ El *Informe Estratégico Árabe* de *Al-Ahram* reseñaba dichas demandas desde 1986.

⁹⁰ *Middle East Times*, 18-24 de junio de 1995.

⁹¹ Ibid.

fetua.

No obstante, en nuestra opinión gran parte de la extensión de las ideas islamistas radicales en la sociedad era responsabilidad del Estado: Mohammed al-Gazzali, Yusuf al-Badri y Abdel Sabur Chahín aparecían habitualmente en la televisión. Ello podría considerarse una muestra de pluralismo si de aquella no fueran excluidas otras muchas opiniones políticas y religiosas. Los tres jeques citados tenían, sin embargo, algo en común: nunca se alzarían contra el régimen de Mubarak ni contra el resto de los poderes políticos árabes, cuando no los apoyaron explícitamente, y recibieron incontables reconocimientos.

Al-Gazzali recibió en 1988 la Condecoración de Primer Orden de la República de Egipto y en 1989 el premio Rey Feisal de Arabia Saudí, de la misma manera que acudió a Argelia, a la llamada del presidente Chadli Ben Yedid, que quería desarrollar en el país una corriente islámica “moderada” para combatir a las radicales y dar un barniz islámico al FLN (Kepel 2002: 165). Cuando Mubarak retornó de Adís Abeba tras el atentado sufrido en dicha ciudad el 26 de junio de 1995, Al-Gazzali fue una de las primeras personas que fue a presentar su respetos por su regreso sano y salvo.

En cuanto a Al-Badri, a pesar de su radicalismo (era también un gran defensor de la mutilación genital femenina, porque “ayudaba a las mujeres a contener sus pasiones”⁹²) sería miembro del gubernamental Consejo Superior de Asuntos Islámicos entre 1987 y 1993. En abril de 2013 Al-Badri se manifestó contrario al levantamiento popular contra Mubarak de enero y febrero de 2011, y pidió la celebración de un referéndum para consultar al pueblo si debía amnistiarse al oresidente en el caso de que fuera condenado.

Por su parte, Abdel Sabur Chahín fue miembro de la Asamblea Consultiva en 1986, elegido en las filas del partido gobernante o por designación presidencial, ya que todos los miembros de la Asamblea accedieron a ella por esos procedimientos.

En definitiva, consideramos que todo ello es indicio de que el régimen de Mubarak patrocinaba a “sus” islamistas radicales, a aquellos que, por conservadoras que fueran sus opiniones en los aspectos sociales, nunca apoyarían la “rebelión” contra el régimen.

6.6 LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DE 1995

Aunque el Gobierno egipcio no dejó de insistir a lo largo de 1995 en que las

⁹² En 2007, Al-Badri llegaría al extremo de interponer una demanda contra el ministro de Sanidad cuando este decidió finalmente prohibir la práctica de la clitoritomía en cualquier hospital o clínica, y por ende en cualquier otro lugar (٢٠٠٧ يوايو ١٨، مصرس، "لأنه مكرمة. يوسف البدري يرفع دعوى ضد الجبلي لمنعه ختان الإناث"، <http://goo.gl/vhpSLI>, consulta del 12 de agosto de 2015).

elecciones legislativas de noviembre y diciembre se celebrarían con todas las garantías democráticas, las numerosas detenciones y juicios celebrados durante todo el año contra miembros de los Hermanos Musulmanes parecían los más claros indicios de lo contrario. A finales de octubre el número de detenidos en los diez meses anteriores era de 180, y la culminación fue la detención el mismo 31 de octubre de Seif al-Islam Hasan al-Banna, secretario general del Sindicato de Abogados e hijo del fundador de la Hermandad. Muchos de los detenidos eran pesos pesados de aquella y habían manifestado su intención de presentarse a los comicios, o se sospechaba que pudieran hacerlo. No hay que olvidar, por otro lado, que la decisión de transferir a civiles acusados a tribunales militares solo podía ser adoptada por el presidente Mubarak, lo que constituía otro signo inequívoco de que la advertencia a la organización islamista venía de las más altas esferas. A lo dicho hay que añadir el resto de medidas legislativas, ejecutivas y judiciales que adoptadas entre 1992 y 1995 que hemos desgranado con anterioridad, y que habían apuntado a controlar a los sindicatos profesionales, la prensa, los alcaldes, los decanos de las facultades, etc. Finalmente, el trato a los detenidos seguía siendo poco apropiado para un sistema que se pretendía democrático.

Según declaraba un informe de septiembre de 1995 de la Organización Egipcia de Derechos Humanos sobre las condiciones de detención, en las cárceles de Tora y Abu Zaabal “la tortura física y psicológica” había devenido “una triste rutina en el marco de unas condiciones de vida deterioradas y sin asistencia médica”, mientras que en la nueva cárcel de Al-Wadi al-Guedid, a 620 kilómetros al sur de El Cairo, habían fallecido 13 personas desde el mes de febrero del mismo año⁹³. El intento de asesinato sufrido por Hosni Mubarak el 26 de junio de 1995 en Adís Abeba, nada más descender del avión que lo había llevado allí, no contribuyó a suavizar la posición del régimen político hacia los islamistas.

Los partidos y fuerzas de la oposición intentaron encontrar un terreno de unidad para enfrentarse a la deriva represiva del régimen y a las elecciones. A pesar de sus agrios enfrentamientos con los Hermanos Musulmanes y las corrientes islamistas, y de sus frecuentes posicionamientos al lado del Gobierno, los partidos Wafd, Tagammu y Naserista se unieron a las organizaciones de defensa de los derechos humanos a mediados de octubre para publicar una declaración en contra de los juicios militares. Además, en dicho comunicado concedían que los Hermanos Musulmanes eran “conocidos por su creencia en el diálogo”. No obstante, poco después los esfuerzos que dichos partidos habían hecho junto al PT, la Hermandad y otras fuerzas políticas no autorizadas para consensuar un

⁹³ Citado sin más referencias por Saahir Lone: “Parliamentary Elections: Egypt’s Moment of Truth?”, *Civil Society*, nº 47, noviembre de 1995, págs. 6-8.

“acuerdo de oposición” concluían sin resultados ante las diferencias irremontables surgidas entre las partes. Algunos ejemplos de las diferencias que impidieron firmar el “acuerdo” de oposición eran que los Hermanos Musulmanes exigían que se definiera la democracia que los partidos defendían conjuntamente como “democracia en el marco de los principios islámicos”, lo que según la organización excluía aspectos como autorizar la homosexualidad. Por su parte, el Partido Naserista insistió en que el acuerdo exigiera el respeto de “los derechos adquiridos por los trabajadores y los campesinos tras la Revolución de 1952”, y que se señalara a Israel como un enemigo nacional.

6.6.1 Una comisión de seguimiento inusitada

Un proyecto común que sí salió adelante fue el de establecer una Comisión Nacional para el Seguimiento de las Elecciones (اللجنة الوطنية المصرية لمتابعة الانتخابات البرلمانية ١٩٩٥), una comisión independiente y un seguimiento que no tenían precedentes en las elecciones anteriores, y que encontrarían la firme oposición del Gobierno, que tachó un seguimiento de tal tipo de “inconstitucional”. El proyecto fue impulsado por diversas organizaciones no gubernamentales, y contó con la participación de políticos, intelectuales y otras variadas personalidades de izquierdas, islamistas y liberales, y con el apoyo del Tagammu y del PT, aunque no del Wafd ni del Partido Naserista, si bien ningún partido figuraba como miembro de la comisión.

Las principales ONG participantes en la comisión eran el Centro Ibn Jaldún (dirigido por Saad Eddín Ibrahim), la Organización Egipcia de Derechos Humanos (dirigida por Nagad al-Borai), el Centro de Estudios e Informaciones Legales para los Derechos Humanos (dirigido por Amir Salem), el Centro de Ayuda Legal para los Derechos Humanos (dirigido por Hicham Mubarak, por cuyo nombre era más conocido el centro) y la Asociación La Nueva Llamada (dirigida por el “apóstol” del liberalismo económico Said al-Naggar).

Entre los participantes individuales, es interesante destacar el amplio muestrario de sus posiciones políticas para dar una idea de la amplitud de la cooperación y de algunos otros aspectos que señalaremos a continuación.

Entre los izquierdistas se encontraban Milad Hanna (exmiembro del Tagammu) y Ahmad Nabil al-Hilali (histórico dirigente comunista); entre los islamistas, Fahmi Huweidi (periodista, próximo a la ideas de los Hermanos Musulmanes), Mohammed Salim al-Awa (magistrado, “islamista independiente”) y Hasan Hanafi (filósofo, considerado islamista de izquierdas). Entre los “liberales políticos” -denominación que adoptamos para quienes no pueden ser fácilmente encuadrados en una tendencia ideológica, en cuanto que defendían el liberalismo político- cabe destacar la nómina de profesores de universidad que al mismo

tiempo era investigadores del CEPEA *Al-Ahram* y miembros de otras instituciones de investigación estatales, contingente digno de ser señalado porque la mayor parte de los periodistas e investigadores de dichos centros eran muy complacientes con el poder político o temerosos de él⁹⁴. Así, podemos citar del CEPEA a Mohammed al-Sayyed Said, Mustafa Kamel al-Sayyed y Nabil Abdel Fattah, todos ellos autores de importantes obras de sociología política, algunas de las cuales hemos citado en este trabajo.

6.6.2 Aspectos novedosos del proceso electoral

6.6.2.1 Sistema y normas electorales

El sistema electoral seguido en las elecciones celebradas el 29 de noviembre (primera vuelta) y el 6 de diciembre de 1995 fue casi exactamente el mismo que el utilizado en las anteriores elecciones de 1990. Cabe señalar tan solo dos diferencias mayores.

La primera es que el Gobierno egipcio accedió por primera vez a que fueran únicamente jueces quienes supervisaran el proceso en las sedes electorales centrales de los 222 distritos electorales (en cada uno de los cuales debían ser elegidos dos candidatos), que se encargaban del recuento final de los votos recogidos en las urnas que llegaban a ellas, pero no en los más de 27.000 colegios en los que se desarrollaba la votación, en la que los encargados de velar por ella seguirían siendo funcionarios del Ministerio de Justicia.

La segunda diferencia fue la modificación de la interpretación que el Ministerio del Interior hizo del artículo 87 de la Constitución, que establecía que la mitad de los miembros del Parlamento debían ser obreros o campesinos. En las elecciones anteriores, los electores tenían prohibido dar los dos votos que les correspondían por circunscripción a candidatos no obreros ni campesinos (categoría denominada فئات, “[otros] grupos”), aunque sí podían dar ambos a candidatos de estas dos últimas categorías. En las elecciones de 1995 se permitió que cada elector atribuyera sus votos libremente, fueran los candidatos de la misma categoría o no, atribuyéndose después los escaños uno al candidato más votado de “otros grupos” y otro al más votado de “obreros o campesinos” (Paradelle 1997: 45).

⁹⁴ Como ya hemos señalado, el director del Centro de Estudios Políticos y Estratégicos de Al-Ahram (CEPEA) entre 1975 y 1994, Al-Sayyed Yasín, apoyó a Hosni Mubarak en el plebiscito de 1993, mientras que Ali Eddín Hilal, otro de los decanos de dicho centro y de la politología egipcia, llamaría a participar en dicho plebiscito (más adelante tendría un cargo de importancia en el PND). Una trayectoria calcada a la de Hilal seguirían Usama al-Gazali Harb, director de la revista estatal السياسية الدولية y miembro del CEPEA, y Yihad Auda.

6.6.2.2 Incremento del número de candidatos

El número de candidatos a las elecciones de 1995 se incrementó notablemente respecto a las de 1990, cerca de un 50%. A las de 1990 habían concurrido 2.676 candidatos, mientras que a las de 1995 se presentaron 4.035⁹⁵.

El número de candidatos presentados por los partidos reflejaba su potencia económica y social. Para los 444 escaños en disputa, el PND presentó 439 candidatos, el Wafd 182, el Partido del Trabajo 120, el Partido Liberal 61, el Partido Naserista 43, el Tagammu 40 y la “corriente islamista” (en su mayor parte Hermanos Musulmanes) 148 (مصطفى 1997b: 45). La campaña electoral representaba un gran esfuerzo económico, sobre todo para los partidos que pagaban a sus propios partidarios (incluidos los votantes). En muchos casos esos gastos eran afrontados por los propios candidatos, y en el caso del PND esa era la norma, aunque los candidatos contaran además con el apoyo del aparato del Estado (Blaydes 2011: 9). En este sentido, es de destacar que, a pesar de la amplia campaña judicial contra ellos, los Hermanos Musulmanes fueron la fuerza política que más candidatos presentó después del partido gobernante. Según fuentes de la Hermandad citadas por el diario *Al-Hayat*, a principios de noviembre pensaba que de sus casi 150 candidatos, aproximadamente 50 podían obtener la victoria⁹⁶.

Finalmente, hay que destacar que el número de candidatos que no se presentaban bajo las banderas de partidos aumentó de manera notable, pasando de 2.163 a 3.150. No obstante, según estimaciones del IEA, la inmensa mayoría de esas candidaturas era o bien de “disidentes electorales” del PND (miembros del partido, 1.400) o bien de “simpatizantes” suyos (1.700) (IEA 1995: 382-384), lo que evidentemente llevaba a que por la mayoría de los escaños compitieran diversos miembros o partidarios del PND.

6.6.2.3 Irregularidades habituales y aumento sin precedentes de la violencia

La campaña electoral mostró la determinación del poder de renovar su hegemonía en el Parlamento por los medios que fuera, aunque exhibiera algunos gestos de “generosidad”, como la concesión a cada partido de ochenta minutos de acceso a la televisión, en lugar de los cuarenta minutos de los que habían disfrutado en elecciones anteriores. El resto del tiempo, los medios de comunicación audiovisuales se dedicaban a la propaganda apenas camuflada del PND (Informe CESE⁹⁷ 1995: 121-126).

⁹⁵ *Al-Ahram*, 8 de diciembre de 1995, pág. 8. Citado por Al-Sayyid (1997:14).

⁹⁶ "مصر: الإخوان يرشحون ١٥٠ شخصاً يأملون أن يفوز ثلثهم"، *الحياة*، ٩ نوفمبر ١٩٩٥، ص. ٧.

⁹⁷ Por razones de brevedad denominamos “Informe CESE” al Informe de la Comisión Nacional Egipcia

Las habituales medidas restrictivas de las actividades de la oposición, aplicadas como en otras campañas en nombre de la Ley de Excepción y de otras disposiciones legales vigentes, se intensificaron. Las reuniones en lugares públicos abiertos fueron prohibidas -aunque se produjeron mítines de la oposición en algunos cafés-, se multiplicaron los controles policiales de las comitivas electorales mientras se confiscaban los micrófonos de estas. La policía llegó incluso a detener, junto a cientos de sus partidarios, a los propios candidatos de los Hermanos Musulmanes o del Partido del Trabajo que se aventuraban a participar en comitivas o actos en la calles. No obstante, la policía no era la única fuerza coercitiva: matones a sueldo (*baltaguiyya*) destruían los carteles de propaganda o disolvían las concentraciones o marchas electorales de la oposición, aunque en numerosas ocasiones la propia oposición contrataba a sus matones para defenderse de ellos (Al-Khawaga 1997: 93; Informe CESE 1995: 39-58, 122-126).

El aparato del Estado puso todos sus medios al servicio de los candidatos del PND (de los oficiales y, en numerosos casos, de los oficiosos), y al margen de la campaña electoral se produjeron también irregularidades administrativas, la más espectacular de las cuales fue, según Dina al-Khawaga (1997: 93), el traslado de 15.000 votantes a una *chiyaja* (شياخة, unidad territorial-administrativa) deshabitada, Al-Istad, por parte del Ministerio del Interior con el fin de alterar los resultados electorales en la circunscripción de Madinat Násir en favor de Abdel Moneim Imara, presidente del Consejo Superior de Deportes y de la Juventud. La medida, no obstante, fue anulada por un tribunal administrativo, y el Ministerio aprovechó la ocasión para señalar la independencia del poder judicial.

Las elecciones de 1995 fueron las más violentas de todas las celebradas hasta entonces, y arrojaron un saldo, a lo largo de todo el proceso (campaña y dos vueltas de las elecciones) de 51 muertos y 878 heridos, según el Centro de Asistencia Legal para los Derechos Humanos⁹⁸. El Informe CESE (1995:50-52) recoge “a modo de ejemplo y sin pretensiones de exhaustividad” algunas muestras de los actos violentos: ataques de partidarios de unos candidatos a las comitivas de otros, ataques a las viviendas particulares de los candidatos, violencia mutua durante varios días, empleo de armas de fuego y blancas, etc. Por su parte, Ahmad al-Munisi (1997: 72-73, 78) realizó, a partir de las informaciones de los diarios *Al-Ahram*, *Al-Wafd* y *Al-Ahrar* y de los informes de la Organización Egipcia de Derechos Humanos, un estudio estadístico acerca de los lugares en los que se produjeron los actos violentos y sus causantes. Según dicho estudio, que incluye los 148 casos de arrestos practicados por la policía -no número de arrestados, que fue considerablemente mayor- durante la campaña electoral se produjeron 158 actos

para el Seguimiento de las Elecciones Parlamentarias de 1995, citada anteriormente.

⁹⁸ Citado por Gamblin (1997: 19).

violentos, y durante los dos días de votación, 702. De estos últimos, las cifras más elevadas se produjeron en Alejandría (211), El Cairo (89) y El Fayyum (76). Alejandría y El Fayyum eran dos de los principales lugares en los que la corriente islamista, y los Hermanos Musulmanes en particular, tenían mayores apoyos sociales, así como los tenían en las zonas periféricas de El Cairo. Según el mismo estudio, más del 25% de los 568 actos violentos cuyo origen se pudo esclarecer fueron cometidos o iniciados por partidarios de los candidatos oficiales del partido en el Gobierno, y el 53% por los candidatos independientes. Nótese, como hemos señalado, que la mayor parte de los candidatos independientes eran también miembros o “simpatizantes” del partido en el Gobierno. El Partido Naserista originó algo menos del 8% de dichos actos, el Partido Liberal algo más del 6%, y el Wafd, el PT y los Hermanos Musulmanes cada uno menos del 2%.

Finalmente, fueron denunciados, además del control fraudulento de los censos electorales y del escrutinio por el ministerio del Interior, la compra de votos y los votos colectivos bajo vigilancia de funcionarios y familias, así como otras prácticas ilegales o irregulares más visibles, como aperturas muy tardías y cierres muy tempranos de colegios electorales (a las 11 de la mañana en algunos casos), impedimento de votar a los electores de la oposición por parte de la fuerzas de seguridad, etc. (Informe CESE 1995: 38-58).

6.6.3 Participación, resultados e impugnaciones: el poder judicial ignorado

De creer los resultados oficiales -algo difícil en términos absolutos, pero para los que no tenemos cifras alternativas, y en cualquier caso, pueden ser orientativos- la participación en las elecciones aumentó respecto a elecciones anteriores. Ya el número de inscritos en el censo electoral pasó a representar el 61,4% de la personas con derecho voto (20.987.000 de 34 millones), mientras que en 1995 dicho porcentaje era del 52,8%. De los inscritos, votaron casi el 50% (10.480.000 personas), un porcentaje similar al de 1987, mientras que en 1990 había votado tan solo el 44,9%. Finalmente, el porcentaje de quienes votaron con respecto a quienes tenía derecho a voto fue del 30,8%, mientras que en 1990 había sido aproximadamente del 23,5%, y en 1987 del 25%⁹⁹.

El patrón de participación en las elecciones según la línea divisoria entre zonas principalmente urbanas/zonas principalmente rurales fue similar al de otras elecciones.

⁹⁹ Hay que tener en cuenta que con el sistema de elección a dos vueltas hay dos cifras diferentes de votantes: la de quienes votan en la primera vuelta -entre numerosos candidatos- y la de quienes votan, si es necesario, en la segunda, entre tan solo dos candidatos. La cifra aquí citada es, según Mustafa (مصطفى 1997b: 40), de quien la hemos tomado, una cifra aproximada teniendo en cuenta que en ambas vueltas votaron cerca del 50% de los inscritos.

Según los datos aportados por Mustafa (مصطفى 1997b: 40-41) en El Cairo votaron tan solo el 13% de los inscritos, mientras que en las provincias o gobernados mayoritariamente rurales del Delta la participación llegó al 65%, en las del Alto Egipto al 50% y en las de las fronteras y ciudades del Canal -ciudades en las que el apoyo a los Hermanos Musulmanes, el Wafd e incluso el Tagammu es muy considerable- fue del 45%. Como señala la autora, la gran participación en las zonas rurales “no tiene que ver con la existencia de una mayor conciencia política en ellas, sino con las lealtades o alineamientos locales, familiares o de otro tipo” (pág. 40).

Los resultados oficiales atribuyeron 318 escaños (el 71,6%) a los candidatos presentados por el PND, 112 a candidatos independientes (25,2%), 6 al Wafd, 5 al Tagammu, 1 al Partido Naserista, 1 al Partido del Trabajo y 1 al Partido Liberal. No obstante, 99 de los candidatos independientes se incorporaron al grupo parlamentario del PND, unos porque ya eran miembros del partido y otros porque ingresaron en él, con lo que el partido gobernante se hizo con un mayoría del 93,91% de los escaños del Parlamento (417 diputados). Por su parte, el conjunto de los partidos de la oposición contaba con poco más del 3% de los escaños (14 diputados) y los “auténticos independientes” con otro 3% (13 diputados) (مصطفى 1997b: 45).

A diferencia de las elecciones legislativas anteriores, el Ministerio del Interior no hizo públicos los datos del número de votos obtenidos por cada partido o cada candidato, limitándose a anunciar los nombres de los candidatos elegidos¹⁰⁰.

Una novedad importante en estas elecciones es que los resultados fueron objeto de un enorme número de impugnaciones relativas tanto al desarrollo de ambas vueltas de votación como al resultado final, presentadas ante instancias diferentes y por diferentes razones. Unas atañían, por ejemplo, a la corrección de los censos electorales (donde había nombres repetidos, nombres de fallecidos, nombres de residentes en el extranjero), otras a la incorrección de muchas papeletas, otras a la expulsión de interventores y delegados de los partidos de las salas de votación o del escrutinio, otras a intervenciones irregulares de la policía, y otras a irregularidades cometidas por los presidentes de las comisiones electorales, no solo en los colegios electorales sino también en los colegios centrales, donde los presidentes era jueces o miembros de los cuerpos judiciales (فرحات 1997: 300-307).

Gran parte de las impugnaciones fueron aceptadas, y el Tribunal de Procedimiento Administrativo, dependiente del Consejo de Estado y encargado de juzgar las demandas que tenían que ver con la legalidad de los actos administrativos, falló la nulidad y

¹⁰⁰ Los resultados oficiales aparecieron en “el boletín oficial del Estado”, الوقائع المصرية, n° 273 del 1 de diciembre de 1995 y n° 279 del 7 de diciembre de 1995. Citado por Kienle (1997: 135).

necesidad de repetir las elecciones en 109 circunscripciones (218 escaños), casi la mitad del total. Por su parte, el Tribunal de Casación, encargado de estudiar las demandas relacionadas con “la condición de miembro del Parlamento” (صحة العضوية), falló en septiembre de 1996 la nulidad de los resultados en otras 40 circunscripciones (80 escaños). Como ya sucedió en 1984 y 1987 con un menor número de casos, el recién elegido Parlamento se negó a aplicar el fallo del Tribunal de Casación, en virtud de su particular interpretación del artículo 93 de la Constitución, que establece que la propia Asamblea es la única competente para determinar a quiénes priva de la condición de miembros de ella. En cuanto a las decisiones del Tribunal de Procedimiento Administrativo, fueron rechazadas por el Ministerio del Interior y entraron en un proceso de apelaciones que terminaría en la mayor parte de los casos con la misma decisión de la Asamblea, y en otros con la repetición parcial de las elecciones en algunos distritos (فرحات 1997: 300-307).

Estos fallos y su ignorancia por parte del poder ejecutivo y legislativo muestran la progresiva deriva autoritaria del régimen, para quien el poder judicial era un instrumento más a su servicio y, en caso contrario, fácilmente ninguneable. El repertorio de actuaciones en este sentido irá creciendo en los años posteriores del mandato de Mubarak

6.6.4 Análisis del proceso electoral y de los resultados

Las elecciones de 1995, a diferencia de las de 1990, despertaron antes de su celebración el interés de los observadores académicos aunque nadie esperara la derrota del partido gobernante, ni siquiera una pérdida de los dos tercios de los escaños que le garantizaban adoptar cualquier tipo de medida en el Parlamento. La participación en ellas de las fuerzas políticas de oposición autorizadas o toleradas era una de las causas de este interés, pero otra era la constatación, tras las elecciones de 1990, de que, incluso en ausencia de oposición, los procesos electorales suscitaban muchas preguntas y mostraban aspectos reveladores de la gestión del sistema político egipcio por las elites del régimen de Mubarak.

Alain Roussillon (1997: 102-103) planteaba algunas de las preguntas más pertinentes:

“¿Por qué los partidos [de la oposición] deciden participar en la batalla electoral cuando ninguna de sus reivindicaciones en materia de normalización de la vida política que habían justificado su boicot de las elecciones de 1990 ha sido satisfecha, y cuando parecía evidente que el Estado y la Administración se aprestaban a poner todo su peso a favor del PND? Dicho de otra manera, ¿qué consideran que está en juego con su presencia en el Parlamento en un contexto en el que la alternancia, o incluso su simple asociación al ejercicio del poder parecen menos que nunca a la orden del día?

¿Por qué los propios Hermanos Musulmanes deciden participar en las elecciones a pesar del endurecimiento de la represión que sufren? (...)

Más allá todavía, ¿por qué el partido gubernamental mismo, con su manera de gestionar los procesos electorales y de poner en cuestión un *modus vivendi* con los Hermanos Musulmanes, se arriesga a llegar a un bloqueo del propio sistema [el autor hace alusión a una nota a las impugnaciones admitidas por la justicia], por no hablar del proceso de liberalización, en detrimento de la «reputación» internacional de Egipto?”.

6.6.4.1 La actitud del régimen político. Lógica de imagen, lógica política y lógica “sociológica”. Las elecciones como “política de distribución”

Podemos comenzar a responder a las preguntas anteriores, y a alguna más estrechamente relacionada con ellas, por la última.

Sin duda alguna, el régimen egipcio no tenía la menor intención de dejar escapar el control de la mayoría absoluta en el Parlamento, pero tampoco quería arruinar totalmente su “imagen internacional” o “su reputación”, y al mismo tiempo quería que las elecciones le sirvieran para consolidar su base social y gestionar los conflictos dentro del régimen.

Los resultados finales -tras el reingreso o ingreso de la mayoría de los “independientes” en el PND- dejaron una mayoría del 94% de escaños para el partido gobernante, lo que aparentemente no da muy buena imagen sobre la limpieza de las elecciones. Sin embargo, en los registros históricos sintéticos quedaría también que se habían presentado a ellas varios partidos, obteniendo un pequeño número de escaños, incluso que había habido un elevado número de candidatos de los Hermanos Musulmanes, así como que más de un centenar de independientes habían obtenido un escaño.

No obstante, hay varias razones para que los resultados de los partidos de la oposición -a los que, como veremos, había predisposición para dejarles algunos escaños- fueran tan modestos, al margen de su propia debilidad electoral. Cuando el régimen político estaba decidido a obtener la victoria como fuera, y a evitar igualmente como fuera la victoria de los islamistas, no podía en muchos casos discriminar: sus candidatos, al deber imponerse a los Hermanos Musulmanes, debían imponerse a todos. Por otro lado, el “trucaje desde abajo”, el practicado en los colegios de votación, del que hablamos en los capítulos III 2.3 y 8.2, no era controlable ni siempre se deseaba controlar desde el núcleo central del régimen. Se dejaba que los candidatos del PND que manejaban el aparato estatal a nivel local se encargaran de él, y desde arriba se enmendaban al final, si era el caso, los resultados.

Finalmente, de nuestro análisis se deduce que había una razón más para que el régimen político no quisiera conceder demasiados escaños a una oposición no controlable:

en la segunda mitad de los 90 se avanzaría definitivamente, como veremos en el capítulo siguiente, en el proceso de liberalización de la economía en algunos de sus aspectos más conflictivos, en los que apenas habían cambiado las cosas. Nos referimos a las privatizaciones y la liberalización de los arrendamientos agrícolas. No solo la oposición de izquierdas era susceptible de oponerse a estas políticas, sino también otros sectores hasta entonces leales al régimen que se vieran afectados por ellas.

Por otro lado, el régimen político no solo tenía que afrontar la oposición (la del islamismo armado, la de los Hermanos Musulmanes y la del resto de los partidos), sino también gestionar sus apoyos. Como hemos mencionado, los candidatos oficiales del régimen obtuvieron más de dos tercios de los escaños, lo cual le aseguraba la mayoría cualificada en el Parlamento. En el resto, probablemente practicó la “política de distribución” cuyos estudios más completos en sus implicaciones económicas debemos a Lisa Blaydes (2011), pero a la que habían apuntado de manera general antes otros investigadores (Roussillon 1997; Ben Néfissa & Arafat 2005; Barreda 2006 y 2009), y que los egipcios conocían a nivel local o monográfico perfectamente, como veremos a continuación.

Según Roussillon (1997:112), para la conformación de la mayoría parlamentaria del PND este debía atender a dos lógicas: “una que se podría calificar propiamente de *política*” y otra “que cabría denominar *sociológica*”. En cuanto a la primera, era necesario contar con un consenso mínimo en cuanto a las opciones gubernamentales y con una disciplina de partido, aunque ambos eran difíciles de obtener en el seno de la mayoría parlamentaria “al no ser un partido propiamente dicho, sino un conglomerado de corrientes que solo mantiene unidas la común lealtad al presidente de la República y el hecho de compartir las posiciones de autoridad en el Gobierno y en la Administración”. En cuanto a la “lógica sociológica” debía atender a

“la conversión de una serie de recursos poseídos a nivel local o sectorial -recursos económicos, pertenencias familiares o tribales, capital político, notabilidad profesional, etc.- en recursos políticos, cuya movilización se opera casi siempre mediante la ocupación de posiciones de intermediación entre la centralidad estatal y las «colectividades reales»”¹⁰¹.

Es decir, como ya hemos señalado en el capítulo III 8.3 a propósito de las elecciones legislativas de 1990, ante estas elecciones el régimen político debía pensar, además de en la coherencia y cohesión políticas mínimas de su grupo parlamentario, en

¹⁰¹ El autor señala en nota a pie que utiliza esta expresión por oposición a las comunidades nacionales «imaginadas», si no «imaginarias», sin duda en alusión al conocido libro de Benedict Anderson (1983).

que los diputados le aportaran recursos económicos, apoyo social (o, al menos, lealtad) y/o control de los diversos territorios y sectores. Al “conceder” sus puestos políticos, el régimen se ganaba o se aseguraba la lealtad de las elites sociales, que a su vez esperaban recuperar su propia “inversión” en la forma de favores para ellas y/o para las comunidades representadas. Pero al ser los puestos políticos (escaños) y los recursos económicos limitados, el régimen había tenido que elegir, hasta que descubrió, sobre todo tras las elecciones de 1990 (las primeras con candidaturas individuales), que podía situar la “decisión” acerca de gran parte de quienes accedían al Parlamento en una esfera externa, las elecciones, minimizando con ello el coste de sus propias decisiones. Así, en 1995, las elecciones legislativas fueron, en gran parte, lo que en otro lugar se habría denominado “primarias” del partido gobernante, solo que en este caso las “primarias” daban acceso al Parlamento.

No obstante lo dicho, la imposición de numerosos candidatos “independientes” a los candidatos oficiales del PND no dejaba de mostrar la relativa fragilidad, por su falta de cohesión, de los apoyos sociales -incluidos los del aparato del partido y del Estado a nivel local- al régimen político. Los enfrentamientos electorales entre miembros y simpatizantes del PND no eran casi nunca contiendas caballerizas, sino que la violencia se desataba entre ellos en la misma medida que frente a las fuerzas de la oposición.

6.6.4.2 Lógica de la victoria, lógica de voto sectorial, lógica de la potencia. Desideologización y patrimonialización de las elecciones

Los estudios de caso de las elecciones de 1995 realizados en ciertas provincias mostraron la pervivencia de “lógicas electorales” ya manifestadas en elecciones anteriores junto a alguna novedad significativa. Yihad Auda (مصطفى 1997a: 147-283), en las conclusiones relativas a diversos estudios en las provincias de Guiza, Daqahleyya, Port Said, Alejandría y Asiut destacaba la pervivencia predominante del voto a cambio de servicios, más allá de la lógica ideológica, así como de alianzas electorales que podían parecer *contra natura* desde un punto de vista ideológico. Así, por poner un ejemplo, en la provincia de Port Said, en los distritos de Al-Charq-Port Fuad y Al-Arab se atribuía la derrota de los candidatos wafdistas frente a los del PND al apoyo prestado a estos por los adversarios de aquellos dentro del propio Wafd, lo cual además habría evitado la victoria de los candidatos de los Hermanos Musulmanes (ibid. pág. 187). Ejemplos un tanto diferentes serían los de la alianza de Jaled Mohai Eddín, presidente del Tagammu, y Fuad Serag Eddín, presidente del Wafd, candidatos en el cupo de “otros grupos” por los distritos de Kafr al-Chukr y Qasr al-Aini, respectivamente, con los candidatos obreros del PND en sus distritos con el fin de repartirse los escaños de cada una de esas circunscripciones (Al-

Khawaga 1997: 88). En estos casos, con toda probabilidad, los candidatos del PND seguían instrucciones de más altas instancias que querían conceder unos escaños a los líderes de los partidos no islamistas. Un poco más adelante, veremos algunos casos más de alianzas que implicaron al Wafd y al Tagammu.

Por su parte, el estudio de Abdel Nasser (1997) sobre las elecciones en la provincia de El Cairo, tras destacar la escasa participación, que el autor estimaba entre un 5 y un 10% (frente al 13% oficial), mostraba que los candidatos de todos los partidos eran elegidos de manera que a los electores les parecieran adecuados para defender sus intereses económicos, y que sus campañas se orientaban a poner de manifiesto esa adecuación. Cuando en los distritos predominaban los funcionarios, uno de los candidato del PND era un alto funcionario; cuando abundaban los obreros, uno era un gran sindicalista; cuando los comerciantes eran mayoritarios, un gran comerciante; cuando dominaba la industria del mueble, un obrero (del mueble) y un importador-exportador; y así sucesivamente. Según señalaba el autor, “parece como si la buena gestión por el Estado de la redistribución de recursos entre los sectores [socioeconómicos] en competición, clases sociales y zonas geográficas autorizara a aquel a ejercer un casi monopolio de la redistribución del poder político” (ibid. pág. 220).

Finalmente, Yihad Auda destacaba la gran novedad de las elecciones de 1995:

“En cuanto a la medida en que las elecciones reflejan las transformaciones sociales, políticas y económicas que ha conocido Egipto en los últimos cinco años (...) lo más importante que han mostrado los estudios, a través del análisis de los gastos electorales, es que ningún candidato puede presentarse a las elecciones sin incurrir en grandes gastos, ya los afronte él mismo o lo hagan otros. Esto indica (...) la dependencia de la política de la potencia social, que se traduce a su vez en capacidad de gasto. En las elecciones gana quien tiene una gran potencia social en su distrito, que le provee de capitales para gastar (...) Así, si las elecciones solo permiten representar a los poderosos social o económicamente, cuál no será la situación electoral de los débiles social o económicamente -los coptos, las mujeres y los pobres (...) El sistema electoral está diseñado de tal manera que no permite la representación de los sectores más débiles” (مصطفى 1997a: 281-282).

6.6.4.3 Las actitudes de los partidos de la oposición y las recompensas del poder político

Respecto a los partidos políticos de oposición, el régimen político no dio cuartel al Partido del Trabajo, que no obtuvo ningún diputado en las elecciones, aunque el único candidato islamista elegido como independiente se afiliara tras aquellas al partido para

contar con su cobertura legal. Su decisión de presentarse a las elecciones con un importante número de candidatos desdeñó los factores que jugaban en su contra: la oposición radical del poder a su éxito, sus escasos recursos económicos y la relativa falta de apoyo de los Hermanos Musulmanes, concentrados en promover a sus propios candidatos.

Por el Partido Naserista únicamente resultó elegido el presidente del partido. Las divisiones en el seno de la corriente naserista, la competencia del Tagammu, la escasez de recursos económicos y la falta del beneplácito del régimen a que el partido obtuviera mejores resultados, sin duda influyeron decisivamente en estos.

En lo que respecta al Tagammu, a la pregunta de Roussillon mencionada más arriba acerca de por qué se presentaba a las elecciones cuando estas se celebraban en ausencia de garantías democráticas, no cabe más que responder que su objetivo era conseguir escaños casi a cualquier precio, sin importarle demasiado los procedimientos democráticos, el *fair play* electoral o su propia coherencia.

Según señala Basel Ramsès (1997: 187-195) ante las elecciones de 1995 los órganos directivos del Tagammu establecieron un control más estricto de lo que lo habían hecho en elecciones anteriores sobre la selección de sus candidatos. El reglamento interno del partido establecía que los comités locales eran quienes debían elegir a sus candidatos en la circunscripción correspondiente, si bien dichas candidaturas debían ser luego sometidas a la aprobación de los órganos directivos a nivel provincial y estatal. En 1995 estos órganos intervinieron de manera mucho más significativa, en particular en los casos de Chihab Saad y de Sayyed Abdel Al. El primero era el candidato elegido por el comité local de Madinat Naser para “otros grupos”, pero su candidatura fue rechazada por la secretaría provincial. Según el secretario de la comisión local de Madinat Naser, el rechazo se debió a un acuerdo con el PND para que el Tagammu dejara vía libre al candidato de aquel, el ministro de Juventud y de Deportes, Abdel Moneim Imara. Además, Chihab pertenecía a la corriente marxista radical del Tagammu, y la secretaría del partido justificó la desestimación de su candidatura arguyendo que el candidato no había sabido -según Ramsès- “equilibrar sus ataques contra el Gobierno y contra la corriente islamista”. En cuanto a Abdel Al, su candidatura fue rechazada porque debía presentarse contra Fuad Serag Eddín, el presidente del Wafd en Qasr al-Aini (El Cairo), y el Tagammu decidió retirarla con la esperanza de que a cambio el Wafd dejara la circunscripción de Kafr al-Chukr a Jaled Mohai Eddín, presidente del Tagammu.

El mismo autor señala que el partido evitó durante su campaña electoral presentarse como “socialista” -autodenominación que aparecía en todos sus documentos internos-, aunque la mayor parte de sus candidatos se presentaran como defensores de los derechos de los trabajadores y algunos de ellos se manifestaran contrarios a la dirección del

sindicato oficial de trabajadores, a las privatizaciones y a las políticas de ajuste estructural. También multiplicaron las invocaciones religiosas dirigidas tanto a su público musulmán como cristiano (ibid. págs. 189-190).

Aunque algunos de los candidatos elegidos del Tagammu, como Al-Badri Fergali (sindicalista), Abdel Aziz Chaabán (abogado) y el propio Jaled Mohai Eddín, contaban con un amplio apoyo popular derivado de su trayectoria (los tres habían sido ya diputados en 1990-1995), el hecho de que el partido obtuviera por sus propios medios 5 diputados mientras que la corriente islamista obtenía 1 parece indicar, si se tiene en consideración los resultados de las elecciones celebradas hasta entonces y la muy superior popularidad de las corrientes islamistas, que sus escaños fueron, de una u otra manera, una concesión del poder. La obtención de un diputado más por designación presidencial, en la persona de Rifaat al-Said, su secretario general y mayor defensor de la colaboración con el Gobierno, no hace más que reforzar esta interpretación.

En cuanto al Wafd, ya hemos mencionado que la elección de Fuad Serag Eddín fue en parte resultado de un pacto con el PND, así como que el partido no hacía ascos a otras alianzas. Aun así, obtuvo el 3% de los escaños, cuando en 1987 había obtenido el 10,6%, y en 1984 el 15,1%. Estos resultados, además de deberse a los elementos a los que todos los partidos de la oposición debían enfrentarse, se explican también, con toda probabilidad, por al propio declive del partido. En su campaña los candidatos del Wafd siguieron insistiendo en lo glorioso de su pasado entre los años 20 y 30 del siglo XX, y atacando el cambio de régimen político tras 1952. Muchos de sus principales dirigentes, como el octogenario Fuad Serag Eddín y su hermano pequeño Yasín, presidente del grupo parlamentario del partido a partir de 1995, seguían dando a este, como señala Kienle (1997: 136-139) una imagen de partido prerrevolucionario, coto privado de pachás del antiguo régimen, imagen que no solo disgustaba a los numerosos partidarios del igualitarismo introducido por el naserismo, sino también a los partidarios de un capitalismo moderno. Así, pese a que el Wafd era un firme defensor del liberalismo económico, y en este sentido no inquietaba al régimen político, representaba tan solo los intereses de algunos sectores de la burguesía que no se sentían bien tratados por aquel, y tenían que enfrentarse a los demás en las elecciones, mientras que su liberalismo político era constantemente puesto en entredicho por el propio funcionamiento jerárquico del partido.

7. LAS REFORMAS ECONÓMICAS: FINES Y EFECTOS INMEDIATOS

Al realizar el balance las reformas económicas emprendidas por los Gobiernos egipcios a lo largo de los años 90, hay que distinguir dos periodos netamente diferenciados.

El primero llega hasta el curso 1994-1995, y el segundo a 1999-2000. El primero concluye aproximadamente con las elecciones legislativas de 1995 y el segundo con las de 2000. No son, sin embargo, las elecciones, las que determinan la política económica; más bien al contrario: la situación y la política económica determinan en gran medida los resultados de las elecciones o, mejor, la actitud del Gobierno ante ellas y ante el sistema político. No obstante, otros factores influyen de manera decisiva en esta actitud, e incluso en la política económica, en diversa medida según los casos. De hecho, en los dos periodos mencionados se dio una situación opuesta en cuanto a la influencia de la esfera política sobre la economía, y viceversa.

Entre 1990 y 1994, aunque el plan previsto por el Gobierno era liberalizar la economía, forzado por su crisis fiscal, la liberalización fue llevada cabo muy lentamente por tres razones: una, la rapidísima mejora en la situación financiera gracias a las circunstancias internacionales más que al propio plan de reformas; dos, la amenaza del islamismo armado radical y el ascenso del islamismo en general, que el Gobierno no quería alimentar echando demasiado fuego a una situación social y económica ya tensa, más aún cuando su situación financiera le permitía evitarlo; tres, el propio régimen, su núcleo duro, no tenía una vocación necesariamente liberal, sino que respondía según las circunstancias de diferente manera a su principal obsesión: mantener los ingresos suficientes del Estado que le permitieran preservar el control político y la estabilidad que necesitaba para ello. Por decirlo de manera concluyente, si bien el inicio de las reformas económicas en 1990-1991 respondían a una motivación económica, poco después aquellas se vieron condicionadas por la situación política, de modo que la evolución de la economía en este quinquenio ha de ser vista en gran medida a la luz de aquella. Este es el motivo por el que la introducimos en este momento de nuestro trabajo.

Por el contrario, la evolución de la situación política entre 1995 y 2000 ha de ser vista en gran medida a la luz de la evolución económica, y esa es la razón de que en nuestro estudio la abordemos inmediatamente después del análisis económico.

Desde finales de 1994 la situación financiera de Egipto comenzó a cambiar. El FMI se negaba a seguir financiando el programa de ajuste estructural si el Gobierno egipcio no avanzaba en la liberalización, y en particular en las privatizaciones. Por otro lado, los ingresos rentistas del país habían comenzado a reducirse. Así, a partir de 1995 la liberalización, y en particular las privatizaciones, comenzaron a avanzar a un ritmo mucho mayor. Es en este contexto también, y no solo en el de la amenaza del islamismo armado, que ya había comenzado a menguar, en el que hay que leer el estrecho control del sistema político egipcio entre 1994 y 1995, y de manera significativa sobre las elecciones de ese último año, de lo que nos hemos ocupado en el capítulo anterior.

El año de 1994 había concluido con la protesta laboral cuya represión por parte de

las fuerzas de seguridad fue la más mortífera de todo el mandato de Mubarak. Por su parte, las actividades del islamismo armado continuaban su declive, que les llevaría a firmar la paz con el Estado en 1998. Con los partidos de la oposición legal totalmente desacreditados y los sindicatos profesionales controlados, las organizaciones no gubernamentales, potenciadas años antes, comenzaron a expandirse, con una peculiaridad: aunque se mantenía el carácter de defensa de los derechos políticos y humanos de las de “primera generación”, ahora proliferaban las de defensa de los derechos laborales y sociales. En este contexto, partir de 1996 el Gobierno endureció la política de firme control político para llevar adelante la liberalización.

El régimen de Mubarak respondió a la expansión de las ONG, o de lo que algunos llaman “la sociedad civil”, castigando a algunos de sus miembros cuando sobrepasaban las “líneas rojas”, de la misma manera que hacía con los periodistas o con los políticos desde 1994. No obstante, con carácter general permitió tal expansión. Además de que esta actitud estaba en línea con su “política de sistema político” (participación mediante la expresión sin posibilidades de auténtico cambio político), también lo estaba con la liberalización económica. Un nuevo paso dado en esa política fue la autorización de los primeros medios de prensa privados egipcios, autorización controlada y selectiva que debía permitir expresarse a ciertos sectores de la burguesía, pero que acabaría redundando en un mayor incremento de la libertad expresión, a pesar de que el régimen político se dirigiera contra algunos diarios demasiado contestatarios.

Finalmente, a pesar de la reducción de los ingresos rentistas, entre 1995 y 1999 Egipto conoció un importante crecimiento económico. Las privatizaciones, las inversiones privadas y las nuevas medidas impositivas suplieron en gran medida el impacto de la disminución de las rentas externas, a pesar que en 1999 el Estado seguía conservando la titularidad de cerca de la mitad de las empresas públicas con las que contaba en 1991. El crecimiento del PIB y probablemente la cuidadosa labor del presidente del Gobierno durante la mayor parte del periodo, Kamal al-Ganzuri (1996-1999), permitieron contener el incremento del paro y la inflación y reducir la pobreza en términos absolutos, aunque no las desigualdades, que se incrementaron, en particular en el medio de rural, donde la contrarreforma agraria desposeyó de tierras a un gran número de campesinos.

No obstante, a partir de 1998 el progresivo declive de los ingresos del Estado y la reducción del gasto público comenzaron a manifestarse en toda su crudeza en un contexto de crisis financiera internacional. Con el nuevo siglo, tras el cese por oscuras razones de Al-Ganzuri en octubre de 1999, Egipto entraría en un periodo económico, social y político totalmente diferente.

7.1 LA LIBERALIZACIÓN CONTENIDA (1991-1995)

7.1.1 La mejora del déficit fiscal. Las rentas como principio y fin

Las reformas económicas emprendidas por el Gobierno egipcio desde 1990 hasta 1994 cumplieron sus objetivos parciales o sus primeros objetivos, aunque no aquellos que debían servir a sus fines a medio y largo plazo. El foco del programa pactado con el FMI en 1991 se centraba para los primeros años (hasta 1994) en las políticas de estabilización, y en particular en la reducción del déficit fiscal. En este sentido, los resultados fueron excepcionales, pues el déficit bajó del 6% en 1990-1991 a 0,6% en 1993-1994, y fueron encomiados por las agencias financieras internacionales. Gracias al descenso del déficit, las reservas en divisas del Banco Central se multiplicaron por 7 en dos años, pasando de 7.000 millones de dólares en 1991-1992 a 17.000 millones en 1993-1994. Además, el Gobierno había logrado controlar la inflación -que en el mismo periodo citado pasó del 21% al 9%-, y la bolsa, desaparecida desde las nacionalizaciones de los 60, daba muestras de cierta vitalidad (Noshi 1995: 150; Soliman 2011: 45). No obstante, mientras el Gobierno se vanagloriaba de sus éxitos, numerosos economistas y el propio FMI los matizaban.

Con la ventaja que da el paso del tiempo, Soliman (2011: 46-47) constató que la reducción del déficit fiscal se debió más a las circunstancias que coincidieron con la implementación de las medidas de estabilización que a estas en sí, pues, a fin de cuentas, las únicas medidas fiscales efectivas adoptadas para incrementar los ingresos fueron la introducción parcial del impuesto del IVA y la devaluación de la libra egipcia. Esta última, junto a la reducción de la deuda extranjera gracias a la participación en la coalición internacional contra Irak, la afluencia de los créditos de las instituciones financieras y el buen comportamiento de los recursos rentistas externos hicieron el resto.

No obstante, los resultados de las reformas eran ya cuestionables a mediados de los 90. “Éxito, sí, pero rentista”, afirmó Fathi Ibrahim (1995: 15-17), quien señaló que dos tercios de los ingresos corrientes del Estado provenían en 1993 de rentas externas (26,9% de las transferencias de los residentes en el extranjero, 10,7% de ayudas públicas, 10,4% del Canal de Suez y 10% de las exportaciones petroleras), rentas que habrían permitido colocar con comodidad los Bonos del Tesoro del Estado, estabilizar la libra y limitar la evasión de capitales, propiciando “la apariencia de un éxito del programa de manera menos dolorosa que las reformas estructurales profundas”.

Pese a la liberalización de los mercados de capitales y de cambios y de las importaciones, y la modificación parcial del sistema impositivo, los críticos de la política económica señalaban que el éxito estaba confinado en el equilibrio fiscal, pero que no se había notado en otras cosas como el incremento de la producción o del PIB per cápita.

Según Ibrahim (1995: 17), el Gobierno egipcio, incitado por el incremento de sus rentas, seguía

“dos estrategias contradictorias: ajuste estructural y preservación de la renta, utilizando la primera para perpetuar la segunda (...). La táctica egipcia consiste en conformarse con el mínimo y lo más tarde posible, evitando la ruptura [con el FMI] (...) Paradójicamente, las relaciones de Egipto con el FMI no cambian la orientación de su política económica, lo que va en contra del ajuste estructural buscado. Por ello, las reformas realizadas no han modificado fundamentalmente la naturaleza de la economía, en contra de lo que esperaba el Fondo”.

El Gobierno, mientras se embolsaba las ayudas financieras internacionales, retrasaba medidas clave para la ejecución del programa pactado, como la privatización del grueso del sector público, la bajada de los tipos de interés para favorecer las exportaciones y la reducción del gasto público. Por estas razones, en junio y diciembre de 1994 el FMI rechazó dar su aval a la cancelación de la tercera y última parte de la deuda prevista para julio de ese año, con el ánimo de forzar al Gobierno a adoptar nuevas medidas (Fathi 1995: 16).

7.1.2 Incremento del gasto público: prioridad a los “gastos de control político”

Confrontado desde finales de los 80 y principios de los 90 al aumento de la contestación política y social, y en particular al desafío del islamismo radical armado, el Gobierno egipcio utilizó los considerables recursos financieros obtenidos a partir de 1991 para incrementar el gasto público (tanto en términos absolutos como en relación a lo acordado con el FMI y en relación al PIB), en lugar de acometer reformas estructurales, temeroso de la extensión de la contestación a más amplios sectores sociales. Mientras lo acordado con el FMI era una progresiva reducción de los 51.400 millones de libras egipcias destinados a gasto público en 1991-1992 hasta 46.150 millones en 1993-1994, el gasto público efectivo ascendió hasta los 71.700 millones en el último año citado; lo cual significa que en este periodo pasó de representar el 50% del PIB a suponer el 53% (Soliman 2011: 46-47).

La observación de la distribución del gasto público por ministerios nos da una idea aproximada de las prioridades del régimen egipcio. Tras estudiar la evolución de dicha distribución, Soliman (2011: 58-72) afirma que, aunque no se produjeron cambios “dramáticos” en los años 90 respecto a los años anteriores de mandato de Mubarak, si se observan algunas modificaciones que respondían a la situación política y económica,

destacando en particular el incremento de las partes dedicadas a los ministerios de Interior, Cultura, *Awqaf* y Educación, y el descenso de la dedicada al de Defensa y al de Aprovisionamiento (encargado principalmente de gestionar la adquisición y distribución de productos subvencionados). De esta manera, los incrementos relativos en las asignaciones presupuestarias se producían en la mayor parte de lo que Soliman llama “gastos en control político”.

Dicha categoría procede de la diferenciación establecida por el autor entre los “gastos en control político” y los “gastos en desarrollo económico”, categorización operativa para el análisis a pesar de que, como matiza, muy pocos gastos entran exclusivamente dentro de una de las dos categorías. Hecha esta precisión, dentro de la primera cabe hacer una subdivisión entre los gastos en el aparato de seguridad, los gastos en control ideológico (medios de comunicación, cultura, asuntos religiosos) y los gastos sociales para promover la legitimidad y la estabilidad política (como las subvenciones a los productos de primera necesidad y otras medidas sociales). En cuanto a la segunda categoría, la de los “gastos en desarrollo económico”, englobaría los gastos en educación, infraestructuras, investigación, promoción de las exportaciones, etc., si bien hay que destacar, como hace el autor, que la educación en particular desempeña una función dual que entra en las dos grandes categorías. Aunque el autor no lo señala expresamente, pensamos que los incrementos salariales que dependen del Estado desempeñan también esa función dual, y el propio autor parece darlo por hecho. Es este último un aspecto que nos interesa especialmente.

Pues bien, comenzando por el apartado de los “gastos para promover la legitimidad y la estabilidad política”, una parte considerable del incremento del gasto público correspondió al aumento de los salarios de los trabajadores del Estado, que entre 1990-1991 y 1996-1997 pasaron de representar el 19% del total del gasto público a representar el 20,6%, un aumento similar al de los años anteriores de mandato de Mubarak. Por otro lado, el porcentaje del gasto en “seguros sociales y bienestar” -pensiones y otros- pasó del 11% en 1981-1982 al 19% del total del gasto público por sectores ministeriales (Soliman 2011: 60, 67). Por el contrario, el Gobierno egipcio continuó rebajando la parte del gasto público dedicada a los subsidios a productos de primera necesidad. Así, las subvenciones a los alimentos, que ya habían pasado de representar el 18,4% del total del gasto público en 1984-1985 al 7,4% en 1990-1991, descendió hasta el 6,5% en 1996-1997 (Adams 2000). Como ya hemos señalado anteriormente, a pesar de que no hay que olvidar que la reducción de los subsidios afectaba de manera notable a los ingresos reales de todas las clases bajas y medias-bajas (y por tanto a la mayor parte de los asalariados públicos), Soliman estima que dicha reducción combinada con el incremento de los salarios nominales públicos era resultado de una política deliberada del régimen de Mubarak: por

un lado, prefería reducir el “coste” para el Estado de los asalariados mediante una discreta y progresiva reducción de los subsidios, en lugar de la más notoria de los salarios; por otra, prefería destinar recursos a los trabajadores públicos “de ingresos limitados” antes que a “los pobres”, menos peligrosos políticamente.

En cuanto a los gastos en el aparato de seguridad, la suerte de las asignaciones presupuestarias del Ministerio del Interior en la primera mitad de los 90 fue muy diferente a la del Ministerio de Aprovisionamiento. El enfrentamiento armado contra el islamismo radical fue sin duda una de las razones del incremento de su presupuesto, pero este no puede separarse de la disminución del papel del “Estado protector” y de la deriva represiva generalizada seguida por el régimen egipcio en esos años. Los gastos en seguridad pasaron de representar aproximadamente el 3,5% del PIB en 1991 al 4% en 1994 y 1995, para acercarse al 5% en 1997 (Soliman 2011: 63-65), sin olvidar que los cerca de 450.000 hombres que componían el cuerpo de la Seguridad Central eran reclutas adscritos al Ministerio de Defensa durante tres años, que no cobraban más que un pequeño estipendio por su labor. Llegados a este punto, cabe señalar que a mediados de los 80 fue modificado el lema de la policía, que pasó de ser “La policía al servicio del pueblo” a ser “La policía y el pueblo: al servicio de la ley”. Esta modificación simbólica parecía, tras su apariencia inocua, desplazar el objeto último de la legitimidad del pueblo a una entelequia abstracta cuya determinación (o los agentes de su determinación) resultaba bastante incierta.

Pero quizás lo más llamativo de las modificaciones presupuestarias de la primera mitad de los 90 es el incremento de los gastos en control ideológico, que Soliman (2011: 55-56; 65-67) atribuye también a los efectos de la lucha contra el islamismo.

Como ya hemos apuntado, en dicho periodo el Ministerio de Asuntos Religiosos “nacionalizó” o “estatalizó” numerosas mezquitas privadas para expulsar de ellas a los militantes islamistas, y para ello tuvo que contratar a miles de licenciados de Al-Azhar, cuya lealtad pretendía también ganarse mediante su acceso al estatuto funcional. Aunque los gastos de dicho ministerio aparecían en las estadísticas del Estado por sectores ministeriales confundidos con los de “salud” y “trabajo” (excluyendo este último los seguros sociales), dicho capítulo pasó de representar el 1,4% en 1981-1982 al 2,13% en 1996-1997.

El Ministerio de Cultura fue otro de los que conocieron incrementos más sustantivos de sus presupuestos, que se incrementaron en un 100%, pasando del 0,6% en 1981-1982 al 1,2% en 1996-1997 respecto al total de gastos distribuidos por sectores ministeriales. Lo esencial de ese gasto se dedicó a crear revistas, editoriales -como La Biblioteca de la Familia, apadrinada por Suzanne Mubarak, la esposa del presidente-, museos, librerías y teatros con los que potenciar la idea -en palabras de Soliman- de la existencia de un “estado civil” contrapuesto al “estado teocrático”, y en los que emplear o

con los que ganarse a parte de la *intelligentsia*, que veía con inquietud el ascenso del islamismo político. Ya hemos apuntado en el capítulo IV 3.4 los esfuerzos del Gobierno por cooptar al mayor número posible de intelectuales, tarea encomendada a Faruq Hosni quien, según Soliman (2011: 56), se vanagloriaría públicamente de “haber llevado a la *intelligentsia* al redil del Ministerio de Cultura”, lo que le valdría mantenerse al frente del Ministerio nada menos que desde 1987 hasta 2011. Por otro lado, gran parte de las actuaciones del Gobierno egipcio en el terreno cultural estaban destinadas al “relumbrón”, y no a seguir una política cultural consciente de las auténticas necesidades del país. Un ejemplo revelador -por no hablar de la Biblioteca de Alejandría, acabada en 2002- es la Biblioteca Suzanne Mubarak, creada a mediados de los 90 en un lujoso edificio de una de las calles más distinguidas del barrio cairota de Zamalek, enclave de la alta burguesía egipcia desde mediados del siglo XIX y de numerosas embajadas extranjeras. En sus brillantes estanterías se acumulaban no menos brillantes colecciones de libros encuadernados ex profeso, muchas de ellas de dudoso interés o muy convencionales. Mientras tanto, la vieja Dar al-Kutub, la Biblioteca Nacional, continuaba deteriorándose tanto física como técnicamente, dando la impresión a cualquier usuario que se decidía a acudir de que se hallaba en un depósito semiabandonado de viejas piezas de repuesto.

Finalmente, queda por señalar el equívoco incremento de los gastos en educación. Entre 1981-1982 y 1996-1997, el porcentaje del gasto en aquella, junto con las partidas de “investigación” y “juventud”, pasó de representar el 3,3% al 6% del total de los gastos por sectores ministeriales. Este incremento se debió por un lado a la evidencia del deterioro de las instalaciones educativas, puesto de manifiesto de manera particular por el gran número de escuelas que se derrumbaron durante el terremoto de octubre de 1992, y por otro a las llamadas de atención de economistas y empresarios en el sentido de que, si el Gobierno quería -como pretendía- ir adelante con la liberalización de la economía y emular a los “tigres asiáticos”, debía tener una mano de obra mucho más cualificada.

No obstante, el grueso de los gastos en educación se dirigió a crear o renovar infraestructuras físicas, financiadas por el Gobierno o por donantes, captados -de nuevo- por Suzanne Mubarak. Por el contrario, los sueldos de los profesores siguieron siendo destacadamente bajos, muy inferiores a los de otros funcionarios¹⁰², lo que les llevaba a complementar o incluso doblar su sueldo impartiendo gran número de clases particulares. Era y es un círculo vicioso: el “lucrativo negocio” de las clases particulares acababa incidiendo en la calidad de la docencia pública y las convertía en inevitables, hasta el punto

¹⁰² Para hacerse una idea a partir de nuestros conocimientos personales, en 2005, el sueldo de un profesor de primaria recién contratado era de unas 500 LE al mes, (aproximadamente 100\$), una cantidad totalmente insuficiente para mantener un hogar, mientras que en 1985 un funcionario medio del Ministerio de Economía, con diez años de antigüedad, ganaba 600 LE.

de que las clases particulares eran frecuentemente destacadas por las familias como una de sus principales fuentes de gasto y por los medios de comunicación como uno de los principales problemas, no ya de la educación, sino nacionales. A mediados de la década, el ministro de Educación, Husein Kamel Bahá Eddín, lanzó una publicitada campaña contra “la institución de las clases particulares”, que estaría condenada al fracaso por falta de fondos económicos destinados a elevar los salarios de los profesores.

A pesar su orientación general hacia la liberalización, el régimen egipcio se negó, sin embargo, a atender las reclamaciones de las fuerzas liberales en economía (como ya hemos mencionado a propósito del programa electoral del Wafd en 1995), que solicitaban que la educación universal gratuita se redujera solo a la educación primaria, y que se privatizaran el resto de los servicios educativos implementando una política de becas a la excelencia. Sin duda alguna, el régimen quería evitar los costes sociales y políticos de adoptar medidas de ese tipo, pero su incapacidad o falta de voluntad de aportar más recursos y mejor orientados a la educación pública hizo que esta continuara deteriorándose. Según Soliman (2011: 69-70) el régimen egipcio prefería invertir ocasionalmente en infraestructuras que incrementar los salarios de los profesores (cerca de un millón de docentes en 2005, el 16% de los trabajadores del Estado) porque en el gasto en inversiones, a diferencia de los salarios, se podía dar marcha atrás a voluntad.

7.1.3 Privatizaciones y liberalizaciones postergadas por miedo a la contestación social

Desde el comienzo del programa de ajuste estructural, el Gobierno egipcio prometió a los trabajadores que las empresas del sector público no serían vendidas, más allá de algunas de pequeño tamaño o deficitarias. Sobre el papel, la Ley 203 de 1991 pretendía tan solo “reorganizar” las empresas del Estado y mejorar su gestión y sus resultados, o, en palabras del ministro del Sector Público de 1994, Mahmud Salem, “permitirles contribuir al crecimiento de la producción, de la plusvalía y de los salarios”. La Ley distribuía las 315 empresas del Estado en 27 *holdings* -que en 1993 serían reducidos a 17- , y autorizaba a aquellas a utilizar los mismos sistemas de gestión de las empresas privadas, dando a sus dirigentes, “ligados al Estado por una relación contractual y no jerárquica -según el propio ministro- las mismas libertades y responsabilidades de las que disfrutaban los dirigentes del sector privado”. La posibilidad de las privatizaciones venía en la letra pequeña de la ley sin ser mencionada expresamente. De nuevo en palabras del ministro del sector: “[La ley] pretende restaurar la capacidad de autofinanciamiento de las empresas públicas que, tras ver sus presupuestos separados de los del Estado, están autorizadas a ceder una parte de sus activos” (Noshi 1995: 164).

En contradicción con las promesas a los trabajadores, la propia Oficina Técnica del

Sector de los Negocios, creada por la Ley 203 de 1991 y encargada de supervisar la reestructuración de aquel, publicó nada más ser constituida una lista de 85 grandes empresas de los sectores turístico, comercial e industrial que serían privatizadas hasta 1994. No obstante, esta lista -o más bien los plazos que establecía- estaba destinada, por lo que parece, al consumo del FMI y de los acreedores de Egipto, pues en dichos años tan solo fueron privatizadas numerosas empresas de los dos primeros sectores (hoteles e intermediarios de comercio), y algunas de menor importancia del industrial (como las plantas de Coca-Cola y Pepsi-Cola). Cuando a finales de 1994 el FMI denegó a Egipto la cancelación de la tercera y última parte de su deuda, el Gobierno comenzó a reactivar sus planes de privatización con el fin de obtener aquella y nuevos préstamos.

En el terreno agrícola, la política de liberalización fue diseñada, en palabras del ministro del sector, Mahmud al-Sayyed Mansur, para que fuera “progresiva, a fin de evitar las reacciones sociales violentas que podría provocar el paso de un sistema planificado al de mercado en el terreno de los precios, comercial y del crédito” (Noshi 1995: 175). La reforma continuaba con la retirada de la obligación de entregar una parte de las cosechas al Estado y con la liberalización de su comercialización, iniciada en 1987, que en 1991 se extendió al arroz y que en 1996 debía alcanzar al algodón, el principal producto agrícola de exportación de Egipto. La caña de azúcar, considerada un producto estratégico -para proveer el alto consumo de la población- quedaría bajo el control del Estado. Como contrapartida a la compra estatal de alimentos a precios internacionales, el Gobierno retiraría progresivamente las subvenciones a los abonos, las semillas, los pesticidas y los forrajes, y situaría los intereses de los créditos agrícolas al nivel del resto de los créditos. El aspecto de la reforma que era susceptible de provocar mayores “reacciones sociales violentas” fue concebido como una auténtica bomba de relojería en dos fases: la Ley 96 de 1992 aumentaba durante un periodo transitorio de 5 años el precio de los arrendamientos acordados antes de esa fecha, estableciéndolo como el resultado de multiplicar 22 por el coste del impuesto de bienes inmuebles agrícolas, cuando antes se multiplicaba por 7. No obstante, la auténtica bomba explotaría en 1997, cuando el precio de los arrendamientos quedara totalmente sometido a la ley de la oferta y la demanda, y cuando los arrendadores podrían rescindir los contratos con quienes no accedieran a pagar los precios que aquellos exigieran.

7.1.4 Incremento del paro y la pobreza. Avisos mutuos entre los obreros y el Gobierno

A pesar de las cautelas del Gobierno, las reales y las aparentes, la situación económica de la población se deterioró notablemente entre 1990 y 1995.

Según Ahmad Noshi, gobernador del Banco Central, el paro pasó del 8,6% en 1990

al 11,3% en 1993, afectando sobre todo a los jóvenes diplomados, entre los que pasó del 24% al 35% (1995: 151-152). No obstante, como ya hemos señalado en el capítulo III 6.2, las estimaciones de paro del Gobierno eran en general inferiores en al menos un 50% a las de las instituciones internacionales o los economistas particulares.

Pero los datos más reveladores son los relativos la evolución de los ingresos y la pobreza. Según Clément (2011: 617), tras haber descendido a un ritmo del 3% anual entre 1982 y 1990, los ingresos reales per cápita bajaron a un ritmo del 6% anual entre 1990 y 1995, mientras que el índice de la pobreza, que en su “umbral alto”¹⁰³ se situaba en 1990 en las ciudades entre el 35% y el 40% y alcanzaba en 1995 entre el 43%-45%; mientras que en las zonas rurales pasaba del 35%-42% al 50%. Por su parte, el índice GINI utilizado para medir la desigualdad pasaba en el mismo periodo del 0,32 al 0,35.

Las protestas laborales en aumento a partir de 1994 son reflejo de este deterioro. En su contribución al Informe Estratégico Árabe del año 1994 (IEA 1994: 428-432), Mohammed Abul Fadal, tras señalar el aumento de la preocupación y la tensión entre los trabajadores industriales a lo largo de ese año, traducido en un incremento de las protestas laborales, apuntaba que “quizás” dicho incremento se debía al miedo a las políticas de privatización emprendidas, miedo que consideraba “amplificado” por la manera de tratar el tema por parte de los medios de comunicación cuando. Argumentaba que, “a fin de cuentas”, tan solo se habían privatizado tres empresas en ese año, y ello tras exigir a los compradores el compromiso de no prescindir de ningún trabajador en el plazo de tres años. La síntesis analítica de Abul Fadal, habida cuenta de la información que él mismo proporciona, sorprendería si no procediera de una publicación oficial de este *think tank* del Gobierno egipcio.

En primer lugar, las protestas del año 1994 coincidieron con la intensificación de las afirmaciones del Gobierno egipcio en el sentido de que el ritmo de las privatizaciones se iba a incrementar. Por otro lado, dos de las protestas fueron protagonizadas por trabajadores afectados por las privatizaciones, y una de estas se produjo como rechazo a la expulsión de 730 empleados con contrato vigente hasta 1999 del Hotel Sheraton Heliópolis, adquirido pocos años antes por la empresa hotelera Marriot, que a pesar del apoyo oficial del Ministerio de Trabajo egipcio a los trabajadores no se echó atrás en su decisión. Finalmente, la mayor parte del resto de las 25 protestas consignadas estaban

¹⁰³ Hay que tener en cuenta que “umbral alto de la pobreza” es el definido por el número de personas cuyo consumo alimentario se sitúa justo en el mínimo necesario por cabeza para satisfacer sus necesidades alimentarias mínimas, y se calcula a partir de las necesidades calóricas mínimas de los individuos, de los salarios y de los precios de los alimentos. No se trata, por tanto, de personas que se sitúan bajo el umbral de la pobreza alimentaria, es decir, aquellas que no llegan a satisfacer sus necesidades alimenticias y que se encuentran por debajo del “umbral bajo de la pobreza”.

relacionadas de una u otra manera con la liberalización económica. Algunas de ellas tenía que ver con despidos a pequeña escala en empresas privadas, otra con la transformación de contratos fijos en temporales en una empresa pública, algunas con el traslado de trabajadores entre empresas o fábricas, otras con el mal trato o la mala gestión de los nuevos administradores de las empresas públicas, y una incluso con la decisión de vender maquinaria de la empresa, que los trabajadores impidieron por considerarla una garantía del pago de los salarios que aquella les adeudaba. No obstante, la mayor parte de las protestas seguían estado relacionadas con el no cumplimiento o retraso de los pagos que les correspondían por incentivos, que a veces alcanzaban cantidades muy considerables (como los 40 millones de LE adeudados a los trabajadores de las canteras y minas del Estado).

Los trabajadores consideraban, según Beinín y Hamalawy (2007), que incluso los movimientos citados de las direcciones de las empresas públicas, desligadas “jerárquicamente” del Estado, como decía el ministro del Sector Público, estaban orientados a facilitar su privatización posterior. Pero, al margen de eso, los trabajadores respondían al descenso de sus salarios reales, intentando contenerlo. En el sector textil, que con mucha diferencia acogía el mayor número de trabajadores públicos y era, por ello, el más temido por el Gobierno, el índice de los salarios reales había bajado de 100 a 61 entre 1986 y 1994, un descenso más fuerte que el de los trabajadores industriales en general¹⁰⁴.

Y fue en el sector textil y en una de sus principales empresas, concretamente en la Empresa de Hilado y Tejido de Kafr al-Dawwar, donde se produjo en septiembre y octubre de 1994 la protesta más significativa de todo el año, y una de las más destacadas de todo el mandato de Mubarak, al menos en sus consecuencias dramáticas. En Kafr al-Dawwar había cerca de 80.000 trabajadores industriales, la mayor parte textiles, con una gran tradición de activismo y solidaridad obrera. En opinión de activistas sindicales de la ciudad, mencionados sin nombrarlos por Posusney (1997: 235), precisamente por ello el Gobierno, que hasta entonces había continuado accediendo parcialmente a la mayoría de las demandas de los trabajadores, quiso hacer una suerte de test en la ciudad.

Las razones de la protesta fueron una serie de medidas económicas disciplinarias (fuertes reducciones de los incentivos y penalizaciones por llegar tarde o estar ausente, o por prolongación de las bajas de enfermedad), propuestas de traslados de trabajadores a fábricas distantes y privación de alojamientos facilitados por la empresa. El 28 y el 29 de septiembre, furiosos porque no se atendieran sus demandas, los trabajadores retuvieron en una de las fábricas a los directores de la empresa y a los representantes oficiales del

¹⁰⁴ Tamer Abdel-Kader: “State, Capital and Workers’ Protests in Egypt” (Tesis doctoral no publicada), Universidad Americana de El Cairo, 1998, pág. 79. Citado por Beinín & Hamalawy (2007).

sindicato que negociaban con ellos. El día 30, iniciaron un encierro en el que participaron 7.000 de los 22.000 trabajadores, y ello porque la policía impidió que el resto se uniera. El 2 de octubre, las fuerzas de seguridad que rodeaban la fábrica impidieron que las familias de los trabajadores les llevaran comida. Ante su resistencia, la situación degeneró en un enfrentamiento, en el que las familias utilizaron piedras y la policía gases lacrimógenos y armas de fuego. Los trabajadores encerrados se lanzando cohetes a la policía. El balance final fue de 6 muertos, entre ellos un niño de 9 años, 75 civiles hospitalizados y muchos más heridos, y 100 detenidos. Y la dirección de la empresa accedió parcialmente a las demandas de los trabajadores (Posusney 1997: 235-236).

Poco después, en el mismo mes, se inició una protesta similar en la Empresa de Hilado y Tejido de Mahala al-Kubra, en la que además se reclamó la liberación de los detenidos en Kafr al-Dawwar. No obstante, en esta ocasión el Gobierno egipcio fue más rápido, deteniendo a una docena de activistas sindicales -que habían marginado, como siempre, a los sindicalistas oficiales- y accediendo a algunas demandas de los trabajadores.

El Gobierno no osaría en muchos años intentar la privatización de las mayores empresas industriales, pero en el balance final los trabajadores también salieron perdiendo algo en cada nuevo enfrentamiento, pues no todos sus derechos eran restituidos.

7.2 EL LENTO PERO FIRME AVANCE DE LA LIBERALIZACIÓN (1995-1999)

7.2.1 Política financiera a costa de la sociedad

Desde mediados de los años 90 los ingresos rentistas y exógenos del Estado egipcio comenzaron a descender de manera abrupta, afectando a su situación fiscal. Los ingresos del Canal de Suez pasaron de representar casi el 4% del PIB en 1994 a menos del 2% en 1999. Por su parte, el porcentaje de la ayuda internacional sobre aquel descendió del 2,5% del PIB en 1995 a poco más del 1% en 1999. En cuanto al déficit fiscal pasó del 0,6% del PIB en 1994 al 1,5% en 1999 tras haber llegado casi al 3% en 1997 (Soliman 2011: 48-50).

Los efectos del descenso de los recursos rentistas sobre el déficit fueron contenidos en parte por un crecimiento del PIB relativamente bueno, aunque insuficiente para un país en desarrollo. En 1995 dicho crecimiento fue del 4,7%, y en 1998 llegaría al 6% (Djoulfelkit-Cottenet 2011: 421). No obstante, el Gobierno egipcio adoptó también otras medidas para incrementar sus ingresos fiscales y redujo sus gastos.

Comenzando por este último aspecto, la reducción de los gastos se redujo de manera notable en cuanto porcentaje del PIB aun manteniendo un considerable gasto

público en términos absolutos: pasó del del 50% en 1993 al 35% en 1999 (Soliman 2011: 47). Gracias al ligero crecimiento del PIB, y sobre todo el limitado incremento de la inflación, los efectos de tal reducción no fueron devastadores.

En cuanto a las medidas para aumentar los ingresos del Estado, una de ellas, aparentemente propiciada por el Tribunal Constitucional, fue la generalización de los impuestos a los trabajadores en el extranjero, un impuesto inusual en las economías liberales que gravaba a quienes en su mayor parte habían tenido que abandonar el país porque este no satisfacía sus necesidades económicas. La historia se remonta a 1989, cuando el Parlamento había promulgado la Ley 228, que imponía un impuesto único (sin progresividad) a los trabajadores públicos destacados en el extranjero. En 1993 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional dicha ley porque violaba los principios de igualdad y proporcionalidad, al no aplicarse a todos los trabajadores y no diferenciar según el nivel de ingresos. El Gobierno anunció que solo se devolverían los impuestos cobrados a quienes hubieran presentado una demanda al Tribunal Constitucional y la hubieran ganado, y poco después hizo aprobar la Ley 208 de 1994, extendió el impuesto a casi todos los trabajadores asalariados e introdujo un impuesto progresivo. Dicha ley fue considerada de nuevo inconstitucional por el Alto Tribunal en 1998 porque no incluía a los trabajadores con “contratos especiales” (altos cargos, puestos de designación presidencial, etc.), y en consecuencia violaba de nuevo el principio de igualdad. Y otra vez el Gobierno anunció primero que no devolvería lo cobrado más que a quienes hubieran presentado y ganado una demanda, y posteriormente el propio Hosni Mubarak, en nombre de la necesidad de preservar los ingresos del Estado, zanjó la cuestión emitiendo un decreto que establecía la no retroactividad de las decisiones del Tribunal en materia de impuestos¹⁰⁵.

Otro de los principales recursos del Gobierno egipcio para incrementar los ingresos del Estado fue el endeudamiento interno. Mientras reducía su deuda externa, que entre 1990-1991 y 1998-1999 pasó de unos 19.000 millones de dólares a poco más de 4.000, el Estado incrementaba la interna, que entre 1993-1994 y 1998-1999 casi se duplicó, pasando de poco más de 100.000 millones de LE a casi 200.000 millones (Soliman 2011: 104-105), es decir, según nuestros cálculos de cerca de 3.000 millones de dólares a cerca de 5.000 millones.

En realidad, desde principios de los años 80 el Estado ya recurría de manera sistemática al endeudamiento doméstico. Lo significativo, sin embargo, es que más de la mitad de los créditos concedidos al Estado procedían del estatal Banco Nacional de Inversiones, cuyos haberes estaban constituidos en sus dos terceras partes por el fondo de pensiones y seguros sociales. “¿Por qué -se preguntaba Soliman (2011: 106)- los fondos de

¹⁰⁵ *Al-Wafd*, 13 de julio de 1998. Citado por Soliman (2011: 114).

pensiones y seguros sociales habían de prestar dinero al Estado? La respuesta es simple: no tenían opción. Los fondos eran administrados por el Ministerio de Asuntos Sociales, que por ley debía depositar dichos fondos en el Banco Nacional de Inversiones”. Como señala el autor, en la práctica eran los trabajadores asalariados quienes estaban prestando dinero al Estado, pues los fondos provenían de deducciones de sus salarios y eran en esencia de su propiedad privada. Pero lo estaban haciendo sin que nadie les hubiera consultado. Las peores consecuencias directas para los trabajadores de estos préstamos forzados se habían producido, precisamente, antes de 1993-1994, y sobre todo en los años 80, pues el Estado pagaba por ellos intereses del 6%, inferiores a la inflación (que en los 80 era del orden del 20%) o, lo que es lo mismo, se apropiaba de una parte del dinero de los fondos. Por el contrario, a partir de 1993-1994 la inflación descendió considerablemente por debajo de los tipos de interés que pagaba el Estado, por lo que este dejó de tomar prestado del fondo de pensiones estatal. Pero en este había quedado el “agujero” de las pérdidas de los años anteriores. A partir de mediados de los 90, el Gobierno establecería asignaciones presupuestarias anuales para paliar dicho agujero, pero puesto que utilizaba el fondo también para pagar pensiones y subsidios a los pobres y los desempleados que no habían cotizado para él, las pensiones de los trabajadores que sí lo habían hecho comenzaron a decrecer y gran parte de ellos se convirtieron en pobres, lo que, en palabras de Soliman significaba que “las pensiones que el Gobierno pagaba a los pobres que nunca había contribuido al fondo de pensiones eran pagadas por otro segmento de los pobres” (Soliman 2011: 107).

7.2.2 Privatizaciones, claros y sombras

A diferencia del quinquenio anterior, en el de 1995-2000 el Gobierno egipcio dio un fuerte impulso a las privatizaciones. A finales de 1999, 131 de las 315 empresas que el Estado tenía en 1991 habían sido privatizadas, y 124 lo habían sido entre 1994 y 1999. La Ley 8 de 1997 aumentó las exenciones del impuesto de sociedades de las que disfrutarían las nuevas empresas privadas: 5 años como norma general, 10 para las que se implantaran en las nuevas zonas industriales, y 20 para que se instalaran en el Nuevo Valle del Nilo (suroeste de Egipto) y en otras zonas desérticas (Cottenet-Djoufelkit 2011: 162).

Paralelamente al incremento de las importaciones, la liberalización del comercio continuó. En 1998 se levantó la penúltima restricción a las importaciones, la de los productos textiles, y para poco después se preveía el levantamiento de la última, la de los vestidos confeccionados. El Gobierno retrasaba hasta el último momento las medidas que podían dañar a una de sus principales industrias, y la que contaba con un mayor número de trabajadores concentrados en grandes centros industriales. La industria manufacturera

nacional fue así quedando desprotegida. Su tasa de protección nominal pasó del 42% al 14% entre 1991 y 1998 (Cottenet-Djoufelkit 2011: 163).

Las consecuencias de las políticas del Gobierno en la industria fueron solo en parte las que había declarado desear. Entre 1991 y 1997 las inversiones extranjeras directas se multiplicaron por cuatro. En 1997 el sector privado era mayoritario en todas las actividades industriales excepto la petroquímica y los metales de base, dominados por el Estado; a su vez, las industrias textil y agroalimentaria, que producían más del 50% del valor añadido, tan solo empleaban al 30% de los trabajadores. Mientras que el empleo en el sector privado crecía a un ritmo del 7%, en el sector público decrecía al del 2%. No obstante, otro de los grandes objetivos no fue alcanzado: las exportaciones de manufacturas cayeron hasta el 2% del PIB, y ello a pesar de que estas seguían representando el 45% de las exportaciones de mercancías. En definitiva, la tasa de cobertura de las importaciones por las exportaciones manufactureras cayó hasta el 16%. Por sectores de producción, los datos más sobresalientes son los de la reducción del peso del sector textil en el valor añadido (hasta el 12%) y en el empleo -si bien 1997 aún ocupaba al 30% de los trabajadores de la industria- y el crecimiento de los sectores químico (32% del valor añadido y 14% del empleo) y de la industria mineral. En cuanto a los efectos de la liberalización sobre las pequeñas empresas privadas, no fueron, como pretendía el Gobierno, positivos. Su número descendió del 94% al 93% del total, pero, sobre todo, descendió su participación en el valor añadido (del 31% al 18%) y en el empleo (del 57% al 40%) (Cottenet-Djoufelkit 2011: 164-165).

Una evolución positiva, aunque insuficiente, de la actividad industrial fue su redistribución geográfica. Las empresas y los empleos localizados en el Gran Cairo y Alejandría descendieron, y aumentaron en las regiones del Delta y el Canal de Suez. Aunque en las otras regiones el incremento de la actividad industrial fue leve, en el año 2000 se localizaban en el Alto Egipto 20 zonas industriales de las 54 existentes en todo el país, que debían comenzar a rendir sus frutos. Como muchos otros proyectos de desarrollo económico lanzados en esta época, los citados se debían a la ingente labor de planificación del presidente del Gobierno, Kamal al-Ganzuri, por lo que con su cese en 1999 quedaron abandonados, como explicaremos al final de este capítulo IV 7.

Como balance general de la evolución de la liberalización de la industria hasta el año 2000 Cottenet-Djoufelkit (2011: 167) señala que el desempeño de las industrias manufactureras privadas había sido bastante bueno, si bien el Estado seguía interviniendo en la economía de manera que no siempre las que sobrevivían eran las empresas más eficaces, sino aquellas que tenían lazos privilegiados con el Estado.

7.2.3 La liberalización de los arrendamientos agrícolas: contrarreforma y desposesión

Como hemos señalado anteriormente, la Ley 96 de 1992 había establecido que tras una etapa transitoria de 5 años en la que el precio de los arrendamientos agrícolas fijado por la ley se multiplicaría por tres (de 7 a 22 veces el importe del impuesto sobre la tierra), dichos arrendamientos serían totalmente liberalizados a partir de octubre de 1997. Esto implicaba el fin de los contratos para toda la vida y heredables por los familiares de los arrendatarios, que había impuesto el régimen naserista. Los nuevos contratos podrían tener una duración máxima de cinco años, pero no se establecía una duración mínima.

Anteriormente calificamos la Ley 96 de 1992, promulgada con el argumento de que era necesario solucionar el declive de la producción agrícola, como una “bomba de relojería”. Como era de esperar, la mayor parte de los propietarios se negaron a firmar nuevos arrendamientos, pues la inmensa mayoría de los arrendatarios no podían pagar los precios que se les exigían (entre 1997 y 2000 la renta anual media exigida por *feddán* pasó de 500 LE a 2.000, y en algunas zonas del Delta llegaba a 3.000 ó 3.500 LE) (Ayeb 2012: 82). Tan solo en los nueve meses previos a la entrada en vigor de la ley se produjeron 33 protestas de los antiguos arrendatarios o enfrentamientos entre estos y los propietarios o la policía, que causaron 16 muertos, 150 heridos y 835 detenidos (IEA 1997: 297-298). Según el Centro la Tierra para los Derechos Humanos¹⁰⁶, creado en 1996, entre 1998 y 2000 el número de muertos se elevaría a 119, el de heridos a 846, y el de detenidos a 1.409. El balance de víctimas no sería mayor, según el Gobierno, gracias a las “comisiones de reconciliación” que las administraciones locales promoverían, y que resolverían amigablemente el 95% de los casos. Según numerosos campesinos, dichas comisiones eran más bien de “intimidación”

La reforma tendría efectos devastadores para 904.000 agricultores (cerca del 25% del total), según las cifras del Gobierno egipcio citadas por Habib Ayeb (Ayeb 2012: 82-86). La mayoría de estos quedaron desposeídos de tierra o con la sola tierra de su propiedad, insuficiente para satisfacer sus necesidades. De hecho, la categoría de “arrendatarios” desapareció a partir de 1997 de las cifras oficiales. Entre 1990 y 2000 el número de agricultores que explotaban menos de dos *feddanes*, los muy pobres, pasó de 1.044.897 a 1.401.295, para constituir el 67,5% de todas las explotaciones, mientras que el de quienes explotaban menos de un *feddán* se incrementó del 26,7% al 43,5% de todas las explotaciones. Estos agricultores tenían que compaginar la explotación de sus tierras con el trabajo como jornaleros o en otros empleos. Todos ellos se empobrecieron, y muchos de

¹⁰⁶ Citado, sin dar más referencias, por Ireton (2011: 484).

ellos tuvieron que vender las tierras que les quedaban e incluso las joyas del ajuar de las mujeres para sobrevivir durante algún tiempo. Muchos de los más perjudicados eran mujeres viudas que habían heredado los arrendamientos de sus maridos. Incluso el número de explotadores de entre 2 y 5 *feddanes* descendió de 834.153 a 757.059 a lo largo de la década, y aunque algunos de ellos pasaran al estrato superior, la mayoría lo hizo al inferior.

En el año 2000, 1.715 particulares y organismos, en su mayoría privados, explotaban el 36% de las tierras agrícolas de Egipto. Muchos de ellos se dedicaban a los agronegocios, en gran parte en tierras rehabilitadas para la agricultura por el Estado, y se centraban en la horticultura y la exportación; en 1996 fundaron una asociación para defender sus intereses (Horticultural Export Improvement Association). La mayor parte de ellos no tenían raíces agrícolas, sino que eran hombres de negocios o inversores con estrechos lazos con la alta burocracia del Estado, cuyos favores o protección buscaban a pesar de su supuesta ideología liberal. Algunos se dedicaban a la especulación, comprando las tierras al Estado a precios a veces muy ventajosos, y revendiéndolas poco después. El Estado concedería también tierras agrícolas en las zonas rehabilitadas, por lotes de 5 *feddanes*, a algunos miles de licenciados, que debían pagar su importe en los años siguientes. No obstante, esta experiencia fue un fracaso dadas las dificultades de acceder a la tecnología moderna, al crédito y a los mercados con explotaciones tan pequeñas (Irteton 2011: 486-489).

Según el Gobierno egipcio y las instituciones internacionales que lo apoyaban, la reforma agraria no era más que un medio para aumentar la producción agrícola y mejorar los ingresos y las condiciones de vida de la mayoría de los agricultores. En 2011, Irteton concluía el estudio que hemos citado opinando que “parece que estas medidas, de ser simples medios, han pasado a ser fines, en detrimento de la evaluación del nivel de realización de los objetivos declarados y de la adecuación de los medios utilizados para conseguirlos” (pág. 490).

7.2.4 El empleo: nuevos desequilibrios por sectores y avance del paro juvenil

Los datos estadísticos de los que disponemos, relativos a 1988 y 1998, cuando se hicieron las grandes estudios del Gobierno y de las instituciones financieras internacionales (Amer 2002, 2011; Assaad 2002; Clément 2011), no nos permiten hacernos una idea ajustada de la evolución global del desempleo en el periodo concreto 1995-1999, pero sí obtener una imagen global del conjunto de la década bastante reveladora.

Según Assaad (2002: 27, 63, 71), que utiliza un criterio restrictivo de medición del

desempleo¹⁰⁷, entre 1988 y 1998 este pasó de afectar al 5,4% de la población al 7,9%, siendo el incremento del paro entre los varones (del 4 al 7%) bastante más pronunciado que entre las mujeres (del 7,9% al 9,4%). La disminución del incremento del paro entre las mujeres -según los criterios del autor- no fue un hecho realmente positivo, pues se debió sobre todo al aumento del número de mujeres que trabajaban sin salario en la agricultura de subsistencia, que de ser el 60,4% del total en 1988 pasaron a ser el 66,7%. En el resto de sectores el empleo se incrementó más entre los hombres que entre las mujeres, si bien en el empleo estatal las diferencias fueron menores, gracias sobre todo al incremento del número de empleadas en la educación, que pasó de representar el 32,3% al 38,3% del empleo femenino.

Por el contrario, dentro del trabajo asalariado de las mujeres sí se produjo una evolución positiva, pues se redujo la diferencia de las remuneraciones entre hombres y mujeres, aunque en el sector privado estas continuaran siendo importantes: en 1998 los varones cobraban en este un 20% más que las mujeres, mientras que en la Administración y el sector público era prácticamente igualitaria.

En cuanto al empleo por “grandes sectores” (estatal/privado, agrícola/no agrícola, asalariado/no asalariado), resulta muy significativo que, a pesar de las políticas de ajuste estructural, el mayor incremento en términos absolutos y relativos se produjo en el empleo estatal -excluido el sector público, llamado “de los negocios”-, que pasó de dar trabajo al 19% de la población al 23,9%. De esta manera, a pesar de la disminución del empleo en el sector público del 8,6% al 5,2% del total, el empleo estatal global creció del 27,6% al 29,1%. Por otro lado, el del empleo privado asalariado no agrícola fue, junto al estatal, el único que creció en la década, pasando de representar el 16,3% al 19,7% del total; mientras que el empleo privado no asalariado no agrícola descendió del 13,7% al 12,2%. El gran perdedor en términos de empleados fue el sector agrícola, que pasó de ocupar al 42,4% de la población al 39%. No obstante, la dimensión de esta reducción -habida cuenta del incremento de las mujeres agricultoras no asalariadas- se mide mejor si observamos la reducción del porcentaje de hombres no asalariados que trabajaban en la agricultura (explotando sus propias tierras o las arrendadas), que pasó del 31,1% del total al 21,2% del total.

Finalmente, en términos globales cabe señalar dos datos de signo inverso. El primero es que en el empleo estatal el sector que más creció fue el de la educación, que pasó del 22,2% del total al 27,1%. Este incremento relativo ha de ser matizado en términos

¹⁰⁷ El método, denominado “Extended Labor Force. Job Search Required”, considera a todas aquellas personas que desempeñan una labor, aunque no sea remunerada, y buscan trabajo. En el caso egipcio excluye, por citar los sectores más amplios, no solo a las amas de casa, sino también a todas las mujeres que trabajan en labores agrícolas.

absolutos pues la educación pública debía hacer frente al constante incremento de la población infantil (a mediados de la década nacían en Egipto cerca de 1,2 millones de niños al año). El segundo dato es que entre 1988 y 1998 el paro juvenil se incrementó considerablemente, y lo hizo mucho más entre los jóvenes con estudios superiores. Entre 1988 y 1998 el índice de paro entre los jóvenes de entre 15 y 29 años pasó del 10,5% al 17,6%, agudizándose en el caso de jóvenes con estudios: el de los que tenían estudios técnicos de secundaria ascendió del 28% al 31,5%, mientras que el de los que tenían estudios post-secundaria no universitarios pasaba del 22,5% al 31% y el de los universitarios del 19% al 28,5% (Amer 2011: 756).

En definitiva, las novedades del panorama del empleo con el proceso de liberalización ya en marcha se producen fundamentalmente en el empleo agrícola que, como era previsible, decae, mientras que el empleo estatal sigue aumentando sin por ello dar abasto para acoger el incesante aumento de población joven con estudios. Tampoco las cifras de empleados en el sector industrial y comercial apuntan en el sentido pretendido por el Gobierno con sus políticas de privatizaciones. Todo ello constituye un nuevo caldo de cultivo de descontento social que será determinante en el desarrollo de la política del régimen en la década siguiente.

7.2.5 Descenso desigual de la pobreza e incremento de la desigualdad

Bajo el impulso de un crecimiento del PIB en torno al 6%, de un incremento de la productividad por persona activa del 3% y de un incremento del consumo real de los hogares del 2%, la pobreza disminuyó de manera significativa entre 1995 y 2000, según los datos del Banco Mundial¹⁰⁸. Mientras que en 1995 el 19,4% de la población se situaba por debajo del “umbral bajo de la pobreza”, en 2000 dicho porcentaje había pasado al 16,7%¹⁰⁹. No obstante, la reducción de la pobreza había sido muy desigual, descendiendo notablemente en las ciudades en general y en las zonas rurales del Delta (en El Cairo y Alejandría bajó del 13% al 5%, en las ciudades del Delta del 8% al 6%, y en las zonas rurales del Delta del 21% al 12%), mientras continuaba aumentando en el Alto Egipto (en las ciudades pasó del 11% al 19%, y en las zonas rurales del 20% al 34%, siendo en estas

¹⁰⁸ World Bank 2002: *Arab Republic of Egypt. Poverty Reduction in Egypt (2 vol)*. The World Bank, Washington, report n° 24234-EGT, y World Bank 2007: *Arab Republic of Egypt. Poverty Assessment Update (2 vol)*. The World Bank, Washington, report n° 39885. Citados por Clément (2011: 618, 623).

¹⁰⁹ Recordemos que en 1995 cerca de un 50% de la población se situaba en el “umbral alto de la pobreza”, definido por tener la capacidad justa para satisfacer las necesidades alimentarias mínimas. Sin embargo, no disponemos de datos sobre el porcentaje de personas que se encontraban “en el umbral alto de la pobreza” en 2000.

últimas el porcentaje de pobres según el “umbral alto” del 70%).

Estos datos en general positivos deben ser tenidos muy en cuenta para comprender la relativa estabilidad social y política de Egipto en la segunda mitad de los 90, junto al hecho de que las actividades del islamismo armado, aunque habían declinado, se mantuvieron hasta 1998, propiciando un mayor consentimiento de la población frente al régimen político. No obstante, este no había aprovechado la bonanza económica para reducir la desigualdad, que según el índice GINI entre 1995 y 2000 pasó del 0,35 al 0,36, cuando en 1990, en condiciones macroeconómicas mucho peores, era tan solo del 0,32 (Clément 2011: 619). Dicho de otra manera, si el periodo 1995 benefició a los sectores de la población económicamente más débiles, benefició en mayor medida a los más acomodados.

7.2.6 El cese de Kamal al-Ganzuri

Como hemos apuntado, algunos de los éxitos relativos del Gobierno egipcio en la segunda mitad de los 90 pueden ser atribuidos a Kamal al-Ganzuri, nombrado presidente del Gobierno en enero de 1996 y cesado en octubre de 1999. O al menos se los atribuyó parte de la opinión pública egipcia, que llegó a denominarlo “el ministro de los pobres”, a causa de la reducción de la pobreza, e incluso “el ministro de la oposición”. En teoría, por su posición, también podrían atribuírsele -como hicieron sus adversarios- los efectos negativos del periodo de su mandato, algunos de los cuales hemos visto, y otros veremos más adelante. No obstante, hacer indiscriminadamente esto segundo no sería del todo adecuado, pues, por un lado, algunas de las políticas implementadas eran políticas de Estado o del régimen ya decididas anteriormente -como la liberalización de los arrendamientos agrícolas-, y por otro los ministros, aunque formalmente subordinados a Al-Ganzuri, respondían directamente ante Hosni Mubarak, que era quien los nombraba y cesaba, y Al-Ganzuri tuvo importantes diferencias con ellos, como veremos.

Lo cierto es que Al-Ganzuri había sido ministro de Planificación y Cooperación Internacional a principios de los 80, antes de ser vicepresidente del Gobierno desde 1986 hasta 1996. Como presidente del Gobierno, hizo honor a su reputación de buen tecnócrata en los dominios de su especialidad: lanzó cientos de nuevos proyectos hacia un horizonte de 20 años, y comenzó algunos de ellos, como los proyectos industriales en el Alto Egipto o la creación del Nuevo Valle en el sudoeste de Egipto, en las zonas desérticas que debían ser revitalizadas por el Canal de Tochka, que llevaba a aquel aguas excedentarias de más arriba de la Presa de Asuán. Por otro lado, mejoró las relaciones del Gobierno egipcio con las instituciones financieras internacionales, redujo la pobreza, incrementó el empleo estatal y llevó a cabo un gran número de privatizaciones sin despertar grandes protestas

sociales.

No obstante, en octubre de 1999 fue cesado por Mubarak, sin que mediara ninguna explicación acerca de la causa de su cese. Su predecesor, Atef Sidqi, había estado 10 años al frente del Gobierno, por lo que los mandatos largos no eran un problema para el presidente de la República. Durante más de una década, Al-Ganzuri desapareció de la vida pública, y no hizo la menor declaración. Durante un tiempo, se investigaron algunas de las decisiones que tomó, pero las investigaciones no condujeron a nada. Tras la caída de Mubarak, el expresidente del Gobierno, que recibiría de nuevo este cargo del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas en noviembre de 2011, dio su versión acerca de su cese: según él, se quejó en reiteradas ocasiones de varios de sus ministros, en concreto de diez, que estaban implicados en casos de corrupción, pero dichos ministros contaban con la protección del presidente de la República y de su jefe de gabinete, Zakariya Azmi, quienes se negaron a cesarlos. Al-Ganzuri señaló así mismo, frente a quienes le acusaban de haber formado parte del régimen de Mubarak, que fue el primer presidente del Gobierno que no anunciaba sus decisiones tras la coletilla “siguiendo las instrucciones del presidente de la República”, así como el primero que no recibió un alto cargo del Estado después de su cese¹¹⁰.

8. LA CRISIS DEL RÉGIMEN POLÍTICO. PRIMEROS INDICIOS (1996-2000)

En el quinquenio 1996-2000 se produjeron cambios de importancia en las estructuras del sistema real de participación política egipcio, aunque la característica esencial de su funcionamiento (la participación solo mediante la expresión) no se modificara. Dichos cambios fueron en gran parte resultado de las dinámicas sociales desencadenadas por la liberalización económica (ascendencia de la burguesía privada y nuevas formas de resistencia al autoritarismo y las políticas gubernamentales a través de las ONG). El régimen de Mubarak, como ya era su costumbre, adoptó la actitud de primero observar el sentido y la medida de las fuerzas y movimientos sociales emergentes, o que se consolidaban, y luego tolerarlos o actuar contra ellos según las circunstancias y las potencialidades de dichos movimientos.

Todos los partidos políticos autorizados y los sindicatos profesionales quedaron definitivamente “desactivados” como amenazas en este quinquenio. El Wafd, el Partido Liberal, el Tagammu y el Partido Naserista quedaron definitivamente asociados al régimen

¹¹⁰ "لاول مرة الجنزورى يكشف اسباب اقالة مبارك له من الوزارة"، الأقباط اليوم (En internet, sin fecha: <http://goo.gl/Mq7ADP>, consulta del 10 de septiembre de 2015).

político: su oposición era demasiado “leal”, su presencia en el Parlamento y las instituciones testimonial, y su apoyo popular escaso. El Partido del Trabajo, pese a su escaso apoyo popular tras el fin de su alianza con los Hermanos Musulmanes, fue prohibido antes de las elecciones de 2000 ante su insistencia en su beligerancia hacia el Gobierno vehiculada por su periódico, *Al-Chaab*, que la constante persecución judicial no logró reducir. Ningún nuevo partido fue autorizado en este tiempo, pese a los constantes intentos desde 1996 de antiguos militantes islamistas de los Hermanos Musulmanes de que fuera autorizado su proyecto de fundar el partido Al-Wasat.

Los sindicatos profesionales, casi ya neutralizados mediante la Ley 100 de 1993 de la que nos hemos ocupado, acabaron por ser inocuos por la ley de 1995 que la completó; sus propias querellas internas, alimentadas o favorecidas por el poder político, hicieron el resto. En los años 1996 y 1997 la mayor parte de ellos, o de los más importantes (ingenieros, abogados, médicos) quedaron bajo tutela judicial y fueron incapaces de celebrar elecciones a lo largo de todo el quinquenio. El caso del Sindicato de Periodistas fue un tanto diferente, pero continuó en la línea ya conocida: bajo la presión de la aplicación de la Ley de Sanciones de los Delitos de Prensa de 1995, modificada en 1996, los periodistas pugnaron por mantenerse unidos y por acabar con la legislación represiva, pero para hacerlo no quisieron, como colectivo, renunciar al viejo procedimiento de elegir un síndico totalmente leal al régimen político.

No obstante, la prensa siguió siendo el principal espacio en el que se podía manifestar la oposición a las políticas gubernamentales, y conoció una nueva evolución en el periodo 1995-2000 al aparecer los primeros medios de comunicación privados. Fundados gracias al fuerte apoyo de capitales árabes o solo egipcios de procedencia desconocida, representaban la voluntad de la ascendente burguesía privada de contar con sus propios medios de comunicación. El régimen político reaccionó primero tolerándolos, luego advirtiéndoles con medidas represivas, y finalmente legislando controlar a los existentes y restringir los permisos a otros nuevos.

8.1 AL-WASAT, O EL INTENTO DE FUNDAR UN PARTIDO ISLAMISTA “MODERADO”

Cuando apenas comenzaba a pasar la polvareda de las elecciones legislativas de 1995 con la exclusión del Parlamento de los Hermanos Musulmanes, el anuncio enero de 1996 por parte de algunos destacados jóvenes de la Hermandad de su voluntad de constituir un partido pareció sorprender a la propia organización y al Gobierno. Como líder del grupo promotor destacaba Abul Ilá al-Madi, exdirigente estudiantil de la Hermandad y secretario general del Sindicato de Ingenieros. Junto a él figuraban otros jóvenes miembros

de la organización, en torno a la cuarentena, pero también personajes que en principio no se tenía constancia de que pertenecieran a ella, como el intelectual Rafiq Habib, cristiano evangelista.

Los fundadores de Al-Wasat declaraban querer formar un partido islamista moderado liberal, como denotaba el significado de la denominación elegida para aquel, الوسط ("El Centro"). Al-Madi se distanciaba aparentemente de los dirigentes de la Hermandad, que siempre había declarado que no pretendían formar un partido político. El guía general de los Hermanos, el recién nombrado Mustafa Manshur, rechazaba la formación del partido, y acusaba a sus fundadores de pretender dividir las filas de los Hermanos Musulmanes. El régimen de Mubarak desconfió de esta aparente división, y en abril de 1996 los tres principales promotores del partido y otros siete dirigentes de la Hermandad de mayor edad y peso que les habían apoyado fueron detenidos bajo la acusación de seguir instrucciones de la cúpula para fundar un partido político. Llevados ante un tribunal militar, el 15 de agosto de 1996 los tres fundadores fueron absueltos por falta de pruebas, mientras que los otros siete fueron condenados a un año de prisión. Se trataba del cuarto proceso judicial contra los Hermanos Musulmanes en época de Mubarak.

Las relaciones de fondo entre Al-Wasat "en proceso de fundación" y los Hermanos Musulmanes seguirían siendo objeto de sospecha, pero todo parece indicar que el propio poder político se convenció de la autenticidad de las diferencias entre ambos bandos. Según Rafiq Habib, "cuando las autoridades vieron que las disputas dentro de la Hermandad eran reales, pensaron que sería mejor que siguiéramos adelante con ellas"¹¹¹. Las disputas, tal como se presentaban, eran de concepción del movimiento islamista, estratégicas y generacionales: los miembros del Consejo Consultivo de la Hermandad, casi todos por encima de los 70 años, seguían creyendo en una organización jerárquica, gerontocrática, secretista y semiclandestina que podía negociar con los presidentes las modalidades de su inserción e influencia en el sistema político a partir de la fuerza adquirida a través de una lenta penetración de las estructuras sociales, mientras que muchos jóvenes profesionales en torno a la cuarentena querían reconstruir el movimiento desde la base, sobre presupuestos explícitamente políticos y a la luz del día.

De cualquier manera, el régimen de Mubarak desestimaría las sucesivas demandas de constitución de Al-Wasat durante quince años, y el paso del tiempo demostraría que el grupo que lo promovía era realmente independiente de los Hermanos Musulmanes, aunque en el futuro lejano, tras la caída de Mubarak, ambas organizaciones encontraran un terreno para el entendimiento y la colaboración con la fundación en 2011 del Partido de la Libertad y la Justicia (حزب العدالة والحرية).

¹¹¹ S. Negus: "Brotherhood trial's surprise ending", *Middle East Times*, 6 septiembre 1996, págs. 7-8.

8.2 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: REPRESIÓN Y DIVERSIFICACIÓN

8.2.1 La reforma de la Ley de Delitos de Prensa. Un triunfo amargo

El tira y afloja entre el régimen político y los periodistas en torno a la Ley de Sanciones de los Delitos de Prensa aprobada en 1995 continuó presidiendo la primera mitad del año de 1996. En realidad, aunque cientos de periodistas habían sido llamados a declarar por los tribunales para esa fecha, el único que había recibido una sentencia firme (3 años de cárcel y 15.000 LE de multa), era Magdi Ahmad Husein, que había sucedido a su tío Adel Husein a la cabeza del consejo de redacción de *Al-Chaab*.

La ley de Prensa de 1995 era sobre todo una advertencia que los periodistas estimaban procedía directamente de Mubarak y solo él podía retirar. El presidente había prometido modificar la ley, pero cuando se presentó el primer borrador, en abril, resultó decepcionante para los periodistas. El presidente del sindicato y director de *Al-Ahram*, Ibrahim Nafia, un incondicional partidario de Mubarak, desempeñaba un incómodo y ambiguo papel, llamando a los miembros a la calma mientras el Gobierno ignoraba sus propuestas. El 2 de junio se presentó un nuevo borrador de la ley que dejaba intactos los artículos más conflictivos, los que establecían penas de prisión y fuertes multas para los delitos de calumnias, difamación y libelo. El 11 de junio, el Consejo de Dirección del sindicato anunció que dimitiría en pleno si la ley era aprobada tal como estaba. El 13 de junio, una asamblea general extraordinaria debatía la decisión de ir a la huelga por la misma razón cuando Nafia se levantó y declaró teatralmente “no os preocupéis, el presidente me ha garantizado personalmente la libertad de la prensa”. Algunos periodistas intervinieron para defender el mantenimiento de una postura firme frente al régimen político. Salah Badawi, periodista de *Al-Chaab*, atacó directamente al presidente: “Todo el mundo dice que no digamos nada sobre el papel de Mubarak en la aprobación de la ley [de 1995], y lo único que hacemos es lamerle los zapatos y suplicarle que sea bueno con nosotros”¹¹². No obstante, la asamblea votó postergar las dimisiones de los miembros del Consejo y la decisión de ir a la huelga hasta el 20 de junio, para dar una oportunidad al presidente. El 15 de junio, Mubarak decretaba, mediante el decreto de ley 96 de 1996, la desaparición de casi todos los delitos penados con penas de prisión. Si bien, se mantenía la prohibición de atacar personalmente al presidente de la República o su familia.

Desde el exterior, la modificación de la Ley de Prensa pudo parecer una victoria de los periodistas, pero, según Steve Negus, que trabajaba como periodista para varios medios

¹¹² S. Negus: “Press Law 93 bites the dust”, *Middle East International*, 21 de junio de 1996, págs. 12-13.

extranjeros y cairotas, en muchos de aquellos dejó un sentimiento de amargura y humillación, por lo que consideraban un cínico juego de Mubarak del que salió triunfador, con la protección para él y su familia, con gran parte de los periodistas acobardados y con los que no se asustaron perseguidos¹¹³. El número de causas abiertas contra periodistas, que en 1996 fue de 76, llegó hasta 166 en 1997, y aumentó en 1998, año en el que se produjo el mayor número de juicios y condenas a periodistas: 4 de ellos fueron condenados a penas de prisión efectiva, y 16 a multas y penas de prisión menores (sin ingreso en la cárcel), mientras que otros 3 fueron condenados a penas de prisión en primera instancia y decenas de ellos esperaban la decisión de la fiscalía sobre su imputación (الميرغني 2005: 104).

Según Fahmy (2002: 124), el resultado de la Ley 93 de 1995 fue que, a pesar de sus reiteradas protestas, el Sindicato de Periodistas se hizo débil, pasando a centrarse en defender los intereses personales de sus miembros. Aunque los periodistas de la oposición intentaron coordinarse para plantear un candidato a síndico alternativo a los candidatos gubernamentales, lo máximo que consiguió fue impedir la reelección de Nafia, sustituido por Makram Mohammed Ahmad, confidente de Mubarak, en junio de 1997, que obtuvo una mayoría del 92% de los votos.

La evolución a partir de 1996 de la mayor parte de los periodistas y de los medios de prensa (estatal, de partidos y, como veremos, privada) confirmó, pero intensificadas, las características señaladas por Bianchi cinco años antes:

“Los periodistas han desarrollado un visión más cínica de la utilidad del sindicato como medio para defender sus intereses y sus libertades. Muchos escritores buscan encontrar cierta libertad alineándose con una fracción particular de la elite gobernante y expresando puntos de vista críticos que saben que existen dentro del propio Gobierno. Su capacidad para sobrevivir y prosperar depende no solo de su respeto de los límites tácitos del debate tolerable, sino también de la calidad de la información que reciben del interior del régimen acerca de los cambiantes equilibrios de poder dentro de la elite gobernante. Los periodistas más débiles en este sentido y menos maleables ven el sindicato como un foro útil para protestar por los abusos del poder, pero cuando las presiones devienen acuciantes, miran hacia otro lado en busca de apoyo y protección”¹¹⁴.

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Robert Bianchi (1991) *Unruly Corporatism*, pág. 106. Citado por Fahmy (2002: 124).

8.2.2 La pluralidad de la prensa: divisiones del régimen político y ascenso de la burguesía privada

La expansión de la pluralidad y libertad de expresión de la prensa egipcia, sostenida durante la segunda mitad de los 90 pese a todos los pesares, debe ser matizada y situada en su contexto. No insistiremos ahora en la idea de lo que en un trabajo anterior (Barreda 2004) calificamos de “libertad de expresión sin libertad de comunicación”, es decir, en el diseño político que impedía que la relativa libertad de los medios de prensa trascendiera directamente a la mayor parte de población debido al estrecho control de la radio y de la televisión y de todo tipo de libertades “en la calle”. Este sistema de control comenzaría a resquebrajarse, por otro lado, precisamente en la segunda mitad de los 90 con la irrupción de las cadenas por satélite, y en particular de la cadena árabe Al-Jazeera y la generalización del uso de antenas parabólicas.

Lo que nos interesa destacar ahora es que numerosos signos aparentes de libertad de información en todo tipo de medios se derivaban, en realidad, de las presiones y luchas intestinas de los diversos sectores institucionales y sociales sobre los que se sustentaba el régimen. Estos conformaban un conglomerado de fuerzas muy dispares cuya competición por el poder y los recursos se acentuaba a medida que avanzaba la liberalización económica. La medida más adecuada de esta competición la daba la denuncia de casos de corrupción en los medios, que quedaba circunscrita a la prensa de la oposición ni tampoco a la naciente prensa privada, sino que se extendía a los medios estatales. La razón era sencilla: cada medio tenía sus fuentes y sus aliados en diversas instituciones, en particular en los servicios secretos, que filtraban la información que les interesaba y dirimían sus diferencias a través de los medios a cambio de prestarles protección. No de otra manera se puede explicar, precisamente, que los medios dispusieran de ciertas informaciones, relativas incluso a los ministros y a los principales dirigentes del régimen, y las utilizaran cuando no osaban tratar otros aspectos que sabían claramente prohibidos. La novedad de esta época fue que las denuncias también comenzaron a ser impulsadas por destacados hombres de negocios, cansados de la corrupción e interferencias de los burócratas del régimen en sus asuntos.

Los casos que afectaban a funcionarios medios-altos eran numerosísimos, tantos que sería imposible dar una muestra representativa. Pongamos tan solo como ejemplo la denuncia en el estatal *Ajbar al-Yaum*, en el verano de 1996, en tres primeras páginas, de que la Agencia General de Hoteles y Turismo había entregado 40 millones de LE a un hombre de negocios libanés asociado a ella como compensación indebida por no se sabe

qué pérdidas¹¹⁵. Pero el caso más llamativo contra altos cargos del régimen fue el de las denuncias contra el poderoso ministro del Interior, Hasan al-Alfi, en 1997. La campaña fue lanzada por Magdi Ahmad Husein, jefe de redacción de *Al-Chaab*, que finalmente no había llegado a ingresar en prisión, a pesar de haber comparecido en trece ocasiones ante la justicia y ser condenado en una de ellas. Husein acusaba a Al-Alfi de haber propiciado que sus hijos se enriquecieran utilizando su influencia. El 20 de julio, fue condenado por ello a dos años de prisión con posibilidad de suspensión de sentencia, sin que el juez hiciera caso alguno a la documentación que aportaba. No obstante, Husein continuó publicando semanalmente información contra Al-Alfi con nombres y datos y citando documentos: entre otras cosas, según Husein, había obligado a varios hombres de negocios a hacer negocios que no querían hacer bajo distintas amenazas. Lo sorprendente fue que, cuando nadie auguraba nada bueno para Husein, dos de los principales diarios estatales, *Ajbar al-Yaum* y *Al-Gumhuriyya*, comenzaron a reproducir la información de *Al-Chaab* y a pedir al ministro que diera explicaciones.

Finalmente, 22 de septiembre el fiscal general del Estado ordenó que Magdi Ahmad Husein, su tío Adel y otros tres periodistas de *Al-Chaab* fueran juzgados, así como que el periódico no apareciera durante dos semanas. El tribunal desestimó todos los testigos de la defensa y aceptó todos los de Al-Alfi. Magdi Ahmad Husein sería condenado a un año de prisión, y su condena confirmada tras su apelación en febrero de 1998. No obstante, la impresión que dejó el caso Al-Alfi, según Steve Negus, es que la hora de que Al-Alfi abandonara el Gobierno había llegado, en un momento en el que las actividades del islamismo radical armado habían casi desaparecido, cuando comenzaban a abundar los rumores de que se acercaba el cierre de un acuerdo de fin de las hostilidades, y a medida que la liberalización y las privatizaciones marchaban bien. Según el periodista, el presidente deseaba enviar un claro mensaje a potenciales inversores: “Si algún gerifalte intenta interponerse en vuestros negocios, sabed que siempre podéis recurrir a la prensa”¹¹⁶. En opinión del mismo autor, Mubarak ya tan solo esperaba una ocasión para dar a Al-Alfi un digno retiro. La ocasión llegó, pero no permitió despedir con dignidad al ministro: el 17 de noviembre un atentado islamista mataba a 60 turistas en Luxor, y Mubarak, tras reprender públicamente a Al-Alfi, lo cesó.

8.2.3 El nacimiento de la prensa privada

En diciembre de 1995 aparecía *Al-Dustur*, el primer diario privado egipcio en

¹¹⁵ *Egypt Focus*, julio-agosto de 1996, págs. 6-7.

¹¹⁶ S. Negus, *Focus Egypt*, septiembre de 1997, págs. 12-13.

lengua árabe, independiente tanto del Estado como de los partidos políticos. Su licencia de edición era de Chipre, como la de muchos medios de prensa que comenzaron a aparecer en esa época.

La llamada “prensa chipriota egipcia” nació evitando las restricciones a la formación de medios independientes mediante la obtención de la licencia de edición sobre todo en Chipre, aunque también algunos medios lo hicieron en Atenas. Comenzaban a imprimir en el extranjero y solicitaban la autorización de distribución e impresión en Egipto como prensa extranjera. No obstante, aunque algunos medios tenían parte de capital extranjero y sus productos eran elaborados parcialmente por extranjeros, la mayor parte de esta prensa tenía sus sedes en Egipto, era elaborada por egipcios y trataba sobre todo temas egipcios. A pesar de ello, muchos de estos medios, sobre todo los que trataban temas políticos, se publicaban en inglés, lo que garantizaba una libertad de expresión mucho mayor, pues al Gobierno no le inquietaba tanto que se difundieran determinadas informaciones en una lengua que la mayoría de la población no podía leer. El propio *Al-Ahram Weekly*, semanario en inglés del grupo *Al-Ahram*, elaborado por periodistas de tendencias políticas izquierdistas y liberales pero con una gran formación y profesionalidad, se permitía dar una información mucho más amplia y crítica, al tiempo que fidedigna, que los medios estatales. Durante la segunda mitad de los 90 y la primera de la primera década del siglo XXI, hasta que se estabilizó la publicación de prensa privada egipcia, los semanarios *Middle East International* (extranjero), *Cairo Times* (egipcio con colaboradores también extranjeros) y *Al-Ahram Weekly*, que sigue publicándose hoy, dieron la información sobre la política egipcia más independiente y veraz, sintética al tiempo que completa y pegada al terreno, con la ventaja añadida de que sus ediciones pudieron ser prontamente consultadas en internet en cuanto se popularizó el uso de la red.

La tolerancia del régimen egipcio con la “prensa chipriota” se derivaba, además del hecho de su limitado alcance, de que en tanto que prensa extranjera estaba legalmente sometida a la censura previa y el Gobierno podía retirarle sus licencias de impresión discrecionalmente por medio del Consejo Superior de la Prensa, que era el que las concedía. El Gobierno egipcio utilizaría efectivamente la censura desde un primer momento, y más adelante retiraría muchas de las licencias de impresión, como veremos. Pero con la llegada de internet *The Middle East Times* y *Cairo Times* (1997-2004) publicaron en la red los temas y contenidos de los artículos censurados.

La diferencia entre *Al-Dustur* y el resto de la “prensa chipriota” egipcia era que su capital era únicamente egipcio, y bastante considerable, lo suficiente como para permitirle una tirada de 100.000 ejemplares. Fundado por Essam Fahmi Ismael como inversor e Ibrahim Aisa como director, *Al-Dustur* adoptó una línea novedosa, fresca y crítica con el Gobierno, impulsada por su irreverente director: publicó muchos casos de corrupción e

insistió en defender el buen gobierno, el constitucionalismo (“La Constitución” es la traducción del nombre del periódico), el liberalismo y el secularismo, y abrió sus páginas a marxistas, naseristas y liberales. Utilizaba un tono coloquial en sus escritos, e incluía un gran número de viñetas y dibujos satíricos que atrajeron en particular al público joven, de modo que su tirada llegó a alcanzar los 150.000 ejemplares. Pero las excesivas libertades de Aisa pronto molestaron en las altas esferas, y así el número del periódico del 24 de abril de 1996 fue secuestrado por una información acerca de la existencia de fuertes conflictos en el seno del ministerio del Interior.

En febrero de 1997 apareció el semanario *Al-Usbua*, el primer periódico privado publicado en árabe en Egipto con licencia egipcia y con capital únicamente egipcio, aunque sus inversores se desconocieran porque fue fundado acogiendo a la legislación general sobre sociedades anónimas, si bien hubo de obtener la preceptiva autorización del Consejo Superior de la Prensa para publicar. El semanario lo dirigía Mustafa Bakri, un naserista de la vieja guardia al que se atribuían buenos contactos en los servicios secretos, que se dedicaría a atacar cualquier intento de “normalización” de las relaciones con Israel y a encontrar conspiraciones contra la seguridad nacional en todas partes. Bakri sería frecuentemente acusado de ser financiado por el régimen iraquí de Saddam Husein.

En las mismas fechas de la aparición de *Al-Usbua* se rumoreó que varios hombres de negocios querían fundar otro medio de prensa, *Biladi*, para defender sus intereses económicos y políticos. Para la ascendente burguesía privada, no se trataba tan solo de contar con un instrumento de influencia política, sino simplemente de medios en los que introducir su publicidad sin tener que recurrir a la no siempre deseada prensa de oposición o a la prensa estatal, que cobraba precios muy altos por su casi monopolio del mercado. Los tres principales diarios estatales, *Al-Ahram*, *Al-Ajbar* y *Al-Gumhuriyya* imprimían conjuntamente 2,3 millones de copias diarias frente a las 360.000 de *Al-Wafd*, con grandes recursos económicos, y las 80.000 de *Al-Chaab*, que tan solo se publicaba dos veces a la semana. La casa editorial de *Al-Ahram* era además un imperio mediático rentable -a diferencia de las otras estatales- pues además de contar con sus centros de estudios y su editorial de libros, imprimía las ediciones de la mayor parte de la prensa de la oposición y privada, y tenía el monopolio de la publicidad que se exhibía en todos los soportes en las calles de Egipto¹¹⁷.

¹¹⁷ *Egypt Focus*, julio-agosto de 1996, págs. 12-13, y noviembre de 1996, págs. 12-13.

8.2.4 La reorganización del control de la prensa y el lanzamiento del Nilesat

Ante la proliferación de la “prensa chipriota” egipcia, la aparición de los primeros medios privados egipcios y la extensión de las denuncias de corrupción en todos los medios, el régimen egipcio creyó ver la necesidad de poner un poco de orden salvaguardando sus objetivos estratégicos: dar cancha a la burguesía privada, pero controlándola, estrechar su control sobre la prensa estatal y someter a los periodistas demasiado díscolos. Esta tarea sería llevada a cabo entre finales de 1997 y la primera mitad de 1998.

A finales de octubre de 1997, el Consejo Superior de la Prensa retiró sus licencias de impresión a 41 medios publicados con licencia chipriota, y el 31 de marzo de 1998 las diversas empresas de impresión que habían nacido en la zona industrial libre de impuestos de Madinat Násir recibieron una comunicación de la Autoridad de Inversiones en el sentido de que no podrían seguir imprimiendo ningún medio de prensa en ninguna lengua. La medida afectaba a 60 publicaciones, muchas de ellas clasificables como “prensa amarilla”, aunque también a publicaciones políticas serias y críticas en inglés como *Middle East Times*, *Cairo Times*, *Egypt Today* y *Business Monthly*. La mayoría de ellas, sin embargo, encontrarían otras vías para seguir publicando, pero serían más costosas, e impondrían una dificultad más a las actividades de los medios críticos. Entre febrero y abril de 1998 la edición de *Cairo Times*, impulsada por el editor egipcio Hicham Qasem, fue prohibida en tres ocasiones

El 23 de enero de 1998 Mubarak aprobó una reforma de Ley 159 de 1981 sobre Compañías Privadas. Las compañías afectadas eran las sociedades anónimas y el resto de sociedades constituidas por acciones. Una las principales novedades de la nueva ley afectaba a las compañías que trabajaran en el sector de la prensa y las telecomunicaciones, la otra a las Organizaciones No Gubernamentales, como veremos en el capítulo IV 8.5. En cuanto a la prensa y los medios de comunicación, la ley establecía que cualquier compañía destinada a operar en dichos ámbitos (prensa y publicaciones en general y emisiones por satélite) debía contar con la autorización del Gobierno. Anteriormente, podían constituirse e iniciar sus actividades y mantenerlas si no había ninguna objeción judicial. El Gobierno arguyó que con la ley pretendía allanar las trabas burocráticas ahora que se abría la puerta a la publicación de medios privados¹¹⁸.

No obstante, poco después de la publicación de la nueva ley se pudo apreciar por donde iban las intenciones del Gobierno. El 28 de febrero de 1998, el diario *Al-Dustur* fue cerrado por publicar un comunicado de una *gamaa islamiyya* que amenazaba de muerte a

¹¹⁸ *Egypt Focus*, febrero de 1998, págs. 12-13.

tres destacadas personalidades coptas, entre ellas el multimillonario Naguib Sawiris. Poco después, Adel Hamuda, director del estatal *Ruz al-Yusuf* fue destituido, oficialmente por hacerse eco de la misma información. Hamuda había convertido el semanario en el más leído de la prensa estatal, con una tirada de 120.000 ejemplares en 1998¹¹⁹. Sus críticas al Gobierno eran frecuentes, centrándose en la discriminación de los coptos, los casos de corrupción y el presidente del Gobierno, Kamal al-Ganzuri, aunque combinaba tales contenidos con la publicación de escándalos sociales de todo tipo. Por contra, Hamuda era bien conocido por sus buenos contactos en el Ministerio del Interior y los servicios secretos. De hecho, era uno de los pocos medios estatales que había asumido la defensa mediática de Hasan Al-Alfi, el ministro del Interior finalmente caído en desgracia.

Para el 7 de marzo, Mubarak convocó al Consejo Superior de la Prensa, al que manifestó su descontento por la actuación de algunos medios, como *Al-Dustur* y *Ruz al-Yusuf*. Sus informaciones acerca de la “persecución” de los coptos, según el presidente, dañaban la imagen de Egipto y le habían obligado a retrasar su visita anual a Estados Unidos, incluso, según adujo, podían dañar la economía egipcia dada la belicosidad con la que preveía que las comunidades coptas en ese país le recibirían¹²⁰. Efectivamente, poco después, el 24 de marzo de 1998, la Federación Internacional Copta publicaba un anuncio de una página completa en *The Washington Post* en el que preguntaba a Mubarak si la matanza de Luxor de noviembre de 1997 no había sido suficiente para que el presidente abriera los ojos a “las atrocidades que se cometían en el sur”¹²¹. El 16 de abril, el Consejo Superior de la Prensa destituía a los jefes de redacción de la prensa estatal que mostraban algún espíritu independiente, como Mahmud al-Tuhami, que había sustituido a Adel Hamuda en la dirección de *Ruz al-Yusuf* y manifestado su solidaridad con su antiguo jefe, y Galal Aisa, sindicalista de larga trayectoria y director del también semanario *Ajer Saa*.

En 1999 el diario privado *Saut al-Umma*, que había obtenido una licencia de publicación en 1997, se vio desposeído de ella por el Consejo Superior de la Prensa. El 8 de agosto de 2000 la recuperaría gracias a una resolución judicial. No obstante, en los suspicaces medios políticos egipcios se pensaba que dicha sentencia se debía a que el propietario del periódico finalmente había renunciado a su intención de incluir en su equipo de dirección a Ibrahim Aisa, el exdirector de *Al-Dustur* al que el régimen político

¹¹⁹ *Egypt Focus*, mayo de 1998, pág.12.

¹²⁰ Desde principios de 1998, los influyentes *lobbies* coptos hostiles al Gobierno egipcio desde la época de Sadat, a los que ya hemos hecho referencia, estaban maniobrando ante el Congreso norteamericano con el fin de incluir a Egipto como objetivo de la recién promulgada Ley por la Liberación de la Persecución Religiosa (Freedom from Religious Persecution Act) de 1997, que autorizaba a EEUU a imponer sanciones a los países acusados de perseguir a las minorías religiosas (*Egypt Focus*, abril de 1998, págs. 13-14).

¹²¹ Steve Negus: “Mubarak press dilemma”, *Middle East International*, 13 de marzo de 1998, pág. 14, y “Press crack-down confusion”, *Middle East International*, 10 de abril de 1998, pág. 13.

quería mantener apartado de los puestos de responsabilidad de cualquier medio de prensa.

Finalmente, el Gobierno lidiaba también en el frente audiovisual. El 28 de abril fue lanzado al espacio el primer satélite árabe, Nilesat, en el que el Gobierno egipcio tenía una participación mayoritaria del 25% siendo el resto privada, y en el que se reservó 20 de los 23 canales iniciales para la televisión pública egipcia, que se encargaría de los canales gubernamentales a través de ESC (Egyptian Satellite Channel). La voluntad del Gobierno era competir, en un momento en el que el 70% de los hogares egipcios tenía antenas parabólicas¹²², con los canales por satélite árabes del Golfo: competir económicamente con algunos, como Orbit (saudí) y MBC (saudí-emiratí), y políticamente con el qatari Al-Jazeera, que no dejaba de emitir contenidos que disgustaban al resto de los Gobiernos árabes, empezando por el egipcio¹²³. A pesar de que Al-Jazeera fuera acusado de servir a los intereses de Catar e incluso de Israel, y finalmente de los Hermanos Musulmanes, lo cierto es que en él podían encontrarse, en cualquier país árabe, coberturas informativas y opiniones desconocidas anteriormente por su pluralidad, apertura y escaso miedo a las consecuencias políticas en todo aquello que no tuviera que ver con el Estado de Catar.

Se da la paradoja, sin embargo, de que gran parte de los periodistas de los canales satélite árabes eran los mejores profesionales egipcios, que trabajaban en ellos no solo por sus mayores remuneraciones sino también porque disfrutaban de una mayor libertad de crítica, por lo que el canal egipcio ESC, entre lo limitado de sus recursos humanos y lo pacato de su programación (centrada en difundir los melodramas y películas habituales de la televisión terrestre, programas religiosos, música, concursos e informativos romos) no supuso ninguna competencia real para los canales extranjeros.

8.3 FRENO A LAS AMBICIONES POLÍTICAS DE LA GRAN BURGUESÍA DE LOS NEGOCIOS

Pese a la aparición de los primeros medios de prensa privada en la segunda mitad de los 90, y la promulgación de la primera legislación destinada específicamente a regular sus actividades en enero de 1998, hasta principios del siglo XXI la aparición de tales medios sería frenada en seco por el régimen de Mubarak. La explicación de este hecho es, con toda certidumbre, que el propio presidente, por no hablar de lo que pocos años después comenzaría de nominarse “la vieja guardia” del régimen, es decir, sus principales elites, de origen burocrático, se sintió molesto con las intenciones de parte de la alta burguesía

¹²² Steve Negus: “Media mismanagement”, *Middle East Times*, 8 de mayo de 1998, págs. 8-9.

¹²³ Las autoridades egipcias manifestarían en numerosas ocasiones su disgusto con la línea informativa de Al-Jazeera. Véase, por ejemplo, la sección sobre Egipto de Hasanein Kurum en ٢٤ أكتوبر ١٩٩٨، *القدس العربي*.

privada de extender su influencia mucho más allá de la esfera económica.

En marzo de 1997 se desató una campaña en la prensa estatal y de partidos contra los grandes hombres de negocios, tras pedir Mubarak públicamente al Gobierno que “no tratara únicamente con un puñado de ellos” y advertir de que “no iba a permitir que el capital privado se apoderará nuevamente de Egipto”¹²⁴. La campaña se dirigía en particular contra algunos miembros egipcios del Consejo Presidencial Egipcio-Norteamericano, como Chafiq Gaber y Taher Helmi. Creado en 1995 en el marco de los acuerdos firmados con Estados Unidos para desarrollar las relaciones entre ambos países, y formado por 15 de los mayores hombres de negocios egipcios y 15 de sus homólogos estadounidenses, el Consejo había celebrado una reunión en febrero de 1997 en la que, según la prensa egipcia, algunos “se habían atribuido la responsabilidad de gobernar el país”. Hubo quien aseguró que iba a ser ministro, pero otro habría comentado al respecto: “¿Acaso puede el general descender a soldado raso?”, y varios habrían criticado la lentitud de las privatizaciones, en particular en el sector de las comunicaciones, para el que los hombres de negocios tenían sus planes: “Pero -señalaba uno- el Gobierno no tiene los mismos... Es natural... ¿Sería natural que el Gobierno abriera sus puertas a quien va a quitarle la ropa? El Gobierno perdería mucho con la privatización de la información”¹²⁵. Estas y otras declaraciones de este tipo serían las que habrían desatado las iras iniciales de Hosni Mubarak, que en febrero de 1998 se referiría a una reunión de 31 grandes hombres de negocios como “una reunión de hijos de perra”, supuestamente por su reluctancia a implicarse en proyectos sociales y de educación¹²⁶. Poco antes, como ya hemos mencionado, el presidente había decretado la modificación de la ley sobre las empresas por acciones para someter la legalización de las que operaran en el terreno de la prensa y los medios de comunicación a la autorización del Gobierno.

Por otro lado, el 12 de julio de 1997 había sido “renovado” parcialmente el componente egipcio del Consejo Presidencial Egipcio-Norteamericano. Tras meses en los que se especuló con la idea de que Mubarak iba a expulsar de él a la mayoría de los miembros, finalmente no lo hizo, bien por razones diplomáticas bien porque se trataba de algunos de los principales empresarios del país o de fieles miembros del partido gubernamental, como Mohammed Farid Jamís, presidente de la estatal Federación Egipcia de Industrias considerado entonces el mayor industrial egipcio (Gobe 1999: 124). Sin embargo, junto a ellos situó, como portavoz del Consejo, a su hijo Gamal, además de a cinco nuevos empresarios que pocos años después se revelarían muy próximos a este,

¹²⁴ حسنين كروم: "الصحافة المصرية"، القدس العربي، ٢٧ مارس ١٩٩٧، ص. ٦.

¹²⁵ Citado por Gala Aisa en *Ajer Saa*, recogido en ٢٧ مارس ١٩٩٧، القدس العربي، "الصحافة المصرية"، حسنين كروم.

¹²⁶ *Egypt Focus*, abril de 1998, pág. 13.

como Ahmad Ezz, cuyas empresas llegarían a producir el 60% del acero egipcio, y Ahmad Bahgat, que sería el propietario del primer canal satélite privado egipcio, Dream TV, autorizado en 2001.

El 4 de agosto de 1997, en una conferencia de prensa celebrada para presentar la nueva etapa del Consejo, Gamal Mubarak recordaría que la relación de aquel con el Gobierno era como la de un consejero financiero con un cliente, y que el Consejo no estaba autorizado a tratar ningún asunto político “a no ser que fuera autorizado por el Gobierno”¹²⁷.

Con todo, el freno de Mubarak a las ambiciones políticas directas de algunos hombres de negocios y a algunas de sus ambiciones económicas no implicó que estos se arredraran. Así, por ejemplo, el 17 de diciembre de 1998 las principales asociaciones del sector (la Federación Egipcia de Industrias, la Federación Egipcia de Cámaras de Comercio, la Asociación de Hombres de Negocios) se reunían para pedir al Gobierno “participar en las decisiones económicas antes de que estas fueran adoptadas”. La razón de esta reunión fue la ley impulsada por el presidente del Gobierno, Kamal al-Ganzuri, que imponía un certificado de trazabilidad a todos los productos importados, ya fueran estos perecederos o no, y la importación directa desde el lugar de origen de esos productos¹²⁸. La voluntad del Gobierno era, sin duda, luchar contra la importación de productos en malas condiciones, en particular alimentos, cuyo origen y fecha de fabricación se camuflaba con su tránsito por diversos destinos, y que acababan provocando grandes escándalos en la prensa.

8.4 EL ABANDONO DE LA ACTIVIDAD ARMADA POR EL ISLAMISMO RADICAL

En el año de 1997 ya empezaba a estar claro que el Estado había ganado la partida a los grupos islamista armados. No lo había hecho solo por sus medidas judiciales, policiales y administrativas, sino que resultaba evidente que el apoyo social del islamismo armado era limitado, y que la mayor parte de la sociedad rechazaba sus actividades. En gran medida ello la había decidido a no contribuir a desestabilizar el régimen político, conteniendo sus posibles demandas y protestas. Por todo ello, desde mediados de año algunos de los líderes islamistas más radicales comenzaron a hacer pública su determinación de acabar con la violencia.

La primera declaración en este sentido fue realizada por un miembro del grupo Al-Yihad, dirigido por Abud al-Zumur, el 5 de julio de 1997, durante el juicio ante un tribunal

¹²⁷ *Egypt Focus*, septiembre de 1997, pág. 4.

¹²⁸ "منظمات الأعمال المصرية تطالب بالمشاركة في درس القرارات الاقتصادية قبل إصدارها"، *الحياة*، ١٨ ديسمبر، ص. ١٠.

militar al que se enfrentaba junto a otros 95 militantes. El portavoz llamó a sus “hermanos” a detener sus ataques, y condenó en particular los ataques contra los coptos y, sorprendentemente, elogió la implementación de la ley de liberalización de los arrendamientos agrícolas que debía entrar en vigor en septiembre (hecho sorprendente por lo fuera de contexto que parecía, no porque los grupos islamistas sunníes no se caracterizaran por sus visiones liberales en economía, y en particular por su defensa de la propiedad privada)¹²⁹. La llamada del grupo de Al-Zumur se ganó rápidamente partidarios y detractores, en el clásico escenario que se da en este tipo de situaciones incluso dentro de una misma organización, escenario en este caso mucho más complicado por la diversidad y autonomía de grupos y células existentes. El apoyo de Omar Abdel Rahmán, líder espiritual de un gran número de estos grupos, y en particular de la Gamaa Islamiyya histórica, dio un fuerte empuje a la iniciativa de paz. A pesar de ello, los grupos disidentes intentaron “reventar” el llamamiento, de manera que el número de policía, militantes y civiles víctimas de la violencia se incrementó precisamente a partir de que comenzaran las llamadas al fin de la violencia: desde agosto a diciembre murieron 23 policías, cuando en los meses anteriores solo habían muerto 6, y 84 civiles -número más abultado a causa del atentado de Luxor contra turistas de noviembre-, cuando en los meses anteriores habían muerto 30 (IEA 1997: 310).

A pesar del fuerte contratiempo que el atentado de Luxor supuso para la paz, un año después resultaba evidente que el Gobierno -aunque no lo reconociera- había llegado a un acuerdo con los dirigentes de los principales grupos. El 8 de agosto de 1998 sorprendía la clemencia del Alto Tribunal de Seguridad del Estado, que condenaba a 27 militantes acusados de robar a joyeros coptos para financiar ataques contra las fuerzas de seguridad a penas de 3 a 15 años de prisión, cuando en el pasado tales hechos eran frecuentemente castigados con la pena de muerte. Poco antes, el 6 de julio, en el diario *Al-Hayat* Muntasir al-Zayyat, abogado defensor de un gran número de islamistas radicales y constante promotor de la tregua, había anunciado que los dirigentes tanto de Al-Yihad como de la Gamaa Islamiyya estaban dispuestos a cambiar sus estrategia para alcanzar la paz. Al-Zayyat había dejado en enero del mismo año de defender a los militantes hasta que aquellos no se mostraran dispuestos a abandonar la violencia.

A lo largo de 1998, el Ministerio del Interior, dirigido por Habib al-Adli desde la matanza de Luxor y el cese de Hasan al-Alfi, liberó a 5.000 de los 20.000 islamistas detenidos sin juicio. Los muertos en ese año por el conflicto (policías, militares y civiles) fueron 38, frente a 184 el año anterior¹³⁰. El enfrentamiento a gran escala había casi

¹²⁹ *Egypt Focus*, septiembre de 1997, pág.11.

¹³⁰ *Egypt Focus*, enero de 1999, págs. 9-10.

concluido.

8.5 LA CONSOLIDACIÓN DE LAS ONG

8.5.1 Legislación para controlar las ONG

Como hemos apuntado, la reforma de la Ley 159 de 1981 relativa a las empresas por acciones, aprobada el 23 de enero de 1998 y que afectaba a las empresas de prensa, edición y telecomunicaciones, introdujo también cláusulas relativas a las empresas sin ánimo de lucro, figura bajo la cual se había creado un gran número de organizaciones no gubernamentales que no tenían vocación de empresas, sino de actuar, según declaraban, en los terrenos del desarrollo, los estudios, la consultoría, etc., y orientándose muchas de ellas en la práctica a defender los derechos humanos, económicos, sociales y políticos. La reforma de la Ley 159 de 1981 sometía la legalización de dichas empresas a la aprobación del Gobierno.

La intención del Gobierno era que las ONG llamadas en árabe “organizaciones defensoras” (منظمات دفاعية) tuvieran que registrarse como asociaciones civiles. Como hemos señalado en el capítulo IV 3.1, estas se regían por la Ley 32 de 1964, que establecía todo tipo de controles sobre ellas a través del Ministerio de Asuntos Sociales, en el que estaban inscritas. En la década de los 90, con la gran expansión de las actividades asociativas (entre 1994 y 2003 se crearon 4.788 asociaciones, independientemente de su forma jurídica, frente a las 2.441 en la época anterior¹³¹), se habían incrementado las presiones al régimen político para que modificara la Ley 32/1964 permitiendo que las asociaciones pudieran constituirse libremente y quedaran exentas del control administrativo y económico del Estado. Finalmente, en mayo de 1998 se filtró el contenido del borrador de la nueva ley de asociaciones que preparaba el Gobierno, despertando una amplia oleada de críticas, pues se mantenía en lo esencial el control gubernamental.

El frente de oposición a la ley lo dirigieron las principales asociaciones de derechos humanos así como otras todavía registradas como asociaciones civiles de las denominadas “defensoras de derechos”. A ellas se unieron otras, hasta formar un grupo de 90 asociaciones, para publicar en el mismo mes de mayo un comunicado titulado “En defensa de la independencia del trabajo civil”, antes de que la ley fuera tratada en el Parlamento en el mes de junio. De manera para muchos sorprendente, el Gobierno decidió entonces emprender un diálogo, dirigido por el Ministerio de Asuntos Sociales, con representantes

¹³¹ PNUD 2008. Citado por Yacoub (2011: 388).

de las asociaciones no gubernamentales. El diálogo, que se extendería a lo largo de un año, concluiría en mayo de 1999 con la aprobación de Ley 153 de 1999.

La nueva Ley, a pesar de introducir algunos elementos positivos, como la intervención del poder judicial con capacidad decisoria en las discrepancias entre la Administración y las asociaciones, no modificaba la sumisión de estas a aquella y lograba sus objetivos principales: someter a las organizaciones de defensa de derechos a la nueva ley y privar a las organizaciones antes inscritas como empresas del marco de libertad que ello les proporcionaba. De hecho, la nueva ley manifestaba explícitamente que las asociaciones civiles deberían mantenerse al margen de las actividades políticas. No obstante, de la observación detallada del proceso de deliberación y negociación, Viviane Fuad, Nadia Rifaat y Samir Murqus extraen la conclusión de que el mundo asociativo salió ganando, no por las escasas concesiones del Gobierno, sino por la capacidad adquirida y demostrada para cooperar, coordinarse, negociar con el Gobierno y presionarle (فؤاد ورفعة 2004: 155-170).

Pero la nueva ley de asociaciones civiles tendría corta vida, pues el 3 de junio de 2000 el Tribunal Constitucional la declaraba inconstitucional por razones de procedimiento. Cuando los miembros de las asociaciones apenas comenzaban a cantar victoria, el 4 de junio el Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Justicia emitían conjuntamente una nota de prensa en la que anunciaban que, hasta que se promulgara una nueva ley, la Ley 32 de 1964 volvería a entrar en vigor, y que las asociaciones creadas al amparo de la Ley de 1998 pasarían a regirse también por ella.

8.5.2 La transición de la primera a la segunda generación de las ONG

Como hemos señalado en el capítulo IV 3, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y otras de asistencia legal relacionada con ellos fueron las primeras organizaciones no gubernamentales que se crearon a principios de los 90, tras la estela de la constitución de la Organización Egipcia de Derechos Humanos (OEDH) en 1985. La razón del desarrollo más temprano de estas organizaciones fue que las clases politizadas buscaban en ellas protección para sus miembros, amparándose en la relativa liberalización política pero temerosas ante las numerosas incertidumbres de tal liberalización. En el contexto del violento enfrentamiento entre el Estado y los grupos islamistas radicales, las diversas organizaciones desempeñaron un papel muy importante en dar a conocer las violaciones de los derechos humanos y en asistir a quienes las sufrían, aun arrojando críticas de unos por su supuesta complacencia con el Gobierno (pues, como no podía ser de otra manera, también destacaban y criticaban la violencia utilizada por el islamismo), de otros por “debilitar” a las fuerzas de seguridad en su lucha contra el islamismo, y de

algunos más por la financiación que recibían de numerosas instituciones internacionales, lo que según estos les hacía sospechosas de servir a intereses extranjeros. A pesar de estas acusaciones, y de la repercusión más internacional que local de las actividades de tales asociaciones, el Gobierno egipcio toleró su existencia y no hostigó de manera señalada a sus miembros -a diferencia de lo que hizo con los abogados islamistas-, en el marco ya explicado de la política de favorecer la emergencia de una “sociedad civil” secularista.

Las diferencias acerca de cómo gestionar y orientar las actividades de las asociaciones de derechos humanos propiciaron numerosos conflictos y escisiones, sobre todo en el seno de la organización matriz (la OEDH), que entre 1990 y 1996 se vio envuelta en diversas luchas por el control de la asociación, y cuyos disidentes o desencantados fundaron nuevos centros. Desde la genérica defensa de los derechos humanos, muchos activistas se especializaron. Gran parte de ellos lo hicieron en la defensa y asistencia a los prisioneros. Así nacieron a primeros de los 90 el Centro al-Nadim para la Rehabilitación de los Detenidos, fundado por la abogada Suzanne Fayad, el Centro de Derechos Humanos para la Asistencia a los Prisioneros, fundado por Mohammed Zaraa, o el Centro para la Defensa de los Prisioneros de Pensamiento, entre muchos otros. Más adelante se crearon numerosas organizaciones relacionadas con aspectos concretos de los derechos y libertades políticos y civiles: en defensa de la libertad de creencia y de pensamiento, en defensa de los “derechos personales” (los derechos de los coptos), por la independencia del poder judicial, por los derechos de las mujeres (como el Centro de Estudios de la Nueva Mujer), etc. La lista sería muy larga: según los datos oficiales del Gobierno egipcio, en 2006 había 138 asociaciones de *advocacy* o “de defensa”, un 0,3% del total, y 117 de asistencia a los detenidos¹³².

Desde mediados de los 90 comenzó a aparecer otro tipo de asociaciones, diferenciado por sus objetivos. El periodo anterior había estado marcado por la violencia entre el islamismo armado y el Gobierno, y el siguiente lo iba a estar por los efectos económicos y sociales de la liberalización económica, y algunos sectores de izquierdas se movilaron para crear, bajo el estatuto jurídico de empresas sin ánimo de lucro, organizaciones que defendieran los derechos económicos, sociales y laborales ante la inoperancia de los partidos políticos y los sindicatos oficiales, e incluso dada cierta negligencia sobre estos derechos por parte de las organizaciones de derechos humanos iniciales.

Como ya hemos apuntado, a finales de 1996 fue creado el Centro La Tierra para los Derechos Humanos (مركز الأرض لحقوق الإنسان, en adelante Al-Ard), para dar respuesta a los efectos de la liberalización económica en la agricultura, y en particular a los de la ley de

¹³² CAPMAS 2006. Citado [sic] por Yacoub (2011: 389).

liberalización de los arrendamientos agrícolas de septiembre de 1997. Dicho centro proveería hasta hoy de asistencia legal e información a los campesinos, y a cualquiera interesado por sus condiciones de vida y las violaciones de sus derechos, pero, sobre todo, buscaba y busca animar y orientar a los campesinos a organizarse para defender ellos mismos sus derechos¹³³. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los fundadores de la asociación y de sus miembros no son campesinos ni agricultores, sino activistas de otras profesiones. Sin pretender ser él mismo una organización de tipo sindical, Al-Ard busca llenar la histórica carencia de un movimiento asociativo campesino independiente del Estado.

En el caso de los derechos de los obreros, la situación era relativamente diferente a la de los campesinos. La larga tradición de defensa de un sindicalismo de izquierdas independiente del Estado nunca se había interrumpido, y desde principios de los 90 sus promotores se habían separado del partido Tagammu. La principal novedad de la década fue que algunas de las nuevas organizaciones también buscaron un estatuto legal en la ley de empresas civiles.

A principios de los 90, Kamal Abbás, líder sindical de las protestas de los 80 -y despedido de su puesto de trabajo por ello-, y Yusuf Darwich, histórico dirigente comunista, entre otros, fundaron el Centro de Servicios Sindicales y Obreros (دار الخدمات النقابية والعمالية), con secciones en los históricos enclaves obreros de Helwán, y Mahala al-Kubra y en las nuevas zonas industriales de Madinat Náser. Otros centros de similar orientación nacerían en diversos lugares de concentración obrera, como los centros Al-Fagr (“El Amanecer”), que no ocultaban su inspiración en las organizaciones izquierdistas del mismo nombre de los años 30 y 70. A dichas organizaciones locales se uniría más adelante, en agosto de 2001, como veremos, otra orientada a coordinar a las primeras, a los trabajadores y a todos aquellos que quisieran colaborar en defender sus derechos: el Comité de Coordinación de los Derechos y Libertades Sindicales (اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية), promovido por Saber Barakat -encarcelado en varias ocasiones en los 70 por sus actividades sindicales- y Jaled Ali Umar, entre otros.

A diferencia de otras organizaciones, las de defensa de los derechos de los obreros se enfrentarían al hostigamiento de la policía y a una permanente carencia de recursos.

¹³³ El Centro La Tierra para los Derechos Humanos tiene actualmente (septiembre de 2015) la siguiente dirección en internet: <http://www.lchr-eg.org/>. No obstante, todavía puede encontrarse su sitio anterior en la Red: <https://goo.gl/1INAKg>.

8.6 AUMENTO DE LA COERCIÓN POLÍTICA Y SOCIAL

La práctica desaparición de la actividad armada del islamismo radical puso al descubierto el aumento de las tensiones sociales veladas en los años anteriores y el deterioro de las estructuras políticas o parapolíticas de gestión y evacuación de dichas tensiones, provocado por los años de enfrentamiento armado con los islamistas en los que el régimen político egipcio había neutralizado a todos sus adversarios.

El descontento se había incubado durante varios años, e iba a recibir un fuerte empujón con la crisis financiera en la que Egipto iba a verse envuelto de nuevo a partir de finales de 1998, agravada por la crisis financiera mundial, de origen asiático, por la subida de los precios de los cereales y por el descenso de los precios del petróleo. Tras desposeer de las tierras que explotaban a cientos de miles de campesinos mediante la ley de liberalización de los arrendamientos agrícolas, plenamente implementada en septiembre de 1997, el Gobierno avanzó en la privatización de las empresas públicas. Con los ingresos de las ventas de estas, tan solo en 1998 financió el paso a la jubilación anticipada de 200.000 trabajadores del sector público, cerca de un 25% del total (Clément 2011: 613). El aumento de la coerción política y policial sobre el conjunto de la sociedad hacía prever la crisis del régimen y la crisis del Estado que se manifestaría ya con total claridad en los primeros años del siglo XXI.

8.6.1 El caso Al-Kocheh. Un ejemplo paradigmático de ONG, prensa y régimen ante la violación de los derechos humanos

Incluso las personas más familiarizadas con el salvajismo y la gratuidad de las prácticas represivas de las fuerzas de seguridad egipcias quedaron fuertemente impresionadas por la magnitud del atropello cometido por éstas contra toda una colectividad en el verano de 1998. Entre el 15 de agosto y el 10 de septiembre, la policía detuvo y torturó a cientos de personas -hombres, mujeres, niños y ancianos- de la ciudad de Al-Kocheh, en la provincia de Sohag, en su intento por resolver el asesinato de dos jóvenes el 14 de agosto. La Organización Egipcia de Derechos Humanos (OEDH) fue la primera en dar cuenta de estos hechos el 28 de septiembre, citando tanto los nombres y edades de las víctimas como las de los oficiales de policía implicados¹³⁴. Las dimensiones de los abusos llevaron posteriormente a Al-Kocheh a numerosos medios internacionales.

Entre 50 y 60 personas fueron arrestadas cada día en esas semanas. Steve Negus,

¹³⁴ Egyptian Organization for Human Rights: "Collective punishment in Al-Kosheh village. Random arrest, torture and degrading treatment of citizens", 28 de septiembre de 1998.

corresponsal de *Middle East International*, se entrevistó con 54 personas que declararon haber sido víctimas de la sevicia policial¹³⁵: muchas de ellas tenían cicatrices; numerosos hombres afirmaron que sus esposas, madres, hermanas o hijas habían sido amenazadas de violación; la mayoría relataron haber sido colgados de las manos y los pies, y mantenidos así durante tres o cuatro días sin alimento ni bebida; otros aseguraron haber pagado dinero para ser tratados bien o evitar que sus familiares fueran arrestados. Dos hermanas de 12 y 14 años dijeron que habían sido despojadas de sus ropas y recibido descargas eléctricas en los pechos y los genitales. El hijo de 10 años del elegido por la policía como principal sospechoso habría sido llevado al desierto con los ojos vendados y con una pistola en la cabeza, amenazándole de muerte si no “confesaba” que su padre era el asesino. Una mujer habría visto cómo su hijo de tres meses era arrojado al suelo delante de ella. Incluso la madre de una de las víctimas cuyo asesinato se pretendía esclarecer declaró que la policía le vendó los ojos y la maniató mientras le preguntaba quién había matado a su hijo.

Pese a lo flagrante del caso, este tal vez no habría adquirido notoriedad pública - como sucedía con otros cualitativamente, aunque no cuantitativamente, similares- de no ser porque el obispo local de la comunidad copta, monseñor Wisa, tomó cartas en el asunto. La habitual impunidad de la policía durante largos años, junto al carácter particularmente humillante de muchas torturas, había hecho que los ciudadanos no denunciaran las torturas, en particular en el Alto Egipto, escenario de los peores enfrentamientos con los islamistas. Pero el obispo Wisa, tras dirigirse a altas instancias policiales e inhibirse estas, acudió a la OEDH, de donde el asunto pasó a la esfera pública nacional con muchas dificultades. Los grandes medios de comunicación egipcios corrieron inicialmente un tupido velo sobre el suceso, y únicamente *Al-Ahali* y *Al-Watani* (medio controlado por la iglesia copta) informaron sobre él. Pronto recibieron la firme amenaza de la Administración de que si reincidían se encontrarían con serios problemas. Se daba la circunstancia de que la mayoría de los torturados eran coptos, como lo eran las dos personas asesinadas, porque también lo era la mayoría de los habitantes de Al-Kocheh, y el obispo Wisa creía en una motivación religiosa para los malos tratos de la policía -una idea desestimada por la mayoría de los observadores, y entre ellos la OEDH. El obispo afrontaría más tarde un proceso judicial motivado por la clásica acusación de “dañar la unidad de la patria y la paz social”, y el Parlamento afirmaría firme y pomposamente que “ningún ciudadano egipcio sufre tortura o persecución”.

No obstante, el caso saltó rápidamente a la prensa internacional y fue aireado durante meses, tanto por las organizaciones de defensa de los derechos humanos internacionales como por los grupos cristianos hostiles al Gobierno egipcio, provocando la

¹³⁵ *Middle East International*, 16 de octubre de 1998, págs.13-14.

irritación del Gobierno. Como señalaron el 9 de noviembre más de media docena de organizaciones de derechos humanos egipcias, tal impacto internacional habría sido reducido si las autoridades hubieran emprendido rápidas acciones legales contra los responsables de las torturas, y si la prensa egipcia “hubiera afrontado mínimamente sus responsabilidades profesionales y nacionales al lado de la dignidad de la gente”¹³⁶

8.6.2 Persecución de los personajes molestos de la sociedad civil

A finales de los 90, el régimen egipcio quiso enviar algunos mensajes claros a la “sociedad civil”. La amenaza del islamismo armado había concluido, la “sociedad civil” era menos necesaria, y ahora que el régimen egipcio pretendía dar una nueva imagen de sí mismo no iba a consentir que una parte de aquella se la estropeará o traspasara los límites que regían para partidos, sindicatos y asociaciones.

El primer objetivo elegido fue Hafez Abu Saada, presidente de la OEDH, que había aireado los sucesos de Al-Kocheh, quien fue detenido desde el 1 hasta el 6 de diciembre de 1998, bajo la acusación de haber recibido 25.000 dólares de la embajada británica en dicho año sin la preceptiva comunicación a las autoridades, y “con el fin llevar a cabo actos que dañan los intereses nacionales de Egipto, diseminando información falsa”¹³⁷. El caso de Abu Saada “dormiría” en los tribunales hasta el 13 de febrero de 2000, cuando la el Fiscal General decidiría transferirlo al Alto Tribunal de Seguridad del Estado, en el mismo momento en que la OEDH se aprestaba a sacar un informe sobre los enfrentamientos presuntamente confesionales que se habían producido en enero de 2000 precisamente en Al-Kocheh, en los que habían fallecido 21 coptos y 1 musulmán.

El segundo objetivo de las autoridades egipcias fue Saad Eddín Ibrahim. Este profesor había puesto sobre la mesas numerosos asuntos espinosos y había sorteado situaciones difíciles; era una persona muy influyente, contaba con numerosos contactos locales -había sido profesor de Suzanne Mubarak- e internacionales y, sobre todo, siempre había intentado mostrarse como alguien que buscaba reformar el poder y el sistema político mediante una “relación dialéctica” con él, alguien que evitaba el enfrentamiento directo. En la entrevista que celebramos con él en el verano de 1995 nos había relatado

¹³⁶ “Those Responsible for the Events of Al-Kosheh Must Pay the Price”, Comunicado de Prensa del 9 de noviembre de 1998, firmado en El Cairo por la OEDH y otras ocho organizaciones (<http://goo.gl/FmKDKt>, consulta del 20 de septiembre de 2015).

¹³⁷ Amnesty International UK, “Hafez Abu Sa'ada returns to Egypt: Authorities must now stop harassment of human rights defenders”, *Press Release*, 9 de marzo de 2000 <http://goo.gl/5hXIXe>, consulta del 18 de mayo de 2002).

cómo durante los meses de mayo y junio anteriores había pasado de vivir el cerco de la policía a su centro de estudios Ibn Jaldún a saltar a las páginas de *Al-Ahram*, las pantallas de televisión egipcias y el propio palacio presidencial (Barreda 1996b).

Saad Eddín Ibrahim fue detenido el 30 de junio de 2000 junto a 27 miembros del Centro Ibn Jaldún, y retenido durante 45 días para ser interrogado. El 21 de mayo de 2001 fue condenado a cinco años de prisión. En febrero de 2002 un Tribunal de Apelación ordenó su puesta en libertad a causa de las irregularidades del proceso en el que había sido condenado, que ordenó repetir. El 29 de julio fue de nuevo condenado, esta vez a siete años de prisión, en un juicio apresurado. El 3 de diciembre, este último fallo fue de nuevo rechazado por un tribunal de apelación a causa de sus irregularidades. En su tercer y último juicio, Ibrahim fue finalmente absuelto y liberado en marzo de 2003.

El juicio a Saad Eddín Ibrahim adquirió una repercusión extraordinaria, sin duda por los numerosos e importantes contactos que él tenía. La Unión Europea y el propio Georges Bush habían pedido su liberación, por no citar a decenas de otros organismos internacionales. A las vistas de sus juicios acudían decenas de diplomáticos extranjeros como medida de presión. Sin embargo, el régimen egipcio mostró un particular empeño en “escarmentar” a Ibrahim, y lo mantuvo en prisión durante casi tres años, un caso absolutamente insólito bajo el mandato de Mubarak en lo que toca a los opositores o adversarios intelectuales.

Una de las principales acusaciones que se dirigieron inicialmente contra el profesor fue haber recibido sin autorización gubernamental fondos de la Unión Europea y de otras instituciones para su proyecto de seguimiento de las elecciones legislativas de 1995. Posteriormente se le acusaría de dañar la imagen de Egipto en el exterior con algunas de sus actividades e informaciones sobre los coptos y de espionaje a favor de Estados Unidos. Había muchas actuaciones de Ibrahim que podían haber molestado al poder político, pero él siempre afirmó que la razón de su persecución fue un artículo que publicó en 1999 en la revista *Al-Mayalla* (المجلة) en el que hablaba de la orientación de algunos regímenes árabes hacia la *gumlukiyya*, la república-monarquía, o hacia la sucesión de los presidentes republicanos por sus hijos, y en el que insinuaba que Mubarak podría estar pensando en el asunto¹³⁸.

8.6.3 Descontento de la *intelligentsia* y aumento de la violencia social.

El deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores iba a tardar unos años en

¹³⁸ سعد الدين إبراهيم: "فرق موت مبارك حاولت اغتيالي بعد الجموكية"، *المجلة*، ٢٦ أبريل ٢٠١٢.

manifestarse políticamente, pero el malestar social estaba ahí, y afectaba también a los sectores de la *intelligentsia*, que en los años anteriores habían puesto entre paréntesis su oposición y sus críticas al Gobierno. El Informe Estratégico Árabe sobre 1999 (IEA 1999) es extraordinariamente revelador en este sentido, por mostrar la evolución de la *intelligentsia* más propiamente dicha: aquellos investigadores y profesores, politólogos y sociólogos, que constituían el *think tank* oficioso del Gobierno, y que en los años anteriores habían hecho prácticamente desaparecer del informe las cifras detalladas de la violencia política y habían incluido a los Hermanos Musulmanes en el mismo apartado de las fuerzas islamistas radicales y a las protestas laborales en el apartado de “violencia” o “violencia social”. El informe no había dejado de dar, valga la redundancia, información, pero sin embargo en 1999 elevó mucho el nivel de la crítica.

Basta con leer el índice de los grandes titulares de la sección dedicada a Egipto en el IEA 1999 para observar este cambio de actitud o, si se quiere, “editorial”:

“La atención a los cambios ministeriales descubre la debilidad de la conciencia general”

“Crecientes esperanzas en la reforma parlamentaria”

“Incremento de los problemas de coordinación entre las fuerzas de la oposición”

“Exacerbación de la crisis estructural de los partidos”

“Hacia un diálogo serio sobre la pluralidad en los sindicatos profesionales”

“Las asociaciones civiles, presas de la confusión y del control sobre ellas”

“La ley no está por encima de todos”

“Entre la recuperación del prestigio del Estado y el rencor social”

“Hacia una comprensión más profunda de la violencia social”

“La violencia social en el corazón de las escuelas”

“La violencia institucional alimenta la violencia social”

“Una reforma judicial para recuperar el prestigio del Estado”

“La brecha entre la política de medios de comunicación y la práctica efectiva”

“Necesaria reforma de la radio y de la televisión”

Solo los titulares del IEA ya apuntaban a una crisis del régimen político, una crisis del Estado y una crisis de sociedad, pero su contenido denotaba, además, una inusitada agresividad hacia las autoridades y un no menos novedoso señalamiento de algunos “sectores sociales”. En la introducción a la cuestión de la violencia, manifestada de manera particular por la proliferación de grupos de *baltaguiyya* (“matones, delincuentes”, en

ocasiones a sueldo) el IEA 1999 (pág. 212) señalaba de manera mucho más directa lo que había apuntado en 1997:

“El poder ejecutivo siempre adopta las soluciones más fáciles (...) La extensión del fenómeno de los *baltaguiyya* no es más que un síntoma epidérmico de una enfermedad crónica que avanza cada día (...) Las violaciones de la ley de los grandes, detentadores de influencia gracias al poder político, la riqueza o la inmunidad parlamentaria no son menos graves que las de los pequeños *baltaguiyya* con antecedentes penales (...) el problema se extiende a los grupos de la cúspide de la sociedad que utilizan a aquellos”.

Y para introducir la cuestión del “rencor social” y el papel de los medios, el IEA (1999: 214) señalaba:

“El prestigio del Estado no puede reducirse a algunas zonas de la costa norte como Marina, que parece haberse convertido en el escándalo de moda¹³⁹ (...) Quien lee algunas publicaciones tiene la impresión de que la ley solo se viola en Marina, o que en ella se viola más que en otros lugares (...) Marina no es una isla aislada. Quienes pasan el verano en Marina pasan el resto del año en El Cairo practicando conductas que violan la ley (...) Quienes así escriben provocan un rencor social muy dañino”.

Posteriormente, el informe se extendía en aclarar que la posesión de riqueza y/o influencia política no era sinónimo de su adquisición ilícita, de su uso ostentatorio, de su derroche o de su uso para sortear las disipaciones legales o amedrentar a la policía, actitudes en las que no incurrían todas las elites, pero el mensaje estaba claro (págs. 215-216).

En cuanto a la violencia de los *baltaguiyya*, el IEA mencionaba un informe del Centro Nacional de Investigaciones Sociales y Criminológicas que señalaba que de los 5.000 actos de violencia o criminales atribuidos a ellos en 1998, más del 70% habían sido cometidos por habitantes de las zonas de urbanización espontánea y marginal, y señalaba la existencia de 92 zonas de ese tipo tan solo en El Cairo y sus alrededores, que acogían a 2,5 millones de personas, y de 69 en Alejandría. Dichas zonas constituían “una sociedad paralela” a la del resto de las zonas urbanas (IEA 1999: 217).

Más adelante, el IEA 1999 señalaba el incremento de la violencia entre los

¹³⁹ Los autores aluden a la acomodad y desenfrenada vida que en la aldea turística de Marina llevaban las elites sociales de la época en verano, y en particular sus hijos, y que fueron constante objeto de escándalo en 1999. En particular se señaló que algunos hijos de las elites ignoraban las instrucciones de la policía, e incluso intimidaban a los agentes, llegando incluso a agredirlos.

estudiantes (págs. 219-223), y finalmente apuntaba, señalando diversos casos, a la extensión de la arbitrariedad y brutalidad como una de las causas de la violencia social, junto a las causas económicas y sociales (págs. 223-224), y pedía una reforma del poder judicial y una mayor independencia de la Fiscalía General del Estado (págs. 325-332).

Finalmente, cabe destacar que el IEA se extendía en constatar el mantenimiento del bloqueo de las actividades de los sindicatos profesionales a causa de las interferencias judiciales, y el estrechamiento del cerco político sobre las asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales. Pero quizás lo más significativo de sus páginas sobre las organizaciones de la sociedad y política fuera su análisis de la situación de los partidos políticos.

8.6.4 Los partidos desaparecidos. Los “jóvenes” buscan reorganizarse.

Por primera vez, el IEA 1999 se permitía un tono escéptico y casi irónico para constatar el “retroceso de la dualidad Gobierno-oposición”. Ante el plebiscito para la reelección presidencial de Hosni Mubarak en octubre de 1999, únicamente el Partido Naserista había manifestado su voto de rechazo. El Wafd había decidido apoyar a Mubarak, olvidando sus pasadas y recurrentes demandas en el sentido de una reforma política global que le habían hecho votar “no” en 1993, mientras que el Tagammu había decidido abstenerse, o como decía el IEA, “abstenerse de oponerse” al régimen. Incluso el Partido del Trabajo había retrasado su toma de posición oficial, pero su presidente, Ibrahim Chukri, manifestó su voto favorable, y en ello lo acompañaron diversos dirigentes de su Comité Supremo. No obstante, según el informe ese fue el aspecto menos indicativo de la modificación de las posiciones de los partidos. Entre otros aspectos, el IEA destacaba sus posturas ante el caso Magdi Ahmad Husein-Wali (IEA 1999: 278-281).

Husein había emprendido en 1999 su enésima campaña contra un dirigente del régimen, y en esta ocasión había elegido un auténtico pez gordo: Yusuf Wali, secretario general del PND, vicepresidente del Gobierno y ministro de Agricultura. Husein acusaba a Wali de favorecer la “normalización” de las relaciones con Israel, de permitir la importación de carnes en mal estado y de falta de control sobre los tratamientos hormonales cancerígenos dados a los animales de consumo en Egipto. Demandado por Wali, Husein hubo de afrontar un proceso que le llevó a prisión por primera vez entre 1999 y 2000. No obstante, en esta ocasión no contó con el apoyo de la oposición: el Tagammu se negó a dar a Husein el apoyo legal que este le solicitó, aunque fuera a efectos simbólicos, mientras que Nuamán Guma, vicepresidente del Wafd, fue más allá, encabezando el equipo de abogados de Wali. En cuanto al propio Partido del Trabajo, en nuestra opinión muchos de sus dirigentes dieron su apoyo a Mubarak en 1999 por temor a las iras de aquel,

abandonando a su suerte a Magdi Ahmad Husein con la intención de salvar el partido, lo que no consiguieron, pues en mayo de 2000 sus actividades fueron congeladas por un tribunal, que invocó las ya antiguas disputas en el seno de aquel por ostentar su presidencia. En septiembre de 2000, la Comisión de Partidos Políticos prohibía la aparición de periódico del PT, *Al-Chaab*.

Por último, el IEA sobre 1999 detectaba como fenómeno general una actividad “rebelde” y una nueva actitud de los que llamaba “los jóvenes” relacionados con organizaciones políticas. El propio informe usaba las comillas, pues en el contexto político egipcio eran jóvenes quienes estaban más cerca de los 40 que de los 50, mientras que quienes estaban entre los 50 y los 65 eran a veces denominados “la generación intermedia”, y los grandes dirigentes se situaban, como ya hemos señalado, por encima de los 70 e incluso de los 80 años (como Ibrahim Chukri, del PT, con 83 años en 1999; Fuad Serag Eddín, del Wafd, con 89 años; o Jaled Mohai Eddín, del Tagammu, con 77 años).

Los jóvenes del Partido Naserista, descontentos con el dominio sobre el partido de los antiguos dirigentes relacionados con el poder durante el régimen de Náser, con su funcionamiento jerárquico y con su complacencia con el régimen de Mubarak, se habían ido apartando del partido e intentando formar otras organizaciones. La que perduraría sería Al-Karama (“La Dignidad”), dirigida a partir de 1997 por Hamdín al-Sibahi, un periodista nacido en 1954 que había sido dirigente estudiantil en los años 70 y que en 1997 había sido detenido por participar en manifestaciones de apoyo a los campesinos afectados por la liberalización de los arrendamientos agrícolas. Además de por su mayor proximidad “al hombre de la calle” que los partidos autorizados, Al-Karama se caracterizaría por sus llamas a fuerzas políticas de otras ideologías a colaborar, aunque en principio fueran desatendidas.

Junto a las escisiones en las filas naseristas, la continuidad de la actividad de Al-Wasat (no autorizado, como el resto de los proyectos de partido a los que nos referimos en estas páginas), y el abandono por parte de muchos de sus miembros de los Hermanos Musulmanes confirmaron que también en las filas islamistas “moderadas” un sector de los “jóvenes” se encontraba disconforme con las maneras de pensar y actuar de sus mayores. Incluso de organizaciones islamistas radicales surgieron intentos para incorporarse a la vida política mediante la formación de partidos: Al-Islah (“La Reforma”), por exdirigentes de la Gamaa Islamiyya y Al-Yihad, y Al-Charía por exdirigentes de Al-Yihad. El programa fundacional de Al-Islah, según el IEA (1999: 291-292) portaba un rechazo explícito a las actividades violentas y señalaba que “los jóvenes de Al-Islah [comillas del IEA citando el programa] «pretendían presentar puntos de vista políticos nuevos a la opinión pública egipcia mediante un nuevo partido político que apostaba por la reforma pacífica a través de las instituciones del Estado, intentando convencer a los jóvenes en general, y a los jóvenes

islamistas en particular, de que abandonaran la violencia»”.

Finalmente, el IEA reseñaba los esfuerzos de “la generación marxista de los 70”, que había promovido las protestas estudiantiles de los primeros años de esa época, por reconstituir un movimiento unido tras su desencanto con el Tagammu y el fallido intento de mantener las organizaciones comunistas clandestinas, si bien dichos esfuerzos no habían llevado a buen puerto a finales de los 90 (IEA 1999: 290-291).

9. LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DEL AÑO 2000

9.1 LA SORPRESA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: SUPERVISIÓN JUDICIAL DE LAS ELECCIONES

Con los partidos de la oposición existentes habiendo dado su apoyo a Mubarak en los años anteriores, el Partido del Trabajo y su diario eliminados de la contienda política, los Hermanos Musulmanes y las corrientes islamistas sometidos a una estrecha vigilancia, y el tejido asociativo más politizado amenazado por la legislación y sobre aviso tras los casos de Hafez Abu Saada y Saad Eddín Ibrahim, las elecciones legislativas en principio previstas para finales de 2000 se acercaban sin despertar ningún entusiasmo ni expectación en los medios políticos egipcios. Pero el 8 de julio de 2000 el Tribunal Constitucional sorprendía a todos los observadores al fallar que los procesos electorales en los colegios de voto solo podían ser supervisados por magistrados. Era esta una demanda ya antigua de la oposición y la sociedad civil, y parecía en concordancia con el espíritu de la Constitución. La sorpresa fue mayor cuando se observaron los preparativos del Gobierno para respetar el fallo y aplicarlo en las elecciones ya próximas.

El Ministerio de Justicia dedicó 120 millones de LE para reorganizar el proceso electoral. Los magistrados recibieron formación para su nueva misión y se reestructuraron las fases del proceso y los colegios electorales para salvar la dificultad que el Gobierno había puesto como excusa para no aplicar el control judicial en las elecciones anteriores. En 1995 hubo 40.000 colegios electorales, mientras que en el año 2000 había 9.000 jueces, de los que cerca de 6.000 se dedicarían a velar por el correcto desarrollo del proceso, para lo que se redujo el número de colegios a aproximadamente la mitad. El proceso electoral se dividió por zonas geográficas y en tres fases de diez días cada una, consistiendo cada fase en dos vueltas cuando ningún candidato obtenía el 50% de los votos en la primera. La primera etapa afectaría a la mayor parte de las provincias de la costa del Mediterráneo y del Canal de Suez y a algunas del Alto Egipto; la segunda, al grueso del Delta y las

provincias semidesérticas del Sinaí, el Mar Rojo y Asuán, además de Damietta; la tercera a El Cairo, Guiza y una mezcla de provincias de distintas localizaciones.

Aunque en la supervisión de las elecciones también participaron miles de funcionarios del Ministerio de Justicia, poco fiables en general en su imparcialidad, durante el proceso de votación un gran número de jueces cumplieron con su labor con independencia, por lo que, a pesar de que se produjeron muchas otras circunstancias que no permiten calificar las elecciones de libres, y que analizaremos a continuación, el fraude se redujo considerablemente. Las elecciones se celebraron entre el 18 de octubre y el 14 de noviembre, con más de un mes de anticipación respecto a los plazos, y el Gobierno mostró una gran claridad de ideas sobre cómo reorganizar el proceso electoral. Los resultados oficiales cobraron, además, una novedosa representatividad en lo que se refiere al porcentaje de participación en los comicios.

En nuestra opinión, resulta impensable que el fallo del Tribunal Constitucional se produjera sin una cierta coordinación con el régimen político. Cuando menos, el Alto Tribunal debió avisarle previamente de cuál iba a ser el sentido de su decisión, como ya había hecho antes cuando anuló los resultados de las elecciones de 1984 (véase el capítulo III 5.1). No obstante, lo más llamativo es que el recurso de inconstitucionalidad que llevó al fallo en el año 2000 había sido presentado nada menos que en 1990. No se trata de descartar que los miembros del Tribunal Constitucional fueran sensibles a las demandas de la sociedad para implementar la supervisión judicial de las elecciones, y en particular a las demandas del propio colectivo de los jueces, de las que se había hecho eco sus asociación profesional, el Club de Jueces, ni mucho menos de afirmar que no siguieran un criterio jurídico, sino de señalar, como ya hemos hecho anteriormente, que los magistrados tal vez compaginaban, a juzgar por la trayectoria histórica del tribunal, los avances en la “recta” interpretación de la Constitución con consideraciones acerca de la oportunidad histórica de consolidar tales avances.

9.2 LOS CANDIDATOS

A las elecciones se presentaron finalmente 3.957 candidatos, un número similar al de las elecciones de 1995. De ellos, 858 pertenecían a partidos. El PND presentó candidatos en las 444 circunscripciones, el Wafd en 224, el Tagammu en 57, el Partido Naserista y el Partido Liberal cada uno en 37, el Partido del Trabajo en 20 (presentados como independientes) y el resto de los partidos un número inferior a 10, lo que demostraba una vez más que habían sido autorizados para que el abanico partidista fuera formalmente más amplio. El resto de los 3.104 candidatos se presentaban formalmente como independientes, si bien la mayoría de ellos -1.680 según el estudio realizado por Amru

Hachem Rabía (ربيع 2001)- eran o bien miembros del PND o de “su clientela”. Por otro lado, como veremos a continuación, entre 100 y 150 “independientes” podrían pertenecer a los Hermanos Musulmanes.

Por otro lado, es de destacar que a las elecciones de 2000 se presentó un número de candidatos coptos mucho mayor que a otras elecciones, pese a lo cual siguió siendo un número extraordinariamente reducido (66 candidatos) en comparación con el porcentaje de coptos del país (entre el 5 y el 10%). De ellos 12 se presentaron en las listas del Wafd y 50 como independientes (“auténticos” o miembros del PND), mientras que tan solo 3 lo hicieron como candidatos oficiales del PND. En cuanto a la representación de las mujeres entre los candidatos (114 candidatas), resultó aún más discordante respecto a su importancia numérica en el conjunto de la población (más del 50%), y lo mismo sucedió con su representación en la candidatura del partido gobernante (11 mujeres de 444 candidatos) (ربيع 2001: 184-185).

9.2.1 Los intentos fallidos de impedir la participación de los HHMM

La mayor inquietud del régimen político ante la perspectiva de una votación controlada por los jueces era la participación en los comicios de candidatos de los Hermanos Musulmanes, y puso todos los medios a su alcance para impedirla. Aparte de su intervención durante las votaciones, de la que hablaremos un poco más abajo, hay que recordar que el Partido del Trabajo había sido congelado en junio de 2000, con lo que los candidatos de la Hermandad no podían intentar presentarse en sus listas. Además, en septiembre la Comisión de Partidos había prohibido la publicación *Al-Chaab*, desde cuyas páginas se había expresado anteriormente la Hermandad. El ministro del Interior anunció que quienquiera que se presentara en nombre de los Hermanos Musulmanes sería detenido, por tratarse aquella de una organización ilegal.

A pesar de ello, la organización islamista, por medio de su portavoz, Maamún al-Hudeibi, anunció que pensaba presentar 50 candidatos a las elecciones, que finalmente fueron 73 al menos conocidos por la opinión pública (Ben Néfissa & Arafat 2005: 55-57). La policía procedió a numerosas intimidaciones y arrestos antes de la campaña electoral, que se sumaron a los practicados anteriormente contra los HHMM de los sindicatos profesionales¹⁴⁰, e impidió a los candidatos previsibles presentar sus candidaturas. Durante la campaña, imposibilitó que sus partidarios conocidos se movilizaran y realizaran cualquier tipo de acto electoral.

¹⁴⁰ El 19 de noviembre de 2000, poco después de concluir las elecciones, 15 dirigentes sindicales islamistas fueron condenados a cinco años de prisión.

No obstante, los Hermanos Musulmanes habían aprendido la lección de 1995, cuando la publicación de los nombres de sus candidatos había llevado a su neutralización. Por ello, eligieron para que se presentaran como candidatos a entre 100 y 150 de sus miembros de segunda fila -según las estimaciones- que creían desconocidos para las fuerzas de seguridad, de modo que las fuerzas de seguridad no tuvieran tiempo de investigar sobre ellos. El registro de sus candidaturas se produjo en las últimas horas de plazo. Posteriormente realizarían su campaña electoral con secretismo, convocando a pequeños grupos de ciudadanos en lugares discretos.

9.2.2 Repetición del fenómeno de los “disidentes electorales” del PND

La repetición del fenómeno del “desdoblamiento” de los candidatos del PND entre oficiales (858 candidatos en las listas del partido) y oficiosos (1.680 candidatos como “independientes”) obedecía a las mismas razones que en las elecciones de 1995 (véase el capítulo IV 6.6). Los candidatos no oficiosos eran en gran parte aquellos que habían sido rechazados para las listas oficiales.

Sin embargo, en esta ocasión, según Mohammed Saad Abu Amud (أبو عامود 2001: 60-63), en el seno del PND se había producido un debate más intenso entre los partidarios de llevar a cabo una gran “renovación” de las listas del partido y quienes defendían que esa renovación debía ser limitada. Los primeros, apoyados por la Secretaría General del partido, que “corrigió” muchas de las propuestas de las secretarías provinciales, consiguieron en apariencia imponerse, aunque en general se intentó llegar a soluciones de consenso: las listas del partido incluyeron a un 45% de candidatos que nunca habían estado en el Parlamento.

Los criterios para la “renovación” del partido fueron en teoría la juventud de los candidatos y la incorporación de un mayor número de profesionales, hombres de negocios y representantes del tejido sindical y asociativo. Según un estudio de la Universidad de El Cairo¹⁴¹, 100 candidatos tenían entre 30 y 40 años, y según otro realizado por investigadores del CEPEA (أبو ريده وأخرون 2001) sobre las ocupaciones o titulaciones profesionales reales de los candidatos (diferentes en ocasiones de la categoría electoral por la que se presentaban), en la lista definitiva destacaba de manera particular la presencia de 82 “grandes hombres de negocios” (cerca del 20%), unida a la de 37 personas que aparecían bajo la equívoca rúbrica de “profesiones liberales o propietarios de bienes”. Estos últimos debían pertenecer a un estrato social muy elevado, y no se corresponden con

¹⁴¹ Mustapha Eloui (dir): *Les élections législatives 2000* (en árabe), Universidad de El Cairo, pág. 109. Citado por Ben Néfissa y Arafat (2005: 46).

los auténticos “profesionales liberales”, pues estos aparecían diferenciados: 38 ingenieros, 11 abogados, 16 profesores universitarios, 18 profesores no universitarios, etc. Finalmente, el grupo de los funcionarios del Estado, asociados por definición al régimen, conservaba un buen contingente: 72 funcionarios del Gobierno, 26 “funcionarios de operaciones”, 37 sindicalistas obreros, 7 ministros o miembros del gabinete presidencial, 4 exministros, 8 oficiales de policía, 5 oficiales del ejército, etc. (ibid. pág. 322).

En la práctica, las listas del PND parecían más bien buscar un equilibrio entre las elites burocráticas estatales (incluidas las sindicales) y los sectores sociales emergentes. En este sentido, hay que destacar el gran grupo de importantes hombres de negocios y asociados, parte de los cuales, aunque los estudios no dan todos los detalles al respecto, nunca habían formado parte del Parlamento, como Ahmad Ezz y Mohammed Abul Ainein, nombres sobre los que volveremos en el capítulo V 3.1 porque aparecerán claramente asociados al “grupo de Gamal Mubarak”, como sin duda debían estarlo otro número importante de candidatos.

A pesar de que la dirección del PND dijo que los miembros del partido que se presentaran a las elecciones al margen de sus listas oficiales serían expulsados, nadie confiaba demasiado en que esta amenaza surtiera efecto. De hecho, la lista de candidatos oficiales no se hizo pública hasta las últimas horas del plazo para presentar candidaturas, con la esperanza de que los posibles “disidentes electorales” no tuvieran tiempo de presentar las suyas. Su esfuerzo, sin embargo, fue en gran medida inútil, como ya hemos señalado. No solo se presentaron numerosos disidentes, sino que lo hicieron declarando que lo hacían “bajo los principios del PND”, y muchos de ellos recibieron durante la campaña el apoyo de las secciones locales del partido o de gran parte de sus miembros (أبو عامود 2001: 62).

9.3 EL PROCESO ELECTORAL

La supervisión por los jueces de la votación y el recuento de los votos tuvo varias consecuencias, alguna más evidente, como la disminución del fraude en el interior de los colegios, otras más colaterales, como el traslado de éste a otras fórmulas de intimidación y compra de voluntades. También el descenso de las cifras oficiales de participación y de la violencia son posibles efectos secundarios de esta novedad del proceso electoral del año 2000, con los matices que explicamos a continuación.

9.3.1 Disminución de la violencia

Las elecciones legislativas del año 2000 se caracterizaron por una notable disminución de la violencia respecto a las de 1995. El control de los jueces sobre el proceso de votación, a pesar de que solo se produciría en el interior de los colegios electorales, pudo tener cierta influencia en este sentido. No obstante, un factor determinante fue la intervención de las fuerzas de seguridad. Por un lado, porque tras la experiencia de 1995 emprendieron una campaña previa al inicio de la campaña electoral que les permitió requisar más de 10.000 armas blancas y un considerable número de armas de fuego y munición, e incluso dismantelar talleres ilegales para su fabricación. Por otro, porque numerosos colegios electorales fueron rodeados por la policía, y aunque su objetivo principal era impedir que votaran los partidarios conocidos de los Hermanos Musulmanes y de algunos otros candidatos de la oposición, la presencia policial impidió un gran número de enfrentamientos.

Sin embargo, las propias fuerzas de seguridad, al enfrentarse a los partidarios de la Hermandad, fueron responsables de algunas de la decena de muertes que según Al-Munisi se produjeron durante el proceso, en el que además hubo más de un centenar de heridos y varios cientos de detenidos (المنيسي 2001: 213-215).

9.3.2 Participación, fraude y peso de los recursos económicos privados

La supervisión por los jueces de la votación y el recuento de los votos llevó a la práctica desaparición del fraude en el interior de los colegios electorales, aunque este continuó en el exterior. Numerosos electores no pudieron votar a causa de la intimidación y la violencia tanto de las fuerzas de seguridad como de los grupos de *baltaguiyya* contratados por algunos candidatos, sobre todo en la segunda vuelta de cada fase, donde se dirimía el resultado entre dos candidatos. En numerosos distritos, los apoderados e interventores de los candidatos de la oposición no recibieron copias de las listas electorales, con el fin de que ello dificultara la movilización de sus posibles votantes (Ben Néfissa & Arafat 2005: 41-43).

El control de las elecciones por los jueces, y la radical disminución del “trucaje desde abajo” practicado anteriormente por los encargados de vigilar el proceso de votación, hizo que se incrementara el fenómeno de la compra de votos y, sobre todo, su incidencia en los resultados finales. Según Assia Boutaleb, en las elecciones de 2000 un “candidato medio” gastó entre 3 y 5 millones de libras egipcias en la compra de votos, ya fuera

realizada monetariamente o mediante el reparto de regalos o con otros servicios¹⁴². Otros estudios estiman que el gasto total de los candidatos en las elecciones sobrepasó los 10.000 millones de LE, más del doble de los 4.000 gastados en 1995¹⁴³, gastos que los partidos no financiaban en absoluto, aunque el PND utilizara masivamente los recursos del Estado. Dichos gastos no incluían solo, por supuesto, los invertidos en la compra de votos sino también en la campaña electoral en general, e incluso la contratación de “personal de seguridad” que en general estaba compuesto por *baltaguiyya* y clientes.

Finalmente, una de las consecuencias más reveladoras del control judicial fue el descenso de las cifras de participación. El porcentaje bajó al 25%, pues votaron en los comicios cerca de 6 millones de los 24,6 millones de inscritos, aunque, como ya hemos señalado, las cifras de participación varían ligeramente según consideremos los resultados de la primera o la segunda vuelta de cada fase. De cualquier manera, el número votantes sobre el total de personas en edad de votar (27,5 millones) se situó en torno al 16%.

Los resultados parciales confirmaron, sin embargo, la diferencia de la tasa de participación entre las zonas urbanas y rurales. Así, mientras que en El Cairo y Alejandría fue, respectivamente, del 12,3% y el 7,6%, las 16 circunscripciones que arrojaron un resultado de entre el 35% y el 50% de participación eran de componente predominantemente rural (Ben Néfissa & Arafat 2005: 45, 277).

9.4 LOS RESULTADOS

9.4.1 Victoria de los “independientes” del PND y triunfo relativo de los HHMM

Los resultados de las elecciones otorgaron 172 escaños a los candidatos oficiales del PND, 181 a candidatos “independientes” del PND, 17 a los Hermanos Musulmanes, 6 al partido Wafd, 6 al Tagammu, 2 al Partido Naserista, 1 al Partido Liberal, 5 a miembros de las corrientes naseristas alternativas y 53 a candidatos no relacionados orgánicamente con ningún partido o fuerza política organizada (Ben Néfissa & Arafat 2005: 277).

El dato parcial más destacado de los resultados fue la “victoria” de los disidentes electorales del PND, que obtuvieron más escaños que los candidatos oficiales. Estos “disidentes” no constituían una fuerza coordinada y unida. Por el contrario, probablemente

¹⁴² Assia Boutaleb: “The parliamentary elections of year 2000 in Egypt: A lesson in political participation. Elections in the Middle East: What do they mean?” en Iman A. Hamdy (ed). *Cairo Papers in Social Science*, 12 (1/2). Citado por Blaydes (2011: 53).

¹⁴³ Jihad Ouda, Negad al-Borai y Hafez Abu Seada: *A Door onto Desert: The Egyptian Parliamentary Elections of 2000*. Cairo: Friedrich Neumann Foundation, pág. 66. Citado por Blaydes (2011: 56).

representaban a sectores sociales, del partido y del régimen de lo más diverso. No obstante, hablamos de “victoria” global porque estos candidatos tenían en común el oponerse a la voluntad “centralista” y “renovadora” de la alta dirección del partido. Aunque quizás sería más apropiado hablar de la “derrota” de la dirección. La voluntad política de esta se había enfrentado a la realidad social, o al menos a la “realidad social del PND”, al intentar imponer algunos candidatos no lo bastante conocidos y con no suficientes recursos económicos propios ni apoyos en el propio partido, en las instituciones y en la sociedad.

El partido gobernante no tuvo dificultades, de cualquier manera, para conformar una amplia mayoría parlamentaria. En la noche anterior a la proclamación de los resultados por el Ministerio del Interior, los gobernadores civiles de las provincias telefonearon a la mayoría de los candidatos que se habían presentado como independientes para, de manera a veces intimidatoria, confirmar que se iban a integrar en el grupo parlamentario del PND y si no, invitarles a que se unieran a él (Ben Néfissa & Arafat: 50-51). El resultado fue que los 182 disidentes electorales del PND victoriosos aceptaron, y otros 35 independientes más aceptaron ingresar en el partido, con lo que el PND tendría un grupo formado por 388 parlamentarios de 444, un 87% del total, frente al 38,7% que habían obtenido las listas oficiales.

El segundo dato destacado de las elecciones fue el éxito relativo de los Hermanos Musulmanes. Pese a obtener poco menos del 4% de los escaños, lo habían hecho en un mar de adversidades, como ya hemos explicado. Además, para evaluar su fuerza electoral hay que considerar el número de candidatos que habían presentado.

En el capítulo anterior sobre los candidatos hemos avanzado la cifra de entre 100 y 150 candidatos, que es la que presentaban Ben Néfissa y Arafat en 2005, por considerar que dichos autores podían tener una información más precisa que la disponible tras la conclusión de las elecciones. Sin embargo, hay que señalar que en 2001 Amru Hachem Rabía (ربيع 2001: 186) estimaba que el número de candidatos que habían presentado los HHMM era de tan solo de 80, lo que implicaría el éxito de más del 20% de ellos, frente al 10%-17% que correspondería a las cifras dadas por los dos autores anteriormente citados. En cualquier caso, a estos datos hay que añadir que la Hermandad se caracterizaba por una gran prudencia y tactismo, y que si no presentó más candidatos tal vez fue -como hizo en elecciones posteriores- por no forzar la situación política en el caso de que resultaran vencedores.

Utilizando el criterio del porcentaje de candidatos victoriosos respecto de los presentados, sorprende que el Tagammu, a pesar de obtener tan solo un 10%, tuvo resultados mucho mejores que los de Wafd, que consiguió el 3% de éxitos. De cualquier manera, los resultados de la oposición de partidos y fuerzas políticas organizadas en su conjunto fueron magros, pues tan solo obtuvieron 18 escaños, poco más de un 4%, y poco

más que los Hermanos Musulmanes por sí solos. Para completar el cuadro parlamentario, quedaban otros 18 candidatos independientes que se negaron a integrarse en ningún grupo parlamentario de los partidos políticos.

9.4.2 Análisis de los resultados: aviso a la dirección del PND y “privatización” de las candidaturas

En muchos sentidos resulta difícil sacar conclusiones de las elecciones de 2000. El fallo del Tribunal Constitucional exigiendo la supervisión judicial de los comicios cogió por sorpresa a todos los actores políticos (partidos, potenciales candidatos y potenciales electores), excepto tal vez, como hemos señalado, al Gobierno, y mucho más lo hizo su supervisión efectiva, cuando ya era demasiado tarde para muchos.

Si bien las cifras oficiales que señalaban la baja participación electoral cobraban una representatividad más auténtica, no es posible saber los porcentajes de participación que se habrían dado si los potenciales votantes hubieran sabido cómo se iban a desarrollar las elecciones. El escepticismo dominante respecto a su representatividad y efectividad no solo se refleja en el 75% de inscritos en el censo electoral que se abstuvieron de votar, sino también en el ligero avance que se había producido en el número de inscritos en el censo, que en 2000 era del 71,4%, cuando en 1995 había sido del 61,4% (2015 الألفي).

En cuanto a los resultados, Ben Néfissa y Arafat (2005: 49-51) estiman que reflejaron una “manifiesta voluntad de cambio”, apoyándose en que el número de diputados nuevos respecto a 1995 era del 70%, y del 61% respecto a todos los parlamentos anteriores. De la misma manera, consideran que dichos resultados suponían un “voto prudente de sanción” al PND por parte de los votantes a candidatos independientes. Estas conclusiones solo pueden ser aceptadas parcialmente, y ello si consideramos las elecciones legislativas más que como unas “elecciones generales”, como unas “elecciones para formar parte del régimen político”, el sentido que ya señalamos al hablar de las elecciones de 1995.

Para entender esta afirmación, basta con considerar que solo votó el 16% de la población en edad de votar, y un 25% de los electores inscritos, y que ese “cuerpo electoral participante” eligió -fraude incluido- a candidatos que en un 84% se integrarían en el grupo parlamentario del PND. Es cierto que ese 84% representaban aproximadamente a un 13,5% de la población en edad de votar, pero es que el 16% de quienes votaron a candidatos que no se integraría en el PND representaban a menos de un 3% de la misma población.

Circunscrita en lo esencial por la fuerza de los números la cuestión del “cambio” y la “sanción” al PND, y al margen de los procedimientos y las lógicas en virtud de las cuales los parlamentarios obtuvieron sus escaños (esencialmente lógicas clientelistas, ya se

obtuviera el voto a cambio de dinero o de servicios), el resultado fue que una parte mayoritaria de los votos que acabarían beneficiando al PND sí que pudo reflejar “un voto prudente de sanción”, pero no al PND en cuanto tal sino de sanción a la dirección central o la alta jerarquía del partido por parte de quienes, a fin de cuentas, por las razones que fuera, formaban parte de su base social electoral y de sus apoyos en general.

Porque la cuestión del cambio y la renovación es muy diferente. No sabemos a ciencia cierta, dado que los estudios no lo indican, qué porcentaje de diputados nuevos procedían de las listas oficiales del PND y cuáles de otras procedencias, pero el análisis de la composición final del Parlamento según las adscripciones profesionales de sus miembros muestra una estructura social muy similar a la tradicional de otras cámaras si obviamos la presencia de 77 hombres de negocios y 12 “banqueros”: 107 eran “funcionarios públicos”, 6 eran ministros, 5 exministros, 22 eran “hombres de los consejos locales”, 21 eran exoficiales de policía y 6 exmiembros de las Fuerzas Armadas. Todas estas categorías trabajaban para el Estado, y a ellos podría sumarse un gran número de quienes figuran como ingenieros, médicos, profesores e incluso banqueros, según los comentarios de Abu Rida a los datos de su estudio, del que hemos tomado los datos (أبو ريدة 2001: 338). La estructura social del Parlamento según estos datos ni siquiera era muy diferente de la estructura social de la lista presentada por el PND, que hemos mencionado más arriba, de no ser porque la categoría “sindicalistas obreros”, o simplemente “obreros”, había quedado disuelta bajo el apartado de “otros”, que reunía a los grupos profesionales menos representados.

En realidad, el dato más significativo de la “renovación” del Parlamento fue la duplicación del porcentaje de hombres de negocios (17%) respecto a las elecciones de 1995 (8,1%). Además, de los 77 hombres de negocios de la nueva Cámara, 55 eran diputados por primera vez, y solo 9 lo habían sido en más de una ocasión (أبو ريدة 2001: 338, 340). Estos datos reflejan el ascenso político de una clase en claro progreso económico y de influencia social. Dicho ascenso político era facilitado, como hemos señalado más arriba, por la creciente importancia de la riqueza particular en la determinación del resultado de las elecciones. La falta de procedimientos que permitieran a los candidatos hacer propaganda electoral bien en los medios de comunicación estatales bien de otra manera sin afrontar personalmente los gastos, había llevado a una suerte de privatización de las elecciones ya apuntada en 1995.

De esta manera, las elecciones legislativas eran un terreno de competición en el que un gran número de candidatos competían por muy pocos votos desde posiciones muy desiguales. En todo caso, la gran mayoría competía, gracias a su apoyo institucional, estatal o local, o gracias a sus recursos económicos, por acceder al régimen político y a la influencia en él y, por ende, a los recursos del Estado.

No obstante, a pesar de sacar adelante su mayoría parlamentaria, a las altas instancias del régimen político no les pasaría desapercibida la fragilidad de su constantemente recompuesta alianza de poder y de su apoyo social, ni tampoco la constancia del apoyo a quienes, por su popularidad, parecían ser sus únicos adversarios políticos: los Hermanos Musulmanes. En el siglo XXI, el régimen intentaría por ello recomponer sus alianzas y ganar apoyo en circunstancias, sin embargo, crecientemente difíciles.

10. CONCLUSIONES

10.1 LA VIOLENCIA DEL ISLAMISMO RADICAL. DESAFÍO Y VENTANA DE OPORTUNIDAD PARA EL RÉGIMEN

La violencia del islamismo radical contra el Estado o sus intereses supuso objetivamente una “ventana de oportunidad” para el régimen de Mubarak. Iniciada en 1987, en gran medida como respuesta a la llegada al Ministerio del Interior el año anterior de Zaki Badr, resulta tentadora la hipótesis de que el régimen egipcio no viera con malos ojos una cierta exacerbación del recurso a la fuerza de algunos sectores del islamismo radical con el fin de justificar el cierre del sistema político formal tras seis años de apertura. No de otra manera parece poder explicarse la llegada y el mantenimiento en el cargo de ministro del Interior hasta enero de 1990 del “bombero pirómano” que era Badr, quien sustituyó a Ahmad Ruchdi, considerado en los medios políticos egipcios el mejor ministro del Interior de toda la época de Mubarak por su cauta gestión de las relaciones con la oposición en general. La actuación de Zaki Badr no solo contribuyó a alimentar la violencia del islamismo armado, sino que influyó decisivamente en el deterioro de las relaciones entre el régimen y las fuerzas de la oposición que, junto al nulo avance de la apertura del sistema político formal desde 1988, acabaría conduciendo a que boicotearan las elecciones legislativas de 1990.

Reavivada con fuerza a principios de 1992, la violencia del islamismo radical alcanzó su paroxismo entre los años 1992-1994, si bien se mantendría hasta 1997. Durante toda esta década le sirvió al régimen de Mubarak en dos sentidos: por un lado, le valió de argumento para estrechar el control sobre su principal adversario, el islamismo político “moderado” representado por Hermanos Musulmanes; y por otro, hizo de cortina de humo ante la adopción del plan de estabilización y ajuste estructural de la economía que conduciría a la liberalización económica. Son éstas otras “ventanas de oportunidad” que el islamismo armado abrió al régimen de Mubarak.

El temor a una convergencia en torno al uso de la fuerza entre el islamismo radical y los Hermanos Musulmanes para derrocar al régimen puede parecer razonablemente justificado, pero los hechos muestran que el régimen de Mubarak no debía tener y nunca tuvo realmente ese temor. De hecho, el régimen de Mubarak casi nunca atacó policial ni judicialmente a la Hermandad con la acusación de colaborar con los grupos que efectivamente utilizaban la violencia y el terrorismo dentro de Egipto, aunque en la segunda década de los 90 les acusara de formar sus propios grupos armados en el exterior

del país. Por el contrario, los Hermanos Musulmanes seguían sirviendo de barrera de contención frente al islamismo radical al tiempo que suponían una amenaza política materializable mediante instrumentos políticos.

El dominio por la Hermandad de los principales sindicatos profesionales, consolidado en los primeros años 90, recibió la respuesta de la Ley 100 de 1993, respuesta relativamente tardía y cauta que surtiría sus efectos completos a partir de 1994, haciendo que la oposición en su conjunto, y no solo los Hermanos Musulmanes, desaparecieran de los consejos de dirección de los sindicatos durante la segunda mitad de los 90. También fue a partir de 1994, y sobre todo de 1995, con una sola excepción a modo de advertencia en 1992, cuando los Hermanos Musulmanes comenzaron a sufrir detenciones y juicios de excepción. Es decir, las mayores actuaciones de represión de la Hermandad bajo acusaciones casi siempre fantasiosas fabricadas por las fuerzas de seguridad comenzaron cuando el islamismo armado comenzó a perder terreno, y no antes, y deben ser puestas en relación con la celebración de las elecciones legislativas de 1995 y con la expansión social del apoyo a la Hermandad y a las corrientes islamistas no violentas.

Finalmente, el enfrentamiento entre el Estado y el islamismo armado sirvió de cortina de humo para la liberalización, como hemos apuntado más arriba, mientras que el cierre político y el incremento generalizado de la represión servían de válvula de seguridad frente a las posibles reacciones sociales a tal liberalización. No obstante, una conjunción de circunstancias económicas posibilitó que la liberalización fuera retrasada en sus aspectos socialmente más sensibles y sus efectos amortiguados, como explicaremos a continuación.

10.2 INCREMENTO DE LA AUTONOMÍA Y EL CONTROL POLÍTICO DEL ESTADO Y LIBERALIZACIÓN PAUSADA GRACIAS AL “MILAGRO” FINANCIERO

Como hemos mencionado en el capítulo IV 1.2, cuando a finales de los 80 Egipto se encontraba al borde de la bancarrota, y según Samer Solimán se había convertido en “un mendigo internacional”, un experto económico citado por el autor señaló: “Llevamos veinte años diciendo que Egipto está al borde de la bancarrota, pero siempre se produce un milagro que salva la economía. Esta vez no le veo salida a la crisis” (Soliman 2011: 44). Como hemos explicado, el “milagro”, sin embargo, se volvió a producir, esta vez en la forma de la Crisis del Golfo desatada por la invasión de Kuwait por Irak.

En 1990 el Gobierno egipcio ya había adoptado algunas medidas de ajuste destinadas a reducir su déficit fiscal, y parecía decidido por la fuerza de las circunstancias a profundizar en esa vía, pero la reducción de un 60% de su deuda externa gracias a su participación en la guerra para liberar Kuwait junto a la llamada Coalición Internacional, reducción en gran parte condicionada por las instituciones financieras a la firma y

cumplimiento de un acuerdo de estabilización y ajuste estructural, le empujó definitivamente a hacerlo. Las medidas de estabilización, la reducción de la deuda y la ayuda financiera internacional aparejada al cumplimiento inicial del acuerdo se conjuntaron durante la primera década de los 90 con un buen comportamiento de los principales recursos del Estado, los ingresos rentistas o exógenos (petróleo, Canal de Suez y transferencias de trabajadores en el extranjero), de modo que el Estado redujo a mínimos históricos su déficit fiscal y la inflación.

La gran mejora de la situación fiscal del Estado aumentó la autonomía de este frente a las presiones exteriores e internas, y permitió al régimen de Mubarak ralentizar la liberalización económica y dedicar buena parte de sus ingresos al gasto público durante la primera mitad de los 90. Esto, sin duda, se tradujo en un incremento del consentimiento de la población frente al poder constituido, que fue reforzado por el rechazo de la mayor parte de la población a las actividades armadas del islamismo radical.

Como hemos visto en el capítulo IV 7.1 sobre el incremento del gasto público, la mayor parte de este se destinó a lo que Soliman (2011) llama “gastos en control político”, en detrimento de los “gastos en desarrollo económico”. Los gastos en control político privilegiados no solo eran, según la categorización realizada por el autor, aquellos realizados en el aparato de seguridad, sino también los destinados al “control ideológico” (medios de comunicación, cultura, asuntos religiosos) y los “gastos sociales para promover la legitimidad y la estabilidad política” (como las subidas salariales a los trabajadores estatales y otras medidas sociales que afectaban a los asalariados). Podría pensarse que estas últimas medidas estaban motivadas por una preocupación genuina por mejorar las condiciones de vida de la población en general, de no ser porque no afectaban a los sectores más pobres de la población que, por el contrario, hubieron de seguir afrontando la reducción de las subvenciones a los productos de primera necesidad, lo que resultó en el periodo 1990-1995 en un sustancial incremento de la pobreza y las desigualdades.

Pero quizás lo más significativo del incremento del gasto público en el periodo de 1990-1995, que continuaba la tendencia de los 80, fue el gran aumento de las partidas dedicadas a los ministerios de *Awqaf* (o Asuntos Religiosos Islámicos), de Información y de Cultura, es decir, el aumento de los gastos de “control ideológico”. En el caso del Ministerio de *Awqaf* tales gastos estaban destinados a asegurar el control de las mezquitas por el Estado mediante el nombramiento de “imames oficiales” también en las antiguas mezquitas privadas, ahora nacionalizadas. Los gastos en Información y en Cultura buscaban la cooptación o aquiescencia de los intelectuales, en particular los secularistas y de izquierdas, muchos de los cuales fueron atraídos al “redil del Ministerio de Cultura”, según expresión del ministro del Interior, mediante la atribución de cargos, empleos y premios, si bien la tarea de limitar la oposición al régimen de los intelectuales secularistas

se vio facilitada por la amenaza que aquellos percibían en la expansión del islamismo en la sociedad.

10.3 SECULARISTAS FRENTE A ISLAMISTAS. GANA EL PODER CONSTITUIDO

A raíz del auge del islamismo político en la sociedad, y de su variante radical en particular, los intelectuales secularistas se vieron sometidos, en particular entre 1992 y 1995, a una presión que nunca habían conocido a lo largo de la historia del Estado republicano. El asesinato de Farag Fuda en 1992 y el intento fallido contra Naguib Mahfuz, así como las amenazas contra Nawal al-Saadawi y Hamed Násir Abu Zeid que obligaron a ambos a exiliarse, son tan solo los casos más conocidos y que hemos analizado. Otros autores fueron censurados, y muchos sin duda ejercieron la autocensura, si bien parte de ellos emprendieron la batalla ideológica contra el islamismo radical, bastantes desde un acercamiento a las posiciones políticas del régimen.

Producto sin duda de la evolución de la sociedad y de sus diferencias y contradicciones internas, el enfrentamiento islamistas/secularistas fue en todo caso aprovechado por el régimen de Mubarak. No de otra manera puede explicarse que mientras reprimía a los grupos islamistas que pretendían actuar por vías y medios exclusivamente políticos (esencialmente los Hermanos Musulmanes) e intentaba controlar las mezquitas, el régimen político permitiera las actuaciones “intelectuales” y judiciales de personajes islamistas cuyas posturas ideológicas parecían tanto próximas a las de los grupos islamistas armados como a las de la Hermandad. No hay que olvidar que en el verano de 1992 el régimen egipcio había promulgado la Ley Antiterrorista, que ampliaba el concepto de delito de terrorismo a la incitación intelectual a él, definida de manera muy vaga. La actuación del jeque Mohammed al-Gazzali en el caso Fuda, declarando a este inequívocamente apóstata y defendiendo que no había un castigo explícito en la *charía* para sus asesinos, aunque sustentada en la imprecisa delimitación del papel de la *charía*, del propio contenido de esta y de su aplicación en el sistema legal egipcio, podría haber sido perfectamente calificada como “incitación al terrorismo” si la Fiscalía y los tribunales de excepción hubieran querido utilizar el gran margen de actuación con el que contaban para otras actuaciones.

Podría argüirse que Al-Gazzali se amparaba también en la autoridad paralegal que la mezcla de derecho positivo e islámico que presidía el sistema legal egipcio acordaba a los ulemas, así como que las autoridades egipcias temían la autoridad religiosa con la que Al-Gazzali contaba entre sus compañeros de Al-Azhar y en la sociedad en general. Sin embargo la cuestión es por qué el régimen egipcio reconocía esa autoridad a Al-Gazzali y a ulemas similares a él, a los que abría las páginas de los medios de comunicación estatales,

cuando se les negaba tal autoridad a otros. La respuesta en nuestra opinión, según hemos intentado demostrar en el capítulo IV 6.5 a partir del caso Abu Zeid, es que el régimen egipcio, con su proverbial adaptabilidad a las nuevas circunstancias sociales, había ido más allá de la vieja política de los sucesivos regímenes egipcios de contar con “ulemas del poder”, a través de la dirección de la institución de Al-Azhar, para atraerse, ante el descrédito de aquellos -a los que Al-Gazzali, por ejemplo, negaba pertenecer-, a una suerte de “islamistas del poder”, a los que permitía expresar un radicalismo que excluía explícitamente la rebeldía contra el poder constituido.

De esta manera, la expansión de las ideas sociales y morales del islamismo radical en el espacio público, e incluso en los órganos judiciales, aculó a numerosos secularistas a alinearse con el régimen egipcio, o al menos a suspender su oposición a él. El ejemplo más significativo de este proceso es el del partido Tagammu, que bajo la dirección de facto su secretario general desde 1993, Rifaat al-Said (aunque Jaled Mohai Eddín siguiera siendo su presidente), fue prácticamente cooptado por el régimen.

10.4 “SOCIEDAD CIVIL” ANTE EL CIERRE DE LA “SOCIEDAD POLÍTICA” Y FRENTE A LA “SOCIEDAD ISLAMISTA”

La emergencia en el contexto egipcio del concepto de “sociedad civil” a principios de los 90 y su rápida difusión posterior discurrió en paralelo a la expansión de las asociaciones que con propiedad cabe incluir en tal concepto: por un lado, las organizaciones de defensa de derechos humanos, civiles, políticos, sociales o económicos; por otro, las de promoción del desarrollo económico-social; y por otro las de defensa de intereses. Fue resultado principalmente de la evolución ideológica de los intelectuales de izquierdas hacia el liberalismo político iniciada en los años 70, de modo que convergieron con otros sectores liberales de oposición y todos ellos hubieron de adaptarse a las circunstancias políticas egipcias de finales de los 80 y principios de los 90. Ante el cierre del sistema político en general, y en particular la insatisfacción con las opciones, estructuras y opciones políticas autorizadas que se les presentaban para participar en política, una buena parte de la intelectualidad egipcia recurrió a la forma asociativa de la “organización no gubernamental”, amparada legalmente en diversas figuras jurídicas (normalmente la “empresa civil sin ánimo de lucro”), para huir, en primera instancia, del control gubernamental y las restricciones impuestas desde 1964 a las llamadas “asociaciones civiles” o “asociaciones populares”.

La aparición de las nuevas estructuras asociativas como medio para acceder a la participación política por la puerta trasera del sistema político formal, precedió a la difusión extensa del concepto de “sociedad civil”. No obstante, tanto las ONGs surgidas al

margen de la adopción teórica previa y/o consciente de tal concepto, como este y sus promotores, portaban en su seno una inequívoca voluntad no solo de sustraerse al control del gobierno y de participar en política, sino también de diferenciarse de las asociaciones existentes. Para ser consideradas parte de la “sociedad civil” o del “movimiento de las nuevas ONGs”, por utilizar una fórmula alternativa, resultaba claramente explícito que las asociaciones debían ser no solo “no gubernamentales”, sino también liberales, e incluso secularistas, en política. Así, la “sociedad civil” se contraponía objetivamente a las asociaciones islámicas legales que, si bien eran en su inmensa mayoría de beneficencia y servicios sociales, eran en gran parte promovidas por sectores próximos al islamismo político.

Tal oposición entre “sociedad civil” y asociaciones era, como decimos, un hecho objetivo determinado por las diversas concepciones sociales de ambas partes, y no fruto de ninguna animadversión de la primera hacia la segunda, ni siquiera de una voluntad dominante de combatir al islamismo político por los medios que fuera. Por el contrario, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, las surgidas primero y en mayor número, no eludieron su responsabilidad de denunciar la violación de aquellos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en las carnes de los militantes islamistas. No obstante, tales asociaciones, como las del resto de la sociedad civil, no podían dejar de enfrentarse a las posturas del islamismo político en la medida en que aquellas chocaran –y chocaban– con sus concepciones de las libertades y de los derechos humanos.

El régimen de Mubarak no tardó en advertir las ventajas que la aparición y expansión de las nuevas ONGs podían tener como contrapeso a la expansión del islamismo político, a la vez que para redorar su maltrecho blasón de liberalizador político y económico. Las instituciones financieras internacionales y otros Gobiernos donantes le exigían, por otro lado, que la mayor parte de los fondos destinados al desarrollo que entregaban a Egipto fueran canalizados por ONGs. De esta manera, la celebración en El Cairo en 1994 de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo pareció marcar un antes y un después en las relaciones entre el poder político y las ONGs y asociaciones civiles, pues se permitió su participación en la conferencia con una gran autonomía y la expresión de sus puntos de vista, que incluían la demanda de la liberalización total de la vida asociativa. No obstante, entre 1998 y 1999, una vez cerrado el grifo de las ayudas financieras internacionales, y concluido el enfrentamiento armado con el islamismo radical, el Gobierno intentaría, mediante una nueva legislación, retomar el control de la expansión de las ONGs y de la “sociedad civil”, lo que nunca conseguiría de manera definitiva.

10.5 LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DEMEDIADA Y LA *CHUROCRACIA* COMO ÚNICOS “PRINCIPIOS ACTIVOS” DE LA LIBERALIZACIÓN POLÍTICA

El que hemos identificado como segundo periodo del mandato de Mubarak (1991-2000) se caracterizó por una presencia insignificante de candidatos de los partidos de la oposición en el Parlamento -y ello aplicando una concepción muy laxa del término “oposición”-, y por la exclusión de él de los Hermanos Musulmanes, a diferencia de lo que había sucedido en los Parlamentos de los años 80. Las elecciones de 2000, a pesar de que trajeron como resultado una participación de la oposición en la Cámara todavía muy reducida (8,3% de escaños contando solo los partidos y a los Hermanos Musulmanes, y 12% sin incluimos a los diputados que se mantuvieron como independientes), marcaron un cambio de tendencia, apuntado no solo por los resultados mencionados, y en particular por el retorno de la Hermandad al Parlamento, sino también por el control judicial completo de las elecciones.

En este segundo periodo del mandato de Mubarak, tan solo un nuevo partido con ciertas posibilidades electorales fue autorizado, el Partido Naserista, que en 2000 no alcanzó el 0,5% de los escaños, mientras se denegaba la fundación de otros, como el islamista Al-Wasat, con mayor potencial social y electoral. El conjunto de los partidos autorizados obtuvieron en 2000 el 4,27% de los escaños, un porcentaje apenas superior al logrado por si solos por los Hermanos Musulmanes, a pesar de enfrentarse estos a una campaña de detenciones, juicios e intentos de impedir que se registraran como candidatos a las elecciones. En las elecciones de 1995, sin embargo, el régimen político había logrado excluir completamente a la Hermandad del Parlamento

En definitiva, la década de los 90 se caracterizó por la hegemonía absoluta del partido gobernante en el poder legislativo, y por el bloqueo del acceso de la oposición a los espacios y procedimientos políticos que abrían el paso al sistema político formal. No obstante la evaluación del sistema político en un sentido más amplio, que hemos calificado de “global” en el capítulo 1.1 de nuestra Introducción, no puede medirse únicamente a través de la observación del sistema político formal y de las estructuras e instrumentos puramente políticos, sino que hemos de tener en consideración todos los espacios y medios a través de los cuales era posible la participación política. En este sentido, el único “principio activo” constante de la liberalización y pluralización de la vida política tantas veces prometida por Mubarak siguió siendo la ampliación de la libertad de expresión, en un marco legislativo cada vez más restrictivo para limitar la libertad de expresión en la prensa y a pesar del sometimiento al control del Estado de los sindicatos profesionales para acabar con las voces de la oposición que se expresaban a través de ellos.

En los capítulos IV 4.2 sobre “la libertad de expresión y la prensa vociferante”, y

IV 5.1 sobre “el discurso del «no» rotundo” (en el plebiscito de 1993), la prensa egipcia podía deshacerse en ataques al Gobierno y a sus miembros con nombres y apellidos, e incluso imputar implícitamente a Hosni Mubarak la responsabilidad última de las violaciones de los derechos humanos que sucedían en el país. La Ley de Delitos de Prensa de 1995, enmendada en 1996, tendría como principal objetivo recordar a los periodistas cuáles eran los pocos tabúes políticos que quedaban (la persona y la familia del presidente, y los siempre vagos aspectos relacionados con la “seguridad del Estado”), así como poner en manos de los ofendidos por los periodistas un instrumento de defensa. Hay que tener en cuenta que gran parte de la prensa, estatal y de oposición, parapetada tras la invocación de la libertad de expresión, era a menudo poco comedida, poco profesional y movida por intereses inconfesables. Las diversas instituciones del Estado -y entre ellas los aparatos de seguridad- y los diversos sectores económicos de la burguesía en ascenso libraban a través de los periódicos, como hemos mostrado en el capítulo IV 8.2, sus batallas internas y de intereses mediante el aireamiento de casos de corrupción y otros escándalos, de la misma manera que las diversas corrientes políticas dirimían sus contiendas ideológicas. Esta situación no dejaba de ser beneficiosa para el presidente de la República, que veía como a través de tales enfrentamientos se debilitaban sus posibles adversarios, internos o externos al régimen, y se reforzaba su figura arbitral por encima del bien y del mal.

La gran libertad de expresión disfrutada bajo el mandato de Mubarak, constantemente expandida, cumplía pues múltiples funciones: permitía satisfacer en cierta medida, y a veces plenamente, la voluntad de participación política de las elites políticas y sociales; facilitaba la salida a la luz pública de los escándalos y conflictos de casi todo tipo, y el desgaste de los implicados en ellos; y, en última instancia, ofrecía a los altos dirigentes del régimen, y en particular a la Presidencia de la República, un observatorio desde el cual tomar el pulso a la evolución política de los sectores más influyentes de la sociedad.

La novedad de los años 90 respecto a los 80 fue que las organizaciones no gubernamentales de orientación política se instalaron en el espacio autorizado de la libertad de expresión con sus propios medios de difusión, limitados en cuanto a alcance popular, pero poderosos en su acceso a las elites sociales. La tolerancia frente a ellas del poder constituido llevaría a una ampliación o actualización del modelo “churocrático” de participación política que ya hemos señalado de manera abundante. En cierta manera, tales organizaciones -como antes los sindicatos profesionales- respondían al modelo de manera más paradigmática, pues, a diferencia de los partidos y otras fuerzas políticas no autorizadas, su participación política quedaba reducida por su estatuto legal (y en ocasiones ilegal), y por las restricciones a la libertad de reunión, expresión, información y opinión.

Para concluir nuestra argumentación en este apartado, podría decirse que incluso a

los órganos judiciales se les concedía más libertad de expresión, o la participación consultiva del modelo de la *chura*, que libertad de decisión. En la parte III de este trabajo sobre el primer periodo de mandato de Mubarak (véase III 5.1 y III 7.4) como en esta parte IV (véase IV 6.6) hemos mostrado tanto nuestro escepticismo -creemos que bien fundamentado- hacia la idea de la independencia absoluta del Tribunal Constitucional que algunas decisiones de aquel podrían instilar, como el hecho probado de que el régimen de Mubarak simple y llanamente ignoró las decisiones de tan altas instituciones judiciales como el Tribunal de Procedimiento Administrativo del Consejo de Estado y el Tribunal de Casación cuando así le convino, como cuando sentenciaron que se repitieran las elecciones legislativas en numerosos distritos por las irregularidades cometidas en 1984, 1987 y 1995.

10.6 HACIA LA CRISIS DEL RÉGIMEN

El segundo periodo que distinguimos en el mandato de Mubarak se cerró con las elecciones legislativas de 2000. La decisión del Tribunal Constitucional en 2000 de exigir al poder ejecutivo la supervisión judicial absoluta de las elecciones pareció fortalecer la hipótesis de la creciente independencia de los miembros del poder judicial. La aceptación por parte del poder político de tal exigencia despierta, sin embargo, interrogantes, que afectan también a tal hipótesis. No es de excluir que más que respetar los requisitos de un auténtico Estado de Derecho, las altas instancias del régimen concibieran que la decisión era una ocasión para controlar un proceso electoral que se les escapaba de las manos, en la medida en que eran incapaces de controlar el fraude o “trucaje electoral” de los propios miembros o simpatizantes de su partido descontentos con la selección de los candidatos oficiales por el aparato central. Tampoco es descartable que el poder ejecutivo conociera con antelación el sentido del fallo del Alto Tribunal, como consta que conocieron el de 1987 relativo a la inconstitucionalidad del sistema electoral.

Los resultados electorales confirmaron una vez más el apoyo social de los Hermanos Musulmanes, que desafiaron con astucia y éxito relativo todas las trabas judiciales, policiales y administrativas que el régimen les puso para que no presentaran candidatos. Pero también mostraron que los apoyos sociales del régimen eran frágiles, tanto por la escasa disciplina y/o lealtad de sus elites, como por la escasa participación electoral real, puesta al descubierto por la supervisión judicial. Los comicios arrojaron el resultado de la “derrota” de los candidatos oficiales del PND frente a los “disidentes electorales”, o de su aparato central en sus intentos de controlar totalmente la formación de la mayoría parlamentaria. También mostraron el triunfo de una importante cantidad de candidatos independientes, gran parte de los cuales deseaban probablemente incorporarse no solo al Parlamento sino al propio régimen político. A diferencia de elecciones

anteriores, estas circunstancias no fueron vistas con complacencia por las altas instancias del PND, como se manifestaría en los años siguientes, pues aquellas deseaban entrar en una era política diferente e introducir cambios sustanciales en las políticas públicas y, para ello, en las élites dirigentes.

Los comicios de 2000 también confirmaron, además de que las elecciones legislativas eran en gran medida elecciones de acceso al partido gubernamental y al régimen político, que los recursos económicos abundantes eran el instrumento más eficaz para lograr tal acceso. Como hemos mostrado en los capítulos IV 9.3 y IV 9.4 las elecciones movilizaron una ingente cantidad de recursos, destinados en gran parte a la compra de votos, llegando a su punto álgido una evolución ya detectada a simple vista en 1995, como mencionamos en el capítulo IV 6.6, evolución que podemos calificar de “privatización” de las candidaturas, una de cuyas principales manifestaciones fue la ocupación de casi un 20% de los escaños del Parlamento en 2000 por hombres de negocios y banqueros.

El acceso de la alta burguesía privada al Parlamento en 2000 gracias a la potencia que le conferían sus recursos económicos fue solo una de las manifestaciones del incremento de su influencia política y sus aspiraciones. La exhibición de estas sin pudor, puesta de relieve en un encuentro de empresarios estadounidenses y egipcios en 1997, llevó al propio Hosni Mubarak a intervenir y a poner un freno a tales aspiraciones, en un momento en el que habían comenzado a aparecer medios de prensa privados y en el que se ponía sobre la mesa la necesidad de legislar sobre el nuevo mercado de las telecomunicaciones y de los medios de comunicación por satélite. Estos nuevos medios representaban una promesa de jugosas ganancias económicas, pero también un poderoso medio de influencia política que podía ser utilizado para contrarrestar la influencia de los canales internacionales, sobre todo de Al-Jazeera, que abrían sus puertas a los opositores al régimen egipcio para que se expresaran libremente, atrayendo la atención de gran parte de los telespectadores del país. Aunque el Gobierno egipcio lanzó en 2000 su propio satélite, Nilesat, y sus propios canales a través de él, su adopción del liberalismo económico requería, en teoría, que abriera el acceso a los canales por satélite locales al sector privado, lo que implicaba riesgos políticos.

El incremento de la influencia política de la burguesía privada se puso de manifiesto cuando la actividad armada del islamismo radical estaba en sus últimos estertores (1997-1998), y cuando comenzaban a percibirse lentamente los efectos de la liberalización económica, y en particular de sus medidas más dañinas desde un punto de vista social, emprendidas entre 1994 y 1998: las privatizaciones y la reforma de la Ley de Arrendamientos Agrícolas, y los despidos y desposesiones agrícolas aparejadas a ellas. Estas desposesiones provocaron violentos enfrentamientos, según era previsible, entre

desposeídos y desposeedores (propietarios y fuerzas de seguridad), si bien el efecto de los despidos en el sector público estatal, no iniciado de forma masiva hasta 1998, fue amortiguado por una política de prejubilaciones y compensaciones económicas, con lo que la década de los 90 se cerró con una relativa quietud de la clase obrera. A mediados del periodo los trabajadores habían marcado su posición de oposición a la liberalización con una serie de protestas, la más destacada de las cuales fue la del sector textil de Mahala al-Kubra en septiembre de 1994, que fue respondida por el Gobierno con gran violencia, pero también con concesiones a los trabajadores de la empresa, y con la adopción de un ritmo lento en las privatizaciones y los despidos.

La desaparición de las brumas del enfrentamiento entre el Estado y el islamismo radical, tras la conciliación alcanzada en 1998, permitió que quedaran expuestas a la luz pública con mayor claridad la corrupción generalizada, la brutalidad indiscriminada de las fuerzas de seguridad y diversos síntomas de malestar social, como el incremento de la violencia social y el llamado por algunos “rencor social”, que nosotros llamamos irritación ante las grandes igualdades, no solo económicas sino en la mera aplicación de la ley a poderosos y débiles. En los últimos años de la década, sectores de la *intelligentsia* más oficial, como mostramos en el capítulo IV 8.6, no solo señalaron dicho malestar, sino que participaron de él mostrando su descontento político. Entre estos sectores de toda tendencia ideológica también se constataba una evolución en las generaciones politizadas más jóvenes, que se alejaban definitivamente de las direcciones de los partidos y de las fuerzas políticas existentes, ya fueran legales o ilegales, intentando organizarse al margen de ellas.

El fin del enfrentamiento del Estado con los islamistas armados también permitió que el régimen político mandara a la “sociedad civil” un aviso para que se moderara en sus críticas, dado que la necesidad que tenía de ella había disminuido. Dicho aviso se tradujo en los procesos judiciales abiertos contra dos personajes molestos como Hafez Abu Saada, presidente de la Organización Egipcia de Derechos Humanos, en 1998, y el profesor de Sociología Política y director del Centro Ibn Jaldún, Saad Eddín Ibrahim. Estos hechos también contribuirían a incrementar el malestar entre las clases intelectuales.

Para concluir, subyaciendo a este malestar social incipiente que se extendía, y a la inquietud del Gobierno por el control político del país, se encontraba el apunte de una nueva crisis fiscal del Estado, causada por el descenso paulatino de los ingresos de origen rentista y exógeno en la segunda mitad de los 90, que se traduciría en un gran incremento de la deuda del Estado y de la inflación a partir de 1999. Todo ello llevaría al régimen político a dar grandes pasos en la liberalización económica, y a sus más altas instancias (Hosni Mubarak y sus allegados) a intentar forzar cambios sustanciales en la estructura de las elites dirigentes, como veremos en la parte V de este trabajo.

V. EL RÉGIMEN DE MUBARAK
3. LA CRISIS DEL RÉGIMEN
Y LA CRISIS DEL ESTADO
(2001-2011)

INTRODUCCIÓN. Querer cambiar sin cambiar	729
1. Una etapa de transición hacia una nueva era política (2001-2004)	732
1.1 El retorno de la “política de calle”: la nueva izquierda y los jóvenes Hermanos entre la Segunda Intifada y la invasión de Irak.....	732
1.2 Indicios de una nueva actitud política entre las clases medias profesionales: el caso de abogados y periodistas	736
1.3 Los movimientos por la “reforma” del PND y de los partidos de la oposición	738
1.4 El Gobierno de Ahmad Nazif, o el “Gobierno de Gamal Mubarak”	742
2. Crisis económica y liberalización: trastienda de la anunciada reforma política.....	743
2.1 Nueva crisis fiscal	744
2.1.1 El fin de la economía rentista.....	744
2.1.2 A la búsqueda desesperada de ingresos	745
2.1.3 Disminución del gasto público, incremento de la pobreza.....	748
2.2 Un fuerte impulso a la liberalización	749
2.2.1 La reforma de la Ley del Trabajo y las privatizaciones.....	749
2.2.2 Las primeras medidas económicas del Gobierno de Ahmad Nazif.....	750
2.2.3 Primeras reacciones de los trabajadores y descrédito definitivo del sindicato único.....	751
3. Cambios en el régimen impulsados por la Presidencia de la República y ampliamente rechazados	753
3.1 La sucesión hereditaria.....	755
3.1.1 Una cuestión en nada anecdótica	755
3.1.2 A la búsqueda de una base social	756
3.1.3 El rechazo al <i>tauriz</i>	758
3.2 La salida de Kifaya a la calle y la legalización del partido Al-Gad	763
3.3 El resquebrajamiento del consentimiento entre la <i>intelligentsia</i> y las clases intelectuales	765
4. Cambiar todo para que nada cambie. El agitado y tenso año electoral de 2005	771
4.1 Unas elecciones presidenciales remozadas	771
4.1.1 Modificación del sistema de elección presidencial	771
4.1.2 Persistencia de Kifaya y de los “movimientos por el cambio”. La incorporación de jueces y trabajadores	773
4.1.3 Candidatos presidenciales	774
4.1.4 Rebeldía y pactos con el poder de los Hermanos Musulmanes.....	775
4.1.5 Desarrollo y resultados de las elecciones presidenciales de 2005.....	779
4.2 Las elecciones legislativas: fracaso de la operación de sustitución “tranquila” de las elites del régimen.....	781
4.2.1 Una campaña electoral libre y sin sobresaltos.....	781
4.2.2 Desarrollo de las elecciones y vuelco en los resultados: el éxito de los HHMM y la derrota de los “reformistas” del PND.....	782
4.2.3 Más allá del análisis electoral. El fracaso de un proyecto de cambio de régimen.....	786
5. Cierre político total. La contrarreforma desliberalizadora (2006-2008)	788
5.1 Represalias contra los causantes de la derrota del PND y nueva reforma de la Constitución..	788

5. 2 Asegurando el control de Gamal Mubarak.....	790
5.2.1 La renovación parcial de la Asamblea Consultiva.....	790
5.2.2 La reforma del PND	791
5.2.3 Las elecciones a los Consejos Locales de 2008	792
6. La liberalización predatoria y la explosión de las protestas laborales.....	794
6.1 Las nuevas medidas del Gobierno de Nazif. Corrupción y sistema impositivo desigualitario	794
6.2 Crecimiento económico y empobrecimiento.....	796
6.3 Explosión de las protestas laborales (2004-2008)	797
7. Trabajadores y jóvenes rompen con las ataduras políticas tradicionales.....	799
7.1 La confluencia entre los movimientos políticos y laborales.....	799
7.2 Los “jóvenes” desembarcan en el espacio público desde el ciberespacio	801
7.3 La exitosa huelga general virtual del 6 de abril de 2008.....	803
8. Un Estado policial	804
8.1 El asesinato de Jaled Said: la gota que colma el vaso	805
8.2 Un levantamiento masivo y transversal.....	806
9. Conclusiones	812
9.1 Los límites de un régimen “amébico”	812
9.2 Explosión de las contradicciones y confluencia en la rebeldía política.....	813
9.3 La variabilidad de la autonomía del Estado: la situación fiscal como principio explicativo del cambio político.....	816

INTRODUCCIÓN. Querer cambiar sin cambiar

En la primera década del siglo XXI, la evolución política interna de Egipto se aceleró progresivamente, hasta concluir con el abandono del poder por Mubarak el 11 de febrero de 2011, forzado por las masivas manifestaciones populares en su contra iniciadas el 25 de enero y por haber sido “abandonado” a su vez por los altos mandos del Ejército. Son muchos los factores que intervinieron en esta evolución, que tuvo dos fases bien diferenciadas, con el año 2005 como gozne.

Hasta el año 2005 se produjo un insólito proceso de apertura política para el que se conjugaron varios elementos: el incremento del descontento social y político, la decisión de las altas instancias del régimen -y esencialmente de Hosni Mubarak frente a muchas otras- de promover un auténtico cambio de régimen, y la presión de las circunstancias internacionales y de la situación económica del país.

Con toda probabilidad el desencadenante de esta evolución en esta primera fase fue la decisión de Mubarak de poner todo su peso a favor de un cambio en las elites políticas y sociales que ejercerían la hegemonía en el régimen político. El fulgurante ascenso político de su hijo Gamal significaba esencialmente dos cosas: el paralelo ascenso de un sector de la alta burguesía de los negocios con el que estaba estrechamente relacionado, y el apoyo del presidente a este sector. El ascenso político de Gamal Mubarak en términos políticos formales fue marcado por varios hitos: su toma de control del PND en 2002, la formación de gobiernos con un gran número de hombres de negocios suyos a partir de 2004, y su selección de los candidatos a las elecciones legislativas de 2005. No obstante, el proyecto de “lanzamiento político” de Gamal había comenzado mucho antes, y los observadores políticos atentos, egipcios y extranjeros, lo sabían, y las elites dirigentes y del Estado en su sentido más amplio también. Las especulaciones acerca de que Hosni Mubarak pudiera pretender ser sucedido por su hijo comenzaron a circular a finales de 1999, cuando Mubarak acababa de ser reelegido como presidente y tenía 71 años. Cinco años después, la opinión pública egipcia estaba totalmente convencida de que esos eran los proyectos presidenciales. En la escena pública, la oposición a la “sucesión hereditaria” (التوريث) vino de diversos intelectuales y grupos de activistas, pero tras las bambalinas, existía una fuerte oposición dentro de los círculos del poder, y entre ellos el Ejército.

Desde principios de siglo se venía observando un notable incremento del activismo político y de los esfuerzos de coordinación entre las diversas fuerzas políticas. Dentro de él destacaba el renacer de los movimientos de izquierda y estudiantiles en general, y en particular del activismo en las calles, relanzados por el impacto de las crisis que afectaban

a países árabes vecinos, como la Segunda Intifada, comenzada en el año 2000, o los preparativos para la invasión de Irak en 2003.

El poder político manifestó un progresivo cambio de actitud hacia estos movimientos, en el sentido de una mayor permisividad, que alcanzó su máxima cota cuando empezó a consentir las manifestaciones del grupo conocido como “Kifaya” (“¡Basta!”) en 2004. Lo distintivo de este movimiento -y de que fuera permitido- era que atacaba directamente a Mubarak, y en particular su supuesto proyecto de “sucesión hereditaria”, con lo que rompía un tabú mantenido desde hacía más de dos décadas -por no hablar de las etapas anteriores a la presidencia de Mubarak.

Existe la convicción generalizada de que las presiones de la Administración norteamericana tras la invasión de Irak para que Oriente Medio se “democratizara” desempeñaron un papel fundamental en el cambio de actitud del régimen egipcio. Pensamos, sin embargo, que aunque sin duda dichas presiones tuvieron su influencia, la permisividad del régimen, y su posterior apertura, formaban parte de un proyecto global concebido anteriormente, que coincidía en parte con los planes norteamericanos: se trataba de subordinar definitivamente a la burocracia estatal y el Ejército a las más altas instancias del poder. La economía devenía casi completamente liberalizada y las élites económicas privadas demandaban un cambio, mientras que la población había mostrado su total desafección al régimen, del que el Ejército era piedra angular. Así, el proyecto de los Mubarak consistía en construir una nueva base social para un nuevo régimen en el que la alta burguesía llevaría la voz cantante.

Gamal Mubarak y los hombres de negocios estrechamente asociados a él comenzaron a desarrollar gran número de actividades sociales y de beneficencia antes de tomar al asalto el partido gobernante, y posteriormente el Gobierno. No obstante, sabían que esto no era suficiente para adquirir la base social buscada, y anunciaron con gran acompañamiento mediático una reforma radical del sistema político, a la que asociaron a una gran hornada de intelectuales y profesionales. La guinda del pastel fue la negociación con los Hermanos Musulmanes para su retorno al sistema político en condiciones más ventajosas que nunca.

Las elecciones legislativas de 2005 debían ser, según los proyectos de los Mubarak, el hito que marcara la gran transformación. Gamal Mubarak y sus colaboradores eligieron cuidadosamente a los candidatos del partido gobernante, excluyendo a gran parte de la vieja guardia del régimen. Las elecciones iban a ser de nuevo supervisadas por los jueces (las del año 2000, ya con este sistema, habían sido las menos fraudulentas hasta entonces), y en ellas iba a participar un gran número de candidatos de la Hermandad en condiciones de verdadera libertad. El proyecto era legitimar democrática y popularmente un nuevo régimen, totalmente liberal al menos en economía, con un consentimiento tácito de los Hermanos Musulmanes.

Sin embargo, los planes no salieron según lo previsto, sino que los resultados de las elecciones supusieron, valga la expresión, un tiro por la culata para Mubarak y sus asociados. Las dos primeras fases de las elecciones fueron inusitadamente limpias, y sus resultados mostraron una severa derrota de la lista oficial del partido gobernante, que solo había obtenido poco más de un 33% de los escaños. Por su parte, los Hermanos Musulmanes habían obtenido un 26%. Aunque otro 33% lo habían obtenido “disidentes electorales” del PND, que podían ser integrados en el grupo parlamentario del PND, como así había sido en las elecciones legislativas anteriores, cuando menos estos condicionarían el proyecto de renovación del régimen, e incluso podrían asociarse con los HHMM en el Parlamento, lo cual les haría alcanzar cotas muy peligrosas. Es una asociación que no habría sido extraña, pues ya se había producido durante las elecciones en sí en detrimento de los candidatos oficiales del PND. De esta manera, la tercera fase de las elecciones fue sometida a un estrecho y violento control por parte de las fuerzas de seguridad, superior al de cualquier proceso electoral previo, hasta el punto de que la policía en algunos casos llegó a maltratar a jueces que pretendían seguir velando por la limpieza de los comicios.

El abrupto y violento cierre del proceso electoral marcó el fin de la primera etapa de esta década y el inicio de la segunda, caracterizada por una oclusión completa del sistema político que puso en evidencia la inexistente voluntad democratizadora de los Mubarak y los magnates del sector privado asociados a ellos. A la violenta represión de los Hermanos Musulmanes y de los jueces que habían denunciado la manipulación final de los comicios siguió el desmontaje de toda la legislación que había permitido elecciones legislativas competitivas en 2005 y una apariencia de elecciones presidenciales también competitivas poco antes, en el mismo año. En las elecciones legislativas de 2010 toda oposición real sería excluida del Parlamento. Desde 2005 hasta 2011, el núcleo duro del régimen (los Mubarak y sus asociados de un sector de la alta burguesía) gobernaría, por primera vez, con las fuerzas policiales como su principal soporte. A su vez, desde 2005 el grueso de la contestación social y política vendría de nuevos sectores: los trabajadores y amplios sectores de la juventud.

1. UNA ETAPA DE TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA ERA POLÍTICA (2001-2004)

1.1 EL RETORNO DE LA “POLÍTICA DE CALLE”: LA NUEVA IZQUIERDA Y LOS JÓVENES HERMANOS ENTRE LA SEGUNDA INTIFADA Y LA INVASIÓN DE IRAK

Entre el “ruido” provocado por el proceso electoral de las elecciones legislativas de 2000, un acontecimiento recibió menos atención de la que habría atraído en otras circunstancias: en octubre de 2000 se produjeron en El Cairo manifestaciones en apoyo a la Segunda Intifada, o Intifada de Al-Aqsa, comenzada a finales de septiembre del mes anterior. Durante ellas, a pesar del escaso número de manifestantes, estos se enfrentaron violentamente a la Policía, llegando a quemar alguno de sus furgones. En los mismos días, nació el Comité Popular Egipcio de Solidaridad con la Intifada Palestina. El comité fue fundado por un puñado de activistas estudiantiles de izquierdas, y tras las primeras manifestaciones se dedicó principalmente a organizar festivales culturales y otras actividades de solidaridad y recogida de ayuda para el pueblo palestino.

Un año después, el 10 de septiembre de 2001, tras unos días particularmente violentos en los Territorios Ocupados y en Israel, se producía en la plaza de Tahrir de El Cairo la mayor manifestación habida en mucho tiempo (2.000 personas según la policía), y una de las primeras en ser toleradas por las fuerzas de seguridad, un gran contingente de las cuales vigilaba, sin embargo, la protesta¹. Algunos de sus organizadores serían detenidos después por un breve espacio de tiempo. Farid Zahrán, uno de ellos, declaró tras ser liberado que había espetado a los oficiales de policía que lo interrogaron: “Autorizasteis la manifestación”. A lo que ellos respondieron: “No, no preguntasteis. Habríamos dicho que no”. A lo que Zahrán replicó: “¿Cuáles son las reglas entonces?”, obteniendo la siguiente respuesta: “Nada en las calles, nada con los Hermanos Musulmanes”².

Siete meses después se producían las manifestaciones más numerosas, y también las más violentas en mucho tiempo. El 31 de marzo de 2002, 80.000 personas se manifestaban a lo largo del país, principalmente en los campus universitarios, y el 1 de abril entre 10.000 y 15.000 personas, en su mayoría estudiantes, pero entre las que se encontraban también numerosos intelectuales, como los directores de cine Youssef Chahine y Ali Badrajan, partían en manifestación desde las inmediaciones de la Universidad de El Cairo, recibiendo los refuerzos de numerosos estudiantes de secundaria. Al intentar dirigirse hacia la embajada israelí, las fuerzas de seguridad se lo impidieron, y comenzó una batalla campal sin precedentes desde las manifestaciones contra la guerra del Golfo de

¹ Paul Schemmm: “Protest in a box”, *Cairo Times*, 13-19 de septiembre de 2001.

² Ashraf Khalil: “Home again with a warning”, *Cairo Times*, 11-17 de octubre de 2001.

1991. Las manifestaciones en la Universidad de Alejandría, menos numerosas y violentas, conducirían, sin embargo, a la muerte de un manifestante a manos de la policía. Como señalaban los periodistas de *Cairo Times* que cubrían el evento, las manifestaciones mostraban que los egipcios estaban enfadados “con algo más que Israel”³.

A pesar de que, más allá de las manifestaciones citadas, la movilización popular en las calles había sido reducida, varias cosas habían cambiado de manera significativa. En primer lugar, por primera vez en casi una década los egipcios habían salido masivamente a las calles, desafiando la prohibición gubernamental. En segundo lugar, quienes habían movilizado a un considerable número de personas eran las fuerzas de izquierdas. En tercer lugar, los Hermanos Musulmanes y las corrientes islamistas comenzaban a unirse a ellas de manera no oficial tras años de abstenerse de participar en cualquier actividad pública en las calles. En septiembre de 2002, Abdel Moneim Abul Futuh, destacado dirigente de los Hermanos Musulmanes y líder sindical del Sindicato de Médicos, extraía la siguiente conclusión: “Después de dos años de actividades de solidaridad, se puede decir que el mayor logro es la unidad del pueblo egipcio”⁴.

Las actividades del Comité Popular Egipcio de Solidaridad con la Intifada Palestina se encuentran en los orígenes de una de las principales transformaciones de la actividad política egipcia en la primera década del siglo XXI, que iba a permitir, en conjunción con otros factores, el derrocamiento de Hosni Mubarak en 2011. Junto al hecho de volver a salir a las calles, el Comité logró sembrar la semilla para recuperar un espacio de unidad entre distintas fuerzas políticas transversal a las ideologías, y resulta relativamente paradójico que ello se debiera a un reducido grupo de activistas de izquierdas, de una nueva izquierda.

No creemos exageradas las pretensiones del muy conocido periodista Hossam el-Hamalawy acerca del papel desempeñado por los Socialistas Revolucionarios, un grupo de reducido tamaño al que él mismo pertenecía. El grupo, según el mismo El-Hamalawy (2007), estaba formado por un puñado de estudiantes en 1995, y en vísperas de la Segunda Intifada tenía cerca de 200 miembros, muchos de los cuales fueron detenidos entre 2000 y 2002. Entre 1995 y 2002 se beneficiaron del relativo abandono de las calles y de los campus por parte de las corrientes islamistas, forzadas en gran medida por las fuerzas de seguridad, pero también por las directrices de la jerarquía de la Hermandad. Uno de los aspectos más significativos de la actividad de los Socialistas Revolucionarios es que, a diferencia de otras fuerzas de izquierdas, no pretendieron “aprovecharse” de la persecución de los Hermanos Musulmanes y otros grupos, sino que tendieron a estos una mano al tiempo que los combatían ideológicamente. Según El-Hamalawy, los estudiantes de izquierdas, concentrados entonces en las universidades de El Cairo y Ain Chams (también en El Cairo), colocaban regularmente pancartas y carteles en las que denunciaban los

³ Ashraf Khalil, Paul Schemm e Issandr El Amrani: “Boiling point”, *Cairo Times*, 4-10 de abril de 2002.

⁴ Hossam el-Hamalawy: “Street politics”, *Cairo Times*, 26 de septiembre-2 de octubre de 2002.

juicios militares a los Hermanos Musulmanes, así como denuncias a los intentos de los islamistas de imponer la segregación por sexos en las aulas, o cualquier otra de sus posiciones políticas con las que no coincidían. Los islamistas, por su parte, más que enfrentarse a ellos, aunque lo hicieran incluso físicamente en algunas ocasiones, los consideraban un grupo marginal al que ni siquiera merecía la pena prestar demasiada atención.

No obstante, la situación comenzó a cambiar a partir de 1999. Según un miembro de la organización, “los Hermanos Musulmanes nunca habían conocido izquierdistas como nosotros”. Los Socialistas Revolucionarios tenían un lema que incluían en los panfletos que distribuían en la universidad, decía: “A veces con los islamistas, nunca con el Estado”. Dicho eslogan había sido acuñado por Chris Harman, un teórico de la Tendencia Socialista Internacional (trotskista), en su ensayo *The Prophet and the Proletariat* (Harman 1994), que los Socialistas Revolucionarios tradujeron al árabe y distribuyeron en 1997. En las conclusiones de este ensayo publicado en 1994, tras analizar la evolución del islamismo en general, y en Argelia, Egipto e Irán en particular, Harman argüía que los socialistas (trotskistas) no debían considerar a los islamistas su principal adversario, aunque tampoco debían tenerlos por sus aliados. Por el contrario, debían conocerlos bien e interactuar con ellos, no enfrentándose a ellos como un todo monolítico sino abandonando la lógica de la confrontación de las generaciones comunistas anteriores marcadas por su origen estalinista, y dejando de calificar al islamismo en general de “fascista”, una etiqueta que según él no se correspondía con la realidad. Se trataba de intentar atraer a sus jóvenes, “inteligentes, educados y modernos”, y “explotar las contradicciones” del movimiento islamista, “nacido en el fermento de amplios sectores de la población que sufren y que abriga un sentimiento de rebeldía que puede ser invertido con fines revolucionarios”.

El tacticismo de los Socialistas Revolucionarios no estaba, sin embargo, exento de buena voluntad, y los jóvenes estudiantes islamistas lo advirtieron. En 1999, según El-Hamalawy, los Hermanos Musulmanes comenzaron a invitar ocasionalmente a los trotskistas a tomar la palabra en las concentraciones que organizaban en los campus contra los ataques aéreos a Irak. Un segundo hito de las relaciones entre ambas partes se produciría tras las manifestaciones de abril de 2002, cuando la Hermandad comenzó a enviar algunos de sus representantes más populares y flexibles, como Abdel Moneim Abul Futuh y Essam al-Erián, a las reuniones del Comité Popular Egipcio de Solidaridad con la Intifada Palestina. En este participaban casi todas las fuerzas políticas y varias ONG, como el Centro de Leyes Hicham Mubarak, que acogía sus reuniones, y el Centro Nadim para la Rehabilitación de las Víctimas de la Violencia. Los partidos Wafd, Tagammu, las corrientes naseristas, el Partido Comunista Egipto y otros militantes rechazaban, sin embargo, cualquier tipo de cooperación o coordinación con los islamistas, mientras que los Socialistas Revolucionarios y las ONG de izquierdas se mostraban a favor.

La presencia de representantes de la jerarquía de la Hermandad no implicó que esta

llamara a participar en las manifestaciones. Los islamistas habían desaparecido de las calles por orden suya. Las protestas contra la invasión norteamericana de Afganistán en 2001, por ejemplo, las realizaban en el interior de las mayores mezquitas, absteniéndose de continuarlas en el exterior. No obstante, la dirección de la Hermandad se veía sometida a crecientes presiones de sus juventudes, a su vez azuzadas por los militantes de izquierdas. El 5 de abril de 2002, según cita El-Hamalawy, el diario *Al-Hayat* publicaba una carta abierta de algunos “jóvenes hermanos” al guía supremo de la organización islamista en la que criticaban el sometimiento de aquella a la política de seguridad del régimen y demandaban una mayor participación en el movimiento de solidaridad con Palestina. Sin embargo, como si quisiera responder a los tímidos movimientos en el seno de la Hermandad, el 30 de julio el Alto Tribunal de Seguridad del Estado condenaba a entre tres y cinco años de prisión a 16 de 22 miembros de aquella, en su mayoría profesores, ingenieros y médicos de los considerados cuadros medios de la organización, acusados de conspirar contra el régimen e intentar “revitalizar” las actividades de la Hermandad.

Los preparativos para la invasión de Irak por EEUU y sus aliados darían un nuevo impulso a las movilizaciones en las calles y a la actividad política en general. No obstante, en esta ocasión el régimen egipcio, que se opuso a la invasión, intentó ponerse a la cabeza de los manifestantes, patrocinando una gran concentración, formalmente convocada por los partidos de la oposición y diversas ONG, en el mayor estadio de El Cairo el 27 de febrero, a la que asistieron dirigentes de los Hermanos Musulmanes. Mubarak, además, consiguió reunir en Charm al-Cheij, en la península del Sinaí, una cumbre extraordinaria de la Liga Árabe el 1 de marzo, que se saldó con un rechazo común a la invasión con la que los dirigentes árabes pretendían salvar la cara frente a sus pueblos, que se habían pronunciado masivamente contra la guerra. Sin embargo, el día del comienzo de la invasión, el 20 de marzo, salieron a las calles durante cerca de 20.000 manifestantes, que terminaron enfrentándose a la policía. Luego, la policía detendría a varios militantes acusados de formar una organización ilegal con la intención de derrocar al régimen, de poseer publicaciones relativas a esa organización y de difundir falsa información en el exterior de Egipto. La organización, por primera vez mencionada por los servicios de seguridad, y hasta entonces semiclandestina, era los Socialistas Revolucionarios, y los detenidos, entre otros, un joven llamado Ashraf Jalil, que tenía en su casa un gran número de libros sobre trotskismo, y Násir al-Behiri, miembro del Centro La Tierra para los Derechos Humanos⁵. En la defensa de los acusados se implicaron diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos y, de manera significativa, diversos abogados islamistas, como Muntasir al-Zayyat, al que hemos hecho abundante referencia en capítulos anteriores (véase parte II). La manifestación del 20 de marzo de 2003 daría nombre a una nueva organización, el “Movimiento del 20 de marzo” que, promovida por intelectuales y activistas de izquierdas,

⁵ Khaled Ezzalarab: “Trial of the left?”, *Cairo Times*, 11-17 de diciembre de 2003.

uniría a las demanda del abandono de Irak por las tropas ocupantes la crítica de la corrupción en Egipto y la exigencia del fin del estado de excepción. En el seno de este movimiento cooperarían por primera vez, además de los militantes de izquierda socialista y naseristas, como Abdel Halim Qandil, redactor jefe de *Al-Arabi*, órgano de prensa del Partido Naserista, militantes islamistas del partido islamista (no legal) Al-Wasat, dirigido por Abul Ilá al-Madi (Vairel 2006: 112).

Tras la invasión de Irak, la irritación de numerosos jóvenes dirigentes de los Hermanos Musulmanes con la dirección que, según uno de ellos, “dejaba la calle expedita a los izquierdistas” y se atenían estrictamente a las indicaciones de los servicios secretos, era más que considerable (El-Hamalawy 2007), y a partir del año siguiente muchos jóvenes comenzarían a desoír las directivas de la jerarquía de la Hermandad.

1.2 INDICIOS DE UNA NUEVA ACTITUD POLÍTICA ENTRE LAS CLASES MEDIAS PROFESIONALES: EL CASO DE ABOGADOS Y PERIODISTAS

Si bien el número de participantes en las manifestaciones a pie de calle a principios del siglo XXI no dejaba de ser escaso en relación al conjunto de la población, más allá de los medios estudiantiles se percibía la voluntad de romper barreras, no solo las impuestas por el régimen político sino también las existentes entre los diversos sectores sociales e ideológicos. Las corrientes políticas de izquierdas no eran capaces de movilizar a las masas, pero mostraban una nueva vitalidad entre los sectores educados y profesionales, y parecían decididas a buscar dicha movilización, incluso cooperando con los islamistas. La evolución del Sindicato de Abogados y de algunas organizaciones gubernamentales de izquierdas era la mejor prueba de ello.

En febrero de 2001, el Sindicato de Abogados sería el primero en salir de la etapa de hibernación política en la que la acción combinada de la Ley 100 de 1993 y las disensiones internas, endógenas o azuzadas por el poder, habían sumido a los colegios profesionales (véase capítulo IV 6.4). En el de abogados, los enfrentamientos se habían producido entre las corrientes islamistas y los sectores no islamistas, entre los que había emergido con fuerza la figura del naserista Sameh Achur. Como hemos señalado en diversas ocasiones a lo largo de este trabajo, históricamente el Sindicato de Abogados había sido un feudo de las corrientes políticas liberales, y en particular de los partidarios del Wafd, hasta que las políticas estatistas naseristas y la interferencia de los sucesivos Gobiernos lograron equilibrar las fuerzas con los abogados progubernamentales y, en cualquier caso, que los abogados en general aceptaran la conveniencia de contar con un presidente del sindicato afín al poder, a pesar de que la oposición contara con la mayoría de los miembros en sus Consejo de Dirección. A partir de 1992, como en el resto de los principales sindicatos profesionales, fue la corriente islamista quien se impuso en dicho

consejo, lo que llevó a un constante enfrentamiento entre este y el síndico, Ahmad al-Jawaga, apoyado por las fuerzas de oposición no islamista, que conduciría a la tutela judicial sobre el sindicato en 1996. Desde entonces, las elecciones no habían contado con el quorum necesario para celebrarse, pues el gobierno animaba a sus partidarios o clientes a no participar.

En las elecciones de febrero de 2001, sin embargo, se rompió la tendencia de los años anteriores. Aunque en la primera votación no se alcanzó el quorum requerido del 50%, en la segunda, que exigía solo un 33%, votaron el 49,7% de los abogados con derecho a voto. La elección de los miembros del Consejo de Dirección arrojó una relativa mayoría islamista de 8 miembros de 24, considerablemente inferior a la mayoría absoluta de 13 que habían obtenido en 1992. No obstante, la principal sorpresa se produjo en la elección del síndico, con la victoria de Sameh Achur (19.107 votos), por delante del candidato gubernamental Ragai Ateyya (17.207 votos), que era apoyado por los Hermanos Musulmanes, y mucho más votado que el candidato wafdist, Ahmad Náser, que obtuvo tan solo 4.324 votos. Los Hermanos Musulmanes habían seguido la vieja lógica de apoyar al candidato gubernamental, pero no todos sus simpatizantes habían seguido sus consignas ⁶. Tampoco los abogados votaban únicamente según sus adscripciones ideológicas, sino también en consideración a las características personales de cada candidato a síndico. No obstante, el rechazo por primera vez al candidato patrocinado por el Gobierno era claro.

Los nuevos aires en el Sindicato de Abogados habían comenzado en realidad en los meses anteriores. Sameh Achur y los dirigentes islamistas habían mostrado su voluntad de abandonar la política de enfrentamientos, colaborar en la buena marcha del sindicato y recuperar su histórico papel de impulsor del debate político y defensor de las libertades públicas, una voluntad que confirmaron tras la celebración de las elecciones de 2001 ⁷. Poco más de un año después, la sede del sindicato se había convertido, en palabras de Hossam el-Hamalawy, en “el hogar táctico e ideológico” del movimiento de solidaridad con Palestina ⁸. Los estudiantes y otros activistas, sometidos a una reforzada vigilancia policial en los campus, se refugiaban en su sede para organizar y evaluar sus actividades.

El sindicato volvería así mismo a abrir sus puertas a todas aquellas organizaciones a quienes la legislación privaba de un espacio legal y físico para desempeñar sus actividades, en particular después de que, en junio de 2002, el Parlamento aprobara la Ley 84 de Asociaciones Civiles, que salvaba los escollos puestos por el Tribunal Constitucional a su predecesora del año 2000, y mantenía la obligación de obtener la autorización gubernamental. Bajo la nueva ley, la Organización Egipcia de Derechos Humanos obtendría por primera vez su reconocimiento legal, pero no así otras organizaciones de

⁶ Mona El-Gobashy: “Springtime of the syndicate”, *Cairo Times*, 1-14 de marzo de 2001.

⁷ Ibid.

⁸ Hossam el-Hamalawy: “Welcome to Petrograd”, *Cairo Times*, 18-24 de abril de 2001.

orientación izquierdista, como el Centro La Tierra de Derechos Humanos o el Centro de Estudios de la Nueva Mujer.

No obstante, la nueva actitud política de numerosos abogados, en particular de izquierdas, no se reflejaría solo en la evolución del sindicato. Como hemos señalado, organizaciones como el Centro de Leyes Hicham Mubarak o el Centro Al-Nadim pasarían de la actividad defensiva a la, si se permite la expresión, “ofensiva”, al acoger no solo las reuniones del movimiento de solidaridad con Palestina y contra la invasión de Irak, sino también las de las diversas organizaciones que se esforzaban por generar un movimiento sindical independiente entre los trabajadores (como el Centro de Servicios Sindicales y Obreros y el Comité de Coordinación para los Derechos y Libertades Sindicales, ya citados en el capítulo IV 8.5). Es de notar que estas últimas eran especialmente hostigadas por la policía.

En julio de 2003, el Sindicato de Periodistas seguiría los pasos del de Abogados, al elegir por primera vez a un síndico, Galal Aref, ex periodista del diario naserista *Al-Arabi*, que no era un turiferario del régimen de Mubarak y que llevaría al sindicato a una época de mayor confrontación con el poder.

1.3 LOS MOVIMIENTOS POR LA “REFORMA” DEL PND Y DE LOS PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN

Observando las nuevas actitudes de los partidos políticos autorizados en los primeros años del siglo XXI se diría que de alguna manera respondían al nuevo clima político que comenzaba a percibirse en la sociedad. Tanto el PND como el resto de los partidos realizaron en estos años movimientos orientados a tomar la iniciativa política en un momento en el que diversos sectores sociales parecían abandonarlos definitivamente. Como veremos más adelante (capítulo V 3.1), en el caso del partido gubernamental estos movimientos respondían sin duda a una estrategia de más largo aliento y alcance, concebida previamente por las más altas instancias del régimen (Hosni Mubarak y sus más estrechos colaboradores), ante el notable deterioro de la situación económica y el peso adquirido por la alta burguesía privada en el equilibrio de fuerzas económicas y sociales en el país. No obstante, seguiremos en primer lugar la evolución de los acontecimientos en su apariencia política formal.

El primero en dar atisbos de que algo cambiaba fue el propio partido gobernante, que entre el 15 y el 17 de septiembre de 2002, poco después de las manifestaciones propalestinas de abril, celebraba su octavo congreso general, el primero desde hacía diez años. Durante él, el PND confirmó como presidente a Hosni Mubarak, y a la mayoría de los miembros de su principal órgano directivo, la Secretaría General, que seguiría estando formada por lo que a partir de entonces se denominaría “la vieja guardia” del partido, es

decir, los antiguos dirigentes de origen burocrático del tipo de Safwat al-Charif, Yusuf Wali y Kamal al-Chazli, nombrados respectivamente secretario general y vicesecretarios generales del partido. La longevidad de estos personajes en puestos clave del Gobierno y del partido, que habían iniciado sus carreras políticas en tiempos de Sadat e incluso de Náser, no encuentra parangón en la historia política de Egipto. Al-Charif había sido miembro de los servicios secretos en época de Sadat y era ministro de Información desde 1981; Wali, anteriormente secretario general del partido, era ministro de Agricultura desde 1982; Al-Chazli, había entrado por primera vez en el Parlamento egipcio en 1964, cuando era miembro de la USA, y sería diputado ininterrumpidamente desde 1971 hasta 2000, siendo durante casi todo el periodo de mandato de Mubarak jefe del grupo parlamentario del PND, y desde 1993 ministro de Estado para las Relaciones con el Parlamento.

No obstante, junto a esta línea continuista en el que supuestamente era el órgano supremo del partido, el VIII Congreso del PND estableció la creación de un nuevo órgano que iba adquirir grandes atribuciones. Se trataba del Comité de Políticas (لجنة السياسات), formado por 150 miembros, que en adelante diseñaría las políticas que habría de seguir el Gobierno, una diferencia notable con el pasado, en el que era el Gobierno quien decía al partido lo que debía hacer. Otra función determinante del nuevo comité sería elegir a los candidatos a las elecciones legislativas.

En su discurso en el congreso, Hosni Mubarak había animado a los presentes a crear “una nueva base organizativa e intelectual que garantizara la efectividad del partido en el futuro”. “Por primera vez -añadía el presidente- debatiréis y adoptaréis nuevas fórmulas para los principios y estatutos del partido”. Por su parte, su hijo Gamal, miembro de la Secretaría General desde 2000, había subrayado la necesidad de “desarrollar la estructura fundamental del partido” y “abrir la puerta a sus miembros y dirigentes intermedios para una auténtica participación en las labores del partido”⁹. El relativo fracaso del PND en las elecciones de 2000 fue uno de los argumentos más invocados para la renovación; la necesidad de emprender una profunda reforma en el país, económica y política, el otro.

Las elecciones al Comité de Políticas se celebraron el 17 de septiembre, y como presidente fue elegido Gamal Mubarak. Entre sus casi ciento cincuenta miembros, fundamentalmente economistas, hombres de negocios e intelectuales, destacaba un puñado de hombres de negocios estrechamente relacionados con el hijo del presidente, como Ahmad Ezz, Rachid Mohammed Rachid, Mohammed Abul Einein y Mahmud Mohai Eddín, gran parte de los cuales fueron encargados de dirigir los subcomités especializados. Junto a ellos, Gamal Mubarak se había atraído a un nutrido grupo de profesionales e intelectuales, como los politólogos Ali Eddín Hilal, Abd al-Moneim Said, Yihad Auda u Osama al-Gazali Harb, o el médico Hossam Badrawi. Algunos de ellos eran miembros del

⁹ Ashraf Khalil: “New thinking, new Egypt”, *Cairo Times*, 19-25 de septiembre de 2002.

PND desde hacía tiempo, pero otros, procedentes de otros partidos o independientes, habían sido atraídos a él por Gamal Mubarak. Era este nuevo componente profesional y social el que pretendía dar mayor credibilidad a los planes de reforma.

A los movimientos en el seno del PND les siguió pronto otros de los partidos autorizados, tal vez temerosos de perder presencia política frente a aquella iniciativa y frente a las movilizaciones en las calles, en las que no habían desempeñado un papel promotor. En noviembre 2002 el Wafd, el Tagammu, el Partido Naserista y el Partido Comunista Egipcio, junto a siete organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, fundaron el Comité en Defensa de la Democracia, que pretendía plantear un programa político común alternativo para la reforma del sistema político. Ante la inoperancia de este comité, y probablemente aguijoneados por las movilizaciones contra la invasión de Irak, en mayo de 2003 sus fundadores probaron suerte con una nueva iniciativa conjunta, a la que denominaron “Frente Nacional para la Reforma Política”, y a la que intentaron atraer a otras fuerzas políticas y sindicatos, excluyendo a los Hermanos Musulmanes. Tampoco esta nueva iniciativa tuvo demasiado éxito.

Apenas iniciados los nuevos esfuerzos de los partidos de la oposición autorizada por lograr la unidad, el régimen político les tomaba de nuevo la delantera. El 15 y el 16 junio de 2003 el Parlamento, a instancias del Comité de Políticas del PND, tomó tres medidas legislativas que supuestamente debían mostrar el comienzo de una nueva era política. Una de ellas fue la retirada de la Ley 105 de 1980, en virtud de la cual habían nacido los tribunales de Seguridad del Estado; otra, la eliminación de la pena de trabajos forzados; y la tercera abría el paso a la creación de un Consejo Nacional de los Derechos Humanos, formado por 25 miembros designados por la Asamblea Consultiva, a la cabeza del cual se colocó a Butrus Butrus Gali, exministro de Asuntos Exteriores en época de Sadat y exsecretario general de la ONU. “Las nuevas leyes reafirman las inclinaciones democráticas del PND”, señaló el magnate del acero Ahmad Ezz, presidente del recién creado Comité de Presupuesto del PND. “Deberíamos agradecer al Comité de Políticas sus propuestas”, opinó Zakariya Azmi, jefe de gabinete de Hosni Mubarak. “La violaciones de los derechos humanos se producen incluso en los países más avanzados. Estas audaces iniciativas forman parte de la construcción de un Estado moderno”, afirmó Mustafa al-Fiqi, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del PND en una rueda de prensa conjunta con el embajador estadounidense David Welch¹⁰. No obstante, los partidos de la oposición y las organizaciones de derechos humanos denunciaron que tales medidas tendrían escasa incidencia mientras siguiera vigente el estado de excepción, que llevaba aparejado la existencia de sus propios Tribunales de Seguridad del Estado de Excepción, y mientras la legislación permitiera juzgar a civiles en tribunales militares. Por otro lado, al retirar la Ley 105 de 1980 el Parlamento había transferido la posibilidad de ordenar detenciones

¹⁰ Mona El Ghobasy: “Be grateful, citizen”, *Cairo Times*, 19-25 de junio de 2003.

administrativas de los fiscales de los Tribunales de Seguridad del Estado desaparecidos al Fiscal General, incrementando además el periodo de detención de quince días a seis meses.

En cualquier caso, lo cierto es que desde 2002 las autoridades egipcias habían mostrado algunos gestos dirigidos a perseguir la tortura. En marzo de 2002, la muerte de dos ciudadanos, supuestamente a causa de ella, había llevado a la pronta detención de los policías implicados¹¹, algunos de los cuales serían condenados a dos años de prisión el 14 de julio. Una semana antes, el 7 de julio, otro policía había sido condenado a seis meses por torturar a una mujer que había rechazado indicar el paradero de su marido¹². En septiembre de 2013 comenzaría el juicio a doce oficiales de policía de Alejandría por haber torturado ¡en 1996! a un hombre que había denunciado la desaparición de su hija. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos encomiaban estas iniciativas, pero no podían dejar de señalar el reverso de la moneda, que apuntaba a una práctica sistemática para perseguir cualquier delito y que no reparaba en extender los malos tratos a los familiares de los supuestos delincuentes. Según la Organización Egipcia de Derechos Humanos, en 2012 murieron 10 personas bajo custodia de la policía, una cifra que se elevó a 11 personas tan solo en los nueve primeros meses de 2003. Por otro lado, los perseguidos por la justicia eran siempre miembros de las fuerzas regulares de policía, y nunca los miembros de la temida policía secreta de los Servicios de Seguridad del Estado (مباحث أمن الدولة), cuyo extendido recurso a la tortura y los malos tratos fue denunciado en el informe sobre Egipto del año 2002 del Comité contra la Tortura de la ONU¹³.

Una nueva puesta en escena de la voluntad de reforma del PND se produjo en su congreso anual del año 2003, celebrado entre los días 26 y 28 de septiembre. Relegando a una segunda posición a los dirigentes de la “vieja guardia”, Gamal Mubarak abrió el congreso con una ponencia denominada “Derechos de ciudadanía y democratización: una invitación a participar”, que sería adoptada por el partido y sentaría las bases para la reforma política promovida por el PND. Hosni Mubarak vino a reforzar las promesas de su hijo anunciando durante el congreso que, accediendo a la muy antigua demanda de los defensores de los derechos civiles, iba a decretar la concesión de la nacionalidad egipcia a los niños nacidos de madre egipcia y padre extranjero. “Toda forma de discriminación contra las mujeres -afirmaba el Presidente- debe ser abolida”¹⁴. Por lo demás, el Comité de Políticas del partido llevó las riendas del congreso, desplegando una amplia oferta de propuestas en los terrenos de la economía, la sanidad, la juventud, la educación y la mujer. La prioridad sería dada a la completa liberalización de la economía, y en el marco de ella se asignaría un papel más importante al sector privado, a la sociedad civil, a las mujeres y a las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Algunos miembros del Comité de Políticas,

¹¹ Abdalla F. Hassan: “Banning the beatings”, *Cairo Times*, 14-20 de marzo de 2002.

¹² Mandy Fahmi: “Police torture under scrutiny”, *Cairo Times*, 18-24 de julio de 2002.

¹³ Charles Levinson: “Police torturers charged”, *Cairo Times*, 25 de septiembre- 1 de octubre de 2003.

¹⁴ Charles Levinson: “New guard, old obstacles”, *Cairo Times*, 2-8 de octubre de 2002.

como Hossam Badrawi, no tenían inconveniente en reconocer que en el partido había “reformistas y otros que quieren mantener el *statu quo*”¹⁵.

Apenas tres semanas después de concluido el congreso, en la última semana de octubre, el PND cumplía la promesa realizada durante aquel de iniciar un “diálogo nacional” con los partidos de la oposición. Se cumplían casi diez años desde que fallara una iniciativa similar con la misma denominación (véase capítulo IV 6.1) y, como en aquella ocasión, el PND excluía del diálogo a los Hermanos Musulmanes y recibía el apoyo para dicha exclusión del Wafd y del Tagammu, si bien el Partido Naserista se desmarcaba de la posición dominante, reclamando la presencia de la Hermandad y confirmando la nueva posición de las corrientes naseristas hacia aquella que hemos explicado en el capítulo anterior. Essam al-Erián, destacado dirigente de los HHMM, analizó así las posturas de los dirigentes del Tagammu y el Wafd: “Lo que quieren discutir con el PND los señores Nuamán Guma [presidente del Wafd desde el fallecimiento de Fuad Serag Eddín en 2000] y el señor Rifaat al-Said [secretario general del Tagammu] es cómo quitarse de en medio el obstáculo de los Hermanos Musulmanes. Quieren democracia sin nosotros, que tenemos un fuerte apoyo en la sociedad”¹⁶.

Los tres partidos de la oposición acudirían al “diálogo nacional” con unas demandas comunes presididas por la exigencia de elecciones presidenciales directas con supervisión judicial, de la abolición de la Ley de Excepción y del levantamiento de las restricciones a la constitución de partidos, pero el PND no querría entrar a discutir estos asuntos.

1.4 EL GOBIERNO DE AHMAD NAZIF, O EL “GOBIERNO DE GAMAL MUBARAK”

En junio de 2004 Hosni Mubarak decretó un profundo cambio ministerial. A la cabeza del Gobierno fue nombrado Ahmad Nazif, y junto a él un nutrido número de nuevos ministros. Para gran parte de la prensa gubernamental, las nuevas caras representaban el acceso al poder ejecutivo de una nueva generación reformista que se había formado en el extranjero y había mostrado sus aptitudes con su éxito académico y/o profesional. Para la prensa de la oposición se trataba del “Gobierno de Gamal Mubarak”. Efectivamente, los nuevos ministros tenían currículos muy notables, pero las reticencias de la oposición se debían a que gran parte de ellos eran o bien miembros del Comité de Políticas del PND o bien amigos de Gamal Mubarak o bien ambas cosas (Hassabo 2005: 8-15). Destacaba así mismo que el “grupo de Gamal”, en su gran parte formado por hombres de negocios, se hacía con el mando de la economía en el poder ejecutivo, tras haberse hecho con él en el

¹⁵ *Ibíd.*

¹⁶ Gamal Essam El-Din: “No pressure”, *Al-Ahram Weekly*, 20-26 de noviembre de 2003.

PND, lo que equivalía a decir en el Parlamento, donde Ahmad Ezz, secretario de Asuntos de Organización del PND y que controlaba el 65% de la producción de acero del país (Kohstall 2005:63), presidía la Comisión de Presupuestos.

Los nuevos ministros amigos de Gamal Mubarak nombrados en sectores económicos importantes eran Ahmad al-Magrebi, ministro de Turismo, que luego lo sería de Vivienda en 2005, siendo sustituido en Turismo por Zoheir Garane, también amigo de Gamal; Rachid Mohammed Rachid, ministro de Industria; Mahmud Mohai Eddín, ministro de Inversiones en 2005; y Mohammed Mansur, también amigo del hijo del presidente, que sustituiría al díscolo Essam Charaf en el Ministerio de Transportes. Si bien la cartera del Ministerio de Economía siguió en manos de Yusuf Butrus Gali, este estaba próximo a la visión liberal de los antes citados, y ya desde 1997 se había encargado de avanzar en la liberalización económica. También se incorporaban al Gobierno en 2004 otros miembros del Secretariado de Políticas del PND, como Ali Eddín Hilal, ministro de la Juventud y de Deportes, o Anas al-Fiqi, nuevo ministro de Información; así como nuevas caras menos comprometidas políticamente para los ministerios de Comunicaciones, Educación e Investigación Científica y Educación Superior, que se suponía que también debían impulsar la “reforma global” deseada por el PND.

Pero tan significativos como los nuevos ministros eran los cesantes de la “vieja guardia” del régimen, entre los que destacaban Safwat al-Charif que “perdía” el Ministerio de Información después de más de 20 años al cargo, y Yusuf Wali, que abandonaba el de Agricultura tras dirigirlo durante el mismo lapso de tiempo. No obstante, en los ministerios de “control político-social” -excepto en el de Información, clave para apoyar la reforma- continuaban viejas figuras del régimen, como Mohammed Husein al-Tantawi, ministro de Defensa desde 1991, Faruq Hosni, ministro de Cultura desde 1987, o Habib al-Adli, ministro del Interior desde 1997. También continuaron Ahmad al-Emawi, ministro de Trabajo desde 1993, y Kamal Chazli, ministro de Estado para las Relaciones con el Parlamento desde 1993. En definitiva, el Gobierno de Ahmad Nazif era en realidad una mezcla de un Gobierno “clásico” de Hosni Mubarak y una nueva elite apadrinada por su hijo Gamal.

2. CRISIS ECONÓMICA Y LIBERALIZACIÓN: TRASTIENDA DE LA ANUNCIADA REFORMA POLÍTICA

Bajo la parafernalia de declaraciones y medidas en torno a la reforma política del PND subyacía una razón de peso: el país se encontraba de nuevo inmerso en una galopante crisis económica, de origen fiscal como siempre, que había comenzado a apuntar en 1999 y alcanzaría uno de sus hitos en 2003. Las más altas esferas del poder político (es decir, Hosni Mubarak) habían decidido afrontarla dando un empujón casi definitivo a la

liberalización económica, y ello requeriría dar mayor protagonismo en el Gobierno a las tendencias liberales y al sector privado, y desplazar a parte de las elites de origen burocrático que podían dificultarla.

La reforma política consistía esencialmente, en un principio, en un proceso interno del partido gobernante de sustitución de sus elites y sus miembros en las instituciones del Estado. No obstante, los llamados entonces “reformistas” del PND necesitaban también expandir su apoyo social, precisamente frente a las elites desplazadas, y más adelante convertirlo en apoyo electoral, de ahí su invitación a unirse a ellos a ciertos sectores de la sociedad. De cara a la mayoría de la sociedad, la reforma no era más que un movimiento de distracción mientras se introducían medidas económicas clave para cambiar el rumbo del sistema económico egipcio.

2.1 NUEVA CRISIS FISCAL

En las postrimerías del siglo XX, el Estado egipcio se dirigía de nuevo, como ya hemos apuntado, hacia el abismo de una nueva crisis fiscal, y el Gobierno egipcio no podía entrever ningún nuevo “milagro” de origen exterior que le apartara de ella, como el que había supuesto la reducción de su deuda externa en 1991 gracias a su intervención en la guerra contra Irak para liberar Kuwait, y el subsecuente aflujo de ayuda financiera internacional (véase capítulo IV 1).

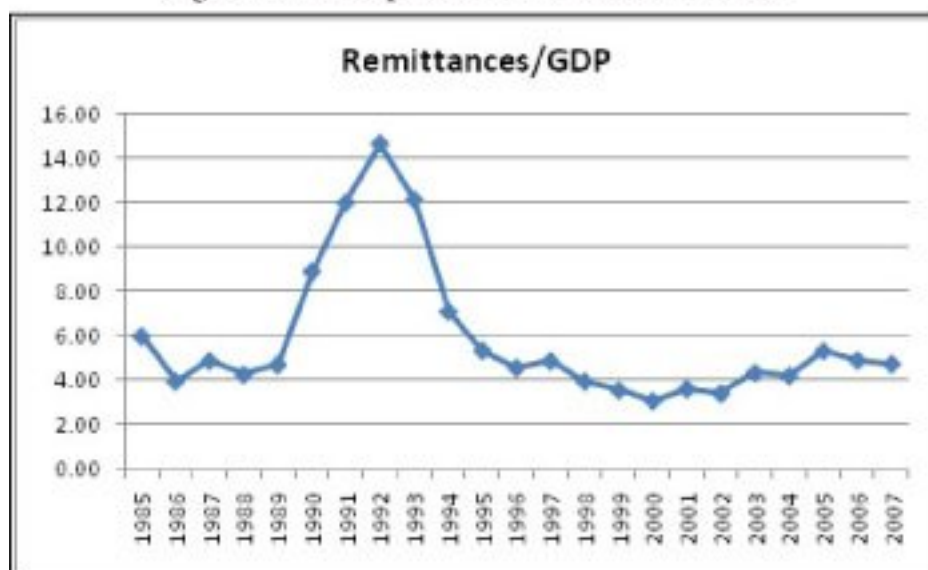
2.1.1 El fin de la economía rentista

Los ingresos del Canal de Suez, que en 1994 suponían el 4% del PIB egipcio, habían descendido al 2% en 1999, y se mantendrían en torno a ese porcentaje hasta 2005, antes de experimentar de nuevo una brusca bajada. La ayuda internacional, que había llegado a suponer un 14% del PIB en 1991, había ido descendiendo en picado hasta 1995, situándose por debajo del 4%, y en 2000 se colocaría por debajo del 2%, antes de llegar a un mínimo del 0,5% en 2005 (Soliman 2011: 48-49). Las transferencias de los trabajadores extranjeros también habían conocido un descenso radical desde 1991, cuando alcanzaron los 6.000 millones de dólares y suponían un 15% del PIB¹⁷; entre 1996 y 2004 se situaron en torno a los 3.000 millones anuales de media, la mitad en términos brutos que en 1991, como se puede apreciar en la tabla 19:

¹⁷ M.I.T. El-Sakka: “Remittances of Egyptian Migrants: An Overview”, *Middle East Institute*, 18 de abril de 2010 (<http://goo.gl/htUJcC>, consulta del 2 de octubre de 2015).

Tabla 19: Evolución del PIB por remesas de los inmigrantes

Figure 2: The Proportion of Remittances to GDP



FUENTE: El-Sakka, 2010

Las consecuencias del descenso de los recursos rentistas y externos no fueron en absoluto paliadas por el crecimiento económico interno, afectando sobremanera al déficit público. El PIB, que entre 1995 y 2000 había crecido a una media del 6% anual, aumentó entre 2000 y 2005 a una media del 2,6% (Clément 2011: 610). El déficit público que había llegado a representar tan solo el 0,6 del PIB en 1994, y había subido moderadamente, hasta el 1,5%, en 1997, subió progresivamente hasta el 5,5% en 2000, y como una flecha hasta 2002, cuando alcanzó el 11% (Soliman 2011: 50).

2.1.2 A la búsqueda desesperada de ingresos

Para responder a una crisis fiscal de tales características, el régimen egipcio reaccionó, obviamente, intentando incrementar los ingresos y reducir los gastos del Estado. No obstante, la manera de hacerlo habría de tener importantes consecuencias sobre el devenir del país y del propio régimen político.

En cuanto a los ingresos, el endeudamiento regresó con fuerza a las cuentas públicas, pero lo hizo de una manera diferente a la de las décadas anteriores, recurriendo sobre todo al endeudamiento interno, ante la dificultad de obtener créditos en el extranjero. Entre 1999-2000 y 2004-2005 la deuda egipcia subió de 339,6 miles de millones de LE a 627,9 miles de millones, con un tremendo incremento de 391,2 a 517,2 miles de millones de LE entre 2000-2001 y 2002-2003, que hizo pasar el porcentaje de deuda en relación al PIB del 109,1% al 152,1% (Soliman 2011: 50). La razón de que los expertos económicos computen la deuda en los periodos mencionados en libras egipcias es que entre 1999 y

2003 la mayor parte de ella era deuda interna en un porcentaje medio superior al 70% del PIB, y superior al 100% entre 2004-2005. Por su parte, la deuda externa egipcia tampoco era desdeñable, pues de suponer, calculada en libras egipcias, el 27% del PIB en 1999-2000, había pasado al 43% en 2002-2003, para luego descender al 31%, si bien estos porcentajes resultan engañosos pues durante todo el periodo la libra egipcia fue sometida a varias devaluaciones, una de las más notables a comienzos de 2003 (Soliman 2011: 50).

El incremento de la deuda interna del Estado hasta alcanzar el 100% del PIB y su preponderancia dentro del conjunto de la deuda pública representaba una novedad radical respecto a los 50 años anteriores. Por primera vez, el Estado dependía para su financiación de los recursos de sus ciudadanos y, según una de las constantes señaladas por la politología (Ayubi 1995: 330-339; Vallès 2008: 75-77, 85-97), ello debía implicar una reducción de la “autonomía relativa” de sus dirigentes frente a las demandas de la parte de la sociedad que lo financiaba. Además, en el caso de los regímenes autocráticos dicha pérdida de autonomía podía conducir a una mayor demanda de responsabilidad política, e incluso a una modificación de sus constituyentes y sus principios de funcionamiento. Ahora bien, en el caso egipcio la deuda interna tenía dos capítulos principales bien diferenciados, aunque unidos por el hecho de que era el Gobierno egipcio quien decidía cuándo le prestaban los ciudadanos.

Uno de dichos capítulos, al que ya hemos hecho referencia anteriormente (véase capítulo IV 7.2) lo componían los capitales que el Gobierno egipcio obligaba a prestarle a los trabajadores, al hacer que el Banco Nacional de Inversiones, cuyo control detentaba, utilizara los fondos pensiones y de la seguridad social públicos, depositados en dicho banco por el Ministerio de Solidaridad Social, para comprar deuda del Estado. En 2003 el déficit de dichos fondos, “saqueados” por la compra de deuda, se había convertido en un problema potencialmente explosivo. En noviembre de 2003, el presidente del Gobierno desde 1999, Atef Ebeid, anunció que el Gobierno estaba considerando entregar acciones de las empresas remanentes del sector público a dichos fondos a cambio de la deuda que el Estado tenía con ellos¹⁸. Ante la oleada de preocupación provocada por tal anuncio, motivada por la desconfianza en la rentabilidad de las empresas elegidas, y que llegó a las sesiones del Parlamento, el Gobierno aseguró que tal medida no sería llevada cabo. No obstante, a finales de los 90 el Gobierno, entonces presidido por Kamal al-Ganzuri, y que contaba con Yusuf Butrus Gali como ministro de Economía, ya había hecho incurrir en considerables pérdidas, de 1.500 millones de LE, a los beneficiarios titulares de los fondos, al obligar al Ministerio de Solidaridad Social a invertir una considerable parte en la bolsa egipcia con el fin de revitalizar la economía (Soliman 2011: 108).

El otro capítulo de los préstamos domésticos al Estado procedía de los bonos y letras que eran comprados por los bancos locales, un gran porcentaje de los cuales eran

¹⁸ *Al-Ahram*, 4 de marzo de 2004. Citado por Soliman (2011: 107).

todavía de propiedad estatal. En 2003, los bancos públicos (incluido el Banco Nacional de Inversiones) tenían el 77,8% del montante de todos los depósitos que había en el país, y aunque disfrutaban de una relativa autonomía en su gestión, incluida la adquisición de deuda pública, no podían sustraerse totalmente a las presiones del Gobierno, al ser, a fin de cuentas, de propiedad estatal (Soliman 2011: 108-109). Sin embargo, los titulares de los depósitos no dejaban de ser particulares, con los que el Estado -a diferencia del caso de los fondos de pensiones y seguridad social públicos- establecía una relación formal contractual. Tales particulares pertenecían a los reducidos sectores de la población que podían permitirse ahorrar. Las clases más adineradas, con sus depósitos en los bancos estatales y privados que prestaban al Estado, se convertirían, a diferencia del pasado, en los principales acreedores de este, y podían influir de manera determinante en sus políticas a partir de tal condición.

Otro procedimiento para incrementar los recursos del Estado fue la generalización del impuesto del IVA, que había sido establecido en 1991 a los importadores y los comerciantes al por mayor, y a todos los comerciantes una década después, en 2001. Además de los efectos sobre el conjunto de la población, que era en teoría quien debía afrontar en última instancia el nuevo impuesto, a principios de los 90 el Gobierno había temido la reacción de un colectivo numéricamente muy importante, el de los comerciantes al por menor, y ahora las circunstancias económicas de estos eran iguales, si no peores. Junto a la recesión económica, desde finales de los 90 los comerciantes sufrían la competencia de las cadenas de supermercados transnacionales de marcas como Carrefour o Sainsbury's, no presentes en el país anteriormente. Además, los comerciantes temían que la implantación del IVA, además de afectar a sus ventas, sirviera al Gobierno para recopilar información sobre el volumen de sus actividades y utilizarlas en la recaudación del impuesto sobre la renta, hasta entonces sujeto a un tipo muy reducido y recolectado de manera muy deficiente. El responsable de la autoridad encargada de la implementación de esta nueva fase del impuesto del IVA pretendió tranquilizar a los comerciantes prometiéndoles públicamente que su departamento no facilitaría ninguna información a su homólogo encargado del impuesto sobre la renta, lo que equivalía prácticamente a decir, como señala Soliman (2011: 112-113), que las autoridades prometían cerrar los ojos ante el fraude fiscal.

Los ingresos por impuestos indirectos, es decir aquellos que afectaban de una u otra manera al conjunto de la población, constituían en 2001 el 60% del total de los ingresos en concepto de impuestos, mientras que otro 30% provenía de los impuestos a las empresas financieras, si bien de ellos un 15% se deducían de las grandes empresas del sector público, como la Organización General del Petróleo o la Compañía del Canal de Suez. En cuanto al impuesto sobre la renta, apenas contribuía con un 10% y gravaba a las distintas clases sociales de manera muy desigual, tanto por su concepción como por el fraude fiscal. En 2001, cinco millones de manufactureros, comerciantes y hombres de negocios

aportaban tan solo el 4,4% de los ingresos por impuestos, casi el mismo porcentaje con el que contribuían los asalariados, el 4%, y muy superior al obtenido de los profesionales liberales, como médicos, abogados, consultores y otros, que se situaba en el 0,2% (Soliman 2011: 116-117). En definitiva, como señala Soliman, el sistema impositivo egipcio era, además de ineficaz, “socialmente desigual, favoreciendo a los ricos frente a los empleados asalariados”.

Finalmente, otro procedimiento del Gobierno egipcio para obtener ingresos fue la recuperación del “impuesto inflacionario”, al que ya hemos hecho referencia anteriormente (véase capítulo III 3.3) y que apenas había sido utilizado en el primer quinquenio de los años 90. La emisión de moneda anual, que en 1999-2000 equivalía al 6% del PIB, llegó hasta el 14% en 2002-2003, propulsando la inflación, que si en 2000-2001 era tan solo del 2,5% del PIB llegó a casi el 14% en 2002-2003 (Soliman 2011: 101-103). Recordemos que la emisión de moneda era decidida por el Gobierno sin consultar a nadie y sin anunciarlo públicamente, y que al elevar la inflación reducía en la práctica el poder adquisitivo de los ciudadanos, especialmente de aquellos que no podían repercutir dicha inflación en los precios que cobraban por sus servicios o su trabajo. Responsables de otra parte considerable del aumento de la inflación fueron diversas devaluaciones de la libra decididas por el Gobierno, la más importante de las cuales se produjo en enero de 2003, al eliminar el sistema de cambio fijo de la libra, y quedar esta sometida a las leyes de la oferta y la demanda, lo que provocó su depreciación en un 15% respecto al dólar, al pasar este de cambiarse por 5,4 LE a hacerlo por 7,1 LE.

2.1.3 Disminución del gasto público, incremento de la pobreza

Durante el primer quinquenio del siglo XXI, el Gobierno egipcio también buscó mejorar su balanza fiscal reduciendo el gasto público. Esta tendencia ya había sido iniciada en los cinco años anteriores, pues aquel había pasado a equivaler al 50% del PIB en 1994 al 35% en 1999. No obstante, en 2005 alcanzaría su cota más baja en 50 años, situándose en un 28% del PIB (Soliman 2011: 47).

Los datos mencionados hasta ahora no podían dejar de implicar un repunte del umbral bajo de la pobreza, cuyo porcentaje sobre el total de la población recuperó en 2005 el nivel de 1995, situándose en un 19,6%, después de haber bajado al 16,7% en 2000. Según el criterio de medición que considera pobres absolutos a quienes ingresan *per cápita* menos de 2 dólares diarios en paridad de poder adquisitivo, la pobreza absoluta alcanzaría en 2007 a un porcentaje del 45% de los egipcios, elevándose este porcentaje en las zonas rurales hasta el 80%. Por contra, el índice GINI señalaba en 2005 una reducción de las desigualdades sociales, al retornar al 0,32, es decir a niveles de 1995, después de haber subido hasta el 0,35 en 2000, una evolución sin duda debida a que los efectos de la crisis

económica afectaban a todas las clases sociales y más, en términos absolutos, a las más acomodadas (Clément 2011: 615-619).

2.2 UN FUERTE IMPULSO A LA LIBERALIZACIÓN

2.2.1 La reforma de la Ley del Trabajo y las privatizaciones

Durante el periodo 2000-2005, el Gobierno egipcio, dirigido hasta junio de 2005 por Atef Obeid, y a partir de entonces por Ahmad Nazif, dio un fuerte impulso a la liberalización económica, por dos vías principales y complementarias: un gran incremento del ritmo de las privatizaciones, y la promulgación de la Ley Unificada del Trabajo.

De las 314 empresas iniciales resultado de la reorganización del sector público industrial, en 2006 habían sido vendidas 236, frente a tan solo 137 en 1999. Además 33 habían sido liquidadas (entre ellas un tercio de las compañías textiles) y 25 alquiladas. Las ventas se habían realizado a precios muy inferiores a los estimados inicialmente. En 1990 el conjunto de las empresas del Estado habían sido valoradas en 320 mil millones de LE, y por las 236 vendidas hasta 2006 tan solo se habían obtenido 32 millones LE, de los que 10,9 se habían ingresado tan solo en 2005, lo que, aun teniendo en cuenta que algunas de las empresas más valiosas se habían dejado para el final, da una idea del ritmo adoptado por las privatizaciones al final del quinquenio (Clément 2011: 613).

La reforma de las leyes laborales fue una pieza clave para el avance de las privatizaciones, pero también para el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores. El gobierno había hecho circular borradores de la nueva Ley Unificada del Trabajo desde 1994, pero esta no fue aprobada hasta enero de 2003. La demora en promulgar esta nueva legislación se debía a las consecuencias sociales y políticas que podía tener si respondía al espíritu de los defensores de la liberalización a ultranza.

La Ley de 2003, que unificaba las diversas leyes laborales preexistentes, respondía a dicho espíritu: una de sus novedades de más alcance es que autorizaba el despido sin indemnización, excepto en el caso de que el asalariado pudiera probar su carácter abusivo, en cuyo caso recibiría un mínimo de dos meses de salario por año trabajado. En la práctica, el conjunto de las disposiciones de la ley privaba en la práctica a los asalariados del sector privado de gran parte de los beneficios asociados formalmente a sus contratos de trabajo. Más débiles que sus compañeros del sector público, pues la mayoría de ellos no estaban afiliados al todavía sindicato único estatal, aunque en teoría podían recurrir su despido ante los tribunales, la duración del procedimiento, su resultado incierto, los costes legales del recurso y la ausencia de remuneración durante él empujaron a la mayor parte de los trabajadores a aceptar indemnizaciones por despido inferiores a las previstas por la ley, o

bien reducciones de salario o condiciones de trabajo duras o peligrosas. La ley no les garantizaba más que un salario mínimo y el derecho a una pensión de jubilación en proporción a dicho salario, si bien en 2004 el Gobierno puso en marcha un fondo de seguridad social específico para ellos. La situación de los trabajadores por cuenta propia y los parados sería si cabe peor, pues no tendrían cobertura médica, ni derecho a pensión de jubilación, ni ningún ingreso garantizado. A partir de la promulgación de la ley solo los funcionarios públicos contarían con una protección integral garantizada por la legislación, y aunque los salarios fueran muy bajos, los empleos en la función pública seguirían siendo los más buscados por ser los más seguros (Clément 2011: 598-599).

El único elemento formalmente positivo para los trabajadores aportado por la Ley del Trabajo 2013 fue el reconocimiento del derecho a la huelga. No obstante, esta solo podía ser convocada con la aprobación de la dirección del sindicato estatal, el FGSTE, aprobación que este no concedería en ningún caso en los cuatro años posteriores (Beinin & El-Hamalawy 2007).

2.2.2 Las primeras medidas económicas del Gobierno de Ahmad Nazif

El Gobierno de Ahmad Nazif nombrado en junio de 2004 no tardó en dejar su impronta en la economía egipcia. En septiembre, un decreto del Presidente de la República modificaba el sistema de tarifas aduaneras en respuesta a la propuesta del Gobierno, y en contradicción con la seguida por el anterior, dirigido por Atef Obeid, que había incrementado las tasas sobre los impuestos de lujo con el fin de financiar las subvenciones y subsidios estatales. Las tarifas aplicadas a los precios de venta de los productos extranjeros pasarían de media del 14,5% al 9%, y la lista de productos sujetos a imposición se reduciría de 13.000 a 6.000 productos. Los productos de primera necesidad (como arroz, trigo, aceite y azúcar) serían gravados solo con un 2%, mientras que a los productos de lujo se les impondría un 40%, en contraste, por ejemplo, con el 104% que debían pagar los coches importados (Kohshall 2005: 54, 60).

La reducción de las tasas aduaneras, realizada con el fin de promover el consumo, fue bien recibida por los importadores y los empresarios, pero la oposición se preguntaba cómo se iba a compensar la pérdida de 3.000 millones de libras de ingresos que se estimaba se produciría. La respuesta vino sin ningún aviso previo. Nada más ser aprobada la reducción, los conductores de minibuses se encontraron con una subida del 50% del precio del carburante, que compraban a un precio más reducido que la mayoría de la población, y en las semanas siguientes el Gobierno comenzó a incrementar los precios de todos los carburantes, de la electricidad y de otros productos básicos no alimentarios. El del gas aumentó un 30%, y el del agua se incrementó en un 100% (Kohshall 2005: 61-62).

En pocos meses, los economistas internacionales comenzaron a presagiar una

mejora de la economía egipcia. Ya en noviembre de 2004 la capitalización de la Bolsa de El Cairo había ascendido a 223,83 miles de millones de LE frente a 171,61 en diciembre de 2003. A principios de febrero, la libra egipcia mostraba una importante revalorización frente al dólar, al cambiarse este por 5,81 LE, mientras que en 2003 se cambiaba por 7 LE. Sin embargo, como señala Kohshall (2005: 62-63), tales “éxitos” apenas enmascaraban las dificultades estructurales de la economía egipcia. Las inversiones extranjeras continuaban en descenso, y la vitalidad de la Bolsa egipcia se debía al dinamismo de algunos sectores, como el de las comunicaciones, cuya novedad garantizaba un éxito seguro. Tres operadores de telecomunicaciones, Orascom, Egypt Telecom y Vodafone Egypt figuraban entre las 10 mayores empresas del país, y controlaban el 60% del mercado, en una situación casi monopolística facilitada por la política de concesión de licencias desde la aprobación de la nueva ley sobre el sector de las telecomunicaciones en 1998. El 17 de junio el Parlamento aprobó una ley que pretendía acabar con las prácticas de monopolio, estableciendo que ninguna empresa podía controlar más del 25% del mercado de un producto. No obstante, algunos diputados de la oposición acusaron al PND de haber diseñado la ley a la medida de los intereses de algunos de sus miembros, pues sus disposiciones no impedirían que, por ejemplo, Ahmad Ezz, a quien ya hemos mencionado un poco más arriba, siguiera controlado el 65% del mercado del acero.

2.2.3 Primeras reacciones de los trabajadores y descrédito definitivo del sindicato único

En los años anteriores a 2003, el Gobierno egipcio había reforzado su control de la Federación General de Sindicatos de Trabajadores Egipcios (FGSTE). En 1995 había promulgado una ley relativa a la organización sindical que permitía a los dirigentes sindicales seguir ejerciendo como tales incluso después de su jubilación, lo que posibilitaba perpetuar a los dirigentes cooptados mediante prebendas. Las elecciones sindicales de 1996 permitieron dejar al margen de las instancias superiores del sindicato a cualquier dirigente combativo mediante el complejo sistema de sucesivas delegaciones por el que se elegía a la elite superior. La distribución de las divisiones y secciones del sindicato por criterios de actividad igualmente complejos, en lugar de por criterios geográficos, dificultaba la coordinación y acción de los sectores sindicales de oposición a la dirección progubernamental (Ibrahim 1998). La inoperancia o falta de voluntad de esta de defender los derechos de los trabajadores llevó a una profunda desafección generalizada hacia el sindicato oficial. Así, tras las elecciones de diciembre 2001, Saber Barakat y Jaled Ali Omar, tras constatar en su estudio la escasa participación en dichas elecciones, concluyeron que la situación del movimiento sindical había cambiado: antes podía hablarse de “trabajadores sin sindicato” y ahora de “sindicato sin trabajadores” (بركات و عمر 2003).

No obstante, el movimiento sindical de oposición, que había estado adormecido en la segunda mitad de los 90, sin duda gracias a la mejora general de la economía, a que las privatizaciones no comenzaron a dejarse sentir en la industria hasta 1998, y tal vez a una escasa voluntad de poner en aprietos políticos al Gobierno mientras duró su enfrentamiento con el islamismo, comenzó a desperezarse a principios del siglo XXI. En agosto de 2001, precisamente Saber Barak y Ali Jaled Omar, entre otros, fundaron el Comité Coordinador para los Derechos y Libertades Sindicales, que en cooperación con diversas ONG, asociaciones y fuerzas políticas de izquierdas iba a luchar de nuevo por una formación sindical independiente.

Desde el año 2000 aumentaron los conflictos sindicales, en particular en las empresas privadas que había entrado en situación de paro técnico o liquidación. En 2003 los trabajadores de algunas empresas privadas intentaron formar sus propios sindicatos, tropezándose con el rechazo absoluto de sus propietarios y con ningún apoyo del Gobierno. Este fue el caso de la empresa textil Samuli de Mahala al-Kubra, que contaba con 3.500 empleados. El dueño de la empresa, tras amagar con que estaba dispuesto a reconocer la representación sindical, despidió a 18 trabajadores, entre ellos a tres de los líderes sindicales (Beinin & El-Hamalawy 2007).

En el sector público, las protestas laborales aumentarían de manera exponencial a partir de 2004. El grueso de ellas se producirían en las empresas públicas en liquidación, como la Empresa Egipcia de Hilado (Egyptian Spinning Company, ESCO), en la que, tras su privatización, a partir de octubre de 2004 los trabajadores se movilizaron para que el Gobierno cumpliera sus promesas de concederles jubilaciones anticipadas con pensiones superiores a las que les corresponderían según la legislación general. Las seis fábricas de ESCO, que en 1984 empleaban a 24.000 trabajadores, en 2005 contaban con tan solo 3.500 (Beinin: 2005). El caso de ESCO era tan solo uno más entre muchos, pues los efectivos de asalariados del sector público industrial habían pasado del 10% al 2% de los activos entre 1992 y 2006, quedando los funcionarios públicos como los representantes casi abrumadoramente mayoritarios de los trabajadores estatales, a pesar de que su número también había descendido considerablemente, pasando del 28% al 25% de los activos entre 1996 y 2006 (Clément 2011: 597-598).

El paso de los sindicalistas de oposición a una nueva era en su lucha por una organización sindical independiente tendría mucho que ver con las alianzas tejidas con diversas organizaciones no gubernamentales y fuerzas políticas de izquierdas a las que ya hemos aludido antes, con la internacionalización de sus demandas, que les permitió conseguir que en 2005 la OIT denunciara al Gobierno egipcio y al FGSTE por sus restricciones a la libertad sindical (Clément 2011: 613).

3. CAMBIOS EN EL RÉGIMEN IMPULSADOS POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y AMPLIAMENTE RECHAZADOS

Como hemos explicado en el primer capítulo de esta V parte, entre 2000 y 2002 Gamal Mubarak pasó de ser un simple miembro del partido gubernamental a ocupar la posición dominante en él, más allá de lo que indicara su organigrama formal. A la cabeza del Comité de Políticas, que diseñaría las políticas gubernamentales y elegiría a los candidatos al Parlamento, Gamal Mubarak era quien detentaba el mando real en el PND, por debajo de su padre, que seguía siendo el presidente del partido, a pesar de su supuesta subordinación jerárquica al secretario general y sus ayudantes.

Hay que señalar que medidas como la aprobación de Ley Unificada del Trabajo y el abandono del sistema de cambio fijo de la libra se produjeron en enero de 2003, apenas cuatro meses después de la creación del Comité de Políticas, y que sería a partir de entonces cuando la privatización del sector público entraría en su recta final, en particular tras la formación del gobierno de Ahmad Nazif en junio de 2004, que incluiría varios ministros del círculo político y/o de amistades de Gamal Mubarak. El hijo del presidente parecía, pues, haberse hecho con el mando del PND para impulsar la liberalización económica, y el hecho de que en dicho mando lo acompañara un importante grupo de grandes hombres de negocios a los que le unían buenas relaciones personales apoyaba con fuerza tal interpretación.

No obstante, si fijar las políticas gubernamentales era una función importante a corto plazo, elegir a los candidatos del partido para las elecciones legislativas era una atribución más trascendente a medio y corto plazo. El Parlamento, además de ser formalmente el órgano que aprobaba las leyes, ejercía el control del ejecutivo, podía introducir reformas constitucionales, etc. era quien designaba al candidato único a la Presidencia de la República, y se daba la circunstancia de que cuando llegaran las elecciones presidenciales de 2005 Hosni Mubarak tendría 77 años, por lo que había llegado el momento de pensar en su sucesión, que podría ser forzada por su incapacidad física o su deceso en cualquier momento. A diferencia de Náser y de Sadat, Mubarak nunca había nombrado un vicepresidente, una medida frecuentemente criticada por la oposición por el vacío de poder que se podía crear. Sadat y Mubarak habían accedido a la presidencia gracias a su condición de vicepresidentes. Pese a que formalmente no tendría por qué haber sido así, dicho puesto permitía concentrar los poderes y lealtades necesarios para luego imponer el propio nombre a los diputados y el resto de las estructuras formales e informales del régimen. No cabe duda de que Mubarak había evitado dar ese paso por no

fomentar la idea de que se inclinaba por un sector determinado del aparato del Estado, así como por evitar posibles conspiraciones o movimientos en su contra.

Si se observa la evolución de la composición de las elites dirigentes en el periodo 2000-2004 solo en términos ideológicos y socioeconómicos, el ascenso de Gamal Mubarak en el entramado del poder político podría ser considerado solo una anécdota, siendo la categoría el avance de los sectores liberales de entre las elites, y dentro de ellos de la gran burguesía privada, en detrimento de las elites de origen burocrático estatal, cuyas parcelas de poder iban quedando fuera del ámbito económico. No obstante, el ascenso político de Gamal Mubarak solo fue posible gracias a su condición de hijo del presidente, por no decir que se debió exclusivamente a aquella. Es más, Gamal Mubarak dirigió el proceso de sustitución parcial de las elites dirigentes porque solo el hijo del presidente, aparte de este mismo, habría podido hacerlo. La liberalización de la economía requería desmontar o modificar muchas estructuras legales, políticas y sociales, además de económicas, y esa reestructuración no iba a afectar solo a los trabajadores asalariados modestos y a las estructuras inferiores del Estado. Los cuadros altos y medios de los ministerios, los gestores de las empresas públicas o parcialmente públicas, los *apparatchiks* de las asociaciones corporativas estatales (sindicatos de trabajadores, asociaciones de comerciantes e industriales) y de los medios de comunicación estatales, el aparato industrial militar, las elites sociales y estatales locales que daban apoyo al partido gobernante etc., se iban a ver afectados por la liberalización. Los años anteriores habían puesto de manifiesto las resistencias de todos estos sectores a aquellas, y la función de Gamal Mubarak era acabar con esas resistencias amparándose en la protección de su padre. El régimen egipcio había podido hasta entonces ralentizar la liberalización de la economía y resistir a las presiones de la burguesía, en la medida en que el Estado había contado con recursos financieros “propios”, rentistas y exógenos en general. Ello le había permitido mantener un gasto público importante, y en particular seguir generando empleo estatal y conservar los subsidios a productos básicos. Todo esto había contribuido, a su vez, a mantener el consentimiento político de una parte considerable de la población, y sobre todo de algunos sectores clave dentro de ella.

Pero a comienzos del siglo XXI, al mismo tiempo que se manifestaban indicios de un mayor descontento social y político, el Estado se veía obligado a obtener recursos financieros de una u otra manera de su propia población, como hemos explicado en el capítulo anterior. Si optaba por buscar el apoyo financiero y político de la burguesía nacional, y si quería atraer la inversión extranjera, el régimen egipcio debía avanzar en la liberalización económica. Otra opción habría sido imponer una mayor presión fiscal a dicha burguesía, pero el régimen la declinó, dedicándose, por el contrario, a aumentar de manera indirecta la extracción de recursos de la mayoría de la población.

Así, en el primer quinquenio del siglo XXI se estaba produciendo un cambio sustancial de régimen político en sentido amplio: cambiaba casi definitivamente el sistema económico,

cambiaban en gran medida las élites dirigentes, y se reducían de manera muy notable los compromisos de protección y redistribución adquiridos por el Estado republicano con la mayoría de la población.

3.1 LA SUCESIÓN HEREDITARIA

La cuestión que teóricamente se suscita a raíz del análisis anterior es si Gamal Mubarak era solo un vicario de su padre encargado de facilitar y controlar la transición hacia una economía casi completamente liberalizada, o si tenía ambiciones políticas mayores o, sobre todo, si las tenía su padre para él, concretamente si el presidente pensaba en una sucesión hereditaria de la presidencia, en el *tauriz* (التوريث), como lo designaban los egipcios.

3.1.1 Una cuestión en nada anecdótica

La cuestión de la posible voluntad de Hosni Mubarak de transferir los poderes presidenciales a su hijo Gamal hizo correr ríos de tinta en la primera década del siglo XXI, por no hablar de la saliva que movilizó en el interior de Egipto. De que Gamal en 2005 era el segundo hombre fuerte de Egipto después de su padre -mientras que diez años antes era un ejecutivo del Bank of America-, y de que continuaría siéndolo hasta principios de 2011, no cabe ninguna duda. Si habría llegado a presidente, nunca podremos saberlo.

Desde el exterior puede parecer intrascendente que un autócrata -como mostró ser Gamal Mubarak durante su trayectoria política- sucediera a otro llevando el mismo apellido que aquel. Desde dicho exterior la característica más llamativa del cambio habría sido que el hijo, a diferencia del padre, no era un militar, y que la sucesión hereditaria habría supuesto un cambio en el patrón seguido desde 1952 de que la Presidencia de la República la ocuparan militares, de modo que esta habría supuesto la novedad más significativa en el cambio de régimen político. Y ello porque el ascenso de la influencia de la burguesía se daba por descontado.

No obstante, todo lo relativo a la cuestión de la sucesión hereditaria tiene mucho interés porque refleja como pocos procesos el funcionamiento y la evolución del régimen político egipcio en su sentido más amplio. Muestra el irreductible mando personal del presidente; muestra la necesidad que este tiene, sin embargo, de contar con una determinada estructura de poder y con una cierta base social; muestra sus dificultades -y su voluntad- para cambiar ambas o sustituirlas; y muestra, en último lugar, que el régimen egipcio durante los años 80 y 90 se había sostenido sobre una reducida -pero digna de consideración- base de apoyo social y sobre una gran dosis de consentimiento, a diferencia de lo que sucedería al final de la primera década del siglo XXI, cuando se había convertido

en un régimen policial.

En última instancia, resulta irrelevante si Hosni Mubarak pretendía hacer a su hijo presidente o no. La cuestión, por un lado, es que lo aupó a una posición en la que podría haberlo sido; y por otro y es lo principal, que gran parte de los egipcios reaccionaron como si ese fuera el designio presidencial, y muchos de ellos mostraron su rechazo. Gamal Mubarak, al margen de que fuera rechazado también “personalmente”, fue rechazado sobre todo como símbolo, y como símbolo, por contradictorio que parezca, tanto del cambio como de la continuidad. Símbolo del cambio porque encabezaba el cambio de régimen en varias dimensiones (en sus elites, en sus políticas económicas, en el modelo corporativista de Estado, incluso en el pluralismo), símbolo de la continuidad porque representaba la permanencia del autoritarismo y de sus múltiples consecuencias.

En cualquier caso, la operación de encumbramiento de Gamal Mubarak y de las elites económicas asociadas a él tuvo dos fases bien diferenciadas: en la primera, que es la que vamos a tratar ahora, Gamal Mubarak y sus asociados intentaron, con el apoyo del presidente, primero construirse una base política, mediática, económica y social propia (en gran parte ajena a las estructuras del Estado), y luego incorporar a su alianza a los Hermanos Musulmanes. Todo ello con el objetivo de enfrentarse a las antiguas elites y apoyos sociales del régimen. En la segunda, a partir del año 2006, renunciaron a tales intentos y gobernaron el país de la manera más autoritaria que había conocido el régimen de Mubarak.

3.1.2 A la búsqueda de una base social

En noviembre de 1998, un año después de acceder a su primer puesto verdaderamente político, más allá de las apariencias, como portavoz del Consejo Presidencial Egipcio-Norteamericano, el órgano asesor que reunía a quince de los mayores hombres de negocios de cada país con el fin de promover las relaciones económicas bilaterales, Gamal Mubarak fundó, con otros amigos, la Asociación de la Generación del Futuro (جمعية جيل المستقبل, en adelante Al-Mustaqbal), asociación sin ánimo de lucro que el hijo del presidente presidiría.

En su página en internet¹⁹, hoy desaparecida, la asociación anunciaba que con sus actividades pretendía:

“(...) renovar los conceptos relacionados con los mecanismos de acción en nuestras instituciones económicas en general, lo que llevará a un mayor bienestar de la sociedad, y a la economía egipcia a un papel pionero en la región y a un lugar destacado en la economía mundial (...) La asociación quiere participar en el desarrollo de la economía egipcia y en los esfuerzos para competir en el mercado mundial, y ello a través del desarrollo y la modernización de las fuerzas trabajadoras, elevando su cualificación de

¹⁹ <http://www.fgf-egypt.com/>, consulta del 26 de marzo de 2004.

manera que se corresponda con las necesidades del mercado de trabajo y con los estándares internacionales (...) de acuerdo con la plena confianza que los «hijos de Egipto» han mostrado tener en el papel vital que las asociaciones civiles pueden desempeñar en apoyo de su sociedad social y económicamente”.

La asociación comenzó inmediatamente a desplegar una actividad ingente, creando secciones en diversas ciudades y barrios, organizando cursos de formación gratuitos para los jóvenes, dando becas, introduciéndose en las universidades, llevando a esta material informático, y desplegando una gran campaña publicitaria en la que aparecía inevitablemente la imagen de Gamal Mubarak. Los fondos económicos no faltaban: en el Consejo de Dirección de la asociación figuraban, entre otros, Ahmad Ezz, Rachid Mohammed Rachid y Ahmad al-Magrebi (que accederían posteriormente al Parlamento, a la dirección del PND y al Gobierno), y tras ellos muchos otros hombres de negocios, como Mohammed Abul Ainein, dueño de la empresa Cerámicas Cleopatra y también miembro del Parlamento.

Gran parte del público egipcio se mostraba escéptico con los objetivos de la asociación y veía la alusión a “la generación del futuro” como un tanto cínica. En un principio se dijo que Gamal Mubarak tan solo buscaba forjarse una base social en algunos distritos para ser elegido diputado, y más adelante, en el verano de 1999, surgieron fuertes rumores de que pensaba formar un partido, el Partido del Futuro o Hizb al-Mustaqbal. Se decía que el hijo del presidente había intentado convencer a grandes hombres de negocios no tan cercanos a él, como al copto Naguib Sawiris, uno de los más ricos empresarios del país, principal propietario de Orascom junto con su hermano Nasif, presidente de Orascom Telecom. Este negó que estuviera relacionado con el grupo de Al-Mustaqbal, aunque añadió que le parecía bien que se fundara un partido liberal pronegocios²⁰. No obstante, Hosni Mubarak salió al paso de los rumores, afirmando en una entrevista con Ragab al-Banna, publicada en la revista *Oktober* en septiembre, que su hijo no pensaba “participar en política, tan solo en actividades sociales y culturales”²¹.

Finalmente, el partido Al-Mustaqbal no se fundó, ni siquiera Gamal Mubarak se presentó a las elecciones de 2000, aunque sí lo hicieron, como vimos en el capítulo IV 9, muchos hombres de negocios, entre ellos algunos de su grupo. El hijo del presidente entró en política por la puerta grande, accediendo a la Secretaría General del PND en 2000.

Para entonces, en los mentideros políticos del país su nombre ya había entrado en el bombo de los posibles sucesores de su padre, y estudiosos bien informados de la política egipcia se hacían eco de que se especulaba con tal posibilidad (Springborg & Sfakianakis 2001). El debate sobre el posible nombramiento de un vicepresidente de la República, siempre presente, se había renovado, pues dicho puesto desempeñaría un papel clave en la

²⁰ Steve Negus: “New Party in the Making”, *Middle East International*, 30 de julio de 1999, págs. 18-19.

²¹ أكتوبر، ١٩ ستمبر ١٩٩٩.

sucesión. Se hablaba como posible candidato de Omar Soleimán, militar de origen y director de los Servicios Generales de Inteligencia (SGI, جهاز المخابرات العامة), el principal servicio de inteligencia del país junto a los servicios militares, cuyo nombre fue filtrado a la prensa precisamente en 2000, a pesar de que ocupaba el cargo desde 1993. El SGI servía de contrapeso a la inteligencia militar y al Ministerio del Interior, intervenía en las actividades antiterroristas y de control político en el interior del país, y respondía directamente ante Hosni Mubarak, que debía estar muy satisfecho con el desempeño y la fidelidad de Soleimán para mantenerlo en el cargo durante tanto tiempo. El director del SGI tenía muy buenas relaciones con los servicios secretos israelíes, para los que había hecho de intermediario ante el gobierno de Hamás en Gaza, y con la CIA, con la que colaboró en el programa de “entregas extrajudiciales” y torturas tras la invasión estadounidense de Afganistán en 2001.

También se hablaba del posible nombramiento de dos vicepresidentes, uno civil y otro militar, lo que en cierta manera debilitaría a ambos. Todo eran especulaciones, pero uno de sus aspectos centrales para los politólogos y para los propios miembros del régimen era qué papel desempeñarían los militares en la sucesión. Lo que está claro es que Mubarak no deseaba, al menos por el momento, dejar el futuro de la Presidencia en manos de la institución militar, pues le habría bastado con nombrar vicepresidente a uno de sus miembros más destacados para que este condicionara todo el proceso. Puede que ello se debiera a las presiones externas e internas. Por un lado, ni Estados Unidos ni muchos de sus aliados querían que los militares siguieran controlando el país, ni en particular que entorpecieran la liberalización económica o la política estadounidense en Oriente Medio. Por otro, diversos sectores de los dirigentes del Estado y de la burguesía egipcia veían la ocasión de librarse de la hegemonía militar y avanzar sus propias posiciones en el poder. No obstante, faltaba saber cuál era la opinión del Ejército, cuyo aparato económico había perdido vigor en los diez años anteriores, en gran parte por la reducción del presupuesto asignado por el Estado (Soliman 2011: 61-63; Springborg & Sfakianakis 2001: 62-65).

3.1.3 El rechazo al *tauriz*

Tras el ascenso de Gamal Mubarak a la dirección del Secretariado de Políticas en septiembre de 2002, y la intensa actividad desempeñada por aquel hasta el siguiente congreso del PND un año después, gran parte de la opinión pública egipcia estaba convencida de que el *tauriz*, la sucesión hereditaria, era una posibilidad real, y muchos estaban dispuestos a intentar alejarla. No se trataba tan solo de que el hijo del presidente extendiera sus redes políticas, económicas y sociales, sino de que se lo dotaba de plataformas mediáticas. En 2001 fue autorizada la primera televisión privada en Egipto, Dream TV, gracias a la autorización gubernamental que la ley sobre televisiones por

satélite de 2000 había hecho preceptiva. El propietario de Dream TV era Ahmad Bahgat, empresario del círculo de Gamal.

A pesar de que la cuestión del *tauriz* estaba en el aire, hubo de ser un personaje de gran peso público y todavía bien relacionado, es decir, protegido, como Mohammed Hasanein Heikal, quien suscitara por primera vez la cuestión en público, el 14 de octubre, en una conferencia impartida en la Universidad Americana de El Cairo, que, paradójicamente, era emitida en directo por Dream TV. El 19 de junio de 2003, un abogado, Essam al-Islambuli, tomó una iniciativa judicial sin precedentes: presentó una demanda contra Hosni Mubarak por no haber nombrado un vicepresidente de la República en sus 22 años de mandato, a lo que según la demanda estaba obligado por la Constitución. Se trataba de una medida simbólica, y el demandante no lo ocultaba: “La razón por la que la he presentado es que los hijos de este país hemos comenzado a sentir que el Estado está preparando la herencia del poder por el hijo de parte del padre”²².

Aproximadamente en las mismas fechas, activistas, intelectuales y periodistas comenzaron a manifestar públicamente su rechazo al *tauriz*. El 16 de julio se celebraba un encuentro organizado por el Comité para la Reforma Democrática, formado por los cuatro principales partidos de la oposición y seis organizaciones de derechos humanos, en el que uno tras otro los intervinientes se manifestaron contra el *tauriz*. Las palabras de Ahmad Saif, director del Centro Legal Hicham Mubarak resumían la opinión de los reunidos: “Están intentando transferir el poder al hijo, y decimos que no. No lo aceptamos, y nos resistiremos a ello”. Incluso en las páginas de *Al-Ahram* se introducían críticas veladas, como la del respetado periodista Salama Ahmad Salama, que acusaba al PND de estar “hundiendo la vida política egipcia en la pasividad, la confusión y la incertidumbre”²³.

Finalmente, el Presidente Mubarak se veía obligado a responder a lo que ya era un tema de debate público a todos los niveles. El 1 de enero de 2004 declaraba a la radio egipcia: “Somos un régimen republicano, y el régimen republicano en Egipto no se hereda”, y a continuación señalaba “ellos [no especificaba quienes eran “ellos”] han inventado ese concepto, y se lo han creído”²⁴. Existían sospechas, tal vez fundadas, de que diversos sectores del aparato del Estado y del régimen político descontentos con el rumbo de los acontecimientos políticos, podrían haber contribuido a difundir y alimentar las sospechas respecto al *tauriz*, y tal vez a ellos se refiriera el presidente.

Las declaraciones de Mubarak no sirvieron, sin embargo, para calmar la nueva oposición que surgía de diversos sectores de la sociedad, que pretendían aprovechar la influencia de este nuevo elemento de la vida política. El 6 de noviembre de 2003, el presidente estadounidense George Bush hijo, en un discurso ante la Fundación Nacional para la Democracia, había relanzado la idea de la creación de un Gran Oriente Medio, ya

²² Charles Levinson: “Suing for a vice president”, *Cairo Times*, 7-13 de agosto de 2003.

²³ Ibid.

²⁴ Khaled Ezzealrab: “Game over?”, *Cairo Times*, 8-14 de enero de 2004.

apuntada 15 meses antes. Se trataba de promover la implantación en la región de regímenes democráticos que cooperaran en el marco de estructuras económicas presididas por la economía de mercado. En esta ocasión, sin embargo, el presidente norteamericano anunciaba un programa de financiación de grupos locales de la región favorables al proyecto, y anticipaba que este sería presentado en su integridad en la reunión del G-8 a celebrar en junio de 2004 en Sea Island. No obstante, el borrador del programa fue filtrado y publicado íntegro en diversos medios, entre ellos el diario *Al-Hayat*, el 13 de febrero de 2004.

El programa estadounidense despertó reacciones airadas de la mayor parte de los dirigentes árabes, y entre ellos el egipcio. Hosni Mubarak, como otros, denunció los intentos de injerencia en los asuntos internos de su país, sin poder negar la mayor ante la comunidad internacional: la necesidad de la reforma. Por ello, mientras anunciaba que no participaría en la reunión del G-8 en Sea Island, a la que había sido invitado, y mientras los dirigentes árabes intentaban ponerse de acuerdo para organizar una cumbre de la Liga Árabe, Mubarak tomó la iniciativa de organizar rápidamente, para el 12-14 de marzo, la denominada Conferencia de Alejandría, bajo el rótulo específico de “Las reformas en el mundo árabe: visiones y puesta en marcha”. A ella fueron invitados académicos, intelectuales y asociaciones de los países árabes, en general no demasiado alejados de las posiciones no gubernamentales que tras su conclusión emitieron una declaración, en la que afirmaban la necesidad urgente de aplicar reformas desde dentro de los países árabes, reformas que incluyeran la democratización.

Por su parte, la cumbre de la Liga Árabe se celebró finalmente el 22 y el 23 de mayo en Túnez, y en ella los dirigentes árabes se comprometieron a establecer un vago proceso de reformas supeditado a una solución justa de los conflictos regionales, sobre todo el palestino-israelí. Entre las reformas se hablaba de ampliar el espacio de la participación política y del respeto de los derechos humanos y la libertad de expresión. Una propuesta egipcia de establecer un programa más detallado para la reforma, y presentarlo en la reunión del G-8, no fue tomada en consideración (Azaola 2008: 155-156).

La reacción de los intelectuales y la prensa egipcia a las propuestas norteamericanas fue significativa, pues mostraba una evolución respecto a los meses anteriores. La denuncia de la ambigüedad norteamericana respecto a sus planes para Irak y Palestina seguía presidiendo los análisis, y abundaban las denuncias de la injerencia en los asuntos internos; no obstante, según estima Ben Néfissa (2007: 7), se impuso la tendencia de quienes consideraban legítimo aprovechar las presiones del exterior para hacer presión sobre el régimen egipcio. Este, a la defensiva, había intentado ganarse a los periodistas: su sindicato contaban, por primera vez como hemos señalado, con un síndico de la oposición; y Hosni Mubarak, con ocasión del Cuarto Congreso de los Periodistas Egipcios, celebrado entre el 23 y el 25 de febrero, anunció que las penas de prisión que les amenazaba iban a ser abolidas.

Los primeros intentos de reactivar y ampliar la alianza informal de fuerzas políticas de oposición a partir del catalizador del rechazo al *tauriz* se situaron en torno a finales de marzo de 2004. En su mayor parte se trataba de movimientos cívico-políticos no autorizados, que se habían forjado en las semanas previas a la invasión de Irak el 20 de marzo de 2003 en torno al Movimiento del 20 de Marzo o el Movimiento Egipcio por el Cambio (الحركة المصرية من أجل التغيير), nacido en julio de 2002 a partir del anterior. Dichos intentos se intensificaron tras un viaje de Hosni Mubarak a Alemania en junio de 2004 “por motivos de salud”, que agudizaron la preocupación por la sucesión, y tras el cambio de Gobierno aproximadamente por las mismas fechas, que incluyó a varios miembros del “círculo de Gamal Mubarak” bajo la presidencia de Ahmad Nazif (véase el capítulo V 1.4). En esta ocasión, a los movimientos de izquierdas impulsores se sumaron los Socialistas Revolucionarios, el partido Wasat, el Partido Comunista, el Centro Legal Hicham Mubarak, el no autorizado partido Karama (naserista), el ilegalizado Partido del Trabajo y el Partido Naserista, y contarían con la participación oficial de los Hermanos Musulmanes, de numerosos liberales y de otros 26 colectivos y ONG (Vairel 2006: 112-113).

En esta nueva coalición de fuerzas, que actuaba en paralelo al “diálogo nacional” en el que participaban junto al partido gobernante, el Wafd, el Tagammu y el Partido Naserista, salió a la luz pública por medio de dos comunicados, uno publicado el 7 de agosto de 2004 y otro un poco después, el 9 de septiembre. El primero, que pasó un tanto desapercibido, estaba firmado por un grupo que se autodenominaba Kifaya. Movimiento Egipcio por el Cambio. El segundo, mucho más publicitado, denominado “Comunicado al pueblo”, lo firmaba la Campaña Popular por el Cambio²⁵.

Se trata de dos comunicados y denominaciones surgidas de un mismo movimiento que guardan grandes similitudes en su contenido esencial, aunque también algunas diferencias importantes, que tal vez expliquen que Kifaya y la Hamla (“La campaña”), operaran como dos colectivos distintos aunque a menudo lo hicieran en común. Ambos señalan la grave situación por la que atravesaba el país, la necesidad de modificación de la Constitución para llevar a cabo una reforma política completa, comenzando por la elección directa del presidente de la República -y de un vicepresidente, especificaba el primero-, la limitación de su mandato a dos años y la reducción de sus poderes, que debían ser limitados por una auténtica separación de poderes. La celebración de elecciones limpias, la libertad para constituir partidos y medios de prensa, la independencia de la justicia, la abolición de la Ley de Excepción y otras legislaciones excepcionales, etc., eran así mismo demandas comunes.

Ambos textos compartían así mismo un tono agresivo, desafiante hacia el poder. El

²⁵ Pueden consultarse ambos comunicados en francés, y la lista completa de los colectivos firmantes del manifiesto del 9 de septiembre en Kohshtall (2005: 341-350). El comunicado del 9 de septiembre puede encontrarse en castellano en la web del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (<https://goo.gl/hpQkcA>, consultada 27 de septiembre de 2015).

del 7 de agosto denunciaba “el despotismo que golpea nuestra sociedad”, y señalaba que la reforma política y constitucional debía ser llevada a cabo “por los hijos de esta nación, y no impuesta por uno o por otro”. El del 9 de septiembre comenzaba así: “¡No a la renovación [del mandato de Mubarak]! ¡No a la sucesión hereditaria! ¡Sí a la elección del Presidente entre varios candidatos!”. Y más adelante afirmaba: “Los firmantes de este comunicado anuncian su determinación de llevar a cabo una reforma de la Constitución antes del fin del actual mandato del presidente de la República, y de que el actual sea el último de Hosni Mubarak”.

En cuanto a las diferencias, el primero se extendía en un principio en denunciar la ocupación de Irak y el “expolio y las agresiones sionistas permanentes al pueblo palestino”, así como en denunciar el proyecto de un Gran Oriente Medio, y la necesidad de “proteger la existencia de la nación árabe”. También hacía una alusión a la necesidad de poner fin “al acaparamiento de la riqueza que lleva a la propagación de la corrupción y a la opresión social”. Por último, pero no menos importante, este comunicado era introducido por una frase que señalaba que los firmantes, “de las más diferentes tendencias políticas y horizontes intelectuales, culturales, sindicales y sociales”, habían decidido unirse “*a pesar* [cursiva nuestra] de sus orientaciones políticas e ideológicas divergentes”.

El segundo texto tan solo incluía de lo que acabamos de mencionar del primero alusiones mucho más discretas a las diferencias de los firmantes, a Irak, a Palestina y al Estado sionista (mencionados solo una vez en una sola frase), obviaba cualquier alusión al “acaparamiento de riquezas” y a la “opresión social”, aunque no a la corrupción y a la deteriorada situación económica, y -a diferencia del primero- reclamaba la liberación de “todos los detenidos de opinión” y hacía una alusión a Dios que “nos ha creado libres e iguales”.

En definitiva, el primer texto parecía más inspirado por el inicial componente de izquierdas del movimiento, y en particular el naserista; y el segundo adaptado para que los Hermanos Musulmanes, y tal vez ciertas fuerzas liberales, se sintieran más cómodos.

El segundo comunicado, que fue el que dio carta de naturaleza al movimiento que a partir de entonces de denominaría Kifaya o Al-Hamla (“La Campaña”), estaba inicialmente firmado por 11 partidos políticos, 16 “organizaciones de la sociedad civil y comités populares” y cerca de 300 particulares, en su mayoría intelectuales y profesionales. Las asociaciones eran en su mayoría de orientación izquierdista o de defensa de derechos humanos, si bien entre ellas destacaba el Islamic Media Monitor, con sede en Londres. Los partidos políticos eran todos ilegales: cuatro partidos socialistas de orientación marxista, el Movimiento 20 de Marzo, el naserista Karama, el Partido del Trabajo, los Hermanos Musulmanes, tres partidos o corrientes de menor peso, y un nuevo partido liberal, del que hablaremos un poco más adelante, Al-Gad. El número de firmantes se incrementaría posteriormente.

3.2 LA SALIDA DE KIFAYA A LA CALLE Y LA LEGALIZACIÓN DEL PARTIDO AL-GAD

Frederic Vairel (2006: 114-116) pone en relación directa la salida de Kifaya a la calle con el anuncio realizado por Safwat al-Cherif, secretario general del PND, el 8 de diciembre de 2004, de que el partido gubernamental comenzaba su movilización para las elecciones presidenciales de octubre de 2005 y para las legislativas de dos meses después. El 12 de diciembre, 500 personas se concentraban delante del Tribunal Supremo para reclamar la partida de Mubarak del poder y rechazar la sucesión hereditaria, desafiando la prohibición de manifestarse y a pesar de estar rodeados por un fuerte contingente policial. Tapándoles las bocas llevaban adhesivos amarillos en los que se encontraba escrito, escuetamente, Kifaya! (“¡Basta!”).

La repetición durante los dos meses siguientes de estas concentraciones prohibidas, que desafiaban directamente al poder presidencial, así como su tolerancia en general por parte de las fuerzas de seguridad, llamó inmediatamente la atención local y mundial. Los manifestantes elegían lugares simbólicos, como la plaza de Saad Zaglul, el primer dirigente nacionalista, en Alejandría, o el propio Tribunal Supremo, el Sindicato de Abogados o el Sindicato de Periodistas, señalando los colectivos de los que esperaban obtener apoyo. La policía, que vigilaba a los manifestantes en número superior a aquellos (rara vez pasan de los mil) detenía ocasionalmente a alguno, o impedía que estos se acercaran a lugares neurálgicos, como los campus universitarios. No obstante, los manifestantes solían evitarlos, así como las barriadas obreras o los barrios populares, conscientes de los límites de la permisividad gubernamental. Entre los promotores de las manifestaciones de Kifaya destacarían un puñado de conocidos activistas políticos, como Abdel Halim Qandil, redactor jefe del diario del Partido Naserista, *Al-Arabi*; Amín Iskandar del no autorizado e igualmente naserista Karama, Abul Ilá al-Madi, presidente del partido islamista Al-Wasat, y Georges Ishak, que no había participado en la política en los treinta años anteriores, a pesar de haber participado de niño en la guerra de guerrillas contra los británicos en 1952 en Port Said, y después, sucesivamente, apoyado el naserismo, ingresado en el marxista HADETU y participado en las protestas estudiantiles de principios de los años 70. El recorrido de Ishak, maestro de historia, es muy representativo del de muchos otros egipcios desconocidos que volverían a la actividad política en la primera década del siglo XXI tras una larga ausencia.

La tolerancia con Kifaya, a fin de cuentas un movimiento con poco reflejo en las calles, formaba parte sin duda de una nueva aunque como siempre confusa estrategia del régimen político, decidido a redorar la imagen pluralista y permisiva de la que se había hecho acreedor en ciertos momentos en el exterior. Un indicio de esta nueva actitud fue la autorización el 27 de octubre de 2004 de la formación de un nuevo partido, Al-Gad, dirigido por Aimán Nur. Este era un joven y brillante abogado y dirigente del Wafd, dos

veces elegido diputado, que había sido excluido de este partido en 2001 tras su enfrentamiento con su presidente Nuamán Guma. Desde julio de 2003 había presentado sucesivas demandas para formar un partido liberal bajo distintos nombres a la Comisión de Partidos, que, presidida por Safwat al-Cherif, en tanto que presidente de la Asamblea Consultiva, las había rechazado. Finalmente Al-Gad fue autorizado por el Tribunal Administrativo que se encargaba de juzgar las demandas de los partidos en fundación rechazados por la Comisión de Partidos.

Se trataba de la primera vez que era autorizado un partido potencialmente popular o “peligroso” desde 1978, a no ser que consideremos como tal al Partido Naserista, autorizado en 1992. Junto a la popularidad de Nur, hay que considerar el apoyo de Mona Makram Ebeid, también ex miembro del Wafd e hija del histórico dirigente del partido, y de cerca de un 25% de los miembros del Wafd que se habían unido a él²⁶. La posibilidad de que el régimen político pensara abrir la puerta indiscriminadamente a los partidos de oposición había de ser descartada, pues en las mismas fechas de la autorización de Al-Gad, la Comisión de Partidos y el Tribunal habían desestimado de nuevo las demandas de legalización del partido islamista Al-Wasat y del naserista Karama. Por ello, la hipótesis dominante en los medios políticos egipcios para explicar la actitud del régimen era que, además de ampliar la oferta electoral de cara a la galería, aquel pretendiera debilitar al Wafd con un partido aceptable en términos ideológicos y que parecía dispuesto a ser leal con el régimen. En efecto, en noviembre de 2004, Aimán Nur afirmó que si Mubarak se presentara a las elecciones entre varios candidatos, él le votaría, y que no tenía nada en contra del acceso de Gamal Mubarak a la presidencia si esta se producía “por una vía legal correcta”²⁷.

Sin embargo, Aimán Nur mostraría pronto que su buen comportamiento frente al poder era solo una táctica para lograr la aquiescencia de aquel, y que contaba con una estrategia clara y fuertes apoyos políticos para desafiar al régimen. La adopción del color naranja como símbolo del partido, portado en bufandas y banderolas por sus miembros, pretendía sin duda establecer un paralelismo con la “Revolución Naranja” ucraniana, que pugnaba por desplazar del poder a Viktor Yanukovich. Como el opositor a este, Viktor Yushchenko, Aimán Nur no tardaría en ser acusado de estar apoyado por los Estados Unidos, tras entrevistarse con Madeleine Albright, exsecretaria de Estado norteamericana, y presentar, a mediados de enero de 2005, una propuesta de enmienda de la Constitución que establecía un régimen parlamentario que controlara efectivamente al Gobierno y ponía fin, en palabras de Nur, a “la monarquía autocrática actual”²⁸. Pocos días después, Hosni Mubarak acusaba a “potencias extranjeras”, cuya identidad no señalaba, de haber aportado

²⁶ Según las cifras facilitadas por *Al-Ahram Weekly*, 14-20 de noviembre de 2004. Citado por Rey (2005:32-33).

²⁷ *Al-Ahram Weekly*, 11-17 de noviembre de 2004. Citado por Rey (2005:34).

²⁸ *Al-Ahram Weekly*, 20-26 de enero de 2005. Citado por Rey (2006: 39).

70 millones de dólares a campañas de demanda de una reforma constitucional en Egipto²⁹, y el 29 de enero Aimán Nur era detenido a la salida de una reunión del Parlamento en la que, de manera imprevista, se había aprobado retirarle la inmunidad parlamentaria. La acusación dirigida contra él era que había falsificado gran parte de los avales que había presentado para solicitar la autorización de Al-Gad. Inicialmente detenido por un periodo de cuatro días para realizar los interrogatorios, según la fiscalía, el encarcelamiento de Nur fue ampliado a 45, durante los cuales, según sus familiares y abogados, fue objeto de malos tratos.

El 25 de febrero de 2005, Condoleezza Rice, secretaria de Estado norteamericana, canceló una visita prevista a Egipto en protesta por la detención de Nur³⁰. En otras circunstancias, la vigorosa intervención de la Administración estadounidense en favor de Nur podría haber tenido efectos negativos en el interior del país, como había sucedido con el caso de Saad Eddín Ibrahim, en la medida en que parecía confirmar las acusaciones gubernamentales de colaboración con aquella; no en vano, Ibrahim y Nur fueron las únicas personas en favor de las cuales, con nombres y apellidos, intervino dicha Administración en los 25 primeros años de mandato de Mubarak. Sin embargo, en esta ocasión la detención de Nur no haría más que incrementar su popularidad.

3.3 EL RESQUEBRAJAMIENTO DEL CONSENTIMIENTO ENTRE LA INTELLIGENTSIA Y LAS CLASES INTELECTUALES

A pesar de que Kifaya-Campaña Popular por el Cambio desempeñaría una intensa actividad a lo largo del tenso y complejo año de 2005 y daría pie al nacimiento de un gran número de colectivos “por el cambio” (Jóvenes por el Cambio, Profesores por el Cambio, Periodistas por el Cambio, etc.), como veremos a continuación, jamás lograría ser un auténtico movimiento de masas. Aunque más adelante volveremos sobre las razones de tales limitaciones, nos parece oportuno retroceder primero un poco en el tiempo para buscar las raíces del descontento y el cambio de actitud de importantes, por influyentes, sectores de la población, y comenzar por los intelectuales.

El 22 de octubre de 2003, el novelista Sonallah Ibrahim subió al estrado en el que le esperaba el ministro de Cultura egipcio para entregarle el premio de Novelista del Año del Segundo Encuentro de la Novela Árabe, patrocinado por su ministerio y dotado con 100.000 LE, una cantidad que le habría permitido vivir muy confortablemente al menos durante 5 años. Ante la mirada atónita del ministro, Faruq Hosni, Ibrahim pronunció, entre otras, las siguientes palabras:

²⁹ “A chronology of dissent”, *Al-Ahram Weekly*, 23-29 de junio de 2005.

³⁰ Glenn Kessler: “Rice Drops Plans for Visit to Egypt”, *The Washington Post*, 26 de febrero de 2005.

“El escritor árabe no puede ignorar hoy lo que pasa a su alrededor: la humillación desde el Océano hasta el Golfo, la represión y la corrupción, la agresividad israelí, la ocupación americana de Irak, y la evidente complicidad de los regímenes árabes (...) No tengo ninguna duda de que cada egipcio es consciente de la catástrofe que se abate sobre nuestro país (...) Nada queda de válido en los sectores del teatro, el cine, la investigación científica o la enseñanza. Solo tenemos festivales, congresos y cajas de mentiras. No tenemos industria, agricultura, sanidad, ni justicia. La corrupción y el pillaje reinan. Quienquiera que se oponga a ellas se expone a toda suerte de vejaciones, golpes y torturas. La minoría explotadora ha arrasado nuestras almas, lo real es terrible (...) No os pido que redactéis un manifiesto de condena o de exigencias, no es el momento. Vosotros sabéis lo que hay que hacer. Por mi parte, no puedo más que dar de nuevo mi agradecimiento a las personalidades del jurado cuya elección me honra, y pedirles que me excusen por tener que rechazar este premio, porque proviene de un gobierno que, a mis ojos, no tiene credibilidad para otorgarlo”³¹.

Aparte del duro contenido de su discurso, Ibrahim era el primer intelectual que rechazaba un premio o un puesto de trabajo destacado del Estado egipcio, y de ahí, además de sus palabras, la relevancia de su acto, totalmente inesperado aunque no desentonaba con su trayectoria política y literaria. Tras permanecer en la cárcel varios años por su adscripción comunista, a finales de los 50 y en los 60, había escrito varias obras de gran calidad literaria, al tiempo que desafiantes hacia la moral imperante y de importante contenido político. En *Ese olor* (1962) había descrito su experiencia en las prisiones naseristas sin eludir los detalles más procaces; en *El Comité* (1966) -ya mencionada en el capítulo I 2.3- había ironizado con un estilo kafkiano sobre el comité censor que le había interrogado acerca de *Ese olor*; en *Zet* (1992) -también citada en el capítulo IV 4.2- había contrapuesto el clima de deterioro y corrupción de la vida pública egipcia en la época de Sadat y sobre todo de Mubarak, reflejado por los periódicos locales, a la continua decepción de las ingenuas esperanzas de la protagonista de la ficción, llamada Zet, con una prosa mezcla de ironía, ternura, y, de nuevo, abierta procacidad... A principios de los 90, Sonallah Ibrahim había ofrecido a los partidos políticos la propuesta más original y tal vez más efectiva para que el poder político les escuchara en sus demandas de más democracia: que se autodisolvieran todos.

Lo más significativo del rechazo del premio estatal por parte de Ibrahim, aparte de que en su elección había influido el deseo del régimen egipcio de dar nuevas muestras de apertura (Jacquemond 2011: 1075), es que su discurso fue recibido con gritos y aplausos por gran parte de la audiencia. El propio escritor no esperaba en absoluto tal reacción: “Fui aplastado por la gente que quería darme la mano y besarme, lo que muestra claramente que la gente estaba esperando algo así, porque la situación en Egipto es muy mala”³². El

³¹ Hemos traducido el texto de la versión francesa publicada por Jacquemond (2011: 1076), traductor de Sonallah Ibrahim. Los periódicos árabes que hemos podido consultar ofrecieron una versión muy reducida del discurso.

³² Charles Levinson: “Outside the barn”, *Cairo Times*, 30 de octubre-5 de noviembre de 2005.

periodista Charles Levinson señaló que Ibrahim se había convertido en un “héroe de la contracultura”, pero en el contexto el concepto tenía una connotación particular. El escritor, posteriormente, apenas intentó tener un nuevo gesto hacia el jurado que le había concedido el premio, formado por destacados literatos y críticos de seis países árabes, entre los que destacaba el sudanés Tayyeb Saleh, y presidido por el presidente del Consejo Superior de la Cultura, Gaber Usfur. Por el contrario, quiso dejar claro el sentido de su acción en lo que tocaba a ciertos intelectuales:

“Son mis maestros, mis mentores, y agradezco su decisión, pero sentía que si hubiera aceptado el premio, si me hubiera unido a ellos, nadie me habría creído nunca más (...) El ministro de Cultura, Faruq Hosni, dijo una vez que había conseguido llevar a todos los intelectuales al redil. Sentí que era mi obligación contradecirle, y probar que no todos los intelectuales egipcios están en el redil del ministro”³³.

Apenas un año después del rechazo del premio por Ibrahim, el 10 de octubre de 1994, un artículo escrito por Tareq al-Bichri removía de nuevo las conciencias, y daba un fuerte impulso a Kifaya-Campaña por el Cambio. Al-Bichri tampoco formaba parte del “redil cultural” del Ministerio de Cultura. Por el contrario, era un exjuez e historiador extremadamente respetado por todas las corrientes intelectuales y políticas por su independencia y su equilibrio, a pesar de haber realizado un tránsito intelectual que le había llevado del naserismo en los cincuenta y los sesenta al “islamismo cultural” o “independiente”, pasando por cierta proximidad al marxismo, o en todo caso una convivencia desproblematizada con él en la segunda mitad de los 60, cuando escribía asiduamente en la revista *Al-Talia* (دياب 2005: 18-22. Sin embargo, Al-Bichri era el profesional e intelectual egipcio arquetípico fiel al Estado o a un compromiso con el Estado por encima de todo, lo que le había permitido, o al menos facilitado, formar parte del Consejo de Estado desde el principio de la época naserista hasta finales de los 90, cuando se jubiló. Formaba parte de la *intelligentsia*, aunque dentro de ella tuviera una posición muy distinguida e independiente.

No obstante, en su muy largo artículo de octubre de 2004 titulado “La personalización del poder. Comentarios sobre el despotismo”³⁴, Al-Bichri llamaba a los egipcios a retirar “el consentimiento a ser gobernados que habían concedido, y del que se había abusado, durante tanto tiempo” y les llamaba a la desobediencia civil y pacífica desafiando y asumiendo la represión que sin duda iban a padecer, con la ayuda de la unidad popular, garantizando que, al final, dicha represión cedería. El exmagistrado apenas hacía alusión a periodos concretos de la historia egipcia, pero afirmaba que en la actualidad el

³³ Ibid.

³⁴ El artículo de Al-Bichri, denominado "حول شخصنة الدولة. متون على هامش الاستبداد", puede descargarse de la página web del autor (<http://www.tark-bishry.com/Articles.htm>, consulta del 10 de octubre de 2015). No hemos podido averiguar, a pesar de que es abundantemente citado, donde fue publicado originalmente, y el autor tampoco lo indica.

Estado estaba “ultrapersonalizado” (متشخصن), y en las primera líneas de su texto señalaba que el despotismo se instauraba cuando un Estado dejaba de ser “expresión de un grupo e instrumento de gobierno para la gente, para concentrarse en una persona y expresar los estrechos intereses de una elite, sin la menor consideración hacia la gente y hacia los intereses de los ciudadanos”.

Hemos citado el caso de Al-Bichri, además de por su influencia, por lo representativo de la transformación de un hombre que había prestado un largo servicio al Estado en un puesto de alta responsabilidad, y al mismo tiempo había ejercido una constante crítica hacia él y hacia los sucesivos regímenes, pero desde la óptica de la fidelidad a un concepto del Estado y de relaciones de este con la sociedad, así como de la función del intelectual, que tendía a la búsqueda del consenso y excluía el favorecimiento de los enfrentamientos, y la “rebeldía”. Es revelador, en este sentido, que Al-Bichri fuera el elegido por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) tras el abandono del poder de Honsi Mubarak en febrero de 2011 para dirigir la comisión encargada de redactar una nueva Constitución. En la decisión del CSFA sin duda pesó la consideración de que Al-Bichri podía llevar a cabo una labor que equilibrara el mantenimiento de una cierta continuidad del Estado con las demandas “revolucionarias” y con los puntos de vista del sector ideológico con más peso social, la corriente islamista.

Volviendo a nuestra argumentación anterior, el caso de Al-Bichri se correspondía, salvando las distancias y las diferencias, con el de un gran número de personas que sentían que el Estado al que habían servido o con el que habían comulgado, consintiendo, cuando no justificando, los excesos de los regímenes en plaza a cambio de una serie de contrapartidas para ellos mismos y para la sociedad en general, estaba desapareciendo. Ben Néfissa (2007) señala cómo entre los 590 firmantes que pronto alcanzó el manifiesto de Kifaya se encontraban, junto personajes de la oposición, un gran número de personalidades de las instituciones “más oficiales del régimen”, en particular del Centro de Estudios Políticos y Estratégicos de Al-Ahram, es decir, de “intelectuales orgánicos”. No obstante, la autora ampliaba su análisis de la composición social de Kifaya a partir de la observación en la página web del grupo durante sus primeros dos años de existencia³⁵ de las

³⁵ Ben Néfissa cita el sitio en internet de Kifaya (www.harakamasria.org), que, como tantas otras de las organizaciones y asociaciones, civiles o políticas existentes desde principios de siglo hasta finales de 2013, ha desaparecido de la Red ante el embate censor de los últimos dos años de mandato de Mubarak y luego, y sobre todo, del régimen de Al-Sisi. No obstante, en el caso de www.harakamasria.org pueden encontrarse parte de sus materiales en internet gracias al sitio *archive.is* (<http://archive.is/www.harakamasria.org>), dedicado, precisamente, a salvaguardar mediante capturas de pantalla los contenidos de internet que puedan desaparecer. Sin embargo, no hemos podido encontrar los listados de los miembros a los que hace referencia, lo que no es de extrañar dada la posterior evolución política del país. De hecho, las páginas más antiguas que aparecen en *archive.is* son de febrero y del 22 de abril de 2008 -antes y después de que se incrementara la tensión política y social de manera significativa, con las grandes huelgas convocadas en abril-. Posteriormente, hay páginas tan solo de diciembre de 2012 y de enero de 2013, coincidiendo con otro momento crítico bajo la presidencia de Mursi. A partir de julio de 2013, y de la llegada al poder de Al-Sisi, se fue produciendo una desaparición de páginas de los grupos y medio de prensa contestatarios egipcios, refugiados en su mayor parte en *Facebook*.

adscripciones profesionales de sus miembros, que confirmaban las impresiones obtenidas a simple vista a propósito de los perfiles del grupo. Se trataba sobre todo de titulados superiores: ingenieros, abogados, médicos, gerentes, profesores, periodistas, escritores, informáticos, ejecutivos del sector privado, estudiantes, artistas, cineastas, actores. Sin embargo, había pocos funcionarios “comunes”, asalariados, trabajadores y personas del medio rural.

Como señalaba Ben Néfissa era difícil establecer si los miembros de Kifaya pertenecían a las elites sociales del país, a las clases acomodadas o a las clases medias. Estas últimas estaban sufriendo una mutación: junto a la pauperización de un gran número de diplomados por la bajada de los salarios y el incremento del coste de la vida estaba naciendo una nueva “clase media superior” relacionada con el sector privado nacional y extranjero. En conclusión, según señalaba la autora:

“los miembros de Kifaya se caracterizan menos por su nivel de vida que por las funciones que ocupan en el espacio público y político egipcio, en el que utilizan su dominio de la palabra, lo escrito y los otros medios de comunicación: entre los titulados destacan los periodistas, los universitarios, los investigadores, los abogados y los escritores” (Ben Néfissa 2007: 16).

No en vano, en los movimientos sectoriales nacidos “por el cambio” en la primera mitad de 2005, e inspirados por Kifaya, dominaban los nacidos de los sectores sociales mencionados por la autora: Jóvenes por el Cambio, Profesores por el Cambio, Periodistas por el Cambio, Escritores y Artistas por el Cambio.

Podemos, pues, definir la composición de Kifaya como un conglomerado de personas de las “clases intelectuales”, entendiendo por estas las constituidas por personas con formación superior y por “intelectuales” aquellos que dentro de estas clases ejercen o participan activamente, de una u otra manera, en el ámbito público y social formulando visiones relacionadas con ellas. Dentro de ella, la “*intelligentsia*” sería el sector de los intelectuales más comprometido en todos los sentidos con el Estado.

En cuanto a los intelectuales, lo que Jacquemond (2011: 1067-1071) denomina “la ósmosis entre los intelectuales y el Estado”, cuyos orígenes profundos se remontan al periodo de Mohammed Ali (1805-1848)³⁶, había sido fuertemente asentada en la época naserista, como también hemos señalado³⁷, a pesar de la exclusión de ciertos intelectuales islamistas de la “intelectualidad oficial” y de la reticencias, finalmente vencidas, de los intelectuales marxistas. En los años 70, el Estado abandonó en gran medida su papel de “educador” de la nación, y su voluntad de alianza con la mayoría de los intelectuales, forzando al exilio o la marginación, en conjunción con el islamismo ascendente, a las corrientes socialistas. En los años 90 sobre todo, aunque también en los 80, el régimen de

³⁶ Véase nuestro capítulo de Introducción 2.1.

³⁷ Véase el capítulo I 2.3.

Mubarak quiso recuperar a los intelectuales secularistas para su enfrentamiento con el islamismo político, buscando un equilibrio más que sojuzgar a los intelectuales islamistas, y lo hizo sobre todo con una política de cooptaciones y prebendas. Con ello, se reavivó el enfrentamiento entre islamistas y secularistas de la década de los 70, en la que los últimos habían sufrido una amarga derrota. La experiencia de Kifaya supuso la colaboración, por primera vez desde hacía décadas, entre secularistas -y en particular naseristas y socialistas- e islamistas de la “generación de los 70”, a la que habían abierto el camino las relaciones entre militantes mucho más jóvenes de ambos sectores, la llamada “generación de los 90”, en torno a las actividades de rechazo de los acontecimientos en Palestina y en Irak (véase capítulo V 1.1).

Ben Néfissa opina, con toda razón según nuestro juicio, que, en el contexto del

“«nuevo Estado» defendido por la joven guardia del PND, un Estado «ligero», liberal en el plano económico, y que había roto con el papel social que le correspondía desde la época naserista (...) el intelectual ya no encuentra su sitio, ni como consejero del príncipe, ni como pensador de la reforma social, pues es remplazado por nuevas elites económicas, financieras y tecnocráticas que se han desarrollado en torno al sector privado nacional e internacional. En cierta manera, si los intelectuales egipcios rompen con el régimen es también por la defensa de su estatuto, tanto simbólico, como económico, como político” (2007: 17).

No obstante, la propia autora recoge también unas palabras en nuestra opinión de capital importancia, pues revelan, por la condición de quien las pronuncia, que la ruptura con el régimen no era solo de los intelectuales, sino de un sector mucho más amplio de la población, más amplio que el meramente circunscrito a las “clases intelectuales”. Dichas palabras son de Hani Inan, tesorero de Kifaya: “Nuestra generación morirá si la sucesión hereditaria se lleva a cabo. Sería una vergüenza para Egipto y un fracaso para nuestra generación, pues Egipto es una República y no permitiremos que se transforme en una monarquía”³⁸.

Hani Inan, como señala la autora citada, era médico de formación y trabajaba en la venta de material médico en el sector privado. Es decir, ni era un “intelectual” propiamente dicho, ni dependía en su modo de vida del Estado. Por otro lado, había participado en las manifestaciones estudiantiles de 1968 y 1972, es decir, en manifestaciones relativamente “contra” los regímenes de Náser y de Sadat. “Relativamente” porque dichas manifestaciones fueron esencialmente manifestaciones que pretendían ser “correctoras” del rumbo o la deriva seguidos por tales regímenes, y no una enmienda a la totalidad del tipo de régimen y del tipo de Estado. Desde esta consideración, las palabras de Inan representaban la opinión de una gran parte de los egipcios, no necesariamente provenientes de las “clases intelectuales”, ni de las clases ya politizadas, sino de todos aquellos sectores que tenían una cierta idea, por difícil que les resultara formularla, de cómo debía ser el

³⁸ *Al-Wafd*, 26 de octubre de 2006. Citado por Ben Néfissa (2007: 17).

Estado egipcio y su régimen político. Ben Néfissa señala que lo que rechazaban tales sectores era la puesta en cuestión de la “idea republicana” aportada por la revolución de julio de 1952. No obstante, queda por definir cuáles eran los componentes reales de esa idea que cincuenta años después muchos egipcios querían preservar, aunque no quisieran conservarlos necesariamente en el mismo orden o de la misma manera. Las páginas que restan de este trabajo intentaran contribuir a desvelar esta cuestión.

4. CAMBIAR TODO PARA QUE NADA CAMBIE. EL AGITADO Y TENSO AÑO ELECTORAL DE 2005

Sin duda alguna, 2005 fue el año más largo en el ya de por sí largo mandato de Hosni Mubarak, en el que se concentraron todas las contradicciones de un régimen que hacía aguas y que, a diferencia de los veinte años anteriores, no supo reformularse de manera adecuada para responder a ellas. Durante él, su probada flexibilidad, su capacidad de contraer y expandir su componente coercitivo fue llevada hasta extremos opuestos, ambos insostenibles en el tiempo. Las elecciones presidenciales de septiembre de 2005 y las casi inmediatas legislativas de noviembre-diciembre del mismo año abrieron unas falsas expectativas de reforma que, una vez frustradas, conducirían sin solución a la progresiva deriva represiva del régimen y al aumento exponencial de la contestación popular de los años previos a la caída de Mubarak en febrero de 2011.

4.1 UNAS ELECCIONES PRESIDENCIALES REMOZADAS

4.1.1 Modificación del sistema de elección presidencial

Como hemos señalado, en enero de 2005 Aimán Nur, presidente del partido Al-Gad, había presentado su proyecto de reforma de la Constitución (véase V 3.2). En las mismas fechas había hecho lo propio el Comité de Defensa de la Democracia, formado por los partidos de oposición autorizados y varias ONG. Tres meses antes, Saad Eddín Ibrahim, Nawal al-Saadawi y Mohamed Farid Hasanein, hombre de negocios exdiputado del Wafd, habían anunciado que querían presentarse como candidatos a la Presidencia de la República, y el 4 de enero anunciaron que había reunido sus fuerzas para difundir una petición, para la que esperaban recoger un millón de firmas, para demandar al Parlamento la reforma de la Constitución.

El Presidente Mubarak se veía acuciado por las diversas presiones internas, a pesar de la falta de apoyo popular masivo a los contestatarios, y por las presiones norteamericanas, incrementadas tras la detención de Nur el 29 de enero de 2005. Pero aun

así, Mubarak sorprendió a propios y extraños al proponer el 25 de febrero a los presidentes del Parlamento y de la Asamblea Consultiva, Fathi Surur y Safwat al-Cherif, una reforma del artículo 76 de la Constitución sobre la base de siete principios:

- Elección del presidente de la República por sufragio universal directo y secreto de todos los ciudadanos con derecho a voto
- Compromiso de garantizar la presentación de varios candidatos al pueblo
- Asegurar la seriedad de las candidaturas presentadas, para lo que los candidatos deberían obtener el apoyo de un cierto número de representantes en las instituciones constitucionales y en los consejos locales
- Dar la ocasión a los partidos políticos de presentar a uno de sus dirigentes
- Constitución de una Comisión Suprema independiente y neutra a la que se le atribuirían todas las prerrogativas para supervisar el proceso electoral, que estaría formada por los presidentes de los cuerpos judiciales y por personalidades públicas
- Desarrollo del escrutinio en una sola jornada
- Garantizar la supervisión judicial del escrutinio

El Parlamento y la Asamblea Consultiva, dominados por el PND, aceptaron inmediatamente la propuesta del presidente, se pusieron manos a la obra, y a finales de marzo habían elaborado su proyecto, rechazado por los diputados de la oposición, que tras pasar diversos trámites administrativos entre ambas cámaras sería sometido a referéndum el 25 de mayo de 2005.

La nueva redacción del artículo 76 diferenciaba entre dos tipos de candidatos: los independientes y los de partidos políticos. Los primeros debían obtener el apoyo de 250 miembros electos de las asambleas legislativas y de los consejos locales, de la siguiente manera: 65 diputados del Parlamento, 25 de la Asamblea Consultiva y 10 miembros de cada consejo local en 14 provincias diferentes. Estas prescripciones excluían en la práctica la posibilidad de que se presentara cualquier candidato independiente, incluidos los Hermanos Musulmanes, pues su representación en cualquiera de los órganos representativos era muy inferior a la demandada. Los Hermanos Musulmanes, el colectivo más numeroso, tenían 17 diputados, y una presencia casi nula en el resto de los órganos, resultando además prácticamente imposible que logaran atraerse el favor, por el procedimiento que fuera, de tantos miembros y tan dispersos.

Para los candidatos de los partidos políticos, se establecía un procedimiento de transición para las elecciones de octubre de 2005 (finalmente se celebrarían en septiembre) según el cual cualquier miembro de sus órganos directivos supremos podría presentarse. Por el contrario, para las elecciones siguientes, el artículo 76 imponía un auténtico obstáculo: el partido que deseara presentar un candidato debía tener al menos cinco años de existencia, y tendría que obtener el apoyo de al menos un 5% de los escaños del Parlamento y la Asamblea Consultiva. Además, el candidato debería llevar al menos un

año en el máximo órgano de dirección del partido. Estas medidas permitían presentar candidatos en septiembre de 2005 a los débiles partidos existentes, pero hacía muy difícil que en las siguientes elecciones presidenciales, en 2011, pudiera presentarse un candidato “fuerte” que cumpliera los requisitos, pues los partidos y las fuerzas políticas susceptibles de ganar mayor popularidad, como los Hermanos Musulmanes, al-Wasat (islamista) y Karama (naserista), seguían sin ser autorizados a nueve meses de la celebración de las elecciones legislativas previstas para noviembre-diciembre de 2005.

En definitiva, la reforma del artículo 76, en lo que toca a la posibilidad de presentar candidaturas, estaba hecha a medida solamente de un candidato del PND, por qué no de Gamal Mubarak...

Otro aspecto importante era la composición de la Comisión para las Elecciones Presidenciales (CEP). De ella formarían parte cinco miembros destacados de los cuerpos judiciales y cinco personalidades públicas. Entre los primeros se encontrarían invariablemente el presidente del Tribunal Constitucional, que sería el presidente de la CEP, el presidente del Tribunal de Apelación de El Cairo y los tres vicepresidentes de mayor antigüedad del Tribunal de Casación, el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado. Las decisiones de la CEP serían inapelables, lo que según la oposición y numerosos juristas violaba el artículo 68 de la Constitución, pues este establecía que cualquier decisión administrativa debía ser recurrible ante los órganos judiciales “naturales”.

Las dudas despertadas por la imparcialidad de la CEP se vieron confirmadas para muchos cuando aquella anunció que no permitiría la supervisión del proceso de votación a las organizaciones de la sociedad civil que lo solicitaron.

4.1.2 Persistencia de Kifaya y de los “movimientos por el cambio”. La incorporación de jueces y trabajadores

Tras la primera sorpresa, y desde que a mediados de marzo se apreciaron los contornos reales de la reforma del sistema de elección presidencial propuesta, la actividad de Kifaya y de los colectivos “por el cambio” se intensificó, con manifestaciones de frecuencia casi semanal de rechazo a la reforma, a la continuidad de Hosni Mubarak y al *tauriz*. Las protestas, hasta entonces restringidas a El Cairo, comenzaron a extenderse, y el 27 de abril se produjeron manifestaciones en 14 de las principales ciudades del Norte, del Delta y del Alto Egipto, e incluso en zonas tan distantes entre sí como Al-Arich, no lejos de la frontera con Gaza, y Marsa Matruh, al oeste de Alejandría.

En mayo, un nuevo grupo introducía una novedad cualitativa en las agrupaciones literalmente denominadas “por el cambio”. Se trataba de Trabajadores por el Cambio, formado por trabajadores de la Administración y del sector público, cuyo portavoz era

Kamal Abu Aita y que reclamaba la formación de un sindicato independiente para representarlos.

Otros colectivos encontraban otras maneras de incorporarse al movimiento prorreforma. El 15 de abril, en una asamblea extraordinaria del Club de Jueces de Alejandría, 1.200 jueces amenazaban con no supervisar las elecciones presidenciales ni las parlamentarias si no se les garantizaba su independencia y el control total de todas las etapas de las elecciones. El 19 de mayo, 2.000 profesores universitarios emitían un comunicado anunciando su boicot del referéndum para la modificación del artículo 76³⁹.

La celebración del referéndum fue una ocasión para poner a prueba la voluntad del régimen político. La policía y numerosos *baltaguiyya* contratados por el PND aterrorizaron a los miembros de Kifaya y otros que se manifestaban contra él. El Ministerio del Interior afirmaría que habían votado “sí” el 53,64% de los 32.360.353 inscritos, y que el referéndum se había celebrado bajo un control judicial total. No obstante, el Club de Jueces de El Cairo elaboraría un informe sobre la jornada electoral en el que señalaba que según los propios datos del Ministerio, los jueces solo habían podido supervisar las votaciones en un 20% de los colegios. No obstante, según las estimaciones del Club de Jueces, dicho control solo había afectado al 5% de los colegios⁴⁰. Desde la primavera de 2005, el colectivo de los jueces fue visto por los movimientos por la reforma como uno de sus principales asideros y fuentes de esperanza.

4.1.3 Candidatos presidenciales

Además de Hosni Mubarak, que pronto disipó las dudas acerca de un desistimiento en favor de su hijo o de otro candidato del PND, a las elecciones presidenciales se presentaron finalmente tan solo dos candidatos de oposición de cierto peso, junto a otros siete destinados a servir de “decoración”, como los partidos a los que pertenecían. Estos últimos recibieron cada uno 500.000 LE del Gobierno para financiar sus campañas, cantidades que no fueron entregadas a los dos primeros (Hassabo 2006: 49-50). Uno de estos fue Aimán Nur, presidente de Al-Gad, que había sido liberado el 19 de marzo de 2005 tras las presiones ejercidas por Estados Unidos, a las que se había unido la Unión Europea. El otro fue Nuamán Guma, presidente del Wafd. El Tagammu y el Partido Naserista no presentaron candidatos.

Aunque en teoría Nur y Guma representaban una corriente ideológica similar, de corte neoliberal, Nur había sido expulsado del Wafd por sus diferencias con Guma, que mostraba una línea política muy próxima a la del Gobierno, y además era un acaudalado

³⁹ “A chronology of dissent”, *Al-Ahram Weekly*, 23-29 de junio de 2005.

⁴⁰ “Informe del Club de Jueces de El Cairo sobre el referéndum constitucional del 25 de mayo de 2005”. Citado por Sayyid Dayf Allah, *Nazahat al-intikhâbât wa istiqlâl al-qadâ'*, El Cairo, Centro El Cairo para los Estudios sobre los Derechos Humanos, 2005, pág. 202. Citado por Hassabo (2006: 43, 53, n.35).

hombre de negocios. Estos datos, y la condición de Nur de víctima del poder político, hacían de este el candidato de todos aquellos que desearan emitir una auténtica señal de protesta frente al poder, que no fuera el boicot de las elecciones presidenciales que gran parte de las fuerzas de la oposición manifestaban era la opción más adecuada para expresar tal protesta, ante el convencimiento general de que, de una u otra manera, Hosni Mubarak resultaría “elegido” de nuevo.

4.1.4 Rebeldía y pactos con el poder de los Hermanos Musulmanes

La respuesta más llamativa a los diversos movimientos políticos del régimen a lo largo de 2004 y hasta las elecciones presidenciales de 2005 fue la de los Hermanos Musulmanes, por sus frecuentes y repentinos cambios de actitud en el último año de dicho periodo.

En enero de 2004, Mahdi Akef había sucedido como guía supremo de la Hermandad a Maamún al-Hudeibi, fallecido el 7 de enero, que tan solo había estado catorce meses en el cargo desde el fallecimiento de su predecesor, Mustafa Manshur. Akef había formado parte del aparato militar de los Hermanos Musulmanes a principios de los 50, y había sido condenado a muerte en 1954, acusado de estar implicado en el atentado contra Násir, si bien su pena había sido conmutada por otra de veinte años de prisión. Tras salir de esta en 1974, Mahdi Akef emprendió un largo periplo por el extranjero, contribuyendo a desarrollar la red internacional del movimiento islamista, para retornar a Egipto a mediados de los años 80, siendo elegido miembro del Parlamento en 1987. En 1996 fue juzgado por su participación en la construcción de la Organización Internacional de los Hermanos Musulmanes y condenado a tres años de prisión, de donde salió en 1999 (Klaus 2005: 45).

Desde su acceso a la máxima responsabilidad de la Hermandad, Akef dirigió un nuevo discurso de aquella, que rechazaba continuamente la confrontación con el poder, insistiendo en la demanda de los derechos y las libertades civiles y políticos, y reclamando, sin éxito, ser considerado como una fuerza política más, participante en el “diálogo nacional” promovido por el partido gobernante. El 3 de marzo de 2004 Akef sorprendió y sin duda irritó a las autoridades presentando en el Sindicato de Periodistas su propuesta alternativa al proyecto de Gran Oriente Medio planteado por la Administración norteamericana. Por el contrario, durante los primeros meses de 2004, la dirección de la Hermandad evitó organizar cualquier tipo de encuentro de masas, y continuó conteniendo a los miembros más jóvenes de la organización que deseaban avanzar hacia una mayor política de calle y hacia la confrontación con el régimen. Este correspondió permitiendo que la organización convocara un funeral tras el asesinato en Gaza el 22 marzo de 2004 del jeque Yasín, líder espiritual de Hamás, al que asistieron 15.000 personas en Madinat Násir.

No obstante, fueron con toda probabilidad los acercamientos de los Hermanos Musulmanes a la naciente Kifaya-Campaña Popular por el Cambio los que llevaron al régimen egipcio a enviar a los HHMM varios mensajes de advertencia. El 17 de mayo, 54 responsables locales de la Hermandad en siete provincias fueron detenidos, y poco después 20 empresas supuestamente pertenecientes a ella fueron cerradas y sus fondos, que alcanzaban los 3,7 millones de LE, congelados bajo la acusación de enviar a militantes al extranjero para recibir formación militar que en el futuro permitiera derrocar al régimen egipcio. Pocos meses después, a principios de septiembre, varios sitios en internet de la hermandad (ikhwanonline.com, daawa.com), desaparecieron de la Red temporalmente. Las intimidaciones de las autoridades no impidieron que la Hermandad suscribiera el manifiesto de la Campaña por el Cambio, pero aquella dio órdenes estrictas a sus miembros de no participar en las concentraciones de Kifaya u otras similares, lo que explica que el número de los manifestantes no fuera considerablemente mayor.

Nada más comenzar 2005, cuando el régimen egipcio se encontraba confrontado a las mayores presiones en pro de la reforma constitucional, Mahdi Akef se descolgó de ellas con unas declaraciones sorprendentes, por caídas en desuso en la dirección de la Hermandad, aunque en otros tiempos hubieran formado parte de su línea oficial, acorde con la teoría ortodoxa del poder político en el islam sunní. En una entrevista con el diario *Al-Masri al-Yaum* publicada el 1 de enero, Akef afirmaba que el presidente era “el máximo responsable de la Comunidad [ولي الأمر], y que por tanto debía ser obedecido”, declaraba que los “hermanos” eran “los fieles hombres del presidente”, e incluso rechazaba la reforma de la Constitución⁴¹. Posteriormente, el propio Akef y otros dirigentes de la Hermandad intentarían enmendar y matizar las declaraciones iniciales del primero en lo relativo a la reforma de la Constitución y a la figura del presidente, señalando, en lo que toca a este último aspecto, que lo que había querido decir el guía supremo era que había que respetarlo en tanto que “símbolo de la nación”, y que, de cualquier manera, desde un punto de vista legal había que obedecerlo. Acaban apuntando que, no obstante, el principio islámico de que había que obedecer al máximo gobernante perdía vigencia si este no aplicaba la *charía*, y este era el caso de Mubarak⁴².

Sin embargo, el 23 de marzo de 2005, dos días antes de que el Parlamento diera su aprobación al proyecto de reforma del artículo 76 de la Constitución relativo a la elección presidencial, Akef volvía a enviar señales al régimen político en una conferencia de prensa, indicando que los Hermanos Musulmanes estarían dispuestos a apoyar la candidatura de Hosni Mubarak si este se comprometía a realizar una reforma política completa y “emprendía la vía del diálogo con los Hermanos Musulmanes”⁴³. Pero en los días

⁴¹ *Al-Masri al-Yaum*, 1 de enero de 2005. Citado por Aklimandos (2006: 84).

⁴² Entrevistas en *Al-Maydan*, 13 de enero de 2005, y *Al-Arabi*, 20 de marzo de 2015. Citado por Aklimandos (2006: 96).

⁴³ *Al-Masri al-Yaum*, 25 de marzo de 2005. Citado por Aklimandos (2006: 96).

siguientes Akef multiplicó de nuevo sus declaraciones contradictorias relativas a las elecciones presidenciales y las legislativas (Aklimandos 2006: 85), reflejando, sin duda, las vivas discusiones en el seno de la dirección de la Hermandad ante la nueva situación política creada por el régimen.

Finalmente, hacia principios de abril se ponía de manifiesto una nueva política, aparentemente firme, de la Hermandad. El 27 de marzo se celebró en el centro de El Cairo una manifestación a la que asistían unos pocos miles de personas. El 3 de abril, Abdel Moneim Abul Futuh, miembro de la Oficina de Orientación (مكتب الإرشاد) de la organización, y el dirigente de esta más cercano al resto de las fuerzas políticas, afirmaba que los Hermanos Musulmanes tal vez apoyarían a un candidato opuesto a Mubarak en las elecciones presidenciales, y exclamaba: “Nosotros decimos a Mubarak: ¡kifaya! [¡Ya basta!]”. Al mismo tiempo, anunciaba, de manera sorprendente, que los propios Hermanos Musulmanes reducirían la duración en el cargo de su Guía Supremo a dos mandatos⁴⁴.

A lo largo del mes de abril se produjeron manifestaciones cada vez más numerosas de la Hermandad en diversos lugares del país, alternándose con detenciones también cada vez más numerosas de sus miembros. En mayo, el número de manifestaciones y manifestantes aumentaron exponencialmente. El 4 de mayo se produjeron en nueve provincias, participando en la de plaza Ramsés de El Cairo más de 5.000 personas. En Damanhur, en el Alto Egipto, los reunidos eran cerca de 10.000. El Gobierno respondía con un incremento cuantitativo y cualitativo de la represión: el 4 de mayo se produjo un muerto en las filas de los Hermanos Musulmanes, y a finales de mes los detenidos se contaban por miles (2.800, según la propia organización), entre ellos se encontraban varios dirigentes, como Essam al-Arián y otros tres miembros encargados de dirigir el aparato de la Hermandad (Jeirat al-Chater, Mohammed Habid y Mahmud Ezzat) (Aklimandos 2006: 86-88).

A partir de junio se produjo una progresiva disminución de las manifestaciones, lo cual dejó el terreno abierto a las especulaciones. Numerosos miembros de otras fuerzas de la oposición habían manifestado sus sospechas de que la Hermandad estaba jugando su juego habitual: presionar al régimen para arrancarle concesiones negociadas. La propia organización islamista afirmaba que el régimen le había infligido un duro golpe deteniendo a su aparato organizativo. Otros decían que los Hermanos Musulmanes habían interpretado mal la debilidad del régimen, sus propias fuerzas, o el apoyo que podrían obtener de la población.

Ante la proximidad de las elecciones presidenciales, en el verano se multiplicaron los rumores, apoyados por las declaraciones de supuestas fuentes de los Hermanos Musulmanes citadas por los periódicos, de que estos estaban negociando apoyar a Mubarak a cambio de contrapartidas, como la liberación de sus prisioneros y otros beneficios “pos

⁴⁴ *Al-Arabi*, 3 de abril de 2005. Citado por Aklimandos (2006: 96).

elecciones presidenciales”. Uno de los problemas, según dichas fuentes, era que la iniciativa tomada por la dirección era mal aceptada por las bases, y sobre todo por “los jóvenes de las provincias”, que exigían el boicot de las presidenciales⁴⁵. Lo que parece incontrovertible es que la Hermandad envió un cuestionario a sus miembros preguntándoles si preferían boicotear las elecciones presidenciales o votar a un candidato de la oposición, siendo la primera opción, según se sabría más tarde, la vencedora⁴⁶. No obstante, esto formaba parte de una estrategia de distracción de la dirección de la Hermandad, al igual que las numerosas filtraciones interesadas, para hacer imposible conocer sus auténticos propósitos y calmar a su militancia⁴⁷. El 21 de agosto, dos semanas antes de las elecciones, la dirección de la organización daba sus consignas oficiales: participación en las elecciones, sin consignas de voto, con la precisión de que “los «hermanos» no podían votar por un tirano”. Mahdi Akef, por su parte, había declarado pocos días antes que les resultaba “imposible” apoyar a Mubarak (Aklimandos 2006: 91-92). El boicot, la opción preferida por la militancia, quedaba, sin embargo, descartado. Hay que señalar, por otro lado, que el 14 de agosto el guía supremo de la Hermandad y otros de sus principales dirigentes se habían dejado fotografiar realizando conjuntamente la oración bajo la dirección de Akef y junto a Aimán Nur, que había acudido a ellos para solicitarles su apoyo, sin obtenerlo explícitamente.

Los Hermanos Musulmanes sabían perfectamente que la consigna de voto más dañina para el régimen que podían haber dado a sus militantes era llamar al boicot. Que algunos o muchos de ellos acudieran a las urnas para votar a Nur, a Guma o en blanco no podía más que servir a los intereses del régimen, pues el vencedor oficial sería con toda seguridad Hosni Mubarak, y lo único que podían conseguir los votos de los militantes islamistas era mejorar la apariencia de participación.

A pesar de las sospechas del resto de las fuerzas políticas de que los Hermanos Musulmanes habían llegado o se aprestaban a llegar a un acuerdo con el poder, durante julio y agosto los miembros de Kifaya, de la Hermandad y de otras fuerzas participarían en diversas manifestaciones conjuntas que reunían a varios miles de personas, aunque lo harían en un clima de creciente desentendimiento y acusaciones a “los hermanos”, que blandían el Corán -a diferencia de los meses precedentes- y no coreaban los eslóganes contra Hosni Mubarak. Finalmente, en manifestaciones como la del 14 de agosto ante la sede del Sindicato de Abogados, coexistían los coranes y las banderas rojas de los osados jóvenes trotskistas en la demanda conjunta de una justicia independiente y de respeto del papel de los jueces⁴⁸.

⁴⁵ Aklimandos cita una enorme cantidad de fuentes que reflejan dichos rumores y citan a su vez fuentes de los Hermanos Musulmanes. Señalaremos tan solo la información aparecida el 13 de agosto en *Al-Masri al-Yaum* de donde proviene el contenido citado en el cuerpo de nuestro texto (2006: 91, 100-104).

⁴⁶ *Al-Hayat*, 23 de agosto de 2015. Citado por Aklimandos 2006 (92, 104).

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Aklimandos relata con detalle sus experiencias personales en muchas de tales manifestaciones, unas

Aunque nunca reconocería haber negociado nada en concreto con el régimen de Mubarak para las elecciones presidenciales de septiembre de 2005 -lo que le habría situado en una posición más delicada-, Mahdi Akef sí reconocería a partir de 2009 haber llegado a un acuerdo con aquel, en virtud del cual sus miembros encarcelados serían liberados y la Hermandad podría actuar libremente y presentarse a las elecciones legislativas de noviembre y diciembre de 2005⁴⁹. Según Akef, representantes de las autoridades le pidieron que diera una primera muestra de buena voluntad ordenando que cesaran las manifestaciones de la organización, lo que interesaba en particular al régimen ante la visita que Hosni Mubarak debía realizar a Estados Unidos, y Akef accedió.

Sin embargo, entre el resto de las fuerzas políticas de oposición quedó la convicción de que el acuerdo fue alcanzado anteriormente. La actitud de las autoridades en octubre y noviembre hizo evidente esta rehabilitación de la Hermandad emprendida por el régimen. En dichos meses, todos los detenidos de la organización fueron liberados y los HHMM pudieron organizar a su antojo encuentros e incluso marchas presididas por un tono conciliador, antes de anunciar su participación en las elecciones con entre 150 y 200 candidatos, y poder realizar su campaña electoral sin trabas mayores.

Es muy importante tener en cuenta esta actitud pactista de la organización con el régimen de Mubarak a espaldas del resto de las fuerzas políticas y de la opinión pública, a pesar de que sus pactos alternaran con periodos de persecución por parte del régimen, porque explica la gran desconfianza de fondo de una gran parte de la población hacia la Hermandad, que se manifestaría años más adelante, en la primera mitad de 2013, cuando una parte muy considerable de aquella se levantara contra Mohammed Mursi, miembro de los Hermanos Musulmanes y primer presidente egipcio electo.

4.1.5 Desarrollo y resultados de las elecciones presidenciales de 2005

La campaña en favor de Hosni Mubarak en las elecciones presidenciales se caracterizó por su diseño y puesta en escena totalmente novedosos respecto a ocasiones anteriores. Fue inaugurada por un Mubarak sin corbata, rodeado de numerosos colaboradores igualmente vestidos de manera informal y de un público muy joven en los recientemente inaugurados jardines de Al-Azhar, ocasión transmitida en directo por la cadena privada Dream TV, que como ya hemos dicho pertenecía a Ahmad Bahgat, miembro del PND y personaje próximo a Gamal. Este, con sus más estrechos colaboradores, dirigía la campaña y aparecía junto al Presidente, mientras que la “vieja guardia” del partido quedaba totalmente alejada de los focos (Hassabo 2006: 45-46).

veces “ecumenistas” -si se nos permite la expresión-, y otras tensas (2006: 99-100).

⁴⁹ La primera vez que Akef reconoció el pacto con dirigentes del régimen fue en una entrevista concedida a *Al-Masri al-Yaum* en octubre de 2009.

El Gobierno anunció que los remozados canales de la televisión estatal darían una cobertura igualitaria a todos los candidatos: espacios electorales de la misma duración y en la misma franja horaria asignados a cada candidato en los informativos. Y, de manera sorprendente, cumplió su promesa. No obstante, según señala Charles Levinson (2005: 219-222), el tratamiento en los informativos de los principales adversarios, Mubarak y Aimán Nur, fue muy desigual. En el primer día de campaña, mientras Mubarak aparecía durante los treinta minutos que le correspondían dirigiendo la palabra a miles de personas, en los primeros diez minutos de su cuota televisiva Nur luchaba porque sus colaboradores hicieran funcionar el micrófono que iba a utilizar y, sudoroso, pedía sin cesar pañuelos de papel. En los días siguientes, el tratamiento fue similar. Hala Hashish, la directora de Nile News, el canal 24 horas de la televisión egipcia, rechazó que sus informativos hubieran intentado “hacer aparecer a Nur como un estúpido”, y añadió: “lo consiguió él solo”. En cuanto a la prensa estatal, el Centro El Cairo para los Derechos Humanos realizó un estudio sobre la cobertura de la campaña de *Al-Ahram* entre el 17 y el 23 de agosto y concluyó que el periódico había dedicado un 57% de ella a hablar, de manera en su mayor parte positiva, de Hosni Mubarak como candidato, y un 14% como presidente.

“Lo que cambió en la campaña de 2005 -estima Levinson- fue el nivel de sofisticación de los elaboradores del mensaje gubernamental. Los jóvenes y educados en Occidente que se agarran a los faldones del delfín Gamal Mubarak en su ascenso al poder saben que la propaganda que se elaboraba para sus padres no puede competir en el siglo XXI. En lugar de seguir impidiendo el acceso de la oposición a la televisión del Estado, lo que les exponía al ridículo y les hubiera servido de poco en la era de la información y de internet y las televisiones por satélite, la televisión estatal dio a cada candidato una cuota justa e igualitaria cuantitativamente, pero no cualitativamente” (Levinson 2005: 220).

No obstante, a pesar de los pesares, las fuerzas de la oposición reconocieron que se había producido una considerable mejora en el tratamiento dado por los medios de comunicación de masas al conjunto de la campaña electoral.

En cuanto a la supervisión de las elecciones, la Comisión Electoral para las Elecciones Presidenciales (CEP), que había quedado encargada totalmente de ellas, excluyó la presencia de observadores internacionales y el control total y efectivo por los jueces de todo el proceso -tan solo se encargó a jueces el control de los colegios electorales centrales donde se realizaba el recuento final de los votos- así como, en principio, también la presencia de observadores de las organizaciones y asociaciones egipcias que la habían solicitado. Sin embargo, el mismo 7 de septiembre, día de la votación, a las 10 de la mañana, la CEP daba la sorprendente noticia de que dichas organizaciones y asociaciones podrían asistir al escrutinio. Finalmente, en la práctica serían los presidentes de los colegios electorales, en su mayor parte funcionarios del Ministerio de Justicia, quienes decidirían individualmente si permitían acceder a los observadores a los colegios. En la

mayor parte de los casos, les dejaron entrar tan solo durante diez minutos.

Los resultados de las elecciones sorprendieron tan solo por la baja tasa de participación anunciada oficialmente, un 22,95%. En cuanto a los votos a los candidatos, Mubarak obtuvo el 88,57%, Aimán Nur el 7,57% y Nuamán Guma el 2,92%, mientras que los siete candidatos restantes apenas sumaban un 1%. Los 6,31 millones de votos obtenidos oficialmente por Mubarak no dejaban a este, en última instancia, en demasiado buen lugar, pues representaban al 15,2% de la población en edad de votar, que era de 41,3 millones, frente a 32 millones de inscritos en las listas electorales (Hassabo 2006: 48-50).

4.2 LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS: FRACASO DE LA OPERACIÓN DE SUSTITUCIÓN “TRANQUILA” DE LAS ELITES DEL RÉGIMEN

Las elecciones legislativas de 2005, celebradas en tres fases entre el 9 de noviembre y el 1 de diciembre fueron las más libres y competitivas de todas las celebradas bajo el mandato de Mubarak, a pesar de que concluyeran en medio de la más férrea y violenta voluntad de las más altas instancias del régimen político de controlar los resultados finales⁵⁰. Esta aparente paradoja se explica por los erróneos cálculos de aquel primero, al subestimar la determinación de gran parte de los jueces de garantizar la limpieza de las elecciones; segundo, la fuerza electoral de los Hermanos Musulmanes; y tercero, y más decisivo, el descontento y la resistencia de gran parte de las elites del partido gobernante ante la decisión de la dirección de apartarlos del núcleo del poder.

4.2.1 Una campaña electoral libre y sin sobresaltos

La voluntad de gran parte de los miembros del colectivo de los jueces de contribuir a democratizar el país, reflejada en las amenazas de varios de sus profesionales a lo largo de 2005 de no participar en la supervisión de ningún tipo de comicios si no podían hacerlo en su integridad y con absoluta independencia, se vio confirmada de nuevo por el Tribunal Administrativo de Primera Instancia. El 6 de septiembre y el 9 de noviembre de 2005 falló que las organizaciones de la sociedad civil tenían derecho a entrar en los colegios electorales, observar el proceso de votación y de escrutinio e incluso a utilizar un circuito cerrado de televisión para supervisar el último (El-Ghobashy 2006), con lo que se añadía un nuevo instrumento que incorporaba a la sociedad a la supervisión del proceso electoral que los propios jueces habían reclamado ejercer, como ya había sucedido en 2000.

El régimen egipcio organizó la supervisión del proceso electoral por los jueces. Si

⁵⁰ Para más información sobre las elecciones legislativas de 2005 pueden consultarse los trabajos que hemos publicado que las abordan de manera específica (Barreda 2006, 2008).

ya lo habían hecho en 2000, a pesar de que diversos magistrados sufrieran presiones y amenazas, en esta ocasión lo que estaba en juego era mucho más, pues el clima político y social había cambiado considerablemente y en las elecciones participaría el principal adversario político del PND, los Hermanos Musulmanes, con 150 candidatos. Si esta cifra no había sido pactada con el Gobierno, de lo que no tenemos constancia pero nos parece lo más probable, respondería a la voluntad de la Hermandad de no forzar demasiado las cosas en el nuevo marco de distensión y entendimiento con el régimen político. Fuera de esto lo que fuere, tal número de candidatos reducía considerablemente los riesgos, pues apenas suponía poco más de un tercio de los 444 escaños en disputa. Los partidos de la oposición, el Wafd, al-Gad, el Tagammu y el Partido Naserista, por citar solo a los que tenían cierto apoyo social, no inquietaban demasiado al PND.

El desarrollo de la campaña electoral puso de manifiesto una nueva actitud del régimen político. Los candidatos de la oposición no fueron hostigados por la policía de manera digna de consideración, en comparación con las elecciones anteriores, y pudieron exponer con libertad sus propuestas.

El sistema electoral seguía siendo el de candidaturas independientes, ya se presentaran los candidatos por su propia cuenta o en nombre de partidos políticos. En esta ocasión, los candidatos oficiales del PND fueron cuidadosamente seleccionados por la Secretaría de Políticas del partido, dirigida por Gamal Mubarak. El grueso de los candidatos eran afines al sector “reformista” que el hijo del presidente lideraba, aunque algunos escaños habían sido reservados a los pesos pesados de la “vieja guardia” del régimen. La Secretaría General del partido intentó ser más firme y convincente que nunca al afirmar que los miembros de aquel que se presentaran a las elecciones como independientes serían expulsados, si bien estas amenazas fueron desoídas por cientos de miembros del partido.

Las elecciones debían desarrollarse en tres fases de una semana aproximadamente cada una para facilitar la supervisión judicial, realizándose en cada fase en determinadas zonas geográficas. Como en el año 2000, los jueces, insuficientes para cubrir todos los colegios electorales a un tiempo, se desplazarían al final de cada fase a otra zona geográfica. En cada fase se celebraría una primera vuelta y, al día siguiente de publicarse los resultados oficiales de esta, se celebraría una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, en el caso de que ninguno hubiera obtenido la mayoría absoluta en la primera.

4.2.2 Desarrollo de las elecciones y vuelco en los resultados: el éxito de los HHMM y la derrota de los “reformistas” del PND

En su primera fase, celebrada del 9 al 15 de noviembre, las elecciones respondieron

en gran medida a las promesas de limpieza y no intromisión gubernamental que habían hecho las autoridades, aunque en ello jugó un papel determinante la firmeza de los jueces encargados de supervisarlas. La policía no intervino en detrimento de ningún candidato, aunque sí se dieron casos en los que matones contratados por algunos candidatos atacaron a los adversarios de estos y en los que la policía invocó la “neutralidad” para no intervenir. También pervivieron prácticas como la manipulación de los censos, que fueron en muchos casos detectadas por los jueces, o el uso de recursos del Estado para favorecer a los candidatos gubernamentales, del tipo del uso de autobuses para trasladar a funcionarios a los colegios electorales, para que votaran aleccionados por sus superiores (El Amrani 2005). Finalmente, la compra de votos fue tan señalada por los observadores como en elecciones anteriores, oscilando el precio del voto entre 3,5 y 300 LE (IRE 2005: 14).

Los resultados de la primer fase, que afectaba a El Cairo y Guiza, a diversas provincias del Alto Egipto (Beni Suef, Minia y Asiut) y a otras de mucho menor peso electoral, debía dilucidar el destino de 164 escaños, de los que el 41,5% (68) fueron a parar a candidatos oficiales del PND; el 20,7% a los Hermanos Musulmanes (34); el 4,8% a la oposición relacionada con partidos y corrientes ideológicas no islamista (6); y el 32% a candidatos independientes (58), de los que la gran mayoría eran miembros del PND o simpatizantes (IRE 2005:23).

Estos resultados eran alarmantes para los altos dirigentes del partido gubernamental, pues los Hermanos Musulmanes obtenían muy buenos resultados, y los candidatos oficiales del partido, los relacionados con el sector “reformista”, unos resultados muy insuficientes para el objetivo de dicho sector de dominar el Parlamento y desplazar a los advenedizos del partido y a la “vieja guardia” del régimen, a la que tendrían que recurrir de nuevo para conformar una mayoría parlamentaria fuerte. Estas consideraciones llevaron a estos altos dirigentes a modificar su actitud ante los comicios.

En la segunda fase, celebrada del 16 al 22 de noviembre, y que afectaba principalmente a la zona norte del Mediterráneo y a la del Canal de Suez, donde los Hermanos Musulmanes eran especialmente populares en las ciudades (Alejandría, Port Said, Suez, Ismailiyya), las cosas comenzaron a cambiar. Aumentó la presencia de grupos de matones (*baltaguiyya*) que intentaban intimidar a los electores e interventores de la oposición, aumentó la “neutralidad” de las fuerzas de seguridad, y se produjeron muertos y abundantes heridos (IRE 2005: 15). Ante las críticas a su pasividad, al final la policía comenzó a intervenir... deteniendo a los partidarios de los Hermanos Musulmanes. No en vano, algunos matones opuestos a los islamistas llevaban camisetas con el lema de los HHMM.

A pesar de todo, los islamistas consiguieron el 29% (42 escaños) de los adjudicados en esta fase, mientras que los candidatos oficiales del PND obtenían solo el 25% (36 escaños), y los candidatos “independientes”, que de nuevo eran en su mayoría miembros o simpatizantes del PND, la mayor parte del 45% restante (64 escaños), si excluimos los dos

escaños obtenidos por el Wafd. El triunfo de los Hermanos Musulmanes y otros independientes solo fue posible gracias a la fiera resistencia física de sus electores frente a las agresiones, y a la actitud de los jueces, que ejercieron su supervisión tanto dentro como fuera de los centros de voto, y anularon los comicios cuando no pudieron hacerlo. La gran determinación de la mayoría de los jueces para cumplir con su deber se confirmó cuando, tras el final de esta, el Club de Jueces amenazó con suspender su supervisión de los comicios si las fuerzas de seguridad no controlaban los altercados, e incluso pidió al Ejército, el 22 de noviembre, que interviniera si aquellas no lo hacían⁵¹.

En las dos primeras fases, los candidatos oficiales del PND solo habían obtenido 104 escaños de un total de 308 asignados hasta entonces, mientras que los Hermanos Musulmanes habían obtenido 76. Se estimaba que otros 15 escaños, entre los de los partidos de la oposición y los "auténticos" independientes quedaban fuera del ámbito de influencia del partido gubernamental, mientras que recuperando a sus "disidentes electorales" u otros personajes afines este podía contar en total con cerca de 207 diputados, un 67% de los asignados hasta entonces. Precisamente en ese porcentaje se encontraba en la frontera de los votos necesarios (2/3) para poder adoptar infinidad de medidas excepcionales en el Parlamento (enmendar la Constitución, otorgar poderes excepcionales al presidente, etc.), con lo que la situación de hegemonía absoluta del PND de las dos décadas anteriores peligraba, amén de que el proyecto de renovar las elites del régimen había ya naufragado.

En este contexto, en la tercera fase de las elecciones la primera semana de diciembre, quedó claro desde un primer momento que las más altas instancias del régimen no iban a permitir que sus resultados continuaran empeorando: hizo rodear todos los centros de voto por la policía, con la excusa de impedir los enfrentamientos, y aquella decidía quién podía entrar a votar y quién no, excluyendo a la oposición, a sus interventores y a sus votantes, muchos de los cuales se enfrentaron a los agentes. Para conseguir esto tuvieron que recurrir a una gran violencia y a arrestos masivos, y sobre todo a ignorar a los jueces, algunos de los cuales fueron golpeados o detenidos por la policía. En todas sus fases, las elecciones arrojaron un saldo de una docena de muertos, 700 heridos hospitalizados y cerca de 2.000 detenidos, 1.500 de ellos entre los partidarios de los Hermanos Musulmanes. En cuanto a los resultados de la tercera fase, los candidatos oficiales del PND obtuvieron el 30% de los escaños (41 parlamentarios), los Hermanos Musulmanes solo el 8,8% (12 escaños), los partidos de la oposición el 3% (4 escaños), y los candidatos independientes el 59% (79 escaños), siendo la mayoría de estos miembros de o afines al PND.

Los resultados finales completos de los comicios fueron: 145 escaños para los

⁵¹ Mona El-Ghobashy: "Egypt's Paradoxical elections", *Middle East Report*, nº 238, primavera de 2006 (<http://goo.gl/gqkd9O>, consulta del 29 de abril de 2006).

candidatos oficiales del PND (32,6%), 179 escaños para “independientes” que se reintegraron al PND o ingresaron en él (54%), 88 escaños para los Hermanos Musulmanes (19,8%), 10 para los partidos legales (6 Wafd, 2 Tagammu, 2 Al-Gad), 2 para la corriente naserista Karama, 8 para diputados que se mantuvieron como independientes, y 12 escaños pendientes de que se repitieran las elecciones en algunos distritos, siguiendo las indicaciones de los jueces. En definitiva, el PND volvía a conseguir una amplia mayoría de más del 76% de los diputados en el Parlamento, pero con un doloroso coste: debía aceptar en su grupo a diputados no deseados, los Hermanos Musulmanes obtenían una fuerte presencia y, aun así, su imagen quedaba deteriorada en el exterior y el interior por su brutal intervención final en los comicios.

Resta señalar que, de dar fe a los cálculos de la Comisión Independiente para el Seguimiento de las Elecciones (اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات) (CISE), realizados a partir de los datos recogidos en los colegios de voto y de recuento, el Gobierno, con los datos oficiales comunicados, habría intentado maquillar los datos de participación para hacer pensar que aquella fue mucho más elevada en las fases en las que, precisamente, impidió votar a un gran número de personas, y en particular en aquella (la tercera) en la que obtuvo peores resultados. En la tabla 20 pueden compararse los datos aportados por ambas partes:

TABLA 20: PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DE 2005

	Datos facilitados por el Gobierno		Datos facilitado por la CISE	
	1ª vuelta	2ª vuelta	1ª vuelta	2ª vuelta
Primera fase	29%	23 %	34%	24 %
Segunda fase	28,6%	23,4%	18%	17%
Tercera fase	32,1%	25,1%	18%	8 %

FUENTE: elaboración propia a partir de IRE (2005: 13)

La medida del éxito de los Hermanos Musulmanes en las elecciones de 2005 no se percibe adecuadamente del mero seguimiento de los porcentajes que hemos facilitado hasta ahora. Por un lado, hay que insistir en que solo habían presentado 150 candidatos para las 444 circunscripciones, por lo que triunfaron en casi el 60% de los casos en los que se presentaron, a pesar de la violencia utilizada contra ellos. Sin embargo, al margen de su propia fuerza como organización, y de que la Hermandad pudiera atraer un voto espontáneo de rechazo al régimen de sectores no necesariamente islamistas, no hay ninguna duda actualmente de que gran parte de su éxito se debió a las alianzas que tejió con la “vieja guardia” del PND marginada por la dirección de este en las elecciones, o con miembros y simpatizantes de aquel igualmente rechazados en las listas oficiales del partido.

Ya poco después de las elecciones, Hossam Badrawi, miembro del Secretariado de

Políticas del PND y derrotado en las elecciones, fue uno de los pocos que decidió manifestar públicamente lo que era una sospecha generalizada, al declarar en una entrevista que la “vieja guardia” del partido no lo había apoyado seriamente, y que los partidarios del PND habían recibido instrucciones muy confusas acerca del sentido de su voto, así como que la publicidad de su candidatura había desaparecido de las calles mientras que la de los Hermanos Musulmanes permanecía en ellas⁵². Más adelante, el propio ministro del Interior de la época, Habib al-Adli, confirmaría que el triunfo de los Hermanos Musulmanes se había debido en gran parte al apoyo de miembros del PND que habían establecido alianzas con ellos al no contar con el apoyo oficial del partido o con suficientes apoyos sociales propios⁵³.

4.2.3 Más allá del análisis electoral. El fracaso de un proyecto de cambio de régimen

El análisis de las elecciones legislativas de 2005 no puede ser aislado de lo sucedido en la escena política egipcia en el primer quinquenio del siglo XXI. Si excepcional fue la “liberalización” del sistema político durante las tres semanas de la campaña electoral y la primera fase de las elecciones, no menos excepcional sería su cierre en las dos fases siguientes, y sobre todo después de las elecciones, como veremos a continuación. A partir de estos datos, si la intención de las altas instancias del régimen de liberalizar totalmente el sistema no era sincera, cabe preguntarse cuáles eran sus cálculos y sus objetivos.

Pensamos que, como ya hemos expuesto, las altas instancias del régimen (Hosni Mubarak y posteriormente su hijo Gamal, y el más estrecho círculo de allegados de ambos) tenían dos objetivos claros ya madurados a principios de la década. Uno de ellos era sustituir a gran parte de las elites del régimen asentadas desde hacía mucho tiempo; otro, conseguir el apoyo de diversos sectores de la sociedad para contrarrestar la influencia de dichas elites. Entre 2002 y 2004 comenzó el remplazo, ordenado y guiado desde arriba, de los pesos pesados de la “vieja guardia” de origen burocrático en el partido y el Gobierno. Las elecciones legislativas de 2005 debían conducir, según tales planes, al acceso mayoritario al Parlamento de personas fieles a Gamal Mubarak y su círculo. Con el control de partido, Gobierno y Parlamento, la reforma del PND en sus estratos intermedios y locales habría sido más sencilla, y la nueva elite dominante, formada en gran parte por la alta burguesía de los negocios, habría tenido la palabra decisiva a la hora de proponer al candidato presidencial, pues con el antiguo sistema de designación previo a la reforma del artículo 76 de la Constitución, que establecía que para ser candidato hacía falta un mínimo de un tercio de apoyos de la Cámara, el apoyo de dos tercios que contaban obtener

⁵² S. Shehab: “From A to B”, *Al-Ahram Weekly*, 15-21 de diciembre de 2005.

⁵³ “العدلي يكشف علاقة الإخوان الوطني في برلمان ٢٠٠٥”، *المصريون*، ٩ أغسطس ٢٠١٤.

garantizaba ser candidato único. Es muy posible que las fuerzas que apoyaban la reforma del régimen quisieran evitar que el candidato a presidente fuera un miembro del Ejército, y no es en absoluto descartable que pensarán que dicho candidato podía o debía ser Gamal Mubarak.

No obstante, en estos planes se cruzó el rechazo de diversos e importantes sectores sociales, en el contexto de un renacer del activismo político y de la “rebeldía”, y sobre el mar de fondo de un descontento social más amplio de base en gran parte económica, como veremos a continuación. La oposición a la “sucesión hereditaria” en la presidencia de la República que dichos sectores creían que formaba parte de los planes de “reforma” del régimen actuó como catalizador de un consenso y unidad nuevos entre las fuerzas de la oposición en contra de tales planes y en demanda de una auténtica reforma política. A nadie se le ocultaba, además, que numerosos sectores que todavía formaban parte del régimen no estaban en absoluto satisfechos con la idea de que se les marginara, o se les marginara aún más. Finalmente, a esta oposición en el interior del país se sumaron las presiones exteriores, sobre todo estadounidenses, para que el régimen egipcio llevara a cabo una profunda reforma económica y política que, aunque de contornos no claros, sin duda no coincidía exactamente con la que aquel tenía en mente.

Ante todas estas presiones, que se manifestaron en todo su vigor en el año 2004, las altas instancias del régimen hubieron de reaccionar, tal vez improvisando. El pacto no confesado pero cierto con los Hermanos Musulmanes que les permitió participar sin trabas en la primera fase de las elecciones legislativas, fue sin duda resultado de que se unieran a la presión con sus manifestaciones en la primavera de 2005, en la antesala de la reelección presidencial de Hosni Mubarak, para la que se había dispuesto un nuevo sistema con cierta apariencia de competitividad.

Los cálculos de la nueva elite dirigente para las elecciones legislativas debían ser que liberando en gran medida su funcionamiento podían dar una auténtica apariencia de liberalización democrática, proceder a su remplazo de las subelites y consentir una importante presencia de los Hermanos Musulmanes en el Parlamento -limitada por el número de candidatos que presentaban- que, o bien mostrara a la comunidad internacional y a la propia población el “riesgo” de un triunfo islamista absoluto en caso de liberalización total, o bien ganara para el nuevo régimen el apoyo o el consentimiento político de la Hermandad, o bien ambas cosas. Sin que nos resulte posible saber cuáles eran las auténticas pretensiones del régimen, hay que señalar que la posibilidad de la búsqueda de una alianza entre los “reformistas” del PND -es decir, esencialmente la alta burguesía- y los Hermanos Musulmanes que sucediera a la antigua alianza entre la alta burguesía de la burocracia estatal y el Ejército era frecuentemente comentada en los círculos políticos egipcios. En este sentido, podemos considerar, aunque con prudencia, la “información” aportada por Mahdi Akef, guía supremo de la Hermandad, en su entrevista concedida a *Al-Masri al-Yaum* en octubre de 2009, ya citada anteriormente:

“En la tercera fase de las elecciones, alguien me llamó y me dijo que Ariel Sharon había telefonado a Georges Bush, quien a su vez había telefonado a Hosni Mubarak. «No vais a sacar ningún diputado en esta fase» -me dijo- cuando nosotros esperábamos sacar casi 50 diputados, habida cuenta de que competíamos en Charqiyya y Mansura, dos de nuestros feudos”.

Sin duda, no hay por qué dar crédito a esta información supuestamente obtenida de manera tan informal por una parte interesada, pero lo que resulta sorprendente es que Akef insinuara que lo que hizo que el régimen de Mubarak no permitiera sacar un mayor número de candidatos a la Hermandad fuera la presión israelí, y no otro tipo de consideraciones. Es decir, que diera a entender que el régimen pudiera concederle margen de poder mayor que el ya conseguido.

Fuera de todo esto lo que fuere, lo cierto es que quien definitivamente arruinó la estrategia de las altas esferas del régimen fueron, de manera concertada, de modo centralizado o no, sus “disidentes electorales”, quienes le habían dado su apoyo a lo largo de dos décadas y se resistían a que cambiara el *statu quo*, independientemente de que pretendieran simplemente defender sus visiones, intereses y/o ambiciones personales o una cierta estructura de poder.

5. CIERRE POLÍTICO TOTAL. LA CONTRARREFORMA DESLIBERALIZADORA (2006-2008)

5.1 REPRESALIAS CONTRA LOS CAUSANTES DE LA DERROTA DEL PND Y NUEVA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Poco después de concluir las elecciones legislativas de 2005, se hizo evidente que los nuevos vientos políticos soplaban más en la dirección de la tercera fase de aquellas que en la de las dos primeras. El 29 de diciembre Aimán Nur era condenado a cinco años de prisión en la causa por su supuesta falsificación de los avales para solicitar la autorización de su partido, Al-Gad. En enero de 2006, el “reformista” Gamal Mubarak pedía modificaciones en la legislación vigente que impidieran en el futuro el acceso al Parlamento de “quienes instrumentalizan la religión”. A continuación el Gobierno anunció que las siguientes elecciones locales, que debían celebrarse en abril de 2006, se aplazaban dos años. Hay que recordar que dichas elecciones habían adquirido una nueva importancia tras la enmienda del artículo 76 de la Constitución relativo a la elección presidencial, al establecer el nuevo texto el requisito del apoyo de un determinado número de miembros de los consejos locales a quienquiera que deseara ser candidato a la presidencia de la República (véase el capítulo V 4.1). Señalemos así mismo que los Hermanos Musulmanes ahora cumplían con el requisito establecido por el mismo artículo 76 de contar con el

apoyo de 65 diputados en el Parlamento para presentar un candidato.

En mayo de 2006, Ahmad Mekki y Hicham al-Bastawaisi, los dos jueces que habían dirigido la “revuelta” de los jueces contra la irrupción fraudulenta del régimen en el curso de las legislativas de 2005, y que habían acusado a algunos de sus colegas de colaborar con ella, eran llevados ante un tribunal disciplinario acusados de perder su imparcialidad y meterse en política. Un poco más tarde, en junio, se modificaría la legislación que regula el funcionamiento del Consejo Supremo del Poder Judicial, entre otras cosas a fin de que el Ministerio de Justicia pudiera controlar su órgano disciplinario.

Entre tanto, los Hermanos Musulmanes se habían enfrentado a una amplia campaña de detenciones que en marzo de 2007 que alcanzaría los 1.000 detenidos, a sumar a los ya arrestados durante las elecciones, y que incluirían a Essam al-Erián y varios hombres de negocios acusados de financiar la organización. Parte de ellos fueron llevados ante tribunales militares y las cuentas bancarias de la Hermandad congeladas⁵⁴.

Los otros culpables de la derrota electoral de los reformistas del PND también habían sido “represaliados”. En febrero de 2006, Hosni Mubarak, en su condición de presidente del PND, decretaba cambios fundamentales en la dirección del partido: destituyó a casi todos los altos cargos de la vieja guardia en su Secretaría General, y entre ellos a sus dos vicepresidentes, Kamal Chazli -acusado del fracaso en las legislativas- y Yusuf Wali. Tan solo Safwat al-Cherif permanecía como secretario general del partido, pero a su lado se situaban como vicesecretarios Zakariya Azmi, jefe de Gabinete de Hosni Mubarak, y el hijo del presidente, Gamal Mubarak.

En diciembre de 2006, Hosni Mubarak solicitó la reforma de 34 artículos de la Constitución. Lo más destacado de la reforma propuesta era que se retiraría de la Carta Magna la exigencia de que las elecciones fueran supervisadas por los jueces en todas sus fases, manteniendo estos el “control” sobre los comicios solo en las estaciones centrales de recuento (art. 88). Se trataba, pues, de una “contrarreforma” que devolvía la gestión de los procesos electorales a la situación anterior a 2000. Pero la reforma incluía también importantes restricciones de las libertades y derechos individuales, ya que autorizaba la intervención de la policía en los domicilios y las comunicaciones de todo tipo sin autorización judicial, y el procesamiento de civiles ante tribunales militares (art. 179), algo ya previsto por la Ley de Excepción vigente, pero que ahora adquiriría rango constitucional. Otra medida ya existente en las leyes que adquiriría este rango era la prohibición de constituir partidos “en base a la religión” (art. 5). Finalmente, el nuevo artículo 82 establecía que, en caso de que el presidente de la República no pudiera ejercer sus funciones temporalmente, lo harían el vicepresidente de la República -puesto inexistente desde hacía 27 años-, o el primer ministro⁵⁵. Como era de esperar, pronto comenzaron a

⁵⁴ La cifra es respecto al número de detenidos; el cálculo es de la organización con sede en Estados Unidos Human Rights Watch, citada en Gamal Essam El-Din: “Shura scramble”, *al-Ahram Weekly*, 7-13 de junio de 2007.

⁵⁵ Con la exclusión de tres competencias del Presidente que no eran trasladadas a su sustituto temporal:

circular las especulaciones acerca de si Hosni Mubarak nombraría en los próximos tiempos primer ministro a su hijo.

Pese a las protestas de casi toda la oposición dentro y fuera del Parlamento, de la sociedad civil y de gran parte de los jueces, manifestada a través de sus asociaciones profesionales⁵⁶, la reforma fue aprobada en marzo de 2007 en un referéndum celebrado sin la supervisión total de los jueces. Según los datos oficiales, participaron el 27% de los egipcios inscritos en el censo, cerca de 7 millones de 35, de los cuales un 75,9% votaron a favor de las enmiendas⁵⁷.

5.2 ASEGURANDO EL CONTROL DE GAMAL MUBARAK

Como se puede observar, las enmiendas constitucionales adoptadas en marzo de 2007 no modificaron el sistema de elección presidencial establecido por el artículo 76 adoptado en 2005, supuestamente orientado a una mayor apertura política. Por el contrario, tras dichas enmiendas, y a lo largo de 2007 y 2008, las más altas instancias del régimen (Hosni Mubarak, su hijo y sus allegados) se dedicaron a asegurarse el control de los órganos que, junto con el Parlamento, eran clave para controlar la designación de los candidatos a la presidencia del país: la Asamblea Consultiva y los Consejos Locales. Para ello hubieron de realizar una reforma completa de los órganos de dirección del partido gobernante, impuesta personalmente por Hosni Mubarak bajo una casi cómica pretensión de democratización, que resultó, además de en la marginación definitiva de la “vieja guardia” del régimen, en la habilitación de Gamal Mubarak como posible candidato a la presidencia de la República, candidatura a la que legalmente no podía acceder hasta el momento.

5.2.1 La renovación parcial de la Asamblea Consultiva

Tras la eliminación de la supervisión judicial efectiva sobre las elecciones, la situación estaba preparada para las elecciones a la segunda Cámara del país, la Asamblea Consultiva, que debían celebrarse en junio de 2007. Este órgano siempre había sido minusvalorado por la oposición, tanto por la escasa importancia de sus funciones como por las dificultades existentes para obtener escaños en él, mayores que en el Parlamento, y sobre todo para alcanzar una representación decisiva. De sus 264 miembros, 88 eran

proponer la modificación de la Constitución, disolver el Parlamento y cesar al Gobierno. Sobre el contenido de las enmiendas constitucionales puede consultarse Gamal Essam El-Din: “Winner takes all”, *Al-Ahram Weekly*, 22-28 de marzo de 2007.

⁵⁶ Mona El-Nahhas: “Judges to boycott referendum”, *Al-Ahram Weekly*, 22-28 de marzo de 2007.

⁵⁷ Gamal E. El-Din: “Purple fingers, black bands”, *Al-Ahram Weekly*, 29 de marzo-4 de abril de 2007.

designados por el presidente de la República -la mitad de ellos cada dos años-, y los otros 176 se elegían por mitades en comicios diferentes celebrados igualmente cada dos años -lo que daba tiempo a reaccionar al poder ejecutivo si no le agradaban los resultados de una renovación parcial-. Además, las circunscripciones electorales eran mucho mayores que en las elecciones al Parlamento, lo que exigía grandes recursos económicos y humanos para hacer campaña. Pese a las escasas funciones efectivas de la Asamblea Consultiva -una excepción sería el control de la prensa estatal-, su aprobación era sin embargo decisiva para algunas grandes decisiones políticas, como enmendar la Constitución u otorgar poderes especiales al presidente. En realidad, Hosni Mubarak la utilizaba casi exclusivamente como cerrojo de seguridad. No obstante, tras las reformas del artículo 76 de la Constitución en 2005 la Segunda Cámara había adquirido mayor importancia, pues bastaba el apoyo de tan solo 25 de sus diputados -junto a otros miembros del Parlamento y de los Consejos Locales, como hemos señalado- para avalar a un candidato a las elecciones presidenciales.

En las elecciones de junio de 2007 a la Asamblea Consultiva, el PND presentó unas candidaturas compuestas casi exclusivamente por representantes del sector “reformista”, excluyendo a la vieja guardia. Por su parte, los Hermanos Musulmanes anunciaron que presentarían 20 candidatos, tal vez pensando que al no poder obtener los 25 diputados que hipotéticamente hubieran podido avalar a un candidato presidencial suyo el régimen podría tolerar su triunfo en los comicios. No obstante, los resultados de estos dejaron pocas dudas acerca de cuál era el signo de la nueva era: 84 escaños para los candidatos oficiales del PND, 3 para independientes que se integrarían en él, y 1 para la oposición del partido Tagammu, que también obtendría un escaño de los 44 otorgados por designación presidencial para su secretario general, Rifaat al- Said⁵⁸.

5.2.2 La reforma del PND

Poco después de concluir las elecciones a la Asamblea Consultiva, la dirección del partido gobernante anunció que iba a continuar con la reforma de aquel, aplicando los nuevos estatutos adoptados tras su VIII Congreso, que establecían que los dirigentes del partido debían ser elegidos por sus miembros. En agosto de 2007 comenzó el proceso electoral, que, en palabras del secretario general del PND, Safwat al-Cherif, iba a “demostrar a los partidos de oposición que los dirigentes de los partidos podían ser elegidos de manera democrática”⁵⁹. En tres fases, de agosto a septiembre, los miembros del partido elegirían, según Al-Cherif, desde sus dirigentes en las más pequeñas agrupaciones de pueblo (150.000 puestos) hasta los principales a nivel estatal⁶⁰.

⁵⁸ Gamal Essam El-Din: “NDP cleans up”, *Al-Ahram Weekly*, 21-27 de junio de 2007.

⁵⁹ Gamal Essam El-Din: “Full steam ahead”, *Al-Ahram Weekly*, 2-8 de agosto de 2007.

⁶⁰ Sobre el conjunto del proceso de renovación de cargos del PND, véanse los reportajes de Gamal Essam El-Din en *Al-Ahram Weekly*: “NDP elections begin” (23-29 de agosto de 2007), “Democratic benchmark” (29

Poco después se precisó que de los 150.000 puestos de base, un 20% serían elegidos por miembros del partido pero de su dirección, con el argumento de que había que garantizar ese porcentaje de representación mínimo para los coptos y las mujeres. En cuanto al resto del proceso de elección de los representantes de la base, Al-Cherif anunció que habían participado en él cerca del 50% de los 2,2 millones de afiliados del PND, si bien hubo de reconocer que en algunos lugares no se había alcanzado el *quorum* del 30% necesario para dar validez a las elecciones. Una vez concluida la tercera fase se supo que los 28 jefes provinciales del partido serían designados por Hosni Mubarak. Por otro lado, según los estatutos correspondía también al presidente del partido nombrar a 8 de los 13 miembros de su Comité Ejecutivo, a su secretario general, a los tres vicesecretarios y a todos los miembros de la Secretaría General, así como a los secretarios de los otros 13 secretariados del partido.

Una vez concluidas las elecciones, el 4 de noviembre tuvo lugar el IX Congreso del partido, en el que Hosni Mubarak resultó elegido con el 99% de los votos de los delegados. Ese mismo día se añadieron a los estatutos tres nuevos artículos, uno de los cuales estipulaba que el candidato del PND a la Presidencia de la República sería elegido por y entre los miembros de un Consejo Supremo, nombrado por el presidente del partido, que se creaba en ese mismo acto y que a partir de entonces sería su máximo órgano directivo. La elección habría de ser ratificada por el 50% de los delegados en el congreso. Ese mismo día, Hosni Mubarak nombró a los 45 miembros del Consejo Supremo, entre los que se encontraba su hijo Gamal, que había declarado poco antes que “las elecciones han creado una nueva filosofía. A partir de ahora, la competición, y no las relaciones personales, serán el principal camino a los puestos dirigentes del PND”⁶¹. “Pero no el único” -le faltó añadir.

A partir de la creación del Consejo Supremo, y de su ingreso en él, Gamal Mubarak podía ser el candidato del partido a la presidencia de la República, algo que recordemos que antes no era posible, pues el artículo 76 de la Constitución establecía que los candidatos habían de presentarse o como independientes o en tanto que miembros del máximo órgano de gobierno de un partido. Con los cambios del IX Congreso Hosni Mubarak había incluido a la mayor parte de los pesos pesados de la “vieja guardia” en el que antes era el máximo órgano del partido, el Comité Ejecutivo, pero había privado a este de la mayor parte de sus prerrogativas a favor del Consejo Supremo.

5.2.3 Las elecciones a los Consejos Locales de 2008

La pieza que faltaba a la “nueva guardia” del PND dirigida por Gamal Mubarak

de agosto-5 de septiembre de 2007), “Polls apart” (20-26 de septiembre de 2007) y “Recasting the plot” (8-14 de noviembre de 2007).

⁶¹ Gamal E. El-Din: “Democratic Benchmark”, *Al-Ahram Weekly*, 29 agosto-5 septiembre de 2007.

para asegurarse el control estrecho de todas las cámaras de representación eran los Consejos Locales (municipales y regionales), cuyas elecciones se celebrarían en abril de 2008. Cabe recordar que estas habían sido aplazadas por decreto durante dos años, con el inequívoco fin de que entretanto las autoridades incrementaran su control de los Hermanos Musulmanes mediante la represión, al tiempo que la “nueva guardia” del PND hiciera lo propio sobre la estructura y los puestos de dirección locales del propio partido.

En las elecciones debían ser cubiertos cerca de 52.000 puestos electivos. Como sucedía con las elecciones a la Asamblea Consultiva, la oposición siempre había desdeñado la participación en estas elecciones, dada la dificultad de obtener escaños y las severas prerrogativas de control que las leyes daban al poder ejecutivo central sobre los consejos locales⁶². Así, en 2002 el PND había obtenido el 97% de los escaños en disputa, y en 2008 no iba a haber supervisión judicial de los comicios, como nunca la había habido. No obstante, dado que el artículo 76 de la Constitución daba a los electos la posibilidad de avalar a un candidato presidencial (recordemos que este necesitaba 10 avales de 14 consejos diferentes), los partidos de la oposición y los Hermanos Musulmanes anunciaron que, pese a todos los pesares, participarían en las elecciones. Desde el anuncio de la decisión de la Hermandad hasta la celebración de los comicios, en poco más de un mes, 850 de sus miembros fueron detenidos, entre ellos 187 anunciados como futuros candidatos. No obstante, la verdadera criba llegó a la hora de formalizar las candidaturas: según el guía supremo de la Hermandad, Mahdi Akef, de los 10.000 candidatos que aquella intentó registrar solo 5.754 reunieron los papeles necesarios para ello a causa de las trabas impuestas por la Administración, y solo a 498 se les permitió hacerlo. En cuanto a los partidos de la oposición y otras corrientes no legalizadas, entre las 22 existentes tan solo consiguieron registrar a 1.700 candidatos⁶³.

Por lo que respecta al PND, en esta ocasión su dirección evitó las sorpresas que pudieran acarrearle los posibles “disidentes electorales”. Según el secretario de Organización del partido, Ahmad Ezz, 82.000 militantes habían manifestado su deseo de ser candidatos oficiales. En esta ocasión, la dirección del partido gubernamental hizo todo lo necesario para que la inmensa mayoría de los 30.000 no seleccionados no pudieran presentarse como independientes. Para ello, la principal estratagema fue inscribir a todos los candidatos oficiales tan solo una hora antes de que se cerrara el plazo de inscripción, y asegurarse para ello la complicidad de la Administración. Finalmente, 44.000 candidatos del PND concurrieron a las elecciones sin adversarios, y obtuvieron el escaño directamente, mientras que la inmensa mayoría de los 8.000 que compitieron para los puestos restantes consiguieron también la victoria (99.5%)⁶⁴.

⁶² Para conocer estos poderes puede consultarse la declaración en la que la Organización Egipcia de Derechos Humanos anunciaba que no supervisaría las elecciones de 2008 por la falta de garantías de su limpieza y por la sujeción de los consejos al poder ejecutivo (“The elections of Local Councils. The Egyptian Organisation comment”, 9 de abril de 2008 (<http://www.eohr.org/press/2008/pr0409.shtml>), consulta del 10 de mayo de 2008).

⁶³ Gamal Essam El-Din: “No competition”, *Al-Ahram Weekly*, 20-26 de marzo de 2008.

⁶⁴ Gamal Essam El-Din: “Proud to win”, *Al-Ahram Weekly*, 24-30 de abril de 2008.

6. LA LIBERALIZACIÓN PREDATORIA Y LA EXPLOSIÓN DE LAS PROTESTAS LABORALES

Entre los años 2004 y 2008, mientras afrontaba la creciente contestación política con un movimiento pendular desde la máxima apertura al máximo cierre del sistema político formal, como hemos visto en las páginas anteriores, el régimen egipcio aceleró el ritmo de la liberalización económica, intensificando con ello algunos de sus rasgos, como la corrupción en las privatizaciones, la desigual imposición tributaria (que beneficiaba a las empresas en detrimento de los particulares), y la reducción de su gasto social. Pese a la mejora de las grandes cifras macroeconómicas, las condiciones de vida de la mayor parte de la población se deterioraron, y ello llevó a una explosión de las reivindicaciones laborales, que el régimen consintió, y ante las que cedió en cierta medida, renunciando a utilizar en parte la coerción -como había hecho en el pasado-, temeroso de no poder contener al mismo tiempo por tales medios las protestas laborales y a sus adversarios políticos.

6.1 LAS NUEVAS MEDIDAS DEL GOBIERNO DE NAZIF. CORRUPCIÓN Y SISTEMA IMPOSITIVO DESIGUALITARIO

Tras las elecciones legislativas de 2005, Egipto continuó avanzando por la senda de la liberalización económica. Nada más acabar los comicios, en el mismo mes de diciembre, Hosni Mubarak encargó de nuevo a Ahmad Nazif que formara Gobierno. En el nuevo ejecutivo, el número de hombres de negocios era de siete, frente a tres en el gobierno anterior.

Una de las prioridades de la política económica egipcia seguiría siendo impulsar las exportaciones. Anteriormente, el Gobierno había firmado diversos acuerdos económicos internacionales orientados en este sentido, como el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea firmado en 2001, o el de cooperación industrial y comercial a tres bandas firmado con Israel y Estados Unidos, según el cual Estados Unidos aceptaba la entrada en su territorio sin ningún tipo de cuotas ni derechos de aduanas los productos que fueran fabricados en las denominadas Zonas Industriales instaladas en territorio egipcio, a condición de que dichos productos fueran fabricados con un 35% de componentes hechos en Israel.

Con la promesa, además, de la futura firma de un tratado de libre comercio entre Egipto y Estados Unidos, la Administración norteamericana lograba que por primera vez en más de 50 años Egipto aceptara establecer relaciones económicas con su antiguo enemigo, algo que ningún Gobierno egipcio había osado siquiera insinuar por miedo a las reacciones internas. De hecho, el acuerdo, que en un hecho sin precedentes fue negociado

por una serie de hombres de negocios no pertenecientes al Gobierno, pero con “estrechas relaciones con Estados Unidos e Israel” (Informe CEPEA 2005 en النجار 2005: 341), no fue expuesto a la ratificación del Parlamento, como deben serlo los acuerdos internacionales. Ambos hechos -el que se encargara la negociación a particulares privados, y que se sustrajera el acuerdo a la aprobación parlamentaria- constituyeron, según el Informe del CEPEA, “una clara muestra de las relaciones del Gobierno con el mundo de los negocios y de las concepciones de parte de este acerca de la gestión de las relaciones económicas exteriores”. Para más inri de las fuerzas políticas de oposición, contrarias en su mayoría a la “normalización” de las relaciones con Israel, el acuerdo fue firmado pocos días después de que un tanque israelí disparara, según el Informe de forma deliberada, contra un grupo de soldados egipcios que se encontraban en Rafah, junto a la frontera entre ambos países, causando la muerte a tres de ellos. Obsérvese, por otro lado, el muy crítico tono de los redactores del informe de esta institución académica dependiente del Estado, en línea con el creciente malestar de la *intelligentsia* con la evolución del régimen político, detectable desde 1999 -en contraposición a años anteriores- y ya señalado⁶⁵.

Según el portavoz de los Hermanos Musulmanes, Essam al-Erián, el desarrollo de las relaciones económicas del Gobierno egipcio con Israel fue una de las principales causas de que Estados Unidos redujera desde la primera mitad de 2005 sus críticas al régimen egipcio y sus demandas de que se democratizara. Es más, en opinión de Al-Erián la principal preocupación de Washington, y el objeto de sus presiones hasta principios de 2005, habría sido, antes que la democratización del país, que el régimen aupara al poder “a la nueva generación de tecnócratas y empresarios que están inclinados por naturaleza a identificarse con los puntos de vista norteamericanos”, tanto en política económica como regional (Iraq, Líbano, Siria, Israel)⁶⁶.

Otra de las prioridades económicas de los gobiernos de Nazif fue avanzar, hasta casi concluir, la política de privatizaciones. Esta fue llevada a cabo desde su llegada al Gobierno en junio de 2004 entre frecuentes acusaciones de corrupción, según las cuales el Ejecutivo liquidaba los haberes del Estado a precios muy inferiores a los reales, en beneficio de personajes próximos a los ministros. En 2006 tales acusaciones alcanzaron su apogeo, tras las privatizaciones llevadas a cabo en ese año. El informe económico anual del CEPEA (النجار 2006: 301-315) no tuvo reparos en constatar que, efectivamente, la mayor parte de las acusaciones estaban fundadas.

Finalmente, queda por señalar el tercer gran eje de la política económica de los Gobiernos de Ahmad Nazif, que se mantendría en el cargo de primer ministro hasta el 29 de enero de 2011: su política impositiva. A pesar de la introducción del impuesto del IVA en dos fases, en 1991 y 2001, la recaudación por impuestos indirectos del Estado egipcio seguía siendo muy baja, como hemos señalado en el capítulo V 2.1. Además, el sistema de

⁶⁵ Véanse capítulos IV 8.6 y V 3.3.

⁶⁶ Essam El-Erian: “Dodging political landmines”, *Al-Ahram Weekly*, 1-7 de marzo de 2006.

impuesto sobre la renta era ineficaz, no tanto por los tipos aplicados como por la gran dimensión del fraude por parte de las empresas y de los comerciantes y profesionales. Presuntamente para resolver esta situación, el Gobierno egipcio adoptó en 2005, tras muchos titubeos, la que Soliman llama “la fórmula mágica del neoclasicismo económico”: “para incrementar los ingresos por impuestos hay que bajar los impuestos”. Así, el tipo impositivo del 40% a los beneficios comerciales fue reducido al 20%, mientras que el 32% aplicado a las manufacturas y exportaciones pasaba al 30% (Soliman 2011: 109-125); en cuanto al IRPF, el tipo mínimo se establecía en el 10% a partir de 5.000 LE anuales (917\$), y el máximo, a partir de 40.000 LE (7.340\$), solo en el 20% (ICEX 2010).

El efecto del conjunto de las reformas fiscales fue que, efectivamente, Egipto incrementó su recaudación fiscal, concretamente en un 330% entre 2002 y 2009. Sin embargo, en 2009 un 60% del montante de los impuestos era pagado por los ciudadanos particulares a través de 29 tipos de impuestos, y de ellos un 29% lo soportaban los asalariados y funcionarios, mientras que las empresas aportaban tan solo el 13,2% del total (ICEX 2010). Se completaba el proceso que Soliman (2011: 97-139) denomina “el paso del Estado rentista al Estado depredador”.

6.2 CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EMPOBRECIMIENTO

Tras los primeros años de los Gobiernos de Nazif, los datos oficiales del Gobierno egipcio apuntaban una sustancial mejora macroeconómica. El PIB creció a una media del 7% entre 2006 y 2008, y la deuda pública se redujo en un tercio entre 2004 y 2009, hasta situarse en un 76% del PIB (Rodenbeck 2010: 7). No obstante, los ingresos medios reales de los asalariados -teniendo en cuenta la inflación- habían descendido un 7% entre 1988 y 2006, siendo la evolución de las pensiones aun peor, pues tan solo entre 2004 y 2008 se redujeron en un 22%, igualmente en términos reales (Clément 2011: 610-611). Según Barreñada (2011: 265) citando fuentes de la OIT, entre 2005-2010 Egipto “fue uno de los países en que más se deterioró el valor real del salario mínimo y del salario medio en los últimos años”. A ello se añadió el incremento de las franquicias pagadas por los servicios educativos y de salud públicos, la disminución de las subvenciones a productos básicos (pan, gas, electricidad, agua y transporte), y, en 2008, el fuerte alza de los precios de los alimentos en los mercados internacionales, que hicieron que la inflación llegara al 20% (ICEX 2010).

La distribución de la riqueza era manifiestamente desigual. La participación de los salarios en el valor añadido, que había descendido del 40% al 25% entre 1975 y 1995, había aumentado solo hasta el 30% en 2007, mientras que entre 1995 y 2007 la parte de los beneficios en él había pasado del 37% al 40%. Así, en 2007, según el Banco Mundial, Egipto contaba con una tasa de pobreza absoluta del 45% (medida mediante el umbral de 2

dólares de diarios de ingresos *per cápita*) (Clément 2011: 611, 615).

6.3 EXPLOSIÓN DE LAS PROTESTAS LABORALES (2004-2008)

El avance de la política de privatizaciones y el deterioro general de las condiciones de vida se tradujeron en un gran aumento de las protestas laborales. La media anual de dichas protestas, que había sido de 27 entre 1988 y 1993, pasó a ser de 118 entre 1998 y 2003, y dio un nuevo salto exponencial en 2004, cuando se produjeron 265 protestas, el 70% de ellas en la segunda mitad del año, después que se formara el primer “gobierno de hombres de negocios” de Nazif (Beinin 2008). Se trataba de una oleada de protestas sin parangón desde los tiempos del protectorado británico que, sin embargo, no había hecho más que empezar. Tras estabilizarse el número de acciones en 2006, con “tan solo” 220, en 2007 se produjo un nuevo salto cuantitativo, al contabilizarse 580. Y tan solo en la primera semana de 2008 fueron 27 las acciones emprendidas (Beinin 2008).

Pero tan importante como el incremento cuantitativo del número de protestas laborales fue su evolución cualitativa, que sería determinante en los acontecimientos revolucionarios de 2011 (Barreñada 2013). Recordemos que en el pasado, en los años 80 y 90, las protestas laborales, prohibidas por la Ley de Excepción, quedaron confinadas en su mayoría al ámbito del sector público, sobre todo en el de los trabajadores industriales, y en particular en el sector textil, al ser sectores donde la concentración de trabajadores era más importante, y donde había una mayor tradición sindical combativa. Sin embargo, a partir de 2004 las huelgas se extendieron por el sector privado y el resto de los sectores de empleo estatal, desafiando igualmente su prohibición en la práctica, pues aunque desde la aprobación la Ley Unificada del Trabajo en 2003 el derecho a la huelga había quedado reconocido sobre el papel, las convocatorias debían contar con la aprobación de la jerarquía del sindicato único, la FGSTE, que no se dio en ningún caso. En 2004, cerca del 25% de las protestas se produjeron en el sector privado industrial, y en 2007 y 2008 se extendieron a los trabajadores de los transportes, del metro de El Cairo, del sector de la construcción, del procesamiento de alimentos y del petróleo, a los panaderos, a los recolectores de impuestos, a los de los servicios sanitarios (incluidos los médicos) y a la enseñanza, entre otros. El Centro de Servicios Sindicales y Obreros estimó que entre 2006 y principios de 2008 participaron en protestas laborales entre 300.000 y 500.000 trabajadores (Beinin 2008).

En la evolución del movimiento laboral desde 2007 desempeñaron un papel fundamental, una vez más, como en el pasado, los trabajadores del textil de Mahala al-Kubra desde diciembre de 2006 (véanse los capítulos III 3.4 y IV 7.1). Desde principios del siglo XXI, a pesar del goteo creciente de protestas, no se habían producido acciones colectivas en las grandes empresas, ni en las públicas ni en las privadas, hasta que la

huelga en la empresa pública Egipto de Hilado y Tejido, de la localidad mencionada, cambió el signo de las protestas.

Egipto de Hilado y Tejido era una de las pocas empresas públicas que quedaban, lo que se debía, sin duda alguna, al número de sus trabajadores, 24.000, que hacían de esta ciudad un feudo de la clase obrera, rodeado además de otras ciudades del mismo perfil socio-económico y sectorial. Sus trabajadores, aunque todavía relativamente privilegiados frente a los del sector privado gracias a la duración de por vida de sus contratos y otros beneficios, se alzaron en diciembre de 2006. A pesar de que, como de costumbre, no contaban con el apoyo ni la colaboración de sus representantes sindicales oficiales, el Gobierno, como había hecho a lo largo de los años 80 y 90, acabó cediendo a gran parte de sus reivindicaciones, en este caso sin recurrir a la violencia. No obstante, tras la conclusión de la protesta, los huelguistas dieron un paso sin precedentes: 12.000 trabajadores firmaron una carta dirigida a la dirección de la federación del sindicato único, la FGSTE, en la que exigían que el Comité de Empresa, que era “cliente” de la dirección de la FGSTE, dimitiera. En caso contrario, los trabajadores cancelarían, según amenazaban, su afiliación al sindicato, a pesar de que esta era obligatoria por ley para los trabajadores públicos. Ante la negativa obtenida de la dirección sindical, a principios de marzo 6.000 trabajadores se habían dado de baja en el sindicato (Beinin & El-Hamalawy 2007). Pese a que los trabajadores desde los años 70 se habían quejado frecuentemente de la inoperancia o falta de voluntad de sus representantes oficiales a la hora de defender sus derechos, nunca habían formalizado tal queja, y menos estampando su firma en un documento que los señalaba ante las fuerzas de seguridad.

La “transigencia” del régimen con los trabajadores de Mahala al-Kubra, derivada en gran parte de su debilidad política, además de la determinación de los obreros, iba a resultar fatal. Como vimos en los capítulos citados unas líneas más arriba, desde mediados de los años 80 los directores de las empresas del sector público sistemáticamente retrasaban, reducían u obviaban el pago de los complementos salariales variables de los trabajadores, y ante las ocasionales protestas de los trabajadores las autoridades contestaban con una mezcla de represión, represalias a los líderes obreros alternativos y concesiones a los trabajadores, en una estrategia reiterada que en la mayor parte de los casos había llevado al desistimiento de aquellos. Sin embargo, ante el ejemplo de los trabajadores de Egipto de Hilado y Tejido de Mahala al-Kubra, en los tres meses siguientes a diciembre de 2006, 30.000 trabajadores de otras empresas textiles del Delta del Nilo y Alejandría reclamaron un trato semejante al recibido por aquellos, consiguiéndolo, y algunos de ellos adoptaron la misma iniciativa que ellos respecto a sus comités de empresa. A lo largo de 2007, los trabajadores de los ferrocarriles, los conductores de metro, los de microbuses, los basureros, los del sector sanitario fueron así mismo a la huelga, obteniendo beneficios en casi todos los casos (Beinin & El-Hamalawy 2007; Beinin 2008).

La huelga de los trabajadores en las agencias tributarias dependientes de las

administraciones locales, que pedían la equiparación de sus condiciones laborales con las de los empleados directamente por el Ministerio de Hacienda, fue otro hito de la lucha por los derechos laborales. Fue secundada por 55.000 trabajadores, que tras varios meses de manifestaciones, iniciadas en la primavera de 2007, vieron satisfechas sus demandas y, lo que es más importante, constituyeron el primer sindicato independiente que sería autorizado desde 1952, el Sindicato General Independiente de Trabajadores de las Agencias Tributarias para los Bienes Inmuebles, dirigido por Kamal Abu Aita y autorizado en 2009 (Beinin 2012).

7. TRABAJADORES Y JÓVENES ROMPEN CON LAS ATADURAS POLÍTICAS TRADICIONALES

7.1 LA CONFLUENCIA ENTRE LOS MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y LABORALES

A finales de 2006, la fórmula *Kifaya* se había agotado como aglutinadora de las fuerzas de oposición al régimen político. Abandonada por los Hermanos Musulmanes, primero por estrategia tras sus pactos con el régimen ante las elecciones presidenciales y legislativas de 2005, y luego empujados por la represión de aquel, le faltaba anclaje y apoyo popular. No obstante, los mimbres y el espíritu del “movimiento por el cambio” seguían vivos.

A partir de 2007, los sectores izquierdistas que habían animado dicho movimiento, como los Jóvenes Socialistas Revolucionarios de inspiración trotskistas, el partido naserista Karama, y los restos del Partido Comunista Egipcio y Partido Socialista del Pueblo, redoblaron sus esfuerzos de siempre para lograr establecer una cooperación estrecha con los trabajadores y sus movimientos sindicales alternativos y promover la formación de un sindicato independiente a nivel estatal. Dos organizaciones estrechamente relacionadas con las fuerzas mencionadas y dirigidas por sindicalistas de larga trayectoria, el Centro de Servicios Sindicales y Obreros y el Comité de Coordinación para los Servicios Sindicales y Obreros (véase el capítulo IV 8.5), dirigidos respectivamente por Kamal Abbás y Saber Barakat lideraban tales esfuerzos.

El poder constituido no era ajeno a las intenciones de estas fuerzas políticas, ni minusvaloraba el riesgo de que fructificaran en el contexto de la gran oleada de descontento manifestada por los trabajadores. A principios de 1997, poco después de que los trabajadores del textil de Kafr al-Dawwar obtuvieran satisfacción de sus demandas tras realizar una huelga recogiendo el testigo de los de Mahala al-Kubra, en las fábricas de la primera localidad citada se distribuyeron panfletos firmados por “los trabajadores por el cambio de Kafr al-Dawwar” en los que se llamaba a “extender la coordinación entre los

trabajadores de las empresas que han participado en huelgas para crear lazos de solidaridad e intercambiar experiencias”. Los líderes de la huelga de Kafr al-Dawwar, sin embargo, como muchos de otras protestas, nunca habían pertenecido a partidos políticos, a los que miraban con cierta desconfianza (Beinin & El-Hamalawy 2007). A raíz de evoluciones como esta, las autoridades decidieron cerrar en 2007 la sede del Centro de Servicios Sindicales y Obreros, y dificultar mediante la presión policial sus actividades tras haberlas consentido durante diez años. Pocos meses después, sin embargo, los trabajadores de Mahala al-Kubra desempeñaron, una vez más, un papel clave en romper los viejos esquemas, al organizar en noviembre una serie de encuentros con trabajadores de todos los sectores económicos con vistas a organizar un sindicato independiente.

A finales de marzo de 2008 se produjo un salto cualitativo en los esfuerzos de unión de los diversos sectores de la oposición al régimen egipcio, cuando representantes de los trabajadores de Mahala al-Kubra participaron en el llamado Sexto Foro Social de El Cairo, un evento organizado en esta ocasión en colaboración entre trotskistas, naseristas y miembros de los Hermanos Musulmanes, sobre todo jóvenes, en el que también participaron otras corrientes políticas. El acercamiento entre estos sectores, iniciado tímidamente a principios de siglo a instancias de los jóvenes trotskistas de la “nueva izquierda” (véase el capítulo V 1.1), y que había avanzado con muchas dificultades por las propias reticencias de los jóvenes islamistas y sobre todo por las consignas que recibían de la dirección de la Hermandad, era ya una realidad consolidada. El encuentro resultaba también novedoso porque en raras ocasiones los Hermanos Musulmanes habían intentado seriamente ganarse el favor de los trabajadores, pues contaban entre ellos con muchos grandes y pequeños empresarios, y tenían una visión liberal en economía, y conservadora y paternalista en lo que toca a las relaciones laborales; lo que por otro lado había hecho que los trabajadores fueran impermeables a sus escasos intentos.

De las reuniones del Sexto Foro Social de El Cairo los trabajadores de Mahala al-Kubra salieron con un proyecto que desbordaba el carácter sectorial o propio de sus anteriores reivindicaciones: la convocatoria de una huelga para los días 6 y 7 de abril de 2008 en demanda de una subida del salario mínimo hasta las 1.200 LE (218 dólares). La petición de la subida del salario mínimo, que desde los años 80 se encontraba establecido en 40 libras egipcias para los trabajadores no cualificados, había sido elevada desde diversos sectores políticos y laborales en los dos años anteriores, pero nunca se había convocado una huelga que tuviera por fin solicitarlo (Cole 2015: 98-99). Volveremos sobre esta convocatoria de huelga un poco más adelante.

7.2 LOS “JÓVENES” DESEMBARCAN EN EL ESPACIO PÚBLICO DESDE EL CIBERESPACIO

Como ya hemos señalado, en la segunda mitad de los 90 la extensión de los canales de televisión por satélite, y la más lenta de internet entre la población en general, introdujeron una ruptura en el control de los medios de información y comunicación por parte de las autoridades egipcias, a la que estos debieron reaccionar autorizando selectivamente primero medios de prensa escrita, y luego en 2001 un primer canal de televisión privado, tras lanzar el gobierno egipcio su propio satélite, *Nilesat* (véanse los capítulos IV 8.2 y V 3.1).

Aunque la mayor parte de dichos medios pertenecían a hombres de negocios afines o no hostiles al régimen político a los que el régimen político quería dar cauces de expresión al compás de la liberalización económica y del aumento de la influencia política de la alta burguesía, algunos de ellos, como el diario *Al-Masri al-Yaum*, nacido en 2004, introdujeron en el panorama mediático egipcio grados de profesionalidad y objetividad hasta entonces desconocidos. *Al-Masri al-Yaum* nació en junio de 2004 financiado por los hombres de negocios Naguib Sawiris, Salah Diab y Ahmad Bahgat (también propietario de Dream TV y del círculo de Gamal Mubarak), que pusieron el periódico en manos de Hicham Qasem, quien anteriormente había editado *Cairo Times* -abundantemente citado en estas páginas- con gran éxito a pesar de tratarse de un semanario en inglés, por su cobertura independiente, objetiva y crítica de los acontecimientos, que le valió ser secuestrado varias veces en su edición en papel. Qasem contrató para *Al-Misri al-Yaum* a jóvenes licenciados altamente cualificados y se aseguró de que tuvieran buenas remuneraciones. El periódico, que comenzó con una tirada de 3.000 ejemplares, alcanzó los 30.000 durante las elecciones legislativas de 2005 gracias a sus reiteradas y ponderadas informaciones acerca del fraude electoral. En 2009 llegaría a los 200.000 ejemplares, ya sin la dirección de Qasem, que la abandonó en 2009. En 2007 había en Egipto 58 medios de prensa privados, que se sumaban a la prensa estatal y de partidos (Klaus 2011: 955), a los que en 2009 se uniría una nueva televisión privada, ONTV, cuyo principal propietario también era el multimillonario hombre de negocios Naguib Sawiris.

La constante expansión, por oleadas, de los medios de información en época de Mubarak, y en paralelo de la libertad de expresión, no deja de sorprender cuando se contrapone a sus recurrentes cierres del sistema político, y solo puede entenderse a la luz del esencial componente *churocrático* del “régimen de gestión política” seguido por el poder constituido, al que hemos hecho referencia, entre otros lugares, en las Conclusiones de los capítulos II, III y IV. No obstante, el modelo *churocrático* operaba mediante una selección de las elites que podían opinar en los medios, selección que no solo era realizada por el poder constituido sino también por las elites (incluidas las “contraelites” o “elites de oposición”) ya instaladas en ellos. De ahí que la proliferación de los periódicos y la

apertura del diafragma de las cámaras de televisión no hubiera modificado sustancialmente el objetivo y el enfoque de dichos medios, a pesar de casos como el de *Al-Masri al-Yaum*: si el escenario político y público egipcio aparecía como esencialmente gerontocrático, ello se debía a que los personajes “autorizados” que lo dominaban eran muy mayores, pero también a la mirada que los medios de comunicación convencionales arrojaban sobre dicho escenario. Las figuras políticas requeridas en los medios eran “las de siempre”: figuras históricas, a menudo de avanzada edad, que representaban a las corrientes políticas formal o informalmente “institucionalizadas”, pero nunca jóvenes.

Desde mediados de la primera década del siglo XXI, sin embargo, a la expansión exponencial del uso de internet y de la creación de *blogs*, le acompañó la proliferación en estos del activismo político –o la “ciberdisidencia”, como la llama Guaaybess (2011: 949)- y del “periodismo ciudadano”. Las acciones de Kifaya! en 2004 fueron de las primeras en ser anunciadas y cubiertas por los blogueros. Poco después, en febrero de 2005, apareció el blog de Wael Abbás, uno de los pioneros y más conocidos, que llevaba la ilustradora denominación de *La conciencia egipcia* (الوعي المصري). A las fotos y videos de las manifestaciones de Kifaya!, se unieron pronto reportajes y noticias sobre acontecimientos políticos y sociales. Ante las elecciones presidenciales de 2005 nació, para controlar su desarrollo, la página en internet *Shayfeenkom* (“Os vemos”, en árabe dialectal egipcio), que aún se define como “el primer movimiento de control popular”⁶⁷.

Gran parte de los nuevos blogs y páginas en internet, como <http://tortureinegypt.net/>, nacieron para denunciar específicamente la tortura, pero los activistas también difundían sus denuncias en *Youtube*. En mayo de 2005, fueron difundidas en la Red imágenes de la policía maltratando y agrediendo sexualmente a una periodista tras una manifestación de Kifaya! En 2006 lo fue un vídeo en el que dos agentes de policía torturaban a un conductor de autobús. La prensa de la oposición reprodujo estas imágenes, y los agentes -algo excepcional- fueron detenidos con celeridad. Desde la detención de Karim Amer en noviembre de 2006, primera de un bloguero, el régimen egipcio recurrió cada vez más al hostigamiento de los ciberactivistas y ciberperiodistas para intentar frenar la oleada de contestación política en la Red que el nuevo cierre político decretado casi un año antes no había hecho más que incrementar (Klaus 2011: 958-969).

La blogosfera y las redes sociales sacaron a la luz pública dinámicas que venían gestándose desde finales del siglo XX, empujadas por un actor político largo tiempo relegado: la juventud (véanse los capítulos IV 8.6 y V 1.1). Pero “la juventud”, en Egipto, como señala Assia Boutaleb (2011: 741) guiándose por los discursos y los programas de los políticos egipcios, es un concepto que abarca a las personas entre 15 y 40 años, y en 2006 tan solo la franja de 15 a 29 años constituía el 32% de la población (frente al 27% en 1988), el 48,9% de los cuales se encontraban en paro, constituyendo el 83% de todos los

⁶⁷ <http://www.shayfeencom.org/>.

parados, mientras que el 86% de estos eran titulares de un diploma secundario técnico, postsecundario o universitario (Amer 2011: 750-756). No obstante, la juventud constituía - en palabras de Boutaleb- “una categoría emergente”, más aún que por su número y su cualificación, porque ya no se “reconocía” en lo que la autora llama “las legitimidades de origen” (Boutaleb 2011: 731). Esta expresión es un trasunto terminológico del rechazo manifiesto, señalado en diversos lugares de este capítulo V, de los jóvenes a la sumisión a las restricciones de origen histórico e ideológico que limitaban la acción política de sus padres, tanto frente al poder constituido o el régimen -identificado a menudo con el Estado-, como en las relaciones entre las diversas corrientes ideológicas y grupos políticos organizados.

7.3 LA EXITOSA HUELGA GENERAL VIRTUAL DEL 6 DE ABRIL DE 2008

Tras decidir a finales de marzo de 2008 realizar una huelga los días 6 y 7 de abril para solicitar la subida del salario mínimo, como hemos mencionado un poco más arriba (capítulo V 6.3) los trabajadores de Mahala al-Kubra llamaron a la población egipcia en general a apoyar su acción. Ya contaban con el apoyo de los grupos de izquierdas, y en principio, se suponía, con el de los Hermanos Musulmanes, con los que habían participado en el Sexto Foro Social de El Cairo. Diversos jóvenes del Movimiento de Jóvenes por el Cambio, no necesariamente identificado con ninguna corriente ideológica, entre los que destacaban Ahmad Maher e Israa Abdel Fattah -esta sí miembro del partido Al-Gad de Aimán Nur-, decidieron convocar una huelga general a través de internet en apoyo de los trabajadores. Abdel Fattah abrió un grupo en *Facebook* a tal efecto, que en pocos días contaría con 20.000 miembros, y más adelante llegaría a los 70.000, alumbrando el que a partir de entonces se denominaría Movimiento de los Jóvenes del 6 de Abril o Movimiento 6 de Abril.

En los dos días anteriores, los Hermanos Musulmanes anunciaron que no apoyarían la huelga, provocando la irritación de muchos de sus jóvenes miembros. Uno de estos, el bloguero Abdel Rahmán Rachwán, señalaba el 4 de abril en el blog *Islam Youth*, que la dirección de la Hermandad prefería centrarse en las elecciones a los Consejos Locales, a celebrar poco después, y se preguntaba cuál era la mejor manera de oponerse al Gobierno: ¿una protesta de masas o conseguir algunos escaños en dichos consejos?. “Quizás -decía- el cambio vendrá de un lugar inesperado. Quizás empiece con los trabajadores, y no con

nosotros”⁶⁸.

Ante la evidencia del ambiente favorable a la protesta que se había creado, el Gobierno reaccionó deteniendo a sus convocantes en internet (entre ellos Israa Abdel Fattah), amenazando en todos sus medios a quienes quebrantaran el orden público, y anunciando un gran despliegue policial para el 6 de abril. La convocatoria de huelga fue un éxito simbólico, a pesar de que las manifestaciones, fuera de Mahala al-Kubra, fueron escasas y poco numerosas: las calles y los centros de trabajo amanecieron ese día inusualmente despoblados, probablemente más por miedo a los disturbios y la respuesta a estos anunciada por el Gobierno que porque el llamamiento hubiera calado en la mayoría de la sociedad egipcia hasta el punto de que estuviera dispuesta a participar activamente en la protesta. En Mahala al-Kubra la situación fue diferente: según pudo verse en un vídeo difundido por el canal Al-Jazeera, una gran multitud, compuesta mayoritariamente por jóvenes, salió a las calles gritando contra Hosni Mubarak. En el video se veía una gran imagen del presidente colgada en un poste en medio de una plaza, y a la multitud arrojándole piedras. La policía intervino, y recibió una lluvia de piedras a la que respondió con el lanzamiento de gases lacrimógenos, balas de goma y fuego real. Dos manifestantes resultaron muertos.

8. UN ESTADO POLICIAL

A partir el 6 de abril de 2008 el Estado egipcio se convertiría en poco tiempo en un Estado policial, algo que no había sido durante el mandato de Mubarak, a pesar de sus ocasionales derivas depresivas. Una de las últimas concesiones del Gobierno, o una de sus últimas muestras de flexibilidad, fue elevar en el mismo 2008 el salario mínimo de 40 LE a 108,50 LE, frente a las 1.200 LE que pedían los trabajadores y la oposición política, lo que no logró evitar que las protestas laborales se mantuvieran.

Según Mariz Tadros (2012: 20-22), que recoge la opinión generalizada de los egipcios, la deriva definitiva hacia el Estado policial se produjo a partir de mayo de 2009, cuando Hosni Mubarak, ya de muy avanzada edad, dejó de interesarse por el gobierno del país, en gran parte a raíz de la trágica muerte de uno de sus nietos, al que se sentía especialmente ligado, hijo de Alaa Mubarak. A partir de entonces, el Gobierno fue dirigido por su hijo Gamal Mubarak, y el Estado en su mayor medida por el Servicio de Seguridad del Estado (مباحث أمن الدولة SSE), encargado de la seguridad interna y auxiliado por los Servicios Generales de Inteligencia (SGI), encargados de la inteligencia exterior pero que también estaban activos en el interior, dirigidos por Omar Soleimán. Como señala Tadroz, el SSE intensificó su labor en terrenos que nunca había abandonado, pero en los que había

⁶⁸ Abdel Rahmán Rachwán: “Limadha la nusharik fi idrab 6 abril?”, *Ikhwan Youth*, 4 de abril de 2008: <http://ikhwanyouth.blogspot.com/2008/04/6.html>. Citado por Cole (2015: 100).

estado supeditado durante mucho tiempo a una dirección política: acoso a los adversarios del régimen, infiltración en las filas de la oposición, negociación directa con los descontentos, mediación entre trabajadores y empresarios, supervisión de las candidaturas a las elecciones estudiantiles, sindicales y parlamentarias... haciendo avanzar sus propios intereses hasta llegar a controlar todos los aspectos de la vida política y pública excepto el Ministerio de Defensa.

La autora se hace eco así mismo de los rumores que afirmaban que el ministro de Defensa y Jefe del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), Mohammed Husein Tantawi, estaba contra la hegemonía política de Gamal Mubarak y quería desplazarlo del poder, y cómo el paso del mando de la Guardia Republicana del Ejército al control directo de la Presidencia de la República en 2009 habría podido responder a las suspicacias de aquella frente al alto mando militar. Por último, Tadros (2012: 26) señala que Gamal Hechmat, diputado de los HHMM, criticó en un artículo -de la que la autora no da la referencia-, al Ejército y la Policía por someterse al nuevo régimen político, y afirmó que la Hermandad se sometería al Ejército si este se desembarazaba de los Mubarak, al tiempo que le llamaba a organizar un diálogo con las fuerzas de la oposición.

8.1 EL ASESINATO DE JALED SAID: LA GOTA QUE COLMA EL VASO

A principios de 2010 la animosidad contra el régimen egipcio estaba bastante exacerbada entre numerosos sectores de la sociedad, en particular por los casos de brutalidad policial y de injusticia social. Entre los jóvenes urbanos, tal animosidad había trascendido los medios educados y de clase media y media alta, y se había extendido a los jóvenes trabajadores, como se manifestaba en la violencia con la que los grupos ultra de aficionados de los clubes de fútbol, un fenómeno aparecido en Egipto en 2007, se enfrentaban a la policía. No obstante, cuando a comienzos de enero de 2010, Asmaa Mahfuz, cofundadora del Movimiento 6 de Abril, expuso en internet fotos de prisioneros torturados por la policía y propuso convocar una manifestación contra aquella para el 25 de enero, Día de la Policía, su llamada no fue escuchada.

Los casos de brutalidad policial y torturas se sucedieron a lo largo del año, hasta que uno, con toda probabilidad, colmó el vaso de la tolerancia social hacia el régimen de Mubarak: el de la tortura y asesinato de Jaled Said el 6 de julio de 2010. En un bello texto escrito tres días después, repleto de referencias históricas a los momentos y las causas por las que el pueblo egipcio se había levantado, Amor Ali, un vecino de Jaled Said, vino poco menos que a pronosticar la caída del régimen a raíz del asesinato del joven (Ali 2010).

Jaled Said, un joven de Alejandría sin filiación política conocida colgó en *Youtube* un vídeo que recogía una venta de droga por unos agentes de policía. Poco después, el 6 de junio de 2010, fue detenido por dos de ellos y golpeado violentamente en plena calle hasta

la muerte. Las fotos de Said con el rostro completamente desfigurado, facilitadas por la familia, tardaron poco en circular masivamente por internet, y en ocupar un lugar principal en las cabeceras de muchos blogs.

En la difusión de la suerte de Said desempeñaría un papel principal la página de *Facebook* creada, bajo el título de *Todos somos Jaled Said*, por Wael Gonayem, un ejecutivo de Google. La página generaría un nuevo grupo organizado que tendría un papel destacado en la agitación política desde entonces, junto al Movimiento de los Jóvenes 6 de Abril. La indescriptible comparación del cuerpo de Said antes y después del linchamiento removi6 los est6magos y las conciencias de muchos egipcios poco o nada “politizados”, fortaleciendo la creciente conciencia de unidad frente al r6gimen: el car6cter no politizado ni de Said ni del conjunto del caso sirvi6 para que se reconocieran en 6l todas las capas de la sociedad. El acertado lema creado por Gonayem anticipar6 en 6 meses la expresi6n de rechazo un6nime de quienes hab6an sufrido en sus carnes o en las de sus pr6ximos las sevicias de la polic6a durante d6cadas, y con particular intensidad en los a6os previos.

A lo largo de julio y agosto, las protestas por la muerte de Said adoptaron una forma nueva para intentar evitar la represi6n de la polic6a: marchas silenciosas de hombres, mujeres y ni6os, en su mayor6a de negro, por las *corniches* del mar de Alejandr6a, o del Nilo en El Cairo u otras ciudades; o la formaci6n de hileras a lo largo de las barandillas de las *corniches* en las que un gran n6mero de personas, igualmente silentes e igualmente en su mayor6a de negro (algunas leyendo El Cor6n), miraban hacia las aguas. No obstante, tambi6n se celebraron manifestaciones “tradicionales”, como la del 25 de junio de 2010 en Alejandr6a, en la que miles de personas, encabezadas por dirigentes de casi todos los partidos y corrientes pol6ticas (como Mohammed al-Baradei, Aim6n Nur, Hamd6n al-Sibahi, y otros del Movimiento 6 de Abril y de los Hermanos Musulmanes, aunque no de dirigentes del Wafd o del Tagammu) corearon gritos como “6Todos somos Jaled Said!”, “6Abajo el Estado policial!”, “6Abajo Hosni Mubarak!” o “6Abajo el r6gimen!”. Las fuerzas de polic6a copiosamente desplegadas para la ocasi6n no osaron intervenir⁶⁹.

8.2 UN LEVANTAMIENTO MASIVO Y TRANSVERSAL

El desarrollo de las elecciones legislativas de noviembre y diciembre de 2010 no contribuy6, aunque apenas ninguna fuerza pol6tica tuviera depositadas esperanzas en ellas, a mejorar la aceptaci6n del r6gimen egipcio. Los comicios fueron boicoteados por el partido Al-Gad, de Aim6n Nur, y por el Partido Naserista, mientras que el Wafd, el Tagammu y los Hermanos Musulmanes anunciaron su participaci6n, estos 6ltimos presentando oficialmente tan solo 30 candidatos. La llamada al boicot de algunos partidos fue secundada por Mohammed al-Baradei, que desde hac6a alg6n tiempo pretend6a

⁶⁹ Gamal Essam el-Din: “In support of Khaled Said”, *Al-Ahram Weekly*, 1-7 de julio de 2010.

aglutinar a las fuerzas de la oposición. Exdirector de la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA), Al-Baradei se había hecho muy popular en Egipto en 2003 gracias a su negativa a avalar los proyectos norteamericanos de invasión de Irak con un informe de la AIEA que rechazaba la posibilidad a que al país tuviera capacidad de construir armas nucleares, lo que constituía uno de los principales argumentos para la invasión. A principios de 2010 Al-Baradei había fundado la Asociación Nacional por el Cambio (الجمعية الوطنية للتغيير), poco después de haber regresado a Egipto y anunciado su disposición a competir con Hosni Mubarak en las elecciones presidenciales de 2011, lo cual contó con el apoyo de numerosas fuerzas políticas y sociales.

Las elecciones de 2010 fueron unánimemente consideradas las menos libres y más fraudulentas de toda la época de Mubarak. En contraste con la tolerancia informativa en las elecciones de 2005, con el fin de impedir las críticas al régimen el 19 de octubre el Gobierno egipcio retiró sus licencias de emisión a doce canales de televisión privados, tras habérselas quitado a otros cinco ya antes⁷⁰. Durante la campaña y los comicios cientos de Hermanos Musulmanes fueron detenidos. El PND obtuvo 473 escaños de 518, el 91% de los mismos (con poco más de un 10% provenientes de sus “disidentes electorales”), los partidos de oposición una quincena (principalmente el Wafd, con 6 escaños, y el Tagammu, con 5 escaños), los Hermanos Musulmanes obtuvieron 1 escaño, y candidatos independientes 15, mientras que el resto de los escaños no fueron atribuidos porque se produjeron “irregularidades” durante el proceso.

Poco antes de que el 14 de enero de 2011 el hasta entonces presidente de Túnez, Zin al-Din Ben Ali, abandonara su país cediendo al levantamiento popular contra su régimen iniciado apenas cuatro semanas antes, el 18 de diciembre, Asmaa Mahfuz y el Movimiento 6 de Abril volvieron a lanzar su propuesta de manifestarse el día 25 de enero contra la policía egipcia en el día de la fiesta nacional de esta institución. En esta ocasión, la propuesta fue aceptada por la Asociación Nacional por el Cambio de Al-Baradei y por la página *Todos Somos Jaled Said*. En un principio, la intención de los Jóvenes del Movimiento 6 de Abril era únicamente, según confesó después uno de sus principales líderes, Ahmed Maher, conseguir el cese del ministro del Interior, Habib al-Adli. No obstante, el 19 de diciembre Asmaa Mahfuz colgó en su página en *Facebook* y en *Youtube* una apasionada llamada a los egipcios para que defendieran “la libertad, la justicia y la dignidad” del país, señalando que el pueblo tunecino había mostrado el camino para ello (Cole 2015: 145-146).

La protesta del 25 de enero, convocada bajo el nombre de Día de la Ira, fue preparada con gran minuciosidad para impedir que la concentración de los manifestantes en la plaza de Tahrir de El Cairo fuera impedida por la policía. Los manifestantes iniciales

⁷⁰ “Egypt shuts down more TV stations”, *Al Jazeera English*, 19 de octubre de 2010 (<http://goo.gl/OVhpOi>, consulta del 10 de octubre de 2015).

se concentraron en muy diversos puntos de El Cairo, e iban hablando con la gente para convencerlos de que se unieran a ellos al tiempo que gritaban eslóganes que habían sido cuidadosamente seleccionados. Como ha mostrado Elliot Colla (Colla 2012) los movimientos juveniles habían introducido grandes innovaciones en la organización y preparación de sus acciones políticas anteriores, cuya eficacia se manifestaría a partir del 25 de enero de 2011. La búsqueda de actividades originales y efectivas era una constante rigurosa con planteamientos científicos. A lo largo de asambleas, talleres y reuniones, se buscaban nuevos caminos, se experimentaba con ellos y se realizaban sistemáticamente sesiones de evaluación. Los gritos a proferir en las manifestaciones eran previamente estudiados y cribados tras probarlos para que no suscitaran divergencias sino el máximo consenso, como así fue con el propio “el pueblo quiere la caída del régimen”, el grito más exitoso en la plaza de Tahrir junto a “pan, libertad y justicia social”, tomado de la revolución tunecina y ligeramente adaptado.

El martes día 25 de enero finalmente decenas de miles de manifestantes convergieron hacia la plaza de Tahrir en El Cairo, y otras decenas de miles salieron a las calles de las grandes ciudades, especialmente en Alejandría y Suez. La resistencia de los manifestantes de El Cairo a ser dispersados por la policía, y su insistencia en volver a la plaza de Tahrir aunque fueran desalojados ocasionalmente de ella -pese a que se produjeran muertos y heridos-, televisadas minuto a minuto en directo por la cadena Al-Jazeera, fueron, junto al precedente exitoso de la revolución tunecina, las claves de que se produjera el “efecto contagio” a sectores más amplios de la sociedad. A partir de la noche del 25 de enero cada vez más egipcios se unieron a las protestas populares, negándose a abandonar las calles y enfrentándose constantemente a la policía.

El 26 de enero fue un día de relativa calma, a pesar de que siguieran produciéndose manifestaciones y enfrentamientos a una escala menor. La nueva gran convocatoria era para el viernes 28, día de fiesta y de oración, en el que las masas podían reunirse, y que fue denominado “Viernes de la Ira”. El Gobierno reaccionó ante la nueva convocatoria cortando el acceso a internet el mismo miércoles 26. El 27 de enero, Safwat al-Cherif, secretario general del PND, acusó al Gobierno de Ahmad al-Nazif de ser responsable de los acontecimientos por no haber sido capaz de satisfacer las necesidades económicas de “los de ingresos limitados”, el sector socioeconómico que el régimen siempre había dicho proteger. La “vieja guardia” tomaba la revancha de la “los reformistas” del régimen, y la alta dirección del partido gobernante buscaba un chivo expiatorio.

El 28 de enero, a pesar de las llamadas del jeque de Al-Azhar a los ciudadanos para que se quedaran en sus casas (y eso que era viernes, día de la oración), cientos de miles o tal vez millones de egipcios salieron a las calles, y muchos de ellos se dirigieron de las provincias a la plaza de Tahrir. Los ciudadanos tomaban la iniciativa en la violencia: además de defenderse de la policía, cien sedes del partido gobernante y un gran número de comisarías fueron quemadas. Las peticiones de los manifestantes eran ya claras y casi

únicas: que Mubarak abandonara el poder y que su régimen terminara. En la noche del 28 de enero, el Ejército se desplegó en las calles del país, mientras la policía las abandonaba y Mubarak anunciaba la destitución de Ahmad Nazif y su Gobierno.

El 29 de enero Hosni Mubarak pronunció un discurso retransmitido en directo por la televisión estatal y por un gran número de canales egipcios y árabes⁷¹. En él realizó su análisis de los acontecimientos: las manifestaciones y reivindicaciones “legítimas” de los ciudadanos, facilitadas por sus “indicaciones al Gobierno para que permitieran que se expresaran”, fueron aprovechadas por “algunos” para “subirse a la ola” y “hacer negocio con los eslóganes” contra el “régimen general” (النظام العام), expresión curiosa que el poder constituido nunca había utilizado. Resultado: la violencia, el alboroto, el pillaje y la “anarquía” (فوضى) -mencionada seis veces en un discurso de 636 palabras-, que “introdujeron el miedo en los corazones de la abrumadora mayoría de los egipcios”. Posteriormente, el presidente insistió en su preocupación por los pobres y los jóvenes, y en su compromiso de continuar y acelerar la “reforma económica, social y política”. Confirmó el cese del Gobierno de Nazif y aseguró -con una amenaza velada- que no dudaría en “tomar cualquier tipo de decisión para preservar la seguridad y tranquilidad de todo egipcio y egipcia”.

El mismo día 29 de enero, aunque ello no fuera anunciado en su discurso, Hosni Mubarak nombró a Omar Soleimán, hasta entonces jefe de los Servicios Generales de Inteligencia, vicepresidente de la República, y Ahmad Ezz, secretario de Asuntos Organizativos del PND y uno de los hombres más próximos a Gamal Mubarak, fue obligado a dimitir. El 30 de enero el presidente nombró presidente del Gobierno a Ahmad Chafiq, un coronel del Ejército que había sido ministro de Aviación Civil, tras anunciar que la Constitución egipcia sería modificada para atender las demandas de la oposición política.

Los cambios realizados y anunciados por Hosni Mubarak no lograron que se redujera el número de manifestantes en las plazas y calles de Egipto, sino todo lo contrario. Las estimaciones citadas por la cadena Al-Jazeera apuntaron que el 1 de febrero en la plaza de Tahrir de El Cairo se reunieron dos millones de personas, mientras que en Alejandría, solo en la plaza del Qaid Ibrahim, lo hacían cientos de miles, y más de un millón en toda la ciudad; en Al-Mansura los manifestantes eran medio millón; en Mahala al-Kubra 250.000, y en Suez 200.000. Algunos medios hablaron de hasta 8 millones de manifestantes en todo el país⁷². Al final del día, el presidente pronunciaba un nuevo discurso en el que anunciaba

⁷¹ El discurso de Hosni Mubarak del 29 de enero lo escuchamos en directo en la cadena Al-Jazeera, y luego pudimos leerlo el mismo día en su página en internet (<http://goo.gl/5gIjDG>, consulta 24 de septiembre de 2015).

⁷² Entre el 30 de enero y el 8 de febrero de 2011 publicamos cinco artículos periodístico-divulgativos sobre la evolución de los acontecimientos en Egipto en el medio digital Rebelión, apoyándonos en la información facilitada por la cadena Al-Jazeera y otras cadenas y periódicos árabes que seguíamos cotidianamente. La mayor parte de los datos aquí recogidos proceden de esos artículos, en los que no citábamos las referencias, y a los que se puede acceder en el siguiente enlace: <http://goo.gl/GtFtdf>.

que no se presentaría a la reelección presidencial de septiembre de 2011, y casi parecía suplicar que se le dejara permanecer en el cargo hasta entonces. Ante estas intenciones, los manifestantes se conjuraban para una nueva demostración de fuerza el viernes 4 de febrero, denominado “Viernes de la Partida” (جمعة الرحيل).

En los días 2 y 3 de febrero se produjo un intento desesperado de algunos de los puntales del régimen de la última época de Mubarak por controlar la situación, cuando miles de policías de paisano y *baltagiyya* (matones) contratados por hombres de negocios próximos a Gamal Mubarak⁷³ atacaron a los manifestantes de la plaza de Tahrir con armas blancas, látigos, barras metálicas e incluso montados en camellos. El Ejército, desplegado en la plaza, desempeñó un papel ambiguo, dejando acceder a ella a los partidarios del régimen y no interviniendo, a pesar de que había prometido “defender al pueblo” y no intervenir contra él. La “revolución” atravesó entonces su momento más crítico, pues los manifestantes hubieron de enfrentarse a profesionales de la violencia. No obstante, la decidida participación por primera vez en los enfrentamientos de los organizados militantes de los Hermanos Musulmanes -pertrechados con cascos, escudos y palos- y, elemento muy significativo, de los trabajadores de los pequeños talleres de la calle Champolion y del barrio de Bulaq Abul Ila, vecinos a la plaza de Tahrir -que formaban parte del subproletariado- permitió a los manifestantes contener a sus agresores hasta que, a partir de la tarde-noche del 3 de febrero, cientos de miles de ciudadanos más acudieran a la plaza desde todas partes de la ciudad. El 4 de febrero, Viernes de la Partida, los manifestantes en las calles de Egipto eran de nuevo millones.

A partir de la noche del 3 de febrero, la suerte del régimen de Mubarak estaba echada. Ese día se prohibió viajar al extranjero a los principales hombres próximos a Gamal Mubarak que habían dirigido el partido gubernamental y el Gobierno: Ahmad Ezz, recientemente mencionado; Ahmad al-Magrebi (exministro de Vivienda), Mohamed Garane (exministro de Turismo) y Habib al-Adli (exministro del Interior). Al día siguiente se extendió la prohibición a Rachid Mohamed Rachid (exministro de Comercio e Industria). El 5 de febrero dimitió Comité Ejecutivo del PND, incluido Gamal Mubarak.

En los días siguientes, el todavía poder constituido, dirigido por Omar Soleimán, hizo sus últimos intentos de reconducir la situación intentando negociar con las fuerzas de la oposición, incluidos los movimientos juveniles, y anunciando que los ataques a los manifestantes serían investigados. Pero la determinación de aquellos era clara: no desconvocar las movilizaciones, ni abandonar Tahrir, hasta que Mubarak abandonara el poder.

El día 10 de febrero, el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas (CSFA) anunció que las demandas del pueblo serían cumplidas. El 11 de febrero, Omar Soleimán, en un

⁷³ Se acusó de ello posteriormente, por ejemplo, a Mohamed Abul Ainein, que también sería procesado por numerosos casos de corrupción.

discurso de poco más de 30 segundos, anunciaba que Mubarak había abandonado el poder, y entregado los poderes presidenciales al CSFA. El derrocamiento de Mubarak había costado a los manifestantes cerca de medio millar de muertos y muchos miles de heridos.

9. CONCLUSIONES

9.1 LOS LÍMITES DE UN RÉGIMEN “AMÉBICO”

Resulta muy sugerente la imagen aportada por Mariz Tadros (2012: 19-20) al comparar el régimen de Mubarak en toda su realización histórica con una ameba, “que contrae y expande su espacio y sus parámetros según las diversas presiones internas y externas de manera extremadamente dinámica”. Tadros, como tantos otros autores, no explica “su” concepto de “régimen”, pero resulta evidente que utiliza el término para referirse a la estructura de poder en tanto que “estructura de dominación”. Lo que la autora quiere indicar es la extraordinaria adaptabilidad de dicha estructura de poder, capaz de contraer y expandir tanto su dispositivo coercitivo como sus componentes generadores de apoyo o consentimiento, incorporando a estos últimos, incluso, los espacios y organismos potencialmente amenazadores que su entorno (en primer instancia, su sociedad; y en segunda, el exterior) genera, tras permitir que se desplieguen a su alrededor, para luego fagocitarlos, neutralizándolos y alimentándose de ellos para incorporarlos a la estructura. O, ante la imposibilidad de hacer esto, procediendo a una expansión de su componente coercitivo que, sin embargo, se replegara de nuevo una vez recuperado el control.

Los “movimientos amébicos” del régimen de Mubarak, derivados de un proceso de retroalimentación y aprendizaje de su entorno, partieron de y giraron en torno a un eje intencional inicial adoptado por sus elites dirigentes superiores, de una estrategia híbrida pluralista-corporativista, como apunta Tadros (y hemos señalado también nosotros en las Conclusiones del capítulo III), para tratar tanto con sus aliados como con sus enemigos. Gracias a esa estrategia híbrida, y a la gran flexibilidad con la que la desarrolló, el mandato completo de Mubarak puede resumirse como la historia de un constante vaivén entre apertura y cierre político, en el que el balance, hasta sus últimos días en la Presidencia, siempre era el mismo: ni apertura total, ni cierre total. En ese vaivén, la estructura de poder del régimen de Mubarak, conservando sus espacios de control (asociaciones de industriales y comerciantes, sindicato obrero, prensa estatal) logró “fagocitar”, incorporar ocasionalmente al apoyo o al consentimiento al régimen, o mantener en él, los nuevos espacios políticos que surgían y/o que la sociedad politizaba (prensa, sindicatos, ONGs, poder judicial) y a gran parte de quienes ocupaban unos y otros espacios: a los Hermanos Musulmanes, a la *intelligentsia*, a gran parte de los intelectuales de izquierdas, a la burguesía privada, a los obreros, a la burocracia de Estado, etc. Y todo ello sin satisfacer nunca todas ni la mayor parte de las demandas de dichos sectores, en particular aquellas que podrían haber dado pie a una alternancia en el poder. Así mismo, el

régimen de Mubarak sacó partido de crisis internacionales como la Guerra del Golfo contra Irak, de las presiones externas para que se liberalizara económicamente -lo que dilató a lo largo de 24 años y no completó, tras haber obtenido considerables recursos financieros- y de aquellas, externas e internas, para que se liberalizara políticamente -lo que desde un punto de vista objetivo aprovechó para intentar sustituir a gran parte de sus propias elites-. Todo ello hasta la segunda década del siglo XXI.

Los “movimientos amébicos” del régimen de Mubarak alcanzaron en 2005 y en 2010 sus límites máximos de contracción. En 2005, en medio de las elecciones legislativas (y no tras ellas), el régimen llegó a su mayor grado de apertura política; al final de la década llegó al extremo del despliegue de su componente coercitivo. De estar “a punto” de abrir el paso a una posible alternancia en el poder pasó a convertir el Estado egipcio en un Estado policial y dictatorial, algo que en términos estrictos nunca había sido. La caída de Hosni Mubarak puso de relieve precisamente esto: que la violencia o la coerción no había sido la única, ni tal vez la razón principal, de la extraordinariamente larga duración de su mandato. Como había señalado Hanna Arendt:

“Todo depende del poder que haya tras la violencia. El repentino y dramático derrumbamiento del poder que anuncia las revoluciones revela en un relámpago cómo la obediencia civil -a las leyes, los dirigentes y las instituciones- no es nada más que la manifestación exterior de apoyo y consentimiento”⁷⁴.

9.2 EXPLOSIÓN DE LAS CONTRADICCIONES Y CONFLUENCIA EN LA REBELDÍA POLÍTICA

Entre 2001 y 2011 las contradicciones del régimen, soterradas durante la mayor parte de los 90 por el enfrentamiento entre el Estado y el islamismo armado y por la relativa bonanza económica, salieron a la luz con toda su fuerza. El agotamiento definitivo del exterior como principal fuente de recursos financieros del Estado, y el retorno desde 1999 del avance galopante del déficit y el endeudamiento públicos llevó a las altas instancias del régimen a abordar la “penúltima” fase de la liberalización económica (conservando el control parcial de sectores estratégicos desde un punto de vista político, como el bancario y el de las comunicaciones), al tiempo que incrementaba la extracción de recursos a la población en el proceso que Samer Soliman (2011) ha llamado “el paso del Estado rentista al Estado depredador”.

⁷⁴ Dado que *consent* es el término que Arendt utilizó en el texto original en inglés, prefiero traducir dicho término por “consentimiento”, y no por “asentimiento”, como aparece en la versión en castellano que en general utilizo y cito. Esta versión procede de *Crisis de la República*, que en realidad reúne varios ensayos de Arendt que han aparecido en diversos formatos y versiones, siendo el que nos ocupa, “Sobre la violencia”, el capítulo II del libro (la cita es de la pg. 151). Para el texto original he consultado el artículo “Reflections on violence”, aparecido en la *New York Review of Books*, 27 de febrero de 1969.

La fase final de la liberalización económica fue acompañada por el indisimulado ascenso de un sector de la alta burguesía al poder ejecutivo. Materializado formalmente a partir de septiembre de 2004 con el desembarco en el Gobierno de un grupo de personas de dicho sector, en lo que se conocería como “el Gobierno de los hombres de negocios” o el “Gobierno de Gamal Mubarak”, tal ascenso había sido ya inaugurado por la toma de control del PND por parte del hijo del presidente y de su círculo de amigos de la alta burguesía en septiembre de 2002.

El indiscutible aval dado por Hosni Mubarak para el meteórico ascenso político de su hijo a la posición dominante del partido gubernamental, y la hipótesis, en absoluto descabellada, de que Mubarak padre pretendiera “legar” la Presidencia a su hijo se convirtieron para la mayoría en una certidumbre, lo cual fue tomado por algunos sectores de la sociedad como una amenaza, por otros como una afrenta simbólica, y por otros como ambas cosas. Independiente de cuales fueran las pretensiones presidenciales de Gamal Mubarak y de su padre, el primero dirigió una operación de sustitución de las elites dirigentes que empezó en la alta dirección del partido, continuó en el Gobierno y debía culminar en el Parlamento de 2005, que sería quien designaría al candidato a la presidencia en 2011.

Ante esta operación, la disconformidad y la inquietud de la “vieja guardia” de la elite dirigente, de los sectores socioprofesionales que la habían nutrido en los cincuenta años anteriores, del Ejército y de la alta burocracia estatal, si bien no manifestadas públicamente, eran del dominio público. Para otros sectores sociales la posibilidad de la “sucesión hereditaria” era una amenaza porque implicaba a sus ojos la continuidad de un régimen que rechazaban por las más diversas razones. Dentro de estos últimos cabe distinguir, por un lado, a quienes rechazaban la ruptura con algunos de los componentes esenciales del “modelo de Estado republicano” instaurado por Náser. Uno de estos componentes en peligro eran las obligaciones y compromisos económicos y sociales asumidos según dicho modelo; otro, el papel asignado en el debate y definición de las políticas del Estado a los intelectuales en sentido amplio, y dentro de ellos a los intelectuales clásicos -por oposición a las nuevas elites educadas que prosperaban al calor de la liberalización económica, también políticamente-. Para muchos de quienes rechazaban la ruptura del modelo de Estado republicano, la posibilidad de la “sucesión hereditaria” suponía además una afrenta simbólica que condensaba todas las demás. Finalmente, en el seno de la corriente islamista, que rechazaba globalmente el mencionado modelo de Estado, coexistían sectores que querían dirigirse hacia la confrontación con el régimen de Mubarak y otros, entre los que se encontraba la dirección de los Hermanos Musulmanes, que buscaban la ocasión para arrancar nuevas concesiones a dicho régimen y continuar su expansión sin llegar a la confrontación.

La cuestión de la “sucesión hereditaria” sirvió a partir de 2004 de catalizador para un movimiento de oposición “rebelde” (por contraposición a la anterior oposición

domesticada o consentidora de los partidos de la oposición, e incluso de los Hermanos Musulmanes) que tenía raíces más profundas. Los movimientos de solidaridad con la intifada palestina desde 2000 y contra la invasión y ocupación de Irak a partir de 2003 tan solo conformaban la epidermis de dicho movimiento, cuyo motor era un cambio generacional, un cambio manifestado en la actitud de “los jóvenes” (entre los 18 y los 40 años) no solo frente al poder constituido sino también frente a las “autoridades” en general (por ejemplo, los viejos dirigentes de las fuerzas políticas, pero también los “viejos” creadores de opinión) y frente a los portadores de ideologías de signo contrario a la propia. De manera un tanto sorprendente, fue del reducido sector de la izquierda de donde surgieron los pequeños grupos juveniles, la “nueva izquierda” de inspiración trotskista de la que habla Juan Cole (2015), que iban a romper, no sin muchas dificultades, con las barreras ideológicas que habían impedido la colaboración efectiva entre los distintos grupos de oposición, y muy en particular entre islamistas e izquierdas, arrastrando tras de sí a otras generaciones. En 2004 y 2005 estos grupos cooperaron por primera vez para exigir un cambio político radical, demanda que incluyó, así mismo por primera vez y explícitamente, un cambio de presidente de la República a través de las elecciones que se debían celebrar en 2005. La expresión de tal demanda en las calles, tolerada inicialmente por el régimen, tan solo alcanzó una dimensión preocupante cuando los Hermanos Musulmanes sacaron a sus partidarios en 2005, lo que llevo a los altos dirigentes del régimen a cerrar un acuerdo con ellos para que cesaran en las protestas y en el rechazo explícito a Mubarak a cambio de participar de nuevo en las elecciones legislativas.

Las presiones norteamericanas sobre el régimen egipcio para que introdujera unas vagamente definidas reformas políticas que acompañaran a la liberalización económica y a los cambios en la situación regional se conjugaron con la presión interna sobre el régimen y con la voluntad de las altas instancias de este de modificar su componente humano y sus apoyos sociales. El año de 2005 conoció, así, un acelerado proceso de cambio en el sistema político, que incluyó el cambio en el sistema de elección presidencial, la reincorporación autorizada y pactada de los Hermanos Musulmanes al juego político y la celebración de elecciones que *comenzaron* siendo muy libres y competitivas, pero que pronto mostraron los peligros de tal evolución. El cierre radical del sistema político comenzaría en el transcurso de las elecciones, tras comprobar las altas instancias del régimen que no podían superar sus contradicciones. La gran liberalización política alcanzada implicaba que los jueces insistían en garantizar realmente la limpieza de las elecciones, que los Hermanos Musulmanes avanzaban de manera realmente amenazadora en el Parlamento y que las elites de la “vieja guardia” se resistían con éxito a ser desplazadas del poder, aunque para ello tuvieran -como hicieron en gran parte de los casos- que aliarse con la Hermandad.

9.3 LA VARIABILIDAD DE LA AUTONOMÍA DEL ESTADO: LA SITUACIÓN FISCAL COMO PRINCIPIO EXPLICATIVO DEL CAMBIO POLÍTICO

Samer Soliman (2011), a quien hemos citado abundantemente en estas páginas, sitúa las crisis y recuperaciones fiscales del Estado egipcio en el centro de la explicación de las evoluciones e involuciones del régimen de Mubarak en su más amplio sentido, del cambio político en el país y de la larga duración de su presidencia. En las conclusiones de su obra, concluida en 2006, varios años antes del derrocamiento de Mubarak, si bien la edición que hemos consultado mencione los acontecimientos posteriores en un epílogo, el autor señalaba: “Los regímenes autoritarios no solo utilizan medios represivos para perpetuarse, también utilizan dinero” (pág. 163). Sin embargo, como hemos visto a lo largo de este trabajo y hemos sintetizado en estas conclusiones, más que “dinero” el régimen de Mubarak utilizó para perpetuarse muchos recursos organizativos y de “gestión política”, así como una gran capacidad de adaptación. Con todo, bajo esos recursos y su carácter cambiante subyacía, en efecto, el dinero.

Hasta finales de los años 90 el régimen egipcio subsistió en gran medida gracias al mantenimiento de sus recursos rentistas y exógenos en un nivel relativamente elevado. Con ellos consiguió mantener y luego elevar el gasto público en “control político”, siguiendo la denominación de Soliman, y como hemos visto en el capítulo IV 7.1 una parte de ese gasto entraba dentro del subcapítulo de “gastos en seguridad”; otra en el de “gastos en control ideológico” (Información, Cultura y Asuntos Religiosos); y otra en el de “gastos para mantener la estabilidad política y la legitimidad”, en la forma de salarios y subvenciones a productos básicos. Los sucesivos Gobiernos desde los 80 fueron erosionando este último subcapítulo, pero lo hicieron lenta y discretamente, mientras que los gastos en los otros dos se incrementaban en los 90. A finales de esta década el agotamiento definitivo de los recursos externos llevó a las autoridades a incrementar la extracción de recursos de la población de manera desigual, lo cual perjudicó a la mayoría más desfavorecida. Al mismo tiempo, se redujo el gasto público en “gastos para mantener la estabilidad política” (o redistribución) y en lograr la aquiescencia de la *intelligentsia*, mientras se mantenía bien engrasado el aparato de Seguridad.

La liberalización económica, y las privatizaciones en particular, estaban orientadas según el Gobierno a lograr una mejora global de la economía y de las condiciones de vida de la mayoría. No obstante, pronto resultó evidente que, aparte de mejorar las cifras macroeconómicas del país, la reforma económica beneficiaba principalmente a ciertos sectores de la alta burguesía de los negocios, algunos de los cuales se hicieron con parte de los antiguos recursos del Estado a precios irrisorios. Esos sectores fueron el componente hegemónico de las elites del régimen de Mubarak durante sus siete u ocho últimos años de mandato, así como las que le dieron su apoyo social. Por el contrario, los trabajadores, y ya no solo los obreros, pusieron de manifiesto, en particular a partir de 2004 con su riada de

protestas laborales, que sentían que habían sido abandonados por el régimen. Ellos fueron quienes situaron al régimen de Mubarak frente al espejo de la quiebra del consentimiento popular mayoritario que había logrado mantener durante dos décadas.

La reacción del neorégimen fue apostar progresivamente por el carácter policial del Estado, en una dinámica ya iniciada al final del proceso electoral de las legislativas de noviembre-diciembre de 2005. A su vez, la brutalidad generalizada de la policía empujaría a nuevos sectores sociales, acomodados en muchos casos, a levantarse contra el régimen. La que hemos caracterizado como una exitosa huelga virtual masiva del 6 de abril de 2008 fue un punto de inflexión en la deriva hacia el Estado policial cuya consolidación llevaría a su vez a la sublevación popular de 2011.

Los acontecimientos posteriores a 2004 dieron la razón a Soliman: cuando el régimen de Mubarak dejó de utilizar la redistribución para asegurarse el mínimo consentimiento de la mayoría de la población, el régimen entró en su crisis final. De la misma manera, dichos acontecimientos parecen apuntar también a que el objetivo principal de Mubarak a lo largo de su mandato fue perpetuarse en el poder, antes que responder a una preocupación genuina por satisfacer a ningún sector social. No de otra manera puedan explicarse los muy diferentes enfoques que a lo largo de treinta años siguió en su política económica, de selección de élites y en el régimen de gestión política, que se convirtieron en bandazos en su última década de aquel. Cuando dejó de poder utilizar patrimonialmente los menguantes recursos materiales del Estado para ganarse el consentimiento de una mayoría y de amplios sectores de las elites sociales tradicionales mediante una cierta inclusión económica, política y simbólica, no dudó en alinearse con una minoría de gran influencia económica para que aquella y su régimen se beneficiaran de manera simbiótica, la primera apropiándose de gran parte de los recursos restantes del Estado.

VI. CONCLUSIONES FINALES

1. ALCANCE DE UNA COMPARACIÓN

Como señalamos en la Presentación, la idea de comparar el régimen de Hosni Mubarak con los de sus antecesores, Gamal Abdel Náser y Anwar al-Sadat, surgió casi un año y medio después del apartamiento del poder de Mubarak, en febrero de 2011, que se produjo a raíz de un enorme y sostenido levantamiento popular. Este había coincidido con el momento en el que pretendíamos comenzar la redacción de nuestra tesis para dar respuesta a la pregunta de cuáles eran los fundamentos, algunos cambiantes, sobre los que se había sostenido “su” régimen, y cuáles eran las razones de su larga duración, que a menudo había resultado sorprendente. El objetivo principal de realizar tal comparación seguía siendo dar respuesta a estas preguntas, pero hemos de recordar también cuáles fueron las razones de que nos replanteáramos cómo hacerlo.

El hecho de que el régimen de Mubarak cayera precisamente cuando pretendíamos explicar, entre otras cosas, por qué “duraba” tanto nos produjo un gran desconcierto, que fue alimentado por los acelerados cambios en la vida y el sistema políticos egipcios: cambios de Gobierno, formación ilimitada de partidos, manifestaciones y enfrentamientos a menudo sangrientos, redacción de textos constitucionales, elecciones libres, etc. Algunos de ellos eran de una profundidad inaudita después de casi treinta años en los que cambios de ese tipo se habían producido con cuentagotas y/o con gran lentitud, y en gran medida se habían revertido. Pero sobre todo, algunos de estos cambios, y la manera en la que se produjeron, habían hecho tambalearse -como hemos explicado- algunas de las premisas e hipótesis de nuestra investigación, aunque parecieran confirmar otras.

Únicamente retomamos, tras replanteárnosla, la redacción de nuestra tesis después de que el general Abdel Fattah al-Sisi protagonizara, el 3 de julio de 2013, un golpe de Estado contra el Mohamed Mursi, miembro de los Hermanos Musulmanes y primer presidente libremente electo de Egipto, y de que obtuviera para ello el apoyo de una parte considerable de la población, expresado a través de manifestaciones populares. Tales manifestaciones, como el hecho de que cerca de un 49% de los votantes de las elecciones presidenciales en las que fue elegido Mursi en junio de 2012 lo hubieran hecho a favor de un candidato militar inequívocamente relacionado con el régimen de Mubarak (el coronel Ahmad Chafiq), indicaban que un buen número de egipcios preferían un retorno “a algo anterior”, o a “parte de lo anterior” antes que continuar por la vía política que parecía seguir, a sus ojos, Mohamed Mursi. Y ello a pesar de que esta vía fuera el resultado de un proceso mucho más democrático del que se había dado nunca en el país y también el sistema político siguiera siendo más democrático que nunca, a pesar de los muchos matices que podrían objetársele.

El “retorno al pasado” que suponía que se produjera un golpe de estado militar apoyado o aceptado por buena parte de la población nos hizo pensar en la necesidad de insistir en uno de los ejes de nuestras hipótesis más antiguas: que a lo largo de dos décadas el régimen de Mubarak había sido un régimen “conservador”, y en gran medida “restaurador”, más que un régimen rupturista, o dicho de manera más explícita, que las continuidades o permanencias en él respecto a su régimen matriz -el régimen de Náser- eran mayores que los cambios, y que eso explicaba en parte su duración. Es decir, que lo que conservó en gran medida el régimen de Mubarak durante casi veinte años no fue solo la mayoría de los componentes del “régimen” naserista, sino también, y tal vez sobre todo, del Estado republicano que aquel fundó.

Por supuesto, los últimos diez años de mandato de Hosni Mubarak y la “caída” de este, nos muestran, como hemos visto en el capítulo V de este trabajo, una situación muy diferente de la que acabamos de exponer: la de un régimen que se había transformado de manera sustancial en alguno de sus elementos constitutivos y que estaba transformando de manera no menos sustancial la naturaleza del Estado, en concreto la de sus elites dirigentes, un sector de las cuales había pretendido ir más allá en esas transformaciones sin conseguirlo finalmente. No obstante, el fracaso de estos cambios e intentos de cambio y la “caída” de Mubarak que los simboliza constituyen el reverso las razones del éxito que el presidente había tenido para mantenerse en el poder. No pretendemos afirmar que Mubarak se mantuviera en el poder gracias a preservar el modelo naserista en su integridad -lo que no hizo en absoluto en ningún momento-, ni que lo perdiera solo por casi abandonarlo plenamente. Tan sólo decimos que la preservación, aun parcial, de dicho modelo contribuyó en una medida importante a que obtuviera apoyo y consentimiento, y que su abandono parcial del mismo le hizo perderlos en una medida cualitativa y cuantitativa que desencadenó la suma de fuerzas para derrocarlo. Hosni Mubarak se mantuvo en el poder en parte por preservar el modelo naserista y en parte por conseguir enmendarlo y adaptarlo de una manera muy flexible y eficaz, siguiendo la vía seguida por Anwar al-Sadat, pero aprendiendo de sus errores, como señalaremos a continuación.

Hosni Mubarak y sus más allegados en sus primeros 20 años de mandato (el Gabinete de la Presidencia) se caracterizaron por su fina comprensión de los elementos fundacionales del poder que Mubarak “heredó” y de los cambiantes equilibrios de fuerzas políticas en la sociedad y en el propio régimen político. Como hemos señalado en las Conclusiones del capítulo V, esto se materializó en la adopción de una estrategia híbrida pluralista-corporativista para gestionar sus relaciones con dichas fuerzas, estrategia seguida con una gran flexibilidad y adaptabilidad por un lado a las circunstancias y por otro a la evolución de las fuerzas en sí. Estas “competencias” y “habilidades” de la Presidencia de la República como institución, y de Mubarak en el seno de ella, eran el resultado de un largo aprendizaje. No en vano la Presidencia de la República fue el único órgano de poder auténticamente institucionalizado, autónomo y estable, desde la época de Náser hasta la de

Sadat; cuando Hosni Mubarak accedió a ella, la institución y él mismo -como vicepresidente desde 1975- se habían alimentado de las experiencias históricas de los anteriores presidentes.

No se trata, como erróneamente se planteaba en los medios políticos y egipcios en la primera mitad los 80, y hemos señalado en el capítulo III, de dilucidar si Mubarak era “más naserista” o “más sadatista”, es decir, de plantearse la cuestión en términos de ideología o incluso de “gustos”. La cuestión es que por un lado Mubarak pareció advertir, gracias a la experiencia de Sadat, que los fundamentos del régimen naserista y los del Estado que aquel construyó constituían, por su amplia legitimación, un “marco restrictivo” para la acción de los gobernantes posteriores, cuyos límites no podían ser modificados de manera sustancial abruptamente, so pena de despertar una gran oposición de influyentes sectores de la población. No obstante, Mubarak también era consciente, como lo era Sadat, de que existían otras importantes fuerzas de la sociedad -el islamismo sobre todo, pero también sectores liberales- que defendían modelos de régimen y de Estado diferentes.

2. PERVIVENCIAS DEL RÉGIMEN NASERISTA. MÁS ALLÁ DE LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS APARENTEMENTE PERTINENTES

2.1 ESTADO-PRESIDENTE, ESTADO-POLICÍA Y ESTADO-PARTIDO (DE ÚNICO A DOMINANTE)

Como señalamos en las conclusiones del capítulo I, relativas al régimen de Náser, la caracterización sumaria de dicho régimen que nos parece más adecuada, coincidiendo con diversos autores en los que nos apoyamos para el estudio del periodo de su presidencia, es la de “populista”. Como indicamos así mismo, la adopción de tal caracterización se debía, fundamentalmente, a que los regímenes políticos populistas giran, en lo que se refiere a la organización del poder del Estado, y a pesar de sus diferencias y variantes que ya señaló Ayubi (1995), en torno a tres polos: el Presidente, el Ejército y el partido; o, dicho de otra manera -siempre siguiendo a Ayubi-, un Estado-Presidente, un Estado-Policía y un Estado-Partido. En el régimen de Mubarak puede encontrarse la pervivencia o al menos el trasunto de estos polos, fácilmente reconocibles en el régimen de Náser. El polo del Presidente o Estado-Presidente es evidente: a pesar de la existencia ininterrumpida de un Parlamento activo y de un poder judicial con vocación y actos de independencia, Mubarak siempre se situó por encima de ellos más allá de los formalismos. Por poner solo algunos ejemplos: designando los Gobiernos, dictando decretos de ley, imponiéndose como candidato presidencial al Parlamento, transfiriendo a ciudadanos a

jurisdicciones de excepción, decidiendo las reformas constitucionales, revocando las decisiones del Tribunal Constitucional. En cuanto al polo Estado-Policía, con disminución del elemento militar en beneficio del policial, su continuidad resulta así mismo manifiesta, a pesar del *amébico* repliegue y despliegue de elemento policial. Finalmente, el Estado-Partido único naserista fue sustituido por un Estado-Partido dominante en la época de Mubarak.

El paso del polo Estado-Partido único al polo Estado-Partido dominante es el que muestra mayores diferencias entre ambos regímenes, aunque muchas de ellas sean tan solo aparentes. El régimen de Sadat fue un periodo de transición en el que formalmente se disolvió el partido único (USA) como “organización de masas” (1976) para luego poner, bajo el control de la jerarquía de la USA que seguía existiendo, los fundamentos de un partido dominante (1976-1978). En dicho proceso lo que en realidad se produjo fue un despliegue del partido único en tres plataformas, luego partidos, con el sedicente fin de introducir el pluralismo. En la práctica, el resultado fue la configuración de cuatro partidos pseudo-oficiales (luego insistiremos en ello) con la exclusión del seno del nuevo partido dominante, el Partido Nacional Democrático (PND), de las corrientes no deseadas (las corrientes de izquierda socialista y naserista), reunidas en el nuevo partido Tagammu. Dicha exclusión fue una autoexclusión, pero también un resultado buscado por los dirigentes del régimen. Cuando se habla de la introducción del pluralismo en época de Sadat, debe considerarse, además del dato que acabamos de mencionar, que la USA dejó de ser totalmente un órgano de representación en 1976, y sin embargo siguió existiendo como puro órgano de control (sobre los partidos y sobre el sindicato de trabajadores y sus elecciones) hasta 1978.

Desde 1978, el partido gubernamental (PND) no fue el instrumento de control de la burocracia civil, de las estructuras corporativistas y de la sociedad que era la USA. Sin embargo, parte de las atribuciones de control de la USA (autorización de los candidatos a las elecciones legislativas y sindicales) fueron transferidas al Fiscal General Socialista, figura que no desaparecería hasta 2008, muy avanzada la época de Mubarak. En este sentido, puede incluso afirmarse que se produjo una “despluralización” del control, que pasó de una organización u órgano formalmente colectivo a un individuo designado por el presidente de la República. Por otro lado, el partido gubernamental siguió controlando los recursos del Estado, incluso los humanos, puestos a su disposición, por ejemplo, durante las elecciones con procedimientos como el uso de los autobuses del Estado para transportar a sus trabajadores a votar bajo la atenta mirada de sus jefes, miembros a su vez del partido gubernamental.

La afiliación al partido dominante en época de Mubarak no era obligatoria, pero era obligatorio, en la inmensa mayoría de los casos, estar afiliado al partido dominante, o ser cercano a él, para ocupar las máximas posiciones de poder (no sólo ejecutivo o legislativo, sino también en los sindicatos y en la prensa, por ejemplo). Gran parte de la apertura de

Mubarak fue una apertura del partido dominante. El régimen de Mubarak incorporó a algunos sectores socioeconómicos a su coalición social, pero les impuso pasar a través de su propio partido. Incluso los sectores de la alta burguesía privada que quisieron participar en el gobierno del país hubieron de hacerlo, a pesar de su creciente influencia, a través del partido. El partido Wafd, que se suponía posible vehículo de los intereses de dicha burguesía, no logro atraer a la mayoría de ella, consciente del auténtico funcionamiento del sistema político. Ningún otro partido que pudiera representar tales intereses fue autorizado, a pesar de los rumores que se produjeron entre 1997-1999. Por el contrario, en lugar de “conceder” la formación de un partido propio a esta burguesía, gran parte de ella fue incorporada a la dirección del partido gobernante y del Gobierno entre 2002-2004 por decisión de Hosni Mubarak, bajo la tutela y protección de su hijo, y con el acompañamiento vigilante y envidioso de las altas elites de origen burocrático de la “vieja guardia” del régimen.

La incorporación al partido gobernante-dominante de otros personajes y sectores sociales influyentes, no solo de la burguesía, a través de elecciones legislativas semirrepresentativas-semifraudulentas y dentro de un esquema de relaciones clientelares entre el régimen, los parlamentarios y sus votantes fue, como hemos visto en los capítulos III y IV una innovación surgida bajo el mandato de Mubarak, en parte contra la voluntad del núcleo duro del régimen, pero aprovechada por el presidente para regular los conflictos por el poder y los recursos económicos surgidos entre las elites y los sectores sociales que apoyaban al poder constituido.

2.2 CORPORATIVISMO Y PLURALISMO. EL PLURALISMO EN EL CORPORATIVISMO

El sistema corporativista naserista de gestión de la relaciones entre el régimen político y la sociedad expuesto en capítulo I de nuestra tesis se mantuvo a través de la época de Sadat hasta el final de la de Mubarak, si bien con variaciones y ocasionales excepciones, sobre todo dada la flexibilidad del régimen de Mubarak.

Conviene aquí recordar la definición de corporativismo de Schmitter que ya hemos mencionado anteriormente:

“El corporativismo puede ser definido como un sistema de representación de intereses en el que las unidades constituyentes son organizadas en un número limitado de categorías singulares obligatorias, no competitivas, jerárquicamente ordenadas y funcionalmente diferenciadas; unidades que son reconocidas o autorizadas (cuando no creadas) por el Estado y a las que se garantiza deliberadamente el monopolio de la representatividad dentro de sus categorías respectivas a cambio de aceptar ciertos

controles en la selección de sus dirigentes y en la articulación de las demandas y apoyos”¹.

Los elementos más puros o explícitos del corporativismo naserista eran el sindicato único de trabajadores (obreros) y las estructuras únicas de representación formalmente reconocidas para los manufactureros, industriales y comerciantes, puesto que tales estructuras fueron creadas por el Estado o incorporadas formalmente a él (como la Federación Egipcia de Industrias, FEI), y sus órganos de dirección eran controlados por él. Esta situación se mantuvo hasta el régimen de Mubarak, aunque este permitiera una mayor presencia de la alta burguesía privada en la dirección de la FEI y la existencia de asociaciones de dicha burguesía oficialmente no reconocidas. Como hemos señalado, la mayor evolución que se produjo en las épocas de Sadat y de Mubarak fue que estos adoptaron un enfoque *cointegracionista* en las relaciones de sus regímenes y el Estado con los trabajadores. Este enfoque consistía en privilegiar la integración o cooptación total de sus dirigentes en lugar de “controlar” que aquellos se situaran entre el régimen y/o el Estado y sus supuestos representados, siguiendo la lógica de la *intermediación* característica del régimen naserista y del corporativismo más “puro” (por ejemplo, durante la mayor parte de las épocas de Sadat y Mubarak, el presidente de la Federación General de Trabajadores de Egipto fue al mismo tiempo ministro de Trabajo, algo que nunca sucedió en la época naserista). Las relaciones entre el régimen político y los trabajadores se deterioraron en las épocas de Sadat y de Mubarak ante la pérdida de derechos laborales y el control jerárquico absoluto del sindicato, hasta el punto de llegarse a la represión de cualquier líder sindical alternativo en ambas épocas. No obstante, Mubarak mantuvo gran parte de los compromisos del Estado con los que trabajadores en los que se basaba el corporativismo hasta muy avanzada la liberalización económica. Por recordar solo un dato, los primeros despidos masivos de trabajadores públicos no se produjeron hasta 1998, mediando compensaciones importantes, y la Ley del Trabajo que prácticamente liquidó la legislación laboral naserista no fue adoptada hasta 2003.

El esquema básico del corporativismo se aplicó también en el terreno de las comunidades religiosas. Desde la época de Náser hasta la de Mubarak los regímenes políticos controlaron la designación de los dirigentes de la principal institución religiosa islámica del país, Al-Azhar, y de la institución jurídico-religiosa estatal, Dar al-Iftá. La política de flexibilidad de Sadat y Mubarak frente al islamismo político permitió que Al-Azhar adquiriera una cierta autonomía, pero nunca se libró del control estatal.

En cuanto a la comunidad copta, el régimen de Náser apoyó la deposición en 1954 del papa Yusab II, deseada por el Sínodo de la Iglesia y el Consejo Comunitario copto, y desarrolló excelentes relaciones con su sucesor, Cirilo VI (1959-1971), al que dio

¹ Philippe C. Schmitter: “Still the Century of Corporatism?” *Review of politics*, 36, nº1 (enero de 1974): 85-131. Citado por Ayubi (1995: 278).

constante apoyo en su incesante actividad pastoral y de construcción de iglesias y monasterios. Cirilo también obtuvo de Náser la disolución en 1962 del Consejo Comunitario Copto que diputaba desde hacía décadas la representación de la comunidad copta a la Iglesia. Por su parte, Sadat, quien según Mohammed Hasanein Heikal pudo haber intervenido en la elección de Chenuda III como papa en 1971, gestionó de manera funesta sus relaciones con aquel, desoyendo sus demandas de mayor protección para los coptos frente al islamismo radical y de mayores derechos para la Iglesia y la comunidad coptas. Finalmente, Sadat destituyó y deportó a Chenuda en 1981, destitución que no fue aceptada por la Iglesia. Por su parte, Mubarak restauró las relaciones del Estado con la Iglesia rehabilitando a Chenuda en 1985 y convirtiéndole en un fiel partidario suyo, hasta el punto de que el papa dio su apoyo a Mubarak en todos los plebiscitos en los que este fue reelegido, e incluso después del levantamiento popular masivo de 2011 contra el presidente.

Otra variante del corporativismo que se prolonga desde Náser a Mubarak se dio en las relaciones del Estado y los sucesivos regímenes con los sindicatos o colegios profesionales. Formalmente independientes todos ellos del Estado, representaban sin embargo a colectivos muy diferentes en cuanto a su dependencia económica de aquel y a cómo les afectaron a lo largo del tiempo sus políticas, sobre todo según la pertenencia de sus miembros a los sectores de actividad pública o privada. El régimen naserista controló las direcciones de los sindicatos profesionales exigiendo que sus miembros formaran parte de los sucesivos partidos únicos y, excepcionalmente en 1954, mediante la disolución de algunos sindicatos, la suspensión de sus elecciones internas o la imposición de los candidatos gubernamentales. No obstante, también ganó su consentimiento mediante beneficios profesionales y la extensión del empleo público en todos los sectores profesionales, haciéndose aquel dominante en los sindicatos de periodistas e ingenieros, y muy abundante en otros, como el de abogados, lo que permitió contrarrestar en ellos la influencia de las corrientes liberales, alimentadas por el sector privado.

El régimen de Sadat permitió que la pluralidad ideológica emergiera en las direcciones de los sindicatos profesionales intentando mantener su control más mediante medidas de cooptación de sus direcciones -el enfoque corporativista *cointegracionista* que hemos mencionado- que de intermediación. No obstante, mientras conseguía un completo éxito en el de ingenieros, convertido casi en una empresa privada a finales de la década de los 70 dirigida por el empresario, yerno del presidente y hombre fuerte del régimen, Osmán Ahmad Osmán, en los sindicatos de periodistas y abogados Sadat encontraría una fuerte resistencia a sus políticas, alimentada en el caso de los primeros por la expulsión de la profesión de un gran número de periodistas críticos de izquierdas y por las severas restricciones de últimos años de su mandato a la libertad de expresión. Este periodo concluiría con la toma por decreto del control directo de ambos sindicatos profesionales y con el encarcelamiento de muchos de sus miembros. También en el caso de los colectivos

profesionales, como en el de la Iglesia copta, Sadat gestionó el esquema corporativo de manera funesta.

Finalmente, Mubarak permitió que la pluralidad ideológica se manifestara y extendiera en el seno de los consejos de dirección de los sindicatos profesionales, hasta el punto de que la corriente islamista se hizo progresivamente con el control de la mayoría de ellos (excepto del de periodistas) desde 1984 hasta 1993. A partir de entonces, el régimen legisló para arrebatar a los sindicatos su autonomía en la elección de los consejos y ponerlos bajo tutela judicial. No obstante, en ningún momento, en ningún sindicato, el presidente dejó de ser un personaje próximo al régimen político hasta el año 2000 (en que esto se quebró en el Sindicato de Periodistas). Ello se consiguió mediante prebendas (Sindicato de Ingenieros), mediante la movilización de los partidarios del régimen y, sobre todo, mediante la aceptación de las fuerzas de la oposición de un candidato gubernamental que pudiera ejercer la intermediación entre la mayoría de oposición y el poder. En este sentido puede decirse también que los miembros de los sindicatos consentían en la reproducción del modelo presidencialista en sus organizaciones.

2.3 EL CORPORATIVISMO EN EL PLURALISMO. EL SISTEMA DE PARTIDOS

El sistema de partidos en la época de Sadat y Mubarak puede ser considerado como un sistema corporativo. Si recordamos la definición de Scmitter citada más arriba veremos que el sistema y los partidos existentes pueden encajar en esa definición: “unidades que son reconocidas o autorizadas (cuando no creadas) por el Estado”, “jerárquicamente ordenadas y funcionalmente diferenciadas”, “a las que se garantiza deliberadamente el monopolio de la representatividad dentro de sus categorías respectivas a cambio de aceptar ciertos controles en la selección de sus dirigentes y en la articulación de las demandas y apoyos”.

Los primeros partidos (Partido Liberal, Partidos Socialista del Trabajo, Tagammu) fueron creados por el Estado en época de Sadat, quien decidió cuál sería su ámbito ideológico y quiénes serían sus dirigentes (“viejas figuras” bien conocidas del régimen naserista y/o el sadatista que eran miembros del partido único). Nacieron, incluso, del despliegue del antiguo partido único. Posteriormente, las altas elites dirigentes consintieron la formación de solo dos partidos de peso potencial (el Wafd y el Partido Naserista, ya en época de Mubarak), mientras se denegaba la constitución de otros que podrían tenerlo. Estos dos nuevos partidos fueron autorizados, por una lado, por la condición de sus presidentes que, más allá de la etiqueta de “oposición”, eran también “viejas figuras” bien conocidas de regímenes anteriores (el del primero de la época monárquica, el del segundo de la época naserista). En virtud de las condiciones de su autorización, y porque su autorización buscaba ese objetivo, todos los partidos serían eminentemente jerárquicos,

dominados por sus presidentes, que no dejarían de serlo hasta su muerte o incapacidad funcional, a pesar de los movimientos disidentes y de los enfrentamientos en su seno. A todos esos partidos se les concedió “el monopolio de la representatividad” legal del que habla Schmitter y, por mucho que pidieran la libre autorización de partidos una y otra vez y la democracia, permanecieron en el sistema -no se autodisolvieron, como les propuso el escritor Sonallah Ibrahim, ni fueron expulsados- e intentaron aprovechar dicho monopolio. A los partidos de la oposición autorizados les hemos denominado también a menudo “legales”, pero podríamos haberlos llamado pseudo-oficiales, o incluso oficiales, por todo lo que acabamos de exponer. El Partido Socialista del Trabajo, luego Partido del Trabajo, constituyó la única excepción relativa a estas reglas generales -y a la que citaremos a continuación-, y por ello fue el único prohibido por el régimen político, en el año 2000.

Pero debemos desarrollar otras dimensiones de las condiciones de formación y de funcionamiento de los partidos autorizados. En un nivel, aparentemente el poder constituido decidió cuales eran las ideologías autorizadas, según una serie de etiquetas que se atribuía a las personalidades fundacionales, a quienes en la práctica se entregaban los partidos. Se producía así un doble encierro: de las ideologías posibles en las ideologías supuestamente autorizadas, y de las ideologías supuestamente autorizadas en los partidos, que en realidad eran partidos de personalidades y pequeños colectivos fundacionales. Los partidos se entregaban así a colectivos de personas, a sectores sociales, según el modelo corporativista. El sistema no se abría a la pluralidad ideológica, sino que la encerraba en esos colectivos.

Finalmente, la elección de las personas y de las ideologías a las que se entregaban los partidos estaba regida por una suerte de “corporativismo historicista” o de “pluralidad historicista”. Se concedían los “partidos de oposición” a las corrientes y grupos ideológicos que habían existido en la historia egipcia, no a los que pudieran o podrían existir en la actualidad: un partido para el Wafd, corriente prerrepblicana, con un dirigente prerrepblicano, simbolizando la superación del enfrentamiento entre el régimen republicano y el monárquico; un partido de izquierda socialista-naserista, el Tagammu, con un dirigente socialista-naserista compañero de Náser, superando el enfrentamiento entre el régimen de Sadat y socialismo y el naserismo; un partido nacionalista-socialista-islámico, dirigido por un presidente activo en la época monárquica en el Joven Egipto, colaborador en el régimen naserista y en el de Sadat, buscando la síntesis de todos los regímenes con un islamismo político aceptable; un Partido Liberal y su presidente abiertamente sadatista e infitahista; finalmente, a partir de 1990, un Partido Naserista dirigido y controlado por miembros del “centro de poder” naserista, de la USA, al que se había enfrentado y del que se había desecho Sadat en mayo de 1971. Como hemos señalado, el Partido del Trabajo sería el único que, a través de la presión desde debajo de algunos de sus miembros, escaparía a los condicionantes impuestos a los partidos, convirtiéndose en un partido

esencialmente islamista y dispuesto a aliarse con el islamismo político no autorizado y en el único auténtico partido de oposición, por lo que fue prohibido en 2000.

3. EL APRENDIZAJE DE MUBARAK DE LA EXPERIENCIA DE SADAT

Como hemos expuesto en el capítulo II de este trabajo, en el que estudiamos el régimen de Sadat, y en particular en sus Conclusiones, las crisis de legitimidad a las que se enfrentó aquel pueden diferenciarse según los sectores de la sociedad que abandonaron el apoyo y el consentimiento y entraron en oposición o rebeldía al poder constituido, y según las razones y motivos que movieron a tales sectores. En este último sentido, cabe distinguir también si dichos sectores se oponían a las políticas seguidas por el régimen, al tipo de régimen-sistema político o a los gobernantes, y muy en particular al presidente, principal decisor de todas las políticas del país.

En cuanto a la política exterior, Sadat atravesó una crisis de legitimidad en 1972-1973 por su aparente inacción frente a la ocupación del Sinaí, pero la superó con creces, obteniendo su mayor caudal de legitimidad con la “victoria” de octubre de 1973 frente a Israel, para luego sufrir de nuevo una gran pérdida a partir de 1977-1978 por firmar la paz con este país. Con todo, no está en absoluto demostrado que el rechazo que conoció la firma de la paz estuviera extendido entre la mayoría de la población, aunque sí entre las clases politizadas (en lo esencial clases medias, clases intelectuales y clases intermediadoras o “segundo estrato” de la sociedad política) de todas las tendencias de oposición. Como señalamos en su lugar, ellas mismas manifestaron que este era precisamente el único punto que tenían en común socialistas, naseristas, islamistas, la iglesia copta, numerosos liberales, e incluso -frente a sus posturas posteriores- los wafdistas, hasta el punto de que cabe preguntarse si tal rechazo no fue para algunos un simple expediente para encontrar algún tipo de unión entre la oposición, que tenía otras razones para rechazar el régimen, como ahora veremos.

De la misma manera, aunque Sadat se enfrentó a una importante deslegitimación del régimen por su política económica y social, en términos cuantitativos los hitos de tal deslegitimación se situaron así mismo en 1972-1973, con las protestas de los trabajadores, y 1977, fecha esta última en la que se produjeron las grandes revueltas populares por la retirada de las subvenciones a los productos de primera necesidad. Los trabajadores le recordaban en sus manifestaciones explícitamente que había abandonado el compromiso adoptado por Náser con ellos. Tras las revueltas de enero de 1977, Sadat congeló el *infitah* y retomó las políticas redistributivas, apoyándose en la sustancial mejora de las finanzas del Estado gracias a la afluencia de recursos externos y rentistas, incrementando los salarios y manteniendo las subvenciones estatales.

Cuando se produjo la gran crisis de legitimidad de Sadat, entre 1978 y 1981, esta no fue fruto de una movilización popular generalizada contra él, sino sobre todo de las clases “intermediarias” (periodistas, abogados, sindicalistas, líderes religiosos musulmanes y coptos) de todas las corrientes ideológicas. Más allá de las razones o los argumentos relacionados con la política exterior, la política económica y las relaciones entre islam y Estado, los opositores y rebeldes de los muy diversos sectores de la oposición compartían el rechazo hacia el modo de gestión del presidencialismo, o de las relaciones entre el Presidente y la sociedad, y en particular con sus estructuras corporativas y asociativas de todo tipo así como con los líderes de estas que disientían de sus políticas. Si Náser había excluido a algunos sectores de la participación política (el islamismo político organizado, las antiguas elites económicas y políticas monárquicas), al final de su mandato Sadat excluía a todos los que no fueran sus abiertos partidarios, y lo hacía excluyéndolos totalmente (exilio económico para los periodistas de izquierdas, deportación del papa Chenuda, cárcel final para todos), e incluso tratándolos en términos ofensivos. Anteriormente, había excluido y perseguido a la izquierda socialista y naserista para abrir el paso al islamismo político y a los liberalizadores económicos, se había enajenado a la Iglesia copta con sus concesiones al islamismo político y había permitido que se incrementaran las desigualdades. La imagen que ofrecía era la de un presidente parcial, arbitrario, caprichoso, inestable, a diferencia de Náser, a quien podía sin duda acusársele de parcialidad, pero de una parcialidad apoyada por muchos contra unos pocos sectores concretos.

Mubarak cultivó durante diez años (en su primer periodo) la imagen de un presidente dialogante, arbitral, cauto e inclusivo. Muchos hechos avalaron esa imagen: recuperó las relaciones con la Iglesia copta, incluyó a los Hermanos Musulmanes en el sistema político, fue condescendiente con el islamismo radical, devolvió sus puestos de trabajo y de expresión estatales a los intelectuales de izquierdas, frenó el *infatih*, conservó la legislación laboral naserista, etc. Como hemos señalado en las conclusiones del capítulo III, se presentó como el árbitro entre los diversos sectores, sobre todo económicos e ideológicos, de la sociedad y del régimen, antes enfrentados y potencialmente enfrentables, y como el campeón y protector de “los de ingresos limitados”.

En muchos aspectos se trataba más de una cuestión de apariencias y de “gestión simbólica del poder” que de hechos sobre el terreno, pero Mubarak y su régimen habían aprendido del de Sadat que respetar los símbolos, y en particular evitar las afrentas simbólicas, era muy importante. Así, no concedió ninguna parcela de poder fuera de su control, pero intentó hacer pensar a muchos que de alguna manera participaban, y evitó vejar a sus opositores; pretendió mostrar frialdad y exigencia en sus relaciones con Israel, mientras las mantenía sin plantear ningún conflicto a las autoridades israelíes; mientras las circunstancias económicas y las políticas de sus Gobiernos minaban las condiciones de vida de la mayoría con políticas inflacionistas y recortes de las subvenciones y subsidios

nunca anunciados para evitar los choques simbólicos, los salarios de los trabajadores, sobre todo los estatales, aumentaban nominalmente o mediante concesiones graciosas del presidente; mientras rechazaba la constitución de asociaciones formales o partidos de la alta burguesía, esta tenía acceso directo al gobierno mediante asociaciones informales.

En su segundo periodo (en los años 90) el régimen de Mubarak reestructuró sus alianzas y estrategias para responder al desafío del islamismo armado y obtener financiación económica (guerra contra Irak, programa de estabilización y ajuste económico estructural), beneficiándose de la presión que las corrientes islamistas radicales ejercían sobre los sectores secularistas, pero logrando mantener una posición arbitral, aun excluyendo a sangre y fuego al islamismo armado, y devolviendo a la marginación política a los Hermanos Musulmanes. Permitió que una corriente islamista radical no opuesta al poder constituido se expresara sin cortapisas en el espacio público egipcio; permitió el nacimiento y la expansión de las ONGs de la “sociedad civil”, liberales y de izquierdas; cooptó a una buena parte de la intelectualidad y las fuerzas políticas de izquierdas; permitió que aumentara la libertad de expresión y que naciera la prensa privada, mientras una Ley de Delitos de Prensa se mantenía como amenaza a los periodistas; atacó públicamente a la gran burguesía que pretendía de manera igualmente pública tener poder político, pero mantuvo la representación oficial de aquella en los viajes y encuentros oficiales con Estados Unidos; empujó decisivamente la liberalización económica sin que esta causara despidos y desposesiones hasta el final de la década, y sin renunciar a sectores estratégicos como el bancario y el de los medios de comunicaciones audiovisuales.

4. LA RUPTURA DE LOS MODELOS PREVIAMENTE RESTAURADOS POR MUBARAK

El tercer periodo de Mubarak, en la primer década del siglo XXI, es el del derrumbe de todo lo anterior (fundamentos estructurales, imagen y actitudes de consentimiento), tras el fin definitivo del carácter rentista del Estado, el comienzo de una nueva etapa de déficit y endeudamiento interno y el cese de las actividades de la insurgencia islamista que actuaba como cortina de humo y elemento de contención del descontento o de favorecimiento del consentimiento. La privatización casi total de las empresas estatales, la incorporación de la alta burguesía a la dirección del partido gobernante y del Gobierno, el desplazamiento de la burocracia de Estado entre las elites dirigentes, la pérdida por parte de la *intelligentsia* de la condición de consejera del Príncipe en favor de las nuevas elites económicas, la aparición de nuevas generaciones no marcadas por la historia egipcia de enfrentamientos irreconciliables entre ideologías y de sumisión voluntaria o forzada al poder constituido, las presiones norteamericanas, la exigencia de los Hermanos Musulmanes de recuperar un espacio político; todo ello, como

hemos expuesto en el capítulo V, llevó por primera vez a un movimiento de rechazo explícito y público a Mubarak, desencadenado por la supuesta pretensión de aquel de auparse a la presidencia de la República a su hijo Gamal. Ya fuera tal pretensión real o no, lo cierto es que Gamal Mubarak se había hecho con los principales resortes del poder político, el PND y el Gobierno, junto a los sectores de la alta burguesía ya mencionados, que aceleraron la liberalización en muchas ocasiones en su propio beneficio.

El movimiento contra la “sucesión hereditaria” y contra la continuidad de Mubarak en 2004-2005 era un movimiento contra el cambio y la continuidad, puesto que sus muy diversos actores tenían motivaciones muy diferentes. Algunos, miembros o exmiembros de las elites del régimen y de sus colectivos de apoyo esenciales, estaban contra el cambio de régimen que se estaba produciendo (en las elites y en el sistema económico cuando les afectaba); otros estaban en contra del cambio definitivo en la naturaleza y las funciones económicas y sociales del Estado (empleador, redistribuidor, protector, arbitral); un tercer grupo (fundamentalmente las corrientes islamistas) siempre había estado en contra del modelo global de Estado, en particular de sus elementos secularistas, y de su renovada exclusión política. Mubarak y su hijo representaban pues, para unos y otros, los cambios y continuidades que no deseaban.

La amplitud del movimiento de oposición llevó a Hosni Mubarak y a las nuevas elites dirigentes lideradas por su hijo Gamal en el año 2005, en las elecciones legislativas, a su máxima apertura política. La esperanza de la dirección del régimen era poder, una vez más, asimilar, fagocitar, retroalimentarse con el movimiento de oposición. Tras pactar con los Hermanos Musulmanes su participación en las elecciones pretendía renovar totalmente el Parlamento, eliminado de él al grueso de la “vieja guardia” del régimen. Las elecciones, e incluso su supervisión judicial, serían el operador de un remplazo no conflictivo y simbólicamente neutro de las elites dirigentes antiguas, que tantas veces habían retornado al Parlamento y al partido gubernamental por la vía de las elecciones, pero en gran parte por la puerta trasera del trucaje electoral. La operación fracasó totalmente, y el resultado fue un Parlamento con una amenazadora presencia de los Hermanos Musulmanes, una victoria de los “disidentes electorales” del PND y un feroz y violento control final de las elecciones que arruinó la imagen democratizadora que se pretendía dar del régimen.

Los años 2006 y 2011 muestran la progresiva conversión del régimen egipcio en un régimen policial. Tras el rápido y hermético cierre político, las reivindicaciones laborales y sociales, constantes, extendidas, masivas tomaron el relevo de las reivindicaciones políticas. Las autoridades las dejaron avanzar, temerosas de no poder mantener al mismo tiempo el “frente político” y el “frente laboral-social”. Los “jóvenes” -categoría amplia que abarcaba a todos los nacidos desde principios de los años 70-, y en particular la “nueva izquierda”, restablecieron, sin embargo, las conexiones entre ambos frentes, aunque a veces fuera a nivel simbólico, y convocaron la huelga general del 6 de abril de 2008 en solidaridad con los trabajadores. Previamente, en una larga labor iniciada a principios de

siglo, estos “nuevos jóvenes” habían tejido relaciones de confianza y cooperación entre los sectores de la izquierda socialista y naserista y las corrientes islamistas. El miedo a estas conexiones propició que a partir de 2009 el Estado fuera dirigido y apoyado por sectores que nunca había sido tan reducidos, y que las mediaciones de todo tipo con la sociedad las realizara el aparato policial y sus servicios secretos. De manera hartamente simbólica, las protestas iniciales que desembocaron en el abandono del poder por Hosni Mubarak el 11 de febrero de 2011 fueron convocadas para el 25 de enero, Día de la Policía, porque ahora esta representaba la quintaesencia del “régimen de gestión política”.

No obstante, este trabajo ha intentado demostrar que, a diferencia de lo que se ha afirmado tantas veces desde 2011, el elemento coercitivo no fue la principal razón de la larga duración del régimen de Mubarak. En este sentido, es oportuno traer a colación las siguientes palabras de Hanna Arendt:

“Todo depende del poder que haya tras la violencia. El repentino y dramático derrumbamiento del poder que anuncia las revoluciones revela en un relámpago cómo la obediencia civil -a las leyes, los dirigentes y las instituciones- no es nada más que la manifestación exterior del apoyo y el consentimiento” (Arendt 1998: 151).

VII. EPÍLOGO

**DOS DERROCAMIENTOS Y UN
CONFLICTO:
DE MUBARAK A MURSI, EL ESTADO
PUESTO EN CUESTIÓN**

1. LA ALIANZA DE CIRCUNSTANCIAS ENTRE EL EJÉRCITO Y LOS HERMANOS MUSULMANES

En Egipto no se produjo una revolución tras el 11 de febrero de 2011 porque en el país había muy pocos revolucionarios, aunque gran parte de las decenas de miles o pocos cientos de miles de jóvenes y no tan jóvenes que inicialmente desencadenaron la revuelta contra Mubarak lo fueran. Por el contrario, en el momento de escribir estas líneas el país se encuentra bajo un régimen político que incluye muchos aspectos de sus “antiguos regímenes”, sobre todo los más exclusivos y represivos. La palabra “régimen” comenzó a utilizarse en política tras la Revolución Francesa para designar la situación política anterior a esta, el *Ancien Régime*, como explicábamos en la Introducción de esta tesis. La evolución reciente y actual de Egipto sigue teniendo que ver con la confusión entre “régimen” (élites dirigentes) y Estado, como lo tuvo cuando nació el régimen republicano, en la época naserista, aunque las situaciones sean muy diferentes.

En el periodo entre la “caída” de Mubarak, el 11 de febrero de 2011, y el 30 de junio de 2012, cuando fue elegido presidente de la República Mohammed Mursi, por debajo del tráfago de partidos, de la libertad de expresión, de adhesiones a los principios de la revolución y de elecciones competitivas y en gran medida limpias (aunque existen ciertas dudas acerca de la manipulación de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2012), un inconfesado pero indudable pacto entre el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) y los Hermanos Musulmanes rigió el curso de los acontecimientos. Un pacto, en primer lugar, de no agresión, sin el cual el CSFA no habría podido conservar los poderes presidenciales sin recurrir a la violencia, ni resistir las presiones revolucionarias y las protestas laborales, ni nombrar Gobiernos en gran parte continuistas con el régimen anterior, ni comportarse de manera tan represiva y provocadora como lo hizo, ni, sobre todo, promover textos constitucionales autoritarios que seguían dando muy amplios poderes a la presidencia de la República, en principio ejercida, como ya hemos dicho, por el propio CSFA. El pacto incluía sin duda, como principal beneficio para la Hermandad, la celebración de elecciones legislativas y presidenciales libres y competitivas. Aunque el CSFA incumplió parcialmente dicho pacto desde la primavera de 2012 con la colaboración de diversos órganos judiciales con el fin de reducir el poder político de la Hermandad y de imponer a su candidato presidencial, como veremos a continuación, el resultado final fue que el candidato de la Hermandad, Mohammed Mursi, ganó las elecciones presidenciales de junio de 2012, y fue nombrado presidente de la República.

2. EL EJÉRCITO ROMPE EL PACTO Y BUSCA APOYO SOCIAL

Las claves que determinarían el futuro político del país, más allá del apoyo popular con que contara cada grupo o corriente, fueron las reformas legales e institucionales, y en torno a ellas se formarían las líneas de división. La primera de estas fue la reforma provisional de la Constitución, promovida por el CSFA, y sometida a referéndum el 19 de marzo de 2011. Aunque limitaba un tanto los poderes presidenciales, los mantenía en gran medida, concediéndole la potestad de reformar la constitución, disolver el Parlamento, y prorrogar la Ley de Excepción de seis en seis meses. Además, el texto dejaba en manos de la comisión electoral especial diseñada por el régimen de Mubarak el control de las elecciones presidenciales. La reforma, rechazada por la mayor parte de la oposición de izquierdas y los sectores liberales, fue, para sorpresa de muchos, apoyada por los Hermanos Musulmanes y por las diversas corrientes salafíes que habían salido a la luz y que comenzaban a revelarse como un actor político de primer orden. El argumento principal de estas fuerzas para darle su apoyo era que esta mantenía la *charía* (la tradición de la jurisprudencia islámica) como la fuente principal de legislación, aunque otras fuerzas políticas lo consideraron un indicio de la existencia de un pacto secreto entre militares e islamistas. Con el apoyo de los Hermanos Musulmanes y de los salafistas las enmiendas a la Constitución fueron aprobadas por un porcentaje de votantes superior al 70%. No obstante, poco después del referéndum, el 30 de marzo, el CSFA adoptaba unilateralmente una proclamación constitucional que incorporaba, junto a las enmiendas ratificadas, otras disposiciones cuyos efectos nocivos para las corrientes islamistas mencionaremos un poco más adelante.

A mediados de agosto, el gobierno filtró un borrador de una nueva proclamación constitucional que establecía una serie de “principios” a los que debería someterse el texto constitucional que redactara la futura Asamblea Constituyente, la elección de la cual, según el mismo texto, no quedaría únicamente en manos del Parlamento. Los “principios” se referirían, sobre todo, a “la salvaguarda de los derechos políticos y civiles”, y constituirían una barrera de protección frente a la previsible hegemonía de las fuerzas islamistas en el Parlamento. El CSFA quedaba encargado de proteger dichas prerrogativas, asegurándose de paso otras, como el control del presupuesto militar e, implícitamente, su propia inmunidad en el futuro. La filtración era un globo sonda destinado a los sectores políticos no islamistas que, temerosos del triunfo de estos en las elecciones, pedían que la Constitución se redactara antes de los comicios. A cambio de aceptar esta petición, el CSFA esperaba que se aceptara su papel de supervisor del futuro político del país.

La división entre las fuerzas políticas se manifestó en torno a la gran manifestación de rechazo al borrador filtrado del 18 de noviembre: convocada diez días antes de las elecciones legislativas por los islamistas, no fue secundada por la mayoría de las

“secularistas”, con la notable excepción del Movimiento de los Jóvenes del 6 de Abril. El CSFA, en palabras del conocido activista Nagued al-Borei, había sido capaz de:

“convencer a los Hermanos Musulmanes de que estaba dispuesto a apoyarlos frente a los expartidarios de Mubarak y a los otros partidos políticos, convenciendo poco después a los secularistas de que apoyaría el Estado secular frente a los islamistas. Así, había conseguido manipular a todas las partes para que dieran su consentimiento a su poder, dejándolas que discutieran entre ellas”¹.

En las elecciones legislativas celebradas entre finales de noviembre de 2011 y principios de enero de 2012, el Partido de la Libertad y la Justicia (PLJ), formado por los Hermanos Musulmanes, y que se presentó en coalición con fuerzas políticas secularistas, entre las que destacaban dos de las más distinguidas en la actividad contra Mubarak los años anteriores, el partido liberal Al-Gad y el naserista Karama, obtuvo una amplia mayoría relativa cercana al 43% de los escaños, mientras que un partido salafista, Al-Nur, lograba el 25% de los escaños, y otro partido islamista fundado por antiguos dirigentes de la Gamaa Islamiyya, el Partido de la Reforma y el Desarrollo (PRD), conseguía otro 1,8% de los escaños². La nueva Cámara representativa era especialmente importante, pues debía elegir una Asamblea Constituyente de 100 miembros para que redactara una Constitución permanente.

Las elecciones legislativas arrojaron pues una mayoría de más de dos tercios del Parlamento para las corrientes islamistas, que formalmente podrían diseñar a su gusto la nueva constitución egipcia. No obstante, la común etiqueta de islamistas de los tres partidos no ocultaba las grandes diferencias entre el PLJ y el PRD, por un lado, y el partido salafista Al-Nur por otro. Las corrientes salafistas, que siempre habían rechazado participar directamente en política, y en particular en los sistemas parlamentarios pluripartidistas, habían surgido como setas políticas a la luz del día tras la tormenta de enero y febrero de 2011. Fueron acusadas de ser favorecidas por el CSFA y de connivencia con él, así como de estar financiadas por Arabia Saudí y otros países del Golfo, todo ello para que comieran el terreno político a los Hermanos Musulmanes. Tales acusaciones ganarían gran verosimilitud con el paso del tiempo.

Tras intensos debates parlamentarios y extraparlamentarios, la mayoría parlamentaria islamista en el Parlamento determinó la formación de una Asamblea Constituyente con una mayoría igualmente islamista de un 70% de los miembros. Esto despertó el abierto rechazo de los partidos y fuerzas políticas no islamistas, la mayoría de cuyos representantes se retiraron de la Asamblea. Su argumento era que el órgano constituyente no debía estar dominado por la mayoría islamista, y que debía incluir una

¹ El-Bahr, S. 2011. "Negad El-Borai: hopes and fears in a time of change" (entrevista). *Al-Ahram Weekly*, 6-12 de octubre de 2011.

² Carnegie Endowment for International Peace: "2012 Egyptian Parliamentary Elections" en <http://goo.gl/rEKWPr>, consultado 17 de noviembre de 2015.

representación más amplia de coptos, mujeres y corrientes políticas minoritarias. De cualquier manera, la Asamblea fue disuelta poco después, en abril de 2012, por orden de un tribunal administrativo, que argumentó que su composición era ilegal por incluir parlamentarios, algo prohibido por la Declaración Constitucional vigente emitida por el CSFA. Así, finalmente, las elecciones presidenciales se celebrarían antes de que se elaborara la Constitución permanente.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales se celebró a finales de mayo de 2012. Previamente, el Consejo de Estado había rechazado la candidatura del salafista Salah Abu Ismail sobre la base de que tenía la doble nacionalidad estadounidense y egipcia, porque su madre la tenía así mismo, algo que Abu Ismail negaba. Por su parte, la Comisión Suprema para las Elecciones Presidenciales, formada por Mubarak con el fin de sustraer tales comicios a la supervisión de los órganos judiciales ordinarios, rechazó entre otras las candidaturas del liberal Aimán Nur y la del “hermano musulmán” Jeirat al-Chater, en ambos casos por sus antecedentes penales, a pesar de que sus condenas habían sido condenas políticas dictadas en época de Mubarak. Abu Ismail y Al-Chater eran dos candidatos de gran peso, y habían sido excluidos gracias a las disposiciones de la proclamación constitucional adoptada unilateralmente el 30 de marzo por el CSFA.

Los resultados de la primera vuelta de las elecciones arrojaron el resultado de un 24,78% para Mohammed Mursi, candidato de los Hermanos Musulmanes; un 23,66% para Ahmad Chafiq, coronel del Ejército, exministro en época de Mubarak y primer presidente del Gobierno nombrado por el CSFA; un 20,72% para el naserista Hamdín al-Sibahi; y un 17,47% para Abdel Moneim Abul Futuh, ex alto dirigente de los Hermanos Musulmanes con muchas mejores relaciones de las que tenía la dirección de la Hermandad con los sectores juveniles y críticos de esta, y con el resto de las fuerzas políticas.

Los candidatos que pasaron a la segunda vuelta fueron entonces Mursi y Chafiq, pero para que el segundo pudiera continuar su carrera presidencial el Tribunal Constitucional hubo de fallar, el 14 de junio de 2012, dos días antes de la segunda vuelta de las elecciones, que era inconstitucional una ley aprobada en mayo por el Parlamento que prohibía a los miembros del régimen de Mubarak presentarse a las elecciones. El mismo día, el Alto Tribunal fallaba así mismo que el Parlamento elegido en 2011-2012 debía ser disuelto, pues había sido elegido según un sistema electoral inconstitucional (al reservar escaños para las listas de partidos). En consecuencia, el CSFA retomaba el poder legislativo.

La segunda vuelta de las elecciones se celebró el 16-17 de junio de 2012. En el mismo momento en que se cerraban definitivamente los colegios electorales, el CSFA emitió una nueva Declaración Constitucional en virtud de la cual se atribuía, entre otras cosas, el poder legislativo, la facultad de nombrar la Asamblea Constituyente y el poder de decisión exclusivo sobre todos los asuntos que afectaran al Ejército, incluyendo su presupuesto y el nombramiento del ministro de Defensa. El 13 de junio el CSFA había

impuesto la ley marcial y el ministro de Justicia había autorizado a los oficiales militares a detener a ciudadanos y transferirlos ante tribunales militares.

El 18 de junio de 2012, los Hermanos Musulmanes declararon que, según los datos de sus interventores, Mohammed Mursi había ganado las elecciones presidenciales. Entre el 19 y el 24 de junio, sus partidarios se concentraron en la plaza de Tahrir para protestar contra la disolución del Parlamento y las otras medidas recientemente adoptadas por el CSFA y reclamar que los resultados oficiales reconocieran la victoria de Mursi. Finalmente, el 24 de junio la Comisión Suprema para las Elecciones Presidenciales anunció que Mursi había ganado las elecciones con el 51,7% de los votos. Según se dijo, la Comisión había sopesado atribuir la victoria a Chafiq, pero finalmente el riesgo de que el fraude provocara grandes enfrentamientos le hizo abandonar tal posibilidad.

3. EL APOYO DECRECIENTE DE SECTORES SECULARISTAS A LOS HERMANOS MUSULMANES

El anterior relato de los acontecimientos muestra a grandes rasgos cómo el CSFA y los Hermanos Musulmanes siguieron un juego de estrategia para hacerse con el poder, conscientes de la fuerza y la debilidad de cada uno, pero no menciona apenas el papel desempeñado por el resto de las fuerzas políticas y de la población políticamente activa en tal enfrentamiento. Si se comparan los votos que obtuvieron los Hermanos Musulmanes junto con sus aliados secularistas en las elecciones legislativas (más de 10 millones) con los que obtuvo su candidato en la primera vuelta de las elecciones presidenciales (5,7 millones) y luego en segunda (más de 13 millones), se observa que un gran número de quienes votaron a favor de la Hermandad en las legislativas y en la segunda vuelta de las presidenciales no eran partidarios incondicionales suyos. Tampoco la mayor parte de la corriente salafista dio su apoyo a la Hermandad, pues con los votos de los salafistas en las legislativas, 7,5 millones, aquella habría arrasado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que los salafistas no tenían candidato propio, sino, con toda probabilidad, a Chafiq, de la misma manera que luego apoyaron el golpe de Estado contra Mursi. En definitiva, un número muy importante de electores no islamistas apoyaron a los Hermanos Musulmanes para forzar el cambio definitivo de régimen en Egipto. Además de que esta deducción puede extraerse de las cifras, esta actitud de apoyo y su motivación nos consta por numerosos testimonios personales que recogimos sobre el terreno, y fue hecha pública por el Frente Nacional de Protección de la Revolución, formado por los Hermanos Musulmanes y, a título individual, por diversos dirigentes y personalidades naseristas, liberales y de los colectivos de “jóvenes de la revolución”, que el 22 de junio de 2012, mientras se esperaba el anuncio de los resultados oficiales, ratificaron en el Hotel Fairmont de El Cairo su apoyo a la legitimidad de Mursi. En contrapartida, arrancaron a la

Hermanidad el compromiso de que el futuro presidente gobernaría de manera inclusiva y consensual.

Con todo, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales más de un 48% de los votantes, esto es, más de 12 millones de egipcios, habían “preferido” a Ahmad Chafiq, el candidato del CSFA exmiembro del régimen de Mubarak. Un año después, un número probablemente mucho mayor deseaba que el presidente Mursi se sometiera a un plebiscito presidencial o convocara nuevas elecciones presidenciales, y gran parte de ellos apoyaron que fuera depuesto por el Ejército, el 3 de julio de 2013. Puede pensarse que esta afirmación no está justificada por los datos, pero es imposible contar con cifras fidedignas en este sentido. Los datos que sí tenemos es que hubo manifestaciones millonarias para pedir el fin del mandato de Mursi; que la gran mayoría de las fuerzas políticas secularistas se unieron a la petición; que el naserista Hamdín al-Sibahi, cuyo partido Karama se había aliado con los Hermanos Musulmanes en las legislativas de 2011-2012, y que había obtenido 4,8 millones de votos en la primera vuelta de las presidenciales, apoyó el golpe de Estado; y lo propio hizo el partido salafista Al-Nur, que había obtenido más de 7 millones de votos en las legislativas. Además, numerosos exdirigentes de los Hermanos Musulmanes, entre ellos Abdel Moneim Abul Futuh, que había obtenido más de 4 millones de votos en la primera vuelta de las presidenciales, aun rechazando el golpe de Estado, se habían mostrado muy críticos con Mursi, y le habían pedido que accediera a celebrar el plebiscito o las nuevas elecciones presidenciales para resolver el grave enfrentamiento en la sociedad. ¿Qué había sucedido?

4. EL DERROCAMIENTO DE MURSI. EL ESTADO, EJE DEL CONFLICTO

No cabe duda -y de ello ha habido constatación posterior- que poderosas instituciones del Estado (como el Ejército, la policía y los aparatos de Seguridad, diversos ministerios y parte de la magistratura) e importantes poderes fácticos (grandes magnates - como por ejemplo Naguib Sawiris- y sus medios de comunicación,) conspiraron o contribuyeron decisivamente a desarrollar la campaña popular contra Mursi y los Hermanos Musulmanes. No obstante, gran parte de los egipcios que se levantaron contra Mubarak y luego contra Mursi debían ser perfectamente conscientes de ello.

Puesto que me costaba creer lo que estoy afirmando aquí y leía en los medios de comunicación independientes no solo acerca de la dimensión del movimiento contra Mursi sino también de sus razones, a principios de octubre de 2013 fui a El Cairo durante poco más de una semana. Mi objetivo principal, además de otros menesteres bibliográficos, era entrevistarme con diversos amigos activistas cuyas trayectorias vitales e inclinaciones políticas me eran conocidas. También me entrevisté con Mohammed Zaraa, del Centro El

Cairo de Derechos Humanos. Quería saber qué habían hecho y pensaban, ellos que no son islamistas, en torno a la cuestión de la deposición de los Hermanos Musulmanes.

La respuesta común fue que, según mi pequeño sondeo, lo que decían los medios de comunicación era cierto. Esta es, a grandes rasgos, la paleta de respuestas.

Uno de estos amigos, un intelectual marxista economista de formación, algunas de cuyas obras hemos citado en este trabajo pero al que preferimos no citar expresamente, que habitualmente reside en el extranjero y que nunca se ha asociado de ninguna manera con el poder político o sus instituciones culturales, nos dijo que “la nueva situación era menos mala que la que había antes”, puesto que los Hermanos Musulmanes habían demostrado “no tener ni idea de cómo dirigir el país”. Por otro lado, según él, se habían dedicado a penetrar “el Estado” instalando a sus partidarios no solo en los cargos políticos, sino también en los funcionariales. Señalaba así mismo que el Estado egipcio era un Estado con instituciones de muy larga tradición y con un funcionamiento y una conciencia institucional a pesar de los desmanes de los regímenes (elites) anteriores, que no iba a permitir que su funcionamiento y su concepción fueran transformados por la Hermandad. Finalmente, decía que el apoyo más o menos explícito dado por Mursi a la yihad en Siria a principios del verano de 2013 había colmado la paciencia de muchos.

Un amigo naserista “de toda la vida”, que regenta un pequeño café en un barrio popular, nos aseguró que él y muchos de sus amigos habían apoyado a los Hermanos Musulmanes a pesar de su aversión histórica ideológica hacia ellos para propiciar el cambio político, y en atención a su participación en la revolución de 2011. Sin embargo, habían detestado su manera de gobernar desde el primer momento, sin dar demasiados detalles sobre esto. No ignoraba la instigación de los poderes fácticos al levantamiento contra Mursi. Explícitamente decía: “Es un trabajo de los servicios secretos. Lo sabemos, pero nos da igual, como nos da igual el «proceso político». Nosotros quitamos a Mubarak cuando quisimos sin elecciones, ¿por qué no podíamos quitar a Mursi?”. Afirmaba sin dudar que las manifestaciones contra Mursi habían sido más numerosas que aquellas contra Mubarak.

Una amiga, a la que no le conozco ideas políticas concretas, profesora de francés, me decía: “Sabemos que [los Hermanos Musulmanes] se enfrentaban a las trabas y el boicot de diversas instituciones del Estado o gran parte de sus miembros [policía, jueces, departamentos económicos] y que no podían cambiar o arreglar todo en un año, pero ¿no podían arreglar lo del precio de la bombona de butano, la pequeña reivindicación de los taxistas, etc.? No hicieron nada, más que dedicarse a sus asuntos islámicos”. Y ¿no temía mi amiga que con el acceso al poder de los militares se volviera a la misma situación anterior, o no pensaba que en gran medida, en apenas tres meses, se había vuelto a ella? “Claro -me dijo-, sabíamos que así sería en gran parte, pero no teníamos opción”.

Finalmente, Mohamed Zaraa, del Centro El Cairo de Derechos Humanos, y larga trayectoria en ONGs similares, intentó hacer un balance de las violaciones de los derechos

humanos tanto por parte del CSFA como del Gobierno de Mursi, sin inclinarse en este sentido por ninguna de las partes³. No obstante, intentamos que hiciera un análisis más político, y nos contestó, entre otras cosas: “Por supuesto, los militares, muchos jueces, muchos miembros del aparato del Estado no se preocupan por lo que quiere la gente: temían solo por *su Estado*”. No obstante, atribuía la responsabilidad principal de lo sucedido a los Hermanos Musulmanes: como no podían contar plenamente con la policía, reacia a obedecerlos o dispuesta a boicotarlos, habían utilizado a sus propios partidarios, recurriendo a la violencia, para imponer el orden y defenderse de quienes les atacaban; pero, sin embargo, no habían intentado controlar a la policía, e incluso la habían protegido contra quienes pretendían enjuiciar a sus miembros por sus abusos, de la misma manera que se habían aliado al Ejército:

“Esa es la cuestión: los Hermanos Musulmanes eligieron, y eligieron unirse al Ejército. Pensaron que éste les ayudaría (...), pero no se dieron cuenta de que el Ejército no podía ser su aliado durante mucho tiempo. Tiene sus propios intereses. Tiene, por ejemplo, muchos intereses económicos que defender, y que no quiere poner en peligro (...) Si los Hermanos Musulmanes se hubieran aliado con la gente y la revolución, hoy no viviríamos una situación fascista”.

No obstante, a pesar de que -siempre en opinión Zaraa- mucha gente desconfiaba del Ejército y de los sectores del antiguo régimen vinculados a él, prefirieron que aquellos protegieran una cierta “forma de Estado”:

“Hay un ambiente de excepcionalidad, de movilización general, un ambiente que, quizás un tanto licenciosamente, podemos calificar de «fascista». Hoy es fácil que te subas a un taxi y que, si le dices al taxista: «¿Sabes que han matado 1.600 en Rabia Al-Adawiyya?», te diga: «Dios quiera que se mueran todos». Este es el ambiente que hay en la calle. La gente normal de la calle tenía miedo de los Hermanos Musulmanes, los consideraba más peligrosos que cualquier amenaza externa. Probablemente esto tiene que ver con la idea tan repetida de que los Hermanos Musulmanes no creían en las fronteras nacionales, que se consideraban más comprometidos con la comunidad islámica que con el Estado. En mi opinión, el ciudadano corriente temió por el Estado, por la forma del Estado, a pesar de sus numerosos defectos. Pensaron que los Hermanos Musulmanes eran un peligro para el propio Estado (...) La gente normal temía por el Estado en su forma actual, y hay que decir que los Hermanos Musulmanes contribuyeron a incrementar esos miedos al recurrir a sus propias milicias o a sus simpatizantes para que disolvieran una concentración, o para que cercaran la Ciudad de la Información, o la sede del Tribunal Constitucional, impidiendo a los magistrados que entraran (...) El Estado de julio [de 1952], o el Estado militar, lo que está haciendo es defenderse a sí mismo, y el resto de la gente que ha puesto su confianza en él lo ha hecho porque no le quedaba otra alternativa. Le haré una pregunta: ¿Si los Hermanos Musulmanes hubieran dicho «nosotros vamos a ponernos del lado de la revolución, del lado del 25 de enero, haremos una buena

³ Javier Barreda: “Si los Hermanos Musulmanes se hubieran aliado con la gente y la revolución, hoy no viviríamos una situación fascista”. Entrevista con Mohamed Zaraa, del Centro El Cairo para los Derechos Humanos, *Rebelión*, 28 de octubre de 2013 (<http://goo.gl/htFVGN>, consultada el 22 de octubre de 2015).

Constitución, no excluiríamos a nadie, haremos buenas leyes, mejoraremos la situación económica y social, mejoraremos la situación de los derechos humanos»... se imagina? Hubiera sido imposible que se produjera lo que se produjo el 30 de junio (...) Así que el razonamiento, incluso de algunos activistas de los derechos humanos, fue: «Más vale que tengamos un aparato represivo que no sirva a los intereses de los Hermanos Musulmanes, porque si se reestructura ahora el Ministerio puede ser peor».

Sin que se pueda hablar de mayorías o minorías, no cabe duda, en nuestra opinión, de que, con la intención de salvaguardar distintos aspectos del Estado republicano (no necesariamente los mismos en todos los casos), millones de egipcios prefirieron apoyar al Ejército, encomendándole dicha salvaguarda, aun a riesgo de que ello pudiera implicar también el retorno de muchos elementos del régimen anterior que no deseaban; todo ello ante el futuro incierto y para ellos más temible que implicaba el rediseño del Estado por los Hermanos Musulmanes. En absoluto pretendemos afirmar que la mayor parte de los millones de personas que pidieron el abandono del poder por parte de Mursi desearan un retorno, ni siquiera una reedición actualizada de ninguno de los regímenes republicanos anteriores, sino tan solo conservar los que les parecían los elementos más valiosos del Estado, en cuyo marco habían operado dichos regímenes durante la mayor parte del tiempo (sus funciones socioeconómicas, una cierta separación de la religión y el Estado, un cierto carácter nacional).

Entre 2011 y 2013, un concepto manejado por numerosos intelectuales fue el de la necesidad de constituir una “segunda república”, en lugar de abrir el paso a un “nuevo régimen”; una república fruto del consenso que aunara lo positivo del Estado anterior con las enmiendas necesarias, incluyendo un sistema político democrático. Finalmente, los egipcios se vieron obligados de nuevo a elegir dentro de una disyuntiva a la que se les había intentado confrontar siempre durante la época de Mubarak: la posibilidad de un “Estado islámico” de contornos inciertos, pero con indudables trazos de autoritarismo, o el retorno al poder de elementos del régimen anterior que sin duda recurrirían al autoritarismo, pero cerrarían el paso a una transformación radical del Estado en cuanto a sus fines y objetivos.

Desde julio de 2013, el nuevo régimen dirigido por Abdel Fattah al-Sisi ha confirmado los peores presagios. La represión -sin precedentes en la época republicana- y la exclusión política presiden su mandato. La violencia contra el Estado por algunos sectores del islamismo ha alcanzado igualmente sus cotas más altas. Y, a pesar de que se han celebrado elecciones legislativas en los mismos días en los que concluíamos la redacción de estas páginas, todavía no apunta en el horizonte una estrategia que pueda traer la reconciliación y la estabilidad política a un país profundamente dividido que debe seguir afrontando, como siempre en las últimas décadas, una situación económica y social muy precaria.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- ABD AL-MAGID, W. (1994). "Crise du dialogue et dialogue de la crise en Égypte. L'expérience du dialogue national de 1994". *Égypte/Monde Arabe* 20 (première série), págs. 11-23.
- ABDEL NASSER, G. (1997). "Les élections de 1995 dans le gouvernorat du Caire". En: Gamblin, S. (ed.) 1997. *Contours et détours du politique en Égypte. Les élections législatives de 1995*. El Cairo: L'Harmattan-CEDEJ, págs. 199-227.
- ABDEL-MALEK, A. (1965). *Anthologie de la littérature arabe contemporaine. Les essais*. París: Éditions du Seuil.
- ABDEL-MALEK, A. (1962). *Égypte. Société militaire*. París: Éditions du Seuil.
- ACLIMANDOS, T. (2005). "Les Frères: de la clandestinité au tamkîn". En Kohstall, F. (ed.) (2006). *L'Égypte dans l'année 2005*. El Cairo: CEDEJ (<http://www.cedej-eg.org/spip.php?article129&lang=fr>, consulta del 19 de marzo de 2013).
- ACLIMANDOS, T. (1994). "Les ingénieurs militaires égyptiens". *Monde Arabe. Maghreb-Machrek* 146, págs. 7-26.
- ADAMS, R. (2000). "Self-Targeted Subsidies: The Political and Distributional Impact of the Egyptian Food Subsidy Program". *Economic Development and Cultural Change* 49:1, págs. 115-136.
- AGUIRRE ROJAS, C. A. (2010). *Economía Moral de la multitud*. Méjico: Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
- ALBA RICO, S. (1995). *Las reglas del caos. Apuntes para una antropología del mercado*. Madrid: Anagrama.
- ALI, A. (2010). "Egypt's collision course with history". *On Line Opinion*: 9 de julio de 2010 (<http://goo.gl/htXwvt>, consulta del 16 de julio de 2012).
- AL-KHAWAGA, D. (1997). "Le Parti National Démocrate et les élections de 1995". En: Gamblin, S. (ed.) 1997. *Contours et détours du politique en Égypte. Les élections législatives de 1995*. El Cairo: L'Harmattan-CEDEJ, págs. 83-99.
- ALMOND, G.A. & POWELL, J.B. (1966). *Comparative Politics: A Developmental Approach*. Boston: Little, Brown and Company.
- AL-SAYYID, M. K. (1997). "Comment analyser les élections législatives en Égypte?". En: Gamblin, S. (ed.) 1997. *Contours et detours du politique en Égypte. Les élections législatives de 1995*. El Cairo: L'Harmattan-CEDEJ, págs. 7-17.
- AL-SAYYID, M. K. (1994). "Le syndicat des Ingénieurs et le courant islamique". *Monde Arabe. Maghreb Machrek* 146, págs. 27-39.
- AL-SAYYID-MARSOT, A. L. (1985). *A Short History of Modern Egypt*. Cambridge: Cambridge University Press.

- ÁLVAREZ-OSSORIO, I. & L. Zaccara (eds.) (2009). *Elecciones sin elección. Procesos electorales en Oriente Medio y el Magreb*. Guadarrama (Madrid): Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.
- AMER, M. (2011). “Les transitions incertaines de l'école à l'emploi”. En: Battesti, V. & Ireton, F. (eds.) 2011. *L'Égypte au présent. Inventaire d'une société avant révolution*. Arles: Sindbad/Actes de Sud, págs. 749-766.
- AMER, M. (2002). “Youth Labor Market Trajectories: A Comparison of the 1980s and 1990s”. En: Assaad, R. (ed.) 2002. *The Egyptian Labor Market in a Era of Reform*. El Cairo: The American University in Cairo Press, págs. 223-256.
- ANDERSON, B. (1983). *Imagined communities: Reflections on the origins and spread of nationalism*. Londres: Verso.
- ANSARI, H. (1987). *Egypt. The stalled society*. El Cairo: The American University in Cairo Press.
- ANSARI, H. (1984). “The Islamic Militants in Egyptian Politics”. *International Journal of Middle East Studies* 16:1, págs. 123-144.
- ARAFAT, A. al-Din. (2012). “Les Frères Musulmans égyptiens au piège du pluralisme”. *Le Monde Diplomatique*, mayo de 2012, págs. 8-9.
- ARENDT, H. (1998). *Crisis de la República*. Madrid: Taurus.
- ARENDT, H. (1988). *Sobre la revolución*. Madrid: Alianza Editorial.
- ARIGITA MAZA, E. (2005). *El islam institucional en el Egipto contemporáneo*. Granada: Ediciones de la Universidad de Granada.
- ASSAAD, R. (2002). “The Transformation of Egyptian Labor Market: 1988-1998”. En: Assaad, R. (ed.) 2002. *The Egyptian Labor Market in an Era of Reform*. El Cairo: The American University in Cairo Press, págs. 3-64.
- ASSAAD, R. (ed.) (2002). *The Egyptian Labor Market in an Era of Reform*. El Cairo: The American University in Cairo Press.
- AYALON, D. (1996). *Le phénomène mamelouk dans l'orient islamique*. París: Presses Universitaires de France.
- AYEB, H. (2012). “The marginalization of small peasantry: Egypt and Tunisia”. En: R. Bush & H. Ayeb (eds.) 2012. *Marginality and Exclusion in Egypt*. Londres: Zed Books, págs. 72-96.
- AYUBI, N. N. (1998). *Política y sociedad en Oriente Próximo. La hipertrofia del estado árabe*. Barcelona: Bellaterra.
- AYUBI, N. (1996). *El islam político. Teorías, tradición y rupturas*. Barcelona: Edicions Bellaterra.
- AYUBI, N. N. (1991). *The State and Public Policies in Egypt since Sadat*. Reading: Ithaca Press.
- AZAOLA PIAZZA, B. (2008). *Historia del Egipto contemporáneo*. Madrid: Los Libros de la Catarata.
- AZAOLA PIAZZA, B. (2006). *La universidad como campo de acción política en el Norte de África: el caso de Egipto*. Madrid: Tesis Doctoral (Universidad Autónoma de Madrid).

- BARREDA SUREDA, J. (2012). "Origen, evolución y caída del régimen de Mubarak", *Sociología Histórica* 1, págs. 109-155.
- BARREDA SUREDA, J. (2009). "Funciones, disfunciones e ineficiencias de las elecciones no democráticas en Egipto (1981-2008)". En: Álvarez-Ossorio, I. & Zaccara, L. (eds.) 2009. *Elecciones sin elección. Procesos electorales en Oriente Medio y el Magreb*. Guadarrama (Madrid): Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, págs. 215-261.
- BARREDA SUREDA, J. (2006). "La escisión del régimen de Mubarak". *Hesperia Culturas del Mediterráneo* 4, págs. 59-79.
- BARREDA SUREDA, J. (2004). "Egipto: la prensa y la calle". *Nación Árabe* 52, págs. 73-84.
- BARREDA SUREDA, J. (2000). "La democracia de Mubarak: una eterna transición hacia la transición". *Nación Árabe* 42, págs. 49-71.
- BARREDA SUREDA, J. (1996A). "La anatematización de Abu Zeid. ¿Estado del islamismo egipcio o islamismo del estado egipcio?". *El Viejo Topo* 92, págs. 45-52.
- BARREDA SUREDA, J. (1996B). "La sociedad civil árabe. Entrevista con Sa'ad al-Dîn Ibrâhîm". *Idearabia* 1, págs. 29-35.
- BARREDA SUREDA, J. (1992). "Entrevista a Nawal al-Saadawi". *Nación Árabe* 15, págs. 33-36.
- BARREÑADA BAJO, I. (2013). "Sindicatos y movimientos de trabajadores en los países árabes. Entre el sistema y la sociedad". En: Álvarez-Ossorio, I. (ed.) 2013. *Sociedad civil y contestación en Oriente Medio y Norte de África*. Barcelona: CIDOB-Edicions Bellaterra, págs.111-136.
- BARREÑADA BAJO, I. (2011). "Las revoluciones árabes, la cuestión de la justicia social y el papel los sindicatos". *Anuario 2011*. Madrid: Fundación Primero de Mayo, págs. 261-277.
- BATTESTI, V. & Ireton, F. (eds.) (2011). *L'Égypte au présent. Inventaire d'une société avant révolution*. Arles: Sindbad/Actes de Sud.
- BEININ J. (2012). "The rise of Egyptian Workers" *Carnegie Papers*. Carnegie Endowment for International Peace (<http://goo.gl/FEbrCu>, consulta del 28 de junio de 2012).
- BEININ, J. & El-Hamalawy, H. (2007). "Egyptian Textile Workers Confront the New Economic Order". *Middle East Report Online* (<http://www.merip.org/mero/mero032507>, consulta del 26 de marzo de 2007).
- BEININ, J. (2008). "Underbelly of Egypt's neoliberal agenda", *Middle East Report Online*: 5 de abril de 2008 (<http://www.merip.org/mero/mero040508.html>, consulta del 17 de octubre de 2015).
- BEININ, J. (2005). "Popular Social Movements and the Future of Egyptian Politics". *Middle East Report Online* (<http://www.merip.org/mero/mero031005>, consulta del 10 de septiembre de 2015).
- BEININ, J. & Lockman, Z. (1998). *Workers in the Nile. Nationalism, Communism, Islam, and the Egyptian Working Class 1882-1954*. El Cairo: The American University in Cairo Press.

- BEN NÉFISSA, S. (2007). “«Ça suffit»? Le «haut» et le «bas» du politique en Égypte”. *Politique Africaine* 108, págs. 5-24.
- BEN NÉFISSA, S. (1996). “La libéralisation de la vie associative et la relation état/société en Égypte”. En: CEDEJ (ed.) 1996. *Âge libéral et néo-libéralisme. VIe Rencontres franco-égyptiennes de science politique*. El Cairo: CEDEJ, págs. 99-119.
- BEN NÉFISSA, S. & Arafat, A. (2005). *Vote et démocratie dans l'Égypte contemporaine*. París: Karthala.
- BIANCHI, R. (1986). “The Corporatization of the Egyptian Labor Movement”. *The Middle East Journal* 40: 3, págs. 429-444.
- BIBLAWI, H. (1990). “The Rentier State in the Arab World”. En: Luciani, G. (ed.) 1990. *The Arab State*. Berkeley-Los Angeles: University of California Press, págs. 85-98.
- BILL, J. A. & Springborg, R. (1994). *Politics in the Middle East*. Nueva York: Harper Collins College Publishers.
- BINDER, L. (1978). *In a Moment of Enthusiasm. Political Power and the Second Stratum in Egypt*. Chicago y Londres: University of Chicago Press.
- BLAYDES, L. (2011). *Elections and Distributive Politics in Mubarak's Egypt*. Nueva York: Cambridge University Press.
- BLIN, L. (1992). “Le programme de stabilisation et d'ajustement structurel de l'économie égyptienne”. *Egypte/Monde Arabe* 9 (première série), págs. 13-46.
- BOUTALEB A. (2011). “La jeunesse: une réalité massive, une catégorie émergente. En: Battesti, V. & Ireton, F. (eds.) 2011. *L'Égypte au présent. Inventaire d'une société avant révolution*. Arles: Sindbad/Actes de Sud, págs. 731-748.
- BOUZA-BREY, L. (1996). “El poder y los sistemas políticos”. En: Caminal Badia, M. (ed.) 1996. *Manual de Ciencia Política*. Madrid: Tecnos, págs. 39-84.
- BRINEN, R.; Korany, B. & Noble, P. (eds.) (1995). *Political Liberalization and Democratization in the Arab World* (vol. 1 *Theoretical Perspectives*). Boulder-Londres: Lynne Rienner Publishers.
- BROWN, N. J. (2004). “Nasserism's Legal Legacy”. En: Podesh, E. & Winckler, O. (eds.) 2004. *Rethinking Nasserism. Revolution and Historical Memory in Modern Egypt*. Gainesville: University Press of Florida, págs. 127-143.
- BUCCIANI, A. (1984). “Les élections législatives en Égypte”. *Monde arabe: Maghreb-Machrek* 106, págs. 54-76.
- BURGAT, F. (2010). “Salafistes contre Frères Musulmans”. *Le Monde Diplomatique*, junio de 2010, p. 7.
- BUSH, R. & Ayeb, H. (eds.) (2012). *Marginality and Exclusion in Egypt*. Londres: Zed Books.
- CAMAU, M. (1991). “Monsieur le gouvernement: personnalisation et réalité substantielle du pouvoir”. En: VVAA 1991, *Etudes politiques du monde arabe. Approches globales et approches spécifiques. Actes du deuxième colloque franco-égyptien de politologie*. París, 3-5 julio de 1989. El Cairo: CEDEJ, págs. 163-178.
- CAMAU, M. (ed.) (1991). *Changements politiques au Maghreb*. París: CNRS.

- CAMINAL BADIA, M. (ed.) 1996. *Manual de Ciencia Política*. Madrid: Tecnos.
- CANNUYER, C. (2011). "Les coptes: renouveau spirituel et repli communautaire". En: Battesti, V. & Ireton, F. (eds.) 2011. *L'Égypte au présent. Inventaire d'une société avant révolution*. Arles: Sindbad/Actes de Sud, págs. 901-916.
- CAPMAS (Central Agency for Public Mobilization and Statistics) (1986). *Census of Population, Housing and Establishments. Second Volume. Final Results*. El Cairo: CAPMAS.
- CAPMAS (Central Agency for Public Mobilization and Statistics) (1990). *Statistical Yearbook. Arab Republic of Egypt 1952-1989*. El Cairo: CAPMAS.
- CARLIER, O. (1991). "Gestuelle du pouvoir et modèle de souveraineté: Les figures présidentielles de l'autorité dans l'Algérie indépendante 1962-1968". En: Camau, M. (ed.) (1991). *Changements politiques au Maghreb*. París: CNRS, págs. 107-130.
- CARNEGIE ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE. (2011). "Results of Egypt's People's Assembly Election". Washington: Carnegie Endowment for International Peace. (<http://goo.gl/kGCQa>) (Consulta: 5 de julio 2012).
- CARRE, O. & Seurat, M. (2001). *Les frères musulmans (1928-1982)*. París: L'Harmattan.
- CEDEJ (ed.) (1996). *Âge libéral et néo-libéralisme. VIe Rencontres Franco-Égyptiennes de Sciences Politique*. El Cairo: CEDEJ.
- CHARTOUNI-DUBARRY, M. (ed.) (2001). *Armée et nation en Égypte: pouvoir civil, pouvoir militaire*. París: Institut français des relations internationales.
- CLEMENT, F. (2011). "Le nouveau marché du travail, les conflits sociaux et la pauvreté". En: Battesti, V. & Ireton, F. (eds.) 2011. *L'Égypte au présent. Inventaire d'une société avant révolution*. Arles: Sindbad/Actes de Sud, págs. 595-624.
- COLE, J. (2015). *The New Arabs. How the Millennial Generation is Changing the Middle East*. Nueva York: Simon & Schuster Paperbacks.
- COLLA, E. (2011). "The People Want", *Middle East Report* 263, págs. 8-13.
- COTTENET-DJOUKELFIT, H. (2001). L'industrialisation de l'Égypte au XXe siècle". *Égypte/Monde Arabe* 4-5 (deuxième série), págs. 135-171.
- CRECELIUS, D. (1998). "Egypt in the eighteenth century". En: Dally, M. W. (ed.) (1998). *The Cambridge History of Egypt*, v. 2. Cambridge: Cambridge University Press, págs. 59-86.
- DALLY, M. W. (ed.) (1998). *The Cambridge History of Egypt*, v. 2. Cambridge: Cambridge University Press.
- DAWISHA, A. & Zartman, W. (eds.) (1988). *Beyond Coercion: the Durability of the Arab State*. Londres/Nueva York: Croom Helm.
- DEBRAY, R. (1981). *Critique de la raison politique ou l'inconscient religieux*. París: Gallimard.
- DENIS, E. (2011). "Transformations du territoire, urbanisation et libéralisme autoritaire". En: Battesti, V. & Ireton, F. (eds.) (2011). *L'Égypte au présent. Inventaire d'une société avant révolution*. Arles: Sindbad/Actes de Sud, págs. 75-110.

- DJOUFELKIT-COTTENET, H. (2011). "L'industrie depuis le début des années 1970: histoire d'un développement contrarié". En: Battesti, V. & Ireton, F. (eds.) 2011. *L'Égypte au présent. Inventaire d'une société avant révolution*. Arles: Sindbad/Actes de Sud, págs. 493-534.
- DROZ-VINCENT, P. (2001). "Armée et pouvoir politique en Égypte: la dimension économique du pouvoir de l'armée". En: Chartouni-Dubarry, M. (ed.) 2001. *Armée et nation en Égypte: pouvoir civil, pouvoir militaire*. París: Institut français des relations internationales, págs. 73-105.
- DUPRET, B. (ed.) (1994). *Le phénomène de la violence politique: perspectives comparatistes et paradigme égyptien*. El Cairo: CEDEJ.
- EL AMRANI, Issandr (2005). "Controlled Reform in Egypt. Neither Reformist nor Controlled", *Middle East Report*, 15 de diciembre de 2005 (<http://www.merip.org/mero/mero121505>, consulta del 29 de abril de 2006).
- EL-GHOBASHY, Mona (2006). "Egypt's Paradoxical elections", *Middle East Report* 238, primavera de 2006 (<http://www.merip.org/mer/mer238/egypts-paradoxical-elections>, consulta del 29 de abril de 2006).
- EL-HAMALAWY, Hossam (2007). "Comrades and Brothers", *Middle East Report* 242, primavera de 2007 (<http://www.merip.org/mer/mer242/comrades-brothers>, consulta del 19 de julio de 2007).
- EL KADI, G. (2009). "Les enjeux du patrimoine moderne en Égypte". *Égypte/Monde Arabe* 5-6 (troisième série), págs. 191-220.
- EL-SAKKA, M.I.T. (2010). "Remittances of Egyptian Migrants: An Overview". *Middle East Institute*, 18 de abril de 2010 (<http://www.mei.edu/content/remittances-egyptian-migrants-overview>, consulta del 2 de octubre de 2015).
- EL SAYYED, M. K. (2011). "Économie politique de la croissance: du capitalisme d'Etat à la liberalisation". En: Battesti, V. & Ireton, F. (eds.) 2011. *L'Égypte au présent. Inventaire d'une société avant révolution*. Arles: Sindbad/Actes de Sud, págs. 405-436.
- EL-SHEIKH, I. A.; Van de Koppel, C. A. & Peters, R. (eds.) (1982). *The Challenge of the Middle East*. Amsterdam: University of Amsterdam.
- EMRICH, C. G.; Brower, H.; Feldman, J. & Garland, H. (2001). "Images in Words: Presidential Rhetoric, Charisma, and Greatness". *Administrative Science Quarterly* 46, págs. 527-557.
- FAHMY, N. S. (2002). *The Politics of Egypt. State-Society Relationship*. Londres: Routledge-Curzon.
- FARGUES, P. (2011). "Croissance et mutations démographiques au XXe siècle". En Battesti, V. & Ireton, F. (eds.) 2011. *L'Égypte au présent. Inventaire d'une société avant révolution*. Arles: Sindbad/Actes de Sud, págs. 41-74.
- FARGUES, P. (1994). "Violence politique et démographie en Égypte". En: Dupret, B. (ed.) 1994. *Le phénomène de la violence politique: perspectives comparatistes et paradigme égyptien*. El Cairo: CEDEJ, págs. 223-243.

- FERGANY, N. (1991). "A Characterization of the employment problem in Egypt". En: Handoussa, H. & Potter, G. (eds.) 1991. *Employment and Structural Adjustment. Egypt in the 1990s*. El Cairo: The American University in Cairo Press, págs. 25-56.
- FERRIE, J. N. (2008). *L'Égypte entre démocratie et islamisme. Le système Mubarak a l'heure de la sucesion*. París: Autrement.
- FLORIN, B. (2011). "Des cités nassériennes aux villages nouvelles du désert: la fin du logement social?" En: Battesti, V. & Ireton, F. (eds.) 2011. *L'Égypte au présent. Inventaire d'une société avant révolution*. Arles: Sindbad/Actes de Sud, págs. 129-144.
- GAMBLIN, S. (ed.) (1997). *Contours et détours du politique en Égypte. Les élections législatives de 1995*. París: L'Harmattan-CEDEJ.
- GARCIA COTARELO, R. & Paniagua Soto, J. L. (1987). *Introducción a la ciencia política: unidades didácticas*. Madrid: UNED.
- GOBE, E. (1999). *Les hommes d'affaires égyptiens. Démocratisation et secteur privé dans l'Égypte de l'Infitala*. París: Karthala.
- GODOY ARAYA, O. (2004). "Libertad y consentimiento en el pensamiento político de John Locke". *Revista de Ciencia Política* 24:2, págs. 159-182.
- GÓMEZ GARCÍA, L. (2013). "La irrupción del salafismo en la política". *Afkar/Ideas* 37, págs. 19-23.
- GÓMEZ GARCÍA, L. (2009). *Diccionario de islam e islamismo*. Madrid: Espasa.
- GÓMEZ GARCÍA, L. (1996). *Marxismo, islam e islamismo: el proyecto de Adil Husayn*. Madrid: CantArabia.
- GÓMEZ GARCÍA, L. (1992). "La prensa de partidos: termómetro del devenir democrático egipcio". *Awraq* 13, págs. 69-107.
- GONZALEZ-QUIJANO, Y. (1998). *Les gens du livre. Édition et champ intellectuel dans l'Égypte républicaine*. París: CNRS Éditions.
- GRAMSCI, A. (2009). *La política y el estado moderno*. Madrid: Diario Público.
- GUAAYBES T. (2011). "Les médias égyptiens et l'internationalisation des flux". En: Battesti, V. & Ireton, F. (eds.) 2011. *L'Égypte au présent. Inventaire d'une société avant révolution*. Arles: Sindbad/Actes de Sud, págs. 919-952.
- GUITY, G. (1991). *Mahfouz par Mahfouz. Entretiens avec Gamal Ghitany*. París: Sindbad.
- HAARMAN, U. y. Philipp, T. (1998). *The Mamluks in Egyptian politics and Society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- HAMAD, A. S. (2000). "L'intervention administrative dans la liberté d'expression". *Égypte/Monde Arabe* 3 (deuxième série), págs. 25-48.
- HAMZA, D. (2000). "La censure et comment la contourner. Dire et ne pas dire dans l'Égypte contemporaine". *Égypte/Monde Arabe* 3 (deuxième série), págs. 11-23.
- HANDOUSSA, H. & Potter, G. (eds.) (1991). *Employment and Structural Adjustment. Egypt in the 1990s*. El Cairo: The American University in Cairo Press.
- HANNA, N. (2003). *In praise of books. A cultural History of Cairo Middle Class, Sixteenth to the Eighteenth Century*. Siracusa: Syracuse University Press.

- HARIK, I. (1998). *Economic Policy Reform in Egypt*. El Cairo: American University in Cairo Press.
- HARIK, I. (1980). "Leonard Binder, In a Moment of Enthusiasm. Political Power and the Second Stratum in Egypt" (Review). *International Journal of Middle East Studies* 11: 4, págs. 563-565.
- HARIK, I. (1974). *The Political Mobilization of Peasants*. Bloomington: Indiana University Press
- HARMAN, Chris (1994). "The Prophet and the Proletariat", *International Socialism Journal*, 2:64 (<https://www.marxists.org/archive/harman/1994/xx/islam.htm>, consulta del 10 de mayo de 2014)
- HASSABO, C. (2005). "Gamal Moubarak au centre du pouvoir: une succession achevée?". En: Kohstall, F. (ed.) 2005. *L'Égypte dans l'année: Chronique politique 2004*. El Cairo: CEDEJ, págs. 9-24.
- HASSABO, C. (2006). "Moubarak «sans cravate»: un Moubarak «démocratique»". En: Kohstall, F. (ed.) 2006. *L'Égypte dans l'année 2005*. El Cairo: CEDEJ, págs. 29-54.
- HATHAWAY, J. (1998). "Egypt in the seventeenth century". En: Dally, M. W. (ed.) 1998. *The Cambridge History of Egypt*, v. 2. Cambridge: Cambridge University Press, págs. 34-58.
- HENDRIKS, B. (1985). "Egypt's Elections, Mubarak's Bind". *MERIP Reports* 129, págs. 11-18.
- HENDRIKS, B. (1982). "The Legal Left and Its Urban Activists: A Cairo Case Study". En: El-Sheikh, I. A.; Van de Koppel, C. A. & Peters, R. (eds.) 1982. *The Challenge of the Middle East*. Amsterdam: University of Amsterdam, págs. 43-55.
- HERNANDO DE LARRAMENDI, Miguel (2013). "El islamismo político y el ejercicio del poder tras el despertar árabe: los casos de Egipto, Túnez y Marruecos". *Cuaderno de Estrategia* 163, págs. 71-116 (<https://goo.gl/RR3d8Q> consulta del 4 de noviembre de 2016).
- HILL, E. (1999). "The Suprem Constitutional Cour of Egypt on Property". *Égypte/Monde Arabe* 2 (deuxième série), 55-91.
- HINNEBUSCH, R. (1988). "Political Parties in the Arab State: Libya, Syria, Egypt". En: Dawisha, A. & Zartman, W. (eds.) 1988. *Beyond Coercion: the Durability of the Arab State*. Londres/Nueva York: Croom Helm, págs. 35-60.
- HINNEBUSCH, R. A. (1984). "The Reemergence of the Wafd Party: Glimpses of the Liberal Opposition in Egypt". *IJMES* 16, págs. 99-121.
- HINNEBUSCH, R. A. (1981). "Egypt under Sadat: Elites, Power Structure and Political Change in a Post-populist State". *Social Problems* 28: 4, págs. 442-464.
- HOLT, P. (1968). "Egyptian Political History from 1517 to 1798". En: Holt, P. (ed.) 1968. *Political and Social Change in Modern Egypt*. Londres: Oxford University Press, págs. 79-90.
- HOLT, P. (ed.) (1968). *Political and Social Change in Modern Egypt*. Londres: Oxford University Press.

- HOPKINS, N. S. & Ibrahim, S. E. (eds.) (1985). *Arab Society* (2^a ed.). El Cairo: American University in Cairo Press.
- IBRAHIM, F. (1995). "Quelques caractéristiques de l'évolution de l'Égypte depuis 1991". *Égypte/Monde Arabe*, 21 (première série), págs. 11-18.
- IBRAHIM, G. A. (1999). "Une lecture politique de l'expérience constitutionnelle égyptienne". *Égypte/Monde Arabe* 2 (deuxième série), págs. 127-142.
- IBRAHIM, G. A. (1998). "Représentation syndicale et transition libérale en Egypte". *Égypte/Monde Arabe* 33 (première série), págs. 181-223.
- IBRAHIM, H. T. (1994). "La violence politique en Egypte". En: DUPRET, B. (ed.) 1994. *Le phénomène de la violence politique: perspectives comparatistes et paradigme égyptien*. El Cairo: CEDEJ, págs. 245-279.
- IBRAHIM, S. E. (2003). *Civil Society and the changing face of Islamic Activism*. El Cairo: Ibn Khaldoun Center for Developmental Studies.
- IBRAHIM, S. E. (1985). "Egypt's Islamic Militants". En: Hopkins, N. S. & Ibrahim, S. E. (eds.) 1985. *Arab Society*. El Cairo: American University in Cairo Press, págs. 494-507.
- ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) 2010. *Ficha país. Egipto*.
- IRI (2005). *Parliamentary Elections Assessment in Egypt*. Washington: International Republican Institute.
- IRETON, F. (2011). "Économie politique de l'agriculture: de l'encadrement étatique à la déréglementation". En: Battesti, V. & Ireton, F. (eds.) 2011. *L'Égypte au présent. Inventaire d'une société avant révolution*. Arles: Sindbad/Actes de Sud, págs. 437-492.
- JACQUEMOND, R. (2011). "La république des lettres de Nasser à Moubarak". En: Battesti, V. & Ireton, F. (eds.) 2011. *L'Égypte au présent. Inventaire d'une société avant révolution*. Arles: Sindbad/Actes de Sud, págs. 1065-1104.
- JACQUEMOND, R. (1994A). "Dix ans de justice constitutionnelle en Egypte 1979-1990". En: Botiveau, B. & Abd el-Fattah, N. (eds.) 1994. *Politiques Législatives. Egypte, Tunisie, Algérie, Maroc. Actes du colloque franco-égyptien "Problématiques du champ juridique: Egypte, Tunisie, Algérie, Maroc"*. El Cairo: CEDEJ, págs. 79-96.
- JACQUEMOND, R. (1994B). "Quelques débats récents autour de la culture". *Égypte/Monde Arabe* 20 (première série), págs. 25-41.
- JANKOWSKI, P. J. (1975). *Egypt's Young Rebels: "Young Egypt" 1933 1952*. California: Hoover Institution Press-Stanford University.
- KADI, G. E. (1993). "Le tremblement de terre en Egypte". *Égypte/Monde Arabe* 14 (première série), 163-195.
- KEPEL, G. (2002). *Jihad: The Trail of Political Islam*. Harvard University Press.
- KEPEL, G. (1988). *Faraón y el Profeta*. Barcelona: El Aleph.
- KIENLE, E. (1997). "Désélectionner par le haut: le Wafd dans les élections législatives de 1995". En: Gamblin, S. (ed.) 1997. *Contours et détours du politique en Égypte. Les élections législatives de 1995*. París: L'Harmattan-CEDEJ, págs. 129-150.

- KLAUS, E. (2011). "La presse à l'épreuve des weblogs". En: Battesti, V. & Ireton, F. (eds.) 2011. *L'Égypte au présent. Inventaire d'une société avant révolution*. Arles: Sindbad/Actes de Sud, págs. 953-969.
- KLAUS, E. (2005). "Un nouveau guide suprême, une nouvelle ère? Éléments d'analyse de l'actualité médiatique des Frères Musulmans". En: Kohstall, F. (ed.) 2005. *L'Égypte dans l'année: Chronique politique 2004*. El Cairo: CEDEJ, págs. 47-56.
- KOHSTALL, F. (ed.) (2006). *L'Égypte dans l'année 2005*. El Cairo: CEDEJ.
- KOHSTALL, F. (ed.) (2005). *L'Égypte dans l'année: Chronique politique 2004*. El Cairo: CEDEJ.
- KOHSTALL, F. (2005). "Entre pressions et contraintes, préférences et détournements: l'action gouvernementale en 2004". En Kohstall, F. (ed.) 2005. *L'Égypte dans l'année: Chronique politique 2004*. El Cairo: CEDEJ, págs. 54-69.
- LACOUTURE, J. y. (1962). *L'Égypte en mouvement*. París: Editions du Seuil.
- LAROUI, A. (2001). *El islam árabe y sus problemas*. Barcelona: Ediciones Península.
- LEFTWICH, J. & Dassin, J. R. (eds.) (1982). *Press Control around the World*. Nueva York: Praeger Publishers.
- LEVINSON, C. (2005). "Plus ça change. The role of the Media in Egypt's First Contested Presidential Elections". *Transnational Broadcasting Studies* 1:2, págs. 219-224.
- LÓPEZ GARCÍA, B. & Fernández Súzor, C. (1985). *Introducción a los regímenes y constituciones árabes*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
- LÓPEZ GARCÍA, B., Martín Muñoz, G. & H. de Larramendi M. (eds.) 1991. *Elecciones, participación y transiciones en el Norte de África*, Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional.
- LUCIANI, G. (1995). "Resources, Revenues an Authoritarianism in the Arab World: Beyond the Rentier State?" En: Brinen, R.; Korany, B. & Noble, P. (eds.) 1995. *Political Liberalization and Democratization in the Arab World* (vol. 1 *Theoretical Perspectives*). Boulder-Londres: Lynne Rienner Publishers, págs. 211-229.
- LUCIANI, G. (ed.) 1990. *The Arab State*. Berkeley-Los Angeles: University of California Press.
- LUCIANI, G. (1990). "Allocation versus Production States". En: Luciani, G. (ed.) 1990. *The Arab State*. Berkeley-Los Angeles: University of California Press, págs. 65-84.
- LUIZARD, J.-P. (1990). "L'islam et la crise du Golfe dans la presse égyptienne". *Égypte /Monde Arabe* 3, págs. 173-263.
- MAGED, A. (2011). "Salafism: the unknown quantity". *Al-Ahram Weekly*, 12-18 de mayo de 2011.
- MANSUR, M. A-S. (1995). "La libéralisation du secteur agricole". *Égypte/Monde Arabe*, 21 (première série), págs. 174-182.
- MARTÍN MUÑOZ, G. (1992). *Política y elecciones en el Egipto contemporáneo (1922-1990)*. Madrid: AECL.
- MERTON, R.K. (1957). *Social Theory and Social Structure*. Glencoe, III: The Free Press.

- MIREL, P. (1982). *L'Égypte des ruptures. L'ère Sadat, de Nasser a Moubarak*. París: Sindbad.
- MITCHELL, R. P. (1969). *The Society of the Muslim Brothers*. Londres: Oxford University Press.
- MITCHELL, T. (2002). *Rule of Experts. Egypt, Techno-Politics, Modernity*. Berkeley y Los Ángeles: University of California Press.
- MOLINA, Ignacio & Salcedo, Santiago (colaborador) (1998). *Conceptos Fundamentales de Ciencia Política*. Madrid: Alianza Editorial.
- MORERAS, J. & Tarrés, S. (2012). “El desarrollo de la doctrina salafí en España”. En: Peter, F. & Ortega, R. (eds.) 2012. *Los movimientos islámicos transnacionales y la emergencia de un “islam europeo”*. Barcelona: Bellaterra, págs. 219-223.
- NASSER, M. (1990). “Egyptian media under Nasser and Sadat. Two models of press management and control”. *Journalism Monographs* 124, págs. 1-26.
- NASSER, M. K. (1982). The Middle East Press: Tool of Politics. En: Leftwich, J. & Dassin, J. R. (eds.) 1982. *Press Control around the World*. Nueva York: Praeger Publishers, 187-208.
- NOSHI, A. (1995). “Principaux résultats des trois premières années de programme de stabilisation et d'ajustement structurel”. *Égypte/Monde Arabe* 21 (première série), págs. 149-155.
- PARADELLE, M. (1997). “Le politique appréhendé dans son fonctionnement juridique. Analyse du cadre légal des élections législatives du Maglis al-Sha`b”. En: Gamblin, S. (ed.) 1997. *Contours et détours du politique en Égypte. Les élections législatives de 1995*. París: L'Harmattan-CEDEJ, págs. 29-61.
- PETER, F. & Ortega, R. (eds.) (2012). *Los movimientos islámicos transnacionales y la emergencia de un “islam europeo”*. Barcelona: Bellaterra.
- PODEH, E. & Winckler, O. (eds.) 2004A. *Rethinking Nasserism. Revolution and Historical Memory in Modern Egypt*. Gainesville: University Press of Florida.
- PODEH, E. & Winckler, O. (2004B). “Introduction. Nasserism as a form of populism”. En: Podeh, E. & Winckler, O. (eds.) 2004. *Rethinking Nasserism. Revolution and Historical Memory in Modern Egypt*. Gainesville: University Press of Florida, págs. 1-42.
- POSUSNEY, M. P. (1997). *Labor and the State in Egypt*. Nueva York: Columbia University Press.
- QANDIL, A. (1996). “Les effets de la politique de réforme économique sur les associations civiles en Égypte”. En: CEDEJ (ed.) 1996. *Âge libéral et néo-libéralisme. VIe Rencontres Franco-Égyptiennes de Sciences Politique*. El Cairo: CEDEJ, págs. 121-135.
- RAMSES, B. (1997). “Le Tagammu` et les élections ou la conception du parlementarisme chez un parti de gauche”. En: Gamblin, S. (ed.) 1997. *Contours et détours du politique en Égypte. Les élections législatives de 1995*. París: L'Harmattan-CEDEJ, págs. 165-195.

- RAYMOND, A. (1973). *Artisans et commerçants au Caire au XVIIIe siècle*. Damas: Institut Français de Damas.
- REID, D. M. (1991). *Cairo University and the Making of Modern Egypt*. El Cairo: The American University in Cairo Press.
- REY, B. (2005). "Entre nouvelles formes de mobilisation et gestion étatique: l'opposition égyptienne en 2004". En: Kohstall, F. (ed.) 2005. *L'Égypte dans l'année: Chronique politique 2004*. El Cairo: CEDEJ, págs. 25-46.
- RICHARDS, A. (1991). "Agricultural employment, Wages and Government Policy in Egypt during and after the Oil Boom". En: Handoussa, H. & Potter, G. (eds.) 1991. *Employment and Structural Adjustment. Egypt in the 1990s*. El Cairo: The American University in Cairo Press, págs. 57-93.
- RIZK, S. K. (1991). "The Structure and Operation of the Informal Sector in Egypt". En: Handoussa, H. & Potter, G. (eds.) 1991. *Employment and Structural Adjustment. Egypt in the 1990s*. El Cairo: The American University in Cairo Press, págs. 167-185.
- RODENBECK M. (2010). "Holding its breath. A special report on Egypt". *The Economist* 8691, 17 de julio de 2010.
- ROULEAU, E. (1984). "Les élections en Égypte ont été entachées de nombreuses irrégularités". *Le Monde*, 29 de diciembre de 1984.
- ROUSSILLON, A. (1997). "Pourquoi les frères musulmans ne pouvaient pas gagner les élections". En: Gamblin, S. (ed.) 1997. *Contours et détours du politique en Égypte. Les élections législatives de 1995*. París: L'Harmattan-CEDEJ, págs. 101-127.
- RUGH, W. A. (1989). *The Arab Press. News and Media and Political Process in the Arab World*. Nueva York: Syracuse University Press.
- RUIZ DE ALMODÓVAR SEL, C. (1989). *Historia del movimiento feminista egipcio*. Granada: Universidad de Granada.
- SALEH, W. (2007). *El ala radical del Islam. El Islam Político: realidad y ficción*. Madrid: Siglo XXI.
- SALEM, M. (1995). "A cœur de la réforme économique, la réforme des sociétés du secteur public des affaires". *Égypte/Monde Arabe* 21 (première série), págs. 162-165.
- SÁNCHEZ AGESTA, Luis (1983). *Principios de Teoría Política*. Madrid: Editora Nacional.
- SANMARTIN, O. (2011). "La 'révolution' touristique". En: Battesti, V. & Ireton, F. (eds.) 2011. *L'Égypte au présent. Inventaire d'une société avant révolution*. Arles: Sindbad/Actes de Sud, págs. 581-594.
- SAYFAL-ISLAM, A. (2000). "L'intervention administrative dans la liberté d'expression: entre loi et constitution". *Égypte/Monde Arabe* 3 (deuxième série), págs. 25-47.
- SHAW, S. J. (1968). "Landholding and Land-tax Revenues in Ottoman Egypt". En: Holt, P. (ed.) 1968. *Political and Social Change in Modern Egypt*. Londres: Oxford University Press, págs. 91-103.
- SHOUKRI, G. (1979). *Egypte. Contre-révolution*. París: Le Sycomore.
- SHOUKRI, G. (1981). *Egypt: Portrait of a President: Sadat's Road to Jerusalem*. Londres: Zed Press.

- SID-AHMED, M. (1984A). "La résurgence du Wafd et les calcules de M. Moubarak". *Le Monde Diplomatique*, mayo de 1984. *Archives 1970-2009. Le Monde Diplomatique* (DVD-ROM).
- SID-AHMED, M. (1984B). "Réalités et illusions de l'Ère Moubarak. Qu'attendre de l'Égypte dans la relance des négociations au Moyen Orient?". *Le Monde Diplomatique*, diciembre de 1984. *Archives 1970-2009. Le Monde diplomatique* (DVD-ROM) .
- SMITH, C. D. (1997). "Imagined Identities, Imagined Nationalisms: Print Culture and Egyptian Nationalism in Light of Recent Scholarship". *International Journal of Middle East Studies* 29, págs. 607-22.
- SOLIMAN, S. (2011). *The Autumn of Dictatorship. Fiscal Crisis and Political Change in Egypt under Mubarak*. Standford: Standford University Press.
- SONBOL, A. E.-A. (2000). *The new Mamluks. Egyptian Society and Modern Feudalism*. Siracusa (Nueva York): Syracuse University Press
- SPRINGBORG, R. (1989). *Mubarak's Egypt. Fragmentation of the Political Order*. Boulder y Londres: Westview Press.
- SPRINGBORG, R. (1987). "The President and Field Marshall. Civil-Military Relations in Egypt Today". *Middle East Report* 147, 5-16.
- SPRINGBORG, R. & Sfakianakis, J. (2001). "The Military's Role in Presidential Succession". En: Chartouni-Dubarry, M. (ed.) 2001. *Armée et nation en Égypte: pouvoir civil, pouvoir militaire*. París: Institut français des relations internationales, págs. 57-72.
- TADROS, M. (2012). *The Muslim Brotherhood in Contemporary Egypt*. Nueva York: Routledge.
- TEMIMI, S. (2003). "D'un journalisme a l'autre: contours d'une identité professionnelle et évolution de son rapport au pouvoir politique". *Égypte/Monde Arabe* (deuxième série) 4-5, págs. 81-101.
- TERNISIEN, X. (2007). *Los Hermanos Musulmanes*. Barcelona: Bellaterra.
- THOMPSON, E. (1971). "The Moral Economy of English Crowd in the 18th Century". *Past and Present* 50, págs. 76-136.
- TOMICHE, N. (1993). *La littérature arabe contemporaine*. París: Maison-Neuve Larose.
- VAIREL, F. (2006). "Quand «Assez!» ne suffit plus: quelques remarques sur Kifaya et autres mobilisations égyptiennes". En: Kohstall, F. (ed.) (2006). *L'Égypte dans l'année 2005*. El Cairo: CEDEJ, págs. 109-136.
- VALLES, J. M. (2008). *Ciencia política. Una introducción* (7ª ed.). Barcelona: Ariel.
- VATIKIOTIS, P. (1978). *Nasser and his generation*. Londres: Croom Helm.
- VATIKIOTIS, P. (1991). *The History of Modern Egypt from Muhammad Ali to Mubarak*. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- VVAA (1991). *Etudes politiques du monde arabe. Approches globales et approches spécifiques. Actes du deuxième colloque franco-égyptien de politologie*. París, 3-5 julio de 1989. El Cairo: CEDEJ.

- VVAA (1994). = Botiveau, B. & Abd el-Fattah, N. (eds.) 1994. *Politiques Législatives. Egypte, Tunisie, Algérie, Maroc. Actes du colloque franco-égyptien "Problématiques du champ juridique: Egypte, Tunisie, Algérie, Maroc"*. El Cairo: CEDEJ.
- WATERBURY, J. (1983). *The Egypt of Nasser and Sadat. The Political Economy of Two Regimes*. Princeton: Princeton University Press.
- YABRI, M. Á. (2001). *El legado filosófico árabe*. Madrid: Trotta.
- YACoub, M. (2011). "Associations, ONGs et développement". En: Battesti, V. & Ireton, F. (eds.) 2011. *L'Égypte au présent. Inventaire d'une société avant révolution*. Arles: Sindbad/Actes de Sud, págs. 385-401.
- ZARTMAN, W. (1988). "Opposition as Support of the State". En: Dawisha, A. & Zartman, W. (eds.) 1988. *Beyond Coercion: the Durability of the Arab State*. Londres/Nueva York: Croom Helm, págs. 61-87.
- ZAYTOUN, M. A. (1991). "Earnings and the Cost of Living: An Analysis of Recent Developments in the Egyptian Economy". En: Handoussa, H. & Potter, G. (eds.) 1991. *Employment and Structural Adjustment. Egypt in the 1990s*. El Cairo: The American University in Cairo Press, págs. 219-257.
- ZEGHAL, M. (1997). *Guardianes del Islam. Los intelectuales tradicionales y el reto de la modernidad*. Barcelona: Bellaterra.

- إبراهيم، أحمد حسن. (١٩٩٧). *العلاقة بين المالك والمستأجر العدالة والتنمية في الريف*. القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.
- إبراهيم، سعد الدين. (١٩٨١). *مصر في ربع قرن (١٩٥٢-١٩٧٧)*. دراسات في التنمية والتغير الاجتماعي. بيروت: معهد الإنماء العربي.
- أبو ريدة، محمد؛ محمد بدري عيد؛ هبة قاسم. (٢٠٠١). "التركيبة السياسية والاجتماعية للمجلس". في هالة مصطفى ٢٠٠١. *انتخابات مجلس الشعب ٢٠٠٠*. القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.
- أبو زيد، علا. (١٩٩٦). "الإطار السياسي والقانوني الحاكم لعملية التحول الديمقراطي في مصر في فترة ما بين ١٩٧٦-١٩٩٢". في مصطفى كامل السيد ١٩٩٦. *حقيقة التعددية السياسية في مصر*. القاهرة: مكتبة مدبولي.
- أبو عامود، محمد سعد. (٢٠٠١). "الفاعلات بين الأحزاب والقوى السياسية". في هالة مصطفى ٢٠٠١. *انتخابات مجلس الشعب ٢٠٠٠*. القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.
- الأقباط اليوم. (بلا تاريخ). (<http://www.coptstoday.com/Archive/Detail.php?Id=45>). تاريخ الاسترداد ٢٨ يوليو ٢٠١٣.
- الألفي، أكرم. (٢٤ فبراير ٢٠١٥). "الهيئة الناجبة في الانتخابات البرلمانية المصرية". مركز دراسات الأحوال المصرية (<http://ahwal.org/?p=5947>). تاريخ الاسترداد ٢٠ سبتمبر ٢٠١٥.
- الأيوبي، نزيه نصيف. (١٩٨١). "تطور النظام السياسي والإداري في مصر ١٩٥٢-١٩٧٧". في سعد الدين إبراهيم ١٩٨١. *مصر في ربع قرن (١٩٥٢-١٩٧٧)*. بيروت: معهد الإنماء العربي، (الصفحات ٥٥-١١٩).

بركات، صابر؛ خالد علي عمر. (٢٠٠٢). نقابات بلا عمال وعمال بلا نقابات. القاهرة: اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية.

البشري، طارق. (١٩٩١). الديمقراطية ونظام يوليو ١٩٥٢-١٩٧٠. القاهرة: دار الهلال.
جينية، نعمة الله. (١٩٨٨). تنظيم الجهاد. هل هو البديل الإسلامي في مصر. القاهرة: دار الحرية.
دياب، محمد حافظ. (٢٠٠٥). الإسلاميون المستقلون. الهوية والسؤال. القاهرة: مكتبة الأسرة.
حلمي، محمد. (١٩٨٩). دستور الكويت والدساتير العربية المعاصرة. الكويت: ذات السلاسل.
حمروش، أحمد. (١٩٩٢). ثورة يوليو. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
حنا، ميلاد. (١٩٩٣). مصر لكل المصريين. القاهرة: دار سعاد الصباح.
خليل، عبد الله. (١٩٩٩). أزمة نقابة المحامين. أزمة ديمقراطية أم أزمة مهنية؟ القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

ربيع، عمرو هاشم. (٢٠٠١). "المشاركة السياسية: مؤشرات كمية وكيفية". في هالة مصطفى ٢٠٠١. انتخابات مجلس الشعب ٢٠٠٠. القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.
رشوان، محمد. (١٩٨٤). "المرحلة الثالثة في عمر الحزب الوطني الديمقراطي". مايو (صحيفة الحزب الوطني الديمقراطي) ٢٥ يونيو ١٩٨٤.

رمان، هويدا عدلي. (١٩٩٦). "المشاركة السياسية للعمال المصريين". في مصطفى كامل السيد ١٩٩٦. حقيقة التعددية السياسية في مصر. القاهرة: مكتبة مدبولي (الصفحات ١٥٧-١٨٧).
الزيات، منتصر. (٢٠٠٥). الجماعات الإسلامية. رؤية من الداخل. القاهرة: دار مصر المحروسة.
السادات، أنور. (١٩٦٥). أسرار الثورة المصرية. بواعثها الخفية وأسبابها السيكلوجية. القاهرة: الدار القومية.
السيد، مصطفى كامل. (١٩٩٦). حقيقة التعددية السياسية في مصر. القاهرة: مكتبة مدبولي للطباعة والنشر.
الشبكي، عمرو. (٢٠٠٤). نقابة الأطباء. القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.
صالح ربيع، ماجدة علي. (١٩٩٢). الدور السياسي للأزهر. القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية في جامعة القاهرة.

الظواهري، أيمن. (٢٠٠٥). الحصاد المر: الإخوان المسلمون في ستين عاما (الإصدار ٢). مركز الفجر للإعلام.
العامر، سلوى. (١٩٩٣). استطلاع رأي المواطن في الأحزاب والممارسة الحزبية. التقرير الأول: استطلاع رأي عينة من الجمهور. القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
عبد الحفيظ، أحمد. (٢٠٠٣). نقابة المحامين. صورة مصر في القرن العشرين. القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.

عبد الرازق، حسين. (١٩٨٥). مصر في ١٨ و ١٩ يناير. القاهرة: دار شهدي للنشر.
عبد الرازق، علي. (٢٠١٣). الإسلام وأصول الحكم. دار التنوير: بيروت-القاهرة - تونس.
عبد الفتاح، نبيل؛ سارة بن نقيسة؛ وآخرون. (٢٠٠٤). المنظمات الأهلية والمحكومية. القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.

عبد الفتاح، نبيل. (١٩٨٤). المصحف والسيف. القاهرة: مكتب مدبولي.
عبد الفضيل، محمود. (١٩٨٩). الخديعة المالية الكبرى. القاهرة: دار المستقبل العربي.
عبد الله، أحمد (محرر). (١٩٩٠). الانتخابات البرلمانية في مصر. درس انتخابات ١٩٨٧. القاهرة: دار سينا للنشر.

عبد الله، أحمد. (١٩٩١). *الطلبة والسياسة في مصر*. دار سينا للنشر.

عبد المجيد، وحيد. (١٩٩٣). *الأحزاب المصرية من الداخل ١٩٠٧-١٩٩٢*. القاهرة: مركز المحروسة للنشر والمعلومات الثقافية.

عبد المنعم، أحمد فارس. (١٩٩٤). *تطور السلطة القضائية في مصر (١٩٥٢-١٩٩٣)*. القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية في جامعة القاهرة.

عبد الناصر، جمال. (١٩٥٤). *فلسفة الثورة*. القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر.

عثمان، خالد. (٢٠٠٦). *طريق مصر إلى قبول الذات*. القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

العروي، محمد. (١٩٨٨). *مفهوم الدولة*. بيروت- الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.

عمر، محمد. (٢٠٠٢). *حاضر المصريين أو سرّ تأخرهم*. القاهرة: دار مصر المحروسة.

فرحات، محمد فايز. (١٩٩٧). "ما بعد الانتخابات". في هالة مصطفى A١٩٩٧. *الانتخابات البرلمانية في مصر ١٩٩٥*. القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام.

فؤاد، فيفيان؛ ناية رفعة؛ سمير مرقص. (٢٠٠٤). "المنظمات الأهلية والدولة في مصر من السكون إلى الحركة". في نبيل عبد الفتاح، سارة بن نفيسة وآخرون ٢٠٠٤. *المنظمات الأهلية والمحكومية*. القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، (الصفحات ١٤٩-١٧٠).

فوزي، عصام & طارق حسن. (١٩٩٠). "قوى المعارضة السياسية في انتخابات ١٩٨٧". في أحمد عبد الله ١٩٩٠. *الانتخابات البرلمانية في مصر. درس انتخابات ١٩٨٧*. القاهرة: دار سينا للنشر، (الصفحات ٧٣-١٥٤).

فوزي، عصام. (١٩٩٠). "دراسات ميدانية للعملية الانتخابية. حالة منطقة حلوان في جنوب القاهرة". في أحمد عبد الله ١٩٩٠. *الانتخابات البرلمانية في مصر. درس انتخابات ١٩٨٧*. القاهرة: دار سينا للنشر، (الصفحات ١٩٠-٢١٥).

القاضي، عبد اللطيف. (١٩٨٥). *الصحافة في مصر والتشريعات المنظمة لها*. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للاستعلامات.

قطب، سيد. (١٩٧٩). *معالم في الطريق (الإصدار ٦)*. بيروت، القاهرة: دار الشروق (الطبعة الأولى ١٩٦٤).

قنديل، أماني. (١٩٩١). *استطلاع رأي المواطن في الأحزاب والممارسة الحزبية. التقرير الأول: استطلاع رأي عينة من النخبة*. القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

قنديل، أماني. (١٩٩٦). "الجماعات المهنية والمشاركة السياسية". في مصطفى كامل السيد ١٩٩٦. *حقيقة التعددية السياسية في مصر*. القاهرة: مكتبة مدبولي.

اللجنة الوطنية المصرية لمتابعة الانتخابات البرلمانية. (1995). *Informe CESE* تقرير اللجنة الوطنية المصرية لمتابعة الانتخابات البرلمانية ١٩٩٥. القاهرة: مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية.

محفوظ، محمد. (١٩٨٨). *الذين ظلموا: التنظيمات الإسلامية في مصر*. Londres: Riad El-Rayyes.

مصطفى، هالة. (A١٩٩٧) (محررة). *الانتخابات البرلمانية في مصر ١٩٩٥*. القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.

مصطفى، هالة. (B١٩٩٧). "مؤشرات ونتائج انتخابات ١٩٩٥". في هالة مصطفى A١٩٩٧. *الانتخابات البرلمانية في مصر ١٩٩٥*. القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، (الصفحات ٣٥-٥٢).

مصطفى، هالة. (٢٠٠١). *انتخابات مجلس الشعب ٢٠٠٠*. القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.

المنوفي، كمال. (١٩٨٠). *الثقافة السياسية للفلاحين المصريين*. بيروت: دار ابن خلدون.

المنيسي، أحمد. (١٩٩٧). "ظاهرة العنف في انتخابات ١٩٩٥". في هالة مصطفى ١٩٩٧. *الانتخابات البرلمانية في مصر ١٩٩٥*. القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، (الصفحات ٦٩-٨٠).

المنيسي، أحمد. (٢٠٠١). "العنف في الانتخابات". في هالة مصطفى ٢٠٠١. *انتخابات مجلس الشعب ٢٠٠٠*. القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، (الصفحات ٢٠٩-٢٢٥).

الميرغني، رجائي. (٢٠٠٥). *نقابة الصحفيين*. القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام.

النجار، أحمد السيد (٢٠٠٦) (رئيس التحرير). *تقرير الاتجاهات الاقتصادية والإستراتيجية ٢٠٠٦*. القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام.

النجار، أحمد السيد (٢٠٠٥) (رئيس التحرير). *تقرير الاتجاهات الاقتصادية والإستراتيجية ٢٠٠٥*. القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام.

هلال، علي الدين. (٢٠٠٦). *تطور النظام السياسي في مصر ١٩٨٥-٢٠٠٥*. القاهرة: جامعة القاهرة: مركز الدراسات والبحوث السياسية.

هيك، محمد حسنين. (٢٠٠٦). *خريف الغضب*. القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر.

يورك، . فون كورف (٢٠٠٥). *الصحافيون والديمقراطية في التسعينات*. طاقة ديمقراطية مهرة . القاهرة: مركز القاهرة لحقوق الإنسان.

IX. ÍNDICE DE SIGLAS

(solo se incluyen las de circulación no estandarizada)

ACLF	Alto Comité para la Liquidación del Feudalismo
AEHN	Asociación Egipcia de Hombres de Negocios
AGEL	Agencia General Egipcia del Libro
AHNE	Asociación de Hombres de Negocios Egipcios
CAPMAS	Agencia Central para la Movilización y las Estadísticas (en inglés)
CEDEJ	Centre d'Études et de Documentation Économiques, Juridiques et Sociales
CEP	Comisión para las Elecciones Presidenciales
CEPEA	Centro de Estudios Políticos y Estratégicos de Al-Ahram
CFFGSE	Federación General de Sindicatos de Trabajadores Egipcios
CISE	Comisión Independiente para el Seguimiento de las Elecciones
CMI	Consejo Mundial de las Iglesias
CMR	Consejo de Mando de la Revolución
CNFP	Congreso Nacional de Fuerzas Populares
CNOE	Comité Nacional de Obreros y Estudiantes
CSALCS	Consejo Superior de las Artes, las Letras y las Ciencias Sociales
CSFA	Consejo Superior de las Fuerzas Armadas
CTLN	Comité de Trabajadores para la Liberación Nacional
EMA	Egypte-Monde Arabe
ESCO	Empresa Egipcia de Hilado (en inglés)
FECC	Federación Egipcia de Cámaras de Comercio
FEI	Federación Egipcia de Industrias
FGCC	Federación General de Cámaras de Comercio
FGSTE	Federación General de Sindicatos de Trabajadores de Egipto
HADETU	Movimiento Democrático de Liberación Nacional
HHMM	Hermanos Musulmanes
IEA	Informe Estratégico Árabe

LE	Libra Egipcia
MERIP	Middle East Research and Information Project
OAI	Organización Árabe para la Industrialización
OEDH	Organización Egipcia de Derechos Humanos
OL	Organización para la Liberación
OOLL	Oficiales Libres
PAN	Pacto de Acción Nacional
PCE	Partido Comunista Egipcio
PEA	Partido Egipto Árabe
PL	Partido Liberal
PLJ	Partido de la Libertad y la Justicia
PLS	Partido Liberal Socialista
PND	Partido Nacional Democrático
PSE	Partido Socialista Egipcio
PST	Partido Socialista del Trabajo
PT	Partido del Trabajo
PU	Partido de la Umma
PUD	Partido Unionista Democrático
PV	Partido de los Verdes
RAU	República Árabe Unida
RPE	Revue de Presse Égyptienne
SGI	Servicios Generales de Inteligencia
SIE	Servicios de Investigaciones del Estado
SUMED	Suez-Mediterráneo
UN	Unión Nacional
USA	Unión Socialista Árabe

X. ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Distribución de la propiedad de la tierra (1894-1952)	44
Tabla 2: Representatividad del Wafd según los resultados electorales	59
Tabla 3: Evolución de la inscripción en todos los niveles educativos (1952-1970)	127
Tabla 4: Evolución de la distribución de la tierra (1952-1965)	173
Tabla 5: Tendencia de los salarios reales 1981-1987 (con índice 100 en 1973)	453
Tabla 6: Componentes de los Salarios en el Sector Público	453
Tabla 7: Actos de violencia política (1982-1990)	499
Tabla 8: Actos de violencia política “general” (1982-1990)	499
Tabla 9: Atentados, enfrentamientos armados y muertos (1984-1990)	500
Tabla 10: Víctimas y motivos de enfrentamientos policía/islamistas radicales (1990)	501
Tabla 11: Distribución geográfica de la “violencia” (1990)	501
Tabla 12: Número de muertos y heridos a causa de la violencia política 1990-1993	560
Tabla 13: Representación islamista en los consejos de los sindicatos profesionales (1992)	570
Tabla 14: Participación en las elecciones del Consejo del Sindicato de Médicos (1982-1992)	572
Tabla 15: Participación en las elecciones a los consejos sindicales (1989-1991)	572
Tabla 16: Contenidos de apoyo a Mubarak en Al-Ahram del 4 de octubre de 1993	617
Tabla 17: Instituciones y colectivos que apoyaron a Mubarak en el plebiscito de 1993	618
Tabla 18: Comparación víctimas de la violencia islamismo/policía 1993-1994	628
Tabla 19: Evolución del PIB por remesas de los inmigrantes	745
Tabla 20: Participación en las elecciones legislativas de 2005	785